REPÚBLICA DE COLOMBIA.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AÑO VIII } Bogotá, 1.° de Enero de 1893. { NÚM. 364.

BIBLIOTECA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA — REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONTENIDO.

Págs.

Cambio de personal........ 1
Cuadros que representan el movimiento de negocios en la Corte Suprema [illegible] durante el mes de Noviembre de 1892, y el número de proyectos presentados por los señores Magistrados en el mismo mes........ 2

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Sentencia confirmatoria de la proferida por el Tribunal Superior de Antioquia, en el juicio seguido por el Presbítero José Joaquín Hoyos contra el Presbítero Simón de Jesús Herrera, sobre resolución de un contrato. (Magistrado ponente, doctor Medina)........ 2
La que concede á Alejandro García una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Medina)........ 4
La que concede á Braulio Montes una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas)........ 4
La que niega á Bernardo Ruiz una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Pombo)........ 4
La confirmatoria de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Cundinamarca, en las excepciones opuestas al juicio ejecutivo seguido por el Banco Nacional contra Leonidas Posada Gaviria. (Magistrado ponente, doctor Villafrádez)........ 5
La que niega á Manuel María Mosquera una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Corrales........ 7
La que que concede á Lucio García una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Villafrádez)........ 7

NEGOCIOS CRIMINALES.

Sentencia revocatoria de la proferida por el Tribunal Superior de Pasto, en el juicio seguido contra Vicente Micolta, como ex-Prefecto de la Provincia de Barbacoas, por responsabilidad. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas)........ 7

GACETA JUDICIAL.

CAMBIO DE PERSONAL.

El señor Magistrado doctor Mariano de Jesús Medina se separó de la Corte el día 16 del mes de Noviembre del año próximo pasado, en vir[illegible] de renuncia que hizo, y le fué admitida, del cargo de tercer [illegible]plente, y el día 17 del mismo tomó posesión del puesto de Magi[illegible] señor doctor D. Baltasar Botero Uri[illegible]

CUADRO QUE REPRESENTA EL MOVIMIENTO DE NEGOCIOS EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 1892.

	SENTENCIAS. Casación. Civiles.	SENTENCIAS. Casación. Pena capital.	SENTENCIAS. Civiles de 2.ª instancia. Negocios varios.	SENTENCIAS. Civiles de 2.ª instancia. Suministros etc.	Criminales de 2.ª instancia.	AUTOS. Civiles.	AUTOS. Criminales.	Procesos militares.	Competencias.	Recursos de hecho.	Recursos de revisión.	Negocios varios.	Negocios de una sola instancia. Civiles.	Negocios de una sola instancia. Criminales.	Suspensión de Ordenanzas.	Recompensas.	TOTALES.
Pendientes en 31 de Octubre........	30	6	9	170	3	5	5	3	1	1	4	3	2	21	1	517	781
Repartidos en Noviembre........	2	3	2	11	2	4	4	1	..	2	..	..	..	1	1	20	53
Totales........	32	9	11	181	5	9	9	4	1	3	4	3	2	22	2	537	834
Despachados en el mes........	5	4	2	13	2	2	5	1	1	1	2	2	..	3	1	14	58
Pendientes en 30 de Noviembre........	27	5	9	168	3	7	4	3	..	2	2	1	2	19	1	523	776

CUADRO QUE REPRESENTA EL NÚMERO DE PROYECTOS PRESENTADOS POR CADA UNO DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SOBRE LOS NEGOCIOS CUYO DESPACHO SE RELACIONA EN EL CUADRO ANTERIOR.

	SENTENCIAS.					AUTOS.							NEGOCIOS DE UNA SOLA INSTANCIA.				
	CASACIÓN.		CIVILES DE 2.ª INSTANCIA.														
	Civiles.	Pena capital.	Negocios varios.	Suministros etc.	Criminales de 2.ª instancia.	Civiles.	Criminales.	Procesos militares.	Competencias.	Recursos de hecho.	Recursos de revisión.	Negocios varios.	Civiles.	Criminales.	Suspensión de Ordenanzas.	Recompensas.	TOTALES.
Doctor Pombo	...	1	1	2	...	...	1	...	...	...	...	1	...	2	...	1	9
Doctor Isaza	...	...	...	4	...	...	...	...	1	...	...	...	...	...	...	2	7
Doctor Casas Rojas	1	1	...	...	1	1	1	...	...	...	...	...	...	...	...	2	7
Doctor Corrales	...	1	...	3	...	...	1	...	...	...	...	...	...	...	...	2	7
Doctor Medina (del 1.° al 16)	...	...	...	...	...	...	...	1	...	1	1	1	...	...	1	1	6
Doctor Trujillo	2	...	1	4	1	...	1	...	...	...	1	...	...	1	...	4	15
Doctor Villafrádez	2	1	...	...	...	1	1	...	...	...	...	...	...	...	...	2	7
Doctor Botero Uribe (del 17 al 30)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Totales	5	4	2	13	2	2	5	1	1	1	2	2	...	3	1	14	68

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veinte de Septiembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: El Presbítero José Joaquín Hoyos, vecino de Riosucio, vendió, según la escritura pública número 1,006, otorgada ante el Notario 2.° de Medellín, el 4 de Septiembre de 1877, al Presbítero Simón de Jesús Herrera, dos derechos en la mina de oro de veta situada en el paraje denominado "Tumbabarreto" jurisdicción del primero de dichos Distritos; consta en la escritura que los vendía con la condición de que él (Herrera) hará los gastos del montaje y explotación, debiendo dar al vendedor la mitad de los productos líquidos... Tercero. Que los tiene vendidos con todas sus anexidades en la cantidad de cincuenta pesos de ley, que en monedas corrientes tiene recibida á su satisfacción. Cuarto. Que el justo precio y verdadero valor de los derechos de mina vendidos es el de los cincuenta pesos de ley ya expresados."

Partiendo del hecho que la mina había dado cuantiosos rendimientos y que el Presbítero Herrera no le había entregado al Presbítero Hoyos la mitad de los productos líquidos, los que, según el apoderado de éste, hacían parte del precio, se estableció demanda ante el Juez del Circuito de Medellín contra el Presbítero Herrera por el mandatario del vendedor, para que se declarara la resolución del contrato antes relacionado, fundándose en los artículos 1546, 1930 y 1932 del Código Civil hoy vigente; y para el caso de que á esto no hubiera lugar, se demandó subsidiariamente el cumplimiento de la obligación de pago de la mitad de las utilidades líquidas de las dichas acciones ó derechos causados yá con los intereses de demora, y mensualmente el pago de las que se fueren causando, según las disposiciones de los artículos 1603 y 1615 del Código Civil de Antioquia, vigente cuando se celebró el contrato; esas disposiciones las reproducen los artículos 1605 y 1617 del actual Código.

El apoderado del demandado expuso, al contestar la demanda, que el demandante, Presbítero Hoyos, se había hecho cargo de una de las dos acciones vendidas en compensación ó pago de la mitad de los expresados productos líquidos que le correspondían, y que esta acción se la había vendido el mismo Presbítero Hoyos á Juan de la Cruz Escobar; y en el mismo acto propuso las excepciones de pago, prescripción de acción, pacto de no pedir y petición de un modo indebido.

Este pleito se decidió en primera instancia por sentencia de diez y nueve de Junio de mil ochocientos ochenta y ve, en estos términos:

"1.° No se declara resuelto el contrato de compra-venta que consta en la escritura pública número mil seis, otorgada ante el Notario segundo de este Circuito el cuatro de Septiembre de mil ochocientos setenta y siete;

"2.° No se impone al demandado la obligación de resarcir al actor los perjuicios que expresa el segundo capítulo de la demanda;

"3.° Condénase al señor Presbítero Simón de Jesús Herrera á pagarle al señor Presbítero José Joaquín Hoyos la mitad de las utilidades que produjeron las dos acciones de veinticuatroava parte de la mina de "Vendecabezas" de que se trata, desde el diez y ocho de Julio de mil ochocientos ochenta y seis hasta el treinta y uno de Mayo de mil ochocientos ochenta y ocho, esto es, la suma de cinco mil trescientos veintidós pesos de ley con treinta centavos, con los intereses legales de la demora. Igualmente se declara que el demandado está en la obligación de entregarle al demandante, mes por mes, la mitad de las utilidades netas que hayan producido y produzcan dos acciones desde el primero de Junio de mil ochocientos ochenta y ocho hasta que se suspenda definitivamente la explotación de dicha mina. La cuantía de la suma que se deba en el período trascurrido desde el primero de Junio del año anterior hasta hoy, se fijará en otro juicio, y

"4.° No se hace especial condenación en costas."

Ambas partes apelaron de esta sentencia en lo que á cada una era desfavorable, pero sólo se concedió el recurso á la parte demandada, porque la demandante no lo interpuso dentro del término legal. De esta suerte la segunda instancia se contrajo á determinar sobre la obligación de pago de cuota parte de las utilidades, según la escritura; pues la decisión acerca de la no resolución del contrato había quedado ejecutoriada.

En segunda instancia se produjeron diversas pruebas por el apelante. De ellas el Tribunal Superior de Antioquia estimó que la confesión hecha en posesiones por el Presbítero Hoyos era una prueba plena de la anulación de la cláusula escrituraria, quedando por esa convención extinguida la obligación del demandado de pagar la mitad de las utilidades que se le demandaban.

Esa confesión es ésta en resumen: ser cierto que en alguna ocasión le reclamó al Presbítero Herrera los productos que de las dos acciones le correspondían, á lo que éste le dijo que siendo dos las acciones, dispusiera de una, y estando presente Juan de la Cruz Escobar, negoció con él la acción [illegible] con condición de no otorgarle escritura

[illegible] considerando que la mitad de los [illegible] Herrera se obligó á dar

no haría parte del precio; que esos productos eran bienes muebles; que la obligación del deudor era personal y que nacía de un contrato accesorio, el Tribunal hizo aplicación de los artículos 1945, 1602 y 1625 del Código Civil, y en sentencia de 17 de Octubre del año próximo pasado, revocó lo dispuesto en el número 3.° de la sentencia apelada, dejando á salvo el derecho del demandante para que en juicio diverso demandara los productos de la mina á que la escritura de venta le daba derecho con anterioridad al convenio confesado por el Presbítero Hoyos. El apoderado especial de la parte últimamente nombrada, interpuso recurso de casación, el que otorgado, se ha fundado ante esta Superioridad en la causal que en seguida se expresa:

Violación de los artículos 1546, 1602 y 1603, y aplicación indebida de los artículos 749, 756, 1857, inciso 2.°, 2577 y 1502, todos del Código Civil, en el sentido de que, tratándose de derechos en una mina que es bien inmueble, del convenio habido entre los Presbíteros Herrera y Hoyos, cediendo el primero al último una acción, para quedar libre del pago de la mitad de los productos de ambos, se necesitaba de escritura pública registrada, sin la cual no puede considerarse perfeccionado el contrato y entregada la acción al Presbítero Hoyos; pero como no se otorgó, tal convenio no puede producir efectos legales, y subsistiendo en el Presbítero Herrera la obligación primitiva, la sentencia que lo absuelve, es contraria á las leyes.

De la relación que antecede, y por haberse interpuesto el recurso de casación antes de vencerse los treinta días que la ley otorga, se infiere claramente que la sentencia reúne las condiciones que el artículo 366 de la Ley 105 de 1890 exige para que pueda ser admitido, y la Corte así lo declara; por lo tanto entra en el examen de la causal alegada.

La escritura número 1006 citada antes, contiene para el Presbítero Herrera la obligación clara de compartir con el Presbítero Hoyos las utilidades líquidas de las dos acciones de la mina ubicada en Riosucio, en el punto denominado "Tumbabarreto" que éste vendió á aquél; de esa obligación no puede quedar libre sino porque la ley la declare nula ó por cualquiera otro de los medios que ella señala para su extinción.

La sentencia recurrida da por probado el hecho de haber habido un pacto entre las personas citadas, en virtud del cual la deudora cedió una acción á la acreedora para libertarse de la expresada obligación, cesión que fué aceptada y enajenada inmediatamente la cosa cedida á una tercera persona que presenciaba el arreglo. Esta estimación debe aceptarla la Corte, tanto más cuanto la parte á quien pudiera perjudicar no ha alegado ni observado nada en contrario (artículo 1769 del Código Civil).

Dado el hecho, la sentencia acusada ha derivado de él la extinción de la obligación del demandado, pues según los artículos 1602 y 1625 del Código Civil, las partes pueden, por convenio, anular ó modificar las obligaciones contraídas. Pero la parte recurrente, según se ha expuesto, no cree que aquel convenio verbal haya extinguido la obligación del demandado, porque tratándose de un bien raíz, se necesitaban ciertas solemnidades que no se llenaron, por lo que el contrato ó pacto no se perfeccionó, y no puede ser, por lo mismo, eficaz para libertar de la obligación contraída.

Inútil es buscar en el expediente lo concerniente á la Sociedad minera de "Tumbabarreto," porque no se presentó la escritura de asociación ni el título de propiedad de la mina; solamente se registran en él la constitución de la Sociedad denominada del "Güimo" y "Vendecabezas" y el título de la mina de este último nombre; en esta Sociedad, formada en 1884, pueden haberse refundido las acciones de la mina de "Tumbabarreto," pero esta es una circunstancia que no es suficientemente clara en los autos, ya por falta de títulos, ya porque los linderos que en los varios documentos presentados en el juicio se mencionan, no pueden identificarse, como se verá posteriormente en la comparación que se hará de ellos. Si hubiera de estarse á lo que el Presbítero Hoyos expresa en su confesión anteriormente mencionada; esto es, que al negociar con Juan de la Cruz Escobar la acción que le ofrecía el Presbítero Herrera, puso por condición á aquél que no le otorgara escritura, eso serviría para decidir que no era indispensable que éste último la hiciera, puesto que el demandante no la creía necesaria para con Escobar, porque no habría equidad en hacer que fuese obligatorio para un vendedor lo que no era para otro, tratándose de idéntica cosa. Pero según el Código de Minas de 1879 del extinguido Estado del Cauca, una mina no viene á ser propiedad raíz sino mediante la concesión y expedición del título (artículos 6, 11 y 73), y como no se acreditó que el Presbítero Hoyos, ni su causante, ni ninguna otra persona ó sociedad obtuviera el título de la mina á que las dos acciones pertenecían, es indudable que la transacción habida entre el demandante y el demandado no tuvo en mira derechos reales sino meras espectativas, y no se hallaba en este caso sujeta á solemnidades especiales; tanto menos, cuanto esas espectativas resultaron fallidas, según después se verá. No se han violado ni aplicado mal, pues, las disposiciones citadas por el recurrente.

Ahora bien, los productos líquidos que el Presbítero Herrera debía compartir con el Presbítero Hoyos, son los que diera la mina de "Tumbabarreto" y no los que diera la mina de "Vendecabezas" ú otra cualquiera; pero como por la demanda lo que se pide es la mitad de los productos de la mina últimamente nombrada, se ha exigido una cosa á que el demandado no estaba obligado. Que las minas son diferentes lo da á conocer la siguiente comparación de linderos, tomados de la escritura de venta de las dos acciones de la primera y del título de propiedad que se expidió de la segunda.

Linderos de la mina de "Tumbabarreto:"	Linderos de la mina de "Vendecabezas:"
Norte, el mineral denominado "Sordo;"	Norte, el filo de la cuchilla de "Machete;"
Sur, la mina denominada "Cañaverales;"	Sur, alto de "Tumbabarreto;"
Oriente, el alto de Tumbabarreto;	Oriente, la huerta de Salvador Fernández;
Occidente, el río de Las-Estancias.	Occidente, la cuchilla de "Güimo."

Y aun cuando las dos minas están en Riosucio, la de "Tumbabarreto" se halla en el alto de este nombre, y de la "Vendecabezas" en el cerro de Quiebra-lomo.

No se ha probado que en 1877, cuando el Presbítero Hoyos vendió las acciones al Presbítero Herrera, ni con posterioridad, se hubiese expedido título ni dado posesión á alguna persona de la mina de "Tumbabarreto" ni que se hubiera establecido alguna Sociedad regular para su explotación; se vendieron, pues, acciones de lo que no existía ni ha existido, y como los contratantes pactaron que en caso de error en la designación de los linderos de la mina, cuyas dos acciones le vendían, se estaría á los nombrados en la escritura de venta, se convino tácitamente en que si de tal mina no se adquiría título ni se formaba Sociedad que la beneficiara, el contrato se tendría por no escrito ó perdería el comprador los cincuenta pesos del contrato, y el vendedor, la espectativa de una ganancia que no podía realizarse; porque tal es la condición de los contratos sobre objetos que no existen pero que se espera que existan.

Fué un año después de la expresada venta cuando se expidió, en 1878, á favor de Eloy García, el título de la mina de "Vendecabezas;" y más tarde en 1884, cuando se formó la Sociedad minera de "Güimo" y "Vendecabezas" para explotar los minerales de oro y plata comprendidos en el área que demarcan estos linderos: por el Norte, con el río de Las-Estancias; por el Sur, con el camino que cruza á "Tumbabarreto" y conduce á Riosucio; por el Oriente, con la mina denominada "Machete," y por el Occidente, con la mina denominada "Santa-Bárbara." Estos linderos tampoco convienen con los de la mina de "Vendecabezas," pero es seguro que dentro de ellos se incluyeron otras pertenencias de propiedad de la Sociedad, como lo indica la palabra *Güimo* incluída en la razón social.

Del estudio de tales documentos se desprende naturalmente que las acciones que el Presbítero Herrera tiene ó ha tenido en la Sociedad de "Güimo" y "Vendecabezas" no son

aquéllas de que está obligado á dividir con el Presbítero Hoyos los productos líquidos. De esta suerte, aun cuando realmente se hubieran violado las disposiciones legales que el recurrente ha citado, y el recurso se declarara fundado, no por esto mejoraría la causa del recurrente, pues la demanda se dirigió precisamente á obtener las utilidades que haya dado la mina de "Vendecabezas" en el supuesto de que correspondían á ésta las acciones vendidas por el demandante; pero del expediente resulta que ese supuesto es falso y que la obligación del demandado es respecto de la mina de "Tumbabarreto" que no se ha probado que exista como de propiedad de persona ó sociedad alguna, ni que haya sido explotada de ningún modo.

De las consideraciones precedentes se sigue que aunque el Tribunal Superior de Antioquia debía haber aplicado en la decisión recurrida, de preferencia, las disposiciones legales sobre minas, no por eso están mal aplicados los principios generales del derecho común, que en nada se oponen á aquéllas. En esa virtud, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se declara infundado el recurso de casación interpuesto por la parte del Presbítero José Joaquín Hoyos, y por lo mismo se confirma la sentencia de 19 de Octubre, que queda examinada.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Mariano de Jesús Medina.—Juan Evangelista Trujillo.—Lucas Villafrádez.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veinte de Septiembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Alejandro García ha ocurrido á esta Superioridad en solicitud de recompensa militar, por invalidez, ocasionada por heridas recibidas en la última guerra.

Del expediente consta:

1.° Por certificación del General Lucio Velasco y declaración de José María Sánchez, Lucas Espinosa, Federico Yangiras y Bernabé Blanco, dada ante el Juez del Circuito de Cali con los requisitos legales, que Alejandro García pertenecía en la guerra de mil ochocientos ochenta y cuatro á mil ochocientos ochenta y cinco á las fuerzas que defendían al Gobierno legítimo y que combatieron en Sonso y en Vijes, en las que tenía el empleo de Cabo 1.°, y que en este último combate recibió una herida, y acreditan, además, que está pobre;

2.° De la diligencia de reconocimiento practicado ante el Prefecto de Cali por los médicos Adolfo Tenorio, Evaristo García y Enrique Garcés, que el solicitante presenta en el brazo izquierdo dos cicatrices de proyectil en sus bordes externo é interno de la cara anterior de la articulación con el antebrazo, en donde la bala, aunque no fracturó los huesos, sí hirió seguramente los tendones, y esto ha producido alguna debilidad para los movimientos de dicho miembro; por cuanto siendo el oficio de García el de herrero, lo consideran en incapacidad relativa para su trabajo;

3.° Finalmente, de la certificación del señor Ministro del Tesoro aparece que el nombre del peticionario no figura en la lista de pensionados, ni en los libros de la Sección 3.ª hay constancia de que haya recibido recompensa.

Por lo expuesto, y por cuanto el señor Procurador no se opone á que se conceda la gracia solicitada, de conformidad con lo establecido en el ordinal 3.° del artículo 5.°, y el artículo *19 de la Ley 84 de 1890*, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se declara que Alejandro García, vecino de Cali, tiene derecho á percibir del Tesoro de la República la recompensa unitaria y definitiva de trescientos ochenta y cuatro pesos ($ 384), equivalente á dos anualidades del sueldo de Cabo 1.°, por invalidez parcial contraída por heridas recibidas en acción de guerra defendiendo al Gobierno legítimo de la Nación.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y dése cuenta al Ministerio respectivo.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Mariano de Jesús Medina.—Juan Evangelista Trujillo.—Lucas Villafrádez.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintidós de Septiembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Por medio de apoderado, Braulio Montes, natural y vecino de Cali, solicita de la Corte le conceda la recompensa militar que según la Ley 84 de 1890 le corresponde, á causa de haber recibido en la campaña de mil ochocientos ochenta y cinco, en el combate de "Sonso," en que militaba en defensa del Gobierno como Sargento 2.° de la primera Compañía del *Batallón 5.° de Cali*, tres heridas de bala que le han imposibilitado para trabajar como lo hacía antes de sufrirlas.

Trae la demanda los siguientes comprobantes:

1.° Declaraciones rendidas ante el Juez del Circuito en lo civil de Cali por Juan Bautista Medina, Lucas Espinosa, Bernabé Blanco y el Teniente-Coronel Primitivo Orejuela, con las cuales se comprueba que en efecto el demandante Braulio Montes, militó y recibió tres heridas de bala en "Sonso," en condición de Sargento 2.° de la primera Compañía del *Batallón 5.° de Cali;* y que á consecuencia de estas heridas quedó incapacitado para trabajar como trabajaba antes;

2.° Una certificación expedida por el General Lucio Velasco, actual Jefe del Batallón 4.° *de Palacé*, á treinta de Octubre último, sobre el hecho de los servicios prestados y las heridas recibidas por Montes en la batalla de "Sonso."

3.° La diligencia de reconocimiento practicado de orden del Prefecto de la Provincia de Cali, por los profesores de Medicina y Cirugía, doctores Evaristo García, Enrique Garcés y Adolfo Tenorio en el herido Montes, diligencia que en su parte principal es del tenor siguiente: "que el señor Braulio Montes tiene sobre el lado derecho del pecho dos cicatrices producidas con proyectil de arma de fuego; que se comprende que una costilla y músculos importantes, sobre todo el pectoral, sufrieron; que en el tercio superior del brazo derecho hay también dos cicatrices producidas con arma de fuego; que ese brazo carece de los movimientos completos; que el herido que han reconocido, Braulio Montes, tiene incapidad absoluta," y

4.° Una certificación dada por el señor Ministro del Tesoro, de la cual resulta que Montes no ha recibido hasta ahora recompensa alguna del Tesoro público.

Para resolver, la Corte considera que según la definición que el artículo 15 y el 19 de la Ley 84 de 1890 dan de la inutilidad absoluta y de la relativa, y según el reconocimiento practicado en Montes y que se deja trascrito, la invalidez de que éste adolece no puede considerarse sino como parcial ó relativa.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, y oído al parecer del señor Procurador, declara que Braulio Montes tiene derecho á una recompensa unitaria definitiva de cuatrocientos ocho pesos ($ 408) que se le pagarán del Tesoro público (artículo 5.°, inciso 8.°, 17, 18 y 19 de la mencionada Ley 84 de 1890).

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta, Judicial* dése el correspondiento aviso á su Señoría el Ministro de Guerra, y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Mariano de Jesús Medina.—Juan Evangelista Trujillo.—Lucas Villafrádez.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintitrés de Septiembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Bernardo Ruiz, en su calidad de soldado del *Batallón Junín número* 13, radicado en Popayán, ha solicitado recompensa conforme á la Ley 84 de 1890, tanto por antigüedad en el servicio militar, como por enfermedad en el mismo servicio.

El señor Procurador general de la Nación, al contestar el traslado de la demanda establecida á nombre de Ruiz por

su apoderado Andrés Lara, se ha expresado en estos términos:

"Como según lo resuelto en diversas ocasiones por esa Superioridad, los individuos de tropa no tienen derecho á otra recompensa que á la especial señalada en los artículos 214 y 215 del Código Militar, no hay para qué aplicar á esos individuos, y por la referida causal, las disposiciones de la Ley 84 de 1890, y, por tanto, carece de fundamento la solicitud en esta parte.

"Cuanto á la invalidez, se advierte que el peticionario no ha sido reconocido en la forma prevenida al efecto por la ley, ignorándose, en consecuencia, si la enfermedad de que él se queja es de carácter incurable, condición á que está sujeta la recompensa en estos casos (artículo 16 de la citada Ley 84 de 1890), á lo cual debe agregarse que el testigo Gregorio Rodríguez asegura que no es cierto que dicho peticionario *esté imposibilitado para trabajar, porque después que lo dieron de baja ha hecho viajes al Valle á negociar.* Los otros testigos no están acordes en cuanto á la enfermedad de que sufre Ruiz, pues uno dice que es una lepra en una pierna, otro que es *una enfermedad* en un brazo y un tercero se limita á decir que dicho Ruiz enfermó en el servicio.

"También hace al caso observar que de los informes rendidos por el 1.° y 2.° Jefe del Cuerpo á que pertenecía Ruiz como soldado, aparece que él no fué dado de baja por enfermedad, sino por haber quedado excedente, con motivo de una reorganización en que se disminuyó el número de plazas del citado Cuerpo.

"Según esto, soy de opinión que debéis declarar sin lugar á la gracia solicitada, en razón á que el peticionario no tiene derecho á ella por el tiempo de servicio y á que no está comprobado que sufre de invalidez proveniente de enfermedad incurable, contraída en el servicio militar."

Y como la Corte encuentra que la exposición del señor Procurador es perfectamente legal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el soldado Bernardo Ruiz no tiene derecho á la recompensa que ha solicitado.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Septiembre veintitrés de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, por sentencia de veintiocho de Julio último declaró no probadas las excepciones opuestas por Leonidas Posada Gaviria, en el juicio ejecutivo que contra éste sigue el Banco Nacional, como cesionario de José María Defrancisco, por cuatro mil pesos y sus intereses, en dinero, y por siete mil quinientos ochenta y cinco pesos en vales de crédito público, ó en caso de no entregar estos documentos, por cinco mil trescientos nueve pesos cincuenta centavos de perjuicios, condenó al ejecutado en las costas procesales y mandó seguir adelante la ejecución y rematar los bienes embargados para el pago.

De esta sentencia apeló Posada Gaviria, y concedido este recurso para ante la Corte, pasa ella á determinarlo, surtida como se halla la sustanciación prescrita por la ley.

Las excepciones alegadas en el orden en que se propusieron son éstas:

1.ª Petición antes de tiempo;

2.ª Inexistencia ó nulidad de la obligación;

3.ª Ineficacia de la venta de derechos hecha por el señor Defrancisco;

4.ª Condición no cumplida.

En este mismo orden procede la Corte á examinarlas.

1.ª *Petición antes de tiempo.*

Los fundamentos de esta excepción son los siguientes:

a). Que es condición de las obligaciones de Posada Gaviria la circunstancia de estar terminada la liquidación que él, Defrancisco y Eugenio González Benito resolvieron hacer de las operaciones ejecutadas por ellos sobre documentos de crédito público, al tenor del mismo instrumento que sirve de recaudo ejecutivo, y que esa condición no se ha cumplido;

b). Que Defrancisco no ha cumplido con la obligación de suministrar los datos necesarios para practicar la liquidación, y

c). Que tampoco se ha practicado la liquidación convenida con el Gerente del Banco Nacional "para el efecto de dar cumplimiento al endoso," liquidación que hacía él con los datos que suministrara Defrancisco de los negocios habidos entre éste, Posada G. y González Benito.

Las obligaciones de Posada-Gaviria de que aquí se trata tienen origen en la cesión que á éste hizo Defrancisco de sus derechos y acciones en la liquidación aludida, y constan en las siguientes cláusulas del documento en que se basa la ejecución:

"IV. Leonidas Posada Gaviria se compromete á entregar á José María Defrancisco, en esta ciudad, la suma de cuatro mil pesos de ley, en moneda corriente, en pago de los derechos y acciones que le ha cedido, una vez que se haya terminado la liquidación expresada en la cláusula primera. Se concede de plazo para el pago de la suma indicada en esta cláusula, es decir, de los cuatro mil pesos, hasta un año como *máximum*, contado desde esta fecha (14 de Noviembre de 1884);

"Leonidas Posada Gaviria se compromete á devolver á José María Defrancisco cuatro mil quinientos pesos en vales de primera, y tres mil quinientos ochenta y cinco en vales de segunda clase, que dió el señor José María Defrancisco para la conversión por libranzas. El plazo para la devolución de estos vales es el mismo que tiene Posada para la entrega de los cuatro mil pesos de que habla la cláusula cuarta de este contrato."

Conforme á estas estipulaciones no cabe duda de que las obligaciones de Posada Gaviria, á lo menos en parte, fueron al principio condicionales, en razón á que dependían de un acontecimiento futuro que podía suceder ó no, como era la práctica de la liquidación antedicha; pero no es menos evidente que pasado un año, tal condición y sus efectos suspensivos de los derechos del acreedor caducaron en virtud de haberse estipulado en el mismo contrato, por cláusula posterior, especial y expresa, que el plazo máximo que se concedía á Posada Gaviria para pagar á Defrancisco la cantidad de cuatro mil pesos era el de un año, término perentorio que excluye toda dilación en el cumplimiento de esa obligación, y sobre el cual no caben dudas de ninguna clase ni hay necesidad de interpretaciones. En la creencia contraria la parte del deudor defiende que según dicha cláusula, el plazo de un año allí fijado está subordinado á la terminación de la liquidación, de tal manera que si ésta no se hace, el plazo no comienza á correr, en atención á que si el plazo concedido á Posada hubiera sido simple y sencillamente el de un año, contado desde la fecha del documento, no se habría hecho mención de la liquidación; pero esta argumentación es del todo infundada é inaceptable, por estar en abierta contradicción con el sentido natural y recto de la cláusula del contrato, en que aparece con claridad que las partes convinieron en señalar como plazo máximo para el pago de los cuatro mil pesos el de un año, contado desde la fecha de la obligación.

Se alega también que por no haber cumplido Defrancisco con la obligación de suministrar los datos necesarios para practicar la liquidación, la demanda ejecutiva es extemporánea; pero estando como está demostrado que las obligaciones de Posada G. no dependían de tal liquidación pasado un año desde la fecha de su otorgamiento, implícitamente lo está que la falta de tales datos tampoco es obstáculo para que el demandante pueda pedir la ejecución de tales obligaciones, que, como se ha visto, constituyen una deuda de plazo cumplido.

La última razón que se aduce como fundamento de la excepción que se examina es que aún no se ha practicado la liquidación que ha debido hacer el Gerente del Banco Na-

cional de los negocios habidos entre Posada Gaviria, Defrancisco y González Benito, "para el efecto de dar cumplimiento al endoso," según lo convenido con dicho Gerente. Sobre esto la Corte observa:

1.° Que según las notas de endoso y aceptación puestas y firmadas respectivamente por Defrancisco y Posada Gaviria á continuación del documento de obligación, tanto el traspaso como la aceptación fueron simples y sin condición de ninguna especie, y todo lo que en contrario se diga carece de fundamento;

2.° Que de los testigos presentados por el excepcionante para justificar sus pretensiones, sólo el doctor Alejandro Pizarro afirma tener conocimiento de que al endosar José María Defrancisco al Banco Nacional un crédito á cargo de Posada Gaviria, procedente de un documento fechado en 1884, fué perfectamente entendido entre el Gerente del Banco y Posada Gaviria que el endoso no sería efectivo sino mediante una liquidación que hiciera el mismo Gerente con los datos que le suministrara Defrancisco. Los otros testigos, que son los señores doctor Nicolás Osorio y Segundo Ortega, el primero Gerente y el segundo Secretario del Banco Nacional, ninguno hace afirmaciones semejantes, y antes bien el doctor Osorio las niega al deponer, como lo ha hecho, que no fué en su calidad de Gerente que él aceptó el encargo de liquidar los negocios de Defrancisco con Posada G. y González Benito, sino como simple particular y sin autorización de la Junta Directiva del Banco para obrar en este asunto especial en el carácter de Gerente.

De suerte que la efectividad del endoso hecho al Banco tampoco dependía de la liquidación que hiciera el Gerente de aquel establecimiento, como lo ha alegado el excepcionante, toda vez que no se ha dado prueba suficiente de la estipulación relativa á esa condición, siendo preciso, en consecuencia, concluír que tampoco es fundada bajo esta nueva faz la excepción de petición antes de tiempo.

2.ª *Inexistencia ó nulidad de la obligación.*

Alégase en este punto que en la cesión de derechos que hizo Defrancisco á Posada G. no hubo causa para que éste se obligara á pagar al cedente los cuatro mil pesos que se le cobran por la vía ejecutiva, y que por ello la obligación es nula é ineficaz. A esta pretensión no presta desde luégo ningún apoyo el contexto del documento en que consta la cesión mencionada, que es el mismo en que se basa la presente ejecución, pues allí consta con claridad que Posada se obligó á pagar la suma de cuatro mil pesos á Defrancisco en cambio y como precio de los derechos y acciones que éste le cedió, lo cual constituye la causa legalmente necesaria para el valor de la obligación. Si aquellos derechos valían más ó menos de lo que calculó el cesionario al aceptar la cesión, ó si no valían nada, que parece ser el fundamento de la excepción que se viene examinando, y si por aquellos motivos la negociación fué ó dejó de ser ventajosa para Posada G., esta cesión ulterior y de carácter contingente no puede razonablemente influír de una manera retroactiva sobre la existencia de la causa ó motivo que indujo al contrato, mayormente cuando éste versa sobre derechos sujetos á liquidación y cuando ésta no se ha verificado, como sucede en el presente caso. Es, pues, infundada la excepción de que se trata.

3.ª *Ineficacia de la venta de derechos hecha por Defrancisco al ejecutado.*

Por no existir al tiempo del contrato la cosa vendida y en razón á que el Código Civil de Cundinamarca, bajo cuyo *imperio se celebró, disponía, en su artículo 1877, que la venta* de cosas que no existían, pero se esperaba que existieran, se entendería hecha bajo la condición de existir, y en su artículo 1878 que la venta de una cosa que al tiempo de perfeccionarse el contrato se suponía existente y no existía, no producía efecto alguno.

Los derechos cedidos por Defrancisco á Posada G., á título de venta, existían indudablemente al tiempo en que se hizo y aceptó la cesión, pues así consta del documento que ha servido de recaudo ejecutivo que hace plena prueba en este debate. En ese documento se reconoció expresamente á Defrancisco como condueño y partícipe en las operaciones sobre documentos de crédito público, de donde emanan los derechos cedidos, por los demás condueños y partícipes en la negociación, entre los cuales figura Posada Gaviria, lo cual no deja ni asomos de duda acerca de la existencia de esos derechos. Así lo reconoce también el excepcionante, cuyas objeciones no se dirigen contra la verdad de lo expuesto. Lo que él sostiene es que los derechos de Defrancisco en la liquidación de las operaciones comerciales supracitadas carecen de valor por preverse que una vez que aquélla se practique no resultará saldo alguno á favor de Defrancisco, lo cual equivale á no existir tales derechos; mas á juicio de la Corte esta observación no justifica en manera alguna la excepción de que aquí se trata, ya porque la existencia de las cosas es independiente de su valor, sean ellas corporales ó incorporales, objetos materiales ó derechos, de tal manera que pueden existir aunque nada valgan económicamente hablando, ya porque en el caso presente y mientras no se haga la liquidación que ha de dar á conocer la importancia de los derechos cedidos por Defrancisco á Posada G., no puede decirse con fundamento que ellos carecen absolutamente de valor, como lo defiende el ejecutado.

4.ª *Condición no cumplida.*

Según el artículo 1545 del Código Civil de Cundinamarca, conforme al cual debe librarse el presente pleito, la condición no cumplida produce el efecto de suspender la adquisición de un derecho, y en este sentido y con tal objeto se ha propuesto esta excepción por el ejecutado, pretendiendo que se declare, en primer lugar, que mientras no se practique la liquidación de las operaciones que sobre documentos de crédito público hicieron Posada Gaviria, González Benito y Defrancisco, éste no tiene acción para exigir á Posada el pago de la cantidad por la cual le hizo cesión de sus derechos en tal liquidación, por ser ésa una condición del contrato, y en segundo lugar, que el Banco Nacional tampoco tiene derecho, como cesionario de José María Defrancisco, para exigir de Posada el cumplimiento de las obligaciones contraídas por éste á favor de aquél, mientras el Gerente de dicho establecimiento no haga la liquidación convenida con él, de los negocios habidos entre los citados Pasada, González y Defrancisco, como necesaria para la efectividad del endoso hecho por éste al Banco, bajo esa condición.

Al hacer el examen de la excepción de petición antes de tiempo, la Corte demostró que ni con el documento de obligación ni con la prueba testimonial producida, se ha acreditado que las obligaciones contraídas por Posada á favor de Defrancisco, ni el endoso hecho por éste al Banco de sus derechos, dependían de la liquidación de los negocios habidos entre dichos individuos y González Benito. Sólo resta averiguar con relación á este último punto, si la escritura pública otorgada ante el Notario primero suplente del Círculo de Bogotá, con fecha diez y nueve de Febrero de mil ochocientos noventa, bajo el número 75, para hacer constar un convenio celebrado entre el Gerente del Banco Nacional y Marceliano Vargas, como apoderado de Defrancisco, favorece de algún modo las pretensiones del excepcionante.

Apoyado en esa escritura se sostiene por parte de éste lo que pasa á copiarse:

"Según ella, el señor Defrancisco dió en prenda al Banco, en la fecha de la misma los créditos de Defrancisco á cargo de Posada G.; luego el endoso de 27 de Mayo de 1885 no trasfirió la propiedad de los mismos créditos. Más aún: Defrancisco se compromete á hacer definitivo el endoso, y la cláusula 8.ª expresa que cede al Banco Nacional los créditos de cargo de Posada G. y Eugenio González B.; luego ni el endoso de 1885 fué definitivo ni los créditos habían sido cedidos antes de 1890. Es de notar que la cesión de esa fecha no fué notificada al señor Posada."

A juicio de la Corte la escritura en que esta argumentación se funda, no es conducente en la cuestión que se debate, por dos razones, á saber:

1.ª Porque los créditos de que en ella se trata son los que tenía Defrancisco contra Posada G. y Eugenio González Benito, conjuntamente, y el cedido al Banco Nacional, que se

quiere hacer efectivo en este juicio, es únicamente contra Posada Gaviria, y

2.ª Porque el título del crédito contra Posada que fué objeto de la cesión hecha al Banco, tiene á continuación la correspondiente nota del traspaso, firmada por el cedente, con fecha veintisiete de Mayo de mil ochocientos ochenta y cinco, y mientras no se pruebe la falsedad de esta nota hay que considerarla válida, siguiéndose de aquí que no es de ese título del que habla la escritura antes mencionada, sino de otros que á la fecha de ésta no habían sido endosados.

Por estas consideraciones la Corte, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, confirma la sentencia apelada, por la cual se puso término al artículo de excepciones propuestas por el ejecutado, y condena á éste en las costas del recurso.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Mariano de Jesús Medina.—Juan Evangelista Trujillo.—Lucas Villafrádez.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintitrés de Septiembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Manuel María Mosquera, como hijo legítimo del militar de la Independencia, Mariano Mosquera, por medio de su apoderado especial, doctor Andrés Lara, ha ocurrido á este Supremo Tribunal para que se le declare con derecho á una recompensa unitaria definitiva conforme á la Ley 84 de 1890; y admitida la demanda, ha sido sustanciada por los trámites que señala la misma ley hasta ponerla en estado de ser decidida, como se pasa á hacerlo.

Fúndase la demanda en la disposición consignada en el inciso 1.° del artículo 5.° de la citada Ley 84 de 1890, que da derecho al goce de recompensa "por servicios prestados durante la guerra de la Independencia" y además en los hechos que se enumeran en el escrito de la misma demanda, y son:

"1.° Que mi poderdante es hijo legítimo del militar y prócer de la Independencia, señor Mariano Mosquera y de la señora Margarita Fajardo;

"2.° Que mi poderdante carece de recursos para vivir con su numerosa familia, y

"3.° Que observa buena conducta."

Dado traslado al señor Procurador general de la Nación de esta reclamación, la ha emitido en términos desfavorables, porque los hijos de los militares de la Independencia, mayores de edad, no tienen derecho á recompensa del Tesoro nacional, sino cuando el que la solicita se halle incapacitado por sus enfermedades ó defectos físicos para trabajar, según el inciso 2.° del artículo 1.° de la susodicha Ley 84 de 1890, causal ó motivo en que no ha sido fundada la acción.

La Corte considera exacta la doctrina sustentada por el Ministerio Público, pues ella ha sido sostenida por la Corte en caso análogo al presente.

Por tanto, la Corte, de acuerdo con la opinión del señor Procurador general, y constando del poder conferido por Manuel María Mosquera á Salvador Valencia Fernández que aquél es mayor de edad, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, resuelve que no está en el caso de decretar la recompensa que se ha solicitado.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Mariano de Jesús Medina.—Juan Evangelista Trujillo.—Lucas Villafrádez.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintitrés de Septiembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Con poder de Lucio García ha ocurrido Andrés Lara á esta Superioridad reclamando para su poderdante recompensa del Tesoro nacional por hallarse imposibilitado para trabajar y proporcionarse la subsistencia, á causa de la enfermedad de epilepsia, reputada incurable, que contrajo en el servicio de las armas como soldado del *Batallón Junín número* 13.

Para fundar tal demanda se han presentado los siguientes comprobantes:

1.° Reconocimiento médico practicado en la persona del reclamante, ante el Gobernador del Departamento del Cauca, por la Junta de Profesores, compuesta de los doctores Juan N. Wallis O., Domingo Arboleda y Domingo Cagiao C., del cual resulta que García sufre de epilepsia, contraída en el servicio militar, probablemente; que aunque esta enfermedad se cura en ocasiones, no puede asegurarse que esto se verifique en la que sufre García, y que éste puede trabajar por intervalos, mas no permanentemente, por correr riesgo de que le ataque la enfermedad por razón del trabajo mismo, con peligro de la vida;

2.° Información de cinco testigos, mayores de toda excepción, recibida por el Juez del Circuito de Popayán, á presencia del Fiscal, con la cual se acredita que García sirvió como soldado del mencionado *Batallón Junin*, durante más de cinco años, observando buena conducta, hasta que se le dió de baja como inválido, á causa de la enfermedad de epilepsia que contrajo estando en servicio, y que es sumamente pobre, no contando con sueldo ni nada para vivir. Los declarantes son Ernesto Borrero, 2.° Jefe de dicho Batallón, Luis Santamaría, Francisco Parada, Adolfo Buitrago y Pedro Carrilo, todos militares en servicio activo;

3.° Copia de la diligencia de reconocimiento practicado por el médico del citado Batallón, quien declaró, bajo juramento, que el soldado García sufría de epilepsia el veinte de Enero de mil ochocientos noventa y uno, en que fué reconocido;

4.° Certificaciones de los Jefes 1.° y 2.° del mismo Batallón sobre que García fué dado de alta como soldado el quince de Diciembre de mil ochocientos ochenta y cinco, y de baja el primero de Febrero de mil ochocientos noventa y uno, por encontrarse inútil para el servicio á causa de enfermedad que contrajo en él, y sobre la buena conducta observada por dicho individuo, y

5.° Certificación del Ministerio del Tesoro, en que se afirma que García no ha recibido recompensa del Tesoro nacional por razón de invalidez, de antigüedad en el servicio ó por otra causa, ni figura en el registro de pensionados de la República.

En virtud de estos hechos y de lo que disponen los artículos 1.°, 5.°, 6.° y 16 de la Ley 84 de 1890, no cabe duda de que el demandante es acreedor á la gracia que solicita, como lo advierte también el Procurador general, cuyo parecer se ha oído, por todo lo cual, y de acuerdo con éste, la Corte Suprema administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que Lucio García tiene derecho á recibir del Tesoro nacional, como recompensa unitaria definitiva, por razón de enfermedad contraída en el servicio militar, como soldado del *Batallón Junín número* 13, la cantidad de cuatrocientos sesenta y nueve pesos treinta centavos ($ 469-30), igual á las dos terceras partes del sueldo íntegro correspondiente á dicho empleo en un cuatrienio.

Notifíquese, comuníquese al Gobierno, publíquese en la *Gaceta Judicial* y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Mariano de Jesús Medina.—Juan Evangelista Trujillo.—Lucas Villafrádez.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, trece de Septiembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Ha venido en apelación la sentencia de quince de Enero del corriente año, dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto en el juicio de responsabilidad seguido por los trámites extraordinarios contra el

ex-Prefecto de la Provincia de Barbacoas, Vicente Micolta, por haber rehusado su cooperación ó auxilio en la administración de justicia, sentencia en que se condenó al encausado á pagar cuatro pesos de multa, las costas procesales y á ser apercibido.

Para dictar el fallo del caso es preciso hacer una relación compendiada de los hechos que han dado lugar al presente juicio.

Siguiendo un sumario el Juez del Circuito de Barbacoas para averiguar si Remigio Hurtado Ponce, Alcalde del Distrito municipal de Barbacoas, había cometido el delito de maltratamientos de obra en la persona de José María Paz, Administrador subalterno de Correos, creyó dicho funcionario de instrucción que había motivo legal para decretar la detención del sindicado, cosa que no se podía hacer á su juicio, sin llenar previamente las formalidades previstas en el artículo 1559 del Código Judicial, para lo cual pidió al Prefecto el once de Julio de mil ochocientos ochenta y nueve, la suspensión del mencionado Alcalde. El Prefecto no accedió á esa petición, por no habérsele enviado copia de las piezas justificativas del delito imputado al Alcalde, y el Juez, en virtud de esa negativa, remitió copia de lo conducente al Tribunal de Pasto para que examinara si el Prefecto era responsable por haber rehusado su cooperación á la buena administración de justicia. El Tribunal, en vista de estos hechos siguió el presente juicio de responsabilidad y dictó la sentencia que es materia de apelación.

Es verdad que el artículo 1559 del Código Judicial dice que cuando para seguir causa á alguno se NECESITARE que otra autoridad decrete previamente la suspensión de un empleo, el funcionario instructor no podrá mandarlo detener ó arrestar antes que se decrete la suspensión, y que el Código Penal, en su artículo 545, castiga con una multa de cuatro á cuarenta pesos y apercibimiento, al funcionario ó empleado público de cualquiera clase que, siendo requerido en *forma legal* por alguna autoridad legítima ó advertido por superior competente, rehuse ó retarde prestar la cooperación ó auxilio que dependa de sus facultades para la administración de justicia. Pero para que el ex-Prefecto Micolta sea criminal por la omisión que se le imputa, no basta que se le hubiera exigido la suspensión del Alcalde Hurtado Ponce, y que él tuviera, según el ordinal 10 del artículo 181 del Código Político y Municipal, facultad para decretarla, sino que es preciso demostrar que el Juez no había podido llevar á cabo la detención del Alcalde sin la suspensión, y que la petición á ese respecto se le hubiera hecho al Prefecto en la forma legal. Y como estas condiciones ó requisitos no se han demostrado que hayan sido llenados, hay que concluír que no se puede castigar al procesado, porque aun admitiendo que la suspensión fuera necesaria para decretar la detención, el Juez de Barbacoas debió remitir al Prefecto copia de las piezas justificativas del delito atribuído al Alcalde, á juzgar por lo que se hace cuando se sigue juicio de responsabilidad á un funcionario público (artículos 1885 y 2021 del Código Judicial y 75 del Código Político y Municipal), que cuando menos hay que remitir copia del auto en que se le llama á juicio ó se ordena su detención.

En mérito de lo expuesto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, y de acuerdo con el concepto del señor Procurador general, revoca la sentencia apelada, y, en consecuencia, absuelve al procesado.

Publíquese, notifíquese, cópiese y devuélvase al expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. IZASA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA,—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

SALVAMENTO DE VOTO

DEL SEÑOR MAGISTRADO DOCTOR CASAS ROJAS.

En este asunto el infrascrito Magistrado se ha decidido á salvar su voto y á separarse de la resolución adoptada por la mayoría de la Corte, en fuerza de la razón que á continuación se expresa.

El artículo 408 del Código Penal de 1858, reproducido con menor pena por el artículo 545 del Código Penal vigente hoy, se halla concebido en los siguientes términos:

"Artículo 408. El funcionario ó empleado público de cualquiera clase, que siendo requerido en forma legal por alguna autoridad legítima, ó advertido por superior competente, rehuse ó retarde prestar la cooperación ó el auxilio que dependa de sus facultades para la administración de justicia, ejecución de las leyes, ó cualquier otro servicio público, pagará una multa de veinticinco á cien pesos y será apercibido."

"Esta disposición legal es terminante en cuanto por ella se impone á todo empleado público que sea requerido en forma legal por autoridad legítima para prestar la cooperación que dependa de sus facultades á la administración de justicia, el deber de prestarla sin demora, y en cuanto señala la pena con que se debe castigar la infracción de tal deber.

Ahora bien, en los autos aparece plenamente comprobado que el Juez del Circuito de Barbacoas requirió por dos veces al Prefecto de la Provincia del mismo nombre para que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1559 del Código Judicial y en uso de la atribución que el inciso 10 del artículo 181 del Código Político y Municipal confiere á los Prefectos de las Provincias, suspendiera á Remigio Hurtado y P. del empleo que ejercía de Alcalde de Barbacoas, en virtud de haber admitido la acusación que José María Paz había propuesto contra dicho Alcalde por delito que merecía pena corporal, y consta igualmente que dicho Prefecto, Vicente Micolta, rehusó prestar al Juez la cooperación solicitada; luego Micolta violó la expresada disposición del Código Penal, y la sentencia del Tribunal Superior de Pasto que así lo declara, es jurídica, y, en concepto del infrascrito Magistrado, debiera ser confirmada.

Es verdad que Micolta fundó su resistencia en que el Juez del Circuito de Barbacoas no quiso enviarle copia de la diligencia por la que se sometiera á juicio al Alcalde Hurtado y P.; pero también es verdad que el Juez replicó al Prefecto manifestándole que su solicitud sobre suspensión del Alcalde, estaba arreglada á la disposición del artículo 1559 del Código Judicial; que él no podía enviar la copia indicada porque el artículo 225 de la Ley 57 de 1887 se lo prohibía; y que él (el Juez) tenía un superior jerárquico á quien correspondía juzgarlo, en caso de que no diese acertada aplicación á la ley. Y el Juez insistió en que se decretara la suspensión solicitada del Alcalde sin que el Prefecto conviniera en ello.

Y como en tratándose de delitos comunes, el Juez no puede, según el artículo 1559 mencionado del Código Judicial, mandar arrestar ó detener á un empleado público, sin que antes lo suspenda el superior inmediato; como el artículo 1885 del propio Código, que previene enviar al superior á quien competa la suspensión de un empleado público, las piezas justificativas del delito ó culpa, no se refiere á las causas que se sigan por delitos comunes sino á las causas de responsabilidad seguidas por los trámites ordinarios; y como es indudable que según el inciso 10 del artículo 181 del Código Político y Municipal, es á los Prefectos á quienes corresponde suspender á los Alcaldes, á lo menos cuando el caso sea urgente y no se pueda aguardar la resolución del Gobernador, al infrascrito Magistrado le parece evidente que el Prefecto Micolta tenía el deber legal de prestar al Juez del Circuito de Barbacoas la cooperación por éste pedida y que no habiéndosela prestado, incurrió en la correspondiente sanción señalada por la ley penal.

Bogotá, trece de Septiembre de mil ochocientos noventa y dos.

JESÚS CASAS ROJAS.—POMBO.—ISAZA.—CORRALES.—MEDINA.—TRUJILLO.—VILLAFRÁDEZ.—*Rosas*, Secretario.

IMPRENTA DE ANTONIO M. SILVESTRE.
Director, Tomás Galarza.

REPÚBLICA DE COLOMBIA.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AÑO VIII | Bogotá, 8 de Enero de 1893. | NÚM. 365.

CONTENIDO.

Págs.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Sentencia que reconoce á Wenceslao Rengifo, como cesionario de Manuel María Pasos, un crédito por expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas)..... 9
La que reconoce á Juan Isidro Trujillo, un crédito por expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Corrales)..... 10
La que concede á Tránsito Vidal una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas)..... 10
La que concede á Francisco Fernández y su esposa Manuela Ledesma una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas)..... 11
La confirmatoria de la Resolución dictada por el Ministerio del Tesoro, en la reclamación de Juan Crisóstomo Aramburo. (Magistrado ponente, doctor Isaza)..... 11
La confirmatoria de la Resolución del Ministerio del Tesoro dictada en la reclamación de Julio Castro y Benicio Angel. (Magistrado ponente, doctor Corrales)..... 11

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CIVILES.

El que declara irrevocable el auto de la Corte por el cual se resolvió no estar desierto el recurso de casación á la sentencia dictada en el juicio seguido por la Compañía minera de Colombia contra la Compañía minera de Santander. (Magistrado ponente, doctor Isaza)..... 12
El que declara inadmisible el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Cundinamarca, en el juicio seguido por Leonardo González contra Demetrio Rodríguez por nulidad de dos cláusulas del testamento de Dolores Cárdenas. (Magistrado ponente, doctor Medina)..... 12
El que declara inadmisible el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, en el juicio seguido por Gabriel y Jacinto Arboleda y Cecilio Cárdenas contra Leonardo Modaffari con acción reivindicatoria de dominio. (Magistrado ponente doctor Corrales). 14

GACETA JUDICIAL.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Septiembre veinticuatro de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: En resolución marcada con el número 3,361, de fecha diez y ocho de Febrero último, la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones negó el reconocimiento de las partidas de ciento veinte pesos ($ 120) y de trescientos setenta pesos ochenta centavos ($ 370-80), respectivamente, reclamadas por Bárbara Rengifo y Manuel María Pasos, por razón de las exacciones que de los rebeldes sufrieron en la guerra de 1885.

El Ministerio del Tesoro aprobó dicha resolución, por medio de la que con el número 2,656 dictó en cuatro de Marzo último, de la cual apeló el interesado para ante esta Superioridad, en donde para resolver la apelación se considera:

1.° Lo que sirvió á la Comisión de fundamento para negar el reconocimiento solicitado de las mencionadas partidas, fué el argumento de que según el artículo 20 de la Ley 44 de 1886 y el 7.° de la Ley 56 de 1887, y puesto que se trata de exacciones efectuadas por los rebeldes, los reclamantes debían comprobar haber sido en aquella guerra partidarios sostenedores del Gobierno, y comprobarlo por medio de un documento público en que constara tal hecho. Y como entre las pruebas que la parte demandante adujo para sostener el recurso de apelación figura un certificado expedido á veinticinco de Julio del presente año, por el General José María González U., actual Jefe de Estado Mayor de la 2.ª División del Ejército de la República, y en que dicho alto empleado militar certifica y jura que hallándose él en su calidad de General Jefe de la 2.ª Brigada de la 5.ª División, encargado en la guerra de 1885 de las operaciones que se practicaban cerca de Silvia, vió que Manuel María Pasos se incorporó en las fuerzas nacionales y prestó oportunamente y sin remuneración alguna el servicio de conducir á Santander unas cargas de parque; la Corte juzga que el carácter político de Pasos se halla suficientemente comprobado, y que de consiguiente ha desaparecido la razón que la Comisión tuvo para no reconocer la partida reclamada por dicho Pasos.

No sucede lo mismo con relación á la de ciento veinte pesos ($ 120) reclamados por Bárbara Rengifo, pues con respecto á ésta no aparece prueba ninguna que se pueda estimar legalmente para considerarla como partidaria y sostenedora del Gobierno.

2.° Los documentos que sirven para sostener la reclamación de Pasos consisten:

1.° En la relación jurada presentada por el demandante al Gobernador del Cauca en Diciembre de 1887, en la cual se especifican las siguientes exacciones:

En dinero, setenta pesos	$ 70 ...
Valor de 16 arrobas de trigo	12-80
Valor de seis novillos, á $ 16	96 ...
Valor de doce vacas, á $ 16	192 ..
Total	$ 370-80

2.° En declaraciones rendidas ante Juez de Circuito, con intervención fiscal, por más de tres testigos idóneos, que están de acuerdo en sostener los hechos de la demanda y dan razón satisfactoria de su dicho

En vista de estos comprobantes, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, y oído el parecer del señor Fiscal, revoca la resolución apelada, y reconoce á cargo del Tesoro y á favor de Wenceslao Rengifo, como cesionario de Manuel María Pasos, la suma de trescientos setenta pesos ochenta centavos ($ 370-80) valor de las exacciones de guerra que el último de los dos sufrió en la de 1885, de parte de las fuerzas enemigas del Gobierno en el Departamento del Cauca.

Absuélvese á la Nación del pago de la suma reclamada á nombre de Bárbara Rengifo.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Mariano de Jesús Medina.—Juan Evangelista Trujillo.—Lucas Villafrádez.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, veintiséis de Septiembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: En el expediente relativo á la reclamación de Juan Francisco Usuriaga, Juan de la Cruz Zúñiga y Juan Isidro Trujillo, entablada ante la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, creada por la Ley 44 de 1886, por las exacciones que les fueron hechas en el curso de la guerra de 1885, de ciento cuatro pesos ($ 104) al primero, trescientos cincuenta pesos ($ 350) al segundo y trescientos cincuenta y dos pesos ($ 352) al tercero, la misma Comisión halló perfectamente comprobados los hechos referentes á las expropiaciones que sufrieron Usuriaga y Zúñiga, y de consiguiente, por resolución que dictó en veintinueve de Septiembre de 1891, con el número 4697, reconoció á cargo del Tesoro nacional y á favor de dichos reclamantes el crédito cuyo pago habían demandado respectivamente.

Pero no fué reconocido el que demandó Juan Isidro Trujillo, por no resultar del expediente comprobada plenamente la expropiación de trece reses vacunas y una mula parda, que se le hizo en Febrero de 1885.

Sometida dicha resolución al examen del Ministerio del Tesoro, como lo previene la ley, dicha Oficina le impartió su aprobación, por la que profirió en cinco de Octubre de 1891, señalada con el número 2,462.

Notificada la resolución superior á José Joaquín Rico, como apoderado de Juan Isidro Trujillo, interpuso apelación para ante esta Corte, y otorgado el recurso, ha venido el expediente á esta Superioridad, en donde ha tenido el curso establecido en las leyes de la materia.

Como la Comisión reconoció los créditos demandados por Usuriaga y Zúñiga, la apelación se contrajo únicamente al reclamo instaurado por Trujillo, y en él pasa la Corte á ocuparse, después de preparado por los trámites correspondientes.

Es exacto que los hechos que servían de fundamento á la reclamación del expresado Trujillo, como lo resolvió la Comisión administrativa no aparecían clara y plenamente acreditados porque respecto de cada hecho no había prueba testimonial al tenor de lo que exige la referida Ley 44 de 1886, esto es, la declaración conteste de tres testigos idóneos, por lo menos; mas en la instancia que se ha surtido en la Corte sí aparecen comprobados éstos hechos; en virtud de declaraciones rendidas con juramento y con posterioridad ante el Juzgado del Circuito de Popayán, en el despacho de lo civil, por Pedro Decacio Trujillo, Jaime Zúñiga y Juan Rico:

Que en el mes de Febrero del citado año de 1885, una fuerza expropió á Juan Isidro Trujillo, en el punto de "Los-Llanos," Distrito municipal del Tambo, para el servicio y manutención de las fuerzas del Gobierno nacional, ocho vacas horras y cinco toros, y además una mula parda;

Que el valor del ganado vacuno, según la declaración de Pedro Decacio Trujillo, sería de veinticuatro pesos ($ 24) cada res, y cuarenta pesos ($ 40) la mula;

Que el declarante Jaime Zúñiga estimó las trece reses á razón de treinta y dos pesos ($ 32) cada una y en cuarenta la mula parda.

Y aunque el testigo Juan Rico, que en su calidad de Alcalde ordenó la expropiación de dichos semovientes, no expresó el valor de éstos, la Corte considera sobre este punto acreditado el valor de tales semovientes, teniendo en cuenta lo que había ya declarado Miguel Puní, según la información presentada ante la Comisión administrativa. En efecto, Puní, que también fué testigo presencial de la expropiación de la mula y reses mencionadas, las estima así: en cincuenta pesos ($ 50) la primera, y al respecto de veinte pesos ($ 20) las cabezas de ganado cada una.

La Corte, habida consideración á que los testigos no dan un valor uniforme á los referidos semovientes, acepta, como en casos análogos, el valor mínimo, es decir, el de cuarenta pesos ($ 40) la mula y el de veinte pesos ($ 20) cada cabeza de ganado vacuno, los cuales valores ascienden á la cantidad de trescientos pesos ($ 300).

A mérito de las consideraciones precedentes, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, reconoce á cargo del Tesoro nacional y á favor de Juan Isidro Trujillo, ó de su representante en este juicio, la cantidad de trescientos pesos ($ 300), como importe de las expropiaciones que se le hicieron, como queda expuesto, en el mes de Febrero de 1885, por fuerzas del Gobierno nacional.

En estos términos queda reformada la resolución apelada.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial*, dése cuenta al Ministerio respectivo y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza, — Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Mariano de Jesús Medina.—Juan Evangelista Trujillo.—Lucas Villafrádez.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Septiembre veintiocho de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Tránsito Vidal, natural y vecina de "Pedregal," Distrito de Páez, Provincia de Popayán, en el Departamento del Cauca, solicita por medio de apoderado se le conceda la recompensa militar á que le da derecho la Ley 84 de 1890, por haber sido fusilado su esposo Lorenzo Salazar, en la plaza de Tulminá, en Noviembre de 1860, por las fuerzas del General Tomás Cipriano de Mosquera, después de la batalla de Segovia, en que fueron derrotadas las fuerzas que, á órdenes del General París, militaban en favor del Gobierno de la Confederación Granadina, en las que Salazar había estado prestando sus servicios en calidad de Cabo primero, por lo que, capturado en compañía de otros vencidos, por una partida de indígenas de Tierra-adentro, fué llevado á la mencionada plaza de Tulminá, en donde tuvo lugar públicamente la ejecución.

Para comprobar los hechos así relatados se han presentado los siguientes documentos:

1.° La certificación que corre al folio 1.° del expediente, en que el señor Párroco de Inzá afirma que los libros del archivo parroquial fueron destruídos por los indios de Tierra-adentro, en la guerra de 1860; que por esta razón no puede dar copia de la partida de matrimonio de Lorenzo Salazar con Tránsito Vidal; pero que habiendo interrogado bajo juramento á los padrinos y otros testigos que presenciaron dicho matrimonio, resulta demostrado que en efecto tuvo lugar, y agrega que la Vidal no ha contraído nuevas nupcias, y que á él mismo le constan tales hechos, por hacer más de treinta años que está encargado de aquella feligresía;

2.° Declaraciones de cuatro testigos contestes, que hacen fe respecto de los servicios prestados por Lorenzo Salazar como Cabo primero del Ejército del Gobierno de la Confederación en 1860; de su captura y muerte á manos de enemigos armados de dicho Gobierno en el año y lugar que se han mencionado; de su matrimonio con Tránsito Vidal; de que no tuvieron dichos cónyuges descendencia, ni Salazar dejó después de su muerte padres ni otros allegados que pudieran pretender derecho á participar de la recompensa que corresponde exclusivamente á la viuda; que ésta observó con su esposo muy buena conducta y no ha vuelto á casarse; que está muy pobre y observa hoy mismo muy buena conducta, y

3.° La certificación del señor Ministro del Tesoro, con la cual se acredita que Tránsito Vidal no ha recibido hasta ahora recompensa alguna del Tesoro público.

En vista de tales documentos, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, de acuerdo con el parecer del señor Procurador, declara que Tránsito Vidal, como viuda del Cabo primero Lorenzo Salazar, se halla en el caso del inciso 2.°, artículo 5.° y del artículo 9.° de la Ley 84 de 1890, y tiene derecho á una recompensa unitaria definitiva de setecientos sesenta y ocho pesos ($ 768) que se le pagarán del Tesoro público.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta*, dése el correspondiente aviso al señor Ministro de Guerra, y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza. — Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Mariano de Jesús Medina.—Juan Evangelista Trujillo.—Lucas Villafrádez.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintiocho de Septiembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Por medio de apoderado, Francisco Fernández pide para sí y para su esposa Manuela Ledesma, la recompensa que según la Ley 84 de 1890, les corresponde, á causa de que su hijo legítimo, Paulino Fernández, en calidad de Cabo 1.° de una Compañía del Ejército nacional, peleó y murió en el campo de batalla de "Palomocho" y "Piedrarica," el día 17 de Marzo de 1877, en defensa del Gobierno de la República.

Para comprobar los hechos en que la demanda se apoya, el señor Gobernador del Cauca certificó á diez y seis de Marzo del presente año, que en su archivo no existía documento alguno que sirviese para acreditar qué empleo militar tenía el finado Paulino cuando murió: el señor Párroco de San Pedro de Timbío expidió copia de la partida de bautismo, con que se establece que dicho Paulino, era en efecto, hijo legítimo de los demandantes; los testigos Antonio Tosme, Teodoro Castillo, Ignacio Garzón y Juan Gregorio Rosas aseguran que les consta que Paulino Fernández murió en el combate y la fecha ya expresados, combatiendo, en calidad de Cabo 1.° de una Compañía del *Batallón* 13 *de Tiradores*, en defensa del Gobierno, y el señor Ministro del Tesoro certifica que los demandantes no han recibido hasta ahora recompensa alguna.

En virtud de tales comprobantes la Corte juzga que la demanda está probada, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el parecer del señor Procurador, declara que Francisco Fernández y su esposa Manuela Ledesma, de conformidad con el artículo 5, inciso 2.° y artículo 9.° de la mencionada Ley 84 de 1890, tienen derecho á una recompensa unitaria definitiva de setecientos sesenta y ocho pesos ($ 768), que se les pagará del Tesoro público, y son divisibles por mitad entre los dos expresados padres del finado Cabo 1.° Paulino Fernández.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial*, dése aviso al señor Ministro de Guerra y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL EZEQUIEL CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Septiembre veintiocho de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: En la reclamación de Juan Crisóstomo Aramburo contra el Tesoro de la Nación, por seiscientos sesenta y siete pesos sesenta centavos ($ 667-60), valor de veintisiete novillos y tres caballos que le fueron expropiados en el Distrito de Candelaria, Departamento del Cauca, en la guerra de 1885, la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, en resolución de seis de Julio último, reconoció á favor del reclamante el crédito de diez y seis pesos ($ 16) que resulta comprobado con una certificación del Gobernador del Cauca, dada en cambio de un recibo expedido por el Comandante del *Batallón Ulloa*, y absolvió á la Nación del mayor cargo, por no haber presentado el reclamante la prueba necesaria para reconocer su derecho conforme á la Ley 44 de 1886.

El fallo de la Comisión fué confirmado por el Ministerio del Tesoro en veintidós del mes citado, y habiendo apelado de esta determinación el apoderado de Aramburo, debe la Corte decidir el asunto definitivamente.

El apoderado del reclamante pide que la Corte falle verdad sabida y buena fe guardada, y manifiesta que es muy difícil, si no imposible, y al mismo tiempo muy costoso, conseguir *tres declaraciones* de testigos presenciales para comprobar las expropiaciones de semovientes que se hicieron en partidas muy pequeñas.

No ha sido posible, á pesar del auto para mejor proveer dictado por la Comisión, obtener tres declaraciones de testigos que justifiquen los hechos en que se funda la demanda; y aunque se presentaron copias de asientos extendidos en el libro de expropiaciones que existe en la Alcaldía del Distrito de Candelaria, para comprobar el suministro, esos documentos no pueden ser apreciados, porque no son admisibles conforme al artículo 2.° de la Ley 44 de 1886, y la Gobernación del Cauca rehusó cambiarlos por certificaciones, por no ser recibos originales.

Por otra parte es inverosímil que habiéndose extendido diligencias pormenorizadas de la expropiación, lo que rara vez acontecía en la guerra citada, se diera también recibo al interesado, y esta presunción se confirma con la declaración de Luis Vicente Mazuera, quien al afirmar la exactitud de las expropiaciones en cuestión, dice que todo esto le consta porque los veintiséis novillos gordos de propiedad de Aramburo, que fueron tomados para el Gobierno, estaban en potrero del declarante, y había dado orden á su mayordomo exigiera los correspondientes recibos á cualquiera autoridad que tomara ganados de sus potreros, y que en esa virtud los recibos que dió el Alcalde pasaron por manos del absolvente, sirviéndole á éste de prueba de la expropiación respecto de la responsabilidad que como dueño de potrero tenía para con los dueños de ganados.

No es difícil, pues, que la admisión de pruebas de la clase de las aducidas en este expediente dé lugar á una reclamación doble, y por eso la ley ha exigido que para la expedición de las certificaciones por los Gobernadores, se presenten los recibos originales.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el Fiscal de la Comisión de suministros, confirma la resolución apelada.

Déjese copia de esta decisión, publíquese en la *Gaceta Judicial*, y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, treinta y uno de Octubre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Aquilino Ángel E., con poder de Julio Castro y Benicio Ángel, ante la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones demandó el reconocimiento y pago del crédito de cuatro mil novecientos veinticuatro pesos ($ 4,924), procedente de exacciones que sus poderdantes sufrieron en el curso de la guerra de 1884 á 1885, al tenor de las siguientes partidas:

Por empréstito que satisfizo Benicio Ángel en Manizales, en virtud del Decreto del Poder Ejecutivo nacional, que distribuyó una contribución de guerra en el extinguido Estado de Antioquia	$ 1,000
Entero hecho por Benicio Ángel en la Agencia Fiscal nacional, á cargo de Julio Betancourt	500
Entero hecho por Julio Castro en la misma Agencia Fiscal nacional por contribución de guerra.	1,000
Empréstito hecho por Benicio Ángel en la Provincia de Toro y expropiaciones que á este individuo se le hicieron	2,138
	$ 4,638

La referida Comisión administrativa, en resolución de veinticuatro de Abril de 1891, marcada con el número 3,180, reconoció solamente á cargo del Tesoro la cantidad de dos mil setecientos ochenta pesos ($ 2,780), en esta forma:

A favor de Benicio Ángel	$ 1,780
A favor de Julio Castro	1,000
	$ 2,780

Y absolvió al Tesoro del mayor valor demandado.

El Ministerio del Tesoro aprobó, con fecha veinticuatro de Agosto del mismo año, el fallo de la Comisión, y en consecuencia el apoderado de los interesados interpuso en tiempo el recurso de apelación para ante esta Superioridad, el cual le fué otorgado, remitiéndose, por tanto, el expediente para

que se surtiese la segunda instancia, en la parte desfavorable ó que no fué reconocida.

Repartido el asunto y sustanciado debidamente, la Corte pasa á resolver la apelación.

Como se ve, la suma de mil pesos ($ 1,000) que por contribución de guerra satisfizo Julio Castro, fué reconocida, de suerte que los demás créditos corresponden á Benicio Angel. La Corte se ocupará en el examen de las partidas que á Benicio Ángel no le fueron reconocidas; y como el total reclamado por éste asciende á tres mil novecientos veinticuatro pesos ($ 3,924), es menester hacer de dicho total la deducción de lo que en primera instancia resultó comprobado; esto es, la cantidad de mil setecientos ochenta pesos ($ 1,780), que procede de estas exacciones:

Empréstito que satisfizo al Prefecto del Departamento del Sur del extinguido Estado de Antioquia, Silverio Arango, según recibo de éste, que corre á fojas tres..... $	1,000
Entero verificado en la Agencia Fiscal nacional, en veintitrés de Abril de 1885, según recibo del agente Julio Betancourt, que corre á fojas 5	500
Y empréstito que satisfizo al Jefe municipal de Toro (Estado del Cauca), y que está comprobado por la atestación del señor Gobernador del Cauca, Juan de D. Ulloa, la cual figura á fojas 24.....	280
$	1,780

Resulta, pues, que el resto demandado por Benicio Angel, se refiere á los semovientes expropiados en la hacienda de "Arauca" y "Alejandría," y es el caso de examinar si las pruebas relativas á estas expropiaciones prestan mérito suficiente para hacer el respectivo reconocimiento.

En orden á las exacciones de los semovientes que se dice eran de la propiedad de Benicio Angel, la Corte, en auto para mejor proveer, dispuso que se librara despacho con el objeto de que declarasen con exactitud los testigos Hipólito Aguirre, José Vicente Arias y Bernardino García, sobre los hechos relativos á las expropiaciones de los expresados semovientes, con observancia de los requisitos que establece como indispensable la Ley 44 de 1886, toda vez que el crédito del valor de los mismos semovientes no fué reconocido por la Comisión administrativa, por no haberse observado en el acto de recibirse las declaraciones á los mencionados testigos aquellos requisitos.

Mas sólo pudo encontrarse á Hipólito Aguirre para que rindiera, como efectivamente rindió, una segunda declaración, en la cual expresó todas las circunstancias precisas para que tuviese mérito su testimonio; pues dió razón exacta de que de la hacienda llamada "Alejandría" expropiaron las autoridades del Distrito de Anserma-viejo (Departamento del Cauca) cuatro vacas y una yegua, las cuales estimó en treinta y dos pesos ($ 32) cada una de las primeras y cuarenta pesos ($ 40) la última.

Los testigos restantes, es decir, José Vicente Arias y Bernardino García, no fueron citados, por no habérseles hallado; y como el interesado no los reemplazó con otras personas, resulta que apenas existe en el expediente un testimonio singular que no constituye prueba suficiente.

El reclamante Benicio Angel, á virtud de disposición de la Corte, juró ante Juez comisionado, que la relación que había presentado oportunamente de los bienes que se le tomaron en la guerra de 1885 era fiel y exacta.

Por consiguiente, limitado el recurso de apelación que se interpuso contra lo resuelto por la Comisión administrativa á lo referente á las expropiaciones de los semovientes, porque todas las demás partidas de la reclamación fueron reconocidas en primera instancia; y no habiéndose acreditado con pruebas bastantes la verdad de las expropiaciones de dichos semovientes, no obstante las diligencias que se han practicado y el tiempo trascurrido, la Corte, adhiriéndose al último dictamen del Fiscal especial, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la resolución apelada.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Mariano de Jesús Medina.—Juan Evangelista Trujillo.—Lucas Villafrádez.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez y seis de Septiembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: El apoderado del representante de la Compañía minera de Colombia solicita que se revoque el auto de tres del mes en curso, por el cual se decidió no haber lugar á declarar desierto el recurso de casación interpuesto por la Compañía minera de Santander sobre derecho á la mina de "Las Animas."

Los argumentos en que se apoya la solicitud de revocación no tienen, en concepto de la Corte, mérito suficiente para destruír los fundamentos de la providencia mencionada.

La notificación del auto en que se mandó conferir traslado del proceso al recurrente no ha sido declarada nula por la Corte; lo que ella ha considerado en la decisión en cuestión, es simplemente que el término del traslado no empieza á correr á la parte sino desde la entrega del proceso cuando se ha omitido hacer la advertencia de que habla el artículo 1.° de la Ley 105 de 1890, porque esa advertencia tiene por objeto enterar á la parte de que tienen el expediente á su disposición, y si no se le hace debe entenderse, legalmente hablando, que ella no sabe cuándo puede sacar los autos de la Secretaría; porque de otro modo aquella disposición no tendría objeto. La ley, con razón ó sin ella, ha querido que no baste en estos casos una disposición general sobre cómputo de términos, y ha exigido que el Secretario advierta al interesado que está el proceso á su disposición.

Mas cuando á pesar de haberse omitido la advertencia, la parte se presenta y saca los autos, es natural que el término se cuente desde el recibo, porque éste suple y supera á la simple indicación de que puede llevarlo.

Y habiendo por lo menos una duda acerca del vencimiento del término perentorio que la ley otorga para la mejora del recurso, esa duda debe resolverse en el sentido de no declarar caducado el derecho de las partes á que se les oiga y venza por los medios ordinarios.

Aunque ha habido en la Secretaría la costumbre de omitir en las notificaciones la advertencia de que se trata, y aunque no se hubiera notado antes esta irregularidad, esto no es bastante para autorizar la falta de cumplimiento de la ley, y ya que llega el caso de advertirlo, la Corte cumple un deber al resolver que en lo sucesivo se cuide de atender á esa prescripción y que la omisión de ella impide la declaración de estar desierto el recurso.

Por tanto, no se accede á la anterior solicitud de revocación.

Notifíquese y publíquese este auto con el de tres del corriente á que se refiere.

LUCIO A. POMBO.—Isaza.—Casas Rojas.—Corrales.—Medina.—Trujillo.—Villafrádez.—*Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Septiembre veintidós de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Leonardo González, en su propio nombre, demandó ante el Juez 3.° del Circuito de Bogotá la nulidad de las cláusulas 2.ª y 6.ª del testamento otorgado por Dolores Cárdenas G., en cuatro de Mayo de mil ochocientos ochenta y ocho, bajo el número 583 ante el Notario segundo del mismo Circuito; y en caso de que así no se declarase, pidió fuese excluído de la sucesión de la dicha Dolores Cárdenas, y tenido como indigno de sucederle á Demetrio Rodríguez, contra quien se dirigió

la demanda, cuya cuantía se estimó en más de trescientos pesos.

Las cláusulas testamentarias cuya nulidad se demanda, dicen: "Segunda. Me hallo casada legítimamente con el señor Demetrio Rodríguez, y no tengo ascendientes ni descendientes legítimos ni naturales... Sexta. Del remanente de mis bienes, deducidos el crédito pasivo y el legado de que dejo hecha mención, instituyo por mi único heredero á mi citado esposo el señor Demetrio Rodríguez, á quien le encomiendo lo relativo á mi entierro, que se hará según los ritos de la Religión Católica, Apostólica, Romana, á cuya santa gracia me acojo; y le dejo, además, la tenencia de mis bienes."

Los hechos que se expusieron en la demanda para fundarla, son en resumen: Que la testadora no era mujer legítima de Demetrio Rodríguez, porque éste se había casado antes eclesiáticamente con Gerarda Duque, la cual existía, y por lo mismo no podía ser marido aquél de la testadora Dolores Cárdenas; que subsistiendo este vínculo anterior, Demetrio Rodríguez se había casado civilmente con Dolores Cárdenas González; que el demandado obtuvo de la testadora, con engaño, perfidia y dolo, la cláusula en que le instituyó heredero, asegurándole que era casado legítimamente con ella, y que como á su único esposo debía dejarle la herencia; que Dolores Cárdenas murió soltera y nunca fué casada; y que Demetrio Rodríguez Murcia no es la persona á quien aquélla llamó como heredero en su testamento, por no ser su esposo legítimo,

El demandado contestó conviniendo en el hecho de la institución de heredero, pero negando las consecuencias que de esa institución saca el demandante, como fundadas en erróneas apreciaciones. Negó también, en absoluto, el hecho segundo referente al engaño, perfidia y dolo que se le atribuye haber empleado para conseguir el ser instituído heredero.

Convino en que era cierto que en la designación de heredero no se había hecho uso del segundo apellido Murcia, sino que simplemente se había nombrado á Demetrio Rodríguez, agregándole el calificativo de esposo legítimo,

Este pleito fué definido en primera instancia por la sentencia de ocho de Noviembre de mil ochocientos noventa, declarando absuelto al demandado de todos los cargos de la demanda.

El Tribunal de Cundinamarca por vía de apelación declaró: 1.° Que era nulo y sin efecto el matrimonio celebrado por Demetrio Rodríguez con Dolores Cárdenas González ante el Notario 3.° del Circuito de Bogotá; 2.° No estar probada la acción de nulidad de las cláusulas segunda y sexta del testamento otorgado por Dolores Cárdenas; 3.° No estar probada tampoco la acción de exclusión é indignidad del heredero instituído; 4.° Absolver al demandado de los cargos de la demanda, y 5.° Expresar que así quedaba reformada la sentencia apelada.

Esta sentencia, que lleva fecha siete de Marzo de mil ochocientos noventa y uno, se notificó por edicto desfijado el primero de Abril del mismo año; por escrito del primero de Mayo se interpuso contra ella el recurso de casación, manifestando que el valor del pleito excedía en mucho de la cantidad de tres mil pesos, y ofreciendo determinar ante la Corte las causales del recurso. El Tribunal lo concedió sin que constara en parte alguna cuál fuese el interés del negocio, y esta circunstancia motivó la devolución del expediente al Tribunal cuando el recurso se hallaba sustanciado y en estado de dictar sentencia, para que se hiciera avaluar el interés del pleito. El proveído de esta superioridad fué cumplido por el Tribunal, y de las diligencias finales resulta que los peritos estimaron en más de tres mil pesos el interés del negocio, por lo que el expediente ha vuelto á la Corte para dictar la resolución que convenga. Desde luégo se observa que, para dar cumplimiento á lo dispuesto en el artículo 381 de la Ley 105 de 1890, es claro que el recurso se ha interpuesto por persona hábil y en oportunidad, y que la sentencia reúne los requisitos 1.° y 2.° del artículo 366 de la citada ley; pero resta examinar si puede aplicársele lo que en el ordinal 3.° del dicho artículo se prescribe.

De la relación que precede resulta que la absolución del demandado es absoluta y completa, tanto en la primera como en la segunda instancia, sin que obste el ser más explícita la sentencia de grado superior; pero esta circunstancia no amplía ni restringe lo resuelto en la primera instancia; de suerte que en cuanto á lo principal del pleito, es decir, á aquello que en la demanda se pidió, las sentencias son enteramente conformes. Debe, pues, verse ahora si hay contrariedad en las dichas sentencias en cuanto á la inteligencia ó aplicación de las leyes.

Arranca la parte expositiva de la sentencia del Tribunal del hecho indubitable para él, de ser nulo el matrimonio civil de la testadora, contraído con el heredero instituído por ella; pero considera que cuando la testadora dió en su testamento á Demetrio Rodríguez el título de marido legítimo, no incurrió en error de hecho sino de derecho, puesto que cuando se casaron civilmente, la ley reconocía este matrimonio como único legítimo; y si, por ministerio de las leyes de 1887, sobre validez de los matrimonios católicos, tal unión dejó de tener existencia legal ó nó, es mero punto de derecho, en cuya apreciación la testadora incurrió en error; pero que éste se refiere á la calidad del individuo instituído, mas no á la persona del mismo, y debe valer la institución conforme al artículo 1116 del Código Civil.

Las consideraciones de la sentencia de primera instancia parten de un punto enteramente opuesto al establecido por el Tribunal, esto es, que á pesar de las Leyes 57 y 153 de 1887, y 30 de 1888, subsistió el matrimonio civil de Demetrio Rodríguez con Dolores González con el carácter legítimo que antes tenía; pero coinciden enteramente con la doctrina sustentada por el Tribunal, en el supuesto de que tal matrimonio quedara anulado *ipso jure*, como lo dan á conocer los tres apartes de esta sentencia que en seguida se insertan:

"Como está demostrado, Demetrio Rodríguez, sí era legalmente esposo de la testadora, por lo cual ningún defecto tiene la cláusula sexta, pero suponiendo nulo el matrimonio, de ahí no resulta que sea nula la referida cláusula, porque la testadora no tenía herederos forzosos, y podía instituír á quien quisiese, y porque la ley no prohíbe dar á una persona un calificativo que no tiene. De manera que al calificar la testadora á Rodríguez como su esposo, sin serlo, no violó ley prohibitiva ninguna, y por consiguiente apenas aseveró una cosa falsa pero no ejecutó un acto nulo.

"¿Y de que Demetrio Rodríguez no fuera esposo de la testadora resulta nulidad en la institución? En manera alguna, porque la designación de esposo que la Cárdenas dió á Rodríguez fué, como se ve, de un modo claro, una explicación ó demostración ó indicación precisa del individuo á quien la testadora tenía voluntad de dejar sus bienes; pero no una razón, una causa de la institución.

"Pudo, pues, la testadora errar en la calidad de asignatario; pero ese error no vicia la asignación (artículo 1116 del Código Civil). Y no se diga que había duda en la persona, porque es incuestionablemente claro que la testadora se refirió á Demetrio Rodríguez, que contrajo con ella matrimonio civil ante el Notario 3.°, al que vivió con ella maritalmente por largos años, al que con razón ó sin ella consideraba su esposo."

La cuestión única en que las dos sentencias discrepan, es como queda expuesto, la de si el matrimonio civil de la testadora con Demetrio Rodríguez es ó no nulo subsistiendo un vínculo anterior contraído con arreglo á las prácticas de la Religión Católica; pero bien se ve que la solución de esta cuestión es completamente impertinente para resolver el punto sustancial de la demanda, cual es si la institución de heredero es ó no nula; punto que, preciso es repetirlo, las dos sentencias resuelven de la propia manera, fundadas en unas mismas razones legales.

La demanda pidiendo la nulidad de la cláusula segunda del testamento no incluía la solicitud de declarar válido ó no el acto á que ella se refire, pues lo que debía resolverse era solamente si las declaraciones que un testador hace en su testamento para dar á conocer su identidad personal, por disposición del artículo 1073 del Código Civil, son anulables ó no.

Como no se trata en esta causa de demandar ningún de-

recho que emane de la validez ó nulidad del citado matrimonio, ni directamente se ha demandado la nulidad del mismo, sería extemporáneo el que la Corte entrara á calificar cuál es la doctrina correcta acerca de ese capítulo que el Tribunal resolvió de oficio, si la sostenida por el Juez ó la expuesta por el Tribunal; pues es claro que, si la Corte tiene el deber de fijar la doctrina legal más correcta en que las sentencias se hallen discordantes, es meramente aquella que sea indispensable para decidir los derechos controvertidos, pero no todas las opiniones inconducentes para el mismo objeto.

Por lo expuesto, y no habiendo otro punto en que haya contrariedad, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por parte de Leonardo González, contra la sentencia de siete de Marzo del año próximo pasado, dictada por el Tribunal de Cundinamarca en el pleito mencionado, por no hallarse en el caso del ordinal 3.° del artículo 366 de la Ley 105 de 1890, y se dispone devolver el expediente.

Notifíquese, cópiese é insértese en la *Gaceta Judicial*

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintiocho de Septiembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Gabriel y Jacinto Arboleda, vecinos de Popayán en nombre propio, y el primero, además, como apoderado del doctor Cecilio Cárdenas, vecino de Bogotá, ocurrieron en dos de Agosto de mil ochocientos ochenta y ocho al Juez de lo civil del Circuito de Popayán, en el Departamento del Cauca, estableciendo demanda ordinaria con acción reivindicatoria ó de dominio contra Leonardo Modaffari, "vecino de la misma ciudad de Popayán, para que se le obligue á entregarles una pieza del piso alto de la casa que fué del señor José Tenorio, y está situada á la parte occidental de la casa que frente al palacio episcopal de este lugar tiene el expresado Modaffari; y además al pago de los arrendamientos de dicha pieza, desde el año de 1884 hasta la fecha, á razón de un peso mensual; pues la enunciada pieza nunca perteneció á la casa que hoy posee el demandado, sino á la contigua, que fué de propiedad del señor José Tenorio."

En el libelo de tal demanda expresaron los demandantes que: "La pieza la estimo (estimamos debió decirse) en seiscientos pesos fuertes, que unidos á los sesenta de los alquileres forman la suma de seiscientos sesenta pesos, valor de la acción principal de la demanda."

Y después de determinar los hechos fundamentales de la acción concluyen los actores el referido libelo de este modo: "Pedimos al señor Juez dé el curso legal á esta demanda, y condene en definitiva al señor Leonardo Modaffari á la devolución de lo que demandamos y á los alquileres vencidos y demás prestaciones posesorias, calificándolo al efecto como poseedor de mala fe, pues que ningún título ha tenido."

Conferido traslado de la demanda á Leonardo Modaffari, Leonidas Sarmiento, como apoderado del demandado, dió contestación derecha á la acción intentada, diciendo que en nombre de su constituyente, según el poder presentado, negaba y contradecía en todas sus partes la demanda, y por tanto pidió que el Juzgado absolviera á su poderdante, disponiendo que la pieza objeto de la acción corresponde á éste en propiedad y posesión, y condene al pago de las costas á los actores.

Denunció también dicho apoderado el pleito á María Josefa Guevara y Córdoba, quien vendió á Modaffari la casa que actualmente posee, para que se notificara á la referida señora la demanda que origina este pleito, con la advertencia de que su constituyente, sin perjuicio de la denuncia del pleito, se reserva su intervención en la litis, haciendo uso de los derechos que la ley le concede.

Por último, propuso, para mayor abundamiento en el derecho que asiste á su poderdante Modaffari sobre la pieza mencionada, la excepción perentoria de prescripción.

Pendiente la sustanciación de la demanda arriba expresada, Gabriel Arboleda, con poder de Juliana Torres, Eusebia Torres de Arboleda, Eulalia Cárdenas y Juana Cárdenas, la segunda viuda y las demás solteras, mayores de edad y vecinas de Bogotá, según el poder que éstas le confirieron por escritura pública número 120, otorgada con fecha veintiocho de Enero de mil ochocientos ochenta y nueve ante el Notario 2.° del Circuito del mismo nombre, instauró ante el Juez del Circuito de Popayán contra Leonardo Modaffari "la acción reivindicatoria ó de dominio de la referida pieza alta que servía de cocina á la casa grande que era de D. José Tenorio, y que el señor Manuel Antonio Arboleda remató para las susodichas señoras; y en consecuencia demandó á Leonardo Modaffari, para que con audiencia de éste se declare en sentencia definitiva:

"Primero. Que la referida pieza alta usurpada por el señor Modaffari pertenece proindiviso á mis poderdantes y demás condueños de la casa grande tántas veces mencionada de que dicha pieza hace parte;

"Segundo. Que el señor Modaffari debe, en consecuencia, entregar ó restituír esa pieza á mis poderdantes y demás condueños de dicha casa grande;

"Tercero. Que el señor Modaffari debe indemnizar á los dueños de la pieza que hà usurpado, de los deterioros que ella haya sufrido por culpa de él;

"Cuarto. Que el mismo señor Modaffari debe restituír á los dueños de la pieza, como poseedor de mala fe que es, los frutos que ella haya producido desde que la ocupó hasta el día que la entregue á sus dueños; y

"Quinto. Finalmente, que el demandado debe pagar á los dueños de la expresada pieza por razón de frutos la cantidad en que éstos se estimen en el juicio."

Esta segunda demanda la fundó el actor, en representación de sus poderdantes, en los hechos siguientes:

"Primero. Que la pieza que se reivindica hace parte de la casa de que mis poderdantes son condueños, que es, según se ha dicho, la que era de D. José Tenorio y que remató D. Manuel Antonio Arboleda el treinta y uno de Julio de mil ochocientos cuarenta y cinco para los señores Juliana, Eusebia, Martina, Epifanio y Teresa Torres.

"Segundo. Que dicha pieza no fué ocupada por la señora María Antonia Córdoba ni por María Josefa Guevara y Córdoba en los trece años que dichas señoras poseyeron la casa que vendió á la primera el doctor Cecilio Cárdenas.

"Tercero. Que el señor Leonardo Modaffari ocupó por fuerza dicha pieza, rompiendo la pared que la separaba de la casa que compró la señora del mismo Modaffari á la señora María Josefa Guevara y Córdoba, la cual casa pertenece, por consiguiente, á la sociedad conyugal de que el mismo señor es representante."

Agregó el demandante que estimaba la cuantía de la demanda en más de quinientos pesos.

Esta segunda demanda fué acumulada á la primera que entablaron Gabriel y Jacinto Arboleda y Cecilio Cárdenas, por ser una misma la acción reivindicatoria de la pieza que servía de cocina en la casa de D. José Tenorio, y ser igualmente el mismo demandado; por lo que producidas las pruebas que cada parte creyó convenientes, se puso término á la primera instancia con la sentencia que profirió el Juez del conocimiento en siete de Julio de mil ochocientos noventa y uno, declarando:

"1.° El demandado señor Leonardo Modaffari, es poseedor de mala fe de la pieza demandada, puesto que la ha poseído sin título alguno justo; 2.° dicho señor Modaffari debe entregar al demandante la pieza demandada, dentro de tercero día de notificada esta sentencia; 3.° el demandado restituirá los frutos naturales y civiles de la pieza, desde el día en que la ocupó, hasta el en que la entregue, en los términos indicados en el artículo 964 del Código Civil; y como no se ha probado la cantidad de esos frutos, se hará en juicio separado; 4.° no está probada la excepción de prescripción."

Publicada dicha sentencia y notificada personalmente á las partes, Leonardo Modaffari, como demandado, interpuso contra el fallo el recurso de apelación, que le fué concedido; y pasado el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, éste, una vez surtida la tramitación prescrita para la segunda instancia, pronunció, en quince de Diciembre de mil ochocientos noventa y uno, la sentencia definitiva que en su parte resolutiva es del tenor siguiente:

"El Tribunal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca la sentencia apelada y declara que la pieza que ha dado lugar á esta litis no corresponde á la parte demandante. Sin costas."

Esta sentencia se notificó á Leonardo Modaffari y á Carlos M. Busto, como apoderado sustituto de alguno de los demandantes, y como el expediente permaneció en la Secretaría del Tribunal por el término de treinta días que prefija la Ley 105 de 1890, Jacinto Arboleda, uno de los que como actor inició el primer juicio de reivindicación de la pieza aludida, presentó en la misma Secretaría, el once de Enero del corriente año de 1892, un escrito por medio del cual interpuso el recurso de casación que concede la referida Ley 105, para ante esta Superioridad, contra ciertas sentencias que pronuncian en segunda instancia y en negocios ordinarios civiles los Tribunales Superiores de Distrito; manifestando al propio tiempo que habiendo dudas acerca de la cuantía del negocio, complicado hoy extraordinariamente con las servidumbres de luz, vista etc., que la sentencia del Tribunal impone de un modo indirecto sobre la casa contigua, se nombrara peritos que fijasen previamente la cuantía.

El Tribunal, de acuerdo con la solicitud mencionada, dispuso que el expediente se pasara á la mesa del Magistrado sustanciador, con el fin de que por éste se designasen los peritos que estimaron la cuantía del pleito.

El Tribunal se fundó para ello en estas consideraciones:

Que en realidad hay dudas acerca de la cuantía del negocio que ha sido por él fallado, porque ha versado sobre la propiedad de la pieza de una casa, y que esa circuntancia podía dar á aquélla un valor relativo que no tendría si estuviese aislada; porque de la fecha de la demanda á la de la interposición del recurso de casación, la propiedad raíz ha aumentado de valor, y por que habiéndose declarado que dicha pieza pertenece al demandado, queda sobre la casa de los demandantes, como consecuencia de la sentencia, la servidumbre de vista, que también tiene su valor apreciable en dinero, sin que obste á todo esto la fijación del monto del pleito hecha por el actor en su primer libelo, pues apenas se dijo por el apoderado de los demandantes en la segunda demanda acumulada á la primera, que estimaba la cuantía de la demanda en más de quinientos pesos.

Nombrados Apolinar Ruiz Manzano y Evaristo Rebolledo, peritos avaluadores, éstos, previa la prestación del juramento del caso, emitieron su dictamen á este tenor:

"1.° Atendiendo al alto precio que actualmente tienen en la ciudad los materiales de construcción, el salario de los obreros y el mayor costo que siempre resulta al edificar en lo alto que en lo bajo, calculamos que la pieza disputada, tomando en cuenta el estado del enmaderado del techo, no costaría hoy menos de dos mil cuatrocientos pesos ($ 2,400); 2.° arrendamientos de la misma pieza en ocho años cuatro meses, computados á un peso mensual, conforme á la demanda, aunque vale mucho más, cien pesos ($ 100); 3.° la especialidad que tiene la pieza en cuestión de estar situada al extremo de la casa del señor Modaffari, y también de la otra, la que fué de D. José Tenorio, hace que sea la única aparente para prestar el servicio de cocina en esas casas de alto, de manera que el humo y olores de aquélla no alcancen á invadir las otras piezas habitables, circunstancias que da á dicha pieza un mayor valor relativo, especialmente para la segunda de las casas nombradas, y cuyo mayor valor relativo estimamos en quinientos pesos ($ 500); 4.° si la misma pieza queda, como está hoy, con la servidumbre de vista por las dos ventanas de ella, de donde se registran el solar, la alberca ó fuente de agua, el patio y corredores, y aun piezas de alto y bajo de la casa que fué de D. José Tenorio, con el inconveniente de no poderse concluír la claustrada del patio, porque el edificio que se construyera impediría la servidumbre de luz que entra por una de las ventanas de dicha pieza, esas servidumbres al declararse la pieza como perteneciente á la casa del señor Modaffari, harían desmerecer la otra casa, que fué de D. José Tenorio en un veinticinco por ciento, que lo estimamos en dos mil pesos ($ 2,000)."

El Tribunal Superior, en vista del dictamen pericial, concedió el recurso de casación interpuesto por Jacinto Arboleda; y venido todo lo actuado á la Corte Suprema, se ha sustanciado dicho recurso por los trámites que establece la citada Ley 105 de 1890, hasta adelantar el asunto y ponerlo en estado de dictarse en él la resolución que corresponde.

Conforme al artículo 381 de la susodicha ley, la Corte antes de pronunciar sentencia, tiene el deber de examinar si el recurso fué interpuesto oportunamente y por persona hábil, y si la sentencia recurrida es de aquéllas contra las cuales puede interponerse el recurso de casación, conforme á lo establecido en el artículo 366 y sus concordantes de la propia ley. Según estas disposiciones es indispensable que en el juicio á que aluda el recurso coexistan tres circunstancias, á saber: 1.ª que la sentencia se funde ó deba fundarse en leyes que rijan ó hayan regido en toda la República, á partir de la vigencia de la Ley 57 de 1887; ó que se funde ó deba fundarse en leyes de los extinguidos Estados que sean idénticas en esencia á las nacionales que estén en vigor; 2.ª que la sentencia verse sobre hechos relativos al estado civil de las personas, ó sobre intereses particulares en que la cuantía del juicio sea ó exceda de tres mil pesos, y 3.ª que haya contrariedad en las sentencias de primera y segunda instancia en cuanto á la inteligencia y aplicación de las leyes en que se apoyan, ó en cuanto á lo principal del pleito.

Sin entrar la Corte en el examen de la tercera circunstancia de las mencionadas, observa que respecto de la primera, la sentencia materia del recurso se funda en leyes del extinguido Estado del Cauca, que son idénticas á las nacionales que están en vigor; pues el contrato de venta celebrado por María Josefa Guevara y Córdoba, viuda, con Gertrudis Salazar, consorte de Leonardo Modaffari, en diez y seis de Junio de 1880, quedó sometido á la legislación caucana que regía en dicha fecha (fojas 30 del cuaderno principal); y en cuanto á la segunda circunstancia, aunque el juicio no versa sobre el estado civil de las personas, y sí sobre intereses particulares la cuantía del juicio no alcanza á la suma de tres mil pesos.

Ya la Corte tiene sentada la doctrina de que la cuantía de un juicio, para el efecto de interponerse y admitirse el recurso de casación, la establece una por lo menos de las circunstancias que pasa á mencionar:

O el valor conocido de la cosa que se controvierte; ó la estimación que el actor haga de la demanda ó acción en el mismo libelo en que la instaura, sin objeción ó contradicción del demandado, como éste puede hacerlo; ó la estimación pericial que se hiciere en los casos de contradicción ó de duda.

En el juicio fallado por el Tribunal Superior de Popayán, que es materia del presente recurso de casación, interpuesto por Jacinto Arboleda, uno de los demandantes, la Corte, para conocer de un modo evidente si la cuantía de la acción alcanza á $ 3,000 por lo menos, debe atender no sólo al ánimo que tenían los demandantes al instaurar las dos demandas acumuladas, y á lo que se propusieron obtener por medio de una decisión judicial definitiva, sino á la estimación que los actores expresaron en los respectivos libelos de demanda.

En cuanto á la que iniciaron Gabriel y Jacinto Arboleda, en su propio nombre, y el primero como apoderado de Cecilio Cárdenas, el ánimo de éstos fué reparar la pérdida que en su concepto sufrirían si Leonardo Modaffari continuaba en la posesión ó tenencia de la pieza alta, que los citados demandantes consideraban como suya, por el hecho de haber formado dicha pieza parte de la casa que correspondió á José To-

norio en años anteriores; y el objeto con que establecieron su demanda fué reivindicar la propiedad que los mismos demandantes proindiviso con otras personas tenían adquirida, en su opinión con justo título.

La estimación que hicieron estos demandantes en la suma de seiscientos pesos ($ 600), se refería al valor actual de la pieza disputada y á la acción de dominio que entablaban; y los $ 60 agregados á aquella cantidad provenían del importe de los arrendamientos de la referida pieza en cinco años trascurridos hasta la fecha de la demanda, al respecto de $.12 anuales.

Cuando se estima en determinada cantidad una acción que se instaura, se tiene en cuenta por la parte actora lo que vale, en su concepto, la cosa ú objeto que reclama, ó lo que es igual, el valor que perdería el mismo actor en el caso de decidirse el pleito en favor del demandado.

Concretando esta doctrina al caso presente, los demandantes estimaron en $ 600 el valor actual de la pieza, porque una cantidad exactamente igual perderían si por sentencia definitiva se declarase que dicha pieza hubiera de corresponder á Leonardo Modaffari ó á la sociedad conyugal de que es administrador.

Pasa la Corte á averiguar si en la segunda demanda concurren las propias circunstancias que en la primera.

Según la parte petitoria del escrito de demanda incoada por Gabriel Arboleda, como apoderado de Juliana Torres, Eusebia Torres de Arboleda, Eulalia Cárdenas y Juana Cárdenas, aquél demandó lo siguiente:

"Primero. Que la referida pieza alta ocupada por el señor Modaffari, pertenece proindiviso á mis poderdantes y demás condueños de la casa grande tántas veces mencionada (la que fué de D. José Tenorio) de que dicha pieza hace parte;

"Segundo. Que el señor Modaffari debe, en consecuencia, entregar ó restituír esa pieza á mis poderdantes y demás condueños de dicha casa grande;

"Tercero. Que el señor Modaffari debe indemnizar á los dueños de la pieza que ha usurpado, de los deterioros que ella haya sufrido por culpa de él;

"Cuarto. Que el mismo señor Modaffari debe restituír á los dueños de la pieza, como poseedor de mala fe que es, los frutos que ella haya producido desde que la ocupó hasta el día que la entregue á sus dueños, y

"Quinto. Finalmente, que el demandado debe pagar á los dueños de la expresada pieza, por razón de frutos, la cantidad en que éstos estimen en el juicio."

Como se ve, esta segunda demanda fué dirigida á obtener lo mismo que la primera, esto es: á obligar á Leonardo Modaffari á devolver ó restituír la pieza cuya propiedad se ha debatido y á satisfacer á los demandantes los frutos correspondientes.

Como los frutos demandados no pertenecen á la categoría de naturales ni á la de industriales, sino á los frutos civiles, en consideración á la especie de la finca que ha sido objeto de la controversia; y por otra parte, en ninguno de los libelos de demanda se ha hecho mención de que el demandado Modaffari tuviera recibidos de otra persona frutos que dicha finca raíz hubiera producido, sino que en ambas demandas sólo se trata de los arrendamientos ó alquileres que según los demandantes son de cargo del demandado Modaffari, desde que ocupó por la fuerza la pieza aludida hasta que la entregue en virtud de sentencia que así lo disponga, parece claro que demandar á la vez de Modaffari la restitución de frutos y *también el pago del importe de los arrendamientos* de la pieza que se asegura sirvió de cocina en la casa que fué de José Tenorio, es, en sustancia, pedir una misma cosa; y se comprende que por el estado ruinoso en que se hallaba la pieza disputada, antes de ser enajenada á Gertrudis Salazar, esposa de Modaffari, la casa pequeña, y por el precio de los alquileres, según las demandas, que la cuantía de los frutos no puede exceder de cien pesos en los ocho años cuatro meses vencidos. Cierto es que los primeros demandantes sólo exigen el valor de los arrendamientos de la pieza citada en cinco años, y que los últimos demandantes extienden la demanda, en cuanto á alquileres, á los vencidos y que se vencieran hasta la fecha de la restitución; pero esta ampliación no aumenta la cuantía fijada por los primeros demandantes sino en ochenta y cuatro pesos ($ 84), que con el mínimo de la cuantía de la acción fijado por los segundos demandantes en quinientos pesos ($ 500) componen la cantidad de seiscientos cuarenta y cuatro pesos ($ 644), menor todavía que la de seiscientos sesenta pesos ($ 660).

También es cierto que los últimos demandantes pidieron indemnización por los deterioros que hubiera sufrido la pieza que reclama como de su propiedad; pero consta de lo actuado que la mencionada pieza, lejos de haber sufrido deterioros, ha sido refeccionada por Modaffari; y en caso de duda se debe considerar incluído en el valor de la pieza fijado en la primera demanda lo que importaron los deterioros de aquélla.

Por último, se observa que los peritos nombrados por el Tribunal Superior de Popayán, con el fin de fijar la cuantía de la acción, no obstante que ella fué fijada por los demandantes, extralimitaron su encargo, pues entraron á apreciar el aumento de valor que llegaría á tener la pieza referida, por razón de las servidumbres de luz y de vista que aparecían constituídas, á consecuencia de las refecciones y variaciones verificadas por Modaffari en la misma pieza. Y como las demandas no han versado sobre dicho capítulo, es decir, sobre servidumbres, éstas, en caso de existir constituídas, no han sido materia de debate en el juicio fallado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Popayán.

La Corte, en atención á todo lo que queda expuesto, considera que la cuantía de este pleito no llega á componer la suma de tres mil pesos ($ 3,000); sea que se considere el valor de la pieza fijado por los demandantes; sea que se agregue el importe de los arrendamientos calculados en las demandas y por los peritos nombrados por el Tribunal á razón de un peso mensual ó de doce pesos anuales, la estimación hecha de la pieza aludida por los mismos demandantes del valor que ella tenía en la fecha en que las demandas se instauraron, y nó la estimación pericial, porque ésta se refirió á la fecha en que los peritos rindieron su dictamen; y en fin, sea que al total de esas dos partidas (las de los alquileres y del valor de la pieza) se agregaran á los quinientos pesos ($ 500) que por razón de deterioros determinaron los peritos.

Para la Corte no tiene valor el dictamen pericial, en lo que se refiere á los puntos marcados con los números 1.°, 3.° y 4.°, porque, como ya se ha expuesto, los peritos apreciaron la pieza por lo que en la fecha de su dictamen valía la pieza, y nó por el que había tenido cuando se propuso la demanda; porque la especialidad de la situación de dicha pieza á que hacen referencia los peritos en el número tercero, debieron tenerla presente los demandantes al fijar el valor de dicha pieza; y porque esto mismo que se acaba de exponer debieron conocerlo los actores; esto es, lo que se relaciona con las servidumbres de que no hicieron mérito en sus respectivas demandas.

En consecuencia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, se resuelve que no se admite el recurso de casación interpuesto por Jacinto Arboleda, en su propio nombre, como uno de los demandantes, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, el quince de Diciembre de mil ochocientos noventa y uno, en el pleito tántas veces mencionado.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial*, y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL EZEQUIEL CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

IMPRENTA DE ANTONIO M. SILVESTRE.
Director, Tomás Galarza.

REPÚBLICA DE COLOMBIA.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AÑO VIII | Bogotá, 15 de Enero de 1893. | NÚM. 366.

CONTENIDO.

Págs.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

La que reconoce á Lucio Franco un crédito por expropiación. (Magistrado ponente, doctor Trujillo)..... 17
La que reconoce á Rafael María Rizo un crédito por empréstito. (Magistrado ponente, doctor Pombo) 17
La que concede á Lisandro Sánchez una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas)..... 18
La que reconoce á Guillermo Vila un crédito por empréstitos. (Magistrado ponente, doctor Trujillo)..... 18
La que concede á David Bravo una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Villafrádez)..... 19
La que niega á Dolores Quijano Córdoba una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Isaza)..... 19
La que concede á Abraham Acevedo una pensión. (Magistrado ponente, doctor Medina) 19
La que concede á Isidora Angel una recompensa (Magistrado ponente, doctor Pombo)..... 20
La confirmatoria de la resolución dictada por el Ministerio del Tesoro en la reclamación de Pedro P. Bello, por expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Villafrádez)..... 20
La que concede á Pioquinto Bedoya una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Villafrádez)..... 21
La que concede á Inés Martínez Ledesma una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas)..... 21

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Auto que declara desierto el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Antioquia, en el juicio seguido por José Emeterio Moreno contra la sucesión de Jacoba Arboleda. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas)..... 22
El que declara inadmisible el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Tunja, dictada en el juicio de tercerías opuestas al ejecutado, seguido por Ignacio Sáenz de San-Pelayo contra Antonio Sáenz A. (Magistrado ponente, doctor Corrales)..... 22
Auto en el cual se abstiene la Corte, por incompetencia, de conocer en la ejecución seguida por el Administrador de Hacienda de la Provincia de Guaduas contra Tomasa Montealegre. (Magistrado ponente, doctor Medina) 23
En el cual declara inadmisible el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Cundinamarca, dictada en el juicio seguido por Manuel María Zaldúa contra Julio Dupuy, por nulidad de una escritura pública. (Magistrado ponente, doctor Isaza)..... 23

GACETA JUDICIAL.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Octubre primero de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: La Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones en resolución número 3,135, de primero de Octubre de mil ochocientos noventa y uno, negó la reclamación hecha por Lucio Franco, para que se le pague la cantidad de ochocientos cuarenta pesos ($ 840), valor de ocho mulas y un caballo que las autoridades nacionales le tomaron en la guerra de 1885, para el servicio del Ejército del Gobierno. El Ministerio del Tesoro aprobó esa providencia el diez de Octubre del mismo año en resolución que lleva el número 2,478, que ha venido en apelación á esta Superioridad, en donde se le ha dado al negocio la tramitación debida.

La Comisión fundó su negativa en que habiéndose tratado de comprobar el crédito por medio de declaraciones de testigos, las personas llamadas á deponer sobre la verdad de la expropiación, no estaban abonadas como idóneas por el Ministerio público, y no habían dado la razón de sus dichos.

La Corte, por auto para mejor proveer, ordenó se volvieran á recibir las declaraciones con todas las formalidades legales y que el Fiscal certificara sobre la habilidad de los testigos.

Cumplida esa orden, se encuentran en el expediente tres declaraciones de testigos presenciales que afirman la verdad de la expropiación, de los cuales; dos dicen que las mulas fueron avaluadas á cien pesos ($ 100) cada una y el caballo en cuarenta pesos ($ 40).

En mérito de lo expuesto y de que el reclamante presentó oportunamente la relación jurada, según se puede ver al folio 7 del proceso, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca las providencias apeladas y reconoce á cargo de la Nación y á favor de Lucio Franco, vecino de Medellín, el crédito de ochocientas cuarenta pesos ($ 840).

Notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia. —Bogotá, Octubre tres de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: La Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, por resolución de fecha veintidos de Junio último, número 3,829, negó el reconocimiento del crédito de cuatrocientos sesenta pesos ($ 460) reclamados por Rafael M. Rizo, como procedentes de empréstitos hechos al Gobierno durante la guerra de 1876 á 1877. El Ministerio del Tesoro confirmó dicha resolución por la que dictó bajo el número 3,115 el seis de Agosto próximo pasado, y establecido el recurso de apelación para ante la Corte, se procede á resolverlo.

El reclamante presentó, en comprobación de su derecho, los siguientes documentos:

Tres recibos del Administrador subalterno de Hacienda nacional de Ocaña, expedidos, uno en treinta de Septiembre de mil ochocientos setenta y seis, por..... $ 60
Otro, en cuatro de Abril de mil ochocientos setenta y siete, por..... 200
Y otro, en veinte de Julio de mil ochocientos setenta y siete, por..... 50

$ 310

Se presentó, además, una atestación del Jefe departamental de Ocaña, que no es propiamente recibo, pues se reduce á afirmar que Rizo había comprobado la consignación de ciento cincuenta pesos ($ 150) en la Administración de Hacienda; pero como este hecho está desmentido por el mismo Administrador, tal documento no tiene fuerza alguna.

En cuanto á los tres recibos enumerados, ellos han sido

reconocidos por el Administrador que los expidió, Emeterio J. Torrado, declarando ser cierto su contenido; y acreditado como está con el certificado del actual Administrador, que Torrado desempeñó el mismo empleo en los años de 1876 y 1877, tales recibos no pueden ser desechados, pues que, como lo dice el señor Fiscal de la Comisión, tienen el carácter de documentos auténticos, toda vez que fueron extendidos por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, sin que hayan sido redargüidos de falsos. En cuanto al argumento de no aparecer comprobado que Torrado rindiera cuenta á la Oficina respectiva de tales ingresos, la falta de ese comprobante respecto de sumas recaudadas en la guerra de 1876 á 1877, no infirma la autenticidad de los recibos y su fuerza probatoria.

Por tanto, la Corte Suprema, de acuerdo con el concepto del señor Fiscal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca la resolución apelada y reconoce á cargo del Tesoro nacional y á favor de Rafael María Rizo, ó de su apoderado Andrés Lara, la cantidad de trescientos diez pesos ($ 310) que ha acreditado consignó como empréstito al Gobierno en 1876 y 1877. Absuélvese á dicho Tesoro del mayor cargo reclamado.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial*, dése cuenta al Ministerio del Tesoro y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA. — JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Octubre tres de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Como Cabo 2.° del *Batallón 13 de Junín*, Lisandro Sánchez, hacía en veinte de Julio de mil ochocientos noventa, parte de la fuerza pública encargada de dar en la plaza de Popayán salvas de artillería, en celebración del aniversario de la Patria; y á causa de un disparo de cañón, sufrió en la mano y brazo derechos una lesión, en virtud de la cual ha perdido completamente el uso de dicha mano. Y pensando que este hecho es causal suficiente para demandar recompensa militar del Tesoro público, ha intentado, por medio de apoderado, la presente demanda, á la cual ha acompañado los siguientes documentos:

1.° La diligencia que corre al folio 4.° del expediente, en la cual consta que los profesores en medicina, doctores Domingo Cajiao C., Domingo Arboleda y Juan N. Wallis O., nombrados por el Gobernador del Cauca para que de conformidad con el artículo 17 de la Ley 84 de 1890, practicaran en Sánchez el reconocimiento necesario para averiguar si en efecto existía en él la invalidez en que funda su acción, se reunieron en Popayán el veintidos de Febrero de mil ochocientos noventa y uno, y después de examinar al expresado Sánchez, expusieron: "Que han hallado que dicho señor tiene una cicatriz viciosa producida por una quemadura con pólvora de cañón, la cual destruyó los tejidos hasta dejar la mano en flexión, los dedos en forma de garra y por consiguiente, inhábiles para servirse en absoluto de ella; que este individuo está, pues, inválido de por vida para servirse de la mano derecha. Preguntado Lisandro Sánchez por el señor Gobernador, cuándo, en dónde y por qué causa fué herido, respondió: Que fué herido el veinte de Julio de mil ochocientos noventa, en la plaza pública de esta ciudad, porque habiéndose sacado á ella la artillería, con el fin de solemnizar la fiesta de ese día, al tacar el cañón, junto con otro artillero, se incendió la pólvora y le causó la herida que se le ha reconocido. Preguntado si después de eso ha podido trabajar como antes, respondió que no, porque tiene inutilizada la mano derecha y sufre además del pecho y de la vista."

2.° Las declaraciones que ante el Juez del Circuito en lo civil de Popayán, y con intervención del Ministerio Público, rindieron en Junio del presente año los testigos Comandante Ernesto Borrero, Adolfo Buitrago, Pedro Carrillo, Jenaro Castro y Miguel Velasco V., con las cuales se acreditan plenamente los hechos de la demanda, á saber: el que Lisandro Sánchez, en empleo de Cabo 2.° hacía parte de la batería que celebró en Popayán la fiesta de la Independencia nacional el 20 de Julio 1890; y que allí sufrió la lesión que, inutilizándole la mano derecha, fué motivo de que se le diese de baja, razón por la que ha quedado sin colocación ni medios de subsistencia;

3.° La certificación expedida á veintiocho de Julio del presente año, por el Coronel efectivo con grado de General y primer Jefe del *Batallón 13 de Junín*, Eduardo París, en la cual se da fe de los mismos hechos;

4.° La filiación del soldado Lisandro Sánchez, que en copia auténtica le fué expedida de la diligencia que existe en el libro respectivo, y que sirve para establecer la identidad del peticionario, y su carácter militar;

5.° La certificación en que el señor Ministro del Tesoro afirma que el mencionado demandante no ha recibido hasta ahora recompensa alguna del Tesoro público.

Estos documentos demuestran plenamente que el Cabo 2.° Lisandro Sánchez, se halla en el caso que determinan los artículos 5.° (inciso 8.°), 9 y 19 de la Ley 84 de 1890; y en consecuencia, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, declara que dicho Sánchez tiene derecho á una recompensa unitaria definitiva de trescientos sesenta pesos ($ 360), que se le pagarán del Tesoro público.

Notifíquese, cópiese, publíquese, dése el correspondiente aviso á Su Señoría el Ministro de Guerra y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Octubre cuatro de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Guillermo Vila ocurrió á la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, para que se le mande pagar del Tesoro nacional la cantidad de cinco mil cuatrocientos cuarenta y un pesos ($ 5,441), suma en que estima los empréstitos y expropiaciones con que fué gravado por el Gobierno durante la última guerra de 1885. La Comisión sólo reconoció mil doscientos cincuenta pesos ($ 1,250) y absolvió á la Nación del resto, en resolución número 3,714, de veintiuno de Mayo de mil ochocientos noventa y uno, que fué aprobada por el Ministerio del Tesoro en el mes de Julio siguiente, en providencia que lleva el número 3,052, que ha venido en apelación á esta Superioridad.

La cantidad de cinco mil cuatrocientos cuarenta y un pesos ($ 5,441) la forman las partidas de mil seiscientos cuarenta pesos ($ 1,640), proveniente de empréstitos, y tres mil ochocientos un pesos ($ 3,801), importe de expropiaciones de semovientes hechas á Vila. La suma de mil doscientos cincuenta pesos ($ 1,250) que reconoció la Comisión, pertenece íntegramente á la primera partida relativa á los empréstitos, de los cuales no admitió trescientos noventa pesos ($ 390) que están representados por un recibo de trescientos pesos ($ 300) extendido en Ibagué el cinco de Marzo de mil ochocientos ochenta y cinco por Juan Nepomuceno Lozano, como Intendente general del Ejército de operaciones al Occidente de la República, y dos certificados por valor de noventa pesos ($ 90), expedidos por el Gobernador del Tolima; los tres mil ochocientos un pesos ($ 3,801) importe de las expropiaciones de semovientes, los desconoció en su totalidad, por cuanto no aparecía comprobado en el expediente la idoneidad de los testigos con que se quería acreditar la verdad de las expropiaciones. Esta Superioridad, en auto para mejor proveer, dispuso que el Fiscal respectivo certificara sobre si eran hábiles los testigos que habían declarado, y de la atestación dada por dicho empleado, resulta que sí son idóneos.

Hecha esta relación, se procede á resolver.

La suma de trescientos pesos ($ 300) representada por el recibo del General Juan Nepomuceno Lozano, no se puede reconocer, porque no ha sido autenticada la firma del com-

probante, ni está acreditado que el expresado General ejerciera el cinco de Marzo de mil ochocientos ochenta y cinco el cargo de Intendente. No sucede lo mismo con los dos recibos expedidos por el Gobernador del Tolima, porque la autenticidad de las firmas y el carácter público de quien los expidió están perfectamente establecidos, y porque merecen completa fe, por haber sido dados en cumplimiento del artículo 4.° de la Ley 152 de 1887 y de la resolución del Ministerio de Guerra de fecha seis de Junio del mismo año.

De las informaciones sumarias de testigos, cuya idoneidad quedó establecida después del auto de mejor proveer, aparecen perfectamente comprobadas las siguientes expropiaciones de semovientes con sus respectivos precios, por haber tres declaraciones contestes acerca de cada una de ellas:

Ochenta y siete novillos de ceba, á cuarenta pesos ($ 40) cada uno	$ 3,480
Un caballo	150
Una mula	80

En mérito de lo expuesto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, reconoce á cargo del Tesoro nacional y á favor de Guillermo Vila la suma de cinco mil cincuenta pesos ($ 5,050), y absuelve á la Nación del resto.

Queda en estos términos reformada la providencia apelada.

Notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA. — JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. — MARIANO DE JESUS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, cinco de Octubre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: En conformidad á lo que dispone el artículo 11 de la Ley 84 de 1890, se ha presentado Mariano Groot con poder de David Bravo, vecino de La-Cruz, Provincia de Caldas, Departamento del Cauca, demandando recompensa del Tesoro nacional, por razón de invalidez producida á su poderdante por heridas que recibió en el campo de batalla, defendiendo los principios que informan las actuales instituciones, en la guerra de mil ochocientos setenta y seis y mil ochocientos setenta y siete.

De las pruebas practicadas á solicitud del interesado y á virtud de providencias dictadas por la Corte para mejor proveer, resultan debidamente acreditados los hechos fundamentales de la demanda en la forma siguiente:

Que en el citado año de mil ochocientos setenta y seis, Bravo fué llamado al servicio de las armas en el grado de Sargento Mayor, por el Jefe Civil y Militar del entonces Municipio de Caldas, Coronel Juan Martín Caycedo, y como tal concurrió con las fuerzas regeneradoras de su mando, al combate que tuvo lugar en Almaguer en Octubre de aquel año, entre dichas fuerzas y las que sostenían al Gobierno de esa época;

Que en ese combate recibió Bravo una herida grave en el brazo derecho y un golpe de bala leve en el pecho;

Que Bravo ha quedado inválido para trabajar como antes á causa de dicha herida y que esta invalidez es parcial ó relativa.

Todo esto aparece de los testimonios rendidos bajo juramento por el referido Coronel Caycedo y por Benigno Rodríguez, Heliodoro Ordóñez, Benigno Cucalón, Luis Bolaños, Rafael Degado, Rodolfo Muñoz, Fermín Pavón, Adolfo Constaín, Timoteo Pérez y Adolfo Ortega, varios de ellos testigos presenciales de los hechos sobre que han declarado; de la certificación expedida por el Prefecto de la Provincia de Caldas, Zenón J. Muñoz, sobre la notoriedad de esos mismos hechos, y de la atestación certificada del General Miguel María Villota, en servicio activo como Inspector de la segunda División del Ejército nacional.

Respecto de la invalidez existen dos reconocimientos practicados en la persona de Bravo: el uno ante el Prefecto de la Provincia de Caldas, por peritos nombrados por él, que lo fueron Emilio Velasco, Manuel Dolores García y Emiliano Bolaños, y el otro, en cumplimiento de disposiciones de la Corte, ante el Prefecto de la Provincia de Pasto, por una Junta de Profesores, compuesta de los doctores Miguel Caycedo A., Miguel B. Muñoz y Manuel María Rojas. En el primero la invalidez de Bravo fué calificada de absoluta; en el segundo, los expertos la declararon relativa ó parcial; pero la Corte, en consideración á las razones en que se funda el último dictamen, le da la preferencia, para el efecto de fijar la cuantía de la recompensa. De este segundo reconocimiento resulta que Bravo sufrió en el antebrazo derecho, poco más ó menos en la parte media, una herida grave, según se ve por la cicatriz que presenta de forma circular, producida indudablemente por un proyectil que atravesó toda la región, interesando el radio á su paso, y produciendo como resultados de las lesiones de los nervios, la atrofia de los músculos, la disminución de la sensibilidad y la pérdida casi total de la fuerza de reflexión de los dedos, en todo lo cual se fundan los peritos para opinar que Bravo se encuentra en el caso de imposibilidad relativa ó parcial durante su vida.

También está comprobado que el reclamante no ha recibido pensión ni recompensa del Tesoro nacional, pues así aparece de la certificación expedida por el Ministerio del ramo agregada al proceso.

Por tanto, la Corte, aplicando las disposiciones de la Ley 84 de 1890, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con lo pedido por el señor Procurador general, declara que el Sargento Mayor David Bravo, tiene derecho á recibir del Tesoro nacional, por razón de invalidez parcial ó relativa, producida por heridas recibidas defendiendo los principios que informan las actuales instituciones, la recompensa unitaria definitiva de mil novecientos veinte pesos ($ 1,920), suma igual á la mitad de la señalada por el artículo 9.° de dicha ley, para los militares que, sirviendo en el empleo aludido, han sido absolutamente inutilizados en acción de guerra.

Notifíquese, cópiese, comuníquese al Gobierno y publíquese en la *Gaceta Judicial*.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA. — JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Octubre cuatro de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Salvador Valencia Fernández, con poder de Dolores Quijano Córdoba, vecina de Rionegro en el Departamento de Antioquia, solicita para su poderdante una recompensa del Tesoro nacional, conforme á la Ley 84 de 1890, sobre recompensas militares, y funda la acción en que la demandante es hija legítima de Venancia Córdoba de Quijano, y que ésta fué hermana del General José María Córdoba, prócer de la Independencia.

Como ni la citada ley ni ninguna otra otorga derecho á recompensa á los sobrinos de los militares de la Independencia, no ha debido promoverse esta demanda, ni la Corte puede acceder á lo que en ella se pretende.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, declara que Dolores Quijano Córdoba no tiene derecho á que se le decrete recompensa como sobrina del General José María Córdoba.

Déjese copia de este fallo, publíquese en la *Gaceta Judicial* y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA. — JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. — MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, cinco de Octubre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: El General graduado Abraham Acebedo ha demandado la recompensa unitaria de diez mil setenta y cinco pesos ($ 10,075), la cual el demandante descompone así: ocho

mil sesenta pesos ($ 8,060) como Coronel efectivo en cuatro años, y dos mil quince pesos ($ 2,015) por el veinticinco por ciento de aumento, según el artículo 8.° de la Ley 84 de 1890.

Las causales que pretende hacer valer son: haber servido más de veinte años en el Ejército, y la de haber sido herido en campo de batalla defendiendo el Gobierno legítimo, produciéndole esto una lesión de por vida.

Al expediente se ha traído en copia la hoja de servicios del expresado General, y de ella resulta, que tomó servicio desde el veinte de Septiembre de mil ochocientos sesenta y uno, con el empleo de Teniente, en el *Batallón 13 de Cazadores;* y que, con algunas interrupciones, continuó sirviendo en varios cuerpos y obteniendo ascensos hasta el de General graduado, cuyo despacho se le expidió el seis de Junio de mil ochocientos noventa y dos con la antigüedad de veinte de Diciembre de mil ochocientos ochenta y cuatro, fecha en la que, por enfermedad, se retiró del servicio.

Computado el tiempo de éste con el aumento respectivo, por razón de las situaciones de guerra, se le liquidaron quince años y catorce días.

Opina el señor Procurador, á quien se pasaron en traslado los documentos, que el peticionario no puede ser premiado á la vez, como lo solicita; porque, por razón de sus servicios, tiene derecho á una pensión mensual, al paso que por las heridas habría de obtener una recompensa unitaria, cosas que se excluyen, á su parecer, de acuerdo con el artículo 61 de la Ley 84 de 1890, debiendo elegirse por el demandante una de las dos. Impuesto de esta opinión el General Acebedo, ha manifestado que lo que ha demandado es recompensa y no pensión; pero que en todo caso quedará satisfecho con lo que esta Superioridad resuelva.

Del reconocimiento pericial que ante el Prefecto de Facatativá practicaron los facultativos en la persona del solicitante, aparece que éste tardó unos sesenta días en curarse de la herida, cuyas cicatrices se observan en la parte media y anterior del muslo derecho, produciéndose con esto una retracción y adelgazamiento de los músculos interesados, que impide el funcionamiento normal del miembro lesionado; pero ese impedimento no da derecho á ser recompensado sino cuando realmente causa invalidez ó inutilidad, aserción que los médicos no hicieron, y que por otra parte estaría desvirtuada por la misma hoja de servicios, en la que consta que después de herido ha estado funcionando en la milicia el citado General en un lapso de tiempo de cerca de siete años; y con tal motivo, la Corte no puede acordar la recompensa por razón de invalidez producida por heridas recibidas en campo de batalla; y se limita á tomar en cuenta la causal de tiempo del servicio para otorgar, de acuerdo con el artículo 10 de la citada ley, una pensión mensual igual á las dos terceras partes del sueldo de Coronel, por no haber servido tres años en el empleo de General, según el artículo 40.

Habidas en consideración estas razones y lo dispuesto en el número 7.° del artículo 5.°, ley citada, y lo expuesto por el señor Procurador, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, se declara que el General Abraham Acebedo debe percibir mensualmente del Tesoro público de la Nación, la suma de noventa y tres pesos treinta centavos ($ 93-30) que se le asigna como pensión por antigüedad en el servicio, equivalente á las dos terceras partes de ciento cuarenta pesos ($ 140), sueldo de un Coronel por mes, según la ley de 1886, sobre sueldos militares.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y dése aviso al Ministerio de Guerra.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, cinco de Octubre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Isidora Angel, en su carácter de viuda del soldado Nicanor Otálora, muerto en defensa del Gobierno legítimo de la Confederación Granadina en 1862, solicita una recompensa militar por la muerte de su esposo, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 84 de 1890.

En el expediente creado al efecto, aparecen comprobados los siguientes hechos:

1.° La muerte del expresado Otálora en el combate que tuvo lugar en Inzá el diez de Agosto de 1862, el cual combate se libró entre fuerzas al servicio de dicho Gobierno y las sostenedoras de la revolución al mando del titulado General Mercedario Muce. Este hecho se halla acreditado con el testimonio de cuatro testigos presenciales, que dan razón de sus dichos, el cual se recibió con las formalidades legales;

2.° El matrimonio de Isidora Ángel con Nicanor Otálora, ha sido comprobado con los mismos testigos y el certificado del señor Cura párroco de Inzá, quien manifiesta que no puede dar copia de la respectiva partida por no existir los libros parroquiales que fueron incendiados por los indígenas de Tierra-adentro en 1860, y agrega que suple por esa razón la falta de la partida con el testimonio de varios testigos de crédito y con su propio testimonio, por haber pasado ante él el indicado acto eclesiástico. Igual afirmación hace el certificante respecto de las partidas de bautismo de Melitón y Adelaida Otálora, hijos del mencionado matrimonio;

3.° Que la solicitante permanece en estado de viudez, es sumamente pobre, ha observado buena conducta antes y después de ser viuda y vivió en perfecta armonía con su marido, lo acreditan los mismos testigos;

4.° Que la solicitante es la única persona que tiene derecho á optar la recompensa solicitada, pues no solamente está acreditado que los dos únicos hijos yá citados de Otálora y su esposa, son el uno mayor de edad, y la otra, casada, sino que éstos mismos han manifestado, por memorial dirigido á la Corte, que no se creen con derecho á la recompensa pedida por su madre;

5.° Finalmente, el hecho de no haber sido recompensada la solicitante ni recibido pensión del Tesoro público por la muerte de su esposo, está justificado con la certificación del señor Ministro del Tesoro.

Los hechos relacionados dan derecho á la peticionaria para obtener la recompensa que ha solicitado, y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1.°, 5.°, 6.° y 9.° de la Ley 84 de 1890, y con el concepto del señor Procurador general de la Nación, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: que Isidora Ángel, viuda de Nicanor Otálora, tiene derecho á recibir del Tesoro nacional una recompensa unitaria y definitiva de setecientos cuatro pesos ($ 704) por la muerte de su esposo en el campo de batalla y en defensa del Gobierno.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial*, dése cuenta al Ministerio de Guerra y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, cinco de Octubre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: De la cantidad de quinientos ochenta pesos ($ 580) que Pedro P. Bello ha pedido se le reconozcan por empréstitos que pagó y expropiaciones que se le hicieron en la guerra de mil ochocientos ochenta y cinco para el servicio del Gobierno nacional, la Comisión de suministros, por resolución de primero de Abril último, número 3,529, reconoció trescientos pesos ($ 300) á favor de Juan B. Quintero, como representante del reclamante, y absolvió á la Nación del exceso reclamado. Aprobada esta resolución por la del Ministerio del Tesoro, fechada el veintisiete de Mayo último y marcada con el número 2,887, el interesado, que no se conformó con lo resuelto, interpuso apelación en lo desfavorable á sus pretensiones, para ante esta Superioridad, y concedido el recurso pasa á resolverse, estando, como está, legalmente sustanciado.

Las partidas reclamadas de que se absolvió á la Nación son las siguientes:

Ciento sesenta pesos ($ 160) por el pastaje de un potrero en el Distrito de Facatativá, de propiedad de Bello, tomado por las fuerzas legitimistas á órdenes del General Marco Aurelio Piñeros, para el servicio de las brigadas del Ejército.

Y ciento veinte pesos ($ 120) por el valor de cuatro monturas aperadas que le expropiaron al mismo Bello las fuerzas de la División á órdenes del General Vicente Aldana.

Respecto de la primera de estas partidas se observa que no hay más prueba de la ocupación del potrero del reclamante para las brigadas del Gobierno, que el testimonio de Oliverio Flórez, pues aunque también fué examinado sobre el particular Julián Maldonado, éste declaró no constarle la expropiación, y si bien agregó haber visto que echaban una brigada al potrero de Bello, no supo por orden de quién se hizo esto. En cuanto al valor de los pastajes, ambos testigos dijeron que no podían fijarlo, de modo que sobre este punto sustancial no existe ningún comprobante.

Acerca de la expropiación ó suministro de las monturas, que según dice el reclamante tuvo lugar en cuatro actos distintos, únicamente se ha dado como prueba de cada suministro la declaración de un sólo testigo, siendo de notar que ninguno ha fijado el valor que tenían los objetos suministrados.

No hay, pues, la prueba que para el reconocimiento de tales créditos exige el inciso 3.°, artículo 2.° de la Ley 44 de 1886, á falta de recibos ó atestaciones, que es la declaración de tres testigos, por lo menos, idóneos y contestes, que den razón de su dicho.

Por tanto, la Corte, de acuerdo con el parecer fiscal y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la resolución apelada.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Octubre seis de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Pioquinto Bedoya, vecino de Dolores, Departamento del Cauca, solicita recompensa del Tesoro nacional, como inválido á causa de heridas recibidas combatiendo en defensa del Gobierno legítimo de la Confederación Granadina en la guerra de 1860 á 1863.

Ha comprobado la invalidez con la diligencia del reconocimiento practicado en su persona por la Junta de Profesores nombrada por el Gobernador del Departamento del Cauca, conforme á los artículos 17 y 18 de la Ley 84 de 1890, y compuesta de los doctores Juan N. Wallis, Domingo Cajiao C. y Domingo Arboleda, los cuales, al dar bajo juramento su dictamen, expusieron: "que estando presente el señor Pioquinto Bedoya, hallaron las cicatrices de una herida de bala, que entrando por la parte posterior del brazo izquierdo, rompió completamente el húmero en su tercio superior, quedando dicho hueso, después de cicatrizado, un tanto curvo, y que á consecuencia de esta herida, dicho Bedoya ha quedado con el brazo izquierdo afectado de una invalidez relativa y de por vida," agregando luégo, "que puede trabajar con la mano derecha, pero no con la izquierda."

Ha probado también el hecho de haber sido herido en el brazo izquierdo, defendiendo al Gobierno legítimo de la Confederación Granadina, en el combate que tuvo lugar el once de Agosto de 1860 en el puente de Quilcacé, entre las fuerzas que comandaban los Generales Jacinto Córdoba y Julio Arboleda y las del entonces General José María Sánchez, y que en ese hecho de armas Bedoya tenía el grado ó empleo militar de Teniente. Así lo declaran bajo juramento varios de los compañeros de armas del solicitante en esa guerra, entre ellos el General José María González U.

Finalmente, ha probado con certificación del Ministerio del Tesoro, que Bedoya no ha recibido, por razón de su invalidez, recompensa ni pensión del Tesoro nacional.

En virtud de estos hechos no cabe duda que Bedoya es acreedor á la gracia que solicita en conformidad á lo que disponen los artículos 5.°, inciso 8.°, 9.° y 19 de la Ley 84 de 1890 y por ello la Corte Suprema, de acuerdo con el parecer del Procurador general, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que Pioquinto Bedoya tiene derecho á recibir del Tesoro nacional, por vía de recompensa unitaria definitiva, por razón de la invalidez relativa ó parcial que sufre á causa de heridas recibidas en defensa del Gobierno de la Confederación Granadina, en la guerra de 1860 á 1863, la cantidad de mil doscientos pesos ($ 1,200), suma igual á la mitad de lo que dicho artículo 9.° señala para el caso de invalidez absoluta á un Teniente.

Notifíquese, cópiese, comuníquese al Gobierno y publíquese en la *Gaceta Judicial*.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, treinta y uno de Octubre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Por medio de apoderado, Inés Martínez Ledesma, ha pedido á la Corte se le conceda la recompensa militar á que se cree con derecho, como hija legítima del Coronel de la Independencia Ramón Martínez Soto.

A su demanda ha acompañado las siguientes pruebas:

1.ª Una certificación expedida por el Cura de la iglesia Catedral de Popayán, en la cual se inserta una partida de que resulta comprobado que María Inés de los Dolores Martínez Ledesma es hija legítima del Coronel Ramón Martínez y de Tomasa Ledesma, y fué bautizada el día catorce de Enero de mil ochocientos treinta y cinco;

2.ª Declaraciones juradas ante el Juez civil del Circuito de Palmira, por Simón Arizabaleta y Carlos Rivera Molina, con intervención fiscal, según las cuales Inés Martínez es efectivamente hija legítima de los expresados Coronel Ramón Martínez y Tomasa Ledesma; Ramón Martínez fué generalmente reconocido como Coronel de la Independencia y vivió en paz con su esposa; y su hija Inés observa buena conducta y está pobre;

3.ª Una certificación expedida á diez y nueve de Agosto de mil ochocientos noventa y uno, por el Notario 1.° del Circuito de Buga, Reparato Santacoloma, en la cual se copia la partida de defunción del Coronel Martínez Soto, quien murió el veintitres de Junio de mil ochocientos sesenta y tres, dejando dos hijos legítimos, que son Ramón é Inés;

4.ª Una copia del testamento que el mencionado Coronel Ramón Martínez Soto otorgó (sin que conste la fecha del otorgamiento) ante el Notario público del Círculo de Buga, en el cual testamento, entre otras cosas, afirma el testador que fué casado con Tomasa Ledesma y tuvo dos hijos legítimos, llamados Ramón é Inés, aparte de un hijo *natural* que tuvo en Juana Gallardo, de Cartagena, y se llamó Simón Martínez Gallardo;

5.ª La declaración que en veintisiete de Agosto último rindió ante el Juez civil de Palmira, Manuel de J. Varela, quien dice que cuando conoció al Coronel Ramón Martínez Soto, no tenía éste más hijos que Ramón é Inés Martínez Ledesma, y que el primero de ellos murió hace algunos años sin dejar sucesión; y la que ante el mismo Juez y en aquella misma fecha rindió Carlos Rivera Molina, quien asegura que el expresado Coronel Martínez S. sólo tuvo en su matrimonio los dos hijos que se han mencionado, de los cuales el primero murió hace algunos años, sin dejar sucesión legítima, pues no fué casado;

6.ª La partida de defunción de Tomasa Ledesma, expedida por el Cura de Buga á siete de Octubre último;

7.ª La partida de defunción de Ramón Martínez, expedida á petición de José R. Medina por el Cura de la Catedral de Popayán, á nueve de Noviembre de mil ochocientos noventa y uno, en la que consta que el día dos de Julio de mil

ochocientos sesenta y siete, fué sepultado en el Panteón de la Parroquia de San José de Popayán el cadáver de dicho Ramón;

8.ª Declaraciones rendidas ante el Juez del Circuito de Palmira por Carlos Rivera Molina, Manuel J. Varela y Simón Arizabaleta, en que los dos primeros afirman que vieron los despachos en que constaba que Ramón Martínez Soto era Coronel de la Independencia y recibía como tal una pensión del Tesoro público; y el tercero dice que afirma estos mismos hechos porque, aunque no vió los despachos respectivos, tales hechos eran de pública notoriedad;

9.ª Una certificación en que el señor Ministro del Tesoro da testimonio de que Inés Martínez Ledesma no figura en los registros de pensionados de la República ni ha recibido recompensa alguna del Tesoro público;

10. Otra certificación del mismo señor Ministro del Tesoro, de que resulta que en el Presupuesto nacional de Gastos de mil ochocientos cuarenta y nueve á mil ochocientos cincuenta, figura Ramón Martínez como Teniente-Coronel, graduado de Coronel, con goce de una pensión vitalicia de seis mil cuatrocientos reales, igual á las dos terceras partes del sueldo de su grado;

11. Una certificación del señor Ministro de Guerra con que se comprueba que el Teniente-Coronel Ramón Martínez, según los datos que aparecen en las Memorias de guerra correspondientes á los años de mil ochocientos cuarenta y ocho á mil ochocientos sesenta y cinco, fué graduado de Coronel de la República por sus servicios á la causa de la Independencia, y gozó desde al día primero de Marzo de mil ochocientos cuarenta y siete de las dos terceras partes del sueldo de su empleo, en virtud de letras que le fueron expedidas con aquel derecho;

12. Un certificado en que el Oficial encargado del archivo republicano afirma que no existe allí la hoja de servicios del Teniente-Coronel Martínez S. ni otros documentos á él referentes;

13. Tres declaraciones de testigos, con las cuales se comprueba que Inés Martínez Ledesma guardó perfecta armonía y buenas relaciones con su padre hasta la muerte de éste, y

14. Las declaraciones y certificados que en virtud de autos para mejor proveer, pronunciados por la Corte en doce de Mayo y primero de Agosto del presente año, hizo producir el Juez del Circuito de Buga, y con las cuales se acredita que la demandante ha observado buena conducta y que fué casada con Higinio Tornero, quien falleció en Diciembre del año de mil ochocientos cincuenta y seis, y no ha contraído nuevas nupcias.

Estos comprobantes son suficientes para deducir de ellos el derecho que asiste á la peticionaria para que se le decrete una recompensa de conformidad con los artículos 1.°, 5.°, 9.° y 13 de la Ley 84 de 1890, razón por la cual la Corte, de acuerdo con el parecer del señor Procurador y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que Inés Martínez Ledesma, como hija legítima del Teniente-Coronel de la Independencia Ramón Martínez S., tiene derecho á una recompensa unitaria definitiva de cuatro mil ochocientos pesos ($ 4,800), que se le pagarán del Tesoro público.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial*, dése el correspondiente aviso al señor Ministro de Guerra y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Mariano de Jesús Medina.—Juan Evangelista Trujillo.—Lucas Villafrádez.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veinte de Septiembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Por auto de seis de Mayo del presente año, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia concedió á José Emeterio Moreno el recurso de casación por él interpuesto contra la sentencia proferida por dicho Tribunal el cuatro de Marzo anterior, por la cual se confirmó, con una adición, la de veintitres de Abril del presente año, que fué pronunciada por el Juez 2.° en lo civil del Circuito de Medellín, en el juicio promovido por dicho Moreno sobre nulidad de la partición hecha de los bienes de la sucesión de Jacoba Arboleda.

Repartido el asunto en la Corte, y fijado el edicto de que trata el artículo 376 de la Ley 105 de 1890, se dispuso en auto de fecha diez y nueve de Agosto último entregar el proceso á la parte recurrente, para que, de conformidad con el artículo 377 ibidem, designara por escrito la causal ó causales en que fundaba la interposición del recurso, y además, en auto de fecha primero de los corrientes se dispuso nuevamente que se notificara el anterior, ó sea el de diez y nueve de Agosto en la forma prevenida por el artículo 1.° de dicha ley, es decir, advirtiendo expresamente que el expediente se hallaba á disposición del recurrente.

El señor Secretario informa que ha espirado el término que por el segundo de estos autos debía el recurrente tener para formalizar el recurso, y que no ha hecho uso de él, razón por la que de conformidad con la parte final del mencionado artículo 377, y no siendo, por otra parte, el caso de hacer de oficio la declaración que allí se indica sobre incompetencia de jurisdicción, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara desierto el mencionado recurso.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Mariano de Jesús Medina.—Juan Evangelista Trujillo.—Lucas Villafrádez.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Septiembre veintiseis de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: En el juicio ejecutivo promovido desde Octubre de mil ochocientos ochenta, por Ignacio Sáenz de San Pelayo, contra Antonio Sáenz M., para hacer efectivo un crédito de seiscientos cincuenta pesos y sus intereses, se denunciaron por el ejecutado dos terrenos ubicados en Moniquirá: el uno llamado "El-Curo," y el otro "Masamorral," y otro llámado "La-Romera," ubicado en Guatoque, de todos los cuales se expresaron los respectivos linderos. Posteriormente se denunció también por el ejecutante, como propiedad del deudor, otro terreno llamado "Peñas" ó "La-Peña," ubicado en Moniquirá y determinado por sus linderos, y tanto éste como los anteriores fueron debidamente embargados y depositados.

A consecuencia del embargo se introdujeron diversas tercerías excluyentes acerca de cada uno de los mencionados terrenos, así: Juan Nepomuceno Bohórquez hizo tercería al terreno llamado "Peñas" y se le dejó en su poder como actual poseedor; Feliciana Fajardo introdujo tercería respecto del predio llamado "Masamorral," y Bernabé Sáenz respecto de los otros dos llamados "El-Curo" y "La-Romera."

Acumuladas estas tercerías y abiertas á prueba, el ejecutado y los terceristas presentaron los documentos en que respectivamente han fundado sus derechos, y al fin por sentencia de veintiseis de Enero del año próximo pasado, pronunciada por el Juez 2.° civil del Circuito del Centro en el Departamento de Boyacá, se resolvió lo siguiente: 1.° Juan Nepomuceno Bohórquez no ha probado su dominio en el terreno "La-Peña;" 2.° Feliciana Fajardo ha probado ser dueña del terreno á que se refiere la escritura que presentó, pero no lo es de todo el terreno denominado "Masamorral;" 3.° Bernabé Sáenz ha probado su dominio á un derecho indeterminado en el terreno llamado "El-Curo," derecho que se excluirá cuando se siga su extensión; 4.° Bernabé Sáenz no ha probado su dominio en el terreno llamado "La-Romera;" 5.° Decláranse excluídos de la ejecución los terrenos que, según este auto, pertenecen á las personas que los han reclamado; 6.° Adelántese la ejecución sobre los demás bienes en la forma legal, para lo cual se dará cumplimiento al auto de diez y ocho de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis en lo que se refiere al avalúo y depósito, el que debe hacerse

en el depositario por no haber probado el tercerista su dominio. Otro sí: Se aclara que el dominio que Nepomuceno Bohórquez ha probado es el del terreno que resulta alinderado en la escritura que presentó, el que queda excluído.

Publíquese, notifíquese y cópiese.

De esta sentencia sólo interpuso apelación el apoderado del ejecutado en la parte que le fuere perjudicial, y se conformaron con ella los terceristas. Concedido el recurso para ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja y sustanciada la segunda instancia, después de haberse producido nuevas pruebas, se profirió la sentencia de veintiocho de Octubre de mil ochocientos noventa y uno, que en su parte resolutiva dice así:

"1.° Confírmase la sentencia apelada en lo resuelto bajo el número 2.° y en el 'otro sí,' quedando, en consecuencia, modificado lo resuelto bajo el número 1.°

"2.° Bernabé Sáenz ha comprobado que tiene derechos en el terreno de 'El-Curo;' igualmente ha comprobado que los tiene Antonio Sáenz, por lo cual debe determinarse la parte que á cada uno pertenece en el juicio correspondiente, para saber lo que debe rematarse. Queda así reformada la sentencia apelada. No hay costas."

Notificada esta sentencia, el apoderado del ejecutado pidió al Tribunal que hiciese ciertas aclaraciones, y sin embargo de que se dictó una larga resolución aclarando ciertos conceptos del Tribunal, concluyó por decir que no había lugar á lo solicitado, pero que sirviese esa exposición para aclarar las frases oscuras ó equívocas que puedan hallarse en la sentencia. El mismo apoderado interpuso después recurso de casación, y hecho el avalúo pericial de los terrenos por haber ocurrido duda al Tribunal acerca de la cuantía, se concedió el recurso y se trajo el expediente á esta Superioridad en donde ha sido sustanciado en la forma legal, aunque sin haber alegado ni héchose representar ante la Corte ninguno de los terceristas.

Como antes de examinar las causales de casación alegadas por el apoderado del ejecutado, es indispensable averiguar si en el recurso interpuesto concurren todas las circunstancias exigidas por el artículo 366 de la Ley 105 de 1890 para que sea admisible, la Corte procede á hacer ese examen respecto de la tercera de dichas circunstancias, pues que las dos primeras aparecen con claridad.

La ley exige que haya contrariedad en las dos sentencias en cuanto á la aplicación de las leyes ó en cuanto á la principal del pleito, y comparadas las que se han pronunciado en este expediente, lejos de haber entre ellas esa contrariedad, son perfectamente conformes.

Verdad es que la de segunda instancia dice que modifica la de primera, pero la modificación no envuelve contrariedad. Esa modificación era, además, indispensable si se atiende á que la sentencia de primera instancia, después de resolver en el punto primero que Juan Nepomuceno Bohórquez no había probado su dominio en el terreno "La-Peña," dijo en el otro sí: se aclara que el dominio que Nepomuceno Bohórquez ha probado en el del terreno que resulta alinderado en la escritura que presentó, el que queda excluído. Como la sentencia de segunda instancia confirmó lo resuelto en el "otro sí" y lo resuelto en él es lo contrario á lo que se dijo en el punto primero de la sentencia de primera instancia, era preciso que, confirmada la resolución contenida en el "otro sí," no solamente se dijese que quedaba modificado el punto primero, sino que ha debido revocarse, sin que esa revocación ó modificación sea otra cosa que la confirmación de lo que resolvió al fin la sentencia de primera instancia. Esto en cuanto á la tercería opuesta por Bohóquez. En cuanto á lo resuelto respecto de las tercerías de Feliciano Fajardo y Bernabé Sáenz en los puntos 2.° y 3.° de la sentencia de primera instancia, la sentencia de segunda los confirmó. De donde resulta que no existe contrariedad alguna entre las dos sentencias; y bien se ve que para decidir las tercerías en los términos en que lo han sido en una y otra sentencia, no parece que haya habido contradicción en la aplicación de las leyes, sin que por esto pueda entenderse que la Corte estima que por el hecho de no existir esa contradicción, no las considere violatorias de ley sustantiva. Puede existir esa violación, y sin embargo, no aparece la contradicción que la ley exige para la admisibilidad del recurso, como yá ha tenido ocasión la Corte de hacerlo notar. En este mismo proceso pudiera hacerse la observación de que la Corte no encuentra correctas algunas de las doctrinas sentadas por el Tribunal, tales como la de considerar que el juicio de tercería excluyente no puede estimarse como verdadero juicio reivindicatorio de dominio, de creer que la nulidad de un contrato de venta entre cónyuges no divorciados, sólo produce nulidad relativa, siendo, como es, un contrato que tiene un objeto ilícito, por estar prohibído por la ley. Empero, no pudiendo la Corte ocuparse en el examen de las violaciones de ley que serían fundamento de las causales de casación, por no poder dar entrada al recurso conforme al artículo 381 de la citada Ley 105, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: que el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Tunja, de que se ha hecho mención, es inadmisible.

Notifíquese cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA. — JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, tres de Octubre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: El Administrador de Hacienda de la Provincia de Guaduas, en veinticinco de Julio del presente año, libró mandamiento ejecutivo por la suma de treinta pesos, impuestos como multa en juicio de policía, por fraude á la renta de aguardientes, contra Tomasa Montealegre, y sin expresar á favor de quién habían de pagarse. Notificada la ejecutada apeló de dicho auto para ante esta Superioridad, apelación que le fué concedida por el funcionario ejecutor.

Recibido el expediente y sustanciado el recurso, se considera:

Que la renta de aguardientes no pertenece á la Nación sino á los Departamentos, y que según el número 6.° del artículo 43 del Código de Organización Judicial, la Corte conoce solamente de las apelaciones contra los autos ejecutivos, dictados por Recaudadores de rentas públicas nacionales y de los asuntos á que se refieren los números 1.° y 4.° del artículo 12 de la Ley 72 de 1890, y que no son de la competencia de los Tribunales en primera instancia; pero como á ninguna de estas clases corresponde el negocio referido, de acuerdo con lo que el señor Procurador ha expuesto, la Corte Suprema de Justicia se abstiene, por incompetente, de resolver el recurso concedido, y dispone devolver el expediente al funcionario que lo remitió.

Notifíquese y déjese copia, la que se insertará en la *Gaceta Judicial*.

LUCIO A. POMBO.—JUAN M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Octubre veintisiete de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Manuel María Zaldúa promovió juicio ordinario ante el Juez segundo del Circuito de Bogotá, en el mes de Marzo de 1891, contra Julio J. Dupuy, demandando: la declaración de nulidad de la escritura pública número doscientos ochenta y dos, de quince de Octubre de mil ochocientos setenta y nueve, otorgada en la Notaría tercera del Círculo de Bogotá, que expresa el contrato de mutuo á interés celebrado entre Camilia Estrada, acreedora, y Juan N. Zaldúa, deudor, con hipoteca de una casa situada en la ciudad de Bogotá, perteneciente al demandante Manuel María Zaldúa, quien la prestó para el efecto; la nulidad del remate que de la misma casa se verificó á favor de Julio J. Dupuy, ante el Juez 3.° del Circuito en ejecución promovida por Camila Estrada contra la finca hipotecada, el día primero de Abril de mil ochocientos ochenta y siete, aprobado en veinti-

nueve del mismo mes y registrado el dos de Noviembre siguiente; la entrega de la misma casa al demandante, y haciendo otros varios cargos que no hay necesidad de especificar.

El Juez de primera instancia pronunció sentencia definitiva el veintitres de Noviembre de ese mismo año, cuya parte resolutiva es así: "En consecuencia, el Juzgado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: 1.° no hay lugar á declarar ninguna de las nulidades alegadas por el actor en el libelo de demanda, ni á ordenar la restitución de la finca de que se ha tratado; 2.° en consecuencia, se absuelve al demandado Julio J. Dupuy de todos y cada uno de los cargos aducidos contra él por el doctor Manuel María Zaldúa en la demanda que ha originado esta controversia, y 3.° no hay lugar á condenar en costas á ninguna de las partes."

A virtud de recurso de apelación, interpuesto por el demandante, conoció del juicio en segunda instancia el Tribunal Superior del Distrito judicial de Cundinamarca, instancia que terminó con la sentencia de seis de Junio del año en curso, que confirma en todas sus partes la sentencia apelada y condena en las costas de la segunda instancia á la parte recurrente.

Interpuso contra el fallo del Tribunal recurso de casación el demandante Zaldúa, lo otorgó el Tribunal, fueron remitidos los autos á esta Superioridad, en donde se ha surtido la tramitación propia de tal recurso, y ha llegado yá el tiempo de decidir lo que fuere de derecho.

En cumplimiento de lo que ordena el artículo 381 de la Ley 105 de 1890, la Corte debe examinar si el recurso se interpuso oportunamente y por persona hábil; y si la sentencia es de aquéllas contra las cuales procede, porque si alguno de estos requisitos falta, debe limitarse á negar la admisión de él.

Empezando por la última, se observa desde luégo que en las sentencias de primera y de segunda instancia, hay absoluta conformidad en cuanto á lo principal del pleito, pues ésta confirma á aquélla en todas sus partes. Respecto á la inteligencia ó aplicación de las leyes en que se apoyan las sentencias, no existe tampoco la contrariedad que requiere la circunstancia tercera del artículo 366 de la misma ley, para que tenga cabida el recurso de casación. Al contrario, el estudio de una y otra sentencia persuade, sin dificultad, de que hay conformidad en lo principal de los fundamentos cardinales que sirvieron al Juez y al Tribunal para pronunciar la absolución del demandado.

En efecto, el Juez del Circuito expone como fundamentos de su fallo absolutorio estas consideraciones principales:

"Que la razón alegada como fundamento de la nulidad de la escritura otorgada entre Camila Estrada y Juan Nepomuceno y Manuel María Zaldúa y de los contratos de mutuo, hipoteca etc., etc., consistente en que dicha Estrada era casada cuando celebró el contrato, y ocultó dolosamente su estado civil, exponiendo que era soltera, no es cierta, porque el matrimonio católico que había contraído con Francisco García Muñoz no tenía eficacia civil alguna en esa época, y ante la ley cundinamarquesa, para el efecto de contratar, era soltera; y que la nulidad, dado caso que la hubiera, sería relativa y no tendría derecho de alegarla el demandante, por ser éste un derecho del marido, de la mujer ó sus herederos.

"Que no habiendo sido parte Dupuy en el citado contrato no puede discutirse con él la acción de nulidad, ni ésta podría pronunciarse sin audiencia de Camila Estrada, que no ha sido demandada."

Cuanto á la nulidad del juicio ejecutivo, dice también el Juez que Dupuy, que fué mero tercerista, no fué parte en él y no podría declararse la nulidad, dado que existiera, sin audiencia de Camila Estrada, que fué la parte ejecutante, y que, por otro lado, no se han probado las irregularidades que el actor *imputa* á dicho juicio, ni son de las que pueden alegarse en juicio distinto.

Relativamente á la nulidad del remate de la casa, se funda el Juez para no decretarla, en que no están probados los motivos de nulidad que se alegan en el juicio ejecutivo en que se verificó, y en que, aunque lo estuvieran, esas nulidades no afectarían el remate, porque las de ésta se rigen por disposiciones especiales.

También afirma la sentencia de que se trata, que el rematador cumplió con los deberes de su cargo, haciendo el pago oportunamente, habiendo dado antes la fianza que exige la ley para poder admitir la postura, y que el Juez aprobó, en consecuencia, dicho remate.

Cuanto á la nulidad del remate, por haberse incluído en él una parte de la casa hipotecada que había sido expropiada para la construcción del Teatro nacional, expresa el Juez que la circunstancia de haberse rematado esa parte de la hipoteca, no es motivo de nulidad, porque la venta de cosa ajena no es nula, ni el demandante es representante de la Nación para poder reclamar la nulidad por esta razón.

También dice la sentencia que no hay nulidad en la diligencia de entrega de la casa ejecutada al rematador, la que se verificó sin citación de los colindantes y sin excluír la parte que había expropiado la Nación, porque estas circunstancias no constituyen nulidad, ni el demandante podría pedirlas, si existieran.

Finalmente, la sentencia de primera instancia dice que desechadas todas las acciones que podrían dar lugar á las restituciones demandadas, forzosamente hay que absolver al demandado de los cargos referentes á esas restituciones, sin entrar á considerar las excepciones alegadas, porque no habiendo acción, no puede tampoco haber excepción que la destruya.

Examínese ahora la sentencia del Tribunal y se verá que en lo principal se apoya en idénticos fundamentos á los de la de primera instancia, explanados y reforzados en algunos puntos, y agrega algunas razones para llegar á la confirmación total de la decisión del Juez, tales como éstas:

Que para ordenar la restitución de la casa rematada sería necesario que se pronunciase previamente la nulidad del remate en sentencia que tuviese autoridad de cosa juzgada;

Que el pago por consignación que alega el demandante en apoyo de sus acciones de nulidad, no está acreditado, ya porque no fué aceptado por la parte ejecutante, ya porque no pagó las costas, ya porque no ha sido declarado suficiente por sentencia que tenga fuerza de cosa juzgada;

Que cuando se expidieron las leyes que dieron eficacia á los matrimonios católicos celebrados anteriormente, yá había terminado toda ingerencia de Camila Estrada en el juicio ejecutivo con el pago de su crédito;

Que ningunos de los hechos que se alegan es constitutivo de nulidad del remate por no hallarse comprendidos en los casos determinados en varios artículos del Código Judicial de Cundinamarca, con excepción de una causal que no está comprobada;

Que la nulidad del remate, alegada á última hora, consistente en la existencia de un embargo anterior, apoyada en el artículo 201 de la Ley 105 de 1890, no puede tomarse en consideración, por no haber sido motivo de la demanda y por apoyarse en una ley posterior al acto.

En resumen, entre las sentencias de primera y de segunda instancia hay absoluta conformidad en lo principal del pleito y no hay contrariedad en la inteligencia ó aplicación de las leyes que les sirven de fundamento, aunque en la última se hayan agregado algunos motivos para concluír por la absolución del demandado.

La sentencia acusada no es, pues, de las sujetas á recurso de casación por faltarle la tercera de las circunstancias que exige el artículo 366 de la Ley 105 de 1890, para que pueda darse entrada á ese recurso.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Manuel María Zaldúa contra la sentencia pronunciada en este juicio por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca con fecha seis de Junio de este mismo año.

Notifíquese esta providencia, déjese copia de ella, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

IMPRENTA DE ANTONIO M. SILVESTRE.

REPÚBLICA DE COLOMBIA.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AÑO VIII. | Bogotá, 22 de Enero de 1893. | NÚM. 367.

CONTENIDO.

Págs.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

La que reconoce á Gonzalo García un crédito por expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Pombo)..... 25

La que anula en parte la sentencia del Tribunal Superior de Cundinamarca, dictada en el juicio seguido contra Rafael Olaya Ricaurte y Laurentino Currea, por la posesión de una mina. (Magistrado ponente, doctor Villafrádez)..... 25

La que reconoce á Andrés Lenis un crédito por expropiaciones (Magistrado ponente, doctor Villafrádez)..... 31

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Auto reformatorio del que dictó el Tribunal Superior del Sur de Santander, en el juicio seguido por Francisco Rueda Sarmiento contra Ricardo Díaz Pinilla, por nulidad de unos títulos. (Magistrado ponente, doctor Corrales)..... 31

NEGOCIOS CRIMINALES.

Auto que declara prescritas las peñas que pudieron infligirse á Lino Cárdenas, como ex-Administrador de la Aduana de Carlosama, por abandono de su empleo. (Magistrado ponente, doctor Isaza)..... 32

Auto que anula la sentencia del Consejo de Guerra, dictada en el juicio seguido por insubordinación á Félix Zúñiga, soldado de la segunda Compañía del *Batallón Colombia*. (Magistrado ponente, doctor Isaza..... 33

GACETA JUDICIAL.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, seis de Octubre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Gonzalo García, como depositario de cincuenta novillos gordos cuya propiedad litigaban Gregorio Castrellón y Adolfo Montealegre, reclamó ante la Comisión de suministros el reconocimiento y pago de dos mil cuatrocientos pesos ($ 2,400), valor de los mencionados novillos, los cuales le fueron expropiados en Honda el veinticinco de Abril de mil ochocientos ochenta y cinco, por el agente general nombrado al efecto por el Gobernador civil y militar, Indalecio Saavedra, para el sostenimiento del Gobierno.

El reclamante acompañó á su solicitud copia de la diligencia de expropiación extendida por el expresado agente, Jesús Rubio G., en la que consta que la expropiación se hizo á Gonzalo García, como depositario de los cincuenta novillos que estaban en litigio; que fueron avaluados á cuarenta y ocho pesos ($ 48) cada uno por los peritos doctor Carlos Chaves y José Manuel Restrepo, quienes suscribieron la diligencia.

El expresado documento fué presentado á la Gobernación del Departamento para que fuese cambiado por certificación, y el Gobernador declaró que no era convertible, por no ser expedido por empleado dependiente de la Gobernación.

La Comisión de suministros, por resolución de treinta de Septiembre de mil ochocientos noventa y uno, número 3,131, negó el reconocimiento solicitado, por no estar el documento presentado de acuerdo con lo dispuesto en el ordinal 2.° del artículo 2.° de la Ley 44 de 1886. Pero antes de que el expediente pasara al estudio del señor Ministro del Tesoro, se pidió á la Comisión la reconsideración de su resolución en virtud de las declaraciones acompañadas de nuevo, y esa Corporación, por decisión de siete de Diciembre de dicho año, señalada con el número 3,238, ordenó el reconocimiento de la suma reclamada, que estimó probada con las declaraciones aludidas.

El Ministerio del Tesoro, por resolución de veintidós de Enero último, número 2,605, revocó la de la Comisión, por la cual se hizo el reconocimiento, fundándose en que las declaraciones no eran prueba suficiente por no estar acreditado el carácter oficial de Jesús Rubio G. como agente general del Gobierno nacional.

Apelada esta resolución para ante la Corte, se ha traído al expediente copia del Decreto del Gobernador civil y militar, publicado en el *Registro Oficial* del Tolima, correspondiente al treinta y uno de Marzo de mil ochocientos ochenta y cinco, en el cual se declaró de propiedad nacional todo el ganado vacuno gordo que hubiera en el Departamento; se obligó á los poseedores á denunciarlo y se dictaron otras providencias, para evitar fraudes, y en el artículo 5.° se nombró Agente-administrador general de todos los ganados á Jesús Rubio G., quien tenía el deber de llevar un libro de expropiaciones.

Con este documento ha quedado justificado el carácter oficial con que obró Rubio, y la expropiación reclamada no solamente tiene por fundamento la diligencia extendida por este funcionario, sino las declaraciones de los mismos individuos que figuraron como avaluadores y las de otras personas que, como Manuel J. Gallego y José P. Barrera, presenciaron la expropiación.

Por tanto, la Corte Suprema, de acuerdo con el parecer del señor Fiscal de la Comisión, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca la resolución del señor Ministro del Tesoro, que ha sido objeto de la apelación, y reconoce á cargo del Tesoro nacional y á favor de Gonzalo García, como depositario, la cantidad de dos mil cuatrocientos pesos ($ 2,400), valor de cincuenta novillos que se le expropiaron con tal carácter, y cuya suma debe corresponder á uno de los señores Gregorio Castrellón y Adolfo Montealegre, que litigaban la propiedad de esos novillos.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, ocho de Octubre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: A virtud de recurso de casación que interpusieron Rafael Olaya Ricaurte y Laurentino Currea P., por medio de sus respectivos apoderados, Liborio D. Cantillo y Librado Pinzón, especialmente constituídos al efecto, ha venido á esta Suprema Corte el presente juicio ordinario á que dió lugar la oposición que el mencionado Olaya Ricaurte y Pedro Cantini hicieron y formalizaron en oportunidad, á la posesión que el Gobernador del Departamento de Cundinamarca man-

dó se diera á Currea P. de una mina de esmeraldas, de filón ó veta, enteramente nueva, que éste le denunció por escrito presentado el veintitrés de Julio de 1888 y de cuyo descubrimiento había dado con fecha diez y seis de Junio anterior, el aviso prevenido por el artículo 8.° del Código de Minas, adoptado por la Ley 38 de 1887, al Alcalde del Distrito municipal de Suesca, donde dijo hallarse la mina descubierta, en el sitio llamado "Cerro del Salitre."

Este juicio fué fallado en primera instancia por el Juez del Circuito de Chocontá, que conoció de él en ese grado, absolviendo á Currea P. de los cargos por que fué demandado, y en la segunda lo fué por el Tribunal del Distrito Judicial de Cundinamarca, en grado de apelación, por sentencia que dictó el veintinueve de Septiembre de 1890, de la manera siguiente:

"En mérito de lo expuesto, el Tribunal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: 1.° el señor Laurentino Currea P., como primer descubridor de la mina de esmeraldas que ha denunciado y que asegura existir en el cerro de "Chitiva," comprendido dentro de los linderos siguientes: por el Norte, con el camino que sigue para Susatá; por el Occidente, con terrenos de Catalina Abril; por el Sur, con terrenos de la hacienda de "El Potrero;" y por el Oriente, con propiedad del doctor Simón Rafael Olaya López," tiene un derecho preferente al del señor Rafael Olaya Ricaurte, para tomar posesión de ella y para explotarla; sin perjuicio del pago de la indemnización correspondiente, conforme al Código de Minas; 2.° en consecuencia, se ordena que se lleve á cabo la posesión mandada dar por el señor Gobernador del Departamento; y al efecto, se remitirá el expediente al empleado comisionado para dar la posesión, luégo que se halle ejecutoriada esta sentencia; 3.° el señor Laurentino Currea P. no tuvo derecho á denunciar la mina de esmeraldas en el cerro del "Salitre," de propiedad del señor Pedro Cantini, y 4.° en estos términos queda reformada la sentencia apelada."

De este fallo se pidió aclaración por parte de Olaya Ricaurte; dando lugar á la siguiente decisión que dictó el Tribunal con fecha 25 de Octubre de dicho año:

"El peticionario cree que es llegado el caso de dar aplicación al artículo citado (el 860 del Código Judicial), porque hay oscuridad en la sentencia pronunciada en orden á los puntos siguientes:

"1.° Que la sentenncia reconoce un derecho á favor de Olaya Ricaurte, para que se le indemnicen los perjuicios que sufra por causa de la explotación de la mina; pero no se sabe si esa indemnización debe pagarse antes ó después de la posesión, ni se sabe cómo debe asegurarse el valor de la indemnización. Sobre este punto no hay incertidumbre, puesto que la sentencia dijo que la indemnización debía hacerse *conforme al Código de Minas*, el cual establece las reglas que gobiernan la materia;

"2.° Que la sentencia no dice á quién corresponde la explotación de la mina de cal que ha venido elaborando con título justo el señor Olaya Ricaurte. Acerca de este punto se observa, que habiéndose reconocido á Currea P. un derecho preferente al de Olaya Ricaurte para explotar la mina de esmeraldas en referencia, claro es que si, en ejercicio de este derecho, hay necesidad de que éste suspenda los trabajos de explotación de la piedra calcárea, debe suspenderlos, pues precisamente teniendo en cuenta que pudiera presentarse este caso, se acordó en la sentencia que se indemnizase al señor Olaya Ricaurte, quien no es dueño del terreno en que se encuentra la mina de cal.

"El tercer punto queda resuelto en el anterior.

"*Por tanto, el Tribunal*, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: se aclara la sentencia de que se ha hecho mérito en el sentido indicado en la parte considerativa de esta providencia."

Contra la sentencia de segunda instancia, aclarada, como acaba de verse, es contra la que se ha interpuesto y concedido el recurso de casación, que la Corte procede á resolver, previa la declaración que aquí hace de ser legalmente admisible, por haberse interpuesto en tiempo oportuno, por personas hábiles y contra sentencia definitiva dictada por un Tribunal Superior en juicio ordinario, cuya cuantía fué estimada al proponerlo en más de mil pesos, que eran los requisitos exigidos por las leyes 61 de 1886 y 135 de 1888, vigentes cuando se intentó, y las aplicables al caso, por consiguiente.

Esto sentado y terminada como se halla conforme á la ley la sustanciación del recurso, pasa la Corte á analizar las causales de casación alegadas, empezando por las que ha aducido la parte de Olaya Ricaurte, que son las determinadas en el artículo 38 de la citada Ley 61, bajo los números 1.°, 2.° y 8.°

Ocupándose en fundar la primera de esas causales, dicha parte comienza por sostener que la sentencia del Tribunal es violatoria del artículo 32 y de la segunda parte del 202 de la Constitución, por cuanto se priva á Olaya Ricaurte del derecho de propiedad que tiene en la mina de cal de que se habla en el juicio, sin que existan los graves motivos de utilidad pública de que trata el primero de esos artículos, y se hace ilusorio el derecho que el mismo Olaya tiene en esa mina, constituído por el extinguido Estado de Cundinamarca, que le garantizó la propiedad de ella, al declarar, como declaró, en el artículo 50 del Código de Fomento, que pertenecían á los dueños de la superficie del terreno todas las minas que no fueran de piedras preciosas, de sal gema y de metales de toda clase, ya en su estado nativo, ó ya en el de combinación, siempre que pudieran explotarse para beneficiar dichos metales.

Respecto de esta alegación, la Corte observa desde luégo, que de las citas que hace el recurrente de disposiciones constitucionales, con el fin de demostrar que la sentencia acusada es violatoria de derechos civiles garantizados por la Constitución de la República, por cuanto quita á Olaya Ricaurte el derecho que tenía conforme á las leyes del antiguo Estado de Cundinamarca, á explotar una mina de cal, ó se lo restringe cuando menos, no es conducente á los fines del recurso de casación que se examina, la del artículo 202 del citado Código fundamental, en su inciso 2.°, ó sea en su segunda parte, que es la que se considera infringida, pues ese inciso no trata de las minas que pertenecían á los antiguos Estados de la Unión Colombiana, en virtud del dominio eminente que tenían conforme á los principios de derecho público, constitucional ó de gentes, en cuyo ejercicio se expidió el artículo 50 del Código cundinamarqués de Fomento, que invoca el recurrente en apoyo de sus pretensiones, sino de aquellas de que eran dueños como entidades puramente civiles, con arreglo al derecho civil privado, caso en que no se encuentra la mina de cal explotada por Olaya Ricaurte, en la cual no ha tenido dominio privado ú ordinario el Estado de Cundinamarca, ó al menos no se ha probado que lo haya tenido, ni consta que aquella entidad constituyera sobre ella á favor de Olaya derecho alguno de los que menciona la citada disposición constitucional, de donde se sigue que es enteramente ajena é inaplicable por lo mismo á las cuestiones que se debaten en el presente juicio, debiendo, en consecuencia, concluírse, por deducción lógica incontestable, que ella no ha podido ser violada por la sentencia del Tribunal, y así lo asienta esta Superioridad.

Menos inconducente es la cita del artículo 32 de la Constitución, según el cual, en tiempo de paz, nadie podrá ser privado de su propiedad en todo ni en parte, sino en los casos y por los graves motivos de utilidad pública, definidos por el Legislador á que allí se alude, pues aunque la sentencia acusada no priva directa é inmediatamente á Olaya Ricaurte de su derecho á explotar la mina de cal en cuestión, sí puede surtir al ejecutarla este efecto remoto ó mediato, llegado el caso que en ella se prevee, de que la explotación de la mina de esmeraldas, descubierta por Currea P., haga necesaria la suspensión de la del mineral calcáreo por parte de Olaya Ricaurte, y con todo eso, la Corte no cree que la sentencia acusada sea violatoria de aquella disposición constitucional, habida consideración á que ese mismo Código fundamental, que así garantizó la propiedad particular, limitó ese derecho respecto de algunos bienes, entre ellos las minas de piedras preciosas á que pertenecen las de esmeraldas, declarándolos del dominio de la República, según se ve en su artículo 202, con lo cual quedó claramente restringida las propiedad de los asociados no sólo en cuanto al derecho mismo, sino también

en cuanto á la adopción de todas las medidas y los medios conducentes á su ejercicio, tanto por parte de la Nación misma como por la de los individuos á quienes ella ceda sus derechos, pues de otro modo podían llegar á ser éstos ineficaces é ilusorios, cosa que es á todas luces absurda é inadmisible.

Síguese de lo expuesto que la Nación, y también por de contado, sus causahabientes, tienen dominio pleno sobre las minas de esmeraldas existentes en el territorio nacional, junto con los medios necesarios establecidos por las leyes generales ó particulares que reglan la materia para gozar arbitrariamente de él, aunque de ahí resulten perjuicios á los propietarios del suelo. En tal caso éstos tienen derecho á ser debidamente indemnizados, al tenor de esas mismas leyes; pero no lo tienen para oponerse á que la Nación ó los cesionarios gocen á su arbitrio de esas minas, ni para pretender que el conflicto resultante de la incompatibilidad de su derecho particular de propietarios del suelo, con el que se ha reservado la República sobre esos bienes, sea resuelto á su favor y en contra de ésta, y si tal derecho se reconociera por el Poder Judicial quedarían conculcados con ello los atributos mismos de la soberanía que reside esencial y exclusivamente en la Nación, y en virtud de los cuales ésta retuvo para sí la propiedad de las minas de oro, plata, platino y piedras preciosas, sobre las cuales no hubieran adquirido ese derecho conforme á las leyes los respectivos descubridores y explotadores (artículo 222, número 3.° de la Constitución nacional).

Examinando ahora la sentencia acusada á la luz de la doctrina que acaba de exponerse y de las reflexiones que le sirven de fundamento, se ve con entera claridad que al declararse en ese fallo que Currea P., como primer descubridor de la mina de esmeraldas denunciada por él, tiene derecho preferente al de Olaya R. para poseerla y explotarla, no se quebranta la garantía de la propiedad consagrada por el artículo 32 de la Constitución de la República, aunque en él vaya envuelta la prohibición á dicho Olaya de beneficiar la piedra caliza existente en el lugar de la ubicación de aquella mina, desde luégo que expresamente se dijo allí que tal declaración se hacía "sin perjuicio del pago de la indemnización correspondiente, conforme al Código de Minas;" única cosa á que dan derecho las leyes á los propietarios del suelo en que se descubran minas pertenecientes á la Nación, según se ha demostrado.

Impúgnase también lo resuelto por el Tribunal como violatorio de los artículos 2.° y 9.° de la Ley 38 de 1887, que dicen textualmente así:

"Art. 2.° Son denunciables las minas de oro, plata y platino, en las condiciones del Código que se adopta, y con las condiciones que establece esta ley.

"Lo son igualmente las de piedras preciosas, pero su extensión será un cuadrado de un kilómetro de base, medido en la dirección que indique el denunciante. Las minas de las demás sustancias minerales sean ó no metálicas, que se hallen en terrenos baldíos, con excepción de los depósitos de carbón, de huano ó cualquiera otro abono semejante y de las fuentes saladas y bancos de sal gema, son también denunciables con la extensión siguiente: las de filón, como lo dispone el Código de Minas de Antioquia, para las de esta clase; las de sedimento, tales como los minerales de hierro llamados de pantano, y las que se encuentren en capas, tendrán la misma extensión que las llamadas de aluvión, es decir, cinco kilómetros cuadrados. Lo dispuesto en este artículo no perjudica los derechos adquiridos por adjudicaciones anteriores, hechas conforme á las leyes.

"Art. 9.° Al dueño de una mina de filón pertenecen todos los productos minerales que se encuentren dentro de los límites, aunque no hayan sido denunciados."

Dice el recurrente que la sentencia viola la primera de las disposiciones preinsertas, "por cuanto admite como denunciable una mina que no se encuentra en las condiciones del Código adoptado por la citada ley, sino en la especial de estar en otra mina, como es la de cal, ya en explotación, y no en terreno de propiedad particular, como de ordinario se hallan las demás.

Para la Corte es del todo inadmisible la sutil distinción que el recurrente quiere se haga por ella entre *minas existentes en otra mina y minas situadas en terreno de propiedad particular*, para el efecto de que se declare que aquéllas no son denunciables, pues ni la Constitución nacional, al reservar á la Nación la propiedad de ciertas minas, ni las leyes, al cederlas en posesión y dominio á sus descubridores, han hecho semejante diferencia, ni tal disparidad resulta de la naturaleza misma de las cosas ni se conforma con ella, siendo, como es, obvio que todos los minerales que constituyen una mina ocupan necesariamente una porción del terreno en que se encuentran, hállense ó no confundidos con otros minerales. Así que en el caso del presente pleito, si las esmeraldas de la mina denunciada por Currea P. están encajadas en las piedras calizas, que ha tenido Olaya Ricaurte en explotación, no por esto deja de ser evidente que tanto la mina de piedras preciosas como la de las calcáreas se hallan en terreno de propiedad particular. De modo que la objeción que se examina en cuanto se deduce de tan extraña é insostenible distinción, carece de fundamento y debe desecharse.

Ahora, si lo que se objeta es que la sentencia es contraria á la última parte del citado artículo 2.°, en que se estatuye que lo dispuesto en ese artículo no perjudica los derechos adquiridos por adjudicaciones anteriores, hechas conforme á las leyes, la observación no es menos infundada, pues refiriéndose la ley en esa parte á minas adjudicadas legalmente, no hay constancia ninguna de que la de esmeraldas descubierta por Currea P., ni la de cal, explotada por Olaya R., hayan sido objeto de adjudicaciones á favor de éste. De resto, y por lo que hace á minas que se hallen en terrenos baldíos, de que habla también ese artículo, es visto que sus preceptos no han podido ser infringidos por el Tribunal, toda vez que no se trata aquí de minas descubiertas en los baldíos de la República.

Tocante á la violación del artículo 9.° de la susodicha Ley 38, defiende el recurrente que no es exacto, como lo dice el Tribunal, al explicar el sentido de aquella disposición, que ella sea aplicable á las minas de filón denunciables y no á las de la misma clase pertenecientes á particulares por derecho propio, pues que si respecto de las minas en que el derecho es limitado ha de tener aplicación, con mayor razón debe tenerla cuando se trata de aquéllas en que el derecho es absoluto, y que la debida distinción que se hace en la sentencia sobre este punto, la cual, dice, es contraria al principio de que donde la ley no distingue, el Juez tampoco puede distinguir, se ha negado á Olaya el derecho que tiene, según dicho artículo 9.°, á los productos minerales que se encuentren dentro de los límites de la mina de cal que explota como dueño, en virtud de lo que disponían las leyes del extinguido Estado de Cundinamarca, violando con esa negativa aquel precepto legal.

En concepto de la Corte, el Tribunal ha interpretado fielmente la ley en la sentencia acusada, al entender que el artículo 9.° de la Ley 38 de 1887, sólo se refiere á las minas cuyo dominio fué reservado á la Nación por el artículo 202 de la Constitución nacional, que son las denunciables conforme al Código de Minas, adoptado por esa ley, pues teniendo tanto aquél como ésta por objeto evidente ceder la posesión y propiedad de tales minas á los que las descubran, reglar el modo de adquirir y perder esos derechos, fijar las formalidades que deben observarse en su trasmisión y establecer las condiciones con que la República enajena las minas de su propiedad, es, á todas luces, obvio é incuestionable, que todas y cada una de las disposiciones de ese Código y de las leyes que lo reforman, no deben entenderse sino con relación á esas mismas minas que son la materia sujeta de los citados actos legislativos, ni aplicarse sino á ellas por consiguiente, en razón á que cuando ocurre duda sobre la inteligencia de la ley, el contexto de ésta debe servir para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía, según el precepto del artículo 30 del Código Civil, y en razón también á que conocido el fin que se propuso conseguir el legislador con las disposiciones constitucionales y legales sobre minas, de que se viene hablando, que es indudablemente el de fomentar el descubrimiento y la explotación de las piedras y metales preciosos, es preciso desechar toda interpretación de esas disposiciones que

sea contraria á aquel fin, como lo sería de un modo inconcuso la que se diera al artículo 9.° de la Ley 38 en cuestión, si se entendiera, como lo quiere el recurrente, que conforme á él pertenecen al dueño de una mina de cal ú otra no denunciable todos los productos minerales, que se encuentran dentro de sus límites, con exclusión de la Nación, menoscabando sus derechos y contrariando los propósitos claros del legislador.

"Por último, dice el recurrente, la sentencia es violatoria del artículo 78 del Código de Minas, pues el doctor Olaya elabora la mina de cal en virtud del título de propiedad que tiene, y que reconoce el Código Civil; y no ha estado ni está en la obligación de practicar las diligencias que se especifican en los artículos siguientes al 78, porque ellas sólo son indispensables cuando la mina que se posee es de las denunciables, y no cuando no pertenece á esa clase, como sucede con la de cal que el doctor Olaya R. posee por derecho propio y absoluto."

Sobre esto ocurre observar desde luégo que en la sentencia acusada no se impone á Olaya R. la obligación de practicar, respecto de su mina de cal, las diligencias de que tratan el artículo 78 y siguientes del Código de Minas, y por tanto, la preinserta alegación es improcedente é infundada en absoluto. En dicha sentencia no hizo el Tribunal aplicación de los artículos 78 y siguientes del Código de Minas ni del 70 á que aquél se refiere, para decidir la presente controversia en cuanto dice relación á la mina de cal explotada por Olaya Ricaurte y á los derechos que éste tenga sobre ella, ni tuvo necesidad de hacerla, porque las minas de esta clase no son denunciables, y por lo mismo, no están sujetas á las reglas establecidas en dicho Código, según se ha demostrado anteriormente, y no habiéndose aplicado tales disposiciones, es visto que la objeción del recurrente, que se funda en la suposición contraria, carece de fundamento. Tampoco lo tiene, finalmente, la alegación que hace el recurrente de haberse aplicado indebidamente el artículo 126 del supracitado Código al caso del pleito, respecto de la mina de cal explotada por Olaya R., pues en la sentencia acusada no se ha reconocido á Currea P. derecho para impedir, en caso necesario, la explotación de la piedra caliza de dicha mina, en calidad de primer descubridor de ésta, caso en que sí se habría hecho indebida aplicación del aludido artículo 126, por no ser denunciable dicha mina, sino como consecuencia legal y natural del reconocimiento de los derechos de posesión y propiedad adquiridos por el mismo Currea sobre la mina de esmeraldas descubierta y denunciada por él, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 9.° de la Ley 38 de 1887, según el cual, al dueño de una mina de filón pertenecen todos los productos minerales que se encuentren dentro de sus límites, aunque no hayan sido denunciados, y en virtud también del artículo 3.° del Código de la materia, en que se establece que la adjudicación legal de las minas denunciables lleva consigo la condición tácita en su favor, de las servidumbres y uso del terreno necesario para su elaboración, así como de los demás objetos que se encuentren en el mismo paraje en que hayan sido descubiertas dichas minas, ó en sus inmediaciones y que sean necesarios para el laboreo de ellas; todo en la forma y términos establecidos por la ley, con la obligación, por consiguiente, de indemnizar los perjuicios procedentes de aquellas causas, al tenor del capítulo 13 del citado Código, y demás disposiciones legales sobre la materia, de todo lo cual se colige que el Tribunal no aplicó el citado artículo 126 á casos ó cosas no previstos ni mencionados en él de una manera impropia ó aberrante.

En resumen, y como epílogo de lo expuesto, las causales del recurso de casación que se interpuso por parte del opositor Olaya R., no existen ó son infundadas, y así debe declararse.

Pásase ahora á examinar las que por su parte ha alegado el apoderado de Currea P., tratando de infirmar la sentencia del Tribunal en cuanto por ella se resuelve que el recurrente no tuvo derecho á denunciar la mina de esmeraldas en el cerro del Salitre de propiedad de Pedro Cantini, y fundado en los incisos 1.°, 3.°, 4.° y 8.° del artículo 38 de la Ley 61 de 1886.

La primera objeción que dicho apoderado hace á la sentencia, es que ella en su parte dispositiva viola los artículos 6.°, 8.°, 117, 118, 126 y 127 del Código de Minas, la segunda parte del artículo 2.° de la Ley 38 de 1887, y el artículo 4.° de la Ley 292 de 1875, por cuanto estando plenamente comprobado que Currea P. fué el primer descubridor de la mina disputada, por haber dado primero el aviso respectivo, refiriéndose muy especialmente al cerro del Salitre, cerro que queda comprendido dentro de la extensión correspondiente á la base de la medida fijada, según la ley, por el denunciante, éste adquirió por ese solo hecho un derecho preferente á dicha mina, derecho que, dice, consagran especialmente las disposiciones citadas, y que la sentencia desconoce, sin embargo, sin concederlo á ninguna otra persona, cuya preferencia estuviera establecida.

Como en la sentencia acusada no se hacen apreciaciones en el sentido de desconocer los derechos que en general adquieren los descubridores de minas de propiedad nacional, conforme á las disposiciones legales sobre la materia ni de negar la preferencia que del mismo modo otorgan éstas al primer descubridor que llene ciertas formalidades exigidas al efecto; como tampoco se niegan á Currea P. sus derechos preferentes como primer descubridor de la mina de esmeraldas disputada, de un modo completo y absoluto, sino únicamente en tanto cuanto la mina se halle dentro de los límites del cerro del Salitre, perteneciente á Pedro Cantini, y como el recurrente ha limitado sus objeciones, según el extracto fiel que de ellas se ha hecho, á la parte de dicha sentencia en que se declara que Currea P. no tuvo derecho para denunciar la mina existente en terrenos de Cantini, sin resolver á cuál de los dos competidores debía tenerse como primer descubridor y dueño de la mina, como debió hacerse, por ser ese uno de los objetos principales de la presente controversia, lo cual, no obstante, esa omisión envuelve limitación ó privación parcial de los derechos inherentes al primer descubrimiento hecho por Currea P.; á estos puntos también debe contraer y contraerá la Corte el estudio que pasa á hacer de la causal de casación alegada en primer término por la parte del mismo Currea.

Vistas las diligencias en que consta que Currea P. y Cantini dieron sucesivamente, el primero con fecha 16 de Junio de 1888, y el segundo, con las de diez de Julio y cuatro de Septiembre del propio año, los avisos del descubrimiento de la mina de esmeraldas en cuestión, diligencias que corren en copia á fojas 6.ª y 29 del cuaderno número 1.° de estos autos, y el 21 del cuaderno número 4.°, y habida consideración á que Currea P. dió su aviso en su propio nombre, sin que aparezca que lo recomendara para darlo otra persona, ni que ejecutara por cuenta de ésta los trabajos del descubrimiento, caso en que debería reputarse, para todos los efectos legales como primer descubridor á ese individuo, conforme al inciso 4.°, artículo 6.° del Código de Minas, no puede revocarse á duda que Currea P. ha adquirido un derecho preferente al de toda otra persona, inclusive Cantini, por de contado, sobre la expresada mina, según el artículo 117 de dicho Código, á menos que lo haya perdido por alguno de los motivos que enumera el artículo 118, ibidem, ó haya ocurrido alguna de las circunstancias que alegó Cantini, como otras tantas razones para oponerse á la posesión que se mandó dar á Currea P. por la Gobernación del Departamento.

En cuanto á lo primero se observa desde luégo que hasta ahora no ha ocurrido ninguno de los motivos por los cuales ha podido perder Currea P. sus derechos, según el artículo 118 supracitado, ni sobre esto se há alegado nada en contrario, por lo cual nada hay que resolver sobre el particular.

Resta sólo averiguar si las circunstancias ó razones expuestas por Cantini cuando se opuso á la posesión de la mina de esmeraldas, infirman ó desvirtúan los derechos de su contendor. Esas circunstancias son, en resumen, las siguientes:

1.ª Que el cerro del Salitre, perteneciente á Cantini, no está comprendido dentro de los límites que Currea P. señaló á la mina descubierta por él, al dar el aviso de su descubrimiento ante el Alcalde de Suesca, mientras que Cantini sí lo incluyó en el suyo, y por consiguiente, su derecho es preferente al de dicho Currea;

2.ª Que la mina de esmeraldas existente en dicho cerro,

se halla en el caso del artículo 78 del Códi[illegible] Minas, y por esta razón el aviso que Currea P., dió [illegible] descubrimiento al Alcalde de Suesca, no establece d[illegible] alguno á su favor, conforme al artículo 14 del mismo[illegible]go, que así lo dispone expresa y terminantemente, siendo[illegible]dvertir en este punto que Cantini se cree poseedor y d[illegible]le la mina litigiosa, con derechos exclusivos sobre ella, [illegible]serlo de los terrenos en que está situada, en virtud de la compra que hizo de éstos á la viuda y herederos del General Eustorgio Salgar, y que él considera ser uno de los títulos de que habla el inciso 2.° del artículo 70 á que se refiere el 78, antes mencionado, y por haber practicado las diligencias requeridas por esta disposición para obtener el título de adjudicación de la mina, expedido por la autoridad competente;

3.ª Que hallándose cerrado y cultivado permanentemente para la cría de ganados, el cerro del Salitre, donde se encuentra la mina en cuestión, Currea P. no ha podido catear ésta, ni extraer las muestras minerales que ha presentado, ni podrá explotarla sin avisarle previamente á Cantini, como dueño del terreno, y sin dar la correspondiente caución, al tenor de lo prevenido en el número 3.° del artículo 5.° del Código de la materia.

Sobre estas razones, que constituyen todo el fundamento de la oposición de Cantini á las pretensiones de Currea, pasa la Corte á exponer las reflexiones que le ha sugerido el estudio atento del proceso y de las disposiciones legales que rigen en el ramo de minas, y advierte, para evitar repeticiones, que todas las citas que haga de capítulos ó artículos de leyes, sin determinar expresamente, deben entenderse hechas con referencia al Código de Minas adoptado por la Ley 38 de 1887.

En primer lugar es de observarse que según las disposiciones del capítulo 2.°, el descubridor de una mina no es obligado á demarcar el perímetro del terreno en que ésta se encuentra, al dar el aviso de su descubrimiento, y si hace tal demarcación, ella no puede tener otro efecto que el de indicar el punto donde la mina está situada, de manera que en ningún caso sea posible confundirla con otra, según lo exige el artículo 8.°; mas de ningún modo el de circunscribir á determinado Circuito la extensión de la mina y los derechos del descubridor. Al dar el denuncio de que trata el artículo 32 ante la Gobernación del Departamento, ya debe el descubridor designar mejor la situación de la mina, determinando con entera claridad dos puntos de la línea que ha de servir de base de la medida y su dirección, y consignando en el escrito respectivo los datos é indicaciones que se expresan en el artículo 33 y en los anteriores á que él se refiere; pero todavía entonces no se mide la mina ni se fija su extensión. Es al tiempo de darse la posesión cuando debe, según el artículo 52, medirse su extensión por uno ó dos peritos nombrados al efecto, y teniéndose en cuenta las manifestaciones hechas por el interesado en el escrito de denuncio y las disposiciones de los artículos 25 y 29; y aún entonces todavía permite la ley hacer todas las alteraciones que quiera el que va á recibir la mina, bajo ciertas condiciones que enumera el artículo 26, de todo lo cual, aplicado al presente pleito, se sigue que la demarcación que Currea hizo en el aviso del descubrimiento de la mina de esmeraldas de que aquí se trata, no implica restricción ó limitación alguna que deba tenerse en cuenta al practicar la medición que debe tener lugar posteriormente, ni al fijar la extensión de la mina, la cual por ser de piedras preciosas, debe formar un cuadrado de un kilómetro de base, medido en la dirección que indique el denunciante, según lo dispone el artículo 2.° de la Ley 38 de 1887; aunque en esa extensión venga á comprenderse el cerro del Salitre, de propiedad de Cantini, con tanto mayor razón cuanto en la aludida demarcación hecha por Currea, al fijar el límite meridional del terreno ocupado por la mina en cuestión, sólo se dijo de un modo vago, que este terreno lindaba con los de la hacienda del "Potrero," sin expresar que este lindero coincidiera precisamente con la línea divisoria de este punto con el contiguo, y por consiguiente él puede coincidir con otra línea, que internándose hacia el Sur, en la hacienda de el "Potrero," no deje por esto de tocar con ella.

De otro lado debe tenerse en cuenta que el objeto del presente juicio no es aliuderar dos minas colindantes, pues si bien los dueños de éstas pueden, según el artículo 65 del Código, oponerse al tiempo de darse la posesión, cuando estimen que en la medida se comprende el todo ó parte de sus minas, y entonces la oposición da lugar á un juicio de deslinde ó amojonamiento, aquí no se está en ese caso, pues Cantini no se ha opuesto á la posesión que se mandó dar á Currea en calidad de dueño de una mina colindante, ni este juicio se ha seguido con el fin de hacer aquel deslinde ó amojonamiento, conforme al capítulo 23. De modo que todo lo que tienda á fijar los límites precisos de la mina de esmeraldas denunciada por Currea es exótico y ajeno de la sentencia acusada, y lo es por de contado, tomada en tal sentido, la declaración que en ella se hace de no haber tenido derecho Currea para denunciar la mina existente en el cerro del Salitre, por hallarse éste fuera de los límites que se expresaron en el aviso del descubrimiento.

En segundo lugar y por lo que respecta á los derechos que el opositor pretende derivar de los artículos 14, 78 y siguientes, la Corte observa que en autos no hay prueba de que Cantini haya poseído y elaborado la mina litigiosa en virtud de uno de los títulos de que habla el inciso 2.° del artículo 70, pues la compra hecha á la familia Salgar de la hacienda del "Potrero," no pertenece á esta clase sino en cuanto á su forma puramente externa; pero ese contrato en su esencia no se refiere ni directa ni indirectamente á dicha mina, ni por él se trasmitió derecho alguno sobre ésta al comprador Cantini. La cosa vendida por la familia del General Salgar, ó sea el objeto de ese contrato fueron los terrenos que constituyen el punto rural llamado "El-Potrero," no las minas de esmeraldas que dentro de ellos pudieron hallarse, la cuales no eran de los vendedores sino de la República, por ministerio del artículo 202 de la Constitución, y por tanto, no podían enajenarse válidamente por los particulares, sin que precediera la correspondiente adjudicación, por contravenirse con ello al derecho público de la Nación. Así que tampoco ha tenido Cantini derecho alguno á oponerse á que se ponga á Currea en posesión de la mina existente en terrenos de la propiedad de aquél, en conformidad á los artículos que se han citado al principio de este párrafo.

Finalmente hay que observar que si el cerro del Salitre en que se halla la mina de esmeraldas está cerrado y cultivado permanentemente, como lo alega Cantini, de ahí no se deducen otras acciones á favor de éste que las que establece el inciso 3.° del artículo 5.°, para impedir que se proceda á la explotación y al cateo de la mina, sin el aviso al propietario y sin dar la fianza allí prevenida, pues ni en esa disposición ni en otra alguna se da derecho para otra cosa, y por consiguiente no lo hay para oponerse por esos motivos á que se dé la posesión de la mina al descubridor, siendo como es éste un acto independiente y perfectamente separable de aquéllos.

El Tribunal ha juzgado lo contrario y por eso dijo en la sentencia acusada lo siguiente:

"Veamos la cuestión por otro aspecto. La denuncia de Currea P. sólo se refiere á la mina de esmeraldas que dice hallarse en el cerro de Chítiva, según los linderos señalados por él en el aviso respectivo; no se extiende al cerro del Salitre, de propiedad del señor Cantini, pero como al fijar el denunciante la base de la medida de la mina, parece *prima facie* que puede comprender parte del último cerro mencionado, preciso es averiguar si el señor Currea P. tiene ó nó derecho á explotar la mina en el cerro del señor Cantini. El Tribunal no vacila en negarle, por ahora, el derecho por la razón de que estando cercados y cultivados los terrenos donde se dice existe la tantas veces citada mina de esmeraldas, no ha podido el denunciante catearla, ni abrir calicatas en el terreno, ni hacer exploraciones en él, ni podrá explotarla, sin avisarlo previamente al dueño del terreno, ó al que se encuentre encargado de él y hasta ahora no se ha cumplido con esa formalidad."

Como se ve, el Tribunal, al declarar que Currea P. no tuvo derecho para denunciar la mina de esmeraldas en el cerro del Salitre, extendió los efectos del citado inciso 3.° del artículo 5.° á actos no mencionados allí, como son el denuncio,

la posesión y la medida de la mina, para los cuales ninguna ley exige que se dé el aviso previo y se preste la fianza de que trata dicho inciso, cuya disposición por consiguiente ha sido indebidamente aplicada, sin que pueda decirse con fundamento que la carencia de derechos para denunciar la mina provenga de lo que disponen los artículos 3.° á 5.° de la Ley 38 de 1887, porque, como lo ha demostrado el mismo Tribunal, la mina descubierta y denunciada por Currea, no es de aluvión, para que pudiera aplicársele la primera de esas disposiciones, ni conforme á la legislación del antiguo Estado de Cundinamarca, el dueño del suelo lo era del subsuelo, que es el caso previsto por los artículos 4.° y 5.° de la mencionada ley.

En suma, pues, resulta que la sentencia acusada en cuanto fija límites á la mina denominada por Currea P. y fija su extensión, y en cuanto declara que en el denuncio no puede comprenderse el cerro del Salitre, de propiedad de Cantini, conculca los derechos del denunciante y viola las leyes que conceden al primer descubridor la posesión y propiedad de las minas de piedras preciosas, con exclusión á toda otra persona, é infringe, en consecuencia, los preceptos del derecho público constitucional, que reservan á la República la propiedad de dichas minas y la facultad consiguiente de disponer de ellas á su arbitrio, siendo, por tanto, fundada la primera de las causales de casación alegadas por el recurrente Currea P.

La segunda de estas causales es que la sentencia en la parte que perjudica al recurrente, no es congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes, y se hace consistir esta incongruencia en que disputándose en este pleito la posesión y propiedad de la indicada mina, que es lo que pretende, Cantini, según su escrito de demanda, y lo único que en derecho podía disputarse, según lo que dispone el artículo 66 del Código de Minas, el fallo ha debido darse en armonía con tal demanda, y sin embargo no se dió así, sino que se resolvió que Currea no tuvo derecho á denunciar la mina de esmeraldas en el cerro del Salitre de propiedad de Cantini, lo cual no es ni ha sido materia del debate, ni lo puede ser jurídicamente, en conformidad con lo establecido en el artículo 66 ya citado. Queda dicho y demostrado que el presente juicio no es de deslinde, sino de posesión y propiedad, conforme á los artículos 382 y 383 del Código, y siendo esto así, es también fuera de duda que la sentencia es casable por esta segunda causal, pues aunque pueda presumirse que al declarar que Currea P. no tuvo derecho para denunciar la mina existente en el cerro del Salitre, implícitamente se decidió que la posesión y propiedad de ella pertenece á Cantini y no al denunciante, no por esto deja de ser cierto que el fallo, por no ser claro y explícito, como debió ser, carece de la congruencia y armonía que la ley quiere guarde con las acciones y excepciones deducidas por las partes.

Por idéntica razón es fundada la tercera causal de casación alegada por Currea, pues que no habiéndose resuelto expresamente á quién corresponde la mina del cerro del Salitre, en posesión y propiedad, como ha debido hacerse en la sentencia, es obvio que ésta adolece del defecto apuntado en la segunda parte del inciso 4.°, artículo 38 de la Ley 11 de 1886, invocado por el recurrente.

No sucede lo mismo por lo que hace á la última causal de casación alegada por éste, quien la hace consistir en la errónea apreciación de la prueba de inspección ocular practicada por el Tribunal en la cosa disputada, en razón á que se dió por demostrado con ella, que son dos cerros distintos, el de Chítiva y el del Salitre, siendo así que los peritos principales *opinaron* en desacuerdo sobre el particular y que el tercero nada resolvió á este respecto para dirimir la discordia, y en que el Juzgado ha dado por probado lo que no lo está en verdad, á saber: que los terrenos del cerro del Salitre están cultivados y destinados á la ceba y cría de ganados, sobre lo cual nada dijeron los peritos ni hay ninguna otra prueba en el expediente. A juicio de la Corte los peritos principales que intervinieron en la diligencia de inspección sí se pusieron de acuerdo sobre los dos puntos de que habla el recurrente; pero se abstiene de toda demostración sobre el particular, porque sean ciertos ó nó esos hechos, ello no influye de modo alguno en contra de las pretensiones de Currea P. como primer descubridor de la mina de esmeraldas en litigio.

En mérito de las consideraciones expuestas, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara fundado el recurso de casación interpuesto por parte de Laurentino Currea P. contra la sentencia definitiva de segunda instancia, pronunciada en este juicio por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, con fecha veintinueve de Septiembre de 1890, por las causales definidas en los tres primeros números del artículo 38 de la Ley 61 de 1886, é infundado en lo demás; casa en consecuencia dicho fallo en cuanto es desfavorable á Currea P. y declara que no es casable en cuanto perjudica á Rafael Olaya Ricaurte.

Con relación á la primera y segunda causales de casación, de las cuales se ha hecho ya mérito, y para los efectos que expresa el artículo 383 de la Ley 105 de 1890, hace las declaraciones siguientes:

1.ª La restricción que el inciso 3.°, artículo 5.° del Código de Minas pone al derecho concedido á todo individuo para adquirir el dominio de las minas denunciables de propiedad nacional, al tenor del mismo Código, no faculta al dueño del terreno en que se encuentren tales minas, para oponerse á que se dé posesión de éstas á sus primeros descubridores ni á que se midan y se fije su extención en conformidad á lo que sobre estos puntos disponen las leyes, ni puede surtir más efectos que los que se determinan expresamente en dicho inciso;

2.ª Las indicaciones que haga el descubridor de una mina denunciable y que se anoten en la diligencia de aviso del descubrimiento de que tratan los artículos 8.° á 10.° del Código de Minas acerca de la fracción ó localidad y el punto preciso donde está situada la mina, aunque por ellas quede completamente demarcado dicho punto ó localidad, no surten otro efecto que el señalar el lugar de la situación de la mina, de modo que no pueda confundirse con otra, pero no envuelven restricción ni limitación alguna para el efecto de medir y adjudicar la mina con la extención y en la dirección que debe tener conforme al Código citado, y demás leyes sobre la materia;

3.ª Los documentos y contratos á que se da la denominación de títulos en el inciso 2.° del artículo 70 del Código de Minas á que se refiere el 78 del mismo, son solamente aquellos en que el objeto de las respectivas obligaciones sea una mina de las legalmente denunciables, y

4.ª Lo dispuesto en el artículo 9.° de la Ley 38 de 1887, por la cual se adopta el Código de Minas del extinguido Estado de Antioquia, no debe entenderse ni aplicarse sino tratándose de minas de filón denunciables, según el mismo Código y demás leyes sobre la materia;

Por último, la Corte resuelve, en cuanto á lo principal del pleito, que Laurentino Currea P., en calidad de primer descubridor de la mina de esmeraldas de veta ó filón enteramente nueva, que ha denunciado como existente en los cerros de Salitre y Chítiva, en el Distrito municipal de Suesca, tiene un derecho preferente al de los opositores Rafael Olaya Ricaurte y Pedro Cantini, para tomar posesión de ella y explotarla, sin perjuicio del pago de la indemnización correspondiente conforme al Código de Minas, y previos el aviso y fianza, si ésta se exigiere, de que trata el inciso 3.°, artículo 5.° del mismo Código, y ordena, en consecuencia, que se lleve á cabo la posesión que á dicho Currea mandó dar el Gobernador del Departamento de Cundinamarca, por resolución de la Secretaría de Hacienda, fechada el 10 de Agosto de 1888, para lo cual el Juez de primera instancia pasará este expediente original al funcionario á quien se comisionó para dar dicha posesión.

No se hace condenación en costas.

Publíquese esta sentencia, notifíquese á las partes y déjándose copia de ella, devuélvanse los autos al Tribunal de su procedencia.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Mariano de Jesús Medina.—Juan Evangelista Trujillo.—Lucas Villafrádez.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, once de Octubre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Francisco Groot, como apoderado de Andrés Lenis, presentó dos peticiones ante la Comisión de suministros, reclamando, por la una, el reconocimiento del crédito de doscientos diez y seis pesos ($ 216), y por la otra, el de trescientos veintiocho pesos ($ 328), ambos procedentes de las exacciones que sufrió Lenis en la guerra de 1884 y 1885, para el sostenimiento del Gobierno legítimo, por parte de los agentes de éste, en el Distrito del Cerrito, Departamento del Cauca.

La Comisión rechazó la primera de estas reclamaciones, y accedió á la segunda, reconociendo á favor de Lenis, ó de su representante, la suma de trescientos veintiocho pesos ($ 328), por resolución de catorce de Julio último, suma que se descompone así:

Cuarenta y ocho pesos, valor de un caballo rucio, grande	$ 48
Veinte pesos, valor de una vaca blanca	20
Veinte pesos de una vaca colorada	20
Doscientos cuarenta pesos, valor del servicio de dos caballos, uno moro y otro rucio, en un año, á razón de diez pesos mensuales cada uno	240
Total	$ 328

Consultada esta providencia con el Ministerio del Tesoro, éste la reformó por resolución de ocho de Agosto último número 3,126, reduciendo el reconocimiento á la cantidad de ochenta y ocho pesos, valor del caballo y las vacas expropiadas, y absolviendo al Fisco del pago de mayor suma, dando como razón para dejar de reconocer el valor del servicio de los dos caballos de que trata la partida últimamente mencionada, que no habiendo mediado contrato de alquiler de dichas bestias, sino que únicamente aparece que le fueron expropiadas á Lenis, quien después las recuperó, no hay por qué reconocer ese valor.

De esta resolución apeló el reclamante en cuanto le es adversa, recurso que se le concedió para ante la Corte, la cual, después de sustanciarlo debidamente, procede á dictar el fallo que le corresponde.

Esta Superioridad juzga desde luégo que tanto la Comisión como el Ministerio del Tesoro tuvieron razón suficiente para rechazar la primera de las dos reclamaciones de que se ha hablado, pues no habiendo la menor prueba de las expropiaciones á que ella se refiere, así ha tenido que suceder. No juzga lo mismo respecto de la negativa por parte de dicho Ministerio á reconocer suma alguna por el alquiler de los dos caballos de Lenis, que los Alcaldes del Cerrito tomaron para el servicio público, sólo porque no se hiciera contrato de arrendamiento; porque las leyes que han reconocido á cargo del Tesoro los valores que se tomaron por el Gobierno en la última guerra, no exige para el caso de que se trata, que haya mediado contrato entre los funcionarios públicos y los particulares á quienes se hace sufrir la exacción, bastando que el hecho se compruebe debidamente, como lo está aquí el de haber tomado á Lenis los dos caballos de su propiedad, de orden de los Alcaldes del Cerrito, y haber estado tales semovientes en servicio del Gobierno durante un año completo, según lo declaran tres testigos presenciales, idóneos y contestes, que lo son Manuel Joaquín Reyes, Jesús Vera y Juan de la Cruz Lenis, en declaraciones que rindieron ante el Juez y Fiscal del Circuito de Buga, quienes certificaron sobre su idoneidad.

Tocante al importe de los alquileres, por los cuales reclama Lenis doscientos cuarenta pesos ($ 240), en que los aprecian los mismos testigos, la Corte considera inaceptable tal estimación y por esta razón, haciendo uso de la facultad que tiene por la ley para fijar la cuantía de la reclamación, verdad sabida y buena fe guardada, reduce á la mitad aquel avalúo y el reconocimiento consiguiente á cargo del Tesoro.

En conformidad con lo expuesto y de acuerdo en parte con la opinión fiscal, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, reconoce á cargo del Tesoro nacional y á favor de Andrés Lenis, ó de su apoderado sustituto José Joaquín Rico, por razón de expropiaciones y suministros en la última guerra, la cantidad de doscientos ocho pesos, y absuelve á la Nación de lo demás que ha reclamado, reformando en estos términos la resolución apelada.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Mariano de Jesús Medina.—Juan Evangelista Trujillo.—Lucas Villafrádez.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, seis de Octubre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Francisco Rueda Sarmiento, mayor de edad y vecino de Galán (Departamento de Santander), en memorial de seis de Abril del corriente año, dió poder especial á Francisco Plata, para que en su nombre y representación demandase ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Sur, del mismo Departamento, la nulidad de los títulos conferidos á Ricardo Díaz Pinilla, por el Gobierno nacional, en virtud de la adjudicación definitiva que hizo á éste de los terrenos nombrados "Acurrucos," "Carpinteros" y "Mérida" considerándolos como baldíos."

En efecto, Francisco Plata, por sí mismo y como adjudicatario comunero con Julián Orejanera, y además, haciendo uso del poder que le confirió Francisco Rueda Sarmiento, en cuanto á éste le corresponden derechos como cultivador y propietario, según la Ley 48 de 1882, se presentó ante dicho Tribunal Superior, con fecha ocho de Abril del año en curso, para que con audiencia del Fiscal del mismo Tribunal y del citado Ricardo Díaz Pinilla, como demandados, y previo un juicio ordinario, se hiciesen varias declaraciones concernientes á los derechos que los demandantes tienen adquiridos en los excedentes de tierras adyacentes á las que fueron adjudicadas á Ricardo Díaz Pinilla.

Admitidos el poder y la demanda se dió á ésta el curso legal correspondiente; y estando en tiempo hábil el referido Francisco Plata, por escrito de ocho de Julio último, reformó la demanda en el sentido de que ella, y de consiguiente el juicio correspondiente, se adelantase con la exclusiva intervención de Ricardo Díaz Pinilla, quedando excluída la Nación como demandada.

Con tal novedad, el Tribunal Superior del Sur dictó, en veintitres del citado Julio, el auto que se copia:

"Surtida la audiencia de los que han figurado como interesados en este asunto, advierte el Tribunal, que concretándose la reforma de la demanda de que trata el demandante, á que se tenga como único demandado á Ricardo Díaz Pinilla, por el mismo hecho cesa la jurisdicción del Tribunal para seguir conociendo de la referida demanda sobre nulidad de ciertos títulos de concesión de tierras baldías; y así se resuelve teniendo en cuenta lo que dispone el inciso 2.°, artículo 73 del Código de Organización Judicial."

"En consecuencia, suspéndase todo procedimiento en el particular."

Apelada la providencia preinserta, se concedió el recurso interpuesto para ante este Supremo Tribunal, en donde sustanciado con arreglo á las disposiciones legales de la materia, y con previa audiencia del señor Procurador general de la Nación, se procede á dictar el fallo que corresponde.

En los juicios civiles ordinarios en que la Nación figura como parte demandada ó demandante, la jurisdicción para conocer y resolver dichos juicios, es distinta de la jurisdicción privativa que compete en las controversias que se sostienen sólo entre particulares.

Conforme á las disposiciones de organización judicial, de las demandas que propone la Nación contra particulares, y en las que éstos establecen contra aquélla, cuando la cuantía excede de mil pesos ($ 1,000), conocen en primera instancia los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y la Corte Suprema en segunda; mientras que de los juicios de mayor cuantía sostenidos entre individuos particulares el Tribunal

Superior respectivo conoce en segunda instancia, por apelación que se interponga contra las providencias dictadas en primera instancia por los Jueces de Circuito.

La demanda instaurada por Francisco Plata en nombre propio y en el de otros particulares, contra la Nación y conjuntamente contra Ricardo Díaz Pinilla, aunque dirigida contra éste debía seguirse en el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Sur, en el Departamento de Santander, atendiendo al fuero especial á que deben ser sometidas privativamente todas las controversias en que la Nación está interesada. Pero como el demandante tiene derecho á aclarar, adicionar y corregir la demanda, y Francisco Plata corrigió y modificó la que tenía propuesta, excluyendo á la Nación, de suerte que el juicio á que diera lugar dicha demanda debería seguirse únicamente entre particulares, la jurisdicción debía cambiar por el mismo hecho; es decir, correspondiendo al Juez del respectivo Circuito el conocimiento en primera instancia de la misma demanda, y terminando la actuación ante el Tribunal Superior.

Esto es lo que, en fuerza de la precedente doctrina, fué decidido principalmente en el auto que es materia de la apelación. La Corte, sin embargo, observa que el Tribunal Superior, en vez de disponer que el expediente se pasara al respectivo Juzgado de Circuito, dispuso que se suspendiera todo procedimiento en el particular; disposición que puede no avenirse bien con las pretensiones del demandante, si éste creyere conveniente gestionar en el asunto ante el Juez de primera instancia que sea competente.

Por tanto, la Corte, de conformidad con el concepto del señor Procurador general, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, reforma el auto apelado, declarando, como declara, que el Tribunal Superior del Sur en el Departamento de Santander yá no tiene jurisdicción para conocer y decidir en primera instancia de la demanda aludida, desde que la Nación ha dejado de ser parte demandada, y dispone que el citado Tribunal Superior remita lo actuado al Juez que fuere competente, para los efectos ulteriores.

Notifíquese, cópiese é insértese en la *Gaceta Judicial*.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA. — JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, tres de Octubre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, en auto de treinta de Junio último, dispuso remitir á esta Suprema Corte la actuación iniciada desde el mes de Abril de mil ochocientos setenta y tres, contenida en dos sumarios acumulados, con el objeto de averiguar si el Administrador de la Aduana de Carlosama, Lino Cárdenas, y algunos empleados de la Aduana habían cometido el delito de asonada, y si el primero había abandonado el destino.

El Tribunal confirmó el auto del Juez del Circuito de Obando, por el cual declaró prescritas las penas en que pudieron haber incurrido los empleados del Resguardo, y ordenó la remisión del expediente á la Corte para que determine lo conveniente respecto del ex-Administrador Cárdenas, por corresponder á la Corte el juzgamiento en una sola instancia de los empleados de esta categoría.

El señor Procurador solicita que se acredite el carácter oficial del sindicado; pero la Corte juzga innecesario esto, porque en el folio 25 está copiada la diligencia de posesión de Lino Cárdenas como Administrador-Tesorero de la Aduana de Carlosama, extendida en ocho de Marzo de mil ochocientos setenta y tres.

Es inútil, por otra parte, proseguir la investigación, porque habiendo trascurrido más de diez y nueve años desde que se verificaron los sucesos que la motivaron, la pena en que pudo incurrir el sindicado está prescrita.

Por lo cual, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara prescritas las penas en que pudo incurrir el ex-Administrador de la Aduana de Carlosama, Lino Cárdenas, por los hechos criminosos que han sido materia de esta investigación, y ordena que se archiven estas diligencias.

Notifíquese é insértese en la *Gaceta Judicial*.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA. — JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, once de Octubre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Esta Corte, por auto de doce de Mayo del año en curso, anuló la causa seguida en Consejo ordinario de guerra á Félix Zúñiga, soldado de la segunda Compañía del *Batallón Colombia*, de guarnición en Panamá, por insubordinación, y dispuso la reposición del proceso desde que se hizo sin las formalidades necesarias el sorteo de un Vocal para el Consejo.

Devuelta la causa al Comandante del citado Batallón, se repuso lo anulado, y reunido el Consejo en la plaza de Panamá en veintisiete de Julio de este año, profirió sentencia en la misma fecha condenando á Zúñiga á la pena de dos años de presidio, á ser lanzado del Ejército y á la pérdida de los derechos civiles y políticos durante el término de la pena corporal.

De esta sentencia apeló uno de los defensores del reo, y á virtud de la interposición de ese recurso, fué elevado de nuevo el expediente á la Corte, en donde se le ha dado el curso prevenido por el artículo 412 de la Ley 105 de 1890.

Para decidir, se considera lo siguiente:

El defensor del procesado alega dos motivos de nulidad ocurridos después de la reposición ordenada por la Corte, á saber:

1.° Que entre los miembros que compusieron el Consejo figuró el Teniente Antonio Holguín, testigo en el juicio, é impedido para ser Vocal, conforme al artículo 1397 del Código Militar;

2.° Haber sido Vocal del mismo Consejo el Teniente José López, perteneciente á la misma Compañía del reo, cosa prohibida por el artículo 1390 del Código citado.

Ambos hechos resultan de autos, y como ellos constituyen irregularidad en la formación del Consejo de guerra, y producen nulidad conforme á los artículos 1534 y 1535 del Código que acaba de citarse, la Corte, por unanimidad de votos, resolvió afirmativamente la cuestión sobre incompetencia, que le fué propuesta en cumplimiento de lo que previene el artículo 1545 ibidem.

Observa, además, la Corte otras irregularidades que indica para que en lo sucesivo se enmienden.

Han dejado de hacerse al reo varias notificaciones, y siendo él parte presente en la causa, no hay razón para que ésta se entienda únicamente con el defensor.

La forma de las notificaciones es altamente irregular, porque no expresa qué es lo que se notifica ni la hora en que se surte el acto. Para esto y otras muchas cosas relativas al procedimiento son de mucha utilidad los modelos adjuntos al Código Militar.

Para el cómputo de la duración de la pena de presidio no se tuvo en cuenta el precepto del artículo 363 de la Ley 105 de 1890.

Se impuso al reo la pena de pérdida de los derechos civiles mientras dure la corporal, y esa pena ha sido abolida por el Código Penal vigente.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el parecer del señor Procurador, declara fundado el recurso de nulidad interpuesto en esta causa, y en consecuencia, se procederá á convocar nuevo Consejo.

Notifíquese esta resolución, déjese copia de ella, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente por conducto de la Comandancia general del Ejército.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

IMPRENTA DE ANTONIO M. SILVESTRE.

REPÚBLICA DE COLOMBIA.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AÑO VIII | Bogotá, 7 de Julio de 1893. | NÚM. 403.

CONTENIDO.

Págs.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

La que concede á Juana María Delgado una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Pombo).. 313
La que concede á Tomás Trujillo una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Fernández de Soto)..... 313
La que concede á Manuel Vidal Gutiérrez una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Izasa)..... 314
La que niega á Andrés Morales el reconocimiento de un crédito por expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Botero Uribe)..... 314
La que niega á Carmen Amador de Núñez una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Corrales..... 315
La que concede á Francisco Moreno una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Galindo)..... 315
La confirmatoria de la resolución del Ministerio del Tesoro, dictada en la reclamación de Lorenzo Solís. (Magistrado ponente, doctor Botero Uribe)..... 315
La que concede á Agustín Ortega una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas)..... 316
La que concede á Jaime Zúñiga una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Botero Uribe) 316

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

El que revoca en parte el auto dictado por el Tribunal de Panamá en unas excepciones opuestas en el juicio de reivindicación seguido por el Fiscal de dicho Tribunal contra Domingo Icaza. (Magistrado ponente, doctor Galindo). 317

NEGOCIOS CRIMINALES.

El confirmatorio del auto dictado por el Tribunal de Tunja en el sumario instruído contra Joaquín Buitrago, como Juez del Circuito de allí, por varios cargos). Magistrado ponente, doctor Galindo 318
El en que se abstiene la Corte para resolver la consulta hecha por el Tribunal del Cauca, sobre el auto de sobreseimiento dictado en el sumario instruído contra el Juez del Circuito de Roldanillo, Crisanto Valenzuela, por abuso de autoridad. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas)..... 318

NEGOCIOS VARIOS.

Diligencia de visita practicada por el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia en la Secretaría de la misma, el día 30 de Junio de 1893..... 319

GACETA JUDICIAL.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, tres de Junio de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Juana María Delgado, vecina de Popayán, y en su carácter de madre de Cayetano Fandiño, ha solicitado la concesión de una recompensa unitaria y definitiva, por medio de su apoderado Salvador Valencia Fernández, por haber muerto dicho Fandiño en el campo de batalla y en defensa del Gobierno legítimo en 1876.

De acuerdo con las prescripciones de la Ley 84 de 1890, se han producido las siguientes pruebas:

1.ª Las declaraciones de Bernabé López, Rudesindo Caicedo y Clemente Hurtado, recibidas con las formalidades legales, quienes aseguran uniformemente que presenciaron la muerte de Cayetano Fandiño, que tuvo lugar el treinta y uno de Agosto de 1876, en la batalla de "Los-Chancos," combatiendo á mano armada, en su calidad de soldado al servicio del Gobierno, en donde recibió un balazo que le causó la muerte; que saben que Fandiño era quien sostenía á su madre Juana María Delgado, la cual vive hoy de la caridad pública, está muy anciana y observa conducta intachable, y que sabe también que Fandiño murió célibe y sin dejar descendientes de ninguna clase;

2.ª Una certificación del Cura interino de la Parroquia de la Catedral de Popayán, Presbítero Cesáreo Caicedo, en la cual está inserta la partida de bautizo de Cayetano Donato, como hijo natural de Juana María Delgado;

3.ª Dos certificaciones del señor Ministro del Tesoro, con las cuales se acredita que la solicitante no ha recibido pensión ni recompensa del Tesoro público por la muerte de su hijo;

4.ª Últimamente por solicitud del señor Procurador general de la Nación se ha acreditado que Juana María Delgado permanece soltera.

Justificados así los hechos constitutivos del derecho de la solicitante, la Corte Suprema, de acuerdo con lo que disponen los artículos 1.°, 2.°, (numeral 2.°), 6.° y 9.° de la Ley 84 de 1890 y con lo pedido por el señor Procurador, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que Juana María Delgado tiene derecho á recibir del Tesoro nacional la recompensa unitaria y definitiva de setecientos cuatro pesos ($ 704), equivalente al sueldo del soldado en cuatro años, por la muerte de su hijo Cayetano Fandiño en el campo de batalla.

Notifíquese, cópiese, dése cuenta al Ministerio del Tesoro, publíquese en la *Gaceta Judicial* y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO.
Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, tres de Junio de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Tomás Trujillo, vecino del Municipio de Timbío, Provincia de Popayán, en el Departamento nacional del Cauca, confirió poder á Salvador Valencia Fernández, para que demandase, ante esta Superioridad, la recompensa unitaria definitiva á que se cree acreedor á causa de invalidez producida por heridas que recibió el veintiocho de Agosto de 1876, en un combate que tuvo lugar en el sitio de "El-Tablón," entre las fuerzas rebeldes que comandaba Fermín Mondragón y las que sostenían al Gobierno legítimo de entonces, á las cuales pertenecía el referido Trujillo. Incoada la demanda por el Procurador de éste, de acuerdo con el derecho que consagra la causal 5.ª, artículo 5.° de la Ley 84 de 1890, sobre recompensas militares, y previa la secuela especial que establece la misma ley, procede la Corte á dar vado al asunto.

Con un número plural de testigos hábiles que dan razón de su dicho, se ha comprobado plenamente que Tomás Trujillo combatió en la función de armas de que se ha hecho mérito, en defensa del Gobierno constitucional; que fué herido en el brazo izquierdo y quedó inhabilitado para el trabajo; que es pobre y no tiene renta ni bienes de ninguna clase de donde pueda deducirla, y que ha observado y observa buena conducta.

carse en su concepto sino en los casos en que haya una absoluta convicción ó ausencia de posible error, haciendo uso de una facultad legal, solicita del Excelentísimo Señor Presidente de la República, que ejerza en este caso la atribución constitucional de conmutar dicha pena por la de presidio.

Como Ascensión Morillo murió en la cárcel del Circuito de Santo-Domingo, el dos de Abril de mil ochocientos noventa y uno, hubo de ponerse término al procedimiento contra ella.

3.° Haberse incurrido en las causales de nulidad designadas en los ordinales 1.°, 3.°, 4.°, 5.°, 6.° y 7.° del artículo 264 de la Ley 57 de 1887.

No existe en la causa ninguna de las informalidades ú omisiones que dan lugar á este motivo de casación y requieren la reposición del proceso.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, declara que no hay motivo para anular la sentencia consultada y en consecuencia la confirma.

Solicítese del Excelentísimo Señor Presidente de la República la conmutación de la pena de muerte, impuesta á Tobías Morillo, por la inmediatamente inferior en la escala penal.

Para los efectos consiguientes remítase el proceso al Ministerio de Justicia.

Notifíquese, déjese copia y publíquese en la *Gaceta Judicial*.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

SALVAMENTOS DE VOTO

DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS MEDINA Y VILLAFRÁDEZ.

El suscrito Magistrado salva su voto, en la anterior sentencia, en lo que respecta á la parte expositiva de los motivos ó indicios que se hacen valer para no estimar como notoriamente injusto el veredicto del Jurado, y se funda:

1.° En que si la Corte aprecia esos indicios ó presunciones como Juez de hecho para inferir el cuerpo del delito y su autor, el suscrito no tiene que hacer otra observación sino la de que su criterio no se conforma con el de la Corte;

2.° En que si los mismos indicios los estima como Juez de derecho y con idéntico objeto, estableciendo así doctrina legal, el desacuerdo entre las opiniones del infrascrito y lo declarado por la Corte es aún más profundo, como pasa á demostrarse.

Los indicios y presunciones los saca la Corte de la información sumaria; pero las declaraciones que á aquéllos se refieren, no están firmadas por el declarante ni por un testigo, en el caso de no saber ó no poder hacerlo; y no merecen por eso fe, para que el Juez de derecho pueda formar juicio, el que debe apoyarse siempre en pruebas legalmente constituídas. Mas, dado que lo contrario fuese lícito, si se examinan dichas declaraciones, aparece que Tobías Morillo, se presentó con un arma de fuego en la mano donde pudieron verlo dos individuos á quienes manifestó que acababa de hacer un tiro. Esta prueba pertenece á la especie que el derecho llama *confesión:* si se la suprime en los autos no queda nada para comprobar el cuerpo del delito y el delincuente; pero como la confesión del sindicado no sirve para probar el cuerpo del delito, la estimación de ese indicio con tal fin establecería una doctrina legal contraria á la ley; y si se estima únicamente para probar quién fué el autor del delito, ella constituye una circunstancia atenuante, y entonces el crimen no alcanza el grado máximo de gravedad.

Se hace valer, también como indicio ó presunción, que la mujer de Buitrago, el desaparecido ó muerto, había hecho anteriormente proposiciones para que se matara á su marido; esto no tiene otro fundamento que la declaración de aquél á quien ella lo dijo; ese declarante no expresa la época ni las mismas palabras, ni el tono de que hiciera uso aquella mujer; ésta es también una confesión extrajudicial no probada legalmente, y de la que un Juez de derecho no puede hacer mérito alguno.

En cuanto á relaciones ilícitas, ó sea á la condición de adúltera, en que se quiere colocar á la citada mujer, no hay, como muy justamente lo hace notar el señor Procurador, prueba legal ninguna. A este respecto, así como acerca de la criminalidad de Tobías Morillo, de nada sirve la creencia de la generalidad de los habitantes de Nare, pues la fama pública no está admitida como prueba en materia criminal por la ley.

No es necesario un examen más detenido de éstos ni de los otros indicios enumerados en la sentencia, para fundar los siguientes conceptos:

a) No pueden los dichos, aun bien comprobados, ni otros mejores, ni más numerosos indicios servir para justificar el veredicto del Jurado, que tiene su único apoyo en la convicción íntima; no pueden servir, pues, como criterio legal, ni sobre ellos puede establecerse jurisprudencia para casos semejantes.

b) Pudiendo el Jurado desechar las pruebas del expediente para dar preferencia á las que en su conciencia halla, al Tribunal de casación no le queda otro criterio de injusticia notoria que el de la imposibilidad de las afirmaciones contenidas en el veredicto.

c) De acuerdo con las leyes actuales, los Jueces en primera instancia y los Tribunales en segunda, tienen más amplitud para apreciar los resultados de una causa criminal y evidenciar en cada caso la justicia ó injusticia de un veredicto, por no hacerse trascendental á otros juicios el que en cada uno de éstos formen.

Sobre estas razones descansa el voto del suscrito, en favor de la parte resolutiva de la sentencia y en contra de la expositiva.

Bogotá, Octubre ocho de mil ochocientos noventa y dos.

MARIANO DE JESÚS MEDINA.—POMBO.—ISAZA.—CASAS ROJAS.—CORRALES.—TRUJILLO.—VILLAFRADEZ.—*Rosas*, Secretario.

El Magistrado Villafrádez salva su voto, en estos términos:

Habiendo dado mi voto negativo á la parte de la anterior sentencia, en que declara la Corte que no hay motivo para anular el fallo pronunciado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, por el cual se condena á Tobías Morillo á la pena capital, como autor principal del delito de asesinato, en grado máximo, perpetrado en la persona de Ramón Buitrago, creo de mi deber expresar las razones que he tenido para apartarme de la opinión de la mayoría de la Corte, digna siempre de todo respeto, por la ilustración de mis honorables colegas, no menos que por el espíritu de rectitud é imparcialidad que domina en todas sus decisiones y que me complazco en reconocer y proclamar.

Mi opinión ha sido y es que el veredicto del Jurado que declara haberse cometido el delito de asesinato, definido en el artículo 440 del Código Penal de Cundinamarca y que él alcanza el grado máximo de gravedad, por concurrir las circunstancias que enumera el inciso 3.° de aquel artículo, es notoriamente injusto.

Para llegar á esta conclusión, he partido del supuesto de que el veredicto de un Jurado no puede calificarse de notoriamente injusto, sino cuando él es contrario á la evidencia, como en este caso lo ha asentado la mayoría de la Corte y como lo ha resuelto en otros análogos, pues tal es el precepto claro del artículo 313 de la Ley 57 de 1887, y de consiguiente toda argumentación que salga de estos límites, es necesariamente ilegal é inconducente.

Es, pues, en este concepto en el que me permito calificar de notoriamente injusto el veredicto condenatorio proferido por el Jurado en esta causa, no porque lo considere contrario á la evidencia de los sentidos, ó sea la que se funda en la ocurrencia de un fenómeno físico, como la existencia real y palpable de la persona que se ha tenido por muerta, con cuya demostración se haya destruído la base esencial del procedimiento que es el cuerpo del delito, ó como la ausencia del sindicado del punto en que el crimen tuvo lugar, en el mo-

mento de su perpetración, á una distancia tal que demuestre la imposibilidad de su participación directa en ella, pues ninguna de estas circunstancias ni otras semejantes aparece que hayan sucedido en el presente caso, sino porque en mi concepto, dicho veredicto es contrario á otra evidencia de carácter jurídico, tan manifiesta é irrecusable como la de los sentidos, cual es la falta de la debida comprobación del asesinato, con las circunstancias de gravedad máxima requeridas por el artículo 29 de la Constitución para aplicar la pena de muerte, esto es, la falta del cuerpo del delito cuya existencia es base indispensable del procedimiento criminal.

Esa falta de prueba, que ha sido reconocida por el Juéz de primera instancia, por el Tribunal Superior de Antioquia, y últimamente por la mayoría de la Corte, es para mí de evidencia incontestable; no siendo bastante para fundar una opinión contraria, los indicios ó meras presunciones cuyo minucioso recuento se hace en la determinación acordada por la Corte.

Doy por sentado que los hechos accesorios generadores de esos indicios estén plenamente probados como lo exige el Código Judicial.

Doy también por sentados el enlace y conexión que esos indicios deben guardar entre sí y con el hecho criminoso de que se trata para producir el efecto de plena prueba respecto de la existencia de éste.

Doy igualmente por sentado que son en número suficiente para formar prueba completa y acabada.

Supongo, en una palabra, que todos esos indicios y conjeturas reúnen las condiciones que en tan delicada materia exige el derecho, y sin embargo insisto en creer y sostener que el delito de asesinato en grado máximo, no está jurídicamente comprobado.

Los mencionados indicios y conjeturas pueden aducirse con más ó menos fundamentos, para demostrar que Buitrago murió realmente, y que su muerte fué causada por el tiro de rémington que varios testigos dicen haber oído á inmediaciones del sitio en que Buitrago se ocupaba en cortar leña, sin embargo de no haberse encontrado el cadáver, ni huellas, rastros ó señales ningunas del delito; pero no sirven por sí solos para probar que esa supuesta muerte se efectuara con las circunstancias constitutivas del asesinato en grado máximo que se le han asignado por el veredicto del Jurado, y que señala el inciso 3.°, artículo 440 del Código Penal citado por éste, á saber: que se ejecutara "con alevosía ó á traición y sobreseguro; ya sorprendiendo descuidada, dormida, indefensa ó desapercibida á la persona asesinada; ya llevándola con engaño ó perfidia, ó privándola antes de la razón, de las fuerzas, de las armas ó de cualquiera otro auxilio para facilitar el asesinato; ya empeñándola en alguna riña ó pelea provocada por el asesino con ventaja conocida por parte de éste; ó ya usando de cualquier otro artificio para cometer el delito con seguridad ó para quitar la defensa al acometido;" pues si todas estas circunstancias ó algunas de ellas concurrieron en la supuesta muerte de Buitrago, ello ha quedado en el más impenetrable secreto, faltando, como faltan, los datos que den á conocer el modo como se ejecutó el hecho y los actos preparatorios de él.

Debo advertir aquí, que mis observaciones no se dirigen contra el veredicto del Jurado de acusación, por el cual se resolvió haber mérito para declarar con lugar á formación de causa criminal contra Tobías Morillo, por el delito de homicidio en la persona de Ramón Buitrago, pues él no cae bajo la jurisdicción de la Corte; pero sí observo que ese veredicto no puede admitirse como prueba del delito de asesinato, en razón á que ese Jurado no se ocupó, ni legalmente podía ocuparse en resolver cosa alguna respecto de la existencia de este delito, ni de sus circunstancias. Ese veredicto puede, en suma, evidenciar la existencia del delito de homicidio voluntario y aun premeditado, jurídicamente hablando; mas no la del delito de asesinato en grado máximo, que es de lo que se trata.

Lo expuesto basta á mi propósito, que es el de hacer constar la evidencia jurídica de faltar en autos la prueba del delito de asesinato por que se ha condenado á muerte á Tobías Morillo, y de deducir de allí en primer lugar que el veredicto condenatorio, es notoriamente injusto, por ser contrario á esa evidencia, y en segundo lugar, que la Suprema Corte ha debido, en justicia, casar la sentencia condenatoria que le ha sido sometida en consulta, por la segunda de las causales designadas en el artículo 370 de la Ley 105 de 1890, no para absolver de pena al acusado, de lo cual no se trata, sino simplemente para remitir la decisión final de la cuestión debatida á un nuevo Jurado que pueda resolverla con mejor acuerdo, como lo establece el artículo 391 de dicha ley, y cuya determinación sería firme, valedera é inquebrantable, según allí mismo se previene.

Bogotá, ocho de Octubre de mil ochocientos noventa y dos.

LUCAS VILLAFRÁDEZ.—POMBO.—ISAZA.—CASAS ROJAS.—CORRALES.—MEDINA.—TRUJILLO.—*Rosas*, Secretario.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, seis de Octubre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Examinado el expediente relativo á la solicitud de recompensa que á esta Superioridad ha elevado el Subteniente Ignacio Piamba, vecino de Popayán, por medio de su apoderado Andrés Lara, como inválido por consecuencia de heridas que recibió en el campo de batalla, combatiendo en el año de mil ochocientos setenta y seis, en defensa del Gobierno legítimo de la República, se observa que están debidamente comprobados los hechos en que el reclamante funda su reclamación, á saber:

Que el peticionario fué herido en la guerra de mil ochocientos setenta y seis y mil ochocientos setenta y siete, estando al servicio del Gobierno legítimo, como Subteniente, en un combate que tuvo lugar en el punto de "Palomocho" el diez y siete de Marzo del último de aquellos años, entre las fuerzas defensoras del Gobierno á que él pertenecía y las revolucionarias de esa época. Así lo acreditan las declaraciones juradas de Bautista Parra, Catalino Guzmán, Miguel María Cancencio, Mateo Torres, Eusebio Castillo y Manuel María Valencia, compañeros de armas de Piamba.

Que el empleo ó graduación militar que entonces tenía el reclamante era el de Subteniente, según aparece del despacho respectivo expedido por el Presidente del antiguo Estado del Cauca, que se ha presentado original y corre al folio 16.

Que á causa de la herida expresada, Piamba perdió el uso de la mano derecha y sufre por ello invalidez relativa, según así consta de la diligencia del reconocimiento practicado por la Junta de profesores de que tratan los artículos 17 y 18 de la Ley 84 de 1890, compuesta de los doctores Juan N. Wallis O., Domingo Cagiao C. y Domingo Arboleda, quienes dieron su dictamen, bajo juramento, ante el Gobernador del Departamento que los nombró, en estos términos: "que tiene (Piamba) la cicatriz de una herida causada con instrumento cortante (machetazo) sobre la articulación de la mano con el antebrazo derecho; que por haber herido en parte la articulación y haber cortado los tendones extensores de los músculos de la región, los tres últimos dedos de la mano están en constante flexión, no pudiendo por lo mismo servirse de la dicha mano derecha, lo que indica la inutilización de ese miembro," y agregaron á virtud de pregunta que les hizo el Gobernador sobre el particular, "que la incapacidad para trabajar es solamente relativa, á pesar de tener la mano inútil, como queda dicho."

Que Piamba no ha sido recompensado por razón de su invalidez, según certificación del Ministerio del Tesoro, expedida el veinte de Agosto último, corriente al folio 23.

Y como dada la verdad de estos hechos, es incuestionable que el reclamante es acreedor á la gracia que solicita, en conformidad á lo que disponen el inciso 8.° del artículo 5.° y los artículos 9.° y 19 de la Ley 84 de 1890, la Suprema Corte, de acuerdo con la opinión del Procurador general y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que Ignacio Piamba tiene derecho á recibir del Tesoro nacional, por razón de la herida que recibió estando al servicio del Gobierno legítimo, en el empleo

de Subteniente, en el supracitado combate de "Palomocho," ó sea, por causa de la invalidez resultante de esa herida, la recompensa unitaria definitiva de novecientos sesenta pesos ($ 960), suma igual á la mitad señalada para el caso de invalidez absoluta.

Notifíquese, cópiese, comuníquese al Gobierno y publíquese en la *Gaceta Judicial*.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, siete de Octubre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: En la presente reclamación entablada por Andrés Lara, como apoderado de Manuel Solarte Chaux, vecino de Tambo, Provincia de Popayán, con el fin de obtener que se conceda á éste una recompensa del Tesoro nacional, en conformidad con lo que dispone la Ley 84 de 1890, como inválido á causa de heridas recibidas en defensa de los principios que informan las actuales instituciones, durante la guerra de 1876 y 1877, aparece comprobado lo siguiente:

1.° Que Solarte Chaux hizo la campaña en dicha guerra afiliado entre los defensores de la causa cuyos principios se han consagrado en las instituciones actuales, con el empleo de Teniente, en el *Batallón Tambo*, que comandaban el Coronel Hilario David y el Comandante Luis Ramírez, y que combatiendo en defensa de esa causa, el diez y siete de Marzo de mil ochocientos setenta y siete, en el punto de "Palomocho," recibió una herida en el cuello, que saliéndole al carrillo, le rompió la mandíbula inferior del lado izquierdo, la cual herida le ha producido la invalidez de que adolece. Así aparece de los testimonios rendidos bajo juramento por los testigos Luis Ramírez, José María Mosquera, Leonidas, Miguel y Simón Paredes, la mayor parte compañeros de armas del reclamante, de cuyos dichos resulta también la pérdida del archivo de la fuerza conservadora, por lo cual y por no existir dato alguno en la Oficina de la Gobernación del Cauca acerca de la graduación que tuviera Chaux, en el Ejército regenerador, según lo certifica el Gobernador de ese Departamento, debe admitirse sobre este punto la prueba testimonial;

2.° Que reconocido Solarte Chaux por la Junta de que tratan los artículos 17 y 18 de la Ley 84 de 1890, los profesores que la compusieron, por nombramiento del Gobernador del Cauca, doctores Domingo Cagiao C., Alfredo Garcés y Domingo Arboleda, declararon lo siguiente, por unanimidad: "Que tienen de presente á Manuel Solarte Chaux, á quien le han encontrado las cicatrices de una herida de bala, que entrando por la parte posterior y superior del cuello, salió casi á la parte media de la mandíbula inferior, rompiendo completamente este hueso y dejando muy deformada la cara; que debido á la forma viciosa con que consolidó el hueso, los movimientos de la mandíbula para el acto de la masticación son incompletos, y que á más de eso, dicho individuo sufre continuamente inflamaciones de la cara, lo cual le imposibilita de una manera relativa para trabajar como antes;

3.° Que el Teniente Solarte no ha recibido recompensa del Tesoro nacional, por razón de su invalidez, lo cual consta por certificación del Ministerio del ramo, expedida el diez de Septiembre próximo pasado.

Por tanto, y en observancia de los artículos 5.°, números 8.°, 9.° y 19 de la supracitada Ley 84, la Corte Suprema, de acuerdo con la opinión del Procurador de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que Manuel Solarte Chaux tiene derecho á recibir del Tesoro nacional, por razón de invalidez relativa producida á causa de la herida que recibió en el prenombrado combate de "Palomocho," la recompensa unitaria definitiva de mil doscientos pesos ($ 1,200), suma igual á la mitad de la señalada para el caso de inutilización absoluta.

Notifíquese, cópiese, comuníquese al Gobierno y publíquese en la *Gaceta Judicial*.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Octubre ocho de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Anastasio Duque, por medio de apoderado, ocurrió á la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones para que le reconociera, como cesionario de varias personas, la suma de doscientos cincuenta y cinco pesos ($ 255), procedente de empréstitos pagados por sus cedentes al Gobierno en la última guerra de mil ochocientos ochenta y cinco.

La Comisión sólo reconoció la cantidad de ciento cincuenta pesos ($ 150), y absolvió á la Nación del resto, en resolución número 3,726, de veinticinco de Mayo último, que fué confirmada por el Ministerio del Tesoro, el veinticinco de Junio siguiente, en providencia que lleva el número 2,982, que ha venido en apelación.

Corrido el correspondiente traslado al Fiscal de la Comisión y fijado el negocio en lista por el término legal, se procede á dictar el fallo del caso.

La Comisión reconoció únicamente la cantidad de ciento cincuenta pesos ($ 150), porque los recibos que le sirvieron de comprobante fueron autenticados y se acreditó el carácter oficial de quien los firmó, y negó el reconocimiento del resto, ó sean ciento cinco pesos ($ 105), porque los documentos que se presentaron para justificarlos no reúnen las condiciones apuntadas que tenían los otros recibos. A última hora el apoderado de Duque ha solicitado, que por auto para mejor proveer se remitan los recibos firmados por Guillermo Cadena, como Recaudador de empréstitos en Fusagasugá, á la Oficina general de Cuentas, para que se comparen con las firmas que debe haber allí de Cadena; pero no se ha accedido á ello, porque no bastaría comprobar que las firmas eran de quien las puso, si no se justificaba el carácter oficial de él.

Como el fundamento en que descansan las dos providencias apeladas es jurídico, como queda demostrado con lo que antecede, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, las confirma.

Notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Octubre trece de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Francisca Antonia Gil, por sí y á nombre de sus siete menores hijos legítimos, Manuel Dolores, Pedro Pablo, Juan de la Cruz, Mauricio, María Rosa, María Alejandrina y Francisco Guevara, pide se le conceda del Tesoro nacional, á ella y á sus expresados hijos, de acuerdo con la Ley 84 de 1890, recompensa militar unitaria, como viuda de Juan de la Cruz Guevara, que murió combatiendo en favor del Gobierno legítimo en la guerra de 1885.

En el expediente formado con ese objeto, se encuentra lo siguiente:

1.° Un certificado de autoridad competente, con que se acredita que Juan de la Cruz Guevara murió en la batalla de Santa-Bárbara de Cartago, que tuvo lugar el veintitrés de Febrero de 1885, peleando como soldado del *Batallón 2.° de Buga*, en defensa del Gobierno;

2.° Copias auténticas de una partida de matrimonio y de siete diligencias de bautismo, expedidas por el Cura-párroco de Guacarí (Departamento del Cauca), en que consta que Juan de la Cruz Guevara fué casado con Francisca Antonia Gil, y que tuvo en ella siete hijos legítimos, que están en la menor edad;

3.° Una información sumaria de testigos, recibida con las formalidades legales, con que se comprueba que la peticionaria es la viuda del finado Guevara, y que los siete hijos que dejó éste son justamente los que reclaman la recompensa; que los demandantes están muy pobres, observan buena conducta y vivieron en buena armonía con Guevara;

4.° Un certificado del Cura de Guacarí, que dice que la viuda no ha contraído nuevas nupcias y lleva vida moral, y

5.° Atestación del Ministerio del Tesoro, de que los demandantes no han obtenido pensión ni recompensa de la Nación.

En vista de estos hechos y de los documentos relacionados que los justifican plenamente, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el concepto del señor Procurador y con lo que dicen los artículos 5.° (ordinal 2.°), 6.° y 9.° de la Ley 84 de 1890, concede del Tesoro nacional á Francisca Antonia Gil, Manuel Dolores, Pedro Pablo, Juan de la Cruz, Mauricio, María Rosa, María Alejandrina y Francisco Guevara la recompensa militar de setecientos cuatro pesos ($ 704), suma que se debe dividir en dos partes iguales, de las cuales tomará una la viuda y la otra se distribuirá entre los siete hijos.

Notifíquese, cópiese, dése cuenta al Ministerio del Tesoro y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA. — JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, Octubre trece de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Ildefonsa Urrea, vecina de Bogotá é hija legítima del Coronel Joaquín Urrea, solicita de la Corte una recompensa militar á que cree tener derecho según la Ley 84 de 1890.

La peticionaria ha comprobado plenamente los hechos que á continuación se expresan:

1.° Por medio de la certificación expedida el veintiocho de Marzo de mil ochocientos noventa por el señor Cura de la Catedral de esta ciudad, doctor Rafael Carrasquilla, que es hija legítima de Joaquín Urrea y Leonarda Caballero;

2.° Por medio de la respectiva partida de defunción, dada en copia autorizada por el señor Cura de Santa-Bárbara de esta ciudad, doctor Carlos Cortés Lee, que el día siete de Octubre de mil ochocientos setenta y ocho, se hicieron en aquella iglesia las exequias á Joaquín Urrea, viudo de Leonarda Caballero;

3.° Mediante el despacho firmado á veintiseis de Agosto de mil ochocientos noventa, por el Excelentísimo Señor Presidente de la República y por el señor Ministro de Guerra, que Joaquín Urrea era *Coronel efectivo* de la Nación, según resolución de la Secretaría de Guerra de fecha doce de Marzo de 1877, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley 82 de 1876;

4.° Mediante la respectiva hoja de servicios, que Joaquín Urrea prestó los suyos al Gobierno de la República en la guerra de la Independencia, desde el 1.° de Septiembre de 1819 en adelante;

5.° Con las declaraciones rendidas con todas las formalidades legales, por los testigos Santiago Z. Calderón, Martín Mogollón y José María Jiménez, que Ildefonsa Urrea, huérfana de padre y madre, cumplió siempre con todos los deberes de una buena hija, acompañando y sirviendo á sus padres; que es persona honrada que vive de su trabajo; que está muy pobre y es soltera; y que su hermano Silverio murió hace más de diez años en Panamá;

6.° Con las declaraciones rendidas ante el Juez 2.° ejecutor de Bogotá, por Filomena Mora y José María Jiménez, en Junio último, que Ildefonsa Urrea no tuvo otro hermano que Silverio, quien murió en Panamá hace unos diez y seis años, dejando cuatro hijos legítimos, á saber: Amalia, Nicolás, Hermógenes y Zoilo, de los cuales éste último es mayor de treinta años y los otros tres murieron yá;

7.° Mediante una certificación del señor General en Jefe y Jefe de Estado Mayor general del Ejército de la República, que el Capitán Silverio Urrea, sirviendo en el *Batallón Pichincha* número 8.°, residió en Panamá hasta el día quince de Mayo de 1873, pero que en notas oficiales publicadas en el *Diario Oficial* número 2,881, correspondiente al diez y siete de Junio de 1873, consta que el Capitán Urrea falleció en el combate que tuvo lugar en aquella plaza en los días siete y ocho de Marzo anterior;

8.° Con una certificación del Secretario de la Alcaldía de Bogotá, que Nicolás Urrea fué sepultado en el cementerio antiguo, el día tres de Agosto de 1875;

9.° Mediante las certificaciones del Cura y del Alcalde de La-Mesa, que en sus respectivos archivos no hay constancia de la defunción de Amalia Urrea; mediante la certificación del Cura de Ibagué, que en su archivo no hay constancia de la defunción de Hermógenes Urrea; con la certificación del Notario del Circuito de Ibagué, que allí tampoco hay partida de defunción de Hermógenes Urrea; con la certificación del Secretario del Alcalde de Ibagué, que desde el año de 1873 no se ha llevado allí el registro del estado civil de las personas; y con la certificación del señor Cura de la Catedral, que Zoilo Urrea, hijo legítimo de Silverio, fué bautizado de dos días de nacido, el día primero de Julio de 1847, es decir, que es mayor de cuarenta años, y

10. En virtud de las declaraciones rendidas por Rafael González y Carlos Ruiz ante el Juez 1.° Ejecutor de Bogotá, en Junio del presente año, que Hermógenes Urrea murió en Ibagué el año de 1862; y en virtud de las rendidas ante ese mismo funcionario por Felisa Jiménez y Régulo Castro, que Amalia Urrea murió en La-Mesa, poco más ó menos, en el año de 1861 y 1862, cuando apenas tendría unos tres ó cuatro años de edad.

A petición del señor Procurador general de la Nación dispuso la Corte el dos de Agosto último, librar despacho al Juez del Circuito de Barranquilla, á fin de que pusiese en conocimiento de Zoilo Urrea que en la Corte cursaba el presente juicio, para que pudiese hacer valer sus derechos, si los tuviere, á participar de la recompensa militar á que dan lugar los servicios prestados á la República por su abuelo, el Coronel Joaquín Urrea; y el despacho fué diligenciado y consta en él que en veintisiete de Agosto último se notificó á Zoilo Urrea el contenido del mismo despacho; sin que el interesado haya, hasta ahora, hecho gestión alguna, lo cual da ocasión á presumir que no se halla en el caso de la ley para solicitar se le dé participación en la recompensa demandada.

En vista de tales comprobantes, la Corte, para dictar el fallo que le incumbe, considera:

El derecho de Ildefonsa Urrea á obtener recompensa militar, como hija legítima del Coronel Joaquín Urrea, está plenamente comprobado; y las dudas que ocurrían acerca de si otros deudos del mencionado militar podían optar derecho á participar de la recompensa, han desaparecido, toda vez que el único deudo que existe hoy es Zoilo, quien siendo mayor de edad, sólo podría tener derecho á causa de estar incapacitado para el trabajo, siendo de presumirse que si estuviera en tal caso, habría ya intentado alguna gestión en virtud del conocimiento que se le dió del presente juicio.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, declara que la expresada demandante Ildefonsa Urrea, como hija legítima del Coronel Joaquín Urrea, y de conformidad con los artículos 1.°, 9.° é inciso 1.° del 5.° de la Ley 84 de 1890, tiene derecho á una recompensa unitaria definitiva de seis mil setecientos veinte pesos ($ 6,720), que se le pagarán del Tesoro público.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial*, dése el correspondiente aviso á su Señoría el Ministro de Guerra y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA. — JUAN EVANGELISTA TRUJILLO. — LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, diez y siete de Octubre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: José Eugenio Robles, por medio de apodorado, ha pedido se le conceda, de acuerdo con la Ley 84 de 1890, recompensa militar unitaria del Tesoro nacional, como Teniente de la tercera Compañía del *Batallón Santa Marta*, que sirvió al Gobierno nacional en el extinguido Estado de Bolívar, en la última guerra, por haber quedado incapacitado parcialmente para trabajar á consecuencia de unas heridas que

recibió en el combate que tuvo lugar en Cartagena el siete de Mayo de 1885.

En autos se encuentran los siguientes documentos auténticos con que se acreditan los hechos que pasan á expresarse:

1.° Un certificado del Secretario de Gobierno del Departamento del Magdalena, con que se comprueba que José Eugenio Robles fué Teniente de la tercera Compañía del *Batallón Santa Marta* de las fuerzas con que el Gobierno del extinguido Estado del Magdalena auxilió al de Bolívar en la última guerra, y que en el combate que tuvo lugar en Cartagena en los días siete y ocho de Mayo de mil ochocientos ochenta y cinco, fué herido el expresado Teniente;

2.° Dos certificaciones de un General y un Coronel, que afirman que el peticionario es el mismo Teniente José Eugenio Robles, que bajo sus órdenes peleó en Cartagena en la época indicada y recibió dos heridas en la cabeza;

3.° Un reconocimiento practicado en la forma legal por tres médicos, que declaran que el demandante, á consecuencia de las dos heridas contusas recibidas en la cabeza, cuyas cicatrices se encuentran en el vértice y parte derecha superior de la misma, sufre de una amaurosis difícil de curar, que lo inhabilita parcialmente y de por vida para trabajar, y

4.° Un certificado del Ministerio del Tesoro de no haber recibido el actor pensión ni recompensa de la Nación.

En mérito de estos hechos, que están plenamente justificados y de lo que dicen los artículos 1.°, 5.° (ordinal 8.°), 9.°, 19 y 23 de la Ley 84 de 1890, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el concepto del señor Procurador, concede del Tesoro nacional á José Eugenio Robles la recompensa militar unitaria de mil doscientos pesos ($ 1,200), suma igual al monto de dos años del sueldo de Teniente.

Notifíquese, cópiese, dése cuenta al Ministerio de Guerra y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Mariano de Jesús Medina.—Juan Evangelista Trujillo.—Lucas Villafrádez.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, catorce de Octubre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Ha venido en consulta la sentencia de nueve de Junio del corriente año dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bolívar, en el juicio de responsabilidad seguido por los trámites extraordinarios contra el ex-Prefecto de la Provincia de Barranquilla, Diego J. de Castro, por los delitos de abuso de autoridad y omisión en el cumplimiento de sus deberes, sentencia en que se le condenó por el primer cargo, hecha la calificación en tercer grado, á pagar ocho pesos de multa, á la suspensión del empleo por dos meses, ó sea á diez pesos de multa por no tener yá el cargo de Prefecto, y á apercibimiento, y por el segundo cargo, que también fué calificado en tercer grado, á diez pesos de multa y á pagar, además, las costas del juicio, todo en cumplimiento de los artículos 77, 86, 531 y 565 del Código Penal.

Oído el concepto del señor Procurador general de la Nación, y fijado en lista el negocio por el término de cuatro días, se procede á dictar el fallo del caso.

El cargo de abuso de autoridad que se imputa al procesado, se hace consistir en que como Prefecto suspendió el nueve de Septiembre de mil ochocientos noventa y uno una resolución del día cuatro de los mismos mes y año del Alcalde municipal de Barranquilla, por la cual condenó á Próspero A. Carbonell, Gabriel Martínez Aparicio, Eparquio González, Pedro y Antonio Osío, á pagar cada uno de ellos una multa de cinco pesos, por haber formado en la plaza de San Nicolás de Barranquilla, el mismo día cuatro de Septiembre, un alboroto ó escándalo.

El Decreto número 115 de 1891 del Gobernador del Departamento de Bolívar, que reglamenta las leyes vigentes, ó mejor dicho, Ordenanzas sobre Policía seccional, divide ésta en Policía correccional, preventiva, penal y distributiva, y dispone, en su artículo 121, que las resoluciones de Policía correccional deben cumplirse sin demora y sin oír reclamación alguna, bajo la responsabilidad del empleado que las dicta, de modo que no admiten apelación ni recurso algunos, excepto el de queja, y en el capítulo que trata de las falta, que se castigan con medidas correccionales, se encuentra la de alborotos ó escándalos formados en calles, casas, plazas, caminos ú otros lugares.

Como en el expediente está perfectamente acreditado que lo que quiso castigar el Alcalde de Barranquilla con su providencia de cuatro de Septiembre de mil ochocientos noventa y uno, fué el alboroto formado en la plaza de San Nicolás, es obvio que esa providencia no pudo ser revisada por el Prefecto, y mucho menos ser suspendida por él. De suerte que ha habido razón para que se condene al procesado al tenor de los artículos 77 y 565 del Código Penal, sin que obsten para ello las observaciones siguientes:

1.ª Que el Código Penal no castiga sino las infracciones de la ley nacional, pero no las de las Ordenanzas departamentales. Este argumento es más especioso que fuerte, porque las Ordenanzas tienen fuerza obligatoria en los asuntos que les competen, y es precisamente el Código Político y Municipal, ley nacional, el que les ordena á los Gobernadores, Prefectos y Alcaldes obedecer y hacer cumplir las respectivas Ordenanzas. De suerte que el empleado que no cumple una Ordenanza que no es contraria á la ley, no solamente infringe una disposición departamental sino también el Código Político y Municipal que le manda obedecerla y hacerla cumplir.

2.ª Que un telegrama del Gobernador del Departamento de Bolívar en que le dice al Prefecto de Barranquilla que se apersone en el asunto de las multas y averigüe si en justicia deben ser revocadas, es una delegación de facultades. Esta objeción carece de fuerza, porque el negocio no podía ser revisado, como se ha hecho notar antes, ni por el Prefecto ni por el Gobernador, condición indispensable para que éste le hubiera podido delegar á aquél las facultades que tuviera.

El segundo cargo contra el encausado, de omisión en el cumplimiento de sus deberes, resulta de que la única razón alegada por el Prefecto para suspender la resolución del Alcalde, fué la de que éste omitió por completo, para imponer la multa, todas las formalidades ó reglas de procedimiento prescristas para ese efecto en el artículo 115 del mencionado Decreto, el cual ordena se practiquen previamente y por escrito varias diligencias protectoras de los derechos individuales.

Siendo exacto que el Alcalde no recibió declaración ninguna ni dejó constancia en su oficina de los hechos que pudieran justificar su providencia, es evidente que lo que debió hacer el Prefecto fué dar los pasos conducentes para que se exigiera inmediatamente la responsabilidad á dicho Alcalde, y no suspender la resolución de éste, que fué lo que se limitó á practicar, haciéndose acreedor de ese modo á las penas señaladas en los artículos 530 y 531 del Código Penal, que fueron los aplicados por el Tribunal de Bolívar.

En mérito de lo expuesto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el concepto del señor Procurador general de la Nación, confirma la sentencia consultada.

Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Izasa.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Mariano de Jesús Medina.—Juan Evangelista Trujillo.—Lucas Villafrádez.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

SALVAMENTO DE VOTO

DEL SEÑOR MAGISTRADO DOCTOR JESÚS CASAS ROJAS.

El infrascrito Magistrado salva su voto en este asunto, porque cree que la sentencia consultada debiera ser revocada para absolver al acusado, por no ser fundados los cargos por cuales se le ha condenado.

Dichos dos cargos consisten:

1.° En que habiendo el señor Diego J. de Castro, como Prefecto de Barranquilla, suspendido una resolución dictada por

el Alcalde del Distrito del mismo nombre, sobre imposición de una multa, se excedió en sus facultades é incurrió en la pena señalada por el artículo 565 del Código Penal.

2.° En que no habiendo dicho Prefecto dispuesto que se averiguara la responsabilidad en que hubiera incurrido el Alcalde de Barranquilla por haber impuesto, sin ciertas formalidades necesarias, una multa, omitió cumplir con un deber legal é incurrió en la pena señalada por el artículo 531 de dicho Código Penal.

Estos dos cargos parecen entre sí contradictorios, porque si la imposición de la multa se hizo con omisión de formalidades necesarias, como se pretende en el segundo de ellos, bien merecía suspenderse mientras no la revisara el Gobernador, y entonces no hay lugar al primero; y si la suspensión decretada por el Prefecto constituye un delito, debe suponerse que la providencia suspendida era correcta, y entonces no hay lugar al segundo cargo.

El inciso 8.° del artículo 195 de la Constitución y en concordancia con él, el inciso 8.° del artículo 158 del Código Político y Municipal, atribuyen á los Gobernadores la facultad de revisar los actos de los Alcaldes y revocarlos en ciertos casos; y como en autos hay constancia de que el Gobernador de Bolívar dirigió al Prefecto de Barranquilla un telegrama por medio del cual le encareció que interviniera en el asunto de la imposición de la citada multa; y como además al Prefecto están sometidos los Alcaldes á quienes deben aquéllos comunicar sus instrucciones para la recta ejecución de las órdenes superiores, según lo que disponen los artículos 174 y 181 del Código mencionado, se ve con toda claridad que el Prefecto de Castro, al suspender la resolución del Alcalde, sin duda para que pudiera revisarla el Gobernador, no hizo otra cosa sino cumplir con un deber legal, y que, en consecuencia, el primer cargo por el cual se le condena, no tiene fundamento de ninguna especie.

En cuanto al segundo cargo, para poner en evidencia que tampoco se apoya en razón legal suficiente, basta considerar que no estando comprobado en el expediente que la multa impuesta por el Alcalde de Barranquilla se haya hecho efectiva, no se puede juzgar si era ó no el caso de mandar juzgar al dicho Alcalde; es decir, que no se sabe si el Prefecto omitió en efecto, ó no, cumplir con un deber, por lo cual y no apareciendo establecido el cuerpo del delito, no se puede condenar á de Castro.

En caso de duda, es preciso optar por la absolución, según principio de jurisprudencia, que no se puede poner en duda.

Bogotá, catorce de Octubre de mil ochocientos noventa y dos.

JESÚS CASAS ROJAS.—POMBO.—ISAZA.—CORRALES.—MEDINA.—TRUJILLO.—VILLAFRÁDEZ.—*Rosas*, Secretario.

SALVAMENTO DE VOTO

DEL SEÑOR MAGISTRADO DOCTOR MEDINA.

El suscrito Magistrado ha opinado en contra de la antecedente decisión, y funda su juicio en las siguientes consideraciones:

El Código Penal sólo castiga las contravenciones á la ley en cuanto ella estatuye para los grandes fines del establecimiento del Poder público, consignados en el artículo 19 de la Constitución, y cuando su fuerza obligatoria se extiende generalmente á toda la República. En este sentido, es verdad que las autoridades y funcionarios públicos están en el deber de cumplir las Ordenanzas, los Acuerdos, los Decretos, las órdenes emanadas de autoridad competente; pero es bien notable la diferencia que existe entre no cumplirlos en absoluto ó resistirlos y el cumplirlos mal, ó cometer algunas faltas de detalle en su ejecución.

En el caso concreto á que este expediente se refiere, el Prefecto de Barranquilla ha cumplido las Ordenanzas de Policía del modo que lo creyó mejor para atender á una exigencia del Gobernador y dejar á salvo los derechos individuales, reparando el mal que la providencia de un subalterno hubiera causado; se ve, pues, que no hubo falta de cumplimiento de deberes, ni resistencia para que se ejecutara una sentencia de policía dictada por el Alcalde; si así fuera, el delito sería diferente de aquél por que ha sido juzgado y penado.

Demasiado sabido es que las sentencias dadas en juicios de policía no entrañan la fuerza de cosa juzgada que reviste á las que en juicios contenciosos pronuncian en definitiva los Jueces y Tribunales ordinarios; y en tal concepto no se ve cómo pueda un superior extralimitar sus funciones en el ramo de policía, cuando suspende ó indulta ó conmuta la pena que uno de sus subalternos ha impuesto, y eso lo ejecuta no por vía de recurso de apelación sino de protección y amparo de derechos consignados en las leyes generales, si uno de sus principales deberes es el de cuidar que los empleados de su dependencia cumplan las leyes y órdenes superiores, y reparar, ya que no puedan evitar, los agravios inferidos por ellos á los particulares.

El ramo de Policía no cae de ningún modo bajo la jurisdicción de los Tribunales ordinarios, porque el origen de su establecimiento viene de la división de los poderes y cuanto con él se relaciona corresponde al Poder político y administrativo; y así como el Poder Judicial no podría inquirir con la mira de castigar el mal desempeño de las funciones y reglas que se hayan prescrito á los empleados en los ramos de correos ó de instrucción pública, de la propia manera es incompetente para averiguar y penar las faltas en que los agentes de Policía incurran al iniciar, seguir y fenecer los juicios que son de su exclusiva competencia y sobre los cuales no se ha conferido al Poder Judicial derecho de censura; pues tales faltas deben ser corregidas por los Superiores respectivos del modo como lo establezca la ley ó la ordenanza, sin que la falta de previsión á este respecto pueda autorizar á las autoridades judiciales á seguir juicio de responsabilidad para el castigo de semejantes irregularidades; y es por eso por lo que el artículo 19 del Código Penal dispone que en los ramos especiales de la administración las culpas ó contravenciones se castiguen con arreglo á lo estatuído en cada ramo especial.

Mr. Bonnier, en su obra de *Pruebas en lo civil y criminal*, cita, al tratar de la autoridad de la cosa juzgada, una ley francesa de 1790, la que establecía que las reclamaciones de incompetencia respecto de los cuerpos administrativos no eran, en ningún caso, de la incumbencia de los Tribunales sino de la del Rey, á quien debían dirigirse, como jefe de la Administración general, y que en los casos en que se creyera que los Ministros de la Corona habían obligado á dar una decisión contraria á las leyes, las quejas debían dirigirse al Cuerpo legislativo.

Institución que en una monarquía consagraba así la independencia de los Poderes, existe en principio en los Gobiernos republicanos, cuya esencia consiste en el mantenimiento de esa misma independencia y libertad de acción.

La tesis que á grandes rasgos queda insinuada, ha hecho al infrascrito dudar al menos acerca de la competencia del Poder Judicial para aplicar, en el caso presente, el Código Penal, y en esa virtud su voto ha sido por la absolución del Prefecto antes mencionado.

Bogotá, catorce de Octubre de mil ochocientos noventa y dos.

MARIANO DE JESÚS MEDINA. — POMBO.—ISAZA.—CASAS ROJAS.—CORRALES.—TRUJILLO. — VILLAFRÁDEZ.—*Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, trece de Octubre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: El Consejo de Guerra ordinario, reunido en la plaza de Cartagena el diez y siete de Febrero de 1892, con el objeto de fallar la causa seguida contra el soldado Jesús María Muñoz, de la 4.ª Compañía del *Batallón 12 de Valencey*, por los cargos que se le dedujeron en el auto de enjuiciamiento, por los delitos de insubordinación y ataque al Superior, pronunció sentencia en la misma fecha, en la cual, calificando la culpabilidad del procesado en primer grado, por resultar del proceso circunstancias agravantes y ninguna atenuante, lo condenó á sufrir "la pena de cuatro años de prisión por el delito de insubordinación, al tenor del artículo 1633 del Código Militar; y diez (10) años de prisión por el delito de ataque al Superior, al tenor del artículo 1636 del mismo Código, todo lo cual hace un total de catorce años de prisión que cumplirá en el Panóptico de Bogotá.

Como no se interpuso apelación contra la referida sentencia por ninguna de las partes, se envió la causa á esta Superioridad, por vía de consulta; y sustanciada por los trámites que señala la Ley 105 de 1890, sobre reformas á los procedimientos judiciales, para la segunda instancia, la Corte dictó el fallo de su incumbencia, según el cual declaró nulo lo actuado desde el auto que señaló día y hora para la reunión del Consejo, y repuso el proceso al estado de señalar día y lugar para verificar nueva reunión del Consejo.

Esta decisión se fundó en que habiéndose declarado en el auto de proceder infringidos los artículos 1632, 1633 y 1636 del Código Militar, y el Consejo, al resolver las cuestiones á que dió lugar la causa sólo se contrajo á los artículos 1632 y 1636, el primero de los cuales únicamente define lo que debe entenderse por *insubordinación*, de modo que el Consejo no dió voto respecto de la infracción del artículo 1633, que señala la pena que habría de aplicarse en tiempo de paz al militar que se hace responsable del delito de insubordinación, y de consiguiente no se pudo imponer la respectiva pena sin que previamente se hubiese declarado la violación del mencionado artículo, y la responsabilidad del procesado por tal violación, según el precepto contenido en el artículo 1498 del aludido Código; esto es, que el pliego de cuestiones, formulado por el Presidente del Consejo, debió referirse, al tratar de la primera cuestión, al hecho de si se había cometido el delito ó delitos por los cuales se estaba procediendo en la causa.

Devuelta ésta se dió cumplimiento á lo decidido por la Corte, señalándose nuevo día para la reunión del Consejo de guerra ordinario, y dictándose el fallo, que era de deber de la misma corporación; en efecto, el día siete de Julio último, con observancia de las formalidades legales, se dictó la sentencia que puso término á la primera instancia, en la que fué condenado el soldado Jesús María Muñoz, previa calificación de su culpabilidad en primer grado, en la forma siguiente:

"Condénase al soldado Jesús María Muñoz á la pena de cuatro años de presidio por el delito de insubordinación, al tenor del artículo 1633 del Código Militar, y á diez años de presidio por el delito de ataque al superior, al tenor del artículo 1636 del mismo Código, todo lo cual hace un total de catorce años de presidio que cumplirá en el Ponóptico de Bogotá. También se le condena, de acuerdo con el artículo 1565 del citado Código Militar, á la destitución del empleo y lanzamiento del servicio."

Notificada la sentencia preinserta á las partes, el defensor del procesado interpuso apelación contra ella, y remitido el expediente por segunda vez á la Corte, ésta le ha dado el curso legal correspondiente; y puesto el asunto en estado de ser decidido, se procede á ello mediante las consideraciones de que pasa á hacerse mérito.

Ante todo, la Corte ha examinado el fallo apelado, y ha encontrado que él fué dictado con la previa observancia de las ritualidades prescritas en el Código Militar. Constituyendo la infracción de los artículos arriba citados, delitos de carácter militar, tuvo el Consejo de guerra ordinario jurisdicción para conocer y fallar la causa seguida contra el soldado Muñoz.

No se ha incurrido en ninguna de las informalidades que, según el mismo Código, vician de nulidad el proceso, de las cuales trata el artículo 1536; pues aparece probada la identidad del procesado, con la filiación que figura en el expediente; se han hecho al procesado así como á su defensor, las notificaciones de todos los autos que se han pronunciado en esta causa, desde el auto de enjuiciamiento, inclusive; se practicaron las pruebas que oportunamente se pidieron por los mismos; el reo nombró defensor á un oficial de su confianza, y no fueron solicitadas por ninguna de las partes las ratificaciones de los testigos que declararon en el sumario; y finalmente, no aparece de la sentencia apelada, que el Consejo de guerra ordinario que la profirió hubiera hecho una errónea aplicación de las penas señaladas en los artículos 1533 y 1536 del tántas veces citado Código Militar.

Además, como los artículos 1633 y 1636, yá mencionados, señalan para castigar los delitos de insubordinación y de ataque al superior, las penas de presidio ó reclusión, queda á juicio del Consejo de guerra ordinario ó de la Corte, en su caso, determinar cuál de las dos debe aplicarse en atención á los hechos que dieron lugar á la causa; y como por otra parte, el Consejo ha impuesto el máximum de la pena de presidio, por haber calificado en primer grado la culpabilidad del encausado, la Corte, sujetándose á la doctrina que generalmente se adopta de imponer la más benigna cuando no concurren motivos que obliguen al juzgador á aplicar el castigo con la mayor severidad; y de las dos penas de presidio y reclusión que determinan los referidos artículos, la más benigna es la de reclusión, según las reglas que estatuye el Código Penal común, es ésta la que debe ser aplicada en el presente caso; y haciendo uso de la facultad que concede el artículo 124 de dicho Código Penal, puede disminuírse el máximum hasta una sexta parte de la diferencia entre el máximum y el mínimum señalados en los artículos 1633 y 1636 del Código Militar.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, reforma la sentencia apelada, condenando, como condena, al soldado del *Batallón 12 de Valencey*, Jesús María Muñoz, á sufrir las penas de reclusión por doce años diez meses, destitución del empleo y lanzamiento del Ejército, y á las accesorias del pago de costas procesales é indemnización de los perjuicios que hubiere lugar á exigir; todo de acuerdo con los artículos 1633 y 1636 del Código Militar, y 124, 86 y 87 del Código Penal vigente.

La pena corporal de reclusión la sufrirá Muñoz en el Panóptico establecido en esta capital.

Como del proceso consta que el soldado Muñoz ha estado detenido desde el diez y siete de Enero del corriente año, se computará el tiempo de la detención en el de la pena de reclusión, en la proporción de dos días de arresto ó detención por uno de reclusión, conforme al artículo 363 de la Ley 105 de 1890; pudiendo el reo solicitar de la Gobernación del Departamento respectivo, si lo estimare conveniente, la sustitución de la pena de reclusión en la de presidio, al tenor de lo dispuesto en el artículo 109 del Código Penal.

Notifíquese, cópiese é insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza, —Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Mariano de Jesús Medina.—Juan Evangelista Trujillo.—Lucas Villafrádez.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

AUTOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, catorce de Octubre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Al estudiar para sentencia este proceso que contiene el juicio extraordinario de responsabilidad contra Jesús María Zorrilla, ex-Juez del Circuito de Roldanillo, por falta de cumplimiento de sus deberes, se observa que la sentencia absolutoria de tres de Agosto último, que ha sido consultada, no está suscrita con firma entera por el Conjuez que intervino en ella y salvó su voto.

La Corte resolvió en el Acuerdo número 550, de tres de Diciembre de 1889, que deben suscribirse con firma entera todas las providencias que no tengan sólo por objeto determinar el curso y reglamentación de los negocios, y la disposición que ordena suscribir con media firma el salvamento de voto por los Magistrados que votaron por la sentencia, da á comprender que la sentencia definitiva debe ir con las firmas enteras de los Magistrados.

Estando, pues, mal firmada la sentencia, ó más propiamente, careciendo de la firma de los Magistrados, debe considerarse que no se ha fallado el asunto, y por consiguiente, que falta la sujeta materia de la consulta.

En tal virtud, la Corte dispone que se devuelvan los autos al Tribunal de su origen, para que dicte la sentencia correspondiente. Publíquese.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Mariano de Jesús Medina.—Juan Evangelista Trujillo.—Lucas Villafrádez.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

IMPRENTA DE ANTONIO M. SILVESTRE.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AÑO VIII | Bogotá, 8 de Febrero de 1893. | NÚM. 369.

CONTENIDO.

Págs.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

La que concede una recompensa militar á Hermencia Carrizosa de Mogollón. (Magistrado ponente, doctor Pombo)..... 41

La que niega á Hersilia García un crédito por expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Isaza)..... 42

La que reconoce á favor de Restrepo y Arteaga, como cesionarios de Canuto y Antonio M. Mejía y otros, un crédito por expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Medina)..... 42

NEGOCIOS CRIMINALES.

La que confirma la sentencia pronunciada por el Consejo de Guerra ordinario, reunido en Panamá, en el proceso seguido contra el soldado Adriano Rodríguez, por el cargo de deserción. (Magistrado ponente, doctor Pombo)..... 43

La que reforma la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Panamá, en el juicio seguido contra Lino Clemente Herrera, Juez 1.º en lo criminal del Circuito de Panamá, por varios cargos. (Magistrado ponente doctor Corrales)..... 43

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

El que declara inadmisible el recurso de casación en el juicio seguido por Josefa Pérez contra José Joaquín Vila, sobre reivindicación de unos terrenos. (Magistrado ponente, doctor Villafrádez)..... 45

El que declara probadas unas excepciones dilatorias propuestas por el señor Procurador general de la Nación, en el juicio seguido por la Compañía del Ferrocarril de Panamá, sobre alumbrado eléctrico. (Magistrado ponente, doctor Corrales)..... 47

GACETA JUDICIAL.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, Octubre catorce de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Hermencia Carrizosa de Mogollón, por medio de su apoderado Jenaro Gaitán, ha solicitado de la Corte una recompensa como nieta del militar de la Independencia, doctor Joaquín José Gori, en conformidad con las disposiciones de la Ley 84 de 1890.

El señor Procurador de la Nación, en su última exposición de seis de Septiembre último, hace una detenida relación de los hechos que aparecen comprobados en el expediente, en la forma siguiente: "..... El carácter de militar de la Independencia del abuelo de la solicitante y su último empleo militar de Coronel, con varios documentos auténticos, aducidos á falta justificada de la hoja de servicios y del despacho respectivo. De tales documentos resulta que el señor Gori entró á servir en el Ejército Libertador en 1815 y que fué retirado en 1825, siendo Coronel efectivo, y después de haber desempeñado la plaza de Ministro de la Corte Superior marcial del Distrito del Centro, en reemplazo del Coronel José María Mantilla, Ministro en propiedad. Que el señor Gori fué casado legítimamente con la señora Manuela Mazo, se ha justificado, á falta de la respectiva partida de matrimonio, que no fué hallada en el archivo parroquial donde debía existir, con varios documentos de origen auténtico, como partidas de bautismo de los hijos habidos en ese matrimonio, partidas de defunción de los contrayentes, etc., etc., documentos en los cuales se hace referencia al vínculo legítimo que unió al señor Gori con la señora Mazo, y que han sido reforzados con el testimonio de varias personas abonadas que dan razón satisfactoria de su dicho. Que el señor Gori no tuvo en su matrimonio sino tres hijas, llamadas Rafaela, Ana Joaquina y Gabriela, ya finadas, y que la última de éstas fué madre legítima de la solicitante, como consta en las respectivas partidas de bautismo y defunción, siendo de advertir, además, que la filiación legítima de las citadas descendientes del señor Gori, fué expresamente reconocida en la Ley 69 de 2 de Junio de 1869. Que las dichas hijas Rafaela y Ana Joaquina, murieron sin dejar descendencia, y que Gabriela no dejó de su matrimonio con Flavio Carrizosa sino á Hermencia, lo afirman los mismos testigos antes citados, constando, además, el último de los dos hechos expresados, en la partida civil de defunción de la señora Gabriela Gori, la cual termina con la nota de que ella no tuvo más que la hija ya mencionada. Que la solicitante fué casada con el señor Agustín Mogollón, y que éste murió en el año de 1891, se ha justificado con las correspondientes partidas de matrimonio y defunción. Que la misma solicitante es pobre, observa buena conducta y permanece en estado de viudez, lo afirman varios testigos que tienen conocimiento directo de tales hechos. Y, finalmente, que la peticionaria no ha sido recompensada por razón de los servicios prestados por su legítimo abuelo á la causa de la Independencia, consta en el correspondiente certificado del Ministerio del Tesoro. Dados estos antecedentes, creo que debe concederse á la señora Hermencia Carrizosa de M., la recompensa señalada por la Ley 84 de 1890 á los nietos legítimos de los militares de la Independencia, que hallándose solteros ó viudos, no cuenten con medios suficientes para atender á su subsistencia."

La Corte, á pesar del concepto del señor Procurador y para asegurarse de que la solicitante, sin embargo de ser Institutora, no tenía la renta de que habla el numeral 3.º del artículo 64 de la citada Ley 84, dispuso, por auto de veintidós del mismo Septiembre, que los testigos Próspero Pereira G., Medardo Rivas y Marco A. Cualla, expusieran si Hermencia Carrizosa de Mogollón no tenía una renta propia que pasase de seiscientos pesos anuales; y estos testigos han afirmado que la renta de la solicitante no pasa de cuatrocientos ochenta pesos anuales, según el primero, y no alcanza á cuatrocientos, según los dos últimos.

En esta virtud, y siendo en todo lo demás la exposición del señor Procurador estrictamente ajustada al mérito del expediente, la Corte Suprema, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1.º, 2.º, 5.º, 6.º, 9.º y 12 de la Ley 84 de 1890, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: que Hermencia Carrizosa de Mogollón tiene derecho á recibir del Tesoro nacional la recompensa unitaria y definitiva de seis mil setecientos veinte pesos ($ 6,720), equivalente al sueldo de un Coronel en cuatro años, como nieta del doctor Joaquín José Gori, militar de la Independencia en el mencionado grado.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial*, dése cuenta al Ministerio de Guerra, y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA. — JESÚS CASAS

ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO. — LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, quince de Octubre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Hersilia García, cesionaria de Juan Murillo, vecino de Cartago, demandó de la Comisión de suministros el reconocimiento de mil cuatrocientos ochenta pesos ($ 1,480), procedentes de mercancías que dice le fueron expropiadas por agentes del Gobierno en la guerra de 1885 en la ciudad de Cartago.

La Comisión, en su razonada resolución de siete de Julio último, absolvió del cargo á la Nación, y el Ministerio del Tesoro, en ocho de Agosto siguiente, confirmó lo decidido por aquélla.

Habiendo apelado de esta resolución el apoderado de la reclamante, corresponde á la Corte decidirla definitivamente.

La Comisión de suministros ha demostrado que las declaraciones de testigos, única prueba en que se apoya la acción, no satisfacen las exigencias del artículo 2.° de la Ley 44 de 1890, ya porque los testigos no pueden fijar el número y precio de las mercancías, ya porque no se ha justificado que pertenecieran al cedente.

La relación jurada no fué presentada tampoco por la persona que dice haber sufrido la expropiación, ni á pesar de auto para mejor proveer dictado por la Comisión, se han recibido las declaraciones de los empleados que intervinieron en la expropiación, ni la parte ha hecho cosa alguna con el objeto de dar esa prueba.

Habiéndose hecho la expropiación á otra persona, ha podido ésta reclamar también y dar lugar, de este modo, á que se reconozca dos veces un mismo crédito.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la resolución apelada.

Déjese copia de esta providencia, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, diez y siete de Octubre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Por la resolución de la Comisión de empréstitos y expropiaciones número 3,269, de veintidós de Enero del presente año, se reconoció á favor de Santiago Ospina, como representante de varios vecinos de Pácora, por las expropiaciones y empréstitos con que fueron gravados por el Gobierno nacional en la guerra de mil ochocientos setenta y seis á mil ochocientos setenta y siete, la suma de mil setecientos cincuenta y ocho pesos cincuenta centavos ($ 1,758-50), y se absolvió á la Nación del excedente de la reclamación, cuyo monto se fijó en la demanda en dos mil doscientos quince pesos diez centavos ($ 2,215-10).

Confirmada esta resolución por el Ministerio del Tesoro, el interesado apeló para ante esta Superioridad, en donde por auto para mejor proveer, se han practicado algunas diligencias, de las que se hará mención posteriormente al fundar la presente decisión del recurso.

Preténdese por la antedicha apelación, que se reconozca lo pagado por empréstito por María Henao, Ignacio Ospina y Manuel Ramírez, cuyo derecho lo negó la Comisión, únicamente *por no haberse obtenido de la primera autoridad política* de Antioquia el informe que prescribía la Ley de 1877, acerca de haber sido partidarias del Gobierno las expresadas personas, por no tener conocimiento de ellas; pues por lo demás está perfectamente acreditado, por los recibos del Colector de Hacienda de Pácora, que María Henao pagó, por empréstito, setenta y seis pesos ($ 76), Ignacio Ospina sesenta y dos pesos ($ 62) y Manuel Ramírez ciento tres pesos ($ 103), sumas que figuran en las cuentas del citado Colector é ingresaron en el Tesoro del extinguido Estado de Antioquia, según se expresa en certificación expedida por el Administrador general.

Por lo que toca á este punto, la Corte considera que por el parágrafo del artículo 5.° de la Ley 67 de 1877, eran admisibles en contra del informe dado por los Gobernadores ó Presidentes de los Estados, las pruebas que el reclamante tuviera á bien presentar, y que si esto era lícito para desvanecer la imputación de adversario del Gobierno que en dicho informe se le hiciera, con razón mayor á falta de informe favorable por no ser bien conocida la persona, ésta puede usar de otros medios de prueba para demostrar su adhesión al Gobierno; y como del expediente resulta que durante el término probatorio en primera instancia, con citación fiscal, se recibieron las declaraciones de varios testigos, quienes afirman ser liberales los dichos prestamistas, y que en la guerra de mil ochocientos setenta y seis á mil ochocientos setenta y siete, se comportaron como decididos partidarios y sostenedores del Gobierno general, es claro que están llenados los objetos de la ley y el crédito debe ser reconocido.

Las otras partidas que la Comisión no reconoció fueron la de sesenta y seis pesos cuarenta centavos ($ 66-40) que constan en el documento número 89, por valor de cuatro reses compradas con plazo de ochenta días á Canuto y Antonio María Mejía por el Alcalde de Pácora; y la de ciento ochenta y dos pesos cuarenta centavos ($ 182-40) que, según el documento número 137, es el valor de venta de seis novillos, hecha por Juan Tomás Rodríguez al propio empleado, con iguales fecha y plazo y con el mismo objeto, cual era para el sostenimiento de las fuerzas del Estado. Dichos contratos, dicen los expresados comprobantes de fecha veinticinco de Marzo de mil ochocientos setenta y siete, se celebraron por orden de la Prefectura de Manizales, expedida en el citado mes.

Por auto para mejor proveer, los citados comprobantes fueron reconocidos por Domingo Hincapié, quien los había firmado como Alcalde de Pácora; y el Prefecto de Manizales ha informado que el veinticinco de Marzo de mil ochocientos setenta y siete, dicho individuo ejercía las funciones de Alcalde de Pácora, y que con fecha veintiocho, avisó á la Prefectura el envío de treinta y seis novillos á buena cuenta de ochenta que se le repartieron al expresado Distrito, de los que sólo se recibieron treinta y cinco; pero que no se ha hallado constancia de que á dicho Alcalde se le hubiera autorizado para contratar á plazo unas reses con Juan Tomás Rodríguez, Canuto y Antonio María Mejía, para el sostenimiento de las fuerzas del Estado.

El no aparecer que se hubiera dado facultad al Alcalde de Pácora para comprar ganado á plazo, no excluye la verdad de lo aseverado en los expresados documentos; y el hecho de haberse recibido por la Prefectura de Manizales en esos días una partida de ganado que se invirtió en el sostenimiento de la guerra, envuelve la presunción de que en ella iban las reses suministradas por los antedichos Mejías y Rodríguez, y en atención á esa circunstancia el crédito debe ser reconocido.

Por lo expuesto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, se reconoce á favor de Restrepo y Arteaga, cesionarios de los empréstitos y suministros referidos, la suma de dos mil doscientos quince pesos diez centavos ($ 2,215-10) á que, según la demanda, ascienden, los que se pagarán del Tesoro de la Nación; pues aun cuando agregadas las partidas no reconocidas á las que yá lo habían sido, resulte una suma mayor, esto puede depender de error aritmético, y en todo caso no puede condenarse en más de lo demandado.

Quedan en estos términos reformadas las resoluciones de la Comisión y del Ministerio, que han sido apeladas.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA. — JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. — MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Octubre diez y ocho de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Por auto de diez y ocho de Julio del presente año, dictado por el Comandante del *Batallón Colombia* número 17, residente en Panamá, se abrió causa criminal contra el soldado Adriano Rodríguez de la 2.ª Compañía de dicho Batallón, por el cargo en general de deserción.

Seguido el juicio con todas las formalidades que prescribe el Código Militar, se pronunció por el Consejo de Guerra ordinario reunido en la misma ciudad de Panamá el quince de Agosto último, la sentencia de la misma fecha por la cual, de acuerdo con lo decidido por el mismo Consejo al resolver las cuestiones sometidas á su deliberación, se absolvió al procesado y se ordenó consultar el fallo con esta Superioridad.

Traído el expediente á la Corte y habiéndose dado á la consulta la tramitación establecida por el artículo 412 de la Ley 105 de 1890, se procede á dictar la sentencia definitiva que el caso requiere.

Al efecto, el señor Presidente de la Corte, de acuerdo con lo que dispone el artículo 1545 del Código citado, propuso las cuestiones que previamente debían resolverse sobre incompetencia de jurisdicción y sobre informalidades en el procedimiento; y la Corte resolvió, por unanimidad de votos, que el Consejo de Guerra ordinario ha obrado en uso de legítima jurisdicción para juzgar el delito militar de que se trata, y que en el proceso no se ha omitido ninguna de las formalidades cuya falta produce nulidad, conforme á los artículos 1534, 1535 y 1536 del Código de la materia. En esta virtud, y teniéndose en cuenta que, según lo dispuesto en el artículo 413, de la citada Ley 105, está prohibido á la Corte variar la calificación hecha por el Consejo de Guerra respecto de la culpabilidad ó inocencia del acusado, de acuerdo con el concepto del señor Procurador general de la Nación, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la sentencia consultada.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial*, y devuélvase el proceso al Jefe militar que lo remitió.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA. — JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.— Bogotá, diez y ocho de Octubre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: En auto de ocho de Junio de mil ochocientos noventa y uno, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Panamá, declaró con lugar á seguimiento de causa, por los trámites extraordinarios, contra Lino Clemente Herrera, Juez de primera instancia en los asuntos criminales del Circuito de Panamá, por infracción del capítulo 2.°, título 4.°, libro 3.° del Código Penal adoptado por la Ley 57 de 1887, que trata de la usurpación ó impedimento de las funciones de las autoridades públicas. (Artículos 243 á 249).

Y por auto dictado en tres de Julio del mismo año, el referido Tribunal abrió causa de responsabilidad por los mismos trámites á dicho Herrera, en su calidad de Juez de lo civil del propio Circuito, por varios cargos erigidos en delitos por el Código actualmente vigente; cargos que en el auto de proceder se determinaron de esta manera: infracción del capítulo 9.°, título 10, libro 2.° (atentados contra los derechos individuales, artículos 570 á 582); infracción del capítulo 6.°, título 10.°, libro 2.° (Omisión, demora y otras faltas de los empleados públicos etc., artículos 529 á 546); é infracción del capítulo 2.°, título 4.° libro 2.° (Usurpación ó impedimento de las funciones de las autoridades públicas, artículos 271 á 281).

Posteriormente el Tribunal mencionado dispuso la acumulación de ambas causas, y una de éstas dejó de decidirla en la sentencia definitiva de veintinueve de Agosto de mil ochocientos noventa y uno, no obstante que en la propia sentencia se ocupó en el examen de los varios cargos que dedujo al Juez procesado en los dos autos de proceder y la razones que militan en las causas en pro y en contra de dicho acusado; de manera que la parte resolutiva de la sentencia se contrajo á un solo cargo, omitiendo resolver en ella, como debió hacerlo, respecto de los demás, por los cuales sometió á juicio al Juez Herrera.

Así quedó abierta la segunda causa, porque no resultaba decidida por absolución ni por condenación.

Apelada la aludida sentencia por el Fiscal del Tribunal Superior de Panamá, y remitido el expediente á este Supremo Tribunal, en virtud de la concesión del recurso, hubo necesidad de procurar que se subsanase el defecto notado, disponiéndose en providencia de treinta de Enero de mil ochocientos noventa y dos, que el proceso se devolviera al Tribunal de la primera instancia, para que fallara sobre todos los cargos que se habían deducido al Juez Herrera, revocándose, como fué revocada la sentencia apelada.

Falladas de nuevo las dos causas acumuladas, con fecha nueve de Mayo del corriente año, ha venido por segunda vez lo actuado para que en esta Corte se surta la segunda instancia, por apelación que interpusieron el Fiscal del Tribunal y el procesado Lino Clemente Herrera, habiendo explicado el segundo que su recurso se refería á la parte condenatoria del fallo.

Este concluye así (folio 12, cuaderno 2.°):

"El Tribunal Superior, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, absuelve al Juez del Circuito en lo criminal (debió decirse *en lo civil*), señor Lino C. Herrera, de los tres cargos por que fué llamado á juicio en el auto de fecha tres de Julio de mil ochocientos noventa y uno, previa calificación del delito de usurpación ó impedimento de las funciones de las autoridades públicas en tercer grado, y de conformidad con lo que dispone el artículo 271 del Código Penal de Cundinamarca, en cuya vigencia se cometió el delito, apercibe á dicho Juez, señor Herrera, y le condena al pago de cuatro pesos de multa, á favor del Tesoro del Departamento, suma que consignará en la Administración general de Hacienda, á cuya Oficina se dará el respectivo aviso con copia de la parte resolutiva de esta sentencia."

Preparado el recurso por los trámites legales correspondientes, la Corte procede á decidirlo, y para ello entra á hacer mérito de las siguientes consideraciones:

El cargo deducido al Juez Lino Clemente Herrera en el auto de formación de causa, dictado por el Tribunal Superior de Panamá, en ocho de Junio de mil ochocientos noventa y uno (fojas 9 del Cuaderno 1.°), consiste en la intervención indebida que dicho Juez tomó en favor de Carlos Pizarro, contra quien se seguían diligencias sumarias. Con efecto, en la Inspección de Policía del barrio de Santa Ana, ciudad de Panamá, se instruía un informativo con el objeto de averiguar la perpetración del delito de estupro de Elvira López, que se imputaba á Carlos Pizarro; y pendiente la investigación sumaria en dicha Oficina, el Juez del Circuito, Lino Clemente Herrera, se apersonó en el asunto, ocurriendo de un modo particular á la Inspección de Policía, para examinar si del sumario resultaba algún mérito contra el referido Pizarro, sin que á dicho Juez se le hubiera pasado la actuación; y como á juicio de Herrera no resultaban pruebas suficientes para conservar detenido en la cárcel al citado Pizarro, resolvió excarcelarle bajo fianza, sin haber aprehendido el conocimiento del asunto, y no estar el sindicado á su disposición.

En la defensa del Juez procesado, hecha por medio del informe que produjo con arreglo á la ley procesal, trata de justificar su conducta en el particular, haciendo ver que conforme al artículo 24 de la Constitución nacional, debía hacer efectiva la garantía de la seguridad individual; pero es evidente que los funcionarios públicos hacen efectivas las garantías ó los derechos de los particulares con observancia y sujeción á los trámites que señalan las leyes, pues de otro modo en vez de guardarse un orden perfecto en la adminis-

tración pública, y especialmente en la de justicia, reinaría una anarquía en todos los ramos de gobierno, que se ha instituído para mantener el orden en la sociedad. Si es verdad que el artículo 232 de la Ley 57 de 1887 hace al Juez del Circuito en lo criminal, jefe de los funcionarios de instrucción, es únicamente con el fin de que se le envíen los sumarios que se practiquen dentro de la circunscripción territorial respectiva, de suerte que conozca de los que fueren de su competencia, ó remita al Juez Superior del Distrito Judicial los que sean de la competencia de éste. El Juez Herrera pudo pedir al Inspector de Policía el informativo que instruía contra Carlos Pizarro, ya que éste sindicado de estupro había ocurrido á dicho Juez solicitando excarcelación; mas no le fué lícito, sin aprehender el conocimiento de ese negocio, inmiscuírse en aquellas diligencias para excarcelarle, pues con ésto impidió las funciones del Inspector que le eran propias como funcionario de instrucción.

Consiste el segundo cargo hecho al Juez Herrera por el Tribunal de Panamá, en auto de tres de Julio de mil ochocientos noventa y uno, en que dicho Juez, que conocía de un juicio ejecutivo seguido por la Compañía del Ferrocarril de Panamá, contra Vignaud, Barbaud y Blanlenil decretó el embargo de bienes muebles, que según el denuncio del ejecutante, correspondían á los ejecutados, en circunstancias de que tales bienes habían sido ya entregados por mandato judicial á William Charles Weightam, quien igualmente había seguido ejecución contra los propios deudores. Pero el Juez Herrera, al disponer el embargo y depósito de los bienes expresados, no cuidó de hacer llenar todas las formalidades que prescriben los artículos 190 y 191 de la Ley 57 de 1887; pues aunque se cumplió con la referente á la prestación de la fianza, constituyendo á Guillermo Lewis como fiador, la cual formalidad precedió á la orden de embargo, no se dió entero cumplimiento á lo que disponen tales artículos, como se pasa á demostrar:

El doctor Francisco Ardila, como apoderado de la Compañía del Ferrocarril de Panamá, en el juicio ejecutivo que ésta seguía contra la empresa de Vignaud, Barbaud y Blanlenil, ocurrió al Juez Ejecutor, Lino C. Herrera, denunciándole que Willian Charles Weighteman, estaba disponiendo de algunos bienes muebles que debían considerarse embargados en el referido juicio, por pertenecer, en su concepto, á la empresa ejecutada, y que por tanto pedía que se impidiese la operación principiada por Weighteman y se comisionase al Juez Político de Gorgona para que procediera al embargo y depósito de tales bienes. Con el escrito de denuncio presentó el apoderado Ardila, una certificación librada por el Secretario del Juzgado de Comercio, para comprobar con ella que esos muebles eran de la propiedad de los ejecutados Vignaud, Barbaud y Blanlenil, por la Compañía del citado Ferrocarril y el mencionado Juez Herrera, asintiendo á esa afirmación, ordenó el embargo y depósito de los mismos bienes. La Corte considera necesario insertar tanto el escrito de denuncio y la certificación aludida, como el auto que ordenó el embargo, para poner en evidencia el error en que así el denunciante como el Juez incurrieron.

El escrito de denuncio, que tiene fecha 4 de Junio de 1890 (fojas 88), dice así:

"*Señor Juez 1.° de lo civil.*

"Cuando en mi escrito de ayer dije á usted que mejoraba la ejecución promovida por mí en nombre de la Compañía del Ferrocarril de Panamá contra los señores Vignaud, Barbaud y Blanlenil, Compañía sobre los bienes muebles que el señor Weighteman, estaba trasportando ó apropiándose, no quise aludir á los objetos yá embargados, por disposición de ese Juzgado. En efecto, de los diferentes objetos que están ya en poder del señor Weighteman, habían ya sido embargados por decreto del señor Juez de Comercio, y no podían quedar comprendidos en el embargo decretado por usted posteriormente, conforme al artículo 16 de la Ley 135 de 1888. Pero habiendo dejado subsistir el embargo primitivo por haberse *entregado al demandante los bienes*, los denuncio como de propiedad de los ejecutados, cualquiera que sea el título con que el señor Weighteman los haya recibido, como se comprueba con el certificado que acompaño, y pido á usted que decrete especial embargo sobre ellos y que los mande depositar y avaluar, porque, como dejo dicho, los denuncio como de propiedad de los ejecutados, jurando desde ahora no proceder de malicia. Como los referidos bienes, que son los mismos que el señor Weightman ha sacado de uno de los depósitos de la Compañía del Canal, en Gorgona, aparecen hoy en su poder, para que pueda procederse al embargo, presento como fiador solidario, al tenor de lo dispuesto en los artículos 190 y 191 de la Ley 57 de 1887, al señor D. José Guillermo Lewis, quien en prueba de que acepta la responsabilidad consiguiente, firma conmigo el presente escrito. La prueba sumaria que exige el artículo 190 de la Ley 57 de 1887, se encuentra en el mismo certificado de que he hecho mérito. Como tengo fundados motivos para creer que el señor Juez Político de Gorgona abriga sus dudas sobre las atribuciones de los Jueces comisionados, suplico á usted se sirva ordenarle claramente que su misión se reduce á respetar el embargo que usted decrete, recoger los bienes, hacerlos avaluár y entregarlos al depositario yá nombrado, señor Sanders. Los perjuicios que puedan resultar al tenedor ó dueño de los bienes corren de mi cuenta, y quedan asegurados con la fianza que he prestado. Hago uso bajo mi responsalidad de un derecho que me concede el artículo 190 de la Ley 57 de 1887, y ningún temor puede abrigar ni el Juez que decreta ni el comisionado que cumple. Cuando el señor Weighteman reclame como suyos los bienes que denuncio y cuyo embargo solicito, probaré que *el pago que se le ha hecho con ellos es nulo*, porque los quebrados no pueden pagar á un acreedor dado con perjuicio de los demás."

El certificado en que se apoya el escrito preinserto es del tenor siguiente: (fojas 88).

"El infrascrito, Secretario del Juzgado del Comercio, cumpliendo lo dispuesto en el auto anterior, certifica: que por auto dictado el día 16 de Mayo último, el señor Juez dispuso *fuesen entregados* al señor William Charles Weightman unos bienes que estaban secuestrados á petición de este señor, como de la propiedad de los señores Vignaud, Barbaud y Blanlenil y Compañía.

"Panamá, Junio 4 de 1890.

Francisco Filós."

Fundado el Juez 1.° de lo civil del Circuito de Panamá, en la solicitud y certificación que se dejan copiadas, dictó, con fecha 4 de Junio de 1890, el auto siguiente:

"Vista la anterior solicitud y el certificado del señor Secretario del Juzgado de Comercio, á ella acompañado; y habiéndose constituído en forma el señor D. José Guillermo Lewis como fiador solidario del apoderado de la empresa ejecutante (Vignaud, Barbaud y Blanlenil y C.ª) *y que en la actualidad existen en poder del señor Weighteman, que los ha reclamado;* el Juzgado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de conformidad con el artículo 190 de la Ley 57 de 1887, decreta embargo, depósito y avalúo de los bienes muebles que el señor Weighteman ha sacado de uno de los depósitos de la Compañía del Canal, en Gorgona, *y que según se denuncia, existen en su poder.*"

.....

Comisionado el Juez Político de Gorgona para dar cumplimiento á este auto, se trasladó á la casa donde tenía Weighteman los bienes denunciados, asociado de los peritos avaluadores, del depositario y del Secretario del mismo Juez, y previo inventario y avalúo de los muebles hizo entrega de éstos al depositario Guillermo Lewis.

Dedúcese, pues, de las tres piezas preinsertas:

1.° Que el acreedor denunciante no determinó la clase de muebles que debían embargarse, de suerte que pudo haberse corrido el riesgo de embargarse bienes distintos de los denunciados;

2.° Que no se extendió, como debió haberse practicado, la diligencia del juramento, autorizada por el Juez, el denun-

ciante y el Secretario del Juzgado, sino que á juicio del Juez Herrera bastó el que el denunciante Ardila lo manifestase en su mismo escrito;

3.° Que no se presentó por el ejecutante la prueba siquiera sumaria de que los bienes denunciados fueran de propiedad de los ejecutados Vignaud, Barbaud y Blanlenil y Compañía, pues aunque el denuncio se funda para acreditar dicha propiedad en la certificación expedida por el Secretario del Juzgado de Comercio; este documento, en vez de hacer constar que los bienes referidos pertenecían á dichos deudores, hace conocer, por el contrario, que fueron mandados entregar á Weighteman por el Juez de Comercio; de manera que habiéndolos recibido Weighteman, por orden judicial dictada en un juicio distinto, terminado en dicho Juzgado de Comercio y no tomados por Weighteman arbitrariamente, el Juez Herrera ha debido reputar á este individuo como tercer poseedor;

4.° Que el denunciante, doctor Francisco Ardila, en el escrito de denuncio aseguró que los mencionados muebles fueron dados en pago á Weighteman, y tal manifestación era natural que hubiera hecho conocer al Juez Herrera, que esos bienes no eran de la propiedad de los ejecutados, ó á lo menos que éstos no estaban yá en posesión de los bienes expresados; y

5.° Que aunque pudiera alegarse que William Charles Weighteman, no pidió que los bienes que se iban á embargar se dejaran en poder suyo, como pudo hacerlo, para evitarse mayores perjuicios, es lo cierto que la petición del tercer poseedor en el sentido indicado, en todo caso, es posterior á la orden de embargo de los bienes, es decir, que el Juez que conoce de una ejecución, no debe disponer el embargo de bienes que le conste de algún modo que se encuentren en manos de un tercer poseedor, sin que se le compruebe sumariamente que dichos bienes son de la propiedad del ejecutado.

Y como tal prueba no se adujo por el apoderado de la Compañía del Ferrocarril de Panamá, en su calidad de denunciante de muebles indeterminados, porque, como ya se ha expuesto, la certificación exhibida como tal, no expresa que los ejecutados estuvieron en posesión de los mismos bienes, sino que por el contrario, acredita que aquéllos fueron entregados á un acreedor en pago de su crédito, es claro que el Juez Herrera dejó de cumplir en este particular lo que dispone el artículo 190 de la referida Ley 57 de 1887; de manera que este cargo no ha sido desvanecido, y de consiguiente, es patente la infracción del artículo 580 del Código Penal vigente.

Respecto del cargo deducido al propio Juez sobre demoras y omisiones, la Corte halla exactos los conceptos emitidos por el señor Procurador general de la Nación, en su dictamen de 19 de Diciembre de 1891; á saber: "que este cargo está desnudo de toda prueba, en términos de que ni siquiera se han concretado debidamente esas faltas."

Y aunque agrega que el juicio por las demoras, si las hubo, no ha debido seguirse por los mismos trámites que los otros cargos, sino por los especiales señalados en el capítulo IV, título X, libro 3.° del Código Judicial, yá la Corte tiene resuelto que sí puede acumularse un juicio por demora á cualquiera otro que se siga contra el mismo funcionario por responsabilidad en el ejercicio de su empleo, por ser una misma la jurisdicción á que está sujeta aquella averiguación.

Ultimamente, el cargo 4.°, hecho al citado Juez Herrera por usurpación de jurisdicción, nace de que dicho Juez conoció en la ejecución de que se ha hablado, seguida por la Compañía del Ferrocarril de Panamá, contra Vignaud, Barbaud y Blanlenil, no obstante que correspondía el conocimiento al Juez de Comercio del Circuito de Panamá, tampoco impone aquél la responsabilidad que por tal motivo se le dedujo en el auto de proceder, pues, aun cuando medió competencia, que fué dirimida por el Tribunal de Panamá, declarándose que el conocimiento del mismo juicio era de la competencia del Juez especial, establecido para los asuntos de comercio, no fué calificada de temeraria la pretensión del Juez Herrera al sostener la competencia del caso. El mismo Tribunal, al ocuparse en dirimirla, expuso lo siguiente: "Con motivo de la creación del Juzgado de Comercio (Ley 83 de 1888), ha sido ocurrencia casi diaria la existencia de competencias entre éste y el Juzgado de lo Civil, para determinar la competencia en multitud de asuntos; y dirimidas que han sido por el Tribunal, nunca se ha considerado como usurpación ó arrogación de jurisdicción el haber sostenido la competencia, pues no ha visto, como no se ve ahora, que se haya procedido á sabiendas y maliciosamente en esos casos, sino que lo ha sido por razón de la confusión que trae consigo la existencia de dos jurisdicciones, separadas por líneas tan sutiles, que á veces ha habido gran perplejidad para determinar."

De consiguiente, la Corte cree que no se incurre en responsabilidad por el solo hecho de que un empleado judicial provoque ó acepte una competencia afirmativa ó negativa, si, por otra parte, no resulta que lo haga contra ley expresa, clara y terminante, ó que no tiene jurisdicción para sostener lo que afirma ó niega, al tenor del artículo 542 del Código Penal.

Por todas las consideraciones de que la Corte ha hecho mérito en vista de lo actuado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, reforma la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Panamá, en 9 de Mayo del corriente año, y previa la calificación en tercer grado de la culpabilidad del Juez procesado Lino C. Herrera, con relación á los cargos de violación de los artículos 271 y 580 del Código Penal vigente, que señalan penas más benignas y su aplicación debe ser, por lo mismo, preferente, le condena á la pena de veinticuatro pesos ($ 24) de multa, con apercibimiento en los términos que determina el artículo 89 del propio Código Penal, la cual multa, ingresará en el Tesoro nacional; además, condena al referido Juez Herrera, al pago de las costas procesales y á la indemnización de los perjuicios que por cualquier motivo haya inferido.

Notifíquese cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA. — JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez y siete de Octubre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Ante el Juez del Circuito de Ocaña demandó Josefa S. Pérez, por medio de su apoderado Esteban Ovalle, en Junio de 1886, á José Joaquín Vila por el dominio, posesión y entrega del terreno de "La-Vaca" ó "Quebrada de la Vaca" y de tres predios llamados "Las Delicias," "Sumapaz" y "San-José," que dijo estaban situados en aquel mismo terreno, formando con él un solo globo de tierra, y por los frutos civiles y naturales de las fincas raíces demandadas, en los doce años anteriores y los que produjeran ó pudieran producir desde la contestación de la demanda hasta la restitución de ellas; en la misma demanda estimó en dos mil pesos el terreno de "La-Vaca" en conjunto y los predios por separado, así: en mil pesos el de "Las-Delicias" y en mil doscientos pesos cada uno de los dos restantes.

Notificada la demanda á Vila, la contestó por medio de apoderado, negando el derecho de la demandante á reivindicar dichas fincas, por no ser ciertos los hechos fundamentales de la acción; opuso á ésta la excepción perentoria de prescripción, y denunció el pleito á Manuel, Gregorio, Francisco, Margario, Concepción é Isabel Quintero Jácome, como herederos de Martín Quintero Copete, que había vendido los terrenos de "Sumapaz" y "Las-Delicias" á uno de los causantes ó predecesores de Vila, con lo cual quedó iniciado el presente juicio, que seguido luégo por los trámites de la vía

ordinaria é interviniendo en él los primitivos litigantes y además los señores Quinteros, quienes concurrieron á virtud de la denuncia aludida, á la defensa de la parte demandada, fué fallado en primera instancia con fecha 29 de Febrero de 1890, y en la segunda que se surtió por apelación de la demandante, ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Norte de Santander, con fecha 29 de Octubre de 1891, viniendo, por último, al conocimiento de esta Suprema Corte, por recurso de casación que interpuso la parte demandante contra la sentencia del Tribunal.

Aquí se ha sustanciado este recurso en conformidad á lo que dispone la Ley 105 de 1890, y hoy se halla la causa en estado de sentencia; pero debiendo la Corte examinar, antes de pronunciarla, si el recurso se ha interpuesto oportunamente y por persona hábil, y si la sentencia acusada es de aquellas contra las cuales puede interponerse recurso de casación, según lo previene el artículo 381 de aquella ley, esta Superioridad procede á dar cumplimiento á esta disposición y á resolver, en consecuencia, como allí mismo se prescribe, si el recurso intentado es ó no admisible.

La Ley 105 citada, al determinar los objetos de este recurso y los casos en que él puede interponerse, dice en su artículo 366, lo siguiente:

"Con el fin principal de uniformar la Jurisprudencia, y también con el de que se enmienden los agravios inferidos, se concede recurso de casación para ante la Corte Suprema contra las sentencias definitivas de segunda instancia dictadas por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, en asuntos civiles y en juicio ordinario, ó que tenga carácter de tal, cuando ocurra alguna de las causales que se establecen en este capítulo para el efecto de poder interponer el recurso. Es, además, indispensable que coexistan las circunstancias siguientes: 1.ª que la sentencia se funde ó deba fundarse en leyes que rijan ó hayan regido en toda la República, á partir de la vigencia de la Ley 57 de 1887; ó que se funde ó deba fundarse en leyes de los extinguidos Estados, que sean idénticas en esencia á las nacionales que estén en vigor; 2.ª que la sentencia verse sobre hechos relativos al estado civil de las personas, ó sobre intereses particulares en que la cuantía del juicio sea ó exceda de tres mil pesos, y 3.ª que haya contrariedad en las sentencias de primera y segunda instancia en cuanto á la inteligencia, ó indebida aplicación de las leyes en que se apoyan, ó en cuanto á lo principal del pleito."

En el presente caso el recurso ha sido interpuesto por persona hábil, pues lo es el apoderado de la demandante, con facultad expresa de ésta para interponerlo, y la sentencia acusada fué pronunciada por un Tribunal Superior de Distrito Judicial, en definitiva, en segunda instancia y en juicio civil ordinario, cuya cuantía excede de tres mil pesos, atenta la estimación que se hizo en la demanda; pero no existe la tercera de las circunstancias que, según el artículo 366 preinserto, son indispensables para que el recurso de casación sea admisible, que es la contrariedad en las sentencias de primera y de segunda instancia, como pasa á demostrarse.

Dichas sentencias, en su parte resolutiva son del tenor siguiente:

La de primera instancia: "Por lo expuesto, este Juzgado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, absuelve á José Joaquín Vila de los cargos deducidos contra él en el presente juicio. Sin condenación en costas."

Y la de segunda instancia:

"Por todo lo expuesto, el Tribunal, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, confirma la parte resolutiva de la sentencia apelada, y declara que no se ha probado por el reo la excepción perentoria de prescripción que alegó. Sin costas de segunda *instancia, porque la adición* del fallo de la primera implica reforma."

Comparadas estas dos decisiones, se ve que ambas están de acuerdo en absolver al demandado de los cargos deducidos contra él en la demanda, dado que, en orden á esos cargos, ó sea, á la acción deducida por el demandante, el Tribunal no hizo sino confirmar lisa y llanamente lo resuelto por el Juez de Circuito; y aunque en la sentencia de segunda instancia se declaró además no probada la excepción de prescripción, opuesta por el demandado, sobre la cual nada se resolvió en la de primera, esa adición no induce falta de identidad de los dos fallos en lo relativo á las acciones del demandante, porque, como ya se ha dicho, respecto de éstas ambos se hallan perfectamente conformes, ni tampoco en cuanto á la excepción del demandado, por ser lógico y de simple sentido común que, con lo resuelto sobre tal defensión en la sentencia del Tribunal, no puede contrariarse la sentencia del Juez, en que nada se resolvió sobre el particular, siendo, como es, inadmisible calificar de contrarias dos proposiciones entre sí cuando una de ellas no existe, de todo lo cual se sigue que no hay contrariedad en las sentencias de primera y segunda instancia en cuanto á lo principal del pleito.

Tampoco existe tal contrariedad en cuanto á la inteligencia ni en cuanto á la aplicación de las leyes en que se apoyan, respectivamente, las dos sentencias; pues no habiendo examinado el Juez del Circuito y el Tribunal, para absolver á Vila de la demanda, desde un mismo punto de vista las cuestiones debatidas por las partes, sino que cada una de ellas partió de supuestos diferentes, empleando razonamientos distintos y citando leyes también distintas para fundar sus fallos, es obvio que sus juicios y apreciaciones sobre la inteligencia y aplicación de las disposiciones legales no pueden ser contrarias entre sí, bastando para demostrar la verdad de este concepto, hacer la exposición y examen comparativo de los fundamentos de las dos sentencias.

En la primera instancia del juicio, la parte demandante, con el propósito de probar que los terrenos demandados eran de su padre Félix Pérez, por cuya muerte y la de su madre pretende derecho de dominio sobre ellos á título hereditario, presentó copia de una escritura otorgada en la parroquia de Río de Oro, con fecha veintidós de Septiembre de mil ochocientos cincuenta y dos, ante el Juez suplente del Distrito y dos testigos actuarios, por la cual Ramón Beltrán vendió á dicho Pérez la posesión de campo denominada "Quebrada de la Vaca;" pero esta copia carecía del requisito de registro, que para valer en juicio exigía el inciso noveno del artículo 4.º de la Ley 6.ª, tratado 5.º, parte 4.ª de la Recopilación Granadina en relación con el artículo 22 de la misma, y por esta razón el Juez la desestimó y decretó la absolución del demandado, considerando, además, para ello que éste debe reputarse dueño de tales terrenos, mientras otra persona no justifique serlo, en calidad de poseedor actual de ellos, conforme al artículo 763 del Código Civil del extinguido Estado de Santander, sin entrar á examinar y calificar los títulos de dominio aducidos por el demandado.

En la segunda instancia la parte demandante abundó de prueba, presentando nueva copia de la escritura de venta hecha por Beltrán á Pérez, con nota de haber sido registrada en diez de Octubre de 1852, desapareciendo así la objeción infirmativa que le opuso el Juez y dando lugar á que el Tribunal la estimara con fuerza y eficacia suficientes para dar por probada la adquisición del dominio por parte de Pérez sobre la cosa vendida; pero entrando entonces á analizar y calificar el mérito jurídico de los títulos de propiedad alegados por el demandado, dicho Tribunal juzgó que á virtud de éstos, Vila y sus causantes, habían adquirido el dominio sobre los terrenos demandados por los herederos de Pérez, habiéndolo perdido éste á causa del remate ó venta forzada que de ellos se hizo á Gregorio Quintero Jácome, en juicio ejecutivo seguido contra el mismo Pérez, con fecha once de Enero de 1861, y fundado en esto absolvió al demandado. Además observó que las cartillas ó hijuelas presentadas para acreditar que tales terrenos se habían adjudicado por muerte de Pérez y á título de herencia, á Manuela Rodríguez y á la demandante, como viuda é hija, respectivamente, de aquél, en el año de 1874, y luégo á la misma demandante, y por muerte de su madre, la porción que había correspondido á ésta, en el año de 1886, carecían del requisito de registro, que exigía el artículo 2659 del Código Civil de Santander, y que por ello no hacían fe en juicio, según el artículo 2680 del mismo.

Por lo expuesto se viene en conocimiento de que el juicio y las apreciaciones hechas por el Juez de primera instancia y por el Tribunal no se refieren á unos mismos hechos, á unas

mismas pruebas, ni á unas mismas leyes, siendo claro y manifesto, en consecuencia, que no puede haber entre ellos ninguna contrariedad, del mismo modo que tampoco puede sostenerse que sean uniformes.

A mérito de estas consideraciones, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, la Corte declara inadmisible el recurso de casación de que se ha venido tratando.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvanse los autos al Tribunal de su origen.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, Octubre veintiuno de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: La Compañía del Ferrocarril de Panamá, por medio de su apoderado, doctor Eladio C. Gutiérrez, entabló demanda en once de Agosto del corriente año, para que, previo un juicio ordinario de una sola instancia y con citación y audiencia del señor Procurador general de la Nación, como representante de la República, se declare que la Compañía del Ferrocarril de Panamá tiene perfecto derecho para establecer alumbrado eléctrico, de gas ó de cualquiera otra clase, libremente ó sin restricción alguna, por razón de privilegios concedidos ya ó que se concedan en lo futuro á personas naturales ó entidades jurídicas para esa clase de establecimientos ó fábricas, durante el término del privilegio concedido á ella, en cualquier parte de la línea del Ferrocarril, y para exclusivo servicio y desarrollo de la empresa, esto es, para facilitar la conservación, vigilancia y explotación del camino y de todas sus anexidades y dependencias, como el telégrafo de Colón á Panamá, edificios, almacenes, muelles, astilleros, puertos, estaciones, posadas, escalas, atracaderos, embarcaderos etc., etc., que tenga ya construídos ó que construya en lo sucesivo."

Admitidos el poder y la demanda correspondientes, y dado de ellos conocimiento al señor Procurador general, como lo dispone el artículo 332 del Código Judicial, dicho funcionario hizo varias objeciones por defectos que contenía el poder, los cuales, subsanados que fueron, se dispuso por el Magistrado sustanciador dar traslado de la demanda, por cinco días, al mismo funcionario como representante de la Nación y como se pidió en el libelo respectivo, para que la contestase con arreglo á derecho.

El señor Procurador general, dentro del término señalado, en vez de contestar la demanda, propuso las excepciones dilatorias de ilegitimidad de la personería de la parte demandante y de inepta demanda, las cuales fueron admitidas, y de ellas se confirió traslado al apoderado doctor Gutiérrez, por cuarenta y ocho horas.

La excepción de ilegitimidad de la personería de la parte demandante la funda el señor Procurador en el artículo 465 del Código Judicial, que dispone que dicha excepción tiene cabida respecto del apoderado, albacea, guardador, síndico, tesorero, fiscal y demás personas que gestionan en nombre de otras, para que acrediten su representación; y la excepción de inepta demanda la establece al tenor del artículo 467 del propio Código, porque la demanda incoada por la Compañía del Ferrocarril de Panamá, no está arreglada á lo dispuesto en el capítulo 2.°, título 1.° del libro 2.° de dicho Código; y el artículo 265, que hace parte del capítulo 2.° citado, dice lo siguiente:

"Art. 265. El escrito ó libelo de demanda debe contener la designación del Juez á quien se dirige, el nombre del que demanda, expresando si lo hace por sí ó á nombre de otro, y su naturaleza ó vecindad; la persona á quien se demanda y su naturaleza y vecindad, si fueren conocidos; la cosa, cantidad ó hecho que se demanda, expresado con claridad y conforme á lo dispuesto en este Código, y el derecho, causa ó razón por que se intenta la demanda."

Sirven de fundamento á la primera excepción las razones que alega la parte demandada, y que en concreto las resume así:

"En primer lugar se observa que los artículos 14 y 49 de la Constitución exigen para reconocer á las sociedades ó corporaciones los derechos que corresponden á las personas colombianas, entre las cuales se comprende el ejecutar actos civiles, que sean *reconocidas como personas jurídicas*.

"Y además, las sociedades anónimas, como la Compañía del Ferrocarril de Panamá, domiciliadas fuera del país, que tengan por objeto empresas de carácter permanente en el territorio de la República, establecidas en Colombia antes de la expedición de la Ley 124 de 1888, deben protocolizar el documento de su fundación y sus Estatutos en la Notaría de la circunscripción en donde esté el asiento principal del tráfico de su explotación, según el artículo 1.° de dicha Ley 124.

"Que se necesita para que la Compañía del Ferrocarril de Panamá pueda figurar como demandante, que presente copia auténtica del documento de su fundación y de sus Estatutos, protocolizados en la Notaría de Panamá, y la comprobación de que ha sido *reconocida* en Colombia como persona jurídica.

"Por otra parte, que en el supuesto de que todos los comprobantes se traigan al juicio, también se requiere, para iniciarlo legalmente, la prueba de que el señor John Newton es el representante legal de la expresada Compañía del Ferrocarril de Panamá, á fin de que pueda admitirse como válido el poder que ha conferido al señor Gutiérrez para representar á la Compañía en juicio.

"Si por omisión de estas formalidades llegara á suceder que el señor Newton no tuviera la personería que, según el poder, confiere al señor Gutiérrez, los procedimientos y resultados del juicio serían nulos."

A estas razones aducidas por la parte demandada contra la demanda que se ha instaurado, alega en sentido contrario el apoderado de la Compañía del Ferrocarril de Panamá las siguientes:

"Según el artículo 635 del Código Civil, las sociedades industriales (es decir, las sociedades comerciales y las civiles) no están comprendidas en las disposiciones del título sobre personas jurídicas, sus derechos y obligaciones son regladas, según su naturaleza, por otros títulos de ese Código, y por el Código de Comercio. Los artículos 14 y 49 de la Constitución se refieren claramente á las personas jurídicas de que trata el título 36 del libro 1.° del Código Civil, y por lo mismo no son aplicables á las sociedades civiles y comerciales.

Si la Compañía del Ferrocarril de Panamá no hubiere cumplido la prevención contenida en el artículo 1.° de la Ley 124 de 1888, eso tendrá alguna otra sanción que no es la de que no se la tenga por constituída y no pueda reclamar protección legal en su existencia, pues el artículo 2.° de la Ley 62 de 1888, que estableció esa sanción, fué derogada antes de que empezara á surtir sus efectos, por la Ley 124 del mismo año, citada por el señor Procurador.

"La Compañía del Ferrocarril de Panamá no puede, pues, dejar de ser oída en el juicio que se ha promovido, con razón tanto mayor cuanto que, teniendo ella, como tiene, negocios con el Gobierno, que ponen á ésta en la necesidad de estarse entendiendo con los que la representan, no puede desconocer la existencia de la Compañía, por lo cual hay que admitir que la Ley 62 de 1888 no pudo referirse á esa Compañía.

"En el poder que presenté da fe el señor Cónsul de que el señor Newton es el Presidente de la Compañía, y me parece que ningún comprobante mejor que ése podría presentarse. En la Memoria presentada en este año al Congreso por Su Señoría el Ministro de Relaciones Exteriores puede ver el señor Procurador, que el Gobierno ha estado tratando con dicho señor Newton, como Presidente y representante de la Compañía, y que, por tanto, no hay riesgo de que el juicio que he promovido sea baldío ó nulo por ilegitimidad de la personería del demandante."

La Corte, pues, entra á examinar las razones alegadas por ambas partes, en apoyo de sus respectivas pretensiones,

y á decidir las excepciones en conformidad con la Constitución y las leyes.

A dos puntos cardinales se contrae la excepción de ilegitimidad de la personería de la parte demandante, propuesta por la demandada, á saber:

Si la Compañía del Ferrocarril de Panamá ha podido establecer la demanda á que esta excepción se refiere, sin haber acompañado la prueba de su reconocimiento como persona jurídica, y la copia del acta de su fundación y de los Estatutos que la rigen; y si basta que el funcionario público que autorizó el instrumento por medio del cual se confirió poder al doctor Eladio C. Gutiérrez para representar á la Compañía actora exprese, como ha expresado en el mismo instrumento, que da fe de que el señor John Newton ejercía en el acto de otorgar el poder las funciones de Presidente de la Compañía del Ferrocarril de Panamá; ó si es preciso, además, que aquel funcionario afirme en el mismo poder, con vista de los Estatutos, que el Presidente de la referida Compañía es quien tiene autorización para conferir poderes á personas que representen judicialmente á dicha entidad, y que ésta queda obligada legalmente en todo lo que hicieren sus apoderados.

Contrayéndose la Corte á estos puntos, considera:

El artículo 14 de la Constitución nacional, que prescribe que "las sociedades ó corporaciones que sean en Colombia reconocidas como personas jurídicas, no tendrán otros derechos que los correspondientes á personas colombianas," es una consecuencia de la ficción legal que tiene por objeto conceder á las personas jurídicas los mismos derechos que se reconocen á las personas naturales; de manera que, una vez reconocidas dichas entidades, no pueden gozar de distintos ó mayores derechos que las personas naturales.

Y las corporaciones, siendo legítimas y públicas, tienen derecho á ser reconocidas como personas jurídicas, y á ejecutar en tal virtud actos civiles y gozar de las garantías aseguradas en el título III de la misma Constitución, que trata de los derechos civiles y garantías sociales. De otro modo no podrían establecerse en Colombia esas sociedades ó corporaciones, si no les fuera lícito ejercer actos civiles, como los colombianos, con las restricciones que indica el artículo 49, en atención á la utilidad común.

No todas las sociedades están sujetas al reconocimiento expreso de que habla el señor Procurador general de la Nación para poder existir en Colombia. Según el artículo 635 del Código Civil nacional, las sociedades industriales, ó lo que es lo mismo, las civiles y comerciales, no están comprendidas en las disposiciones del título 36 del libro 1.º del referido Código Civil, que trata de las personas jurídicas especialmente; porque aquéllas se rigen por otros títulos del propio Código y por las leyes de comercio.

Una Sociedad anónima, como lo es la Compañía del Ferrocarril de Panamá, por ejemplo, no es de las que habla el artículo 636 del Código Civil, porque aunque en sus Estatutos pueden determinar la manera de administrarse para obtener el fin con que se establecen, sus relaciones con los particulares, el modo de prestar su servicio al público, los derechos y obligaciones de los accionistas entre sí etc., son puntos que regla la ley que les reconoce su existencia.

Así es que la Corte es de concepto que la Compañía demandante no necesita, por su naturaleza, de reconocimiento del Gobierno; porque la legislación comercial á que está subordinada dicha Compañía no prescribe ese requisito para su existencia, ni para adquirir derechos y contraer obligaciones.

Habiéndose celebrado por el Gobierno nacional con la *referida Compañía* varios contratos con el objeto de que ella preste al comercio universal el servicio de trasporte de uno á otro océano, mediante estipulaciones á que ambas partes han quedado respectivamente obligadas, sería absurdo que no pudiera la misma Compañía ocurrir á los Tribunales colombianos en protección y reconocimiento de los derechos que nacen de los mismos contratos, como sucede en el presente caso, en que la Compañía demanda una decisión judicial para establecer alumbrado de cualquiera clase en la línea del Ferrocarril como consecuencia del privilegio de que goza.

Pero sí cree la Corte que la Compañía del Ferrocarril de Panamá está obligada á presentar en este juicio, como en cualquiera otro en que sea parte y se le exija por la contraria, copia del acta de su fundación, ó llámese escritura de asociación, así como de sus Estatutos, protocolizados en la Notaría de la circunscripción en donde está el asiento principal del tráfico de su explotación, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 1.º de la Ley 124 de 1888, adicional al Código de Comercio, que no exime de tales obligaciones á las Compañías anónimas que tengan su domicilio fuera del país y por objeto empresas de carácter permanente en el territorio de la República.

Fácil es el cumplimiento de este deber. Con la presentación de dichos documentos desaparecerá cualquiera duda sobre la facultad que tenga el Presidente de la Compañía para conferir poderes; duda que debe prevenirse en toda clase de juicios, porque una cosa es que el señor John Newton sea el Presidente de la Compañía del Ferrocarril de Panamá, cuyo carácter no se desconoce desde que el Cónsul colombiano en Nueva York lo certifica en el poder que se ha presentado; y otra cosa es que los Estatutos de la asociación le hayan conferido la facultad de otorgar poderes. Lo último debe constar plenamente en el juicio, y para eso la Ley 124 de 1888 citada exige la protocolización y consiguiente presentación en copia de la parte conducente de los mismos Estatutos que así lo acrediten.

En cuanto á la excepción de inepta demanda es evidente que en el escrito que la contiene no se designa la persona natural ó jurídica á quien se demanda, en los términos que dispone el artículo 265 del Código Judicial; pues aunque es verdad que la acción entablada no tiene por objeto exigir de la República el cumplimiento directo de determinada obligación, sino obtener una declaración expresa de que la Compañía por razón del privilegio de que está gozando, tiene derecho á establecer alumbrado en la línea del Ferrocarril, es lo cierto que se guarda silencio en el respectivo libelo sobre un punto esencial relativo á la persona á quien se demanda, porque no puede haber controversia ó debate jurídico sino entre dos partes por lo menos, de suerte que es indispensable mencionarlas.

El escrito de demanda contiene, es verdad, la expresión de que el juicio se sustancie y decida con previa citación y audiencia del señor Procurador general de la Nación, como representante de la República; pero de esto no se deduce que la Nación sea la demandada. A lo más podría sostenerse que se requiere la intervención de dicho funcionario en la controversia; mas no siempre la persona que interviene es representante de la parte demandada. El mismo señor Procurador general, por ejemplo, interviene en algunos juicios en que no es demandada la Nación, y sólo toma parte en ellos por el interés de la moral y de la ley.

En mérito de lo expuesto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara probadas las excepciones dilatorias de ilegitimidad de la personería de la Compañía demandante y de su apoderado doctor Eladio C. Gutiérrez y de inepta demanda, propuestas por el señor Procurador general en este juicio; y dispone que éste se suspenda hasta que se acredite la representación de la parte demandante y se subsane el defecto advertido en el escrito de demanda.

Notifíquese; cópiese é insértese en la *Gaceta Judicial*.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA. — JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

IMPRENTA DE ANTONIO M. SILVESTRE.
Director, Tomás Galarza.

REPÚBLICA DE COLOMBIA.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AÑO VIII | Bogotá, 15 de Febrero de 1893. | NÚM. 370.

CONTENIDO.

Págs.

PENA CAPITAL.

Sentencia por la cual se confirma la que condenó á José Acebedo á la pena de muerte, por el delito de asesinato perpetrado en la persona de Jesús Naranjo. (Magistrado ponente, doctor Trujillo)..... 49

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

La que adiciona la sentencia pronunciada por la Corte, con fecha veinte de Septiembre último, en el juicio seguido por el Presbítero doctor José Joaquín Hoyos contra el Presbítero Simón de Jesús Herrera. (Magistrado ponente, doctor Trujillo)..... 50

Salvamento de voto de los señores Magistrados Corrales y Medina, en la anterior resolución..... 50

La que niega á Manuel José Alvarez, como cesionario de José Miguel y Julián Echeverri y otros el reconocimiento de un crédito por expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Pombo)..... 51

La que concede á Mercedes, Soledad, María Francisca y Mariano Ortega una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Isaza)..... 51

La que reconoce, en parte, á Antonio Caipa un crédito por expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Medina)..... 51

La que concede á María Felipa Quintero una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas)..... 52

La que concede á Pedro Ortega una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Corrales)..... 52

La que reconoce á Juan Valencia un crédito por empréstitos y expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Corrales)..... 53

La que concede á Santiago Narváez una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Pombo)..... 54

La que concede á Eloísa Arjona, como representante legal de sus menores hijas una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Trujillo) 54

NEGOCIOS CRIMINALES.

La que revoca la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior del Departamento Judicial del Cauca, en el juicio seguido contra Juan E. Valencia, ex-Juez del Circuito de Atrato, por detención arbitraria. (Magistrado ponente, doctor Pombo)..... 54

La que condena á Cayetano Delgado, Fiscal del Tribunal Superior del Cauca, como responsable en tercer grado del delito de abuso de autoridad, á varias penas. (Magistrado ponente, doctor Pombo)..... 55

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

El que admite el recurso de hecho intentado por José Hilario Cano, para que se le conceda el de casación contra una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Panamá. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas)..... 56

GACETA JUDICIAL.

PENA CAPITAL.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Octubre veintidós de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: José Acebedo, mayor de edad, vecino del Distrito municipal de Puerto-Berrío, en el Departamento de Antioquia, dió muerte violenta el diez de Marzo de mil ochocientos noventa, de una puñalada en el pecho, á Jesús Naranjo, en el sitio de La-Cortada del mismo Distrito municipal de Puerto-Berrío, sin que hubiera mediado el menor motivo de disgusto entre el victimario y la víctima.

Comprobado plenamente el delito con varias declaraciones de testigos que vieron á Acebedo darle la puñalada á Naranjo, que murió pocos momentos después, y con el examen pericial del cadáver de éste, se llamó á juicio criminal al agresor por el Juez 2.° superior del Distrito Judicial de Antioquia.

Reunido el Jurado del caso, declaró, en veredicto de quince de Junio de mil ochocientos noventa y dos, que Acebedo era responsable como autor principal del delito de asesinato que define el artículo 440 y castiga el 441 del Código Penal de Cundinamarca, y que conforme al artículo 221 de la Ley 153 de 1887, alcanzó grado máximo de gravedad, por haber concurrido la circunstancia 3.ª de que habla el mencionado artículo 440. El Juez, apoyado en ese veredicto, dictó, cinco días después, sentencia de muerte contra el reo, á quien condenó, además, á pagar á los herederos de Naranjo mil pesos ($ 1,000), en que fueron avaluados los perjuicios y á responder al Erario público de las costas procesales.

Apelado este fallo por el defensor del encausado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antiquia lo confirmó en sentencia de veintidós de Julio del corriente año, que ha venido á esta Superioridad en recurso de casación.

Dada al negocio la tramitación señalada en la ley, se procede á resolver.

Tanto el reo, en su alegato dirigido á la Corte, en que confiesa haberle dado muerte á Naranjo, como el señor Procurador general de la Nación y el defensor, piden se declare notoriamente injusto el veredicto del Jurado, por cuanto no hubo premeditación en el homicidio ejecutado, una vez que consta en el expediente que cuando Acebedo dió muerte á Naranjo, acababa de verlo, no lo conocía antes, y no pudo, pues, preceder á la muerte la deliberación ó resolución previa que requiere la ley para que haya asesinato, mucho más si se considera que Acebedo se encontraba en ese momento en estado de embriaguez proveniente de circunstancias pura y exclusivamente ocasionales, hecho que atenúa la gravedad del delito, según el ordinal 6.° del artículo 118 del nuevo Código Penal.

Es verdad que está comprobado en el proceso que Acebedo se hallaba ebrio cuando le dió la puñalada á Naranjo; pero no está comprobado que esa embriaguez fuera involuntaria, pues apenas existe sobre el particular la declaración de Pedro A. Hernández (foja 85). Es cierto que Acebedo no conocía á Naranjo, y que entre los dos no medió disgusto ninguno para que aquél pudiera tener interés en hacerle daño á éste; pero también es evidente que Acebedo manifestó de palabra y de hecho el deseo de matar, diciendo que á él no le importaban diez años de presidio, y que le daría muerte á alguno, palabras que acompañaba con el acto de asentar un cuchillo en la cubierta del mismo, y que tanto el artículo 438 del Código Penal de 1858, como el 594 del nuevo, no excluyen la premeditación aunque se haya formado el designio de cometer el homicidio en persona indeterminada.

No habiéndose incurrido en la sustanciación del juicio en ninguna de las causales designadas en los ordinales 1.°, 3.°, 4.°, 5.°, 6.° y 7.° del artículo 264 de la Ley 57 de 1887; siendo justo el veredicto del Jurado, y no violando la sentencia que es materia de examen, ley sustantiva ó doctrina legal, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, la confirma.

Publíquese, notifíquese, cópiese y remítase el expediente al Ministerio de Justicia.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA. — JESÚS CASAS

ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintiuno de Octubre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: El apoderado de la parte demandada en el juicio promovido por el Presbítero José Joaquín Hoyos, contra el Presbítero Simón de Jesús Herrera, sobre resolución de un contrato y otros cargos, solicitó oportunamente, en uso del derecho que reconoce el artículo 99 de la Ley 105 de 1890, que se declare expresamente que son de cargo del recurrente las costas causadas en el recurso de casación interpuesto por la parte del Presbítero Hoyos, y decidido por la sentencia de veinte de Septiembre próximo pasado, notificada el ocho del corriente, por la cual se declaró infundado dicho recurso y se confirmó la sentencia de segunda instancia, habiéndose guardado silencio sobre las costas del recurso.

La Corte, para resolver este incidente, considera lo siguiente:

Conforme al artículo 864 del Código Judicial, en toda sentencia definitiva se condenará precisamente en las costas á la parte contra la cual se pronuncia, cuando interponga algún recurso y la providencia contra la cual se interpuso sea confirmada.

Esta doctrina, clara y terminante como es, es aplicable, sin duda, al recurso de casación, porque no hay fundamento legal que lo exceptúe de la regla general consignada en la disposición citada.

La Ley 61 de 1886, regló el recurso de casación reconocido por la Constitución y atribuído á la Corte Suprema, y en el artículo 52 dispuso que en las sentencias en que se declarara no haber lugar al recurso, se condenara al recurrente al pago de todas las costas del mismo recurso, y si bien es verdad que este artículo fué derogado por la Ley 105 de 1890, que nuevamente organizó íntegramente el recurso de casación, el simple hecho de la derogación que sólo implica silencio en la nueva ley sobre este punto, no significa una excepción al principio establecido en una disposición general que consagra un derecho y una obligación correlativa.

En la Ley 61 de 1886, acaso era necesario disponer expresamente la condenación en costas, en caso de declarar infundado el recurso de casación, no sólo porque se trataba de un recurso nuevo, sino porque esa ley no disponía que al decidir que no era fundado el recurso, también hubiera de aprobar ó confirmar la sentencia del Tribunal, como lo preceptúa el artículo 383 de la nueva ley.

Podía, pues, haber lugar á duda sobre condenación en costas, si la Ley 61 citada no la hubiera dispuesto expresamente, ya porque el recurso se introducía por primera vez en la legislación, ya porque la disposición general del artículo 864 del Código Judicial pudiera no ser literalmente aplicable, porque en el recurso, tal como estaba reglamentado entonces, no había confirmación de la sentencia, como la hay hoy; pero si se tiene en cuenta esta última circunstancia y se considera que el Código Judicial que determina los casos de condenación en costas, fué adoptado cuando yá existía el recurso de casación, que no era, por consiguiente, nuevo, toda duda desaparece.

La Corte, en casos análogos al presente, ha condenado en costas al recurrente. Si en otros ha dejado de hacerlo, eso ha *dependido indudablemente de olvido*; pero á pesar de esto no se ha sentado doctrina legal sobre el caso en discusión, y ya que la parte contraria no se conforma con este silencio, como lo han hecho otras, es necesario reconocerle el derecho que tiene á ser indemnizada de las costas del recurso.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, adiciona la sentencia de veinte de Septiembre próximo pasado, declarando que las costas del recurso son de cargo de la parte del Presbítero José Joaquín Hoyos.

Notifíquese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y déjese copia de ella.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESUS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

SALVAMENTO DE VOTO

DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS DOCTORES CORRALES Y MEDINA.

Los infrascritos Magistrados no estamos de acuerdo con la mayoría de la Corte en la anterior resolución, y nos fundamos en las siguientes razones:

El recurso de casación es extraordinario en todas las legislaciones, en las que ha sido introducido, y con ese motivo se rige por disposiciones especiales, no siéndole aplicables las leyes comunes del procedimiento ordinario, sino en cuanto sean necesarias para dar ingreso al recurso y garantizar el derecho de defensa; por ejemplo, lo concerniente á notificaciones, impedimentos, recurso de hecho y otros semejantes; pero en todo aquello que no es indispensable para la sustanciación, no pueden tener cabida las disposiciones del Código Judicial en la casación, si en el tratado respectivo no se ha estatuído expresamente sobre ellas. El condenar en costas á la parte vencida no es cosa perteneciente á la tramitación del recurso: propiamente hablando, es una pena que se impone, y es claro que á nadie puede imponerse pena que no haya sido establecida por ley preexistente.

La Ley 61 de 1886, primera que reglamentó el recurso de casación, disponía, en el inciso 2.° del artículo 43, que el recurrente asegurara á la parte contraria el valor de las costas, y en el artículo 52 que se condenara al recurrente al pago de ellas cuando se declarara no haber lugar al recurso. Estas prescripciones quedaron derogadas por la Ley 105 de 1890, la que en ninguna parte dispuso cosa alguna, en cuanto al afianzamiento y pago de costas en el recurso de casación, lo cual significa que en esta materia la ley no ha querido gravar en costas á la parte recurrente, cuando la sentencia no favorece sus pretensiones, seguramente porque dicho recurso no tiene por primordial objeto hacer justicia, sino el de uniformar la jurisprudencia en el país. Ni puede decirse que derogadas aquellas disposiciones, deba regirse el punto de las costas por las reglas generales, porque en el particular no hay deficiencia de ley sino relevación de una pena que la ley únicamente quiere se imponga en las dos instancias ordinarias de los juicios civiles.

De notarse es que el argumento que se hace consistir en que el número 2.° del artículo 864 del Código Judicial, dispone condenar en costas, cuando la providencia contra la cual se interpone algún recurso sea confirmada, no tiene aplicación al caso del inciso 3.° del artículo 383 de la Ley 105 de 1890, porque éste no habla de *confirmar* sino de *aprobar*; ni podía decir lo primero, porque ese término se emplea en las apelaciones como opuesto á *revocar*, *reformar*, al paso que el *aprobar* viene opuesto en dicha última disposición á *anular*, *romper*, que es el objeto de la casación. El haber usado alguna vez impropiamente un término en una sentencia, no autoriza para darle mayor alcance que el que tiene la voz que la misma ley emplea.

Por las razones expuestas, nuestro concepto es el de que no debe condenarse en costas cuando se declara infundado por la Corte el recurso de casación, condenación que no contienen las sentencias publicadas en la *Gaceta Judicial* números 322, 327, 331, 335, 338 y 342.

Bogotá, veintiuno de Octubre de mil ochocientos noventa y dos.

MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA. POMBO.—ISAZA.—CASAS ROJAS.—TRUJILLO.—VILLAFRÁDEZ.—*Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Octubre veintidós de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: La Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, por resolución de diez y ocho de Agosto del presente año, señalada con el número 3,984, no accedió al reconocimiento del crédito de 766 pesos setenta y cinco centavos ($ 766-75), reclamado por Manuel José Alvarez, titulándose cesionario y apoderado de José Miguel y Julián Echeverri, Pedro Suaza y otros individuos vecinos de diferentes Municipios del Departamento de Antioquia. Dicha resolución tuvo por fundamento el de que el reclamante apoyaba el derecho de sus causantes en recibos dados por agentes del Gobierno local de Antioquia, que no podían ser convertidos en atestaciones de ese mismo Gobierno, por no ser de los comprendidos en la Ley 44 de 1886, pues que los expresados recibos se expidieron por autoridades al servicio de los rebeldes en 1885.

El Ministerio del Tesoro encontró inobjetable el fundamento de la resolución aludida, y la confirmó en la que dictó el catorce de Septiembre siguiente, bajo el número 3,197.

Apelada esta decisión para ante la Corte, y sustanciado el recurso en la forma legal, para decidirlo en definitiva basta considerar que los recibos presentados, si bien pudieran acreditar exacciones hechas por los rebeldes, falta la comprobación indispensable de que cada uno de los individuos á cuyo favor se expidieron, fueron partidarios y sostenedores del Gobierno, como lo disponen los artículos 1.° y 20 de la citada Ley 44.

Además, hace notar la Corte que Manuel José Alvarez no tuvo personería para conferir poderes en su carácter de cesionario y apoderado, porque no hay en el expediente documento alguno que acredite ese carácter, y la Comisión pasó por alto la observación que hizo á este respecto el señor Fiscal Ribas Frade, á la vuelta de la foja 61, sin que aparezca tampoco en el expediente auto ó resolución de la Comisión que mandara tener como apoderado de Alvarez al doctor Andrés Lara.

A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo con el concepto del señor Fiscal de la Comisión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la resolución apelada.

Notifíquese, cópiese é insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Mariano de Jesús Medina.—Juan Evangelista Trujillo.—Lucas Villafrádez.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Octubre veinticuatro de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Mercedes, Soledad, María Francisca y Mariano Ortega, nietos legítimos del militar de la Independencia nacional José María Ortega y Nariño, solicitan que se les declare derecho á una recompensa unitaria conforme á la Ley 84 de 1890.

Oído el señor Procurador y practicadas muchas pruebas á virtud de repetidos autos para mejor proveer dictados por la Corte, se ha completado al fin el expediente, y se procede en consecuencia á decidir la reclamación definitivamente.

Resultan justificados los siguientes hechos:

1.° Con copia de la respectiva hoja de servicios, que el General Ortega y Nariño prestó sus servicios á la causa de la Independencia desde el año de 1810 hasta obtener el empleo de General en 2 de Octubre de 1827; que desempeñó importantes destinos; que hizo varias campañas y estuvo en muchas batallas y acciones de guerra, entre ellas la de "Simaña" en 1810, la de "Ventaquemada" en 1811, la de "Niquitao," en que fué recomendado con especialidad por su valor y denuedo, la de "Horcones," las tres que se dieron en los campos de "Vigirima," la de "Taguanes," el asalto y sitio de "Puerto-Cabello" y el sitio de "Valencia," en que recibió dos heridas; que fué condecorado con la estrella de los libertadores de Venezuela etc., etc.;

2.° Con copia de la respectiva acta de defunción y con decretos y actos oficiales publicados en la *Gaceta Oficial* de la Confederación Granadina, correspondiente al once de Diciembre de 1860, que el citado General Ortega y Nariño murió en esta capital el cinco de ese mismo mes;

3.° Con las respectivas actas de nacimiento y de defunción y con declaraciones de testigos recibidas en forma legal, que los demandantes son hijos legítimos de Segundo Ortega, ya finado, que lo fué del General Ortega y Nariño;

4.° Que los reclamantes son muy pobres; que observan buena conducta y la observaron con su padre; que son solteras las mujeres; que Mariano es menor de edad; que no han recibido recompensa del Tesoro nacional y no figuran en la acta de pensionados, así como también que los otros hijos de Segundo Ortega no están en el caso de obtener recompensa;

5.° Que el finado General José María Ortega y Nariño fué casado en primeras nupcias con Mercedes Párraga, y en segundas, con Teresa Caicedo; que del primer matrimonio tuvo cuatro hijos, á saber: Mercedes, que murió soltera en Diciembre de 1862, Emilia, Ulpiana y José María; que del segundo matrimonio tuvo tres hijos, que fueron Segundo, padre de los demandantes, Valentina y Francisco. Emilia y Ulpiana son viudas y han manifestado que no se creen con derecho á participar de recompensa por razón de los servicios prestados por su abuelo, el General Ortega, á la causa de la Independencia. José María Ortega Párraga y Francisco Ortega Caicedo han hecho igual manifestación;

6.° Consta por certificación del Ministerio del Tesoro, que Valentina Ortega goza de una pensión mensual de veinticinco pesos ($ 25) por razón de los servicios prestados á la Independencia por el General José María Ortega y Nariño, y que no hay otra persona que goce hoy de pensión por motivo de estos mismos servicios.

Dedúcese de lo expuesto, que de los descendientes del mencionado General Ortega, los únicos que tienen derecho á recompensa son los demandantes, en representación de su padre Segundo Ortega, recompensa que debe ser la mitad del total que la ley asigna á los deudos de un General, porque la otra mitad se reputa equivalente á la pensión de que goza una de las hijas de dicho General.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador y en conformidad con lo que disponen los artículos 1.°, 2.°, 4.°, 5.°, 6.°, 9.°, 48 y 52 de la Ley 84 de 1890, declara que Mercedes, Soledad, María Francisca y Mariano Ortega, nietos legítimos del General de la Independencia José María Ortega y Nariño, representados en este juicio por su apoderado Gregorio Gómez G., tienen derecho á una recompensa unitaria de cuatro mil ochocientos pesos ($ 4,800), que se les pagará del Tesoro nacional y que será divisible por partes iguales entre los agraciados.

Déjese copia de esta sentencia, comuníquese al Ministerio de Guerra, publíquese en la *Gaceta Judicial* y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Mariano de Jesús Medina.—Juan Evangelista Trujillo.—Lucas Villafrádez.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veinticuatro de Octubre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: En 28 de Febrero de 1887 Antonio Caipa reclamó ante el Ministerio de Guerra el reconocimiento de mil novecientos diez pesos ($ 1,910), por expropiaciones sufridas en la última guerra.

Estas expropiaciones están pormenorizadas en la relación presentada al Gobernador del Distrito federal, y son:

1.ª Catorce caballos que le tomó el General Vicente Aldana en Diciembre de 1884, á cien pesos..... $ 1,400

2.ª El arrendamiento de un potrero en Facatativá, en seis meses..... 150

Pasan..... $ 1,550

Vienen.....$	1,550
3.ª Alquiler de cinco carruajes.....	100
4.ª Dos caballos suministrados al Secretario de Gobierno de Cundinamarca.....	200
5.ª Ocho caballos vendidos al Gobierno, en....	320
6.ª Dos caballos expropiados á José Rafael Romero, y que éste endosó al reclamante, cuyo valor es de.....	160
Suma mayor que la reclamada. .....$	2,330

La Comisión de empréstitos y expropiaciones, en resolución que lleva el número 3,666 del cinco de Mayo del presente año, solamente reconoció las dos primeras partidas, estimándolas, verdad sabida y buena fe guardada, en la suma de mil pesos ($ 1,000). Confirmada tal resolución por la del Ministerio del Tesoro, fué apelada por el Fiscal especial; también el apoderado del reclamante manifestó, al ser notificado, que no se conformaba con la resolución.

La Comisión concedió el recurso al Fiscal, y nada dijo de la manifestación hecha por el demandante.

Toca á esta Superioridad dictar la resolución final, después de haber dado al recurso la tramitación legal, y para ello se considera:

Los ocho caballos cuyo valor es de trescientos veinte pesos ($ 320), aparece que se han reclamado en otro expediente que lleva el número 22.

La manifestación del demandante de no conformarse con lo resuelto, es á lo más una protesta, pero no la interposición de un recurso que la Corte tenga que decidir, ni una reclamación en contra, como dice el artículo 2.° de la Ley 152 de 1887; y por esa misma razón la Comisión procedió bien al conceder apelación únicamente al Fiscal.

Este ha manifestado, para sostener su apelación, que no se hallaba bien establecida la fecha de la expropiación de los catorce caballos, pues aun cuando los testigos decían que se había verificado en Diciembre de 1884, y esto mismo resultaba de la certificación del General Aldana, no se sabía si había tenido lugar antes ó después del doce de dichos mes y año.

En esta instancia el interesado ha presentado una nueva información de testigos, pero de ellos uno solo que afirma haber presenciado la expropiación, dice que ella se verificó después del doce de Diciembre. José María Quiroga declara de oídas y merece poca fe, porque en la declaración que rindió ante la Comisión, expresó, interrogado directamente por el Fiscal de ella, que sí había presenciado la expropiación de los catorce caballos. De esto se sigue que se ha obtenido una presunción más en favor del fallo de la Comisión que, verdad sabida y buena fe guardada, aceptó los hechos como verificados dentro del período de la rebelión; y ese juicio formado por el libre criterio que le concede la ley, la Corte siempre lo ha respetado, cuando por otra parte no hay pruebas que induzcan á considerarlo como manifiestamente desacertado.

Por estas razones y por no haber ninguna cosa que resolver de parte del reclamante, según queda dicho, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, se confirma la resolución apelada; y se llama la atención de la Comisión y del Ministerio del Tesoro al hecho de hallarse embargado este crédito, por ejecución seguida por el Banco Nacional.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente, encargando á la Comisión que haga sacar copia de todas las declaraciones dadas en este expediente por José María Quiroga y la pase al Fiscal del Circuito, para que si hubiere lugar, promueva el castigo de éste, por testimonio falso.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veinticinco de Octubre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Por medio de apoderado María Felipa Quintero pide á la Corte la recompensa militar que le corresponda, en virtud de haber su legítimo esposo, Miguel Sierra, rendido la vida en el campo de batalla, en defensa de los principios que informan las actuales instituciones nacionales, el veinticuatro de Diciembre de 1876, en la ciudad de Cali.

En apoyo de la demanda se han presentado los siguientes documentos:

1.° Declaraciones de cuatro testigos idóneos que expusieron ante el Juez y el Fiscal del Circuito de Cali que les constaba el hecho de la muerte del expresado soldado Miguel Sierra en la fecha y lugar que se dejan mencionados y en defensa de los principios que informan las actuales instituciones, así como el hecho de la buena conducta y la pobreza de la viuda María Felipa Quintero;

2.° Copia expedida por el Secretario del Juzgado del Circuito de Cali, de los certificados en que el Cura y el Notario de dicha ciudad afirman que en sus respectivos archivos no hay constancia alguna de quiénes fueron los individuos que murieron en la acción de armas que en la misma ciudad tuvo lugar el veinticuatro de Diciembre de 1876;

3.° Copia certificada de la partida del matrimonio que en catorce de Febrero de 1858 contrajeron Miguel Sierra y María Felipa Quintero;

4.° Dos certificaciones del señor Ministro del Tesoro, con las cuales se comprueba que ni Felipa Quintero ni sus hijas Concepción, Micaela y Joaquina Sierra han recibido recompensa alguna del Tesoro público;

5.° Tres declaraciones de testigos idóneos, rendidas ante el Juez y el Fiscal del Circuito de Cali, con las cuales se establece que Felipa Quintero tuvo en su matrimonio tres hijas, que son Concepción, Micaela y Joaquina, las cuales viven muy pobres al lado de su madre, y, como ella, observan muy buena conducta;

6.° Memorial legalmente presentado á la Corte por las tres mencionadas hijas de Felipa Quintero, en el cual declaran ellas que, habiendo sido notificadas por el Juez del Circuito de Cali, por orden expresa de la Corte, de que podían, si lo tenían á bien, hacer valer sus derechos á participar de la recompensa militar solicitada por su dicha madre, cedían en favor de ésta tales derechos, cosa que la Corte considera como una simple renuncia;

7.° Copias certificadas de las partidas de bautismo de las tres expresadas hijas de Miguel Sierra y María Felipa Quintero, documentos con los cuales se comprueba que aquéllas son mayores de edad.

Vistos estos comprobantes, la Corte, de acuerdo con el parecer del señor Procurador, halla que la presente demanda está ajustada á los requisitos necesarios para poder obtener recompensa militar; y, en consecuencia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que María Felipa Quintero, según el inciso 2.°, artículo 5.° y artículos 9.° y 11 de la Ley 84 de 1890, tiene derecho á una recompensa unitaria definitiva de setecientos cuatro pesos ($ 704), que se le pagará del Tesoro público nacional.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial*, avíse.se á Su Señoría el Ministro de Guerra y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, venticinco de Octubre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Pedro Ortega, por medio de su apoderado Andrés Lara, ha demandado del Tesoro nacional la recompensa militar á que el primero se considera con derecho, conforme á la Ley 84 de 1890, por haber sido herido en el brazo derecho con proyectil lanzado por arma de fuego, en el combate que tuvo lugar en el Puente del Cauca, el veintitrés de Abril de mil ochocientos setenta y siete, entre las fuerzas

del Gobierno nacional que estuvieron á órdenes del General José María Sánchez, y las revolucionarias, comandadas por el General Villota.

En el expediente aparecen comprobados, con declaración jurada de un número plural de testigos, los hechos siguientes:

1.° Que el demandante Pedro Ortega combatió en la función de armas en que recibió la herida, defendiendo los principios establecidos en las instituciones políticas que actualmente rigen en la República;

2.° La identidad del reclamante, pues los testigos aseguran de ciencia cierta, que aquél es el mismo que peleó en el combate mencionado;

3.° Que Ortega es casado y muy pobre, y que militó en aquella época en la clase de Sargento 1.°, pues aunque el testigo Manuel Jesús Mera asevera en su exposición que Ortega tenía, cuando fué herido, el empleo de Subteniente, el mayor número ha afirmado lo contrario, esto es, que figuró como Sargento 1.° en el combate aludido, en el cual le vieron herido en el brazo derecho;

4.° Que del reconocimiento practicado en la persona de Ortega, en el Despacho de la Gobernación del Departamento del Cauca el día veintiuno de Febrero de mil ochocientos noventa y uno, por los facultativos nombrados por Su Señoría el Gobernador, doctores Domingo Cajiao C., Alfredo Garcés y Juan N. Wallis O., resultó comprobado que el referido Pedro Ortega tiene las cicatrices de una herida de bala, en la cual el proyectil penetró por la parte inferior y posterior del brazo derecho, en una dirección oblicua de abajo hacia arriba, despedazando el hueso húmero en su tercio inferior, y atravesando los músculos, salió por la parte anterior é interna del brazo, en su tercio superior; que la expresada herida, por la fractura que produjo en el hueso, ha ocasionado en el ofendido una incapacidad relativa para trabajar, pues no puede hacerlo como lo hacía antes de la herida, y

5.° Que el reclamante no ha sido pensionado ni recompensado del Tesoro nacional, por razón de su invalidez, ni por otro motivo, el cual hecho consta en la certificación expedida por Su Señoría el Ministro del Tesoro, con fecha catorce de Enero del corriente año.

Por tanto, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador general de la Nación, y de lo que prescriben los artículos 1.°, 5.°, 11 y 19 de la Ley 84 de 1890, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que Pedro Ortega tiene derecho á recibir del Tesoro nacional, por razón de la invalidez relativa que sufre, la recompensa unitaria definitiva de cuatrocientos cincuenta y seis pesos ($ 456), suma igual al sueldo correspondiente á dos años, señalado al Sargento 1.°

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, Octubre veinticinco de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Apelada para ante esta Superioridad la resolución que dictó el Ministerio del Tesoro, con el número 2,494 en veintiuno de Octubre de mil ochocientos noventa y uno, por medio de la cual impartió su aprobación á la que pronunció la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones el ocho del mismo mes, con el número 3,152 en la reclamación que tenía entablada Juan Valencia, vecino de Manizales, contra la Nación, por el importe de los empréstitos y expropiaciones que se le hicieron por las fuerzas militares del Gobierno nacional, en el mes de Abril de 1877, la Corte procede á *determinar* el recurso interpuesto, después de sustanciado por los trámites legales y de haber dictado varios autos para mejor proveer, con el objeto de esclarecer los hechos que sirven de fundamento á la reclamación.

Según la relación de la exacción de bienes que el reclamante ha presentado para apoyar su demanda, sufrió las siguientes:

Ciento diez y seis reses vacunas, así: 29 vacas horras, á $ 10; 11 vacas con sus crías, á $ 20; 15 novillos de ceba, á $ 30; 53 bueyes, á $ 40; 8 bueyes más, á $ 45 ..	$ 3,440
16 cargas de maíz, á $ 10	160
4 caballos, á $ 50	200
3 yeguas, á $ 40	120
Varios objetos, cantidad de dinero y alhajas de uso de la familia del reclamante, las cuales se especifican en dicha relación	1,000
Dos empréstitos pagados: uno de $ 60 y otro de $ 80	140
Total	$ 5,060

El testigo Juan de D. Castaño asegura en su declaración, corriente á fojas 28, que presenció que al reclamante Juan Valencia le fueron expropiados por las fuerzas del Gobierno, los siguientes bienes: 40 reses de cría, á $ 20 cada una; 60 bueyes, con sus atavíos y enjalmas, estimados en $ 42 cada uno; y diez y seis cargas de maíz, á $ 10 cada una; 4 caballos, á $ 50 cada uno; 3 yeguas, á $ 40 cada una; y varios efectos, sin haberlos determinado por su número ni por su especie.

El testigo Lucio Osorio asegura en su declaración de fojas 29, que presenció las expropiaciones, y determina los bienes y sus precios, de la misma manera que el testigo Castaño, agregando que también se expropiaron á Valencia tres monturas aperadas, de valor de $ 25 cada una.

Ante el Juzgado del Circuito de Rionegro, en el Departamento de Antioquia, y con fecha tres de Mayo del corriente año, declaró el testigo Ramón Duque, en los propios términos que Osorio, asegurando que Valencia había pagado en dinero, por razón de empréstito, dos partidas: una de $ 60 y otra de $ 80, sin dar razón del funcionario que impuso el empréstito, ni la oficina en que se enteraron dichas cantidades.

Isidro Bermúdez declaró ante el Juez del Circuito de Manizales, que presenció las expropiaciones del ganado vacuno, de las caballerías y de las diez y seis cargas de maíz, en el número que determinaron los testigos anteriores, aunque difieren en el precio de algunos semovientes; y respecto de las monturas, aseguró que habían sido expropiadas, por haberlo oído decir.

Aunque el testigo Lorenzo Ocampo declaró (fojas 27) que había presenciado las expropiaciones del ganado vacuno, bestias, cargas de maíz y las monturas, no fijó ni el número ni su valor, de tal modo que nada puede deducirse de la declaración de este testigo en favor del demandante.

Otros testigos, y entre ellos el Honorable Representante al Congreso por el Departamento de Antioquia, Silverio Arango, declaran en favor de Juan Valencia, pues aseguran, en sustancia, que es hombre laborioso; que poseía algunos bienes de fortuna antes de la guerra de 1876 y 1877, y que constaba de pública notoriedad que sufrió fuertes exacciones llevadas á cabo por las fuerzas militares que ocuparon la ciudad de Manizales, al mando del General Julián Trujillo, en Abril de 1877; de modo que aunque no enumeran los bienes expropiados, sí robustecen la parte moral de la reclamación.

La Corte, pues, en consideración á que no fué reconocida parte alguna del crédito cuyo pago demandó Juan Valencia ante la Comisión administrativa; y que en esta segunda instancia, á virtud de autos dictados en ella, se han comprobado algunos hechos que sirven de fundamento á la demanda, procede á dictar el fallo correspondiente.

En términos precisos, resulta de todo lo actuado que las fuerzas del Gobierno nacional, comandadas por el General Trujillo, al ocupar el territorio del extinguido Estado de Antioquia, tomaron de la posesión del citado Juan Valencia, llamada "Olivares" y de la casa de habitación del mismo, para el servicio de dichas fuerzas, los siguientes bienes, conforme aparece acreditado con la prueba de testigos idóneos.

40 reses vacunas, de cría y de ceba, á veinte pesos ($ 20) cada una	$ 800
60 novillos con sus enjalmas, á cuarenta y dos pesos ($ 42) cada uno	2,520
16 cargas de maíz, á $ 10 cada una	160
4 caballos, á $ 50 cada uno	200
3 yeguas, á $ 40 cada una	120
3 monturas con sus aparejos, á $ 25 cada una	75
Total	$ 3,875

Cierto es que varios testigos han declarado que al reclamante Valencia le hicieron las tropas, en el citado mes de Abril, varios robos de alhajas, vestidos, útiles de servicio doméstico etc., pero sobre esto nada se puede reconocer, así porque estos hechos no constituyen verdaderas expropiaciones, sino daños inferidos al reclamante, como porque ningún testigo ha especificado los efectos tomados, ni su valor aproximado, ni en concepto de la Corte es fácil á un testigo que no sea miembro de la familia del demandante, asegurar á ciencia cierta lo que se pierde de este modo.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, reconoce á cargo del Tesoro nacional y á favor de Juan Valencia, vecino del Departamento de Antioquia, la cantidad de tres mil ochocientos setenta y cinco pesos ($ 3,875) y absuelve al mismo Tesoro del resto de la cantidad demandada, quedando así revocada la resolución apelada.

Notifíquese, cópiese é insértese en la *Gaceta Judicial*, y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintiseis de Octubre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Santiago Narváez, vecino de Florida, en la Provincia de Pasto, demanda la concesión de una recompensa militar, de acuerdo con la Ley 84 de 1890, por hallarse sufriendo invalidez, á causa de una herida que recibió combatiendo en favor del Gobierno de la Confederación Granadina en la guerra de 1860 a 1863.

Perfeccionado el expediente de la manera exigida por la Corte, de él aparece la prueba legal de estos hechos:

1.° Que dicho Narváez prestó sus servicios militares en la expresada guerra, en favor del Gobierno legítimo, y al mando del General Julio Arboleda; que recibió una herida de bala en la pierna derecha, en el combate librado en "Los Arboles," el treinta y uno de Julio de mil ochocientos sesenta y uno. Así lo afirman los compañeros de armas de Narváez, y testigos presenciales, Agustín y Benedicto Cabrera, Alvaro Agustín Guerrero y General Miguel María Villota, siendo de advertir que los testigos están de acuerdo en cuanto al último empleo de Narváez, pues aseguran que ha militado como Sargento Mayor.

Como no se ha acompañado el respectivo despacho, por no existir en la Gobernación del Cauca, según se ha comprobado, la Corte, apartándose de la opinión del señor Procurador, estima que el certificado del General Villota hace completa fe respecto del último empleo que tiene el reclamante, que siendo el de Sargento Mayor, á éste debe referirse la recompensa, de acuerdo con lo que dispone el artículo 9.° de la Ley 84 de 1890;

2.° Que Santiago Narváez, á consecuencia de aquella herida se encuentra *inválido, según resulta del reconocimiento* practicado en él, ante el Prefecto de la Provincia de Pasto y por la Junta de profesores, de que hablan los artículos 17 y 18 de la citada Ley 84; y aunque éstos aseguran que la herida reconocida produce invalidez absoluta, la Corte ha decidido muchas veces, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la misma ley que, cuando no hay mutilación del miembro herido, la inutilidad ó invalidez es sólo relativa;

3.° Que el demandante no ha recibido pensión ni recompensa por razón de su invalidez, pues así lo certifica el señor Ministro del Tesoro.

Como se ve, el solicitante ha justificado los hechos que sirven de fundamento á su demanda, y en esa virtud, la Corte Suprema, de acuerdo en parte con la opinión del señor Procurador y con lo que disponen los artículos 1.°, 5.°, numeral 8.°, 6.°, 9.° y 19 de la Ley 84 de 1890, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que Santiago Narváez tiene derecho á recibir del Tesoro nacional una recompensa unitaria y definitiva de mil novecientos veinte pesos ($ 1,920), equivalente á la mitad del sueldo de cuatro años, asignado á un Sargento Mayor, por la invalidez parcial ó relativa de que adolece, con motivo de una herida recibida en acción de guerra.

Notifíquese, cópiese, dése cuenta al Ministerio de Guerra, publíquese en la *Gaceta Judicial* y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintisiete de Octubre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: En el juicio sobre reclamación de recompensa militar propuesto por la viuda é hijas solteras del Coronel efectivo (ó General graduado) Ramón M. Arjona, militar de la guerra de la Indedendencia, esta Superioridad, en sentencia de treinta de Julio de 1891, reservó á los hijos ó representantes de Santiago Arjona la cuarta parte de la suma, que según el artículo 6.° de la Ley 84 de 1890, correspondía á los hijos legítimos de dicho General, ó sean quinientos veintisiete pesos cincuenta centavos ($ 527-50); porque las tres cuartas partes restantes se distribuyeron entre las tres hijas solteras del mencionado militar, que son hermanas legítimas del finado Santiago Arjona.

En virtud de este fallo se ha presentado Eloísa Arjona, viuda de Santiago Arjona, á pedir la cantidad reservada de quinientos veintisiete pesos cincuenta centavos ($ 527-50), para sus menores hijos María Cristina, Margarita, Santiago Alberto, María Julia Loreto, Ana María, Ramón Liborio, Ernestina y Rubén Arjona.

Para este efecto ha comprobado la peticionaria, con los documentos requeridos por la ley, que es viuda de Santiago Arjona, y que en el matrimonio contraído con él tuvo los hijos antes expresados, que están en la menor edad.

Estando el punto resuelto en la sentencia de treinta de Julio de 1891, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ordena se le paguen del Tesoro nacional á Eloísa Arjona de Arjona, en su calidad de representante legal de sus menores hijos María Cristina, Margarita, Santiago Alberto, María Julia Loreto, Ana María, Ramón Liborio, Ernestina y Rubén Arjona, nietos legítimos del finado General Ramón M. Arjona, la cantidad de quinientos veintisiete pesos cincuenta centavos ($ 527-50).

Notifíquese, cópiese, archívese el expediente y dése cuenta al Ministerio de Guerra.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Octubre diez y siete de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: El Tribunal del Distrito Judicial del Cauca consulta la sentencia de fecha nueve de Marzo del presente año, por la cual condenó al ex-Juez del Circuito de Atrato, Juan

Eurípides Valencia, á seis meses de suspensión del destino de Juez y á pagar una multa de ocho pesos y las costas del juicio; y por cuanto Valencia no ejercía á la fecha de la sentencia el destino oneroso de Juez suplente, á pagar por vía de multa la suma de tres pesos, todo en conformidad con los artículos 573, 77, 86 y 124 del Código Penal que hoy rige.

Sustanciándose la consulta ante la Corte, el señor Procurador de la Nación pidió que se trajese á los autos el sumario original instruído por el Juez Valencia contra Dolores Moreno, en el cual se dictó por éste el auto de detención que ha dado lugar al juicio de responsabilidad que se ha seguido contra él por detención arbitraria.

Traído dicho sumario por mandato de la Corte, el mismo señor Procurador ha pedido la revocación de la sentencia consultada, por creer que de esa actuación sí resulta la prueba bastante para considerar á la expresada Moreno responsable de la tentativa de un delito tal como la definía el artículo 11 del anterior Código Penal y la define hoy el artículo 5.° del Código actualmente en vigor, y por consiguiente, arreglada á la ley la providencia que dictó el Juez el veinte de Enero de 1890, en la que ordenó la detención de la sindicada y su remisión con el sumario al Juez superior del mencionado Distrito Judicial.

Estudiado detenidamente por la Corte el sumario referido, de él aparece que Dolores Moreno, armada de un machete, perseguía, siguiendo la orilla del río Cabi, á Bartolomé Moreno, quien bajaba dicho río en una canoa, en la que llevaba á Nicanor Sánchez, hombre con quien ella tenía relaciones ilícitas, y profería amenazas contra Bartolomé, tales como la de volverlo picadillo si no ponía en libertad á Sánchez, y esto á pesar de que el mencionado Bartolomé ejercía á la sazón el empleo de Inspector de Policía de la fracción de Cabicito, aunque sin ejecutar contra éste ataque alguno que diera lugar á la indebida calificación que el Juez Valencia dió al hecho de tentativa de asesinato.

Pero es lo cierto que, aun cuando de los hechos ejecutados por la Moreno no podía deducirse con claridad que ella tuviera el designio de herir y menos de dar muerte á Bartolomé Moreno, sus palabras amenazantes y la actitud agresiva con que perseguía á éste, lo cual está plenamente probado, sí constituyen un hecho criminoso, conforme á los artículos 237 y 595 del Código Penal entonces vigente, que daba lugar á detención conforme al artículo 1552 del Código Judicial, aplicable á la sazón.

Error manifiesto del Juez fué el de calificar de tentativa de asesinato lo que no pasó de ser una amenaza, y creer por lo mismo el hecho de la competencia del Juez superior, quien obró rectamente al dictar el auto de sobreseimiento que confirmó el Tribunal del Cauca. Pero el sometimiento á juicio y condenación del Juez Valencia, por el delito de detención arbitraria, no los encuentra la Corte de acuerdo con lo que define por tal el numeral 2.° del artículo 572 á que se refiere el 573 del Código Penal que se ha aplicado, supuesto que, como se ha visto, la detención ordenada contra Dolores Moreno, estaba de acuerdo con lo que disponía el artículo 1552 del Código Judicial, dado que sí podía procederse contra ella por delito que tenía señalada pena corporal, ya se consideren las amenazas hechas á un funcionario público, conforme al artículo 237, ya se consideren hechas á un individuo particular, según el artículo 595 del Código Penal vigente cuando las amenazas tuvieron lugar.

A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo con lo pedido por el señor Procurador, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca la sentencia consultada y absuelve al ex-Juez Juan E. Valencia del cargo por que se le llamó á juicio y por el cual fué condenado.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial*, y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintisiete de Octubre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Esta Superioridad, por auto de tres de Agosto del corriente año, llamó á juicio de responsabilidad, por los trámites extraordinarios, á Cayetano Delgado, Fiscal del Tribunal del Cauca, por el delito de *abuso de autoridad*, que castiga el capítulo 8.°, título 10.°, libro 2.° del Código Penal.

Notificada esta providencia, el encausado rindió el informe respectivo, al cual acompañó varios documentos que creyó necesarios para su defensa, y devuelto el expediente á esta Oficina, se procede, después de haber citado á las partes para sentencia, á pronunciar el fallo que le ha de poner fin á la causa.

Al procesado se le llama á juicio, por haber dicho en una vista fiscal, dada el veintidós de Marzo del corriente año, en un juicio criminal seguido contra varios individuos por el delito de robo, que el Juez Superior del Distrito Judicial del Cauca "era benévolo y piadoso con los ladrones, á quienes absolvía por simples pretextos, que siempre buscaba con solícito interés."

El encausado ha alegado en su defensa varias razones, que se pueden reducir á lo signiente:

1.° Que los empleados del Ministerio Público no ejercen mando ó jurisdicción, y por lo mismo no pueden cometer el delito de *abuso de autoridad*, y mucho menos, ser llamados á juicio por ese motivo;

2.° Que dando por cierto que dichos empleados pudieran cometer ese delito, las palabras dirigidas contra el Juez Superior del Distrito Judicial del Cauca, lejos de constituír una infraccción de la ley, son el cumplimiento de la función 6.ª que les señala el artículo 265 del Código Político y Municipal, á los Fiscales de los Tribunales de Distrito, una vez que esas palabras son expresión de la verdad.

El artículo 345 de la Ley 105 de 1890, dispone que en la parte resolutiva del auto de enjuiciamiento, se formule el cargo, mencionando el delito con la denominación que le da el Código Penal, en el respectivo capítulo, ó en el correspondiente título, cuando éste no se divide en capítulos, sin señalar artículo ninguno.

Por este motivo, en el auto de tres de Agosto último, por el cual se llamó á juicio al Fiscal Delgado, se formuló el cargo, mencionando el delito con la denominación de *abuso de autoridad*, que es la que trae el capítulo 8.°, título 10.°, libro 2.° del Código Penal, sin citar el artículo que se ha creído violado.

La aserción hecha de que un empleado del Ministerio Público, que no ejerce mando ó jurisdicción, no puede cometer ninguno de los delitos definidos en dicho capítulo 8.°, es inadmisible; porque justamente los artículos 552, 555, 565 y otros del referido capítulto, tratan de las penas á que se hacen acreedores los funcionarios públicos de cualquiera clase que sean, aunque no tengan mando ó jurisdicción, por ciertas trasgresiones de la ley, doctrina que confirma el artículo 756 del citado Código Penal.

El deber que les impone á los Fiscales de los Tribunales el ordinal 6.° del artículo 265 de Código Político y Municipal, de vigilar la conducta de los empleados de los respectivos Departamentos, y promover lo conveniente para que se les exija la correspondiente responsabilidad por las faltas y delitos que cometen, no los autoriza para injuriar á los funcionarios, cuyas providencias no se estiman jurídicas y que suben en consulta ó por recurso de apelación, al Superior; porque para impugnar una resolución y demostrar que no es legal, no es necesario ofender al autor de ella.

Siendo evidente que el procesado es el autor de las palabras, por las cuales se le ha llamado á juicio; que de esas expresiones no hizo uso en juicio que se le siguiera al Juez Superior del Distrito Judicial del Cauca, para averiguar la responsabilidad en que hubiera incurrido por los hechos que se le imputan; que la facultad que tiene para emitir concepto en los sumarios y causas que han de practicarse de oficio, no lo exonera de tratar con respeto y consideraciones á los funcionarios que intervienen en ellos, hay que convenir en que ha cometido el delito definido en el artículo 565 del

Código Penal, por haberse excedido, á sabiendas (cosa que se presume, según el artículo 2025 del Código Judicial), en las atribuciones de su empleo.

La Corte no le había dado antes al artículo 565 del Código Penal el alcance que hoy le señala; pero un estudio detenido del espíritu que informa los artículos 551 y 756 del propio Código y 339 de la Ley 105 de 1890, le ha hecho ver que si á los particulares se les castiga severamente cuando irrespetan á las autoridades, los empleados públicos, que deben dar ejemplo, no pueden quedar sin pena cuando ejecutan el mismo acto censurable. Por lo mismo, estima la Corte que, conforme á la parte final del citado artículo 756, la pena que debe aplicarse es la señalada en el artículo 551.

En mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, se condena á Cayetano Delgado, cuya responsabilidad se califica en tercer grado, á pagar diez pesos ($ 10) de multa, los perjuicios que haya ocasionado al ofendido con su delito, y las costas procesales.

Se comisiona al expresado Tribunal para que notifique esta sentencia al procesado, para lo cual se remitirán los autos con el despacho del caso, y los devuelva oportunamente.

Publíquese, notifíquese al señor Procurador, cópiese, dése cuenta á los demás empleados á quienes corresponda y archívese el proceso.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintidós de Octubre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Por medio de apoderado, José Hilario Cano ocurre de hecho ante la Corte, para que se le conceda el recurso de casación que en tiempo oportuno interpuso contra la sentencia definitiva dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Panamá, en el juicio de nulidad de un interdicto promovido contra el recurrente por la Compañía universal del Canal interocéanico, recurso que el expresado Tribunal le negó por providencia de fecha veinte de Enero último, fundándose para ello en que no existía entre las sentencias de primera y de segunda instancia, la contrariedad exigida por el artículo 366 de la Ley 105 de 1890.

Habiéndose dado al asunto la tramitación que le corresponde, para resolver lo procedente en derecho, se considera:

Al fijar la Ley 105 de 1890, en el parágrafo III del capítulo primero (recursos de casación y revisión), el procedimiento que debe emplearse para la admisión de los recursos de casación en asuntos civiles, nada dice acerca del modo como éstos pueden intentarse mediante el recurso de hecho; de manera que á este respecto la ley adolece de un verdadero vacío.

Mas como no es posible suponer que cuando indebidamente nieguen los Tribunales Superiores de Distrito Judicial la admisión de recursos de casación que se intenten con todos los requisitos legales necesarios para su interposición y tramitación correspondientes, las partes no tengan recurso ninguno para hacerse oír ante la Corte, esta Superioridad ha resuelto yá varias veces que de conformidad con el artículo 8.º de la Ley 153 de 1887, puede, por analogía, aplicar á casos de esta especie las disposiciones del capítulo II, título VII, libro segundo del Código Judicial; pero que no puede aplicarlas al pie de la letra, sino acomodándolas á las exigencias especiales y peculiares condiciones del recurso de casación.

De consiguiente, no puede aplicar al caso el artículo 905 del Código Judicial en un sentido estricto y literal, sino que debe referirlo á las disposiciones pertinentes de la Ley 105 de 1890, y ponerlo en congruencia y armonía con ellas, de manera que las circunstancias que según dicho artículo deben concurrir para que sea admisible un recurso de hecho, sean, en tratándose no de apelación sino de casación, no precisamente las definidas por dicho artículo 905, para los efectos de la apelación, sino más bien las que el artículo 374 de la Ley 105 de 1890, señala como indispensables para que un Tribunal Superior conceda un recurso de casación.

Siendo esto así, lo que la Corte ha de examinar para resolver si admite ó nó á Cano el referido recurso de hecho, es simplemente si en el presente caso se reúnen las circunstancias de que trata el mencionado artículo 374 de la Ley 105 de 1890, y que son las que deben los Tribunales tener presentes para conceder ó nó las casaciones que se interpongan.

Y lo primero que á este respecto la Corte observa es que el motivo en que el Tribunal de Panamá fundó su mencionada providencia de veinte de Enero último, no es en manera alguna correcto ni jurídico, pues terminantemente advierte aquella disposición legal que no es potestativo del Tribunal ocuparse en apreciar las circunstancias primera y tercera del artículo 366 de dicha ley; de manera que no tenía el Tribunal facultad para entrar á apreciar si las sentencias de primera y de segunda instancia del juicio sobre que recaía el intentado recurso eran entre sí conformes ó eran contrarias, porque esto sólo incumbe á la Corte.

Pero sí era de la competencia del Tribunal el resolver si en el caso presente concurría la circunstancia segunda de las mencionadas en el artículo 366, y en el supuesto de que este punto fuese dudoso para el Tribunal, bien pudo éste, en uso de la facultad que le da la segunda parte del artículo 372, hacerlo fijar mediante dictámen pericial.

Por su parte la Corte, sustanciando el recurso de hecho, halló que en ese efecto ese punto era oscuro, y por eso dictó su auto de veintitrés de Julio último, por medio del cual se dispuso que si la cuantía del pleito no estaba determinada en autos de un modo preciso, se procediera á determinarla en la forma prevenida por la ley, nombrando peritos y oyendo su dictamen, para lo que debía librarse la correspondiente provisión. Cumplióse dicho auto, y dió por resultado el que el perito Nicolás Barros P., manifestó su concepto de que la cuantía del juicio era de siete mil sesenta y seis pesos y dos tercios ($ 7,066 ⅔); el perito, Bolívar J. Franco, expresó el suyo en el sentido de que dicha cuantía era de siete mil pesos ($ 7,000), y el tercero en discordia, José María Grau se adhirió al parecer de Barros P.; es decir, que quedó para el efecto de la casación el valor del juicio fijado en la suma de siete mil sesenta y seis pesos y dos tercios ($ 7,066 ⅔).

Como además de ésto, en autos hay constancia de que el recurso se interpuso en tiempo oportuno y por persona hábil, visto es que se han llenado las circunstancias legales necesarias para admitirlo.

Y por tal consideración la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, admite el presente recurso de hecho y dispone pedir al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Panamá los autos, y citar á costa del recurrente á la otra parte, para que, dentro de treinta días, después de notificada la presente decisión, comparezca por sí, ó por medio de apoderado, á estar á derecho en el recurso de casación que se concede á José Hilario Cano contra la sentencia de veinticinco de Noviembre último, dictada por dicho Tribunal en un juicio de nulidad intentado contra un interdicto, para todo lo cual se librará el correspondiente despacho al señor Presidente del expresado Tribunal.

Notifíquese, cópiese y publíquese en la *Gaceta Judicial*.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

IMPRENTA DE ANTONIO M. SILVESTRE.
Director, Tomás Galarza.

REPÚBLICA DE COLOMBIA.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AÑO VIII | Bogotá, 22 de Febrero de 1893. | NÚM. 371.

CONTENIDO.

Págs.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

La que concede á Baltasara Chamorro Trejo una recompemsa militar. (Magistrado ponente, doctor Isaza)..... 57
La que concede á Sixto Delgado una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Medina)..... 57
La que concede á Carmen Lozano Fernández una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Trujillo)..... 58
La que aprueba la sentencia dictada con fecha 19 de Julio de 1890, por el Tribunal Superior de Cundinamarca en el juicio seguido por Agustín Calvo Mendívil contra Lastenia Calvo de Maldonado, por perjuicios. (Magistrado ponente, doctor Villafrádez)..... 58

NEGOCIOS CRIMINALES.

La que confirma la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal Superior de Antioquia, en el juicio seguido contra Eleuterio Ramírez, Fiscal del Circuito de Jericó, por falta al cumplimiento de sus deberes. (Magistrado ponente, doctor Medina)..... 62

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

El que niega la revocación de un auto dictado por el Magistrado sustanciador en la solicitud de recompensa de Eusebia Hernández. (Magistrado ponente, doctor Medina)..... 63

NEGOCIOS CRIMINALES.

El dictado por la Corte en las diligencias sumarias contra Adán Vargas, por violación de correspondencia privada. (Magistrado ponente, doctor Corrales)..... 63
El que declara nulo lo actuado con posterioridad al seis de Abril de 1892, en el proceso seguido contra el soldado Buenaventura Caicedo, por homicidio voluntario. (Magistrado ponente, doctor Villafrádez)..... 64
El dictado por la Corte en el juicio ordinario de responsabilidad, seguido contra Miguel Piedrahíta Casas, Juez del Circuito de Toro, por mala conducta. (Magistrado ponente, doctor Isaza)..... 64

GACETA JUDICIAL.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Octubre veintisiete de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Baltasara Chamorro Trejo, vecina de Ipiales, por conducto de su apoderado José Joaquín Rico G., solicita que se le reconozca derecho á una recompensa unitaria definitiva por la muerte de su marido el Teniente-Coronel Matías Rosero, en acción de guerra y en defensa del Gobierno.

Con declaraciones de testigos presenciales, á falta justificada del acta respectiva, ha comprobado que contrajo matrimonio conforme al rito de la Iglesia Católica con el citado Matías Rosero.

Con prueba de la misma clase ha acreditado que no hubo hijos en este matrimonio; que la demandante ha observado y observa muy buena conducta; que vivió en buena armonía con su marido, y que carece de recursos para vivir.

Con documentos oficiales y con declaraciones de muchos testigos está comprobado que Matías Rosero murió en el hecho de armas que tuvo lugar en Ipiales el día diez de Febrero de mil ochocientos ochenta y cinco, combatiendo en defensa del Gobierno y en el empleo de Teniente-Coronel.

Con certificaciones del Ministerio del Tesoro se ha comprobado que la demandante no figura en el registro de pensionados de la República, y que en los libros de la Sección 3.ª de pensiones, no hay constancia de que haya recibido recompensa del Tesoro nacional.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador y en conformidad con lo que ordenan los artículos 1.°, 4.°, 5.°, 6.° y 9.° de la Ley 84 de 1890, declara que Baltasara Chamorro Trejo tiene derecho á una recompensa unitaria de cuatro mil ochocientos pesos ($ 4,800) por haber muerto su marido Matías Rosero en acción de guerra en defensa del Gobierno y en el empleo de Teniente-Coronel.

Comuníquese esta sentencia al Ministerio de Guerra, notifíquese y déjese copia, publíquese en la *Gaceta Judicial* y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintisiete de Octubre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Por medio de apoderado ha ocurrido á esta Superioridad Sixto Delgado, en solidtud de recompensa por invalidez producida á causa de heridas recibidas en combate defendiendo los principios fundamentales de las actuales instituciones.

Del expediente formado con tal objeto resultan comprobados los siguientes hechos, que el señor Procurador resume en los términos siguientes:

"1.° Que en Mayo de 1877, Delgado fué herido en el punto denominado "Páramo" (antiguo Estado del Cauca), en defensa de las actuales instituciones; que combatió en dicho sitio con la graduación de Sargento 2.°; que está pobre, y que es el mismo que ha promovido este juicio. Así lo declaran Andrés Ojeda, Buenaventura Flórez, Juan Henríquez, Francisco Lozano y otros, que dan razón satisfactoria de su dicho;

"2.° Que tal herida, en el antebrazo derecho ha producido en Delgado invalidez relativa para el trabajo. Este es el dictamen de la Junta médica que practicó en el solicitante el reconocimiento que previenen los artículos 17 y 18 de la Ley 84 de 1890, y

"3.° Que Delgado, según consta en certificación especial de Su Señoría el Ministro del Tesoro, no ha recibido de la República pensión ni recompensa con motivo de su invalidez adquirida en mil ochocientos setenta y siete."

En tres ocasiones diversas ha sido reconocido el solicitante, y del último reconocimiento aparece que tiene una cicatriz producida por proyectil, en el tercio inferior de la cara anterior del antebrazo derecho, respecto de la cual dicen los peritos Miguel B. Muñoz, Miguel Caicedo y Manuel M. Rojas: "La inflamación consecutiva ha alcanzado las vainas tendinosas de los músculos flexores de la mano y producido un tejido de esclerosis que ha dado como último resultado la retracción forzada de los tendones de los tres últimos dedos. Tanto por la inacción de éstos como por las lesiones de los

filetes nerviosos, los músculos de la mano y especialmente los interóseos y los de la región hipotenar están atrofiados. Por lo expuesto, y teniendo en cuenta, además, que hay dos dedos, el pulgar y el índice, que juegan con bastante libertad, opinamos que el señor Sixto Delgado se encuentra en el caso de imposibilidad relativa."

En vista de tales antecedentes, y de conformidad con lo dispuesto en el número 8.° del artículo 5.° y en los artículos 11 y 19 de la Ley 84 de 1890, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, se otorga á Sixto Delgado, vecino de San Lorenzo, Departamento del Cauca, la recompensa unitaria y definitiva de cuatrocientos ocho pesos ($ 408), igual al doble del sueldo anual del Sargento 2.°, por la invalidez parcial adquirida por heridas recibidas en combate, defendiendo los principios que informan las instituciones actuales, en el año de mil ochocientos setenta y siete.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y dése cuenta al Ministerio de Guerra.

LUCIO A. POMBO.— LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, veintisiete de Octubre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Carmen Lozano F., como hija legítima del Sargento Mayor Miguel Lozano Peinado, militar de la guerra de Independencia, pide se le conceda recompensa militar de acuerdo con la Ley 84 de 1890.

Para este efecto se han comprobado los hechos siguientes:

1.° Que Miguel Lozano Peinado fué militar de la guerra de Independencia, en la cual obtuvo el empleo de Sargento Mayor.;

2.° Que éste fué casado con Catalina Fernández, en cuyo matrimonio tuvo varios hijos, de los cuales sólo viven la peticionaria y Miguel Lozano, que ha renunciado los derechos que pudiera tener para pedir recompensa, y que los representantes de los hermanos de la reclamante, que han fallecido, han manifestado no hallarse en el caso de acogerse á la Ley 84 de 1890;

3.° Que Miguel Lozano Peinado y Catalina Fernández han muerto;

4.° Que la demandante está soltera, pobre, ha observado buena conducta, vivió en completa armonía con sus padres y al lado de ellos, y que nadie ha recibido del Tesoro nacional gratificación pecuniaria por los servicios del expresado militar.

En mérito de lo expuesto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el concepto del señor Procurador y lo que dicen los artículos 1.°, 2.° y 9.° de la Ley 84 de 1890, concede del Tesoro nacional á Carmen Lozano F. la cantidad de tres mil ochocientos cuarenta pesos ($ 3,840), suma igual al monto de cuatro años del sueldo íntegro del empleo de Sargento Mayor, que tuvo su padre en la guerra de Independencia.

Notifíquese, cópiese, archívese el expediente y dése cuenta al Ministerio de Guerra.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, Noviembre catorce de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Agustín Calvo Mendívil interpuso recurso de casación contra la sentencia definitiva dictada en segunda instancia el diez y nueve de Julio de mil ochocientos noventa, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en el juicio civil ordinario seguido por el recurrente contra Lastenia Calvo de Maldonado, por el valor de unos perjuicios á cuyo pago fué condenada ésta en sentencia anterior del mismo Tribunal, perjuicios que el demandante estimó en cien mil pesos; y habiéndose concedido tal recurso, han venido los autos á esta Suprema Corte, donde se ha surtido la tramitación prevenida para el caso por la Ley 105 de 1890.

Aplicando á este recurso las disposiciones de la Ley 61 de 1886, vigente cuando Calvo Mendívil lo interpuso, la Corte desde luégo lo considera admisible y así lo declara, en razón á que se intentó por persona hábil y en tiempo oportuno; á que el fallo contra el cual se ha recurrido fué pronunciado por un Tribunal Superior de Distrito Judicial en juicio civil ordinario, cuya cuantía excede de mil pesos, y á que las leyes aplicadas son idénticas en esencia á las nacionales actualmente en vigor.

Esto sentado, entra la Corte á ocuparse en resolver las cuestiones sometidas á su decisión, haciendo ante todo, para la mejor inteligencia de sus apreciaciones, una relación de los antecedentes y del objeto de la presente litis.

En un juicio seguido por Calvo Mendívil contra Lastenia Calvo, para que se declarase á ésta en la obligación de indemnizarle unos perjuicios, el Tribunal de Cundinamarca, que conoció del asunto en segunda instancia, condenó á Lastenia Calvo, por sentencia de catorce de Julio de mil ochocientos ochenta y ocho, en estos términos: "á indemnizar á Agustín Calvo Mendívil los perjuicios que le haya causado por no haber ratificado José María Maldonado Castro la promesa que la demandada le hizo al demandante de que su marido no gestionaría en los juicios intentados por Agustín Calvo Mendívil contra la testamentaría de su padre José María Calvo, que es el caso de indemnización de perjuicios previsto en el artículo 1516 del Código Civil de Cundinamarca. La regulación de perjuicios se hará en juicio separado. Declárase no probada la excepción perentoria de cosa juzgada, propuesta por la parte demandada. No hay condenación en costas."

Apoyado en esta sentencia y pretendiendo su ejecución, Calvo Mendívil demandó á Lastenia Calvo por los perjuicios de que trata aquel fallo, estimándolos al efecto en la cantidad de cien mil pesos, en la forma que aparece de los párrafos de la demanda que se trascriben en seguida:

"Para evitarme estas dilaciones que entorpecen la marcha regular de la administración de justicia, paso á cumplir con lo que se ordena, por el auto de 26 de Octubre último, diciendo que soy vecino de Bogotá; que lo hago á nombre propio; que la persona á quien demando es á mi hermana Lastenia Calvo, viuda y vecina de Bogotá; que lo que le demando son los perjuicios de que se trata en la citada sentencia del catorce de Julio de mil ochocientos ochenta y ocho, cuyas cuotas expresaré por separado, es decir, separadas las cuotas de dinero de los bienes inmuebles, para lo cual digo: que en dinero he sido perjudicado como en cien mil pesos, en esta forma: cuatro mil pesos que el señor Ignacio Morales me debía con especial hipoteca desde el mes de Noviembre de mil ochocientos cuarenta y uno, al interés del tres por ciento mensual; por consiguiente, este perjuicio vale hoy, por lo menos, la cuota de cincuenta mil pesos.

"El señor Julián Morales Quintero, con especial hipoteca, me debía quince mil pesos desde el mes de Noviembre de mil ochocientos setenta y cuatro, al interés del cinco y del diez por ciento anual; estimo estas cantidades en veintiocho mil pesos.

"En diez ó doce años de pleitos seguidos, ya contra la testamentaría de mi padre, el señor José María Calvo, para hacer efectivos los derechos que me daba la sentencia del tres de Abril de mil ochocientos sesenta y ocho, ya para anular el contrato en que había la promesa de que el marido no gestionara, se han gastado en estos pleitos de diez á doce mil pesos.

"En los dichos diez ó doce años se deben por arrendamientos de las casas de que paso á hablar, como diez mil pesos, cuyas casas se me deben restituír, puesto que el marido no ratificó el contrato que hizo dueña de estas casas á esta hermana Lastenia Calvo, y para que tenga lugar esta restitución, paso á decir sus linderos ó situación, diciendo, para no estar repitiendo, que todas ellas están situadas en esta ciudad de Bogotá. La una con tres tiendas, en la antigua calle de Veraguas ó del Fiscal, hoy calle octava, cuadra sexta y

teniendo en las puertas estos números: sesenta y ocho, setenta, setenta y dos, setenta y cuatro. Otra casa, con una tienda del lado de la carrera tercera, situada en la misma calle octava, pero en la cuadra tercera, teniendo en sus puertas los números treinta y cuatro y once. La otra casa, con cinco tiendas, situada en la antigua calle de la Carrera, hoy llamada carrera sétima, cuadra décima, teniendo en sus puertas estos números: ciento noventa y tres, ciento noventa y cinco, ciento noventa y siete, ciento noventa y nueve, doscientos uno, doscientos tres, y una otra casa, en la calle octava de la cuadra novena, teniendo dos puertas, la una por el lado de la carrera novena con el número ciento cuarenta y cinco, la otra puerta en la dicha calle octava, con el número ciento treinta y tres, pues que esta casa es de esquina, por estar situada en las dos dichas calles y carrera.

Y exponiendo los hechos fundamentales de la acción deducida, el mismo demandante dijo lo siguiente:

"Pongo por hecho primero, el de que con la sentencia del tres de Abril de mil ochocientos sesenta y ocho, base del contrato no ratificado por el marido de mi hermana Lastenia Calvo, demandó á la testamentaría de mi padre el señor José María Calvo, los cuatro mil pesos y sus intereses del tres por ciento mensual, esto por haberlos recibido por mi cuenta mi padre del señor Ignacio Morales y de que se habla en la anterior cuenta, en cuya demanda y otras muchas de esta especie, fué en las que el marido (propias palabras de la sentencia que se está ejecutando), no ratificó la promesa que la demandada hizo al demandante Agustín Calvo Mendívil.

"El hecho segundo es el de que, siendo nulo el contrato, en que esta hermana Lastenia, no cumplió con la promesa de que el marido no gestionara, nulidad nacida del hecho juzgado por sentencia de no haber ratificado el marido el contrato; que por esta razón, tengo derecho para ser restituído en los bienes de que habla esta demanda, como de mi propiedad, aun cuando hayan pasado del poder de esta hermana Lastenia á otras distintas personas; pero se quiere eludir los efectos de la sentencia del catorce de Julio de mil ochocientos ochenta y ocho, con ventas hechas de los bienes que de mi propiedad he venido demandando en calidad de los perjuicios que me ha causado la pérdida del dominio que sobre ellos tenía.

"El tercero y último hecho, en el de que en este juicio de perjuicios no se le debe admitir á la demandada ninguna discusión, sino la de que no está en la obligación de pagar las cuotas aquí demandadas, pues que así está dispuesto en el artículo 874 del Código Judicial, para cuando se trate de ejecutar una sentencia, en que se ha condenado á pagar perjuicios."

De esta demanda se dió traslado á la parte demandada; pero como ésta la rechazara en su contestación, y como el demandante, al replicar, insistiera en sus pretensiones, el Juez abrió á prueba la causa y señaló como hechos sujetos á probanza, los distinguidos en aquel libelo con los números 1.°, 2.° y 3.°, adoptando de todo en todo los trámites de la vía ordinaria, por los cuales se ha seguido el juicio, sin ninguna especialidad, desatendiendo las diversas solicitudes de Calvo Mendívil, para que el negocio se sustanciara como juicio especial de cuentas, en conformidad á lo dispuesto en los artículos 874, 1371 y siguientes del Código Judicial.

Esta causa, así sustanciada, terminó en primera instancia por sentencia de diez y siete de Febrero de mil ochocientos noventa, en la cual se absolvió á la demandada de todos los cargos de la demanda, declarando que, en consecuencia, no se decretaba el pago de que trata la sentencia de catorce de Julio de mil ochocientos ochenta y ocho; determinación que fué luégo confirmada en segunda instancia, á virtud de apelación del demandante, con fecha diez y nueve de Julio de mil ochocientos noventa, en estos términos: "en este pleito no se ha venido á discutir la existencia de la obligación de pagar perjuicios, sino á fijar la cantidad que se debe pagar, de conformidad con el medio probatorio que señala el artículo 651 del Código Judicial vigente; y como el señor Calvo Mendívil no ha fijado así la cuota que deba pagársele, es forzoso deducir, por penoso que sea, que se debe absolver á la demandada de tener que pagar suma alguna por este punto. Y en efecto, así lo resuelve este Tribunal, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley. Queda, por tanto, confirmada la sentencia apelada, con costas."

Hecha la relación de los actos principales de este pleito, pásase ahora á analizar las causales en que se funda el recurso de casación, que son las enumeradas en los incisos 1.°, 2.°, 3.°, 4.°, 8.° y 9.° del artículo 38 de la Ley 61 de 1886, y en el artículo 239 de la 153 de 1887.

Primera causal.

Las razones con que el recurrente sostiene su primera objeción están concebidas así, en el escrito en que interpuso el recurso:

"Fundo el caso en el hecho de que con las leyes sustantivas en que se funda la sentencia casable, se viola el derecho aquí demandado, ó se funda en interpretaciones erróneas. Esto porque para ejecutar sentencias ejecutoriadas, que es en lo que está fundado su derecho, no son aplicables los artículos 1507, 1613 á 1617 del Código Civil citado en la parte dispositiva de la sentencia casable, sino el artículo 874 del Judicial, que prohibe toda discusión sobre la obligación de no pagar perjuicios.

"Este error se comprende mejor, puesto que sin que la demandada haya pretendido no pagar perjuicios á virtud de lo dispuesto en los citados artículos 1507, 1613 á 1617, el Tribunal esté diciendo por la sentencia casable, 'que es el demandante quien ha debido concretar las pruebas de los perjuicios que demanda á lo dispuesto en los artículos 1507, 1613 á 1617 del Código Civil vigente,' pues que ni aun para probar estos hechos se abrió la causa á prueba."

Tanto en la sentencia de primera como en la de segunda instancia, se absolvió á la demandada del pago de la cantidad ó cantidades demandadas, por no haberse probado cuál fuera el importe de los perjuicios que á Calvo Mendívil le haya causado la falta de ratificación por parte de Maldonado Castro de la promesa hecha á aquél por la esposa de éste, sobre que versó la sentencia de catorce de Julio de mil ochocientos ochenta y ocho. En uno y otro de aquellos fallos se razonó diciendo que la regulación ó liquidación de la suma de los perjuicios, requería la prueba de tener tales perjuicios por fuente, la expresada falta de ratificación y la de valer los cien mil pesos demandados, siendo de necesaria observancia los artículos 1507 y 1613 á 1617 del Código Civil y el 650 del Judicial.

La Corte juzga que ni con este razonamiento ni con el fallo absolutorio á que él dió lugar, se violan las disposiciones legales sustantivas, que acaban de citarse, pues no habiendo sido condenada Lastenia Calvo en la sentencia de catorce de Julio de mil ochocientos ochenta y ocho, cuya parte resolutiva se ha trascrito arriba, á indemnizar á Calvo Mendívil determinados perjuicios ni determinada suma por ellos, y habiendo antes bien remitido á un juicio posterior la regulación de esos perjuicios, y por consiguiente, su especificación y avalúo, es obvio que dicho demandante, para hacer efectivos sus derechos, como ha tratado de hacerlos en esta causa, ha debido acreditar tanto el valor ó importe del daño emergente y del lucro cesante, que por regla general comprende la indemnización de perjuicios, como la circunstancia esencial de haber sido estos daños causados por la falta de ratificación de la promesa hecha por la demandada en nombre de un tercero, de quien no era legítimo representante, según el artículo 1516 del Código Civil de Cundinamarca, como lo expresa el aludido fallo condenatorio. Pero no habiendo dado la prueba requerida sobre esos puntos, es igualmente obvio que la demandada ha tenido que ser absuelta, como lo fué, por la sentencia que es objeto del recurso de casación, siéndolo también, por consiguiente, en fuerza de las reglas inflexibles de la lógica, que con esa absolución no se han violado las disposiciones legales sustantivas que el recurrente ha considerado infringidas.

Tampoco ha habido errónea interpretación de esas mismas disposiciones, pues teniendo éstas por objeto en su sentido natural y obvio declarar que la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante, salvo

los casos en que la ley la limita expresamente al primero; definir estos daños; determinar desde cuándo se debe la indemnización, y dar reglas para cuando hay dolo, fuerza mayor ó caso fortuíto, y para cuando la obligación es de pagar una cantidad de dinero y se halla en mora el deudor, en la sentencia acusada no se encuentra pasaje alguno de donde pueda deducirse que el Tribunal ha dado significación diferente á esas disposiciones.

No existe, pues, la primera de las causales de casación alegadas por Calvo Mendívil.

Segunda causal.

La formula el recurrente en estos términos:

"El segundo caso lo fundo en que se hace indebida aplicación del artículo 651 del Código Judicial, pues que su disposición no se refiere á la de avaluar cantidades numéricas ó de restitución de bienes, sino á la de apreciar ó avaluar bienes cuyo valor es desconocido, y en el presente pleito todas las cantidades demandadas se han expresado en números aritméticos, y si en los números de que se compone una cuenta, se ha incurrido en error aritmético, ese error no se subsana con apreciaciones ó avalúos periciales, sino que es preciso subsanarlo del modo prevenido en los artículos 862 y 1375 del Código Judicial.

"Los artículos 1507, 1613 á 1617 del Código Civil y 651 del Judicial en que se funda la sentencia casable, para absolver á la demandada de los perjuicios demandados son inaplicables, ya por disponerlo así los citados artículos 874 y 1376 del Código Judicial que, como queda dicho, disponen que si en la sentencia se condena á indemnizar perjuicios, se ejecuta la sentencia previo un juicio ordinario de cuentas, sin discutir la obligación de pagarlos, ya porque por estos mismos artículos 874 y 1376, quedó dispuesto no discutirse sino la cuota que debe pagarse en virtud de sentencia, y no fundarse la sentencia casable en estos artículos 874 y 1376, para absolver á la demandada de los perjuicios demandados, lo que, sin duda, constituye violación directa de leyes sustantivas, ya por efecto de una interpretación errónea como por indebida aplicación, pues que por la sentencia casable se les atribuye á estos artículos 1507, 1613 á 1617 y 651 la ratificación juzgada por sentencia."

No considera la Corte que sea indebida la aplicación del artículo 651 del Código Judicial al caso ocurrido en este pleito, pues tratándose, como se trata, de fijar la cuantía de los perjuicios que debe pagar Lastenia Calvo al demandante, la prueba de peritos establecida por aquel artículo es perfectamente admisible, bien para liquidar los perjuicios, bien para justipreciarlos, sin que obste la circunstancia que alega el recurrente, de haberse estimado tales perjuicios al proponer la demanda en la cantidad líquida de cien mil pesos, porque ni la ley ni la sentencia que condenó á dicha señora Calvo, dejan esa estimación al arbitrio y voluntad del acreedor, quien en todo caso se hallaba en la obligación de dar la prueba necesaria sobre el particular.

En cuanto á las disposiciones del Código Civil y las del Judicial, que el recurrente considera en oposición, deduciendo esta supuesta contrariedad, que el Tribunal hizo indebida aplicación de las primeras, según se colige de su argumentación, consignada en el segundo de los párrafos preinsertos, la Corte cree que no tienen el sentido adversativo que se les atribuye por Calvo M.; encuentra al contrario, que todas ellas concurren al mismo fin consagrando el derecho las de carácter sustantivo, y estableciendo los medios de hacer valer ese derecho, las de procedimiento; las primeras definiendo los perjuicios y diciendo cuáles son los elementos que entran en ellos y en la obligación de indemnizarlos; las segundas exigiendo que la cuantía de la indemnización se fije en juicio ordinario, con la prohibición de discutir en él la obligación *de pagar el daño causado*, cuando ésta se halla declarada por una sentencia anterior, de modo que unas y otras pueden aplicarse simultáneamente en los casos que en ellas se preveen, sin que la observancia de éstas excluya la de aquéllas.

Por consiguiente, y habida consideración á que el objeto del presente juicio ha sido determinar el valor de los perjuicios á cuyo pago fué condenada Lastenia Calvo en términos abstractos, como se ha dicho antes y lo reconoce el recurrente, y á que esta determinación no podría hacerse sin tener en cuenta las precitadas disposiciones del Código Civil, que tratan precisamente de los objetos que comprende la indemnización de perjuicios y de la extensión ó alcance de ella, es claro hasta la evidencia, que no fué indebida, sino antes bien correcta é indispensable, la aplicación que de ellas hizo el Tribunal en la sentencia acusada, no para exigir la prueba de la obligación de pagar perjuicios á que fué condenada la señora Calvo de Maldonado por la sentencia de catorce de Julio de mil ochocientos ochenta y ocho, cuya fuerza y eficacia no discutió ni desconoció, si no simplemente para sostener y declarar que el demandante no había probado que esos perjuicios valieran la cantidad de cien mil pesos en que los estimó, ni otra mayor ó menor que esa, y para absolver, en consecuencia, á la demandada del cargo deducido contra ella por ese valor.

De suerte que la segunda causal de casación alegada también carece de fundamento legal.

Tercera causal.

Respecto de ella y para fundarla dijo Calvo Mendívil lo que sigue:

"El caso tercero lo fundo en que la sentencia casable no es congruente con las pretensiones que oportunamente se han deducido en este pleito, pues que siendo mis pretensiones las de que se me paguen perjuicios por los trámites establecidos en el artículo 874 del Código Judicial y su concordante tramitación de un juicio de cuentas, en el que figuran las cantidades perjudicadas, se queda sin ejecutarse la sentencia del catorce de Julio de mil ochocientos ochenta y ocho, porque esas cantidades líquidas de dinero no fueron apreciadas ni avaluadas por peritos, lo que sin duda es un absurdo."

Esta argumentación y otras muchas del recurrente, desde la iniciación del juicio, hacen ver que él ha creído que cuando el Código Judicial dispone en su artículo 874 que las sentencias de la clase de la dictada á su favor deben ejecutarse *previo un juicio ordinario de cuentas*, en el cual no se discutirá la obligación de pagar, sino la cuota de los perjuicios reconocidos en abstracto, ha creído, repítese, que esto quiere decir que el objeto de este juicio es la ejecución misma de la sentencia dada á su favor en Julio de mil ochocientos ochenta y ocho, lo que envuelve un error. La ejecución inmediata de una sentencia de la cual resulta la obligación de entregar ó de hacer ó no hacer una cosa determinada, ó de pagar una cantidad líquida, se concibe sin dificultad; pero no se concibe cómo pueda procederse á la ejecución cuando la obligación es de pagar una cantidad indeterminada é ilíquida, sin fijar ó liquidar esa cantidad en un juicio previo, que no debe confundirse con el de ejecución de la sentencia, y en el cual cabe la aplicación de otras disposiciones distintas del citado artículo 874.

En el presente caso Calvo Mendívil, una vez que obtuvo la condenación de Lastenia Calvo á pagarle perjuicios, cuyo importe no se había fijado de modo alguno, pudo recabar la liquidación de esos perjuicios y la determinación de su cuantía, ejercitando sus acciones de una de dos maneras: bien pretendiendo aquellos objetos directamente, sin deducir cargo líquido alguno contra el deudor y librando enteramente á la decisión judicial la fijación de éste conforme á las pruebas dadas en el juicio; bien reclamando una cantidad líquida por razón de perjuicios, para que dentro de sus límites se fije por el Juez la cuantía de la indemnización, siempre eso sí, con subordinación al resultado de las pruebas que deben producirse sobre el particular en todo caso. De estos medios escogió Calvo Mendívil el segundo, demandando á Lastenia Calvo por la cantidad líquida de cien mil pesos en que estimó los perjuicios á cuyo pago fué aquélla condenada; sobre este punto han debido, pues, recaer las sentencias de primera y de segunda instancia, y como así sucedió en efecto, es forzoso concluír que la tacha opuesta por el recurrente al último de esos fallos, para impetrar su casación, objetándolo de incongruente con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes, carece en absoluto de fundamento.

Cuarta causal.

Hablando de ella se expresa el recurrente de este modo: "El caso 4.° lo fundo en que la sentencia casable no contiene declaración de las pretensiones que en este juicio de cuentas he deducido con oportunidad, pues que deduje haberme perjudicado mi hermana Lastenia en una deuda del señor Ignacio Morales; en otra del señor Julián Morales; en los arrendamientos de unas fincas y en unos inmuebles, y no recaer sentencia sobre ninguno de estos puntos."

Tampoco es fundada esta alegación del recurrente, á juicio de la Corte. Absuelta como ha sido Lastenia Calvo de Maldonado de todos los cargos de la demanda, y comprendidos entre ellos los que menciona el recurrente, ninguna duda puede caber de que éstos han quedado también comprendidos en la sentencia absolutoria, que, como se ha dicho, abarca todos los que se dedujeron en la demanda.

Ahora, si lo que Calvo Mendívil ha querido observar es que el Tribunal dejó de estimar las pruebas relativas á las deudas de los Morales, á unos arrendamientos y á unos inmuebles, entonces su objeción dice relación á otro motivo de casación, que también se ha alegado, y á cuyo examen se procede en seguida.

Octava causal.

Fúndala así el recurrente:

"Y también interpongo el recurso de casación que se expresa en el caso 8.° de la citada Ley 61 de 1886, y dice relación á haberse incurrido en error al tiempo de apreciar pruebas, y me fundo: 1.° en que por la sentencia casable se incurre en el error de no apreciar las pruebas traídas á este pleito, para probar los hechos que el Juez de la causa determinó con toda claridad como materia de probanza, y 2.° porque no es con pruebas ausentes de los autos en las que han de estar fundadas las sentencias definitivas, y decirse en la sentencia casable que el demandante ha debido concretar sus pruebas á las que se marcan en los artículos 1507, 1613 al 1617 del Código Civil, y 651 del Judicial, pues que los hechos expresados en estas disposiciones no son materia de probanza, cuando de lo que se trate sea de ejecutar una sentencia, sino cuando la demanda versa sobre la obligación de pagar ó de no pagar perjuicios."

Los hechos que al abrir esta causa á prueba por auto de veinticuatro de Abril de mil ochocientos ochenta y nueve, se señalaron como materia de las probanzas, fueron los distinguidos en el libelo de demanda con los números 1.°, 2.° y 3.° de que se hizo relación al principio de este fallo.

Las pruebas que el demandante presentó consisten únicamente en los siguientes:

Un certificado del Notario 3.° del Círculo de Bogotá, en que consta que Agustín Calvo, con anuencia é intervención de su padre y curador José María Calvo, canceló una escritura de fecha veinticuatro de Noviembre de mil ochocientos cuarenta y uno, por la cual Ignacio Morales se constituyó deudor de tres mil pesos á favor de dicho Agustín Calvo y aseguró esta deuda con la hipoteca de una casa en esta ciudad;

Otro certificado, expedido por el Secretario del Juzgado 4.° del Circuito de Bogotá, sobre tres puntos, á saber: 1.° que á un juicio de concurso de acreedores formado á los bienes de Agustín Calvo Mendívil, se acumuló uno ejecutivo contra éste, seguido por José María Maldonado Castro, por perjuicios provenientes de no haber elevado á escritura pública un documento de transacción, perjuicios que estimó Maldonado C., bajo juramento, en la suma de cuarenta y un mil pesos; 2.° que en esa ejecución se embargaron varios inmuebles de Calvo Mendívil, los cuales fueron rematados por Maldonado Castro, á nombre y en representación de su esposa Lastenia Calvo, y 3.° que habiéndose denunciado por Maldonado Castro en el mencionado concurso, como de propiedad de Calvo Mendívil, los derechos de éste en una casa ubicada en esta ciudad, el Juez no decretó el embargo, por haberse éste ejecutado yá en el juicio ejecutivo;

Otro certificado, del Archivero del Departamento de Cundinamarca, sobre los puntos siguientes:

Que en el juicio seguido por Agustín Calvo Mendívil contra la mortuoria y herederos de José María Calvo, por cantidad de pesos, la demanda se apoyó en la sentencia de tres de Abril de mil ochocientos sesenta y ocho, ejecutoriada y registrada, que se dictó en otro juicio seguido por el mismo Calvo M. contra la mortuoria de su padre, y en la cual se decidió: "1.° que la mortuoria de José María Calvo está en la obligación de pagar á Agustín Calvo Mendívil los tres mil pesos é intereses que reclama; 2.° que la mencionada mortuoria está igualmente en la obligación de rendir al demandante las cuentas de la administración de los cuatro mil pesos que José María Calvo recibió por cuenta de su hijo Agustín Calvo Mendívil, de Ignacio Morales, y 3.° que respecto de la demanda subsidiaria queda absuelta la mortuoria del señor José María Calvo."

Que en dicho juicio consta que José María Maldonado Castro y Lastenia Calvo de Maldonado contestaron la precitada demanda oponiéndose á ella, y siguieron el juicio, el cual dió por resultado la absolución á la mortuoria de José María Calvo de los cuatro mil pesos demandados;

Que Calvo cobraba estos cuatro mil pesos de la testamentaría de su padre por haberlos recibido éste de Ignacio Morales, y

Que en un documento otorgado en veintiseis de Noviembre de mil ochocientos sesenta y ocho, entre Agustín Calvo Mendívil, Lastenia Calvo de Maldonado y José María Maldonado Castro, y suscrito por éstos, hay una cláusula final que dice: "Para que así conste, otorgo y firmo con testigos este documento, que será reducido á escritura pública cuando lo exija mi dicha hermana, que acepta este documento y lo firma con su esposo. Los gastos no serán de mi cuenta;"

Finalmente, unas posiciones absueltas por la demandada.

Sobre estas pruebas y con relación á los hechos fundamentales de la demanda, hizo el Tribunal en su sentencia las siguientes apreciaciones:

"Dos, pues, son los puntos principales á que el demandante ha debido concretar sus pruebas en este debate, á saber: tales perjuicios tienen por causa legal la no ratificación de aquella promesa; el valor de ellos comprobado legalmente asciende á la suma de cien mil pesos, que se ha reclamado en la demanda. Las disposiciones de los artículos 1507 y 1613 á 1617 del Código Civil vigente y sus concordantes del Código cundinamarqués, y la contenida en el artículo 651 del Código Judicial, eran, por tanto, de necesaria observancia, si el demandante buscaba el buen éxito en la litis.....

"En concepto del Tribunal, ninguna de las pruebas aducidas en el pleito por el demandante tiende á establecer ninguno de los dos hechos apuntados como de indispensable probanza, y en ese evento hay que declarar no probada la demanda. Los hechos señalados por el demandante como fundamentales de su libelo, no fundan legalmente la demanda, porque entre ellos y el pedimento que ésta contiene, no existe la estrecha relación de causa y efecto ideológicos, que requiere la ley en esta clase de debates. La disposición contenida en el artículo 941 del Código Judicial vigente, tiene por base la existencia de ese encadenamiento lógico, y al actor corresponde, al formular su demanda, cuidar de que entre ésta y los hechos que la sustentan haya la concatenación de que se ha hablado."

La Corte juzga que la precedente estimación de los medios probatorios empleados por el demandante, así como la conclusión á que en virtud de ella llegó el Tribunal, en la parte resolutiva de su sentencia, en relación con la acción deducida, son estrictamente legales. Las pruebas del demandante suministran motivos para presumir que éste sufrió una pérdida á causa de la cancelación que él mismo hizo con anuencia é intervención de su padre y curador, José María Calvo, de la obligación hipotecaria otorgada á su favor en el año de mil ochocientos cuarenta y uno, por Ignacio Morales, y á causa principalmente de haber sido absuelta la mortuoria de su citado padre del pago de cuatro mil pesos recibidos por éste de dicho Morales, por que la demandó Calvo Mendívil; pero no demuestran de modo alguno que entre esa pérdida y la falta de ratificación de la promesa de Lastenia Calvo al demandante, de que se ha hecho mención varias veces, y que dió origen á la condenación de aquélla á pagar perjuicios á Calvo Mendívil, existe la relación de causalidad que éste atri-

buye á tales hechos, esto es, que la intervención de dicha Calvo y su esposo Maldonado Castro en el juicio contra la mortuoria expresada por los susodichos cuatro mil pesos, fuera la causa generadora y eficiente del fallo absolutorio que dió lugar á esa pérdida, ni acreditar tampoco que este perjuicio valga la suma de cincuenta mil pesos que por este motivo le cobra Calvo Mendívil á la demandada en este juicio.

Agrégase á lo dicho que de la oposición de Maldonado Castro y su esposa á la demanda de Calvo Mendívil, contra la mortuoria y los herederos de José María Calvo, sobre que rindieran cuenta de la administración de aquellos cuatro mil pesos y de la absolución de esta demanda, pronunciada á favor de dicha mortuoria, no se tiene conocimiento en este juicio sino por un certificado del Archivero del Departamento de Cundinamarca, referente á otro del Secretario del Juzgado 3.° del Circuito de Bogotá, certificados que por no contener el texto literal de tales actos, no suministran la plena luz necesaria para juzgar de su genuína significación y alcance jurídicos, especialmente en lo que se refieren á una sentencia proferida en juicio que ha debido presentarse en copia autorizada, bajo la responsabilidad del funcionario encargado de la custodia de su original, junto con los actos comprobatorios de su ejecutoria y de su registro, pór tratarse de documentos auténticos, que, según los artículos 678, 679 y 687 del Código Judicial, deben expedirse en esa forma, para hacer fe y surtir efectos en juicio, en cuanto á su pronunciamiento y á su fecha, á la jurisdicción del Juez ó Tribunal que la dictara y á los derechos reconocidos ú obligaciones impuestas á las partes, puntos cuya demostración y esclarecimiento incumbía á Calvo Mendívil, como demandante, de la misma manera que los demás hechos en que fundó su acción, al tenor de las prescripciones de los artículos 1757 del Código Civil y 542 y 543 del Judicial.

Tocante á los demás perjuicios de que habla la demanda, y con los cuales completó el demandante la cifra de cien mil pesos, de que ha hecho cargo á Lastenia Calvo, no se registra en autos ninguna prueba que demuestre su existencia, ni su importe ó cuantía, pues en las posiciones absueltas por la demandada, que ha sido otro de los medios probatorios á que ha recurrido el demandante para justificar sus pretensiones, no aparece reconocido ó confesado por la absolvente hecho alguno, propio y adecuado á los fines de la presente litis, que como se ha dicho y se repite, no han sido ni podido ser otros, dada la obligación impuesta á la señora Calvo, por una sentencia ejecutoriada de indemnizar ciertos perjuicios, que los de regular ó fijar la cuantía de éstos en el juicio contradictorio á que por ese mismo fallo se remitió á las partes.

Preciso es, por tanto, concluír que el Tribunal no incurrió en error de derecho, ni en error de hecho, resultante de documentos ó autos auténticos que demuestren la equivocación del juzgador, como lo establecía el inciso 8.°, artículo 38 de la Ley 61 de 1886, en que el recurrente fundó la causal de casación, que acaba de examinarse, la cual, en consecuencia, es ineficaz.

El recurrente ha creído hallar fundamento para que se case la sentencia acusada, en lo que disponía el artículo 239 de la Ley 153 de 1887, cuyo contexto era el siguiente:

"Art. 239. Agrégase á las causales para interponer el recurso de casación, en todos los negocios civiles y criminales en que las leyes lo otorguen, la de ser la decisión contraria en un punto de derecho á otra decisión dictada por el mismo Tribunal, ó por dos Tribunales diferentes, siempre que las dos decisiones contrarias sean posteriores á la época en que empezó á regir la unidad legislativa."

Empero, por parte de Calvo Mendívil no se ha presentado ni señalado siquiera la decisión á la cual pueda ser contraria la sentencia del Tribunal, que es objeto de su recurso de casación. Según aparece, dicha parte considera que este último fallo es contrario al de catorce de Julio de 1888, en que se condenó á Lastenia Calvo á pagarle los perjuicios de cuya regulación se ha tratado en este juicio; mas en contra de semejante alegación hay dos observaciones infirmativas perentorias, á saber: primera, que dichas decisiones, aunque llevan fechas posteriores á la época en que empezó á regir la unidad legislativa, no se fundaron en leyes nacidas de esta unidad, por versar sobre hechos anteriores á ellas, y de consiguiente no están en el caso de la disposición legal preinserta, á la cual no puede darse sentido diferente; y segunda, que comparadas las dos decisiones no se encuentra oposisión entre ellas, en cuanto á los puntos de derecho que resuelven, pues cada una de ellas se refiere á un punto distinto, como que en la primera, el objeto fué declarar en términos abstractos la obligación de indemnizar perjuicios inestimados, mientras que la última sólo se ha ocupado en lo relativo á la regulación de esos perjuicios, sin determinar cosa alguna sobre la obligación primeramente declarada. De suerte que tampoco existe la causal de casación establecida por el mencionado artículo 239.

Finalmente, al fundar Calvo Mendívil ante la Corte la interposición del recurso de casación dijo que agregaba á la causal primera de las interpuestas la comprendida en el artículo 1.° de la Ley 95 de 1890, sobre reformas civiles que define lo que se llama fuerza mayor ó caso fortuíto; pero este alegato carece en absoluto de razón, ya por que ese artículo no tiene por objeto señalar causales de casación y por lo mismo su cita es aberrante y dislocada, ya porque su disposición no se ha aplicado ni tenido por qué aplicarse al caso del pleito, de donde se sigue que es infundada é improcedente toda observación que tienda á sostener que el Tribunal hizo aplicación errónea ó indebida del preindicado artículo.

A mérito de las precedentes consideraciones, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que la sentencia acusada no es casable, y, en consecuencia, la aprueba, condenando á la parte recurrente en las costas del recurso.

Notifíquese, publíquese y dejándose copia de este fallo, devuélvanse los autos al Tribunal de su procedencia.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA. — JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—FEDERICO PATIÑO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintiocho de Octubre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Instruídas unas diligencias sumarias por el Juez 2.° del Circuito de Jericó, para averiguar la responsabilidad en que hubiera incurrido el Fiscal del Circuito por no haber presentado en determinada causa criminal el escrito razonado de que trata el artículo 353 de la Ley 105 de 1890, se remitieron al Tribunal Superior de Antioquia, el cual, en auto de veintiocho de Junio del presente año, abrió juicio de responsabilidad, por los trámites extraordinarios, contra Eleuterio Ramírez, "por falta de asistencia al cumplimiento de sus obligaciones como Fiscal del Circuito de Jericó," y se dispuso que informara dentro del término legal, lo cual verificado, se dictó la sentencia absolutoria de treinta y uno de Agosto último, la que por no haberse apelado, se ha remitido en consulta á esta Superioridad.

Surtidos los trámites que la ley señala, para definir dicha consulta, se considera:

Derogado expresamente el inciso 3.° del artículo 1627 del Código Judicial, que ordenaba que en los juicios de responsabilidad en el auto de proceder se citara la disposición ó artículo del Código Penal infringido, debe, según el artículo 345 de la Ley 105 de 1890, formularse el cargo en la parte resolutiva del auto de enjuiciamiento, mencionando el delito con la denominación que le da el Código Penal en el respectivo capítulo ó en el correspondiente título, cuando éste no se divida en capítulos.

Al Fiscal mencionado se le llamó á responder en juicio por "falta de asistencia al cumplimiento de sus obligaciones," denominación que no se encuentra en el capítulo 6.° del título 10, libro 2.° del Código Penal vigente, en donde el artículo 535 define claramente la falta en que pudo incurrir el Fiscal, dejando de hacer aquello que podía conducir al esclarecimiento de la verdad en la causa que iba á sentenciarse

pero no habiéndose referido el auto de proceder á dicho capítulo, no puede imponerse la pena señalada allí, toda vez que de conformidad con el artículo 1716 del Código Judicial, la sentencia no puede recaer sino sobre los cargos por que se ha declarado con lugar á seguimiento de causa.

Sin entrar, pues, á examinar los fundamentos de la sentencia consultada ni las razones que en favor del encausado ha alegado el señor Procurador, por la sola razón expuesta y no por aquéllos, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el fallo absolutorio consultado.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA. — JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Octubre veintiocho de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Jesús M. Arteaga se presentó ante esta Superioridad en su calidad de apoderado de Eusebia Hernández, demandando recompensa militar á favor de dos hijos menores de ésta, por muerte del padre, ocurrida en el año de 1885, en combate, defendiendo al Gobierno legítimo. El Magistrado sustanciador rehusó admitir el poder conferido á Jesús M. Arteaga, porque del memorial mismo aparece que la dicha Hernández se halla casada en segundas nupcias, con lo cual ha perdido la patria potestad que la ley le otorgaba, y no tiene por eso mismo, la representación legal de los hijos del matrimonio anterior; en esa virtud no dió curso á la demanda.

El apoderado pidió se revocara la resolución y apeló en subsidio para ante los seis Magistrados restantes. Concedióse este último recurso, por haberse negado la revocación, y para definirlo se considera:

El fundamento del apoderado para que la dicha providencia sea revocada, está tomado del artículo 52 de la Ley 84 de 1890, que ordena establecer la reclamación de recompensa á la madre, ó á sus respectivos curadores, cuando ella deba hacerse por huérfanos menores de edad; y que, como la condición de madre no se pierde por pasar á otras nupcias, á falta de curador, esa condición basta para que pueda representarlos en un asunto enteramente especial, como el de pensiones, pues de otro modo quedarían privados los huérfanos de representación.

Ciertamente que la ley autoriza á la madre para representar á sus menores hijos en la solicitud de recompensa, pero esa autorización no es absoluta; en todo caso debe tenerse en cuenta la capacidad jurídica de la madre para el ejercicio de las funciones legales; y es claro que esa capacidad no existe en la viuda menor de edad ni en la que ha pasado de nuevo á la potestad marital.

Por el citado artículo, la madre menor de edad no podría pedir recompensa para ella misma sino por medio de su padre ó curador; y, por eso mismo, no puede pedirla para sus hijos; otro tanto sucede á la madre que ha pasado á otras nupcias.

Si los derechos naturales los conserva la madre en cualquier estado, el ejercicio de los legales exige siempre la aptitud que supone la ley que los creó; de esta suerte á los huérfanos debe provéerseles de tutor ó curador general para que los represente.

En vista de las anteriores consideraciones, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, se confirma el auto apelado.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y pase el expediente á la mesa del Magistrado sustanciador.

LUCIO A. POMBO.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Octubre veinticuatro de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: El Prefecto de la Provincia de Tundama, en el Departamento de Boyacá, ha remitido á esta Superioridad las diligencias sumarias que instruyó en el mes de Junio último, con el objeto de averiguar, á virtud del denuncio que le dió el Alférez Pancracio Bohórquez, de que el soldado Adán Vargas, que hace parte de la guarnición militar en Santa-Rosa de Viterbo, había cometido el delito de violación de correspondencia privada, consistente en haber recibido de la Oficina de la misma Prefectura una carta cerrada rotulada á Antonio Castañeda, ofreciendo entregársela á este individuo, la cual carta la abrió y dió á leer al soldado Epifanio Peña, sin que en ella se tratase de asunto particular que pudiera interesar á dicho soldado Vargas. Practicadas las diligencias que el Prefecto de Tundama estimó necesarias, las pasó al Juzgado municipal de Santa-Rosa, á quien creyó competente para conocer de ellas; y este empleado requirió al Oficial-comandante de la fuerza destacada en dicha ciudad para que mantuviese preso en el cuartel al soldado sindicado del delito referido. Mas este Oficial, antes de proceder á verificar la prisión de Vargas, dió cuenta de lo que pasaba al Comandante del Batallón que reside en Tunja, y éste le contestó que podía castigarse al sindicado correccionalmente, pero no por orden de autoridad civil, y que por lo mismo remitiera á Tunja, en calidad de preso, á Adán Vargas, para seguirle causa militar.

Impuesto el Juez municipal del modo como contestó el Comandante del Cuerpo, y sin provocar competencia afirmativa ni negativa á la autoridad militar, dispuso pasar el sumario al Prefecto de Tundama para que resolviera lo conveniente.

El Prefecto mencionado consultó con la Gobernación el procedimiento que debía seguir, y ésta, en nota oficial, fecha diez de Septiembre del presente año, le manifestó que la ley atribuye á la Corte Suprema el dirimir las competencias que se susciten entre la autoridad civil y la militar, para conocer de causas iniciadas por la comisión de hechos erigidos en delitos, conforme al numeral 3.° del artículo 47 de la Ley 147 de 1888.

Recibido y sustanciado en la Corte este negocio, para decidirlo observa que con propiedad no se ha suscitado competencia alguna entre el Juez municipal de Santa-Rosa y el Comandante del Batallón á que corresponde el soldado Adán Vargas, que la Corte tenga que dirimir; y por tanto, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador general de la Nación, resuelve devolver estas diligencias sumarias al referido Juez municipal, con el objeto de que, si se considera competente para conocer de ellas, provoque competencia afirmativa al expresado Comandante; y en caso contrario, las pase á éste, advirtiéndole que no considerándose con jurisdicción para conocer de la causa, le provoca competencia negativa; todo en los términos que prescribe el Código Judicial en los artículos que versan sobre competencias, á fin de no dar lugar á que la averiguación del delito de violación de la correspondencia sufra mayor demora.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA. — JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Octubre veintisiete de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: El día veintiseis de Marzo del presente año, estando de facción en el punto de "El Papayo, á inmediacio-

nes de la ciudad de Ibagué, una guardia perteneciente al *Batallón Sucre* número 11 del Ejército nacional, encargada de custodiar el presidio en los trabajos de la carretera que se estaba construyendo allí, el soldado de la 2.ª compañía, Buenaventura Caicedo, que hacía parte de dicha guardia, dió muerte violenta al soldado de la misma, Cándido Gómez, disparándole á quemarropa, por la espalda, un balazo con el rifle de que estaba armado, sin otro motivo ó antecedente que haber Gómez improbado á Caicedo que pidiera á los presos parte de los alimentos que éstos acababan de recibir, manifestándole que si le faltaba dinero para proporcionárselos, él le prestaría y que daría aviso de lo ocurrido al Sargento de la escolta, como en efecto se lo dió, según todo aparece de la información sumaria que para comprobar los hechos se levantó por la respectiva autoridad militar. Esta, con tal motivo y considerando el asunto de su competencia, por haberse cometido el delito dentro de un campamento militar y por un miembro del Ejército en servicio, declaró con lugar á formación de causa contra el soldado Caicedo, por el delito de homicidio definido en el título 1.°, capítulo 1.°, libro 3.° del Código Penal común, causa que seguida por los trámites establecidos en las leyes militares, terminó por sentencia definitiva del Consejo de Guerra ordinario, que se convocó al efecto, por la cual se condenó á Caicedo como autor principal en grado máximo del delito de homicidio voluntario, á sufrir en calidad de recluso en el Panóptico de Bogotá, la pena de doce años de presidio.

Pasado el proceso al Comandante en Jefe del Ejército, éste lo ha elevado en consulta á la Suprema Corte de Justicia, la cual, previa la sustanciación legal, procede á resolver las cuestiones que el Presidente de ella le ha propuesto, en cumplimiento del artículo 1545 del Código Militar, sobre incompetencia de jurisdicción y sobre informalidades sustanciales.

De lo actuado aparece que el homicidio de que se trata constituye un delito militar, por haberse perpetrado dentro del campamento que servía de acuartelamiento á la tropa encargada de la custodia del presidio; que el delincuente era miembro activo del Ejército nacional, y que el hecho tuvo lugar en el territorio sometido á la jurisdicción de la autoridad militar que ha conocido de este negocio; de consiguiente, concurren los tres elementos del *hecho*, de la *persona* y del *lugar*, de cuya reunión resulta la competencia de dicha autoridad para conocer y fallar en la presente causa, al tenor del artículo 1361 del Código Militar, congruente con el 170 de la Constitución nacional.

El Procurador general, cuyo dictamen se ha oído, observa que la circunstancia de haber provenido la muerte de Gómez de un incidente puramente personal, ó sea, del resentimiento que produjo en el ánimo de Caicedo la improbación dada á su conducta por aquél y la de no haberse cometido el delito dentro del cuartel, sino en una sección destacada del campamento en que se hallaba el respectivo Cuerpo de guardia, hacen dudar del carácter militar atribuído á dicho delito, el cual, en su concepto, reviste con mayor fundamento el carácter de delito común; pero la Corte no da acogida á tal alegación, porque según el artículo 1365 del supracitado Código, son delitos militares los que se cometen dentro del cuartel, aunque por su naturaleza sean comunes, y en ese artículo la voz cuartel no se emplea en su sentido restringido de edificio destinado á la habitación de soldados, sino en el más lato y más conforme con la razón y el objeto de esa disposición legal, de campamento ó estancia de un Cuerpo cualquiera del Ejército, como lo era el punto en que Caicedo dió muerte á Gómez.

Esta Superioridad juzga, por tanto, que este proceso no adolece de nulidad por incompetencia de jurisdicción.

En cuanto á informalidades sustanciales, la Corte halla que se ha incurrido en las que determina el inciso 2.°, artículo 1536 del Código Militar, en primer lugar, por no haberse hecho al defensor del reo la notificación del auto de enjuiciamiento pronunciado con fecha cuatro (4) de Abril del presente año, como lo advierte y lo alega el Procurador, y en segundo lugar, porque la notificación del auto del nueve (9) del citado mes de Abril, en que se dispuso convocar al Consejo de Guerra, se hizo al reo, que es menor de edad, sin asistencia de su curador *ad liten*, cargo que desempeñaba el Subteniente Teodomiro Zapata B., lo cual equivale á no haberse surtido tal diligencia, pues aunque el Secretario puso constancia de haber dispuesto el Corenel Comandante del Batallón que el Sargento 1.° Indalecio P. Cuervo, desempeñara interinamente las funciones de curador, por hallarse ausente en comisión, el Subteniente Zapata B., en autos no se registra el decreto ó providencia por la cual se autorizara á Cuervo para ejercer el cargo, ni el acto en que tomara posesión de él, sin lo cual no ha podido ni puede tenérsele legalmente por tal curador.

En virtud de lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo con lo pedido por el Procurador de la Nación y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara nulo lo actuado en esta causa, con posterioridad al seis (6) de Abril del año en curso, por las causales últimamente mencionadas, de que trata el artículo 1536, ordinal 2.° del Código Militar y repone el proceso al estado de notificar al defensor del reo el auto de enjuiciamiento, disponiendo que la reposición comience desde esta notificación. (Artículo 1545 de dicho Código).

Notifíquese cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvanse los autos al Comandante en Jefe del Ejército.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA. — JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. — MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, veintiocho de Octubre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: El Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cauca, en auto de seis de Septiembre último, declaró con lugar á seguir juicio ordinario de responsabilidad contra Miguel Piedrahita Casas, Juez del Circuito de Toro, por el cargo general de mala conducta, y sobreseyó por los cargos de haber pronunciado una sentencia ilegal en favor de Secundino Henao y de amancebamiento público y escandaloso.

Respecto de este último cargo, ordenó consultar el sobreseimiento con esta Suprema Corte, por ser casado el sindicado y tener el delito señalada pena de reclusión en el Código Penal vigente.

Elevados los autos y oído el concepto del señor Procurador, pasa la Corte á resolver lo conveniente.

De las declaraciones recibidas en el sumario, y de que hace mención el Tribunal, resulta que Piedrahita Casas ha mantenido relaciones ilícitas y escandalosas con Romelia Velásquez.

Pero como los hechos de donde se ha querido deducir el amancebamiento, tuvieron lugar antes del quince de Junio de mil ochocientos noventa y uno, cuando Piedrahita y la Velásquez tenían sus habitaciones en una misma calle y una frente á otra, el delito, dado que estuviera probado, caería bajo la sanción del artículo 332 del Código Penal de 1858, que sólo señala pena de prisión. En este caso el sobreseimiento no está sujeto á consulta conforme al artículo 346 de la Ley 105 de 1890.

Por tanto, la Corte Suprema, de acuerdo con el parecer del señor Procurador general de la Nación, se abstiene de resolver la mencionada consulta.

Devuélvase el expediente al Tribunal de su origen y publíquese esta resolución.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA. — JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

IMPRENTA DE ANTONIO M. SILVESTRE.
Director, Tomás Galarza.

REPÚBLICA DE COLOMBIA.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AÑO VIII } Bogotá, 1.° de Marzo de 1893. { NÚM. 372.

CONTENIDO.

Págs.

PENA CAPITAL.

Fallo por el cual se casa la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en el proceso seguido contra Calazans y Resurrección Castillo por homicidio, y se anula lo actuado. (Magistrado ponente, doctor Villafrádez).. 65

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

La confirmatoria del fallo proveído por el Tribunal Superior de Antioquia en el juicio seguido sobre deslinde de las minas de "Palacio" ó "Porvenir" y "La Justicia," que vino á la Corte por recurso de casación. (Magistrado ponente, doctor Villafrádez). 66

La que concede á Matilde Londoño de Botero una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Villafrádez)..... 70

La que concede á Tránsito Borrero una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas)..... 71

La que niega á Paula Trejo una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Corrales)..... 71

AUTOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

El reformatorio del pronunciado por el Tribunal Superior de Bolívar en las diligencias sumarias instruídas contra Juan J. Newball, Juez de Circuito de San Andrés y Providencia, por haberse excedido en las atribuciones de su empleo. Magistrado ponente, doctor Medina)..... 72

GACETA JUDICIAL.

PENA CAPITAL.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Noviembre veintitres de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: En la causa seguida ante el Juez 2.° Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca contra Calazans y Resurrección Castillo, por el delito de homicidio perpetrado en la persona de Marta Rodríguez, el 20 de Marzo de 1891, declaró el Juzgado ser ambos reos responsables en grado máximo, como autores principales, el primero del delito de parricidio, que define el artículo 219 de la Ley 153 de 1887, en su segundo aparte, en relación con los artículos 436 y 437 del Código Penal de 1858, por cuanto dicho reo era cónyuge de la Rodríguez. y el segundo del de asesinato definido en el artículo 440 del mismo Código, en uno y otro caso con las circunstancias 1.ª, 3.ª y 6.ª de las mencionadas en esta última disposición.

En conformidad con este veredicto, el Juez Superior pronunció la sentencia de veinticinco de Agosto de mil ochocientos noventa y uno, cuya parte resolutiva es del tenor siguiente:

"Este Juzgado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, condena á Calazans Castillo y á Resurrección Castillo á sufrir la pena capital en los términos de los artículos 232 á 235 de la Ley 153 de 1887; y además, al pago de las costas procesales, mancomunadamente y á la indemnización de los perjuicios resultantes del delito, excepto en lo que se refiere á los sufridos por la parte ofendida, puesto que los peritos avaluadores de ellos los estimaron en cero. En caso de conmutación, sufrirán las demás penas accesorias señaladas en el artículo 22 del Código Penal precitado.

"Esta sentencia se notificará en este Juzgado públicamente á los reos, se publicará en el periódico oficial, y copia de ella se fijará en el lugar donde se ejecute y en el del domicilio de los condenados (artículos 21 y 23 del Código Penal, nombrado tántas veces)."

De este fallo apelaron los reos y su defensor, y habiéndoseles otorgado este recurso, la causa pasó al conocimiento del Tribunal Superior del citado Distrito Judicial, donde durante la sustanciación de la alzada y á virtud de articulación introducida por el Fiscal del mismo Tribunal, se declaró por el sustanciador, en sentencia confirmada por los dos Magistrados restantes de la Sala del Crimen, con quienes se consultó, que el veredicto del Jurado, en cuanto resolvió que Calazans Castillo era autor principal del delito de parricidio, era notoriamente injusto, y sin decidir nada con relación al reo Resurrección Castillo, se devolvieron los autos al Juzgado de primera instancia para que les diera el curso prevenido por el artículo 317 de la Ley 57 de 1887. Una vez allí, dicho Juzgado, después de consultar con el Tribunal la duda que le ocurrió sobre lo que debía hacerse respecto del reo cuya apelación había quedado pendiente, reunió nuevo Jurado, el cual, en vista de las cuestiones que le fueron propuestas, pronunció su veredicto declarando á Calazans Castillo responsable del delito de parricidio, como autor principal; pero sin alcanzar el grado máximo de delincuencia. El Juez entonces por sentencia que dictó el primero de Marzo del presente año, resolvió lo siguiente:

"Por tales fundamentos, el Juzgado observando que no se ha incurrido en nulidad alguna, y previa calificación del delito en primer grado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, condena á Calazans Castillo á sufrir las penas siguientes: doce años de presidio que sufrirá en el Panóptico de esta ciudad, destinado al efecto; privación de todo destino, cargo ó empleo público que actualmente ejerza y de toda pensión pagada por la República ó el Departamento; pago de las costas procesales; resarcimiento é indemnización de los daños y perjuicios sufridos por la comisión del delito, excepto en lo que se refiere á la parte ofendida, puesto que los peritos avaluadores de ellos los estimaron en cero. Se le computará al procesado, en el término de la condena el tiempo que haya estado detenido ó preso, teniendo presente para ello lo dispuesto en el artículo 139 del Código Penal vigente. Notifíquese, haciéndose esto en público con el procesado, cópiese y publíquese en el periódico oficial del Departamento, y si dentro del término legal no se ha interpuesto algún recurso, vuelva al Despacho."

No habiéndose interpuesto recurso alguno contra este fallo, se declaró ejecutoriado, se dictaron las providencias conducentes á su ejecución y se dispuso remitir la causa al Tribunal para que decidiera la apelación que el procesado Resurrección Castillo y su defensor habían interpuesto contra la sentencia de veinticinco de Agosto del año próximo pasado, recurso que, como se ha dicho anteriormente, había quedado sin resolver. Con tal motivo, el Tribunal volvió á conocer del negocio, y después de sustanciado en la forma legal y de ordenar la comprobación de la edad del reo en auto para mejor proveer, dictó con fecha veintiocho de Julio último, sentencia definitiva, resolviendo la apelación susodicha de este modo:

"Atención hecha á las consideraciones precedentes y al razonado concepto del señor Fiscal, el Tribunal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la sentencia que ha motivado esta alzada, pero tan sólo en lo que ella hace referencia al procesado Resurrección Castillo, pues en cuanto al sentenciado Calazans Castillo, el fallo en que se le condenó de acuerdo con el veredicto del segundo Jurado, aparece ejecutoriado y no tiene, por consiguiente, jurisdicción sobre él el Tribunal. Notifíquese y cópiese esta sentencia en la forma legal, y manténgase el expediente en la Secretaría por el término que la ley designe, para que las partes, si lo creyeren conveniente, hagan uso del recurso de casación, por estar este proceso en el caso del artículo 368 de la Ley 105 de 1890."

El reo en el acto de notificársele esta sentencia interpuso contra ella recurso de casación, el cual le fué concedido, dando ello lugar á que esta Superioridad conozca del asunto y éntre á resolver si existe ú ocurre en el presente caso alguna de las causales por las cuales puede casarse una sentencia en materia criminal, al tenor del artículo 370 de la Ley 105 de 1890, como pasa á hacerlo, después de surtida la tramitación que esta misma ley establece.

Empezando por la segunda de dichas causales para seguir el orden lógico de los hechos, la Corte juzga que el veredicto del Jurado contra Resurrección Castillo, no es notoriamente injusto en el sentido técnico que á estas palabras asigna el artículo 313 de la Ley 57 de 1887, pues el crimen de que se trata aparece plenamente probado con el hallazgo y el reconocimiento pericial del cadáver de Marta Rodríguez y con indicios vehementes y bien establecidos; la delincuencia del acusado se halla también comprobada por sus confesiones francas y libres, y no hay hecho alguno acreditado en autos, ni siquiera alegado, que contraríe ó excluya la evidencia del delito y de la culpabilidad del reo. De modo que la causal de casación consistente en la injusticia notoria del veredicto del Jurado no existe en concepto de la Corte.

Tampoco existe motivo para objetar la sentencia del Juez considerándola violatoria de ley sustantiva ó de doctrina legal, al tenor del inciso 1.° del precitado artículo 370 de la Ley 105, porque dada la validez y eficacia del veredicto del Jurado que declaró á Castillo responsable como autor principal, en grado máximo, del delito de asesinato definido en el artículo 440 del Código Penal de 1858, con tres de las circunstancias allí mencionadas, dicha sentencia no ha podido ser otra que la que dictó el Juez de primera instancia y que obtuvo la plena confirmación del respectivo Superior en segunda instancia, en razón á que el delito de asesinato, calificado en grado máximo, como el de que se trata, debe ser castigado, sin la menor duda, con la pena capital, según la terminante disposición del artículo 217 de la Ley 153 de 1887 y con las demás que por el fallo acusado se han impuesto al recurrente.

Empero, la Corte estima fundado el recurso de casación interpuesto por Resurrección Castillo, por haberse incurrido en las causas de nulidad designadas con los ordinales 3.°, 4.° y 5.° del artículo 264 de la Ley 57 de 1887, que en su parte conducente dice así:

"Art. 264. Produce nulidad en los juicios criminales:

"3.° No haberse notificado al reo el auto de enjuiciamiento; pero esta causa de nulidad desaparece, si habiendo comparecido el reo en el juicio, no la reclama dentro del día siguiente al en que se le haga la primera notificación;

"4.° No haberse notificado á las partes el auto en que se abre la causa á prueba; pero el proceso no se anula si la parte no notificada hace uso del derecho de producir pruebas, ni tampoco si citada para recibir las de la contraria, no solicita, dentro del día siguiente, que se retrotraiga el juicio al estado de hacérsele la notificación omitida y comenzar á correr dicho término. Sólo dicha parte, no notificada, puede pedir la anulación del proceso por esta causal;

"5.° No haberse notificado á las mismas partes el auto en que se señala día para la celebración del juicio; pero no se declarará la nulidad, si la parte no notificada concurre á la práctica de la diligencia. Sólo á petición de esa misma parte, podrá anularse el juicio por esta causal."

Estas tres omisiones han tenido lugar en la presente causa contra Resurrección Castillo, no porque dejaran de hacerse en absoluto las respectivas notificaciones, sino porque resultando que dicho reo es menor de edad, supuesto que fué bautizado á los tres días de nacido, el 20 de Febrero de 1872, según la respectiva partida expedida por el Cura de Junín, ha debido nombrársele un curador *ad litem*, para que lo defendiera en el juicio y asistiera á todas las diligencias judiciales que se entendieran con el menor, conforme al artículo 1620 del Código Judicial, y no habiéndose hecho así, es obvio que las notificaciones que se hicieron á Castillo no pueden surtir legalmente los efectos de tales, por ser incapaz para recibirlas la persona notificada sin la asistencia de su curador, siguiéndose de aquí que se ha incurrido en las nulidades supracitadas y que, en consecuencia, debe casarse la sentencia acusada en conformidad con lo que ordena el ordinal 3.°, artículo 360* de la Ley 105 de 1890, y para los efectos que expresa el artículo 391 ibidem, en su último inciso.

Por tanto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el dictamen del Procurador general, la Corte casa la sentencia definitiva pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca con fecha veintiocho de Julio del corriente año, por la cual se confirmó la de veinticinco de Agosto de mil ochocientos noventa y uno, en que se condenaba á Resurrección Castillo, como reo del delito de asesinato en grado máximo, á la pena capital, al pago de la costas procesales y á la indemnización de perjuicios, y declara nulo lo actuado en cuanto se refiere á dicho reo, desde el veintisiete de Junio de mil ochocientos noventa y uno en adelante, reponiendo, en consecuencia, el proceso al estado de notificar el auto de enjuiciamiento al mismo reo, para lo cual, así como para los demás actos del juicio, deberá nombrarse á Castillo curador *ad litem*, en conformidad á lo que previene el artículo 1620 del Código Judicial.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial*, y devuélvase lo actuado al Tribunal de su procedencia.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA. — BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. —JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.— *Gabriel Rosas*, Secretario.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.— Bogotá, treinta de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: En el juicio especial de deslinde de dos minas de oro, situadas en el Distrito municipal de Amalfi, Departamento de Antioquia, la una perteneciente á Estanislao y Daniel Merino, denominada "Palacio" ó "Porvenir," y la otra denunciada por Santiago Evans y José María Merino H., con el nombre de "La Justicia," también de oro, como existente á continuación de aquélla, juicio que surgió de la oposición que hicieron los dueños de la primera de dichas minas á la posesión que de la última mandó dar el Gobernador de dicho Departamento á los denunciantes Evans y Merino H., el Juez de la primera instancia, que lo fué el del Circuito de Amalfi, practicó en los días veinte á veintiocho de Marzo de mil ochocientos ochenta y nueve, la diligencia de apeo que se registra á fojas 227 vuelta y siguientes del cuaderno número 1.° de estos autos, con asistencia de algunos interesados, y oyendo el dictamen de los peritos Enrique Villa Villa, Pantaleón Sánchez V. y Antonio M. Sanín C., nombrados, respectivamente, por los opositores, por la parte contraria á éstos y por el mismo Juez. En ella se determinaron la situación y la cabida de la mina del "Porvenir" ó "Palacio," fijando los puntos de incidencia de las líneas laterales del rectángulo que encierra esa cabida, á partir de un mojón de piedra que se encontró á la margen izquierda del amagamiento llamado "Claro," de los que se pusieron al dar posesión de dicha mina el quince de Enero de mil ochocientos ochenta, á Jesús María Marulanda, su primitivo dueño, según el título expedido á su

* El artículo pertinente parece ser el 264 de la Ley 105 de 1890. Nota de la R.

favor con fecha veintidós de Marzo del propio año, y se señaló por límite oriental á dicha mina, en la parte que confina con la de "La Justicia," una línea recta que partiendo del susodicho mojón, cuya existencia y exacta posición fueron reconocidas, verificadas y aceptadas por los peritos y las partes asistentes al acto, y en el cual se situó el vértice del ángulo Nordeste del rectángulo, fué á terminar en el punto donde se clavó otro mojón de piedra al pie de un palo llamado guásimo, á la orilla norte del camino que conduce de Vetilla á Pacoró, y que divide las aguas de "El Toro" y "Patio bonito," siguiendo el rumbo en dirección á la cordillera de este nombre, con la inclinación de ocho grados al Sudoeste.

Tal deslinde fué aprobado por Evans y Merino H. y contradicho por Estanislao y Daniel Merino, cuyo apoderado formalizó demanda contra aquéllos para que con su citación y audiencia y previos los trámites de un juicio ordinario, se declarase por sentencia definitiva lo siguiente:

"1.° Que el rectángulo trazado en el deslinde de las minas 'Palacio' ó 'Porvenir' y 'La Justicia,' que terminó el veintiocho de Marzo último, no es el rectángulo que corresponde á las declaraciones del título de la primera de dichas minas, de fecha veintidós de Marzo de mil ochocientos ochenta, porque ese rectángulo así trazado no satisface á la condición de que la línea que debe formar el límite meridional de dicho rectángulo, situada por el lado del amagamiento de 'Patio bonito,' atraviese el filón de la mina de 'Palacio' ó 'Porvenir," ni á la de que el rectángulo quede trazado *por sobre el filón;* y por consiguiente, la longitud oriental de dicho rectángulo trazado en el deslinde, no es la verdadera línea divisoria de esta mina y la de 'La Justicia;'

"2.° Que el rectángulo que debe trazarse para ajustarse en cuanto es posible y justo al título de la mina de 'Palacio' ó 'Porvenir,' ha de satisfacer forzosamente á la condición de que una de sus líneas longitudinales parta del punto en que el filón atraviesa á amagamiento 'Claro,' ó del mojón correspondiente; á la de que la línea que ha de formar el límite meridional de dicho rectángulo, situada por el lado de amagamiento de 'Patio bonito,' atraviese el filón de la mina indicada y á la de que el rectángulo quede trazado por sobre el filón;

"3.° Que la verdadera línea divisoria de las dos minas es la longitudinal oriental del rectángulo que se trace de la manera indicada en el párrafo anterior."

Con motivo de esta oposición al deslinde, y por no haber asentido la otra parte á la demanda preinserta, se siguió juicio ordinario, en el cual se pronunció en primera instancia, con fecha veintidós de Mayo de mil ochocientos noventa, sentencia definitiva en estos términos:

"1.° Declárase que el rectángulo trazado en la diligencia de deslinde de las minas 'Palacio' ó 'Porvenir' y 'La Justicia,' que terminó el veintiocho de Marzo de mil ochocientos ochenta y nueve, no es el rectángulo que corresponde á las declaraciones del título número 11, de la primera de dichas minas, expedido el veintidós de Marzo de mil ochocientos ochenta, porque ese rectángulo así trazado no satisface á la condición de que la línea que debe formar el límite meridional de dicho rectángulo, situada por el lado del amagamiento de 'Patio bonito,' atraviese el filón de la mina de 'Palacio' ó 'Porvenir,' ni á la de que el rectángulo quede trazado por sobre el filón; y por consiguiente, la longitud oriental de dicho rectángulo trazado en el deslinde no es la verdadera línea divisoria de esta mina y la de 'La Justicia;'

"2.° Declárase que el rectángulo que debe trazarse para ajustarse, en cuanto es posible y justo, al título de la mina de 'Palacio' ó 'Porvenir' ha de satisfacer forzosamente á la condición de que una de sus líneas longitudinales parta del punto en que el filón atraviesa á amagamiento 'Claro' ó del mojón correspondiente; á la de que la línea que ha de formar el límite meridional de dicho rectángulo, situada por el lado de amagamiento de 'Patio bonito,' atraviese el filón de la mina indicada y á la de que el rectángulo quede trazado por sobre el filón;

"3.° Declárase que la verdadera línea divisoria de las minas 'Palacio' ó 'Porvenir' y 'La Justicia,' es la longitudinal oriental del rectángulo que se trace de acuerdo con lo indicado en el numeral anterior;

"4.° Por consiguiente, de acuerdo con lo resuelto en los numerales anteriores, dése la posesión de la mina de 'La Justicia' por la autoridad competente, á los señores Santiago Evans y José María Merino H.;

"5.° No ha lugar á condenación en las costas del juicio."

Consentida esta sentencia por la parte de Estanislao y Daniel Merino, y apelada por la de Evans y Merino H. en lo desfavorable á ellos, se elevaron los autos á virtud de la concesión de este recurso, al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, quien lo falló con fecha diez de Noviembre de mil ochocientos noventa y uno, en los siguientes términos:

"Revócase la sentencia proferida en este pleito el veintidós de Mayo de mil ochocientos noventa por el señor Juez de lo civil del Circuito de Amalfi. En consecuencia, se absuelve á los demandados de todos los cargos que se les hicieron en el libelo de demanda de fecha veinticinco de Abril, aclarado ó corregido el ocho de Mayo de mil ochocientos ochenta y nueve. Declárase que el límite oriental de la mina de 'Palacio' ó 'Porvenir,' es el que fijó el señor Juez de aquel Circuito el día veintiocho de Marzo de mil ochocientos ochenta y nueve, y que la línea divisoria entre las minas 'Palacio' ó 'Porvenir' ó 'La Justicia,' es la que, partiendo del mojón primitivo, que queda en el ángulo Nordeste de aquélla, y que siguiendo en dirección Sur con ocho grados de inclinación hacia el Oeste, según el plano que figura á la hoja 251 del cuaderno 1.° de estos autos, va á terminar en el camino de Vetilla á Pacoró, en el punto en donde, al pie de un árbol de guásimo, hizo clavar un mojón el señor Juez en la diligencia preliminar de deslinde. El señor Juez de la primera instancia dará á los señores Estanislao y Daniel Merino posesión de la mina de 'Palacio' ó 'Porvenir' por la línea expresada en el párrafo que precede, y remitirá al señor Alcalde municipal de Amalfi el proceso, como lo dispone el artículo 57 del Código de Minas. No se hace condenación especial de costas en esta instancia."

Esta sentencia se notificó á las partes por medio de edicto, quedando surtida la notificación el dos de Diciembre del año próximo pasado; y el trece de Enero del presente, el apoderado de Estanislao y Daniel Merino interpuso contra ella recurso de casación, que el Tribunal sentenciador le concedió para ante esta Suprema Corte, la cual, después de sustanciarlo conforme á la ley, y visto que fué interpuesto oportunamente y por parte legítima, y que concurren los requisitos ó circunstancias que para su admisibilidad exige el artículo 366 de la Ley 105 de 1890, procede á resolverlo, haciendo para ello el siguiente análisis de las causales de casación alegadas por el recurrente, que son las que se enumeran en los incisos 1.°, 2.° y 3.° del artículo 369 de esta misma ley.

Primera causal.

Conforme al primero de dichos incisos, hay lugar á casar una sentencia cuando ella es violatoria de ley sustantiva ó de doctrina legal; ya sea directa la violación; ya sea ésta efecto de una interpretación errónea de la ley ó de la doctrina legal; ya de aplicación indebida de leyes ó de doctrinas legales; pero según la misma disposición, es entendido que al ocuparse la Corte en el examen de la sentencia con motivo de esa causal, es sobre la base de que son verdaderos los hechos en que se apoya el fallo; á menos que se alegue por el recurrente contra la apreciación de determinada prueba, y del expediente mismo resulte que, en efecto, se incurrió en error de derecho, ó en error de hecho, siempre que este último se acredite de un modo evidente, con documentos ó actos auténticos que obren en el proceso.

Además es entendido, cuando quiera que se trate de alindamiento de minas, que la línea divisoria fijada en el juicio especial de deslinde, no podrá variarse por la sentencia que se dicte en el juicio ordinario, sino cuando una de las partes, sea el actor ó el demandado, justifique plenamente que dicha línea debe pasar por ciertos puntos determinados, diferentes de los que se señalaron en la expresada diligencia de deslinde,

pues así lo establece claramente el artículo 412 del Código de Minas.

En el presente caso debe, pues, la Corte, tomando por base inconmovible de sus razonamientos las dos referidas presunciones legales, averiguar dos cosas, á saber: 1.ª si ciertas pruebas determinadas por el recurrente, fueron erróneamente apreciadas por el Tribunal de Antioquia, y si habiendo éste incurrido al apreciarlas en error de derecho ó de hecho, resulta este último acreditado con documentos ó actos auténticos, y 2.ª si, apreciando debidamente esas pruebas, el límite oriental de la mina del "Porvenir" ó "Palacio," en la parte limítrofe con la de "La Justicia," debe pasar por ciertos puntos determinados, diferentes de los que señaló el Juez del Circuito de Amalfi en la diligencia de deslinde practicada en el mes de Marzo de mil ochocientos ochenta y nueve.

En concepto de la parte recurrente, este deslinde no está conforme con los datos é indicaciones que sobre los límites de la mina del "Porvenir" ó "Palacio," suministran el título de propiedad de ésta, expedido por el Gobernador del extinguido Estado de Antioquia, á favor de sus primitivos adjudicatarios, Jesús María Marulanda, Agustín Cardona y Rosendo Posada, con fecha veintidós de Marzo de mil ochocientos ochenta, las declaraciones de un número plural de testigos aducidas por ella en el plenario, y las exposiciones de los peritos que concurrieron con el Juez á la fijación de la línea divisoria entre dicha mina y la de "La Justicia," y dando por sentado que aquel documento y estos testimonios designan con precisión y claridad el cuadrilátero de la mina titulada en mil ochocientos ochenta, por ciertos puntos determinados, que comprenden dentro de aquél el filón llamado "Porvenir" ó "Palacio," que va al cerro de las "Guacas" ó "Pacoró," puntos diferentes de los que se señalaron en la aludida diligencia de deslinde, sostiene que el Tribunal, al impartir su aprobacion á este acto, hizo una apreciación errónea é injurídica de dichos comprobantes, y que, por tanto, la Corte debe casar la sentencia acusada y entrar á dirimir las diferencias ocurridas entre las partes, fijando la línea divisoria de las dos minas, de tal modo que en la del "Porvenir" ó "Palacio," quede incluído el filón antedicho, que sus primitivos descubridores se propusieron explotar desde antes de pedir la adjudicación de esa mina.

La Corte ha examinado atentamente las pruebas que afirma la parte recurrente han sido erróneamente calificadas en la sentencia acusada, y después de esto juzga que ellas no tienen mérito diferente del que les ha asignado el Tribunal en su escrupuloso y bien elaborado fallo, por las razones que allí se expresan, y muy especialmente por las que se enumeran en seguida.

El título expedido á favor de Marulanda, Cardona y Posada, al fijar los linderos de la mina de "Porvenir" ó "Palacio," dice, copiando la diligencia de posesión preliminar que se dió á los denunciantes, textualmente lo siguiente: "y habiendo tomado por base el punto donde cruza el hilo el amagamiento denominado 'Claro,' donde se fijó un mojón de piedra, siguiendo una línea trasversal hacia el Norte, donde fijó otro mojón de piedra á distancia de 240 metros; luégo se continuó la medida de la longitud hasta el punto donde se encuentra un amagamiento denominado 'Patio bonito,' en dirección de Occidente á Oriente, donde alcanzó la medida de 1,800 metros, en cuyo punto se fijó otro mojón de piedra. En seguida se tiró otra línea trasversal al filón y para el lado de abajo á distancia de 240 metros se clavó otro mojón de piedra, los cuales quedan paralelos formando líneas rectas con los dos primeros de la base. Concluída la operación de la mensura y demarcado el rectángulo sobre el filón, entre los puntos amagamiento 'Claro' y amagamiento de 'Patio bonito,' el señor Inspector preguntó si había alguno *que, como colindante ó interesado*, quisiera oponerse á la posesión, y no habiendo contradicción de ninguna especie, dijo en voz perceptible: yo, José María Mora, Inspector de la fracción, con funciones de Corregidor, en virtud de la comisión trasmitida por el señor Jefe municipal y por autoridad de la ley, doy en debida forma posesión legal y material al señor Jesús María Marulanda y sus consocios Agustín Cardona y Rosendo Posada de la mina de oro de veta denominada 'El-Porvenir' y situada en el paraje denominado 'El-Rastrojo de los Villegas,' dentro del rectángulo que acaba de demarcarse, junto con las aguas allí comprendidas, esto sin perjuicio de los derechos legítimos adquiridos en ellos por algún tercero."

Atendiendo á los daños é indicaciones que en el pasaje que acaba de trascribirse suministra el título de adjudicación de la mina del "Porvenir" ó "Palacio," para hacer la demarcación ó trazo del rectángulo dentro del cual ha de quedar ésta legalmente encerrada, se viene fácilmente en conocimiento, de que las puntos por donde deben pasar los lados de dicho rectángulo no están determinados ni pueden determinarse con suficiente precisión y en absoluta conformidad con aquellas indicaciones, siendo al contrario varias y distintas las posiciones que puede ocupar el rectángulo, según que se tracen los lados de su perímetro con relación á los puntos cardinales del horizonte, como primordial ó principalmente parece requerirlo el título, ó que se mida y sitúe dicha mina sobre el filón, entre los amagamientos denominados "Claro" y "Patio bonito,' como el mismo título lo previene en segundo lugar y por vía de explicación. Para lo primero debe tomarse por punto de partida el de incidencia del filón con el amagamiento "Claro;" seguir de ahí en línea recta hacia el Norte magnético, sin ninguna desviación, midiendo doscientos cuarenta metros, que es la latitud que debe tener el rectángulo; levantar en seguida al extremo de esta línea una perpendicular de mil ochocientos metros, formando el ángulo Noroeste de la figura y completar luégo con líneas paralelas á las dos yá trazadas y perpendiculares entre sí, el paralelogramo comprensivo de la mina. Para lo segundo débese tomar el mismo punto de partida en el amagamiento "Claro" y de ahí seguir hacia el Nordeste, para formar la anchura (240 metros); luégo tirar una línea recta de mil ochocientos métros, perpendicular á aquel lado, en dirección hacia el amagamiento de "Patio bonito," y, finalmente, con estos datos trazar los otros dos lados respectivamente paralelos á los dos yá conocidos, cerrando con ellos el rectángulo, de modo que éste quede situado sobre el filón, entre los dos aludidos amagamientos.

Ahora bien: con el primero de dichos procedimientos se obtendría para la mina del "Porvenir" ó "Palacio" un paralelogramo situado longitudinalmente de Occidente á Oriente, toda vez que sus líneas de latitud tendrían que trazarse forzosamente de Norte á Sur, mientras que con el segundo método, que fué el adoptado al practicar el deslinde sobre que las partes controvierten, la situación del cuadrilongo ha venido á quedar en la dirección de Sur á Norte. En el primer caso, ninguna de las líneas del rectángulo pasaría por el único punto amojonado que se señaló al dar la posesión de dicha mina y que ha sido aceptado y reconocido, sin disputa, por las partes, por los peritos que intervinieron en el deslinde, por el empleado que dió la posesión y por varios testigos conocedores de los hechos; el lado longitudinal de la figura tendría la dirección de Occidente á Oriente; y por último, la mina no quedaría entre los amagamientos "Claro" y "Patio bonito," con lo cual se desatenderían del todo tres de las prevenciones consignadas en el título, sin contar con que para seguir ese primer método se tropezaría con un inconveniente insuperable en el estado actual del juicio, cual es la falta de conocimiento del punto de partida, por haber desaparecido el mojón respectivo, según aparece de autos y lo han reconocido los interesados. En el segundo caso, se ha tocado también con el inconveniente de no ser conocido el punto de donde se partió al dar la posesión de la mina; pero en cambio se ha obtenido que el mojón no contradicho por las partes, ó más bien expresamente aceptado por ellas, quede en el vértice de uno de los ángulos del rectángulo; que uno de los lados longitudinales de éste sea su límite oriental, y que esté situado entre los amagamientos "Claro" y "Patio bonito," circunstancias que por corresponder á las más claras y perentorias exigencias del título, determinaron con mucha razón al Juez de primera instancia á adoptar el procedimiento que las consulta para fijar la posisión de la mina del "Porvenir" ó "Palacio" y su límite oriental.

Es verdad, y esto se comprende sin ningún esfuerzo, que entre los amagamientos "Claro" y "Patio bonito," han podido y pueden trazarse muchas líneas diferentes de la que se señaló en la diligencia de deslinde; pero también es evidente que en ninguna de esas líneas concurre la condición ó circunstancia, precisa é indispensable, plenamente justificada, de pasar por ciertos puntos determinados, diferentes de los que recorre la que en aquella diligencia se adoptó como límite de la mina susodicha por el lado oriental, único caso en que esta última podría ser variada y postergada por otra diversa, á que se diera preferencia, según la expresa y terminante disposición del artículo 412 del Código de Minas; pues como se ha visto en los párrafos precedentes, el título de propiedad de la mina de "Porvenir" ó "Palacio," fuente originaria de los derechos de Estanislao y Daniel Merino, ó mejor dicho, de sus causantes Marulanda, Cardona y Posada, no contiene designación clara de los puntos ciertos y determinados por los cuales se dió á éstos la posesión de la mina y se les hizo la adjudicación, y antes bien sus indicaciones contradictorias é inconciliables bajo muchos respectos, como también se ha puesto de manifiesto al analizarlas, producen completa incertidumbre y dudas fundadas acerca de la verdadera situación de la mina y de la exacta delineación de su perímetro.

Los dueños de la mina del "Porvenir" ó "Palacio," reconociendo implícitamente la oscuridad y deficiencia de su título en lo tocante á los linderos de su propiedad, deficiencia y oscuridad provenientes, á no quedar duda, de que la posesión á los primitivos adjudicatarios de aquella mina no se dió de una manera real y efectiva sobre el terreno sino imaginariamente, según así aparece de autos y lo reconocen ambas partes, ocurrieron á otros medios para justificar sus pretensiones. Produjeron al efecto los testimonios de Jesús María y José León Marulanda, Roso Hernández, Magín Martínez, Félix A. Moreno y Roso Villegas para acreditar: "*que cuando se descubrió la mina 'Palacio' ó 'Porvenir,' se conducían á ella por una trocha que hicieron del camino de 'Patio bonito' á caer al amagamiento de este nombre y cruzando éste llegaban á otro amagamiento llamado 'Mazo;' que el expresado camino seguía por el amagamiento 'Mazo' para abajo y caminaban un pedazo de esta vía* POR SOBRE UN GRUESO FILÓN DE VETA *hasta cerca de un salto que allá tiene dicho amagamiento; que en el salto expresado se desviaba el camino citado por el lado derecho del amagamiento 'Mazo' y* POR SOBRE EL HILO *que viene de abajo hasta caer el camino al rancho que tenían un poco más abajo de este punto, el que más tarde se llamó 'La-Fragua;' que allí donde llamaba 'La-Fragua' se establecieron excavaciones hacia el lado de amagamiento 'Claro,'* PERSIGUIENDO LOS VÓMITOS DEL HILO, QUE SABÍAN MUY BIEN QUE ÉSTE PASABA POR ENCIMA DEL PUNTO QUE TRABAJABAN, CUIDÁNDOSE DE EXCAVAR HACIA EL AMAGAMIENTO 'MAZO,' PUES PARA ESTE LADO NO SE HALLABA MINERAL; Y QUE CONOCIERON LAS EXCAVACIONES QUE SE HICIERON HASTA AMAGAMIENTO 'CLARO' EN PERSECUCIÓN DEL HILO PRINCIPAL, *hasta que conocieron el punto donde el hilo cruza el amagamiento 'Claro.'*"

Para esta Superioridad los hechos que acaban de relacionarse carecen de importancia en la cuestión que ante ella se ventila, ó si tienen alguna, es de escasa significación. Tales hechos pueden demostrar que Marulanda, Cardona y Posada tuvieron la intención de adquirir la mina del "Porvenir" por ciertos linderos, en determinado lugar y con el objeto de explotar un filón también determinado; pero nada de esto prueba que la adjudicación que obtuvieron posteriormente se les hiciera en los términos y bajo las condiciones deseadas, los cuales han podido alterarse al dar el aviso del descubrimiento, al denunciar la mina y aun al tiempo de medirla y entregarla, según lo permite el artículo 26 del Código de la materia. Sobre esos hechos puede fundarse á lo sumo una presunción de hombre, ineficaz por sí sola para desvirtuar la fuerza de plena prueba que tiene la presunción legal establecida por el artículo 412 del Código citado, según la cual los límites señalados al hacer el deslinde de dos minas son los verdaderos y justos, no habiendo lugar á variarlos, mientras no se pruebe plenamente que ellos deben pasar por ciertos puntos determinados, diferentes de los señalados en esa diligencia.

De las exposiciones y dictámenes de los peritos que intervinieron en la diligencia de apeo, tampoco puede deducirse con la debida claridad, que la mina de "Porvenir" ó "Palacio" fuera adjudicada por ciertos y determinados límites, y que, en consecuencia, su término oriental no sea el que señaló el Juez en aquella diligencia, sino otro que debe recorrer puntos diferentes, conocidos y bien determinados. Tales pareceres han tenido que resentirse, y en efecto se han resentido de la misma vaguedad ó indeterminación de que adolecen los datos y premisas en que los fundaron y no pasan de la categoría de simples hipótesis ó conjeturas más ó menos probables, pero que no ofrecen la certidumbre que se busca acerca de los puntos por donde debe pasar la línea divisoria de las dos minas colindantes, ni suministran razones perentorias capaces de llevar al ánimo la convicción de que un trazo diferente del que, tomando un término medio y equitativo, adoptó el Juzgado demarcador, sea más conforme con las indicaciones contenidas en el título de adjudicación de la mina del "Porvenir." Dichos peritos trazaron una línea que llámaron "auxiliar," desde el mojón Nordeste, aceptado y conocido, hacia "Patio bonito," con la inclinación de quince grados hacia el Suroeste, según se ve en el plano adjunto á la diligencia de deslinde, formado por los mismos peritos ó por la mayoría de ellos; pero esa línea, como lo indica el calificativo con que la distinguieron, no tuvo por objeto determinar lindero ó lado alguno del rectángulo de la mina, sino simplemente el de servir de auxiliar en los trabajos y estudios que se hacían para fijar ese lindero, y dado que aquélla hubiera sido la mira de los expertos, es lo cierto que ninguno de éstos llegó en sus deducciones á tal conclusión, pues no se halla entre sus conceptos el de optar por esa línea auxiliar, á efecto de contralimitar los derechos en colisión de las partes contendoras.

El personero de los recurrentes afirma que al hacer el deslinde á que éstos se han opuesto, no se demarcó el rectángulo de la mina del "Porvenir" por sobre el filón, que dice desciende del alto de "Pacoró" hacia los amagamientos de "Patio bonito" y "Claro," en el trayecto comprendido entre estas dos quebradas ó gargantas, como lo requiere el título de adjudicación, ó mejor dicho la diligencia de posesión inserta en él; pero ninguna de las pruebas que se citan en apoyo de tal objeción la abonan suficientemente en concepto de la Corte. Para darla por bien justificada, sería preciso que estuvieran demostradas la exacta situación del filón y su dirección, y aun su extensión, pues sólo así podría decirse con pleno conocimiento de causa que el paralelogramo objetado no se había trazado por sobre el filón, y ninguna de aquellas circunstancias aparece suficientemente esclarecida por los testigos ni por los peritos que han rendido sus testimonios sobre el particular, de donde se sigue que las decisiones del Juez que practicó el deslinde, con vista é inspección personal de las respectivas localidades, y la sentencia acusada que les impartió su aprobación, deben ser mantenidas y confirmadas, en primer lugar, porque la línea recta que al practicar el deslinde se declaró ser el límite oriental de la mina del "Porvenir" ó "Palacio," reúne tres de las condiciones requeridas por el título de adjudicación, como son: que parta del único mojón reconocido é identificado, de los varios que se pusieron al dar la posesión de la citada mina; que su rumbo sea hacia "Patio bonito," pasando por el amagamiento de este nombre, y que la superficie rectangular de la mina quede situada longitudinalmente entre el amagamiento "Claro" y "Patio Bonito;" en segundo lugar, porque no siendo conocido el punto preciso donde aquella línea debe terminar por el lado de "Patio Bonito," pues no fué hallado el mojón respectivo ni otra señal indicativa del término de la línea, la solución que se dió á la dificultad por el Juez que practicó el deslinde, llevando el trazo de este lado del rectángulo á un punto céntrico de la cuchilla de "Patio bonito," es la que concilia mejor los opuestos intereses de las partes y la que se conforma más, por consiguiente, con la justicia y la equidad; en tercer lugar, porque no habiéndose justificado plenamente que la línea divisoria de las minas del "Porvenir" ó "Palacio" y de "La-Justicia," deba pasar por ciertos puntos determina-

dos, diferentes de los que se señalaron en la diligencia de deslinde, este señalamiento tiene forzosamente que prevalecer por disponerlo así de una manera clara y terminante el artículo 412 del Código de Minas; y, finalmente, porque en favor de la sentencia del Tribunal, aprobatoria del deslinde, obra la presunción legal de ser ciertos los hechos en que se apoya, según el inciso 2.°, ordinal 1.° del artículo 369 de la Ley 105 de 1890, y esta presunción no se ha desvanecido por el recurrente en los términos que lo requiere aquel inciso, esto es, determinando la prueba erróneamente apreciada por el Tribunal, y designando los actos ó documentos auténticos del proceso, de que resulte el error alegado.

No existe, por tanto, el primero de los fundamentos aducidos por el recurrente para pedir que se case el fallo pronunciado en este juicio por el Tribunal de Antioquia.

Segunda y tercera causales.

Son estas las que la Ley 105 de 1890, en su artículo 369, establece en estos términos:

"2.° No estar la sentencia en consonancia con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes; ya porque se resuelva sobre puntos que no han sido objeto de la controversia; ó se deje de resolver sobre alguno de los que lo han sido; ó se condene á más de lo pedido; ó no se falle sobre alguna de las excepciones perentorias que se han alegado;

"3.° Contener la sentencia en su parte resolutiva disposiciones contradictorias, que no se concilian á pesar de haberse aclarado la sentencia á virtud de lo establecido en el artículo 860 del Código."

Al interponer el recurso de casación por estas causales, la parte recurrente no hizo sino citar las disposiciones que acaban de trascribirse, sin expresar con claridad y precisión las razones por que estimó haberse incurrido en la sentencia acusada en tales causales; y al fundar ante esta Superioridad dicho recurso al tenor de lo prevenido por el artículo 377 de la citada Ley 105, tampoco cumplió con el deber que allí se impone á la parte que recurre en casación, de exponer esas razones. Al contrario, dijo en su alegato lo siguiente: "Guardo silencio respecto á las causales 2.ª y 3.ª apuntadas por mi sustituyente, porque á mi juicio les encuentro poca cabida, y porque la primera creo que basta y sobra para anular la sentencia."

Como se ve, el mismo recurrente reconoce la sinrazón con que se alegaron estas causales, poniendo así su recurso, en este punto, de un modo inconcuso, bajo la sanción que establece dicho artículo 377 en su inciso final, cuando dice que si la parte no hubiere designado antes ó no designare en el escrito que debe presentar, según allí se prescribe, con la debida precisión, la causal ó causales en que funda el recurso, la Corte está en el deber de declararlo desierto.

A mérito de las consideraciones expuestas, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara infundado el recurso de casación interpuesto por parte de Estanislao y Daniel Merino, contra la sentencia definitiva pronunciada en este juicio por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en segunda instancia, con fecha diez de Noviembre de mil ochocientos noventa y uno, y aprueba, en consecuencia, dicho fallo, condenando á la parte recurrente en las costas del recurso.

Publíquese, notifíquese é insértese en la *Gaceta Judicial*, y previa la compulsa correspondiente, devuélvase el proceso al Tribunal de su procedencia.

LUCIO A. POMBO.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—RAFAEL MARIÑO C.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintiocho de Octubre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Representando sucesivamente ante esta Suprema Corte, Camilo Villegas G. y Bernardo Escobar, como apoderados de Matilde Londoño de Botero, vecina de Sonsón, Departamento de Antioquia, han reclamado que se le conceda á su poderdante la recompensa unitaria definitiva á que se considera con derecho como viuda del Capitán Rafael Botero, en conformidad con la Ley 84 de 1890, por haber muerto su esposo por consecuencia de una herida que recibió combatiendo en defensa del Gobierno de la Confederación Granadina, en la batalla que tuvo lugar el catorce de Enero de mil ochocientos sesenta y dos en Santo-Domingo, entre las fuerzas de dicho Gobierno, á órdenes del General Braulio Henao, y las revolucionarias é invasoras procedentes de la Costa. En apoyo de esta demanda se han presentado los comprobantes que se relacionan á continuación:

La partida de matrimonio de la reclamante con Rafael Botero, expedida por el Cura párroco de Sonsón;

Una información de testigos caracterizados y mayores de toda excepción, como son el General Braulio Henao, Jerónimo Jaramillo, Nazario Toro, Antonio María Henao Álvarez y Anselmo Montoya, practicada por el Juez del Circuito de Sonsón, con asistencia del Fiscal del mismo, de la cual resulta plena y satisfactoriamente comprobado que dicho Botero formaba parte, como Oficial militar, del Ejército de la Confederación Granadina que á órdenes del mismo General Henao, combatió en Santo-Domingo, Departamento de Antioquia, contra fuerzas revolucionarias procedentes de la Costa, el catorce de Enero de mil ochocientos sesenta y dos; que en esa batalla peleó Botero valerosamente hasta que fué herido por una bala que le atravesó una pierna; que los cirujanos del Ejército le amputaron la pierna herida con el fin de salvarle la vida; pero no consiguieron esto, pues Botero murió por consecuencia de esa herida, en el mismo Distrito de Santo-Domingo, pocos días después del combate expresado; que cuando éste se dió, Botero tenía el empleo de Capitán en el Ejército de la Confederación; que Matilde Londoño vivió siempre en buena armonía con su finado esposo; que antes y después de viuda, como se encuentra en la actualidad, ha observado muy buena conducta moral, habiendo sostenido y educado lo mejor que pudo con su trabajo personal, tres hijos que le quedaron en la infancia á la muerte de su marido, y, finalmente, que la reclamante se halla en estado de pobreza para poder atender á sus necesidades, pues que no tiene ni con mucho, una renta propia de seiscientos pesos anualmente, á tiempo que está llegando á la ancianidad;

Un certificado del Cura de Santo-Domingo, en que consta que en los libros parroquiales faltan las partidas de defunción referentes al tiempo trascurrido desde el doce de Agosto de mil ochocientos sesenta y uno hasta el veinte de Enero de mil ochocientos sesenta y dos;

Las partidas de bautismo de los tres hijos que tuvieron en su matrimonio la peticionaria y el citado Botero, á saber: Faustino, Amalia y Manuel María, y la de matrimonio de Amalia con Juan Pablo Botero, en Enero de mil ochocientos setenta y cinco, todas ellas expedidas por el Cura párroco de Sonsón;

Las declaraciones de Jesús María Londoño L. y Joaquín Botero V., recibidas por el Juez del Circuito de Sonsón, ante el Fiscal del mismo, con las cuales se acredita que el hijo de Rafael Botero y Matilde Londoño, que se bautizó con el nombre de Manuel María, es el mismo que en su familia y en el público es conocido con el de Rafael Betero, en reemplazo del de su padre muerto en Santo-Domingo;

Dos certificaciones expedidas por el Ministro del Tesoro, sobre que Matilde Londoño de B., Faustino, Rafael y Amalia Botero no son pensionados de la República ni hay constancia de que hayan recibido recompensa del Tesoro nacional por razón de la muerte de Rafael Botero;

Una certificación del Ministro de Guerra, sobre que en el archivo y libros de la antigua Secretaría de la misma denominación, no hay constancia del grado ó empleo militar que tuviera Rafael Botero en el Ejército de la citada Confederación, por lo cual es llegado el caso de estimar la prueba supletoria de testigos que se ha presentado sobre el particular;

Finalmente, una certificación del Cura de Sonsón, expedida en tres de Octubre en curso, sobre que la reclamante, después de haber quedado viuda del Capitán Botero, no ha

vuelto á contraer matrimonio, y á la fecha de la certificación permanecía en estado de viudez, en dicha ciudad, de donde es natural y donde ha vivido siempre.

Además corre en autos un memorial suscrito por Faustino, Rafael y Amalia Botero y por el esposo de ésta, Juan Pablo Botero, memorial que aparece fué presentado por éstos personalmente al Juez del Circuito de Sonsón y su Secretario, en el cual dichos individuos manifiestan á la Corte que no tienen derecho á recompensa como hijos del Capitán Botero; que ella debe corresponder exclusivamente á su señora madre; y que si algún derecho tuvieren lo renuncian en favor de ésta.

Síguese de lo expuesto y de lo que disponen los artículos 1.°, 5.° (ordinal 2.°), 6.°, 9.°, 11, 62 y 64 de la Ley 84 de 1890, que hay lugar á la concesión de la gracia que se solicita, y por tanto, la Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen del Procurador general de la Nación, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que Matilde Londoño de Botero, como viuda del Capitán Rafael Botero, muerto por consecuencia de la herida que recibió en el combate de Santo-Domingo, en Enero de mil ochocientos sesenta y dos, combatiendo al servicio y en defensa del Gobierno de la Confederación Granadina, tiene derecho á recibir del Tesoro nacional la recompensa unitaria definitiva de tres mil ciento veinte pesos ($ 3,120), suma igual al monto ó alcance en cuatro años del sueldo íntegro del empleo de Capitán que tenía su esposo á tiempo de morir.

Notifíquese, cópiese, comuníquese al Gobierno, publíquese en la *Gaceta Judicial* y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Octubre veintiocho de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Como hija legítima del Capitán Pío Borrero, solicita Tránsito Borrero se le conceda recompensa militar, de conformidad con las disposiciones de la Ley 84 de 1890, y en virtud de que su expresado padre murió en Cali el veinticuatro de Diciembre de mil ochocientos setenta y seis, combatiendo heroicamente en defensa de los principios que informan las actuales instituciones.

Del hecho de la muerte de dicho Borrero, con empleo de Capitán, á órdenes del Coronel Carlos Patiño, dan testimonio éste y á lo menos otros cinco testigos, de los cuales dos afirman haber visto su cadáver el veinticuatro de Diciembre en Cali, pocos momentos después del combate que allí tuvo lugar; y agrega que desde su juventud el Capitán Borrero fué muy decidido partidario de los principios que informan las actuales instituciones hasta que sacrificó la vida por ellos, como se deja dicho. Dichos testigos son idóneos, rindieron sus declaraciones ante el Juez del Circuito de Cali, con asistencia del Fiscal; y cuatro de ellos afirman, además, que Tránsito Borrero es hija legítima del Capitán Pío y su esposa Tomasa García; que fué casada con Ramón Rodríguez, pero que enviudó, quedando en la mayor pobreza y con tres ó cuatro hijos; que se conserva en estado de viudez, y que su conducta de hija, de esposa y de madre ha sido y es muy buena. De tales declaraciones resulta, además, comprobado que el Capitán Borrero no tuvo en su matrimonio con Tomasa García más que dos hijas, á saber: Tránsito y Mercedes, de las cuales la última murió célibe y sin dejar descendencia; y que Tomasa García murió á fines del año de mil ochocientos noventa y uno. El fallecimiento del tántas veces mencionado Capitán en la forma ya indicada, está corroborado por un certificado del Prefecto de Cali.

El Cura y el Notario de Cali certifican que en sus respectivos archivos no existen partidas de defunción de los individuos que murieron en Cali en el combate mencionado del veinticuatro de Diciembre de mil ochocientos setenta y seis; certificados en mérito de los cuales se hace aceptable la prueba supletoria con que queda establecida la muerte del Capitán Borrero.

El Cura de Jamundí certifica que hay en su archivo constancia de que Tránsito Borrero, hija legítima de Pío Borrero y Tomasa García, nació y fué bautizada en Agosto de mil ochocientos cincuenta y uno; y además trascribe las siguientes partidas tomadas de sus libros parroquiales: la que sirve para comprobar el matrimonio que en Agosto de mil ochocientos sesenta y nueve contrajeron Ramón Rodríguez y Tránsito Borrero; la de defunción de Ramón Rodríguez, extendida en doce de Enero de mil ochocientos ochenta y siete; y la de defunción de Tomasa García, extendida en diez y siete de Noviembre de mil ochocientos noventa y uno.

El señor Ministro del Tesoro certifica que Tomasa García y Tránsito Borrero no figuran en el registro de pensionados de la República, y que en los libros de la Sección 3.ª no hay constancia de que dichas personas hayan recibido recompensa alguna del Tesoro público, por razón de la muerte de Pío Borrero.

A petición del señor Procurador, dispuso la Corte que se complementaran las pruebas de la demanda con la partida de nacimiento de la demandante y con la de la defunción de su hermana Mercedes; y resultó que el Cura de Cali certificó que habiendo registrado cuidadosamente los libros parroquiales de bautismos, no halló en ellas la de Tránsito Borrero; y que el Cura de Jamundí certificó que había datos fidedignos de que Mercedes Borrero, hija legítima de Pío Borrero y Tomasa García, había muerto en Cali á la edad de once años, en Octubre de mil ochocientos sesenta.

En vista de tal resultado, el señor Procurador pidió que se trajera á los autos, y se trajo en efecto la partida de matrimonio de Pío Borrero y Tomasa García, y la prueba de la posesión notoria que Tránsito Borrero tuviera de hija de los dichos dos esposos. La partida fué expedida por el Cura de Cali, y para establecer la posesión notoria del estado de hija legítima de la demandante, declararon ante el Juez del Circuito de dicha ciudad, con asistencia del Fiscal, Pedro Cárdenas y José María Sánchez, con lo cual fué establecida en forma legal la prueba solicitada.

Y como tales comprobantes determinan suficientemente el derecho de la demandante, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el parecer del señor Procurador, declara que Tránsito Borrero se halla en el caso de que tratan los artículos 5.° (inciso 2.°), 9 y 11 de la Ley 84 de 1890, y es acreedora del Tesoro nacional por la suma de tres mil ciento veinte pesos ($ 3,120), que como recompensa unitaria definitiva le corresponde á causa de haber muerto su padre, el Capitán Pío Borrero, en el campo de batalla en defensa de los principios que informan las actuales instituciones.

Notifíquese, cópiese y publíquese en la *Gaceta* y archívese el expediente, previo el correspondiente aviso al señor Ministro de Guerra.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Octubre veintinueve de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Gregorio Gómez G., con poder de Paula Trejo, demanda del Tesoro nacional y en favor de su poderdante, la recompensa unitaria definitiva á que ella se considera acreedora, según las respectivas disposiciones de la Ley 84 de 1890, por haber muerto su legítimo consorte Pedro Santacruz, á consecuencia de una herida que recibió en el combate de Tulcán, librado en 1861, entre las fuerzas que comandaba el General Júlio Arboleda y las ecuatorianas, que se hallaban á órdenes del Presidente del Ecuador, Gabriel García Moreno.

Con la demanda se han presentado varios documentos, para acreditar los hechos de que la Corte pasa á hacer mérito:

1.° La partida de defunción expedida por el Párroco de la iglesia de San Rafael de Tangua, José Félix Vergara, la cual figura á fojas 2 del expediente, y que acredita que el cadáver de Pedro Santacruz fué inhumado el día seis de Abril de mil ochocientos setenta y ocho;

2.° El certificado expedido por el Párroco interino de la iglesia de Túquerres, Presbítero Sixto Rodríguez, con fecha nueve de Agosto de mil ochocientos noventa y uno, certificado con el cual se comprueba que en la misma iglesia contrajeron matrimonio canónico, previas las ritualidades de que trata el Concilio de Trento, Pedro Santacruz y Paula Trejo, en veinte de Octubre de mil ochocientos treinta y siete;

3.° Una información de testigos que acredita que Pedro Santacruz militó á las órdenes del General Julio Arboleda; que combatió en Tulcán contra los enemigos de la República, y que en aquella función de armas fué herido de bala en la ingle, á consecuencia de lo cual declaran Ramón Zambrano, Pedro María Insuasti, Joaquín Mejía y Salvador Gamboa, ante el Juez 3.° del Circuito de Pasto, que el citado Santacruz estuvo sufriendo hasta el día de su muerte.

Aunque entre dichos testigos sólo figura Joaquín Mejía, como asistente de Santacruz hasta la defunción de éste, y asegura que al acto de morir no padeció el inválido mencionado de otra enfermedad que lo condujera al sepulcro, no aparecen exposiciones juradas de personas facultativas en medicina, que con toda exactitud y propiedad afirmen que la naturaleza ó carácter de la herida fuera tal, que no obstante los diez y siete años trascurridos desde que Santacruz la recibió en el combate de Tulcán hasta 1878, en que espiró, hubiera podido ser causa única de la muerte. A este respecto dice el señor Procurador general de la Nación lo que se inserta:

"Señores Magistrados: Paula Trejo pide que se le asigne recompensa militar, como viuda de Pedro Santacruz, que se dice murió á consecuencia de una herida que recibió él en Tulcán en 1861, combatiendo en favor de la República contra enemigos extranjeros. De las mismas pruebas presentadas por la demandante resulta que la muerte de Santacruz, acaecida en 1878, diez y siete años después de la herida, no fué por causa de dicha herida, máxime si se considera, como lo afirman varios testigos, que Santacruz hizo la penosa campaña de 1876 y 1877, lo cual prueba que su herida de 1861 ni siquiera fué causa de perturbaciones en su salud. Esto, agregado á que Santacruz cuando murió tenía la avanzada edad de sesenta años, confirma lo anterior, y por tanto, os pido que declaréis infundada la solicitud de la señora Trejo.

"Bogotá, 19 de Octubre de 1892.

"CARMELO ARANGO M."

Estos razonamientos persuaden de que Pedro Santacruz, quien militó, como se dice, en el empleo de Capitán, no falleció por consecuencia inmediata de la herida tántas veces referida, y que pudo influir más directamente en su fallecimiento la avanzada edad de sesenta años que contaba Santacruz.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y adhiriéndose al concepto del Ministerio Público, absuelve á la Nación de la presente demanda.

Notifíquese, cópiese y publíquese y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

AUTOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, veintinueve de Octubre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: En un juicio ejecutivo en que el Juez del Circuito de San Andrés y Providencia estaba conociendo por apelación, el Secretario informó que William B. Lewer había sido citado, como parte, el día anterior, para que compareciese en el despacho á recibir una notificación el mismo día del informe, á las diez de la mañana, y que no había atendido el llamamiento, no obstante saberse que había recibido la boleta. En vista de ese informe, el Juez dictó el auto de veintisiete de Julio de 1889, por el que, apoyado en el artículo 93 de la Ley 57 de 1887, impuso á Lewer la multa de treinta pesos. Sintiéndose agraviado este individuo, dió queja al Tribunal Superior de Bolívar, levantóse, en consecuencia, la instrucción respectiva, y con fecha treinta de Julio de 1889, fué llamado á juicio de responsabilidad, por los trámites extraordinarios, Juan J. Newball, Juez de Circuito mencionado, por infracción del artículo 427 del Código Penal, que estaba en vigencia. Para notificar este auto se remitió el expediente á San Andrés, el cual se perdió en el tránsito. Con tal motivo se dictaron las providencias del caso para reponerlo, y reunidas las piezas que pudieron obtenerse, por auto de diez y ocho de Marzo del presente año, se reconoció la validez del auto de proceder citado anteriormente, y dispúsose que se notificara; hecho esto, en el acto de la notificación el encausado Newball apeló para ante esta Superioridad, la que procede, por ser llegado el caso, á dictar la resolución que le compete.

Por la breve relación que al principio se ha hecho, William B. Lewer parece desobedeció una orden del Juez que lo llamaba al Juzgado; pudo, pues, el Juez corregirlo con arreglo á sus facultades. Según el ordinal 6.° del artículo 115 del Código de Organización Judicial, los Jueces del Circuito, por la desobediencia á falta de respeto, no están facultados para imponer multas mayores de diez pesos, como pena correccional; al imponer, pues, una multa mayor, el Juez Newball se excedió indudablemente de sus atribuciones y debe responder de tal exceso; porque aunque es verdad que el artículo 93 de la Ley 57 de 1887 daba facultad á los Jueces para imponer hasta cincuenta pesos de multa á las partes, peritos ó testigos para obligarlos á cumplir las órdenes ó providencias que en los juicios se dictaran, esa atribución, como lo dice el mismo artículo, no podía ejercitarse sino por vía de apremio y de ninguna manera como pena correccional; y es sabido que todo apremio se intima previamente y se hace efectivo, gradual y sucesivamente, hasta llegar al máximo; de suerte que no habiéndose llenado estos requisitos, hubo también exceso, aun considerada la cuestión en vista del citado artículo 93.

Mas como según el artículo 345 de la Ley 105 de 1890, no debe yá citarse en el auto de proceder el artículo que se cree infringido, en esta parte conviene sea reformado.

En atención á lo expuesto y de conformidad con el parecer del señor Procurador, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, se resuelve: llámase á juicio de responsabilidad por los trámites extraordinarios á Juan J. Newball, por abuso de autoridad, delito de que trata el capítulo 8.°, título 10, libro 2.° del Código Penal vigente. Queda así reformado el auto apelado, el que se confirma en todo lo demás.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

IMPRENTA DE ANTONIO M. SILVESTRE.
Director, Tomás Galarza.

REPÚBLICA DE COLOMBIA.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AÑO VIII | Bogotá, 8 de Marzo de 1893. | NÚM. 373.

CONTENIDO.

Págs.

PENA CAPITAL.

Sentencia que confirma la pronunciada por el Tribunal Superior del Sur de Santander, en la cual fué condenado Dimas Gómez á la pena de muerte, por el delito de asesinato perpetrado en la persona de José ó Josefito Castillo. (Magistrado ponente, doctor Pombo). 73

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

La que declara que no es casable la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Antioquia en el juicio seguido por María del Carmen Echeverri de Botero contra Agustín Arango, sobre deslinde de unos terrenos. (Magistrado ponente, doctor Trujillo)..... 74

La que anula el fallo de 2.ª instancia pronunciado por el Tribunal Superior de Panamá, en el juicio seguido por la Compañía del Ferrocarril de este Departamento contra S. L. Isaacs & Asch, sobre pago de una suma y nulidad de unos contratos. (Magistrado ponente, doctor Trujillo)..... 76

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

El que confirma un auto pronunciado por el Juez del Circuito de Roldanillo en el juicio ejecutivo seguido por el Administrador de la Aduana de Buenaventura contra Ricardo Escobar A. (Magistrado ponente, doctor Corrales)..... 79

El que declara infundado el recurso de revisión interpuesto por Tomás Paredes contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Panamá, en el juicio que aquél sigue contra Guillermo Lewis, por pesos. (Magistrado ponente, doctor Medina)..... 80

El en que se declara incompetente la Corte para conocer del juicio ejecutivo seguido por el Administrador departamental de Hacienda de Antioquia contra Eugenio Ramírez. (Magistrado ponente, doctor Villafrádez)..... 80

GACETA JUDICIAL.

PENA CAPITAL.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez y seis de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 2.° del artículo 368 de la Ley 105 de 1890, el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Sur de Santander ha remitido en consulta la sentencia de fecha veintisiete de Julio último, por la cual confirmó la de primera instancia que el Juez Superior del mismo Distrito Judicial había pronunciado el día cinco del mismo mes en la causa seguida contra Dimas Gómez, por el delito de homicidio calificado de asesinato en el grado máximo de gravedad, perpetrado en la persona de José ó Josefito Castillo.

En el auto que con fecha veintinueve de Abril del presente año dictó el mismo Tribunal para confirmar la resolución del Juez Superior por la que se declaró notoriamente injusto el veredicto del primer Jurado de calificación que conoció en la causa de que se trata, se hace la siguiente exacta relación de los hechos:

"El treinta de Marzo de mil ochocientos noventa y uno, por la tarde, hallábanse en casa de Gregorio Gómez, sitio de *'Petaquerito,' vecindario de San-Gil*, entre otras personas, José ó Josefito Castillo, Dimas Gómez, Francisco Ríos, Justiniana Mancilla y Dolores Velandia. Por cualquier motivo, ó sin él, Dimas Gómez ofendió de hecho á estas dos mujeres, y luégo sacó un cuchillo que tenía á la cinta, del cual fué desarmado por Francisco Ríos. Durante esto, Josefito Castillo prendió de los brazos á Gómez, y después intentó apoderarse de un garniel con dinero que él tenía consigo; pero nada de esto lo hizo Castillo con ánimo ni ademán agresivos, sino con el propósito de evitar que Gómez cometiera otros atentados ó perdiera los valores que guardaba en el garniel, pues que aquéllos eran muy amigos de tiempo atrás, y Gómez era asistido en ocasiones en casa de Castillo y recibía otros beneficios de éste. Inmediatamente después de haber sido desarmado Gómez, el bochinche terminó; Castillo fué á sentarse en el patio de la casa, y tranquilamente se puso á conversar con alguno de sus compañeros. Así trascurrieron de treinta á sesenta minutos, cuando llegó Rufino Galvis y se encaminó al sitio donde Castillo estaba y entabló también conversación con él. En el acto Gómez se dirigió á Galvis, le sacó por detrás el cuchillo que éste tenía en la cintura, y con él descargó sobre Castillo—que permanecía sentado aún—una fuerte cuchillada en la cabeza, ocasionándole la herida que le produjo la muerte; luégo salió en carrera pero fué aprehendido á poco trecho. Varios testigos le oyeron decir al ser aprehendido: 'qué lástima que el cuchillo no hubiera sido bien cortante para haberle dado más recio á Josefito Castillo ó haberlo matado al momento;' otro oyó que dijo 'que no hahía herido á Castillo de borracho, sino bien pensado, porque una vez le pegó en su casa, y como no se hallaba capaz á las fuerzas, se había desfogado de ese modo; y otro—en fin—que al contemplar á Castillo yá herido, dijo: 'así era como yo te quería ver."

Sometido á juicio Dimas Gómez, por auto de veinte de Mayo de mil ochocientos noventa y uno, por el delito de homicidio, y notificada esa providencia al reo y al defensor, se abrió á prueba la causa, y se recibieron muchas declaraciones con las cuales no se consiguió desvanecer el cargo deducido contra el enjuiciado. Reunido el Jurado que debía calificar el delito y la responsabilidad del delincuente, el Juez Superior sometió á la decisión de aquél las siguientes cuestiones:

"¿Se ha cometido el delito de homicidio que el artículo 440 del Código Penal define asesinato y que castigan los artículos 441 del Código Penal y 217 y 221 de la Ley 153 de 1887, pues ha alcanzado el grado máximo de delincuencia porque se perpetró con alevosía ó á traición, ó sobre seguro, según el ordinal 3.° del artículo 440 citado?"

"¿Dimas Gómez es responsable?"

"¿Dimas Gómez es autor principal, cómplice, auxiliador ó encubridor?"

El Jurado resolvió negativamente la primera de dichas cuestiones y, en consecuencia, dejó de resolver las dos últimas; pero á continuación añadió: "Se ha cometido el delito definido en el artículo 436 del Código Penal y que castiga el artículo 223 de la Ley 153 de 1887. Dimas Gómez es autor principal."

El Juez de la causa, por resolución de dos de Septiembre de mil ochocientos noventa y uno, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 313 de la Ley 57 de 1887, declaró notoriamente injustas todas y cada una de las resoluciones del Jurado de calificación, y para ello se fundó en las consideraciones que pueden compendiarse así: Primera. El homicidio fué premeditado; porque se perpetró sin que mediara

riña, ni precediera ofensa ó provocación alguna. Segunda. La agresión se efectuó sorprendiendo á la víctima descuidada, indefensa y desapercibida, y por ello el homicidio fué consumado con alevosía, á traición y sobre seguro, conforme á la doctrina del artículo 440, ordinal 3.° del Código Penal. Tercera. Cometido así el homicidio, él asume las proporciones de un asesinato que alcanza grado máximo de gravedad, según los artículos 440 citado y 221 de la Ley 57 de 1887. De lo expuesto dedujo el Juez que el veredicto del Jurado que negó al homicidio el carácter y gravedad enunciados, era contrario á la evidencia de los hechos que resultaban del proceso.

Consultada esta providencia con el Tribunal Superior, éste, como ya se dijo, confirmó dicha resolución por providencia de veintinueve de Abril del presente año, á pesar de la opinión contraria del Magistrado sustanciador, quien fundó su discordancia en el Acuerdo de la Corte número 213, publicado en el número 80 de la *Gaceta Judicial*, al cual Acuerdo se dió por el Magistrado una inteligencia que los otros dos Magistrados rechazaron interpretando fielmente el pensamiento de la Corte, que no pudo ser el de privar al Juez de la preciosa facultad que le confiere el artículo 313 de la Ley 57 de 1887 para limitar, como lo dijeron, la peligrosa omnipotencia del Jurado en el caso de un error evidente en el veredicto.

A virtud de la resolución del Tribunal se hizo por el Juez el sorteo de un nuevo grado de calificación, el cual declaró que Dimas Gómez es responsable en grado máximo de gravedad, como autor principal del delito de asesinato, y de acuerdo con este veredicto el Juez Superior dictó la sentencia de cinco de Julio último, que en su parte resolutiva dijo: "Por tanto, y teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 68, 69, 70, 119, 125 y 441 del Código Penal que rigió hasta el quince de Junio del año próximo pasado, 217, 221, y 223 de la Ley 153 de 1887, el Juzgado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, condena á Dimas Gómez, natural del Páramo, como responsable y autor principal del delito de homicidio, ó sea asesinato en grado máximo, que consumó en la persona de Josefito Castillo, con la herida que le infirió en la cabeza en la tarde del día treinta de Marzo del año próximo pasado, en el sitio de "El-Petaquerito," en jurisdicción de San-Gil, á sufrir la pena de muerte en el lugar que señale el Honorable Tribunal; á pagar á los representantes de su víctima, Josefito Castillo, la suma de mil quinientos pesos como indemnización de daños y perjuicios por el delito y las costas de este juicio por las cuales no se le inquietará si es insolvente.

Confirmada esta sentencia por la que profirió el Tribunal en veintisiete del mismo mes de Julio, y traída en consulta á esta Superiodad, en donde se le ha dado la tramitación propia del asunto, la Corte procede á dictar la sentencia que le corresponde, examinando al efecto si en la sentencia consultada concurre alguna de las causales de casación que señala el artículo 370 de la citada Ley 105 de 1890, á pesar de que ninguna de las partes ha alegado contra ella causal alguna de las referidas.

En cuanto á la primera de dichas causales no encuentra la Corte que en la sentencia examinada, que está en consonancia con el veredicto del Jurado, haya habido violación de ley sustantiva ó de doctrina legal ó interpretación errónea de la una ó de la otra, ni aplicación indebida de leyes ó de doctrina legal, supuesto que han sido rectamente aplicadas las disposiciones que le han servido de fundamento, sin que puedan favorecer al reo las nuevas disposiciones penales, porque ellas no aminoran las penas señaladas en los artículos que del anterior Código han sido citados.

En cuanto á la segunda de las causales de casación que *designa el artículo 370, y que consiste en ser en concepto de* la Corte notoriamente injusto el veredicto del Jurado, ella nada tiene que examinar, vista la disposición del tercer inciso del artículo 391 que prohibe á la Corte anular la sentencia por esta causal cuando ella se funda en el veredicto pronunciado por un segundo Jurado, con motivo de haber declarado el respectivo Tribunal notoriamente injusto el primer veredicto.

Finalmente, ha examinado la Corte si en la secuela del juicio se ha incurrido en alguna de las causas de nulidad designadas en los ordinales 1.°, 3.°, 4.°, 5.°, 6.° y 7.° del artículo 264 de la Ley 57 de 1887, que es la tercera de las causales de casación que señala la ley, y no ha encontrado que se haya omitido ninguna de las formalidades cuya omisión sea motivo de nulidad.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador general de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, aprueba la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Sur de Santander que confirmó la del Juez Superior del mismo Distrito Judicial que condenó á Dimas Gómez á sufrir la pena de muerte.

Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y remítase el proceso al señor Ministro de Justicia para los efectos ulteriores.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA. — JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Noviembre cuatro de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Francisco Botero Arango, como representante legal de su esposa, María del Carmen Echeverri, entabló demanda ante el Juez del Circuito de Titiribí contra Agustín Arango, para que se deslindaran entre sí las fincas rurales llamadas "La-Zahínera," propiedad de la mujer del primero, y "Zátapia," perteneciente al último, situadas en el Distrito municipal de Fredonia del Departamento de Antioquia.

Practicada la diligencia de deslinde (foja 45) por el Juez municipal de Fredonia, y señalado como límite de las dos heredades la quebrada Sapo ó Sapa, desde su desembocadura en el río Cauca, aguas arriba, hasta la confluencia de dos corrientes próximamente iguales, que vienen, una del lado oriental y otra del occidental, y que semuen á pocas cuadras de dicha desembocadura en el río Cauca, y de ahí en dirección Norte hasta "Las-Peñas," ó "Peñoles," por toda la corriente occidental, en el supuesto de que esta corriente es la verdadera quebrada Sapo, Agustín Arango se opuso á ese deslinde en esa parte, dando lugar con ello á un juicio ordinario para acreditar que es la corriente oriental desde su nacimiento la verdadera quebrada Sapo ó Sapa, y no la occidental.

Sustanciada la causa en primera instancia, el Juez del Circuito de Titiribí declaró, sin hacer condenación en costas, que era la corriente oriental el límite de las dos heredades (fojas 235 y 236). De esa sentencia apelaron ambas partes, haciendo presente Agustín Arango que sólo interponía ese recurso por no haberse condenado en las costas á Francisco Botero Arango.

Recibido el expediente en el Tribunal, ninguno de los interesados pidió que el juicio se abriera á prueba, y previa una inspección ocular practicada de oficio, se confirmó la sentencia dictada por el Juez de Circuito.

Contra este fallo, que lleva fecha trece de Febrero de mil ochocientos noventa y uno, interpuso recurso de casación la parte de Francisco Botero Arango, ó sea de María del Carmen Echeverri, por las causales 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª, 7.ª, 8.ª y 9.ª del artículo 38 de la Ley 61 de 1886, que estaba vigente en ese entonces.

Habiendo entrado en vigor la Ley 105 de 1890, cuando fué repartido este negocio en esta Superioridad, se le sometió á la tramitación señalada en dicha ley hasta ponerlo en estado de dictar la sentencia que le ha de poner fin, lo cual se procede á hacer mediante el examen de las causales en que se funda el recurso de casación interpuesto.

Primera y segunda causales.—Ser la sentencia, en su parte dispositiva, violatoria de ley sustantiva ó de doctrina legal, ó fundarse en una interpretación errónea de la una ó de la otra, ó hacer indebida aplicación de leyes ó de doctrinas legales al caso del pleito.

Lo único que se ha alegado para estimar que se ha incurrido en esas dos causales, es que al correrse el traslado de la diligencia de deslinde practicado por el Juez de Fredonia, no hubo objeción al deslinde, ó no la hubo oportunamente.

Es verdad que inmediatamente después de dictarse el auto por el cual se mandó correr el traslado, no se presentó la objeción al deslinde; pero eso consistió en que á ese tiempo se introdujo por la parte de Agustín Arango una articulación de previo y especial pronunciamiento, que por ministerio de la ley interrumpió el término del traslado, que no volvió á empezar á correr sino después de ser resuelta la articulación, y entonces sí se presentó el respectivo escrito de objeciones, que dió lugar al actual juicio ordinario.

Pero aun dando por sentado que no se hubiera objetado oportunamente el deslinde, eso no constituiría ninguna de las dos causales apuntadas, porque en la sentencia que es materia de examen, no se resuelve sino una articulación de previo y especial pronunciamiento, como lo era la de nulidad, según la legislación antioqueña, suspendía ó no el término de un traslado.

Tercera causal.—No ser la sentencia congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes.

La parte recurrente no ha aducido nada para indicar la existencia de esta causal, y aunque se estudie detenidamente el expediente no se puede encontrar, porque tratándose de un juicio de deslinde, en que sí se ha señalado la línea divisoria de las propiedades, mal se puede sostener que la sentencia no sea congruente con las pretensiones deducidas en el pleito.

Cuarta causal.—Condenar á más de lo pedido, ó no contener la sentencia declaración sobre alguna de las pretensiones oportunamente deducidas en el pleito.

La parte de Francisco Botero Arango, ó sea María del Carmen Echeverri, ha hecho presente que el escrito de oposición de Agustín Arango, que ha servido de libelo de demanda en el juicio ordinario, contiene tres peticiones, de las cuales, la sentencia del Juez de Circuito, que fué confirmada sin variación ninguna por el Tribunal, no las resolvió todas.

Dicho escrito de oposición contiene estas tres peticiones:

Primera. Que se declare que el límite de "Zátapia" con "La-Zahínera," es el confluente oriental, ó el que queda á la izquierda bajando, que es el mismo que tiene arriba de la confluencia un afluente salino llamado "Chupadero de La-Sapa."

Segunda. Que se declare, en conciencia, que pertenece al opositor Arango el triángulo de terreno comprendido entre los dos afluentes oriental y occidental y "Las-Peñas" ó "Peñoles."

Tercera. Que si no hubiere lugar á esas dos declaraciones anteriores, entonces se condene á Botero Arango, ó sea á María del Carmen Echeverri, á pagar las mejoras existentes en el terreno disputado, y

Cuarto. Que se condene en todo caso á la parte demandada en las costas y gastos del pleito.

El Juez de Circuito de Titiribí en su sentencia de cinco de Enero de mil ochocientos ochenta y nueve, que fué confirmada sin variación alguna por el Tribunal, declaró que el límite de las dos propiedades es el confluente oriental, y dijo que no hacía condenación en costas.

De las cuatro peticiones hechas por Arango, la tercera era enteramente subsidiaria ó condicional, porque dependía de que no se señalara el lindero sostenido por él; de suerte que si se declaraba que el afluente oriental era el límite que tenían entre sí las dos propiedades, no había necesidad de resolver esa tercera petición.

Ahora bien: decidido en la sentencia que el lindero es el afluente oriental, como lo pretende Arango, y que no se hacía condenación en costas, quedó por el mismo hecho resuelta la segunda petición, porque el fijar el afluente oriental como límite de las dos propiedades es declarar, sin dar lugar á dudas de ninguna clase, que el triángulo de terreno comprendido entre los dos afluentes y "Los-Peñoles," pertenece á Agustín Arango.

Séptima causal.—Haber habido, por razón de la materia sobre que ha versado el pleito, abuso, exceso ó defecto en el ejercicio de la jurisdicción, por haber conocido el Tribunal en asunto que no sea de la competencia judicial, ó dejado de conocer cuando tuviere el deber de hacerlo.

Para fundar esta causal, se ha expuesto que el Magistrado, doctor Julián Cock Bayer, que hizo parte de la Sala de decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, fué apoderado en este juicio de Agustín Arango, y que á la parte contraria de éste no se le admitió el incidente respectivo de recusación.

Es evidente que el doctor Cock Bayer fué por un tiempo apoderado en este pleito de Arango, pero también lo es que él puso, oportunamente, por medio de un auto, en conocimiento de las partes, el impedimento que tenía para poder conocer del negocio, y que la parte de Francisco Botero Arango, ó sea María del Carmen Echeverri, guardó sobre el particular completo silencio, que, por mandato de la ley debía tomarse por allanamiento del impedimento, sin que yá pudiera servir éste de materia para un incidente de recusación.

Octava causal.—Haberse incurrido, en la apreciación de las pruebas, en error de derecho, ó en error de hecho, si este último resulta de documentos ó autos auténticos que demuestren la equivocación evidente del juzgador.

Se han aducido como errores de derecho y de hecho sufridos por el Tribunal el haber desechado, al dictar sentencia, el dictamen de la mayoría de los peritos que intervinieron en la inspección ocular practicada en segunda instancia, y el haber considerado como confesión judicial unos memoriales dirigidos á una autoridad de policía, no por María del Carmen de Botero, sino por Francisco Botero & Hijos, Germán Botero y José Hilario Ardila, y se señalan, en consecuencia, como violados los artículos 660, 662 y 556 del Código Judicial.

No se puede sostener con razón que el artículo 660 se pueda violar al dictarse una sentencia definitiva, porque esa disposición legal sólo tiene aplicación antes de proferirse el fallo que le ha de poner fin á una instancia, puesto que se refiere á las explicaciones que deben dar los peritos cuando su dictamen está oscuro, ó bien para que se proceda á practicar una prueba pericial, cosas que se comprende fácilmente, que deben existir y perfeccionarse, como pruebas que son, antes de dictar sentencia.

El artículo 662 le da al dictamen pericial la fuerza de la prueba testimonial cuando los peritos declaran sobre hechos que están sujetos á los sentidos, y sobre lo que según su arte, profesión ú oficio, exponen con seguridad como consecuencia de esos hechos; y la de indicios cuando no reúne esas dos condiciones.

El Tribunal en su sentencia no sienta doctrina contraria á la establecida en este artículo, ni se ha demostrado con documentos auténticos la equivocación evidente que él haya sufrido al rechazar el dictamen pericial de la segunda instancia, máxime si se atiende á que la fuerza probatoria de ese dictamen está infirmada gravemente por la circunstancia de basarse, principalmente, en un plano que vino al juicio sin los requisitos legales y por la de tener en su contra el dictamen de los peritos de la primera instancia.

El haberse considerado como una confesión de parte las afirmaciones hechas por Francisco Botero é Hijos en varios memoriales presentados en unas diligencias de policía, sí constituye un error de derecho; porque la firma de Francisco Botero é Hijos es la de una persona jurídica distinta de Francisco Botero y de su esposa María del Carmen Echeverri. De modo que aunque en el juicio de deslinde se haya acreditado plenamente que en las diligencias de policía se afirmara que la corriente oriental era el lindero de los dos predios, ese aserto no puede tomarse como confesión de Carmen Echeverri, persona natural y no jurídica, diferente de Francisco Botero é Hijos.

Pero este error sufrido por el Tribunal no es motivo suficiente para casar la sentencia, porque para ello era preciso que se hubiera acreditado que sin él el fallo habría salido en sentido contrario del en que está concebido, cosa imposible de justificarse, puesto que la mencionada sentencia aduce en su apoyo muchas pruebas distintas de la que llamó equivocadamente confesión de parte.

Novena causal. — Haberse faltado en el procedimiento á alguna de las formalidades que de suyo inducen nulidad y no haberse podido, en consecuencia, hacer eficaz el derecho por parte del demandante, ó la defensa por parte del demandado. Las infracciones en el procedimiento que no hayan de producir necesariamente uno de esos defectos, no servirán de fundamento para la casación.

La parte recurrente no ha alegado hecho ninguno que pueda servir de apoyo á esta causal, y si se examina el proceso tampoco se encuentra nada en que se pueda fundar.

En mérito de lo expuesto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que no es casable la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, dictada el trece de Febrero de mil ochocientos noventa y uno, condena en las costas del recurso á María del Carmen Echeverri de Botero, y á perder el depósito hecho por ella en favor de la Sociedad de San Vicente de Paúl de Medellín.

Publíquese, notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—RAFAEL MARIÑO C.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, venticinco de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: La Compañía del Ferrocarril de Panamá demandó, por la vía ordinaria, ante el Juez del Circuito de Colón, á S. L. Isaacs & Asch, para que se les condenara á pagarle seis mil seiscientos setenta pesos ($ 6,670) en oro americano, valor de la renta en un año, corrido de mil ochocientos noventa á mil ochocientos noventa y uno, de cuarenta lotes de terreno de la ciudad de Colón que la Compañía les dió en arrendamiento, y para que se declararan rescindidos esos contratos, debiendo quedar á disposición del Juez lo que estuviera construído en los lotes para responder de la renta adeudada, conforme á la cláusula cuarta de esos contratos.

S. L. Isaacs & Asch, al contestar la demanda, propusieron una de reconvención para que se condenera á la Compañía del Ferrocarril á pagarles ciento cincuenta y cinco mil pesos ($ 155,000) ó lo que en el juicio se acreditara les debía por perjuicios y otras causas, y á respetar y cumplir los contratos de arrendamiento de los lotes números 113 á 129 y 266, 268, 270 y 272, hasta que fueran indemnizados.

S. L. Isaacs & Asch descompusieron la cantidad de ciento cincuenta y cinco mil pesos ($ 155,000) en las siguientes partidas:

Cien mil pesos ($ 100,000) oro americano, en que aprecian el valor del relleno de los lotes números 113 á 129; cincuenta mil pesos ($ 50,000) oro americano, en que estiman los perjuicios que aseguran, les causó la Compañía por haberlos privado por la fuerza, en el año de mil ochocientos ochenta y cinco, durante cinco meses y medio contados desde Abril hasta el diez y nueve de Septiembre, del goce de sus derechos de arrendatarios de los lotes números 113 á 129 y 266, 268 y 270.

Cinco mil peses ($ 5,000) plata de 0,835, suma en que *fijaron los perjuicios que dicen les causó* la Compañía, por haberles impedido en el mes de Diciembre de mil ochocientos noventa, la construcción de casas sobre los lotes números 266, 268, 270 y 272.

Adelantado el juicio por todos los trámites señalados para la primera instancia, el Juez condenó, en sentencia de diez y ocho de Diciembre de mil ochocientos noventa y uno, á S. L. Isaacs & Asch á pagar dos mil trescientos noventa y nueve pesos ($ 2,399), en oro americano, por la renta en un año de los cuarenta lotes arrendados, y á la Campañía á desembolsar, en moneda del país, cincuenta y siete mil ochocientos pesos ($ 57,800), por razón del relleno de los lotes, y veinticinco mil pesos ($ 25,000) de perjuicios ocasionados por la violación de los contratos en mil ochocientos ochenta y cinco; declaró rescindidos los contratos de arrendamiento de los cuarenta lotes, menos los marcados con los números 113 á 129, 266, 268 y 270, respecto de los cuales los demandados S. L. Isaacs & Asch, conservarían la posesión por haber sido esos lotes los en que se les prohibió edificar en mil ochocientos ochenta y cinco, y absolvió á la Compañía del pago de los cinco mil pesos ($ 5,000) demandados por perjuicios sufridos en mil ochocientos noventa y mil ochocientos noventa y uno.

De esta sentencia únicamente apeló para ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Panamá la Compañía del Ferrocarril; y como fué consentida por S. L. Isaacs & Asch, quedó ejecutoriada dicha sentencia en la parte en que se absolvió á la Compañía del pago de los cinco mil pesos ($ 5,000) demandados por perjuicios. De suerte que el Tribunal no tuvo jurisdicción para revisar, como lo hizo, ese punto, que quedó en autoridad de cosa juzgada.

Sustanciado el negocio en segunda instancia, el Tribunal decidió, el treinta y uno de Mayo del corriente año, lo que se inserta:

"Confírmase la sentencia de primera instancia en todas sus partes, con la adición siguiente:

"Declárause rescindidos los contratos de arrendamiento de los lotes enunciados en la demanda y en su corrección, menos los números 113 á 129, 266, 268 y 270, que quedarán rescindidos de hecho el día en que se pague á S. L. Isaacs & Asch el monto de los perjuicios reclamados por éstos á la Compañía del Ferrocarril de Panamá."

Contra este fallo interpuso recurso de casación la Compañía del Ferrocarril, por las dos causales que indica el ordinal 1.° del artículo 369 de la Ley 105 de 1890.

Recibido el expediente en esta Superioridad, se le ha dado la tramitación señalada en los artículos 376 á 379 de la ley antes citada, siendo ya tiempo de examinar si el recurso se interpuso oportunamente y por persona hábil, y si la sentencia es de aquellas contra las cuales se puede interponer ese recurso.

En cuanto á esto es evidente que el recurso de casación se interpuso en tiempo y por quien podía hacerlo; que la sentencia fué dictada en juicio civil ordinario por un Tribunal Superior de Distrito Judicial; que se funda en leyes del extinguido Estado de Panamá, idénticas en la forma y en el fondo á las nacionales que están en vigor, y que versa sobre intereses cuya cuantía excede en mucho de tres mil pesos ($ 3,000). En lo que sí se disputa es en que haya contrariedad en las dos sentencias de primera y segunda instancia en cuanto á lo principal del pleito.

Para averiguar esto, es preciso copiar en seguida las partes que no son iguales en las dos sentencias.

La de primera instancia dijo:

"Se declaran rescindidos los contratos de arrendamiento de todos los lotes enumerados en el libelo de dicha demanda, y su corrección, menos los marcados con los números 113 á 129, 266, 268 y 270, situados en la Calle del Frente en la ciudad de Colón, respecto de los cuales los demandados S. L. Isaacs & Asch conservan la posesión por haber sido estos lotes los en que se les prohibió edificar en mil ochocientos ochenta y cinco."

La de segunda instancia está concebida en estos términos:

"Confírmase la sentencia de primera instancia en todas sus partes, con la adición siguiente:

"Declárause rescindidos los contratos de arrendamiento de los lotes enunciados en la demanda y en su corrección, menos los números 113 á 129, 266, 268 y 270, que quedarán rescindidos de hecho el día en que se pague á S. L. Isaacs & Asch el monto de perjuicios reclamados por estos á la Comnía del Ferrocarril de Panamá."

De estas trascripciones se viene en conocimiento de que el Juez negó la declaración de rescisión de los contratos de

arrendamiento de los veinte lotes números 113 á 129, 266, 268 y 270, y que la de segunda decretó, aunque de un modo condicional, la rescición de los contratos relativos á los mismos veinte lotes; providenciasque se excluyen, que no se pueden hermanar, porque existiendo la una deja de existir la otra.

Para ver mejor la contrariedad que hay, basta considerar que la resolución del Tribunal no es sino la concesión del derecho de retención á S. L. Isaacs & Asch; porque entre los modos de expirar el contrato de arrendamiento no se enumera como tal el del pago al arrendatario de lo que se le deba por indemnizaciones. Eso sólo tiene lugar con el derecho de retención, que nace únicamente, en estos casos, cuando termina ordinariamente el arrendamiento, como sucede al expirar el tiempo estipulado para su duración, ó cuando se efectúa su rescición; pero no antes, porque la tenencia de que goza el arrendatario durante la existencia del contrato de arrendamiento, jamás se llama derecho de retención ni nunca puede contituírlo.

¿Pero esta contrariedad que existe en las dos sentencias, puede decirse que es en cuanto á lo principal del pleito? La Corte no vacila en contestar afirmativamente.

La Ley 105 de 1890, que reglamenta el recurso de casación, no ha dicho qué debe entenderse por lo principal de un pleito; pero si se considera que la Ley 1.ª, parte 2.ª, tratado 2.º de la Recopilación Granadina, ó sea la Ley de 14 de Mayo de 1834, también exigía que hubiera contrariedad en las sentencias de primera y segunda instancia para que fueran admisibles los recursos de nulidad y de injusticia notoria, y advertía que la desconformidad de las sentencias en materia de costas no daba lugar á dichos recursos, se comprende fácilmente que todo lo demás del libelo de demanda, que no fuera costas, era mirado como lo principal del pleito, concepto conforme con el espíritu del Derecho Romano, origen de la legislación española y de la nuéstra, que desde los tiempos del sistema de las fórmulas ó del procedimiento ordinario miraba como elemento vital de éstas, que no podía faltar nunca la parte conocida con el nombre de *intención*, que era aquella en que se precisaba y resumía la pretensión del demandante que el Juez debía verificar y que hoy es lo que se llama parte petitoria del libelo de demanda.

A falta, pues, de una definición legal, que exprese qué debe entenderse por lo principal de un pleito, la sana crítica aconseja ocurrir á las fuentes de nuestro derecho y acoger lo que enseñan y está de acuerdo con el espíritu de nuestra legislación, para ilustrar las disposiciones que no sean fáciles de comprender y llenar los vacíos que en éstas se encuentren. Así, pues, esta Superioridad cree que lo principal de un pleito lo constituye la parte petitoria de la demanda, y que cuando no hay conformidad en las sentencias de primera y de segunda instancia en el modo de resolverla, hay lugar á admitir el recurso de casación.

Pero aun dando por sentado que en el caso actual las dos sentencias estuvieran conformes en el modo de decidir la parte petitoria del libelo de demanda presentado por la Compañía del Ferrocarril, es decir, que fueran uniformes sus partes resolutivas, todavía no habría razón suficiente para rechazar el recurso de casación interpuesto, si los considerandos que forman las bases fundamentales de ellos son contradictorios en cuanto á la inteligencia ó aplicación de las leyes, de acuerdo con la doctrina del artículo 366 de la Ley 105. Más adelante se encontrará la contrariedad entre las sentencias de primera y segunda instancia en cuanto á la inteligencia de leyes sustantivas que sirven de fundamento á uno y otro fallo.

Averiguado que la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Panamá reúne las tres condiciones requeridas por el citado artículo 366 para ser admisible el recurso de casación, se procede á examinar las dos causales alegadas contra ella para ver si hay lugar á casar, esto es, á anular dicho fallo.

Primera causal.—Violación de los artículos 1993, 1602, 1995, 1712, 1469 *y* 1625 *del Código Civil nacional.*

El artículo 1993, igual al 2034 del Código Civil de Panamá, está concebido así:

"El arrendador es obligado á reembolsar al arrendatario el costo de las reparaciones indispensables no locativas que el arrendatario hiciere en la cosa arrendada, siempre que el arrendatario no las haya hecho necesarias por su culpa, y que haya dado noticia al arrendador lo más pronto, para que las hiciese por su cuenta. Si la noticia no pudo darse en tiempo, ó si el arrendador no trató de hacer oportunamente las reparaciones, se abonará al arrendatario su costo razonable, probada la necesidad."

Su simple lectura indica que para que el arrendador tenga obligación de pagar el costo de las obras que el arrendatario haga en la cosa arrendada, es preciso que concurran tres circunstancias: que las obras sean reparaciones indispensables no locativas; que el arrendatario no las haya hecho necesarias por su culpa, y que éste le haya dado noticia al arrendador lo más pronto, á menos que haya sido imposible, de los daños ocurridos, para que haga las obras por su cuenta.

Reparación es composición, aderezamiento ó enmienda del menoscabo que ha padecido una cosa.

Para que haya, pues, lugar á reparaciones, es necesario que la cosa arrendada venga á menos durante la existencia del contrato, para que el menoscabo no sea conocido del arrendador y haya necesidad de darle noticia de él; porque si el vicio existía antes de la entrega de la cosa al arrendatario, éste al recibirla tuvo que dejar constancia del defecto que la inutilizaba para que se la compusiera, ó bien guardó silencio y tomó sobre sí la carga de repararla á su costa para que le sirviera en lo que él la deseaba (artículo 1992).

En este juicio el Tribunal interpretó mal este artículo, porque dió por sentado que el relleno de los lotes números 113 á 129, que eran una laguna cuando se celebró el contrato de arrendamiento, constituía una reparación indispensable no locativa, y que el aviso no era necesario. Cuando en el expediente consta plenamente que los lotes números 113 á 129 siempre fueron una laguna ó pedazo de mar y nunca lugares secos y terraplenados para que al ser inundados, hubieran sufrido menoscabo, y que los arrendatarios consideraron dichos lotes en buen estado para lo que los buscaban, una vez que dijeron al celebrar los contratos que los daban por recibidos á su satisfacción.

En este punto están en contradicción entre sí las sentencias de primera y de segunda instancia; porque el Juez al condenar á la Compañía al pago del relleno partió del supuesto de que se le había dado el aviso de que habla el artículo 1993 del Código Civil, aviso que estima indispensable, mientras que el Tribunal aplicó la misma disposición legal en la creencia de que no se había dado aviso ninguno á la Compañía por considerar que esa formalidad no es necesaria.

El artículo 1602 que dice que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo ó por causales legales; el 1761 que dispone que el documento privado mandado tener por reconocido, valga como escritura pública para los que lo han suscrito, y el 1759, que ordena que los descargos que contiene un instrumento público hacen plena fe respecto de los otorgantes, también fueron violados en la sentencia recurrida al condenar á la Compañía del Ferrocarril á pagar cincuenta y siete mil ochocientos pesos ($ 57,800) importe del relleno de lotes números 113 á 129; porque al declarar S. L. Isaacs & Asch en los contratos de arrendamiento que habían recibido los lotes á su satisfacción, reconocieron implícitamente que la Compañía no tenía obligación de rellenarlos, porque inundados como se hallaban, los consideraron propios para el objeto con que los habían tomado, y por lo mismo libre del deber de desembolsar el costo de las obras que se hicieran en ese sentido.

El Tribunal, al disponer que los contratos de los lotes números 113 á 129, 266, 268 y 270 quedarían rescindidos de hecho el día en que se pagaran á S. L. Isaacs & Asch los perjuicios reclamados por éstos, no hizo otra cosa que reconocerles á los demandados, el derecho de retención, como se dejó antes demostrado, y con ello infringió el artículo 1995 del Código Civil, porque privó á la Compañía de la facultad de recuperar los lotes, asegurando el importe de las indem-

nizaciones, y porque confundió los primeros contratos de arrendamiento celebrados en mil ochocientos ochenta y uno, con los hechos en mil ochocientos ochenta y seis y mil ochocientos ochenta y siete, que son diferentes por el precio, tiempo y otras estipulaciones de los anteriores, puesto que no fué durante la vigencia de los últimos contratos cuando tuvieron lugar los perjuicios mandados pagar.

La sentencia recurrida al condenar á S. L. Isaacs & Asch á pagar únicamente dos mil trescientos treinta y nueve pesos ($ 2,339), en oro americano, por arrendamientos de una anualidad, fundándose en la rebaja hecha por la Compañía en el precio ó renta de los lotes, infringió los artículos 1712 y 1469 del Código Civil, que dicen que "la remisión que procede de mera liberalidad está en todo sujeta á las reglas de la donación entre vivos," y que "mientras la donación entre vivos no ha sido aceptada y notificada, la aceptación al donante, podrá éste revocarla á su arbitrio"; porque no está comprobada la aceptación de la rebaja antes de que la Compañía pasara el oficio de treinta de Diciembre de mil ochocientos noventa (foja 6.ª del cuaderno 2.°) en que participó la revocación de la rebaja.

Se ha acusado á la misma sentencia de haber violado los artículos 1625 y 2483 que señalan la *transacción* como uno de los modos de extinguirse las obligaciones que produce la excepción de cosa juzgada. Y se ha alegado para acreditar esta violación una carta dirigida por un empleado subalterno de la Compañía del Ferrocarril á S. L. Isaacs & Asch, con fecha siete de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, en la cual dice que varias concesiones que les fueron otorgadas, fué en cambio de que éstos dieran "una cancelación de cualesquiera reclamaciones que pudieran tener contra la Compañía del Ferrocarril, por gastos hechos rellenando los lotes y por haber estado durante algunos meses después del fuego (de mil ochocientos ochenta y cinco) sin el goce de ellos por orden del Superintendente Burt;" carta que fué presentada por S. L. Isaacs & Asch sin hacer reserva ni protesta alguna, y que se cree, según los artículos 1763 y 1764, que hacen plena fe contra ellos.

A esta argumentación no se le puede dar el valor que se le asigna, porque si bien es cierto que en el memorial con que se presentó esa carta no se hizo reserva ni protesta alguna, también lo es que á ella se acompañó copia de otra carta de fecha posterior escrita á la Compañía por S. L. Isaacs & Asch en que éstos le manifiestan no haber sido atendidos en sus reclamos de indemnizaciones á pesar de haberse dirigido en ese sentido varias ocasiones, manifestación que suple en demasía la falta de reserva y protesta que se echa de menos en dicho memorial de presentación de pruebas.

Segunda causal.–Haberse incurrido en la sentencia en error de derecho en las apreciaciones de las pruebas.

Es superfluo entrar á examinar esta segunda causal de casación, estando comprobada la primera. En consecuencia, se procede á dictar el fallo que ha de reemplazar la sentencia de segunda instancia.

La demanda principal se compone de dos peticiones, á saber:

El pago de la renta de cuarenta lotes en un año y la rescisión de los contratos de arrendamiento de los mismos lotes.

Los demandados han confesado la falta del pago de la anualidad reclamada; pero han agregado no deberla por tener contra los demandantes créditos por mayor valor, y que dado caso de que no hubiera lugar á la compensación, no podían ser condenados á pagar toda la suma demandada, en virtud de la rebaja concedida en el precio de los arrendamientos y haber cubierto dos veces, en el año de mil ochocientos ochenta y nueve, por equivocación, la renta correspondiente á los lotes números 200, 202 y 272.

La declaración de no estar comprobada la excepción de compensación y la de pago de los lotes números 200, 202 y 272, son puntos que quedaron en autoridad de cosa juzgada desde la primera instancia; y el punto de la rebaja del precio de los arrendamientos, que es una remisión gratuíta ó verdadera donación, fué revocada antes de haber sido aceptada por los demandados.

Lo único que hay que rebajar de los seis mil seiscientos setenta pesos ($ 6,670) demandados, son cien pesos ($ 100), correspondientes al lote número 572, según auto ejecutoriado de treinta y uno de Agosto de mil ochocientos noventa y uno (foja 131 del cuaderno número 2). De suerte que lo que se debe mandar pagar son seis mil quinientos setenta pesos ($ 6,570).

No habiéndose cubierto el arrendamiento correspondiente á un año, hay lugar á decretar la rescisión de todos los contratos, ó mejor dicho, su resolución, de acuerdo con el artículo 1546 del Código Civil.

La demanda de reconvención contiene cuatro peticiones que serán examinadas por su orden:

Primera. Pago de cien mil pesos ($ 100,000), en oro americano, ó lo que se probara en el juicio que S. L. Isaacs & Asch invirtieron en el relleno de los lotes números 113 á 129. El Juez condenó á pagar cincuenta y siete mil ochocientos pesos ($ 57,800) en moneda del país.

La obligación que se quiere hacer efectiva por medio de esta petición, nace de la ley, ó de un contrato ó convención. Examinados los hechos fundamentales de la demanda de reconvención y las disposiciones legales cuya aplicación se ha solicitado, se encuentra que al derecho que se desea hacer efectivo, se le señala por fuente la ley; pero como la Compañía cumplió con el deber de entregar la cosa arrendada á satisfacción de los arrendatarios y no se ha acreditado que los lotes sufrieran menoscabo después de esa entrega, no se puede condenar á la Compañía del Ferrocarril á pagar el costo del relleno.

El Tribunal, al condenar á la Campañía á pagar cincuenta y siete mil ochocientos pesos ($ 57,800) por este capítulo de la demanda de reconvención, fundándose en que dicha Compañía confesó la obligación que tenía de indemnizar el costo del relleno, alegando para ello varias cartas que la Dirección de la Compañía del Ferrocarril escribió á S. L. Isaacs & Asch con relación á las reclamaciones hechas por éstos, padeció un gravísimo error.

Una de esas cartas es la del Presidente de la Compañía, que lleva fecha dos de Julio de mil ochocientos ochenta y seis, y dice así:

"Acabo de recibir la carta de ustedes de 1.° de los corrientes. Por el vapor que sale de aquí hoy la envío á Mr. Ward y le manifiesto que queda autorizado para el arreglo entre ustedes y esta Compañía, puesto que él conoce los hechos pasados y presentes mucho mejor que nosotros; y es, por lo mismo, más competente para llevar á cabo un arreglo conveniente y justo.

"Puede añadir que él no conviene en los hechos como ustedes lo afirman, pues entre otras cosas dice que diez mil pesos serían más que suficientes para el trabajo ejecutado en rellenar los lotes; y que en otros respectos difiere de ustedes."

Si esta carta, que es el principal documento presentado á su favor por S. L. Isaacs & Asch tiene algún valor probatorio, no es el de confesión, sino el de promesa ó convenio de pagar la obra del relleno; porque la obligación del arrendador de pagar las obras que se hagan en la cosa arrendada, que se quiera hacer nacer de los artículos 1982, 1985, 1987, 1993 y 1995 del Código Civil, no se acredita por medio de confesiones judiciales, puesto que la confesión sobre puntos de derecho no tiene valor ninguno. Y como la demanda de reconvención no presenta entre sus hechos fundamentales la promesa ó convenio de la Compañía de pagar el relleno de los lotes, y S. L. Isaacs & Asch, no piden se apliquen al sentenciar dicha demanda otras disposiciones legales que los artículos acabados de citar, hay que concluír que el Tribunal erró al tomar esas cartas como uno de los fundamentos de su fallo.

Segunda. Pago de cincuenta mil pesos ($ 50,000) en oro americano, ó lo que se probara en el juicio como monto de los perjuicios causados á S. L. Isaacs & Asch por haberlos privado, por la fuerza, durante cinco meses y medio, contados desde Abril hasta el diez y nueve de Septiembre de mil ochocientos ochenta y cinco, del goce de sus derechos de arrendatarios de los lotes números 113 á 129, 266, 268 y 270.

La Compañía, al contestar la demanda de reconvención, confesó que habiendo sobrevenido el incendio de mil ocho-

cientos ochenta y cinco, había intentado aprovechar esa oportunidad para dejar libre de edificios toda la calle del frente, y que la autoridad pública, secundando ese propósito, les había prohibido reedificar en esos lotes á S. L. Isaacs & Asch.

Como en autos aparece que la intervención del Gobierno para prohibir la reedificación no fué oficiosa, sino fruto de exigencias hechas por la Compañía, de tal modo que inmediatamente que ésta hizo presente que desistía de su propósito, la autoridad dejó en libertad á los arrendatarios para edificar, es clarísimo que dicha Compañía se encuentra en el caso previsto en el artículo 1987 del Código Civil, y por lo mismo, en la obligación de indemnizar los daños ocasionados por ese motivo.

Nombrados los peritos del caso, estimaron esos perjuicios en treinta y ocho mil quinientos pesos ($ 38,500), dando razones satisfactorias para ello; pero como S. L. Isaacs & Asch habían manifestado antes en carta que escribieron á la Compañía, que se conformarían con veinticinco mil pesos ($ 25,000), la Corte cree, de acuerdo con el Juez de primera instancia, que sólo en esa suma se debe condenar. Sobre este punto no han reclamado S. L. Isaacs & Asch.

Tercera. La absolución dictada sobre este capítulo de la demanda de reconvención, quedó en autoridad de cosa juzgada desde la primera instancia.

Cuarta. Cumplimiento de los contratos de arrendamiento de los lotes números 113 á 129, 266, 268, 270 y 272, hasta que los arrandatarios fueran cumplidamente indemnizados de los perjuicios reclamados y reembolsados de las sumas invertidas en el relleno de esos lotes.

Estando comprobado que los arrendatarios dejaron de pagar la renta de un año, hay lugar á declarar la resolución de todos los contratos, sin que valga alegar en contra que la Compañía no cumplió con los deberes de arrendadora en mil ochocientos ochenta y cinco; porque eso tuvo lugar durante los primeros contratos de arrendamiento, y no en la vigencia de los nuevos, cuya rescisión se ha pedido; pero sí hay lugar á decretar la retención solicitada.

En mérito de lo expuesto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, anula la sentencia de segunda instancia, y, en consecuencia, declara:

1.° El arrendador que cumple con el deber de entregar la cosa objeto del contrato á satisfacción del arrendatario, cuando dicha cosa no sufre menoscabo durante el arrendamiento, no tiene obligación legal de pagar el costo de las obras que haga en la cosa el arrendatario;

2.° Condénase á S. L. Isaacs & Asch á pagar en oro americano, la suma de seis mil quinientos setenta pesos ($ 6,570), valor del arrendamiento de los cuarenta lotes demandado;

3.° Decláranse rescindidos, ó mejor dicho, resueltos los contratos de arrendamiento de los cuarenta lotes de tierra expresados en la demanda principal, los cuales lotes deben entregar inmediatamente S. L. Isaacs & Asch á la Compañía del Ferrocarril, con excepción de los marcados con los números 113 á 129, 266, 268, 270, y 272;

4.° Condénase á la Compañía del Ferrocarril de Panamá á pagar en moneda del país corriente en Panamá, veinticinco mil pesos ($ 25,000) á S. L. Isaacs & Asch, á quienes se autoriza para retener los lotes números 113 á 129, 266, 268, 270 y 272, hasta tanto se les pague ó asegure dicha suma;

5.° Absuélvese á la Compañía del Ferrocarril de todos los demás cargos contenidos en la demanda de reconvención.

Publíquese, notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA. — BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS. — MANUEL E. CORRALES.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.— *Gabriel Rosas*, Secretario.

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintiocho de Octubre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Con fecha treinta de Octubre de mil ochocientos ochenta y nueve, el Administrador-Tesorero de la Aduana de Buenaventura, libró mandamiento ejecutivo contra Ricardo Escobar A., por la suma de doscientos diez pesos ($ 210) y los intereses que se devenguen á razón del uno por ciento mensual, procedente de derechos causados á deber al Tesoro nacional por la introducción de mercancías extranjeras, verificada por el buque nombrado *Manaví* el veintitrés de Julio de mil ochocientos ochenta y seis.

Sirvieron de recaudo ejecutivo las copias de la partida de reconocimiento sentada en el "Diario" de la Aduana y de la liquidación hecha por ésta con vista del Manifiesto número 8; y aunque el ejecutado interpuso apelación del mencionado auto para ante este Supremo Tribunal, fué confirmado con condenación al pago de las costas procesales.

Seguidas las diligencias ejecutivas se dictó por el empleado ejecutor el auto de citación del ejecutado para sentencia de pregón y remate, y notificado que fué éste, propuso en tiempo las excepciones perentorias de nulidad y de falsedad del documento que traía aparejada ejecución. Remitido el expediente al Juez del Circuito de Roldanillo para que resolviera lo conducente respecto de dichas excepciones, sólo admitió, sustanció y decidió la de falsedad del documento, pues declaró inadmisible la de nulidad. Del respectivo auto que tuvo por objeto decidir sobre la admisibilidad de las dos excepciones propuestas, el ejecutado no interpuso recurso alguno.

Decidido el incidente de la excepción por sentencia que dictó dicho Juez del Circuito de Roldanillo, por medio de la cual la declaró no probada, el ejecutado se alzó de dicha sentencia para ante este Supremo Tribunal; pero no le fué concedida la apelación, porque el Juez de primera instancia creyó que no debía otorgarla para ante la Corte, por razón de la cuantía que daba lugar á la ejecución. Y con tal motivo, Ricardo Escobar A. ocurrió de hecho, para que por la Corte se le concediera el recurso de apelación que el Juez le había negado.

Concedida efectivamente la apelación de la sentencia de excepciones, se pidió el expediente, como lo prescribe la ley.

Sustanciada, pues, en esta Superioridad la alzada, es llegado el caso de decidirla, y para ello se considera:

1.° Que el auto ejecutivo tuvo por base la copia de la partida de reconocimiento descrita en los libros de la cuenta de la Aduana de Buenaventura á cargo de Ricardo Escobar A. y á favor del Tesoro nacional, y la liquidación de los derechos causados por la importación de mercancías extranjeras efectuada por Escobar A. en el buque nombrado *Manaví* el veintitrés de Julio de mil ochocientos ochenta y séis;

2.° Que el auto ejecutivo fué confirmado por la Corte, lo cual implica que el recaudo ejecutivo está de acuerdo con lo que prescribe el Código Judicial en el inciso 2.° del artículo 1096;

3.° Que la excepción de falsedad propuesta por el ejecutado, la funda en la circunstancia de que él no firmó ni presentó manifiesto alguno á la Aduana de Buenaventura, ni suscribió pagaré, según el cual quedara obligado á satisfacer al Tesoro cantidad alguna por derechos de importación;

4.° Que aunque es cierto que el ejecutado no presentó á la Aduana el manifiesto por menor, su consignatario, residente en el puerto de Buenaventura, sí lo verificó á nombre del introductor, como lo permite el Código Fiscal, cuando éste reside en otro lugar distinto del de la Aduana; y también aparece de lo actuado que las mercancías extranjeras nacionalizadas por aquella Aduana eran de propiedad de Ricardo Escobar A., y

5.° Finalmente, que el empleado ejecutor no puede prescindir de hacer el cobro de la cantidad que corresponda al Fisco, porque el introductor satisfaga al consignatario el importe de los derechos, si éste no los entera en la Aduana, como está obligado.

En consecuencia, la Corte, de conformidad con el concepto del señor Procurador de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la sentencia apelada, con costas á cargo del apelante, las cuales se tasarán por la Secretaría dentro de tercero día.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial*, y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, Noviembre dos de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Tomás Paredes, por escrito dirigido á esta Superioridad y presentado al Juez de Comercio de Panamá el veintidós de Abril del presente año, interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Panamá el diez de Marzo anterior, en la demanda que, como apoderado suyo, estableció Manuel A. Noriega contra José Guillermo Lewis, socio y representante de la casa bancaria más fuerte de Panamá, para que le pagara la cantidad de diez y siete mil ciento ochenta y seis pesos por honorarios devengados en el desempeño de varios poderes en negocios judiciales. La sentencia dicha, dice el querellante, "no imparte justicia sino que obedece á las *maquinaciones fraudulentas* previstas en el caso 4.° del artículo 396 de la Ley 105 de 1890," caso al cual concretó el fundamento del recurso.

Cumplido el deber de consignar los doscientos pesos de que trata el artículo 400 de la ley citada, se dió ingreso al recurso, pidiendo los antecentes del pleito civil en que la sentencia se dictó, y mandando emplazar á los que en él habían litigado; verificado lo cual se concedió el término de doce días para probar los hechos que sirvieron de apoyo á la causal alegada, el cual se venció sin que se hubiera producido ninguna; dispúsose en seguida que las partes alegaran; y con esto, cumple á la Corte dictar el fallo que estime legal.

Extraño parecerá, pero es lo cierto, que Tomás Paredes se contentó con interponer el recurso, y nada más volvió á hacer para justificarlo y sostenerlo, y en su ausencia todas las notificaciones se han surtido por edictos, excepto la que se le hizo en Panamá personalmente á virtud del emplazamiento, única que debía hacerse de este modo por expresa disposición del artículo 402 de la citada Ley 105. No así la parte de J. Guillermo Lewis, quien desde Panamá, en escrito legalmente autenticado, pidió que se declara inadmisible el recurso, porque la sentencia contra la cual se interponía, no era definitiva sino interlocutoria, por haber sido dictada en el artículo de excepciones dilatorias; pero como la ley no permite dejar de sustanciar el recurso, á pretexto de no ser la sentencia impugnada definitiva ni ejecutoriada, se dispuso reservar tal pedimento para resolverlo en la presente, y por eso se considera en primer lugar.

Demandado J. Guillermo Lewis por los honorarios de que se ha hecho mención anteriormente, su apoderado opuso la excepción dilatoria de inepta demanda, por dirigirse contra persona diversa de la obligada á responder de la remuneración debida al demandante, pues Lewis no había hecho sino sustituír parcialmente, en Tomás Paredes el poder general que á aquel tenía conferido Augusto Tanguy, y manifestar su aquiescencia para que el doctor José María Vives León le sustituyera también otros poderes especiales conferidos por el mencionado Tanguy, y que por tal razón este último era el obligado á pagar los honorarios como verdadero mandante y no Lewis, que, por el hecho de sustituír los poderes y ejecutar otros actos, apenas contraía á nombre de Tanguy y no en su propio nombre. Esta excepción se declaró probada por el Juez 1.° del Circuito de Panamá, y que habiendo apelado el demandante de tal sentencia, se confirmó por el Tribunal Superior del Distrito Judicial.

Esta última sentencia es la que ha pretendido Paredes someter á revisión; pero aun cuando el artículo 396 de la Ley 105 habla simplemente de sentencia ejecutoriada, el *contexto* de este artículo, puesto en relación con el de los artículos 399 y 406 de la misma ley, da á entender claramente que se trata no de cualquier sentencia, sino únicamente de la sentencia definitiva, pues solamente ésta es la que debe publicarse por mandato del artículo 842 del Código Judicial, y su rescisión podría originar nuevo juicio con relación al mismo asunto, cosa á que jurídicamente no se acomoda el concepto de sentencia interlocutoria, cual es la de que el presente recurso procede.

Empero, dado que dicha sentencia diera cabida al recurso de revisión, debía haberse dado por el recurrente la prueba de los hechos que constituían la maquinación fraudulenta, el cohecho ó la violencia, porque estas cosas no se suponen por la sola circunstancia de dictarse una sentencia confirmatoria de otra, ni pueden inferirse de la aplicación que de las disposiciones legales se haga. Pero como el recurrente no se ha apersonado siquiera á efecto de promover lo conveniente á la continuación del recurso dicho, éste debe declararse infundado.

En virtud de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declárase infundado el recurso de que ha venido tratándose, y se condena al recurrente al pago de las costas y á la pérdida del depósito, del que se tomará lo necesario para atender al pago de las costas causadas, y el sobrante se aplicará á la Beneficencia pública en el Departamento de Panamá, á juicio del señor Gobernador.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA. —JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ. —*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, cinco de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: El Juez municipal de Yolombó libró mandamiento ejecutivo con fecha veinticinco de Agosto del presente año, á favor del Administrador departamental de Hacienda nacional de Antioquia y en contra de Eugenio Ramírez, por la suma de cien pesos, de que se le declaró responsable en favor del Tesoro nacional por el Juez del Circuito de Santo-Domingo, en lo criminal, por no haber cumplido parte de las obligaciones que contrajo al constituírse fiador de cárcel segura de los procesados José Miguel Llano y Bárbara Zapata. Para dictar tal mandamiento dijo el Juez mencionado, que procedía en cumplimiento de comisión conferida por dicho Administrador, sobre lo cual no hay, empero, en lo actuado otra constancia.

Apelado por Ramírez el auto ejecutivo, y concedido este recurso para ante la Corte, esta Superioridad observa que entre sus atribuciones legales no está la de conocer de las apelaciones que se interpongan contra los autos y sentencias que dicten los Juzgados municipales en ningún caso, y por tanto, este asunto no es de su competencia, como lo advierte el señor Procurador general. Si por tratarse de la recaudación de una cantidad que debe ingresar al Tesoro nacional, el mandamiento ejecutivo contra Ramírez se hubiera dictado por el Administrador de Hacienda nacional, ó por algún otro funcionario encargado de la recaudación de los créditos activos de dicho Tesoro, como pudo y debió suceder, por virtud de la jurisdicción coactiva de que inviste á tales recaudadores el artículo 1253 del Código Fiscal, el conocimiento de la presente apelación correspondería indudablemente á la Corte, según el ordinal 6.°, artículo 43 del Código de Organización Judicial; pero no siendo así, esta Superioridad tiene que abstenerse de conocer de tal recurso, que se concedió para ante ella indebidamente.

En tal virtud, la Corte se declara incompetente para conocer de la apelación interpuesta contra el mencionado mandamiento ejecutivo por Eugenio Ramírez, y dispone que se devuelvan los autos al Juzgado de su procedencia.

La Secretaría compulsará copia de esta actuación, para que se pase al Juez del Circuito respectivo, con el objeto de que se averigüe la responsabilidad en que hayan incurrido los funcionarios públicos que han intervenido en el cobro de la multa impuesta á Ramírez, por abuso, omisión ó mal desempeño de sus deberes.

Notifíquese, cópiese y publíquese en la *Gaceta Judicial*.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

IMPRENTA DE ANTONIO M. SILVESTRE.

REPÚBLICA DE COLOMBIA.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AÑO VIII | Bogotá, 15 de Marzo de 1893. | NÚM. 374.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
BIBLIOTECA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTENIDO.

Págs.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

La que confirma la resolución dictada por el Ministerio del Tesoro en la reclamación de José María Arrant, por empréstitos y expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Corrales)..... 81
La que reconoce á favor de Telésforo Rengifo un crédito por suministros y empréstitos. (Magistrado ponente, doctor Corrales)..... 82
La que revoca la resolución dictada por el Ministerio del Tesoro en la reclamación de Manuel S. Buitrago y Jesús Ojeda, por expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Trujillo)..... 83
La que concede á María Manuela Rojas una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Trujillo)..... 83
La que concede á Claudio Ordóñez una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Corrales)..... 84
La que concede á Benigna Blair una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas)..... 84
La que niega á Félix Calvo una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Villafrádez)..... 85
La que confirma la resolución del Ministerio del Tesoro, dictada en la reclamación de Andrés Lara, como cesionario de Norberto Tabarís, por empréstitos y expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Trujillo)..... 85
La que reforma la resolución que el Ministerio del Tesoro dictó en la reclamación de Bonifacio Luna, por suministros y exacciones. (Magistrado ponente, doctor Isaza)..... 85
La confirmatoria de la providencia dictada por el Ministerio del Tesoro en la reclamación de Simón Retallack, por expropiaciones y perjuicios. (Magistrado ponente, doctor Trujillo) 86

NEGOCIOS CRIMINALES.

La que condena al Sargento 2.º Antonio Duarte y al soldado Policarpo Santamaría, por los delitos de deserción y ataque á un superior, á varias penas. (Magistrado ponente, doctor Medina)..... 86

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

El que niega la admisión del recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Cundinamarca en el juicio seguido por Dionisia Daniel contra Víctor Carvajal, sobre nulidad de una escritura y un contrato. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas)..... 87
El en que se abstiene la Corte de determinar cosa alguna acerca de la consulta que hace el Tribunal Superior de Cundinamarca de la resolución que dictó sobre suspensión de la Ordenanza del Departamento del mismo nombre, número 25 de 1890. (Magistrado ponente, doctor Medina)..... 88

NEGOCIOS CRIMINALES.

El confirmatorio del auto de sobreseimiento pronunciado por el Tribunal Superior de Pasto en el juicio seguido contra Ildefonso Díaz del Castillo, Juez principal del Circuito de Barbacoas, por varios hechos. (Magistrado ponente, doctor Villafrádez)..... 88

GACETA JUDICIAL.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, cuatro de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: José María Arrant, por medio de apoderado, demandó á la Nación con el objeto de que por la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, creada por la Ley 44 de 1886, se reconociera á favor del demandante y á cargo del Tesoro, la cantidad de mil quinientos cincuenta y tres pesos diez centavos ($ 1,553-10), procedente de empréstitos forzosos que hizo á los revolucionarios que ocuparon la ciudad de Magangué en el año de 1885, y de las expropiaciones que los mismos revolucionarios le hicieron durante aquella ocupación de varios efectos que tenía depositados en la casa de habitación del reclamante.

Sustanciada la reclamación por la referida Comisión administrativa, y después de practicadas muchas diligencias con el fin de poner en claro y de un modo minucioso la verdad de los recibos en que se apoya la demanda, la misma Comisión dictó en diez y seis de Julio del corriente año el fallo que era de su incumbencia, reconociendo el crédito de trescientos cincuenta y dos pesos cincuenta centavos ($ 352-50), que importaron las cantidades enteradas por vía de empréstitos, como igualmente la cantidad de setecientos cincuenta y cuatro pesos ($ 754), á que ascienden los efectos expropiados.

En este fallo de la Comisión, salvó su voto el miembro señor Lázaro M. Herrán, por estas razones: 1.ª porque el carácter político del reclamante Arrant aparecía comprobado por declaraciones de testigos y no por certificación del señor Gobernador del Departamento de Bolívar, como lo prescribe el artículo 20 de la Ley 44 de 1886; 2.ª porque no resultaba comprobada la expropiación de los efectos, ni la especie y cantidad de éstos.

Sometida la resolución de la Comisión mencionada al examen del Ministerio del Tesoro, éste, por la que dictó en seis de Agosto último, con el número 3120, aprobó aquélla en la parte que reconoció el crédito referente á los empréstitos, y se adhirió al dictamen del Fiscal especial que, en sustancia, se apoyó en las mismas razones que el citado Herrán.

Notificada la determinación del Ministerio del Tesoro, al referido Fiscal y á Julio Fernández M., en su calidad de apoderado de José María Arrant, dicho apoderado interpuso apelación para ante esta Superioridad, la cual le fué concedida, y en su virtud se remitió el expediente á la Secretaría, para los fines ulteriores.

Repartido y sustanciado este asunto por los trámites legales, la Corte trata de poner término al recurso por medio de este fallo, y para ello considera:

No habiéndose explicado por el apelante si su intención fué la de alzarse contra todos los puntos decididos en la resolución de primera instancia, ó contra alguno de ellos, la Corte estima que sólo debe decidir el punto que es desfavorable á la parte apelante; esto es, el que se refiere á la denegación del reconocimiento del importe de las mercancías tomadas de la casa de habitación de Arrant por los revolucionarios; pues aunque la mayoría de los miembros de la Comisión administrativa reconoció todo lo demandado, la determinación de este Cuerpo está siempre sujeta al examen y aprobación ó improbación del Ministerio del Tesoro, conforme á la ley.

Es exacto que ninguno de los testigos asegura haber presenciado la expropiación de los efectos que José María Arrant afirma que tenía en su casa de habitación establecida en la ciudad de Magangué, ni la cantidad de las mercancías que se dice fueron tomadas, de manera que no hay un elemento aritmético en que pueda fundarse un cálculo prudente y justo de lo que por valor de los efectos pudiera reconocerse á cargo del Tesoro nacional. Los testigos se refieren á la notoriedad de la ocupación de la casa de Arrant, y á la voz pública de que á éste le tomaron los revolucionarios, sin formalidad alguna, varias mercancías; pero no determinan con precisión el número ó cantidad, la especie y valor de dichas mercancías; por

lo que es preciso absolver al Tesoro de la demanda, tanto más cuanto que por disposición de la Comisión se recibieron nuevas declaraciones con la mira de ampliar las que se habían presentado con la demanda.

El carácter político del reclamante ha sido últimamente acreditado con la certificación del señor Gobernador del Departamento de Bolívar.

En consecuencia, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la resolución apelada del Ministerio del Tesoro en todas sus partes.

Notifíquese, cópiese, publíquese é insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, cinco de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Telésforo Rengifo ocurrió al Juez del Circuito de Buga, con fecha veinte de Agosto de 1878, para que con previa citación y audiencia del respectivo Agente del Ministerio Público, y en juicio ordinario, se reconociera á su favor y á cargo del Tesoro nacional, la suma de nueve mil noventa y seis pesos ($ 9,096) á que ascienden los suministros y expropiaciones que hizo y sufrió en el curso de la guerra de 1876 y 1877, para el servicio de las autoridades y fuerzas nacionales, según la relación que acompañó á la demanda de los bienes que eran de su propiedad, y que en copia autorizada por el Secretario de Hacienda del Gobierno del extinguido Estado del Cauca, Federico Restrepo, figura á foja 4 de este expediente.

Conforme á la expresada relación, el demandante contribuyó para los gastos de dicha guerra con los bienes siguientes:

Setenta y cinco toros de ceba, á veinte pesos cada uno	$ 1,500
Veinticinco toros cebados, á $ 40 cada uno	1,000
Cincuenta y ocho vacas, á $ 20 cada una	1,160
Treinta y dos caballos, á $ 80 cada uno	2,560
Tres monturas, á treinta y dos pesos	96
Cuarenta vestidos, á dos pesos	80
Empréstito	500
Ocupación de un potrero en diez meses	1,600
Ocupación de un platanal	500
Una mula negra	100
	$ 9,096

Iniciado el juicio ordinario que debía seguirse en la primera instancia, de acuerdo con la Ley 67 de 1877, se remitió el expediente á la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, para que continuara conociendo del asunto.

En efecto, después de la sustanciación del caso, la referida Comisión, con fecha diez y nueve de Mayo de 1892 y en resolución número 3,708, reconoció el crédito de quinientos pesos ($ 500), que por empréstitos consignó el reclamante Telésforo Rengifo en la Administración municipal de Hacienda de Buga, á cargo de A. Herrera López, el día cinco de Septiembre de 1876 y el valor de catorce novillos tomados por las autoridades de la misma ciudad de Buga, para la subsistencia de la fuerza pública, ascendente á trescientos cincuenta pesos ($ 350). De consiguiente la Comisión dejó de reconocer las expropiaciones de los demás bienes.

Esta resolución fué aprobada por la que pronunció el Ministerio del Tesoro el cinco de Julio último, distinguida con el número 3,016.

Apelada la última providencia y otorgado el recurso interpuesto contra la parte desfavorable, para ante este Supremo Tribunal, se procede á determinarlo, llenadas como han sido las ritualidades legales.

La Corte procede á examinar cuáles son las partidas de la relación inserta, que resultan comprobadas con la prueba testimonial.

Con las declaraciones de Rafael Núñez, Juan Antonio Escobar y Francisco Barbeti, aparecen comprobadas las expropiaciones de los setenta y cinco toros, estimados á veinte pesos cada uno; y con las de los dos primeros testigos también lo están las de veinticinco novillos, á razón de treinta y cinco pesos; pero como Francisco Barbeti sólo da razón de haber presenciado la expropiación de veinte novillos, á cuarenta pesos, y no de veinticinco, sólo puede aceptarse el número menor, tanto de los semovientes como de la estimación del valor de éstos.

En el número de los novillos están comprendidos los catorce cuyo valor reconoció la Comisión, y prueba de ello es que en la relación presentada por Rengifo no figura sino una sola partida de veinticinco toros cebados, de manera que los catorce primeros deben ser deducidos del total.

Los testigos Rafael Núñez y Juan Antonio Escobar, han asegurado que el número de vacas expropiadas ascendió á sesenta al respecto de veinte pesos cada una, y Francisco Barbeti, que sólo presenció la expropiación de cincuenta vacas, al mismo precio; por lo que únicamente puede reconocerse el número menor.

En cuanto al número de los caballos expropiados y sus precios, los testigos Rafael Núñez, Juan Antonio Escobar y Francisco Barbeti no están de acuerdo. El primero ha declarado que fueron treinta, á razón de ochenta pesos ($ 80); el segundo, que fueron veintiséis caballos, así: uno en trescientos pesos, cinco á cien pesos cada uno, y veinte, á veinte pesos cada uno. El tercer testigo de los mencionados sólo da razón de veintiséis caballos al respecto de sesenta y cuatro pesos cada uno.

Dedúcese de estas declaraciones que sólo Escobar da razón de la expropiación de los caballos de valor de trescientos y cien pesos, respectivamente, de manera que la Corte sólo puede tomar como precio de los caballos de calidad inferior el de veinte pesos, y los semovientes referidos en el número de veinte.

La expropiación de la mula negra no está comprobada con tres testigos, como lo requiere la Ley 44 de 1886.

La ocupación del potrero ubicado en el punto llamado "El-Chircal," resulta justificada con las declaraciones de Juan Bautista Arce, Carlos Rivera y Francisco Holguín; pero como éstos dicen que estimaban el arrendamiento en ciento sesenta pesos mensuales, porque calcularon que en dicho potrero podían mantenerse cuatrocientas cabezas de ganado, á cuarenta centavos cada una, y ese número no podría ser siempre fijo en el lapso de tiempo de diez meses, la Corte, haciendo uso de la facultad que le confiere la ley de fijar esta cuantía, verdad sabida y buena fe guardada, reduce los mil seiscientos pesos á sólo ochocientos.

Sobre la partida referente á la expropiación del platanal ubicado en el paraje nombrado "Mediacanoa," es de observarse que los testigos Juan Bautista Arce, Carlos Rivera y Francisco Holguín, no fijan un mismo precio del arrendamiento de dicha finca en el lapso de diez meses, hay que tomar la suma menor que de treinta pesos mensuales, de suerte que el total asciende á trescientos pesos.

Relativamente á la expropiación de las monturas, no aparece comprobada con el suficiente número de declaraciones juradas.

Resumiendo lo que precede, vienen plenamente comprobadas las expropiaciones de los siguientes bienes:

Setenta y cinco toros, á $ 20	$ 1,500
Seis novillos, á $ 35 (deducidos los catorce que reconoció la Comisión)	210
Cincuenta vacas, á $ 20	1,000
Veinte caballos, á $ 20	400
Arriendo del potrero	800
Arriendo del platanal	300
	$ 4,210.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de

la República y por autoridad de la ley, reconoce á cargo del Tesoro nacional y á favor de Telésforo Rengifo la suma de cuatro mil doscientos diez pesos ($ 4,210), que se le pagarán en la forma que prescriben las leyes, además de la de ochocientos cincuenta pesos ($ 850), que le fué reconocida por la Comisión administrativa, quedando absuelto el mismo Tesoro del resto del valor demandado, y en estos términos reformada la resolución apelada.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.— LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Noviembre siete de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Manuel S. Buitrago y Jesús Ojeda pidieron, por medio de apoderado, á la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones les reconociera y mandara pagar la suma de seis mil setecientos noventa y siete pesos, setenta centavos ($ 6,797-70), procedente de varias expropiaciones sufridas por ellos en la última guerra de 1885. La Comisión negó la reclamación hecha, pero el Ministerio del Tesoro reconoció la suma de cuatro mil quinientos doce pesos ($ 4,512), y absolvió á la Nación del resto, en providencia de quince (15) de Enero del corriente año, que lleva el número 2598, la cual ha venido en apelación á esta Superioridad por haber interpuesto ese recurso ambas partes.

Después de habérsele dado al negocio la tramitación señalada por la ley y de haberse dictado varios autos para mejor proveer, se procede á resolver.

La Comisión, para negar la petición hecha por los demandantes, alegó la falta en el expediente de las relaciones juradas que debieron presentar Buitrago y Ojeda en la Gobernación de Boyacá, de acuerdo con la resolución de la Secretaría de Guerra de diez y siete (17) de Marzo de mil ochocientos ochenta y seis (1886), formalidad requerida por el artículo 16 de la Ley 44 del mismo año, para poder hacer el reconocimiento pédido. El Ministerio del Tesoro creyó llenar esa omisión con un juramento que recibió al apoderado de los reclamantes, quien declaró que no se había procedido con malicia al hacer el reclamo por la suma indicada, y por ese motivo dicho Ministerio entró á examinar el expediente y reconoció la cantidad de cuatro mil quinientos doce pesos ($ 4,512).

La Corte, en uso de la facultad que tiene para dictar autos para mejor proveer, mandó pedir á la Gobernación de Boyacá y á la Comisión de suministros, copia de las diligencias de registro, de las reclamaciones de Buitrago y Ojeda y de los memoriales elevados por ellos con ese objeto. Ambas Oficinas contestaron no tener en su poder memoriales de Buitrago y Ojeda en que solicitaran la anotación de sus reclamos; pero la Comisión sí remitió copia de las diligencias de registro, que están bien pormenorizadas.

Siendo la prestación del juramento un acto esencialmente personalísimo, de tal modo que no puede rendirse por medio de apoderado, se libró despacho para para que se recibiera juramento á Buitrago y Ojeda, de los cuales sólo el último lo prestó, porque el primero había muerto.

Como de las diligencias de registro, que están bastante detalladas, se pueden obtener los datos requeridos por el artículo 16 de la Ley 44 de 1886, como son las especies expropiadas, su número, la fecha en que tuvo lugar la expropiación etc., ha habido lugar á considerar suplidas, por dichas diligencias de registro, las relaciones que debieron presentar los reclamantes de acuerdo con la resolución de diez y seite (17) de Marzo de 1886 de la Secretaría de Guerra y Marina, y por ese motivo se mandó exigir el Juramento á Buitrago y Ojeda, á pesar de la alegación que se ha hecho de que existe la presunción legal de que los peticionarios llenaron esa formalidad desde el momento en que la Gobernación mandó extender esas diligencias; porque contra esa presunción se encuentran las contestaciones dadas por la misma Gobernación y la Comisión de suministros, de que todo lo relacionado con ese negociado debe encontrarse en el respectivo expediente, en el cual no se halla dlligencia ninguna de juramento.

Descartada la reclamación de Buitrago no queda sino la de Ojeda, quien no ha acreditado ninguna de las expropiaciones cuyo valor reclama, pues no hay respecto de cada hecho tres ó más testigos contestes que hayan dado la razón de su dicho.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el concepto del Fiscal de la Comisión, absuelve á la Nación del pago de las sumas reclamadas, y revoca, en consecuencia, la resolución del Ministerio del Tesoro que ha sido materia de la apelación.

Notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, ocho de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: María Manuela Rojas ha pedido, por medio de apoderado, se le conceda del Tesoro nacional, de acuerdo con la Ley 84 de 1890, la recompensa militar unitaria de tres mil ochocientos cuarenta pesos ($ 3,840), como hija legítima del Sargento Mayor Juan Bautista Rojas, que murió á consecuencia de una herida que recibió combatiendo en la guerra de 1860 en defensa del Gobierno.

En el expediente formado con los documentos presentados con el libelo de demanda y los traídos en virtud de las vistas del señor Procurador, se encuentran acreditados los hechos que pasan á expresarse, junto con las pruebas que los justifican:

1.° Que Juan Bautista Rojas murió el diez y ocho de Enero de mil ochocientos sesenta y uno en la ciudad de Popayán, según aparece de la partida de defunción extendida por el respectivo Cura párroco;

2.° Que Rojas, siendo Sargento Mayor de las fuerzas del Gobierno, fué herido de bala en una rodilla en el combate de Sachacoco, que tuvo lugar en el extinguido Estado del Cauca el 26 de Octubre de 1860, lo cual declaran varios testigos presenciales;

3.° Que la herida que recibió Rojas en la rodilla fué la que le ocasionó la muerte, lo sostienen, bajo juramento, los médicos José S. Wallis y Rafael Albán, personas que vieron al herido en el hospital;

4.° Que en el Ministerio de Guerra y en la Gobernación del Cauca, no hay constancia de que Rojas sirviera de Sargento Mayor en las fuerzas del Gobierno de la Confederación, por lo cual se recibió la prueba supletoria de testigos para establecer que el finado tuvo ese empleo militar;

5.° Que Rojas fué casado con Francisca Salamanca, ya finada, en quien tuvo solamente dos hijas: María Manuela y Evarista, que está casada con Daniel Paredes, hechos que están comprobados con las respectivas partidas de matrimonio, bautismo y defunción;

6.° Que la peticionaria es pobre, célibe, observa buena conducta, vivió en buena armonía con sus padres, y no ha recibido recompensa de la Nación, son cosas que están establecidas, respectivamente, con declaraciones contestes de testigos abonados y certificado del Ministerio del Tesoro.

En mérito de lo que queda relacionado y de lo que disponen los artículos 1.°, 5.° (ordinal 2.°) y 9.° de la Ley 84 de 1890, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el concepto del señor Procurador, ordena se le pague del Tesoro nacional á María Manuela Rojas, la suma de tres mil ochocientos cuarenta pesos ($ 3,840), cantidad igual al monto en

cuatro años del sueldo íntegro del empleo de Sargento Mayor que tenía su padre Juan Bautista Rojas.

Notifíquese, cópiese, dése cuenta al Ministerio de Guerra y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA. — JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Claudio Ordóñez, por medio de su apoderado Andrés Lara, ha ocurrido á este Supremo Tribunal para que se le declare con derecho á percibir del Tesoro nacional la recompensa unitaria definitiva que, en su concepto, le corresponde por la invalidez que contrajo á consecuencia de una herida que recibió en el año de 1877, combatiendo en defensa de los principios que informan las actuales instituciones.

Admitida y sustanciada esta demanda con audiencia del señor Procurador general de la Nación, la Corte procede á dictar el fallo correspondiente.

Los hechos en que se funda la demanda con arreglo á las prescripciones de la Ley 84 de 1890, se encuentran comprobados plena y satisfactoriamente en el expediente que la Corte tiene á la vista, á saber:

1.° Que el demandante Claudio Ordóñez militó en la guerra de 1876 y 1877, como defensor de los principios consignados en la actual Constitución de la República;

2.° Que en el año de 1877 se encontró en el combate que tuvo lugar en el "Tablón de los Gómez," cerca del puente de Juanambú, Municipio de Buesaco, correspondiente á la Provincia de Pasto en el Departamento del Cauca;

3.° Que en dicho paraje llamado "Tablón de los Gómez," combatió Ordóñez en defensa de los principios mencionados y en las filas que comandaba el General José María González U. contra las fuerzas del Gobierno nacional que se hallaron á órdenes del General David Peña;

4.° Que en dicho combate Claudio Ordóñez recibió una herida de bala en el codo del brazo derecho, que le produjo una invalidez relativa ó parcial, siendo Sargento 2.° en las fuerzas conservadoras;

5.° Que del reconocimiento practicado en la Gobernación del Departamento del Cauca el día veintiuno de Marzo de mil ochocientos noventa y uno, por los facultativos juramentados Juan N. Wallis O., Domingo Cajiao C. y Domingo Arboleda, resulta que, efectivamente, Claudio Ordóñez sufre una invalidez relativa, á consecuencia de dicha herida, según la diligencia ó acta que se extendió en dicha Oficina, la cual, en lo conducente, se inserta, y dice así:

"En la ciudad de Popayán, á los veintiún días del mes de Marzo de mil ochocientos noventa y uno, siendo la hora señalada para el reconocimiento del inválido Claudio Ordóñez, comparecieron ante el despacho de Su Señoría el Gobernador del Departamento los facultativos doctores Juan N. Wallis O., Domingo Cajiao C. y Domingo Arboleda, á quienes este funcionario les recibió juramento que hicieron en la forma legal, como católicos, apostólicos romanos, por Dios Nuestro Señor y una señal de cruz, é impuestos de las disposiciones penales sobre testigos falsos y perjuros, y del memorial y auto precedentes, dijeron: que tienen de presente y han reconocido prolija y minuciosamente al inválido Claudio Ordóñez, y de su examen resulta que tiene la cicatriz de una herida de bala en el codo derecho, en la cual el proyectil despedazó el *olecrán*, hiriendo la articulación cúbito-humeral. Que por consecuencia de esta herida se han limitado los movimientos del brazo y produce en el ofendido una incapacidad relativa para trabajar."

6.° Que con las declaraciones rendidas por varios de los testigos, se acredita que el reclamante es el mismo individuo que con el propio nombre y apellido recibió la herida en el "Tablón de los Gómez," y

7.° Que Ordóñez es pobre y observa buena conducta, y además, que no ha recibido del Tesoro nacional pensión ni recompensa por razón de la herida de que se trata en esta actuación.

El señor Procurador general de la Nación ha emitido dictamen favorable y apoya la reclamación de Ordóñez.

A mérito de lo expuesto, comprobado con declaración jurada de un número plural de testigos, rendida con asistencia del Agente del Ministerio Público; con el acta del referido reconocimiento y con la certificación del Ministerio del Tesoro, librada en trece de Julio del corriente año, la Corte, de conformidad con el concepto del señor Procurador, y de lo dispuesto en los artículos 1.°, 5.° y 19 de la Ley 84 de 1890, declara que Claudio Ordóñez, vecino del Distrito del Tambo, Departamento del Cauca, tiene derecho al goce de una recompensa militar, pagadera del Tesoro nacional, por la suma de cuatrocientos ocho pesos ($ 408), igual al sueldo que la ley señala al empleo de Sargento 2.° en dos años.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial*, dése cuenta al Ministerio de Guerra, y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA. — JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: José Joaquín Rico G., como apoderado de Benigna Blair, pidió á la Corte concediese á su poderdante el complemento de cuatro mil doscientos veinte pesos ($ 4,220), que, según la Ley 84 de 1890 le corresponde, para que sobre dos mil quinientos pesos ($ 2,500) que por sentencia de veintiocho de Julio de mil ochocientos noventa se le concedieron yá, de acuerdo con la Ley 153 de 1887, y por ser hija legítima del Coronel de la Independencia, Hugo Blair, se le complete la recompensa definitiva de seis mil setecientos veinte pesos ($ 6,720) á que asciende, en cuatro años, el sueldo de un Coronel de la República.

Sustanciada la demanda con audiencia del señor Procurador general, es el caso de terminarla con la respectiva sentencia, para lo cual es preciso examinar las pruebas presentadas, que son:

1.ª Copia autorizada de la citada sentencia de la Corte, en la cual se enumeran detenidamente los títulos comprobados que dieron al padre de la demandante, Hugo Blair, yá finado, el carácter de médico-cirujano de la Legión Británica, carácter con el cual y con grado de Coronel concurrió á las campañas del Ecuador y el Perú, donde prestó sus servicios al Ejército de la República; así como los documentos justificativos de la filiación legítima de la demandante, y de las circunstancias de ser ella la única de las hijas de dicho Coronel que, por su estado de soltera y su pobreza notoria, se halla en el caso de obtener recompensa del Tesoro público. Como se ha dicho yá, en aquel documento consta que en mérito de las comprobaciones al efecto establecidas, se concedió á la expresada demandante, por permitirlo así la Ley 153 de 1887, la recompensa unitaria de dos mil quinientos pesos ($ 2,500);

2.ª Declaraciones rendidas ante el Juez 2.° de lo Civil de Medellín, con citación del Agente Fiscal, por los testigos Rafael Gaviria C. y Alejandro Gaviria C., con las cuales se acreditan, entre otros, los hechos de que la demandante se conserva soltera, en estado de pobreza, y observando muy buena conducta; y que sus dos únicos hermanos, Jorge y Ana, ambos mayores de edad, casado el primero, y viuda de Alberto Gaviria la segunda, tienen recursos suficientes para atender á sus necesidades, razón por la cual no están en el caso de participar de la recompensa militar á que todavía pueden dar lugar los servicios prestados á la causa de la Independencia por el Coronel Blair, y

3.ª Un memorial dirigido á la Corte por Ana Blair de Gaviria y Jorge Blair, en que estos dos hermanos únicos de

la demandante; manifiestan, que por tener recursos suficientes para vivir, creen que no tienen derecho á participar de la recompensa solicitada, y que si algún derecho tuvieran, lo renunciarían gustosos á fin de que se otorgase á su hermana Benigna, íntegro, el complemento que ella ha demandado.

Estas pruebas dejan perfectamente establecido el derecho de la acción intentada, por lo cual, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, declara que Benigna Blair, como hija legítima del Coronel de la Independencia, Hugo Blair, tiene derecho, según los artículos 9 y 13 de la Ley 84 de 1890, á que se le dé del Tesoro nacional la suma de cuatro mil doscientos veinte pesos ($4,220), que sumada á la de dos mil quinientos ($ 2,500), yá concedidos, forman la de seis mil setecientos veinte pesos ($ 6,720), que es la que corresponde al sueldo de Coronel en cuatro años.

Notifíquese, cópiese, insértese esta sentencia en la *Gaceta Judicial*, avísese á Su Señoría el Ministro de Guerra y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: La solicitud de recompensa que ha hecho Félix Calvo, por medio de su apoderado, doctor Jesús María Arteaga, fundada en que su hijo, Félix Calvo G., murió á causa de enfermedad contraída en la última guerra al servicio del Gobierno legítimo de la República, carece de apoyo en la Ley 84 de 1890 sobre la materia, como lo observa el Procurador de la Nación, pues según dicha ley, los deudos de los militares que pierden la vida al servicio del Gobierno, ó en sostenimiento de los principios consagrados en las actuales instituciones, no tienen derecho á recompensa sino cuando la muerte de tales militares haya ocurrido en el campo de batalla, ó por causa de heridas recibidas en acción de guerra, ó en desempeño de alguna función del servicio, ó á manos de enemigos armados del Gobierno legítimo de la Nación, y no cuando provenga de enfermedades contraídas en el servicio de las armas.

En tal virtud, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con la opinión del señor Procurador general, declara que Félix Calvo no tiene derecho á la recompensa que demanda por medio de apoderado.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Andrés Lara, como cesionario de Norberto Tabarís, ha pedido se le reconozca á cargo del Tesoro nacional la suma de cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos ($ 444), valor de empréstitos y expropiaciones con que fué gravado su cedente por el Gobierno en la guerra de 1885, en el Distrito municipal de Neira (Departamento de Antioquia). La Comisión de suministros negó el reconocimiento, paso que fué aprobado por el Ministerio del Tesoro en resolución número 3,178 del día nueve de Septiembre último, que ha venido en apelación á esta Superioridad.

Oído el concepto del Fiscal de la Comisión y fijado en lista el negocio, se procede á fallar.

El documento con que se ha querido acreditar la verdad de los empréstitos y expropiaciones y su valor, es un recibo expedido por el Jefe municipal de Neira, que no fué cambiado por el certificado ó recibo de que habla el artículo 3.° del Decreto número 102 de 1886 del Poder Ejecutivo.

Y como la Ley 152 de 1887 dispone terminantemente en su artículo 4.°, que documentos de la clase á que pertenece el presentado en esta reclamación, que no hayan sido cambiados por los certificados ó recibos expresados, no pueden servir de comprobante suficiente para el reconocimiento del crédito, mientras tal conversión no se efectúe, es preciso convenir en que tanto la Comisión como el Ministerio del Tesoro, obraron con acierto al negar el reconocimiento pedido, á pesar de la objeción que se hizo de que el Gobernador faltó á su deber al no verificar la conversión de ese documento, porque dando por cierto que el argumento sea corriente él serviría para demostrar que era contra dicho empleado contra quien había acción, pero no contra la Nación.

En mérito de lo expuesto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el concepto del Fiscal de la Comisión, se confirma la resolución apelada.

Notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: En la reclamación intentada ante la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones á nombre de Bonifacio Luna, vecino de Cartago, por ochocientos sesenta pesos ($ 860), provenientes de suministros y de exacciones en la guerra de 1885, pronunció dicha Comisión fallo definitivo en veintinueve de Marzo de este año, reconociendo á favor de Luna veinte pesos ($ 20), valor de un empréstito acreditado con certificación del Gobernador del Cauca, y absolviendo á la Nación del resto del cargo, fallo que confirmó el Ministerio del Tesoro en veinticinco de Junio de este mismo año.

Habiendo apelado de esta determinación Carlos N. Rosales, último apoderado que el demandante ha tenido en el juicio, corresponde á la Corte poner término á la reclamación.

A virtud de auto para mejor proveer, dictado por la Corte, se ha completado la prueba de la expropiación de catorce novillos gordos estimados á treinta pesos ($ 30), tomados á Luna, para el servicio del Gobierno, de un potrero del caserío de Zaragoza, por orden del Jefe municipal de Cartago, Roberto Jeremías Durán, dos ó tres días después de la batalla de Santa-Bárbara, en Febrero de mil ochocientos ochenta y cinco. Sobre estos hechos deponen como testigos presenciales, Luis Mazuera, Jerónimo Gómez y José María Loaiza.

La partida de doscientos cuarenta pesos ($ 240), por tres caballos que tomaron los revolucionarios, está acreditada pero no puede reconocerse, porque no se ha dado la prueba de que Luna fuera partidario y sostenedor del Gobierno. Del informe dado por el Gobernador del Cauca, resulta que no tomó armas contra el Gobierno, y que es hombre pacífico, pero no que haya sido sostenedor del Gobierno en la guerra citada.

Las otras partidas de la relación no están justificadas, excepto los veinte pesos ($ 20) reconocidos por la Comisión y el Ministerio. Las copias de declaraciones que obran en otro expediente, no pueden apreciarse en esta demanda, porque no se ha establecido que los hechos á que se refieren sean distintos de los comprendidos en ella.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y en conformidad con la opinión del Fiscal de la Comisión de suministros, reconoce á cargo del Tesoro nacional y á favor de Bonifacio Luna,

cuatrocientos veinte pesos ($ 420), procedentes de catorce novillos estimados á treinta pesos ($ 30) y suministrados al Gobierno en la guerra citada, que con los veinte pesos ($ 20) reconocidos en las resoluciones del Ministerio y de la Comisión, forman la suma de cuatrocientos cuarenta pesos ($ 440), total de lo que se reconoce por razón de esta reclamación. Se reforma en estos términos la resolución apelada.

Déjese copia de esta sentencia, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, once de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Simón Retallach demandó á la Nación ante el Juez del Circuito de Honda, para que se le condenara á pagar la suma de ochocientos treinta y un pesos veinte centavos ($ 831-20), cantidad á que hacía subir el valor de varias expropiaciones y los perjuicios que le hicieron los revolucionarios en la guerra de 1876 en el Distrito municipal de Santa Ana, del extinguido Estado del Tolima. Adelantado el juicio, el Juez absolvió á la Nación en el fallo de primera instancia, contra el cual entabló apelación el demandante para ante la Corte Suprema Federal, en donde se hallaba el negocio cuando fué creada la Comisión que debe conocer administrativamente de estos asuntos. Dicha Comisión negó el reconocimiento de la suma reclamada, acto que fué aprobado por el Ministerio del Tesoro en resolución señalada con el número 2,578 de siete de Diciembre de mil ochocientos noventa y uno, que ha venido en apelación á esta Superioridad.

La Comisión alegó, para negar el reconocimiento, que la mayor parte de la suma reclamada se componía de los perjuicios sufridos por el demandante, cosa que no podía, según la ley, reconocer, y que el resto, que representaba el valor de las expropiaciones, tampoco había lugar á mandarlo pagar, porque no estaban comprobadas dichas expropiaciones.

La Corte, por auto para mejor proveer, dispuso se volvieran á recibir las declaraciones rendidas antes por los testigos, para que dieran la razón de sus dichos y concretaran algunos puntos esenciales.

A pesar de este auto, el demandante no pudo obtener sino dos declaraciones que aunque estuvieran contestes (cosa que no ha sucedido) no serían suficientes para acreditar las expropiaciones, único punto que podía examinar la Comisión, porque los perjuicios no son de su competencia.

En mérito de lo expuesto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el concepto del Fiscal de la Comisión, confirma la providencia apelada, y ordena se pase á la autoridad competente copia de las dos declaraciones rendidas por José John D., para que se averigüe si es responsable del delito de perjurio.

Notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, siete de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: En el año próximo pasado el Capitán Arturo de Echeona, recibió en Cartagena la comisión de conducir á un reo militar rematado, para que cumpliera su condena en el Panóptico de Bogotá; hallábase yá de regreso la noche del veintiséis de Julio en el puerto fluvial de Barranquilla á bordo del vapor *Pedro Vélez*, con la gente de su mando, cuando apercibido de un escándalo sobre cubierta, ocasionado por el Sargento Antonio Duarte y el soldado Policarpo Santamaría, fué y les impuso silencio ordenándoles que se acostaran, por notar que se hallaban ebrios; como no obedecieran la orden, para hacerla cumplir, tomó al Sargento por el brazo para obligarlo, viendo lo cual, el soldado Santamaría intentó coger por el cuello al Capitán, por lo que éste le dió un puñetazo; pero habiéndosele venido encima el soldado con una astilla de leña, se vió en el caso de tomar otra y descargarle un golpe.

En este momento, el Cabo Tomás Pérez y el soldado Dámaso Torres, cogieron á Santamaría y lo desarmaron; asegurado en seguida con una cuerda, fué puesto bajo la custodia del Cabo y del Sargento, con el encargo de ponerle una imaginaria. Al día siguiente, á las cinco de la mañana, recibió el Capitán el parte de haberse fugado el preso y también el Sargento. Así lo refiere el Capitán Echeona en su declaración.

En Junio del presente año el Sargento 2.° del *Batallón 16 de Artillería, La-Popa*, que hace la guarnición en Barranquilla, aprehendió á los expresados Sargento Antonio Duarte y soldado Policarpo Santamaría, y los entregó en Cartagena. Dado al primer Jefe del *Batallón 12 de Valencey* á que pertenecían, el parte de la captura, dispuso que se instruyeran las diligencias sumarias, nombrando al Teniente Francisco S. Montero, de la primera Compañía, funcionario instructor.

Dictóse auto de proceder, según el mérito del sumario, contra el Sargento 2.° Antonio Duarte, por deserción, y contra el soldado Policarpo Santamaría por el mismo delito, y también por los de insubordinación y ataque al superior.

Cumplidas las formalidades que, para los negocios de que conoce el Consejo de Guerra ordinario, determina el Código Militar, éste fué convocado para el nueve de Agosto del presente año, y, reunido en Cartagena, sentenció dicho día la causa condenando al Sargento Duarte, por el delito de deserción en primer grado, á sufrir la pena de cinco años de presidio, según los artículos 1578 y 1589, del Código Militar, y al soldado Santamaría, según el primero de dichos artículos, á cinco años de presidio por el indicado delito, calificado en primer grado, y á diez años más de la misma pena, por el de insubordinación, conforme á los artículos 1632 y 1636 del propio Código, aparte de otras penas accesorias, entre ellas la de pérdida de los derechos civiles.

En el acto de notificar esta sentencia á los reos la apelaron, y concedido el recurso, el expediente ha llegado á esta Superioridad por conducto del General Comandante en Jefe del Ejército; y por cuanto se halla yá en estado de ser decidido, examinada la competencia de la jurisdicción militar y del Consejo de Guerra ordinario, así como la observancia de las formalidades sustanciales é insanables en el procedimiento, y propuestas por el señor Presidente de la Corte Suprema las cuestiones que previene el artículo 1545 del Código Militar, se resolvió que no existía nulidad por incompetencia ni por razón de informalidades de las señaladas en el artículo 1536 del propio Código.

Se observa, no obstante, que fuera de los motivos que el Consejo de Guerra tuviera en conciencia para aplicar al soldado Santamaría la pena del artículo 1578 por el delito de deserción, ella no se aviene con la situación en que dicho soldado estaba al fugarse y consumar la deserción, atendidos los resultados del proceso, pues la disposición citada supone que el que se deserta, esté de guardia ú otra facción que no sea la de centinela; y por lo que se deja al principio relacionado, Santamaría, al desertarse, estaba preso, ya fuese correccionalmente, ya detenido para seguirle juicio criminal.

Nótase, además, que el Consejo de Guerra parece haber confundido los delitos de insubordinación y de ataque al superior, por cuanto á que en el veredicto declaró que se habían cometido, citando el artículo 1632, que sólo define el primero sin determinar la pena, y el 1636 que indica la pena que en determinado caso debe sufrir el que ataca al superior; y al dictar la sentencia, en la parte resolutiva dijo que condenaba "á diez años de presidio (al soldado Santamaría) por el delito de insubordinación, al tenor de los ar-

tículos 1632 y 1636 del Código Militar." Este pasaje muestra palpablemente la dicha confusión, pues si sólo quiso castigarse la insubordinación, la pena no es la de diez años; y si esta enorme pena era la que, á juicio del Consejo, debía sufrir el reo, entonces no era por insubordinación, que se le aplicaba, sino por ataque al Superior; y no como quiera, sino al superior que está de facción ó mandando en otra función del servicio al agresor.

Respetando, pues, la declaratoria de culpabilidad del reo Santamaría, que el Consejo de Guerra ha hecho, la Corte Suprema cree deber hacer respecto de éste la rebaja de que trata el artículo 124 del Código Penal; y ya que el Código Militar no hace distinción entre las penas de presidio y reclusión, sustituír por ésta que es más benigna, la de presidio á que ha sido condenado.

En mérito de lo expuesto, y de conformidad con lo solicitado por el señor Procurador, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, se resuelve: 1.° Condénase al Sargento 2.° Antonio Duarte, por el delito de deserción, calificado en primer grado, á sufrir la pena de cinco años de presidio; 2.° Condénase al soldado Policarpo Santamaría, á sufrir la pena de cuatro años y seis meses de reclusión, por el delito de deserción, calificado en primer grado; y á la de igual clase por el término de nueve años y dos meses por el delito de ataque al Superior, calificado también en primer grado. Total, trece años y ocho meses de reclusión; 3.° Quedan, en consecuencia, lanzados del Ejército y privados de los derechos políticos, así como del pago de toda pensión del Tesoro de la Nación. Queda en estos términos reformada la sentencia apelada.

De las dichas penas debe rebajarse el tiempo que los reos han estado privados de su libertad, en razón de un día de presidio ó reclusión por cada dos de arresto ó de prisión. La pena la sufrirán en los establecimientos de Cartagena.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente al General en Jefe del Ejército á quien se encarece la necesidad de prevenir en la órden general á los Jefes que conocen en las causas militares, el no citar en los autos de enjuiciamiento los artículos de la ley penal que se crean infringidos, pues el hacerlo es costumbre notada en la generalidad de los procesos militares, costumbre que está en oposición con lo dispuesto en el artículo 345 de la Ley 105 de 1890, y antes de ésta en el artículo 1627 del Código Judicial.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, nueve de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, conociendo en segunda instancia de un juicio ordinario promovido por Dionisia Daniel contra Víctor Carvajal, sobre nulidad de una escritura y del contrato que en ella se hace constar, pronunció en veintiséis de Septiembre de mil ochocientos noventa y uno, una sentencia, por medio de la cual revocó la de primera instancia, y declaró que no había lugar á la nulidad pedida; y que absolvía al demandante de todos los cargos formulados en el pleito.

Contra dicha sentencia, que quedó notificada el día treinta y uno de Octubre de dicho año, interpuso el demandante, en catorce de Noviembre siguiente, recurso de casación, el cual le *fué concedido por auto del diez* y nueve del propio mes; razón por la cual ha subido el asunto á esta Superioridad.

No bien hubo la Corte dictado su auto de fecha ocho de Febrero último, por el que dispuso fijar el negocio en lista para los efectos del artículo 376 de la Ley 105 de 1890, cuando el apoderado del demandante lo pidió que se devolviese el expediente al Tribunal de su procedencia, á efecto de que, según lo prevenido por el artículo 372 de la propia ley, se hiciese fijar la cuantía del pleito; y en efecto, así se dispuso por auto de fecha primero de Marzo.

Habiendo el Tribunal, en cumplimiento de aquella providencia, comisionado al Juez municipal de Girardot para que practicase, por medio de peritos, el avalúo de las acciones del pleito, dicho Juez, en desempeño de la comisión que se le confió, nombró peritos avaluadores á Aurelio M. Melendro y Domingo Barrero, y tercero, para el caso de discordia, á Antonio Moya, y habiéndoles dado posesión en forma legal, se trasladó con ellos, en tres de Agosto de presente año, al punto denominado de "Zanja-honda," donde se halla el terreno que es motivo del litigio, y allí se extendió una diligencia, que en su parte principal, es del tenor siguiente: "Que teniendo á la vista al árbol genealógico de la familia de D. Justo Daniel, lo mismo que el cuadro que determina el valor de las propiedades, resulta que Dionisia Daniel es biznieta de D. Justo. Que su abuelo, D. Alejandro Daniel, heredó cincuenta pesos de tierra de precio antiguo, los que se dividieron en dos partes de éstos, ó sean veinticinco pesos, se subdividieron entre cinco herederos cuyos nombres son: Julián, Felipe, Luis, Dionisia y Ciriaca; se viene en conocimiento que Dionisia no pudo venderle á Víctor Carvajal sino cinco pesos de precio antiguo, que elevado cada peso á cincuenta pesos, precio corriente hoy, dan la suma de doscientos cincuenta pesos ($ 250). Que respecto de los frutos civiles y naturales que hubiera podido producir el derecho vendido, son inapreciables, porque la tierra donde está ubicado ese derecho, parte estéril y parte montuoso, no tenía entonces valor apreciable, supuesto que los montes se derribaban para quemarlos con el objeto de establecer siembras, y hoy, que tienen algún valor los montes, ya no existen en ese terreno. Que lo dicho es la verdad, en fuerza del juramento que prestaron, y leída su exposición, se afirmaron y ratificaron, y firman con el señor Juez y Secretario, agregando ser mayores de edad, vecinos y sin generales, advirtiendo, también que esta exposición es dada por los peritos nombrados por las partes, sin tener intervención el tercero en discordia,—*Elías Afanador.—Aurelio M. Melendro.—Domingo Barrero U.—Antonio Moya.—Ulises Vera H.*, Secretario principal."

Devuelto el expediente á la Corte, junto con la exposición pericial que se ha trascrito, el apoderado de la parte contraria de la recurrente, pidió, en memorial de catorce de Septiembre último, que se declarara no haber lugar al recurso, por cuanto la cuantía del pleito no alcanzaba á tres mil pesos; y habiéndose corrido traslado de dicho memorial á la contraparte por cuarenta y ocho horas, ésta impugnó la pretensión de aquélla, mediante la argumentación de que el primero de los dos motivos por la primera alegados para interponer el recurso de casación, consistía en versar el pleito sobre hechos *relativos al estado civil de las personas*, agregando que "de las tres circunstancias de indispensable coexistencia para la introducción del recurso (Ley 105 de 1890, artículo 366), la primera y la tercera están sujetas á la apreciación á juicio de la Corte Suprema; pero la segunda es de la privativa incumbencia del Tribunal sentenciador, y yá éste determinó hace muchos meses lo que determinar debía."

Según esto, dos son las razones en que el recurrente funda la impugnación que pretende hacer respecto de la petición introducida para que se declarase que no debía surtirse el recurso, por ser el asunto de una cuantía inferior á la exigida por la ley, á saber: 1.ª naturaleza del pleito, y 2.ª facultad que la Corte tenga para apreciar la circunstancia concerniente á la cuantía del pleito mismo.

Como estos dos puntos son de derecho, la Corte procede á decidir, mediante las dos consideraciones siguientes:

1.ª Leyendo el libelo de demanda que corre del folio 5.° al 9.° del cuaderno primero, fácilmente se ve que lo pedido por el demandante al Juez de primera instancia, consiste en la declaración de la nulidad de una escritura y del contrato de compraventa de la mitad de un derecho de tierra, contrato que consta en aquella escritura, y en la condenación del

demandado á restituír aquella parte de dicho terreno, junto con sus frutos naturales y civiles, ó su valor.

Esta lectura pone de manifiesto que el pleito no ha versado sobre hechos relativos al estado civil de las personas sino sobre intereses particulares; y que, de consiguiente, para que la sentencia de segunda instancia en dicho pleito pronunciada por el Tribunal Superior de Cundinamarca pudiese ser objeto de la casación intentada, era indispensable, según el precepto citado de la ley, que la cuantía del asunto fuese ó excediese de tres mil pesos ($ 3,000), y como según resulta del dictamen pericial no alcanza á dicha cuantía, visto es que el recurso no puede tener acceso á la Corte.

Que porque para fundar la acción de nulidad haya sido preciso establecer las relaciones de filiación, ó de estado civil de varias personas, se pretenda que el pleito no versa sobre intereses particulares; es alegación que no puede la Corte aceptar, porque si ella fuera fundada, la mayor parte de los pleitos sobre intereses versarían sobre hechos relativos al estado civil de las personas, ya que las relaciones de familia son una de las causas más comunes de los derechos reales sobre bienes;

2.ª El artículo 381 de la mencionada Ley 105 de 1890 es terminante en atribuír á la Corte la facultad de examinar, en todos los recursos de casación, que en asuntos civiles se sometan á su decisión y antes de dictar sentencia, si el recurso se ha interpuesto oportunamente y por persona hábil; y si la sentencia es de aquéllas contra las cuales pueda interponerse conforme á lo yá establecido en la misma ley, entre cuyas disposiciones figuran las del artículo 366, que fija la coexistencia de las tres circunstancias de uniformidad legislativa, naturaleza ó cuantía del pleito y contrariedad de las sentencias de primera y de segunda instancia. Y expresamente previene dicho artículo que si faltare alguno de tales requisitos, debe la Corte limitarse á negar la admisión del recurso; precepto claro en cumplimiento del cual se han declarado inadmisibles muchos recursos intentados por falta de alguno de tales requisitos legales.

En virtud de estas consideraciones, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, niega la admisión del presente recurso.

Notifíquese cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente al Tribunal de su procedencia.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA. — JESÚS CASAS ROJAS. — MANUEL E. CORRALES. — RAFAEL MARIÑO C.— MARIANO DE JESÚS MEDINA.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, once de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, por resolución de siete de Septiembre de este año, decretó la suspensión de la Ordenanza del Departamento del mismo nombre, número 25 del año de 1890, y dispuso consultar tal resolución con esta Superioridad.

Oído el parecer del Ministerio Público y completado el expediente con un ejemplar de la *Gaceta de Cundinamarca*, en donde se halla publicada la antedicha Ordenanza, la Corte Suprema, para decidir, considera.

Que según se expresa en la resolución consultada, la citada Ordenanza ha sido derogada expresamente por la que lleva el número 23, expedida por la Asamblea en las sesiones ordinarias del presente año, y por lo tanto, ha quedado insubsistente desde que esta última ha empezado á regir, la Corte, pues, no puede suspender un acto legislativo que yá no produce efectos por virtud de la declaración expresa de la misma Corporación que lo había dictado, según así ha sido declarado en la resolución de treinta de Julio del año próximo pasado, publicada en la *Gaceta Judicial* número 291, y, en consecuencia, no puede aprobar ni improbar lo resuelto por el Tribunal, pues no cree, como lo quiere el señor Procurador, que, no obstante, haya de fijarse la inteligencia de las leyes que reglan las facultades de las Asambleas departamentales sobre arbitrios rentísticos de los Distritos; pues la facultad que á la Corte ha sido conferida por el legislador para suspender ó anular los actos de las Asambleas, no tiene por objeto sino evitar perturbaciones en el orden político y administrativo, establecido de antemano, ó amparar los intereses particulares, mas nunca fijar la inteligencia de la ley ó de la Constitución en esas materias, cosa que incumbe al legislador mismo, á cuya efecto debe dársele cuenta.

Por lo expuesto, este Supremo Tribunal se abstiene de determinar cosa alguna acerca de la mencionada consulta, y dispone solamente que el expediente se pase al Congreso para los fines que expresa el artículo 150 del Código Político y Municipal.

Notifíquese, cópiese é insértese en la *Gaceta Judicial*.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA. — JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.— LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, Noviembre siete de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Por auto de veintitrés (23) de Agosto último, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto declaró no haber mérito para proceder criminalmente contra Ildefonso Díaz del Castillo, por varios hechos de que se le ha sindicado en su calidad de Juez principal del Circuito de Barbacoas, á virtud de denuncio dado por Juan B. Alvarez y, en consecuencia, sobreseyó en el procedimiento, disponiendo consultar tal providencia con esta Superioridad en la parte que se refiere al delito de falsedad atribuído al sindicado, que el denunciante ha hecho consistir en que en la ejecución seguida por él, como apoderado de Rafael Dueñas, contra Manuel A. Ramos, aparece con la fecha del trece (13) de Junio de mil ochocientos noventa y uno (1891) un auto que no fué dictado en ese día, sino posteriormente.

En concepto de la Corte no está justificado el cargo de falsedad á que se refiere la consulta, pues la única prueba agregada al sumario sobre el particular, que consiste en la certificación de foja 23 vuelta, expedida por el Secretario de dicho Juez, con fecha diez y ocho (18) de Junio de mil ochocientos noventa y uno (1891), á solicitud del denunciante, carece de mérito probatorio, en primer lugar, por referirse á hechos no consignados en los autos sobre los cuales no pudo certificar dicho Secretario conforme al artículo 219 del Código Judicial, visto que hacía más de dos días que habían ocurrido, y en segundo lugar, porque asignando la ley á los autos y sentencias judiciales, fe y crédito completos, en cuánto al hecho de haberse pronunciado y á su fecha, desde que aparecen legalizados por el Juez respectivo y su Secretario, bajo sus firmas auténticas, como sucede en el caso de que aquí se trata, es de todo punto inadmisible considerar infirmados tales actos ó desconocerlos, por simples aseveraciones en contrario del Secretario, del Juez y aun de ambos, sin que conste por otros medios completamente fehacientes, algún vicio ó defecto que los invalide, contrarestando la presunción legal que obra á su favor.

Por tanto esta Suprema Corte, de acuerdo con lo pedido por el Procurador general y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el sobreseimiento consultado.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el proceso al Tribunal de su procedencia.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

IMPRENTA DE ANTONIO M. SILVESTRE.
Director, Tomás Galarza.

REPÚBLICA DE COLOMBIA.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AÑO VIII | Bogotá, 23 de Marzo de 1893. | NÚM. 375.

CONTENIDO.

Págs.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

La que concede á María Cruz Alfaro y á sus hijos una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Medina)..... 89
La que concede á Rufino Paz una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Isaza)..... 89
La que confirma la resolución del Ministerio del Tesoro, dictada en la reclamación de Ricardo Lesmes, por expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Isaza)..... 90
La que concede á Josó Clemente Mercado Jaramillo una recompensa militar. (Magistrado ponente doctor Isaza)..... 90
La que niega á Juan Ambrosio Aldana una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas)..... 91
La que reconoce á favor de Fortunato Cobos un crédito por expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Corrales)..... 91
La que concede á José María García una pensión mensual vitalicia. (Magistrado ponente, doctor Villafrádez)..... 93
La que niega á Manuel José Alvarez el reconocimiento de un crédito por suministros y empréstitos. (Magistrado ponente, doctor Isaza). 93
La que niega á Jesús Gaitán y Purificación Páramo una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Corrales)..... 93
La que concede á Sofía Silva una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Pombo)..... 94

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

El que confirma el auto ejecutivo dictado por el Administrador municipal de Hacienda de Anorí contra Francisco Barón. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas)..... 94
El que niega la admisión del recurso de hecho interpuesto por Mercedes Olier de López, para que se le concediera el de apelación contra la sentencia de pregón y remate dictada por el Administrador-Tesorero de la Aduana de Barranquilla, en el juicio ejecutivo que este empleado sigue contra López Olier & C.ª (Magistrado ponente, doctor Medina)..... 94

NEGOCIOS CRIMINALES.

El que dirime la competencia promovida por el Juez del Circuito de Ibagué al Comandante del *Batallón Sucre* número 11, sobre conocimiento de los sumarios que se instruyen para averiguar el autor de la muerte violenta dada á Luis Donay, corneta de dicho Batallón. (Magistrado ponente, doctor Isaza)..... 95
El que confirma el auto de sobreseimiento pronunciado por el Tribunal Superior de Antioquia, en el sumario instruído contra Lorenzo A. Berrío, Prefecto de la Provincia del Norte del Departamento de aquel mismo nombre, como responsable del delito de falsedad de un documento público. (Magistrado ponente, doctor Pombo)..... 95
El en que se abstiene la Corte de conocer en las diligencias sumarias instruídas en Medellín, por habérseles cortado el cabello á unas mujeres residentes en aquella ciudad. (Magistrado ponente, doctor Pombo)..... 96

GACETA JUDICIAL.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, doce de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Por medio de apoderado ha ocurrido á esta Suprema Corte María Cruz Alfaro en demanda de recompensa, por muerte de su marido Andrés Pil, en el año de 1876, á manos de enemigos armados del Gobierno legítimo. Su solicitud se apoya:

1.° En las declaraciones de Juan Pisso, Eugenio Pisso, Salvador Canás y Juan Ule, compañeros de armas, quienes afirman, dando razón de su dicho, que el citado Pil se hallaba como Cabo 1.° en las fuerzas organizadas en Inzá en defensa del Gobierno, las que combatieron en la cuchilla del Tambo, en Diciembre de 1876, contra los revolucionarios que estaban situados allí á órdenes del General Juan B. Cajiao, y que quedó muerto en el expresado campo, razón por la cual no se ha podido presentar el acta de su defunción;

2.° En las declaraciones de los mismos testigos y en las de Manuel S. Polanco, José Sánchez y el Párroco de Inzá, Presbítero Emigdio Games, los cuales afirman que la solicitante fué casada con Andrés Pil, y que de su matrimonio existen como únicos hijos Manuel Salvador, Dolores y Rosa, todos menores de edad; que la viuda no ha vuelto á casarse y las hijas permanecen solterás, guardando éstas como aquélla, buena conducta; que vivieron en buena armonía con el citado Andrés, y son muy pobres. Estas declaraciones deben estimarse por haber certificado el Cura de Inzá que los libros del archivo parroquial se perdieron por haberlos sacado de ese lugar la autoridad civil en el año de 1878.

Se ha presentado, además, un certificado del Ministerio del Tesoro del que resulta que la demandante ni sus hijos han recibido pensión ni recompensa por la causal á que este expediente se refiere; por lo que, y de conformidad con lo pedido por el señor Procurador, la Corte Suprema, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5.°, ordinal 2.°, 6 y 9 de la Ley 84 de 1890, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que María Cruz Alfaro, vecina de Inzá, y sus hijos Manuel Salvador, Dolores y María Rosa, deben percibir del Tesoro de la República una recompensa unitaria y definitiva por muerte del Cabo 1.° Andrés Pil, padre legítimo de los últimos y marido de la primera, ocurrida en combate defendiendo al Gobierno legítimo en el año de 1876, igual al sueldo de cuatro años, ó sea la suma de setecientos sesenta y ocho pesos ($ 768), y divisible por mitad entre la viuda y sus hijos.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial*, dése cuenta al Ministerio de Guerra y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA. — JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, Noviembre catorce de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Rufino Paz, vecino del Municipio de Timbío, Provincia de Popayán, Departamento del Cauca, solicita, por conducto de su apoderado Andrés Lara, que se le conceda recompensa militar unitaria por invalidez relativa, contraída en acción de guerra.

Oído el dictamen del señor Procurador y presentadas las pruebas exigidas en autos para mejor proveer, y citadas las partes para sentencia, se procede á fallar la solicitud.

Ha acreditado el demandante con declaraciones de más de cuatro testigos presenciales, entre ellas la de un Jefe, que en el combate que se verificó en la Cuchilla del Tambo, el veintinueve de Noviembre de mil ochocientos setenta y seis, entre las fuerzas del Gobierno y las de los revolucionarios, hacía parte en las primeras en el empleo de Alférez ó Subteniente el citado Paz, y que en esa acción de guerra recibió dos heridas: una en una pierna, y otra en la muñeca del brazo izquierdo.

Del reconocimiento practicado ante el Gobernador del Cauca, por los facultativos Domingo Cajiao, Domingo Arboleda y Alfredo Garcés, en veinticinco de Julio del año próximo pasado, resulta que Paz tiene en la muñeca izquierda una luxación antigua, por consecuencia de la cual los movimientos de la mano en la flexión y en la extensión, están un poco limitados y producen una incapacidad relativa para trabajar como antes.

El Jefe de la Contabilidad del Ministerio de Guerra ha certificado que Rufino Paz figura como Subteniente en la lista de los Oficiales á quienes se expidieron órdenes de pago por ajustamientos militares, en virtud de servicios prestados en la guerra de 1876 y 1877.

Se ha acreditado con testigos la identidad del reclamante y con certificación del Ministerio del Tesoro, que no ha recibido recompensa ni disfruta de pensión.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el dictamen del Procurador de la Nación y en conformidad con lo que disponen los artículos 1.°, 3.°, 4.°, 5.°, 6.°, 9.° y 19 de la Ley 84 de 1890, declara que Rufino Paz tiene derecho á una recompensa unitaria de novecientos sesenta pesos ($ 960), que es la mitad del sueldo de un Subteniente en cuatro años, por razón de invalidez relativa sufrida en acción de guerra en defensa del Gobierno en el año de mil ochocientos setenta y seis.

Déjese copia de esta sentencia, insértese en la *Gaceta Judicial* y comuníquese al Ministerio de Guerra.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Mariano de Jesus Medina.—Juan Evangelista Trujillo.—Lucas Villafrádez.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Noviembre quince de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: En la reclamación del General Ricardo Lesmes contra el Tesoro nacional por la suma de diez y seis mil ciento ochenta pesos ($ 16,180), procedente de exacciones causadas por los rebeldes en la última guerra al demandante y á su esposa é hijos, profirió la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, en quince de Julio de mil ochocientos ochenta y nueve, bajo el número 1,257, resolución definitiva, por la cual no reconoce la cantidad reclamada, resolución que confirmó el Ministerio del Tesoro por la de cinco del mismo mes, que fué apelada para ante esta Suprema Corte por el apoderado del actor.

Desde entonces se han dictado por este Tribunal repetidos autos para mejor proveer, con el objeto de averiguar la exactitud de los hechos que sirven de fundamento á la reclamación y de llenar ciertas formalidades legales, todo lo cual ha sido inútil, porque la parte interesada ha opuesto una notable fuerza de inercia á la consecución de las diligencias que debían practicarse, y no ha tenido á bien presentar las pruebas exigidas, ó siquiera facilitar los medios de obtenerlas. Y lejos de querer satisfacer lo ordenado por la Corte, urge porque se decida definitivamente el negocio.

En vista de esto, es necesario yá proceder á determinar el recurso.

La reclamación es tan deficiente, que no aparece siquiera un memorial en que se haya formulado, y el expediente se formó desglosando algunas declaraciones de otro, en el cual se decía simplemente por L. Flórez y Compañía, quienes no se sabe con qué carácter obraban, "que la señora Rosa Camacho de Lesmes probaba con declaraciones de testigos que había sufrido expropiaciones en la pasada guerra por valor de *diez y seis mil* ciento ochenta pesos ($ 16,180), y esto es lo que el apoderado del General Lesmes llama memorial de reclamación de éste, de su esposa é hijos, por exacciones hechas por los rebeldes en la guerra citada.

La única prueba de esta reclamación consiste en las declaraciones de varios testigos que fueron examinados ante el Juez del Circuito de Vélez sin asistencia del respectivo Agente del Ministerio Público, y aunque se ratificaron posteriormente en el mismo Juzgado en presencia del Fiscal, no pueden ser estimados sus testimonios, por no haberse hecho la ratificación en la forma requerida por el artículo 638 del Código Judicial.

Y aunque como yá se ha dicho, la Corte ha ordenado que se ratifiquen de nuevo los testimonios, tanto para que se cumpla dicha formalidad, sin la cual las ratificaciones no son válidas, como para que los testigos den razón de su dicho sobre varios hechos importantes, eso no ha sido posible obtenerlo, á pesar de haberse librado varios despachos al Juez mencionado, quien informa que no se consiguen los testigos.

Por otra parte, las declaraciones mencionadas, estimadas verdad sabida y buena fe guardada, dado que estuvieran en la forma requerida por la ley, no producen en el ánimo del Juez la convicción de que los testigos han dicho la verdad, no sólo porque declaran todo con uniformidad que inspira desconfianza, sino también porque la razón que todos ellos asignan á su conocimiento de los hechos no satisface, y porque es inverosímil que los testigos hayan podido tener un conocimiento tan uniforme y acorde, aun en los menores detalles, sobre hechos acaecidos en distintas épocas y lugares.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el dictamen del Fiscal de la Comisión de suministros, confirma la resolución apelada.

Déjese copia de esta sentencia, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Mariano de Jesús Medina.—Juan Evangelista Trujillo.—Lucas Villafrádez.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, quince de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Andrés Lara, con poder de José Clemente Mercado Jaramillo, vecino de Cali, solicita recompensa unitaria por ser hijo de un militar de la Independencia.

Se ha sustanciado el correspondiente juicio sumario con el representante de la Nación, y después de ser presentadas las pruebas exigidas por la Corte en varios autos para mejor proveer, procede á dictar la correspondiente sentencia, previa citación de las partes.

No ha sido posible al demandante obtener la hoja de servicios de su padre ni documento alguno que acredite que los prestó á la causa de la Independencia, pero sí ha logrado dar la supletoria de testigos, consistente en las declaraciones de Gregorio Sosa, de ochenta y ocho años de edad, quien asegura que el doctor José Clemente Mercado fué militar de la Independencia, y que lo vió en la formación como abanderado en las fuerzas que fueron á dar y dieron la batalla de San-Juanito en mil ochocientos diez y nueve; Toribio Llanos, de ochenta años de edad, quien asegura que concurrió á la mencionada acción, en la que combatió Mercado como Teniente abanderado; Vicente Jiménez, mayor de setenta y cinco años, quien afirma haber visto combatir á Mercado en el mismo combate de San-Juanito, á inmediaciones de la ciudad de Buga, como abanderado de un batallón, y Vicente Zea Cruz, de ochenta años, que dice haber visto á Mercado en la fuerza patriota que combatió en San-Juanito, como Teniente abanderado.

Se ha comprobado que José Clemente Mercado murió en Cali el veinticuatro de Diciembre de mil ochocientos setenta y seis; que fué casado con Felicidad Jaramillo, fallecida en Marzo de mil ochocientos sesenta y nueve; que de ese matrimonio hubo sólo dos hijos, que fueron Carmen Sofía, que está casada, y el demandante.

Consta también que Mercado es muy pobre, que ha observado buena conducta y la observó con su padre, y aunque es mayor de edad, pues nació en mil ochocientos sesenta y seis, está incapacitado de por vida para trabajar, como lo declararon los facultativos Enrique Garcés, Evaristo García y Adolfo Tenorio, quienes lo reconocieron ante el Prefecto de la Provincia de Cali, y aseguran que tiene desde su nacimiento una constitución demasiado delicada y que sufre de anemia

profunda é incurable, que lo inhabilita absoluta y definitivamente para todo trabajo físico é intelectual.

Con certificados del Ministerio del Tesoro, se ha justificado que José Clemente Mercado Jaramillo, no goza de pensión ni ha recibido recompensa.

Como en la demanda se pide sólo la recompensa correspondiente al Subteniente, antiguo Alférez, empleo que se exigía para poder ser Abanderado, es ésta la que debe decretarse.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el dictamen del Procurador de la Nación, y en conformidad con los artículos 1.°, 2.°, 4.°, 5.°, 6.°, 9.° y 12 de la Ley 84 de 1890, declara que José Clemente Mercado Jaramillo, vecino de Cali, es acreedor á una recompensa unitaria de mil novecientos veinte pesos ($ 1,920), como hijo del militar de la Independencia, José Clemente Mercado.

Notifíquese, déjese copia, insértese en la *Gaceta Judicial* y trascríbase esta sentencia al Ministerio de Guerra.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA. — JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.— *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez y seis de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Por medio de apoderado, Juan Ambrosio Aldana pide á la Corte le conceda, de conformidad con las disposiciones de la Ley 84 de 1890, la recompensa unitaria definitiva á que cree tener derecho por haber su padre, el Teniente-Coronel José María Aldana, muerto en defensa del Gobierno de la Confederación Granadina, en Agosto de mil ochocientos sesenta, en la acción de armas denominada del Hatillo, y estar el solicitante absolutamente imposibilitado para el trabajo, á causa de sus enfermedades.

Sustanciado el asunto, según lo previene la ley, la Corte, para pronunciar sentencia, observa:

Que en el expediente aparece comprobado plenamente, que la Corte misma, por medio de sentencia de fecha catorce de Marzo de mil ochocientos noventa, concedió á Adelaida Aldana, hermana del demandante, y en virtud de la misma causal que éste alega hoy en su favor, la recompensa unitaria definitiva de mil setecientos cincuenta pesos ($ 1,750); y que como, según la terminante disposición del artículo 6.° de la mencionada Ley 84 de 1890, las recompensas unitarias definitivas no pueden concederse sino por una sola vez, es claro que no se puede acceder á lo pedido por el demandante.

Los casos que hacen excepción á esta regla general no son, en manera alguna, aplicables á Juan Ambrosio Aldana, puesto que el artículo 13 sólo hace referencia á los deudos de los militares de la Independencia, y el artículo 63 alude manifiestamente á los militares que, por cualquier motivo, se hallen gozando de pensión en la actualidad, ó á los deudos de los que murieron dejando hojas de servicios, ó declaratorias de acciones distinguidas de valor.

Por otra parte, cuando la Corte otorgó á Adelaida Aldana la recompensa indicada de los mil setecientos cincuenta pesos ($ 1,750), túvose en cuenta para no decretarla sino en favor de aquélla y con exclusión de su hermano Ambrosio, el que éste era mayor de edad, y no tenía por tal motivo derecho á participar de tal gracia.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y apartándose del parecer del señor Procurador, declara que no hay lugar á conceder la nueva recompensa pedida.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta* y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez y seis de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Francisco Groot, en uso del poder general que por escritura pública otorgada en veintiocho de Abril de mil ochocientos ochenta y siete, con el número 50, ante el Notario 1.° de la Provincia de Buga, le confirió Fortunato Cabal, ocurrió á la Comisión administrativa, creada por la Ley 44 de 1886, pidiendo el reconocimiento á cargo del Tesoro nacional y á favor de su constituyente, del crédito de seis mil trescientos setenta y seis pesos ($ 6,376), procedente de expropiaciones de dos casas ubicadas en la ciudad de Buga, para el servicio de las autoridades que sostenían el Gobierno nacional en la guerra de 1876 y 1877.

Al escrito de la demanda que figura en la foja 1.ª de este expediente y que lleva la fecha de catorce de Septiembre de mil ochocientos ochenta y siete, se le dió por dicha Comisión el curso legal correspondiente, hasta poner el juicio en estado de ser decidido.

Según la relación jurada que el interesado presentó en apoyo de la demanda, y que corre á fojas diez y nueve, componen el total reclamado las siguientes partidas:

"1.ª Los arrendamientos de la casa de mi propiedad, ubicada en esta ciudad, en la cual habitaba mi familia, expropiada en 1.° de Octubre de 1876 por el Jefe municipal Federico Pizarro, para el despacho de todas las Oficinas públicas, depósito y custodia del parque, en treinta y seis meses vencidos el día 1.° de Octubre de 1879, en que me fué devuelta por orden expresa del Gobierno nacional, á razón de ciento veinte pesos mensuales.....	$ 4,320
"2.ª La baranda de la casa, destruída durante la ocupación, era de varillas de fierro y pasamanos de madera, costó.....	120
"3.ª Veintidós cerraduras finas sustraídas durante el arrendamiento, á $ 3 cada una.....	66
"4.ª Cuatro colgaduras de papel fino, de lustre, arrancadas de las paredes, á $ 50 cada una.....	200
"5.ª Las refecciones de la casa consistentes en desenladrillados, cambio de empedrados y de tierra para desinfectarla, pues habían sido convertidos los patios en caballerizas y comunes.....	600
"6.ª Alquileres de la casa que queda contigua hacia el Sur de la anterior, y en la cual habitaba el señor Francisco Sinisterra M., en treinta y seis meses vencidos el día 1.° de Octubre de 1879, ocupada con presos políticos y con el presidio hasta su entrega, á $ 20 por mes.....	720
"7.ª Las tres colgaduras destruídas, á $ 50 cada una.....	150
"8.ª Gastos de refección.....	200
Suma.....	$ 6,376"

La Comisión, al dictar el fallo con fecha veinte de Agosto del presente año (fojas 38 vuelta á 42), sólo reconoció la cantidad de mil ciento cincuenta pesos ($ 1,150), y absolvió á la Nación del resto del cargo deducido contra ella en la demanda.

La rebaja que se advierte al hacerse la comparación entre la suma demandada y la reconocida fué fundada por la Comisión en las siguientes razones:

De las partidas que expresa la mencionada relación, "las únicas de que puede conocer la Comisión, son las relativas al arrendamiento de las dos casas que corresponden á la expropiación; pues respecto de las otras, que representan daños, no hay disposición legal que autorice su reconocimiento.

"El artículo 4.° de la Ley 36 de 1888 facultó á la Comisión para aplicar lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 44 de 1886, á las expropiaciones de fincas raíces que se hallan en casos semejantes á los que se expresan en dicho artículo.

"Este dispone: 'La Comisión conocerá de las reclamaciones pendientes hechas por las personas á quienes se les confiscaron y expropiaron sus bienes, por decretos del Presidente provisorio de los Estados Unidos de Colombia en 14 de Diciembre de 1862 y 30 de Enero de 1863, respecto á los frutos de las fincas raíces que se expropiaron y devolvieron

durante el tiempo que permanecieron en poder de los agentes del Gobierno, y á los semovientes que les fueron expropiados y entraron á poder del mismo. *A estos dos puntos de las mencionadas reclamaciones se contraerán los reconocimientos que haga la Comisión.* De modo que para que reclamaciones distintas de las de 1862 á 1863, de que trata ese artículo, se hallen en caso semejante como lo previene el artículo 4.° de la Ley 36 de 1888, es preciso que se establezca el acto por el cual se hizo la expropiación, el valor de los frutos de la finca expropiada y las fechas en que entró la finca en poder de los agentes del Gobierno y la en que fué devuelta á su dueño.'

"Los documentos que se han presentado para fundar la acción del reclamante, son los siguientes:

"Ante el Juzgado del Circuito de Buga, en Junio y Julio de 1887, se practicó la información de testigos, que se registra de fojas 4 á 9 de estos autos.

"Rafael Romero Bermúdez, Miguel Domínguez C., Justino Moncayo y Mariano Arana, afirman que en el mes de Octubre de 1876 fué expropiada para el servicio del Gobierno una casa que edificó el reclamante en Buga, y que hacía poco habitaba con su familia, la que conocieron paramentada y adornada con lujo; que la casa mencionada le fué devuelta al reclamante en Octubre de 1879, y que todo el tiempo que permaneció en poder del Gobierno, estuvieron en ella todas las Oficinas públicas y el parque nacional; el primero y el último de los testigos estimaron á cien pesos ($ 100) el arrendamiento mensual, y los otros dos lo hacen subir á ciento veinte ($ 120) por mes; que igualmente fué expropiada en el mes de Octubre de 1876 otra casa contigua á la citada, que se destinó para prisión política, primero, y luégo para reos rematados, y que, como la anterior, no fué devuelta hasta Octubre de 1879; que el precio del arrendamiento de esta última casa es el de veinte pesos ($ 20) mensuales.

"Objetadas por el señor Fiscal estas declaraciones (foja 13 vuelta), por no expresar los testigos la razón de su dicho, el interesado, en ampliación de la prueba, ha presentado el documento que va á indicarse.

"Copia de la sentencia proferida por el Juzgado del Circuito de Buga (foja 28 vuelta) en diez y ocho de Octubre de 1878, en el juicio de nulidad de los remates de las dos casas expresadas, seguido por el señor Fortunato Cabal.

"Por dicha sentencia se declararon nulos los remates y adjudicaciones hechos en las casas de propiedad del reclamante, ubicadas en la ciudad de Buga, calle de Sucre números 39 y 41, cuyos actos tuvieron lugar el cinco de Febrero y siete de Junio de 1877, para hacer efectivos los empréstitos forzosos decretados para gastos militares en la guerra de 1876 á 1877, y que fueron impuestos á los señores Fortunato Cabal y Francisco Sinisterra M.

"De este documento se desprende, como consecuencia, que las fincas cuyos frutos se reclaman, fueron rematadas, la una en 5 de Febrero y la otra en 7 de Junio de 1877, en pago de empréstitos forzosos decretados en aquella época de guerra, quedando, por consiguiente, suficientemente acreditado el hecho de la expropiación, aunque no el tiempo que las fincas permanecieron en poder del Gobierno, ni el precio corriente que les correspondiera por arrendamiento.

"Es, por consiguiente, llegado el caso de que la Comisión, procediendo verdad sabida y buena fe guardada, fije la cuantía del crédito en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 6.° de la Ley 44 de 1886.

"Aunque en la sentencia de que se ha hecho mención, los remates de las fincas aparecen verificados en Febrero y Junio de 1877, lógico es suponer que el embargo y depósito que previamente debió verificarse, sustrajeron con anterioridad las fincas del poder de su dueño, para ponerlas á disposición de la autoridad encargada del cobro del empréstito que motivó el remate.

"En consecuencia, es aceptable como fecha en que tuvo lugar la expropiación, el 1.° de Octubre de 1876, fijada en la reclamación.

"En cuanto á la fecha en que las dos casas fueron devueltas á su dueño, lejos de ser la de 1.° de Octubre de 1879, como lo pretende el reclamante, está evidentemente comprobado por la fecha de la sentencia de que se ha hecho mérito, que tal fecha fué el 18 de Diciembre de 1878, de donde resulta que las fincas estuvieron en poder de los agentes del Gobierno veinticinco meses y medio.

"En cuanto al precio del arrendamiento de las fincas, ningún dato fehaciente contienen los autos, siendo del todo inaceptable la estimación del reclamante y de los testigos, pues peca por demasía de exageración el suponer que una casa por buena que fuera, pudiera valer en la ciudad de Buga cien pesos ó ciento veinte por mes.

"En mérito de lo expuesto, la Comisión, fijando en treinta pesos mensuales el arrendamiento de una de las casas, en diez y seis pesos el de la otra, y en veinticinco meses el tiempo que duró la expropiación, reconoce á cargo del Tesoro de la República y á favor del señor Fortunato Cabal, de quien es apoderado sustituto el señor José Joaquín Rico G., la suma de mil ciento cincuenta pesos ($ 1,150) como crédito de la tercera clase."

Sometida esta determinación á la consideración del Ministerio del Tesoro, fué reformada en el sentido de no comprender en el arrendamiento de las dos casas expropiadas á Fortunato Cabal, el tiempo posterior á la declaración que hizo el Poder Ejecutivo en el Decreto número 470, de 7 de Agosto de 1877, de estar restablecido el orden público en la Nación; de suerte que dicho Ministerio sólo computó en su resolución número 3,202, como tiempo de arrendamiento, once meses, que concluyeron el citado día 7 de Agosto, y como precio del de la casa más capaz treinta pesos ($ 30) mensuales y de la pequeña diez y seis pesos ($ 16), también mensuales) que hace un total de quinientos seis pesos ($ 506). Además, improbó el reconocimiento hecho por la Comisión de los daños y perjuicios que el reclamante Cabal asegura haber sufrido por consecuencia de la expropiación de las casas aludidas, fundándose en el artículo 13 de la Ley 44 de 1886.

Apelada esta resolución por el apoderado José Joaquín Rico G., quien ya figuraba en el juicio como tál, y concedido el recurso ha subido el expediente á esta Superioridad, y verificado su repartimiento, se dió al recurso la tramitación establecida para los negocios de esta especie.

La Corte, pues, procede á dictar el fallo que ha de poner fin á la apelación, y para ello entra en las siguientes consideraciones:

Resulta de lo actuado que á Fortunato Cabal se le asignaron por el Gobierno del extinguido Estado del Cauca, en el curso de la guerra de 1876 y 1877, varias cantidades con el carácter de empréstitos forzosos, con el objeto de atender con ellas á los gastos de dicha guerra; y que por no haberlas satisfecho Cabal, se procedió contra dos casas ubicadas en la ciudad de Buga, que eran de propiedad del mismo individuo;

Que como resultado de tal procedimiento fueron rematadas ambas casas y destinadas á varios servicios públicos, desde el mes de Octubre de 1876, y continuaron ocupadas después del restablecimiento del orden público nacional;

Que conforme al artículo 1.° de la Ley 38 de 1882, "que manda devolver ciertas propiedades," las fincas raíces adjudicadas durante la guerra civil de 1876 á 1877 al Fisco nacional, ó al de los Estados, con el objeto de hacer efectivos los empréstitos, expropiaciones y toda clase de exacciones impuestas para atender á las necesidades de dicha guerra, durante ella ó después (como aconteció respecto de las citadas casas de propiedad de Cabal), y las embargadas con el mismo objeto, debieron ser devueltas á sus dueños, si á la fecha de la sanción de dicha Ley 38 no habían sido enajenadas por la Nación, ó el respectivo Estado;

Que en el artículo 14 de la Ley 44 de 1886, sobre suministros, empréstitos y expropiaciones, se confirió á la Comisión administrativa, creada por esta ley, suficiente autorización para conocer y decidir las reclamaciones de particulares que estuvieran pendientes contra la Nación, por los frutos de las fincas raíces que hubieran sido confiscadas ó expropiadas, al tenor de los decretos del Presidente provisional de los Estados Unidos de Colombia, de 14 de Diciembre de 1862 y 30 de Enero de 1863;

Y por último, el artículo 4.° de la Ley 36 de 1888, dis-

pone que la mencionada Comisión administrativa aplique lo que yá estaba prevenido en el 14 de la Ley 44 de 1886. á las expropiaciones de fincas raíces que se hallan en casos semejantes á los que se expresan en dicho artículo 14.

Y como la presente reclamación de Fortunato Cabal está comprendida en la referida disposición de la Ley 36 de 1888, con relación al artículo 14 de la Ley 44 de 1886, es evidente que la Comisión administrativa ha tenido jurisdicción para conocer en primera instancia de la reclamación de Cabal, que se hallaba pendiente en la fecha de la sanción de la aludida Ley de 1888.

Consta, además, que las citadas casas no fueron devueltas á Cabal sino en Octubre de 1879, por lo cual se deduce que estuvieron ocupadas al servicio de autoridades legítimas, treinta y cinco meses contados desde Octubre inclusive de 1876 á Septiembre de 1879.

Las leyes arriba mencionadas no expresan que los dueños de las fincas expropiadas sólo tengan derecho á reclamar el pago de los arrendamientos vencidos durante la guerra de 1876 y 1877; y por el contrario se colige de lo dispuesto en el artículo 1.° de la Ley 38 de 1882, que ese derecho se extendía al tiempo posterior á la guerra de 1876 y 1877.

Sólo resta examinar si la fijación hecha por el Ministerio del Tesoro del precio de los alquileres ó arrendamientos de las dos casas expropiadas á Cabal es equitativo.

La Corte, atendiendo á que los daños que sufrieron las fincas aludidas no se incluyen en el crédito de Cabal, por no disponerlo expresamente la ley, y al estado que tenían cuando fueron ocupadas, considera equitativas las cuotas fijadas por la Comisión; esto es, treinta pesos ($ 30) mensuales por la más capaz y diez y seis pesos ($ 16), también mensuales, por la pequeña, cuotas que fueron aprobadas por el Ministerio del Tesoro.

Por todo lo expuesto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, reconoce á cargo del Tesoro nacional y á favor de Fortunato Cabal, vecino de Buga, la cantidad de mil seiscientos diez pesos ($ 1,610), y absuelve al mismo Tesoro del resto del cargo deducido en la demanda.

En estos términos queda reformada la resolución apelada.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez y nueve de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: El Coronel efectivo José María García ha ocurrido á esta Suprema Corte pidiendo se le asigne del Tesoro nacional una renta ó pensión vitalicia igual al sueldo íntegro de su actual empleo, por haber servido en el Ejército de la Nación durante el tiempo que la ley requiere para adquirir derecho á esa concesión; y á efecto de comprobar los fundamentos de su reclamo, ha presentado el despacho original de dicho empleo con la antigüedad del veintitres de Marzo de mil ochocientos ochenta y dos, expedido por el Excelentísimo Señor Presidente de la República con fecha veintitrés de Julio del mismo año, y la correspondiente hoja de servicios formada por el Estado Mayor del Ejército y aprobada por el Ministerio de Guerra con fechas primero de Agosto y cinco de Septiembre del corriente año, respectivamente.

La Corte ha oído el parecer del señor Procurador de la Nación, quien lo ha emitido en sentido favorable á la reclamación del Coronel García, y siendo llegada la oportunidad de resolver, esta Superioridad procede á hacerlo, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1.ª De la hoja de servicios del reclamante resulta que éste había servido hasta el día en que se formó dicha hoja, veintidós años diez meses y cuatro días, tiempo que se descompone así:

En paz.....	11 años	8 meses	10 días.
En guerra, computado doble...	11 años	1 mes	24 días.
Total.....	22 años	10 meses	4 días.

2.ª De la misma hoja y del despacho de Coronel efectivo expedido al peticionario, aparece que éste ha servido su último empleo más de tres años, á contar desde el veintitrés de Marzo de mil ochocientos ochenta y dos, á que remonta la antigüedad con que se le confirió.

3.ª Los servicios del Coronel García se hallan, en consecuencia, comprendidos en las disposiciones de los artículos 5.° (ordinal 7.°), 10 (inciso 1.°), 40 y 42 de la Ley 84 de 1890 sobre recompensas militares, y conforme á ellos deben ser recompensados.

Por tanto, la Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen del Procurador de la Nación, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que el Coronel efectivo José María García tiene derecho á recibir del Tesoro nacional, por razón de antigüedad en el servicio militar, una renta ó pensión mensual vitalicia de ciento cuarenta pesos ($ 140) igual al sueldo íntegro de su actual empleo.

Notifíquese, comuníquese al Gobierno, por conducto del Ministerio de Guerra y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez y nueve de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Manuel José Alvarez, en nombre de varias personas y como cesionario y apoderado de otras, reclamó el reconocimiento de la suma de ciento sesenta y seis pesos cincuenta centavos ($ 166-50), proveniente de suministros y empréstitos hechos al Gobierno nacional en la guerra de mil ochocientos ochenta y cinco en el Departamento de Antioquia.

La Comisión de suministros negó la reclamación en veinticinco de Agosto último, y su determinación fué aprobada por el Ministerio del Tesoro en seis de Octubre próximo pasado.

Conoce la Corte de este asunto á virtud de apelación interpuesta por Andrés Lara, apoderado del demandante.

Fúndase la determinación de la Comisión, confirmada por el Superior inmediato, en que siendo la única prueba de los suministros recibos de agentes subalternos del Gobernador de Antioquia, han debido cambiarse por las respectivas certificaciones, formalidad que se solicitó y no se obtuvo, porque el Gobernador, según informa, no pudo obtener los datos necesarios para poder efectuar la conversión.

Como este fundamento es arreglado al precepto del artículo 4.° de la Ley 152 de 1887, y como, por otra parte, el apelante no ha dado paso alguno para fundar su recurso, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, en conformidad con la opinión del Fiscal de la Comisión de suministros, confirma la resolución apelada.

Déjese copia, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintitrés de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Gregorio Gómez G., con poder de Jesús Gaitán y de Purificación Páramo, vecinos del Municipio de Quebradanegra, se ha presentado ante la Corte pidiendo que por ella se decrete que sus poderdantes tienen derecho á percibir del Tesoro nacional una recompensa unitaria definitiva conforme á la Ley 84 de 1890, fundando la solicitud en que Andrés Gaitán, hijo legítimo de los demandantes, murió por consecuencia de una herida de bala que recibió en el combate que tuvo lugar en la ciudad de Guaduas, Departamento de Cundinamarca, el 4 de Octubre de 1884.

Admitida la demanda, por no poderse rechazar *a priori*, se dió vista de ella al señor Procurador general de la Nación, quien de acuerdo con la doctrina sentada por la Corte en

casos análogos al presente, ha sido de opinión que los demandantes no tienen derecho á la recompensa que han solicitado, así porque la contienda armada que dió origen á dicho combate, no fué de carácter nacional, sino local puramente, pues sólo se refería á cuestiones suscitadas en el estinguido Estado de Cundinamarca, como porque el hecho de armas aludido se consumó, como yá queda expresado, el 4 de Octubre de 1884, fecha anterior al doce de Diciembre del mismo año en que principió á contarse el período de la guerra nacional de 1884 y 1885, conforme á la Ley 84 de 1886.

De consiguiente, la Corte adhiriéndose al dictamen del señor Procurador, es de opinión que los demandantes, como padres de Andrés Gaitán, no están comprendidos en las disposiciones de la citada Ley 84 de 1890, por lo cual prescinde de hacer constar si los hechos en que se apoya la demanda resultan comprobados en este expediente; y se limita, por tanto, á declarar como declara que no está en el caso de otorgar la recompensa que se ha solicitado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial*, y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza. — Baltasar Botero Uribe.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales. —Juan Evangelista Trujillo.—Lucas Villafrádez.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.— Bogotá, veintitrés de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Sofía Silva, vecina de Timbío, en el Departamento del Cauca, solicita recompensa militar como hija legítima del Subteniente Cruz Silva, muerto en el combate de Priedrarrica en 1876 y en defensa del Gobierno legítimo.

La solicitud se apoya en las siguientes pruebas:

1.ª Copia legalizada de la partida de matrimonio de Cruz Silva é Isidora Luna, padres de la solicitante;

2.ª Copia también de la partida de nacimiento de Sofía Silva que comprueba su filiación legítima;

3.ª Declaraciones de varios testigos presenciales, recibidas con las formalidades legales y con las cuales se acredita que Cruz Silva murió en el combate librado en Piedrarrica en la guerra de 1876, siendo Subteniente de las fuerzas defensoras del Gobierno, combate en el cual fué muerta también la esposa de Silva, madre de la peticionaria, y finalmente, que ésta es pobre, permanece soltera, observa buena conducta y sufre además la enfermedad de la elefancia.

4.ª Certificación del señor Ministro del Tesoro que acredita que la solicitante no ha recibido pensión ni recompensa por razón de la muerte de su padre.

Y como los testigos afirman que además de Sofía Silva existen sus hermanos Natividel y Benjamín Silva, los cuales se dice son mayores de veintiún años y que no tienen impedimento para trabajar, la Corte ordenó, sin embargo, que fuesen citados y se les diese conocimiento de la demanda; pero como esa diligencia no ha podido practicarse porque resulta que los expresados Silvas residen en la Costa del Ecuador, ignorándose su situación actual, y por consiguiente si se hallan en el caso del inciso 2.° del artículo 1.° de la Ley 84 de 1890, la Corte, en previsión de alguna reclamación posible por parte de los hermanos de la solicitante, se abstiene de conceder á ésta toda la recompensa á que tendría derecho si fuese la única desendiente de Cruz Silva.

Por tanto, la Corte Suprema, de acuerdo con el concepto del señor Procurador de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que Sofía Silva tiene derecho á recibir del Tesoro nacional la recompensa unitaria de seiscientos cuarenta *pesos ($ 640), que es la tercera parte* de mil novecientos veinte pesos ($ 1,920), sueldo asignado al Subteniente en cuatro años; dejando á salvo el derecho de la reclamante para recibir toda la suma indicada, si resultare que los hermanos Natividel y Benjamín Silva no tienen derecho á recibir recompensa, por la muerte de su padre.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Baltasar Botero Uribe.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Juan Evangelista Trujillo.—Lucas Villafrádez.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, once de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: El Juzgado 1.° del Circuito en lo criminal de Medellín, por auto de catorce de Octubre de mil ochocientos noventa y uno, declaró á Francisco Barón incurso en la multa de cien pesos ($ 100) por no haber cumplido con el deber á que, como fiador de cárcel segura de Juan B. Orrego, estaba constituído, de presentar en el Juzgado á su fiado, cuando el Juez se lo ordenase.

El Administrador de Hacienda nacional del Circuito de Santa Rosa de Osos comisionó al Administrador municipal de Hacienda nacional de Anorí para que hiciese efectiva dicha multa; y en efecto, el Administrador comisionado, por auto de treinta de Agosto último, libró mandamiento de pago por la vía ejecutiva contra el expresado fiador, y á favor del Tesoro nacional, por la suma indicada de cien pesos ($ 100).

Habiéndose notificado en esa misma fecha tal auto á Barón personalmente, éste apeló de él para ante esta Superioridad, en donde sustanciada la instancia con audiencia del Ministerio Público, para resolverla, se considera:

Según el inciso 3.° del artículo 1096 del Código Judicial, en los juicios por juridicción coactiva, prestan mérito ejecutivo las copias de los decretos que, en ejercicio de sus funciones, expidan los funcionarios públicos imponiendo multas que deben ingresar al Tesoro nacional; y como de esta clase fueron las copias en vista de las cuales el Administrador de Anorí libró el mandamiento de ejecución contra Barón, visto es que el auto apelado es jurídico.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el parecer del señor Procurador, confirma el auto apelado.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Mariano de Jesús Medina.—Juan Evangelista Trujillo.—Lucas Villafrádez.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez y seis de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Mercedes Olier de López interpuso recurso de apelación contra la sentencia de pregón y remate dictada por el Administrador-Tesorero de la Aduana de Barranquilla, en la ejecución que por jurisdicción coactiva decretó este empleado contra la Sociedad comercial denominada López Olier & Compañía, por suma de pesos que adeudaba á la Nación por derechos de importación. El Administrador negó el recurso, y por esta razón, notificada de la denegación la apelante el primero de Octubre de este año, pidió el día tres copia de las piezas que creyó conducentes á interponer el recurso de hecho. Con la dicha copia, que aparece le fué entregada el once del citado mes, se dirigió á la Corte Suprema en escrito que lleva fecha diez y ocho de Octubre, interponiendo el recurso aludido, escrito que se recibió en la Secretaría el dos del presente mes.

El Magistrado sustanciador á quien el asunto se repartió, observando que el citado escrito no se hallaba autenticado, como lo dispone el artículo 55 de la Ley 105 de 1890 en su inciso segundo, se abstuvo de darle el curso legal. Noticiado de esto el apoderado de la recurrente, reprodujo el nueve del presente mes el citado escrito, interponiendo el recurso de hecho, y con ese motivo se señaló día para audiencia pública, surtida la cual, sin que se hiciera uso del derecho de alegar de palabra ó por escrito, la Corte debe resolver lo que estime legal y para ello considera:

El recurso de hecho no es admisible si no se hallan reunidas las condiciones que expresa el artículo 905 del Código

Judicial; de ellas, en concepto de esta Superioridad, no concurre la tercera, ó lo que es lo mismo, el recurso no se ha introducido en tiempo.

El artículo 900 del mismo Código ordena que la parte agraviada debe ocurrir dentro de tres días más el término de la distancia, al Superior; con la copia de las piezas que determina el artículo 899: dichos tres días deben contarse desde aquel en que á la parte se le entregaron las copias.

De lo relacionado al principio aparece que estas copias se entregaron el once de Octubre; de esta fecha hasta el nueve de Noviembre en que el apoderado de la recurrente revalidó el escrito interponiendo el recurso de hecho, trascurrieron veintinueve días, tiempo casi doble del que señala el artículo 900 precitado. Indudablemente en la misma condición 3.ª del artículo 905, va envuelta la del término dentro del cual se ha de pedir la copia con que se debe ocurrir, término que no se extiende más allá de las veinticuatro horas siguientes á la notificación del auto en que se negó la apelación; pero resulta que dicha copia no se pidió sino hasta el día tres de Octubre, ó sea cuarenta y ocho horas después de la citada notificación.

En mérito de estas consideraciones y sin necesidad de examinar si concurren las demás circunstancias que el varias veces citado artículo 905 determina, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, se niega el recurso de hecho que el apoderado de Mercedes Olier de López ha interpuesto para que se le conceda el de apelación contra la sentencia de pregón y remate, dictada por el Administrador de la Aduana de Barranquilla en la ejecución aludida al principio.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y y archívese.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Mariano de Jesús Medina.—Juan Evangelista Trujillo.—Lucas Villafrádez.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, doce de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: El Juez del Circuito de Ibagué promovió competencia afirmativa al Comandante del *Batallón Sucre* número 11, sobre conocimiento de los sumarios que se instruyen por la autoridad militar y por la judicial ordinaria para averiguar el autor de la muerte violenta dada al corneta del mencionado Batallón, Luis Donay, en el punto de "Gualanday," Municipio de Ibagué, en la noche del veinticinco de Junio de mil ochocientos noventa y uno.

Elevada que fué la actuación á esta Suprema Corte, á quien corresponde decidir la competencia, conforme á la atribución 3.ª, artículo 47 del Código de Organización Judicial, y oído el parecer del Procurador de la Nación, se procede á llenar esta función.

El asunto sobre que versa la competencia no ha salido aún del poder de los funcionarios de instrucción civiles y militares, porque á causa de las graves dificultades que presenta la investigación no ha llegado el caso de decidir del mérito de lo actuado; pero cómo se trata precisamente de saber á cuál de las dos jurisdicciones corresponde la calificación de los hechos y aprehensión del conocimiento del asunto, y además, hay dos sindicados detenidos, es necesario que de antemano se resuelva por la autoridad competente á qué jurisdicción corresponde el negocio, porque no es admisible que dos entidades de orden tan distinto continúen instruyendo á prevención, diligencias informativas, que pueden dar resultados contradictarios, como ya se advierte en las remitidas á la Corte y ocasión á conflictos especialmente en lo relativo á la libertad ó detención de los sindicados.

No hay dato suficiente para afirmar si el homicidio del corneta Donay se perpetró ó nó dentro del cuartel de la Compañía del *Batallón Sucre*, que servía de custodia al presidio establecido en "Gualanday;" pero parece más probable que el lugar del acontecimiento estaba fuera del campamento, porque hay allí habitaciones particulares, venta de licores plantaciones etc., por donde se transita libremente por la noche, y se juzga con toda probabilidad que el homicida huyó del punto del delito y se refugió en el edificio que servía de cuartel á la Compañía y de habitación á los presidiarios.

En las diligencias sumarias figuran como sindicados del homicidio un militar, el soldado Apolinar Gordillo, de la 2.ª Compañía del mencionado Batallón, y Adolfo Castaño, reo rematado, que cumplía su condena en el presidio de "Gualanday," y que era preso franco ó con libertad para salir de la cuadra donde pernoctaba el presidio.

No corresponde á la Corte calificar el mérito de los indicios que resultan contra el uno ó el otro sindicado, ni debe avanzar ningún concepto sobre este grave punto, supuesto que para decidir la competencia no es necesario entrar en esa apreciación.

No resultando que el delito se efectuó dentro del cuartel, ó por razón del servicio con infracción de las leyes militares, el asunto no corresponde á la jurisdicción militar, conforme á la doctrina del artículo 1365 del Código de la materia, y debe ser juzgado por los Jueces y Tribunales civiles.

Y dado caso que el asunto fuera militar, por lo que respecta al sindicado Gordillo, todavía correspondería su conocimiento á los jueces ordinarios, por haber un sindicado no sujeto al fuero militar, y tener entonces aplicación la doctrina del artículo 1377 del Código citado, según la cual si se trata de delitos cometidos por individuos no justiciables por la autoridad militar, y por militares ú otros individuos sujetos á ésta, todos los procesados deberán ser remitidos á los Jueces ordinarios.

Por tanto, la Corte Suprema, de acuerdo con el parecer del señor Procurador, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, dirime la presente competencia, declarando que corresponde á la jurisdicción ordinaria ó civil, y no á la militar, el conocimiento del asunto que ha sido materia de ella.

Comuníquese esta determinación á las autoridades entre quienes ha versado la competencia, y remítanse los autos al Juez del Circuito de Ibagué, Jefe de la instrucción, para que á su tiempo los pase al Juez Superior del Distrito Judicial del Norte del Departamento del Tolima, á quien corresponde conocer del asunto.

Publíquese esta resolución en la *Gaceta Judicial*.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Mariano de Jesús Medina.—Juan Evangelista Trujillo.—Lucas Villafrádez.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, doce de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: En las diligencias sumarias instruídas para averiguar si Lorenzo A. Berrío, Prefecto de la Provincia del Norte del Departamento de Antioquia, era responsable del delito de falsedad en un documento público, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de ese mismo Departamento, dictó auto de sobreseimiento con fecha primero de Septiembre del presente año, que ha remitido en consulta á esta Superioridad.

Siendo el delito de que se trata de los que el Código Penal castiga con alguna de las penas de que habla el artículo 346 de la Ley 105 de 1890, la consulta del auto mencionado debe ser acogida y resuelta por la Corte.

El señor Procurador general de la Nación, á quien se dió vista del sumario, hace la siguiente fidelísima relación de los hechos.

"El Prefecto Berrío practicó una visita en la escuela elemental de varones de Amalfi, el 27 de Febrero de 1891, y de aquel acto se sentó la correspondiente diligencia, en cuya parte final se hizo constar que el Inspector de Instrucción pública del Municipio informaba que la conducta del Director de la Escuela era buena. Terminó la diligencia con las firmas del Prefecto y su Secretario, del Inspector local de Instrucción pública y del Director de dicha Escuela, señor Lázaro Arango.

"Meses después, el 22 de Octubre de 1891, apareció publicada aquella acta de visita en el *Repertorio Oficial* de

Antioquia; pero no en los términos del acta original sino con algunas variaciones aditivas.

"En efecto, la diligencia original dice:

'El Inspector local informa que la conducta del Director y Subdirector es buena;' y la publicada añade:

'.....Pero no es esta la opinión del público, pues ya verbalmente, como por medio de notas, se le ha hecho saber al Prefecto, que el Director, Lázaro Arango T., no reúne las condiciones que se requieren para el desempeño de su empleo; que él observa mala conducta, especialmente con respecto al uso excesivo del licor y el andar en malas compañías, y ser irrespetuoso y grosero con las autoridades del Distrito, á quienes trata personalmente y dirige notas indignas del alto puesto que ocupa. El trabajo en la Escuela tampoco satisface las exigencias del Gobierno y del público en general. El infrascrito se ve precisado á hacer constar esto en cumplimiento de su deber y para que los Superiores se impongan de la marcha de la instrucción pública en este Distrito. Se dió por terminado el acto, y para constancia, se extiende y firma la presente diligencia.

'El Prefecto, LORENZO A. BERRÍO.—El Director, *Lázaro Arango J.*—El Inspector local, *Alberto Ramírez U.*—El Secretario, *Victoriano Valencia A.*'

"Estos últimos conceptos, agregados al acta original, y la circunstancia de aparecer al pie la firma de Arango, la misma persona á que ellos se referían, dió lugar á que él diese el denuncio correspondiente, á fin de averiguar quién era el responsable de aquella alteración, por cierto bastante depresiva para el expresado Director."

Como lo que se tuvo á la vista para hacer la publicación en el *Repertorio Oficial* fué una copia que de la diligencia de visita se envió por la Prefectura del Norte, las sospechas de la alteración indicada, se dirigían especialmente contra el Prefecto Berrío, por lo cual, una vez practicado el informativo, se envió éste al Tribunal de Antioquia, para que decidiese de su mérito en cuanto á la responsabilidad del Prefecto sindicado (numeral 1.° del artículo 73 del Código de Organización Judicial.")

"Según dicho sumario, cuando en Amalfi se practicó la visita de la Escuela el 27 de Febrero de 1891, el Prefecto ordenó que se sacase copia del acta, la cual copia pasó al archivo de la Prefectura en la ciudad de Santa-Rosa, cabecera de la Provincia.

"Habiendo regresado el Prefecto á esta última ciudad, ordenó al Secretario que sacara copia de dicha copia para remitirla á la Gobernación de Antioquia, con el objeto de publicarla en el *Repertorio Oficial;* pero advirtió el Prefecto que concluída esta copia debía, á continuación, darse cuenta de los malos informes que había recibido del Director de la Escuela de Amalfi.

"El Secretario, por descuido ó por mala inteligencia de la orden del Prefecto, hizo aquella agregación no al final de la copia del acta, sino al final de ésta, por lo cual quedó alterada con la firma de Arango, Director de la Escuela.

"Así explica los hechos el mismo Secretario del Prefecto, y como no hay constancia ninguna de que el último tuviera conocimiento del error cometido por el primero, necesario es concluír que el referido Prefecto no es responsable de la alteración que se le imputa."

De la relación que queda inserta, y que es el resultado fiel del sumario, se viene en conocimiento de que no puede imputarse al Prefecto Berrío la comisión del delito de falsedad, supuesto que él no vió siquiera la compulsa que se tomó para remitirla á la Gobernación, que fué la que apareció publicada en el periódico oficial. Y como el Tribunal dispuso yá que se tomara copia de lo conducente para averiguar si Victoriano Valencia, Secretario de la Prefectura, ó alguna otra persona, es legalmente responsable del hecho investigado, la Corte no tiene otra cosa que hacer en el particular.

En consecuencia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el parecer del señor Procurador, se confirma el auto consultado.

Publíquese, déjese copia, y devuélvase el sumario.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintiuno de Noviembre de mil ochocientos noventa-y dos.

El Fiscal del Circuito de Medellín y el del Tribunal del Distrito Judicial de Antioquia, denunciaron ante el Juez 2.° del Circuito de Medellín el hecho de habérseles cortado el cabello á algunas mujeres, reputadas públicas ó de mala conducta, hecho que se ejecutó por orden del Alcalde del Distrito del mismo nombre, el siete de Junio último.

Al efecto, el Juez mencionado inició la instrucción del respectivo sumario, y antes de adelantarlo dispuso que las diligencias practicadas por él se sometieseu al repartimiento entre los dos Jueces de Circuito á fin, sin duda, de distribuírse equitativamente el trabajo.

Hecho el repartimiento, que, dicho sea de paso, se hizo de una manera irregular, correspondió el sumario de que se trata al Juez 1.° Este encontró deficiente el sumario é indicó las diligencias que debían practicarse para complementarlo, para lo cual dispuso que se devolviera al Juez 2.° que había iniciado la instrucción.

El Juez 2.°, en providencia de veintiocho de Junio, creyó que el sumario debía ser perfeccionado por el Juez 1.° al cual se le había repartido precisamente para que continuase la práctica de la investigación, y lo devolvió con tal objeto. Con este motivo volvió el sumario al despacho del Juez 1.°, y éste dictó el auto de treinta del mismo mes de Junio en el cual declaró que las ampliaciones del informativo debían practicarse por el mismo Juez que lo había iniciado, ó lo que es lo mismo, por el Juez 2.°

El Fiscal del Circuito, á quien se notificó el mencionado auto, interpuso apelación que el Juez 1.° concedió para ante el Tribunal Superior á quien fueron remitidas las diligencias. El expresado Tribunal, estimando que en tales diligencias iba envuelta la responsabilidad del señor Gobernador del Departamento, doctor Baltasar Botero Uribe, se abstuvo de conocer del recurso y ordenó devolverlas al Juez remitente para que les diese el curso legal.

El Juez mencionado, ó sea el 1.° del Circuito de Medellín, dispuso entonces conceder la apelación para ante la Corte Suprema, y con tal motivo revisa esta Superioridad la providencia apelada, después de oír el dictamen del señor Procurador de la Nación.

Como lo indica este alto funcionario, tanto el origen de la providencia apelada como el recurso que se interpuso contra ella, demuestran que lo que en el fondo se ha suscitado entre los dos Jueces del Circuito de Medellín es una competencia sobre á cuál de los dos corresponde perfeccionar el sumario á que dió lugar el denuncio de los denunciados Fiscales. "Competencia, dice el artículo 771 del Código Judicial, es la cuestión suscitada entre dos Jueces ó Tribunales, sobre cuál de los dos es el que debe conocer de cierto negocio judicial;" y es negativa cuando cada uno de ellos sostiene que no es á él sino al otro á quien corresponde el conocimiento del asunto, como ha sucedido en el caso de que se trata.

Siendo esto así, y tratándose de una competencia entre Jueces de un mismo Distrito Judicial, no toca á la Corte dirimirla sino al Tribunal Superior del respectivo Distrito, según lo dispuesto en el numeral 3.° del artículo 75 en relación con la atribución 3.ª, artículo 47 del Código de Organización Judicial.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, se abstiene de resolver acerca de la apelación intentada, y estimando que hay una competencia que debe ser decidida por quien corresponde, resuelve que se remitan las diligencias al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia para lo de su cargo.

Notifíquese, cópiese é insértese en la *Gaceta Judicial.*

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

IMPRENTA DE ANTONIO M. SILVESTRE.

REPÚBLICA DE COLOMBIA.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AÑO VIII | Bogotá, 31 de Marzo de 1893. | NÚM. 376.

CONTENIDO.

Págs.

PENA CAPITAL.

La que confirma la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior del Sur del Tolima, en la cual fueron condenados Quiterio y Santos Pérez á la pena de muerte, por el delito de asesinato perpetrado en la persona de Liborio Silva. (Magistrado ponente, doctor Corrales)..... 97

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

La que revoca la resolución dictada por el Ministerio del Tesoro en la reclamación intentada por Guillermo Uribe, como apoderado de Matías Vallejo y otros, por exacciones. (Magistrado ponente, doctor Trujillo)..... 100

La que confirma la resolución dictada por el Ministerio del Tesoro en la reclamación de los herederos de José Antonio Rojas y Ana María Jironza, por suministros y expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Pombo)..... 100

La confirmatoria de la resolución que el Ministerio del Tesoro dictó en la reclamación de Dimas Morales, por empréstitos y suministros. (Magistrado ponente, doctor Isaza)..... 101

La que concede á María Vicenta Vaca una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Trujillo)..... 101

La que niega á Beatriz Mera una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Trujillo)..... 102

La que confirma la sentencia dictada por el Juez 2.º del Circuito de Medellín, en el juicio seguido por Valerio Upegui contra la Nación, por suma de pesos. (Magistrado ponente, doctor Trujillo)... 102

La confirmatoria de la resolución dictada por el Ministerio del Tesoro en la reclamación de José Manuel González, por empréstitos y expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Pombo)..... 102

NEGOCIOS CRIMINALES.

La que confirma la sentencia absolutoria pronunciada por el Tribunal de Bolívar, en el juicio seguido contra Hilario Bolívar R., Juez 2.º del Circuito de Mompox, por abandono del destino. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas)..... 103

La que aprueba la sentencia absolutoria que dictó el Tribunal Superior del Magdalena, en el juicio seguido contra José Gnecco Coronado, Juez Superior de ese Distrito Judicial, por abandono de su empleo. (Magistrado ponente, doctor Trujillo)..... 103

AUTOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

El que ordena la cesación de todo procedimiento criminal contra Agustín Mier, ex-Juez del Circuito del Carmen, por abuso de autoridad. (Magistrado ponente, doctor Villafrádez)..... 103

El que confirma el auto de sobreseimiento dictado por el Tribunal Superior de Cundinamarca en el juicio seguido contra el Juez 3.º del Circuito de Bogotá, doctor Adolfo León Gómez, por denegación de justicia. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas)..... 104

El en que se abstiene la Corte de resolver cosa alguna acerca del sumario instruído contra Telésforo Cevallos, por varios cargos. (Magistrado ponente, doctor Corrales)..... 104

GACETA JUDICIAL.

PENA CAPITAL.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintinueve de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Ante el Alcalde del Distrito municipal de Santa-Librada, ocurrió Onofre Tobar el veinte de Febrero del año próximo pasado, denunciando que por Joaquín Gasca obtuvo conocimiento de que la muerte de Liborio Silva no había sido natural, sino violenta, como consecuencia de haber sido ahorcado la noche del diez y nueve del mismo mes en el paraje nombrado "San-Martín," correspondiente á dicho Municipio. El Alcalde inmediatamente procedió á practicar las diligencias prevenidas en el Código Judicial, con el objeto de averiguar si en realidad se había perpetrado hecho tan grave.

Después de recibido juramento al denunciante, se hizo comparecer en el Despacho de la Alcaldía á Joaquín Gasca y Matías Silva, y el primero de éstos declaró que el diez y ocho del mencionado Febrero estuvo en la casa de Liborio Silva á arreglar un negocio que tenía pendiente con éste, quien le manifestó que se sentía restablecido de sus males; que el veinte del citado mes, estando el exponente en su casa de habitación, llegó Antonio Castrillón y le dijo que Liboria Barrera mandaba avisar que su marido Liborio Silva había muerto; que sospechó que la muerte pudo ser violenta por haber sido repentina, y conservar la esposa del finado, Liboria Barrera, relaciones ilícitas con Santos y Quiterio Pérez; que habiendo vuelto el mismo día á la casa de Silva, notó el exponente que el cadáver tenía las uñas de los dedos de las manos negras ó amoratadas, el cuello bastante hinchado y amoratado, lo mismo que las orejas, y otras señales que corroboraban las sospechas que el declarante había concebido.

Matías Silva, sobrino del difunto Liborio Silva, declaró en los mismos términos que Gasca, en cuanto á las señales que tenía el cadáver de su tío, y añadió que éste se hallaba en mala inteligencia con Quiterio y Santos Pérez por las relaciones ilícitas que se decía llevaban éstos con Liboria Barrera.

Tomando el Alcalde de Santa-Librada por base las declaraciones de Joaquín Gasca y Matías Silva, hizo comparecer á otras muchas personas, entre ellas á Quiterio y Santos Pérez, Liboria Barrera, esposa de Liborio Silva, Sergia Muñoz, cuñada de la viuda y María de la Paz Cuéllar, menor de edad, quien en calidad de sirvienta de la casa del difunto, debía saber los hechos que precedieron y siguieron á la muerte de su patrón.

Efectivamente, estos últimos declarantes no tuvieron inconveniente en declarar categóricamente acerca del papel que cada uno de ellos había desempeñado en el plan adoptado para dar muerte á Liborio Silva; de manera que sus mismas exposiciones dieron al funcionario de instrucción conocimiento perfecto y completo de dicho plan, y de las personas que habían venido siendo primeramente cómplices en la tentativa del delito de envenenamiento y de las que posteriormente concibieron el designio de cometer el homicidio en la persona del infeliz Silva.

Comprobados la tentativa del delito de envenenamiento y el homicidio, se pasó el sumario al Juzgado Superior del Distrito Judicial del Sur, establecido en Neiva, como competente para conocer de esta gran causa criminal, y dicho Juzgado, después de oír el dictamen del respectivo Fiscal y de ampliar el sumario, dictó auto de enjuiciamiento en siete de Agosto de mil ochocientos noventa y uno (fojas 145 á 149 vuelta) en los términos que se copian:

"El Juzgado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, llama á responder en juicio criminal por la tentativa del delito de envenenamiento en la persona de Liborio Silva, á Liboria Barrera, Quiterio y Santos Pérez, Nicasio Polo, Toribia Vargas y Sergia Muñoz, y por el delito de homicidio en la misma persona de Liborio Silva, á los citados Liboria Barrera, Quiterio y Santos Pérez, Sergia Muñoz y María de la Paz Cuéllar, delitos defi-

nidos en el capítulo 1.°, parágrafos 2.° y 1.°, respectivamente, del título 1.°, libro 4.° del Código Penal de 1858, y las leyes que lo adicionan y reforman.

"Se sobresee respecto de Antonio Castrillón, Andrés Molina, Antonio Calderón, Isidro Barrera y Eufrasio Cleves, que se había sospechado tuvieran alguna participación.

"Notifíquese y cópiese, y hágase saber á los reos que tienen derecho á nombrar defensor. Para la notificación y subsiguiente curso de la causa hasta su finalización, con respecto á María de la Paz Cuéllar, que es mayor de siete y menor de doce años, se nombra curador *ad litem* de dicha impúber, al señor Ángel Miguel Meléndez. Expídanse las boletas necesarias para que los procesados pasen al lugar de los presos.

"Antes de dar curso al juicio, consúltese con el Superior el sobreseimiento que entraña esta providencia (artículo 348, Ley 105 de 1890)."

Resolvió el Tribunal Superior del mismo Distrito Judicial, en providencia de diez y nueve de Septiembre del citado año de 1891, respecto del sobreseimiento consultado y de la apelación interpuesta por el curador de la menor María de la Paz Cuéllar, lo que en seguida se inserta:

"Confírmase el auto de proceder apelado por el curador de María de la Paz Cuéllar, haciéndole la siguiente adición: ábresele causa á la misma procesada María de la Paz Cuéllar con intervención del Jurado, por la tentativa del delito de envenenamiento de que trata el libro 4.° del Código Penal de 1858, en su título 1.°, capítulo 1.° Se confirma el sobreseimiento consultado en favor de Antonio Castrillón, Andrés Molina, Antonio Calderón, Isidro Barrera y Eufrasio Cleves."

Devuelta la causa al Juzgado Superior, se surtió en él la primera instancia del juicio criminal, por todos los trámites señalados en la ley procesal. Y verificada la celebración del juicio, el Jurado, compuesto de los Jueces de hecho, Manuel Santos N., Pío Aguirre y Miguel Cuervo Neira, en sesión de siete de Marzo del corriente año de 1892, hizo las declaraciones siguientes:

"1.ª Que María de la Paz Cuéllar, Toribia Vargas y Nicasio Polo, no son responsables del delito de tentativa de envenenamiento en la persona de Liborio Silva;

"2.ª Que Sergia Muñoz, Santos y Quiterio Pérez y Liboria Barrera, son responsables, la primera como encubridora, el segundo y el tercero como auxiliadores, y la última, como autora del delito de tentativa de envenenamiento en la persona de Liborio Silva;

"3.ª Que María de la Paz Cuéllar no es responsable del delito de homicidio perpetrado en la persona de Liborio Silva, y

"4.ª Que Sergia Muñoz, Santos y Quiterio Pérez y Liboria Barrera son responsables, la primera como auxiliadora y los tres últimos como autores principales del delito de homicidio cometido en la persona de Liborio Silva."

De acuerdo con este veredicto, el Juzgado Superior profirió sentencia definitiva el veintiuno de Marzo del presente año (fojas 232 á 237 vuelta), que en la parte conducente es como se inserta:

"Condénase á Quiterio y Santos Pérez, como autores principales de la muerte de Liborio Silva, á sufrir la pena de muerte, sin infamia, en atención á que esta última pena está eliminada por el Código Penal vigente; pena que se ejecutará en el lugar que designe el Tribunal de este Distrito.

"Condénase á Sergia Muñoz á sufrir la pena de presidio en la casa de reclusión que designe el Poder Ejecutivo, por el término de catorce años, cinco meses y diez y nueve días, y á presenciar la ejecución de la pena de muerte;

"Declárase notoriamente injusto el veredicto pronunciado por el Jurado en esta causa, por lo que hace relación con Liboria Barrera, en el delito de homicidio;

"Declárase terminado el procedimiento seguido contra Nicasio Polo, Toribia Vargas y María de la Paz Cuéllar, acusados también en este proceso;

"Condénase, además, á los yá citados Quiterio y Santos Pérez y Sergia Muñoz, á pagar de mancomún y solidariamente, por vía de perjuicios y á favor de los herederos de Liborio Silva la cantidad de cinco mil pesos ($ 5,000) en que los estimaron los peritos; y á favor de la Nación al pago de costas procesales;

"Los Pérez, caso de conmutación, quedan sujetos á la privación de todo destino, cargo y empleo público de la Nación y de toda pensión pagada por la misma; á la pérdida de los derechos políticos y á la suspensión, mientras dure la pena, de los civiles, expresados en el artículo 52 del Código pretérito; agravaciones á las cuales queda sujeta desde luégo la procesada Sergia Muñoz;

"Como fundamento de la presente sentencia, se invocan aquí, además de las disposiciones citadas, las que entrañan los artículos 22, 68, 70, 96 y 441 del mismo Código, y 216, 217 y 221 de la Ley 153 de 1887."

Puesta la anterior sentencia en conocimiento del Fiscal, de los procesados y de sus defensores, el de Santos Pérez interpuso contra ella el recurso de apelación, que le fué concedido para ante el Tribunal Superior del propio Distrito Judicial, y sustanciado el recurso de apelación interpuesto por el defensor Uldarico Scarpetta, y la consulta que de oficio se dispuso por el Juzgado de primera instancia, no sólo de las partes absolutoria y condenatoria de la mencionada sentencia, sino de la declaración dictada por el propio Juzgado, de ser notoriamente injusto el veredicto del Jurado, en cuanto calificó á Liboria Barrera como autora principal de los delitos de tentativa de envenenamiento y de homicidio en grado máximo de gravedad, cometidos en la persona de su esposo, Liborio Silva, y no como auxiliadora ó cómplice de los mismos crímenes, según resulta de lo actuado.

Observada por el Tribunal Superior del Sur, en el Departamento del Tolima, la tramitación establecida por la ley para la segunda instancia en esta clase de causas, le puso fin con la sentencia definitiva que dictó en seis de Julio de este año (fojas 234 á 273 vuelta) de la manera que sigue:

"Tomando por fundamento las consideraciones que se dejan expuestas, el Tribunal, de acuerdo en parte con el señor Fiscal, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve el recurso y la consulta de la sentencia que ha pronunciado el Juez Superior en esta causa, en los siguientes términos:

"1.° Confírmase la pena de muerte impuesta á Quiterio y Santos Pérez, como autores principales del delito de asesinato perpetrado en la persona de Liborio Silva, y las demás accesorias que les han sido decretadas;

"Confírmase la resolución de injusticia notoria pronunciada por el Juez Superior, respecto de la tercera pregunta hecha al Jurado en el cuestionario referente á Liboria Barrera por el delito de homicidio, y se declara, además, notoriamente injusta la resolución del Jurado recaída á la primera pregunta del mismo cuestionario;

"3.° Declárase notoriamente injusto el veredicto del Jurado que absolvió á María de la Paz Cuéllar en los delitos de tentativa de envenenamiento y homicidio, ó sea en la resolución que pronunció respecto á la segunda pregunta hecha por el Juez en el cuestionario de ambos delitos;

"4.° No hay lugar á declarar notoriamente injusto el veredicto de absolución pronunciado en favor de Toribia Vargas y Nicacio Polo, y se les declara absueltos del cargo porque fueron sometidos á juicio;

"5.° A Sergia Muñoz se le impone la pena de quince años de presidio que sufrirá en Casa de reclusión, por ser éste el *máximum* de pena que se le puede imponer, según el artículo 45 del Código Penal, aunque por los dos delitos por que se le condena en segundo grado le resulta un total de diez y siete años. De la pena que se le impone, se deducirá el tiempo de la detención y la prisión, computado conforme al artículo 2024 del Código Judicial, que es el que regía cuando se cometieron los delitos, y más favorable que el 306 de la Ley 105 de 1890. Además, se revoca la sentencia apelada en cuanto reagrava la pena impuesta á Sergia Muñoz, condenándola á presenciar la ejecución de la pena de muerte decretada para los Pérez; por no existir dicha reagravación en el Código Penal que hoy rige, y ser, por tanto, de preferente aplicación al anterior (artículo 26 de la Constitución);

"6.° Sáquese copia del proceso y remítase al Juez Superior para que convoque nuevo Jurado en la causa que queda pendiente, por injusticia notoria que se deja declarada contra Liboria Barrera y María de la Paz Cuéllar (artículos

317 y 318 de la Ley 57 mencionada y Acuerdo 423 de la Corte Suprema);

"7.° Se confirma la sentencia apelada en todas las partes en que no se revoca ó se reforma por la presente;

"8.° No hay lugar á hacer reforma en la parte final de la sentencia, en la cual se dispone sacar copia del acta de la celebración del juicio para que se averigüe si el señor Uldarico Scarpetta ha violado alguna ó algunas de las disposiciones del capítulo 3.°, título 1.°, libro 2.° del Código Penal, por haber atacado la pena de muerte establecida en la Constitución. El Juez resolvió hacer los requerimientos de que habla el artículo 322 de la Ley 57, y por tanto, no hubo lugar á imponerle las penas allí previstas para el caso de reincidencia; pero como á más de esas penas que el Juez pudo imponer verbalmente, queda sometida la falta á la pena que por separado le impone el Código Penal, es el caso de que se forme expediente para que se averigüe si hay ó no lugar al castigo, y

"9.° La autoridad política respectiva designará el lugar en donde deba ejecutarse la pena de muerte á que quedan condenados los Pérez.

"Si no se interpusiere recurso de casación contra esta sentencia en lo que ella resuelve sobre pena de muerte, remítase en consulta á la Corte Suprema, con todo lo actuado (artículos 368 y 388 de la Ley 105 de 1890)."

En cumplimiento de lo prevenido en la parte resolutiva de la sentencia preinserta, se ha recibido la causa que se tiene á la vista, para que se surta el recurso de casación que conceden las leyes, solamente en lo que se refiere á la imposición de la pena capital á que han sido condenados Quiterio Pérez y Santos Pérez, como responsables en su carácter de autores principales del delito de homicidio premeditado en grado máximo de gravedad, cometido en la persona de Liborio Silva; pues el recurso de casación no se extiende á los demás procesados y condenados en la aludida sentencia, según lo establecido en la Constitución de la República y en las leyes de procedimiento criminal, y por lo mismo la Corte prescinde de examinar si dicha sentencia está en conformidad con las disposiciones penales y lo que resulta de esta causa, en lo que toca á los co-reos de los delincuentes Pérez.

Recibido en la Corte y repartido el expediente, el Magistrado á quien tocó por suerte sustanciar esta causa, nombró defensor de los reos Quiterio Pérez y Santos Pérez á Ricardo Ochoa, por no haberse designado por los reos mencionados ningún otro defensor; y posesionado el que fué nombrado de oficio, se dió el expediente en traslado por seis días al señor Procurador general de la Nación, para que presentase su alegato escrito, como efectivamente lo produjo, en cumplimiento de lo que prescribe el artículo 390 de la Ley 105 de 1890, sobre reformas á los procedimientos judiciales.

Devuelta la causa por el señor Procurador, se mantuvo ella con el alegato de este funcionario en la Secretaría de la Corte, por igual término, á disposición del defensor, á fin de que, por la ausencia de los reos, presentara también su alegato. De este escrito no se pudo dar traslado al señor Procurador, como lo previene el artículo citado, porque fué presentado después de citadas las partes para sentencia y de señalados día y hora para que se verificase la audiencia pública, acto que no tuvo lugar por falta de asistencia de las mismas partes.

Procede, pues, la Corte á dictar el fallo que le corresponde.

El objeto del recurso de casación establecido en la Constitución de la República y reglamentado en la Ley 105 de 1890, cuando se trata de causas criminales en que se impone la pena de muerte á uno ó más reos, es el de examinar si en dichas causas se ha incurrido en los motivos ó causales que determina el artículo 370 de la referida ley, ó alguno de ellos, á fin de que por la Corte se declare la nulidad de la sentencia recurrida ó consultada, y se remedie el vicio de que adolezca, en los términos correspondientes al caso.

Aunque el señor Procurador general de la Nación en su alegato llama la atención de la Corte al hecho de ser menor de edad el reo Santos Pérez, seguramente porque éste en sus declaraciones rendidas ante el funcionario de instrucción, expresó que sólo tendría de diez y ocho á diez y nueve años, es lo cierto que no se cuidó de hacer venir al sumario ó al plenario la prueba especial que prescribe la ley como indispensable para comprobar en juicio todo lo relativo al estado civil; de suerte que la Corte, en un caso tan grave como el de que aquí se trata, está precisada á prescindir de la circunstancia de que á dicho reo no le hubiese asistido un curador *ad litem*, si no tiene padre, como lo previene terminantemente el Código Judicial; pues en la sustanciación del recurso de casación no son admisibles pruebas distintas de las que se hayan pedido y producido en el juicio.

Sin embargo de que ni los reos condenados á la pena capital, ni sus defensores, interpusieron el recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia, como lo permite el artículo 370 de la mencionada Ley 105, la Corte debe proceder, al resolver la consulta que se le ha hecho, de la misma manera que si el referido recurso se hubiera interpuesto oportunamente; y así pasa á examinar si en el aludido juicio han ocurrido las causales que determina el artículo 370 citado, que hagan casable la sentencia pronunciada en segunda instancia.

No ha ocurrido la causal primera que consiste en ser la sentencia violatoria de ley sustantiva ó de doctrina legal; ya sea directa la violación, ya sea efecto de una interpretación errónea de la ley ó de la doctrina legal; ya de la aplicación indebida de leyes ó de doctrinas legales, como en el caso, entre otros, de que se aplique la ley vigente al tiempo de la comisión del delito y no una posterior que impone menos pena.

Con efecto, del sumario resulta plenamente comprobado con la prueba testimonial, con la confesión de los mismos reos Quiterio Pérez y Santos Pérez y con el reconocimiento pericial del cadáver de Liborio Silva, que la muerte de éste, acaecida en la noche del diez y nueve de Febrero de 1891, en el paraje nombrado "San-Martín," dentro de la juridicción del Municipio de Santa-Librada, no fué consecuencia natural de la enfermedad que sufría, sino resultado preciso de los maltratos que le infirieron los mencionados Quiterio y Santos Pérez, pocos momentos antes de espirar. Así lo expusieron en el curso de la instrucción del sumario Liboria Barrera, mujer legítima del agredido, y María de la Paz Cuéllar, sirvienta de su casa, las cuales personas presenciaron el acto del maltratamiento; encontrándose Silva en condición relativamente débil á la de sus agresores, desarmado y postrado en el suelo del solar ó patio de la casa, y sorprendido con aquel ataque súbito, y bruscamente efectuado.

Resulta comprobado también que Quiterio y Santos Pérez, inducidos por la misma Liboria Barrera, tomaron en esa noche aguardiente, con el propósito de cobrar ánimo para realizar la intención que de antemano tenían formada de dar muerte á Silva, de modo que Quiterio Pérez pudiera lograr casarse en segundas nupcias con la viuda, como ésta se lo había prometido. En suma, los Pérez, poniéndose de acuerdo con esta mujer infiel y con otras personas, estudiaban y procuraban emplear medios de privar de la vida á Silva, suministrándole bebidas y alimentos que los que formaban el complot consideraban nocivos ó venenosos, y cuando yá se persuadieron de la ineficacia de tales medios, se decidieron á matarlo á los golpes, como los Pérez lo pusieron por obra.

Exhumado el cadáver de Silva para verificar el reconocimiento pericial, los peritos, debidamente juramentados, manifestaron haberle encontrado daños graves que persuaden que la muerte de Silva fué efecto de la violencia ejercida en él.

Conforme al auto de proceder, Quiterio y Santos Pérez fueron llamados á juicio criminal por la tentativa del delito de envenenamiento en la persona de Liborio Silva y por el delito de homicidio en la persona del mismo individuo, delitos definidos en el capítulo 1.° (parágrafos 2.° y 1.°, respectivamente, del título 1.°, libro 4.° del Código Penal de 1858 y las leyes que lo adicionan y reforman); y habiéndose resuelto por el Jurado que los procesados Quiterio y

Santos Pérez, han cometido en la persona de Liborio Silva el delito de homicidio especificado en el artículo 440 del Código Penal de 1858 con las circunstancias 1.ª y 3.ª allí enumeradas, delito que alcanza grado máximo de gravedad, conforme al artículo 231 de la Ley 153 de 1887 y que castiga el 441 del citado Código Penal, el Juez Superior del Distrito Judicial del Sur en el Departamento del Tolima, condenó á dichos Pérez á sufrir la pena de muerte, de conformidad con lo que estatuye el artículo 441 del Código Penal vigente cuando se perpetró el asesinato, absteniéndose de imponer la pena de infamia señalada á los asesinos en el mencionado artículo 441, por estar suprimida en el actual Código que rige en la República; de manera que establecida la pena capital en ambos Codigos, esto es, en el artículo 441 del anterior y en el 598 del nuevo Código, consideró como más benigna, ya que no menor, la que no impone para el asesinato la pena de infamia.

El Tribunal Superior del Sur, en la sentencia de segunda instancia, que por vía de consulta ha venido á la Corte, confirma la proferida por el Juez Superior en la primera, en todas sus partes, en cuanto se refiere á los reos Santos y Quiterio Pérez; de suerte que por lo que respecta á dichos reos de asesinato y á la pena capital que contra ellos se ha decretado, nada tiene la Corte que observar.

Tampoco ha ocurrido en el referido juicio la causal 2.ª que menciona el artículo 370 de la Ley 105 de 1890, por lo que yá queda relacionado, es decir, que no es en concepto de la Corte notoriamente injusto el veredicto del Jurado; y antes bien, guarda el veredicto completa conformidad con el resultado que ofrece la causa, pues se impone la pena de muerte á los asesinos Quiterio Pérez y Santos Pérez, de acuerdo con las resoluciones ó declaraciones hechas por el Jurado.

No se ha incurrido en las causas de nulidad designadas con los ordinales 1.°, 3.°, 4.°, 5.°, 6.° y 7.° del artículo 264 de la Ley 57 de 1887. La competencia del Juez Superior del Distrito Judicial del Sur, que ha conocido en primera instancia de esta causa, está fijada con claridad en la Ley 147 de 1888, sobre organización judicial, y aparecen extendidas en el proceso las diligencias de notificación á los procesados Quiterio Pérez y Santos Pérez y á las personas que les han servido de defensores en el juicio, de los autos del Juzgado Superior, en los cuales se llamó á juicio á los citados Pérez, se abrió la causa á pruebas y se señalaron el día y la hora para la celebración del juicio (fojas 150, 155, 157 y 177 vuelta, 193 y 199). El juicio se celebró precisamente en el día y á la hora designados de antemano en el auto respectivo; y finalmente, no se ha incurrido en equivocación relativa á la denominación genérica del delito de homicidio, á la época y lugar en que se cometió, ni al nombre ó apellido de las personas responsables, ni del ofendido.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, como Tribunal de casación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, aprueba la sentencia consultada, en la parte que hace referencia á la imposición de la pena de muerte á los reos Quiterio Pérez y Santos Pérez.

Notifíquese, déjese copia, insértese en la *Gaceta Judicial* y remítase original el expediente á Su Señoría el Ministro de Justicia, para los fines legales ulteriores.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANJELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veinticuatro de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Guillermo Uribe, como apoderado de Matías Vallejo, vecino del Retiro (Departamento de Antioquia), de Abraham Moreno, Miguel, Julio, Eduardo y Julián Vásquez y Abraham Moreno & Hermanos, de Medellín, ocurrió á la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones para que se le reconozca á cargo del Tesoro la suma de dos mil setecientos treinta y siete pesos noventa y cinco centavos ($ 2,737-95), valor de las exacciones que sufrieron del Gobierno rebelde de Antioquia en mil ochocientos ochenta y cinco. La Comisión negó el reconocimiento en providencia de veintitrés de Agosto del corriente año, que fué aprobada el primero de Octubre siguiente por el Ministerio del Tesoro en resolución marcada con el número 3,241, que ha venido en apelación á esta Superioridad, en donde se le ha dado la tramitación debida para poder resolver el recurso interpuesto.

La Comisión y el Ministerio del Tesoro se fundaron para negar el reconocimiento pedido, en que los documentos presentados para acreditar las exacciones sufridas son unos recibos dados por empleados rebeldes de mil ochocientos ochenta y cinco, documentos que no merecen fe ninguna, á pesar de un certificado expedido en el corriente año por el Gobernador del Departamento de Antioquia, que comprende la mayor parte de los recibos exhibidos, porque dicho funcionario no podía considerar como subalternos suyos á los empleados rebeldes que firmaron esos recibos.

La Ley 44 de 1886 no indicó la manera como debían acreditar los partidarios y sostenedores del Gobierno las exacciones que sufrieron de parte de los rebeldes, y de allí se ha creído que el único modo de justificarlas es con la prueba de testigos, recibida con todas las formalidades requeridas. Pero como los empréstitos y expropiaciones de que trata esta reclamación fueron decretados por el Gobierno del extinguido Estado de Antioquia, que estaba perfectamente organizado y dejaba constancia de sus actos en las oficinas públicas, cuyos archivos se encuentran hoy en poder de las autoridades y con los cuales se han confrontado los recibos presentados, es preciso convenir en que es difícil acreditar mejor con la prueba testimonial esos empréstitos y expropiaciones de lo que lo están con el certificado del Gobernador de Antioquia, que fué expedido en vista de documentos que reposan en las oficinas que tiene á su cargo, porque en derecho vale más la prueba literal preconstituída, que la de testigos.

En mérito de lo expuesto, y haciendo uso de la facultad concedida en los artículos 6.° y 9.° de la Ley 44 de 1886, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, reconoce á cargo del Tesoro nacional la suma de mil quinientos noventa y dos pesos cincuenta y dos y medio centavos ($ 1,592-52½) que se descompone así: doscientos cincuenta pesos ($ 250) para Abraham Moreno; noventa y dos pesos cincuenta y dos y medio centavos ($ 92-52½) para Abraham Moreno & Hermanos; setecientos cincuenta pesos ($ 750) para Miguel Vásquez, y quinientos pesos ($ 500) para Julio Vásquez, y absuelve á la Nación de la mayor suma demandada.

Queda, pues, revocada la providencia apelada.

Notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS. — MANUEL E. CORRALES.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.— LUCAS VILLAFRÁDEZ. — *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, veinticinco de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Los herederos de José Antonio Rojas y Ana María Jironza, vecinos de Popayán, reclamaron ante la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones el reconocimiento y pago del crédito de catorce mil pesos, como valor de expropiaciones hechas á la última en la guerra de 1860 á 1863, por las fuerzas revolucionarias al mando del General José María Sánchez, y por el de los suministros voluntarios que la misma Jironza hizo á las fuerzas del General Julio Arboleda. La solicitud del reconocimiento se introdujo á la Comisión por Andrés Lara en nombre de dichos herederos, en escrito de ocho de Agosto de 1890, aunque sin expresar el carácter con que los representaba. Pero á pesar de eso la Comisión dictó la resolución de veintidós de Junio del presente

año, número 3,832, por la cual negó el reconocimiento solicitado por haberse instaurado después de expirado el término fijado en la Ley 36 de 1888, y sin entrar en el examen de las pruebas declaró prescrito el derecho. Posteriormente los citados herederos hicieron cesión de sus créditos á Manuel Jesús Negret, y éste la hizo á favor de Andrés Lara, quien fué tenido como parte con el carácter de cesionario.

El Ministerio del Tesoro, por resolución número 3,160 de veintitrés de Agosto último aprobó el fallo negativo de la Comisión, y el cesionario interpuso apelación para ante la Corte, por lo cual, después de oído el concepto del señor Fiscal especial, se procede á dictar el fallo definitivo.

La Ley 36 de 1888, expedida el veintisiete de Febrero, limitó hasta la fecha de su expedición la facultad concedida á la Comisión para conocer de las reclamaciones por suministros, empréstitos y expropiaciones que yá estuviesen instauradas ante el Poder Judicial, ante autoridades administrativas ó ante la misma Comisión; de manera que las reclamaciones que no estuviesen instauradas antes de la fecha expresada, no han podido introducirse á la Comisión, so pena de ser desechadas por extemporáneas, como lo ha sido la introducida por Andrés Lara á nombre de los mencionados herederos el ocho de Agosto de 1890. Y la Corte ha declarado yá en casos análogos que no puede considerarse instaurada una reclamación por el hecho sólo de haberse solicitado pruebas para acreditarla, siendo de notarse que en el expediente que se tiene á la vista, el primer memorial que se presentó al Juez del Circuito de Popayán en solicitud de pruebas tiene fecha de veintiséis de Febrero de 1888, y tanto esa fecha como la del auto que tiene veintisiete, aparecen enmendadas, como quiera que se cayó en la cuenta de que el veintisiete de Febrero era la última fecha señalada por la citada ley; y confirma la enmendatura el hecho de que la primera declaración aparece extendida el veintisiete de Julio de ese mismo año, es decir, cinco meses después.

Por tanto, la Corte Suprema, que encuentra ajustada á la ley la resolución del Ministerio que aprobó la de la Comisión por la cual se negó el reconocimiento del crédito reclamado, por haberse introducido fuera de tiempo, de acuerdo con el dictámen del señor Fiscal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la resolución apelada.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Noviembre veinticinco de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: En la reclamación de Dimas Morales contra el Tesoro nacional por el valor de suministros y empréstitos hechos al Gobierno en el Municipio de Purificación en la guerra de 1885, la Comisión administrativa, por resolución de ocho de Junio último, confirmada por el Ministerio del Tesoro en cinco de Septiembre, bajo el número 3,193, reconoció al reclamante un crédito por la suma de mil seiscientos pesos ($ 1,600) y absolvió al demandado del mayor cargo.

Habiendo apelado de esta resolución el apoderado de Morales, debe la Corte decidir el asunto definitivamente.

Dicho apoderado, en el escrito que ha dirigido á la Corte, pide que se reconozca la suma de dos mil trescientos noventa y cuatro pesos ($ 2,394) que sostiene estar acreditada con documentos fehacientes.

La Comisión, para reconocer sólo la suma yá expresada se fundó en que ella era la única que resultaba de la certificación expedida por el Gobernador del Tolima, en cambio de recibos de empleados ó agentes subalternos de la Gobernación ó Jefatura Civil y militar que el interesado presentó para su conversión.

La suma no reconocida no tiene en su favor prueba distinta de los mismos documentos presentados á la Gobernación para ser cambiados por certificaciones, documentos que á juicio del Gobernador no acreditan sino la suma por la cual se expidió el documento que sirvió de prueba al reconocimiento hecho por la Comisión, porque como puede verse en la resolución razonada de veinte de Abril de mil ochocientos noventa y uno, de la Gobernación del Tolima, hay falta de claridad en los recibos y datos para juzgar que alguno de los posteriores contiene cantidades por las cuales se habían expedido yá algunos de los otros recibos.

Pudo suceder muy bien que la falta de precisión de los recibos condujera al error de reconocer una suma realmente inferior á la suministrada por Morales; pero atendida la terminante disposición del artículo 4.° de la Ley 152 de 1887, los documentos de subalternos del Gobernador no cambiados por certificaciones no pueden servir de prueba, mientras la conversión no se efectúe.

Los fundamentos de la resolución apelada son, pues, incontestables, y la Corte no puede apoyar el reconocimiento de una suma mayor en documentos no cambiados por certificaciones.

Es indudable, por otra parte, que los recaudadores que expidieron los recibos eran subalternos del Gobernador, puesto que las cuentas de su manejo fueron rendidas á los empleados del Estado ó Departamento, y dado que no lo fueran, estarían estos recibos fuera de las únicas pruebas que para el caso requiere el artículo 2.° de la Ley 44 de 1886.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley confirma la resolución apelada.

Déjese copia de esta sentencia, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Noviembre veintinueve de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: María Vicenta Vaca ha pedido, por medio de apoderado, se le conceda del Tesoro nacional, de acuerdo con la Ley 84 de 1890, recompensa militar unitaria como madre natural del Subteniente Juan Bautista Vaca, que murió el 31 de Agosto de 1876 en la batalla de Los-Chancos, combatiendo en defensa de los principios que informan las actuales instituciones.

Traídas á los autos las pruebas indicadas por el señor Procurador para perfeccionar la documentación presentada por la demandante, y citadas las partes para sentencia, se procede á dictar el fallo del caso.

En el expediente se encuentra la partida de bautismo de Juan Bautista Vaca, un certificado del Ministerio del Tesoro y una información sumaria de más de cinco testigos, recibida con todas las formalidades legales, con que se comprueba plenamente que el finado fué hijo natural de María Vicenta Vaca, mujer muy pobre, anciana, que vivió en buena armonía con éste y recibió de él recursos para la subsistencia; que aquél murió en la mencionada batalla de Los-Chancos con el empleo de Subteniente, en el Ejército revolucionario de 1876; que no fué casado ni dejó descendientes naturales; que la peticionaria ha observado buena conducta antes y después de la muerte de su hijo y no ha recibido de la Nación pensión ni recompensa alguna.

En mérito de lo expuesto y de lo que dicen las artículos 1.° 5.° (ordinal 2.°) 9.° y 11 de la Ley 84 de 1890, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el concepto del señor Procurador, concede del Tesoro nacional á María Vicenta Vaca, vecina del Municipio de Roldanillo, en el Departamento del Cauca, la recompensa militar unitaria de mil novecientos veinte pesos ($ 1,920), suma igual al sueldo de cuatro años del empleo de Subteniente que tenía su finado hijo Juan Bautista Vaca.

Notifíquese, cópiese, dése cuenta al Ministerio de Guerra y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BO-

TERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Noviembre veintinueve de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Beatriz Mera pide se le conceda del Tesoro nacional, como hermana legítima de José Antonio Mera, que murió defendiendo los principios que informan las actuales instituciones, en el combate de Silvia, que tuvo lugar en el mes de Abril de 1876 en el extinguido Estado del Cauca, una recompensa militar de novecientos doce pesos ($ 912), de acuerdo con la Ley 84 de 1890.

El señor Procurador sostiene que los deudos de los militares que fallecieron como Mera antes del doce de Julio de mil ochocientos setenta y seis, carecen de derecho para acogerse á la Ley 84 de 1890, que sólo remunera los servicios prestados en las luchas armadas de carácter general, porque según el artículo 4.° de la Ley 67 de 1877, la guerra de aquella época no puede considerarse nacional, sino desde el doce de Julio de mil ochocientos setenta y seis.

Como este concepto del señor Procurador es perfectamente jurídico, y está de acuerdo con los hechos alegados por la demandante, la Corte lo acoge y niega, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, la recompensa militar solicitada.

Notifíquese, cópiese y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Noviembre veintinueve de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Valerio Upegui, por medio de apoderado, demandó al Tesoro nacional, ante el Juez 2.° del Circuito de Medellín, para que se le condene á pagarle la suma de ciento ochenta y nueve pesos ($ 189), procedente de intereses de las certificaciones números 1,147 y 1,243 del 3 por 100 anual, correspondiente á la fundación de Ursula Molina y Toledo, intereses devengados desde el año de 1875 al 1.° de Enero de 1890.

Upegui fundó su derecho en el artículo 1.° de la Ley 84 de 1876 y en los hechos siguientes:

1.° Que por sentencia de primero de Octubre de mil ochocientos noventa y uno, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia declaró á Valerio Upegui el goce de la capellanía fundada por Ursula de Molina y Toledo de seiscientos pesos de oro de veinte quilates, por documento público de fecha veinte de Febrero de mil setecientos diez, y

2.° Que el valor de dicha fundación está reconocido por el Tesoro nacional en las certificaciones números 1,147 y 1,243 por las cantidades de noventa pesos ($ 90) y trescientos treinta pesos ($ 330), respectivamente.

No admitidos por el Fiscal del Circuito los hechos y el derecho alegados para intentar la demanda, se abrió á prueba el juicio por el término de veinte días, durante el cual se hizo venir á los autos copia de la sentencia dictada por el Tribunal de Antioqnia el primero de Octubre de mil ochocientos noventa y uno, y dos atestaciones de la Secretaría de Hacienda y Fomento de ese Departamento, en que consta que las certificaciones números 1,147 y 1,243 del 3 por 100 anual, por valor de noventa pesos ($ 90) y trescientos treinta pesos ($ 330), respectivamente, corresponden á Ursula Molina y Toledo.

El Juez, á su debido tiempo, en sentencia de veintidós de Julio del corriente año, absolvió al Tesoro nacional del cargo de la demanda. De este falló apeló la parte demandante *para ante esta Superioridad, en donde durante* el término de prueba, presentó copia auténtica de la diligencia de registro de la sentencia de primero de Octubre de mil ochocientos noventa y uno.

Sustanciado el negocio por todos los trámites de segunda instancia, se procede á dictar el fallo que le ha de poner término.

El Juez del Circuito se apoyó para absolver á la Nación del cargo de la demanda, en que la copia de la sentencia del Tribunal que le decretó á Upegui el goce de la capellanía no tenía constancia de haber sido registrado ese fallo para que hiciera fe, de acuerdo con el artículo 2673 del Código Civil, y en que no se acreditó que las certificaciones presentadas números 1,147 y 1,243 correspondieran á la fundación hecha por Ursula Molina y Toledo el veinte de Febrero de mil setecientos diez (1710).

En esta segunda instancia se comprobó, con la respectiva diligencia, que la sentencia había sido registrada; y para demostrar que las dos certificaciones números 1,147 y 1,243 correspondían á la fundación hecha en 1710, se pidió un certificado al Ministerio del Tesoro, que no se puede tener en cuenta, según el artículo 550 del Código Judicial, por haber venido á los autos después de citadas las partes para sentencia. Pero aun dando por sentado que se hubiera justificado este último punto, todavía no se le podría reconocer al demandante el derecho que reclama, porque no ha comprobado que la Capellanía estuviera vacante desde mil ochocientos setenta y cinco, es decir, durante los quince años cuyos intereses demanda, y que en la sentencia definitiva dictada por el Tribunal el primero de Octubre de mil ochocientos noventa y uno (1891) se le hubieran mandado pagar tales intereses.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma, con costas á cargo del recurrente, la sentencia apelada de fecha veintidós de Julio del corriente año.

Publíquese, notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Noviembre treinta de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Aquilino Angel, como apoderado de José Manuel González V., del comercio de Colón, ocurrió á la Comisión de suministros por escrito que aparece con fecha catorce de Diciembre de mil ochocientos ochenta y siete, reclamando el reconocimiento del crédito de setenta y un mil doscientos pesos ($ 71,200), que, según se ve de las pruebas presentadas, proviene de lo siguiente:

Setenta mil pesos ($ 70,000), en que estiman los testigos las mercancías que González tenía en dos almacenes en la ciudad de Colón y que fueron totalmente incendiados el treinta y uno (31) de Marzo de ochocientos ochenta y cinco (1885), cuando tuvo lugar el incendio de esa ciudad.

Mil pesos ($ 1,000) que se dice fueron exigidos al mismo González por los revolucionarios al mando de Prestán, en la misma época.

Doscientos pesos ($ 200) que se exigieron como empréstito voluntario á dicho González por orden del Gobierno legítimo.

Como el Fiscal de la Comisión opinó que ella no tenía facultad para reconocer los setenta mil pesos ($ 70,000) provenientes del incendio de las mercancías, el apoderado de González contrajo la reclamación á los mil doscientos pesos ($ 1,200), provenientes de los empréstitos de que se ha hablado y la Comisión y el Ministerio del Tesoro contrajeron también sus fallos á este último crédito.

Respecto de los mil pesos ($ 1,000) exigidos por los revolucionarios, la Comisión, en su resolución número 3,807 de diez y siete de Junio último, aunque reconoció que existía la prueba de tres testigos para acreditar que fueran realmente pagados por González, se abstuvo de reconocer el crédito fundándose en que, habiendo sido una exacción hecha por los rebeldes, no estaba acreditada la circunstancia exigida por la ley, de que el reclamante hubiera sido partidario y sostenedor del Gobierno. Y en cuanto á los doscientos pesos ($ 200) que se exigieron á González como empréstito voluntario por las autoridades legítimas, la Comisión se abstuvo también de reconocerlos por no aparecer sino dos testigos que afirman el hecho dando razón de su dicho.

Confirmada por el Ministerio del Tesoro la resolución que negó el reconocimiento del crédito, se interpuso apelación para ante la Corte, y sustanciado el recurso, se procede á fallarlo en definitiva.

La Corte, por auto para mejor proveer, pidió certificación al Gobernador de Panamá respecto de la conducta política de José Manuel González V., y tanto ese funcionario como el Prefecto de Colón, afirman que no tienen conocimiento de que dicho González hubiera sido partidario y sostenedor del Gobierno legítimo, en la guerra de 1884 y 1885. No se ha podido, pues, acreditar la circunstancia cuya falta sirvió de fundamento á la Comisión para negar el reconocimiento; y en tal virtud no encontrando la Corte en qué fundar la revocación ó reforma del fallo apelado, de acuerdo con el dictamen del señor Fiscal especial, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la resolución del señor Ministro del Tesoro, número 3,087, de veintidós de Julio último, que confirmó la de la Comisión de que se ha hecho mención.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Noviembre veintiocho de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: El día veintidós de Abril del presente año, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bolívar, pronunció una sentencia, por medio de la cual absolvió á Hilario Bolívar R., á quien por auto de primero de Febrero anterior había llamado á juicio de responsabilidad por los trámites extraordinarios, en su carácter de Juez 2.° del Circuito de Mompox, por abandono de su empleo en Febrero de mil ochocientos noventa y uno.

Apelada la sentencia por el Fiscal, ha subido el expediente á esta Superioridad, donde para decidirlo, una vez que ha tenido la tramitación correspondiente, se considera:

De autos aparece comprobado plenamente, por medio de declaraciones de un número plural de testigos contestes, que el supuesto abandono de su empleo en que incurrió el expresado Juez 2.°, consistió en haber estado fuera de Mompox en los días primero y dos de Febrero de mil ochocientos noventa y uno, días que, según puede verse en el respectivo calendario, fueron feriados, por ser el primero de ellos domingo, y el segundo, el día que la Iglesia Católica celebra la fiesta de la Purificación de Nuestra Señora; pero que en los días treinta y uno de Enero y tres de Febrero de dicho año, estuvo Bolívar R. en su oficina.

El artículo 193 del Código de Organización Judicial es del tenor siguiente:

"Artículo 193. Todos los días habrá despacho en las Oficinas judiciales, exceptuados los días de fiesta del culto católico, los de Semana Santa, el 20 de Julio y los once últimos días de Diciembre. El despacho deberá estar abierto seis horas diarias, por lo menos, así: de las ocho á las diez de la mañana y de las doce del día á las cuatro de la tarde. Los Magistrados y Jueces concurrirán el tiempo necesario para mantener corriente el despacho de los negocios y harán saber al público, por un cartel fijado en la Secretaría, las horas de despacho diario obligatorio, que no podrán bajar de tres."

Esta disposición legal pone de manifiesto que el Juez Bolívar R. no tenía obligación de concurrir á su despacho en los dos días en que estuvo ausente de Mompox, y que, por consiguiente, el hecho por el cual se le juzga, no apareja responsabilidad.

La Corte, por tanto, de acuerdo con el concepto emitido en el asunto por el señor Procurador, y administrando justicia *en nombre de la República y por autoridad* de la ley, encuentra que son jurídicas las razones en que se apoya la sentencia apelada, y de consiguiente, la confirma.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta* y devuélvase al lugar de su procedencia el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, Noviembre veintinueve de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: El Tribunal Superior del Distrito Judicial del Magdalena llamó á juicio de responsabilidad por los trámites extraordinarios, á José Gnecco Coronado, Juez Superior de ese Distrito Judicial, por el delito de abandono de su destino. Sustanciada la causa por todos los trámites señalados por la ley, el trece de Septiembre último dictó á favor del procesado sentencia absolutoria, que ha venido en consulta á esta Superioridad.

Dado en vista el negocio al señor Procurador, y fijado en lista después, se procede á resolver.

Gnecco Coronado obtuvo licencia del Gobernador del Departamento del Magdalena para separarse de su empleo de Juez hasta el veinte de Febrero del corriente año, y antes de que llegara ese día pidió prórroga de la licencia, que le fué negada. A pesar de esto, no se presentó á desempeñar su destino, y por eso se le llamó á juicio de responsabilidad.

Durante el término de prueba de la causa, el procesado acreditó plenamente que si no se había presentado á ejercer las funciones de Juez, había sido por motivo de enfermedad, que no le permitía ejecutar trabajos intelectuales.

El Tribunal, en vista de este hecho y del artículo 526 del Código Penal, que excusa por completo de responsabilidad al funcionario ó empleado público que, por motivo de enfermedad que lo impida, no vuelve á ejercer sus funciones tan pronto como se le vence el término de la licencia, dictó su sentencia de absolución que lleva fecha trece de Septiembre último.

Como este fallo está conforme con los hechos que aparecen comprobados en el proceso y con el artículo 526 citado, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el concepto del señor Procurador, lo confirma.

Publíquese, notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.— LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO. — LUCAS VILLAFRÁDEZ. —*Gabriel Rosas*, Secretario.

AUTOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, veintisiete de Octubre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: El presente juicio de responsabilidad seguido por los trámites extraordinarios contra el ex-Juez del Circuito del Carmen, Agustín Mier, por abuso de autoridad, ha venido á la Corte á virtud de recurso de apelación que se otorgó al Ministerio Público contra la sentencia definitiva de veintitrés de Noviembre de mil ochocientos noventa y uno, por la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bolívar absolvió, en primera instancia, al acusado del cargo por el cual se le enjuició.

Sustanciado tal recurso hasta poner el negocio en estado de sentencia, esta Superioridad observa que el acusado no ha desvanecido el cargo que se le ha hecho y que consiste en haber coartado, con abuso manifiesto de su autoridad de Juez, el ejercicio de la abogacía á José E. Moré, prohibiéndole en varios juicios civiles y criminales que funcionara como apoderado de las partes, ó como defensor de los reos, fundándose para ello en que Moré tenía causa criminal pendiente, y se había dictado contra él auto de prisión, y en que éste es uno de los casos en que se suspende el ejercicio de la ciudadanía, según el artículo 17 de la Constitución, pues ni Mier en su defensa ni el Tribunal al absolverlo han logrado demostrar que la prohibición impuesta á Moré fuera legal, ni desvirtuar de modo alguno la culpabilidad del acusado al decretarla; pero como el delito cometido no puede ser sino el que define

y castiga el artículo 172 del Código Penal, que no tiene señalada pena corporal, y como el último de los actos ó providencias que lo constituyen, y de que hay constancia en los autos tuvo lugar en el mes de Junio de mil ochocientos ochenta y ocho, resulta que la pena ha prescrito conforme al artículo 95 del Código Penal vigente, que es aplicable al caso, según el artículo 99 ibidem, por haber trascurrido los cuatro años que en aquél se señalan para la prescripción, y de consiguiente, yá no hay lugar á continuar la causa, atentas las disposiciones de los artículos 1504, 1879 y siguientes del Código Judicial.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ordena la cesación de todo procedimiento criminal contra el ex-Juez Mier, por el delito que motivó la formación de la presente causa, la cual queda, en consecuencia, terminada.

Notifíquese, cópiese y publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el proceso al Tribunal de su procedencia.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, catorce de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Habiendo Agustín Calvo Mendívil dirigido al Juez del Circuito de Bogotá un escrito en que dice demandar de su hermana Lastenia Calvo de Castro la posesión y los respectivos intereses de la deuda que en dinero y con especial hipoteca, se obligó á deberle el señor Julián Morales Quintero, y que su hermana estaba poseyendo, agregando que para el caso de que la demandada expresara que poseía la casa como dueña, en subsidio y condicionalmente proponía demanda de propiedad sobre la dicha deuda, tal escrito fué repartido al Juez 3.° en diez y ocho de Junio del presente año, y el Juez pronunció en veintidós del mismo mes un auto en el que, considerando que no se podía seguir juicio posesorio de una deuda; que las acciones posesorias sólo pueden referirse á bienes raíces, ó á derechos reales en ellos, y que no se puede promover subsidiariamente, en medio de un juicio especial, una acción ordinaria, la cual, para ser admisible debía ajustarse á las reglas señaladas por el artículo 932 del Código Judicial, negó lo pedido por Calvo Mendívil en su expresado memorial.

Apelado tal auto y concedida la apelación, el Tribunal declaró el once de Julio siguiente, que dicha providencia no era apelable, con lo cual quedó ella ejecutoriada.

Calvo insistió, empero, por medio de un nuevo memorial dirigido al Juez 3.°, en que se diese curso á su demanda, y el Juez, en auto de fecha treinta del propio Julio, volvió á negar á Calvo M., en virtud de las razones anteriores, aumentadas con la de estar ejecutoriado su primer auto, todo lo pedido.

Calvo Mendívil denunció entonces al Juez 3.° ante el Tribunal Superior, como responsable de *denegación de justicia*, al tenor de lo dispuesto por el artículo 201 del Código de Organización Judicial.

Acogido el denuncio, practicábanse las diligencias legales del caso, cuando Calvo Mendívil pidió, en siete de Septiembre último, que se le tuviese, y se le tuvo en efecto, como acusador particular del mencionado Juez.

Y perfeccionadas las diligencias informativas, el Tribunal dictó, en veintisiete de Septiembre, el auto de sobreseimiento que, apelado por el acusador particular, ha dado lugar á la alzada del expediente á la Corte, en donde, para resolver en definitiva, se considera:

La cita que se hace del artículo 201 del Código de Organización Judicial, es absolutamente impertinente, porque el Juez acusado no pretextó en los dos autos que dieron lugar al denuncio y la acusación, silencio, oscuridad ó insuficiencia de las leyes, ni tampoco rehusó juzgar sino que hizo ver al demandante que las acciones por él intentadas no eran admisibles por adolecer de irregularidades de forma, enteramente contrarias á las prescripciones de la ley procedimental, y aun de yerros manifiestos en ciertos conceptos jurídicos, como el de acción posesoria de una deuda.

Menos pertinentes son todavía las citas que Calvo Mendívil hace en uno de sus escritos de los artículos 485 y 539 del Código Penal, de los cuales el primero trata de los *prevaricadores*, y el segundo señala la pena que corresponde al Magistrado ó Juez que dicte sentencia definitiva contra ley expresa y terminante, pues no se barrunta el razonamiento en que pudiera estribar la afirmación de que incurrió el Juez en prevaricación ó en violación de ley expresa, por el simple hecho de devolver á un demandante el escrito de demanda, por notar que no contenía los requisitos exigidos por el Código de la materia, providencia que está prevenida por el artículo 933 del Código Judicial.

Por lo demás las otras citas que en sus diversos memoriales Calvo Mendívil hace, por ejemplo, de los artículos 273 y 274 de la Ley 105 de 1890 y 276 del Código Judicial, si alguna aplicación pueden tener al presente casó es sólo para poner de relieve la razón con que el Juez acusado manifestó en sus mencionados autos que no era posible intentar acción posesoria de una deuda, ni por consiguiente admitir la demanda en que tal cosa se promoviese; cuando aquéllas y otras disposiciones semejantes están entre sí de acuerdo en declarar como principio que las acciones posesorias son las que tienen por objeto conservar ó recuperar la posesión de bienes raíces, ó de derechos reales constituídos en ellos.

La Corte, por tanto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el parecer del señor Procurador general, confirma el auto apelado.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judical*, y devuélvase al lugar de su procedencia el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Noviembre veinticuatro de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Por denuncio de Rafael Toro, dado al Corregidor de Filandia en veintitrés de Enero de mil ochocientos ochenta y seis, se instruyeron estas diligencias sumarias con el objeto de averiguar si Telésforo Ceballos había cometido los delitos de amenaza contra el mismo denunciante, de homicidio en la persona de Jesús Franco y de rebelión á mano armada contra el Gobierno nacional.

Practicado todo lo que el funcionario de instrucción consideró conveniente, pasó el sumario al Juez del Circuito de Quindío, como competente para resolver en el asunto. Dicho Juez sobreseyó en la averiguación de los mencionados hechos y consultó la providencia con el Tribunal del Departamento Judicial del Norte, en el extinguido Estado del Cauca, el cual en auto de ocho de Junio del referido año de mil ochocientos ochenta y seis, dispuso lo conveniente, en uso de sus atribuciones respecto de los delitos de amenazas y del homicidio que se dijo se había perpetrado por Ceballos, pues este crimen, caso de ser cierta su comisión, debía ser sometido á la jurisdicción del Circuito de Manizales; y en cuanto al delito de rebelión dispuso que el sobreseimiento se consultase con este Supremo Tribunal, como competente para conocer de él, por tratarse de un hecho de la jurisdicción nacional.

Pero como el Gobierno de la República expidió una amnistía, y en virtud de ella cesaron los procedimientos judiciales por la rebelión de 1884 y 1885, es el caso de que la Corte, por tratarse de un delito que se asegura fué cometido por un particular, se abstenga de censurar la providencia que ha venido en consulta; y por tanto dispone que se devuelva el presente sumario al Juez del Circuito de Quindío, residente en Cartago.

Notifíquese y cópiese.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

IMPRENTA DE ANTONIO M. SILVESTRE.

REPÚBLICA DE COLOMBIA.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AÑO VIII } Bogotá, 3 de Abril de 1893. { NÚM. 377.

CONTENIDO.

Págs.

PENA CAPITAL.

La que confirma el fallo por el cual el Tribunal Superior del Sur del Departamento de Santander condenó á Modesto Alvarado á la pena de muerte, por el delito de asesinato perpetrado en la persona de Ramón Marcial. (Magistrado ponente, doctor Isaza).. 105

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

La que concede á Micaelina Forero de Estrada y Napoleón Estrada una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Corrales).. 107
La que confirma la resolución que el Ministerio del Tesoro dictó en la reclamación de Aycardi Hermanos, por expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Trujillo)..... 107
La confirmatoria de la resolución dictada por el Ministerio del Tesoro en la reclamación de Gabriel Arango P., por expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Villafrádez)..... 108
La que niega á Cornelio Cuéllar una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Villafrádez)..... 108
La que concede á Rosa Flórez Urrego una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Isaza)..... 108
La que reconoce á favor de Salvador Valencia Fernández, como cesionario de Manuel Salvador Díaz, un crédito por expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas)..... 109
La que confirma la resolución que el Ministerio del Tesoro dictó en la reclamación de Aniceto Isaza y otros, por suministros. (Magistrado ponente, doctor Villafrádez)..... 119
La que concede á Alejandro Corrales una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas)..... 110

AUTOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

El en que sobresee la Corte en las diligencias sumarias instruídas contra Máximo Hernández Pinto, Administrador interino de la Aduana de Arauca, por varios hechos. (Magistrado ponente, doctor Pombo)..... 110
El que declara no haber lugar á seguimiento de causa contra el Magistrado suplente del Tribunal de Panamá, Ramón Valdés López, por delito definido en el artículo 378 del Código Penal adoptado en 1887. (Magistrado ponente, doctor Trujillo)..... 111
El que declara prescrita la pena que hubiera de imponerse al ex-Administrador de la Aduana de Carlosama, José F. Montenegro, por varios cargos. (Mgistrado ponente, doctor Corrales)..... 111
El que ordena la cesación de todo procedimiento criminal contra el doctor Luis R. Alfaro, y declara que no hay lugar á seguimiento de causa contra los señores Agustín Jované y Manuel José Pérez, Magistrados del Tribunal Superior de Panamá, por los delitos de falsedad y prevaricato. (Magistrado ponente, doctor Pombo)..... 112

GACETA JUDICIAL.

PENA CAPITAL.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, tres de Diciembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: El Juez Superior del Distrito Judicial del Sur del Departamento de Santander, en auto de veintiocho de Agosto de mil ochocientos noventa y uno, abrió causa criminal á Modesto Alvarado, soltero y natural de San-Benito, por el delito de homicidio, consumado en la persona de Ramón Marcial, en el sitio de "El-Palmar," en jurisdicción del Municipio de La-Paz, en la tarde del diez y siete de Julio del año de mil ochocientos noventa, y al mismo Modesto Alvarado y á Teresa Romero, por el delito de amancebamiento público, ejecutado en jurisdicción del mismo Municipio de La-Paz.

Notificado este auto á los procesados, y nombrado y posesionado el defensor, se siguió el juicio por los trámites del en que interviene el Jurado, observándose las fórmulas sustanciales cuya falta anula los procesos.

Reunido el Jurado de calificación en el Socorro, el día cuatro de Diciembre de mil ochocientos noventa y uno, declaró haberse cometido el delito de homicidio, calificado de asesinato por haber intervenido en él, además de la premeditación, las circunstancias de alevosía, traición y sobreseguro, según lo determina el artículo 440 del Código Penal en sus incisos 1.° y 3.°, delito que castigan los artículos 217 y 221 de la Ley 153 de 1887, pues ha alcanzado el grado máximo de delincuencia, y que Modesto Alvarado es responsable de este delito como autor principal.

En cuanto al amancebamiento, un Jurado reunido posteriormente, á causa de irregularidad en la cuestión sometida sobre este cargo al anterior, resolvió no haberse cometido tal delito; y, en consecuencia, se puso término al procedimiento en esa parte.

El citado Juez Superior dictó sentencia definitiva en cinco de Diciembre del año últimamente citado, y en ella condenó á Alvarado por el delito de asesinato perpetrado en la persona de Ramón Marcial (alias Conchalí), á sufrir la pena de muerte, que se ejecutará de la manera prescrita por la ley penal, en el sitio que determine el Tribunal, á pagar á los representantes de la víctima mil pesos ($ 1,000) como indemnización de daños y perjuicios y las costas del proceso.

De esta sentencia apeló el defensor del procesado, y surtido el recurso ante el Tribunal Superior del citado Distrito Judicial, éste profirió la de siete de Septiembre del año en curso, que ha sido elevada por consulta á esta Suprema Corte por no haberse interpuesto recurso de casación, por la cual confirma el fallo de primera instancia, designa la plaza pública de la ciudad de Vélez para la ejecución de la pena capital, y, para el caso de conmutación de esta pena, impone al reo las accesorias de pérdida de todo empleo público y de toda pensión y privación perpetua de los derechos políticos.

Tramitada la consulta ante la Corte, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 389 y 390 de la Ley 105 de 1890, ha llegado el caso de dictar la correspondiente sentencia definitiva.

En la sentencia del Tribunal no se incurrió en la primera de las causales de casación de las que determina el artículo 370 de la ley que acaba de citarse, porque la aludida sentencia no es violatoria de ley sustantiva ni de doctrina legal, una vez que está de acuerdo con el veredicto del Jurado, que declaró á Alvarado responsable del delito de asesinato en grado máximo, delito que merecía, por las leyes vigentes cuando se ejecutó, la pena capital, que es la misma que el Código Penal vigente impone al expresado delito.

Tampoco se ha incurrido en ninguna de las causas de nulidad designadas con los ordinales 1.°, 3.°, 4.°, 5.°, 6.° y 7.° del artículo 264 de la Ley 57 de 1887, que constituyen la 3.ª causal de casación, porque es innegable la competencia del Juez Seperior que conoció del asunto en primera instancia, lo mismo que la del Tribunal que lo falló en segunda. Fué notificado al reo el auto de enjuiciamiento y se hizo saber al mismo, á su defensor y al Fiscal, el auto por el cual se abrió la causa á prueba.

También se notificó á las mismas partes la providencia en que se señaló día para la celebración del juicio, y éste se ve-

rificó en el día señalado con asistencia del reo, de su defensor y del Agente del Ministerio Público.

Finalmente, no se incurrió en equivocación relativa á la denominación genérica del delito, á la época y lugar en que se cometió, ó al nombre y apellido de la persona responsable ó del ofendido.

La segunda causal de casación en asuntos criminales, que consiste en ser, á juicio de la Corte, notoriamente injusto el veredicto del Jurado, tampoco concurre en este proceso, y para demostrarlo basta reproducir la siguiente exposición de los hechos, contenida en la sentencia del Tribunal, que es resumen fiel de lo conducente del sumario:

"Tampoco el veredicto del Jurado es notoriamente injusto, pues que no sólo no contraría la evidencia de los hechos establecidos en los autos, sino que está conforme con ellos. Para demostrar esto basta tomar de las numerosas declaraciones relativas al delito y sus antecedentes, las de los testigos Casimiro Tirado, Juana Romero, Julián Angulo, María Eudoxia Losada, José María Cañas y Rufino Romero. Refieren los tres primeros que desde algún tiempo antes del delito, tiempo que el testigo Angulo hace subir á tres años, Alvarado aborrecía á Marciales, por celos con Rosa Zúñiga, primero, y con Teresa Romero después, ambas concubinas de Alvarado; y que dondequiera que lo encontraba lo molestaba y lo provocaba; que la víspera del homicidio pretendió Alvarado cometer un acto de suprema inmoralidad en casa del testigo Tirado, y como éste se lo impidiera, se enfureció y atacó á pescozones y porrazos á Marciales; que luégo sacó un cuchillo, del cual lo desarmó Tirado; y que entonces juró que mataría á Marciales.

"El testigo Angulo declara, además, 'que no vió cuando Modesto Alvarado le diera el tiro ó balazo á Ramón Marcial (alias Conchalí), pero que sí en el mismo día y fecha y hora á que se refiere el denuncio, se acababa de despedir Ramón Marcial del declarante, y estando á distancia como de cuadra y media, sintió la detonación de un tiro; que inmediatamente llegaron corriendo Casimiro Tirado y Rufino Romero, y le dieron cuenta de que acababa de matar de un balazo á Ramón Marcial, Modesto Alvarado; que en ese momento salió corriendo, y yá lo encontró muerto y ardiéndose entre un rozado que estaba prendido en fuego; que la ropa ya estaba quemada y el cuerpo completamente desnudo y recogido; que los pies y manos estaban reventados por el fuego; que el exponente, para no dejarlo arder entero, lo pudo favorecer echándole bastante agua; que el cuerpo se quedó en el mismo lugar donde estaba, *porque no hubo quien se lo ayudara á sepultar;* que él inmediatamente mandó á llamar al Comisario, y como no pareció, lo dejó ahí, y no habiéndose presentado, á las doce del día siguiente resolvió á esa hora mandar á José María Cañas, Casimiro Tirado y Rufino Romero fueran á enterrarlo, porque al exponente le amaneció enfermo y no pudo ir con ellos, quienes después volvieron á su casa y le dieron cuenta de que ya lo habían sepultado, pero que los perros esa noche se habían tragado una gran parte del cuerpo; que el exponente no examinó el cuerpo del cadáver, pero que sí le notó que le corría sangre de un lado de la cabeza.'

"María Eudoxia Losada declara, 'que le consta, porque lo vió y presenció, que el día diez y siete del mes de Julio último, como á las dos ó tres de la tarde, estando la declarante entre un rozado recogiendo leña, vió cuando Modesto Alvarado le estaba apuntando y le hizo un tiro con una escopeta á Ramón Marciales, que también estaba entre el rozado, y al momento cayó dando tres quejidos, y en el mismo momento quedó muerto; que Marciales estaba prendiendo fuego al rozado que era de él para hacer su labranza; que la declarante, del miedo que le dió de verlo muerto, y también del fuego que salía del rozado, salió corriendo para su casa; que no vió *nada más, si* se ardería ó no el cadáver; que todo fué Alvarado darle el tiro á Marciales y salió corriendo.'

"José María Cañas expone: 'que el día diez y siete de Julio del año próximo pasado, se encontraba el declarante en el caserío de "El-Palmar," en donde tuvo conocimiento, porque Julián Angulo le contó, que Modesto Alvarado había matado á Ramón Marciales, y que al día siguiente del hecho el mismo Angulo lo notificó para que fuera á ayudarlo á enterrar, y que efectivamente así lo hizo, y que al llegar al sitio en donde estaba el cadáver, notaron que estaba ardido medio lado y completamente desnudo, porque la ropa se le había ardido, y que los perros se habían comido la pierna del lado derecho, y que la herida ó heridas que recibió por consecuencia del tiro ó balazo, debió recibirla en la cabeza y la cara en el lado izquierdo, porque ahí tenía bastantes agujeros y bastante sangre; que después de que lo enterraron, el declarante se retiró.'

"Rufino Romero dice 'que le consta que el día diez y siete de Julio del año pasado, viniendo el declarante en asocio de Julián Angulo y Modesto Alvarado del sitio de "Santa-Rita," de cazar venado, al llegar al punto de "El-Palmar," hacia arriba de la casa de Juana Sánchez, se separaron el declarante y Julián Angulo de Modesto Alvarado, quien siguió por el camino real, y el declarante y Angulo por un desechito á mudar unos animales, esto á distancia de menos de una cuadra, y que á pocos instantes de haberse separado, sintieron un tiro, por lo que Julián Angulo dijo al declarante: *á que sí lo hizo Modesto de ir á matar á aquel otro,* y que entonces el declarante, llevado de la curiosidad, corrió al punto donde habían disparado, y antes de llegar allí se encontró con Modesto Alvarado, á quien le preguntó *que á qué le había tirado;* esto porque él llevaba una escopeta, contestándole en estas palabras: '*le tiré á Ramón, y quién sabe si lo maté,*' y que caminando unos cuatro pasos se trepó sobre una piedra grande y miró para donde había hecho el tiro, y estaba Marciales, y volvió y dijo al declarante: '*míralo allá, y se está quemando;*' que el declarante corrió á avisar á Julián Angulo, quien vino en asocio del declarante y de Casimiro Tirado al sitio donde estaba Marciales, y lo encontraron en un rozado que seguramente estaba quemando, muerto y prendido en fuego y completamente desnudo, porque la ropa se le había ardido; que para lograr apagarlo tuvieron que echarle bastante agua; pero que ya estaba ardido medio lado; que como ya era tarde, se fueron y lo dejaron ahí, y que al día siguiente se fueron á enterrarlo entre Julián Angulo, el declarante, José María Cañas y Casimiro Tirado, y que yá los perros se habían comido la pierna del lado derecho; que las heridas que recibió por consecuencia del balazo, las recibió en el lado izquierdo, en la cabeza y en la cara, pues que allí tenía bastantes agujeros y sangre. Que después lo enterraron y se retiraron.'

"Con estas declaraciones no infirmadas de modo alguno, y antes sí confirmadas en mucho por el dicho de otros testigos, se demuestra indudablemente la existencia del delito de homicidio y la responsabilidad del procesado como autor. Verdad es que no se practicó reconocimiento pericial en el cadáver de Ramón Marciales. Ello hubo de provenir de que la investigación del delito no se principió sino al cabo de treinta y dos días de ejecutado y de que Marciales fué sepultado en las montañas del sitio de "El-Palmar," y de seguro que allí no había quien practicara la autopsia del cadáver. Pero los testimonios trascritos son suficientes para comprobar el cuerpo del delito, conforme al artículo 1513 del Código Judicial. Por otra parte, la falta de ese reconocimiento podría cuando más engendrar duda acerca de la causa eficiente de la muerte de Marciales; y la duda no es bastante para declarar la injusticia notoria del fallo de un Jurado, pues que para esto es necesario que ese fallo esté en oposición manifiesta con hechos positivos evidentemente demostrados en los autos, según la doctrina del artículo 313 de la renombrada Ley 57.

"Comprueban también las deposiciones citadas que el homicidio se consumó con obstinada premeditación, á sangre fría, y sorprendiendo descuidada ó inadvertida á la víctima, y estas circunstancias lo elevan á la categoría de asesinato, de acuerdo con el artículo 440 del Código Penal de mil ochocientos ochenta y siete, que regía en la época de su ejecución; y, además, determinan el grado máximo de gravedad de él, conforme al artículo 221 de la Ley 153 de mil ochocientos ochenta y siete.

"Es cierto que el reo contradijo la existencia de estas circunstancias, pues que si bien confesó haber dado muerte á Marciales, afirmó que había procedido así porque éste dizque salió á asaltarlo, y lo atacó con un garrote. Más bien se com-

prende que semejante disculpa, desprovista en absoluto de prueba, no es otra cosa que una mentira descarada y audaz."

A lo anterior conviene agregar, que en el acto de la celebración del juicio, consta que el Fiscal preguntó al procesado si él había hecho el tiro á Marciales con intención de matarlo, y dijo: "sí, señor." Que el Juez le preguntó con qué estaba cargada la escopeta cuando le hizo el tiro, y dijo que con cortados; y que preguntado por el Fiscal si era verdad que le había dicho á Rufino Romero: "le tiré á Ramón, y quién sabe si lo maté," contestó: "Sí, señor, fué cierto."

Dedúcese de lo expuesto, que lejos de ser contraria á la evidencia la resolución del Jurado, es conforme á la verdad que resulta en el proceso, el cual no deja la menor duda de que Alvarado causó la muerte á Marcial con premeditación, á traición y sobre seguro, y sin la concurrencia de ninguna circunstancia que atenúe siquiera la gravedad de este crimen.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, aprueba la sentencia consultada, pronunciada en esta causa por el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Sur del Departamento de Santander, el siete de Septiembre del corriente año.

Pásese el proceso al Ministerio de Justicia, con el fin de que el Excelentísimo Señor Presidente de la República pueda ejercer la función constitucional de conmutación de la pena capital.

Déjese copia de esta sentencia, publíquese en la *Gaceta Judicial*, y luégo que el expediente sea devuelto por el Ministerio de Justicia, se remitirá al Tribunal de su procedencia.

LUCIO A. POMBO.— LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO. — LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintisiete de Octubre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Micaelina Forero, en su propio nombre y en el de su legítimo hijo menor de edad, Napoleón Estrada, ha ocurrido á este Supremo Tribunal, con el objeto de que por éste se les conceda la recompensa á que se creen con derecho por haber muerto el esposo de la primera y padre del segundo, á consecuencia de la herida que recibió en el brazo izquierdo, combatiendo en defensa del Gobierno nacional, en el punto llamado "Laguneta" ó "Helechales," á inmediaciones de la ciudad de Vélez, en Febrero de mil ochocientos ochenta y cinco, contra los enemigos armados del Gobierno, comandados por el Jefe revolucionario Ricardo Vargas R.

En el expediente que se tiene á la vista aparecen acreditados todos los hechos que requiere la Ley 84 de 1890 para optar la recompensa unitaria definitiva, de que aquélla trata, á saber:

1.° Que Napoleón Estrada, previas las ritualidades canónicas, contrajo matrimonio con Micaelina Forero, el día tres de Noviembre de mil ochocientos ochenta y uno, en la iglesia parroquial de Guavatá, según lo certifica el Cura Presbítero Antonio Vargas V.;

2.° Que en la misma iglesia fué bautizado José Napoleón Estrada, hijo legítimo de Napoleón Estrada y Micaelina Forero, el día catorce de Enero de mil ochocientos ochenta y siete, expresándose en la copia certificada de la inscripción hecha en el respectivo libro parroquial, expedida por el citado Cura párroco, que dicho párvulo nació el catorce de Abril del año anterior de mil ochocientos ochenta y cinco;

3.° Que en la ciudad de Vélez fué inhumado el cadáver de Napoleón Estrada, el día veintiséis de Febrero de mil ochocientos ochenta y cinco, según lo certifica el Cura Rector de la iglesia de la misma población, José Nepomuceno Riaño;

4.° Que el referido Napoleón Estrada fué herido en el brazo izquierdo, en el encuentro de armas que tuvo lugar en el mes de Febrero de mil ochocientos ochenta y cinco, en el paraje llamado "Laguneta," en las cercanías del Municipio de Vélez, combatiendo en sostenimiento del Gobierno nacional contra los enemigos armados de éste, mandados por Ricardo Vargas R.;

5.° Que á los pocos días de herido el mencionado Estrada, falleció á consecuencia de la herida, según lo declaran varios testigos presenciales y entre éstos el médico que lo asistió, doctor Moisés Matéus, quien asegura que á pesar de los esfuerzos que hizo por salvar la vida á Estrada no pudo evitarle la muerte, á consecuencia de la gangrena que le sobrevino en el brazo lesionado, que no dió tiempo á hacerle la amputación del caso;

6.° Que el herido Napoleón Estrada en la organización de las fuerzas militares que en el Municipio de Suaita decretó con delegación superior el Coronel Francisco L. Uribe, para defender al Gobierno nacional, fué nombrado Teniente de la columna. Es verdad que algunos testigos han declarado que Estrada militó últimamente en el grado de Capitán, pero éstos no aseguran de qué autoridad recibió el ascenso; y por el contrario, no aparece constancia alguna de él en el archivo de las oficinas generales del Ejército.

Como este punto es de bastante importancia en la presente reclamación, conviene hacer constar en este fallo que, á virtud de autos para mejor proveer, dictados por la Corte, se obtuvo la certificación del Secretario de Gobierno de la Gobernación del Departamento de Santander, sobre este punto, y con fecha catorce de Septiembre del corriente año, en estos términos: "Que el señor Coronel Francisco L. Uribe, en su calidad de Comandante del *Batallón Pienta*, número 1.°, y según las instrucciones que recibió de la Secretaría de Gobierno, como consta en la nota de 9 de Enero de 1885 dirigida á este Despacho, dictó la Orden general de la misma fecha, en la cual consta la organización de una columna con las fuerzas acantonadas entonces en la plaza de Suaita para la defensa del Gobierno legítimo; que en la misma citada Orden se nombró al señor Napoleón Estrada, Teniente de la 1.ª Compañía del *Batallón Socorro*, número 4.° al servicio del Gobierno, y continuó prestándolo como tal sin saberse hasta qué fecha," y

7.° También resultan acreditadas estas circunstancias: que Micaelina Forero y su hijo José Napoleón Estrada no han recibido pensión ni recompensa del Tesoro nacional por la muerte del Teniente Napoleón Estrada; que la primera permanece viuda, observa buena conducta, que es pobre y que durante el matrimonio que contrajo con Estrada vivió en buena armonía con él.

En mérito de todo lo relacionado y de conformidad con el dictamen del señor Procurador general de la Nación y de los artículos 1.°, 5.° y 11 de la Ley 84 de 1890, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que Micaelina Forero, vecina de Guavatá y viuda del Teniente Napoleón Estrada, y José Napoleón Estrada, hijo legítimo del expresado Teniente, tienen derecho al goce de una recompensa del Tesoro nacional de dos mil cuatrocientos pesos ($ 2,400), divisible por mitad entre ambos agraciados.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial*, dése aviso al Ministerio de Guerra y archívese el expediente,

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintisiete de Octubre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: La casa comercial de Aycardi Hermanos, de Zambrano (Departamento de Bolívar), ha pedido á la Comisión de suministros empréstitos y expropiaciones le reconozca á cargo del Tesoro nacional, la suma de trece mil sesenta pesos ($ 13,060), á que ascienden las expropiaciones que asegura le hicieron los rebeldes en la última guerra.

Dicha suma la descompone así:

Valor de los postes de las cercas de unos potreros que tomaron los revolucionarios, mil pesos.....$ 1,000

Valor del alambre destruído de las mismas cercas, mil pesos	1,000
Valor de 216 reses tomadas por los mismos, siete mil quinientos sesenta pesos	7,560
Valor de mercancías y otros efectos tomados por los rebeldes en Junio de 1885, mil cuatrocientos pesos	1,400
Valor de mercancías y dinero tomados por los mismos, en Marzo de 1885, mil quinientos pesos	1,500
Valor de seiscientos burros de leña tomados por los revolucionarios, seiscientos pesos	600
Total	$ 13,060

La Comisión no reconoció nada del importe de esta reclamación, y el Ministerio del Tesoro resolvió lo mismo, en providencia de fecha veintinueve de Febrero del corriente año, que lleva el número 2,649, y que ha venido en apelación á esta Superioridad.

Tanto la Comisión como el Ministerio del Tesoro, se fundaron para negar el reconocimiento pedido, en que ninguna de las partidas que componen la suma total de los trece mil sesenta pesos ($ 13,060), está comprobada en la forma prevenida por la ley, es decir, que no hay respecto de cada hecho tres declaraciones de testigos idóneos y contestes, por lo menos, que den razón de su dicho.

Como este fundamento es jurídico, y en el expediente consta que los reclamantes no han podido conseguir testigos presenciales que puedan concretar cada partida, ni fijar el importe de cada una de ellas, es preciso convenir en que la providencia materia del recurso de alzada es perfectamente corriente.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la resolución número 2,649 del Ministerio del Tesoro, que lleva fecha veintinueve de Febrero del presente año.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Diciembre primero de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Por resolución del Ministerio del Tesoro, dictada en este expediente con fecha catorce de Octubre último, y bajo el número tres mil trescientos doce, se reconocieron á Gabriel Arango P. siete mil pesos ($ 7,000), de los nueve mil ($ 9,000), que reclamó ante la Comisión de suministros y que ésta le negó totalmente, por valor de trescientas reses que le fueron expropiadas en la guerra de mil ochocientos setenta y seis y mil ochocientos setenta y siete, por agentes del Gobierno nacional para el sostenimiento del Ejército del Sur, al mando del General Julián Trujillo, tomándolas de sus haciendas de "Morado," "Santa-Elena" y "Esmeraldas," jurisdicción del Distrito de San-Francisco, en el extinguido Estado del Cauca, y se absolvió á la República de la mayor cantidad reclamada, revocando así lo resuelto por la Comisión.

Elevado el reclamo al conocimiento de la Corte por virtud de la apelación que interpusieron á la vez el Fiscal especial del ramo y el apoderado del reclamante, esta Superioridad, previa la sustanciación legal del recurso, procede á resolver definitivamente:

Al efecto considera:

1.° Que dicha reclamación se hizo en tiempo oportuno, pues aparece que el escrito respectivo fué presentado á la Comisión el veintiséis de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, cuando aún estaba vigente el artículo 8.° de la Ley 56 de aquel año, según el cual el término para iniciar toda clase de reclamaciones contra el Tesoro, por suministros, empréstitos, expropiaciones, exacciones y contribuciones de guerra, por consecuencia de la de mil ochocientos setenta y seis á mil ochocientos setenta y siete, debía concluír el último de Septiembre del mismo año de mil ochocientos ochenta y siete;

2.° Que vistas las declaraciones de los testigos Cecilio Bermúdez, Domingo Zapata, José María Villegas E., Deogracias Quinceno y Mario A. Uribe, y estimándolas verdad sabida y buena fe guardada, no queda duda á esta Superioridad, de que al reclamante le fueron expropiadas por las fuerzas que comandaba en mil ochocientos setenta y seis el General Julián Trujillo, para el sostenimiento de las mismas, trescientas reses por lo menos, que existían en las haciendas de "Morado," "Santa-Elena" y "Esmeraldas," yá citadas;

3.° Que tocante á la cuantía de la reclamación, la Corte estima justo fijarla en siete mil pesos ($ 7,000) como se hace en la resolución apelada, por considerar exagerado el avalúo dado por los testigos á los semovientes expropiados. (Artículo 10, Ley 44 de 1886).

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la resolución apelada.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial*, y devuélvase lo actuado á la Oficina de su origen.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Diciembre dos de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: De este expediente promovido por Cornelio Cuéllar con el objeto de que la Corte decrete á su favor el pago de la recompensa unitaria á que se cree con derecho conforme á la Ley 84 de 1890, por razón de invalidez proveniente de heridas que recibió en el año de mil ochocientos sesenta y uno, combatiendo en esta ciudad, en favor del Gobierno legítimo de la Confederación Granadina, resulta por certificación del Ministerio del Tesoro, que el peticionario gozó de una pensión de noventa y seis pesos ($ 96) anuales del Tesoro nacional, á virtud de título expedido por el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos de Colombia, con fecha veinte de Julio de mil ochocientos sesenta y cuatro, por haber sido inutilizado en acción de guerra, y que perdió el derecho á tal pensión por haberla capitalizado, de donde se sigue que hoy no puede otorgársele la recompensa que solicita, por disponerlo así expresa y terminantemente, el artículo 61 de la Ley 84 supracitada.

En consecuencia, la Corte, cumpliendo con este precepto y de acuerdo con el parecer del Procurador general, declara, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, que el demandante no tiene derecho á la recompensa del Tesoro nacional, que es objeto de la presente reclamación.

Notifíquese, publíquese en la *Gaceta Judicial*, y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Diciembre dos de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Por sentencia de esta Corte, proferida en veintinueve de Enero de mil ochocientos noventa, de acuerdo con los artículos 294, 298, 290 y 300 de la Ley 153 de 1887, se declaró que Rosa Flórez Urrego, como hija legítima del General de Brigada Antonio María Flórez, militar de la Independencia, tenía derecho á una recompensa unitaria de tres mil pesos ($ 3,000).

Hoy, por medio de su apoderado, Manuel Sarmiento, solicita la misma Dolores Urrego que se le declare derecho al suplemento de recompensa que reconoce el artículo 13 de la Ley 84 de 1890, y para fundar su derecho ha justificado lo siguiente:

1.° Que permanece soltera, que continúa observando buena conducta y en estado de suma pobreza;

2.° Que es la única persona que tiene derecho á recompensa por motivo de los servicios prestados á la causa de la Independencia por el citado General Antonio María Flórez, pues aunque hay otro hijo de él, llamado Antonio María, éste es mayor de edad, goza de salud y de recursos para la vida y ha manifestado á la Corte por medio de apoderado que no tiene derecho á participar de recompensa.

Figura también en autos la hoja de servicios de Antonio María Flórez, el despacho de General efectivo de Brigada conferido por el Presidente de la República, en nueve de Marzo de mil ochocientos ochenta y uno, la referida sentencia de la Corte y las demás pruebas que se tuvieron en cuenta para dictarla.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, y en conformidad con lo que dispone el artículo 13 de la Ley 81 de 1890, declara que Rosa Flórez Urrego, como hija del militar de la Independencia, General de Brigada Antonio María Flórez, tiene derecho á una recompensa unitaria de seis mil seiscientos pesos ($ 6,600), que es lo que queda deduciendo de nueve mil seiscientos pesos ($ 9,600), sueldo de un General en cuatro años, tres mil pesos ($ 3,000) que se le habían reconocido por sentencia de veintinueve de Enero de mil ochocientos noventa.

Déjese copia de esta sentencia, cumuníquese al Ministerio de Guerra, publíquese en la *Gaceta Judicial* y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isazá.—Baltasar Botero Uribe.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales. Juan Evangelista Trujillo.—Lucas Villafrádez.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Diciembre tres de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: La Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones pronunció, en trece de Agosto último, su resolución número 3,975, y en ella negó á Salvador Valencia Fernández, cesionario de Manuel Salvador Díaz, el reconocimiento de dos mil quinientos ochenta y seis pesos ($ 2,586), valor de las exacciones de guerra sufridas por este último en la de mil ochocientos ochenta y cinco; y habiendo el señor Ministro del Tesoro aprobado, en catorce de Septiembre y bajo el número 3,200, aquella resolución, el demandante interpuso apelación para ante esta Superioridad, donde sustanciado legalmente el recurso, para decidirlo se considera:

Las pruebas presentadas por el demandante para sostener su reclamación consisten en la relación que oportunamente se elevó al Secretario de Hacienda del Gobernador del Cauca y fué allí debidamente registrada, y en las declaraciones que ante el Juez del Circuito en lo civil de Popayán y con intervención del Fiscal respectivo, rindieron los testigos Juan Antonio Velasco, Floro Quilindo y Martín Quilindo, los cuales afirman contestes el hecho de las exacciones sufridas por Díaz, en la guerra de mil ochocientos ochenta y cinco, expresan como razón de su dicho haber ellos presenciado las expropiaciones, y, según el certificado del Fiscal, son idóneos.

En cuanto al número, clase y precio de las objetos expropiados, están de acuerdo entre sí, sin más diferencia que la de que Floro Quilindo avalúa la carga de maíz, á razón de diez pesos ($ 10), en tanto que los otros testigos la avalúan á seis pesos ($ 6), como aparece en la relación de Díaz.

Mas no figurando el maíz en la reclamación sino al precio menor de seis pesos ($ 6) por carga, no cabe acerca de esta partida hacer ninguna reforma. Hay también una diferencia en el precio de los toros que en la relación figuran á razón de veintidós pesos ($ 22), mientras que uno de los testigos los avalúa á razón de veinte pesos ($ 20); en el de las yeguas que aparecen en la relación á veinte pesos ($ 20), en tanto que dos testigos las justiprecian á diez y seis pesos ($ 16); y en el de las vacas que están en la relación estimadas á veinte pesos ($ 20) cuando el testigo Velasco considera que valen á diez y ocho pesos ($ 18).

Poniendo el menor precio de los objetos á que corresponden estas partidas, hay que sustraer del total de la reclamación la suma de ciento treinta y seis pesos ($ 136), y hecha la operación se obtiene el resultado de que la reclamación, sólo alcanza á la suma de dos mil cuatrocientos cincuenta pesos ($ 2,450).

En efecto, la relación consta de las siguientes partidas:

85	cargas de trigo, á diez pesos	$ 850
65	cargas de maíz, á seis pesos	390
9	yeguas, á veinte pesos	180
18	toros, á veintidós pesos	396
32	vacas, á veinte pesos	640
2	mulas á sesenta y cinco pesos	130
	Total	$ 2,586

De que deben deducirse las tres partidas siguientes:

Por el mayor avalúo dado á las yeguas	$	36
Por el mayor avalúo dado á los toros		36
Por el mayor avalúo dado á las vacas		64
Total de deducciones	$	136

El crédito reclamado se halla de consiguiente comprobado en la forma que exige el inciso 3.° del artículo 2.° de la Ley 44 de 1886, sin más variación que la que se acaba de indicar.

Como según la afirmación de los testigos, de estas expropiaciones unas fueron causadas por las fuerzas del Gobierno y otras por los rebeldes, no era posible dejar de comprobar el carácter político de Díaz; y acerca de este punto, si bien es cierto que el Gobernador del Cauca dice en su certificación del folio 18 que en su Oficina no existe documento alguno referente al expresado Díaz, á quien tampoco conoce personalmente para poder dar testimonio de los servicios que prestara al Gobierno en la guerra de mil ochocientos ochenta cinco, también es verdad que al folio 17 corre una certificación en que José María González U., como General de División y Jefe de Estado Mayor de la 2.ª División, asegura bajo juramento que le consta que Díaz prestó al Gobierno sus servicios con toda fidelidad y decisión, como que militó bajo sus órdenes tanto en la campaña de mil ochocientos ochenta y cinco como en la de mil ochocientos setenta y seis, en la que fué herido en la Cuchilla del Tambo.

Estos comprobantes acreditan plenamente la justicia de la reclamación intentada, razón por la que la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y apartándose del dictamen del Fiscal de la Comisión, revoca la resolución apelada, y reconoce á cargo del Tesoro nacional y á favor de Salvador Valencia Fernández, cesionario de Manuel Salvador Díaz, el crédito de dos mil cuatrocientos cincuenta pesos ($ 2,450), valor de las exacciones sufridas por el último, en la guerra de mil ochocientos ochenta y cinco.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Baltasar Botero Uribe.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales. Juan Evangelista Trujillo.—Lucas Villafrádez.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Diciembre nueve de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: La Comisión de suministros, por resolución de fecha doce de Agosto del presente año, rehusó reconocer á cargo de la Nación la suma de mil novecientos setenta y cinco pesos, sesenta y cinco centavos ($ 1,975-65) que Manuel A. Valencia, titulándose apoderado de Manuel J. Alvarez C., reclamó por suministros hechos al Gobierno legítimo por Aniceto Isaza, José María Zapata, José Ignacio Jiménez, Isaac Salazar y otros, durante la guerra de 1885, y el Ministerio del Tesoro aprobó esta determinación por la que á su vez profirió con fecha veintiocho de Septiembre último, bajo el número 3,233. De esta providencia apeló el reclamante, y

con tal motivo ha venido el asunto al conocimiento de la Corte, la cual procede á decidir el recurso después de sustanciarlo conforme á la ley.

Tanto la resolución apelada como la de la Comisión se han fundado para negar el reconocimiento de los créditos reclamados en que los documentos que se han presentado para la comprobación de éstos son vales ó recibos originales expedidos por empleados subalternos, que los acreedores han debido cambiar por estipulaciones ó recibos en forma, del Gobernador del respectivo Departamento ú otra autoridad competente, para probar con estos documentos sus derechos, conforme á la Ley 152 de 1887, y en concepto de la Corte esa razón es concluyente y perentoria en contra del reclamo de Alvarez C., pues dicha ley establece con toda claridad en su artículo 4.° que "los documentos por suministros, empréstitos y expropiaciones, respecto de los cuales no se hubiere cumplido la formalidad de la conversión prevenida por el Decreto número 102 de 17 de Febrero de 1886, no podrán servir de comprobante suficiente para el reconocimiento del crédito, mientras tal conversión no se efectúe." Es verdad que con la aplicación de este precepto legal se da influencia decisiva contra la reclamación de Alvarez, á la resolución del Gobernador de Antioquia en que se declaró no haber lugar á la conversión ó cambio de los documentos presentados por aquél; pero ése es precisamente el objeto de la ley, la cual debe aplicarse en todo caso, sin hacer distinciones ni excepciones que son de todo punto inadmisibles atentos los términos generales y absolutos en que ella está concebida.

El apelante observa que algunos de los recibos presentados por el reclamante están autenticados por certificados del Secretario del Gobernador de Antioquia, y sostiene que la autenticación equivale al cambio requerido por la ley; pero como tal equivalencia no existe, pues el legislador no la ha consagrado y el sentido genuino de las palabras la repugna y resiste, es obvio que el argumento que se funda en tal supuesto carece de fuerza.

Esta Superioridad advierte, por último, que no hay constancia de la fecha en que la reclamación de Alvarez C. se presentara ante la Comisión, por lo cual se ignora si fué introducida dentro del término fijado por las leyes, y además encuentra que de los documentos presentados por el reclamante, sólo algunos están endosados á su favor, los restante no le pertenecen de modo alguno y de consiguiente ha carecido y carece de derecho para impetrar el reconocimiento de los respectivos créditos.

En consecuencia, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el parecer fiscal, confirma la resolución apelada.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial*, y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez de Diciembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Como apoderado de Alejandro Corrales, vecino de Pradera en el Departamento del Cauca, Andrés Lara solicita se conceda á aquél una recompensa militar, en virtud de que habiendo entrado como Sargento 2.°, á órdenes del General Juan E. Ulloa, en el combate de Viges, en Febrero de mil ochocientos ochenta y cinco, en defensa del Gobierno, recibió allí una herida de bala que le causó una invalidez parcial ó relativa.

Acompáñanse á la demanda los siguientes comprobantes:

1.° La diligencia del reconocimiento practicado en Corrales por la Junta de profesores nombrados al efecto por el Prefecto de Palmira, doctores Belisario A. Caicedo, Rogerio Aragón y Rogerio Cruz Pombo, diligencia en que consta que dichos profesores declararon que, habiendo practicado el reconocimiento, hallaron que la invalidez de que adolece Corrales, por causa de la herida, "es parcial y de por vida, una vez que los movimientos naturales del brazo, de flexión, extensión etc., son casi completos, pero no como en el estado fisiológico, sin atrofia del miembro ni parálisis parcial;"

2.° Las declaraciones rendidas ante el Juez civil del Circuito de Palmira, por Adriano Calero, Fausto M. García, Manuel de Jesús Herrera, y Eliseo Banderas, de las cuales los tres primeros afirman que fueron compañeros de armas de Corrales en el combate de Viges, el primero como Capitán de la 3.ª Compañía del mismo Batallón á que aquél pertenecía; el segundo como segundo Jefe de dicho Batallón, y el tercero como soldado que también fué herido allí.

De tales declaraciones resulta plenamente comprobado que Corrales entró en aquel combate como Sargento 2.° de la cuarta Compañía del *Batallón 9.° de Palmira;* que efectivamente recibió allí la herida que le causó invalidez relativa en el brazo izquierdo; que dicho Corrales es el mismo que intenta la presente demanda; y que se halla hoy en estado de suma pobreza é inhabilitado para el trabajo, porque después de aquellas heridas sufrió un accidente á causa del cual perdió una pierna;

3.° Un certificado expedido por el señor Ministro del Tesoro, con el cual se acredita que Corrales no ha recibido hasta ahora recompensa alguna del Tesoro público, y

4.° En virtud de auto para mejor proveer de fecha trece de Junio último en que se dispuso que los médicos reconocedores de Corrales, ampliaran su exposición á fin de determinar con precisión si aquél podría ó no trabajar como lo hacía antes de sufrir la herida, reuniéronse de nuevo los doctores Belisario A. Caicedo, Rogerio Cruz P. y Rogerio Aragón, y habiendo reconocido por segunda vez al expresado Corrales, expusieron con juramento ante el Prefecto de Palmira, que no podía aquél trabajar como lo hacía antes de sufrir la herida, por no tener su brazo izquierdo todos los movimientos fisiológicos que necesita para su perfecto funcionamiento.

Estos comprobantes son suficientes para declarar que Corrales se halla en el caso de que tratan los artículos 5.° (inciso 8.°), 17, 18 y 19 de la Ley 84 de 1890; razón por la que la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el parecer del señor Procurador, decide que Alejandro Corrales tiene derecho á una recompensa unitaria definitiva de cuatrocientos ocho pesos ($ 408) que se le pagarán del Tesoro público.

Notifíquese, cópiese, publíquese y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

AUTOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veinticuatro de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: El día dos de Agosto de 1888 y bajo el número 80, Román Dávila H., en su calidad de Administrador de la Aduana de Arauca dirigió una comunicación al Gobernador del Departamento de Boyacá, en la cual, con el fin de informar acerca de la conducta observada por Máximo Hernández Pinto durante los sesenta días que funcionó como Administrador interino, por licencia concedida al mismo Dávila, se hicieron á Hernández los siguientes cargos:

1.° Haber permitido el arribo al puerto de Arauca de un vapor venezolano procedente de ciudad Bolívar, sin que para ello se hubiesen llenado las formalidades legales;

2.° Haber permitido el desembarque de unas mercancías traídas por dicho vapor, mediante arreglos privados con los respectivos interesados, quienes obtuvieron por ese medio considerables rebajas en los derechos de Aduana;

3.° Haber permitido el desembarque, sin el pago de los mismos derechos, de un cargamento de sal venido en el mismo vapor por cuenta de su Capitán;

4.° No haber llevado los libros de cuentas de la Administración.

Se agregó por Dávila en la mencionada nota que cuando él trató de exigir á Hernández la debida responsabilidad, éste se fué para Venezuela, su patria, en donde se puso á cubierto de tal responsabilidad.

El Gobernador de Boyacá remitió la nota en referencia al Prefecto de la Provincia de Casanare y éste la remitió á su vez al Juez municipal de Arauca para que se esclareciesen los hechos afirmados por el Administrador Dávila. Efectivamente el Juez mencionado, por providencia de siete de Mayo de 1889, ordenó la instrucción del sumario y recibió muchas declaraciones que remitió al dicho Prefecto el veintinueve de los mismos mes y año. En Mayo de 1890 se recibió en la Corte dicho sumario y á solicitud del señor Procurador se mandó ampliar principalmente para obtener la comprobación del carácter oficial de Hernández Pinto y la declaración del denunciante Román Dávila H. Al efecto, libráronse diferentes despachos ya al Gobernador de Boyacá, ya al Administrador y Alcalde de Arauca, ya al Juez del Circuito de Cúcuta.

Por fin el tres de Junio del presente año se recibió en la Corte una copia enviada por el Administrador de la Aduana, en la que consta que Hernández Pinto tomó posesión del empleo en 1.° de Abril de 1888, sin que haya sido posible obtener la declaración de Dávila H.

Perfeccionado el sumario, y oído el concepto del señor Procurador, debe decidirse de su mérito.

De las varias declaraciones recibidas por el Juez municipal de Arauca, no se deduce, como lo indica el señor Procurador, un cargo concreto, debidamente comprobado, de los denunciados por Dávila. Lo único que resulta es que el mismo Dávila hizo arreglos con Hernández Pinto por los derechos que dejó de cobrar éste como Administrador interino por la sal desembarcada, y que Dávila recibió al efecto una cantidad de dinero dada por Hernández; que no es cierto que Hernández Pinto se separara de Arauca luégo que llegara Dávila, pues varios testigos afirman que permaneció allí como un mes viviendo en intimidad con el mismo Dávila; finalmente, aparece probada la mala conducta de Dávila, y por el certificado pedido á la Oficina general de Cuentas, se ha acreditado que ni Dávila ni Hernández han rendido las de su manejo como Administradores de la Aduana de Arauca.

Como respecto de los hechos ejecutados por Dávila se separó lo conducente para averiguar su responsabilidad, por orden de la Corte, y se dictó sentencia el trece de Mayo de 1891, como aparece del informe de la Secretaría, y como toca á la Oficina general de Cuentas aplicar los apremios del caso para conseguir que los responsables rindan sus respectivas cuentas, conforme á los incisos 3.° y 7.° del artículo 14 de la Ley 146 de 1886, la Corte Suprema, que no encuentra motivo para llevar adelante la investigación con probabilidades de establecer un cargo concreto y determinado sobre el cual pudiera recaer con fundamento legal un auto de proceder, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1628 del Código Judicial y con el dictamen del señor Procurador de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que las presentes diligencias no prestan mérito para abrir causa de responsabilidad al sindicado y sobresee en el procedimiento.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y archívese el sumario.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Baltasar Botero Uribe.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Juan Evangelista Trujillo.—Lucas Villafrádez.—*Gabriel Rosas* Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Noviembre veintiocho de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Tomás Paredes denunció ante esta Superioridad á Ramón Valdés López, Magistrado suplente, en ejercicio, del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Panamá, como responsable del delito definido en el artículo 378 del Código Penal adoptado en 1887, por haberse constituído Valdés López, siendo Juez 2.° del Circuito de Panamá, deudor de Máximo Heurtematte el once de Febrero de 1891, á tiempo que cursaba en su Oficina un juicio intentado por Heurtematte contra la sucesión de Sebastián Grau. Paredes presentó con su denunció los documentos que consideró suficientes para comprobar su aserto.

Perfeccionado el sumario con varias diligencias practicadas después del denuncio, se pasa á examinar si hay lugar á dictar auto de proceder contra el sindicado.

El artículo 378 del Código Penal, que se considera violado, exige tres condiciones para que se cometa el delito en él definido, á saber:

1.ª Que en la Oficina del Juez ó Magistrado se agite un pleito, proceso ó negocio de que conozca ó deba conocer dicho Juez ó Magistrado;

2.ª Que en ese entonces uno de estos empleados contraiga con el que litigue ó esté procesado una obligación pecuniaria ó la de fiador suyo, y

3.ª Que esto lo haga el Juez ó Magistrado á sabiendas.

Ninguna de estas tres condiciones se encuentra en el presente caso que se examina; porque si es verdad que en el Juzgado del sindicado existía un juicio de Máximo Heurtematte contra la sucesión de Sebastián Grau, también lo es que no se ha comprobado que se estuviera agitando ese juicio cuando Valdés López firmó el documento de once de Febrero de 1891; porque este documento no fué otorgado á favor del dueño del pleito, sino de M. Heurtematte & Compañía, persona diferente de aquél, y la deuda no fué contraída cuando se extendió el documento, sino en época anterior; y porque no se ha acreditado que el sindicado hiciera estas cosas á sabiendas, circunstancia que era preciso justificar por no ser dichas tres condiciones puntos de derecho, para que tuvieran á su favor la presunción legal de que habla el inciso 2.° del artículo 2025 del Código Judicial.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el concepto del señor Procurador, declara que no hay lugar á seguimiento de causa contra el Magistrado suplente Ramón Valdés López.

Notifíquese, cópiese y archívese el sumario.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Baltasar Botero Uribe.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Juan Evangelista Trujillo.—Lucas Villafrádez.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, cinco de Diciembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Ante el Jefe municipal de Ipiales se instruyeron unas diligencias sumarias, con el objeto de averiguar la responsabilidad en que se decía habían incurrido los Guardas de la Aduana de Carlosama, Rafael Peña y Víctor Narváez, por haber atacado á mano armada al Comisario de Policía, Cirilo López, en la mañana del día once de Mayo de 1880. Reconocido el agredido López, se comprobó que los maltratos le han causado una enfermedad que se calculó excedería de ocho días, por lo cual dichas diligencias fueron pasadas al Juez del Circuito de Obando, como competente para conocer de ellas; pero como la averiguación de los hechos se practicó con notoria lentitud, dicho Juez, en auto de catorce de Mayo del corriente año, dictó auto declarando que debía cesar el procedimiento por prescripción, pues aun siendo corporal la pena que hubiera de infligirse, habían trascurrido más de diez años.

Consultado este auto con el Tribunal del Distrito Judicial de Pasto, fué aprobado con fecha diez y nueve de Julio último; mas como en las mismas diligencias sumarias se hicieron por varios testigos cargos al Administrador de la Aduana de Carlosama, José F. Montenegro, aun que no concretos, el Tribunal de Pasto previno al Juez del Circuito de Obando, que las enviase á esta Superioridad, para que decida lo conveniente, teniendo en cuenta el mérito jurídico que resulte del sumario.

Recibido éste en la Corte, se dió vista al señor Procurador general de la Nación, quien es de concepto que no estando comprobado que el ex-Administrador Montenegro hubiera intervenido en el maltratamiento de obra inferido al Comisario Cirilo López, y que sólo resultan de las declaraciones rendidas por algunos testigos, que el mencionado empleado nacional hizo algunas amenazas contra personas indeterminadas, debe cesar el procedimiento con relación á este funcionario, una vez que han trascurrido más de diez años desde que tuvo lugar la comisión del delito de maltrato.

La Corte, para dejar establecida en este expediente su jurisdicción, ó sea la competencia para conocer de este asunto, dispuso que se agregase, como en efecto lo han sido, copias del Decreto del Poder Ejecutivo, en que se nombró Administrador de la Aduana de Carlosama, á José F. Montenegro, y de la diligencia de su posesión para ejercer el destino.

Y estando la Corte de acuerdo con el parecer del señor Procurador general, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que no debe adelantarse el procedimiento por estar prescrita la pena, cualquiera que fuese su naturaleza, que hubiera de imponerse al ex-Administrador Montenegro.

Notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente, para que se averigüe el responsable ó los responsables de la demora causada en esta actuación.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO. — LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez de Diciembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Por escrito de cinco de Enero del presente año, dirigido de Panamá por José Hilario Cano, se denunciaron ante la Corte los delitos de prevaricato y falsedad en documentos públicos, imputados por el denunciante al Magistrado del Tribunal del Distrito Judicial de Panamá, Agustín Jované.

Como en concepto de Cano, los expresados delitos fueron cometidos en una sentencia definitiva que se dictó por dicho Tribunal en segunda instancia, la Corte creyó que la responsabilidad que trataba de averiguarse tenía que hacerse extensiva á los otros Magistrados Luis R. Alfaro y Manuel José Pérez, que firmaron dicha sentencia, y ordenó la ampliación del sumario para que se acreditara el carácter oficial de todos los Magistrados que dictaron el fallo y se trajese original el expediente á que dicho fallo se refería, que no era otro que el juicio ordinario seguido por Domingo Díaz contra José Hilario Cano, por la cantidad de setecientos cincuenta pesos ($ 750) en que Díaz estimó el valor de unos arrendamientos del terreno ocupado por Cano. Por solicitud del señor Procurador se trajo también al sumario el expediente original que contiene el juicio que Francisco Ardila, como apoderado de la Compañía del Ferrocarril de Panamá, siguió contra José Hilario Cano para que éste fuera lanzado del terreno llamado "Las-Esplanadas."

Perfeccionado el sumario y oído el dictamen del señor Procurador de la Nación, quien ha opinado por el sobreseimiento, procede la Corte á decidir de su mérito.

El once de Julio de mil ochocientos ochenta y nueve demandó Domingo Díaz á José Hilario Cano ante el Juez 2.° de lo civil del Circuito de Panamá para que se le obligase á pagar la cantidad de setecientos cincuenta pesos ($ 750) por alquileres del terreno que ocupa el demandado en las esplanadas de la ciudad, de cuyas tierras está en posesión el demandante como arrendatario á nombre de la Compañía del Canal interoceánico. Notificada la demanda, Cano la contestó negando el derecho y los hechos en que se fundaba, y abierto á prueba el juicio y producidas por las partes las que creyeron conveniente, se dictó sentencia de primera instancia por la cual se declaró: "1° que el actor no ha probado sus derechos á demandar, por no haber constancia de los que le fueron vendidos; 2.° que el demandado no ha probado las excepciones que propuso."

Fué el apoderado del actor quien únicamente interpuso apelación contra esa sentencia, pues el demandado se conformó con ella; y seguida la instancia ante el Tribunal se le dió fin al juicio con la sentencia de diez y nueve de Octubre de mil ochocientos noventa y uno, que revocó la sentencia apelada y condenó á José Hilario Cano á pagar á Díaz la cantidad demandada.

El delito de prevaricato atribuído por el denunciante al Magistrado Jované que definen y castigan los artículos 485 y 486 del Código Penal, como lo dice el mismo denunciante, se hace consistir en que la sentencia no declaró á su favor la excepción de prescripción alegada por Cano, y en que no cree aplicable la disposición del artículo 2625 del Código Civil de Panamá en que se fundó el Tribunal para declarar que Cano no ha tenido posesión en el terreno ni podido alegar prescripción sobre él.

Pero, como lo dice el señor Procurador, "ha sido doctrina aceptada por la Corte la de que el delito de prevaricato no puede considerarse cometido en una sentencia, sino cuando se reúnen estas dos condiciones: primera, que el fallo sea contrario á la ley expresa, y segunda, que el Juzgador al infringir la ley, lo haya hecho impulsado por el interés ó por afecto ó desafecto á alguna de las partes litigantes. De acuerdo con esta doctrina, que está consignada en el capítulo 1.°, título 10, libro 3.° del Código Penal hoy vigente, la querella de Cano, en lo que respecta al primer cargo, carece de fundamento, porque en los autos donde figura original el juicio en que se dictó la sentencia acusada, no hay prueba ó indicio siquiera de que aquella sentencia fuera resultado del soborno ó de pasión alguna en favor del demandante ó demandado. Aun suponiendo, pues, que el fallo acusado fuese violatorio de ley, no habiéndose comprobado que fuera el interés ó el afecto ó desafecto el móvil de la infracción legal, el delito de prevaricato no existe.

En cuanto al cargo de falsedad en documento público, hecho también por el denunciante, hace notar el señor Procurador que no se encuentra en el proceso un sólo documento que pueda considerarse alterado, y el mismo Cano omite expresar en qué consiste la falsificación, pues se limita á decir "que se abstiene de hacer un detenido examen acerca de ese delito, porque teme molestar demasiado la atención de la Corte y porque los hechos son de tal naturaleza que no cree puedan escaparse á la penetración de esta Corporación. No apareciendo, pues, que exista el delito de falsificación, nada puede resolver la Corte acerca de él.

Como los hechos denunciados no podían circunscribirse solamente al Magistrado Jované, la Corte ha hecho extensivo el examen de los cargos á todos los Magistrados que suscribieron la sentencia motivo del denuncio; y como hay constancia oficial del fallecimiento del Magistrado Luis R. Alfaro, la Corte Suprema, en cumplimiento de lo que disponen los artículos 1504 y 1876 del Código Judicial y de acuerdo con el dictamen del señor Procurador de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que ha cesado todo procedimiento criminal contra el Magistrado Luis R. Alfaro, y que no hay lugar al seguimiento de causa de responsabilidad contra los Magistrados Agustín Jované y Manuel José Pérez, por los hechos denunciados por José Hilario Cano.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial*, devuélvanse al Juez de lo civil del Circuito de Panamá los dos expedientes que se le pidieron, y archívese el sumario.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS. —MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO. — LUCAS VILLAFRÁDEZ. — *Gabriel Rosas*, Secretario.

IMPRENTA DE ANTONIO M. SILVESTRE.
Director, Tomás Galarza.

REPÚBLICA DE COLOMBIA.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AÑO VIII | Bogotá, 6 de Abril de 1893. | NÚM. 378.

CONTENIDO.

Págs.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

La que declara no ser casable la sentencia que el Tribunal Superior de Cundinamarca dictó en el juicio seguido por Matías Delgado contra José María Delgado y Juana B. Delgado de Posse, sobre declaratoria de herederos. (Magistrado ponente, doctor Ruiz Barreto)..... 113

La que niega á Eduvigis Pérez una pensión vitalicia. (Magistrado ponente, doctor Villafrádez)..... 118

La que revoca la resolución dictada por el Ministerio del Tesoro en la reclamación de Ricardo Castañeda, por expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Pombo)..... 118

La que niega á Manuel José Cobo una pensión vitalicia. (Magistrado ponente, doctor Corrales)..... 119

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

El que niega la admisión del recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Cundinamarca en el juicio seguido por Cándido Jara contra Cipriana y Ciriaco Parada, para que se declare que el demandante es padre legítimo de Gabriel Jara. (Magistrado ponente, doctor Botero Uribe)..... 119

El en que revoca la Corte el auto dictado por ella, con fecha 16 de Noviembre de 1892, en el cual negaba la admisión del recurso de hecho interpuesto por Mercedes Olier de López contra una sentencia de pregón y remate dictada por el Administrador de la Aduana de Barranquilla en la ejecución librada por éste empleado contra López Olier & C.ª (Magistrado ponente, doctor Botero Uribe)..... 120

NEGOCIOS CRIMINALES.

El que confirma el auto de sobreseimiento dictado por el Tribunal Superior de Tunja en el sumario seguido contra Gregorio Quiñones, Juez 2.º del Circuito de Occidente, por el delito de falsedad. (Magistrado ponente, doctor Trujillo)..... 120

GACETA JUDICIAL.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez y seis de Julio de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: José María Delgado y Juana B. Delgado de Posse, con intervención la última de Eliécer Posse, como su marido, todos vecinos de Bogotá, interpusieron recurso de casación contra la sentencia dictada el dos de Marzo de mil ochocientos noventa y uno por el Tribunal del Distrito Judicial de Cundinamarca, en el juicio civil ordinario seguido por Matías Delgado, de la misma vecindad, contra los recurrentes y los demás que se crean con derecho en la sucesión de Justo Delgado, para que se declare que el demandante es heredero legitimario de Justo Delgado, con exclusión de toda otra persona, y que le corresponden todos los bienes de la sucesión, deducidas ciertas deudas testamentarias.

Concedido el recurso vino el expediente á esta Superioridad, donde, previa la tramitación de él, se declaró desierto, por providencia que fué reconsiderada y revocada por otra que estableció que sí se había formalizado el recurso en oportunidad, todo lo cual ha dado lugar al presente fallo en el que para proceder de acuerdo con el orden legal (artículo 381, Ley 105 de 1890), se decidirá previamente sobre la admisibilidad del recurso, á cuyo fin se considera:

Que habiéndose interpuesto recurso contra la sentencia el veinte de Abril, la que quedó notificada el veinte de Marzo anterior, por los demandados expresados nominalmente en el libelo, el recurso fué interpuesto oportunamente y por persona hábil.

Que el fallo fué dictado por un Tribunal Superior de Distrito Judicial, en asunto civil y en juicio ordinario, apoyándose en leyes que han regido en toda la República desde mil ochocientos ochenta y siete, y en otras de Cundinamarca idénticas en esencia á las nacionales en vigor, sentencia en la cual se trata de asunto relativo al estado civil de las personas cuyo interés es mayor de tres mil pesos ($ 3,000), existiendo, además, contrariedad entre dicha sentencia y la del Juez inferior, la que fué revocada en puntos sustanciales, todo lo cual da al asunto los caracteres generales necesarios para tratar de la admisibilidad del recurso, si los cargos hechos á la sentencia son verdaderos y caben dentro de alguna ó algunas de las causales de casación que reconoce la ley.

Alega el recurrente como causales para alegar fundar el recurso, las señaladas en el artículo 369 de la Ley 105 con los números 1.º, 2.º, 3.º, 5.º y 6.º

Para estudiar estas causales se hace preciso recordar los antecedentes del asunto, que en lo conducente son estos:

Demandó Matías Delgado, ante el Juez 2.º del Circuito de Bogotá, en estos términos: "á todos los que se crean con derecho á la sucesión de mi finado padre, señor Justo Delgado, y á los bienes de ésta, por título de herederos, para que con su audiencia y por sentencia definitiva y previos los trámites de un juicio ordinario, se declare: 1.º que soy heredero legitimario de mi citado padre, señor Justo Delgado, con exclusión de todos los demás que con el carácter de herederos se presenten optando derechos en dicha sucesión, y 2.º que me corresponden todos los bienes de la sucesión que queden, hecha la deducción del valor de los legados de que trata el testamento que otorgó mi citado padre, y que corre en autos."

Fundó estas peticiones en los siguientes hechos:

"1.º Mi finado padre otorgó su testamento por escritura pública de 15 de Junio de 1878, otorgada bajo el número 610, ante el señor Notario 1.º del Círculo de Bogotá;

"2.º En dicho testamento dispuso mi citado padre de sus bienes, haciendo en favor de varios individuos los legados que allí se ven, y me reconoció como su único hijo natural, manifestando de esta manera que su voluntad era que yo heredase los bienes que le pertenecen, deducido el valor de los legados, los cuales pasan de dos mil pesos ($ 2,000);

"3.º Mi citado padre, Justo Delgado, murió el 9 de Abril de 1883 sin que hubiese revocado el testamento arriba dicho;

"4.º Mi expresado padre murió sin dejar ascendientes, ni descendientes, ni hermanos legítimos, ni naturales, ni cónyuge, ni persona alguna que lo represente en este orden de sucesión;

"5.º Yo he sido declarado heredero de mi finado padre, en mi calidad de hijo natural, como consta de autos."

A esta petición contestaron los nombrados Juana B. y José María Delgado contradiciendo algunos hechos y desconociendo el derecho á la pretensión exclusiva demandada.

El hecho más importante de los contradichos fué aquél en que el actor sostuvo la negativa indefinida que dice en sustancia: no hay más persona con derecho á suceder *abintestato* que el actor. Tocante al derecho se alegaron estas razones por el demandado.

Los artículos 1059 y 1244 del Código Civil de Cundinamarca en que se sustenta la acción no son procedentes en el caso, porque el primero supone la inexistencia de herederos *abintestato* colaterales y los demandados sostienen ser hijos legítimos de hermanos legítimos del testador. El segundo, 1244, en cuanto incluye, según los demandados, á los hijos naturales entre los legitimarios, sólo significa en el caso presente, que no pueden ser aquéllos desheredados en la legítima rigurosa, mas no que faltando institución de heredero, el hijo natural excluya á los otros descendientes consanguíneos que con él pueden concurrir.

Opusieron los demandados, además, á la acción intentada la excepción de cosa juzgada, la que fundan en que los demandados fueron declarados herederos en juicio sumario seguido por los trámites que señalaba la Ley de 14 de Agosto de 1869 de Cundinamarca, sustancialmente reproducida más tarde en la legislación nacional vigente. Agregan que en ese juicio se hizo parte el demandante al apelar del reconocimiento de herederos hecho en favor de los demandados, y que en este recurso fué vencido, por haber sido confirmado dicho reconocimiento en el Tribunal de última instancia, cuya decisión debe tener la fuerza de cosa juzgada contra la acción de petición de herencia deducida en este juicio.

La controversia así fijada se falló por el ya citado Juez 2.°, en estos términos:

"1.° El señor Matías Delgado no es heredero legitimario de Justo Delgado, *con exclusión de todos los demás herederos* que se han presentado optando derechos á la sucesión;

"2.° No corresponden al señor Matías Delgado todos los bienes de la sucesión de Justo Delgado, hecha la deducción de los legados en especie y de las deudas testamentarias hereditarias;

"3.° La herencia de Justo Delgado debe distribuírse, salvo las excepciones contenidas en su testamento, de acuerdo con las leyes que reglan las sucesiones intestadas, leyes que estuvieron vigentes el día de la muerte del testador;

"4.° No es indigno Matías Delgado para suceder *abintestato* en los bienes dejados por Justo Delgado;

"5.° No está probada la excepción perentoria de cosa juzgada propuesta por José María y Juana Delgado, y

"6.° Estima el suscrito Juez que son temerarias las pretensiones del señor Matías Delgado, y, por tanto condena al demandante en las costas de la demanda principal."

En primera instancia figuraron al principio el demandante, los dos precitados Delgados, demandados, el Agente del Ministerio Público y un defensor nombrado á las personas inciertas incluídas entre los demandados por el actor. El Agente del Ministerio Público juzgó que, dada la presencia de interesados particulares con pretensiones opuestas y el contenido del Acuerdo número 412 de esta Superioridad como Suprema Corte de Justicia, su intervención en el juicio no quedaba justificada y no volvió á intervenir.

De las otras partes que siguieron interviniendo sólo apeló la del demandante, y en virtud de este recurso se surtió la segunda instancia, la que concluye con sentencia definitiva, que dice así:

"En mérito de lo expuesto, el Tribunal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve la presente controversia, así: 1.° Matías Delgado, en su calidad de hijo natural de Justo Delgado, es heredero legitimario de éste, con exclusión de todas las personas, que con el carácter de herederos se han presentado *optando derechos á la sucesión de Justo Delgado*; 2.° corresponden á Matías Delgado todos los bienes de la sucesión que queden, hecha deducción del valor de los legados de que trata el testamento otorgado por Justo Delgado, con fecha quince de Junio de mil ochocientos setenta y ocho, bajo el número seiscientos diez (610), y 3.° revócase la sentencia apelada en las declaraciones hechas bajo los ordinales 1.°, 2.° y 6.° de su parte resolutiva.

Con estos antecedentes debe procederse al estudio de las causales de casación propuestas, á saber:

Primera causal.

Violación del artículo 1158 del Código Civil (1160 del Código Civil de Cundinamarca).

Esta violación se alega en el concepto de que por haber sido desconocida en la sentencia del Tribunal, la fuerza probatoria de la sentencia referida, dictada en juicio sumario que declaró á los demandados herederos en calidad de sobrinos legítimos de Justo Delgado, se desconoció la autoridad de la cosa juzgada, autoridad que esa sentencia debía tener al fallarse este pleito.

Se ve que la violación de ley sustantiva, si la hubo, por este motivo, habría sido violación inmediata de las leyes que reconozcan la presunción de verdad en ciertos fallos judiciales, y mediata y remota del citado artículo 1150 del Código Civil. De modo que, fundando el recurrente esta causal en el supuesto de una errónea apreciación de derecho en la prueba que sobre ciertos hechos contenga la sentencia en que se reconoció á los demandados como herederos, debe decidirse previamente del valor legal de la referida sentencia como prueba, ya que el recurrente alegó también la causal 1.ª del artículo 369 de la citada Ley 105, fundándola en errónea apreciación de la citada prueba,

El fallo acusado desconoció que existiese envuelta en la sentencia dictada en el juicio sumario sobre declaratoria de herederos de los demandados, la presunción de cosa juzgada, en la cual lejos de incurrir en error de derecho al apreciar esa prueba, aplicó rectamente el artículo 831 del Código Judicial.

Tampoco puede considerarse como errónea la sentencia en la apreciación de la presentada como prueba del parentesco entre los demandantes y Justo Delgado, supuesto que ese parentesco era lo que principalmente debía establecerse en el juicio ordinario sobre petición de herencia; y porque habiendo sido dictada la sentencia en cuestión en un juicio sumario sobre declaración de herederos, en los cuales, como expresamente lo dice el artículo 831 del Código Judicial citado por los recurrentes, las sentencias aunque ejecutoriadas, no fundan excepción de cosa juzgada, es indudable que aquella sentencia no constituye en este negocio la prueba requerida, con razón tanto mayor, si se tiene en cuenta que en el juicio sobre petición de herencia lo que se disputa es el título que á heredar se tenga, háyase ó no declarado en juicio sumario la existencia de ese título en el demandado. Ahora bien, si se ha reconocido en una sentencia de esta clase el carácter de heredero, entonces el juicio ordinario en que se intenta la acción de petición de herencia con exclusión del que ya tiene sentencia obtenida sumariamente, va encaminado directamente á invalidar esa sentencia. De manera que si ésta fuese plena prueba, se incurriría en petición de principio.

Tocante á la apreciación de las pruebas presentadas para establecer el parentesco que daría derecho á los demandados para suceder *ab intestato* á Justo Delgado, han atacado éstos la sentencia del Tribunal por errónea interpretación de la prueba en el hecho y en el derecho.

La primera clase de error no se ha establecido con elementos fehacientes que demuestren la equivocación *evidente* del Tribunal. La segunda, como nacida de inducciones hechas, *sacadas* á la luz del criterio legal, merece un estudio más detenido. La sentencia acusada dice acerca de ese punto lo siguiente:

"Ya se ha visto que la demanda de que últimamente se ha hablado, se encamina á que se declare que el prenombrado Matías Delgado es *único* heredero, con exclusión de toda otra persona, de Justo Delgado, y que, en consecuencia, tiene derecho en su calidad de tal, á recoger *todos* los bienes de la sucesión. Ahora bien, como los demandados conocidos, José María y Juana B. Delgado, se han opuesto á las pretensiones del actor, que consideran exageradas y aun temerarias, pues aseveran que ellos también tienen derecho á llevar parte de los bienes herenciales, en su carácter de sobrinos legítimos

del testador, de conformidad con la doctrina que consagran los artículos 1052, 1054, 1057 y 1160 del Código Civil de Cundinamarca, que es el aplicable, á ellos correspondía suministrar la prueba de los hechos constituídos del derecho que reclaman, porque el que afirma una cosa es el que tiene deber de probarla, y no el que la niega. *Ei incumbit probare qui dicit, non qui negat* (artículo 543 del Código Judicial). Este papel claro que han debido desempeñar ó asumir los demandados en el drama jurídico, fué completamente variado y cambiado en sentido diametralmente opuesto, pues el señor Juez de la causa declaró sin razón, por autos ejecutoriados, confeso al demandante en estos hechos importantísimos, sobre los cuales gira la controversia: "1.° José María y Juana B. Delgado son hijos legítimos de Atanasio Delgado, yá difunto, y éste fué hermano legítimo de Justo Delgado de cuya causa de sucesión se trata; y 2.° José María y Juana Delgado han sido declarados judicialmente, sin perjuicios de terceros, herederos *ab intestato* de Justo Delgado, en su calidad de sobrinos legítimos, y se le obligó á que probase en contra de los hechos sobre que versó la declaración de confeso, que no ha debido hacerse porque no es cierto, como lo dice el señor Juez *a quo*, que el demandante hubiese convenido en ellos; todo lo contrario es lo que aparece en el escrito de réplica del apoderado del demandante, en la parte en que dice: "No *conviniendo* en la contestación dada, pido que el juicio se llame á prueba por el término legal, por tener hechos que justificar."

"Mas es el caso de preguntar, ¿esa declaración de confeso, ó en otros términos, una confesión *ficta* sobre hechos relativos al estado civil de las personas, tiene valor jurídico, de tal modo que ella sirve por sí sola para demostrar lo que debe establecerse en la forma especial exigida por la ley? El Tribunal no vacila en responder negativamente la cuestión, porque los hechos constitutivos del estado civil, fuente generadora de derechos y obligaciones para el individuo, son de orden público; la sociedad está interesada en que esos hechos sean la fiel expresión de la verdad y con tal fin la ley ha reglamentado la materia de un modo especialísimo en cuanto á su prueba, pues establece tres categorías en el orden siguiente: 1.° Exige como prueba principal preconstituída la del registro ó sea la constancia del hecho en los libros del estado civil; 2.° La supletoria, que consiste en documentos auténticos ó testigos que hayan presenciado los hechos constitutivos del estado civil, y 3.° La prueba de posesión notoria de ese mismo estado que se establece por medio de testigos. Como se ve, la prueba por confesión queda excluída de esta tarifa, y con razón, porque de otro modo serían muy frecuentes las colusiones, en perjuicio de terceros. Esta doctrina es clara y se halla explícitamente reconocida en los artículos 236, 428 y 2552 del Código Civil de Cundinamarca, reproducidos en los artículos 223, 402 y 2473 del Código Civil vigente.

"En conformidad con lo que se lleva expuesto, resulta que la prueba por confesión ficta,—que ni aun siquiera se halla bien establecida, puesto que no se sustanció la articulación de que trata el artículo 940 del Código Judicial,—no sirve en el caso que nos ocupa para comprobar las relaciones de parentesco que existan ó puedan existir entre los demandados y el causante de la sucesión, para saber si realmente son sus sobrinos legítimos, y por ende si tienen derecho á heredarlo. Veamos, pues, si han aducido la prueba legal pertinente al caso.

"A la contestación de la demanda acompañaron una sentencia en la que se les declaró herederos *ab intestato* de Justo Delgado, *sin perjuicio de tercero*. Dicho fallo no puede apreciarse como prueba en el presente juicio, porque, en primer lugar, se obtuvo por la vía sumaria, y sabido es que esta clase de decisiones no hacen tránsito á cosa juzgada, puesto que en juicio ordinario pueden ser reformadas y aun revocadas; porque no hay constancia en autos de que Matías Delgado hubiera sido parte en el juicio breve y sumario de petición de herencia, porque no se sabe cuáles fueron las pruebas que hicieron valer los demandados para acreditar su parentesco con el difunto; porque no se sabe si tales pruebas fueron debidamente apreciadas por el Juez que los declaró herederos, y porque, en fin, las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que fueron pronunciadas (artículo 17 del Código Civil).

"En esta segunda instancia los demandados no adujeron pruebas de ninguna clase á excepción de las que suministraron después de estar conclusos los autos y con motivo del auto que se dictó para mejor proveer, á fin de declarar ciertos puntos dudosos.

"Las pruebas de que se ha hecho mérito son del tenor siguiente:

"Una copia expedida por el Notario 2.° del Círculo de Bogotá referente al juicio de sucesión de Claudio Delgado que se protocoló en el registro respectivo;

"Un certificado expedido por el Cura-párroco de Tocancipá, en el que consta que en los libros parroquiales no se encuentra la partida de bautismo de Atanasio Delgado.

"Otro certificado, autorizado por el Cura-excusador de la parroquia eclesiástica de Sopó, en el que se inserta una copia literal de la partida de bautismo de José María Atanasio, de quien se dice que es hijo legítimo de José Atanasio Delgado y Catalina Zamudio, y que sus abuelos paternos y maternos son, por su orden, Roque Delgado y Micaela Tobar, Agustín Zamudio y Encarnación Sánchez;

"Otro certificado expedido por el mismo funcionario, en que también se trascribe la partida de nacimiento de Justo Delgado, de la cual aparece que es hijo legítimo de Roque Delgado y Micaela Tobar, y

"Otro certificado expedido por el mismo Cura-excusador, en que se hace constar que en los libros parroquiales no se hallan las partidas de matrimonio de Roque Delgado y Micaela Tobar, de Atanasio Delgado y Catalina Zamudio.

"En la copia primeramente relacionada figuran, entre otros, los siguiente documentos y actuaciones: 1.° la partida de bautismo de Claudio Delgado; allí se dice que es hijo legítimo de Atanasio del mismo apellido y de Catalina Zamudio, y que sus abuelos son Roque Delgado y Micaela Tobar, Agustín Zamudio y Encarnación Sánchez; 2.° una información sumaria compuesta de los testigos Justo y Rosalía Delgado, é instruída ante el señor Juez 2.° del Circuito de Bogotá. Las declaraciones dicen así, por su orden: "que conoció de vista, trato y comunicación á Catalina Zamudio y á Atanasio Delgado, por ser *éste su hermano;* que le consta, por haber asistido al matrimonio, que dichos señores fueron casados en la iglesia parroquial del (así está) Sopó; "que conoció de vista, trato y comunicación á Catalina Zamudio y á su *hermano* Atanasio Delgado, que por las relaciones de parentesco que con ellos tiene y por *haber estado* en la casa de dichos señores *el día de su matrimonio*, le consta que son casados;" 3.° un certificado del Cura-párroco de la iglesia de Las-Nieves de esta ciudad, en que se hace constar que la partida de bautizo de Juana Bautista Delgado no se halla en los libros parroquiales; 4.° un certificado del Cura-párroco de Sopó, en el que afirma que no ha encontrado la partida de matrimonio de Atanasio Delgado y Catalina Zamudio, y 5.° la declaración del testigo Justo Delgado, rendida ante el mismo señor Juez 2.° del Circuito de Bogotá, en que asevera que sabe de ciencia cierta, que Juana B. Delgado fué bautizada en la iglesia de Las-Nieves y que es hija de Atanasio Delgado y de Catalina Zamudio.

"No se necesita de gran penetración y de forzar la voluntad para llevar al ánimo imparcial la convicción moral de que José María y Juana B. Delgado son sobrinos legítimos de Justo Delgado; las pruebas aducidas de que se ha hecho mención, corroboradas por el testamento que obra en autos, no dejarían nada que desear, si el Tribunal tuviera libertad para apreciar en conciencia dichas pruebas, si pudiese obrar como Juez de hecho. Pero es el caso que debe sujetar la apreciación de los hechos á una tarifa legal de pruebas, según la cual, penoso es decirlo, no están justificados los hechos genealógicos del parentesco alegado por los demandados, como se pasa á demostrar.

"El entroncamiento en el caso que se analiza, debe partir del matrimonio que se dice contraído por Roque Delgado y Micaela Tobar, para saber si Justo y Anastasio Delgado, son hijos legítimos procreados en él, y, por consiguiente, herma-

nos entre sí. Pues bien: no se ha dado la prueba de este matrimonio.

"No se ha traído á los autos la partida de bautizo de Atanasio Delgado, ni, en su defecto, la prueba supletoria del caso, sin la cual no es posible establecer la filiación legítima, ó sea la relación de causalidad de padre á hijo."

La parte recurrente razona así contra los conceptos antes copiados de la sentencia.

"VIII

"Hemos dicho con relación á la primera causal de que se acaba de tratar, que en la sentencia acusada se incurrió en error de hecho, y es tiempo de exponer en qué consiste ese error, que está acreditado de un modo evidente con documento auténtico que corre en el proceso. Los demandados no tenían obligación de dar ninguna prueba contra las pretensiones del demandante; esta es una prerrogativa de defensa que desconoció el Tribunal diciendo que al oponerse á la demanda los demandados, en su carácter de sobrinos legítimos del testador, á ellos correspondía suministrar la prueba de los hechos constitutivos del derecho que reclaman. Error! El artículo 542 del Código Judicial establece que el demandante debe dar la prueba sobre el hecho ó la cosa que negare el demandado. Esta regla se sustenta con el artículo 1757 del Código Civil al establecer que incumbe probar las obligaciones ó su extinción al que alega aquéllas ó ésta. La obligación demandada por el señor Matías Delgado, es la de que los sobrinos legítimos de su padre lo reconozcan como único y universal heredero. Ahora bien, ¿quién debía dar la prueba del derecho invocado por el demandante? No hay duda, señores Magistrados, que era al demandante á quien le tocaba probar la existencia de su derecho; y es tan mala su causa, que el mismo Tribunal reconoce la imposibilidad en que estaba D. Matías Delgado para dar esa prueba. Á pesar de esto, los demandados acompañaron á la contestación de la demanda una sentencia, en la que se les declaró herederos abintestato, *sin perjuicio de terceros*. Dicho fallo (dice el Tribunal, después de haber declarado que tampoco funda la excepción de cosa juzgada), dicho fallo no puede apreciarse *como prueba* en el presente juicio, porque se obtuvo por la vía sumaria, y sabido es que esta clase de decisiones no hacen tránsito á cosa juzgada, porque no hay constancia en autos de que Matías Delgado hubiera sido parte en el juicio, breve y sumario, de petición de herencia; porque no se sabe cuáles fueron las pruebas que hicieron valer los demandados para acreditar su parentesco con el difunto; porque no se sabe si tales pruebas fueron debidamente apreciadas, y porque, en fin, las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que fueron pronunciadas. Todas estas apreciaciones del Tribunal son inaplicables al documento auténtico que se registra en los autos á los folios 11 y 12 del cuaderno primero: 1.° porque ese es un documento auténtico conforme al artículo 678 del Código Judicial, que declara que las actuaciones judiciales de *toda especie* son documentos auténticos; 2.° porque esa declaratoria de herederos fué dictada en el juicio de sucesión promovido por el mismo Matías Delgado, allá donde presentó el testamento á que alude su libelo de demanda; 3.° porque toda sentencia consentida y ejecutoriada, se debe suponer verdadera y debidamente fundada, según las más triviales nociones de jurisprudencia, y 4.° porque toda sentencia ejecutoriada debe cumplirse; funda la excepción de cosa juzgada y hace nula cualquiera otra sentencia posterior que le sea contraria (artículo 831 del Código Judicial). Por consiguiente, el documento auténtico que presentaron los señores José María y Juana B. Delgado, con la contestación de la demanda, es una prueba perfecta de su entroncamiento con el señor Justo Delgado; mucho más cuando el *Código Civil permite que* el estado civil de las personas se acredite por documentos auténticos, según el artículo 395 del Código Civil. No tuvo, pues, razón el Tribunal para declarar como prueba del estado civil de José María y Juana B. Delgado la referida declaratoria de herederos, sin embargo de no tener obligación los demandados de dar prueba alguna. Sin esa prueba ellos debían quedar absueltos de la demanda. Esta prueba y las demás que adujeron los demandados con motivo del "auto para mejor proveer," que dictó el Tribunal, entre las cuales está una declaración dada por el mismo señor Justo Delgado, por la que se acredita que Atanasio Delgado era su hermano, casado con Catalina Zamudio y padre de Juana Bautista y José María Delgado, hizo que el Tribunal consignara en su sentencia estas notabilísimas palabras: "No se necesita de gran penetración y de forzar la voluntad para llevar al ánimo imparcial la convicción moral de que José María y Juana B. Delgado, son sobrinos legítimos de Justo Delgado; las pruebas aducidas de que se ha hecho mención, corroboradas por el testamento que obra en autos, no dejarían nada que desear si el Tribunal tuviera libertad, para apreciar en conciencia, dichas pruebas, si pudiese obrar como Juez de hecho."

"Y después de esta paladina confesión, desconoce esa convicción moral para fallar en seguida, declarando al demandante dueño exclusivo de todos los bienes de la sucesión. Si aquí no hay un manifiesto error de hecho, sería de declarar que los errores de hecho no existen. Seguramente el Tribunal encontró irregular el que el demandante, señor Matías Delgado, hubiera seguido un juicio enteramente baldío, siendo cierto que una de las premisas, la de que es hijo natural de Justo Delgado, estaba probada y reconocida plenamente en los autos. El Tribunal prescindió de la consideración de que el pleito intentado por el señor Matías Delgado no tiene asidero en la ley; que es absurda la acción, y que si esa sentencia llegara á quedar subsistiendo como precedente, quedarían amenazados los derechos de todos los herederos hasta los de los hijos legítimos, porque bastaría una acción como ésta, que tiene por fundamento una negación, para que quedaran preteridos los herederos que no la promovieron.

"Y reparad, señores Magistrados, cómo el Tribunal echa de menos las pruebas de parte de los demandados; pero no repara que el demandante no dió siquiera la prueba indispensable de la defunción de Justo Delgado, cuyo hecho formaba la base imprescindible de todo aquél que reclame derechos hereditarios."

La comparación de aquellos conceptos con estas alegaciones fija el debate en este caso, que en definitiva viene á consistir en que los recurrentes estiman legalmente comprobado el parentesco entre Justo Delgado y los demandados José María y Juana B. Delgado; y en que el Tribunal consideró la prueba presentada insuficiente por la falta de la prueba directa del matrimonio de Roque Delgado con Micaela Tobar, del cual hayan nacido Justo Delgado y Atanasio Delgado; por falta además de la partida de matrimonio de Atanasio Delgado con Catalina Zamudio, del cual hayan nacido los demandados; y también, por falta de la partida de bautizo de Juana B. Delgado.

Atendido el criterio legal que se desprende del Código Civil en materia de pruebas del estado civil, es evidente que debieron traerse los comprobantes que echó de menos el Tribunal, á fin de estimar comprobado el parentesco aludido; sin que obste á ello el que el demandante haya debido dar la prueba de su acción, porque habiendo él propuesto en la demanda una negación absoluta, como fué la de no haber parientes en grado de poder competir con él en su carácter de hijo natural, hecho que negaron los demandados, tocaba á éstos, aunque demandados, dar la prueba del hecho afirmativo contenido en su negación, ó sea el parentesco en ese grado. Tampoco obsta la especie de confesión que se dice hizo en juicio la parte demandante, porque en materia de estado civil, la prueba de confesión es insuficiente, por no poder ese estado ser objeto de transacción. Las pruebas de declaraciones que, como supletorias, se adujeron por los demandados, son también insuficientes, por no recaer sobre los hechos constitutivos del estado civil.

Acerca de la declaración que de heredero se hizo en juicio sumario en favor de los demandados, esta sentencia es sólo un concepto del Juez que la dictó, revocable en juicio ordinario en que se controvierta el hecho (parentesco) fundamental de dicho fallo, y no pertenece, por lo mismo, á la clase de documentos auténticos que en este caso se requieren.

Sentado que no se dió la prueba del parentesco, aparece

que no se ha demostrado la existencia de la primera causal de casación del artículo 369 citado por violación del artículo 1148 del Código Civil ni por errónea apreciación de hecho y de derecho en las pruebas aducidas para comprobar el parentesco de que se ha venido tratando.

No es admisible tampoco el argumento relativo á la violación de los artículos 2530 y 2541 del Código Civil, en cuanto por él se sostiene que la acción de petición de herencia intentada contra todos los que se crean con derecho á la sucesión de Justo Delgado, afectaría el derecho que á pedir la herencia concede la ley durante treinta años; porque esos dos artículos hablan de las maneras de suspenderse la prescripción adquisitiva y extintiva, y la sentencia no ha desconocido esas maneras de suspensión ni en abstracto ni en concreto.

La acusación hecha por violación de los artículos 1037 y 1049 del Código Civil, en el concepto de haberse dejado de cumplir las disposiciones relativas á la sucesión intestada, desconociéndose los derechos de representación de los sobrinos legítimos del difunto Justo Delgado, es también infundada, supuesto que habiéndose desconocido el parentesco, no llegó el caso de aplicar las disposiciones que se dicen violadas.

Igual argumento cabe respecto de la violación atribuída á la sentencia con respecto al artículo 1270 del citado Código Civil.

De todo lo cual se deduce que la sentencia del Tribunal no ha incurrido en la causal 1.ª de casación.

Segunda causal.

Fúndase en que la sentencia condena á más de lo pedido, supuesto que en la demanda se dijo que se declarase á Matías Delgado con exclusión de los que *se presenten*, y la sentencia declaró que es heredero legitimario, con exclusión de todas las personas que con el carácter de herederos se *han presentado* obtando derechos á la sucesión de Justo Delgado.

De que la demanda usó una forma de futuro,—*se presenten*, y la sentencia una de pretérito,—*se han presentado* deduce el recurrente una sutil consecuencia cuya ineficacia se ve al considerar que la demanda significa: *con exclusión de los que se presenten en este juicio;* la sentencia: *con exclusión de los que se han presentado en este juicio.* La congruencia de los dos conceptos resalta del hecho mismo de que el tiempo de demandar es anterior al de presentárse el demandado en juicio, y el tiempo de sentenciar posterior á la secuela del mismo juicio. Es esta, pues, una mera cuestión de palabras.

Queda por tratar acerca de esta causal la parte de la sentencia en que se atribuyen á Matías Delgado todos los bienes de que no dispuso Justo Delgado.

Acerca de esa parte se alega por los recurrentes que la sentencia ha fallado contra toda clase de personas que con mejor derecho pudiesen reclamar esos bienes con acción de petición de herencia, antes de consumada la prescripción extintiva de esa acción. Apenas enuncia el escrito respectivo dicho cargo añadiendo que la sentencia..... "quiere dar por muertos, por inexistentes á todos cuantos pudieran presentarse con igual ó mejor derecho que el señor Matías Delgado. Esto revela la temeridad de la acción.

Mucha fuerza tendría esa tacha, caso de haberse presentado con la debida precisión y citando la disposición sustantiva que con la solución se hubiese infringido; pero dado el caso de que la sentencia del Tribunal no dijese terminantemente: 1.° Matías Delgado, en su carácter de hijo natural de Justo Delgado, es heredero legitimario de éste con exclusión de todas las personas que, con el carácter de acreedores, se han presentado obtando derechos á la sucesión de Justo Delgado; 2.° corresponden á Matías Delgado todos los bienes de la sucesión que queden, hecha deducción del valor de los legados de que trata el testamento otorgado por Justo Delgado, con fecha quince de Junio de mil ochocientos setenta y ocho, bajo el número seiscientos diez (610). "La expresión *por hoy*, junto con la locución verbal antes analizada" *con exclusión de todos los que se han presentado*, fijan el alcance del fallo, el cual en este punto, no incurrió en el defecto de fallar en más de lo pedido, notándose, más bien que si la demanda quiso pedir declaraciones contra los que se presentasen en el juicio y contra los ausentes ó desconocidos que por ficción legal fuesen representados por defensor, la sentencia tan solo comprendió á los que se han presentado, ó sean José María y Juana B. Delgado.

También se alega la causal 2.ª del artículo 369 de la Ley 105 fundándola en lo que sigue.

"IV

"La sentencia del Tribunal Superior al entrar en las consideraciones que le sirven de fundamento á la parte dispositiva comienza diciendo que 'por la sentencia materia de alzada se absolvió al demandante primitivo de los cargos que se le hicieron en la demanda de reconvención, y se declaró no probada la excepción perentoria de cosa juzgada, propuesta por los demandados José María y Juana B. Delgado. Acerca de estos puntos no tiene jurisdicción el Tribunal para ocuparse de ellos en este fallo (dice la sentencia), por cuanto han sido consentidos por las partes contendoras en virtud de que las demandadas en la demanda principal se conformaron con la sentencia y de que el demandante sólo hizo valer el recurso de apelación en lo que ésta le fuera desfavorable.

"De este modo el Tribunal se ha descartado, sin razón, de la obligación de fallar sobre un punto que es materia de controversia desde la iniciación del pleito. Nuestros poderdantes José María y Juana B. Delgado, en su calidad de hijos legítimos de Atanasio Delgado, quien era hermano de Justo Delgado, por ser uno y otro hijos legítimos de Roque Delgado, habían obtenido en el juicio de sucesión que promovió Matías Delgado, demandante, la declaratoria de heredero de su tío legítimo Justo Delgado, por sentencia de 30 Junio de 1886, la cual corre en copia auténtica, en el cuaderno primero, á los folios 31 y 32. La razón que tiene el Tribunal para no estimar la importancia de aquella declaratoria de herederos, no es admisible, porque consiste en limitar la jurisdicción del Tribunal á los puntos desfavorables al demandante en la sentencia de 1.ª instancia, en atención á que el recurso de apelación propuesto por dicho demandante se limitó á lo que le fuera desfavorable. Por dos razones es inexacta esta consideración: la una porque la apelación propuesta por el apoderado del demandante, al recibir personalmente la notificación de la sentencia de 1.ª instancia, fué absoluta sin condición ni restricción alguna. (Foja 77 del cuaderno 1.°) Tres días después presentó el escrito por el cual limitaba el recurso á lo desfavorable. La otra razón es: porque las excepciones perentorias deben declararse de oficio cuando se encuentran probadas en los autos aun cuando no hayan sido alegadas ni propuestas. Esta doctrina está reproducida en el artículo 51 de la Ley 105 de 1890, después de haberla consagrado el artículo 138 de la Ley 57 de 1887.

"En consecuencia, la sentencia es anulable también por no haber fallado sobre una excepción perentoria alegada, y por haberse abstenido el Tribunal de conocer en punto ó asunto de su competencia declarándolo así en su sentencia." Estos dos hechos están consignados en las causales ó hechos 2.° y 5.° del artículo 369 de la Ley 105 de 1890."

Cierto es que el demandante apeló primero sin expresar que sólo de lo desfavorable; pero al día siguiente útil, en tiempo todavía, expresó que su apelación se circunscribía á lo desfavorable, declaración supérflua si se atiende que quien apela se supone lo hace tan sólo de lo desfavorable; y como la excepción de cosa juzgada se declaró por el Juez inferior no probada, y de esta declaración no apelaron los demandados á quienes perjudicaba la estimación hecha por el Tribunal de carecer de jurisdicción y la consiguiente abstención en fallar la excepción son completamente jurídicas. Además, ya se ha visto que la sentencia dictada en juicio sumario, en cuyo favor se alega la presunción de cosa juzgada, carece de esa autoridad.

Tampoco resulta, pues, establecida la causal 2.ª por este motivo, ni menos la causal 5.ª alegadas conjuntamente y apoyadas en él.

Causal 3.ª

En esta causal no se ocupa la Corte porque yá tiene decidido que ella no da entrada al recurso de casación, sino cuando se haya pedido en oportunidad aclaración de la sentencia ante el Tribunal que la haya dictado, omisión en que se incurrió por la parte actora en el presente caso.

Causal 6.ª

La petición de nulidad fundada en la ilegitimidad de la personería que se afirma con respecto á la del doctor Joaquín Martínez Escobar, que intervino en una parte de la actuación, como apoderado del demandante, carece de fundamento por varias razones: no haberse probado en este recurso que cuando fué apoderado Martínez E., ejercía la Magistratura; no haberse tachado la personería cuando se confirió traslado del poder, y no tener derecho para alegar esta nulidad sino el interesado mal representado.

En mérito de todo lo antedicho, la Corte Suprema, en su calidad de Tribunal de casación, encontrando que las leyes sustantivas citadas por el Tribunal *a quo* son las aplicables, y que han sido rectamente interpretadas en la sentencia, así lo declara en cumplimiento del artículo 383 de la Ley 105, y en consecuencia, atendido á que ninguna de las causales alegadas da fundamento suficiente para invalidar el fallo materia de este recurso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que no hay lugar á casar dicho fallo.

Cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

Notifíquese.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Jesús Casas Rojas.—Manuel Ezequiel Corrales.—Mariano de Jesús Medina.—Emilio Ruiz Barreto.—Juan Evangelista Trujillo.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, trece de Diciembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Mariano Groot, apoderado de Eduvigis Pérez, pide que se reconozca á ésta derecho á una pensión vitalicia del Tesoro nacional, conforme á la Ley 84 de 1890, sobre recompensas militares, en consideración á los servicios que su finado esposo, Juan Evangelista Pérez, prestó al Gobierno de Colombia en el empleo de Guarda de las salinas de Chita y Muneque; á que en ellas fué herido dicho Pérez, con lesión de por vida, en la época de la guerra de mil ochocientos setenta y seis y mil ochocientos setenta y siete defendiendo los intereses nacionales, por lo cual fué pensionado por dicho Gobierno, y, á haber quedado ella y sus hijos en la mayor miseria á la muerte de su citado esposo, que tuvo lugar en Mayo de mil ochocientos noventa y uno.

La Corte observa que los servicios prestados por Juan Evangelista Pérez en un empleo civil, como lo es el de Guarda de salinas, no son de los que dan derecho á recompensa conforme á la Ley 84 de 1890, la cual sólo favorece á los miembros del Ejército nacional y de la Marina de guerra, á los empleados de sanidad y de administración militar, á los auditores de guerra y á los capellanes de la fuerza armada al servicio de la Nación, y aunque por disposición del artículo 73 de la misma ley, lo estatuído en ésta es también aplicable á los hijos, hijas, viudas, etc., de los individuos no militares que mueran en combate ó en campaña, defendiendo el Gobierno legítimo y la Constitución nacional, la demandante no se halla comprendida en ninguno de estos casos, pues si bien ha probado que es viuda de dicho Pérez, no consta, ni *siquiera se ha alegado*, que éste muriera en combate ó en campaña, defendiendo el Gobierno y la Constitución de la República; habiendo, al contrario, motivo para juzgar que la muerte de dicho individuo, acaecida en el año próximo pasado, quince años después de la herida que recibió en la guerra de mil ochocientos setenta y seis, se efectuó naturalmente y no por causa, siquiera remota, de tal herida.

En tal virtud y de acuerdo con el dictamen del Procurador general, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que la demandante Pérez no tiene derecho á la pensión que reclama su apoderado.

Notifíquese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Baltasar Botero Uribe.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Juan Evangelista Trujillo.—Lucas Villafrádez.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, catorce de Diciembre mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Ricardo Castañeda, por medio de apoderado, solicitó ante la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, el reconocimiento y pago de la cantidad de ocho mil pesos ($ 8,000), valor de los daños y deterioros de una casa situada en Facatativá y de los arrendamientos de la misma, durante el tiempo que la tuvo ocupada el Gobierno en la última guerra.

La reclamación se descompuso en dos partidas, así: por cinco mil setecientos veinte pesos ($ 5,720) valor de los daños y deterioros causados en la casa, según estimación pericial; y dos mil doscientos ochenta pesos ($ 2,280) valor de los arrendamientos en veintiocho y medio meses, estimados á ochenta pesos mensuales.

La Comisión, en su resolución de nueve de Marzo del presente año, número 3,421, se abstuvo de examinar las pruebas presentadas con relación á la primera partida, por cuanto proviene la reclamación de daños que la Comisión no tiene facultad para reconocer.

En cuanto á la segunda partida, proveniente de los arrendamientos de la casa ocupada por fuerzas del Gobierno, la misma Comisión consideró bien comprobados los hechos en que se fundó la reclamación, aunque excesiva, respecto del tiempo, porque estimó que ella debía limitarse al que duró la guerra, ó sea á la cantidad de novecientos veinte pesos. Sin embargo, esa Corporación negó el reconocimiento en su totalidad, fundándose en que el crédito reclamado era de los comprendidos en la regla 3.ª del artículo 2.º de la Ley 44 de 1886, y requisito indispensable, conforme al artículo 16, el de haber presentado á la autoridad política superior del Departamento la relación jurada de que trata la resolución de la Secretaría de Guerra de diez y siete de Mayo del mismo año, documento que no aparecía en el expediente.

El apoderado de Castañeda apeló de lo resuelto por la Comisión, y solicitó ante el Ministerio del Tesoro que se le exigiera juramento para llenar la formalidad, por cuya omisión había sido negado el reconocimiento. El señor Ministro del Tesoro accedió á la solicitud; recibió juramento al apoderado, y creyendo llenado así el requisito exigido por el artículo 16 de la citada Ley 44, reformó el fallo de la Comisión en el sentido de reconocer al reclamante la cantidad de novecientos veinte pesos ($ 920) como precio del arrendamiento de la casa en el tiempo que duró la guerra. No se conformó con este fallo el Fiscal de la Comisión, y tanto éste como el apoderado del reclamante, apelaron de él para ante la Corte, en donde se ha sustanciado el recurso con audiencia del mismo señor Fiscal y se procede á fallarlo.

La Corte tiene ya decidido que el requisito de la relación jurada es un acto personalísimo que no puede llenarse por apoderado; de manera que si ese juramento no puede prestarse por el interesado á nada puede conducir el que preste una persona distinta. Por consiguiente, no estima legal la Corte el procedimiento adoptado por el señor Ministro del Tesoro, con tanto mayor razón cuanto del expediente no aparece que se hiciera relación alguna, que pudiera ser ratificada después bajo juramento, como lo ha practicado la Corte, haciendo que se jure por el interesado la relación presentada en tiempo oportuno.

Por tanto, de acuerdo con el concepto del señor Fiscal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca la resolución del señor Ministro

del Tesoro, que ha sido objeto de la apelación, quedando subsistente la que dictó la Comisión.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA. —BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS. — MANUEL E. CORRALES. — JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, quince de Diciembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Manuel José Cobo solicita que la Corte le declare con derecho á gozar del Tesoro nacional una pensión por antigüedad en el servicio militar que ha prestado á la República en su calidad de Coronel efectivo, conforme á la Ley 84 de 1890; pero en vez de presentar la hoja de sus servicios expedida por el Ministerio de Guerra, ha acompañado á su demanda pruebas testimoniales en calidad de supletorias, por habérsele perdido la hoja que se asegura mantenía en su poder.

De acuerdo con la opinión del señor Procurador general de la Nacion, la Corte dispuso, en auto para mejor proveer, que el reclamante presentara en este juicio una nueva hoja de servicios, que es el comprobante especial que para gozar de pensión por antigüedad en la carrera de las armas, determina la expresada Ley 84 de 1890. Pero el apoderado de Cobo ha manifestado, que por habérsele extraviado la hoja de servicios á su poderdante, junto con otros papeles y documentos, no le es posible exhibirla, y ha ocurrido á la prueba testimonial en defecto de aquélla.

Como dice muy bien el señor Procurador general, los documentos que el solicitante ha presentado á la Corte en apoyo de su reclamación, pueden servir de base al Ministerio de Guerra en la formación de una nueva hoja de servicios; mas dichos documentos no tienen mérito ante la Corte, para el efecto de obtener una resolución judicial, en virtud de la cual se le declare en el goce de una pensión; porque, como ya se ha expuesto, con el documento especial que la ley ha designado, es con el que puede hacerse constar el tiempo que el Coronel Cobo ha servido en el Ejército, computándose el de campaña como doble; y, finalmente, el tiempo que haya servido en el último empleo militar.

A mérito de lo expuesto, y de conformidad con la opinión del señor Procurador general, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, la Corte absuelve á la Nación de esta demanda, y declara que no está en el caso de acceder á la petición del expresado Coronel Manuel José Cobo.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA. —BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ. — *Gabriel Rosas*, Secretario.

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, trece de Diciembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: El Tribunal Superior de Cundinamarca dictó, con fecha diez y seis de Julio del corriente año, sentencia definitiva y confirmatoria de la que el Juez 1.° del Circuito de Facatativá profirió en la demanda intentada por Cándido Jara contra Cipriana Parada, mujer de Francisco de V. Avendaño y á Ciriaco Parada, para que con su audiencia se declarara en vía ordinaria que el demandante es padre legítimo de su finado hijo Gabriel Jara.

Como la sentencia del Tribunal citada fué desfavorable á dicho demandante Cándido Jara, porque no se hizo la declaración pedida, éste interpuso en tiempo el recurso de casación para ante esta Corte, fundándose en que tanto en el fallo de la primera como en el de la segunda instancia "hay error grave en la interpretación, y aplicación del derecho" en que la del Tribunal Superior de Cundinamarca "violó la ley sustantiva y la doctrina legal;" y en "que hay contradicción en las sentencias de primera y de segunda instancia en cuanto á la inteligencia y aplicación del derecho, pues el Juez inferior, al fallar, se fundó para negar el derecho reclamado por Jara, en el Código Civil de Cundinamarca aplicable, y el Tribunal se fundó en la Ley 9.ª, título 8, libro 5 R (así está) que no tiene analogía con la invocada por el Juez" etc.

La Corte entra, después de detenido exámen, á considerar si hay lugar al recurso de casación interpuesto.

Efectivamente, el Juez 1.° del Circuito de Facatativá fundó su fallo para negar la declaración pedida, en la legislación cundinamarquesa que regía durante la existencia del extinguido Estado Soberano de Cundinamarca; y el Tribunal Superior la sustenta en la legislación española que regía antes de la vigencia de los Códigos de la primera legislación citada. Pero esta circunstancia hace ineficaz el recurso de casación, porque para conceder éste se necesita, conforme al artículo 366 de la Ley 105 de 24 de Diciembre de 1890, que la sentencia se funde ó deba fundarse en leyes que rijan ó hayan regido en toda la República á partir de la vigencia de la Ley 57 de 1887, ó que se funde ó deba fundarse en leyes de los extinguidos Estados, que sean idénticas en esencia á las nacionales que estén en vigor; y ya se ve que no se está ni en uno ni en otro caso, porque aunque la legislación española en que se fundó el Tribunal, rigió en toda la República y después rigió en el Estado Soberano de Cundinamarca, esto sucedió antes de la vigencia de la Ley 57 citada, y sus disposiciones no son idénticas en esencia á las nacionales que están en vigor. Compárense si nó las leyes españolas citadas en la sentencia, con el artículo 52 de la Ley 153 de 1887.

Por lo demás, el recurso intentado contra la sentencia del Tribunal de Cundinamarca, llena los restantes requisitos señalados por el artículo 366 citado, á saber: versa sobre hechos relativos al estado civil de las personas, y hay contrariedad en las sentencias de primera y de segunda instancia en cuanto á la inteligencia ó indebida aplicación de las leyes en que se apoyan. Pero no concurriendo, como no concurre, la primera de las circunstancias que deben coexistir según el ordinal 1.° de dicho artículo, forzoso es rechazar el recurso de casación, y ni necesidad hay de averiguar cuál legislación ó qué leyes debieron aplicarse al caso concreto de que trata el proceso.

Sin embargo, pudiera argüirse que la legislación que debió aplicarse es el Código Civil de Cundinamarca y que las disposiciones de esté son idénticas en esencia á las leyes nacionales que éstan en vigor, y por consiguiente se llena el requisito del ordinal 1.°, artículo 366 citado, y debe admitirse el recurso. Aparte de que el recurrente Cándido Jara sostiene que la legislación aplicable es la española porque el matrimonio de donde deduce la paternidad reclamada, se verificó en mil ochocientos cincuenta y nueve, cuando aquella legislación regía en toda la República, milita en contra de la objeción apuntada la incontestable razón de que el Código Civil de Cundinamarca no rigió hasta el primero de Enero de mil ochocientos sesenta, según el Decreto del Gobernador del Estado de fecha quince de Noviembre de mil ochocientos cincuenta y nueve, y por tanto no es ese Código el aplicable al caso ocurrido con anterioridad á su vigencia.

Por las anteriores consideraciones, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 381 de la Ley 105 citada, niega la admisión del recurso interpuesto.

Notifíquese, déjese copia, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el proceso.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.— LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, quince de Diciembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: El apoderado de Enrique López Zapata, representante de su esposa Mercedes Olier de López, solicita revocación del auto de fecha diez y seis del mes pasado, por el cual se niega el recurso de hecho que dicho apoderado ha interpuesto para que se le conceda á la señora Olier de López el de apelación contra la sentencia de pregón y remate, dictada por el Administrador de la Aduana de Barranquilla en la ejecución que libró este empleado contra la sociedad comercial "López Olier & Compañía."

La Corte se fundó para negar el recurso de hecho en las siguientes principales razones:

1.ª En que el escrito de fecha *diez y ocho de Octubre*, presentado en Barranquilla, ó firmado allí, por la recurrente, no es legal al tenor del inciso segundo, artículo 55 de la Ley 105 de 1890, por no haber sido autenticado por el Juez de la residencia, y que, por consiguiente, no se ocurrió dentro del término de tres días y el de la distancia que se necesita, entre otras circunstancias, para que el recurso hecho sea admisible; puesto que ese término comenzó á correr desde el *once de Octubre*, en que se expidió la copia de los autos, hasta el *nueve de Noviembre*, en que el apoderado de la recurrente revalidó el escrito citado de *diez y ocho de Octubre;* ó lo que es lo mismo, *veintinueve días* trascurridos, tiempo casi doble del señalado por el artículo 900 del Código Judicial para esta clase de recursos;

2.ª En que la señora Olier de López no pidió la copia de los autos hasta el día *tres de Octubre*, es decir, á las *cuarenta y ocho horas* de la apelación; lo que debió hacer dentro de las *veinticuatro horas*, para llenar la exigencia de la ley y poder ocurrir de hecho (artículo 899 del Código Judicial).

Al primer fundamento de la Corte observa el apoderado de la señora Olier de López que, del *doce de Octubre*, día en que debió partir el correo de Barranquilla para esta ciudad, al *dos de Noviembre*, en que se recibió en la Corte, trascurrieron *diez y ocho días útiles*, esto es, menos del término de la distancia y tres días más, porque de Barranquilla á Bogotá hay ciento noventa y nueve leguas, y no es posible computar á más de diez leguas por día. Agrega que el correo llegó á esta ciudad el domingo treinta de Octubre; que el lunes treinta y uno pudo entrar á la Corte el recurso, y si no se recibió ese día, se comprende que no pudo ser por culpa de la parte agraviada.

Al segundo fundamento de la Corte, contesta el apoderado de la señora Olier de López, que es cierto que la apelación se interpuso el *primero de Octubre* y que la copia se pidió el *tres;* pero que el *dos* fué domingo, y éste no se cuenta, porque en los días feriados no corren los términos; y que, por consiguiente, la recurrente pidió tal copia dentro de las *veinticuatro horas* exigidas por la ley.

La Corte, al revisar la providencia de que se ha pedido en tiempo revocación, considera:

1.° Que Enrique López Zapata, marido de la señora Olier de López, confirió poder, en representación de ésta, con fecha *diez y ocho de Octubre* de 1892, á Liborio D. Cantillo, para que ejerciera la personería de ella en el recurso de hecho que se ventila, poder legalmente conferido (foja 1.ª), y en virtud del cual fué considerado como parte Cantillo (foja 2);

2.° Que la señora Olier de López firmó el mismo día *diez y ocho de Octubre* un memorial dirigido á esta Corte, en que ocurre de hecho por no habérsele concedido la apelación aludida; memorial que llegó á la Secretaría, con la copia correspondiente, el *cinco de Noviembre*, es decir, *diez y ocho días después;*

3.° Que el *nueve de Noviembre* se presentó Cantillo como apoderado de López Zapata, revalidando el escrito de la *señora Olier de López, de la citada fecha diez y ocho de Octubre;*

4.° Que del *tres de Octubre*, en que se pidió tal copia, *al nueve de Noviembre*, en que se revalidó dicho memorial, van corridos *treinta y siete días;*

5.° Que conforme al artículo 1495 del Código Judicial, "el término de la distancia se computará á razón de *un día* por cada *dos miriámetros;*" y conforme al *Itinerario oficial*, de la ciudad de Barranquilla á esta capital, hay *noventa y nueve* con *cincuenta miriámetros* de distancia, de modo que el término dentro del cual ha debido recurrir la señora Olier de López es el de *cuarenta y nueve días y medio*, y sólo empleó *treinta y siete*, para interponer su recurso, como queda expresado;

6.° Que, por lo demás, la providencia sobre que versa el recurso, llena los otros requisitos exigidos por el artículo 905 citado.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve:

1.° Revócase el auto de fecha diez y seis del pasado mes, por el cual se niega el recurso de hecho interpuesto por la señora Olier de López;

2.° Admítese dicho recurso, y, en consecuencia, pídanse los autos originales de la ejecución mencionada al Administrador de la Aduana de Barranquilla.

Notifíquese, cópiese y publíquese en la *Gaceta Judicial*.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO. — LUCAS VILLAFRÁDEZ. — *Gabriel Rosas*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, Diciembre catorce de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: En virtud de denuncio dado al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja por el Fiscal del Circuito de Occidente del Departamento de Boyacá contra Gregorio Quiñones, Juez 2.° del Circuito de Occidente, como responsable del delito de falsedad, consistente en haberse puesto á un auto fecha anterior á la que correspondía al día en que fué proferido, dicho Tribunal practicó las diligencias suficientes para perfeccionar el sumario respectivo, y el cuatro de Noviembre último dictó auto de sobreseimiento, que ha venido en consulta á esta Superioridad.

Oído el concepto del señor Procurador y fijado en lista este negocio por el término legal, se procede á dictar la sentencia del caso.

De autos aparece, que el Secretario del Juez 2.° del Circuito de Occidente informó al Juez 1.° del mismo Circuito, que en la Oficina de aquél no cursaba causa ni sumario contra Ricardo Salgado, que por auto de veintitrés de Junio último, se ordenó pasar al Juez 1.° Pero con dos declaraciones contestes de testigos presenciales se ha comprobado que tanto el último informe como el auto que á él se refiere, no fueron extendidos el día veintitrés de Junio, sino cuatro días después, circunstancia que si se hubiera acreditado que hubiera tenido lugar *á sabiendas* del Juez 2.°, sería suficiente motivo para que, de acuerdo con el último inciso del artículo 358 del Código Penal, se dictara contra él auto de proceder por el delito de falsedad. Pero en el sumario no está comprobado el *á sabiendas*, que por referirse á cuestiones de hecho hay necesidad de justificar, por exigirlo así el texto del artículo 358 antes citado, y el inciso 2.° del artículo 2025 del Código Judicial, y antes, en dicho sumario, se encuentran datos para juzgar lo contrario, como que el auto no fué redactado ni escrito por el Juez 2.°, y que éste no ha tenido interés ninguno para poner una fecha que no le correspondía.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con lo pedido por el señor Procurador, confirma el auto de sobreseimiento consultado.

Notifíquese, cópiese y devélvase el sumario.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS. — MANUEL E. CORRALES.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO. — LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

IMPRENTA DE ANTONIO M. SILVESTRE.
Director, Tomás Galarza.

REPÚBLICA DE COLOMBIA.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AÑO VIII | Bogotá, 9 de Abril de 1893. | NÚM. 379.

CONTENIDO.

Págs.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

La que concede á Rosa Rico ó Caballero una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Villafrádez)..... 121
La que confirma la resolución dictada por el Ministerio del Tesoro en la reclamación de Salvador Soluaga, por suministros. (Magistrado ponente, doctor Villafrádez)..... 121
La que concede á María Josefa Montero una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Corrales)..... 122
La que confirma la resolución que el Ministerio del Tesoro pronunció en la reclamación de Gabriel y Paulino Vargas y Joaquín Orozco, por empréstitos y expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Corrales)..... 122
La que confirma la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Norte del Departamento de Santander, en los varios juicios ejecutivos acumulados seguidos contra Pelagia Martínez de Guzmán. (Magistrado ponente, doctor Pombo)..... 123
La que reconoce á favor de José María Calderón, como cesionario de Lorenzo. Garzón, un crédito por suministros. (Magistrado ponente, doctor Corrales)..... 124
La que revoca la resolución dictada por Ministerio del Tesoro en la raclamación de Baltasar Uribe N., por expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Trujillo)..... 125
La que concede á Susana y María del Patrocinio Torres una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Villafrádez)..... 125

AUTOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

El que niega el recurso de revisión de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Antioquia, en el juicio seguido contra Benjamín y Abraham Martínez y José A. Restrepo, por el delito de heridas cometido en la persona de Ramón de J. Piedrahita. (Magistrado ponente, doctor Trujillo)..... 126
El en que se declara la Corte sin jurisdicción para resolver sobre la consulta que hace el Tribunal Superior del Sur del Tolima, del auto de sobreseimiento que profirió en el sumario instruído contra Sinforoso Quiroga, Juez 2.º del Circuito de Neiva, por varios cargos. (Magistrado ponente, doctor Isaza)..... 126
El que sobresee en las diligencias instruídas contra los señores Magistrados del Tribunal Superior del Norte del Departamento del Tolima, doctores Juan N. Méndez, Aciscio Molano y Enrique Ramírez G., por el delito de atentado contra los derechos individuales. (Magistrado ponente, doctor Villafrádez)..... 126

GACETA JUDICIAL.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, quince de Diciembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Rosa Rico ó Caballero ha pedido, por medio de su apoderado Gumersindo Rozo P., que se le conceda recompensa como viuda del Teniente José María Ayala, militar de la Independencia, fundando su reclamo en los siguientes hechos que aparecen perfectamente justificados:

1.º Que Ayala prestó sus servicios en la guerra de la Independencia nacional, como Teniente de las fuerzas libertadoras, y que habiéndole concedido Su Excelencia el Libertador Presidente de la República retiro del servicio, se le expidió el despacho respectivo, con fecha dos de Octubre de 1822, por el Coronel Pedro Briceño Méndez, Secretario de Estado, en los Despachos de Guerra y Marina, según aparece de la copia que que se ha presentado, certificada por el Oficial del Ministerio de Gobierno, encargado del archivo republicano, y que corre de fojas 1 á 11 de este expediente;

2.º Que Ayala contrajo matrimonio con la peticionaria, en seis de Mayo de 1839, segun partida certificada por el Cura Párroco de Las Nieves de esta ciudad. (Foja 13);

3.º Que Ayala falleció en Guaduas, en Octubre de 1842, como se ve de la respectiva partida de defunción. (Foja 14);

4.º Que la demandante ha sido conocida indistintamente con los apellidos de Rico ó Caballero, y que es la misma que fué casada con Ayala; que es pobre, se conserva viuda, observa buena conducta y vivió en buena armonía con su finado esposo, quien no tuvo sucesión, todo lo cual resulta de los testimonios contestes de varios testigos. (Fojas 18 á 26 y 33 á 35);

5.º Que la solicitante no ha recibido pensión, ni recompensa del Tesoro nacional, por los servicios que prestó su esposo á la causa de la Independencia. Así aparece del certificado del Ministerio del Tesoro, de fojas 16.

Por tanto, la Corte, haciendo aplicación de la Ley 84 de 1890, y de acuerdo con el parecer del Procurador general, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que Rosa Rico ó Caballero, viuda del Teniente José María Ayala, tiene derecho á recibir del Tesoro nacional, por los servicios que su citado esposo prestó á la causa de la Independencia nacional, la cantidad de dos mil cuatrocientos pesos ($ 2,400), á que monta el sueldo íntegro del citado empleo de Teniente, durante cuatro años.

Notifíquese, comuníquese al Ministerio de Guerra, y publíquese en la *Gaceta Judicial*.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA. — BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, quince de Diciembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: En concepto de la Corte es arreglada á lo que dispone el artículo 4.º de la Ley 152 de 1887, la resolución de la Comisión de suministros, dictada en este expediente con fecha diez y seis de Agosto último, bajo el número 3,978, en que se niega el reconocimiento de la suma de mil doscientos cincuenta y cuatro pesos diez y siete y medio centavos ($ 1,254-17½), que Salvador Soluaga ha reclamado del Tesoro nacional, fundándose en una resolución del Habilitado general del Departamento de Antioquia, en que se le fenece una cuenta de gastos hechos en el sostenimiento de una guarnición en el puerto de Nare, durante la guerra de mil ochocientos ochenta y cinco, y se deduce á cargo de la Nación, y á favor del reclamante un saldo igual á la suma reclamada, pues ese documento es de los que han debido convertirse por certificación ó recibo en forma del Gobernador de Antioquia, según la disposición legal supracitada; de donde se sigue que la resolución del Ministerio del Tesoro, número 3,210, de fecha diez de Septiembre último, aprobatoria de la de la Comisión, es también legal, siendo infundado, por tanto, el recurso de apelación que el interesado interpuso contra ella.

En tal virtud, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el parecer Fiscal, se confirma la providencia apelada.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente á la Oficina de su origen.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO. — LUCAS VILLAFRÁDEZ. — *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez y seis de Diciembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: María Josefa Montero se ha presentado á la Corte demandando el reconocimiento á su favor del derecho á percibir del Tesoro nacional, una recompensa militar unitaria definitiva, conforme á la Ley 84 de 1890; y funda su derecho en la muerte de su hijo natural, Capitán César Pombo, acaecida en Agosto de 1860, en el Distrito de Fonseca, Departamento del Magdalena, en donde fué muerto inmediatamente después del combate que se libró entre las fuerzas del Gobierno de la Confederación Granadina que obraban al mando del Coronel Indalecio Indaburo y las fuerzas revolucionarias del Gobierno rebelde del extinguido Estado del Magdalena.

Con el testimonio de un número plural de personas, ha comprobado la reclamante que su hijo César Pombo combatió como Capitán, en el referido sitio de Fonseca, siendo Ayudante del Coronel Indaburo, y que herido en dicho combate se le trasladó á la casa de habitación de Juan Cortés Oñate, en donde fué atacado por varios enemigos del Gobierno que le privaron de la vida.

Consta también que el Capitán César Pombo era hijo natural de Juan N. Pombo y María Josefa Montero, según el certificado expedido por el Cura Párroco de la iglesia Catedral de Cartagena, Francisco Fernández de Sotomayor, con fecha 29 de Febrero del corriente año.

Se ha comprobado también con la prueba testimonial que la reclamante ha observado y continúa observando buena conducta, que se halla en estado de pobreza y que vivió en buena armonía con su referido hijo. También se ha acreditado que el Capitán Pombo murió sin haberse casado y sin dejar descendencia alguna, y que la reclamante no ha recibido del Gobierno pensión, ni recompensa por la muerte del Capitán Pombo.

En consecuencia de todo lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de conformidad en parte, con el dictamen del señor Procurador general de la Nación y de lo que disponen los artículos 1.°, 5.° y 11 de la Ley 84 de 1890, declara que María Josefa Montero, como madre del Capitán César Pombo, muerto en Fonseca, en Agosto de 1860, á manos de enemigos armados del Gobierno de la Confederación Granadina tiene derecho á percibir del Tesoro nacional, una recompensa unitaria definitiva por la suma de tres mil ciento veinte pesos ($ 3,120), igual al monto del sueldo de cuatro años señalado al Capitán efectivo, en la Ley 86 de 1886.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial*, dése aviso al Ministerio respectivo y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO. — LUCAS VILLAFRÁDEZ.— *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez y seis de Diciembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: José Ignacio Forero, con poder de Zoilo Silvestre, vecino del Distrito de Facatativá, ocurrió á la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones demandando el reconocimiento de varios créditos procedentes de empréstitos y expropiaciones que hicieron y sufrieron en la guerra de 1885 Gabriel Vargas y Joaquín Orozco, vecinos de dicho Distrito y Paulino Vargas del vecindario de Guayabal de Síquima; los cuales créditos fueron cedidos por éstos á favor del referido Zoilo Silvestre.

Según lo que resulta probado de este expediente, los mencionados Vargas y Orozco contribuyeron para el restablecimiento del orden público durante la susodicha guerra, con los bienes siguientes:

Gabriel Vargas:

Un caballo de silla con su montura, estimado en	$ 100
Tres partidas de á $ 50 cada una, por vía de empréstito	150
Arrendamiento de dos potreros de su propiedad nombrados "El-Molino" y la "Bocatoma," ubicados á inmediaciones de la población de Facatativá, ocupados por las brigadas de las fuerzas del Gobierno nacional, en varios meses de 1885, importante	275
Suma	$ 525

Paulino Vargas:

Nueve mulas estimadas cada una en $ 100, novecientos pesos	900
Dos yeguas, estimadas á $ 100 cada una	200
Cinco caballos expropiados, como las bestias anteriores de uno de los potreros de este individuo, valorados en $ 100 cada uno	500
Suma	$ 1,600

Joaquín Orozco:

Un caballo castaño careto que le fué expropiado por una comisión militar en Enero de 1885, en el potrero de la propiedad de éste, nombrado "El-Dividivi," y que según declaraciones de testigos que conocieron dicho semoviente, fué valorado en ..... $ 100

La Comisión creada por la Ley 44 de 1886, en resolución número 2,515, dictada el 1.° de Diciembre de 1890, sólo reconoció á cargo del Tesoro nacional y á favor de Ignacio Forero, como tal apoderado, la cantidad de doscientos treinta pesos ($ 230) que encontró comprobada, y la que procede de los empréstitos hechos al Gobierno nacional por Gabriel Vargas, y del arrendamiento del potrero de "El-Molino," calculado por la misma Comisión en ochenta pesos ($ 80), al respecto de veinte pesos mensuales ($ 20) y por el tiempo de cuatro meses, usando al efecto de la facultad que le da la ley de reducir la cuantía, verdad sabida y buena fe guardada.

Aprobada la resolución de la Comisión, por la que dictó el Ministerio del Tesoro, con el número 2,043, en Marzo de 1891, se interpuso contra ésta el recurso de apelación, concedido el cual, el expediente ha venido á esta Superioridad, con noticia del apelante.

En esta segunda instancia se ha sustanciado dicho recurso por los trámites que señala la ley, y hallándose este asunto en estado de ser decidido, se procede á ello, después de haberse dictado auto para mejor proveer, con el objeto de complementar las pruebas en la forma que determina la Ley 44 de 1886.

Pero se observa que las objeciones que hizo la Comisión para no reconocer los demás créditos demandados han quedado subsistentes, pues las primeras informaciones que se presentaron con la demanda para acreditar las exacciones, carecían de valor jurídico, porque fueron instruídas ante los respectivos Alcaldes de Distrito y Jueces municipales. Posteriormente los interesados ocurrieron al Juzgado 1.° del Circuito de Facatativá con el fin de subsanar aquel defecto, con la ratificación de los testigos que habían declarado ante funcionarios incompetentes; pero se cometió otro defecto, porque las ratificaciones no se hicieron en la forma que prescribe el artículo 640 del Código Judicial, limitándose el Juez del Circuito á hacer constar en las respectivas diligencias que los testigos dijeron era cierto el contenido de sus anteriores respuestas.

Por último, habiendo la Corte comisionado al mismo Juzgado 1.° del Circuito de Facatativá para que recibiese varias declaraciones en los términos legales, á fin de subsanar los defectos anotados, se cometió una nueva falta consistente en haber recibido las declaraciones sin la asistencia del Fiscal

del Circuito, no obstante haberlo prevenido la Corte al conferir la comisión; de suerte que ni los interesados, ni los funcionarios que han intervenido en asuntos relacionados con esta reclamación, han cuidado de llenar sus deberes.

Habiendo manifestado á la Corte el apoderado Ignacio Forero, en escrito que constituye la última hoja del expediente, y que fué presentado el cinco de este mes, que "dando cumplimiento á vuestro auto, del cual me doy por notificado, y según las instrucciones que tengo de ellos (los dueños de los créditos), que no hay más pruebas que poder aducir en su favor, y que las existentes en el expediente han sido las únicas con que han probado sus reclamos," la Corte prescinde con tal manifestación de ordenar la presentación de nuevos comprobantes; y en consecuencia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la resolución apelada, en la parte desfavorable á los reclamantes.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial*, y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Diciembre diez y seis de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Ha venido nuevamente á la Corte el expediente que contiene los varios juicios ejecutivos acumulados, seguidos contra Pelagia Martínez de Guzmán, en su condición de única heredera de su hijo Domingo Guzmán, el cual expediente había sido anulado por esta Superioridad, en sentencia de doce de Julio de mil ochocientos noventa, por haber sido fallado en primera instancia por el Juez 2.° del Circuito de Cúcuta, cuando carecía de jurisdicción para ello, supuesto que estaban vigentes las Leyes 61 de 1886 y 143 de 1887, que atribuyeron á los Tribunales Superiores de Distrito el conocimiento en primera instancia de los juicios que se susciten entre particulares y los Gobiernos de los Departamentos, y á la Corte Suprema el conocimiento en segunda instancia. Y como el primero de los juicios que figuran en el expediente, fué el promovido por el Tesorero general del extinguido Estado de Santander contra la citada Pelagia Martínez de Guzmán, á favor del Fisco de dicho Estado, por la cantidad de treinta y un mil doscientos sesenta pesos setecientos noventa y un milésimos ($ 31,260-791), y el fallo del Juez, sobre calificación y prelación de créditos, fué pronunciado el veinte de Septiembre de mil ochocientos ochenta y ocho, era indudable la falta de jurisdicción para dictarlo.

A virtud de la sentencia de nulidad proferida por la Corte, el expediente se envió al Tribunal Superior del Distrito Judicial del Norte del Departamento de Santander, para que avocase el conocimiento en primera instancia, y en consecuencia, dicho Tribunal ha dictado la sentencia de diez y seis de Abril de mil ochocientos noventa y uno, que apelada únicamente por el apoderado de Eduardo Ramírez; ha dado motivo para que vuelva á la Corte el mencionado expediente, en donde, substanciada la instancia, debe decidirse definitivamente, como procede á hacerlo esta Superioridad, previas algunas consideraciones.

La sentencia aludida dijo, en su parte dispositiva, lo siguiente:

"En consecuencia, y en mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, el Tribunal falla, mandando pagar los créditos en referencia con el producto de los bienes embargados, en el orden siguiente:

"Primero. Las costas procesales;

"Segundo. El crédito del Fisco del Departamento por treinta y un mil doscientos sesenta pesos, setecientos noventa y un milésimos de diez décimos, y los intereses sobre veintiseis mil novecientos once pesos cincuenta centavos de capital, desde el veintinueve de Febrero de mil ochocientos ochenta hasta la fecha del pago;

"Tercero. El crédito de María de Jesús Serrano por dos mil novecientos cincuenta y siete pesos cuarenta y cuatro centavos de ocho décimos, capital primitivo;

"Cuarto. El crédito á favor de Eduardo Ramírez por ocho mil novecientos sesenta y un pesos quince centavos y los intereses que le corresponden, moneda de ocho décimos;

"Quinto. El crédito de Concepción Bustamante de García, por mil ciento cincuenta y dos pesos veintisiete centavos, moneda de ocho décimos, de capital y sus intereses.

"Se declara que no ha lugar á incluír en la graduación el crédito de tres mil pesos de ocho décimos á favor de María de Jesús Serrano.

"Sepárese del expediente el legajo de ejecución del Municipio de San-José, como se dispuso en el auto, ya ejecutoriado, de veintitrés de Agosto de mil ochocientos ochenta y nueve, y envíese á la oficina á que corresponde."

Como se dijo yá, contra esta sentencia sólo se interpuso apelación por parte de Eduardo Ramírez, y como lo advierte el señor Procurador, ella no está sujeta al recurso de consulta, por lo mismo que favorece al Departamento de Santander, cuyo crédito debe cubrirse en primer lugar, y fué consentida por los otros acreedores; de manera que tal sentencia no puede ser examinada por la Corte sino en lo que tiene relación con el crédito de Ramírez, quien pretende que su derecho prefiere al del Departamento de Santander y al de María Jesús Serrano, y que, en consecuencia, debe pagársele en primer lugar, después de cubiertas las costas procesales.

Se hace, pues, preciso repetir el estudio que hizo el Tribunal de la naturaleza de los créditos, y sus comprobantes para determinar el orden de prelación que les corresponde.

El crédito á favor del extinguido Estado, hoy Departamento, se aseguró por escritura pública otorgada en la Notaría de Cúcuta el cuatro de Junio de mil ochocientos setenta y nueve, bajo el número trescientos setenta y seis, en la cual Jesús Guzmán por sí, y á nombre y con poder de Pelagia Martínez de Guzmán, otorgado ante Notario, se obligaron á favor del Estado de Santander, por la cantidad de veintiséis mil novecientos once pesos cincuenta centavos ($ 26,911-50), procedente del valor de una letra de cambio sobre New-York, comprada á Domingo Guzmán, de quien se dijo heredera universal la otorgante Martínez, la cual letra no fué cubierta; se aseguraron también los intereses de esa suma, á razón de quince por ciento (15 %) anual hasta la fecha del plazo estipulado, y por los de la demora que ocurriera, al tipo de diez y ocho por ciento anual. Dicha escritura está otorgada con las formalidades legales, y consta en la copia que obra en el respectivo cuaderno, haber sido registrada y anotada oportunamente la hipoteca especial constituída para seguridad del crédito.

El crédito de María Jesús Serrano consta también en la escritura pública otorgada el trece de Enero de mil ochocientos ochenta y dos por el mismo apoderado de Pelagia Martínez de Guzmán y como heredera de Domingo Guzmán.

En esta escritura se declara que Natalio Quirós, cedente de la Serrano, era acreedor del finado Guzmán por dos mil novecientos cincuenta y siete pesos cuarenta y cuatro centavos ($ 2,957-44), moneda de ocho décimos, según documento privado, otorgado por el último á favor de Quirós el seis de Enero de mil ochocientos setenta y nueve. En la misma escritura confiesa la Martínez que ha recibido de Quirós tres mil pesos ($ 3,000) de ocho décimos para la prosecución del juicio de sucesión de Domingo Guzmán. Este crédito fué también cedido á María Jesús Serrano, quien por esa circunstancia figura entre los acreedores.

El crédito del apelante Eduardo Ramírez se ha reclamado con una sentencia ejecutoriada, y debidamente registrada, que se pronunció en un juicio seguido por Ramírez contra la misma Martínez como heredera de Domingo Guzmán, quien se constituyó deudor por documento privado, de fecha primero de Diciembre de mil ochocientos setenta y ocho.

Resulta de la relación que precede, que de los tres créditos enumerados, los dos primeros constan en escrituras públicas, y el último en una sentencia ejecutoriada.

Sin fijar la atención á la preferencia que debía correspon-

der al crédito del Departamento por razón de la hipoteca constituída á su favor, conforme al artículo 2,494 del Código Civil de Santander, por cuanto la sentencia del Tribunal ha reconocido la nulidad de la hipotecación de los bienes de la sucesión de Domingo Guzmán, cuando todavía no tenía la heredera Pelagia Martínez de Guzmán el dominio de los bienes hereditarios, siempre resulta que, considerados como lo fueron todos los créditos concurrentes como pertenecientes á la quinta y última clase, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2510 del Código citado, la calificación y prelación establecidas en la sentencia están de acuerdo con la ley.

El artículo 2510 dice así: "La quinta y última clase comprende los créditos que no gozan de preferencia. Esta clase de créditos se subdivide en tres órdenes ó especies: al primer orden pertenecen los que se prueban con escritura pública; al segundo, los que constan por documento privado, reconocido judicialmente seis meses, por lo menos, antes de iniciado el juicio de graduación ó concurso; y al tercero, los que no quedan comprendidos en los anteriores. Los del primer orden tienen prelación sobre los del segundo, y los del segundo sobre los del tercero; y entre los de una misma especie, la tendrán por el orden de las fechas en que las respectivas obligaciones fueren exigibles, salvo los de la tercera especie, los cuales se cubrirán á prorrata sobre el sobrante de la masa concursada sin consideración á su fecha." De acuerdo con esta disposición legal, la sentencia apelada mandó pagar, después de las costas procesales, el crédito á favor del Fisco del Departamento, dando el cuarto lugar al crédito reclamado por Eduardo Ramírez. Contra esta graduación se ha alegado por el apelante, tratando de demostrar que el poder conferido por Pelagia Martínez de Guzmán á Jesús Guzmán, á virtud del cual se otorgó la escritura de cuatro de Junio de mil ochocientos setenta y nueve, en la que se reconoció el crédito á favor del Departamento, y en la cual se insertó dicho poder, éste no tiene valor legal por cuanto aparece de dicha copia que él fué registrado en el libro 3.°, y que, por consiguiente, es nulo el contrato que celebraron dicho apoderado y el antiguo Estado de Santander.

Como el Tribunal había afirmado que la anotación hecha por el Registrador debía atribuírse á un error de éste, que en lugar de poner libro 2.° había puesto libro 3.°, la Corte dictó un auto para mejor proveer, el veintisiete de Septiembre último, á fin de que el Registrador de instrumentos públicos del Circuito de San-José de Cúcuta enviase copia certificada de la partida de registro del poder aludido y certificase también para qué clase de instrumentos públicos está destinado el libro en que aparece registrado dicho poder y qué número es el señalado para el mismo libro. Del certificado expedido con fecha veintiséis de Octubre, recibido en la Corte el doce de Noviembre próximo pasado, aparece lo siguiente: "que entre los libros de la Oficina figura uno del año de mil ochocientos setenta y nueve, marcado con el número tercero, con cifra enmendada, y debajo de ésta un número dos que contiene inscrita en el folio cuatro vuelto, la partida cuyo tenor literal es el siguiente:

'Partida número 13.—En San-José, á quince de Febrero de ochocientos setenta y nueve, se me presentó para su registro la primera copia de la escritura número ochenta y ocho, de fecha trece del presente, otorgada ante el Notorio público de este Circuito, señor Benigno Parra, por la cual la señora Pelagia Martínez de Guzmán, de este domicilio, confiere poder amplio y general al señor Jesús Guzmán, vecino del Distrito de Salazar.

'El Registrador suplente, *Rafael Vargas O.*'"

Y además certifica: "que este libro es el destinado para el objeto que indica el inciso segundo del artículo 2639 del Código Civil del extinguido Estado de Santander, según se expresa en la diligencia de apertura suscrita por los respectivos Alcalde y Registrador."

En presencia de esta prueba queda completamente desvanecido el argumento del apelante, que se fundaba en la falta de registro del poder con que Jesús Guzmán obró en representación de su poderdante, alegando que tal registro aparecía hecho en el libro que no le correspondía. Y como todas las alegaciones hechas contra la sentencia apelada, tenían por fundamento el argumento aludido, á pesar de las razones expuestas por el Tribunal para combatirlo, la Corte no tiene para qué examinarlas teniendo á la vista la prueba directa que acredita la legalidad del registro, con la cual ha venido á tierra la suposición de nulidad de la escritura de cuatro de Junio de mil ochocientos setenta y nueve, en que se apoyó el crédito reclamado por el Departamento.

No existiendo, pues, el motivo de nulidad alegado contra la citada escritura, y siendo ella de fecha anterior á las otras obligaciones exigibles que figuran en el expediente, es claro que la graduación establecida en la sentencia que es materia de examen, respecto del crédito del Departamento, está de acuerdo con la ley.

En cuanto al crédito de María Jesús Serrano que, según el apelante Ramírez, también debe posponerse al de éste, alegando que no constaba sino en documento privado firmado por Domingo Guzmán, que no fué reconocido, se observa lo siguiente:

Que el crédito que aparece de ese documento fué expresamente reconocido por la heredera Pelagia Martínez de Guzmán en la escritura pública de trece de Enero de mil ochocientos ochenta y dos, según se dijo yá; y si esto no hubiera sido suficiente respecto de este crédito, para considerarlo como exigible de la sucesión de Domingo Guzmán, tampoco debió condenarse á esa sucesión á pagar lo que reclama Ramírez, cuyo crédito constaba también en documento privado, firmado por Guzmán y que sólo fué tácitamente reconocido por la misma heredera, cuando á ésta se le promovió por Ramírez el juicio ordinario que dió lugar á la sentencia que vino á servirle de recaudo ejecutivo contra ella. Ese crédito cedido por Natalio Quirós á María Jesús Serrano, fué reconocido con anterioridad al presente juicio, y por eso fué colocado en tercer lugar, con preferencia al de Ramírez, aunque sólo por la cantidad que Domingo Guzmán adeudaba al cedente, pues respecto de los tres mil pesos ($ 3,000) dados en préstamo por Quirós á la heredera, el Tribunal procedió rectamente al excluírlos de la sentencia, toda vez que esa suma era un crédito personal contra la prestamista que no podía afectar á la sucesión.

A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Norte de Santander, de fecha diez y seis de Abril de mil ochocientos noventa y uno, contra la cual se interpuso el recurso de apelación.

Condénase en las costas del recurso á Eduardo Ramírez.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judical*, y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez y siete de Diciembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: José María Calderón, como cesionario de Lorenzo Garzón, vecino del Municipio de La-Sierra en el Departamento del Cauca, demandó ante la Comisión administrativa creada por la Ley 44 de 1886, el reconocimiento y pago de la cantidad de seiscientos pesos ($ 600) á cargo del Tesoro nacional, procedente del valor de varios bienes que suministró á las fuerzas del Gobierno nacional, mandadas por los Generales Villota y Guzmán, en la guerra de mil ochocientos ochenta y cinco.

Según la relación jurada que Lorenzo Garzón presentó oportunamente en la Gobernación del Departamento del Cauca, de los bienes que suministró en Abril de mil ochocientos ochenta y cinco y de las declaraciones rendidas por un número plural de testigos presenciales, Garzón contribuyó para el restablecimiento del orden público, con los siguientes bienes de su propiedad:

3 yeguas finas, á $ 32 cada una	$ 96
1 potro moro, de silla, fino	40
2 toros, á $ 24 cada uno	48
1 montura aperada	80
1 caballo retinto	52
1 caballo cenizo	80
Una novillona pronta á parir	25
1 macho negro	60
Una vaca parida	24
1 caballo tordillo, fino y de silla	100
Suma	$ 605

La Comisión administrativa halló plenamente comprobados los hechos fundamentales de la reclamación, y en resolución que dictó con el número 2,667 en veintitrés de Febrero de mil ochocientos noventa y uno, hizo el reconocimiento del crédito de seiscientos pesos ($ 600); pero el Ministerio del Tesoro en la que pronunció con fecha doce de Marzo del mismo año, señalada con el número 2,032, improbó aquélla, tomando por apoyo la circunstancia de no haberse comprobado el suministro de los bienes con recibos expedidos por los funcionarios respectivos, sino con declaraciones de testigos que, en su concepto, sólo son admisibles cuando se trata de expropiaciones.

Apelada para ante esta Superioridad la determinación del Ministerio del Tesoro, y dado al recurso la tramitación legal, es llegada la oportunidad de dictarse el fallo que corresponde.

Como arriba se ha expresado, el hecho de haber suministrado Lorenzo Garzón á las fuerzas legitimistas comandadas por los Generales Villota y Guzmán, aparece plena y satisfactoriamente comprobado con el testimonio de Juan Bautista y Manuel de Jesús Parra, José María Piamba y Manuel José Parra, vecinos, el primero de Popayán y los últimos de La-Sierra, que dan razón de sus dichos, como personas que presenciaron la entrega de todos los bienes mencionados en la relación preinserta,

El Ministerio del Tesoro se fundó al improbar lo resuelto por la Comisión en que el suministro de los bienes referidos no resulta justificado sino por declaraciones y no con los recibos que debían expedirse; mas la Corte considera que no tratándose en este caso, como no se trata, de enteros verificados en dinero sonante ú otras especies en Oficinas de recaudación, son admisibles las pruebas testimoniales, pues en rigor las exacciones de semovientes hechas en calidad de suministros, poco ó nada difieren de las expropiaciones, que por lo regular se verifican sin formalidad legal alguna, y se reducen á apoderarse de hecho de las cosas que se necesitan para el sostenimiento de las fuerzas militares.

Obsérvase, además, que la relación de los bienes suministrados alcanza á la suma de seiscientos cinco pesos ($ 605), y que el reconocimiento de la Comisión únicamente se decretó por la de seiscientos ($ 600). Y como la improbación del Ministerio del Tesoro abrazó toda la cantidad declarada, y contra ella se interpuso el recurso de que está conociendo la Corte, bien puede ésta rectificar el error aritmético.

En consecuencia, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, reconoce á cargo del Tesoro nacional y á favor de José María Calderón, cesionario de Lorenzo Garzón, la cantidad de seiscientos cinco pesos ($ 605) por los suministros que el cedente hizo al Gobierno en la guerra de mil ochocientos ochenta y cinco.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial*, pásese copia de este fallo al Ministerio respectivo y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintitrés de Enero de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Andrés Lara, como apoderado de Baltasar Uribe N., ocurrió á la Comisión de suministros para que le reconociera á su poderdante la suma de mil doscientos noventa y nueve pesos veinte centavos ($ 1,299-20), valor de las expropiaciones que sufrió éste de parte de los rebeldes del extinguido Estado de Antioquia, en el año de 1885. La Comisión negó el reconocimiento pedido, el siete de Septiembre próximo pasado, en resolución que lleva el número 4,012, que fué aprobada por el Ministerio del Tesoro el veinticinco de Octubre siguiente, en providencia marcada con el número 3,322, que ha venido en apelación á esta Superioridad.

La Comisión, para negar el reconocimiento solicitado, se fundó en que tratándose de expropiaciones hechas por rebeldes, era necesario que el perjudicado con ellas acreditara, en cumplimiento de lo requerido en el inciso 2.° del artículo 1.° de la Ley 44 de 1886, que había sido partidario y sostenedor del Gobierno nacional, condición que no había sido probada en el proceso, y en que no existían tres declaraciones contestes de testigos presenciales é idóneos, recibidas con todas las formalidades legales, sobre cada una de las partidas que componen la suma total de la reclamación.

La Corte, por medio de auto para mejor proveer, hizo venir al expediente un certificado del actual Gobernador del Departamento de Antioquia, en que consta que Baltasar Uribe N., fué partidario y sostenedor del Gobierno nacional en 1885. Examinando detenidamente el proceso, se han encontrado las declaraciones de Ambrosio Hernández, León Ospina, Mateo Peláez y Vicente Vélez (folios 26, 30, 31 y 35, respectivamente), testigos presenciales é idóneos, que rindieron sus exposiciones en debida forma, con las cuales se demuestra plenamente que fué cierta la expropiación de treinta reses de la hacienda de "Higuerones," propiedad de Uribe N., animales que fueron avaluadas á $ 33-60 cada uno.

Respecto de las demás partidas es cierto que no existen los comprobantes requeridos por el ordinal 3.° del artículo 2.° de la Ley 44 antes citada.

En mérito, pues, de lo relacionado, esta Superioridad, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca la providencia apelada y reconoce la suma de mil ocho pesos ($ 1,008) á favor de Baltasar Uribe N., y á cargo del Tesoro nacional, al cual absuelve de la mayor suma reclamada.

Notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—FEDERICO PATIÑO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veinticuatro de Enero de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: En calidad de apoderado de Susana y María del Patrocinio Torres, demanda Gregorio Gómez G., del Tesoro nacional la recompensa á que se creen aquéllas con derecho conforme á la Ley 84 de 1890, como hermanas célibes del Coronel Antonio Torres, muerto en la guerra de mil ochocientos sesenta á mil ochocientos sesenta y tres, á manos de enemigos armados del Gobierno legítimo de la Confederación Granadina.

Con tal demanda se presentaron varios comprobantes, de los cuales y de los que posteriormente se han practicado á virtud de autos para mejor proveer dictados por esta Superioridad, resulta evidenciado lo siguiente:

1.° Que Antonio Torres militó en las fuerzas legitimistas en la expresada guerra, figurando en el empleo de Coronel, y que como tal estuvo en la batalla librada por dichas fuerzas, en el año de mil ochocientos sesenta y dos, en el sitio de "Santa-Bárbara" de Cartago, contra los revolucionarios al mando del General Santos Gutiérrez, en la cual fué tomado prisionero, y algunos días después fué pasado por las armas en la ciudad de Cartago, de orden del General Tomás C. de Mosquera, Jefe de la revolución, según aparece de diversos testimonios de personas mayores de toda excepción, que han declarado con las formalidades legales, dando razón satifactoria de sus afirmaciones;

2.° Que las peticionarias no han podido comprobar el

fallecimiento de su hermano Antonio Torres, con la respectiva partida de defunción, porque según la certificación que se ha presentado del Cura Párroco de Cartago, donde aparece que tuvo lugar el fusilamiento de Torres, en el año de mil ochocientos sesenta y dos, en el archivo de dicha Parroquia, no existen los libros en que esa partida debió extenderse; mas á falta de tal prueba han aducido la testimonial de que se ha hecho antes mención, con la cual ha quedado debidamente esclarecida la verdad de aquel hecho;

3.° Que Torres, al morir, no dejó viuda ni descendientes, según lo depone un número plural de testigos idóneos;

4.° Que las demandantes son hermanas únicas del citado Torres, por ser todos tres hijos legítimos de Waldo Torres y Tomasa Díaz, lo cual se deduce en parte de las respectivas partidas de matrimonio y bautismo que se han presentado, y en parte de los testimonios de personas competentes, que también se han producido y que son admisibles como prueba supletoria, por estar comprobada la falta de los documentos respectivos, en las oficinas donde debían existir;

5.° Que las peticionarias son solteras, están pobres, han observado y observan buena conducta moral y vivieron en paz y armonía con su citado hermano, de quien recibían protección y auxilios para subsistir, como que después de la muerte de sus padres vino á ser el jefe de la familia. Así consta de las citadas informaciones testimoniales;

6.° Que Waldo Torres y Tomasa Díaz, padres de Torres y de las demandantes, no existen, lo cual aparece de las respectivas partidas de defunción;

7.° Que ninguna de las solicitantes ha recibido pensión ni recompensa del Tesoro nacional, por razón de la muerte de su hermano Antonio, sobre lo cual se han aducido dos certificados expedidos por el Ministerio del Tesoro.

En virtud de estos hechos y de lo que dispone la susodicha Ley 84, en sus artículos 1.°, 5.° (ordinal 2.°) y 9.°, no cabe duda de que las solicitantes son acreedoras á la gracia que demandan, pero con la advertencia de no poderse reconocer al finado Torres como Coronel, como se pretende, para el efecto de fijar la cuantía de la recompensa, por no aparecer la efectividad de ese empleo, sino únicamente como Teniente-Coronel, que es el inmediatamente anterior.

Por tanto, la Corte, de acuerdo con el dictamen del Procurador de la Nación, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que Susana y María del Patrocinio Torres tienen derecho á recibir del Tesoro nacional la cantidad de cuatro mil ochocientos pesos ($ 4,800), divisible entre ellas por iguales partes, como recompensa unitaria y definitiva por la razón de que se ha hecho mérito en la parte motiva de este fallo.

Notifíquese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—FEDERICO PATIÑO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

AUTOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, ventinueve de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Benjamín y Abrahan Martínez y José A. Restrepo, reos rematados del delito de heridas cometido en la persona de Ramón de J. Piedrahíta han interpuesto desde el presidio de Medellín recurso de revisión contra la sentencia de doce de Enero del corriente año, dictada contra ellos por el Tribunal *Superior del Distrito* Judicial de Antioquia.

Con el escrito de interposición del recurso se presentaron una información sumaria de testigos, un reconocimiento del ofendido Piedrahíta practicado por un médico y copias auténticas del auto de proceder y de las sentencias de primera y de segunda instancia proferidas contra los reos.

Recibida en esta Superioridad dicha petición, se abrió á prueba por el término de quince días, durante los cuales el apoderado de los reos se limitó á reproducir la documentación antes mencionada. Y puesto el expediente en la Secretaría á la disposición de las partes, por seis días comunes, para que alegaran, se procede á dictar el fallo del caso.

El artículo 397 de la Ley 105 de 1890 indica los casos en que puede haber lugar en asuntos criminales al recurso de revisión contra una sentencia ejecutoriada, casos entre los cuales no se encuentra el presente; por no tratarse de dos sentencias contradictorias relativas á un mismo delito, de una sentencia dictada contra un supuesto homicida, ni de un fallo fundado en un testimonio declarado después judicialmente falso.

Como la enumeración hecha en el artículo citado es limitativa, y no simplemente enunciativa, como lo pretende el apoderado de los recurrentes, por indicarlo así el uso del artículo definido al expresar los casos de revisión, como porque tratándose de un recurso extraordinario los casos en que puede interponerse tienen que ser claramente detallados, es preciso convenir en que la solicitud hecha por los reos Martínez y Restrepo es inadmisible.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, niega el recurso de revisión interpuesto.

Publíquese, notifíquese, cópiese y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, trece de Diciembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: El Tribunal Superior del Distrito Judicial del Sur del Departamento del Tolima consulta con esta Corte el auto de sobreseimiento que profirió con fecha trece de Octubre de mil ochocientos noventa y dos en el sumario instruído á virtud de denuncio dado por José María Villoria contra Sinforoso Quiroga, Juez 2.° del Circuito de Neiva, por los siguientes cargos:

1° Abuso de autoridad consistente en no haber remitido al Tribunal un expediente que fué pedido mientras no se dejase copia de los autos;

2.° Haber diferido la ejecución de una orden del mismo Tribunal;

3.° Prevaricación, consistente en haber decidido que se expidiese con citación de la parte contraria, una copia de parte de un expediente solicitada por el mismo Villoria con el fin de dar una queja contra el Juez Quiroga.

Respecto de los dos primeros cargos, es claro que el sobreseimiento no está sujeto á consulta por no tener los delitos que se imputan á Quiroga, ninguna de las penas que determina el artículo 346 de la Ley 105 de 1890.

En cuanto al tercero tampoco es el caso de consultar el sobreseimiento, aunque el denunciante haya calificado el cargo de prevaricación porque la naturaleza de un delito y la consiguiente jurisdicción de los Tribunales no puede depender de la calificación arbitraria que de los hechos haga el denunciante, sino de la naturaleza de esos mismos hechos, y claro es que la simple circunstancia de exigir la citación de una parte para que se expida una copia, no puede constituír el grave delito que el denunciante supone.

Por tanto, la Corte, oído el concepto del señor Procurador, se declara sin jurisdicción para resolver sobre la consulta del auto yá mencionado, y dispone que se devuelva el proceso al Tribunal de su procedencia.

Déjese copia de esta determinación y publíquese en la *Gaceta Judicial*.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez y seis de Diciembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: A virtud de requerimiento del Ministerio de Justicia al Procurador general de la Nación, este funcionario ha

promovido ante la Corte que se averigüe la responsabilidad en que hayan incurrido los Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Norte del Departamento del Tolima, Juan N. Méndez, Asisclo Molano y Enrique Ramírez G., por haber condenado á Adolfo y Antonino Santacruz á sufrir la pena de seis meses de presidio, que se les había impuesto por el delito de resistencia á la autoridad, sin embargo de aparecer que yá habían cumplido esa condena, y con tal fin ha presentado los documentos que anteceden, de los cuales resulta lo siguiente:

Que á principios de Diciembre de mil ochocientos ochenta y nueve, Adolfo y Antonino Santacruz solicitaron del Gobernador del Departamento del Tolima que les rebajara la tercera parte de la pena de presidio yá mencionada, dirigiendo esta solicitud al Prefecto de la Provincia del Centro, quien la remitió á su destino por conducto del Tribunal Superior del Norte, informando con fecha seis del citado mes de Diciembre, que hallaba justa la petición aludida y creía que los requisitos legales se habían llenado plenamente, y acompañando los comprobantes presentados por dichos reos, entre ellos la copia del auto de proceder dictado contra éstos y de las sentencias condenatorias de primera y de segunda instancia pronunciadas, respectivamente, por el Juez 2.° del Circuito del Guamo, y por el Tribunal Superior del Norte, en tres de Diciembre de mil ochocientos ochenta y ocho y seis de Agosto de mil ochocientos ochenta y nueve.

Que habiendo manifestado el Fiscal del mismo Tribunal, que en su despacho se tenía conocimiento de que los Santacruces no habían estado en prisión por el tiempo á que estaban condenados, aquel Tribunal, después de practicar varias diligencias para comprobar esto, resolvió, en Sala de Acuerdo, no acoger la solicitud sobre rebaja de pena y pasar la actuación al Juez del Circuito del Guamo, para que, dando cumplimiento á los artículos 1978 á 1981 del Código Judicial, averiguara y decidiera si dichos reos habían purgado la pena de presidio;

Que en vista de tales diligencias, del informe rendido por el Prefecto de la Provincia, encargado de hacer cumplir la pena de presidio impuesta á los Santacruces, y de las pruebas producidas por los reos, á quienes, lo mismo que al respectivo Agente del Ministerio Público, se dió la audiencia prevenida por el artículo 1979 del Código citado, el Juez del Circuito del Guamo resolvió que Adolfo y Antonino Santacruz no habían cumplido la pena que se les había impuesto, ordenó que la cumplieran en los términos establecidos en las respectivas sentencias, y para que se resolviera sobre la culpabilidad del funcionario encargado de llevar á efecto aquella pena, dispuso pasar copia de lo conducente á la autoridad competente;

Que á virtud de apelación interpuesta por los reos el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Norte del Tolima, por sentencia que pronunció con fecha diez y siete de Junio del presente año, después de oír á los apelantes, á sus defensores y al Fiscal, confirmó, de acuerdo con el parecer del último, lo resuelto por el Juez de la primera instancia, sin otra modificación que la de señalar la cárcel de Ibagué, para que en ella cumplieran su pena los mencionados reos;

Que este fallo fué acordado con los votos de los Magistrados Juan N. Méndez y Acisclo Molano, pues el Magistrado Enrique Ramírez G. salvó el suyo;

Que tan pronto como fueron puestos, para la ejecución de la pena, dichos reos, á disposición del Secretario de Gobierno del Departamento, por conducto del Prefecto de la Provincia, éste los puso en libertad, según lo avisó al Juzgado por nota de treinta de Septiembre último, á que se refiere el Secretario de esa Oficina en sus certificados corrientes al reverso del folio 77 de este proceso;

Que á solicitud de los mismos reos, el Ministerio de Justicia, con fecha veinte de Agosto último, resolvió lo siguiente:

"1.° Los peticionarios Adolfo Santacruz y Antonino Santacruz, serán puestos en libertad en caso de que hayan sido nuevamente reducidos á prisión, fundándose para ello en no haber satisfecho la condena que les fué impuesta por el Juez del Circuito del Guamo en el mes de Septiembre de mil ochocientos ochenta y nueve, por resistencia á una orden de la autoridad;

"2.° El señor Procurador general de la Nación promoverá, por medio de los órganos respectivos del Ministerio Público, la investigación de los delitos de responsabilidad que hayan podido cometerse por los empleados administrativos en la aplicación de la pena que debieron sufrir los aludidos Santacruces por el delito antes expresado y de que tratan estas diligencias, y

"3.° Igualmente el señor Procurador procederá á averiguar la responsabilidad de los Magistrados del Tribunal del Norte del Departamento del Tolima, por el fallo en que decretaron se redujera nuevamente á prisión á los nombrados Santacruces, fundándose para ello en no haberse cumplido por la autoridad administrativa la ley en cuanto al modo de aplicarse á ellos la pena de presidio."

Finalmente, aparece que los sindicados Méndez, Molano y Ramírez G., que suscribieron como Magistrados del Tribunal del Norte del Tolima, la sentencia por la cual se declaró en segunda instancia que los reos Adolfo y Antonino Santacruces, no habían cumplido la pena de presidio, y se ordenó que la cumplieran en la cárcel de Ibagué, estaban legalmente investidos de la Magistratura, por virtud de nombramientos que hizo el Gobierno de la República y de la posesión que tomaron en sus respectivos puestos ante el Gobernador del Departamento del Tolima, con fecha tres de Abril de mil ochocientos ochenta y ocho, trece de Agosto del mismo año y treinta y uno de Enero de mil ochocientos ochenta y nueve, respectivamente.

De resultas de todo esto, el Procurador general, juzgando que con la aludida sentencia del Tribunal se ha atentado contra los derechos individuales, por haber ordenado la nueva prisión de los Santacruces, sin ser competente para ello esa Corporación, ó al menos *no estando autorizada dicha prisión por la ley*, y que estos casos de infracción están comprendidos ambos en el capítulo 9.°, título 10, libro 2.° del Código Penal, ha pedido en la vista precedente, que la Corte llame á juicio de responsabilidad por los trámites extraordinarios, con referencia á aquel capítulo, á los Magistrados Méndez y Molano, y que sobresea en el procedimiento á favor del Magistrado Ramírez, á quien su salvamento de voto exime de toda responsabilidad; fundando su acusación en razones semejantes á las que tuvo el Ministerio de Justicia para mandar que se pusiera en libertad á los reos rematados de que se ha hecho mención, á pesar de la sentencia del Tribunal, razones que son en sustancia las siguientes:

1.ª Que habiendo sido puestos los reos á disposición del Prefecto del Centro, este empleado arregló á su arbitrio el modo como debían cumplir su condena, y concluído el tiempo de ésta, ordenó su soltura y les expidió en Marzo de mil ochocientos noventa el pasaporte correspondiente, en virtud de la facultad de que estaba investido para ello conforme al artículo 818 del Código Penal de Cundinamarca, vigente en aquella época;

2.ª Que cualquiera que fuera el modo como dichos reos cumplieran su condena, es lo cierto que ésta se cumplió por parte de ellos, una vez que estuvieron sometidos á la autoridad del Prefecto, á quien correspondía la ejecución de la sentencia condenatoria en lo relativo á la pena de presidio, al tenor del inciso 2.°, artículo 1737 del Código Judicial;

3.ª Que los reos, como lo observó el Magistrado Ramírez G., al salvar su voto, no tenían por qué desconfiar del poder del Prefecto para arreglar el modo como ellos debían cumplir la pena corporal á que se les había condenado, y de consiguiente en nada deben responder por los desaciertos de aquel empleado, único responsable ante la ley de las concesiones indebidas que les hizo, cambiándoles el trabajo del presidio, al uno, por herramienta, y al otro, por el arreglo del archivo de su oficina;

4.ª Que condenar á dichos reos á sufrir por segunda vez la pena impuesta, no obstante haber ellos pagado su condena, en trabajo y en dinero, ó sea en la forma que el Prefecto, á cuya autoridad estaban sometidos, tuvo á bien determinar, implica obligarlos á rectificar, con evidente perjuicio suyo, faltas de administración de que sólo debe responder el em-

pleado respectivo, y vulnerar el principio tutelar que prohibe juzgar y penar por más de una vez á un mismo individuo por un mismo delito;

5.ª Que la resolución del Tribunal es tanto más injurídica cuanto que el procedimiento que debió seguirse en la averiguación sobre el cumplimiento de la condena á los Santacruces es el detallado en los artículos 1978 á 1981 del Código Judicial, donde no se dispone que el reo sea condenado de nuevo á sufrir la pena que él no cumplió en todo ó en parte, por motivo imputable al funcionario encargado de la ejecución, y por tanto, atenta la disposición del último de los precitados artículos, el Tribunal habría llenado su deber limitándose simplemente á ordenar el juzgamiento del Prefecto que por sí y ante sí, modificó atenuándola, la pena impuesta en sentencia judicial á los Santacruces;

6.ª Que como el Tribunal no paró en esto, sino que fué hasta renovar la precitada pena, sin estar facultado para ello y sin tener siquiera en cuenta que los reos habían salido yá de su jurisdicción desde que se ejecutorió la sentencia terminal de la causa seguida contra ellos, los Magistrados de ese Tribunal que obraron así se han hecho culpables de atentado contra los derechos individuales, por el cual entabla su acusación el Procurador general.

La Corte estima perfecto este sumario con los comprobantes presentados por el Procurador, y suficientes los datos que ellos suministran para decidir si hay lugar ó no á encausar á los Magistrados sindicados, como procede á verificarlo.

A dichos Magistrados se les sindica y acusa, según se ha visto, por el delito de atentado contra los derechos individuales por cuanto confirmaron el fallo en que el Juez del Circuito del Guamo declaró que los reos Adolfo y Antonino Santacruces no habían cumplido su condena, y ordenó que la cumplieran en los términos establecidos en las respectivas sentencias, sin ser competentes para ello y sin estar autorizada por la ley la nueva prisión de dichos reos. De consiguiente, para calificar el mérito de las presentes diligencias sumarias, tiene la Corte que examinar y resolver las siguientes cuestiones:

Primera. ¿Habiéndose suscitado dudas sobre si habían cumplido los reos Santacruces su condena, dando ellas lugar á una investigación judicial sobre el particular, en conformidad á lo dispuesto en el capítulo 9.°, título 10, libro 3.° del Código Judicial, era competente para conocer del negocio y fallar en segunda instancia el Tribunal del Norte del Tolima, que había pronunciado la última sentencia en la causa contra dichos reos?

Segunda. ¿Pudo legalmente aquel Tribunal, supuesta su competencia y dado que la referida condena no hubiera tenido su debido cumplimiento en los términos prescritos por la ley, ordenar que se ejecutara lo juzgado conforme á ésta, haciendo que los reos sufrieran efectivamente la pena que se les había impuesto, ó debió limitarse á disponer que se indagara la responsabilidad del funcionario que conculcando decisiones ejecutoriadas de autoridades competentes, conmutó la pena de presidio impuesta en ellas, por otra de carácter pecuniario ó equivalente á ella, ó por trabajos puramente burocráticos en una oficina?

Tercera. ¿En las diligencias que se instruyeron con el fin de averiguar si los Santacruces habían cumplido su condena, se comprobó suficientemente la inejecución de ésta?

A juicio de esta Superioridad, el conocimiento en la actuación ó procedimiento especial que debe seguirse en averiguación del cumplimiento de las condenas en materia criminal, corresponde en primera y en segunda instancia, respectivamente, al Juez y al Tribunal que conocieron en esos grados, de la causa en que fué impuesta la pena de que se trata, pues así lo disponen clara y terminantemente los artículos 1978 y 1980 del *Código Judicial*. De *consiguiente*, el Juez del Circuito del Guamo y el Tribunal del Norte del Tolima tuvieron competencia ó autoridad legal suficiente para investigar si los reos Santacruces, á quienes ellos habían condenado á presidio por sentencias que estaban ejecutoriadas habían sufrido real y efectivamente esa pena, y para pronunciar en esas diligencias las providencias ó resoluciones conducentes al fin de esa investigación, de donde se sigue que no hay motivo en qué fundar un cargo contra los Magistrados de dicho Tribunal por extralimitación de facultades ó arrogación de jurisdicción.

Tampoco puede imputarse á dichos Magistrados, que al declarar que los mencionados reos no habían cumplido su condena, procedieran sin pruebas suficientes sobre este punto, pues en la respectiva actuación consta que tanto el Juez como el Tribunal se fundaron para hacer aquella declaración en informes del Prefecto de la Provincia del Centro y en los testimonios de Toribio Herrera, Alcaide de la cárcel del Guamo, Célico Caicedo y Patrocinio Cuéllar, de que resultaba que Adolfo y Antonino Santacruz no habían estado presos después de su condena, en el respectivo establecimiento de castigo, ni habían trabajado en obras públicas, y que para purgar la pena de presidio que se les había impuesto, había dado el primero de aquellos individuos unas herramientas, y el segundo, había trabajado en el arreglo del archivo de la Prefectura. Verdad es que el Prefecto en sus informes ó certificaciones que expidió con fecha veintiuno de Enero de mil ochocientos noventa, aseveró rotundamente que los Santacruces habían cumplido su condena; pero también lo es que el mismo funcionario infirmó esa aseveración posteriormente al explicar el modo como cumplieron los reos su condena, y al patrocinar la solicitud de rebaja de pena que aquéllos elevaron á la Gobernación, por su conducto, lo cual demostraba que esa pena no se había ejecutado por completo, mayormente si se considera que cuando dió el Prefecto sus informes de veintiuno de Enero de mil ochocientos noventa, no habían trascurrido aún los seis meses de presidio á que se había condenado á los reos.

Resueltas así afirmativamente y en sentido favorable á los acusados la primera y tercera de las cuestiones que se ha propuesto examinar la Corte, resta sólo aclarar y resolver las dudas que envuelve la segunda de esas cuestiones. En concepto del Procurador general, el Código Judicial, al establecer un juicio ó procedimiento especial para averiguar si un reo ha cumplido su condena, ha tenido por objeto única y exclusivamente, que en caso de resultar que ésta no se ha cumplido por negligencia, omisión, descuido ú otra causa punible imputable al funcionario encargado de hacerla cumplir, se disponga ó promueva la investigación de la culpabilidad de éste; mas la Corte no lo cree así. Esta Superioridad entiende que el fin primordial de aquel juicio ó procedimiento especial, es poner la ejecución de las decisiones judiciales bajo la vigilancia de los Jueces y Tribunales que las hayan pronunciado, dándoles autorización para hacer que se cumplan fiel y exactamente, cuando los funcionarios administrativos sean omisos ó negligentes en el particular, pues sólo así se explica y concibe por qué los artículos 1879 y 1880 del supracitado Código dispongan que se oiga para decidir, á la autoridad ó autoridades encargadas de hacer ejecutar las penas, al Ministerio Público y al reo, dando derecho á éstos de producir pruebas y de interponer apelación contra la sentencia que se dicte, no siendo razonable ni natural suponer que todo ese cúmulo de garantías y formalidades tenga por único objeto ordenar que se abra investigación sobre la responsabilidad de los funcionarios culpables de la falta de cumplimiento de los fallos judiciales. Hay, pues, razones legales y fundadas en pro y en contra de ambas interpretaciones de la ley, y por ello es dudosa la verdadera inteligencia de ésta, y lo es también en consecuencia la responsabilidad de los Magistrados que la entendieron y aplicaron en uno de los dos sentidos, no pudiendo ponerse sus determinaciones en tela de juicio sin faltar á la equidad.

Por tanto, la Corte se aparta de la opinión del Procurador general, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, sobresee en las presentes diligencias.

Notifíquese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y archívese el sumario.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

IMPRENTA DE ANTONIO M. SILVESTRE.

REPÚBLICA DE COLOMBIA.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AÑO VIII } Bogotá, 12 de Abril de 1893. { NÚM. 380.

CONTENIDO.

Págs.

Cuadros que representan el movimiento de negocios en la Corte Suprema de Justicia durante el mes de Diciembre de 1892, y el número de proyectos presentados por los señores Mrgistrados en el mismo mes 129

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

La que concede á Pedro Purí una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Pombo).............. 130

La que concede á Ricardo Solarte una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Isaza).............. 130

La que confirma la resolución que el Ministerio del Tesoro dictó en la reclamación de Liborio D. Cantillo, como cesionario de Vicente Gutiérrez, por suministros y expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Trujillo).............. 131

La que concede á Marcelino Ramos una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Trujillo).............. 131

La que concede á Lázaro Angulo una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas).............. 131

La que niega á Anastasia Narváez una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Villafrádez).............. 131

La que niega á Asunción López una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Isaza).............. 132

La que concede á Juana Marín una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Botero Uribe).............. 132

La que concede á Antonio Romero una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Isaza.............. 132

La que confirma la resolución que dictó el Ministerio del Tesoro en la reclamación de José María Sandoval, por suministros y empréstitos. (Magistrado ponente, doctor Isaza).............. 133

La que concede á Isidora Susatama una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas).............. 133

La que concede á Rosaura Polanco una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Isaza).............. 134

La que concede á Juan Antonio Arboleda una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas).............. 134

La que concede á Norberto Plaza una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Villafrádez).............. 134

La que reconoce á favor de Adolfo P. Simonds un crédito, por exacciones. (Magistrado ponente, doctor Trujillo).............. 135

NEGOCIOS CRIMINALES.

La que confirma la sentencia absolutoria dictada por el Consejo de Guerra ordinario, en la causa seguida contra el Cabo Daniel Ayala, como responsable de la fuga de unos presos. (Magistrado ponente, doctor Trujillo).............. 135

La que confirma la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior de Cundinamarca, en el juicio seguido contra Antonio W. Robayo, ex-Juez 2.° del Circuito de Facatativá, por no haber practicado varias diligencias para perfeccionar un sumario. (Magistrado ponente, doctor Trujillo).............. 136

La que confirma el fallo pronunciado por el Tribunal Supérior del Cauca en la causa seguida contra Jaime Castillo, Prefecto de la Provincia de San Juan, por abandono del empleo. (Magistrado ponente, doctor Pombo).............. 136

CUADRO QUE REPRESENTA EL MOVIMIENTO DE NEGOCIOS EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 1892.

	SENTENCIAS.					AUTOS.							NEGOCIOS DE UNA SOLA INSTANCIA.				
	CASACIÓN.		CIVILES DE 2.ª INSTANCIA.														
	Civiles.	Pena capital.	Negocios varios.	Suministros etc.	Criminales de 2.ª instancia.	Civiles.	Criminales.	Procesos militares.	Competencias.	Recursos de hecho.	Recursos de revisión.	Negocios varios.	Civiles.	Criminales.	Suspensión de Ordenanzas.	Recompensas.	TOTALES.
Pendientes en 30 de Noviembre..............	27	5	9	168	3	7	4	3	...	2	2	1	2	19	1	523	776
Id. olvidados en los cuadros de años anteriores..............	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	43	43
Repartidos del 1.° al 20 de Diciembre..............	...	...	3	7	2	2	1	...	1	1	...	...	...	1	1	10	29
Totales..............	27	5	12	175	5	9	5	3	1	3	2	1	2	20	2	576	848
Despachados del 1.° al 20 de Diciembre..............	1	1	1	10	...	...	4	1	1	...	...	...	...	3	...	8	30
Id. olvidados en los cuadros de años anteriores..............	1	...	...	10	1	...	...	2	...	1	...	...	...	...	...	...	15
Pendientes en 31 de Diciembre..............	25	4	11	155	4	9	1	...	...	2	2	1	2	17	2	56[illegible]	[illegible]

CUADRO QUE REPRESENTA EL NÚMERO DE PROYECTOS PRESENTADOS POR CADA UNO DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SOBRE LOS NEGOCIOS CUYO DESPACHO SE RELACIONA EN EL CUADRO ANTERIOR (DICIEMBRE).

	SENTENCIAS.					AUTOS.							NEGOCIOS DE UNA SOLA INSTANCIA.				
	CASACIÓN.		CIVILES DE 2.ª INSTANCIA.														
	Civiles.	Pena capital.	Negocios varios.	Suministros etc.	Criminales de 2.ª instancia.	Civiles.	Criminales.	Procesos militares.	Competencias.	Recursos de hecho.	Recursos de revisión.	Negocios varios.	Civiles.	Criminales.	Suspensión de Ordenanzas.	Recompensas.	TOTALES.
Doctor Pombo	...	...	1	2	...	...	1	...	1	...	...	...	...	1	...	1	7
Doctor Isaza	...	1	...	...	...	...	1	...	...	...	...	...	...	...	...	1	3
Doctor Botero Uribe	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1
Doctor Casas Rojas	...	...	...	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1	2
Doctor Corrales	...	...	...	3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1	...	2	6
Doctor Trujillo	...	...	...	1	...	...	1	1	...	...	...	...	...	...	...	...	3
Doctor Villafrádez	...	...	...	3	...	...	1	...	...	...	...	...	...	1	...	3	8
Totales	1	1	1	10	...	...	4	1	1	...	...	...	...	3	...	8	30

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez y seis de Diciembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: Andrés Lara, como apoderado de Pedro Purí, vecino del Distrito de Páez, en la Provincia de Popayán, estableció demanda contra la Nación por la cantidad de setecientos cuatro pesos, como recompensa militar á que es acreedor su poderdante, en su calidad de soldado inválido, conforme á la Ley 84 de 1890.

A la demanda se acompañaron los siguientes documentos:

1.° La diligencia de reconocimiento practicado ante el Gobernador del Departamento del Cauca, por los doctores Domingo Cajiao C., Domingo Arboleda y Alfredo Garcés, en la persona de Pedro Purí, del cual resulta: "que le encontraron una cicatriz de una herida con instrumento cortante, en la parte externa y superior del brazo izquierdo; que por dicha herida quedó cortado el músculo del toides trasversalmente y ha dejado una atrofia *consecutriz* en el tercio inferior, por lo cual dicho músculo ha quedado debilitado y no presta sus funciones como antes, ocasionando una invalidez relativa;"

2.° Varias declaraciones de testigos presenciales, recibidas con las formalidades legales, de las cuales consta que Pedro Purí prestó sus servicios militares al Gobierno como soldado en la guerra de 1885; que al mando del Capitán Juan María Chango, se halló en el combate que tuvo lugar en el sitio de "La-Honda," cerca del Gigante, en el Departamento del Tolima, combate que se verificó contra fuerzas enemigas del Gobierno, mandadas por Isauro Falla, y que en ese combate recibió Purí una herida de lanza en el brazo izquierdo, siendo el mismo que recibió la herida el que reclama la recompensa. Los mismos testigos afirman la extrema pobreza de Purí y su inutilidad para trabajar;

3.° La certificación del señor Ministro del Tesoro que acredita que Pedro Purí no ha recibido pensión ni recompensa por razón de su invalidez.

Los expresados documentos son la prueba bastante exigida por los artículos 1.°, 5.°, inciso 8.°, 6.° y 19 de la Ley 84 para otorgar una recompensa unitaria definitiva, igual á la mitad de la que se asigna para el caso de invalidez absoluta.

En consecuencia, la Corte Suprema, siguiendo el dictamen del señor Procurador, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que Pedro Purí tiene derecho á recibir del Tesoro nacional una recompensa de trescientos cincuenta y dos pesos ($ 352), por la invalidez relativa de que adolece, producida por heridas recibidas en el campo de batalla.

Notifíquese, cópiese, publíquese, dése cuenta al Ministerio de Guerra y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Enero veintiséis de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Salvador Valencia Fernández, con poder de Ricardo Solarte, vecino del Municipio de Timbío, Departamento del Cauca, reclama para su poderdante recompensa militar, conforme á la Ley 84 de 1890.

Sustanciado el correspondiente juicio sumario con audiencia del señor Procurador de la Nación, ha llegado el caso de dictar sentencia definitiva.

El actor ha justificado con declaraciones de cuatro testigos hábiles y que presenciaron los hechos:

Que en la guerra civil de 1876 á 1877 hizo parte, como soldado de las fuerzas que sostenían principios análogos á los que informan las actuales instituciones; y que combatiendo en la Cuchilla del Tambo, en uno de los hechos de armas que tuvieron lugar en ese punto, á fines del mes de Noviembre de 1876, recibió muchas heridas y quedó tendido en el campo en donde fué recogido y hecho prisionero por las fuerzas del Gobierno.

Con el reconocimiento practicado ante el Gobernador del Cauca por los profesores en medicina, Domingo Cajiao, Francisco Velasco y Gabriel María López, se ha acreditado que Solarte tiene las cicatrices de una herida de bala en el brazo izquierdo, en la cual el proyectil atravesó el músculo *bicept;* otra herida también de bala en la parte izquierda de la espalda que desgarró los músculos correspondientes de la región, y otra herida causada por proyectil de la misma clase en la región glutia que interesó los músculos del mismo nombre. Que las expresadas heridas, tanto por ser muchas, cuanto por haber afectado considerable número de músculos, ocasionan al paciente incapacidad para trabajar, relativa y de por vida.

Igualmente está comprobada la identidad del demandante y del herido en la acción de guerra mencionada en la que hacía parte del *Batallón Timbío.*

Con certificación del Ministerio del Tesoro se ha acreditado que Solarte no figura entre las personas que han recibido recompensa ó pensión del Tesoro público.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de conformidad con el parecer del señor Procurador, y en cumplimiento de lo que disponen los artículos 1.°, 2.°, 5.°, 6.°, 9.°,

11, 17 y 19 de la citada Ley 84 de 1890, declara que Ricardo Solarte, tiene derecho á una recompensa unitaria de trescientos cincuenta y dos pesos ($ 352), mitad del sueldo de un soldado en cuatro años, que se le pagará del Tesoro nacional.

Comuníquese esta sentencia al Ministerio de Guerra, publíquese en la *Gaceta Judicial*, cópiese en el libro respectivo y archívese lo actuado.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—FEDERICO PATIÑO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Enero veintiséis de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Liborio D. Cantillo, como cesionario de José Vicente Gutiérrez, ocurrió á la Comisión de suministros para que se le reconociera y mandara pagar la suma de mil seiscientos veintiocho pesos ($ 1,628), valor de varios suministros y expropiaciones de 1860 á 1863. La Comisión negó el reconocimiento el dos de Septiembre de mil ochocientos noventa y uno (1891), en resolución que lleva el número 3,035, que fué aprobada por el Ministerio del Tesoro el diez y seis (16) de los mismos mes y año, en providencia marcada con el número 2,418, que ha venido en apelación á esta Superioridad.

El Ministerio del Tesoro se fundó para negar el reconocimiento solicitado, en que los documentos presentados para acreditar las distintas partidas que componen la suma total reclamada, no llevan la prueba de ser auténticos, circunstancia que consideró de mucha importancia, por tratarse de documentos de antigua data y que han permanecido en poder de particulares.

La Corte, para subsanar ese justo reparo, dictó dos autos para mejor proveer á fin de obtener la confrontación de las piezas que figuran en copia en el expediente con las originales de donde se dice fueron sacadas; pero todas las diligencias hechas á ese respecto han sido inútiles, porque no se han encontrado en las oficinas correspondientes los originales buscados.

Estando en pie la razón alegada por el Ministerio del Tesoro para dictar su providencia que es materia de examen, y siendo ese fundamento justo, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el concepto del Fiscal de la Comisión, confirma dicha providencia.

Notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—FEDERICO PATIÑO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Enero veintiséis de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Marcelino Ramos, con el carácter de inválido de la guerra de 1885, pide se le conceda, de acuerdo con la Ley 84 de 1890, recompensa militar unitaria correspondiente al empleo de Teniente.

Por no existir el despacho de Teniente, cuya falta se ha comprobado con declaraciones de más de tres testigos presenciales, se ha acreditado que el peticionario fué herido en la pierna izquierda en el combate del "Alto del Pedregal," que tuvo lugar en 1885 en el extinguido Estado del Cauca, combatiendo en defensa del Gobierno nacional con el empleo de Teniente.

Con la diligencia de reconocimiento practicado por tres profesores de medicina, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 84 de 1890, se comprueba que el peticionario ha quedado con invalidez relativa para trabajar como antes, en virtud de la herida que recibió en dicho combate del "Alto del Pedregal."

Con un certificado del Ministerio del Tesoro se demuestra que Ramos no ha recibido recompensa ni pensión de la Nación por motivo de su invalidez.

En mérito de lo expuesto, y de lo que dicen los artículos 5.°, 9.° y 19 de la Ley 84 de 1890, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el concepto del señor Procurador, concede del Tesoro nacional á Marcelino Ramos, vecino del Distrito municipal de Inzá, la recompensa militar unitaria de mil doscientos pesos ($ 1,200), suma igual á la mitad del monto del sueldo en cuatro años del empleo de Teniente.

Notifíquese, cópiese, dese cuenta al Ministerio de Guerra y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—FEDERICO PATIÑO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintiséis de Enero de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Por medio de apoderado, Lázaro Angulo, vecino de Capellanías del Departamento del Cauca, solicita se le conceda la recompensa militar á que le da derecho la Ley 84 de 1890, en virtud de haber recibido en la acción denominada de la "Herradura," el doce de Enero de mil ochocientos setenta y siete, en defensa del Gobierno de la República y en condición de Teniente de la fuerza que militaba á órdenes del Teniente-Coronel Juan Clímaco Rivera, una herida que le causó invalidez parcial.

La demanda se halla comprobada en la forma siguiente:

1.° Con las declaraciones rendidas primero ante el Estado Mayor de la 2.ª División del Ejército nacional, y después ante el Juez del Circuito en lo civil de Popayán, con asistencia del Agente del Ministerio Público, por Alberto Castrillón, Bernardo Palechón y Manuel J. Cabrera, se establece plenamente el hecho de haber en efecto el demandante Angulo entrado en combate, en favor del Gobierno de la República, en calidad de Teniente en la acción de la "Herradura," y de haber recibido allí una herida grave en la pierna izquierda;

2.° Con el reconocimiento practicado en Angulo por la Junta de profesores nombrados al efecto por el Gobernador del Cauca, se acredita plenamente que dicho militar adolece de invalidez relativa;

3.° Mediante el certificado expedido por el Ministerio del Tesoro se comprueba que Angulo no ha recibido hasta ahora recompensa alguna del Tesoro público, y

4.° De una certificación del Gobernador del Cauca y de otra del Ministerio de Guerra se deduce que no existe en los correspondientes archivos constancia auténtica de que á Angulo se hubiese expedido despacho de Teniente, razón por la que se hace aceptable la prueba supletoria de testigos para acreditar el empleo con que Angulo militó en defensa del Gobierno el año de mil ochocientos setenta y siete.

Y siendo suficientes los comprobantes que se dejan mencionados para fijar el derecho del demandante, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, declara que Lázaro Angulo se halla en el caso definido por el inciso 8.°, artículo 5.° y artículo 19 de la Ley 84 de 1890, y es acreedor á una recompensa unitaria definitiva de mil doscientos pesos ($ 1,200), que se le pagará del Tesoro público.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta*, dése el correspondiente aviso á Su Señoría el Ministro de Guerra y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—FEDERICO PATIÑO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Enero veintiocho de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Anastasia Narváez reclama recompensa militar, como hermana del finado Angel María Narváez, muerto en defensa del Gobierno legítimo de la Confederación Granadina durante la guerra de 1860 á 1863.

El Procurador de la Nación, á quien se ha oído sobre esta demanda, opina que la demandanta no tiene derecho á la recompensa que solicita, por aparecer de su propia confesión que ella fué casada con Norberto Díaz, con lo cual perdió el carácter de mujer célibe que debe concurrir en las hermanas de los militares para obtener la gracia expresada conforme al artículo 1.°, inciso 2.° de la Ley 84 de 1890.

Esta observación, á juicio de la Corte, tiene fuerza legal incontestable, estando como está, fundada en la confesión expresa de la parte y en la disposición terminante de la ley que se ha citado, por lo que de acuerdo con ella y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, se declara á Anastasia Narváez sin derecho á recibir del Tesoro nacional la recompensa que ha demandado en calidad de hermana de Angel María Narváez.

Notifíquese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—FEDERICO PATIÑO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas* Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Enero veintiocho de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Andrés Lara, con poder de Asunción López, vecina del Municipio del Tambo, Departamento del Cauca, reclama para ella y sus hijos menores recompensa unitaria, por haber muerto su marido Tomás Plaza, en el empleo de Teniente y por consecuencia de enfermedad contraída en servicio del Gobierno en la guerra de 1885.

Innecesario es examinar y apreciar las pruebas aducidas acerca de la calidad de los hijos de la solicitante, su estado de pobreza y otras circunstancias, una vez que la demanda se funda exclusivamente en el hecho de haber muerto Plaza de una enfermedad y no en campo de batalla, ó por consecuencia de heridas recibidas de manos de enemigos armados del Gobierno; pues ni la Ley 84 de 1890 ni ninguna otra disposición vigente reconocen derecho á los deudos de los militares que mueren de enfermedades ocasionadas por el servicio militar á recompensa alguna.

Así lo ha resuelto la Corte en repetidas ocasiones.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, niega la recompensa que es objeto de esta reclamación.

Notifíquese, publíquese y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—FEDERICO PATIÑO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintiocho de Enero de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Juana Marín solicita recompensa como madre del soldado Domingo Restrepo, muerto en Cartagena el ocho de Mayo de mil ochocientos ochenta y seis, en el combate que en aquella fecha se sostuvo en la expresada ciudad.

Ha presentado en apoyo de su demanda prueba completa:

1.° De que es madre natural del finado Domingo Restrepo, circunstancia que consta de la respectiva partida de bautismo;

2.° De que efectivamente murió su citado hijo en el susodicho combate, en defensa de las instituciones y en calidad de soldado, para lo cual ha exhibido documento auténtico registrado en el órgano oficial del extinguido Estado del Magdalena, aparte de la copia que figura en la foja 1.ª de otro documento, también auténtico;

3.° De que ella permanece soltera, pobre y desvalida, que ha guardado buena conducta, y que su hijo murió sin dejar viuda ni descendientes, lo cual consta de autos por declaraciones de testigos contestes, libres de toda tacha, recibidas con las formalidades de la ley;

4.° De que la demandante no ha sido recompensada por cuenta de la Nación, en los términos que la harían indigna de la recompensa que solicita, según la prohibición del artículo 61 de la Ley 84 de 1890; para lo cual acompaña certificación del respectivo Ministerio.

Por tanto, administrando justicia en nombre de la Repmública y por autoridad de la ley, y de acuerdo con los artículos 1.°, 4.°, 5.° y 9.° de la Ley 84 de 1890, y con el concepto del Ministerio Público, la Corte declara: Juana Marín tiene derecho á una recompensa unitaria definitiva de setecientos cuatro pesos del Tesoro de la Nación, como madre de Domingo Restrepo, muerto en la fecha y combates citados; recompensa equivalente al monto del sueldo en cuatro años de que disfrutaba Restrepo como soldado del Ejército.

Dése cuenta al Ministerio de Guerra. Notifíquese, publíquese, déjese copia y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—FEDERICO PATIÑO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Enero treinta de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Andrés Lara, con poder de Antonio Romero, natural del Municipio de Guasca, en el Departamento de Cundinamarca y vecino de Cali, Departamento del Cauca, solicita recompensa militar, conforme á la Ley 84 de 1890, por motivo de enfermedad contraída en el servicio y por antigüedad en el mismo.

Oído el dictamen del señor Procurador en el juicio sumario y practidas las pruebas decretadas por la Corte en auto para mejor proveer, ha llegado el caso de fallar la reclamación definitivamente.

El empleo que Romero tenía en el Ejército, acreditado con los respectivos documentos, era el de Cabo 1.° de la segunda Compañía del *Batallón Junín*, número 13, y como la Corte ha resuelto yá en muchos casos que la recompensa por antigüedad ó tiempo en el servicio no puede otorgarse á los individuos de tropa, sino á los oficiales ó jefes en vista de la correspondiente hoja, formada por el Estado Mayor y aprobada por el Ministerio de Guerra, debe desecharse la pretensión del demandante en cuanto á la solicitud de pensión por esta causal.

Cuanto á la recompensa unitaria por enfermedad contraída en el servicio, la Corte tiene en consideración que conforme al número 6.°, artículo 5.° de la Ley 84 arriba citada, dan derecho á recompensa las enfermedades contraídas en el servicio de las armas, de manera que imposibiliten por completo al paciente para trabajar y proporcionarse la subsistencia, siempre que tales enfermedades no provengan de mala conducta, y que conforme al artículo 16 de la misma ley los militares que en el servicio hayan contraído alguna enfermedad de las declaradas incurables, tendrán derecho á una recompensa unitaria definitiva igual á las dos terceras partes de la suma señalada para los que hayan sido inutilizados absolutamente en acción de guerra. El artículo 16 señala como recompensa á los que hayan quedado absolutamente inválidos por heridas recibidas en acción de guerra el monto del sueldo en cuatro años.

Está acreditado con el reconocimiento practicado ante el Gobernador del Cauca por tres facultativos, que Antonio Romero sufre la enfermedad llamada *epilepsia*, que es de difícil curación é imposibilita al paciente para entregarse al trabajo.

La Corte, en atención á la naturaleza de esta enfermedad y á las circunstancias de extrema pobreza del solicitante, reputa que es incurable, ó al menos, que las probabilidades de curación, si las hay, son muy remotas.

Se ha acreditado con declaraciones de muchos testigos, entre ellos los Jefes del *Batallón Junín*, que Antonio Romero sirvió por más de tres años en el citado Batallón, que observó en él constantemente buena conducta, que gozaba de salud cuando entró al servicio y que estando en él contrajo la enfermedad que lo inutilizó absolutamente para continuar en el Ejército, por lo cual se le dió de baja en Popayán y se le concedió pasaporte con auxilios de marcha.

Consta también que Romero no ha recibido recompensa del Tesoro y que es muy pobre.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, declara que el Cabo 1.° del *Batallón Junín*, Antonio Romero, tiene derecho á una recompensa unitaria de quinientos doce pesos ($ 512), dos terceras partes del monto del sueldo de un Cabo 1.° en cuatro años, según la Ley 86 de 1886, por enfermedad incurable contraída en el servicio de las armas.

Se niega la recompensa que solicita el mismo Romero por antigüedad en el servicio.

Notifíquese esta sentencia, comuníquese al Ministerio de Guerra, publíquese en la *Gaceta Judicial*, y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—FEDERICO PATIÑO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, treinta y uno de Enero de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: José María Sandoval, vecino de Calibío, Departamento del Cauca, demandó, por conducto de apoderado, ante el Juez del Circuito de Popayán, en Junio de mil ochocientos setenta y ocho, al Tesoro nacional por la suma de mil ochenta y ocho pesos ($ 1,088) provenientes de suministros y empréstitos hechos al Gobierno en la guerra de mil ochocientos setenta y seis y mil ochocientos setenta y siete.

El juicio quedó abandonado hasta Abril de mil ochocientos ochenta, en el cual se mandaron practicar algunas pruebas pedidas por el demandante.

La actuación que debió seguir de allí no se ha presentado á la Corte, pues el expediente que un particular trajo á la Comisión de suministros revela que se ha retirado la parte posterior de él.

En Junio de mil ochocientos ochenta y siete el Juez municipal de Tunía aparece examinando testigos en virtud de un exhorto de catorce de Junio de mil ochocientos ochenta, que dice haber librado el Juez del Circuito de Popayán, y que no figura en los autos. El Juez municipal recibió tres declaraciones, que fueron luégo ratificadas ante el Juez de Circuito con intervención del Fiscal respectivo.

La Comisión, fundándose en que el expediente no había sido remitido por el Juez de su conocimiento sino traído por una persona que no tenía siquiera poder del demandante, negó la reclamación en diez y siete de Junio del año próximo pasado, y su determinación fué confirmada en catorce de Octubre del mismo año por el Ministerio del Tesoro.

Andrés Lara ocurrió en diez y seis de Noviembre siguiente con un poder que le sustituyó Joaquín Negret, apoderado de Sandoval y apeló para ante esta Corte de lo resuelto por el Ministerio.

Otorgado el recurso, ha llegado el caso de fallar definitivamente esta reclamación.

Para verificarlo, la Corte considera:

1.° Que además de la manera irregular como fué traído el expediente á la Comisión de suministros, es evidente que con malicia ó sin ella falta en él una parte de lo actuado, que podría contener datos importantes para la sentencia y aun quizás los fallos definitivos;

2.° Que de los tres testigos examinados ante el Juez del Circuito de Popayán, después de vigente la Ley 44 de 1886, sólo dos dan como razón de su dicho el haber presenciado los hechos, y el otro no da una explicación satisfactoria sobre el modo como adquirió conocimiento de ellos, pues no dice que presenció las expropiaciones ó suministros sino que lo sabe por haber sido peón de Sandoval.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el dictamen del Fiscal de la Comisión de suministros, confirma la resolución apelada.

Déjese copia de este fallo, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—FEDERICO PATIÑO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Febrero tres de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Isidora Susatama, vecina de Páez, en la Provincia de Popayán, pide, por medio de apoderado, para sí y para sus menores hijos legítimos, José Espíritu Santo y Valentín, la recompensa militar que la Ley 84 de 1890 permite concederles, á causa de que Cruz Penna, esposo que fué de la primera y padre legítimo de los dos últimos, murió en el combate de La-Honda el año de 1885, en defensa del Gobierno de la República.

Comprueban el derecho de la demandante y de sus menores hijos los siguientes documentos:

1.° Los certificados que forman los folios 1.° y 2.° del expediente, en los cuales el Cura de Inzá da testimonio de que en su archivo no existen ni la partida del matrimonio celebrado entre Cruz Penna é Isidora Susatama, ni las de bautismo de José Espíritu Santo y Valentín Penna, á causa de que de los libros parroquiales de matrimonios y de bautismos correspondientes á la época en que debieron extenderse las partidas mencionadas, unos fueron destruídos por los indígenas de Tierra-adentro el año de 1872, y otros fueron llevados á Popayán y no han sido devueltos; pero manifiesta el certificante que sabe, tanto por el examen que bajo juramento hizo á varios vecinos suyos, como por haber él estado de Cura en aquella parroquia durante un término de más de treinta años y haber presenciado el expresado matrimonio entre Cruz Penna é Isidora Susatama, que este acto tuvo lugar y que los dichos José Espíritu Santo y Valentín son hijos legítimos de tales esposos; agregando que Tomasa, Mercedes y Anastasia, también hijas legítimas de aquéllos, son mayores de edad y están casadas, respectivamente, con Salvador Rojas, Marcos Cunchimba y Juan Cruz Sauza;

2.° Un memorial presentado en forma legal á la Corte, en el cual las mencionadas Tomasa, Mercedes y Anastasia manifiestan que, aunque son hijas legítimas del soldado Penna, no creen tener derecho alguno á participar de la recompensa á que dé lugar la muerte en batalla de su expresado padre, en defensa de las actuales instituciones, por estar casadas y ser hábiles para el trabajo; y que las únicas personas que pueden optar derecho á tal recompensa son su madre, Isidora Susatama, y sus dos hermanos menores, José Espíritu Santo y Valentín;

3.° Declaraciones rendidas ante el Juez municipal de Páez, con asistencia del Personero del Distrito, por los testigos Manuel Antonio Pajoy, José Pedro Purí, Jesús Peña y Juan de la Cruz Quintero, quienes afirman uniformemente que les consta, porque lo presenciaron, que se celebró el matrimonio entre Cruz Penna é Isidora Susatama; que José Espíritu Santo y Valentín son hijos legítimos de aquéllos; que les consta igualmente, porque lo vieron, que Cruz Penna militó como soldado del Gobierno que regía en el Cauca el año de 1885, y murió en el campo de batalla en la acción de La-Honda, cerca del Gigante; que las otras tres hijas legítimas de Penna, Tomasa, Mercedes y Anastasia son casadas, y que la viuda y los menores hijos de Penna viven en suma pobreza, sin bienes ni renta de ninguna clase, observan muy buena conducta y la observaron siempre para con el referido soldado;

4.° Declaraciones rendidas ante el mismo Juez municipal de Páez, también con asistencia del Personero respectivo, por Manuel Santos Pisa y Domingo Masaguel, que aseguran que el matrimonio de Cruz Penna é Isidora Susatama fué celebrado por el doctor Emigdio Gámes, Cura de la iglesia del Pedregal en Inzá el año de 1858, poco más ó menos; y que por el conocimiento que tienen de la familia de Penna creen que Valentín tiene catorce años de edad, y José Espíritu Santo, diez y ocho;

5.° El señor Ministro del Tesoro certifica que los demandantes no han recibido hasta ahora recompensa alguna del Tesoro público, y

6.° El Párroco de Inzá certifica que Isidora Susatama no ha contraído nuevas nupcias sino que se conserva viuda y observa buena conducta.

Como á falta justificada de las pruebas directas sobre el estado civil de las personas es aceptable la supletoria de testigos, según el artículo 51 de la Ley 84, la presente demanda está suficientemente comprobada; razón por la cual, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el parecer del señor Procurador, declara que Isidora Susatama y sus dos menores hijos, José Espíritu Santo y Valentín, de conformidad con los artículos 5.°, inciso 2.°, 6.° y 9.° de dicha Ley 84, tiene derecho á una recompensa unitaria definitiva de setecientos cuatro pesos ($ 704) que se les pagarán del Tesoro público y se dividirá así: la mitad para Isidora Susatama y la otra mitad para sus dos expresados hijos.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—FEDERICO PATIÑO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO. — LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, Febrero tres de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Rosaura Polanco, vecina del Distrito de Páez, Departamento del Cauca, solicita, por medio de su apoderado Manuel Paz, que se le conceda recompensa con arreglo á la Ley 84 de 1890.

Sustanciado el respectivo juicio sumario con audiencia del señor Procurador de la Nación, procede la Corte á fallar la reclamación.

Con declaraciones de testigos hábiles, por haber sido destruídos en la guerra de 1860 los libros de la parroquia de Inzá, en donde debían encontrarse las pruebas del estado civil de la demandante, del matrimonio de sus padres etc., se ha acreditado: que Manuel Salvador Polanco y Brígida Quintero contrajeron matrimonio conforme al rito católico en la parroquia de Inzá en los años de 1850 á 1852; que de este matrimonio nació la demandante Rosaura Polanco, la que es soltera, muy pobre, ha observado buena conducta y la observó con sus padres. Que Manuel Salvador Polanco murió en el mes de Agosto de 1862 en el empleo de Sargento 1.° del Ejército de la Confederación Granadina, defendiendo la causa de ésta, en un combate que se libró en el pueblo de Inzá contra fuerzas revolucionarias comandadas por Mercenario Muse.

Asimismo se ha justificado que Brígida Quintero murió poco después de la guerra de 1860, y que de los hijos del matrimonio habido entre ella y Polanco sólo existen la reclamante y Jaime Polanco, quien ha manifestado que no tiene derecho á recompensa, por ser mayor de edad y hábil para trabajar.

Con certificación del Ministerio del Tesoro se ha acreditado que Rosaura Polanco no goza de pensión, ni hay constancia de que haya recibido recompensa por razón de la muerte de Manuel Salvador Polanco.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador y de conformidad con lo que disponen los artículos 5.°, 9.°, 11, 50 y 51 de la Ley 84 de 1890, declara que Rosaura Polanco tiene derecho á una recompensa unitaria de novecientos doce pesos ($ 912) que se le pagarán del Tesoro nacional, por haber muerto su padre Manuel Salvador Polanco en el empleo de Sargento 1.° del Ejército de la Confederación Granadina combatiendo en defensa del Gobierno.

Comuníquese esta sentencia al Ministerio de Guerra, previa notificación, déjese copia de ella, insértese en la *Gaceta Judicial*, y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—FEDERICO PATIÑO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO. — LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, cuatro de Febrero de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Como militar de la Independencia, Juan Antonio Arboleda pide, por medio de apoderado, la recompensa á que le da derecho la Ley 84 de 1890.

Para sostener su demanda, sólo ha exhibido los siguientes comprobantes:

1.° Certificaciones del señor Ministro de Guerra y del Oficial encargado del *Archivo Republicano*, de las cuales resulta que no existe allí la hoja de servicios del demandante Arboleda, y que tampoco figura el nombre de éste en los escalafones de los militares de la Independencia que se publicaron hasta el año de mil ochocientos sesenta y seis;

2.° Los testigos Vicente Zea, Vicente Jiménez y Zoilo Llanos, todos tres mayores de ochenta años, rindieron sus declaraciones ante el Juez del Circuito en lo civil de Cali, con asistencia del Fiscal respectivo, y dijeron que les constaba, por haberlo presenciado, que el demandante Juan Antonio Arboleda fué militar de la Independencia; que peleó en las acciones de Palo y de San-Juanito como soldado de caballería; que saben que concurrió á la campaña del Sur y peleó en Pichincha, en donde obtuvo empleo de Sargento; y que, además, ha sido siempre un hombre honrado, modesto y adicto al Gobierno, y

3.° El señor Ministro del Tesoro certifica que Arboleda no ha recibido recompensa del Tesoro público.

Para resolver, se considera que, no existiendo la prueba directa de los servicios prestados por Arboleda á la causa de la Independencia, es el caso de admitir la supletoria que, como se ha visto, consiste en el testimonio conteste de tres ancianos que aseguran de una manera cierta tener conocimiento de los dichos servicios, y expresan la razón satisfatoria de su dicho. Como además ellos afirman que Arboleda tuvo empleo de Sargento, la demanda se halla comprobada en los términos de los artículos 5.°, incisos 1.°, 9.°, 12 y 51 de la Ley 84 de 1890; y en consecuencia, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, declara:

Que Juan Antonio Arboleda tiene derecho á una recompensa unitaria definitiva de ochocientos diez y seis pesos ($ 816) que como á Sargento 2.° de la Independencia, se le pagará del Tesoro público.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial*, avísese á Su Señoría el Ministro de Guerra y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—FEDERICO PATIÑO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, cuatro de Febrero de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: De los comprobantes aducidos por Andrés Lara en calidad de apoderado de Norberto Plaza, vecino del Distrito municipal de Dolores, Provincia de Popayán, y en los cuales se apoya para reclamar recompensa militar para su mandante, por razón de la invalidez que padece á causa de heridas recibidas en el campo de batalla, sosteniendo el Gobierno legítimo en la guerra de mil ochocientos ochenta y cinco, resulta:

Que Plaza sirvió como Subteniente en las fuerzas del Gobierno en dicha guerra, y como tal asistió al combate que tuvo lugar el cuatro de Junio de mil ochocientos ochenta y cinco en el punto de "San-Pedro" ó "Mantequero," Departamento del Cauca, recibiendo allí dos heridas de bala en la pierna derecha, por consecuencia de las cuales ha quedado inválido é incapaz relativamente para trabajar como antes, sobre lo cual existen las declaraciones contestes de Jacinto Muñoz, Misael Mondragón, Vicente A. Mapayo, Manuel Güenque y Cornelio Córdoba, que asistieron á dicho combate y vieron cuando fué herido Plaza, y el reconocimiento practicado en la persona de éste ante el Gobernador del Departamento del Cauca, por los Profesores de Medicina, Domingo Cajiao C., Domingo Arboleda y Juan N. Wallis O.;

Que con fecha diez y nueve de Mayo de mil ochocientos

ochenta y seis, el Presidente del extinguido Estado del Cauca expidió á Plaza el despacho de Subteniente efectivo de las milicias del Cauca, con la antigüedad de once de Enero de mil ochocientos ochenta y cinco, en que empezó á prestar sus servicios al Gobierno, despacho que se ha presentado original;

Que el reclamante es pobre y carece de recursos para atender á su subsistencia, como lo afirman los testigos de la yá citada información;

Finalmente, que Plaza no ha recibido recompensa del Tesoro nacional, por razón de su aludida invalidez, según lo certifica el Ministerio del ramo:

En vista de estos antecedentes y de lo que dispone la Ley 84 de 1890 en sus artículos 1.°, 5.° (ordinal 8.°), 9.° y 19, es indudable que el petionario tiene derecho á la gracia que demanda, y por ello la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el parecer del Procurador general, dispone conceder al Subteniente Norberto Plaza la recompensa unitaria definitiva de novecientos sesenta pesos ($ 960), pagadera del Tesoro nacional, por razón de la invalidez relativa ó parcial de que se ha hablado.

Notifíquese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—FEDERICO PATIÑO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, cuatro de Febrero de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Adolfo P. Simonds ocurrió al Ministerio de Relaciones Exteriores para que, de acuerdo con la Ley 10 de 1886, se le mandaran pagar dos mil ciento treinta y cinco pesos ($ 2,135), valor de las exacciones que sufrió por parte del Gobierno nacional en la guerra de mil ochocientos ochenta y cinco. El Ministerio, apoyado en que Simonds no había acreditado el carácter de extranjero, negó lo pedido; y por ello éste entabló, por medio de apoderado, ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, juicio civil ordinario para que se condenara á la Nación á pagarle la misma suma antes indicada. El Tribunal, fundado también en que Simonds no había acreditado su carácter de extranjero, sin entrar á examinar la verdad de las exacciones, por ser cuestión previa la comprobación de la condición de extranjero, absolvió á la Nación de los cargos contenidos en la demanda intentada.

Recibido el expediente en esta Superioridad, se le ha dado la tramitación de segunda instancia; y es yá tiempo de dictar sentencia que le ponga fin al pleito.

Como el demandante ha comprobado plenamente ante la Corte su carácter de extranjero neutral, con la respectiva partida de bautismo autenticada por el correspondiente Cónsul colombiano y el Ministro de Relaciones Exteriores, y un certificado del Prefecto de la Provincia de Barranquilla sobre la conducta observada por Simonds, y como con varias declaraciones de testigos se establece la entidad personal del actor, se procede á examinar las pruebas que existen en el proceso.

La suma de dos mil ciento treinta y cinco pesos ($ 2,135) á que asciende la cantidad reclamada, la ha descompuesto el demandante en las siguientes partidas:

Mil cuatrocientos pesos ($1,400), valor de treinta y cinco novillos gordos expropiados por el Jefe militar de Chiriguaná, Camilo M. Barreneche, en los meses de Junio y Julio de mil ochocientos ochenta y cinco. Esta partida está comprobada tanto con una exposición dada por el mismo Barreneche como por un certificado expedido por el Gobernador del Departamento del Magdalena (fojas 4 y 8 del cuaderno número 2) y con las declaraciones de los testigos Pedro Sinevo B. y Clemente C. Cayón (fojas 20 y 21 del cuaderno número 4).

Trescientos treinta y cinco pesos ($ 335), valor de dos caballos y cinco yeguas. De esta partida solamente están acreditados cuarenta y cinco pesos ($ 45) de la expropiación de una yegua con la exposición de Barreneche y las declaraciones de Basilio Rodríguez y Juan F. van Strahlen (fojas 28 y 29 del cuaderno número 4); porque aunque fué cierto que se tomaron dos caballos y cinco yeguas, fueron devueltas seis bestias, cuya muerte no aparece comprobada;

Doscientos pesos ($ 200), importe de dos bestias mulares. Esta expropiación está demostrada con el recibo dado por el Jefe municipal de Chiriguaná y con las declaraciones de Basilio Rodríguez y Juan F. van Strahlen (fojas 28, 29, 30 y 32 del cuaderno número 4).

Doscientos pesos ($ 200) de un empréstito. Esta cantidad está comprobada con el recibo dado por el Jefe municipal de Chiriguaná y con el certificado del Gobernador del Departamento del Magdalena (fojas 33 del cuaderno número 4 y 8 del cuaderno número 2).

En mérito de lo expuesto y de lo que dice la Ley 10 de 1886, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca la sentencia apelada, condena á la Nación á pagar al alemán Adolfo P. Simonds la suma de mil ochocientos cuarenta y cinco pesos ($ 1845) y la absuelve de los demás cargos contenidos en la demanda.

Publíquese, notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—FEDERICO PATIÑO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, quince de Diciembre de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: La Comandancia del *Batallón 3.° de Boyacá*, por auto de cuatro de Junio del corriente año, llamó á juicio militar al Cabo Daniel Ayala y al soldado Jesús Mesa, como responsables del delito previsto en el artículo 1621 del Código de la materia, y que castiga el artículo 256 del Código Penal común, vigente el primero de Abril de mil ochocientos ochenta y nueve, en cuya noche se fugaron dos presos de la cárcel de Santa-Rosa de Viterbo (Departamento de Boyacá), establecimiento de castigo que estaba custodiado por parte de la fuerza que compone el *Batallón 3.° de Boyacá*, al cual pertenecen los procesados.

Habiéndose fugado el soldado Mesa, según consta en el sumario, se adelantó la causa únicamente contra el reo Ayala hasta que se reunió el Consejo de Guerra ordinario que lo absolvió en sentencia de veintinueve de Octubre último, que ha venido en consulta á esta Superioridad.

Nombrado y posesionado el defensor del procesado, y dada á la causa la tramitación señalada en el artículo 412 de la Ley 105 de 1890, es llegado el caso de dictar la sentencia que le ha de poner fin.

El señor Procurador, en virtud de estudio detenido del expediente, es de concepto se ordene la reposición del proceso al estado de notificar al defensor del reo el auto de proceder, por cuanto no se llenó esa formalidad en el juicio, omisión que constituye, de conformidad con el artículo 1536 del Código Militar, una causal de nulidad.

Para resolver esta objeción presentada por el señor Procurador, que es la única que se ha podido oponer contra esta causa, se considera lo siguiente:

La Corte, al conocer de un negocio militar, sea por recurso de apelación, nulidad ó por consulta, no tiene más misión que la de averiguar si se ha incurrido en incompetencia de jurisdicción, ó en informalidades sustanciales é insanables que vicien el proceso.

El Código Militar no enumera las causales de nulidad en que se puede incurrir en un juicio, sino en el artículo 1536, que hace parte de la sección que reglamenta el modo de proceder la Corte cuando debe conocer de un negocio militar por recurso de apelación, nulidad ó consulta; pero no expresa cuáles de esas nulidades son insanables y cuáles nó, á pesar de que en los artículos 1492, 1493 y 1494 hablan de la línea de conducta que debe observar el Consejo de Guerra ordinario cuando se alegan nulidades *subsanables* y las partes ratifican la actuación.

Habiendo sobre el particular un vacío nacido de una cla-

sificación establecida por el mismo Código Militar, que no indicó los individuos que han de componer los miembros de la clasificación, es preciso ocurrir, de acuerdo con lo que dicen la última parte del artículo 1358 de dicho Código é inciso 2.° del artículo 279 de la Ley 153 de 1887, á las disposiciones del derecho común, ó sea á los artículos 264, 265 y 267 de la Ley 57 de 1887.

Siendo la notificación del auto de enjuiciamiento, al defensor del reo, una formalidad establecida en favor del procesado, para que tenga cumplimiento el principio de justicia universal de que nadie puede ser penado sin haber sido oído y vencido en juicio, es cuestión obvia que la omisión de esa formalidad debe quedar subsanada, de conformidad con el ordinal 3.° del artículo 264 antes citado, con el hecho de que tanto el reo como el defensor comparezcan en el juicio, y de que lejos de reclamar dentro del día siguiente al que se les haga la primera notificación, el defensor declare que da por bien hecho todo lo practicado en la causa.

Como esto es justamente lo que ha sucedido en este juicio, con la circunstancia especial de que el auto de proceder sí fué notificado personalmente al reo, es preciso concluír que la falta de notificación del auto de enjuiciamiento al defensor, es nulidad subsanable, mucho más si la parte del reo ratifica expresamente lo actuado.

Resueltas, en consecuencia, negativa y separadamente las cuestiones propuestas por el Presidente de la Corte sobre incompetencia de jurisdicción é informalidades sustanciales é insanables en el procedimiento, esta Superioridad, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la sentencia consultada.

Notifíquese, cópiese y publíquese en la *Gaceta Judicial*, devuélvase el expediente y recuérdese nuevamente á las autoridades militares que los autos de enjuiciamiento deben dictarse de conformidad con el artículo 345 de la Ley 105 de 1890.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Baltasar Botero Uribe.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales. Juan Evangelista Trujillo.—Lucas Villafrádez.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Enero veinticinco de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: La Sala de lo Criminal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca condenó, el quince de Noviembre último, al ex-Juez 2.° del Circuito de Facatativá, Antonio W. Robayo, á pagar una multa de cuatro pesos, á favor del Erario público, como responsable en tercer grado del delito previsto en el inciso 2.° del artículo 528 del Código Penal, consistente en no haber practicado varias diligencias para perfeccionar un sumario seguido en averiguación de un delito de hurto. De esta sentencia apeló el procesado para ante esta Superioridad, en donde se le ha dado al negocio la tramitación señalada para resolver el recurso de alzada interpuesto.

Confirmado por la Corte el auto por el cual se llamó á juicio de responsabilidad al Juez Robayo por falta al cumplimiento de sus deberes, con infracción del capítulo 5.°, título 10.°, libro 2.° del Código Penal, el Tribunal le dió el curso debido al juicio, con el objeto, entre otros, de que el procesado desvaneciera el cargo por el cual se le encausó; pero es el caso que Robayo no rindió el informe de que habla el artículo 1889 del Código Judicial, y dejó en pie el cargo por el que se le sometió á juicio, que está plenamente comprobado, de suerte que el Tribunal no pudo, sin faltar á sus deberes, dejar de hacer lo que hizo, que fué condenar al procesado, *á quien impuso la menor pena que era dable* asignarle.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el concepto del señor Procurador, confirma la sentencia apelada.

Notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Baltasar Botero Uribe.—Jesús Casas Rojas.—Federico Patiño.—Juan Evangelista Trujillo.—Lucas Villafrádez.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Enero veintisiete de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: El Secretario de Gobierno del Departamento del Cauca, excitó al Fiscal del Tribunal Superior del Distrito Judicial del mismo nombre, para que promoviese lo conveniente á efecto de averiguar la responsabilidad en que pudiera haber incurrido Jaime Castillo, Prefecto de San Juan, por abandono del empleo.

Pasadas al Tribunal por el Fiscal las diligencias remitidas por el Secretario de Gobierno y seguido el juicio correspondiente, el mismo Tribunal, por sentencia de cuatro de Julio del año próximo pasado, declaró responsable á Jaime Castillo por abandono del empleo de Prefecto, segundo suplente de la Provincia de San-Juan, y previa calificación de la culpabilidad en tercer grado, lo condenó á pagar la multa de diez pesos y las costas del proceso.

Notificada la sentencia á Castillo, interpuso apelación para ante la Corte; pero no habiéndola formalizado ni presentado alegato alguno, el Tribunal, previa citación de las partes, ordenó la remisión del expediente por haber dispuesto desde la sentencia, que si ella no fuere apelada se consultase con esta Superioridad.

Oído el concepto del señor Procurador y examinado el proceso, la Corte procede á dictar la sentencia que corresponda, teniendo presente las siguientes consideraciones:

Aparece efectivamente del proceso que Castillo se separó del ejercicio de las funciones de Prefecto el día 2 de Enero de 1891, funciones que había desempeñado como segundo suplente y de cuyo carácter oficial hay constancia en los autos. Mas, como el procesado manifestó en su informe, que una de las razones que tuvo para separarse del empleo, fué la de que no solamente había terminado su período el treinta y uno de Diciembre anterior, sino que había tomado posesión del destino Guillermo C. Hurtado, como primer suplente nombrado para el nuevo período, la Corte, que no encontró suficientemente acreditado este hecho, por no haberse producido en tiempo oportuno la prueba que lo confirmase, dictó auto para mejor proveer, el diez y ocho de Noviembre último, á fin de que se remitiese á la Corte copia de la diligencia de la posesión del destino de Prefecto primer suplente de la Provincia de San Juan, que se hubiera dado á Guillermo O. Hurtado. En cumplimiento de la previsión se ha remitido por el Juez del Circuito de San-Juan la diligencia pedida, y de ella aparece que realmente el mencionado Hurtado tomó posesión del empleo de Prefecto primer suplente el treinta de Diciembre de 1890, por haber sido nombrado para tal empleo por el Gobernador del Departamento para el período que debía empezar el primero de Enero de 1891, posesión que le dió el mismo Juez del Circuito, conforme á lo dispuesto en el artículo 295 del Código Político y Municipal.

En vista de esto, la Corte encuentra plenamente justificado el procedimiento de Castillo al separarse de su puesto, dado que su separación fué motivada por la posesión que se había dado al individuo que debía reemplazarlo, de acuerdo con lo que, aun para los casos de licencia, dispone el artículo 335 del citado Código.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca la sentencia del Tribunal del Distrito Judicial del Cauca, de cuatro de Julio del año próximo pasado, por la cual se condenó á Jaime Castillo, y lo absuelve del cargo por el cual se le sujetó á juicio.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Baltasar Botero Uribe.—Jesús Casas Rojas.—Federico Patiño.—Juan Evanjelista Trujillo.—Lucas Villafrádez.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

IMPRENTA DE ANTONIO M. SILVESTRE.
Director, Tomás Galarza.

REPÚBLICA DE COLOMBIA.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AÑO VIII | Bogotá, 15 de Abril de 1893. | NÚM. 381.

CONTENIDO.

Págs.

PENA CAPITAL.

La que confirma la sentencia por la cual el Tribunal Superior de Popayán condenó á la pena de muerte á Manuel Dolores Larrahondo, por el delito de asesinato perpetrado en la persona de Aurelio Perea. (Magistrado ponente, doctor Botero Uribe)..... 137

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

La que concede á Gricelda Sánchez una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Patiño)..... 139
La que concede á Juan Cañadas una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Trujillo)..... 140
La que concede á Lucio Hurtado una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas)..... 140
La que confirma la resolución que el Ministerio del Tesoro dictó en la reclamación por expropiaciones de Félix Rincón y otros. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas)..... 140
La que confirma la sentencia que el Tribunal Superior de Cundinamarca dictó en el juicio seguido por el Fiscal de dicho Tribunal contra Luis Antonio Quijano, sobre rescisión de un contrato. (Magistrado ponente, doctor Isaza)..... 141

NEGOCIOS CRIMINALES.

La que confirma la sentencia que el Tribunal Superior de Bolívar dictó en el juicio seguido contra Juan Noriega y Benjamín Martínez R., Juez Superior del Distrito Judicial de aquel mismo nombre y del Circuito de Cartagena, respectivamente, por omisión en el cumplimiento de sus deberes. (Magistrado ponente, doctor Villafrádez)..... 141

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

El en que se declara incompetente la Corte para conocer en 2.ª instancia del juicio seguido por Indalecio y Candelario Tobar, sobre amparo de pobreza. (Magistrado ponente, doctor Pombo)..... 142
El que niega la admisión del recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Sur del Departamento de Santander en el juicio seguido entre Francisco Plata y Julián Orejarena, sobre rescisión de una partición. (Magistrado ponente, doctor Pombo)..... 142
El que declara inadmisible el recurso de casación interpuesto contra el fallo que el Tribunal Superior de Cundinamarca dictó en el juicio seguido por Cayetana Rodríguez y otros contra Evarista Rodríguez y otros, sobre exclusión de unos terrenos en unos inventarios. (Magistrado ponente, doctor Pombo)..... 143

GACETA JUDICIAL.

PENA CAPITAL.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, siete de Febrero de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: En el Distrito de Jamundí, Circuito de Cali, se presentó el Comisario del sitio de "Las-Cañas," Felipe Ortiz, y dijo que hacía unos tres días se notaba la desaparición de Aurelio Perea, encargado de la hacienda de "Las-Cañas," en cuya casa vivía éste solo, y que el cuarto de su habitación estaba cerrado; que no habiendo noticia de que pudiera estar ausente de la casa dicho Perea, daba el denuncio á la Alcaldía, para que, si ésta lo creía conveniente, averiguara su desaparición.

El Alcalde de Jamundí dió orden allí mismo, en el mismo día, nueve de Enero de mil ochocientos noventa y dos, al Comisario mencionado, y á varios vecinos, para que, trasladándose á la hacienda expresada, procedieran á hacer las indagaciones necesarias hasta descubrir el paradero de Perea.

De la instrucción sumaria que levantó el expresado Alcalde, desde el reconocimiento de la habitación de Perea y sus inmediaciones hasta la última declaración rendida en Popayán, habiéndose practicado diligencias en el paraje de Yarumal y en los Distritos de Buenosaires y Cali, resultó:

Que realmente, desde el martes cinco de Enero del año citado, como de las ocho á diez y media ú once de la mañana, no se había vuelto á ver á Perea, hasta el doce del mismo mes, que fué hallado su cadáver casi insepulto en una acequia antigua, seca, de la hacienda de "Las-Cañas," á unas tres cuadras poco más ó menos de la casa.

Que por la sangre, huellas y señales que se hallaron en el cuarto que habitaba Perea y en las inmediaciones, así como el modo y circunstancias en que fué hallado el cadáver, y los antecedentes ocurridos entre aquél y Manuel Dolores Larrahondo ó González, la muerte había sido violenta; pues se careció absolutamente de noticia alguna de accidente natural que lo hiciera desaparecer, y que hubiese sido sepultado por esto en el expresado lugar.

Y que la circunstancia de haber sido Larrahondo enemigo mortal de Perea; las amenazas que aquél había vertido contra éste, y el llevar al cinto Larrahondo, en días anteriores, una arma que, dicen, era para matar á Perea (hechos más ó menos comprobados á juicio de los empleados que conocieron del proceso); el haber estado Larrahondo en el lugar del suceso en los días lunes y martes en que desapareció Perea y haber indagado por éste; el haberse ausentado de allí repentina y sigilosamente; el habérsele hallado algunos objetos de la propiedad y uso de Perea, que faltaron del cuarto ó pieza de habitación de éste; y por último, la confesión cualificada, inverosímil y contradictoria de Larrahondo, de haber dado él muerte á Perea, porque éste lo atacó, mas sin comprobar las circunstancias esculpativas, y, por el contrario, guardar silencio sobre ellas; todo esto con otros hechos accesorios apreciados conjuntamente, presentaban á Manuel Dolores Larrahondo como responsable de la muerte de Aurelio Perea.

El Juez Superior del Distrito Judicial de Popayán, de acuerdo con el Fiscal, en cumplimiento del artículo 1627 del Código Judicial, profirió auto de enjuiciamiento, con fecha nueve de Mayo de mil ochocientos noventa y dos, contra Manuel Dolores Larrahondo, natural y vecino del Distrito de Buenosaires, Circuito Judicial de Santander, por el delito de homicidio, perpetrado en la persona de Aurelio Perea, y por el de robo de bienes de propiedad de éste.

Notificado este auto al enjuiciado, quien prescindió de apelar de él y de nombrar defensor, el Juez nombró uno de oficio, y recibióse la causa á prueba, sin que se hubiese presentado ninguna por parte ni del acusado, ni del Fiscal ni del defensor.

Verificado el sorteo del Jurado que debía conocer del juicio y corridos los traslados, señalóse el treinta de Junio de mil ochocientos noventa y dos, á las diez y media de la mañana, para la audiencia pública; y celebrada ésta sin alegato escrito ni del defensor ni del reo y sólo dos del Fiscal, el Jurado resolvió afirmativamente las cuestiones propuestas por el Juez, y declaró, por consiguiente, que se habían cometido los delitos de homicidio, con circunstancias que lo reputan como más grave, y de robo, de que se hizo mención en el auto

de proceder, y que Manuel Dolores Larrahondo era autor principal de ellos.

El Juez Superior aceptó el veredicto del Jurado y procedió inmediatamente á aplicar la ley; y en mérito de las consideraciones expuestas en su sentencia de primero de Julio de mil ochocientos noventa y dos, condenó á Manuel Dolores Larrahondo á la pena de cinco años de presidio y á las accesorias de que trata el Código Penal, por el delito de robo, para en caso de que sea conmutada la pena de muerte; y por el delito de asesinato fué condenado á ser pasado por las armas.

El defensor del reo apeló de la sentencia, habiéndose conformado con ella el Ministerio Público; y los autos pasaron al Tribunal Superior de Popayán, el cual confirmó aquélla en todas sus partes, y no habiéndose interpuesto recurso de casación, elevó su fallo en consulta á esta Corte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 368 y 388 de la Ley 105 de 1890.

La Corte, al considerar en consulta este grave negocio, omite tratar el punto que se relaciona con el delito de robo, por prescribirlo así el artículo 368, inciso 2.°, últimamente citado; y se ocupa únicamente en estudiar la sentencia del Tribunal Superior de Popayán, en cuanto ella impone la pena de muerte.

Desde luégo es de notarse la indiferencia con que el reo y todas las personas que debieran interesarse por su suerte en este juicio, excepto el defensor ante esta Corte, han procedido en el debate judicial en que se trata nada menos que de la vida de aquél. Ni su madre, Petrona González, ni sus hermanas, ni sus sobrinos, ni su cuñado, hicieron esfuerzo alguno por dejar de declarar, bajo juramento, en un asunto en que se trata de averiguar la criminalidad homicida de su deudo, para lo cual los ampara la ley natural, la Constitución y la ley de procedimiento en negocios criminales; al contrario, se prestaron sumisamente á declarar contra él. El sindicado se deja aprehender sin hacer el menor movimiento por huír lejos y ocultarse, ú ocultar siquiera los objetos que, de uso y propiedad de Perea y de la hacienda de "Las-Cañas," que éste manejaba, extrajo y llevó consigo, según su propia confesión. Es llamado á declarar en el sumario, y confiesa francamente haber dado muerte á Perea; y si bien es cierto, dice, que fué en defensa propia, no pone cuidado alguno al exponer los hechos que lo esculparan, en presentarlos de una manera verosímil y razonable, siquiera no inculpativa y contradictoria, y ni hace esfuerzo alguno por probar, ó hacer que la instrucción se encargue de ello, todas las circustancias que pudieran favorecerlo. Es llamado á juicio, y se conforma con el auto de proceder y no apela de él, ni nombra defensor, ni presenta pruebas en el plenario, como si todo esto fuera cosa natural y corriente, y como si nada pudiera obligarlo ó compelerlo ó estimularlo siquiera á defenderse. El defensor de oficio tampoco hace tentativa alguna en el juicio, ni siquiera para atenuar la causa de Larrahondo; sin duda porque éste no le dió ó no pudo darle instrucciones ningunas para el desempeño de su cargo y cumplimiento de su deber; ó quizá porque los elementos de convicción reunidos en el proceso, obraron no sólo en el ánimo del funcionario de instrucción, del Fiscal y del Juez, sino también en el del reo y en el del defensor. Reúnese el Jurado, y ni alegato escrito hubo de parte de la defensa, y sólo consta en el acta respectiva que se le dió la palabra á aquel abogado oficial. Pronunciada la sentencia de muerte, apenas apeló dicho defensor de ella, y sólo compareció en la segunda instancia, para que el Secretario del Tribunal pusiera esta significativa nota en el expediente: "Devuelto con retardo y sin alegato por el señor defensor el diez y nueve *de Agosto*....." Y *dió con esto* por terminado su encargo. El reo no nombró tampoco defensor para ante la Corte Suprema, y hubo de nombrársele de oficio. Se ve, pues, que en la convicción del reo, en la de sus deudos y en la de su defensor, pesaba con toda la gravedad necesaria para producir desaliento en ellos, el cargo que la instrucción arrojaba sobre el primero; ó se tenía absoluta confianza de que al acusado se le darían todas las garantías individuales y se le respetarían sus derechos en la prosecución de la causa. Además, á la simple lectura del proceso y en vista de las diligencias practicadas en la hacienda de "Las-Cañas," en Yarumal, Buenavista, Cali y Popayán, y de cada una de las declaraciones recibidas, así como de la conducta y linaje del procesado, se comprende, por el espíritu manifiesto de todos los que figuran en el expediente, que como que en la conciencia pública estaba radicada la convicción de que Manuel Dolores Larrahondo había asesinado y robado á Aurelio Perea; nadie dudaba de ello.

Según el artículo 368 de la Ley 105 citada antes, en asuntos criminales se concede recurso de casación; y cuando no se interponga éste, el Tribunal remitirá la sentencia, si en ella se impone pena de muerte, con todo lo actuado, en consulta á la Corte Suprema. De modo que la tarea de la Corte es ver si la sentencia se halla en alguno de los casos del artículo 370 de la misma ley.

No está en el primer caso ó no concurre la primera causal, porque la sentencia no es violatoria de ley sustantiva ó de doctrina legal, y no lo es ni de modo directo ni por efecto de interpretación errónea de una ú otra, ni por aplicación de leyes ó de doctrinas legales. El fallo consultado se funda en las pruebas del juicio, en los considerandos de la sentencia de primera instancia, y en las leyes aplicables al hecho criminoso, y la sentencia de primera instancia se funda á su turno, en el veredicto del Jurado, el cual formó su conciencia en el mérito probatorio del proceso y en los demás elementos de convicción que ha podido allegar, dentro ó fuera de la causa.

"Es entendido," dice el mismo artículo 370, "que al ocuparse la Corte en la apreciación de la sentencia," por la causal 1.ª, que da derecho á interponer el recurso y que es la que se examina, "debe tener en consideración el veredicto del Jurado, pues en consonancia con éste debe hallarse la parte resolutiva de aquélla;" y como no otra cosa es lo que ha hecho el Tribunal Superior de Popayán al dictar aquel fallo, es decir, ponerlo en consonancia con dicho veredicto, es claro que no se ha incurrido en la violación enunciada, y que la Corte debe declararlo así.

A este respecto dice el defensor del reo en su alegato anterior:

"Me parece, pues, que la sentencia recurrida incidió en la causal de casación de que trata el numeral 1.° del artículo 370 de la Ley 105 de 1890, por haber infringido la ley sustantiva que no permite castigar con la pena de muerte sino al homicidio premeditado, en que concurren las circunstancias agravantes constitutivas del asesinato."

Si el Jurado resolvió que el homicidio cometido por Larrahondo fué premeditado y que concurrieron en él circunstancias agravantes, constitutivas de asesinato, como se palpa en la respuesta dada á la serie de cuestiones que se le sometieron en la celebración del juicio, ni el Juez de la primera instancia, ni el Tribunal, ni la Corte Suprema, pueden hacer otra cosa que respetar ese veredicto (salvo que fuera notoriamente injusto) y aplicar la ley al caso ocurrido. El mismo defensor dice en el párrafo anterior al citado que "no puede decir que el veredicto del Jurado pugne con la evidencia de los hechos;" luego el Juez y el Tribunal nada más tenían que ver en el asunto; luego el parecer del defensor es infundado, porque la sentencia, así dictada, no es violatoria de ley sustantiva.

El defensor hace consistir su argumento en que "el Jurado puede apreciar en conciencia las pruebas del proceso," y agrega, "pero no puede condenar sin prueba, y no la hay de las circunstancias agravantes que constituyen el asesinato; las cuales no se presumen, ni pueden inferirse, máxime faltando, como falta, fundamento para ello." Pero si el Jurado puede apreciar en conciencia las pruebas del proceso sobre los hechos principales, también puede apreciar de la misma manera las que se refieren á las circunstancias agravantes, pues no hay ley ninguna que se lo prohiba ó que haya diferencia de criterio; y nadie podrá negar á los individuos que compusieron el Jurado en esta causa, que hubo pruebas para declarar, como declararon, que habían concurrido, en el homicidio cometido por Larrahondo, las expresadas circunstancias, pues en el campo amplísimo de la conciencia no puede formularse en casos como el presente, contradicción ó negación justificada, si se considera que esas pruebas han podido tomar-

se ó adquirirse extrajuicio. Por otra parte, del proceso resultan, no sólo para el Jurado sino para el Juez que dictó auto de proceder contra Larrahondo, pruebas suficientes tanto para enjuiciarlo como para condenarlo. Ahí están los indicios vehementes de que se ha hecho mérito al principio de este fallo, de que Perea desapareció, de que murió violentamente en su propia estancia; que fué sepultado á tres cuadras de la casa; que Larrahondo era su enemigo mortal; que cargaba arma para matar á Perea; que profirió amenazas contra éste; que estuvo en la casa de Perea ó por allí cerca el día del suceso; que se apropió después de su muerte algunos bienes de él y otros detalles muy significativos, y está su propia confesión que, en los términos en que la hizo, corrobora más los indicios, por ser más bien inculpativa que cualificada, y porque basta su lectura para comprender en el texto la criminalidad de su autor; no es una exposición natural y verídica en su favor.

No importa que el funcionario de instrucción, por ignorancia, ó por exceso de celo, ó por cualquiera otra razón, hubiera recibido declaración á la madre, hermanos y sobrinos y al cuñado de Larrahondo, quienes declararon en contra de éste; ni importa que dicho funcionario hubiera dejado de practicar algunas diligencias, ó no hubiese practicado científicamente otras, ó hubiera omitido algunas formalidades etc., defectos en que el defensor basa la carencia de pruebas; pues habiendo, como hay, por otra parte, superabundancia de elementos convincentes del cuerpo del delito y del autor del homicidio, lo primero no pasa de ser una superfetación, que cuando más podrá hacer responsable al expresado funcionario, si no resultare su exculpación, por haber recibido esas declaraciones; y las demás faltas no pasan de ser la manifestación de la carencia de recursos en parajes y distritos de poca población, para el levantamiento de sumarios y averiguación de los delitos. Pero pruebas para formar los Jueces de hecho un juicio completo y pronunciar un veredicto justiciero, se repite, no faltaron.

No apelado, y ejecutoriado el auto de enjuiciamiento, seguida la causa por los trámites ordinarios, y pronunciado ese veredicto, el Juez, en la primera, y el Tribunal en la segunda instancia, no tenían otro camino que el de aplicar, inexorables, el artículo 598 del Código Penal, que señala pena de muerte.

Entra ahora la Corte á examinar si se ha incurrido en la segunda causal que da derecho al recurso, conforme al artículo 370 citado, á saber: "Ser, en concepto de la Corte, notoriamente injusto el veredicto del Jurado." Ya el Juez de la primera instancia, el Tribunal Superior en la segunda, y el Ministerio Público ante esta Superioridad, han demostrado que el expresado veredicto no es contrario á la evidencia; y el defensor, como se vió antes, "no puede decir que pugne con la evidencia de los hechos," y como se ha hecho en el curso del presente fallo mérito de las pruebas reales y de los indicios vehementes que hay de la existencia del delito y de la culpabilidad de Manuel Dolores Larrahondo, es innecesario entrar en el análisis de cada una de estas pruebas para dejar, como se deja sentado, que el Jurado falló en conciencia y con elementos de convicción superabundantes. Ese veredicto sería contrario á la evidencia, y por tanto, notoriamente injusto, si se hubiera declarado en él, ó que no se había cometido el delito de asesinato, ó que Manuel Dolores Larrahondo no era el autor de la muerte de Perea.

Tampoco se ha incurrido en la última causal de que trata el mencionado artículo 370, porque no se pretermitió ninguna formalidad que vicie el proceso: el Juez que conoció del asunto es competente; al reo se le notificó el auto de enjuiciamiento; se notificó á las partes el auto en que la causa se abrió á pruebas; lo mismo sucedió respecto del auto en que se señaló día para la celebración del juicio; éste se verificó el día y hora señalados, y no se incurrió en equivocación relativa á la denominación génerica del delito. Por consiguiente, no hubo ninguna de las causas de nulidad designadas por los ordinales 1.°, 3.°, 4.°, 5.°, 6.° y 7.° del artículo 264 de la Ley 57 de 1887.

El defensor del reo ante la Corte, después de considerar en la primera parte de su alegato las omisiones é irregularidades del proceso, consistentes en haberse recibido en el sumario declaraciones á la madre, hermanos y sobrinos del sindicado y haberse trasgredido, por tanto, los artículos 1673 del Código Judicial y 25 de la Constitución, pregunta:

"¿Podrá decirse, sin violentar la lengua, que se ha observado la plenitud de las formas del juicio en un caso en que la base de él son declaraciones que la ley prohibe recibir?"

Ya se ha demostrado, en primer lugar, que la base del juicio no fueron sólo esas declaraciones sino otras pruebas suficientes para abrir causa; y debe entenderse, en segundo lugar, que se observaron todas las formalidades del juicio ordinario que es el propio en estos casos, sin que faltara una, y que si existió la irregularidad anotada, esa quedó subsanada por el auto de enjuiciamento ejecutoriado y consentido, y por el veredicto del Jurado que, dictado en conciencia, debe ser respetado y viene á depurar legalmente ante la justicia toda falta superficial que no afecte el fondo de la cuestión. Además, esas irregularidades no son motivo de nulidad conforme á la ley.

Por las anteriores consideraciones, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo en un todo con el Procurador de la Nación, confirma en todas sus partes y en lo relacionado con el delito de asesinato que tiene pena de muerte, la sentencia de segunda instancia consultada.

El Tribunal Superior de Popayán hará sacar copia de lo conducente para averiguar la responsabilidad en que hayan podido incurrir el funcionario de instrucción y demás empleados que intervinieron en la recepción de las declaraciones de la madre y personas de la familia del reo.

Notifíquese, cópiese, publíquese y remítase el proceso al Ministro de Justicia, para los fines legales.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—FEDERICO PATIÑO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, cuatro de Febrero de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Gricelda y Rosalía Sanchez, vecinas del Distrito municipal del Tambo, piden se les conceda del Tesoro nacional, de acuerdo con la Ley 84 de 1890, una recompensa militar unitaria, en su calidad de hermanas legítimas del Capitán Leonidas Sánchez, muerto por consecuencia de las heridas que recibió en la batalla de la Cuchilla del Tambo, en la guerra de mil ochocientos setenta y seis.

Viene la demanda acompañada de los siguientes documentos:

1.° Las partidas de casamiento de los padres de las solicitantes; la de nacimiento de Leonidas Sánchez; las de nacimiento de Gricelda y Rosalía Sánchez, y las de defunción de Manuel María Sánchez y Bonifacia Sánchez, padres de éstas y de Leonidas Sánchez;

2.° Declaraciones de un número plural de testigos, todos compañeros de armas de Sánchez, quienes aseguran que presenciaron que éste fué gravemente herido el veintinueve de Noviembre de mil ochocientos setenta y seis, en la batalla de la Cuchilla del Tambo, en defensa de los principios que informan las actuales instituciones; que por consecuencia de las heridas murió el cuatro de Diciembre del mismo año, y que tenía el empleo de Capitán. Añaden los testigos que las solicitantes son pobres y que vivieron en buena armonía con su hermano;

3.° El comprobante, fundado en declaraciones de testigos, de que Gricelda ha observado buena conducta, antes y después de la muerte de su hermano; que ambas son solteras; que la subsistencia de ellas dependía de su hermano; que éste no fué casado, y que no dejó otras hermanas legítimas que las solicitantes;

4.° Certificación del Cura del Tambo, expedida el trece

de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos, en la que dice que Gricelda y Rosalía Sánchez permanecen solteras;

5.° Certificado del señor Ministro del Tesoro, sobre el hecho de que las peticionarias no han recibido recompensa por la muerte de su hermano.

Las pruebas relacionadas constituyen los hechos que dan derecho á recompensa á Gricelda Sánchez, mas no á Rosalía Sánchez, porque no ha llenado el requisito que se exige en el artículo 48 de la ley en que ella se apoya para fundar su derecho, cual es es el de que se compruebe la buena conducta.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 1.°, 5.°, 7.°, 9.° y 11 de la Ley 84 de 1890, la Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que Gricelda Sánchez, vecina del Distrito municipal del Tambo, en el Departamento del Cauca, tiene derecho á recibir del Tesoro nacional la recompensa unitaria definitiva de tres mil ciento veinte pesos ($ 3,120), suma igual al sueldo de Capitán en cuatro años.

Notifíquese, cópiese, publíquese, archívese el expediente y dése cuenta al Ministerio de Guerra.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Baltasar Botero Uribe.—Jesús Casas Rojas.—Federico Patiño.—Juan Evangelista Trujillo. — Lucas Villafrádez.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, seis de Febrero de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Juan Cañadas ha pedido se le conceda del Tesoro nacional una recompensa militar unitaria, de acuerdo con la Ley 84 de 1890, como inválido de la guerra en 1885, en que combatió en defensa del Gobierno nacional con el empleo de Cabo 1.°

Con más de cuatro declaraciones contestes de testigos presenciales, recibidas con las formalidades legales, se comprueba plenamente que el peticionario, combatiendo en la batalla de Santa-Bárbara de Cartago de 1885, con el empleo de Cabo 1.° de las fuerzas del Gobierno nacional, recibió un balazo en el brazo izquierdo, y que está sumamente pobre, porque no puede trabajar en su antiguo oficio de herrero.

Con la diligencia original de reconocimiento del demandante practicado por tres Profesores de medicina y del modo prevenido en los artículos 17 y 18 de la Ley 84 de 1890, se acredita que es verdad que Cañadas tiene dos cicatrices de herida de bala en el brazo izquierdo, herida que le ha dejado el brazo deforme y con movimientos irregulares y limitados que le impiden trabajar en su oficio de herrero.

Con un certificado del Ministerio del Tesoro se demuestra que el peticionario no ha recibido de la Nacion recompensa ni pensión por motivo de su invalidez.

En mérito de lo expuesto y de lo que dicen los artículos 5.°, 9.°, 15 y 19 de la Ley 84 de 1890, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el concepto del señor Procurador general de la Nación, concede del Tesoro nacional á Juan Cañadas, vecino de Cali, la recompensa militar unitaria de trescientos ochenta y cuatro pesos ($ 384), suma igual á la mitad del monto del sueldo de Cabo 1.° en cuatro años.

Notifíquese, cópiese dése cuenta al Ministerio de Guerra y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Baltasar Botero Uribe.—Jesús Casas Rojas.—Federico Patiño.—Juan Evangelista Trujillo. — Lucas Villafrádez.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, siete de Febrero de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Por medio de apoderado, Lucio Hurtado pide recompensa militar, á causa de invalidez relativa ocasionada por herida que recibió en la Cuchilla del Tambo, el veintinueve de Noviembre de mil ochocientos setenta y seis, lidiando en defensa de los principios que informan las actuales instituciones, y para sostener su demanda ha presentado los comprobantes que á continuación se indican.

El reconocimiento que practicaron en él los profesores nombrados al efecto por el Gobernador del Cauca, que fueron los doctores Domingo Cajiao C., Domingo Arboleda y Alfredo Garcés, quienes afirman que habiéndolo examinado detenidamente encontraron "que tiene las cicatrices de una herida de bala en el codo derecho; que en la expresada herida el proyectil fracturó el olecranón hiriendo la articulación, dejando como consecuencia bastante limitados los movimientos del antebrazo sobre el brazo y dejando en el herido una incapacidad relativa para trabajar como antes y de por vida."

Certificación del Gobernador del Cauca sobre la no existencia en el Archivo de su Oficina de libro de despachos militares ni constancia alguna de los servicios prestados, ni de la herida recibida por Hurtado en mil ochocientos setenta y seis.

Declaraciones rendidas ante el Juez del Circuito en lo civil de Popayán, con intervención fiscal por Tiburcio Caicedo y Nicolás Sánchez, quienes como compañeros de armas de Hurtado, afirman que presenciaron que éste peleó y fué herido de bala, el año de mil ochocientos setenta y seis en la Cuchilla del Tambo, á órdenes del General en Jefe Juan Bautista Cajiao, y teniendo entonces empleo de Subteniente de la fuerza que dió el combate contra la del General José María Sánchez.

Fernando Mosquera y Bartolomé Valencia se ratificaron por ante el Juez y el Personero del Distrito de Bordo, en las declaraciones que habían rendido antes ante el Estado Mayor de la segunda División del Ejército, en las cuales dichos declarantes dan testimonio acerca de la herida recibida por Hurtado, en el combate y época que se dejan mencionados, y acerca del empleo de Subteniente que dicho Hurtado tenía y de su identidad personal.

El señor Ministro del Tesoro afirma que Hurtado no ha recibido recompensa del Tesoro público.

De manera que la demanda se halla comprobada suficientemente; razón por la que la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el parecer del señor Procurador, declara que Lucio Hurtado, vecino de Patía, en virtud de lo que disponen los artículos 5.° inciso 8.°, 17, 18 y 19 de la Ley 84 de 1890, tiene derecho á una recompensa unitaria definitiva de novecientos sesenta pesos ($ 960) que se le pagarán del Tesoro público.

Notifíquese, cópiese, publíquese, comuníquese á Su Señoría el Ministro de Guerra y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Baltasar Botero Uribe.—Jesús Casas Rojas.—Federico Patiño.—Juan Evangelista Trujillo.—Lucas Villafrádez.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Febrero ocho de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Bajo el número tres mil cincuenta y cinco, la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones dictó en diez de Septiembre de mil ochocientos noventa y uno, una resolución mediante la cual se reconoció en favor de Julio Fernández M., como liquidador de la Casa de Calderón, Córdoba y C.ª, y á cargo del Tesoro público, el crédito de cuatrocientos ochenta y dos pesos ($ 482), procedente de exacciones de guerra correspondientes á la de 1884 á 1885, y se absolvió á la Nación del resto de la suma reclamada, que ascendía á ochocientos veinticinco pesos ($ 825).

El Ministerio del Tesoro, en doce de Septiembre de mil ochocientos noventa y uno, aprobó aquella resolución, por medio de la marcada con el número 2,409, de la cual se apeló por el interesado para ante esa Superioridad, en donde sustanciada la apelación en la forma establecida, para resolverla se considera:

La única gestión que el apelante introdujo para sostener el recurso consistió en pedir que se librase despacho al Ministerio de Guerra, á fin de que se autenticara la firma de Félix M. Archila con que aparece autorizado un recibo por cuarenta pesos ($ 40) expedido en favor de Eloy Izaquita;

y habiéndose en efecto librado tal despacho, de orden de la Corte, obtúvose el resultado de que el General en Jefe del Ejército nacional certificase que, examinados los documentos al Ejército de Reserva, no aparece en ninguna parte el nombre de Félix María Archila y que por consiguiente no era posible autenticar su firma.

En cuanto á la objeción que la Comisión hizo contra el recibo expedido por el General Antonio Valderrama, por la suma de doscientos cincuenta pesos ($ 250), valor de un caballo suministrado voluntariamente por Antonio Rincón, objeción consistente en que en el Ejército de Reserva había Intendente de Guerra, y que sólo á éste incumbía expedir recibos que puedan estimarse como pruebas, según el inciso 2.° del artículo 2.° de la Ley 44 de 1886, el apelante alega que según el Código Militar, los Comandantes pueden tomar, donde los encuentren, los elementos necesarios para sus fuerzas; de donde deduce que el recibo expedido por el General Valderrama, que era Comandante de la 5.ª División del Ejército de Reserva, debe hacer fe en el juicio.

Pero la Corte no puede admitir tal alegación, porque ella no está de acuerdo con las disposiciones especiales que reglan el asunto de reconocimiento de créditos por razón de exacciones de guerra.

Y puesto que el apelante no ha presentado otros documentos ni otras razones para sustentar el recurso, debe presumirse que no los hay; de lo cual se deduce rectamente que la resolución apelada es jurídica.

La Corte, por tanto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el parecer fiscal, confirma la resolución apelada.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial*, y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—FEDERICO PATIÑO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO. — LUCAS VILLAFRÁDEZ—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, ocho de Febrero de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: El Fiscal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, demandó en vía ordinaria ante el mismo Tribunal, á Luis Antonio Quijano, vecino del Municipio de Madrid, para que se declarase rescindido el contrato celebrado en veintiocho de Octubre de mil ochocientos noventa, entre el Secretario de Hacienda de Cundinamarca y el demandado Quijano, por el cual se obligó éste á construír un acueducto para llevar agua limpia desde un punto del río Dulce hasta la plaza de la cabecera del Distrito de Villeta, y á construír en la citada plaza una fuente de piedra para el servicio del público, debiendo el contratista concluír y entregar ambas obras dentro de un año, contado desde la fecha en que el referido contrato se aprobara por el Presidente de la República, salvo casos fortuítos ó de fuerza mayor legalmente comprobados, y para que se le condene también á restituír al Departamento la cantidad de mil pesos ($ 1,000) que se le dieron de su Tesoro por cuenta de los cinco mil pesos ($ 5,000), precio de las obras contratadas.

El demandado negó los cargos de la demanda, y abierto el juicio á prueba y surtidos los traslados y demás formalidades del juicio ordinario, el Tribunal de Cundinamarca pronunció sentencia definitiva, en cuatro de Octubre del año próximo pasado, por la cual absuelve al demandado Quijano de los cargos deducidos contra él en el libelo de demanda.

De esta sentencia apeló el Fiscal del Tribunal de Cundinamarca, se otorgó el recurso para ante esta Suprema Corte, en donde se ha dado al asunto la tramitación que le corresponde, y, citadas yá las partes para sentencia, se procede á dictar la que debe recaer.

En el contrato origen del litigio se encuentran las cláusulas 7.ª y 8.ª, concebidas en estos términos:

"7.ª El Gobierno del Departamento dará á Quijano como indemnización por todos los trabajos que tenga que ejecutar, según este contrato, la suma de cinco mil pesos ($ 5,000) en moneda corriente, y dos mil (2,000) metros de tubos de hierro fundido de cuatro pulgadas de diámetro que dará el Gobierno nacional. Los cinco mil pesos serán pagados cuando llegue el agua á Villeta, aun cuando sea provisionalmente, y entonces Quijano se obliga á dejar como hipoteca por esta cantidad mil metros de tubos de los que recibe del Gobierno nacional, y los dos mil metros de tubos serán recibidos por Quijano, según las órdenes que expida el Ministerio de Fomento.

"8.ª Quijano se compromete á emplear en esta obra por lo menos mil metros de tubos de hierro colocando éstos en los puntos más convenientes, y garantiza el servicio del acueducto por un año, contado desde el día en que la obra sea recibida por el Gobierno, y en tal virtud serán de su cargo las reparaciones que hubiere necesidad de hacerle en este tiempo, si se suspendiere la llegada del agua á la población ó se disminuyere á menos de lo estipulado en la cláusula 2.ª"

Funda el demandado su negativa del cargo, ó sea su defensa contra la ácción intentada en que no se le ha cumplido lo pactado en cuanto al suministro de los tubos que debían servir para la obra, no obstante haberla emprendido y hecho considerables gastos en ella; y aunque bastaba su negación, ha acreditado con certificación del Ministerio de Fomento que no se le han entregado los tubos prometidos.

La sentencia del Tribunal funda la absolución del demandado en que los tubos de hierro debían servir para ser empleados en el acueducto, lo que no tiene duda, y en que, por consiguiente, debieron entregarse al contratista en la oportunidad requerida para que la obra se concluyese en el plazo estipulado; que no habiendo cumplido la parte del Departamento esta promesa, la otra no puede reputarse en mora de cumplir aquello á que se obligó, conforme á la doctrina del artículo 1609 del Código Civil.

La legalidad y justicia de estas consideraciones son evidentes, y la Corte no vacila en acogerlas como fundamento para confirmar la sentencia apelada, pues si el Gobierno de Cundinamarca había prometido entregar ó hacer que el Gobierno nacional entregara los tubos de hierro que debían servir para la obra, y ésta debía ejecutárse dentro de cierto plazo, la obligación de entregar esos materiales debía cumplirse indispensablemente antes de que espirase el término señalado para entregar el acueducto, y con la anticipación necesaria para la conclusión de él.

Además, como observa acertadamente el Procurador de la Nación, el contrato es de arrendamiento para la construcción de una obra material, conforme al artículo 2053 del Código Civil, contrato en el que el que encargó la obra debía suministrar la materia prima, y no habiendo cumplido por su parte con hacer la entrega, carece de acción para demandar la rescisión contra la parte que ha estado pronta á cumplir lo de su cargo.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el dictamen del Procurador de la Nación, confirma la sentencia apelada.

Déjese copia de este fallo, publíquese, notifíquese, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente al Tribunal de su procedencia.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—FEDERICO PATIÑO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO. — LUCAS VILLAFRÁDEZ. — *Gabriel Rosas*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Enero treinta y uno de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Sometidos á juicio extraordinario de responsabilidad el Juez Superior del Distrito Judicial de Bolívar, Juan Noriega, y el del Circuito de Cartagena, Benjamín Martínez R., por el delito de omisión en el cumplimiento de sus deberes, de que se trata en el capítulo 6.°, título 10, libro 2.° del Código Penal de 1890, el Tribunal Superior del citado Distrito Judicial, previa la tramitación propia de la primera instancia en causas de esta clase, condenó á los acusados por sentencia definitiva de 27 de Junio último, á pagar cada uno la multa de diez pesos y las costas procesales, haciendo apli-

cación de los artículos 86 y 529 del citado Código. Contra este fallo interpusieron los acusados recurso de apelación, el cual les fué concedido, y surtida la tramitación de que habla el artículo 1903 del Código Judicial, recibiendo los alegatos de las partes y citándolas para sentencia de segunda instancia, han venido los autos á la Corte, donde se ha oído al Procurador general, se fijó el negocio en lista y ahora se procede á dictar la decisión que corresponde.

El cargo por el cual se abrió y se ha seguido el presente juicio contra los acusados, según se ha dicho yá, es el de omisión en el cumplimiento de sus deberes, que se ha hecho consistir, por parte del Juez Martínez R., en que habiendo intervenido como funcionario de instrucción en la práctica del sumario á que dió lugar el denuncio de Pablo de la P. Cuesta, contra Juan Manuel Castro, por el delito de estupro perpetrado en la persona de una joven hermana del denunciante, no hizo cumplir la orden de arresto que él mismo dictó contra el sindicado, no obstante haber tenido los medios y la oportunidad de aprehenderlo el día cinco de Julio del año próximo pasado, en que se encontró y estuvo con él en casa de Manuel Castro Viola, á donde fué con ese propósito, ni el día siguiente, en que le recibió declaración indagatoria; y por parte del Juez Noriega, en haber dejado en libertad al mismo reo Castro, bajo fianza, después de pronunciado auto de proceder y de prisión contra él, sin embargo de ser el delito de estupro porque se procedía de los que no permiten la excarcelación del procesado, según el artículo 341 de la Ley 105 de 1890.

En concepto de la Corte el cargo está bien justificado en uno y otro caso, con las copias tomadas del proceso contra Castro, que corren en autos, las cuales hacen plena prueba como documentos auténticos, acreditando á la vez la existencia del delito y la responsabilidad de los acusados, cuyo carácter oficial se halla igualmente comprobado con los actos de nombramiento y posesión de los empleos que respectivamente ejercían. El deber en que estaban los acusados de hacer que Castro fuera reducido á prisión y mantenido en ella, es incontrovertible; ellos, al defenderse, no lo han negado, y como resulta que no lo cumplieron, es obvio que deben sufrir el castigo correspondiente, que es el señalado para el caso por el artículo 529 del Código Penal, sin que pueda eximirse de esta pena al Juez Martínez R., por no haber dispuesto la captura y arresto de Castro, la circunstancia de estar éste enfermo, ni la promesa que su padre hizo de presentarlo en el Juzgado, pues la ley no reconoce esos motivos de excusa, además de que no hay sobre el hecho de la enfermedad, sino una prueba incompleta é insuficiente para tenerlo por cierto; y en cuanto á la culpabilidad del Juez Noriega, siendo clara la disposición legal que prohíbe excarcelar á un reo de delito de estupro, bajo fianza, tampoco hay nada que excuse la falta cometida. Solamente atendiendo á los antecedentes de los acusados, que los favorecen, hay lugar á calificar en tercer grado la culpabilidad, como se hace en el fallo de primera instancia.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la sentencia de que apelaron los acusados, con la aclaración de que el pago de las costas procesales debe corresponder á éstos por mitad, todo de acuerdo con lo expuesto y pedido por el Procurador general.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el proceso al Tribunal de su procedencia.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—FEDERICO PATIÑO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintisiete de Enero de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: El catorce de Mayo del año próximo pasado se presentaron ante el Juez del Circuito del Pital, Indalecio Tobar, á nombre de sus menores hijos Juana Bautista, Rufino y Balbina Tobar y Candelario Tobar, en su propio nombre, y establecieron demanda ordinaria para que se les otorgara el beneficio de amparo de pobreza á efecto de litigar contra Manuela Polo acerca de una reivindicación.

Por sentencia de veintisiete de Julio del mismo año, el Juez de dicho Circuito negó el amparo solicitado, por no haberse acreditado por los demandantes su calidad de pobres, conforme á la ley. Estos interpusieron recurso de apelación para ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Sur del Tolima, y concedido el recurso, dicho Tribunal, en providencia de veinte de Octubre último, se declaró incompetente para decidirlo en segunda instancia, por creer que la decisión corresponde á esta Suprema Corte.

Como lo hace notar el señor Procurador, esta Superioridad ha dictado ya varias resoluciones en juicios sobre amparo de pobreza dando una misma interpretación á las disposiciones del artículo 12 de la Ley 72 de 1890, y así lo deja comprender la que el mismo Tribunal tuvo á la vista, de fecha 14 de Diciembre de 1891, publicada en el número 317 de la *Gaceta Judicial*, en la cual se hace notar que no era la primera vez que se decidía por la Corte su incompetencia en los referidos juicios. Por lo mismo, no puede ocuparse la Corte en reproducir los argumentos aducidos por ella á favor de la interpretación dada á la ley por esta Superioridad, supuesto que no encuentra motivo para variar de opinión.

En consecuencia, se declara una vez más que la Corte Suprema no es competente para conocer en segunda instancia de los juicios sobre amparo de pobreza sino en el caso de que en ellos tenga interés la Nación, y ordena que se devuelvan los autos al Juzgado de su origen para que se les dé el curso correspondiente.

Notifíquese, cópiese é insértese en la *Gaceta Judicial*.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—FEDERICO PATIÑO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.— LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Febrero cuatro de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: El veinticuatro de Octubre de 1889 se presentó Francisco Plata ante el Juez del Circuito de Barichara y estableció demanda ordinaria contra Julián Orejarena, para que surtido el juicio correspondiente, se declarase la rescisión parcial de la partición de mil novecientas cincuenta y dos hectáreas de terrenos baldíos, que se les habían adjudicado en común en los sitios denominados "Carpinteros," "Mérida" y "Acurucos," jurisdicción del Municipio de San-Vicente, Departamento de Santander.

El cinco de Diciembre del mismo año, se corrió traslado de dicha demanda al demandado Orejarena, y éste, por medio de su apoderado, Aristides Ortiz, la contestó, negando rotundamente los hechos en que se fundaba, y proponiendo al mismo tiempo la excepción perentoria de prescripción de la acción de rescisión establecida por el demandante. Y como la excepción propuesta no podía decidirse sino en la sentencia definitiva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 483 del Código Judicial, el juicio se abrió á prueba y se produjeron por las partes las que creyeron conducentes, terminando la instancia con la sentencia de once de Noviembre de mil ochocientos noventa, que en su parte resolutiva dijo así: "Por tanto, el Juzgado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara probada la excepción perentoria de prescripción propuesta por Aristides Ortiz en el presente juicio y absuelve, en consecuencia, al demandado de los cargos de la demanda. Sin costas."

Contra esa sentencia se interpuso apelación por Francisco Plata, y elevado el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial del Sur de Santander, se surtió allí la segunda instancia, á la cual puso fin la sentencia de treinta de Mayo de mil ochocientos noventa y dos, cuya parte dispositiva, está concebida en estos términos:

"Sentado este principio, si la notificación de la demanda se surtió el cinco de Diciembre de mil ochocientos ochenta y nueve, cuando estaba yá consumada la prescripción de cuatro

años, que venía corriendo desde el día primero de Diciembre de mil ochocientos ochenta y cinco, es de todo punto incuestionable la caducidad de la acción rescisoria ejercitada en este juicio por Francisco Plata contra Julián Orejarena, referente á la partición material de mil novecientas-cincuenta y dos hectáreas de tierras baldías en los sitios de 'Carpinteros,' 'Mérida' y 'Acurucos,' jurisdicción del Municipio de San-Vicente; y así lo declara el Tribunal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirmando, en consecuencia, la sentencia de primera instancia. Sin costas."

Por escrito presentado el nueve de Junio, se pidió por Francisco Plata reforma de la sentencia pronunciada por el Tribunal, y éste resolvió, por sentencia de diez y nueve de Julio siguiente, que no se estaba en ninguno de los casos determinados por la ley para reformar la sentencia aludida.

Antes de surtirse la notificación de esta última providencia, el mismo Plata, por escrito de veintiuno de Julio, introdujo el recurso de casación para ante la Corte y se alegó desde entonces como causal para interponerlo, la de ser la sentencia violatoria de ley sustancia, contener interpretación errónea de la misma y aplicación indebida de ella.

Concedido el recurso por el Tribunal y traído el expediente á esta Superioridad, se le ha dado en ella la tramitación propia del asunto y debe procederse á su decisión. Pero como es deber ineludible de la Corte el de examinar antes de pronunciar sentencia si el recurso se ha interpuesto oportunamente y por persona hábil, y si la sentencia es de aquellas contra las cuales puede interponerse, conforme á lo prevenido en el artículo 381 de la Ley 105 de 1890, la Corte procede á dar cumplimiento á esta disposición legal, para lo cual tiene que averiguar si respecto de la sentencia de que se trata coexisten las tres circunstancias exigidas por el artículo 366 de la citada Ley 105; y desde luégo hay que fijar la consideración en la tercera de tales circunstancias, que es la de que haya contrariedad en las sentencias de primera y de segunda instancia en cuanto á la inteligencia y aplicación de las leyes en que se apoyan, dado que, como se ha visto, la sentencia del Tribunal confirmó en todas sus partes la de primera instancia.

La Corte ha examinado y comparado, con la detención posible, las dos sentencias para buscar la contrariedad que haya entre ellas en cuanto á la inteligencia de las leyes en que se apoyan para declarar prescrita la acción de rescisión; y como el punto es tan concreto y ambas sentencias han hecho aplicación de unas mismas disposiciones legales, y las han interpretado de idéntica manera, no es posible encontrar una contrariedad que haga necesaria la decisión de la Corte para fijar la inteligencia de disposiciones legales que han sido entendidas y aplicadas de la misma manera. Y es el caso de recordar aquí lo que en esta materia ha sido yá doctrina sentada por esta Superioridad, á saber: que aun suponiendo que dos sentencias sean violatorias de leyes ó de doctrinas legales, si entre ellas no existe contrariedad en cuanto á la manera de entenderlas y de aplicarlas, no es potestativo de la Corte admitir el recurso de casación, en presencia de lo que dispone el artículo 381 de la Ley 105 que se ha citado. Es por esto por lo que la misma Corte, entre las reformas judiciales que solicitó del último Congreso, hizo mención de la que debiera adoptarse para hacer admisible el recurso de casación, aun cuando no existiera la expresada contrariedad de las dos sentencias, siempre que se encuentre que se ha violado ó interpretado erróneamente la ley, supuesto que el fin principal del establecimiento de este recurso es el de uniformar la jurisprudencia, uniformidad que no puede conseguirse, si la Corte Suprema deja de tener en algún caso la facultad de fijar la recta inteligencia y aplicación de la misma ley.

En el caso de que se trata, la cuestión ha estado reducida á saber, si opuesta, como lo fué por el demandado, la excepción de prescripción, habían corrido los cuatro años que el artículo 1749 del Código Civil de Santander (1750 del Nacional), fija como plazo para pedir la rescisión. Ambas sentencias convienen en que ese plazo debe contarse desde 1.° de Diciembre de mil ochocientos ochenta y cinco, fecha de la escritura en que se hizo constar la partición, conforme al artículo 2682 del Código Civil santandereano, y en que el cinco de Diciembre de mil ochocientos ochenta y nueve se corrió el traslado de la demanda; que siendo ese traslado lo que interrumpe la prescripción, conforme al artículo 421 del Código Judicial, cuando esta diligencia tuvo lugar, yá habían trascurrido cuatro años cuatro días, y había pasado, por consiguiente, el plazo fijado por la ley para pedir la rescisión. Si esta es la aplicación y la inteligencia que ambas sentencias han dado á las disposiciones legales, es claro que no puede haber contrariedad entre ellas, y por consiguiente, que no existe la tercera circunstancia de que habla el artículo 366 de la Ley 105, para poder admitir el recurso.

La Corte omite ocuparse en las otras alegaciones que se han hecho, para sostener que existe la primera causal de casación señalada en el artículo 369 de la misma ley, supuesto que tiene que limitarse simplemente á negar la admisión del recurso, como así lo resuelve, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y en cumplimiento de lo que dispone el artículo 381 de la citada Ley 105.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial*, y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA. —BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS. —FEDERICO PATIÑO.— JUAN EVANGELISTA TRUJILLO. — LUCAS VILLAFRÁDEZ.— *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Febrero ocho de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Aquilino Gómez, como apoderado de Cayetana y Pastora Rodríguez, autorizadas debidamente por sus respectivos esposos Mariano Herrán y Pío Galvis, y apoderado también de Natalia y Ramona Rodríguez, por medio de varios memoriales, de los cuales los dos últimos tuvieron por objeto corregir, aclarar y enmendar la demanda que contenía el primero, estableció definitivamente ésta, ante el Juez 1.° del Circuito de Ubaté, haciendo figurar como únicos capítulos de la demanda los siguientes:

Primero. La exclusión de los inventarios del juicio de sucesión de Santos Rodríguez, de la mitad del terreno denominado "El-Bosque," situado en jurisdicción de Pacho y comprendido dentro de los linderos expresados en la demanda;

Segundo. Que se declarase por el Juez que esa mitad de el terreno de "El-Bosque," que fué inventariada como de propiedad de la sucesión expresada, pertenece única y exclusivamente á los poderdantes de Gómez;

Tercero. Que se condene á los demandados Evarista Rodríguez y los menores Benjamín y Margarita Rodríguez, representados por su tutor y curador David Franco, á entregar á dichos poderdantes la mitad del terreno indicado, es decir, la parte inventariada en la sucesión de Santos Rodríguez, la cual parte detentó éste desde el treinta y uno de Agosto de mil ochocientos cincuenta y siete, hasta su muerte, y después de su fallecimiento los demandados;

Cuarto. Que se condene también á los mismos demandados á pagar á los demandantes la cantidad de cuatro mil pesos en que estiman los usufructos del terreno demandado y las costas del juicio.

Como se ha visto, la demanda se dirigió contra Evarista, Benjamín y Margarita Rodríguez, menores de edad los dos últimos y representados por su tutor y curador testamentario David Franco, y fué admitida definitivamente por el Juzgado, por auto de diez de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete.

Los hechos constitutivos de la demanda, según los demandantes, son los siguientes:

"1.° La escritura otorgada ante el Notario de Zipaquirá el treinta y uno de Agosto de mil ochocientos cincuenta y siete, señalada con el número 280, por la cual el doctor José María Coronado hizo constar que había vendido á Francisco Rodríguez Bello los terrenos denominados "El-Bosque" y parte del de "Guandoque," ubicados entonces en jurisdicción de Tausa y Zipaquirá, y pertenecen hoy á la jurisdicción de Pacho. Esa escritura se otorgó después de la muerte de Rodríguez Bello y aparece firmada por su viuda Francisca Bello;

"2.° Se hizo constar en ella que los linderos de los te-

rrenos citados constaban en las escrituras que se hallaban en poder de Francisca Bello, escrituras que se dice pasaron á poder de Santos Rodríguez, y que hoy se hallan en poder de Evarista Rodríguez;

"3.° Que de esas escrituras se tomaron los linderos que se citaron en los inventarios de Santos Rodríguez, y son los mismos expresados en la demanda;

"4.° Que por los linderos expresados poseyeron el globo de terreno denominado "El-Bosque," la mitad los herederos de Francisco Rodríguez y la otra mitad, indebidamente, Santos Rodríguez, y después de la muerte de éste sus hijos Evarista, Margarita y Benjamín Rodríguez;

"5.° Que indebidamente poseyeron la mitad del terreno de "El-Bosque," Santos Rodríguez y sus hijos, por veintinueve años, porque dichos señores no han tenido título para poseer ó usufructuar dicha mitad, pues en la escritura que se citó al hacer los inventarios de Santos Rodríguez, y que es la misma del doctor Coronado, de que se ha hecho mención, no se dijo que éste hubiera vendido el terreno de "El-Bosque" á otra persona que á Francisco Rodríguez Bello; y por consiguiente Santos Rodríguez y hoy sus herederos deben desembolsar á los herederos de Francisco Rodríguez Bello el valor del usufructo de la mitad del terreno en el espacio de veintinueve años;

"6.° Que los herederos de Francisco Rodríguez Bello y de Francisca Bello, de quienes habla la mencionada escritura son Cayetana, Pastora, Ramona y Natalia Rodríguez, las dos primeras esposas de Mariano Herrán y Pío Galvis, y solteras las dos últimas;

"7.° Que los herederos de Santos Rodríguez deben á los demandantes la suma de cuatro mil pesos, valor del usufructo de la mitad del terreno de "El-Bosque," en el espacio de veintinueve años."

De la demanda así establecida se dió traslado á David Franco, como guardador de los menores Benjamín y Margarita Rodríguez y á Ignacio Franco U., como apoderado de Evarista Rodríguez, quienes la contestaron negando en absoluto el derecho que hace valer la parte demandante, pues afirman que la mitad del terreno que se pretende reivindicar perteneció primero á Petronila Bello, por haber comprado todo el terreno á José María Coronado en unión de su hijo Francisco Rodríguez; después á Santos Rodríguez, como heredero de aquélla, y luégo á los sucesores universales de éste, que son los demandados. Tampoco aceptaron éstos la certeza de los hechos que sirvieron de fundamento á la demanda, con excepción de los siguientes: el de que por los linderos expresados en ella poseyeron el globo de tierra denominado "El-Bosque," la mitad Francisco Rodríguez y sus herederos y la otra mitad la madre de Santos Rodríguez, primero, y después Santos Rodríguez y sus herederos, pero no indebidamente, sino como condueños, y por consiguiente, legalmente; y el de que los herederos de los bienes de Francisco Rodríguez y Francisca Bello son los demandantes. Concluyeron los demandados proponiendo las siguientes excepciones perentorias, que fueron admitidas: la de nulidad de la escritura pública otorgada ante el Notario de Zipaquirá el treinta y uno de Agosto de mil ochocientos cincuenta y siete, bajo el número 280; la de prescripción adquisitiva de dominio, y la de petición antes de tiempo ó de un modo indebido.

Seguido el juicio por todos sus trámites, le puso término á la primera instancia la sentencia del Juez del Circuito de Ubaté, de cinco de Diciembre de mil ochocientos noventa y uno, que en su parte resolutiva dice así:

"El Juzgado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, absuelve á los demandados de los cargos deducidos contra ellos en la demanda. No hay *lugar á hacer declaración* respecto de las excepciones propuestas."

Apeló de esta sentencia el apoderado de las demandantes para ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, y sustanciado allí el recurso, dió fin á la instancia la sentencia de veintinueve de Julio del año próximo pasado, por la cual se confirmó la parte resolutiva de la sentencia apelada y se condenó en las costas al apelante.

Notificada esta última sentencia en la forma legal, los demandantes confirieron poder al doctor Liborio D. Cantillo para interponer al recurso de casación, quien lo interpuso oportunamente y le fué concedido por autos de trece y diez y siete de Septiembre último, habiéndose remitido el expediente á esta Superioridad. Sustanciado en ella el recurso, como lo dispone la ley, procede la Corte á examinar si él es admisible, en conformidad con lo que prescribe el artículo 381 de la Ley 105 de 1890, antes de pronunciar sentencia.

En el escrito de cinco de Noviembre último, en que se fundó el recurso, se dice que la sentencia es casable, porque concurren para ello todos los requisitos de que habla el artículo 366 de la citada Ley 105; pero al hablar de la circunstancia 3.ª exigida por esa disposición, que es la de que haya contrariedad en las sentencias de primera y de segunda instancia en cuanto á la inteligencia ó aplicación de las leyes en que se apoyan, ó en cuanto á lo principal del pleito, dice el recurrente:

"Para demostrar una contrariedad basta parar la atención en que el Tribunal en la suya únicamente confirma la parte resolutiva de la del Juzgado; lo que quiere decir que no aprueba la parte motiva, que disiente de la inteligencia y de la aplicación dada á las leyes en que la sentencia revisada se apoya."

Como se ve, esta razón, dada como única para demostrar la contrariedad de las dos sentencias, no puede ser bastante para la Corte desde que no encuentra lógica la deducción hecha por el recurrente, de que una segunda sentencia diga que confirma la parte resolutiva de la primera, no se deduce que no se apruebe la parte motiva, y menos que las dos discutan en cuanto á la inteligencia y aplicación que ambas hayan hecho de unas mismas leyes.

El hecho de que la misma parte recurrente no haya podido citar alguna disposición legal, respecto de la cual se encuentre que haya sido entendida de una manera contraria ó aplicádose de distinta manera en una y otra sentencia, ese hecho bastaría para desechar la deducción hecha por el recurrente como único fundamento de la contrariedad de los dos fallos, si por otra parte esta Superioridad, después del atento estudio que ha hecho de ellos no se hubiere persuadido de que no existe tal contrariedad. Y efectivamente, en las partes motivas de ambas sentencias se encuentra que fueron fundamento de la parte resolutiva el hecho de que ejercitándose por las demandantes la acción reivindicatoria, á ellas tocaba acreditar de un modo fehaciente el derecho de dominio que alegan; el único documento presentado con tal fin es la escritura de treinta y uno de Agosto de mil ochocientos cincuenta y siete, número 280, que la sentencia de primera instancia consideró sin valor legal, y que la de segunda no estimó siquiera en ningún sentido, pues que se contrajo á examinar el carácter de herederos con que los demandantes alegan ser dueños de la mitad del terreno de "El-Bosque," y tanto esa sentencia como la de primera instancia, se fundan en la circunstancia de no haberse acreditado por los demandantes que ese inmueble se les hubiera adjudicado como herederos de su padre Francisco Rodríguez Bello. Si, pues, ambas sentencias se han apoyado en idéntico fundamento, no se comprende que pudiera haber contrariedad entre ellas en cuanto á la inteligencia y aplicación de las leyes que han tenido que ser ese fundamento.

Por tanto, y en cumplimiento de lo que dispone el artículo 381 de la Ley 105 de 1890, y teniendo presente que no aparece la tercera circunstancia de que habla el artículo 366 de la misma ley, para que el recurso pueda ser admitido, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que es inadmisible el recurso de casación intentado contra la sentencia del Tribunal Superior de Cundinamarca de fecha veintinueve de Julio del año próximo pasado, dictada en el presente pleito.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—FEDERICO PATIÑO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

IMPRENTA DE ANTONIO M. SILVESTRE.

REPÚBLICA DE COLOMBIA.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AÑO VIII | Bogotá, 18 de Abril de 1893. | NÚM. 382.

CONTENIDO.

Págs.

Cuadros que representan el movimiento de negocios en la Corte Suprema de Justicia del 21 al 31 de Enero de 1893..... 145
Relación de los negocios despachados en el mes de Enero de 1893..... 146
Cambio de personal..... 146

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

La que concede á Victoria Velasco y Pola Verdugo una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas)..... 146
La que confirma la resolución dictada por el Ministerio del Tesoro en la reclamación de Leonardo Manrique, por expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Patiño)..... 147
La que concede una recompensa militar á los deudos del Capitán Nicolás G. Reutería. (Magistrado ponente, doctor Villafrádez)..... 148
La que revoca la resolución que el Ministerio del Tesoro dictó en la reclamación de José Antonio Ibarra, por expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Botero Uribe)..... 148
La que concede á María Ignacia Díaz y Pedro Hoyos una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Villafrádez)..... 148
La que reconoce á favor de Ruperto García un crédito por expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Isaza)..... 149
La que confirma la resolución dictada por el Ministerio del Tesoro en la reclamación de Ricardo Gutiérrez, por expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Pombo)..... 149
La que concede á Isabel Medina una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Pombo)..... 150
La que concede á Clotilde Vargas una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Pombo)..... 150

NEGOCIOS CRIMINALES.

La que confirma la sentencia que el Tribunal Superior del Cauca dictó en el juicio seguido contra Jesús María Zorrilla, Juez del Circuito de Roldanillo, por infracción del artículo 379 del Código Penal. (Magistrado ponente, doctor Isaza)..... 151

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

El en que revoca la Corte, en Sala de seis Magistrados, el auto dictado por el sustanciador, con fecha siete de Diciembre último, en el juicio seguido por la Compañía del Ferrocarril de Panamá contra la Nación, sobre establecimiento de alumbrado eléctrico ó de cualquiera otra clase en la línea del Ferrocarril. (Magistrado ponente, doctor Isaza)..... 151
El en que declara la Corte que la ejecución seguida por el Administrador de la Aduana de Barranquilla contra la Sociedad comercial López Olier & Compañía adolece de nulidad por ilegitimidad de la personería de la parte ejecutada. (Magistrado ponente, doctor Villafrádez)..... 152

NEGOCIOS CRIMINALES.

El en que se declara incompetente la Corte para conocer en primera instancia del denuncio dado por el Fiscal del Circuito de Toro contra el Juez del mismo Circuito, Miguel Piedrahita Casas, por mala conducta. (Magistrado ponente, doctor Trujillo)..... 152

CUADRO QUE REPRESENTA EL MOVIMIENTO DE NEGOCIOS EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEL 21 AL 31 DE ENERO DE 1893.

	SENTENCIAS.								AUTOS.																
	CASACIÓN.		CIVILES DE 2.ª INSTANCIA.				Criminales de 2.ª instancia.		CIVILES.		CRIMINALES.		Procesos militares.		Competencias.		Recursos de hecho.		Recursos de revisión.		Negocios varios.		NEGOCIOS DE UNA SOLA INSTANCIA.		Suspensión de Ordenanzas.		Recompensas.		TOTALES.	
	Civiles.	Pena capital.	Negocios varios.	Suministros etc.																			Civiles.	Criminales.						
Pendientes en 31 de Diciembre de 1892.....	25	4	11	155			4		9		1		...		...		2		2		1		2		2		568		803	
Repartidos del 21 al 31 de Enero.....	4	1	1	7			1		8		1		2		1		...		...		1		...	1	1		10		39	
Totales.....	29	5	12	162			5		17		2		2		1		2		2		2		2	1	3		578		842	
Despachados del 21 al 31 de Enero.....	1	...	1	3			3		1		...		...		...		...		...		...		...	...	...		8		17	
Pendientes en 31 de Enero de 1893.....	28	5	11	159			2		16		2		2		1		2		2		2		2	1	3		570		825	

CUADRO QUE REPRESENTA EL NÚMERO DE PROYECTOS PRESENTADOS POR CADA UNO DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SOBRE LOS NEGOCIOS CUYO DESPACHO SE RELACIONA EN EL CUADRO ANTERIOR (ENERO).

	SENTENCIAS.					AUTOS.											
	CASACIÓN.		CIVILES DE 2.ª INSTANCIA.										NEGOCIOS DE UNA SOLA INSTANCIA.				
	Civiles.	Pena capital.	Negocios varios.	Suministros etc.	Criminales de 2.ª instancia.	Civiles.	Criminales.	Procesos militares.	Competencias.	Recursos de hecho.	Recursos de revisión.	Negocios varios.	Civiles.	Criminales.	Suspensión de Ordenanzas.	Recompensas.	TOTALES.
Doctor Pombo	...	...	1	...	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2
Doctor Isaza	...	...	...	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3	4
Doctor Botero Uribe	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1	1
Doctor Casas Rojas	...	...	...	...	...	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1	2.
Doctor Patiño (del 23 al 31)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Doctor Trujillo	...	...	...	2	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1	4
Doctor Villafrádez	1	...	...	...	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2	4
Totales	1	...	1	3	3	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	8	17

RELACION

DE LOS NEGOCIOS DESPACHADOS EN EL PRESENTE MES DE ENERO DE 1893.

Señor Magistrado doctor Pombo.

1.—Enero 27.—Sentencia civil varia.—Juicio seguido por Indalecio y Candelario Tobar, sobre amparo de pobreza.

2.—Enero 27.—Sentencia criminal.—Juicio seguido contra Jaime Castillo, por abandono del destino.

Señor Magistrado doctor Isaza.

1.—Enero 31.—Suministros etc.—Reclamación de José María Sandoval.

2.—Enero 26.—Recompensa.—Solicitud de Ricardo Solarte, como invalidado en la guerra de 1876.

3.—Enero 28.—Recompensa.—Solicitud de Asunsión López, deudo de un militar, muerto en la guerra de 1885.

4.—Enero 30.—Recompensa.—Solicitud de Antonio Romero, como inválido de la última guerra.

Señor Magistrado doctor Botero Uribe.

1.—Enero 28.—Recompensa.—Solicitud de Juana Marín, por muerte de un hijo en la guerra de 1885.

Señor Magistrado doctor Casas Rojas.

1.—Enero 30.—Auto civil.—Juicio de concurso de acreedores formado á los bienes de Pedro Gutiérrez Delgado.

2.—Enero 26.—Recompensa.—Solicitud de Lázaro Angulo, por haber quedado inválido en la guerra de 1876.

Señor Magistrado doctor Trujillo.

1.—Enero 23.—Suministros.—Reclamación de Baltasar Uribe N.

2.—Enero 26.—Suministros.—Reclamación de Vicente Gutiérrez.

3.—Enero 25.—Sentencia criminal.—Juicio seguido contra Antonio W. Robayo, por falta en el cumplimiento de sus deberes.

4.—*Enero 26.*—Recompensa.—Solicitud de Marcelino Ramos, como inválido de la última guerra.

Señor Magistrado doctor Villafrádez.

1.—Enero 31.—Casación civil.—Juicio seguido por Manuel, María Luisa y Jorge Mendoza contra Manuel Antonio Angel y Hermógenes Durán, sobre reivindicación de unos terrenos.

2.—Enero 31.—Sentencia criminal.—Juicio seguido contra Juan Noriega y Benjamín Martínez, por falta en el cumplimiento de sus deberes.

3.—Enero 24.—Recompensa.—Solicitud de Susana y María del Patrocinio Torres, por muerte de un hermano en la güerra de 1860.

4.—Enero 28.—Recompensa.—Solicitud de Anastasia Narváez, por muerte de un hermano en la guerra de 1860.

CAMBIO DE PERSONAL.

El día 23 del presente mes de Enero (1893) entró el señor doctor D. Federico Patiño, en su calidad de 6.° suplente, á ocupar el puesto del señor Magistrado doctor Corrales, quien se separó de la Corte en uso de licencia.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Febrero ocho de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Victoria Velasco, como viuda, y Pola Verdugo, como hija legítima de Isidoro Verdugo, piden recompensa militar, fundándose para ello en que éste, como Teniente de la fuerza que á órdenes del General Juan Bautista Cajiao, combatió en la Cuchilla del Tambo en Noviembre de mil ochocientos setenta y seis á favor de los principios que informan las actuales instituciones, recibió muerte de bala en el campo de batalla.

Se ha justificado, por medio de un certificado dos veces expedido por el Cura de Patía, que no existen en el archivo parroquial los libros donde debían estar extendidas la partida de matrimonio de Isidoro Verdugo y Victoria Velasco y la de bautismo de Pola Verdugo, en razón de lo cual se ha suplido la prueba directa del estado civil de las dos solicitantes, por medio de prueba testimonial formada de declaraciones de personas que dan razón satifactoria de su dicho y que reúnen todas las condiciones legales necesarias para que puedan sus exposiciones estimarse como plena prueba, acerca no solamente de que Victoria Velasco es viuda y Pola hija legítima y soltera del Teniente Verdugo, sino también de que una y otra observaron buena conducta con dicho finado y la observan hoy día, y de que están en situación de grande pobreza, sin capital ni renta ninguna.

Habiendo el Gobernador del Cauca certificado que en su archivo no existe libro de despachos militares, ni constancia oficial de los servicios prestados y la muerte recibida por Isidoro Verdugo en defensa de la Regeneración, háse acudido igualmente, para establecer estos hechos, á la prueba testimonial; y en efecto, más de tres testigos idóneos han de-

clarado en forma legal que les consta, por haberlo presenciado, que dicho Verdugo peleó como Teniente en la Cuchilla del Tambo en Noviembre de mil ochocientos setenta y seis y quedó muerto en el campo de batalla.

El Cura de Patía certifica que Victoria Velasco no ha contraído segundas nupcias; que Pola Verdugo es célibe y que ambas observan buena conducta; y el señor Ministro del Tesoro certifica que no han recibido recompensa alguna por razón de la muerte del expresado Teniente.

La Corte, en vista de tales pruebas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el dictámen del señor Procurador, declara que Victoria Velasco y Pola Verdugo, vecinas de Patía, en el Departamento del Cauca, tienen derecho, de conformidad con los artículos 1.°, 5.° (inciso 2.°) 6.°, 9.° y 11 de la Ley 84 de 1890, á una recompensa unitaria definitiva de dos mil cuatrocientos pesos ($ 2,400) que se les pagarán del Tesoro público y es divisible por mitades entre las dos agraciadas.

Notifíquese, cópiese, comuníquese á Su Señoría el Ministro de Guerra, publíquese en la *Gaceta Judicial* y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—FEDERICO PATIÑO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, Febrero nueve de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: En nueve de Abril de mil ochocientos sesenta y cuatro, Juan Manuel Pérez, como cesionario de Leonardo Manrique, demandó al Tesoro nacional, ante el Juez 2.° del Circuito de Bogotá, por el valor de ochenta y una bestias mulares y caballares y cincuenta novillos que le fueron expropiados á Manrique durante la guerra de 1860 á 1863 por fuerzas enemigas del Gobierno de la Confederación Granadina. Por sentencia dictada el veintidós de Agosto de mil ochocientos sesenta y cuatro, por el Juez de primera instancia, se condenó á la Nación á pagar al demandante Juan Manuel Pérez, la cantidad de ocho mil novecientos cincuenta pesos ($ 8,950), sentencia que fué en consulta á la Corte Suprema Federal, y reformada por la de veintiocho de Noviembre del mismo año, pues que se declaró nulo todo lo actuado en lo relativo á la expropiación de los cincuenta novillos, porque habiendo tenido lugar ésta en la hacienda de "Peñalisa," no era competente para conocer de la demanda, por lo que á ella se refiere, el Juez del Circuito de Bogotá, sino el del Departamento de Tequendama; y se confirmó la sentencia en lo que se refería á las bestias que le habían sido expropiadas; de manera que el Tesoro nacional fué condenado á pagar la suma de seis mil cuatrocientos cincuenta pesos ($ 6,450) y el expediente fué devuelto al Juzgado de su procedencia. Más tarde, el diez y seis de Marzo de mil ochocientos noventa y dos, Ignacio Navarro D., en su carácter de apoderado de Julio E. Pérez, heredero éste de Juan Manuel Pérez, solicitó de la Secretaría de Gobierno de este Departamento, que ordenase al Archivero la remisión del referido expediente á la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, para que se repartiera y siguiera su curso legal la reclamación en lo que hacía relación al valor de los cincuenta novillos. Sustanciado este negocio por la Comisión, por resolución marcada con el número 3,828, de fecha veintidós de Julio de mil ochocientos noventa y dos, se reconoció á favor de Ignacio Navarro D., en su carácter de representante de Julio E. Pérez, que á su turno lo era de su causante, Juan Manuel Pérez, quien adquirió su derecho por cesión que del crédito le hizo Leonardo Manrique, la cantidad de dos mil quinientos pesos ($ 2,500) que dejó de reconocerle la Corte Suprema en la citada sentencia de veintiocho de Noviembre de mil ochocientos sesenta y cuatro. Este fallo, que fué aprobado por el Ministerio del Tesoro, el diez y ocho de Agosto de mil ochocientos noventa y dos, ha venido á esta Superioridad por apelación interpuesta por el Fiscal de la Comisión de suministros, y sustanciado el recurso, se procede á dictar fallo mediante las siguientes consideraciones:

Por medio de un documento suscrito el ocho de Abril de mil ochocientos sesenta y cuatro por Leonardo Manrique y Juan Manuel Pérez, compró éste al primero los derechos que tuviere contra el Gobierno de los Estados Unidos de Colombia, por el valor de las bestias y novillos gordos que se le expropiaron en el año de mil ochocientos sesenta para el servicio del mismo Gobierno, documento que fué reconocido con las formalidades legales por Manrique, ante el Juez 3.° de este Circuito el día treinta de Abril de mil ochocientos sesenta y cuatro; y con el certificado expedido por el Notario segundo de este Círculo, se ha comprobado que Julio E. Pérez fué declarado heredero de Juan Manuel Pérez.

El General Rafael Mendoza, en su certificación pedida por el demandante, dice que siendo Jefe de la legión de vanguardia del Ejército del Sur, dió orden al Comandante José María Cuéllar Poveda, para que tomara de la hacienda de "Peñalisa" cincuenta novillos gordos; que se cumplió la orden; que los referidos novillos fueron conducidos á la plaza del Espinal, y que se invirtieron en raciones del Ejército.

Isidro Plata, Lino Galarza, Juan de Brigard y Aurelio Nieto, aseguran, porque lo presenciaron, que por orden del General Rafael Mendoza se expropiaron los cincuenta novillos gordos que se encontraban en la hacienda de "Peñalisa," que por lo menos valían á cincuenta pesos, y que fueron destinados para el sostenimiento de las fuerzas que se hallaban situadas en la plaza del Espinal; y tres de estos testigos aseguran que los novillos pertenecían á Leonardo Manrique.

Las Leyes 36 de 1888 y 61 de 1887, dieron á la Comisión creada por la Ley 44 de 1886 la facultad de conocer de las reclamaciones pendientes por suministros, empréstitos y expropiaciones procedentes de la guerra de 1860 á 1863, y se dispuso por la segunda ley que se pasaran á la Comisión los expedientes respectivos existentes en cualquier Juzgado ó en la Corte Suprema; y en la Ley 152 de 1887, se dice que se entenderán por reclamaciones pendientes aquellas sobre las cuales se había iniciado ya reclamación judicial correspondiente al tiempo de la expedición de la citada Ley 44; de manera que fué competente la Comisión de suministros para conocer de la reclamación intentada por el apoderado de Julio E. Pérez, quien se fundó, para hacerla, en que la sentencia dictada por la Corte el veintiocho de Noviembre de mil ochocientos sesenta y cuatro, no reconoció todo el valor de la suma demandada por el cesionario de Leonardo Manrique, pues que declaró nulo lo actuado en lo que hacía relación al valor de los cincuenta novillos dejando pendiente por lo mismo la reclamación en esa parte. No puede decirse que la nulidad decretada por la Corte Suprema Federal, por incompetencia de jurisdicción del Juez 3.° del Circuito, pone en duda el hecho de haberse promovido la demanda contra la Nación, pues que, lejos de eso, viene á ser una verdadera confirmación; porque es claro que tal fallo de la Corte Suprema Federal no se habría pronunciado si no hubiera precedido la demanda intentada por quien había sufrido la expropiación, y por lo mismo no puede decirse que la acción de éste estaba prescrita; y á lo que queda expuesto se agrega que esta Corte, en sentencia de fecha veinticuatro de Noviembre de mil ochocientos noventa y uno, resolvió en el mismo sentido la demanda promovida por Fidel Tobar, por expropiaciones que se le hicieron en la guerra de 1860 á 1863, juicio que había sido anulado por la misma Corte Suprema Federal.

Habiéndose probado, con las exposiciones contestes de más de tres testigos que dan la razón de su dicho, la expropiación de los cincuenta novillos, que éstos valían por lo menos á cincuenta pesos cada uno y que la Comisión administrativa fué competente para conocer de la aludida reclamación, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma en todas sus partes la resolución apelada.

Notifíquese, cópiese, publíquese esta sentencia y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—FEDERICO PATIÑO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Febrero diez de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Por haber muerto Nicolás G. Rentería en la guerra de 1876 á 1877, combatiendo como Capitán de las fuerzas que defendían los principios consignados en la Constitución actual de la República, en un hecho de armas que tuvo lugar en la ciudad de Almaguer, en Octubre del primero de dichos años, Primitiva Rivera, Hermelinda y Laura Rentería, viuda la primera é hijas legítimas las segundas de dicho oficial, piden se les conceda recompensa del Tesoro nacional, apoyadas en las disposiciones de la Ley 84 de 1890, y comprobando los hechos siguientes:

El empleo militar del Capitán Rentería, sus servicios á la causa regeneradora y su muerte en el combate citado, con las declaraciones de Tomás Robles, Ignacio Molano, Rodolfo Muñoz, Manuel Cabezas Delgado y Emiliano Bolaños, compañeros de armas del mencionado Oficial en su mayor parte, y con la del Coronel Juan Martín Caicedo, quien como Jefe civil y militar llamó al servicio á Rentería en el empleo expresado;

El matrimonio de Rentería con Primitiva Rivera, celebrado en nueve de Febrero de 1871 en la iglesia parroquial de la Santísima Trinidad de Bolívar, con copia de la partida respectiva expedida por el Cura de esa parroquia;

La filiación de Hermelinda y Laura Rentería como descendientes de dicho matrimonio, con los testimonios de varias personas que aseguran ser hijas aquéllas de los esposos Rentería y Rivera, por el conocimiento personal que han tenido de esta familia;

La falta de las partidas de bautismo de las citadas Hermelinda y Laura en los libros parroquiales del Curato de Bolívar, con certificación del respectivo párroco, prueba que se ha aducido para justificar la necesidad de la supletoria á que se ha recurrido;

La pobreza de las peticionarias, su buena conducta, el hecho de permanecer viuda la citada Rivera, y el de la soltería de sus hijas, su buena conducta y el haber vivido en constante buena armonía con el finado Rentería, con testimonios de varias personas, recibidos con las formalidades legales;

Finalmente, la circunstancia de no haber recibido recompensa del Tesoro nacional por razón de la muerte del Capitán Rentería, con certificación del Ministerio del ramo.

Y como estos comprobantes son los que se requieren por la citada Ley 84 de 1890 para impetrar la gracia que se demanda, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el parecer del Procurador general y con lo que disponen los artículos 1.° y 5.° (numeral 2.°), 9.° y 11 de aquella ley, declara que Primitiva Rivera, Hermelinda y Laura Rentería, tienen derecho, como deudos del finado Capitán Nicolás G. Rentería, muerto en defensa de los principios que informan las actuales instituciones, á recibir del Tesoro nacional la recompensa unitaria y definitiva de tres mil ciento veinte pesos ($ 3,120), suma igual al sueldo asignado á dicho empleo en un cuatrienio, que se dividirá en dos porciones iguales, la una para la viuda y la otra para sus dos hijas, por iguales partes.

Notifíquese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—FEDERICO PATIÑO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez de Febrero de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: José María Calderón, como cesionario de José *Antonio Ibarra*, se presentó ante la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, en catorce de Enero de mil ochocientos ochenta y ocho, reclamando el crédito de tres mil quinientos pesos ($ 3,500), valor de las exacciones hechas al expresado Ibarra en la guerra de mil ochocientos ochenta y cinco. Al efecto, exhibió los documentos que corren de fojas 1.ª á 13 del expediente.

Admitido Calderón como parte y anotadas por el Fiscal algunas irregularidades en los susodichos documentos, se dispuso la reparación de éstos, y al efecto practicáronse las diligencias que corren de fojas 22 á 28, que fueron baldías. En seguida la Comisión dictó su resolución de fecha diez de Marzo de mil ochocientos noventa y dos, absolviendo á la Nación del pago de la cantidad demandada.

De esta resolución reclamó León Maldonado, como cesionario del crédito, para ante el Ministerio del Tesoro, el cual confirmó dicha providencia, y de la confirmación ha reclamado el mismo Maldonado para ante la Corte Suprema.

Esta, antes de tomar en consideración el asunto, ha hecho practicar, para mejor proveer, algunas diligencias, y del expediente resulta debidamente comprobado, con más de tres testigos contestes é idóneos, al tenor de lo dispuesto en el ordinal 3.° del artículo 2.°, Ley 44 de 1886, el crédito de cuatro mil cien pesos ($ 4,100), así:

Sesenta cabezas de ganado vacuno de cría, que valían cada uno en esa época, á veinticinco pesos ($ 25) en el Distrito del Rosario, Provincia de Popayán..... $	1,500
Veintiocho novillos gordos, que valían á cincuenta pesos cada uno en ese tiempo, en el mismo lugar..	1,400
Nueve caballos, á cuarenta pesos.....	360
Seis bestias mulares, á sesenta pesos.....	360
Diez y seis yeguas, á treinta pesos.....	480
Total.....	4,100

Los testigos declaran, fojas 4 á 8 y 55 á 67, que todos estos efectos fueron tomados por fuerzas del Gobierno legítimo en la citada guerra de mil ochocientos ochenta y cinco, á José A. Ibarra, de su hacienda de "Mamoconde," Distrito del Rosario, y ellos mismo declaran sobre su valor.

A fojas 11 corre la relación jurada que exige el artículo 16 de la citada Ley 44.

La idoneidad de los testigos está certificada por el respectivo agente del Ministerio Público, que presenció las declaraciones, como lo previene el artículo 5.°, Ley 152 de 1887. Véase respecto del testigo Juan P. Cisneros, que reprodujo su declaración á fojas 65 y 66, objetada por el Fiscal especial, por falta de certificación de aquella cualidad, lo que dice al fin de la de fojas 4 á 5 el mismo agente citado, quien conceptúa que el testigo expresado es idóneo.

También objeta el Fiscal especial las declaraciones de varios testigos, por no estar acordes respecto de algunos puntos; pero como hay otros testigos hasta el número de tres que sí están de acuerdo en un todo en sus exposiciones, la objeción carece de fuerza.

El demandante presentó su relación por un total de tres mil quinientos pesos ($ 3,500), pero se ve clara la equivocación sufrida en la operación aritmética que hizo á la foja 11 citada: él cobra esa suma, y ha comprobado la de cuatro mil cien pesos ($ 4,100). Mas como la sentencia debe ser congruente con la demanda (artículo 835, Código Judicial), se reconocerá únicamente la cantidad demandada.

Por lo expuesto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: revócase la resolución número 2,707, de fecha veintiocho de Marzo de mil ochocientos noventa y dos, del Ministerio del Tesoro, y reconócese á favor del cesionario actual, César Sánchez N., el crédito de tres mil quinientos pesos ($ 3,500) por valor de expropiaciones en la guerra de mil ochocientos ochenta y cinco.

Notifíquese cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—FEDERICO PATIÑO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Febrero diez de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: María Ignacia Díaz, vecina de Timbío, pide recompensa del Tesoro nacional, para sí y para su menor hijo Pedro, habido en su matrimonio con Manuel Antonio Hoyos,

por haber muerto éste defendiendo los principios que informan las actuales instituciones, en un combate que tuvo lugar en el sitio de "La-Herradura," en Enero de 1877, en la guerra de esa época, como Sargento 2.° de las fuerzas que en el antiguo Estado del Cauca se organizaron por los defensores de aquella causa.

Para demostrar su derecho y el de su hijo á la gracia expresada, la solicitante ha aducido los comprobantes que en seguida se expresan:

1.° Dos informaciones sumarias de testigos, practicadas con las formalidades legales, la primera de Jesús y Nicanor Alegría, Raimundo Bojorge, Inocencio Rosas, Rafael Sarria y Domingo G. Díaz, compañeros de armas del Sargento Hoyos, y la segunda de Julián Quiñones, Ignacio Garzón, Juan Clímaco Bueno y Manuel S. Díaz, las cuales suministran prueba completa de que Hoyos estuvo en el combate supra. citado, en clase de Sargento 2.° de las fuerzas que defendían los principios actualmente consignados en la Constitución nacional, y de que allí recibió un balazo que le causó la muerte; de que el archivo de tales fuerzas se perdió cayendo en poder del enemigo, desapareciendo así los documentos con que pudiera acreditarse el empleo militar de Hoyos; de que la solicitante, su esposo é hijos vivieron en paz y armonía; de que los únicos hijos que tuvieron Hoyos y la Díaz fueron Alcides de Jesús y Pedro; de que éste y aquélla son pobres y de buena conducta, y finalmente, de que la misma Díaz permanece viuda;

2.° La partida de matrimonio de Hoyos con la demandante, celebrado ante el Cura Párroco de Timbío el trece de Mayo de 1872 y la de bautismo de Pedro Hoyos, hijo de esa unión, nacido en Octubre de 1875, con las cuales se demuestra el estado civil de los reclamantes respecto del Sargento Hoyos, la menor edad de Pedro y la circunstancia de ser éste hijo de la Díaz, lo cual habilita á ésta última para representar por aquél en la presente reclamación;

3.° Un memorial debidamente autenticado de Alcides de Jesús Hoyos, mayor de edad, según aparece de la respectiva partida de bautismo, en que él manifiesta ser apto para el trabajo y que, por tanto, pide que la recompensa concedida por la ley á los deudos de su padre, debe otorgarse únicamente á su yá citada madre y á su menor hermano Pedro;

4.° Certificación del Ministro del Tesoro sobre que María Ignacia Díaz y sus hijos Alcides y Pedro no han sido recompensados del Erario nacional por razón de la muerte del Sargento Hoyos.

A juicio del Procurador general estas pruebas son bastantes para conceder la gracia pedida conforme á la Ley 84 de 1890 en sus artículos 1.°, 5.° (número 2.°), 9.° y 11, y esta Superioridad lo juzga también así, por lo que de acuerdo con la opinión y disposiciones citadas, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que María Ignacia Díaz y su menor hijo Pedro Hoyos tienen derecho á recibir del Tesoro nacional, como recompensa unitaria definitiva, por la muerte que recibió en el campo de batalla el Sargento Hoyos, esposo y padre, respectivamente, de los dos agraciados, la cantidad de ochocientos diez y seis pesos ($ 816), igual al monto de cuatro años de sueldo, correspondiente á dicho empleo, cantidad que se distribuirá por iguales partes entre la viuda y su hijo.

Notifíquese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—FEDERICO PATIÑO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Febrero trece de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Ruperto García demandó ante el Juez del Circuito de Tuluá desde Febrero de 1881, al Tesoro de la República, por la suma de diez mil doscientos cuarenta y cinco pesos ($ 10,245), proveniente de las siguientes expropiaciones hechas por autoridades del Gobierno nacional en la guerra de 1876 á 1877:

1.ª Veintidós mulas, tomadas del punto de "Jicaramata," estimadas á $ 48 cada una	$ 1,056
2.ª Una mula estimada en	120
3.ª Diez más, á $ 40 cada una	400
4.ª Valor de mercancías expropiadas en el Distrito de Roldanillo	8,459
5.ª Por recargo de las mercancías de Medellín á Roldanillo	210
Total	$ 10,245

Pendiente este negocio sin que en él se hubieran producido pruebas, fué remitido á la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, la que, por resolución de veinte de Mayo del año próximo pasado, reconoció á cargo del Tesoro y á favor de García mil ciento sesenta y ocho pesos ($ 1,168), procedentes de diez y seis mulas, á cuarenta y ocho pesos ($ 48) y de diez más, á cuarenta pesos ($ 40) y absolvió á la República del resto del cargo.

El Ministerio del Tesoro confirmó en cinco de Julio del mismo año lo resuelto por la Comisión, y los autos han sido elevados á esta Corte para que falle definitivamente la reclamación, en virtud de recurso interpuesto por la parte demandante.

Respecto á la expropiación de semovientes obró acertadamente la Comisión al dejar de reconocer la suma proveniente de cinco mulas, porque la prueba de testigos no satisface en este punto las exigencias del artículo 2.°, inciso 3.° de la Ley 44 de 1886.

Cuanto á las mercancías expropiadas en Roldanillo, á virtud de auto para mejor proveer, dictado por la Corte, se ha completado la prueba testimonial, que halló deficiente la Comisión, de modo que hoy existe en los autos plena prueba de la expropiación de las mercancías determinadas en la factura firmada por el Alcalde de Roldanillo, que corre original en el folio 79, con las declaraciones de los testigos Miguel Dosman, Matías Gálvez y Agustín Padilla, corroboradas con las de otros testigos, entre ellos Luis Felipe Lozano, que administraba las mercancías expropiadas por cuenta de García y Francisco Torres Aldana, de cuya casa fueron sacadas las expresadas mercancías.

En cuanto al precio de ellas, estima la Corte justo asignarles el de tres mil ciento treinta y tres pesos noventa centavos ($ 3,133-90), que es el menor fijado por uno de los testigos que presenciaron la expropiación.

No se ha acreditado la expropiación de otras mercancías de que habla el demandante, ni el valor del recargo por fletes de Medellín á Roldanillo.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, reconoce como total valor de esta reclamación la suma de cuatro mil trescientos un pesos noventa centavos ($ 4,301-90) y absuelve al Tesoro del resto del cargo contenido en la demanda.

Déjese copia de esta sentencia, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, trece de Febrero de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: La Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, por resolución marcada con el número 3,967, de fecha diez de Agosto último, declaró prescrito el derecho para intentar la reclamación introducida por Salvador Valencia Fernández, como apoderado de Ricardo Gutiérrez, á fin de que se reconociese y mandase pagar á éste la cantidad de treinta y tres mil doscientos cuarenta y dos pesos cuarenta centavos, como valor de las expropiaciones que se hicieron á Gutiérrez durante la guerra de 1876 á 1877 por autoridades del Departamento del Cauca.

El fundamento de tal resolución se hizo consistir en que el memorial dirigido á la Comisión estableciendo dicha recla-

mación tiene fecha 1.° de Junio de 1892; que el memorial de Gutiérrez por el cual se confirió el poder es de quince de Enero del mismo año, y que los documentos presentados fueron creados en su mayor parte después de vencido el término que señaló la Ley 36 de 1888 para admitir tales reclamaciones.

El Ministerio del Tesoro confirmó lo resuelto por la Comisión, según se ve de su resolución de 28 de Agosto, número 3,174, y de ella interpuso apelación para ante la Corte el citado apoderado.

Sustanciado el asunto en esta Superioridad se procede á decidirlo en definitiva, para lo cual se hacen las siguientes consideraciones:

Verdad es que, según aparece de unas copias expedidas en la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Departamento del Cauca, Ricardo Gutiérrez solicitó del Juez del Circuito de Santander, el 29 de Agosto de 1887, que se recibiesen algunas declaraciones para comprobar la expropiación que se le hizo de noventa y seis cabezas de ganado vacuno estimadas á diez y seis pesos cada una, declaraciones que se recibieron en los primeros días de Septiembre siguiente; que el mismo Gutiérrez hizo con fecha 9 de Agosto del mismo año de 1887 una relación jurada al Gobernador del Cauca de las expropiaciones de mercancías que se le hicieron en Popayán y Pasto, de la de unas cargas de cacao en Cartago y del ganado vacuno de que se ha hablado, y aparecen también en copia otras dos relaciones fechadas ambas en Riosucio el 18 de Octubre de 1877, pero presentadas en Popayán el 29 de Abril de 1879, la una por cuatrocientos setenta y seis novillos, cincuenta y dos mulas y cuatro caballos expropiados en San-Francisco, Provincia del Quindío, y la otra por las mismas mercancías expropiadas en Popayán, y de las cuales se volvió á hacer mención en la relación de 29 de Agosto de 1887. Pero la Corte ha decidido yá en varias reclamaciones, de las cuales se tienen á la vista dos de las más notables por su cuantía, en las que recayeron las sentencias de 26 de Abril de 1890, *Gaceta Judicial* número 214, y de 1.° de Julio de 1891, *Gaceta* número 285, que no basta haber practicado diligencias que deben formar parte de una reclamación, con anterioridad al 27 de Febrero de 1888, para considerarla instaurada oportunamente, si ella no estaba yá pendiente en la fecha expresada ante el Poder Judicial, ante autoridades administrativas ó ante la misma Comisión; y es claro que no puede considerarse instaurada una reclamación sino cuando se ha pedido que ella sea reconocida por alguna de las autoridades mencionadas.

En el caso de que se trata no se instauró la reclamación de Gutiérrez sino el 1.° de Junio de 1892, y la mayor parte de las pruebas se crearon de Noviembre de 1891 en adelante. Por consiguiente se dejaron trascurrir más de cuatro años después de vencido el término que últimamente señaló la Ley 36 de 1888, y á nadie puede culparse de ese descuído sino al interesado.

En consecuencia, la Corte Suprema, de acuerdo con el señor Fiscal de la Comisión, y consecuente con la doctrina que yá tiene establecida, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la resolución apelada.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—FEDERICO PATIÑO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Febrero trece de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Isabel Medina, vecina de Inzá en el Departamento del Cauca, y en su carácter de viuda del Sargento primero Manuel Hurtado, muerto á manos de enemigos armados del Gobierno de la Confederación Granadina, en mil ochocientos sesenta, ha solicitado recompensa para sí y su hija célibe Indalecia Hurtado, por medio de su apoderado Manuel D. Paz.

Al establecerse la demanda se hizo notar que siendo Indalecia Hurtado mayor de edad estaba mal representada por su madre, y no habiéndose subsanado el defecto, el juicio se ha seguido á nombre solamante de la expresada viuda, por resultar de los comprobantes presentados que la citada Indalecia carece de derecho para obtener la gracia solicitada, por no haber podido acreditar su buena conducta moral.

Del estudio de los documentos que componen el expediente, aparece lo siguiente: por no existir en la Parroquia de Inzá los libros en que debiera constar el matrimonio de Manuel Hurtado con Isabel Medina, pues según lo certifica el Cura Párroco Emigdio Games, tales libros fueron destruídos por los revolucionarios de mil ochocientos sesenta, se ha ocurrido á la prueba testimonial y con declaraciones de testigos que presenciaron el acto de matrimonio, entre los que figura el citado Cura Párroco, se ha acreditado que ese acto tuvo lugar en el pueblo de San-Andrés, en el año de mil ochocientos cuarenta y ocho.

Con declaraciones de varias personas que presenciaron los hechos, recibidas con las formalidades legales, se ha justificado que Manuel Hurtado desempeñaba el empleo de Sargento primero de las fuerzas que en mil ochocientos sesenta se organizaron en el Cauca para defender el Gobierno de la Confederación Granadina; que con tal carácter asistió al combate de Segovia, en Noviembre del citado año, y que en su calidad de derrotado fué hecho prisionero por las fuerzas revolucionarias, y se le dió muerte. Los mismos testigos aseguran que del matrimonio de Hurtado y la Medina no hubo más hijos que Indalecia Hurtado, y que es la viuda la única persona que tiene derecho á obtener la recompensa que la ley concede, por hallarse sumamente pobre, haber observado siempre buena conducta y vivido en armonía con su finado esposo, sin haber vuelto á contraer matrimonio.

Con certificación expedida por el señor Ministro del Tesoro se ha acreditado también que la solicitante nó ha recibido de la República pensión ni recompensa por la muerte de su marido.

Los comprobantes relacionados son suficientes conforme á la Ley 84 de 1890 para justificar el derecho que se reclama, y en esa virtud la Corte Suprema, en observancia de lo que disponen los artículos 1.°, 5.° (numeral 2.°,) 6.°, 9.° y 11 de la citada ley, y de acuerdo con lo pedido por el señor Procurador general de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que Isabel Medina, vecina de Inzá, Distrito de Páez, en el Departamento del Cauca, tiene derecho á recibir del Tesoro nacional la recompensa unitaria y definitiva de novecientos doce pesos ($ 912), como viuda del Sargento primero Manuel Hurtado, muerto á manos de enemigos armados del Gobierno legítimo de la Nación, en mil ochocientos sesenta.

Notifíquese, cópiese, dése cuenta al Ministerio de Guerra, publíquese y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, trece de Febrero de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Clotilde Vargas, por medio de su apoderado Manuel D. Paz y V., y en su calidad de hija legítima y única del militar de la Independencia Manuel María Vargas, ha solicitado la recompensa militar á que le da derecho la Ley 84 de 1890.

En apoyo de ese derecho se han presentado los siguientes documentos:

Copia de la respectiva hoja de servicios expedida por el Oficial encargado del archivo republicano, formada en el Estado Mayor, correspondiente al veinticinco de Mayo de mil ochocientos treinta y cinco, de los cuales aparece que dicho Vargas empezó á prestar sus servicios á la causa de la Indpendencia nacional, en su calidad de soldado desde el primero de Junio de mil ochocientos diez y nueve, y ascendió por rigurosa escala hasta el grado de Sargento Mayor efec-

tivo, que le fué conferido el seis de Julio de mil ochocientos treinta y uno, empleo que desempeñaba cuando fué formada la expresada hoja.

Las certificaciones del Cura Párroco de la Catedral de Popayán, que acreditan el matrimonio eclesiástico contraído en mil ochocientos cincuenta y siete por Manuel María Vargas, con Juana Fino; el nacimiento en mil ochocientos cincuenta y nueve de Clotilde Vargas, como hija legítima de ese matrimonio; la defunción del mismo Vargas, en mil ochocientos sesenta y cuatro, y el matrimonio posterior contraído por la viuda de Vargas con Francisco Hurtado, en mil ochocientos sesenta y seis. De estos documentos resulta que la solicitante es la única persona que tiene derecho á recibir la recompensa solicitada, por razón de los servicios militares prestados por su padre á la causa de la Independencia, supuesto que se ha justificado que dicho Jefe no dejó otros hijos y que su viuda contrajo nuevas nupcias y vive hoy casada con Francisco Hurtado.

Con varias declaraciones de testigos, recibidas con las formalidades legales, se ha acreditado suficientemente que la peticionaria permanece soltera, vive al lado de su madre observando conducta intachable, y no tiene renta que sea ó exceda de seiscientos pesos anuales. La conducta para con su padre no puede estimarse por la tierna edad en que quedó á la muerte de éste.

El señor Ministro del Tesoro ha certificado que Clotilde Vargas no ha recibido pensión ni recompensa alguna como hija del citado militar de la Independencia.

Aunque la recompensa se ha solicitado refiriéndose al empleo de Coronel, que se dice fué el último que desempeñó Manuel María Vargas, como no se ha presentado el despacho con que debiera acreditarse tal empleo, y de la hoja de servicios sólo aparece que dicho Vargas alcanzó el grado de Sargento Mayor efectivo, la Corte tiene que limitarse á otorgar la recompensa por el sueldo que está señalado á este último empleo, conforme á la Ley 86 de 1886.

Por tanto, la Corte Suprema, de acuerdo con la opinión del señor Procurador general, y en cumplimiento de lo que disponen los artículos 1.°, 5.° (numeral 1.°), 6.°, 9.° y 12 de la Ley 84 de 1890, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que Clotilde Vargas, vecina de Popayán, tiene derecho á recibir del Tesoro nacional la recompensa unitaria y definitiva de tres mil ochocientos cuarenta pesos, igual al sueldo de cuatro años asignado á un Sargento Mayor, recompensa á que es acreedora como hija célibe de un militar de la Independencia que prestó sus servicios en dicho empleo.

Notifíquese, cópiese, dése cuenta al Ministerio de Guerra, insértese en la *Gaceta Judicial* y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA. — BALTASAR BOTERO URIBE. — JESÚS CASAS ROJAS. — MANUEL E. CORRALES. — JUAN EVANGELISTA TRUJILLO. — LUCAS VILLAFRÁDEZ. — *Gabriel Rosas*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Febrero trece de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: A virtud de denuncio dado por Miguel Montoya contra Jesús María Zorrilla, Juez del Circuito de Roldanillo, el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cauca, previa la sustanciación del sumario correspondiente, declaró, por auto de nueve de Agosto de mil ochocientos noventa, con lugar á proceder por los trámites extraordinarios contra el expresado Zorrilla, por violación del artículo 379 del Código Penal vigente á la sazón, consistente en no haber condenado en costas á la parte apelante al confirmar un auto del Juez municipal de Roldanillo, en el juicio civil que seguía Manuel Alvarez Aponte contra Rozo Varela.

Al mismo tiempo sobreseyó el Tribunal respecto al cargo de haber fallado contra ley expresa, comprendido también en el denuncio.

Después de larga demora ocasionada en el Juzgado comisionado para la notificación del auto de proceder, cuyo responsable se ha ordenado averiguar, dictó sentencia definitiva el Tribunal de primera instancia, en tres de Agosto del año próximo pasado; en ella se absuelve al acusado del cargo, se dispone que no se consulte el sobreseimiento decretado anteriormente, por no estar en el caso del artículo 346 de la Ley 105 de 1890, y se ordena consultar la sentencia absolutoria con esta Superioridad.

Elevados á ella los autos y surtida la tramitación propia del caso, la Corte hubo de devolverlos al Tribunal, porque la sentencia carecía de la firma entera de uno de los Magistrados. Subsanada la falta, por haberse reproducido la sentencia en diez y siete de Noviembre del mismo año, se remitió otra vez el expediente, y surtida la tramitación del caso se procede á resolver la consulta.

Resulta de autos que el Juez Zorrilla, en auto de siete de Abril de mil ochocientos noventa, confirmó el proferido por el Juez municipal del mismo Distrito, en diez de Febrero anterior, por el cual declaró que no podía llevarse á efecto el secuestro de un crédito de Mercedario Gaviria, á favor del demandado, por haberse extinguido anteriormente ese crédito á virtud de pago justificado con el documento cancelado por persona que tenía facultad para recibir.

En la providencia del Juez del Circuito nada se dijo sobre costas, lo que significa que el apelante perdía las que causó en la instancia, porque la parte contraria, que sería la que tenía derecho á exigirle el valor de las que hubiera hecho, no figuró en el recurso haciendo ninguna gestión ni gasto. Debido á esto, es decir, á la ausencia de materia sobre la cual pudiera recaer la condenación en costas, puede admitirse, como lo hizo el Tribunal, la irresponsabilidad del Juez, por no haber hecho una condenación que ningún efecto había de surtir.

Por otra parte, la falta indicada, dado caso que tuviera los caracteres necesarios para ser punible, por no haber en el Código Penal un caso especial que la comprenda, debe considerarse no incluída en la disposición general del artículo 390, que trata de toda falta al cumplimiento de deberes públicos no castigados por otra disposición, y no en la que el Tribunal consideró aplicable al abrir el juicio, que se refiere al no cumplimiento ó ejecución de órdenes superiores ó de leyes especiales que sean legalmente comunicadas, disposición que no puede aplicarse á la generalidad de las leyes que no se comunican especialmente y no se encomienda su ejecución á determinado funcionario.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de conformidad con el concepto del señor Procurador, confirma la sentencia consultada.

Notifíquese esta sentencia, déjese copia de ella, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente al Tribunal de su origen.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO. — LUCAS VILLAFRÁDEZ. — *Gabriel Rosas*, Secretario.

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Febrero nueve de mil ochocientos noventa y tres.

SALA DE SEIS MAGISTADOS.

Vistos: El Magistrado que sustancia el juicio promovido por la Compañía del Ferrocarril de Panamá contra la Nación sobre establecimiento de alumbrado eléctrico ó de cualquiera otra clase en la línea del Ferrocarril, profirió, en siete de Diciembre del año próximo pasado, un auto en el cual dispone que el poder dado por el Presidente de la Compañía citada, Juan Newton, al doctor Eladio C. Gutiérrez, no confiere á éste personería legítima, que en tal virtud el juicio que trató de iniciar debe continuar en suspenso mientras subsista la causal de la excepción de ilegitimidad de la

personería declarada probada anteriormente, y, de consiguiente, que el Procurador de la Nación no está obligado todavía á contestar la demanda. De este auto pidió revocación el citado doctor Gutiérrez, y, para el caso de que no se accediera á ella, apeló para ante esta Sala.

El Magistrodo sustanciador, en auto de treinta de Enero último, negó la revocación pedida y otorgó el recurso de apelación, que pasa la Sala á decidir, en virtud de la atribución que le confiere el artículo 30 de la Ley 147 de 1888.

Sostiene el Magistrado que dictó el auto apelado que los Estatutos de la Compañía del Ferrocarril de Panamá, presentados por el demandante en copia tomada de los documentos protocolizados en la Notaría del Circuito de Colón, no confieren al Presidente la facultad de otorgar poderes á personas que la representen en juicio.

Examinados los documentos presentados, que contienen las actas de incorporación de la Compañía del Ferrocarril de Panamá en el Estado de New-York, Estados Unidos de América, en siete de Abril de 1849, y doce de Abril de 1855, y los los Estatutos de la citada Compañía, formados por la Junta Directiva, no se encuentra en estos documentos ninguna disposición que determine de una manera clara y categórica, qué persona tiene la representación jurídica de la Sociedad; pero de lo que dice el parágrafo 6.°, en donde se reconoce que todo contrato celebrado por la Sociedad podrá hacerse verbalmente ó bajo la firma del Presidente, Secretario ú otro empleado ó agente de dicha Sociedad, con ó sin el sello de ella, se deduce que el Presidente, que hace parte de la Junta Directiva y la preside ó representa, obró con la suficiente autorización de esa Junta que administra los negocios sociales, al conferir á Eladio C. Gutiérrez y José Ignacio Escobar el poder que se ha presentado, poder que fué otorgado ante el Cónsul general de la República de Colombia en New-York en diez y ocho de Abril de 1891, para representar á dicha Compañía del Ferrocarril de Panamá en la ciudad de Bogotá, ante el Supremo Gobierno de la República en todas las gestiones, negocios ó diligencias que ocurran, y ante la Corte Suprema de Justicia en los juicios de que ella conozca, y en los cuales sea ó deba hacerse parte la Compañía. Obró también dicho Presidente dentro de la esfera de atribuciones que le confieren las actas de incorporación de la citada Compañía del Ferrocarril de Panamá.

Por otra parte, el artículo 316 del Código Judicial establece que las demandas contra las comunidades ó sociedades legítimas, esto es, legalmente reconocidas, se entenderán con sus Síndicos, Procuradores, Tesoreros ó individuos que deban representarlas en juicio, en caso de que los tengan establecidos de una manera conocida, y si nó, con las personas que presidan dichas comunidades ó sociedades en el lugar del juicio; y el artículo 317 establece que los mismos empleados representarán á las comunidades ó sociedades cuando éstas tengan que comparecer en juicio

Por tanto, la Sala de seis Magistrados, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca el auto apelado, reconoce á Eladio C. Gutiérrez personería suficiente para representar en este asunto á la Compañía del Ferrocarril de Panamá en virtud del poder que se ha presentado y dispone que se confiera nuevo traslado de la demanda al Procurador de la Nación, para que la conteste dentro del término legal.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Febrero once de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: La presente ejecución seguida por el Administrador de la Aduana de Barranquilla, en ejercicio de su jurisdicción coactiva, contra la Sociedad comercial colectiva de López Olier y Compañía y á favor de la Nación, por la cantidad de setenta y un mil cuatrocientos veinticinco pesos cincuenta centavos ($ 71,425-50), procedentes de derechos de importación, y por los intereses de demora, adolece de nulidad por ilegitimidad de personería de la parte ejecutada, desde que, aplicando erróneamente la disposición del artículo 346 del Código Judicial, que permite comparecer en juicio sin poder, al pariente por los suyos hasta el cuarto grado de consaguinidad ó segundo de afinidad, se admitió por el funcionario ejecutor á Enrique López Zapata, á representar sin poder en nombre de la Sociedad ejecutada, teniéndolo como pariente de ésta, por serlo de las personas asociadas bajo esa razón social ó de algunas de ellas (aunque sin comprobar este parentesco), pues una sociedad comercial, que forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados, no es susceptible, como lo advierte en su anterior vista el Procurador general, del vínculo de parentesco que no existe legalmente sino entre personas naturales (artículos 38, 47 y 50 del Código Civil).

Por tanto, la Corte, antes de ocuparse en resolver la apelación que ha motivado el envío de estos autos á su conocimiento, cumpliendo el precepto de los artículos 134 y 135 de la Ley 105 de 1890, ordena poner la expresada causa de nulidad en conocimiento de la parte ejecutada para los efectos que en dichos artículos se determinan, debiendo notificarse personalmente este auto á cualquiera de los socios de la Sociedad de López Olier & Compañía de Barranquilla, ó á quien represente á ésta legalmente, para que pueda hacer uso de sus derechos.

Notifíquese.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—FEDERICO PATIÑO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Febrero diez de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: El Fiscal del Circuito de Toro del Distrito Judicial del Cauca ha remitido á esta Superioridad una información sumaria de testigos sobre la conducta irregular observada por el Juez de ese Circuito, Miguel Piedrahita Casas, para que se dicte una providencia que ponga remedio á ese mal, ya que el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cauca no ha hecho nada en ese sentido, según lo afirma dicho Fiscal, á pesar de que se le ha dirigido en dos ocasiones quejándose contra el mencionado Juez.

El Fiscal, como empleado del Ministerio Público, debía saber que la Corte no es competente para conocer en primera instancia de las causas de responsabilidad contra los Jueces de Circuito, sino los Tribunales de Distrito Judicial (artículo 43, ordinal 1.° y 73, ordinal 1.° de la Ley 147 de 1888), y que debía dirigir su denuncio, con los documentos que lo acompañan, al Tribunal del Cauca, para que levantara el sumario del caso y siguiera la causa á que hubiera lugar, por ser la autoridad competente para ese efecto. Y si esa Corporación no le prestaba oído á su denuncio, cosa muy improbable, puesto que en esta Oficina hay constancia de que al Juez Piedrahita Casas se le sigue juicio de responsabilidad por mala conducta, dar la queja á su superior jerárquico ú ocurrir á la Corte con los comprobantes respectivos, para llamar á juicio á los Magistrados de ese Tribunal. Pero ya que dicho Fiscal no ha hecho, por el camino regular, lo que era de su incumbencia, esta Superioridad, para evitar demoras, pasará estas diligencias á quien debe conocer de ellas.

En mérito de lo expuesto, la Corte, de acuerdo con el concepto del señor Procurador, se declara incompetente para conocer en primera instancia del denuncio dado contra el Juez del Circuito de Toro, Miguel Piedrahita Casas, y ordena remitir la presente documentación al Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cauca.

Notifíquese y cópiese.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—FEDERICO PATIÑO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

IMPRENTA DE ANTONIO M. SILVESTRE.

REPÚBLICA DE COLOMBIA.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AÑO VIII | Bogotá, 21 de Abril de 1893. | NÚM. 383.

CONTENIDO.

Págs.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

La que concede á Salvador La Rotta H. una pensión mensual vitalicia. (Magistrado ponente, doctor Trujillo)..... 153
La que concede á Luisa Noguera y sus hijas Encarnación y Margarita Meneses una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Pombo)..... 153
La que concede á Carmen Arcos y Antonio José Rosas una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Pombo)..... 154
La que concede á Evangelista Avendaño una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas)..... 154
La que concede á Manuel Muñoz una recompensa Militar. (Magistrado ponente, doctor Corrales)..... 155
La que confirma la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior de Panamá en el juicio seguido por A. James & Compañía contra William E. Stern, por suma de pesos. (Magistrado ponente, doctor Villafrádez)..... 155

NEGOCIOS CRIMINALES.

La que confirma, en parte, el fallo dictado por el Tribunal Superior de Popayán en las causas de responsabilidad acumuladas contra Apolinar Mutis, ex-Juez del Circuito de Buenaventura, por varios cargos. (Magistrado-ponente, doctor Pombo)..... 159

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

El que declara inadmisible el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Cundinamarca, en la ejecución seguida por Guillermo Ponce contra Vicente Berrío. (Magistrado ponente, doctor Trujillo)..... 160
El que confirma un auto dictado por el Tribunal Superior de Cundinamarca en el juicio de concurso de acreedores formado á los bienes de José María Salgado. (Magistrado ponente, doctor Pombo)..... 160

GACETA JUDICIAL.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, once de Febrero de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Salvador La Rotta H., por medio de apoderado, ha pedido á esta Superioridad se le conceda del Tesoro nacional, de acuerdo con la Ley 84 de 1890, una pensión vitalicia por antigüedad de sus servicios en la carrera de las armas.

Con su petición acompañó la hoja de sus servicios militares, única prueba que se puede tener en cuenta en este caso, según lo dispuesto en el artículo 40 de la ley antes citada, en que consta: que ha servido en el Ejército de la República, computándole doble el tiempo de campaña, 18 años 5 meses y un día; que sirvió en el empleo de Coronel efectivo por el término de 6 años 2 meses y 8 días, y que no ha recibido de la Nación pensión ni recompensa alguna. De suerte que el demandante se halla comprendido en el caso previsto en el inciso 2.° del artículo 10 de dicha Ley 84, y que tiene derecho, según el artículo 40, á las dos terceras partes del sueldo del empleo de Coronel efectivo, que desempeñó por más de 3 años.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el concepto del señor Procurador, concede del Tesoro nacional á Salvador La Rotta H. la pensión mensual vitalicia de noventa y tres pesos treinta centavos ($ 93-30).

Notifíquese, cópiese, dése cuenta al Ministerio de Guerra y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA. — BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—FEDERICO PATIÑO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, Febrero catorce de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Con motivo de la muerte del Teniente Fidel Meneses en el combate de Piedrarica, Departamento del Cauca, en 1877, su viuda, Luisa Noguerra y sus hijas, Encarnación y Margarita Meneses, han solicitado recompensa militar, de acuerdo con la Ley 84 de 1890.

El apoderado de las demandantes, Manuel D. Paz, ha acreditado los siguientes hechos, con los documentos acompañados á la demanda:

La muerte del Teniente Meneses, con las declaraciones de varios de sus compañeros de armas que la presenciaron, por haberse hallado en el combate referido, que tuvo lugar en Piedrarica, en 1877, y peleando en favor del Gobierno legítimo de aquella época,

El empleo militar de Meneses, con las mismas declaraciones y con la certificación del señor Ministro de Guerra, según la cual dicho Meneses figuró con el citado empleo en los documentos publicados en la *Memoria de Guerra* de 1880.

El estado de viuda de Luisa Noguera, como esposa legítima del finado Meneses, y la filiación legítima de sus hijas Encarnación y Margarita Meneses, han quedado establecidos con las partidas de matrimonio de la primera y de nacimiento de las últimas, expedidas por el Cura párroco de Timbío, Presbítero Manuel María Malo.

Que las solicitantes son los únicos deudos de Meneses que hoy existen; que se hallan en estado de notoria pobreza; que han observado siempre buena conducta; vivieron en armonía con su causante y se conservan en estado de viudedad la citada Noguera y solteras sus expresadas hijas; todos esos hechos están legalmente acreditados con declaraciones de testigos que dan razón satisfactoria de lo que aseguran.

Que las mismas solicitantes no han recibido pensión ni recompensa de la República por la muerte del referido militar, consta de la certificación expedida por el señor Ministro del Tesoro.

En vista de tales comprobantes, que son los que exige la Ley 84 para el caso de que se trata, de acuerdo con lo solicitado por el señor Procurador general de la Nación, la Corte Suprema, en cumplimiento de lo que disponen los artículos 1.°, 5.°, (numeral 2.°), 6.° y 9.° de la citada ley, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que Luisa Noguera y sus hijas Encarnación y Margarita Meneses, tienen derecho á recibir del Tesoro nacional la recompensa unitaria y definitiva de dos mil cuatrocientos pesos ($ 2,400), por la muerte en el campo de batalla del Teniente Fidel Meneses, cantidad que se dividirá en dos partes iguales, una para la viuda y otra para sus dos hijas.

Notifíquese, cópiese, dése cuenta al Ministerio de Guerra, publíquese y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO. — LUCAS VILLAFRÁDEZ. — *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Febrero diez y seis de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Desde el mes de Enero de mil ochocientos ochenta y nueve, Carmen Arcos, vecina de Pasto, ocurrió á la Corte, por medio de apoderado, en solicitud de una recompensa militar, como viuda del Coronel Antonio José Rosas, muerto á manos de enemigos del Gobierno de la Confederación Granadina en mil ochocientos sesenta y uno.

Perfeccionado al fin el expediente á virtud de los diferentes autos dictados con ese objeto, ha llegado al estado de ser decidida la reclamación, en la cual ha figurado después como parte Antonio José Rosas, hijo de la solicitante y del citado Coronel, por hallarse imposibilitado para trabajar.

Entre los documentos presentados para acreditar la muerte del Coronel Rosas, figura el honrosísimo Decreto dictado por el Comandante en Jefe del Ejército de la Confederación Granadina, Julio Arboleda, expedido en Popayán el diez y nueve de Diciembre de mil ochocientos sesenta y uno, y varias declaraciones de testigos, entre ellas la del doctor José Francisco Zarama, recibida en Quito el quince de Octubre de mil ochocientos ochenta y nueve, de las cuales resulta que Rosas fué muerto en una emboscada puesta por los enemigos del Gobierno en las montañas de Chirivío, cuando él los perseguía en esos sitios, en mil ochocientos sesenta y uno.

Se ha presentado la partida de matrimonio, foja 15, de la cual consta que Antonio J. Rosas y Carmen Arcos lo contrajeron conforme al rito católico el veintiocho de Agosto de mil ochocientos cuarenta y tres, y con la de nacimiento de Antonio José Rosas se ha acreditado que éste fué hijo legítimo de ese matrimonio; y aunque este último es mayor de edad, se ha justificado con el reconocimiento de la junta de Profesores, practicado conforme á los artículos 17 y 18 de la Ley 84 de 1890, que dicho Rosas sufre una enfermedad crónica que lo inhabilita de por vida para trabajar y proporcionarse la subsistencia.

Con declaraciones de muchos testigos y certificación del Cura párroco de Tunes, se ha comprobado igualmente que la solicitante permanece viuda, ha observado siempre una conducta moral intachable, vivió en buena armonía con su esposo y se halla en estado de pobreza. En cuanto á las relaciones del solicitante Antonio José con su finado padre, debe observarse que no pueden estimarse porque, según resulta del expediente, dicho Antonio José fué hijo póstumo.

Con certificación del señor Ministro del Tesoro se ha acreditado que por muerte del Coronel Rosas, ni su viuda ni su hijo Antonio han recibido pensión ni recompensa del Tesoro público.

Finalmente, y como resultase que el Coronel Rosas tuvo otros hijos, está en el expediente la atestación de Aristides Rosas, que como hijo mayor de edad, ha manifestado que no se cree con derecho á recompensa, por ser hábil para el trabajo; y respecto de las otras hijas, Mercedes y Diocelina, se han agregado las respectivas certificaciones del Cura de Tunes, de las que aparece que la primera está casada con Juan Benavides, y la segunda murió después de casada con Primitivo Cacedo.

Está, por consiguiente, plenamente acreditado que no hay otros deudos del Coronel Rosas que tengan derecho á ser recompensados, fuera de su viuda y su hijo Antonio.

En vista de lo que queda expuesto, y hallándose arreglada á la ley la demanda de recompensa, y plenamente comprobados los hechos en que se funda, la Corte Suprema, de acuerdo con lo que disponen los artículos 1.°, 2.°, 6.°, 9.° y 11 de la Ley 84 de 1890, y con el dictamen del señor Procurador general de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que Carmen Arcos, como viuda del Coronel Antonio J. Rosas y su hijo Antonio José, tienen derecho á recibir del Tesoro nacional una recompensa unitaria y definitiva de seis mil setecientos veinte pesos ($ 6,720), por la muerte de dicho Coronel á manos de enemigos armados del Gobierno de la Confederación Granadina, en mil ochocientos sesenta y uno. Dicha cantidad se dividirá en partes iguales entre la viuda y su citado hijo.

Notifíquese, cópiese, publíquese, dése cuenta al Ministerio de Guerra y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO. — LUCAS VILLAFRÁDEZ.— *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Febrero diez y seis de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Por medio de apoderado, Evangelista Avendaño, vecino de Cali, ha intentado demanda para que se le conceda una pensión anual de cuarenta y ocho pesos ($ 48), por haber servido como Cabo 1.° del *Batallón Junín número* 13, por más de cinco años, y al propio tiempo para que se le conceda una recompensa unitaria definitiva, á causa de haber contraído en el servicio militar una enfermedad incurable y que lo inutiliza por completo para proporcionarse la subsistencia por medio del trabajo.

Sustanciada legalmente la demanda y perfeccionado el expediente, para dictar la sentencia del caso, se considera:

1.° En cuanto á la solicitud que se refiere á la pensión por antigüedad de servicios, el señor Procurador ha observado, con razón, que no hay lugar á decidirla favorablemente, porque la Corte tiene resuelto el punto, de que, según el espíritu de la Ley 84 de 1890, esa clase de recompensas sólo se otorgan á los Oficiales y Jefes del Ejército y no á los individuos de tropa, quienes por esta causal sólo tienen derecho á la gratificación de que tratan los artículos 214 y 215 del Código Militar;

2.° Respecto de la petición de recompensa que se funda en la causal designada por el inciso 6.° del artículo 5.° de la mencionada Ley 84, ó sea el hecho de la enfermedad contraída por el demandante durante el servicio militar, hánse presentado en su apoyo pruebas suficientes y que consisten:

a) En la exposición dos veces hecha por la junta de Profesores constituída al efecto por nombramiento del Gobernador del Cauca, y compuesta de los doctores Juan N. Wallis O., Domingo Arboleda y Domingo Cajiao C., quienes, previo reconocimiento del inválido, declararon que éste adolecía de una afección orgánica del corazón, que lo imposibilitaba absolutamente para el trabajo, de por vida, que era incurable, y que debía haberla contraído en el servicio militar.

b) En la filiación del expresado Cabo 1.° en copia debidamente autorizada, y en certificados expedidos por el General Eduardo París, primer Jefe del *Batallón* 13 *de Junín*, y por el segundo Jefe del mismo, Ernesto Borrero, documentos con que se acredita que Evangelista Avendaño se incorporó en dicho Batallón en Octubre de 1885, y se separó de él en Febrero de 1891, á causa de enfermedad que lo imposibilitaba absolutamente para el servicio militar, en el cual enfermó gravemente, no obstante haber observado buena conducta.

c) En las declaraciones rendidas en forma legal por más de cinco testigos idóneos, con las cuales se establece plenamente, y según lo que á este respecto exige el artículo 25 de la Ley 84, que fué durante el servicio militar y á causa de él como Avendaño contrajo la enfermedad incurable de que adolece, y que lo ha sujetado á una situación de absoluta imposibilidad para el trabajo y de excesiva pobreza.

d) En el certificado que el señor Ministro del Tesoro expidió para acreditar que el demandante no ha recibido recompensa alguna del Tesoro público.

En vista de tales comprobantes, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el concepto del señor Procurador, declara que Evangelista Avendaño tiene derecho á una recompensa unitaria definitiva igual á las dos terceras partes del sueldo

correspondiente en cuatro años á un Cabo 1.°, ó sea, á la suma de cuatrocientos doce pesos ($ 412), que se le pagará del Tesoro público, según lo que para el caso disponen los artículos 5.° (inciso 6.°) y 16 de la Ley 84 de 1890.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial*, comuníquese á Su Señoría el Ministro de Guerra y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Febrero diez y siete de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Manuel Muñoz, vecino del Corregimiento de Guachicono, en el Departamento del Cauca, pide se le conceda del Tesoro nacional, de acuerdo con la Ley 84 de 1890, una recompensa militar unitaria, en su calidad de inválido de la guerra de 1876.

Con las declaraciones de cuatro testigos presenciales, recibidas en la forma legal, la diligencia de reconocimiento practicado de acuerdo con los artículos 17 y 18 de la ley antes citada, y con certificado del Ministerio del Tesoro, ha comprobado plenamente, que peleando como Sargento 1.° en defensa del Gobierno en el combate de Almaguer, que tuvo lugar en el extinguido Estado del Cauca, en la guerra de 1876 y 1877, recibió una herida de bala en la mano derecha que le ha causado invalidez relativa para poder trabajar como antes; que está sumamente pobre, y que no ha recibido recompensa ni pensión alguna.

En vista de estos hechos y de lo que disponen los artículos 1.°, 5.°, 19 y 21 de la Ley 84 de 1890, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, concede del Tesoro nacional, á Manuel Muñoz, la recompensa militar unitaria de cuatrocientos cincuenta y seis pesos ($ 456), suma igual á la mitad del monto del sueldo en cuatro años del empleo de Sargento 1.°

Notifíquese, cópiese, publíquese, dése cuenta al Ministerio de Guerra y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Febrero diez y ocho de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Salomón James, á nombre y en representación de la Sociedad colectiva de comercio, establecida entre él y Adolfo James, bajo la razón social de A. James & Compañía, según escritura pública número 157, otorgada ante el Notario del Circuito de Colón, con fecha diez de Octubre de mil ochocientos ochenta y nueve, ocurrió al Juez del Circuito Judicial de este mismo nombre, demandando de William E. Stern, su antiguo socio, la suma de seis mil trescientos treinta y dos pesos noventa y seis centavos ($ 6,332-96), por perjuicios procedentes del dolo cometido por el demandado en el contrato celebrado con los socios de dicha Casa en escritura pública de once del citado mes de Octubre, número 158, otorgada ante el susodicho Notario de Colón, Manuel D. Soly. Acompañó á esta demanda los dos instrumentos mencionados, el extracto del primero de ellos registrado en conformidad á lo prevenido en los artículos 469 y 470 del Código de Comercio, y además, la escritura pública de cuatro de Enero de mil ochocientos ochenta y tres, número 3.°, por la cual formaron los expresados James y Stern una Sociedad colectiva de comercio.

El demandante expuso, como fundamento de su acción, los siguientes:

1.° Que conforme á la escritura social de mil ochocientos ochenta y tres, los socios tenían participación igual en los beneficios y en las pérdidas de la Compañía, y cada uno de ellos podía tomar de los fondos comunes hasta doscientos pesos mensuales para sus gastos particulares, lo que debía ponerse en cuenta para hacer el cómputo á su debido tiempo;

2.° Que Stern en el curso de la Sociedad retiró más de los doscientos pesos mensuales estipulados, llegando á tener el treinta y uno de Marzo de mil ochocientos ochenta y cinco, al débito de su cuenta personal, un saldo á su cargo de trece mil setecientos siete pesos ($ 13,707);

3.° Que en Enero de mil ochocientos ochenta y siete Stern, á su regreso de Nueva York, donde se encontraba, ordenó al tenedor de libros de la Casa, sin conocimiento de los otros socios, que saldara su cuenta personal y la del socio Salomón James, la cual arrojaba un saldo de tres mil setecientos cuarenta pesos setenta y seis centavos ($ 3,740-76), por la de ganancias y pérdidas, á la cual llevan los comerciantes los créditos incobrables procedentes de deudores insolventes; pero no los saldos de las cuentas personales de los socios que tienen capital en la Sociedad;

4.° Que en virtud de esa operación dolosa, el saldo de la cuenta "W. E. Stern," en diez de Octubre de mil ochocientos ochenta y nueve, era solamente de cuatro mil ciento sesenta y cinco pesos ochenta y seis centavos ($ 4,165-86), no obstante que él (Stern) en la referida escritura de once de Octubre, número 158, reconoció deber á los James el saldo de cinco mil setecientos veintitrés pesos noventa y ocho centavos ($ 5,723-98), procedente de operaciones hechas de mil ochocientos ochenta y siete en adelante, saldo que aquéllos admitieron, siguiéndose por lo que Stern decía, y sin verificar las operaciones del caso para cerciorarse de su exactitud;

5.° Que de los saldos de las cuentas "W. E. Stern" y "Salomón James," pasados á la de "ganancias y pérdidas," en treinta y uno de Diciembre de mil ochocienta y ochenta y seis, corresponden legítimamente á Stern la tercera parte y á los James las dos restantes, por lo cual queda un cargo líquido contra aquél de siete mil ochocientos noventa y un pesos ocho centavos ($ 7,891-08); pero que siendo justo rebajarle mil quinientos cincuenta y ocho pesos doce centavos ($ 1,558-12) que reconoció de más en la escritura de diez de Octubre de mil ochocientos ochenta y nueve, número 158, el saldo definitivo era de seis mil trescientos treinta y dos pesos noventa y seis centavos ($ 6,332-96), que es la cantidad demandada.

Expuestos así los hechos, el demandante terminó su libelo alegando que él y su consocio tenían derecho á reclamar perjuicios por un valor igual al provecho reportado por Stern, según el artículo 1515 del Código Civil, y que ese derecho lo tendrían aun en el caso, que no ha ocurrido, de haber mediado pacto de no pedir más en razón de una cuenta no aprobada, porque el artículo 1522 dice que esos pactos no valen en cuanto al dolo cometido en la cuenta si no se ha condonado expresamente.

A esta demanda contestó el demandado por medio del apoderado que constituyó para el pleito, conviniendo desde luégo, de un modo expreso, en el primero de los hechos aducidos por el demandante, esto es, en que entre Stern y los James había existido realmente una Sociedad comercial en los términos de la escritura pública número 3, de cuatro de Enero de mil ochocientos ochenta y tres, en que los tres socios tenían partes iguales en las utilidades y en las pérdidas, y cada socio podía retirar de la Compañía hasta doscientos pesos mensuales, y reconociendo implícitamente al tratar del hecho tercero, lo que ya había confesado de una manera categórica en las posiciones que absolvió á petición del demandante, con fecha veintiséis de Noviembre de mil ochocientos noventa (cuaderno 1.°, fojas 22 á 24), á saber: que poco más ó menos dos años después del incendio ocurrido en Colón el treinta y uno de Marzo de mil ochocientos ochenta y cinco, estando los James en Nueva-York ó en Europa, el absolvente, como socio de la Casa supracitada, dió orden al tenedor de libros de ésta, Gabriel López, de traspasar un saldo de trece mil pesos, poco más ó menos, que resultaba en contra del absolvente, en su cuenta personal, á la cuenta de ganancias y pérdidas, y que lo mismo hizo con la cuenta personal del socio Salomón James, que tenía un balance en contra de éste de tres mil seiscientos pesos, poco más ó menos, agregando que esas cuentas se referían á los años anteriores al incendio de treinta y uno de Marzo de mil ochocientos ochenta y cin-

co, y expresaban las sumas tomadas en mercancías y dinero por los socios ya citados.

Dicha parte, empero, contradijo la acción deducida por el demandante, rebatiendo los hechos y el derecho ejercitado por el actor y fundando su repulsa en varias objeciones, cuyo resumen es como sigue:

1.ª Que según la escritura social de mil ochocientos ochenta y tres, la Sociedad que tuvieron Stern y James espiró por virtud de estipulación expresa, el cuatro de Enero de mil ochocientos ochenta y cinco, y que después no existió entre los antiguos socios sino una Sociedad de hecho, sin capital ninguno, pues dichos socios habían quedado arruinados por el incendio de treinta y uno de Marzo citado, y sin llenar las formalidades prescritas por la ley, porque aun cuando en el contrato escriturado se había acordado que la Compañía podía prorrogarse pasados los dos años de su duración, á voluntad de los coasociados, el acto de la prorrogación no llegó á efectuarse con la solemnidad requerida por el Código de Comercio;

2.ª Que Stern no retiró la suma de trece mil setecientos siete pesos hasta el cuatro de Enero de mil ochocientos ochenta y cinco, que duró la Sociedad legal de A. James & Compañía, y que si hasta esta fecha había retirado más de doscientos pesos mensuales que podía tomar de su aporte, según la escritura de asociación, lo hizo porque legalmente no estaba obligado á capitalizar las utilidades obtenidas hasta entonces, que eran inmensas, atenta la disposición del artículo 500 del Código de Comercio, según la cual "ningún socio podrá ser obligado á aumentar su aporte, ó á reponerlo si se perdiere durante la sociedad, salvo el caso de estipulación en contrario," no habiendo como no había en la escritura social la condición de que las utilidades de los socios se acumularan al capital social;

3.ª Que Stern no cometió el dolo que se le imputa, esto es, no tuvo la intención positiva de inferir ni infirió injuria alguna á las personas ni á las propiedades de sus consocios al hacer asentar en los libros de comercio de A. James & Compañía las partidas por las cuales se saldaron por ganancias y pérdidas en treinta y uno de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis, su cuenta personal de mil ochocientos ochenta y tres y mil ochocientos ochenta y cuatro y algunos días de mil ochocientos ochenta y cinco, y la del socio industrial Salomón James, ya porque esta operación fué legítima, no habiendo, como no hubo, razón para trasplantar las cuentas personales de los socios de la casa de comercio que terminó el cuatro de Enero de mil ochocientos ochenta cinco, y cuyas existencias fueron consumidas por el incendio de Marzo de ese año, á los libros de la Sociedad de hecho que comenzó á funcionar muchos meses después sobre otras bases y sin carácter legal ninguno; ya porque cuando tal operación se hizo, que fué en Enero de mil ochocientos ochenta y siete, y después hasta que Stern se separó de la Sociedad de hecho, Salomón James era socio administrador, veía los libros y entendía en ellos como lo hacía Stern y como lo hacía Adolfo James, cuando estuvo en Colón, y ambos tuvieron conocimiento del hecho; ya porque siendo una de las cuentas saldadas la de Salomón James, éste no podía razonablemente ignorar que se lo había descargado de una deuda considerable; ya, en fin, porque Stern procedió sin reserva ninguna, y antes bien con entera franqueza, al ordenar, en su carácter de socio administrador de la Sociedad de hecho, que el tenedor de libros saldara por ganancias y pérdidas su cuenta y la de su consocio Salomón James, correspondientes á la antigua Casa;

4.ª Que demandándose perjuicios provenientes de dolo cometido por Stern en el contrato que celebró con los socios de la actual Casa de A. James & Compañía, en escritura pública otorgada bajo el número 158 en once de Octubre de mil ochocientos ochenta y nueve, y habiendo espirado este contrato por mutuo consentimiento de las partes contratantes, quienes lo novaron por el que celebraron dos años después por escritura pública número 108 de veintiuno de Octubre de mil ochocientos noventa, la acción deducida por causa de ese supuesto dolo, también había caducado cuando se intentó, y por ello el demandado le oponía en su defensa la excepción perentoria de novación establecida por el Código Civil.

Por estas contestaciones que dió el demandado, después de haberse declarado infundada la excepción dilatoria de ilegitimidad de personería del demandante, quedó establecida, entre las partes la controversia sujeta materia de estos autos que, seguidos en primera y segunda instancia por los trámites del juicio ordinario, se han elevado últimamente al conocimiento de esta Suprema Corte, por recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia definitiva que en grado de apelación pronunció el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Panamá con fecha dos de Mayo del año próximo pasado, en la cual se declara que "William E. Stern es deudor de la Sociedad A. James & Compañía, de Colón, por la suma demandada, que es la de seis mil trescientos treinta y dos pesos noventa y seis centavos, que está obligado á pagar," revocando el fallo de primera instancia, en cuya parte resolutiva se declara "que no ha sido probado el dolo que se dice cometido en el documento extendido el once de Octubre de mil ochocientos ochenta y nueve, y por lo mismo no se han causado las perjuicios demandados; que ha sido probada la excepción perentoria de novación de contrato, y que, por consiguiente, absuelve á William E. Stern del cargo porque fué demandado."

La Corte considera desde luégo que el recurso propuesto es legalmente admisible, por cuanto concurren las circunstancias que al efecto requiere la Ley 105 de 1890, pues se interpuso oportunamente, es hábil el recurrente, la sentencia contra la cual se recurre es definitiva y se pronunció por un Tribunal Superior en segunda instancia; las leyes del antiguo Estado de Panamá, en que se funda y ha debido fundarse, son idénticas á las que rigen actualmente en la República en los puntos sujeta materia del juicio; la cuantía de éste excede de tres mil pesos, y existe entre ese fallo y el de primera instancia completa contrariedad; por todo lo cual, esta Superioridad lo admite para el efecto de examinar sus fundamentos y decidir sobre ellos lo que sea de justicia, como pasa á verificarlo.

Los motivos por los cuales pretende el recurrente que se case la sentencia del Tribunal sea únicamente los que su apoderado expuso al interponer el recurso, pues aunque pudo hacer respecto de ellos algunas ampliaciones y alegar otras causales cuando se le entregaron los autos con ese objeto por disposición de la Corte, en virtud de lo que dispone el artículo 377 de la citada Ley 105, resulta que no hizo uso de tal derecho, y por tanto, la presente determinación debe contraerse á los motivos alegados, cuyo extracto es como sigue:

1.° Que dicha sentencia es contraria á los artículos 1516 del Código Civil y 837 del Judicial, por cuanto los demandantes no han probado que Stern cometiera dolo en el contrato de once de Octubre de mil ochocientos ochenta y nueve, como se dijo en la demanda, y como han debido probarlo, porque según aquella disposición el dolo no se presume sino en ciertos casos especialmente previstos por la ley, y antes bien, su apoderado confesó en su alegato de primera instancia que la operación dolosa no estaba sino en los libros de la Casa, al trasladar la cuenta de lo que Stern debía á la Compañía á la de ganancias y pérdidas, y no en el contrato aludido, en el cual Stern no había causado perjuicios á A. James & Compañía;

2.° Que la operación de contabilidad ordenada por Stern, de saldar por ganancias y pérdidas su cuenta personal y la de Salomón James, de que trata la demanda al asentar el 3.° de los hechos fundamentales de la acción deducida, no fué dolosa; pero que admitiendo que lo fuera, el dolo cometido en ella no ha podido servir para fundar demanda por causa de él contra acto distinto (el contrato de once de Octubre de mil ochocientos ochenta y nueve), pues la acción á que daba lugar no era la que se ha promovido sino la de rescisión de dicho contrato, á aparecer claramente que, sin ella, no se hubiera celebrado éste, según la disposición del artículo 1741 del Código Civil, referente á los artículos 1502, 1508 y 1515 del mismo, acción que no han ejercitado ni tenían derecho de ejercitar los demandantes, como ellos mismo lo han declarado expresamente, y que no obstante esto, la sentencia acusada se fundó en que fué dolosa aquella operación, por lo cual aquélla viola los artículos 1515 y 1741 del Código Civil y el 835 del Judicial;

3.° Que el Tribunal, al declarar que Stern es deudor de A. James & Compañía por la suma demandada, adoptó como regla de procedimiento la cuenta hecha en la demanda al formular el quinto de sus fundamento, con violación del artículo 651 del Código Judicial, conforme al cual "en toda causa cuyo esclarecimiento dependa de los principios de alguna ciencia ó arte en que haya que hacer apreciación ó avalúo, se nombrarán peritos," que fué lo que debió hacerse, caso de que Stern hubiera cometido dolo al celebrar el contrato de once de Octubre de mil ochocientos ochenta y nueve para estimar los perjuicios causados por él á A. James & Compañía;

4.° Que la Sociedad formada el cuatro de Enero de mil chocientos ochenta y tres, terminó el cuatro de Enero de mil ochocientos ochenta y cinco; que á contar desde la última fecha, existió entre los James y Stern una Sociedad de hecho, que fué liquidada el once de Octubre de mil ochocientos ochenta y nueve; que el contrato de esta fecha que constituyó esa liquidación, fué sustituído por el de veintiuno de Octubre de mil ochocientos noventa, y que habiéndose efectuado así una novación, conforme á los artículos 1687 y 1690 del Código Civil, la sentencia del Tribunal, que no lo reconoció así, es contraria á esas disposiciones legales;

5.° Que siendo válidos los contratos de once de Octubre de mil ochocientos ochenta y nueve y veintiuno de Octubre de mil ochocientos noventa, debe darse cumplimiento al segundo, que sustituyó al primero; pero que como la sentencia acusada los anula sin haberlo pedido los demandantes, ella es, por tal motivo, contraria al artículo 1602 del Código Civil.

Las precedentes objeciones, que el recurrente ha alegado como se ve, separadamente, considerándolas como causales distintas de casación, no constituyen, sin embargo, en la nomenclatura legal, sino una sola causal, que es la establecida en el inciso 1.°, artículo 369 de la Ley 105, ya citada, pues todas ellas se dirigen á sostener que la sentencia acusada es violatoria de algunas disposiciones legales, y en este concepto procede la Corte á su elucidación.

El Tribunal, en su sentencia, después de analizar las probanzas de que se han valido las partes, hizo un resumen de sus observaciones en los términos que se copian en seguida:

"El dolo á que se refiére el libelo de demanda está probado.

"La novación presentada como excepción perentoria por el demandado no ha sido probada.

"La Sociedad mercantil A. James & Compañía, de Colón, establecida en primero de Enero de mil ochocientos ochenta y tres, dejó de existir, según el contrato social, en primero de Enero de mil ochocientos ochenta y cinco."

La continuación de dicha Sociedad hasta mil ochocientos ochenta y nueve, sin haber otorgado escritura, sólo le daba el carácter entre los socios de contrato de comunidad, y

"La operación de hacer traspasar un socio su cuenta personal á la de ganancias y pérdidas, es una operación que no está autorizada en el Código de Comercio; pero en el caso actual es dolosa por las circunstancias que la acompañaron.

"Los puntos resueltos son los principales en que descansa el juicio, y habiéndose dado evasión á todas ellas, para llegar á las conclusiones legales,

"Se considera:

"1.° Probado el *dolo*, hay derecho para reclamar perjuicios por esa causa.

"2.° No habiéndose probado la *novación*, la excepción perentoria propuesta carece de valor.

"3.° Habiéndose declarado el carácter legal de la Sociedad de A. James & Compañía, de Colón, antes y después de Enero de mil ochocientos ochenta y cinco, si la primera Sociedad no se liquidó al terminar, la responsabilidad es de los socios; y no habiéndolo hecho, es suya la culpa, así como deben serlo las consecuencias."

A estas conclusiones del Tribunal, ó mejor dicho, á las consideraciones y conceptos sobre puntos de hecho ó derecho que adujo en su apoyo, se refieren las alegaciones del recurrente relacionadas anteriormente y que es ya tiempo de examinar.

El recurrente sostiene, en primer lugar, que los demandantes no solamente no han probado que Stern cometiera dolo en el contrato de once de Octubre de mil ochocientos ochenta y nueve, sino que han declarado lo contrario en forma categórica, por medio de su apoderado, quien confesó en el alegato de primera instancia que "la operación dolosa no estaba sino en los libros de la casa" y pidió que se condenase á Stern á pagar á sus poderdantes la cantidad demandada como valor de perjuicios que les ocasionó con la traslación á *Ganancias* y *Pérdidas* de lo que él debía á la Compañía, de lo cual deduce que la sentencia acusada es violatoria del artículo 1516 del Código Civil y del 837 del Judicial, cuyas disposiciones son: la del primero, que el dolo no se presume sino en los casos especialmente previstos por la ley, debiendo probarse en los demás, y la del segundo, que en toda sentencia que dicten los funcionarios del orden judicial, debe tenerse en cuenta que el objeto de los procedimientos judiciales, y de las consiguientes reglas que las leyes establecen para ellos, es el de que la sentencia sea conforme con la verdad de los hechos y conforme á la ley sustantiva en el derecho, debiendo, en consecuencia, dirigirse á esos fines, que son las de la jurisprudencia, toda interpretación y aplicación de las disposiciones legales relativas á esos procedimientos.

Esta objeción, como todas las que tienden á infirmar una sentencia por estimarse violatoria de leyes sustantivas, ó de doctrinas legales, en que consiste la primera de las causales de casación enumeradas en el artículo 369 de la Ley 105 de 1890, debe analizarse en conformidad al contexto de esta disposición cuyo inciso 1.° dice así en su segundo aparte:

"Es entendido que al ocuparse la Corte en el examen de la sentencia con motivo de esta causal, es sobre la base de que son verdaderos los hechos en que se apoya la sentencia, á menos que se alegue por el recurrente contra la apreciación de determinada prueba, y del expediente resulte que, en efecto se incurrió en error de derecho ó en error de hecho, siempre que este último se acredite de un modo evidente con documentos ó autos auténticos que obren en el proceso."

Ahora bien: en el fallo acusado, el Tribunal sentenciador da por sentado que la operación ordenada por Stern, en su calidad de socio administrador, de saldar su cuenta personal en los libros de la Compañía, por Ganancias y Pérdidas, fué dolosa en razón á que con ella quedó cancelada, sin motivo y gratuítamente, la deuda que gravaba á dicho socio, por lo que había tomado del fondo social para sus gastos particulares, con detrimento del haber de la Sociedad, y por consiguiente, del de sus consocios, y que habiéndose hecho la liquidación de la Sociedad en el contrato de once de Octubre de mil ochocientos ochenta y nueve, consignado en escritura pública de esa fecha, número 158, tomando por base los resultados ó saldos de las cuentas llevadas en aquellos libros, Stern debe responder de los perjuicios que por obrepción de su parte respecto de la cancelación de su deuda, se causaron en tal liquidación á los socios A. y S. James, perjuicios consistentes en la pérdida de las dos terceras partes que á ellos correspondían en el crédito anulado ó cancelado. Estos conceptos y la decición pronunciada por el Tribunal, de acuerdo con ellos, han sido impugnados en absoluto por el recurrente; pero como éste, al designar las causales de casación y establecer sus fundamentos y el objeto del recurso, circunscribió sus objeciones alegando únicamente contra la apreciación de una sola y determinada prueba,—que es la de confesión hecha por el apoderado de los demandantes en su alegato de primera instancia, corriente de fojas 35 á 99 del cuaderno principal,—defendiendo que esta confesión excluye, disipa y destruye por completo el cargo de dolo que se ha hecho á Stern y por el cual se le exige indemnización de perjuicios, á la Corte sólo le incumbe averiguar si efectivamente el Tribunal apreció erróneamente aquella prueba y deducir de ahí si es ó no fundado el recurso interpuesto por ese motivo, sin que para esto tenga que examinar el valor de los otros medios probatorios no determinados por el recurrente.

Esto sentado se observa que la prueba de que se trata no tiene el sentido que le asigna el apoderado de Stern, quien deduce la confesión favorable á su mandante de expresiones ó pasajes aislados de un alegato de su contrario, con prescindencia de los demás juicios en él emitidos, y sin tener en cuenta que tomando tal escrito en su conjunto y en relación con la deman-

da y otros antecedentes, el proceso á que allí se alude, como es natural y justo tomarlos, se ve claramente que en todos ellos la parte de los James ha aducido siempre el hecho de haber saldado Stern su cuenta personal por Ganancias y Pérdidas, como causa que los indujo á aceptar en el contrato de once de Octubre de mil ochocientos ochenta y nueve, celebrado con el objeto de liquidar la Compañía, un saldo menor que el verdadero á cargo de su citado consocio, que fué lo mismo que sostuvieron al intentar contra éste su acción de perjuicios, y por tanto, ni lógica ni gramaticalmente hay razón para dar una acepción contraria á las declaraciones hechas por el apoderado de los demandantes en ciertos pasajes de su alegato de primera instancia, siguiéndose de aquí que el Tribunal al entenderlas de ese modo, no incurrió en error de ninguna especie y que su fallo no es violatorio, en el concepto alegado por el recurrente, del artículo 1516 del Código Civil, ni del 837 del Judicial, en cuanto pueda tener el carácter de ley sustantiva, único caso en que la casación de la sentencia sería asequible por esa razón.

La segunda objeción que el recurrente opone á la sentencia es que ella viola los artículos 1515 y 1741 del Código Civil y el 835 del Judicial, y se funda en que la acción de rescisión que establece la última parte del artículo 1741 no tiene lugar, según el 1515, en su primera parte, sino cuando el dolo es obra de una de las partes, y cuando, además, aparece claramente que sin él no se hubiera contratado, lo cual no ocurre en el presente caso, pues A. James & Compañía han reconocido que no tenían derecho de ejecutar la acción establecida en la última parte del citado artículo 1741, referente á los artículos 1502, 1508 y 1515, visto que su apoderado se expresó en el susodicho alegato de primera instancia, de esta manera:

"El señor James no demandó la nulidad de ese contrato (el de once de Octubre de mil ochocientos ochenta y nueve), ni de ningún otro, porque el artículo 1515 del Código Civil establece que 'el dolo no vicia el consentimiento sino cuando es obra una de las partes, y cuando, además, aparece *claramente* que sin él no hubiera contrato'; y aunque se trata de un hecho ejecutado por el señor Stern, solamente éste, sin la operación de pasar á la cuenta de *Ganancias* y *Pérdidas* parte de su saldo deudor, habría contratado, ó por lo menos, no aparece claramente que no había contratado."

La Corte juzga que las precedentes observaciones son á todas luces improcedentes é infundadas, porque ni el presente pleito ha versado sobre rescisión del contrato que se cita ni de otro alguno, ni en la sentencia acusada se pronuncia tal rescisión, y por tanto, es obvio que ella no puede violar, en ningún concepto, las disposiciones legales á que se refiere el recurrente.

La tercera razón por que se impugnó el fallo en el examen es la de que para declarar que Stern es deudor de A. James & Compañía por la suma demandada, el Tribunal adoptó como regla ó procedimiento la cuenta que hicieron los demandantes en la demanda, con violación manifiesta del artículo 651 del Código Judicial, que dice así:

"En toda causa cuyo esclarecimiento dependa de los principios de alguna ciencia ó arte, ó en que haya que hacer apreciación ó avalúo se nombrarán peritos."

La Corte considera infundado é inaceptable este reparo, teniendo para desecharlo, dos razones decisivas, á saber:

Que el artículo 651, que cita el recurrente, en cuanto dispone que siempre que haya de hacerse en las causas civiles apreciación ó avalúo se nombren peritos, no es por su naturaleza ni por el Código Procedimental, en que se halla consignado, una ley sustantiva cuya trasgresión dé lugar á que se case una sentencia por la primera de las causales que establece el artículo 369 de la Ley 105 de 1890, y

Que la disposición del preindicado artículo 651 no era de rigorosa é indispensable aplicación en el caso de que se trata para el efecto de apreciar ó avaluar los perjuicios demandados, porque dada la obligación de indemnizarlos, libertando á los demandantes de las pérdidas que sufrieron al liquidar la Compañía que tuvieron con Stern, á causa de haber éste saldado por Ganancias y Pérdidas indebidamente y sin anuencia de sus consocios la cuenta personal del mismo Stern, de donde aparecía que él había tomado trece mil setecientos siete pesos ($ 13,707) del fondo social para sus gastos particulares, según la prueba de inspección practicada por el Juez de la primera instancia acompañado de peritos legalmente nombrados, en los libros de la Compañía en que se describió aquella operación, los cuales hacen plena fe entre las partes, conforme al Código de Comercio, y resultando de estas comprobaciones y de las escrituras públicas de asociación y de liquidación de la Compañía, según las cuales cada socio tenía derecho á recibir la tercera parte del haber social y soportar las pérdidas en igual proporción, que el menoscabo ó perjuicio causado á los James, era por inducción, lógica, clara é incontestable, igual necesariamente á las dos terceras partes del crédito contra Stern, saldado y anulado por orden de éste, ninguna duda cabe de que la intervención de peritos para fijar la cuantía de esa pérdida ó menoscabo, era innecesaria y de que, en consecuencia, al prescindir de ese medio de prueba respecto de un punto que se hallaba suficientemente esclarecido, no se contravino por el Tribunal de segunda instancia á la disposición legal aludida.

La parte recurrente alega en cuarto lugar que "la Sociedad de A. James & Compañía, formada el cuatro de Enero de mil ochocientos ochenta y tres, terminó el cuatro de Enero de mil ochocientos ochenta y cinco, que á contar desde la última fecha, existió entre los señores A. y S. James y Stern, una Sociedad de hecho que fué liquidada el once de Octubre de mil ochocientos ochenta y nueve; que el contrato de dicha fecha, que constituyó esa liquidación, fué sustituído por el de veintiuno de Octubre de mil ochocientos noventa, fojas 64 á 67, hecho que determinó una novación conforme á los artículos 1687 y 1690 del Código Civil, y que la sentencia de dos de Mayo (la del Tribunal) es contraria á esos artículos."

Al formular esta objeción supone el recurrente que hay en autos prueba fehaciente del contrato de veintiuno de Octubre de mil ochocientos noventa, que cita afirmando que sus estipulaciones sustituyeron las del que las mismas partes celebraron el once de Octubre de mil ochocientos ochenta y nueve, y en el cual, dicen los demandantes, que incidió el dolo origen de su reclamo contra Stern, y entiende que éste ha sido condenado en la sentencia acusada, por no haber el Tribunal acogido la excepción perentoria de novación opuesta por el demandado, apreciando erróneamente y desestimando el valor de aquella prueba; pero en nada de esto tiene razón, en primer lugar, porque la escritura de fojas 64 á 67 con que se ha tratado de acreditar la celebración del segundo de los aludidos contratos carece del requisito del registro, sin el cual no hace fe en juicio ni ante ninguna autoridad, empleado ó funcionario público, según precepto del artículo 2,673 del Código Civil, y en segundo lugar, porque dada la existencia de las nuevas obligaciones en los términos de esa escritura informal, y comparadas con las del contrato anterior, se ve que éstas no fueron modificadas por aquéllas sino en cuanto á las especies en que Stern debía recibir su parte en los bienes de la Sociedad, quedando subsistentes en cuanto á las bases de la liquidación y á la distribución de cuotas entre los socios, de tal modo que la cancelación de ellas no era exigible sino cuando el último contrato se cumpliera, todo lo cual demuestra que las partes no tuvieron ánimo de novar sus primeros compromisos, y que, por tanto, el Tribunal, al declararlo así, no violó los artículos del Código Civil que cita el recurrente.

Como última razón para impugnar la sentencia recurrida, dice la parte de Stern, que siendo válidos los contratos de once de Octubre de mil ochocientos ochenta y nueve y veintiuno de Octubre de mil ochocientos noventa, y debiendo darse cumplimiento al segundo que sustituyó al primero, dicho fallo, los declara, sin embargo, nulos, sin haberlo pedido los demandantes, por lo cual es contrario al artículo 1602 del Código Civil; pero la simple lectura de la sentencia acusada, cuya parte resolutiva se ha relacionado anteriormente desvanece por completo esta objeción y pone de manifiesto lo temerario é infundado de ésta, pues en esa decisión no se encuentra expresa ni tácitamente pronunciada la nulidad de esos contratos.

En fuerza de las precedentes consideraciones, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara infundado el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de segunda instancia proferida en este juicio por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Panamá, con fecha dos de Mayo de mil ochocientos noventa y dos, por las causas que ha alegado la parte de William E. Stern, que es la recurrente, y aprueba, en consecuencia, aquel fallo, condenando á dicha parte en las costas del recurso.

Notifíquese, publíquese y dejándose la copia prescrita por la ley, devuélvase el proceso al Tribunal de su procedencia. Publíquese también en la *Gaceta Judicial*.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Febrero once de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Por sentencia de fecha ocho de Noviembre del año próximo pasado, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, en las causas de responsabilidad acumuladas contra el ex-Juez del Circuito de Buenaventura, Apolinar Mutis, fué condenado éste á sufrir las penas de suspensión de su empleo y multas de ocho y cinco pesos, y apercibimiento por infracción del artículo 414 del Código Penal de Cundinamarca y de los artículos 565 y 540 del Código Penal vigente, más favorables que los artículos 427 y 404 del de Cundinamarca, aplicándosele también como subsidiaria la de diez pesos más de multa por no tener á la sazón el empleo lucrativo yá indicado, y condenándosele, además, al pago de las costas procesales y á la indemnización de daños y perjuicios.

Como no se interpuso apelación de dicha sentencia, el Tribunal sentenciador ordenó se consultase con esta Superioridad, á virtud de lo dispuesto en el artículo 1892 del Código Judicial, y dada á la causa la sustanciación propia de la instancia, se procede á dictar el fallo definitivo.

Los cargos hechos á Mutis, y por los cuales fué sometido á juicio en su carácter de Juez, son los siguientes:

1.° Abuso de autoridad, por haberse excedido en la reprensión hecha á su Secretario, empleando para ello términos injuriosos;

2.° Abuso de autoridad, consistente en haber impedido que se cumpliese una orden de arresto dada por el Alcalde de Buenaventura como pena correccional, y

3.° Violación de ley, por haber confirmado un auto del Juez municipal, dictado sin fundamento legal, y por el cual se había llamado á juicio á Ramón Miller, por maltratamiento de obra causado á Luis Góngora.

El primero de dichos cargos, que fué confirmado por la Corte en resolución de diez de Junio de mil ochocientos noventa y uno, se hizo consistir en que Mutis, al tener conocimiento de que su Secretario, Inocencio Murillo, había dejado de insertar el auto de desglose en un documento mandado entregar al interesado, reprendió con exceso á Murillo, diciéndole, entre otras cosas, "no sea usted bruto," y esto con gesto y movimientos que manifestaban la intención de ultrajar ó injuriar al subalterno.

El encausado trató de desvanecer el cargo probando que no tuvo intención de ofender á Murillo; pero los testigos que presenciaron el hecho, afirman que la manera como fueron dirigidas esas palabras, y las que agregó el Juez, diciendo á Murillo que desocupara la oficina, que no lo necesitaba, y esto, poniéndose de pie y golpeando la mesa; todo eso deja comprender que Mutis se propuso injuriar y ultrajar á Murillo, excediéndose así de la facultad de mandar, amonestar ó reprender, de que habla el artículo 414 del Código Penal de Cundinamarca, por infracción del cual ha sido condenado, aplicándosele la pena señalada en el 551 del Código vigente, por ser más favorable al encausado. Por lo expuesto, no encuentra la Corte que se haya logrado desvanecer el mencionado cargo.

El segundo cargo, que fué también confirmado por la Corte, en auto de treinta de Julio del año próximo pasado, consiste en que el Juez Mutis ejerció funciones que no le correspondían, impidiendo que se llevara á cabo el arresto ordenado por el Alcalde de Buenaventura, como pena correccional, contra dos individuos que reñían y cometían otros escándalos en la calle pública. Consta del sumario que Mutis dijo al Alcalde, que el arresto era ilegal, y que manifestó á uno de los individuos que iban á ser arrestados, que podía retirarse á su casa, lo que así verificó éste, quedando sin efecto la providencia del Alcalde.

Ha tratado de destruírse este cargo, alegando que el individuo á quien Mutis dijo que podía retirarse, era empleado público, y que el Alcalde no podía arrestarlo sin previa suspensión del empleo. Yá la Corte había dicho que, "sea como fuere la intervención del Juez en el sentido de impedir el cumplimiento de la providencia de la autoridad política, fué indebida desde que tal providencia no estaba subordinada á la jurisdicción del Juez en el ejercicio de sus funciones." Por consiguiente, no hay fundamento legal para revocar la sentencia en cuanto á este cargo, y es correcta la aplicación que se ha hecho del artículo 565 del Código Penal que hoy rige, más favorable que el 427 del de Cundinamarca.

Respecto del cargo de violación de ley expresa, que es el tercero de los mencionados y que la Corte confirmó también en la providencia de treinta de Julio, yá citada, consistente en haberse confirmado por el Juez Mutis el auto de proceder dictado por el Juez municipal contra Ramón Miller por maltratamientos de obra, el señor Procurador general de la Nación pide la revocación de la sentencia en lo relativo á este cargo. Alega para ello que el auto del Juez municipal, si bien no pudo fundarse en el reconocimiento de los peritos que no encontraron huellas ni señales del maltratamiento, para estimar comprobado el cuerpo del delito, pudo muy bien fundarse, como se fundó, en las declaraciones de los testigos que vieron ejecutar el hecho criminoso, pues que la prueba pericial sirve por lo general para establecer los efectos del acto punible, y no para determinar si ha habido ó no delito; que tales peritos no pudieron encontrar rastro ó señales del maltratamiento, porque el reconocimiento se practicó muchos días después de que el hecho tuvo lugar, y que el Juez Mutis, para determinar si se cometió ó no el delito de maltratamiento, pudo muy bien limitar su examen á la prueba testimonial que figuraba en los autos, en los cuales se hallaban declaraciones de testigos que presenciaron la riña de Miller con Góngora y los estropeos de que éste fué víctima.

Aunque la Corte confirmó el sometimiento á juicio, dictado contra Mutis por el cargo que se viene examinando, ella no ha querido sostener que no hay otro medio de probar la existencia del cuerpo del delito que el del examen que se haga por facultativos ó peritos de las huellas, rastros ó señales que haya dejado el hecho, pues tal doctrina sería contraria á la disposición del artículo 1513 del Código Judicial, que permite esa comprobación por otros medios. En el caso de que se trata hay la grave circunstancia de que la riña que debió dar lugar al maltratamiento tuvo lugar á principios de Agosto de 1890 y el reconocimiento pericial se practicó el once de Septiembre siguiente; y como, según los testigos que presenciaron la riña, Miguel Muñoz y Clímaco Ibarra, Ramón Miller cogió á Luis Góngora y lo encorvó debajo de la banca de un billar, en cuya actitud le iba á dar patadas, cosa que impidieron los declarantes, se ve claro que el ultraje ó maltratamiento no pudo dejar rastro ó señales tan persistentes que fueran todavía visibles al cabo de un mes. Por eso dijeron los peritos que no le habían encontrado á Góngora maltrato alguno. Pero la Corte no puede apoyarse en esa exposición pericial para establecer que no existió el ultraje ó maltratamiento de obra, acreditado por otro lado con las declaraciones de Muñoz é Ibarra. Para ella es claro también que pueden existir ultrajes ó maltratamientos de obra, que no dejan rastro ni señal alguna. El Juez acusado ha alegado con razón que el Juez municipal hizo bien en proceder de oficio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo único de la Ley 132 de 1888 y con el acuerdo de la Corte número 472, de catorce de Octubre de 1888, y que al confirmar el auto de enjuicia-

miento dictado contra Miller por el referido Juez municipal, no violó ley alguna expresa. Persuadida ahora la Corte de que esto es así, no encuentra motivo legal para condenar al Juez Mutis por este cargo.

En consecuencia de lo que se deja expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la sentencia apelada en cuanto á la condenación hecha al Juez acusado por los dos primeros cargos de que se habló al principio, y la revoca respecto del cargo de violación de ley expresa que quedó enumerado como tercero, del cual se le absuelve.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Baltasar Botero Uribe.—Jesús Casas Rojas.—Federico Patiño.—Juan Evangelista Trujillo.—Lucas Villafrádez.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, seis de Febrero de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: En una ejecución entablada en el Juzgado 2.° del Circuito de Bogotá por Guillermo Ponce contra Vicente Berrío, por una suma de pesos, el ejecutante denunció para el pago una casa baja de tapia y teja, situada en esta ciudad, en el barrio de Las Nieves, en la antigua Carrera de Venezuela, que linda: por el Norte y Oriente, con casa del Presbítero doctor Juan Nepomuceno Vargas; por el Sur, con casa de Antonio González, y por el Occidente, calle de por medio, con casas de Tomás Suárez y Juan Obregón ó Benilda Pérez. Embargada y depositada la casa, Narciso Reyes introdujo una tercería excluyente, apoyado en una escritura pública de compra, otorgada en esta ciudad en el año de 1863.

Adelantada la tercería por todos sus trámites, el Juez declaró, en sentencia definitiva de primera instancia y aplicando disposiciones del Código Civil de Cundinamarca, que no había comprobado el tercerista el dominio que tuviera sobre la casa, y el Tribunal, á su turno, hizo igual declaración, fundándose en la legislación española, que dijo era la única aplicable, y no la cundinamarquesa.

Interpuesto recurso de casación contra el fallo del Tribunal, en esta Superioridad se le ha dado al negocio la tramitación señalada en los artículos 376 á 380 de la Ley 105 de 1890; de modo que es tiempo de averiguar, en cumplimiento del artículo 381 de dicha ley, si el recurso se ha interpuesto oportunamente y por persona hábil, y si la sentencia es de aquellas contra las cuales pueda interponerse recurso de casación.

Examinado el expediente, se ha encontrado que el recurso fué interpuesto oportunamente y por persona hábil, pero que la sentencia no reúne la primera condición ó requisito exigido por el artículo 366 de la ley antes mencionada; esto es, que se funde en leyes que rijan ó hayan regido en toda la República, á partir de la vigencia de la Ley 57 de 1887; porque la legislación aplicada por el Tribunal en su sentencia es la española, que no ha regido en el país después de la Ley 57 de 1887, ni es idéntica en esencia á las leyes nacionales que están hoy en vigor sobre el punto de que se trata.

En efecto: la legislación española rigió en Bogotá después del año de 1860, desde el 23 de Julio de 1861, fecha del Decreto sobre creación del Distrito Federal, hasta el 11 de Mayo de 1864, en que fué incorporado el territorio de esta *ciudad al Estado de Cundinamarca*; y como la compra de la casa por Narciso Reyes tuvo lugar en 1863, el Tribunal obró con acierto al aplicar en su fallo la legislación española, por estar vigente al tiempo de celebrarse el contrato. Y aun admitiendo que dicha legislación hiciera parte de la de los extinguidos Estados, todavía no se podría sostener que la sentencia reunía la primera condición exigida por el mencionado artículo 366; porque las leyes españolas y las granadinas no conocían *el registro* como medio ó requisito esencial para verificar la tradición de los bienes raíces, sino como un medio de publicidad y validez de ciertos instrumentos. (Ley 3.ª, título 15, libro 5.° de la Recopilación de Castilla y Ley 6.ª, parte 4.ª, tratado 5.° de la Recopilación Granadina).

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que es inadmisible el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 7 de Marzo de 1892.

Publíquese, notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Baltasar Botero Uribe.—Jesús Casas Rojas.—Federico Patiño.—Juan Evangelista Trujillo.—Lucas Villafrádez.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Febrero siete de de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: En el concurso que se formó á los bienes de José María Salgado, éste hizo figurar como parte de su activo la cuarta parte del terreno denominado "El-Tunal," que fué al efecto embargado y depositado como bienes del concurso.

Al mismo tiempo cursaba en el Juzgado 3.° del Circuito de Bogotá, el juicio ejecutivo que Senén del Castillo estableció contra Anacleto Díaz y sus hermanos, dueños de las otras tres cuartas partes del mismo terreno, y por virtud de pertenecer á Salgado la dicha cuarta parte, se pidió y se obtuvo la acumulación del juicio ejecutivo al de concurso del mismo Salgado del cual conocía en primera instancia el Tribunal de Cundinamarca.

Adelantado el juicio de concurso y formado uno especial á la expresada cuarta parte perteneciente al concursado, se hizo el remate de ella, con lo cual cesó el embargo de esa cuota y quedó subsistente el de las otras tres cuartas partes á virtud de la acumulación.

El representante de Castillo solicitó últimamente de dicho Tribunal que se rematasen también las expresadas tres cuartas partes de "El-Tunal," y así se ordenó por auto de trece de Octubre último, auto que fué revocado por el mismo Tribunal, á petición de parte legítima por providencia de fecha veintisiete del mismo Octubre, siendo esta última providencia la que va á revisar la Corte por haberse interpuesto contra ella recurso de apelación.

El Tribunal dijo con razón en la providencia apelada que no hay motivo legal que justifique el remate de bienes que no pertenecen al concurso, supuesto que con el producto de ese remate no podrían cubrirse créditos pasivos del concursado. Esto prueba que la acumulación del juicio ejecutivo al de concurso no pudo tener otro objeto que el de hacer que formara parte de la masa de bienes del concursado la cuarta parte del terreno denunciada y embargada como propiedad de éste; de manera que en la sentencia de graduación que se dicte por el Tribunal no puede ni debe figurar en la porción de bienes sujeta á esa graduación, otra cuota parte del terreno de "El-Tunal," que la cuarta que ha sido yá rematada. Sería completamente indebido é ilegal que fueran á rematarse en el juicio de concurso las tres cuartas partes del mismo terreno que no han formado ni podían formar parte de la masa de bienes del concursado.

La jurisdicción del Tribunal por el hecho de la acumulación no ha podido extenderse á un juicio ejecutivo en que los ejecutados y los bienes perseguidos por el ejecutante son distintos del concursado y de los bienes que á éste pertenecen; ese juicio ha debido seguir su curso natural á fin de que los ejecutados pudieran hacer valer sus derechos conforme á lo dispuesto en los artículos 127 y 128 de la Ley 105 de 1890, derechos de que quedarían privados si ese juicio pudiera ser decidido en la sentencia del concurso; la acumulación no podía referirse á ese juicio; conforme á los artículos 786 del Código Judicial y 88 de la Ley 105 que acaba de citarse.

Por tanto, la Corte, Suprema administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto apelado, sin costas.

Notifíquese, cópiese y devuélvanse los autos.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Baltasar Botero Uribe.—Jesús Casas Rojas.—Federico Patiño.—Juan Evangelista Trujillo.—Lucas Villafrádez.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

REPÚBLICA DE COLOMBIA.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AÑO VIII } Bogotá, 24 de Abril de 1893. { NÚM. 384.

CONTENIDO.

Págs.

Cuadros que representan el movimiento de negocios en la Corte Suprema de Justicia durante el mes de Febrero del presente año.... 161
Relación que especifica los negocios despachados en dicho mes..... 162
Cambio de personal..... 163

PENA CAPITAL.

La que confirma el fallo por el cual el Tribunal Superior de Tunja condenó á Santiago Jiménez á la pena de muerte, por el delito de asesinato perpetrado en la persona de Valentín Guío. (Magistrado ponente, doctor Trujillo)..... 163

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

La que concede á Carmen Paredes de Báez una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas)..... 164
La que concede á Ana María Quintana una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Trujillo)..... 165
La que niega á Juan Malaver una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Trujillo)..... 165
La que concede á María de Jesús Arias una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Trujillo)..... 165
La que confirma la resolución que el Ministerio del Tesoro dictó en la reclamación de Benjamín Novoa Zerda, como endosatario de Ramón F. de León y Rafael Mesa Guarín, por suministros. (Magistrado ponente, doctor Villafrádez)..... 165
La que concede á Cornelia Ortiz una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Botero Uribe)..... 166

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

El que niega la revocación del fallo dictado por la Corte, con fecha 13 de Diciembre último, en el juicio seguido por Cándido Jara contra los herederos de Cipriana Parada, para que se declarara al primero padre legítimo de Gabriel Jara. (Magistrado ponente, doctor Botero Uribe)..... 166
El que declara ejecutoriado el fallo de excepciones dictado por el Tribunal Superior de Tunja en el juicio seguido por el Juez ejecutor del Departamento de Boyacá contra Nepomuceno Arias y su fiador solidario Rafael Alonso T. (Magistrado ponente, doctor Botero Uribe)..... 167
El que revoca el auto dictado por el Tribunal Superior de Panamá, con fecha cuatro de Noviembre último, en el juicio seguido por Rafael Aizpuru contra el Gobierno de aquel Departamento, por pesos. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas)..... 167
El que revoca el auto ejecutivo dictado por el Administrador municipal de Hacienda nacional de Riosucio contra Rafael Jenaro Bueno. (Magistrado ponente, doctor Pombo)..... 167

NEGOCIOS CRIMINALES.

El que confirma un auto pronunciado por el Tribunal Superior de Popayán en el juicio seguido contra Joaquín Navia Arzayús, Juez del Circuito de aquella denominación, por varios cargos. (Magistrado ponente, doctor Botero Uribe)..... 168
El que confirma el auto de sobreseimiento dictado por el Tribunal Superior de Cundinamarca, en la causa seguida contra Jesús Guerrero García, Juez 2.º suplente del Circuito de Oriente, por prevaricato. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas)..... 168

CUADRO QUE REPRESENTA EL MOVIMIENTO DE NEGOCIOS EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 1893.

	SENTENCIAS.						AUTOS.																	
	CASACIÓN.		CIVILES DE 2.ª INSTANCIA.														NEGOCIOS DE UNA SOLA INSTANCIA.							
	Civiles.	Pena capital.	Negocios varios.	Suministros etc.	Criminales de 2.ª instancia.	Civiles.	Criminales.	Procesos militares.	Competencias.	Recursos de hecho.	Recursos de revisión.	Negocios varios.	Civiles.	Criminales.	Suspensión de Ordenanzas.	Recompensas.	TOTALES.
Pendientes en 31 de Enero de 1893	28	5	11	159	2	16	2	2	1	2	2	2	2	18	3	570	825
Repartidos en el mes	3	1	2	32	2	1	2	2	...	...	...	1	...	1	2	12	61
Totales	31	6	13	191	4	17	4	4	1	2	2	3	2	19	5	582	886
Despachados en el mes	9	3	3	13	2	10	3	1	1	1	...	1	...	...	1	28	76
Pendientes en 28 de Febrero	22	3	10	178	2	7	1	3	...	1	2	2	2	19	4	554	810

ACADEMIA DE COLOMBIA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA DE HISTORIA PATRIA

CUADRO QUE REPRESENTA EL NÚMERO DE PROYECTOS PRESENTADOS POR CADA UNO DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SOBRE LOS NEGOCIOS CUYO DESPACHO SE RELACIONA EN EL CUADRO ANTERIOR (FEBRERO).

	SENTENCIAS.					AUTOS.							NEGOCIOS DE UNA SOLA INSTANCIA.				
	CASACIÓN.		CIVILES DE 2.ª INSTANCIA.														
	Civiles.	Pena capital.	Negocios varios.	Suministros etc.	Criminales de 2.ª instancia.	Civiles.	Criminales.	Procesos militares.	Competencias.	Recursos de hecho.	Recursos de revisión.	Negocios varios.	Civiles.	Criminales.	Suspensión de Ordenanzas.	Recompensas.	TOTALES.
Doctor Pombo	2	1	...	3	1	2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	4	13
Doctor Isaza	3	...	1	4	1	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1	11
Doctor Botero Uribe	...	1	1	1	...	1	2	...	...	...	...	...	...	...	...	4	10
Doctor Casas Rojas	...	...	...	2	...	1	1	1	...	...	...	...	...	...	...	7	12
Doctor Corrales (del 13 al 28)	1	...	...	...	...	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1	3
Doctor Patiño (del 1.° al 12)	...	...	...	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1	2
Doctor Trujillo	1	1	1	1	...	2	...	...	1	1	...	1	...	...	...	5	14
Doctor Villafrádez	2	...	...	1	...	2	...	...	...	...	...	...	...	...	1	5	11
Totales	9	3	3	13	2	10	3	1	1	1	...	1	...	...	1	28	76

RELACION

DE LOS NEGOCIOS DESPACHADOS EN EL PRESENTE MES DE FEBRERO DE 1893.

Señor Magistrado doctor Pombo.

1.—Febrero 4.—Casación civil.—Juicio seguido por Francisso Plata contra Julián Orejarena, sobre rescisión de un contrato.

2.—Febrero 8.—Casación civil.—Mariano Herrán y otros contra Benjamín Rodríguez y otros, sobre exclusión de un terreno de unos inventarios.

3.—Febrero 25.—Pena capital.—Juicio seguido contra Mariana Sánchez, por el delito de parricidio.

4.—Febrero 13.—Suministros.—Reclamación de Ricardo Gutiérrez.

5.—Febrero 21.—Suministros.—Reclamación de Germán Piñeres.

6.—Febrero 25.—Suministros.—Reclamación de Manuel Paz.

7.—Febrero 11.—Sentencia criminal.—Juicio seguido contra Apolinar Mutis, por varios cargos.

8.—Febrero 7.—Auto civil.—Juicio de concurso de acreedores formado á los bienes de José María Salgado.

9.—Febrero 24.—Auto civil.—Juicio ejecutivo seguido contra Rafael Jenaro Bueno, por pesos de una multa.

10.—Febrero 13.—Recompensa.—Solicitud de Clotilde Vargas, como hija de un militar de la Independencia.

11.—Febrero. 13—Recompensa.—Solicitud de Isabel Medina, por haber muerto su esposo en la guerra de 1860.

12.—Febrero 14.—Recompensa.—Sulicitud de María Luisa Noguera, por haber muerto su esposo en la guerra de 1876.

13.—Febrero 16.—Recompensa.—Solicitud de Carmen Arcos, por haber muerto su esposo en la última guerra.

Señor Magistrado doctor Isaza.

1.—Febrero 24.—Casación civil.—Juicio de concurso de acreedores formado á los bienes de Jacinto Velásquez.

2.—Febrero 24.—Casación civil.—Juicio seguido por la Compañía minera de Colombia contra la Campañía minera de Santander, sobre oposición á la adjudicación de una mina.

3.—Febrero 28.—Casación civil.—Juicio seguido por Francisco de P. Mateus contra Numa P. Noguera, sobre nulidad de un testamento.

4.—Febrero 8.—Sentencia civil varia.—Juicio seguido por el Fiscal del Tribunal Superior de Cundinamarca contra Luis Antonio Quijano, sobre rescisión de un contrato.

5.—Febrero 13.—Suministros.—Reclamación de Ruperto García.

6.—Febrero 14.—Suministros.—Reclamación de Juan Fernando Ricaurte y otro.

7.—Febrero 27.—Suministros.—Reclamación de Nepomuceno Parra.

8.—Febrero 28.—Suministros.—Reclamación de Evangelista Yantén.

9.—Febero 13.—Sentencia criminal.—Juicio seguido contra Jesús María Zorrilla, por infracción del artículo 379 del Código Penal.

10.—Febrero 14.—Auto civil.—Juicio ejecutivo seguido por el Agente Fiscal del Distrito capital de Panamá contra Eduardo de Diego, por pesos.

11.—Febrero 3.—Recompensa.—Solicitud de Rosaura Palanco, por muerte de su padre en la guerra de 1860.

Señor Magistrado doctor Botero Uribe.

1.—Febrero 7.—Pena capital.—Juicio seguido contra Manuel Dolores Larrahondo, por delito de asesinato.

2.—Febrero 18.—Sentencia civil varia.—Juicio seguido por el Administrador general de Hacienda de Boyacá contra Juan N. Arias, por pesos.

3.—Febrero 10.—Suministros.—Reclamación de José Antonio Ibarra.

4.—Febrero 22.—Auto civil.—Juicio seguido por el Agente Fiscal del Distrito capital de la Provincia de Panamá contra Francisco Machuca, por pesos.

5.—Febrero 21.—Auto criminal.—Juicio seguido contra Juaquín Navia Arzayús, por falsificación y estafa.

6.—Febrero 27.—Auto criminal.—Juicio seguido contra Junio Solano, por abuso de autoridad.

7.—Febrero 1.°—Recompensa.—Solicitud de Clara Hernández Chicaíza, por muerte de su padre en la guerra de 1860.

8.—Febrero 25.—Recompensa.—Solicitud de Cornelia Ortiz, por haber muerto su padre en la guerra de 1876.

9.—Febrero 28.—Recompensa.—Solicitud de Juan de Dios Muñoz, como inválido de la guerra de 1885.

10.—Febrero 25.—Recompensa.—Solicitud de Anselmo Torres, como invalidado en la guerra de 1860.

Señor Magistrado doctor Casas Rojas.

1.—Febrero 24.—Auto civil.—Juicio seguido por Rafael Aizpuru contrá el Departamento de Panamá, por pesos.

2.—Febrero 24.—Auto criminal.—Juicio seguido contra Jesús Guerrero García, por haber conocido indebidamente de un asunto.

3.—Febrero 28.—Proceso militar.—Juicio seguido contra Santos Alvarez, como responsable de la fuga de unos presos.

4.—Febrero 8.—Suministros.—Reclamación de Félix Rincón y otros.

5.—Febrero 25.—Suministros.—Reclamación de César Santander.

6.—Febrero 3.—Recompensa.—Solicitud de Isidora Susatama, por muerte de su esposo en la guerra de 1885.

7.—Febrero 4.—Recompensa.—Solicitud de Juan Antonio Arboleda, como militar de la Independencia.

8.—Febrero 7.—Recompensa.—Solicitud de Lucio Hurtado, como inválido de la guerra de 1876.

9.—Febrero 8.—Recompensa.—Solicitud de Polo Velasco y Rosalía Verdugo, por muerte de su esposo y padre, respectivamente, en la guerra de 1876.

10.—Febrero 16.—Recompensa.—Solicitud de Evangelista Avendaño, por antigüedad de servicios militares.

11.—Febrero 17.—Recompensa.—Solicitud de Carmen Paredes de Báez, por muerte de un hijo en la guerra de 1876.

12.—Febrero 27.—Recompensa.—Solicitud de Petrona Mateo, por muerte de su esposo en la guerra de 1885.

Señor Magistrado doctor Corrales.

1.—Febrero 28.—Casación civil.—Juicio seguido por Medardo Ribas contra Enrique y Angel María Zalamea, por pesos.

2.—Febrero 28.—Auto civil.—Juicio ejecutivo seguido por el Administrador de Hacienda nacional del Circuito de Antioquia contra Joaquín Mariano Escobar, por pesos de una multa.

3.—Febrero 17.—Recompensa.—Solicitud de Manuel Muñoz, como inválido de la guerra de 1876.

Señor Magistrado doctor Patiño.

1.—Febrero 9.—Suministros.—Reclamación de Leonardo Manrique.

2.—Febrero 4.—Recompensa.—Solicitud de Gricelda y Rosalía Sánchez, por muerte de un hermano en la guerra de 1876.

Señor Magistrado doctor Trujillo.

1.—Febrero 6.—Casación civil.—Juicio seguido por Guillermo Ponce contra Vicente Berrío, por pesos.

2.—Febrero 24.—Pena capital.—Juicio seguido contra Santiago Jiménez, por el delito de asesinato.

3.—Febrero 4.—Sentencia civil varia.—Juicio seguido por Adolfo P. Simmonds, contra la Nación, por pesos.

4.—Febrero 28.—Suministros.—Reclamación de Eustaquio Cogollos.

5.—Febrero 23.—Auto civil.—Juicio seguido por la Oficina general de Cuentas contra Remigio Martínez y José Antonio Ribas, sobre cuentas.

6.—Febrero 22.—Auto civil.—Juicio seguido por el Administrador municipal de Hacienda de Buriticá, contra Marco A. Arenas, por pesos.

7.—Febrero 8.—Competencia.—La suscitada entre el Juez municipal de Honda y el Comandante del medio Batallón *Córdoba* número 18, para conocer del sumario instruído contra el Teniente N. Castillo, por insubordinación.

8.—Febrero 1.°—Recurso de hecho.—El interpuesto por Vicente Salcedo M., contra una sentencia del Tribunal de Pasto, dictada en el juicio seguido por Francisco Benítez y Edmundo Jarvis, sobre desembargo de una partida de sal.

9.—Febrero 10.—Negocio vario.—Denuncio dado por el Fiscal del Circuito de Toro, contra Miguel Piedrahita Casas, por mala conducta.

10.—Febrero 6.—Recompensa.—Solicitud de Juan Cañadas, como inválido de la última guerra.

11.—Febrero 11.—Recompensa.—Solicitud de Salvador Larrotta, por antigüedad de servicios militares.

12.—Febrero 17.—Recompensa.—Solicitud de Juan Malaver, como inválido de la guerra de 1854.

13.—Febrero 17.—Recompensa.—Solicitud de Ana María Quintana, por muerte de un hijo en la guerra de 1876.

14.—Febrero 23.—Recompensa.—Solicitud de María de Jesús de Arias, como hija de un militar de la Independencia.

Señor Magistrado doctor Villafrádez.

1.—Febrero 18.—Casación civil.—Juicio seguido por A. James & Compañía, contra William E. Stern, por pesos.

2.—Febrero 23.—Casación civil.—Juicio seguido por Alejandro Rodríguez F., contra Leonidas Posada Gaviria, por pesos.

3.—Febrero 25.—Suministros.—Reclamación de Ramón F. de León y Rafael Mesa G.

4.—Febrero 24.—Auto civil.—Juicio seguido por el Administrador municipal de Hacienda de Riosucio, contra Ramón Hoyos y otros, por pesos.

5.—Febrero 28.—Auto civil.—Juicio seguido por el Administrador de la Aduana de Barranquilla, contra López Olier & Compañía, por pesos.

6.—Febrero 24.—Suspensión de Ordenanza.—La número 33 de 1892 del Cauca.

7.—Febrero 4.—Recompensa.—Solicitud de Norberto Plaza, como inválido de la guerra de 1885.

8.—Febrero 10.—Recompensa.—Solicitud de María Ignacia Díaz, por muerte de su esposo en la guerra de 1876.

9.—Febrero 10.—Recompensa.—Solicitud de los deudos de Nicolás G. Rentería, por muerte de éste en la guerra de 1876.

10.—Febrero 28.—Recompensa.—Solicitud de Petrona Ramírez de Ramírez, como viuda de un militar de la Independencia.

11.—Febrero 28.—Recompensa.—Solicitud de Pedro Pérez y Pascuala Meneses, por muerte de un hijo en la guerra de 1876.

CAMBIO DE PERSONAL.

El día 13 del presente mes (Febrero de 1893) volvió el señor Magistrado doctor Corrales á ocupar su mesa, y se retiró de la Corte el señor doctor Patiño.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

PENA CAPITAL.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veinticuatro de Febrero de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: En la cabecera del Distrito municipal de Toca (Departamento de Boyacá), en las primeras horas de la noche del trece de Enero de mil ochocientos noventa y dos, Santiago Jiménez é Ignacio Camargo hirieron gravemente á Valentín Guío y Mariano Molano, de tal modo que el primero de éstos murió en la madrugada del día siguiente, y el último duró incapacitado por más de sesenta días para trabajar como antes.

Perfeccionado el sumario, el Juez Superior del Distrito Judicial de Tunja llamó á juicio criminal á Jiménez y Camargo por los delitos de homicidio y heridas.

Adelantada la causa solamente contra Jiménez, por no haberse podido notificar el auto de proceder á Camargo, el Jurado, reunido al efecto, declaró que aquél era autor principal del delito de asesinato cometido en la persona de Guío, con las circunstancias expresadas en los ordinales 2.° y 3.° del artículo 586 del Código Penal, y cómplice del delito de heridas cometido en Mariano Molano, y que está definido en el artículo 646.

El Juez Superior, apoyado en este veredicto, dictó sentencia el dos de Julio siguiente, cuya parte resolutiva está concebida así:

"Por todo lo expuesto, este Juzgado de acuerdo con el veredicto del Jurado de calificación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, condena á Santiago Jiménez—autor principal del delito de homicidio en la persona de Valentín Guío, castigado por el artículo 598 del Código Penal—y cómplice del delito de heridas en la persona de Mariano Molano, castigado por el artículo 640 del mismo Código Penal y calificado en segundo grado, á sufrir la pena de muerte que se ejecutará pasándolo por las armas en la plazuela pública de la Penitenciaría de esta ciudad, debiendo ser conducido al suplicio, vestido de ropa negra y acompañado del ministro ó ministros religiosos

que quieran ejercer esta obra de misericordia, del subalterno de justicia que presida la ejecución, y de la escolta correspondiente: al sacarlo de la cárcel se publicarán los pregones ordenados en el artículo 51 del Código Penal y se le dará cumplimiento á lo ordenado en el artículo 52 del mismo Código Penal. Esta pena no podrá ser ejecutada en domingo, ni en día de fiesta, ni en los de la Semana Santa, por prohibirlo expresamente el artículo 47 del Código Penal. Se condena, además, á Santiago Jiménez al pago de las costas procesales y al de cien pesos á la familia de Valentín Guío y á la suma de cincuenta pesos á Mariano Molano; y si la pena de muerte le fuere conmutada, se le condena á cuatro años de presidio por el delito de heridas, en la persona de Mariano Molano por que lo declaró el Jurado cómplice, y de esta pena se le descontará el tiempo que permanezca en la cárcel, contado desde el veintiséis de Febrero próximo pasado hasta el día en que éntre al correspondiente establecimiento de castigo donde deba purgar dicha pena y que será el mismo que señale el Poder Ejecutivo nacional."

De este fallo apelaron el reo y su defensor, y recibido el proceso en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, se alegó la injusticia notoria del veredicto del Jurado y de la sentencia de primera instancia; pero el Magistrado sustanciador, en auto de treinta de Agosto, que fué confirmado por la respectiva Sala, declaró que no existía dicha injusticia notoria, y el Tribunal confirmó el veintidós de Octubre último la sentencia apelada.

Tanto el reo como el defensor interpusieron recurso de casación contra este último fallo para ante esta Superioridad, en donde se le ha dado al negocio la tramitación debida hasta llevarlo al estado en que se dicte la sentencia que le ha de poner término.

El defensor del procesado ha alegado las dos primeras causales de casación que señala el artículo 370 de la Ley 105 de 1890; esto es, que la sentencia del Tribunal es violatoria de ley sustantiva, y que el veredicto del Jurado es notoriamente injusto.

La primera causal la funda el defensor en que en el expediente no existe la prueba de que la muerte de Valentín Guío constituya un homicidio premeditado que reúna las condiciones que indica el artículo 586 del Código Penal, en sus ordinales 2.° y 3.°, y en que Santiago Jiménez sea el autor principal de ese delito, cuando más bien parece haberlo sido su compañero Ignacio Camargo.

Estos hechos, aun en el supuesto de que fueran exactos, no servirían de fundamento para la primera causal; porque justamente el artículo 370 de la Ley 105 de 1890 dice que la Corte, al ocuparse en esta causal, debe tener en consideración el veredicto del Jurado, pues en consonancia con él debe hallarse la parte resolutiva de la sentencia; y como el Jurado declaró que se había cometido el delito de homicidio premeditado con las circunstancias de los ordinales 2.° y 3.° del artículo 586 del Código Penal, y que Jiménez era el autor principal, el Juez Superior y el Tribunal no pudieron hacer otra cosa que condenar á muerte á Jiménez, de acuerdo con el artículo 598 del mismo Código. Para que la sentencia fuera violatoria de ley sustantiva habría sido preciso que se hubiera demostrado que el Código Penal castigaba con pena diferente de la de muerte al autor principal del homicidio premeditado que reúna alguna de las condiciones contenidas en los ocho primeros números del artículo 586, cosa imposible de hacer.

La segunda causal, esto es, que el veredicto del Jurado es notoriamente injusto, tampoco existe en este juicio; pues no bastaría acreditar que el veredicto era injusto sino que sería preciso demostrar que esa injusticia era notoria, es decir, que en el expediente había pruebas completas de que *Valentín Guío no había muerto* violentamente, ó que Santiago Jiménez no había tenido intervención en las heridas y maltratamientos que le ocasionaron la muerte á aquél.

Pero si se examina el expediente con ánimo desprevenido no se encuentra dato ni aun para calificar de injusto el veredicto, mucho menos de que adolezca de injusticia notoria; porque en los autos se hallan dos reconocimientos periciales del cadáver de Guío en que consta que su muerte fué fruto de las heridas y golpes que recibió; que Jiménez confesó en su declaración indagatoria que él é Ignacio Camargo habían sido los autores de esos golpes y heridas; que aunque hoy existe la presunción legal de que todo homicidio es premeditado, aparece que Jiménez y Camargo estuvieron hablando antes de cometer su delito, puesto que aquél declaró que Camargo lo invitó para que fueran á atacar á Guío, y que él rechazó la propuesta, de palabra solamente, una vez que concurrió al ataque; que Jiménez y Camargo cayeron sobre Guío y Molano, de sorpresa, estando éstos desprevenidos é indefensos; que Camargo no tenía cuentas pendientes con Guío, y Jiménez sí; que los testigos presenciales sólo vieron que Jiménez atacara á Guío, y que éste pocos días antes había sido víctima de otra agresión semejante de parte de Jiménez, por haberle llevado al coso unos animales que le estaban haciendo daño.

No siendo, pues, injusta la sentencia en la parte en que se impone la pena de muerte, que es á lo único que se puede referir el recurso de casación, y no á las demas penas que se le hayan impuesto al reo, y no habiéndose incurrido en la sustanciación del juicio en ninguna de las causales designadas en los ordinales 1.°, 3.°, 4.°, 5.°, 6.° y 7.° del artículo 264 de la Ley 57 de 1887, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el concepto del señor Procurador, confirma dicha sentencia, en lo que ha sido materia del recurso.

Publíquese, notifíquese, cópiese, y remítase el expediente al Ministerio de Justicia.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Febrero diez y siete de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Carmen Paredes de Báez y Natalia, Paulina, Mercedes y Filomena Báez, madre la primera y hermanas las cuatro últimas de José María Estanislao Báez P., piden recompensa militar á causa de que el expresado hijo y hermano murió en defensa de las actuales instituciones, en el campo de batalla, en el punto denominado de "Janacatú," Distrito del Tablón de los Gómez, Departamento del Cauca, el año de mil ochocientos setenta y siete.

La demanda se halla en estado de sentencia, por haber tenido ya la tramitación que le señala la ley, y para ponerle término se considera:

Mediante las respectivas partidas de bautismo, expedidas en copia por el Cura de Popayán, se ha acreditado plenamente la maternidad legítima de Carmen Paredes; y con la de defunción del marido de ésta, José María Báez, se ha establecido su estado de viuda, habiéndose además agregado tres testimonios de personas idóneas para comprobar que ella no ha contraído segundas nupcias.

Aunque se ha establecido igualmente que Natalia, Paulina, Mercedes y Filomena son hermanas legítimas del finado militar Báez Paredes, sabido es que el artículo 7.° de la Ley 84 sólo da derecho á los hermanos en el caso de que falten los hijos, padres y viuda del causante; razón por la que en el presente caso la madre excluye á los hermanos.

Por medio de certificados de Jefes militares y de testimonios irrecusables se han comprobado plenamente la muerte de José María Báez Paredes, en el sitio y época ya indicados, en defensa de los principios que informan las actuales instituciones, con empleo de Sargento 1.°, el hecho de haber quedado insepulto su cadáver en el campo de batalla, el de que la madre se halla hoy en estado de grandísima pobreza, en avanzada edad y ciega, y que observó con su hijo muy buena conducta; y finalmente, el de que el finado Báez Paredes no fué casado ni pudo, en consecuencia, dejar descendencia legítima; con todo lo cual, y habiendo además el señor Ministro del Tesoro certificado que no se ha recompensado hasta ahora á la demandante, queda completada la comprobación de que

Carmen Paredes tiene el derecho que reclama, y es la única persona á quien puede concedérsele según la ley.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el parecer del señor Procurador, declara que la mencionada Carmen Paredes de Báez, vecina de Popayán, es acreedora del Tesoro público por la suma de novecientos doce pesos ($ 912). (Artículo 5.°, (incisos 2.°,) 7.° y 9.° de la Ley 84 de 1890).

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial*, comuníquese á Su Señoría el Ministro de Guerra y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez y siete de Febrero de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Ana María Quintana ha ocurrido, por medio de apoderado, ante esta Superioridad, para que como madre de Patrocinio Quintana, que murió el veintiocho de Noviembre de mil ochocientos setenta y seis combatiendo en el Ejército revolucionario en la Cuchilla del Tambo, con el cargo de Cabo 1.°, se le conceda recompensa militar unitaria, de acuerdo con la Ley 84 de 1890, por haber fallecido su hijo defendiendo los principios que informan las actuales instituciones, estando soltero y no habiendo dejado descendencia.

Con declaraciones de un número plural de testigos hábiles y contestes, que dan razón satisfactoria de sus dichos y rindieron sus exposiciones en la forma legal, se comprueba plenamente: que la peticionaria es madre ilegítima del finado, siempre ha permanecido en estado de soltería, observó buena conducta durante la vida de su hijo, con quien vivió en buena armonía, está pobre y ha seguido observando la misma buena conducta después de la muerte de aquél; que Patrocinio Quintana murió soltero y sin dejar descendencia, el veintiocho de Noviembre de mil ochocientos setenta y seis, en uno de los combates de la Cuchilla del Tambo, en que peleaba con el cargo de Cabo 1.° en el Ejército revolucionario.

Con certificado del Ministerio del Tesoro se acredita que la demandante no ha recibido pensión ni recompensa unitaria por la causal alegada actualmente.

En mérito de lo expuesto y de lo que dicen los artículos 1.°, 5.° (ordinal 2.°), 9.° y 11 de la Ley 84 de 1890, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el concepto del señor Procurador, concede del Tesoro nacional á Ana María Quintana, vecina del Distrito municipal de Cajibío del Departamento del Cauca, la recompensa militar unitaria de setecientos sesenta y ocho pesos ($ 768), suma igual al sueldo en cuatro años del empleo de Cabo 1.° que tuvo el finado Patrocinio Quintana.

Notifíquese, cópiese, dése cuenta al Ministerio de Guerra y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS. M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Febrero diez y siete de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Juan Malaver ha entablado demanda ante esta Superioridad para que como inválido de la guerra de 1854, en que peleó como soldado del Ejército constitucional, se le conceda del Tesoro nacional la recompensa militar unitaria de trescientos dos pesos ($ 302), por la causal 8.ª que señala el artículo 5.° de la Ley 84 de 1890.

Examinada la documentación presentada con el libelo de demanda, se encuentra que los médicos que examinaron al peticionario le hallaron dos cicatrices de heridas de bala, las cuales heridas no le ocasionaron, después de ser curadas, incapacidad para volver á trabajar como antes, y que si hoy se encuentra en imposibilidad para hacerlo por su miseria fisiológica, es debido más bien á su edad avanzada, que á cualquiera otra causa.

Como la Ley 84 de 1890, al expresar las causales por las cuales los militares pueden reclamar recompensa unitaria ó pensión, no indica la inutilidad para el trabajo proveniente de la edad avanzada, que es lo que existe en favor del peticionario, es obvio que éste no tiene el derecho que reclama.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el concepto del señor Procurador, niega la recompensa solicitada.

Notifíquese, cópiese y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintitrés de Febrero de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: María de Jesús Arias ha ocurrido, por medio de apoderado, para que como nieta legítima del Capitán Juan José Arias, militar de la guerra de Independencia, se le conceda, de acuerdo con la Ley 84 de 1890, una recompensa militar unitaria.

Con los documentos presentados por la peticionaria y con los creados á indicación del señor Procurador se comprueba plenamente:

1.° Que Juan José Arias fué militar del Ejército de la República, y que teniendo el empleo de Capitán, murió en el combate que tuvo lugar en 1820 en la población de Turbaco;

2.° Que dicho Capitán no dejó más descendiente legítimo que á su hijo Juan Antonio Arias;

3.° Que éste último murió en 1872 dejando dos hijos varones y dos mujeres, los cuales declaran en memoriales que figuran en el expediente que sólo su hermana María de Jesús se halla en el caso de pretender recompensa, porque los varones tienen con qué vivir y la otra mujer está casada;

4.° Que la peticionaria se encuentra célibe, muy pobre, ha observado y observa buena conducta, no ha recibido recompensa por los servicios prestados por su abuelo y vivió en buena armonía con sus padres.

En mérito de lo expuesto, y de lo que dicen los artículos 2.°, 6.°, 7.° y 12 de la Ley 84 de 1890, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el concepto del señor Procurador, concede del Tesoro nacional á María de Jesús Arias, vecina de Cartagena, la recompensa militar unitaria de tres mil ciento veinte pesos ($ 3,120), suma igual al monto del sueldo de Capitán en cuatro años, empleo que tenía su abuelo Juan José Arias cuando murió en 1820.

Notifíquese, cópiese, dése cuenta al Ministerio de Guerra y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veinticinco de Febrero de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Benjamín Novoa Zerda, con el carácter de endosatario de Ramón F. León y Rafael Mesa Guarín, ocurrió á la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, reclamando el reconocimiento á su favor y á cargo del Tesoro nacional, de la cantidad de quinientos diez pesos ($ 510), valor de nueve caballerías y dos bueyes pertenecientes á Mesa Guarín, que León, como encargado de ellos, suministró al Gobierno nacional en la guerra de mil ochocientos ochenta y cinco, para el servicio de las fuerzas que obraban en operaciones sobre el Norte, á órdenes de los Generales Daniel Aldana y Antonio B. Cuervo y del Secretario de Gobierno, Aristides Calderón. Dicha Comisión negó tal reconocimiento y absolvió á la Nación de la cantidad reclamada por resolución de diez y siete de Octubre de mil ochocientos noventa y dos, que fué aprobada por la del Ministerio del

Tesoro, de fecha veintidós de Noviembre del mismo año, marcada con el número 3,348, de la cual apeló el interesado para ante la Corte.

Concedido este recurso y surtida la sustanciación prevenida por la ley, esta Superioridad procede á resolver, haciendo para ello las consideraciones siguientes:

1.ª Que el recibo de los semovientes cuyo valor se reclama, corriente al folio cuarto, expedido á favor de Ramón F. León con fecha veinte de Febrero de mil ochocientos ochenta y cinco, por Rodolfo Zárate, titulándose Ayudante Secretario de una Comandancia general en el Estado de Boyacá, carece de fuerza probatoria, ya se tenga á Zárate como subalterno ó agente del Gobierno de dicho Estado ó de algún otro de los de la antigua Unión colombiana, ya como empleado ó agente del Gobierno nacional; en el primer caso, por no haberse hecho respecto de tal documento la conversión prevenida por el artículo 3.° del Decreto ejecutivo número 102 de 1886, ratificado por el 4.° de la Ley 152 de 1887, y por el 7.° del Decreto número 603, dictado en ejecución de esta ley, por lo cual no puede servir de comprobante suficiente para el reconocimiento del crédito de que se trata, al tenor de esas mismas disposiciones, y en el segundo, porque no se ha probado el carácter de empleado público que tuviera Zárate ni la facultad de que se hallara investido para exigir y recibir el suministro, ya por el ejercicio de sus peculiares funciones, ya por delegación expresa y terminante que al efecto se le hiciera, como lo requiere el artículo 1.° del Decreto ejecutivo número 102 supracitado;

2.ª Que aun cuando también se han presentado declaraciones testimoniales para comprobar el crédito reclamado, y este medio de prueba es admisible á falta de recibo expedido á favor del interesado, la Corte no puede reconocer ese crédito en virtud de ese comprobante, porque no consta en autos que el interesado presentara la relación jurada y pormenorizada que exigen como requisito indispensable para el reconocimiento del crédito el artículo 16 de la Ley 44 de 1886 y el punto 2.° de la resolución de la Secretaría de Guerra á que allí se alude, pues la que se hizo por Delászcar García, á nombre de Mesa Guarín en el escrito del folio 3.° dirigido al Secretario de Gobierno del Estado de Boyacá, no contiene las especificaciones requeridas por dicha resolución, ni sobre su exactitud se prestó juramento por el interesado;

3.ª Que tampoco aparece que la solicitud ó escrito de que acaba de hablarse se registrara ó anotara en conformidad con lo ordenado por el Decreto número 660 de 1885 y por el 102 de 1886, ratificados por el inciso 3.°, artículo 16 de la preindicada Ley 44 de 1886, pues aunque se dispuso por la Secretaría de Gobierno de Boyacá que se practicara tal registro, no consta que éste se hiciera efectivamente.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con la opinión fiscal, confirma la resolución apelada.

Notifíquese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA. —BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO. — LUCAS VILLAFRÁDEZ.— *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Febrero veinticinco de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Juana Cerón reclama recompensa para su hija Cornelia Ortiz, hija legítima del Teniente José Manuel Ortiz, muerto peleando en favor de los principios que informan las actuales instituciones.

La viuda del Teniente Ortiz ha manifestado que renuncia el derecho que tiene á la recompensa que le otorga la ley, y que lo cede en favor de su hija Cornelia Ortiz.

Con los certificados del Cura de la Parroquia de Bolívar, se ha comprobado el matrimonio de José Manuel Ortiz y Juana Cerón, y que la única heredera y reclamante, Cornelia Ortiz, es hija legítima de ese matrimonio.

El Coronel Juan Martín Caicedo certifica y jura que José Manuel Ortiz tomó servicio en 1876 como Teniente, y como tal fué reconocido en todo el Ejército, pues él, como Comandante general de las fuerzas de la Provincia, le expidió el nombramiento, y que murió en el combate de la "Buitrera," en la Cuchilla del Tambo. Esto mismo declaran cinco testigos idóneos que dan razón de su dicho y que exponen ante el respectivo Fiscal y el Juez del Circuito, testigos que agregan, además, que la reclamante es única heredera y muy pobre.

Es verdad que no se ha acompañado el despacho ú hoja de servicios del Teniente José Manuel Ortiz, pero esta omisión está justificada desde que el Jefe que hizo el nombramiento lo asegura bajo juramento; y puesto que no se ha acompañado dicho despacho, sin duda ha dependido esto de no haberse expedido por escrito, porque no provenían de autoridades legítimas reconocidas, de modo que ha venido á suplirse la prueba con el certificado enunciado y con declaraciones de testigos. Esto está de acuerdo con lo que dispone el artículo 47 de la Ley 84 de 1890.

Consta en el expediente, por certificación del Ministro del Tesoro que Cornelia Ortiz no figura en el registro de pensionados de la República y que en los libros de la Sección 3.ª no hay constancia de que haya recibido recompensa del Tesoro nacional como huérfana del Teniente Ortiz.

Por otra parte, se ha comprobado plenamente con más de tres testigos idóneos y contestes, examinados con todas las formalidades legales, que el expresado Teniente y su mujer vivieron en perfecta armonía; que murió dejando á su hija Cornelia en tierna edad, y que ésta permanece soltera y ha guardado constantemente buena conducta.

Por lo expuesto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que Cornelia Ortiz tiene derecho á una recompensa definitiva de dos mil cuatrocientos pesos ($ 2,400), como hija legítima del Teniente José Manuel Ortiz, muerto en el combate de "La-Buitrera," Cuchila del Tambo; todo de acuerdo con el concepto del señor Procurador y con los artículos 1.°, 4.° 5.°, 6.° y 9.° de la citada Ley 84.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO. — LUCAS VILLAFRÁDEZ.— *Gabriel Rosas* Secretario.

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Febrero catorce de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: La Corte no puede acceder á la revocación pedida por el apoderado de Cándido Jara en el asunto á que se refiere, por las razones iguientes:

1.ª Porque ya se dijo y se demostró que el artículo 366 de la Ley 105 de 1890, exige la concurrencia de tres circunstancias para admitir el recurso de casación, y que una de ellas, la de que la sentencia recurrida se funde ó deba fundarse en leyes que rijan ó hayan regido en toda la República á partir de la vigencia de la Ley 57 de 1887, falta en la expresada sentencia; pues que la legislación que debió aplicarse es la española, y los hechos en que se funda la demanda ocurrieron antes de la vigencia de dicha Ley 57, y porque la legislación cundinamarquesa tampoco regía cuando ocurrieron esos hechos;

2.ª Que aunque se trate de que "la justicia reconozca y declare la paternidad de un infeliz indígena que lo reclama, teniendo en cuenta los principios de equidad y de justicia que, como norma de moral, se han consignado en la vigente legislación," la Corte debe acatar primero el artículo citado, que es terminante, por más rectas que hayan sido las intenciones del recurrente al establecer su demanda;

3.ª Que aunque es cierto que conforme al inciso 2.° del artículo 110 de la Ley 57 de 1887, también se concede el recurso de casación cuando las sentencias versen sobre hechos relativos al estado civil de las personas, y según esa misma disposición, no se exigía que coexistieran las tres circunstancias aludidas; no es menos cierto que ese artículo ha venido

á ser modificado por la Ley 105 citada, y que es ésta la que debe aplicarse á este caso.

Por lo demás, los principios sentados por el apoderado de Cándido Jara, podrán tener aplicación en otro lugar para otros asuntos; pero no para el de casación de que se trata, que tiene por objeto principal uniformar la jurisprudencia, y que exige ciertas formalidades, de las cuales no puede prescindirse.

Por tanto, se resuelve: estése á lo dispuesto en la sentencia de trece de Diciembre de mil ochocientos noventa y dos.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.— LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez y ocho de Febrero de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Se libró ejecución por el Juez Ejecutor del Departamento de Boyacá contra Nepomuceno Arias y su fiador solidario Rafael Alonso T., por la suma de cuatro mil ciento setenta y tres pesos ($ 4,173), procedente del remate de aguardientes de la Provincia de Oriente, y habiéndose propuesto excepciones por parte del fiador Alonso, con quien se ha entendido el juicio, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, en sentencia de ocho de Julio de mil ochocientos noventa y dos, declaró probada en parte la excepción de pago y probada la de error de cuenta.

La parte agraviada apeló de esa sentencia para ante la Corte Suprema de Justicia, y ésta al fallar el asunto, teniendo en consideración el informe dado por el señor Secretario, con fecha treinta y uno de Enero del presente año, en que manifiesta que en este juicio no se suministró por la respectiva parte el correspondiente papel sellado para la actuación, y que se han pasado más de sesenta días de recibido en la Secretaría, se halla en el deber de dar aplicación al artículo 122 de la Ley 105 de 1890, el cual dispone que si recibido un expediente, pasaren sesenta días después de la fecha del recibo, y las partes no consignaren el papel necesario se declarará ejecutoriada la sentencia ó el auto apelado.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: declárase ejecutoriada la sentencia apelada.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Febrero veinticuatro de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: En un juicio ordinario promovido por Rafael Aizpuru ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Panamá, para que se le entregasen unos lotes de terreno que había tomado en arrendamiento en la ciudad de Colón y se le indemnizasen ciertos perjuicios, dictó el Tribunal el día cuatro de Noviembre último, un auto por medio del cual negó al demandante la petición por él hecha para que se diese al Fiscal respectivo traslado de su memorial de dos de Noviembre, en el cual solicitaba que dicho Fiscal expusiese con claridad los motivos en que fundaba la excepción de nulidad opuesta por él á la demanda; y previno al mismo Fiscal que legitimara su personería en forma.

La parte demandante pidió revocación de aquel auto, y en subsidio interpuso contra él, recurso de apelación. Concedida esta última, ha subido el expediente á la Corte, donde habiéndosele dado la tramitación correspondiente, es llegado el caso de resolver, para lo cual se considera:

Dos son, como se ha dicho, las resoluciones que el auto apelado contiene, á saber:

1.ª Que no había lugar á conferir al Fiscal del Tribunal traslado del memorial en que el demandante pide que aquél exprese los fundamentos en que apoyaba la excepción de nulidad del contrato de fecha veintiséis de Septiembre de mil ochocientos ochenta y dos, excepción opuesta al contestar la demanda, y

2.ª Que procediera el Fiscal á legitimar su personería.

Respecto de la primera, basta para resolver, si es ó no sustentable jurídicamente tener presente que según el artículo 950 del Código Judicial, es deber del que opone excepciones perentorias indicar los hechos ó los documentos en que se apoyan; disposición que conduce á facilitar el debate que ha de verificarse en el juicio, haciendo que se determine con precisión cuáles son los puntos concretos acerca de los cuales ha de versar aquél; disposición, por otra parte, natural, ya que en tratándose de establecer la verdad y justicia de los intereses que las partes sostienen en un juicio, es preciso que cada una de ellas conozca las razones alegadas por la otra y pueda oponerles en oportunidad las que la acompañan, á fin de que el Juez, examinadas las unas y las otras, quede en disposición de hacer debida aplicación de la ley positiva al caso del pleito.

Fundada es, en consecuencia, la alegación de la parte de Aizpuru, en cuanto exige que el Fiscal exprese los hechos en que funda la excepción opuesta á la demanda.

En cuanto á que el Fiscal debe legitimar su personería, la Corte ha resuelto ya, en el Acuerdo número 136 (número 53 de la *Gaceta Judicial*), con motivo de una consulta que se le hizo con relación á la comprobación del carácter público de los Personeros municipales, que basta para que éstos sean reconocidos que haya constancia oficial ó publicación auténtica del nombramiento y posesión de los respectivos Personeros, para que los Jueces admitan su personería en todos los actos en que deban intervenir por razón de su ministerio, debiendo conservarse en cada Juzgado el documento que acredite tal nombramiento y tal posesión.

Y es con ese objeto con el que dispuso el artículo 280 de la Ley 149 de 1888 que siempre que se proveyera un empleo se comunicara la elección á las Oficinas que deben tener conocimiento del hecho.

Por tales consideraciones, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el concepto del señor Procurador, revoca el auto apelado y resuelve:

Que el Fiscal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Panamá proceda á indicar los hechos ó documentos en que apoya la excepción de nulidad del contrato de fecha veintiséis de Septiembre de mil ochocientos ochenta y dos, á que se refiere en la parte final de su escrito de catorce de Octubre de mil ochocientos noventa y dos; y que dicho Fiscal no necesita de legitimar su personería para que pueda representar el Fisco en el correspondiente juicio.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente al lugar de su procedencia.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.— LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veincuatro de Febrero de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Por auto del Juez del crimen del antiguo Circuito de Toro, hoy de Marmato, de fecha doce de Agosto del año próximo pasado, se declaró que Rafael Jenaro Bueno había incurrido en la multa de cien pesos ($ 100), suma que se había obligado á pagar como fiador de cárcel de Sixto Valencia, procesado por el delito de hurto, siempre que no presentase á su fiado cuando se le exigiese. Condenado Valencia, según dice el auto, á la pena de reclusión, se le pidió al fiador que presentase á su fiado para notificarle la sentencia y que ésta tuviera su cumplimiento; y después de transcurridos dos meses de prórroga, solicitados por el fiador, sin que á pesar de eso se haya verificado la presentación del reo, el Juez dictó el auto de que se ha hablado.

Sin notificar este auto al multado, se pasó en copia al Administrador municipal de Hacienda nacional de Riosucio, y este empleado, en uso de la jurisdicción coactiva de que

está investido, dictó auto ejecutivo contra Bueno el nueve de Diciembre último. De este auto interpuso apelación el ejecutado para ante la Corte, y remitidas las diligencias á esta Superioridad, se pasa á resolver lo que sea legal, después de oír el dictamen del señ Procurador de la Nación.

Como se indicó yá y lo hace notar el señor Procurador, no aparece del expediente que el auto del Juez del Circuito fuese notificado á Rafael Jenaro Bueno, requisito sin el cual no ha podido dictarse el auto ejecutivo, como lo ha resuelto varias veces la Corte, pues que el auto del Juez no puede considerarse ejecutoriado sino después de que haya sido debidamente notificado.

Por tanto, de acuerdo con lo pedido por el señor Procurador, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca el auto ejecutivo que ha sido objeto de la apelación y dispone que se devuelvan las diligencias para que se subsane la falta de notificación que se ha indicado.

Notifíquese, cópiese y publíquese en la *Gaceta Judicial*.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.— LUCAS VILLAFRÁDEZ.— *Gabriel Rosas*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintiuno de Febrero de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: En diez y nueve de Agosto de mil ochocientos noventa, se dictó auto de enjuiciamiento, por el Tribunal Superior de Popayán, contra Joaquín Navia Arzayús, por los delitos de falsedad, estafa, tentativa de estafa, y prevaricato, en su carácter de Juez del Circuito de aquella denominación; y contra Gonzalo G. Casas, también en su carácter de Juez de dicho Circuito, por los delitos de falsedad y tentativa de estafa.

Respecto del enjuiciado Casas se siguió el juicio por los trámites legales, el cual terminó por sentencia absolutoria de treinta de Octubre del mismo año, dictada por el mismo Tribunal.

Mas en cuanto á Navia Arzayús, hubo de suspenderse el juicio, porque no fué hallado, y no pudo por consiguiente notificársele el enjuiciamiento.

Transcurridos diez años, después de cometidos los delitos acusados á Arzayús, se presentaron Carolina C. de Navia, Manuel de G. y Julio Navia, pidiendo que se declaren prescritas las penas que pudieran corresponder al encausado ausente; y habiendo dictado el Tribunal arriba expresado la providencia de diez de Octubre de mil ochocientos noventa y dos, en que se declaran prescritas dichas penas, la ha elevado en consulta á esta Corte.

El señor Procurador es de concepto que aquella providencia es arreglada á derecho, en vista de la época en que pasaron los hechos materia del juicio y de las disposiciones legales.

Ciertamente los últimos actos ejecutados por Navia Arzayús datan de Octubre de mil ochocientos ochenta y dos, y de ese mes á la fecha de hoy van trascurridos con mucho diez años, plazo prefijado por el artículo 95 del Código Penal, para prescribirse la acción contra el enjuiciado por falsedad, estafa, tentativa de ésta, y prevaricato. De modo que es de rigor la aplicación del artículo 1504 del Código Judicial, y debe cesar el procedimiento contra Navia Arzayús.

En mérito de lo expuesto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto consultado.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial*, y devuélvase el expediente á la Oficina de su origen.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO. — LUCAS VILLAFRÁDEZ.— *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veinticuatro de Febrero de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 346 de la Ley 105 de 1890 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca consulta con la Corte el auto de sobreseimiento que en diez y nueve de Diciembre último dictó en unas diligencias que se practicaron con el fin de averiguar si Jesús Guerrero García, al dictar como Juez suplente del 2.° del Circuito de Oriente un auto de proceder contra Roque Prieto, había incurrido en delito de prevaricación ó en alguno otro.

Dos son los fundamentos en que se apoyaba el supuesto de que el expresado Guerrero García había incurrido en responsabilidad como Juez suplente del 2.° del Circuito de Oriente, á saber:

1.° Que dicho Guerrero García fué quien como Personero municipal de Choachí dirigió en veinticinco de Junio de mil ochocientos ochenta y nueve, al Juez 2.° del expresado Municipio, una nota, en la cual excitaba á aquel funcionario para que procediese á practicar la investigación necesaria para saber si Roque Prieto, al prestar un juramento ante el Juez 1.° del mismo Circuito de Oriente, había faltado á la verdad é incurrido en el delito de perjurio; y el mismo Guerrero García, quien más tarde, en catorce de Diciembre de mil ochocientos noventa y uno, dictó como Juez suplente del Circuito de Oriente, auto de proceder contra Prieto por el supuesto perjurio, y

2.° Que Guerrero García era, cuando excitó al Juez 2.° del Municipio de Choachí para que procediese á investigar si Prieto se había perjurado, arrendatario de un terreno perteneciente á la mortuoria en cuyos inventarios había dicho Prieto prestado el juramento en que se dijo que había faltado á la verdad.

En cuanto al primer fundamento se observa que entre las causales de impedimento que el Código Judicial señala para que un Juez pueda conocer de un asunto determinado, no se halla ninguna en virtud de la cual Guerrero García pudiera en rigor haber fundado su excusa para inhibirse del conocimiento de aquel negocio; y que, de consiguiente, si conoció de él, lo hizo en cumplimiento de su deber legal y sin incurrir por ello en responsabilidad. Lo que en su calidad de Personero municipal promovió ante el Juez municipal de Choachí para que se pusiese en claro si Prieto había incurrido en delito de perjurio, era función propia de su empleo como agente del Ministerio Público, y no era obstáculo para que más tarde llamáse á juicio al mencionado Prieto, si era que para ello se reunían los elementos jurídicos necesarios para el caso.

Respecto del cargo segundo, consistente en la afirmación de que Guerrero García era arrendatario de un terreno relacionado con la mortuoria en cuyos inventarios rindió Prieto el juramento que fué ocasión de que lo encausaran, nótase en primer lugar que no consta en autos que cuando se dictó el auto de enjuiciamiento de Prieto, Guerrero García fuese todavía arrendatario; y antes bien, del documento de arrendamiento que en copia figura en los autos y de la fecha del citado auto de enjuiciamiento se deduce claramente que cuando éste se pronunció, el arrendamiento yá había cesado. Y en segundo lugar se observa que del hecho de que el Juez que conoció del sumario contra Prieto y llamó á éste á juicio hubiese sido arrendatario del terreno dicho, no se deduce necesariamente que dicho Juez tuviese interés personal afecto ó desafecto que le movieran á dictar el mencionado auto de enjuiciamiento; y sabido es que para que haya delito de prevaricación se requiere que aparezca probado el interés, afecto ó desafecto del Juez.

Las precedentes observaciones bastan para establecer que el auto consultado es jurídico, razón por la cual la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, lo confirma.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta*, y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO. — LUCAS VILLAFRÁDEZ— *Gabriel Rosas*, Secretario.

IMPRENTA DE ANTONIO M. SILVESTRE.

REPÚBLICA DE COLOMBIA.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AÑO VIII } Bogotá, 27 de Abril de 1893. { NÚM. 385.

CONTENIDO.

Págs.

Cuadros que representan el movimiento de negocios en la Corte durante el mes de Marzo del presente año........................ 169
Cuadro que especifica los negocios despachados en dicho mes........... 170
Cambio de personal.. 170

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

La que declara infundado el recurso de casación interpuesto contra el fallo dictado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán en el concurso de acreedores formado á los bienes de Jacinto Velásquez. (Magistrado ponente, doctor Isaza).............. 171
La que revoca la resolución dictada por el Ministerio del Tesoro en la reclamación de los herederos de Manuel Paz, por empréstitos y expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Pombo)............. 173
La que confirma la resolución dictada por el Ministerio del Tesoro en la reclamación de César Santander, por suministros. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas).. 174
La que confirma la resolución que el Ministerio del Tesoro profirió en la reclamación de Nepomuceno Parra, por expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Isaza).. 174
La que niega á Petrona Ramírez de Ramírez el aumento de una pensión. (Magistrado ponente, doctor Villafrádez)........................ 174

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

El en que se abstiene la Corte de conocer en el juicio ejecutivo seguido por el agente fiscal del Distrito capital de Panamá contra Francisco Machuca. (Magistrado ponente, doctor Botero Uribe). 174
El que revoca un auto dictado por la Oficina general de Cuentas en el juicio seguido contra el ex-Administrador general de Correos Remigio Martínez, sobre cuentas. (Magistrado ponente, doctor Trujillo).. 175
El que confirma el auto ejecutivo dictado por el Administrador de Hacienda del Circuito de Antioquia contra Joaquín Mariano Escobar. (Magistrado ponente, doctor Corrales)............................ 175
El que resuelve que no es el caso de declarar desierto el recurso de casación interpuesto contra el fallo dictado por el Tribunal Superior de Cundinamarca en el juicio seguido entre Eugenio y Dámaso Gaviria y los herederos de Francisco Pómez. (Magistrado ponente, doctor Corrales).. 176

NEGOCIOS CRIMINALES.

El que ordena la cesación de todo procedimiento contra el ex-Prefecto de la Provincia de Tundama, Junio Solano, en la causa que se le sigue por abuso de autoridad. (Magistrado ponente, doctor Botero Uribe).. 176

CUADRO QUE REPRESENTA EL MOVIMIENTO DE NEGOCIOS EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DURANTE EL MES DE MARZO DE 1893.

	SENTENCIAS.				Criminales de 2.ª instancia.	AUTOS.		Procesos militares.	Competencias.	Recursos de hecho.	Recursos de revisión.	Negocios varios.	NEGOCIOS DE UNA SOLA INSTANCIA.		Suspensión de Ordenanzas.	Recompensas.	TOTALES.
	CASACIÓN.		CIVILES DE 2.ª INSTANCIA.														
	Civiles.	Pena capital.	Negocios varios.	Suministros etc.		Civiles.	Criminales.						Civiles.	Criminales.			
Pendientes en 28 de Febrero de 1893..........	22	3	10	178	2	7	1	3	..	1	2	2	2	19	4	554	810
Repartidos en Marzo..........	3	..	2	4	..	1	2	2	..	..	..	..	..	4	..	17	35
Totales..........	25	3	12	182	2	8	3	5	..	1	2	2	2	23	4	571	845
Despachados en el mes..........	2	1	2	16	..	3	1	1	..	..	..	..	..	1	..	8	35
Pendientes en 31 de Marzo..........	23	2	10	166	2	5	2	4	..	1	2	2	2	22	4	563	810

CUADRO QUE REPRESENTA EL NÚMERO DE PROYECTOS PRESENTADOS POR CADA UNO DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SOBRE LOS NEGOCIOS CUYO DESPACHO SE RELACIONA EN EL CUADRO ANTERIOR (MARZO).

	SENTENCIAS.					AUTOS.							NEGOCIOS DE UNA SOLA INSTANCIA.				
	CASACIÓN.		CIVILES DE 2.ª INSTANCIA.														
	Civiles.	Pena capital.	Negocios varios.	Suministros etc.	Criminales de 2.ª instancia.	Civiles.	Criminales.	Procesos militares.	Competencias.	Recursos de hecho.	Recursos de revisión.	Negocios varios.	Civiles.	Criminales.	Suspensión de Ordenanzas.	Recompensas.	TOTALES.
Doctor Pombo	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1	1
Doctor Isaza	...	...	...	3	...	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2	6
Doctor Botero Uribe	1	...	...	3	...	1	...	1	...	...	...	...	...	...	...	...	6
Doctor Casas Rojas	...	...	...	2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1	...	1	4
Doctor Corrales	...	...	2	3	...	1	1	...	...	...	...	...	...	...	...	2	9
Doctor Galindo	1	1	...	2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1	5
Doctor Trujillo	...	...	...	3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1	4
Totales	2	1	2	16	...	3	1	1	...	...	...	...	...	1	...	8	35

RELACION

DE LOS NEGOCIOS DESPACHADOS EN EL PRESENTE MES DE MARZO DE 1893.

Señor Magistrado doctor Pombo.

1.—Marzo 20.—Recompensa.—Solicitud de Eugenio Potes, por invalidez causada en la guerra de 1885.

Señor Magistrado doctor Isaza.

1.—Marzo 20.—Suministros etc.—Reclamación de Toribia Cárdenas de Delgado.

2.—Marzo 23.—Suministros etc.—Reclamación de José Trinidad Moreno.

3.—Marzo 24.—Suministros etc.—Reclamación de Prudencio Cantillo.

4.—Marzo 17.—Auto civil.—Juicio ejecutivo seguido por el Administrador de la Aduana de Tumaco contra Elías D. Morcillo.

5.—Marzo 9.—Recompensa.—Solicitud de María Francisca Paz, por muerte de un hijo en la guerra de 1876.

6.—Marzo 18.—Recompensa.—Solicitud de José María Ortiz, como inválido á causa de heridas que recibió en la guerra de 1876.

Señor Magistrado doctor Botero Uribe.

1.—Marzo 22.—Casación civil.—Concurso de acreedores formado á los bienes de Jesús María Ramírez.

2.—Marzo 11.—Suministros etc.—Reclamación de Susana Velasco de Peña.

3.—Marzo 23.—Suministros etc.—Reclamación de Rafael Navia.

4.—Marzo 24.—Suministros etc.—Reclamación de Aparicio Peláez.

5.—Marzo 8.—Auto civil.—Juicio seguido por Rafael A. Toledo contra la Nación, por daños y perjuicios.

6.—Marzo 4.—Proceso militar.—Juicio seguido contra Juan Luna, como responsable de la fuga de un preso.

Señor Magistrado doctor Casas Rojas.

1.—Marzo 4.—Suministros etc.—Reclamación de Lucio Londoño.

2.—Marzo 6.—Suministros etc.—Reclamación de Jeremías Durán y otros.

3.—Marzo 11.—Recompensa.—Solicitud de Diego Reyes, por muerte de un hijo en la guerra de 1876.

4.—Marzo 15.—Negocio criminal de una instancia.—Juicio seguido contra los señores Magistrados del Tribunal Superior de Antioquia, por varios cargos.

Señor Magistrado doctor Corrales.

1.—Marzo 6.—Sentencia civil común.—Juicio seguido por el Fiscal del Circuito de Pasto contra Angel María Ordóñez, sobre reposición de un puente.

2.—Marzo 24.—Sentencia civil común.—Juicio seguido por Honorato Espinosa contra el Gobierno nacional, sobre denuncia de obra nueva.

3.—Marzo 7.—Suministros etc.—Reclamación de Gregorio Agudelo y otros.

4.—Marzo 22.—Suministros etc.—Reclamación de Adolfo Martínez Navarrete.

5.—Marzo 20.—Suministros etc.—Reclamación de Francisco C. Sánchez.

6.—Marzo 4.—Auto civil.—Juicio ejecutivo seguido por el Administrador de Hacienda de Buriticá contra Teodoro David.

7.—Marzo 22.—Auto criminal.—Juicio seguido contra Matías A. Múnero, Juez del Circuito de Frontino, por abuso de autoridad.

8.—Marzo 6.—Recompensa.—Solicitud de Belarmina González, por haber muerto su padre en la guerra de 1860.

9.—Marzo 23.—Recompensa.—Solicitud de Eleázar y José Antonio López, por muerte de su padre en la guerra de 1860.

Señor Magistrado doctor Galindo.

1.—Marzo 17.—Casación civil.—Juicio seguido por Rafael Roca contra Pantaleón Gaitán, sobre cuentas.

2.—Marzo 22.—Pena capital.—Juicio seguido contra Salomón Hernández ó Ladino, por asesinato.

3.—Marzo 7.—Suministros etc.—Reclamación de Ricardo Solano.

4.—Marzo 15.—Suministros etc.—Reclamación de Rafael Camacho L.

5.—Marzo 4.—Recompensa.—Solicitud de Beatriz Bedoya, por muerte de un hijo en la guerra de 1876.

Señor Magistrado doctor Trujillo.

1.—Marzo 2.—Suministros etc.—Reclamación de Eduardo Jaramillo A. y otros.

2.—Marzo 11.—Suministros etc.—Reclamación de Nicanor Carazo.

3.—Marzo 22.—Suministros etc.—Reclamación de Pedro Pardo.

4.—Marzo 24.—Recompensa.—Solicitud de Ramón Ruiz, por invalidez causada en la guerra de 1860.

CAMBIO DE PERSONAL.

El 1.° de Marzo (1893) ocupó en la Corte su puesto de Magistrado principal el señor doctor Aníbal Galindo, y se retiró el señor doctor Villafrádez, Magistrado suplente.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintitrés de Febrero de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: En el concurso de acreedores formado á los bienes de Jacinto Velásquez, vecino de Cali, á virtud de cesión voluntaria que hizo desde el primero de Septiembre de mil ochocientos ochenta, ante el Juez del Circuito de Cali, pronunció sentencia definitiva de primera instancia, dicho Juez el ocho de Octubre de mil ochocientos noventa, y en ella determina cómo deben pagarse de los bienes del deudor común, varios de los acreedores que concurrieron al concurso, y excluye á otros.

Por recurso de apelación interpuesto por algunos interesados, conoció del juicio en la segunda instancia el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán y profirió sentencia el quince de Octubre de mil ochocientos noventa y uno, cuya parte resolutiva es del tenor siguiente:

"Por las consideraciones que preceden, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara:

"1.° De la masa del concurso se pagarán en primer lugar y grado las costas judiciales causadas en interés general del concurso;

"2.° En segundo lugar el honorario y gastos de los señores Juan Clímaco Collazos y Fernando Ibáñez, por su intervención cómo apoderados en primera y segunda instancia, respectivamente, en el juicio contra la Nación, por mercancías tomadas al concursado en el año de 1876, por fuerzas del Gobierno legítimo. Para esto se seguirá previamente un juicio pericial, teniéndose en cuenta lo decidido por el Tribunal en la articulación promovida por Ibáñez;

"3.° En tercer lugar el Banco del Cauca por $ 650 y el Banco de Buga la cantidad que alcance á cubrirse con el valor de un potrero situado en la parte Norte del río Cali. (Cuaderno número 3.°);

"El Banco del Cauca por sus créditos é intereses que quedaron á descubierto en los concursos especiales;

"El Banco de Buga por sus créditos é intereses que quedaron á descubierto en los concursos especiales;

"El crédito de Pedro Antonio Plata y sus intereses como subrogado en los derechos del Banco del Cauca;

"El crédito de Gregorio Velásquez, por la cantidad de $ 2,744-05, que pagó al Banco del Cauca subrogándose los derechos de éstos;

"En caso de insuficiencia de los bienes los acreedores nombrados en tercer lugar, se pagarán á prorrata.

"4.° En cuarto lugar:

"El crédito de Ricardo Rengifo, por $ 995-476 milésimos y sus interes que se le quedó á deber en el concurso seguido á la casa situada en el barrio de San Nicolás, después de verificado el remate;

"El de Rosalía Zapata, Andrea y Nicandro Cruz, por $ 725-46½ centavos y sus intereses que no pudieron hacer efectivo en el concurso que se siguió á las fincas de 'Yundí' y 'Guacas';

"El crédito de María de los Angeles Riascos, por $ 800 y los intereses vencidos, según la escritura número 52 de 1887;

"Fernando Fernández por su crédito de $ 3,811-470 milésimos y sus intereses que no pudo hacer efectivo en la casa hipotecada para asegurarle una cantidad mayor;

"El crédito de Ignacio Santacruz, por $ 4,107 y los intereses, cantidad que quedó á descubierto en el concurso especial seguido á una casa situada en la ciudad de Cali.

"5.° En quinto lúgar:

"Luis Parisot, por $ 1,400 y sus intereses, según el documento privado que se protocoló en la Notaría número 2.° del Circuito de Bogotá, y que prefiere á los demás documentos privados, según el artículo 36 de la Ley 57 de 1887.

"6.° En sexto lugar:

"El crédito por $ 2,000 y sus interes, á favor del señor Jaime Córdoba, quien pagó al Banco del Cauca;

"Rebolledo, Holguín & Compañía por $ 683-80 y sus intereses, según el documento respectivo, y

"El crédito de Francisco y Ramón Sinesterra, por $ 2,325-92½ centavos.

"Se declaran sin lugar los créditos siguientes: el de $ 1,200 pagados por Gregorio Velásquez como fiador del concursado, al doctor Nicolás Buenaventura, y los de $ 2,028-17 cancelados por Luis Parisot, lo mismo que el de $ 2,100 que dice le adeuda el concursado al señor Gregorio Velásquez, por no haber comprobante legal de esta deuda, ni de que Gregorio Velásquez se haya subrogado en los derechos de los acreedores principales, señores Buenaventura y Parisot. De la misma manera se desechan los créditos de las señoras Arcida Aguilar de Barbosa y de Tulia Riascos de Velásquez, quedando á esta última el derecho de reclamar su porción en la casa que se le adjudicó en la hijuela respectiva por herencia paterna. Queda en estos términos reformada la sentencia apelada."

Contra esta sentencia interpusieron recurso de casación el Banco de Buga, Rebolledo, Holguín & Compañía y el apoderado de Luis Parisot.

El Tribunal otorgó los recursos y remitió los autos á esta Suprema Corte, en donde han tenido el curso correspondiente y ha llegado el caso de determinarlos, lo que se hará advirtiendo previamente que el asunto estuvo y debió estar en suspenso durante todas las sesiones ordinarias y extraordinarias del Congreso del año próximo pasado y cuarenta días más, por figurar como parte en el juicio el Senador Jaime Córdoba y no haberse presentado permiso de la respectiva Cámara para proseguir el juicio. (Artículo 107 de la Constitución).

El recurso intentado por Rebolledo, Holguín y Compañía, no es admisible, porque el apoderado que lo introdujo no dijo cuál es la ley ó doctrina legal que cree infringida, y el concepto en que lo haya sido ó cuál ó cuáles son las leyes aplicables al caso. Se limita á decir que el crédito de sus representados debió ser colocado en cuarto lugar, por ser privilegiado, como así lo reconoce el Magistrado que salvó su voto en la sentencia recurrida, cuyos conceptos invoca en su favor dicho apoderado; y como en el salvamento de voto á que alude el recurso, se sostiene que los créditos de los Bancos de Buga y del Cauca gozan de la prelación que les concedía una ley ya derogada del extinguido Estado del Cauca, que no guarda armonía con las leyes sustantivas que están en vigor desde que se unificó la legislación nacional, es claro que el recurso de hecho no puede ser admitido, tanto por no haberse formulado debida y oportunamante cuanto por no concurrir la 1.ª causal del artículo 366 de la Ley 105 de 1890.

Tampoco puede tomarse en consideración el recurso introducido por Aquilino León, apoderado sustituto de Luis Parisot, sin autorización suficiente para interponer recurso de casación, prestando voz y caución de que sería aprobado su procedimiento por la parte á favor de la cual obró, é invocando la doctrina del artículo 345 del Código Judicial, que permite ocurrir á este medio para apelar en nombre de otra persona, porque el recurso de casación se rige por disposiciones especiales, una de las cuales es que se introduzca por la misma parte, ó por apoderado especial, ó por el último apoderado que haya tenido en la segunda instancia del juicio, si en el poder se le confiere esta facultad por la parte misma, ó por el sustituyente que la tuviere (artículo 373 de la Ley 105 de 1890), y ya la Corte ha sentado doctrina sobre la interpretación de este artículo en varias decisiones, resolviendo que el recurso de casación no puede interponerse por persona que no tenga poder suficiente para ello, aunque preste voz y caución por el interesado.

Queda por considerar el recurso interpuesto por el apoderado del Banco de Buga. Este recurso se hace consitir en que la sentencia del Tribunal "adolece del vicio de nulidad, por haberse tomado para pagar parte de sus créditos, á los Bancos del Cauca y de Buga, un potrero ubicado en la orilla Norte del río de Cali, potrero que, aunque es cierto, perteneció en un tiempo á este concurso, también es evidente y hay constancia en alguno de los diversos cuadernos que forman

ese juicio, de que fué adjudicado á la viuda é hijos del finado Rafael Escobar, acreedor hipotecario del mismo concurso."

El apoderado del citado Banco de Buga, en el término que señala el artículo 377 de la Ley 105 de 1890, ha explicado esta causal y hecho una ampliación consistente en imputar á la sentencia acusada error de hecho y de derecho, por haber calificado los créditos de Juan C. Collazos y Fernando Ibáñez como privilegiados, equiparándolos á las costas judiciales en interés general del concurso.

Pasa la Corte á examinar si son ó no fundadas estas causales, que la parte recurrente incluye en la 1.ª de las que señala el artículo 369 de la citada Ley 105.

Respecto del error de hecho en la apreciación de la prueba, debe tenerse en cuenta que la sentencia recurrida, al tratar del crédito del Banco de Buga, dice lo siguiente en la parte motiva:

"12. El Banco de Buga representó en el concurso, por la cantidad de $ 7,727-06 centavos, según la escritura número 185, de 9 de Noviembre de 1878, otorgada por el concursado en la Notaría de Cali, á favor del expresado establecimiento de crédito; pero como persiguió en concurso especial la casa de Santa Librada, la cual se adjudicó en el remate al apoderado del Banco, por la cantidad de $ 2,960, de la cual $ 1,000 correspondían al Banco del Cauca, deducidos los $ 1,960, por no haber constancia alguna de la liquidación de gastos judiciales, queda á favor del Banco la cantidad de $ 5,767-06, según los comprobantes que hay en los autos; este crédito debe pagarse con la hipoteca constituída en el potrero de pasto artificial, situado en el Distrito de Cali, en concurrencia con el Banco del Cauca, á quien corresponde la cantidad de $ 650, y el resto goza también de privilegio según el artículo 6.º de la Ley número 21 de 1873."

En la parte resolutiva se dispone lo siguiente:

"3.° En tercer lugar (se pagará) el Banco del Cauca, por $ 650 y el Banco de Buga la cantidad que alcance á cubrirse con el valor de un potrero situado en la parte Norte del río Cauca.....

"El Banco de Buga por sus créditos é intereses que quedaron á descubierto en los concursos especiales."

Comparando la parte motiva con la resolutiva de la sentencia, se comprende, sin dificultad, que lo que ella ha querido disponer es que el crédito del Banco de Buga no se cubra con la hipoteca constituída en un potrero de pasto artificial, situado en el Distrito de Cali, sino que se pague en tercer lugar como crédito privilegiado, según el artículo 6.° de la ley caucana, número 21, de 1873, porque así lo dice claramente el parágrafo 12 antes copiado, de la parte motiva, y porque el número 3.° de la parte resolutiva está destinado á determinar los acreedores que gozan de privilegio conforme á dicho artículo, ya por ser Bancos, ya porque sus créditos provienen de cesiones ó subrogaciones de créditos que originariamente pertenecieron al Banco del Cauca, y está fuera de duda que dicho número 3.° no está destinado á créditos hipotecarios que no debían figurar en esta sentencia, por corresponder á concursos especiales.

Se alega, sin embargo, que hubo error de hecho en el Tribunal al sostener que el crédito reclamado por el Banco de Buga podía tener todavía una hipoteca no rematada, para cubrirse con ella en todo ó en parte. Propiamente no hubo error en el Tribunal porque no pudiendo tener á la vista, puesto que no hacía parte de los autos, el cuaderno en que se verificó el remate, mal podía saber que se había rematado la hipoteca. Lo que podría imputarse á la sentencia sería oscuridad en la parte resolutiva, por haber omitido el adverbio *no*; pero de esto ha debido pedirse la oportuna aclaración, pero ya que no se hizo así, la sentencia debe interpretarse de la manera más racional y conforme con la verdad.

Además, la sentencia, rectamente interpretada, provee ó dispone lo conveniente para el evento en que el referido crédito del Banco de Buga no se cubra con la hipoteca, pues entonces, como se ha visto, entra á gozar del privilegio otorgado por la Ley 21 del Cauca para cubrirse con el producto de los bienes no hipotecados, después de las costas de interés general y de los créditos ilíquidos aún de Fernando Ibáñez y de Juan Clímaco Collazos.

Lo expuesto demuestra que es infundada la causal de casación por error en la apreciación de la prueba que ha alegado el Banco de Buga, y además, que la sentencia recurrida no infiere á ese Banco el agravio que supone, sino que, al contrario, coloca su crédito en el lugar y grado que pretende.

Cuanto al error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba respecto á los créditos reconocidos á los citados Ibáñez y Collazos, conviene, para comprender la cuestión, trascribir lo que con relación á ellos considera y dispone el Tribunal en la sentencia acusada:

"13.ª Fernando Ibáñez se presentó el 18 de Julio de 1884 en el concurso manifestando que el 6 de Diciembre de 1881 había celebrado contrato con el señor Jacinto Velásquez, en el cual aquél, como mandatario, se había comprometido á reclamar del Tesoro nacional las mercancías que le habían sido tomadas á Velásquez el 24 de Diciembre de 1876 por las fuerzas que comandaba David Peña, siendo de cuenta de Ibáñez hacer todos los gastos del pleito, con la obligación de pagarle Velásquez la mitad de la cantidad que se le reconociera; y como la Corte Suprema mandó pagar al reclamante la cantidad de $ 12,880, Ibáñez se creyó con derecho á $ 6,440 y pidió que el embargo ya decretado por el Juez se redujera á esta cantidad, y como los demás acreedores se opusiesen á esta pretensión, el Tribunal Superior de Popayán, por sentencia interlocutoria de 14 de Noviembre de 1884, declaró en última instancia nulo el contrato celebrado entre Velásquez é Ibáñez, por estar ya concursado el primero cuando esto sucedió; pero reconoció el derecho que tenía Ibáñez á que se le pagara el honorario y gastos hechos en el pleito, que debían tasarse por peritos nombrados por las partes, pago que debía verificarse en dinero con el producto de la venta de los documentos en que la Nación reconoció el crédito á favor de Velásquez. A ese fallo debe sujetarse hoy el Tribunal, pero como no se ha regulado el honorario del señor Ibáñez por medio de peritos, es preciso que se llene previamente esa formalidad antes de procederse por el Juez del conocimiento á dictar las medidas ó providencias enumeradas en el artículo 1208 del Código Judicial, para dar fin al concurso. En ese juicio pericial debe el señor Ibáñez acompañar los comprobantes de la gestión que hizo en segunda instancia en la reclamación expresada:

"14. Juan Clímaco Collazos (cuaderno número 12), reclamó del concurso la cantidad de $ 1,932, como honorario devengado en el juicio de reclamación hecho por el concursado, por las mercancías que á éste le fueron tomadas por fuerzas del Gobierno nacional, el 24 de Diciembre de 1876, el mismo en que intervino el señor Fernando Ibáñez, en la segunda instancia; es decir que Collazos, como apoderado, dirigió el negocio en el Juzgado del Circuito de Cali. El señor Collazos, lo mismo que Ibáñez, representaron indebidamente al señor Velásquez en el juicio contra la Nación, establecido después de que el deudor había hecho cesión de bienes á sus acreedores, y cuando el llamado á entablar y sostener la acción correspondiente en defensa de los derechos que como actor tenía el deudor, en beneficio del concurso, era el Síndico, según la atribución segunda, artículo 417 de la Ley 120 del extinguido Estado del Cauca, puesto que el deudor, al hacer cesión de bienes á sus acreedores, abandona á éstos todas sus propiedades, derechos ó acciones, reservándose únicamente los bienes no embargables de que habla el artículo 1677 del Código Civil nacional; ejercieron, pues, funciones que correspondían al Síndico del concurso y fueron por lo mismo verdaderos agentes oficiosos, en el caso del artículo 2360 de la Ley 283, y para hacer efectivo su honorario deben presentar, como lo ordena el artículo 2361 del mismo Código, una cuenta regular de la gestión con documentos justificativos ó pruebas equivalentes para que los peritos fijen con equidad y sin tener en cuenta las bases del arreglo privado que ellos hicieron con el deudor concursado, la cantidad de que deben ser indemnizados, siguiendo la regla del artículo 1170 del Código Judicial en la calificación de sus créditos."

El apoderado del Banco del Cauca ante la Corte, no puede solicitar el desconocimiento del crédito reclamado por

Ibáñez y Collazos, porque al interponer el recurso ante el Tribunal manifestó el representante de dicho Banco que sólo interponía recurso por lo referente á la graduación del crédito de su poderdante y que en cuanto á lo demás se conformaba con la sentencia del Tribunal. De modo que el recurso concedido al Banco del Cauca está limitado á la parte de la sentencia que ha sido ya considerada.

No hay error en la apreciación de la prueba respecto á los servicios que Collazos é Ibáñez prestaron al concursado, ya se les considere como apoderados, ya como meros agentes oficiosos, porque el recurrente reconoce que sí se prestaron esos servicios y también porque para que la Corte pudiera decidir que no se habían prestado, sería necesario que hubiera en el expediente documentos ó actos auténticos que demostraran equivocación evidente del Tribunal en cuanto á los hechos.

Siendo ya cosa juzgada en el concurso que los servicios de Ibáñez equivalen al honorario del Síndico ó que deben pagarse con el producto de las mismas libranzas que vinieron á formar parte del haber del concurso, ó más bien que el embargo de éstas se hizo en cierto modo bajo la condición de pagar el honorario de aquel agente, y estando en el mismo caso Collazos, no podrían desconocerse sus derechos á ser cubiertos en el grado que les ha señalado el Tribunal, ó lo que es lo mismo, no reconocer el derecho á ser pagados del valor de su trabajo, previa la correspondiente cuenta y tasación pericial, con parte de los valores que por sus gestiones vinieron á ser parte del concurso.

Las consideraciones anteriores demuestran que es inadmisible el recurso de casación interpuesto por Rebolledo, Holguín y Compañía y por Luis Parisot, y que es infundado el que hizo valer el Banco de Buga.

El deudor concursado, el apoderado del Banco del Cauca y el apoderado de Jaime Córdoba han ocurrido á la Corte haciendo observaciones contra la sentencia del Tribunal y solicitando su reforma en algunos puntos; pero estas solicitudes no pueden considerarse por la Corte, porque los reclamantes se conformaron con esa sentencia al no interponer contra ella recurso de casación. Este recurso está especialmente limitado á los puntos y casos oportuna y debidamente alegados, y la Corte no puede ocuparse sino en aquello que es materia de él, por haberse introducido en la sazón y del modo conveniente.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara infundado el recurso de casación interpuesto por el Banco de Buga contra la sentencia pronunciada en este concurso por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán el quince de Octubre de mil ochocientos noventa y uno, y aprueba dicha sentencia en cuanto es objeto del expresado recurso. Declara inadmisible el concedido á Luis Parisot y á Rebolledo, Holguín y Compañía. Las costas del recurso son de cargo del Banco de Buga y serán tasadas por peritos, si las hubiere.

Notifíquese esta sentencia, previa publicación en la audiencia, insértese en la *Gaceta Judicial* y remítase el expediente al Tribunal del Pacífico.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO. — LUCAS VILLAFRÁDEZ.— *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Febrero veinticinco de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Con copia de la relación presentada al Secretario de Hacienda del antiguo Estado del Cauca, de fecha diez y siete de Noviembre de mil ochocientos setenta y siete, y con varios recibos originales y declaraciones de testigos, se pidió ante la Comisión de suministros el reconocimiento del crédito de quinientos diez y siete pesos ($ 517), valor de los empréstitos y expropiaciones hechos aquéllos y sufridas éstas por Manuel Paz durante la guerra de 1876 y 1877.

La expresada Corporación dictó la resolución de diez y siete de Octubre de mil ochocientos noventa y uno, número 4,176, por la cual negó totalmente la reclamación intentada y absolvió á la República del cargo que se le hacía. Elevada esa resolución al Ministerio del Tesoro, se dictó allí la señalada con el número 2,512, de fecha treinta y uno del mismo Octubre, que confirmó la de la Comisión, y de esta última se interpuso apelación para ante la Corte, por lo que esta Superioridad pasa á resolver lo que estima legal.

Después de fallado el negocio en los términos relacionados se agregó al expediente el despacho que la misma Comisión había librado á Popayán para que se acreditase el carácter oficial de los individuos que habían expedido los recibos que figuran en la reclamación, y la Corte dictó un auto para mejor proveer desde el seis de Febrero del año próximo pasado, para que se acreditara por el que venía figurando como cesionario del crédito de uno de los herederos de Manuel Paz, que lo era también de los otros herederos del mismo. Admitido ahora como cesionario de tales herederos Salvador Valencia Fernández, éste ha pedido en escrito de diez y ocho del presente mes que se contraiga el reconocimiento á la cantidad de trescientos treinta y dos pesos ($ 332), que es la que resulta plenamente probada en el expediente.

Examinados por la Corte los documentos en que se funda la reclamación, encuentra que los recibos que figuran á fojas 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª y 6.ª, firmados por el Jefe municipal de Popayán, Rafael Quijano M. y su Secretario Enrique Chaux, por cantidades exigidas como empréstitos á Manuel Paz y valor de otros suministros, están debidamente reconocidos y se ha acreditado el carácter oficial con que los suscribieron. Tales recibos alcanzan á la suma de ciento cincuenta y tres pesos..... $ 153

Con el recibo de fojas 7 no está justificado legalmente el suministro hecho al Corregidor de Tierrasblancas, de una vaca hosca, estimada en veinte pesos ($ 20), porque no se ha acreditado el carácter oficial de Eliseo Collazos como tal Corregidor, y el reconocimiento que el testigo Manuel Torres hizo de su firma puesta en ese recibo, tuvo lugar ante el Juez municipal de Silvia.

Está acreditado el carácter oficial con que obró Rafael Barona M., como Alcalde del Distrito de Paniquitá, al extender el documento de fojas 6, en el cual se ha hecho constar la expropiación de un caballo castaño, avaluado en veinticinco pesos..... 25

La expropiación de tres reses más para raciones del *Batallón Bárbula*, no tiene en su apoyo sino la declaración de Eliseo Collazos, rendida ante el Juez del Circuito de Popayán, pues las de Pantaleón Ordóñez y Nacianceno Sánchez, que afirman también esa expropiación, fueron recibidas por el Juez municipal de Totoró, y la Corte ha decidido ya en diversas ocasiones que declaraciones rendidas ante estos funcionarios no tienen fuerza legal, de acuerdo con lo que dispone el artículo 5.º de la Ley 152 de 1887.

Con la copia que obra á fojas 16 expedida por el Secretario del Jefe municipal de Popayán está acreditada la consignación de cincuenta pesos, hecha por Manuel Paz al Administrador municipal de Hacienda en la misma ciudad, como empréstito forzoso..... 50

Suma total..... $ 228

Según la relación que precede, y á pesar de que el actual cesionario del crédito reclamado contrajo la reclamación á trescientos treinta y dos pesos ($ 332) es lo cierto que la Corte no ha encontrado legalmente justificada sino la suma de doscientos veintiocho pesos ($ 228), que es la que esta Superioridad declara, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, que debe pagarse del Tesoro nacional, á Salvador Valencia Fernández, como cesionario de los herederos de Manuel Paz, quedando así revocado el fallo del Ministerio del Tesoro, que dió lugar al recurso de apelación.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO. — LUCAS VILLAFRÁDEZ. — *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veinticinco de Febrero de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: La resolución que bajo el número 4,047 dictó, en veintidós de Septiembre último, la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, y aprobó el Ministerio del Tesoro el treinta de Noviembre con el número 3,365, se funda en que la reclamación á que se refiere (que es la intentada por Salvador Valencia Fernández el día tres de Junio de mil ochocientos noventa y dos, por ochenta y cinco pesos suministrados al Gobierno por César Santander, en mil ochocientos ochenta y cinco), se inició fuera del término último señalado por la Ley 36 de 1888, para que fuesen admisibles tales reclamaciones; y este fundamento es tan evidente y sólido que la Corte no puede desecharlo, sino que antes bien tiene el deber de acogerlo, no obstante la apelación interpuesta contra tales resoluciones.

La Corte, por tanto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con lo pedido por el señor Fiscal especial, confirma la resolución apelada.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintisiete de Febrero de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Nepomuceno Parra estableció demanda por medio de apoderado ante el Juez del Circuito de Honda, en el mes de Agosto de mil ochocientos setenta y ocho, contra la Nación por la suma de cuatro mil ochocientos pesos ($ 4,800), en que estima las expropiaciones y daños que le hicieron en una propiedad suya, situada en el paraje de "Aguabonita," Distrito de Manzanares, en el año de mil ochocientos setenta y siete, las fuerzas del Gobierno nacional, comandadas por el General Didacio R. Delgado.

Este juicio estaba pendiente sin que en él se hubiera producido prueba alguna ni dictado sentencia de primera instancia cuando hubo de remitirse á la Comisión administrativa de suministros, empréstitos y expropiaciones en cumplimiento de la Ley 44 de 1886.

Esta Comisión pronunció sentencia absolutoria en diez y siete de Mayo de mil ochocientos ochenta y ocho, por no haber en el expediente prueba alguna justificativa del dinero reclamado, sentencia que fué confirmada por el Ministerio del Tesoro, en diez y ocho de Mayo de mil ochocientos ochenta y nueve.

Apeló de lo resuelto por el Ministerio la parte demandante; concedido el recurso y elevados los autos á esta Suprema Corte, se dictó auto para mejor proveer disponiendo el examen de algunos testigos que dijo el interesado eran conocedores de los hechos; pero examinados estos testigos resulta que la mayor parte de ellos ó ignoran los hechos, ó fijan la cuantía de la expropiación en una cantidad muy inferior á la de la demanda. Además, no puede ser estimado su testimonio por faltarles el certificado de idoneidad requerido por el artículo 5.° de la Ley 152 de 1887.

Lo mismo sucede con los testigos de una información presentada á la Corte por el apelante y practicada sin orden de ésta.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la resolución apelada.

Déjese copia de este fallo, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintiocho de Febrero de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Por la Ley 31 de 24 de Abril de mil ochocientos setenta y tres, el Congreso de los Estados Unidos de Colombia concedió una pensión alimenticia de veinticinco pesos mensuales á la viuda é hijos del Sargento Mayor de la Independencia José Antonio Ramírez, en consideración á importantes y meritorios servicios prestados por éste á la República durante más de cuarenta años, y á las circunstancias en que se encontraba dicha viuda, señora Petrona Ramírez, por razón de sus enfermedades y su edad avanzada. De esa pensión goza actualmente aquella señora, según lo ha expuesto su apoderado; pero creyendo éste que su poderdante tiene derecho á recibir del Tesoro nacional el sueldo íntegro del último empleo de su difunto marido, que fué el de Sargento Mayor, conforme al inciso 2.° del artículo 10 de la Ley 84 de 1890, ha ocurrido á esta Superioridad con la hoja de servicios de dicho militar y otros comprobantes, pidiendo que en virtud de esa disposición legal se aumente ó complete la pensión de la señora Ramírez hasta la concurrencia del sueldo íntegro mencionado.

La Corte ha entendido y resuelto repetidas veces, que sólo por razón del tiempo, ó sea antigüedad en el servicio de las armas, puede concederse pensión ó renta vitalicia á los militares, conforme á la Ley 84 de 1890, y que al tenor de lo dispuesto en el título 5.° de esta ley, que trata especialmente de las recompensas por esa causal, los que tienen derecho á pensión son los militares mismos que prestaron los servicios, y no sus deudos, á los cuales, cuando lo son de militares de la Independencia, favorece la ley citada, según se ve en su título 2.°, concediéndoles una recompensa unitaria definitiva, no una pensión ó renta vitalicia, y estas mismas observaciones son aplicables á la reclamante, como viuda del Sargento Mayor, José Antonio Ramírez, como lo advierte con acierto el Procurador general.

Por tanto, de acuerdo con el parecer de éste, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que no hay lugar á aumentar la pensión de que disfruta Petrona Ramírez de Ramírez, conforme á la Ley 31 de 1873.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintidós de Febrero de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Ha venido á la Corte en grado de apelación la sentencia proferida por el Juez del Circuito en lo civil, de Panamá, en que se declararon no probadas las excepciones propuestas por el ejecutado Francisco Machuca, en el juicio que por jurisdicción coactiva siguió contra él el Agente Fiscal del Distrito capital de la Provincia de Panamá por contribución urbana.

Sustanciado debidamente el recurso, el señor Procurador opina que debe reformarse la sentencia apelada, por cuanto considera probada la excepción de error de cuenta, una de las propuestas por la parte apelante.

Mas la Corte ha hallado, al dictar la sentencia, que debe recaer sobre este asunto, que si bien es cierto que, conforme á la legislación especial vigente en Panamá, la contribución urbana que se recauda en aquella ciudad ha sido administrada por el Gobierno nacional y aplicada á los gastos de fomento, y por consiguiente el juicio ejecutivo de que se trata en el recurso intentado, ha sido de la competencia de esta Superioridad, también lo es que ya esa competencia ó jurisdicción ha cesado, en virtud de la "Ley 5.ª de 1892, por la cual se reforman las Leyes 48 de 1887 y 43 y 83 de 1888, relativas á la Legislación Fiscal y Electoral en el Departamento de Panamá."

El artículo 13 de la Ley 48 de 1887 reformada, disponía:

"Las rentas y contribuciones del Departamento de Panamá serán recaudadas y administradas por el Gobierno nacional, y aplicadas de preferencia" etc.

Por los artículos 1.° y 2.° de la Ley 5.ª citada se señalan las rentas y contribuciones que hoy deben recaudarse en Panamá, pertenecientes al Gobierno nacional y la aplicación que deba dárseles, y entre ellas no está la contribución urbana, y el artículo 3.° de la misma ley dice que "corresponden al Departamento de Panamá *todas las otras* rentas y contribuciones establecidas ó que se establezcan," y que "su producto servirá para atender á los gastos de carácter administrativo;" de modo que entre esas contribuciones queda comprendida la urbana establecida ya.

Se ve con claridad que la mente del legislador ha sido la de ceder al Departamento de Panamá la susodicha contribución, ó mejor dicho, restablecer las cosas al estado que tenían antes de la expedición de las Leyes 48 de 1887 y 43 y 83 de 1888, relativas á la Legislación Fiscal y Electoral en el expresado Departamento; por consiguiente, la Corte Suprema carece de jurisdicción para seguir conociendo de este asunto en que el interés no es ya de la Nación.

En mérito de lo expuesto, se resuelve: la Corte se abstiene de conocer en este juicio.

Devuélvase el expediente al Agente Fiscal del Distrito de Panamá para lo de su cargo.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintitrés de Febrero de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: La Sección 4.ª de la Oficina general de Cuentas feneció, por auto de treinta de Junio de mil ochocientos noventa y dos, la cuenta general de la Administración general de Correos nacionales, correspondiente al bienio de 1889 y 1890, sin alcance á cargo del responsable José Antonio Ribas y con el de ciento diez y seis pesos diez centavos ($ 116-10), á cargo del otro responsable Remigio Martínez, proveniente de la falta de incorporación de las cuentas de la Oficina telegráfica de Útica, en los meses de Marzo, Abril y Septiembre de mil ochocientos ochenta y nueve. Contra esta providencia interpuso apelación para ante la respectiva Sala de la Oficina general de Cuentas Luis María Pardo, con el carácter de heredero de Efigenia Pardo, dueña de la casa hipotecada para asegurar el manejo del Administrador general de Correos Remigio Martínez. La Sala de apelaciones confirmó la resolución materia de la alzada, en auto de veintisiete de Septiembre próximo pasado, que ha venido en apelación á esta Superioridad.

Sustanciado el recurso en la forma legal, se procede á fallarlo.

El Procurador es de concepto que el recurrente Luis María Pardo no ha tenido personería para haber podido apelar contra el auto de veintisiete de Septiembre último, porque el artículo 75 de la Ley 146 de 1888 no les concede ese derecho sino á los responsables principales ó á sus fiadores, en su caso, y á falta de éstos, á los herederos ó albaceas de aquél, condiciones que no reúne el apelante Pardo.

El Código Fiscal de la Nación considera en el título 1.° del libro 3.° la palabra fianza como sinónima de seguridad, que puede ser personal ó hipotecaria. Y si al individuo que se obliga personalmente á responder por los caudales públicos que maneje aquél á quien fía se le reconoce el derecho de apelar, con mucho mayor razón hay que reconocerle igual derecho á quien asegure de un modo más eficaz, como sucede con la hipoteca, el manejo de esos caudales públicos, puesto que con la abolición de la prisión por deudas la obligación personal sólo da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre los bienes del deudor. Según esto, la Oficina general de Cuentas procedió con acierto al conceder el recurso de alzada interpuesto por Pardo.

El alcance de ciento diez y seis pesos diez centavos ($ 116-10) deducidos contra el Administrador Martínez se funda, en que por el parágrafo del artículo 1.° del Decreto ejecutivo número 534, de veintiocho de Junio de mil ochocientos ochenta y nueve, que reglamenta la Ley 111 de 1888 los Administradores generales de Correos tienen obligación de examinar las cuentas de los Telegrafistas, de Cundinamarca, fenecerlas é incorporarlas en las suyas, bajo su responsabilidad, y que como en la cuenta de aquél no aparece incorporada la de la Oficina telegráfica de Útica, correspondiente á los meses de Marzo, Abril y Septiembre de mil ochocientos ochenta y nueve, y no se ha demostrado que Martínez agotara sin buen éxito todos los medios que conceden las leyes para obligar á los empleados subalternos á cumplir con sus deberes, tiene obligación de responder por el producto de dicha Oficina telegráfica en los tres meses mencionados, producto que se ha calculado por aproximación en ciento diez y seis pesos diez centavos ($ 116-10). La fuerza de esta argumentación es incontestable, y el recurrente no la desconoce; lo que él reclama, de acuerdo con lo alegado por la Oficina general de Cuentas, es que se le abonen á Martínez, ya que se le considera responsable de las cuentas de Útica, las partidas que la misma ley dispone se acrediten á esas cuentas.

Como lo que pide Pardo está ajustado al artículo 94 de la Ley 146 de 1888, que dispone que en casos como el presente se abonen al responsable los sueldos de los empleados y los gastos de material de la Oficina á que se refiera la cuenta, sueldos y gastos mayores que la suma del alcance, hay que convenir en que se debe revocar el auto materia de examen en la parte que ha sido objeto de la apelación.

En mérito de lo expuesto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con la vista del Procurador, de fecha ocho de los corrientes, revoca el auto apelado en la parte en que se le deduce al ex-Admistrador general de Correos nacionales Remigio Martínez un alcance de ciento diez y seis pesos diez centavos ($ 116-10), al fenecer sus cuentas correspondientes al bienio de mil ochocientos ochenta y nueve y mil ochocientos noventa.

Notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintiocho de Febrero de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: El Administrador de Hacienda del Circuito de Antioquia, en el Departamento de este nombre, libró mandamiento ejecutivo en veintiséis de Agosto de mil ochocientos noventa y dos, contra Joaquín Mariano Escobar, para hacer efectivo el pago de cien pesos ($ 100) por multa en que fué declarado incurso por el Juez 1.° del mismo Circuito; y habiéndose notificado á Escobar la ejecución, éste interpuso apelación para ante esta Superioridad, la cual le fué concedida, y en su virtud se ha remitido el expediente para los demás efectos legales.

Consta del expediente que Joaquín Mariano Escobar se constituyó fiador de cárcel de Vicente Moreno, contra quien se seguía causa criminal y se obligó á pagar la multa de cien pesos ($ 100), en el caso de que no lo presentase cuando para ello fuese requerido; que habiéndosele exigido la presentación del procesado ante el Juez, que conoce de la causa, no lo verificó, por lo cual el mismo Juez, en providencia de veintitrés de Julio último, le declaró incurso en la multa que se había determinado y pasó los documentos del caso al Administrador de Hacienda para que la hiciese efectiva. Esta declaración se notificó al multado, quien no la reclamó ni apeló de ella, según lo que aparece de la actuación;

Que el Administrador de Hacienda del Circuito, con vista de los documentos que recibió, libró auto ejecutivo contra el deudor, y notificado dicho auto interpuso apelación, que le fué otorgada para ante esta Superioridad.

El señor Procurador general de la Nación, á quien se ha dado vista del asunto, es de concepto que habiendo servido de recaudo ejecutivo el decreto judicial, en que se manda hacer efectivo el cobro de la suma indicada, ese documento está comprendido en lo dispuesto en el inciso 3.° del artículo 1096 del Código Judicial, y que por lo mismo el mandamiento de ejecución debe ser confirmado.

La Corte se adhiere al dictamen fiscal, por estar arreglado á derecho y al mérito del expediente; y en consecuencia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto apelado.

Notifíquese, déjese copia y devuélvase la actuación.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Febrero vientiocho de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Habiendo fallado el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en segunda instancia, el pleito civil ordinario sostenido entre Eugenio Gaviria y Dámaso R. Gaviria, por una parte, y los herederos de Francisco Gómez, por otra, sobre nulidad de un remate y otros cargos, y notificado á las partes dicho fallo, Antonio Pómez interpuso contra él, ante el mismo Tribunal, el recurso de casación dentro de los treinta días que para este efecto señala la ley, sin designar las causales en que lo funda.

Concedido dicho recurso y remitido el expediente á esta Superioridad, con noticia de las partes, se dictó en seis de Julio del año próximo pasado, el auto por medio del cual se les dió conocimiento del recibo para que dentro del término de seis días nombrasen sus apoderados.

Vencido el expresado término, se profirió, en veintiséis del propio mes, otro auto con el fin de que se entregase el expediente á la parte recurrente para que fundara el recurso, dentro de los seis días que señala el artículo 377 de la Ley 105 de 1890, con el objeto mencionado ó hiciera las ampliaciones que estimara convenientes si ya había designado alguna causal. Esta providencia se notificó por edicto que fué fijado á las doce de la mañana del veintiocho de Julio de mil ochocientos noventa y dos, y desfijado el veintinueve siguiente á la propia hora. De acuerdo con tal prevención, la Secretaría entregó el proceso al recurrente el treinta del citado mes de Julio, y desde esa fecha principiaron á correr y contarse los seis días prefijados. El recurrente lo devolvió el seis de Agosto, por lo cual, el Magistrado sustanciador, dispuso, en auto de diez del mismo mes, que el proceso se diera en traslado á cada una de las otras partes para que presentaran sus alegatos.

Hallándose el procedimiento en ese estado, Eugenio Gaviria y Dámaso R. Gaviria pidieron que la Corte, sin más actuación, declarase desierto el recurso de casación que Antonio Pómez había interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Cundinamarca, en atención á que había devuelto el expediente que recibió para fundar dicho recurso, después de trascurridos los seis días ya expresados. Previnose en veinte de Agosto que se corriese traslado de la articulación á la contraparte, por cuarenta y ocho horas, formándose de ella cuaderno separado; mas Antonio Pómez, en vez de contestarlo, reclamó la providencia, porque en su concepto el artículo 741 del Código Judicial sólo permite promover articulaciones ó incidencias en los juicios ordinarios desde la contestación de la demanda hasta la citación para sentencia; de modo, pues, que en su concepto, no tienen cabida en los recursos de casación; y también porque no habiendo hecho la Corte, de oficio, declaración de estar desierto el recurso cuando fué devuelto el expediente, era prueba de que debía adelantarse el procedimiento hasta dictar fallo definitivo.

La Corte, sin embargo de estas argumentaciones, sustanció la articulación propuesta, en atención á que debía oír á la contraparte sobre la articulación ó petición de estar desierto el recurso, y porque aunque el artículo 377 de la Ley 105 citada, prescibe que cuando el recurrente no hubiere designado antes ó no designare en el respectivo escrito con la precisión que requiere la ley la causal ó causales en que se fundare el recurso, la Corte proceda inmediatamente á declararlo desierto, es exacto que tal declaración debe hacerse en el caso de que el recurrente no designe con toda claridad y precisión las causales en que lo funda, caso muy distinto al que se examina y que se hace consistir en haberse fundado el recurso de casación en los seis días señalados en la ley, y devuelto el proceso dentro de ese término.

Reemplazado el Magistrado doctor Trujillo, quien ha hecho manifestación de asistirle impedimento para conocer de este recurso, por haber formado la Sala del Tribunal de Cundinamarca que profirió la sentencia definitiva que es materia de esta casación, y no habiéndose allanado la parte de Antonio Pómez, la Corte completada con Conjuez, procede á resolver la articulación de que se viene haciendo mérito.

Es exacto que conforme á lo dispuesto en el artículo 377 de la Ley 105 de 1890, el recurso de casación debe fundarse por el recurrente ó los recurrentes dentro de seis días perentorios, de suerte que en el caso de que esto no se haga dentro de ese término, que es de naturaleza fatal, el recurso queda *ipso jure* desierto é inhibida la Corte de entrar á resolver sobre el fondo del negocio á que el recurso se refiere.

Consta que la notificación del auto respectivo quedó surtida á las doce de la mañana del veintinueve de Julio de mil ochocientos noventa y dos; que la entrega del proceso se hizo al recurrente el treinta siguiente, de manera que los seis días prefijados en la ley debían contarse desde el siguiente á la entrega del expediente; mas como ese día treinta y uno del citado mes, fué domingo, el término aludido no principió á correr sino desde el primero de Agosto, y habiendo sido devuelto el seis del mes últimamente mencionado, la devolución se verificó precisamente en oportunidad.

Por tanto, la Corte, resuelve que no está en el caso de declarar, como no declara, desierto el recurso de casación.

Notifíquese y cópiese é insértese en la *Gaceta Judicial*.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. RAFAEL MARIÑO C.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintisiete de Febrero de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: El Prefecto de la Provincia de Tundama, Departamento de Boyacá, Junio Solano, permitió en veinticuatro de Julio de mil ochocientos ochenta y ocho, al reo de homicidio Pedro Morales, que fuese excarcelado con fianza, por razón de enfermedad.

Inicióse sumario sobre este hecho para averiguar la responsabilidad del Prefecto Solano; y el Tribunal del Distrito Judicial de Tundama lo llamó á juicio extraordinario por el delito de abuso de autoridad, y fué notificado de esa providencia el diez y ocho de Octubre último, de la cual interpuso el recurso de apelación para ante esta Superioridad.

Tanto el ex-Prefecto enjuiciado como el señor Procurador de la Nación sostienen que la acción criminal deducida contra el primero ha prescrito, por transcurso del tiempo y que debe cesar el procedimiento iniciado.

La Corte, en vista de que el hecho ejecutado por el Prefecto de la Provincia de Tundama tiene pena corporal, según lo dispuesto en el artículo 565 del Código Penal, la cual prescribe por el transcurso de cuatro años conforme al artículo 95 del mismo Código; y considerando que el delito se cometió el veinticuatro de Julio citado desde el cual hasta la fecha han trascurrido más de los cuatro años que exige la ley, declara que es llegado el caso previsto en artículo primeramente citado.

Por lo expuesto, en cumplimiento de lo prescrito por el artículo 1054 del Código Judicial y de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, se resuelve: cese todo procedimiento en este asunto contra el ex-Prefecto de Tundama, Junio Solano, sometidò á juicio por auto de fecha veintidós de Abril de mil ochocientos noventa y dos por el hecho indicado.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

IMPRENTA DE ANTONIO M. SILVESTRE.

REPÚBLICA DE COLOMBIA.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AÑO VIII | Bogotá, 30 de Abril de 1893. | NÚM. 386.

CONTENIDO.

Págs.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

La que anula el fallo dictado por el Tribunal Superior del Norte del Departamento de Santander en el juicio seguido por la Compañía minera de Colombia contra la Compañía minera de Santander, sobre oposición á la adjudicación de una mina. (Magistrado ponente, doctor Isaza)..... 177

La que declara infundado el recurso de casación interpuesto contra la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior de Cundinamarca en el juicio seguido por Francisco de P. Matéus contra Numa P. Noguera, sobre nulidad de un testamento. (Magistrado ponente, doctor Isaza)..... 182

La que confirma la resolución dictada por el Ministerio del Tesoro en la reclamación de Eustaquio Cogollos, por expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Trujillo)..... 184

GACETA JUDICIAL.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Febrero veinticuatro de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Carlos J. Delgado denunció ante el Gobernador del Departamento de Santander, en el mes de Septiembre de 1887, para la Compañía minera de Santander, una mina de filón de oro, plata y cobre, que fué trabajada antiguamente y que se encontraba entonces abandonada, y respecto de la cual había dado aviso de su descubrimiento un recomendado de la misma Compañía el veinticinco de Julio del citado año. Manifestó el denunciante que la mina se halla situada en el Distrito de California, que se le ha dado el nombre de "Las-Animas," y que linda: por el Oriente, con la mina denominada "Las mañanas de San-Juan;" por el Occidente, el paso de "San-Cristóbal;" por el Norte, Barrientos, y por el Sur, San-Cristóbal.

Cuando el Alcalde de California, comisionado por la Gobernación de Santander, iba á dar posesión de esta mina al denunciante, se opuso Olimpo Gallo á nombre de la Compañía minera de Colombia, y el día primero de Septiembre del año antes mencionado, ocurrió al Juez del Circuito de Soto, Hermógenes Wilson, á nombre de la Compañía minera de Colombia, formalizando la oposición hecha por Gallo y pidiendo que por sentencia definitiva se declarase que en la medida de las pertenencias de la mina denunciada, no deben comprenderse ningunos territorios ó dependencias de la mina "Las-Animas" titulada á Olimpo Gallo. Fundó esta demanda en los dos hechos siguientes:

1.° Que Gallo y la Compañía minera de Colombia son dueños de la mina nombrada "Las-Animas," en virtud de título de propiedad expedido por el Gobernador de Santander;

2.° Que la mina que se pretende con el mismo nombre para la Compañía minera de Santander, está comprendida en un territorio tal que á ser adjudicada con pertenencias medidas sin la limitación que esta oposición suscita, quedarán los dueños de la mina titulada yá, despojados de toda su propiedad ó de parte de ella.

En este libelo expresa el opositor que la demarcación de la mina de "Las-Animas" titulada ya á la Compañía minera de Colombia ó á Olimpo Gallo, es la siguiente: por el Oriente, la mina de "La-Perezosa;" por el Occidente, la mina de "San-Félix; por el Norte, el río de La-Baja, y por el Sur, la cima de una cuchilla; y que como dicha propiedad se afecta con la adjudicación de la mina que pretende la Compañía minera de Santander, es evidente que no puede adjudicársele en tanto cuanto no sea respetada la demarcación de la mina titulada á favor de Gallo.

Wilson corrigió posteriormente la oposición ó demanda solicitando "que por sentencia definitiva se mande tener como delimitación de la mina 'Las-Animas' titulada yá á Olimpo Gallo, y que ha pasado á ser de la Compañía minera de Colombia, el perímetro dentro del cual está comprendida aquella mina, para los efectos de marcar la división entre ella y la que con el mismo nombre de 'Las-Animas,' pretende la Compañía minera de Santander, y que igualmente se declare que en la medida de las pertenencias de esta mina no deben comprenderse ningunos territorios ó dependencias de la mina de 'Las-Animas,' titulada á dicho Gallo. Este perímetro aparece en el libelo primitivo."

El representante de la Compañía minera de Santander no convino en la demanda de la Compañía de Colombia, y además propuso demanda de reconvención para que por sentencia definitiva se declare que ni Olimpo Gallo ni la Compañía minera de Colombia tienen derecho para oponerse á la adjudicación de la mina de "Las-Animas," denunciada por la Compañía minera de Santander, porque el título de aquella no tiene validez legal á causa de concurrir en las diligencias sobre mensura y adjudicación de esta mina, vicios que afectan tal título.

La parte contraria negó los hechos de esta demanda y el derecho en que se funda.

El apoderado de la Compañía minera de Santander alegó además contra la demanda principal la excepción perentoria de nulidad del título de la mina de "Las-Animas," expedido á favor de Olimpo Gallo, apoyándose en razones idénticas á las que le sirven de fundamento á la demanda de reconvención.

El Juez de primera instancia, en vez de dar á este asunto la tramitación de un juicio de deslinde, prevenida por el artículo 65 del Código de Minas, dispuso que se observara el procedimiento del juicio ordinario común, y abrió la causa á prueba.

Se produjeron en consecuencia algunas, se corrió traslado á las partes, y el Juez 2.° del Circuito de Soto profirió sentencia definitiva de primera instancia el diez y nueve de Marzo de 1890, cuya parte resolutiva está redactada así:

"Por tanto, el Juzgado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve lo siguiente:

"1.° Negar las declaraciones pedidas en la demanda de reconvención.

"2.° Mandar tener como delimitación de la mina 'Las-Animas,' titulada yá al doctor Olimpo Gallo, el perímetro dentro del cual está comprendida aquella mina, para los efectos de marcar la división entre ella y la que con el mismo nombre 'Las-Animas,' á que se hizo oposición, pretende la Compañía minera de Santander, que en las medidas de las pertenencias de esta última mina no deben comprenderse ningunos territorios ó dependencias de la mina 'Las-Animas,' titulada al doctor Olimpo Gallo. Sin costas."

De este fallo apeló el apoderado que representaba á la Compañía minera de Santander. Se otorgó el recurso para ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Norte del Departamento de Santander, quien lo decidió por sentencia de diez y siete de Marzo de mil ochocientos noventa y dos en estos términos:

"1.° Revócase la sentencia de que se ha hecho mérito (la de primera instancia);

"2.° Se declara probada la oposición hecha por parte de la Compañía minera de Colombia á la posesión de la mina 'Las-Animas,' pedida por la Compañía minera de Santander; en consecuencia, en la medida de las pertenencias de esta mina no deben comprenderse ningunos territorios ó dependencias de la que con el mismo nombre de 'Las-Animas' pertenece en propiedad á la Compañía minera de Colombia;

"3.° Se absuelve á la Compañía minera de Santander de la petición de deslinde hecha por la parte demandante;

"4.° Se absuelve á la Compañía minera de Colombia de la excepción de nulidad del título, y de la demanda de reconvención, propuestas por parte de la Compañía minera de Santander;

"5.° Se declara que no hay especial condenación en costas de primera ni de segunda instancia."

Contra esta sentencia introdujo recurso de casación, en tiempo hábil, pero sin determinar las causales, Carlos J. Delgado, con poder bastante del Gerente de la Compañía minera de Santander.

Fijada la cuantía de la acción por medio de peritos, el Tribunal de segunda instancia otorgó el recurso para ante esta Suprema Corte, en donde se ha surtido la tramitación correspondiente, y habiendo llegado el caso de fallar definitivamente el asunto, procede á ello.

El representante de la Compañía recurrente determinó en oportunidad ante la Corte las causales en que funda el mencionado recurso, que consisten, en la violación ó aplicación indebida de leyes sustantivas, de que se hará mención más adelante, si necesario fuere, en la apreciación indebida de la prueba y en la falta de consonancia entre el fallo y la pretensión del actor ú opositor.

En cumplimiento de lo que estatuye el artículo 381 de la Ley 105 de 1890, la Corte debe examinar ante todo, si el recurso se ha interpuesto oportunamente y por persona hábil, y si la sentencia es de aquellas contra las cuales pueda hacerse valer.

En cuanto á lo primero, la Corte juzga que el recurso de que se trata se introdujo por persona hábil, porque el poder conferido á Carlos J. Delgado contiene cláusula especial para interponer recurso de casación, y que se introdujo en oportunidad, porque deduciendo las vacaciones de la Semana Santa y los días feriados, resulta que no había trascurrido el término de treinta días, contados desde la notificación de la sentencia, señalado por el artículo 372 de la citada ley, cuando fué presentado el escrito en que se hizo valer el recurso de que se trata.

El pleito es de aquellos en que procede el aludido recurso, si se considera su cuantía, su carácter de juicio ordinario, *el Tribunal que dictó el fallo de segunda instancia* y las disposiciones aplicadas ó aplicables á la controversia, que, en general, son las del Código de Minas, vigente desde antes que se unificó la legislación nacional. (Ley 38 de 1887).

Más difícil es averiguar si concurre la circunstancia tercera de aquellas cuya coexistencia exige el artículo 366 de la mencionada Ley 105, para que tenga cabida el recurso de que se trata, y que consiste en que haya contrariedad en las sentencias de primera y segunda instancia en cuanto á la inteligencia ó aplicación de las leyes en que se apoyan ó en cuanto á lo principal del pleito.

Para determinar si existe esa contrariedad de las sentencias en lo principal del juicio, ó sea, en la intención ó parte petitoria de la demanda principal ó de la de reconvención, y en la excepción de nulidad, conviene recordar que la controversia se reduce á los puntos siguientes:

1.° Declaración de que en la medida de la mina denunciada por la Compañía minera de Santander no debe comprenderse ó afectarse parte alguna del territorio de la mina titulada yá á favor de Olimpo Gallo y que pertenece á la Compañía minera de Colombia;

2.° Que es nulo el título otorgado por el Gobernador de Santander á favor de Olimpo Gallo. Esta nulidad la ha hecho valer como acción, la Compañía minera de Santander en la demanda de reconvención y la ha alegado también como excepción á la demanda de la Compañía de Colombia.

Como se ha visto antes, la sentencia de primera instancia en su parte resolutiva comienza por negar las declaraciones que se pretenden en la demanda de reconvención, lo que en el fondo equivale á declarar inexequible la nulidad del título expedido á favor de Olimpo Gallo, y esta absolución de la demanda de reconvención envuelve también la de no estar probada la excepción de nulidad de dicho título, alegada por la Compañía minera de Santander.

En segundo lugar, la aludida sentencia manda tener como límites entre la mina de "Las-Animas," titulada á Olimpo Gallo y la denunciada por la Compañía minera de Santander, el perímetro dentro del cual está comprendida aquélla, y determina que en las medidas de las pertenencias de la mina que debe adjudicarse á la Compañía de Santander no deben comprenderse ningunos territorios ó dependencias de la mina "Las-Animas" titulada á Olimpo Gallo.

La sentencia del Tribunal de segunda instancia considera que las declaraciones del fallo deben referirse á la Compañía minera de Colombia y no á Olimpo Gallo, quien no ha figurado en el juicio sino como simple defensor de los derechos de esa Compañía, que la sentencia debe ser reformada con tal fin, y que para que la resolución de segunda instancia sea clara y precisa, debe preceder la *revocatoria* que ese Tribunal emplea en casos semejantes.

En consecuencia, determinó:

1.° Revocar la sentencia del Juez *a quo*;

2.° Declarar probada la oposición hecha por parte de la Compañía minera de Colombia á la posesión de la mina "Las-Animas" en la medida de la cual no deben comprenderse ningunos territorios ó dependencias de la que con el mismo nombre pertenece á la Compañía de Colombia;

3.° Absolver á la Compañía minera de Santander de la petición de deslinde hecha por la otra parte;

4.° Absolver á la Compañía minera de Colombia, de la excepción de nulidad del título y de la demanda de reconvención propuestas por parte de la Compañía minera de Santander."

A pesar de que la sentencia del Tribunal revoca la del Juez de Circuito, en el fondo hay identidad entre lo resuelto en ambos fallos, ó lo que es lo mismo, no hay contrariedad en ellos en cuanto á lo principal del pleito, como lo demuestra el estudio y comparación de una y otra determinación.

La revocación de la sentencia de primera instancia no envuelve precisamente contradicción entre ésta y la de segunda, porque esa revocación no tuvo por objeto, como lo dice el Tribunal, sino precisar ó abrazar en el último fallo toda la materia del pleito, como lo acostumbra en casos idénticos.

En cuanto al fondo de la decisión, no es difícil comprender el acuerdo que existe entre una y otra sentencia, pues ambas declaran que no es nulo el título de la Compañía minera de Colombia, que deben respetarse los límites de dicha mina al practicar la mensura de las pertenencias de la denunciada por la Compañía minera de Santander, y por consiguiente, niegan la acción de deslinde á que debió dar lugar la oposición de la Compañía de Colombia.

Para persuadirse mejor de la conformidad esencial entre el fallo del Tribunal y el del Juez de Circuito en lo principal del pleito, basta considerar que la ejecución de cualquie-

ra de las dos sentencias conduciría exactamente á un mismo resultado, esto es, á no comprender en la medida de las pertenencias de la mina de la Compañía de Santander ninguna parte del territorio adjudicado á Olimpo Gallo, conforme al título en que funda sus derechos su sucesor en el dominio de la mina de "Las-Animas."

Tampoco implica contradicción la circunstancia de que en la sentencia de primera instancia no se hubiera hecho declaración expresa de dominio á favor de la Compañía minera de Colombia, ó que se hablara simplemente de respetar los límites de la mina titulada yá á Olimpo Gallo y que en la del Tribunal se declarara probada la oposición hecha por parte de la Compañía minera de Colombia, sin hacer mención especial de Olimpo Gallo, porque lo mismo es decidir que se deben respetar los límites de la mina de los opositores, que era el objeto de la oposición ó demanda, que declarar probada ésta; y también porque la sentencia de primera instancia no hace declaración alguna en favor de Olimpo Gallo, como lo supone el Tribunal, y si lo menciona en la parte resolutiva del fallo es sólo con el objeto de determinar la mina á que se refiere la oposición, que es la que fué titulada á favor de dicho Gallo.

Por otra parte, Gallo y la Compañía minera de Colombia sostienen en el juicio unas mismas pretensiones.

Tampoco arguye contradicción en los fallos el haber dicho el del Tribunal que se negaba la acción de deslinde que hizo valer la parte demandante, porque en el fondo lo mismo resolvió la del Juez de Circuito al no dar lugar al juicio especial de deslinde y determinar que en la mensura de la mina denunciada por la Compañía de Santander se respetarán los límites señalados por mojones, á la mina de la Compañía de Colombia, lo que equivale á resolver que las dos minas están yá deslindadas y que los linderos son los que claramente señala el título que fué expedido á favor de Olimpo Gallo.

Pero como no es suficiente para negar el acceso al recurso de casación la conformidad de los dos fallos en cuanto á lo principal del pleito, sino que también se requiere que no haya contrariedad en cuanto á la inteligencia ó aplicación de las leyes en que se apoyan (artículo 366 de la Ley 105 de 1890), se hace necesario examinar los fundamentos de las dos sentencias, para ver si hay ó no esa contrariedad, cosa que á la verdad ofrece dificultades por el plan adoptado en una y otra y por la vacilación que muestran ambas respecto de la legislación aplicable, pues para hechos cumplidos mucho después de estar en vigencia la legislación nacional sobre minas, como la entrega ó posesión de la mina que denunció Olimpo Gallo, aplican ya la legislación del extinguido Estado de Santander, ya la nacional, resultando de todo ello tal confusión que no es fácil comprender los argumentos que condujeron al Juez de primera instancia y al Tribunal á conclusiones idénticas en lo dispositivo de sus fallos.

Empero, después de un minucioso estudio de estas piezas, se viene en conocimiento de que contienen razonamientos sobre la inteligencia de las leyes aplicadas y aplicables, que se contradicen entre sí, no sólo en el mismo fallo sino también entre el del Juez y el del Tribunal.

Dice la sentencia de primera instancia que conforme al inciso 3.° del artículo 460 del Código de Minas, en la posesión de la mina titulada era de aplicación la legislación abolida, porque cuando ésta lo fué, yá estaba conferida la comisión para la posesión y se había principiado á darle cumplimiento, pero que como esa posesión no terminó sino cuando yá estaba en vigencia la misma legislación, han debido aplicarse las disposiciones del capítulo 5.° que pudieran observarse.

También hace notar la misma sentencia que al juicio se le dió desde su origen el curso ordinario, contra lo que dispone el artículo 65 del Código que establece, que los dueños de minas colindantes pueden oponerse al tiempo de dar la posesión, siempre que estimen que en la medida se comprende el todo ó parte de sus minas; pero que el juicio á que dé lugar su oposición no será otro que el de deslinde ó amojonamiento, conforme al capítulo 23, que trata de este juicio. Que según se ve de los términos de la demanda, este es el caso que ha ocurrido, y que, aun cuando el Juzgado cayó en la cuenta de ello, fué después de haber admitido la demanda, cuando yá no le era dado observar cosa alguna sobre el particular. Que esta irregularidad no pudo menos que complicar el juicio, puesto que á haberse seguido el de deslinde, bastaba haber practicado éste, y sólo en el caso de oposición se habría entrado en el juicio ordinario, en el cual solamente habría tenido que decidirse si la línea fijada debía variarse, caso que se probara plenamente que dicha línea debía pasar por ciertos puntos determinados diferentes de los que se hubieran señalado en la respectiva diligencia de deslinde. Que según esta doctrina, que es la de los artículos 411 y 412 del Código de Minas, el dueño de una mina tiene derecho á que se le respete en el goce de las pertenencias cuyo perímetro le haya sido señalado en la diligencia de posesión, en razón á que la ley exige que se deslinde ese perímetro (lo que la ley dice es que se presume que la línea divisoria de dos minas es la que se fije en la diligencia de *deslinde* que se practique en virtud del juicio especial que se haya surtido), y que solamente puede variarse la línea divisoria que se fije como límite, cuando en el juicio ordinario se justifique plenamente por alguna de las partes que dicha línea debe pasar por ciertos puntos determinados. Que la mala dirección dada al juicio hace que en la sentencia no pueda decidirse terminantemente ese punto, por no haberse fijado de antemano la línea de deslinde.

La sentencia del Tribunal, en contradicción con esta doctrina, que es la de la ley, dice que es del todo correcto el curso ordinario que se le dió al presente juicio; que según el artículo 382 del Código de Minas adoptado, son juicios ordinarios sobre minas no sólo los que se promueven directamente con todas las formalidades de un juicio común ordinario, sino también aquéllos en que se ventila la posesión y la propiedad y que son originados por las oposiciones que pueden hacerse al practicarse las diligencias conducentes á su adquisición; que, como está dicho en la demanda primitiva, se pidió la declaración por sentencia definitiva de que en la medida de las pertenencias de la mina á que se refiere la oposición, no deben comprenderse ningunos territorios ó dependencias de la mina titulada á Olimpo Gallo.....; que se trata, pues, de saber cuál de las dos Compañías tiene mejor derecho á los territorios disputados, y que la vía ordinaria es, por consiguiente, la que corresponde á la querella, sin que obste en contrario la circunstancia de que la parte actora haya ejercitado también accesoriamente la acción de deslinde de que trata el artículo 65 de dicho Código.

Tratando la sentencia de primera instancia de la nulidad imputada al título de la mina de "Las-Animas" por no haberse citado á los dueños ó denunciantes de las minas colindantes, formalidad exigida por el artículo 51 del Código adoptado, considera que tal formalidad sí ha podido muy bien observarse, si se tiene en cuenta la fecha en que el empleado comisionado recibió la comisión y la en que quedó cumplida; pero que aun cuando de varias piezas de los autos aparece que prescindió de ella, esta omisión por sí sola no es bastante, porque conforme al artículo 110 del Código, ésta no podía alegarse sino por el colindante que no fué citado para dar la posesión, y no surte otro efecto que el de que dicho colindante pueda recuperar la parte de su mina que le ha sido arrebatada. Que según esta disposición no se tiene derecho para demandar la nulidad de todo un título, fundado en dicha causal, sino cuando el demandante ha sido privado injustamente de todo el territorio que comprende la mina titulada etc.

La sentencia de segunda instancia considera en esta parte que según los artículos 459 y 460 del Código de Minas, para dar la posesión de la mina titulada *pudo* citarse á los dueños ó denunciantes de minas colindantes ó próximas, posibilidad que estaba á juicio del empleado encargado de dar la posesión; que la omisión de esta formalidad no puede considerarse como dolosa para que introduzca nulidad en el título según la legislación santandereana, ni á ella es aplicable el ordinal 7.°, artículo 94 del Código de Minas, pues esta disposición no es meramente adjetiva, sino al contrario, esencialmente sustantiva, toda vez que entraba derechos legal y perfectamente adquiridos conforme á las leyes de Santander.

Las partes trascritas de las sentencias hacen ver que entre la del Tribunal y la de Juez de Circuito hay contrariedad por lo menos en estos dos puntos:

1.° En cuanto á la acción de deslinde á que da lugar la oposición que se hace en el acto de dar la posesión de una mina, ó sea, á la inteligencia del artículo 65 del Código de la materia, pues el Juez dice que esa oposición no da lugar á otra acción que á la de deslinde, y el Tribunal sostiene que se puede prescindir de la acción de deslinde y de la tramitación propia de ella y resolver la cuestión por la vía ordinaria común, como si se tratara de un juicio entablado directamente por esta vía;

2.° En cuanto á la legislación que debió aplicarse para la posesión ó entrega de la mina denunciada por Olimpo Gallo, conforme á la legislación del extinguido Estado de Santander, mina entregada ó medida después de la vigencia del Código nacional de Minas, supuesto que la sentencia del Juez de Circuito sostiene que debió aplicarse el Código de Minas, y citar, en consecuencia, á los dueños ó denunciantes de minas colindantes, mientras que el Tribunal asienta la doctrina de que de aquella formalidad pudo prescindir el empleado comisionado para la entrega de la mina, la que debió verificarse conforme á la ya abolida legislación del Estado de Santander.

Esta diversidad de opiniones se refiere á la inteligencia que debe darse á los artículos 65, 94, 459 y 460 del Código de Minas.

Demostrado, pues, como queda, que hay contrariedad entre las sentencias de primera y de segunda instancia en cuanto á la inteligencia de las leyes que han debido aplicarse para la decisión del pleito, el recurso de casación tiene cabida conforme á los artículos 366 y 381 de la Ley 105 de 1890.

En consecuencia, la Corte entra á considerar los motivos de casación aducidos contra la sentencia de segunda instancia.

Queda dicho antes que son tres las causales de casación alegadas, ó más propiamente dos, porque la proveniente de error en la apreciación de la prueba, está comprendida en la causal primera (1.ª) de las que señala el artículo 369 de la citada Ley 105, que trata de la violación de ley sustantiva ó de doctrina legal; de modo que las causales alegadas son la citada y la segunda (2.ª), que consiste en no estar la sentencia en consonancia con las pretensiones oportunamente deducidas.

La primera se hace consistir en error de hecho en la apreciación de la prueba, por cuanto—sostiene el recurrente—en los terrenos demarcados en las denuncias de las dos minas pueden medirse ambas en la dirección señalada á sus filones por los denunciantes, sin que se afecten la una á la otra, lo que se acredita de un modo evidente con la diligencia de inspección ocular practicada en segunda instancia; que ese error condujo directamente al Tribunal á fallar el asunto en el sentido en que lo hizo; pues si no hubiera estimado probado el segundo de los hechos fundamentales de la demanda, habría tenido naturalmente que absolver de ella al demandado; que también está á la vista que la declaración del Tribunal—de estar probada la demanda de oposición—implica necesariamente la de que la mina denunciada por la Compañía de Santander no puede medirse dentro de la demarcación de su denuncia, pues si esta medida pudiera hacerse allí, carecería naturalmente de fundamento aquella declaración. De lo cual deduce: que la sentencia recurrida vulnera el derecho preferente que á la mina denunciada tiene la Compañía minera de Santander, á virtud del aviso y denuncio de ella, según el artículo 117 del Código de Minas vigente; y que, por la misma razón, infringió dicha sentencia la disposición del artículo que acaba de citarse, la cual es de carácter sustantivo y regía en toda la República cuando se profirió ese fallo.

Refiriéndose también á esta misma causal primera, sostiene el recurrente que la demanda de reconvención no debió decidirse conforme á las leyes del extinguido Estado de Santander, como lo hizo el Tribunal, sino conforme al actual Código de Minas; que, por lo mismo, la sentencia recurrida aplicó indebidamente aquellas leyes al caso del pleito, y dejó de aplicar á él, también indebidamente, el artículo 94 y sus concordantes del Código de Minas.

La segunda causal, consistente en que no está el fallo en consonancia con la pretensión del actor, se funda en que la sentencia del Tribunal declara probada la oposición hecha por parte de la Compañía minera de Colombia, y dispone que en la medida de las pertenencias de la mina denunciada por la de Santander, no deben comprenderse ningunos territorios ó dependencias *de la que con el mismo nombre de "Las Animas," pertenece en propiedad á la Compañía minera de Colombia*, pues si con la última frase se designa todo el rectángulo de dicha mina de que se dió posesión á Olimpo Gallo, la sentencia concedió al demandante más de lo que pidió en la demanda, y no está en consonancia con la pretensión del actor.

La Corte considerará en primer lugar la causal de casación consistente en violación de ley sustantiva, por haber dejado de aplicar ó haber aplicado erróneamente el Tribunal el artículo 94 del Código de Minas y sus concordantes, porque si encuentra fundada esta causal, ella produce la anulación de todo el fallo, y como consecuencia forzosa, la necesidad de fallar el pleito, para lo cual puede ser necesario apreciar la prueba libremente y resolver todos los puntos no ejecutoriados que son materia del juicio, lo que implica precisamente la decisión sobre los otros dos motivos de casación alegados, á saber: el error en la apreciación de la prueba y la falta de conformidad entre la demanda y la sentencia.

El artículo 94 del Código de Minas determina los casos de nulidad de los títulos que se expidan conforme al mismo Código, y en el numeral 7.° dice que es nulo el título cuando habiendo dueños ó denunciantes de minas colindantes no se les cita para dar la posesión; el artículo 110 dice que la nulidad de que habla el numeral 7.° no puede alegarse sino por el colindante que no fué citado para dar la posesión, y que no surte otro efecto que el de que dicho colindante pueda recuperar la parte de su mina de que indebidamente haya sido privado.

Es indudable que la posesión ó entrega de la mina de "Las Ánimas," denunciada por Olimpo Gallo, cuando regía la legislación del Estado de Santander, ha debido darse con observancia de las disposiciones del Código nacional de Minas, que pudieran observarse, porque esa diligencia se verificó el catorce de Mayo de mil ochocientos ochenta y ocho, cuando hacía yá más de un año que regía en toda la República el citado Código, que fué adoptado por la Ley 38 de 15 de Marzo de 1887, publicada en el *Diario Oficial* de 21 del mismo mes, número 6,989. Según la disposición transitoria contenida en el artículo 460 del Código adoptado, en aquellos asuntos en que se hubiera recibido la comisión del Poder Ejecutivo para dar la posesión de la mina, cuando comenzó á regir el Código, y apenas se estuvieran practicando las diligencias preparatorias, se continuarían observando las instrucciones del Poder Ejecutivo y practicándose la diligencia de posesión con todas las formalidades que pudieran observarse de las que prescribe el capítulo 5.°

El Tribunal sostiene que, según el Código de Fomento de Santander, una vez trascurridos los sesenta días posteriores á la publicación de los avisos de que hablan los artículos 122 y 123, si no había oposición, adquiría el denunciante el derecho de ser preferido en la adjudicación de la mina, y que sólo por el trascurso de un año, sin que se hubieran llenado los requisitos necesarios para la titulación, y sin que se hubiera trabajado, cesaba aquel derecho por la presunción de abandono; de suerte que si se atiende á esta legislación, y el Tribunal juzga que así debe ser en cuanto se refiere á la parte sustantiva, ó sea, á la constitución del derecho de ser preferido, debe considerarse legal dicha adjudicación.

Que, por otra parte, el artículo 3.° de la Ley 64 de 1886 revalidó *a priori* las denuncias que se hicieran de acuerdo con la legislación de los extinguidos Estados. Que entró luégo en vigencia la Ley 38 de 1887, por la cual se adoptó el Código de Minas del extinguido Estado de Antioquia, que señala el término breve de sesenta días para pedir la posesión, y otro igual para solicitar el título, pero que estas disposiciones restrictivas del derecho adquirido no son aplicables en

el presente caso, según el artículo 459 de tal Código, y que no siendo puramente adjetiva la disposición que coarta un derecho legítimamente adquirido, no deben aplicarse al caso presente tales términos.

En la interpretación que el Tribunal da á las disposiciones del Código de Minas, adoptado en lo que se refiere á negocios que estaban pendientes al entrar en vigencia dicho Código, hay error manifiesto, pues la nueva ley no vulnera en lo mínimo el derecho que Olimpo Gallo había adquirido conforme á la legislación del extinguido Estado de Santander, á que se le adjudicase la mina que había denunciado, circunscrita dentro de ciertos límites determinados en su denuncio. El nuevo Código previno que en aquellos asuntos en que se hubiera conferido comisión para dar la posesión de una mina y apenas se estuviesen practicando las diligencias preparatorias, se continuaran observando las instrucciones del Poder Ejecutivo (Gobernador) y practicándose la diligencia de posesión con todas las formalidades que pudieran observarse de las que prescribe el capítulo 5.°, en cuanto fuere posible.

En el Código de Fomento de Santander no se daba propiamente posesión de las minas, sino que comprobada por el reconocimiento pericial la existencia y clase de la mina, el Jefe departamental ordenaba que por peritos, en asocio del Personero municipal, se midieran las pertenencias que debían adjudicarse al denunciante, conforme á lo que se determinaba en los dos artículos siguientes al 126.

Practicada la medida de la mina, el Jefe departamental pasaba todos los documentos al Poder Ejecutivo, quien expedía el título, incluyendo en él las principales diligencias, por las cuales pudiera reconocerse en todo tiempo la situación, demarcación y demás circunstancias de la mina (artículo 129).

Estas diligencias equivalen á lo que en el nuevo Código se llama dar posesión de la mina y expedir el título; pero la ley nueva, sin atacar derechos adquiridos por el denunciante y con el objeto de poner á cubierto los de terceros, dispuso que se verificase la entrega ó posesión de la mina, con citación de los dueños ó denunciantes de las minas colindantes (artículos 51, 52, 94 y 110).

Esta formalidad pudo y debió practicarse respecto de la Compañía minera de Santander, que había denunciado una mina colindante con la que iba á adjudicarse á Olimpo Gallo, porque no había imposibilidad de ninguna clase para que se verificase esta esencial prevención de la ley.

En lugar de hacerlo así, se verificó la entrega de la mina con prescindencia de las prescripciones de la ley nacional que regía hacía más de un año y observando las de la derogada legislación de Santander, excepto en cuanto á la extensión de las pertenencias medidas, en lo cual se observaron las prescripciones del nuevo Código en cuanto permite conceder una extensión mucho mayor que la que señalaba el artículo 127 del Código de Fomento de Santander. Este concedía sólo doscientos (200) metros de longitud sobre el filón y ciento (100) de ancho, y la que se dió conforme al Código vigente, fué una extensión de mil ochocientos (1,800) metros de largo, por doscientos cuarenta (240) de latitud.

Prosiguiendo la sentencia del Tribunal en la interpretación errónea de la ley aplicable al caso del pleito, sostiene que la citación de los dueños ó denunciantes de minas colindantes ó próximas, no era obligatoria, sino que quedaba á juicio del empleado encargado de dar la posesión el observarla ó no; que la omisión de esta formalidad no puede considerarse como dolosa por parte del adjudicatario, para que introduzca nulidad en el título según la legislación santandereana, que es la única aplicable, y que aquí no tiene cabida el ordinal 7.° del artículo 94 del Código de Minas, pues esta disposición no es meramente adjetiva sino, al contrario, esencialmente sustantiva, toda vez que entraba derechos legal y perfectamente adquiridos conforme á las leyes de Santander.

Se repite que el Código adoptado, al prevenir que la posesión de las minas denunciadas antes y no adjudicadas ó entregadas al tiempo de entrar en vigencia, no vulneró derechos adquiridos conforme á las leyes anteriores, pues no se concibe cómo la citación de los dueños de minas colindantes para entregar al denunciante la mina que pretendía y cuya extensión en nada se menoscababa, pudiera atacar de alguna manera derechos adquiridos, cuando, al contrario, la formalidad no observada tendía á garantizar ese mismo derecho, poniéndolo á cubierto de reclamaciones de terceros por haberse excedido de los límites señalados en el denuncio, porque es claro que el denunciante citado carece de acción para atacar el título si oportunamente no se ha opuesto.

Dedúcese de lo expuesto que la sentencia acusada al decidir que no concurre en este caso la nulidad prevista en el número 7.°, artículo 94 del Código de Minas, tanto por no considerar aplicable al caso del pleito la ley que regía al tiempo de la entrega de la mina, como por afirmar que aun en el supuesto de que esa legislación debiera haberse observado, era meramente facultativa por parte de la autoridad la citación de los colindantes, viola el artículo 94 del citado Código y sus concordantes, y la sentencia adolece de la primera de las causales de nulidad de las que determina el artículo 369 de la Ley 105 de 1890.

Siendo, por otra parte, indudable que la Compañía minera de Santander era denunciante de una mina colindante con la que se entregó á Olimpo Gallo, sin citación de aquélla, el título expedido á favor de Gallo puede adolecer de la nulidad determinada en el número 7.° del artículo 94 yá citado, nulidad que conforme al artículo 110 del mismo Código, no surte otro efecto que el de que dicho colindante pueda recuperar la parte de su mina de que indebidamente pueda haber sido privado.

Ni vale tampoco argumentar, como lo hace la sentencia del Tribunal, que esta nulidad está establecida sólo en favor del dueño colindante y no del mero denunciante, pues sólo de aquél se dice "que pueda recuperar la parte de su mina de que indebidamente haya sido privado," pues concediendo la ley igual derecho á ser citados para dar la posesión al dueño de mina titulada y al mero denunciante, la acción del uno es igual á la del otro, porque no se comprende para qué ordena la ley la citación del denunciante si no ha de tener derecho para oponerse, ó si su oposición no puede surtir efecto alguno, ó si la falta de citación no hubiera de darle la acción de nulidad que claramente establece la ley.

Además, el denunciante de una mina tiene derechos que son invulnerables y que deben ser, por lo mismo, respetados, y esos derechos son los que la ley ha querido poner á cubierto con las disposiciones citadas.

Adoleciendo la sentencia del Tribunal de la primera de las causales de casación del artículo 369 de la Ley 105 de 1890, por violación de ley sustantiva, y debiendo producir esta causal de por sí la anulación del fallo y la consiguiente consideración de los capítulos del litigio para fallar en el fondo, considera la Corte que no es debido ni oportuno entrar en la consideración de los otros dos motivos de casación alegados, á saber: el error en la estimación de la prueba y la falta de consonancia entre la sentencia y las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes, porque estos puntos necesariamente deben ser considerados al dictar la sentencia, si es que no se determina que se le dé al negocio la tramitación de juicio de deslinde; y en este caso no convendría que la Corte avanzase opiniones sobre el mérito de las pruebas, porque ellas quedan sujetas á estimación posterior, y las decisiones de la Corte entrabarían la libertad que el Juez de primera instancia y el Tribunal tienen en la apreciación de las pruebas al fallar lo de su resorte.

Situada la cuestión en el punto á donde debe llegar, según las consideraciones precedentes, que conducen á la casación de la sentencia del Tribunal, sería el caso de que se procediese á dictar la sentencia que debe recaer en la controversia; pero observa la Corte que no es tiempo aún de decidir el verdadero punto del litigio, porque éste no es otro que fijar la línea divisoria, ó sea el lindero entre la mina de la Compañía minera de Colombia y la de Santander, y á esta fijación no puede llegarse sin que se surta previamente el juicio de deslinde establecido por el Código de Minas y por el Judicial, cuando se trata de saber ó señalar los límites ó línea de demarcación entre dos minas ó predios colindantes.

La Compañía minera de Colombia, estimando que la mina denunciada por la Compañía minera de Santander comprendía todo ó parte de la mina que le había sido adjudicada y de la cual tenía título, se opuso á la posesión que iba á darse á la otra Compañía, en ejercicio del derecho que consagra el artículo 65 del Código de Minas; pero como esta disposición previene terminantemente que el juicio á que da lugar una oposición de esta clase, no es otro que el de deslinde ó amojonamiento conforme al capítulo 23 de la misma obra, ha debido el Juez ante quien se formalizó la oposición, dar á ella la tramitación determinada en el Código Judicial para los juicios de deslinde, esto es, señalar previamente en asocio de peritos, en vista del respectivo título y con citación de las partes, la línea divisoria entre las dos minas, línea que conforme al artículo 412 del citado Código, se presume que es el verdadero límite y que no puede variarse por la sentencia que se dicte en el juicio ordinario, sino cuando una de las partes, sea el actor ó el demandado, justifique plenamente que dicha línea debe pasar por ciertos puntos determinados, diferentes de los que se señalaron en la expresada diligencia de deslinde.

En este negocio se dió cabida extemporáneamente al juicio ordinario, porque es evidente que éste no puede tener lugar sino cuando, practicado el deslinde y conferido el traslado de la diligencia respectiva á las partes, alguna de ellas, ó ambas, no se conforman con tal deslinde.

Y el deslinde preparatorio que debe preceder al juicio ordinario no es una mera formalidad adjetiva ó de procedimiento, porque, como se ha visto, él fija la verdadera materia del juicio ordinario si hubiere lugar á él, ya que éste no puede tener cabida sino en virtud de la oposición al deslinde, y además dicho deslinde produce efectos de carácter sustantivo, de que no puede prescindirse sin alterar sustancialmente el carácter de la acción á que da lugar la oposición hecha por el dueño de una mina colindante al tiempo de darse la posesión de otra.

Más claro: en este asunto se ha prescindido del juicio y de la acción de deslinde á que ha debido dar lugar la oposición de la Compañía minera de Colombia, para dar entrada á un juicio directo ordinario sobre propiedad de determinado territorio minero, contraviniendo no sólo á leyes adjetivas sino también á disposiciones sustantivas que fijan la naturaleza de la acción que procede en el caso ocurrido.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, anula la sentencia pronunciada en este juicio por el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Norte del Departamento de Santander en diez y siete de Marzo de mil ochocientos noventa y dos, y dispone que á la oposición hecha por parte ó á nombre de la Compañía minera de Colombia á la posesión que iba á darse á la Compañía minera de Santander, de la mina á que se refiere el litigio, se le dé el curso correspondiente á la acción de deslinde, conforme lo dispone el artículo 65 del Código de Minas.

Respecto á los puntos de derecho ó de doctrina legal que debe fijar la Corte en cumplimiento del artículo 383 de la Ley 105 de 1890, se determina lo siguiente:

1.° Cuando no se haya dado aún la posesión de una mina denunciada antes de la vigencia del Código de Minas adoptado, deben ser citados los dueños ó denunciantes de minas colindantes ó inmediatas, en cumplimiento de lo que previene el artículo 51, concordante con los artículos 459 y 460 de dicho Código;

2.° La omisión de la citación produce la nulidad determinada en el inciso 7.° del artículo 94 del mismo Código, nulidad que no puede surtir otro efecto que el determinado en el artículo 110;

3.° La oposición del dueño de mina colindante en el caso del artículo 65 del antedicho Código, no puede dar lugar sino á un juicio de deslinde, del cual no debe prescindirse para seguir un juicio ordinario, sin que se haya surtido el deslinde preparatorio.

No se hace especial condenación en costas.

Publíquese esta sentencia, hágase saber á las partes, insértese en la *Gaceta Judicial*, déjese copia y devuélvase el expediente al Tribunal de su procedencia.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintiocho de Febrero de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Luis Francisco Alberto Matéus, hijo legítimo, menor de edad, de Francisco de Paula Matéus, demandó por medio de apoderado, constituído por su padre, ante el Juez 4.° del Circuito de Bogotá, en veinte de Octubre de mil ochocientos noventa, la nulidad del testamento cerrado de Isidora Licht, otorgado en veintiocho de Mayo y adicionado en nueve de Junio de ese mismo año, ante el Notario segundo del Círculo de Bogotá, el cual fué abierto y protocolizado ante el mismo Notario con fecha cinco de Julio siguiente.

La razón por la cual es nulo dicho testamento, dice el demandante, consiste en que uno de los testigos del adicionado, Oscar A. Noguera, reporta de él un provecho directo, por estar instituído legatario por la suma de mil pesos ($ 1,000), que deben tomarse de la cuarta parte de los bienes de libre disposición de la testadora.

Para el caso de que se alegue que el testamento y su adición, constituyen dos testamentos, demanda también la nulidad de ellos, porque el Notario no ha podido protocolizarlos ni el Registrador registrarlos, sin pagar más que los cuatro pesos que se pagaron por el derecho de Registro, circunstancia que anula tales actos, aunque se ocurra al medio de pagar todo el derecho de Registro causado, porque yá se verificó la inscripción que competía al Registrador.

Además alegó el derecho que para el primer caso de nulidad de que se trata se desprende de los títulos 3.°, 4.° y 5.° del Código Civil y las leyes que los reforman y adicionan.

Los hechos en que se funda la demanda son:

1.° Que Isidora Licht de Barbosa murió;

2.° Que Francisco de P. Matéus es padre legítimo del menor Alberto Matéus;

3.° Que este menor es nieto legítimo de Isidora Licht de Barbosa, y como tal está declarado heredero de ella;

4.° Que la citada Licht otorgó el testamento cuya nulidad se demanda, disponiendo en él de toda la cuarta parte libre de sus bienes en favor de extraños;

5.° Que Oscar A. Noguera fué testigo en ese testamento;

6.° Que dicho Noguera reporta de las disposiciones testamentarias de Isidora Licht un provecho directo de mil pesos ($ 1,000);

7.° Que por el derecho de Registro de la protocolización del testamento adicionado se pagaron cuatro pesos;

8.° Que el testamento se protocolizó después de registrarlo;

9.° Que el contenido del testamento adicionado manifiesta de suyo que algunas personas se confabularon para disponer de los bienes de Isidora Licht defraudando en su provecho los derechos hereditarios del único heredero, que lo es Luis Francisco Alberto Matéus.

La demanda fué dirigida contra Numa Pompilio Noguera, en calidad de albacea de Isidora Licht.

La primera instancia terminó con la sentencia que profirió el Juez 4.° del Circuito de Bogotá, en diez y siete de Agosto de mil ochocientos noventa y uno.

El Juez que pronunció esta sentencia llegó á las siguientes conclusiones:

1.ª Que Isidora Licht otorgó dos testamentos;

2.ª Que estos dos testamentos se contienen en dos pliegos cerrados que fueron abiertos y publicados en el Juzgado, en veintiocho de Junio de mil ochocientos noventa;

3.ª Que no figurando como testigo Oscar A. Noguera, en el testamento en el cual se le deja un legado, no existe la causal de nulidad de que trata la demanda principal;

4.ª Que aun suponiendo que los dos actos testamentarios de Isidora Licht debieran reputarse como un solo testamento, tampoco sería nulo en su totalidad, ya porque el testigo

tenía habilidad putativa, ya porque la inhabilidad de él sólo afectaría la cláusula en que se le instituye legatario.

En cuanto á la demanda subsidiaria, el Juez, en atención: á que el Notario protocolizó los dos testamentos sin que se hubiera pagado sino el impuesto correspondiente á uno solo, y á que conforme al artículo 6.° de la Ley 34 y al 332 de la Ley 57 de 1887 y 6.° del Código Civil, vigentes cuando se hizo la protocolización, se prohibía á los Notarios otorgar escrituras ó protocolizar documentos sin que se comprobara haberse pagado el derecho de Registro, so pena de nulidad, consideró nulos los citados testamentos.

En tal virtud resolvió lo siguiente:

"1.° Es infundada la demanda principal sobre nulidad de los testamentos á que este juicio se refiere;

"2.° Es fundada la demanda subsidiaria de que trata el libelo de fojas veinticinco á veintiocho de este cuaderno;

"3.° En consecuencia, decláranse nulos y de ningún valor ni efecto los dos testamentos cerrados otorgados por la señora Isidora Licht, en esta ciudad ante el Notario 2.° del Circuito, en los días veintiocho de Mayo y nueve de Junio de mil ochocientos noventa, que han originado la presente controversia;

"4.° No hay lugar á hacer condenación en costas."

De este fallo apeló la parte demanda. Concedido que fué el recurso y elevados los autos al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, se surtió la tramitación correspondiente, y ese Tribunal pronunció sentencia definitiva en veintiocho de Junio de mil ochocientos noventa y dos, revocando la de primera instancia y determinando lo siguiente:

"1.° No hay lugar á declarar nulos los testamentos de Isidora Licht á que se refiere la demanda.

"2.° No hay lugar á condenación en costas."

El Tribunal no estimó fundada ninguna de las dos causales en que se apoyó la demanda para sostener la nulidad de los testamentos. En cuanto á la primera estuvo de acuerdo con los razonamientos del Juez de primera instancia; pero respecto á la segunda juzgó que si bien conforme al artículo 6.° de la Ley 34 de 1887, interpretado por el 332 de la Ley 57 del mismo año, el instrumento que se protocoliza sin que se acredite el pago del correspondiente derecho de registro es nulo, esta nulidad se subsana mediante otro registro que se puede hacer en cualquier tiempo pagando el derecho doble, si se ha dejado trascurrir el tiempo señalado para el registro, en virtud de lo que disponen los artículos 2.° y 3.° de la citada Ley 34, y que habiéndose registrado dichos testamentos el diez y nueve de Noviembre de mil ochocientos noventa, previo el pago de diez y seis pesos, este registro hizo desaparecer el vicio de que adolecían aquéllos por la deficiencia en el primer pago.

Contra la sentencia de que acaba de hacerse relación introdujo recurso de casación en tiempo hábil y con poder bastante la misma persona que ha representado en el juicio á la parte demandante.

Concedido y sustanciado el recurso, ha llegado el tiempo de decidirlo.

Como la cuantía del negocio excede de tres mil pesos ($ 3,000), como hay contrariedad entre las sentencias de primera y de segunda instancia no sólo en lo principal del pleito sino también en la inteligencia de las leyes aplicadas y aplicables, y como además concurren las demás circunstancias exigidas por el artículo 366 de la Ley 105 de 1890, el recurso de que se trata tiene cabida; y en tal virtud la Corte entra á considerar las causales de casación alegadas en el escrito destinado á este efecto y presentado á la Corte en el término fijado por el artículo 377 de la mencionada ley.

El escrito dice así en la parte conducente:

"La causal en que se funda la interposición del recurso y las razones por que estimó haberse incurrido en ella, las designó así:

"1.° La sentencia acusada es violatoria del artículo 6.° de la Ley 34 de 1887, sobre registro de instrumentos públicos y privados, porque según esta disposición concordada con la contenida en el artículo 332 de la Ley 57 de 1887, son nulos los dos testamentos cerrados en referencia, porque el Notario los protocolizó y el Registrador los inscribió en el libro respectivo, sin haber pagado el derecho de cuatro pesos causado por cada uno de dichos testamentos cerrados, y la sentencia los declara válidos;

"2.° La violación de la ley sustantiva (artículo 6.° citado) que constituye la causal de que trata el ordinal 1.° del artículo 369 de la Ley 105 de 1890 y que dejo designada, es directa, pero también puede provenir de la aplicación indebida que el Tribunal sentenciador hizo de los artículos 2.° y 3.° de la Ley 34 citada y del 2,670 del Código Civil, por haber incurrido en el error de hecho, consistente en que la sentencia dice: 'Si se tiene en cuenta que la inscripción hecha el nueve de Julio de mil ochocientos noventa no puede llamarse registro de los testamentos, toda vez que entonces no se inscribió sino la diligencia de protocolización, como aparece de la nota del Registrador corriente al folio 22 del cuaderno número 1.°, y de la inspección practicada por el Juez de la causa. (Folio 62 ibidem);

"3.° La prueba del error de hecho se halla en la misma nota del Registrador citado por el sentenciador, pues ella dice así:

'Oficina de Registro del Círculo.—Bogotá, nueve de Julio de mil cientos noventa.

'Con fecha tres de los corrientes se inscribió este testamento en el libro de registro número segundo, á la página trescientos sesenta y una del tomo tercero, bajo el número mil cuatrocientos noventa y seis, y en esta fecha se inscribió la anterior diligencia de protocolización, en el mismo libro, á la página cuatrocientos cuatro del tomo tercero, bajo el número mil quinientos cincuenta y siete;'

"4.° Esta inscripción de los dos testamentos también se halla al fin de las copias que de ellos expidió el Notario que los protocolizó, según se ve á los folios 21 vuelto y 44 frente del cuaderno número primero del expediente, y

"5.° Fundóse, pues, el Tribunal sentenciador en el error de que los testamentos no estando registrados ni antes ni después de la protocolización, hasta el diez y nueve de Noviembre de mil ochocientos noventa, bien pudieron registrarse en dicha fecha, mediante el pago de diez y seis pesos, es decir, del doble del derecho causado por los dos testamentos cerrados, según lo permiten los artículos 2.° y 3.° de la Ley 34 citada y 2,670 del Código Civil; pero destruído el error, la aplicación de tales leyes al caso del pleito es totalmente indebida.

"Os pido en consecuencia, señor Magistrado, que prosigais en la sustanciación del recurso.

"Otro sí: La sentencia referida también es violatoria del artículo 332 citado, porque en éste se interpreta y se determina el alcance del artículo 6.° de la Ley 34 de 1887, y el del inciso 2.° del artículo 6.° del Código Civil, el cual por ser concordante del 6.° de la Ley 34 y del 332 de la Ley 57 mencionada, quedó comprendido en la violación."

La inteligencia que debe darse al artículo 6.° de la Ley 34 de 1887, en relación con el 332 de la Ley 57 del mismo año, es, pues, el objeto principal de este recurso, ya que se alega la violación de estas disposiciones, que han servido de fundamento á la acción que ha quedado pendiente de las dos que se hicieron valer en la demanda.

La primera de las dos disposiciones citadas dice que los Notarios no otorgarán escrituras ni protocolizarán documentos sin que se compruebe haberse pagado el derecho de registro respectivo, y la segunda que la prohibición de que habla aquélla con relación á los Notarios, no implica la nulidad de las escrituras que otorguen ni la de los documentos que protocolicen, si antes de verificar el registro respectivo se pagare el correspondiente derecho.

De la doctrina interpretativa de la última disposición, se infiere que una escritura que se otorgue ante un Notario, ó un documento que se protocolice ante él son nulos, si no se ha pagado el correspondiente derecho de registro. Pero esta sanción no tiene, á juicio de la Corte, el carácter general de las nulidades absolutas, sino únicamente el de hacer que los instrumentos en que se ha omitido el pago de aquel impuesto

carezcan de valor ó de fuerza legal mientras no se efectúe el pago, ó más claro, la escritura que se haya otorgado ó el instrumento que se haya protocolizado ante un Notario sin pagar el correspondiente derecho de registro no hacen fe y deben estimarse como no otorgados; pero este efecto, semejante al de la nulidad absoluta, puede subsanarse pagando el derecho correspondiente, doble ó sencillo, según el caso, y haciendo registrar el instrumento.

Al efecto, la citada Ley 34 señaló en su artículo 2.° el término de veinte días para verificar el registro de los documentos sujetos á esa formalidad, el 4.° estableció el impuesto correspondiente á cada uno de ellos y el 3.° permitió hacer el registro aun pasado el término de veinte días pagando en este caso el derecho doble.

El objeto del artículo 332 de la Ley 57 de 1887 no es otro que el de que las partes puedan evitar las graves consecuencias de la omisión del pago de un impuesto, y consiste en permitir que se haga el registro del instrumento que carecía de valor ó era nulo, si se paga el impuesto correspondiente.

Y no puede argüirse que á este medio no puede ocurrirse cuando, como sucede en el caso de este pleito, el documento nulo ha sido ya registrado, por dos razones:

1.ª Porque siendo el registro un accesorio ó dependencia del documento, si éste es nulo ó carece de fuerza, la misma suerte corre aquél, y el registro ha sido establecido, entre otros objetos, con el de dar mayores garantías de autenticidad y seguridad á los títulos, actos y documentos que deben registrarse, haciendo intervenir en su guarda y confección un número mayor de funcionarios y precaviéndolos de los peligros á que quedarían expuestos si la constancia de tales actos, títulos y documentos existiera en una sola Oficina. (Artículo 2,637 del Código Civil). De modo que si se inscribe en el registro un documento que es nulo, el registro no le da firmeza ni contribuye en lo mínimo á sanear el vicio de que adolece, y tal registro es una diligencia completamente inútil é ineficaz. Por lo mismo, entre el registro de un instrumento defectuoso por la falta de una formalidad esencial y el registro del mismo instrumento yá revalidado por el cumplimiento de esa misma formalidad, debe preferirse el último que no va afectado del vicio que le comunicaba el primer documento;

2.ª Porque, aun dado caso que el primer registro fuera admisible, no habría inconveniente para verificar otro, una vez que este último registro está expresamente permitido por el artículo 2,670 del Código Civil.

El Tribunal de Cundinamarca, al resolver que el registro de los testamentos de Isidora Licht, verificado el diez y nueve de Noviembre de mil ochocientos noventa, previo pago de los correspondientes derechos de registro, subsanó la nulidad de que esos instrumentos pudieran adolecer por haberse protocolizado sin pagar el derecho mencionado, no violó las leyes que cita el recurrente, sino que, al contrario, las interpretó rectamente.

Cuanto al error de hecho en la apreciación de la prueba, tampoco lo hay, porque el Tribunal no dice que los testamentos no habían sido registrados antes del diez y nueve de Noviembre de mil ochocientos noventa, sino que la diligencia asentada el nueve de Julio de ese mismo año es el registro de la protocolización y no el de los testamentos (estos lo habían sido desde el tres), y esto es lo que resulta de la nota del Registrador y de la inspección practicada por el Juez de primera instancia.

Respecto á la violación del artículo 6.° del Código Civil, basta decir para afirmar que la sentencia no infringió esta disposición, que ella no podría afectar sino la protocolización, que fué el acto en que el Notario dejó de cumplir un deber de su cargo, y que el juicio no versa sobre nulidad de la protocolización sino de los testamentos protocolizados.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara infundado el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia pronunciada en este juicio por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en veintiocho de Junio de mil ochocientos noventa y dos, aprueba esa sentencia y condena al recurrente en las costas del recurso.

Tratándose de la interpretación de leyes ya derogadas, como la Ley 34 de 1886 y el artículo 332 de la Ley 57 del mismo año, no es el caso de que la Corte establezca ó formule doctrina especial sobre su inteligencia.

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 1511 del Código Judicial se ordena al Secretario de la Corte que inmediatamente saque copia de los testamentos de Isidora Licht, de las posiciones absueltas por Numa P. Noguera, presentadas en copia por el apoderado del actor, y de la parte correspondiente del memorial del mismo apoderado de doce de Noviembre último, y pásese al Fiscal del Juzgado 1.° Superior de Cundinamarca para que se averigüe si Numa P. Noguera ha cometido el delito de perjurio y el de malversasión de los bienes de Isidora Licht.

Publíquese en audiencia, notifíquese á las partes, insértese en la *Gaceta Judicial*, déjese copia de este fallo y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintiocho de Febrero de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Eustaquio Cogollos, vecino del Distrito municipal de Garagoa (Departamento de Boyacá), ocurrió por medio de apoderado á la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones para que se le reconociera á cargo del Tesoro nacional la suma de cuatrocientos pesos ($ 400), valor de una mula que las fuerzas nacionales al mando del General Agustín Venegas le quitaron en mil ochocientos ochenta y cinco. La Comisión negó en auto de veintidós de Septiembre último el reconocimiento pedido, providencia que fué confirmada el treinta de Noviembre siguiente por el Ministerio del Tesoro en resolución número 3,364, que ha venido en apelación á esta Superioridad.

Corrido el correspondiente traslado al Fiscal de la Comisión de suministros y fijado en lista este negocio, se procede á fallarlo.

Con la demanda de reconocimiento se presentó una información sumaria de testigos que no servía para acreditar la verdad de la expropiación, por haber sido levantada ante una autoridad incompetente, como lo era el Juez municipal de Miraflores. Para allanar ese inconveniente se dió comisión al Juez del Circuito de Neiva para que recibiera las mismas declaraciones ó la de otros testigos presenciales de la exacción; pero desgraciadamente para el interesado no se pudo reunir el número de declaraciones que exige la Ley 44 de 1886 en el ordinal 3.° de su artículo 2.°, es decir, deposiciones de tres testigos idóneos y contestes, por lo menos, que dieran la razón de su dicho.

En mérito de lo expuesto, es jurídica la negativa del reconocimiento solicitado, y por ello, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridadad la ley, y de acuerdo con el concepto del Fiscal, confirma la providencia apelada.

Notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

IMPRENTA DE ANTONIO M. SILVESTRE.
Director, Tomás Galarza.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AÑO VIII | Bogotá, 5 de Mayo de 1893. | NÚM. 387.

CONTENIDO.

Págs.

Diligencia de visita..... 185
Relación de los negocios despachados por la Corte en el mes de Abril del presente año..... 187

PENA CAPITAL.

La que confirma el fallo por el cual el Tribunal Superior de Antioquia condenó á Mariana Sánchez á la pena de muerte, por el delito de parricidio. (Magistrado ponente, doctor Pombo)..... 188

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

La que declara infundado el recurso de casación interpuesto contra la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior de Cundinamarca, en el juicio seguido por Alejandro Rodríguez F. contra Leonidas Posada Gaviria, por pesos. (Magistrado ponente, doctor Villafrádez)..... 190
La que concede á Petrona Mateo de Villalobos una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas)..... 192
La que confirma la resolución que dictó el Ministerio del Tesoro en la reclamación de Evangelista Llantén, por expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Villafrádez)..... 172

GACETA JUDICIAL.

ACTA

DE LA VISITA PRACTICADA EN LA SECRETARÍA DE LA CORTE EL 29 DE ABRIL DE 1893.

En la ciudad de Bogotá, á las ocho y treinta minutos a. m. del día veintinueve de Abril de mil ochocientos noventa y tres, Su Señoría el Presidente de la Corte se presentó en la Secretaría de la misma, con el objeto de practicar la visita que prescribe el artículo 7.° de la Ley 100 de 1892. Al efecto, estando presente el señor Secretario, el Oficial Mayor y los demás empleados de la Oficina, se procedió á tal acto en el orden siguiente y con la debida extensión, por ser ésta la primera visita que en cumplimiento de dicha ley se hace á la Secretaría de la Corte.

En la Secretaría se llevan los siguientes libros:

I

a) Radicadores.

1. De negocios de una instancia, civiles y criminales.
2. De negocios de casación, de revisión y de recursos de hecho.
3. De negocios civiles.
4. De negocios criminales.
5. De negocios de recompensas.

b) De repartimiento.

6. De negocios de una instancia, civiles.
7. De negocios de una instancia, criminales.
8. De negocios de casación civil.
9. De negocios de casación criminal.
10. De negocios de sentencias civiles comunes.
11. De negocios de suministros etc.
12. De negocios de procesos militares.
13. De negocios de suspensión de Ordenanzas.
14. De negocios de autos civiles.
15. De negocios de autos criminales.
16. De negocios de competencia.
17. De negocios varios.
18. De negocios de recursos de hecho.
19. De negocios de recursos de revisión.
20. De negocios de sentencias criminales.
21. De negocios de recompensas y pensiones.

c) Copiadores.

22. De demandas.
23. De poderes.
24. De sentencias de casación.
25. De sentencias varias.
26. De autos.
27. De salvamentos de voto.
28. De oficios de la Presidencia.
29. De oficios de la Secretaría.
30. De telegramas.

d) De recibos.

31. De expedientes que se entregan al señor Procurador.
32. De expedientes que se entregan al Fiscal de la Comisión
33. De expedientes que se entregan en otras Oficinas.
34. De expedientes que se entregan á la Administración de Correos.
35. De expedientes que se entregan á particulares.

e) Libros varios.

36. De posesión de empleados.
37. De diligencias de visita.
38. De registro de despachos.
39. De Acuerdos de la Corte.

Todos los libros se llevan con esmero, se hallan al corriente y en ellos se hacen importantes anotaciones sobre el curso de los negocios á que se refieren.

II

Negocios en curso.

El señor Secretario los tiene distribuídos en este orden:

1.° Los de recompensas y suministros por secciones, en orden alfabético;

2.° Los de casación, según sus especies;

3.° Los relativos á notificaciones que se están surtiendo;

4.° Los negocios varios, distintos de los anteriores, que aguardan despachos ó la práctica de alguna diligencia;

5.° Los negocios criminales de que conoce la Corte en una sola instancia;

6.° Los que pasan al estudio de los señores Magistrados.

Se observa que á todos estos negocios, que se hallan en el mayor orden, atiende el señor Secretario con todo esmero, y que su mesa se halla al corriente.

III

CUADRO QUE REPRESENTA EL MOVIMIENTO DE NEGOCIOS EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DURANTE EL PRESENTE MES.

	SENTENCIAS.					AUTOS.							NEGOCIOS DE UNA SOLA INSTANCIA.				
	CASACIÓN.		CIVILES DE 2.ª INSTANCIA.		Criminales de 2.ª instancia.			Procesos militares.	Competencias.	Recursos de hecho.	Recursos de revisión.	Negocios varios.			Suspensión de Ordenanzas.	Recompensas.	TOTALES.
	Civiles.	Pena capital.	Negocios varios.	Suministros etc.		Civiles.	Criminales.						Civiles.	Criminales.			
Pendientes en 31 de Marzo de 1893...	23	2	10	166	2	5	2	4	...	1	2	2	2	22	4	563	810
Repartidos en Abril.....	5	2	3	7	...	5	5	...	...	1	...	2	1	...	2	8	41
Totales.....	28	4	13	173	2	10	7	4	...	2	2	4	3	22	6	571	851
Despachados en el mes.....	3	1	1	8	...	2	2	2	...	...	...	1	...	6	1	11	38
Pendientes en 30 de Abril.....	25	3	12	165	2	8	5	2	...	2	2	3	3	16	5	560	813

CUADRO QUE REPRESENTA EL NÚMERO DE PROYECTOS PRESENTADOS POR CADA UNO DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SOBRE LOS NEGOCIOS CUYO DESPACHO SE RELACIONA EN EL CUADRO ANTERIOR (ABRIL).

	SENTENCIAS.					AUTOS.							NEGOCIOS DE UNA SOLA INSTANCIA.				
	CASACIÓN.		CIVILES DE 2.ª INSTANCIA.		Criminales de 2.ª instancia.			Procesos militares.	Competencias.	Recursos de hecho.	Recursos de revisión.	Negocios varios.			Suspensión de Ordenanzas.	Recompensas.	TOTALES.
	Civiles.	Pena capital.	Negocios varios.	Suministros etc.		Civiles.	Criminales.						Civiles.	Criminales.			
Doctor Pombo.....	1	...	...	2	...	1	...	...	...	...	...	...	...	...	1	2	7
Doctor Isaza.....	...	...	...	...	...	...	1	...	...	...	...	...	...	2	...	1	4
Doctor Botero Uribe.....	...	1	...	2	...	...	...	...	...	...	...	1	...	...	...	1	5
Doctor Casas Rojas.....	1	...	1	2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1	...	1	6
Doctor Corrales.....	...	...	...	1	...	1	...	1	...	...	...	...	...	1	...	1	5
Doctor Galindo.....	1	...	...	1	...	...	1	1	...	...	...	...	...	2	...	4	10
Doctor Trujillo.....	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1	1
Totales.....	3	1	1	8	...	2	2	2	...	...	...	1	...	6	1	11	38

IV

Protocolos.

Están empastados con pasta española y llevan índices en letra clara y correcta los correspondientes al período de la nueva Corte, de 1886 á 1892, en el orden siguiente:

1.° Copiadores de autos; 2.° copiadores de sentencias varias; 3.° copiadores de sentencias de casación.

Los libros protocolos del año en curso se llevan al corriente con el mayor cuidado.

V

Correspondencia.

En legajos bien arreglados por meses y años, se hallan las notas y oficios que se han recibido en la Secretaría.

VI

Archivo.

No obstante la falta de estantes adecuados ha sido perfectamente arreglado el de la nueva Corte, el cual tiene índices bien formados que corresponden á las diferentes especies de negocios que se custodian en el Archivo, de modo que es fácil encontrar cualquier expediente. El Archivo antiguo necesita, como el señor Secretario lo ha indicado varias veces, un empleado especial para su arreglo formal.

VII

Estadística.

Llévase un libro, diferente de los antes enumerados, donde se hace un resumen general, pero en secciones separadas, de todos los negocios de que conoce la Corte, se anota su curso desde su repartimiento hasta su despacho, y se lleva la relación del movimiento diario, mensual y anual de la Corte, indicándose el número y clases de negocios y el Magistrado que los sustancia. De este libro se toman los datos necesarios para formar los cuadros que se publican en la *Gaceta*.

VIII

Empleados de la Secretaría

La Secretaría tiene estos empleados, además del Jefe de la Oficina:

El Oficial Mayor, doctor Joaquín Esguerra Ortiz;

Once Escribientes, de los cuales siete se emplean de preferencia en escribir á los señores Magistrados y los otros cuatro pertenecen exclusivamente á la Secretaría. Entre estos últimos figura el encargado de examinar los fallos de los Tribunales para hacer relaciones sobre el modo como han aplicado ó interpretado las leyes.

El Portero.

El Oficial Mayor, que se ocupa de preferencia en preparar los expedientes que deben devolverse á las Oficinas de su procedencia y de la remisión de copias de sentencias dictadas por la Corte en asuntos de recompensas, tiene su mesa al corriente. Lo mismo se observa respecto del Escribiente de la Secretaría, señor Román Baños, encargado especialmente de los libros de radicación y repartimiento; Jenaro Orjuela, que anota, bajo la inspección del Secretario, cuanto se refiere á la estadística de la Corte y extiende las diligencias de notificación y recibo de notas y despachos; Ignacio Ruiz, cuyo oficio es extender edictos, los certificados de su fijación y desfijación, y llevar el libro de recibos de expedientes que se entregan á particulares y el libro copiador de poderes; Leopoldo Silva, encargado del protocolo de sentencias definitivas; Plácido Malo, que lleva el libro copiador de autos; Bruno Gutiérrez, el de negocios de casación, y Anatolio Castillo, que lleva el libro de Acuerdos, forma los índices de los negocios que se archivan, y coloca éstos en el orden debido.

Los demás oficiales, señores Venancio E. Ortiz, Rafael Pombo M. y Daniel Caro Grau, que en la Secretaría se ocupan de preferencia en extender en limpio, con esmero y corrección, los proyectos aprobados por la Corte, tienen también sus mesas perfectamente arregladas.

El Escribiente creado por el artículo 3.° de la Ley 100 de 1892, ha comenzado su labor, para lo cual se han pedido á los Tribunales colecciones de las *Revistas Judiciales*, se han comprado varios libros y se prepara una pieza especial y estantes para colocar en el orden debido dichas colecciones. Tal destino es desempeñado por el señor doctor Antonio Pachón.

La mesa del Portero se halla bien arreglada, pues no hay en ella ningún negocio demorado y se llevan con arreglo y aseo los diferentes libros de recibos que este empleado maneja. Este destino, que antes era demasiado gravoso para un sólo empleado, se ha hecho de fácil y eficaz desempeño, merced al servicio que presta un agente de Policía que á solicitud de la Secretaría, elevada al Ministerio de Gobierno, puso á su disposición el Director de la Policía nacional.

IX

Horas de trabajo.

Según la Ley vigente (100 de 1892) y las anteriores, la Oficina ha estado abierta todos los días no feriados ó de vacaciones, de las 8 á las 10 a. m. y de las 12 a. m. á las 4 p. m., y muchas veces el despacho se ha prolongado. Siguiendo las instrucciones de la Presidencia, se ha abierto un cuadro para anotar las faltas de días y horas de los empleados á la Oficina; pero en este mes no ha habido que hacer anotaciones, porque dichas faltas, que han sido muy pocas, han tenido excusa comprobada.

X

Gaceta Judicial.

Se guardan en la Secretaría varias colecciones de este órgano de la Corte; pero el Secretario advierte:

1.° Que á causa de abundancia de materiales, de las vacaciones de Diciembre y Enero últimos y del retardo, excusable sin duda, en acordar con la imprenta de D. Antonio M. Silvestre el contrato sobre edición de la *Gaceta*, apenas se está publicando lo despachado en Febrero del presente año;

2.° Que en el curso del próximo mes de Mayo se pondrá al corriente el periódico;

3.° Que de varias Oficinas y particulares se reciben reclamos sobre la no entrega en este año de la *Gaceta*;

4.° Que es preciso se avise al público por quien corresponda cuál es la Oficina donde se reciben suscripciones á la *Gaceta* y donde pueden comprarse números sueltos;

5.° Que la Secretaría se encarga de enviar el periódico á los empleados de orden judicial y del Ministerio Público residentes fuera de Bogotá, siempre que se le proporcione una pieza adecuada y unos dos estantes capaces;

6.° Que debe fijarse el precio de la *Gaceta* para cuando cada año se componga de más de los 52 números que lo han formado hasta hoy. Esto es indispensable para que, sin perjuicio del Erario, puedan imprimirse los números suficientes para llevar la *Gaceta* al corriente;

7.° Que en la imprenta de Silvestre se edita la *Gaceta* con prontitud y esmero.

XI

Mueblaje y útiles de escritorio.

Merced á los escritorios nuevos remitidos últimamente á la Corte para el servicio de los señores Magistrados, los antiguos han sido destinados al servicio de la Secretaría y de la Sala de audiencias. (No se ha recibido el escritorio pedido para el servicio del Secretario).

Aun no se han recibido los demás muebles y objetos solicitados por la Corte al Ministerio de Fomento, que son los siguientes:

Un crucifijo de 80 centímetros para el salón de audiencia.
Siete estantes para los libros de los señores Magistrados.
Seis pupitres para los litigantes.
Una docena de taburetes.
Una docena de sillas.
Un estante grande con sus cajones, para uso de la Secretaría.
Un estante grande para la librería de la Corte.
Todos estos son necesarios para el paramento conveniente de la Oficina.

De los útiles de escritorio se lleva cuenta exacta aun de las cosas más minuciosas, aparte de las cuentas detalladas que se remiten de los almacenes donde se toman tales útiles. De los $ 500 que corresponden á este año para útiles de escritorio se han pagado los saldos anteriores y lo que resta no alcanza para atender á los demás gastos durante el presente año.

XII

Salones de la Corte.

Como se ha dicho, éstos son insuficientes para el numeroso personal y para el archivo de la Secretaría, pero se han hecho en ellos algunas mejoras, consistentes en ventanas que eran necesarias para darles luz. En el salón de audiencias y en las demás Oficinas de la Corte se están haciendo actualmente algunas mejoras de reconocida necesidad.

Como no hubo otro asunto á que extender la visita, Su Señoría el Presidente la dió por terminada y dispuso se publicase esta acta en la *Gaceta Judicial*.

El Presidente de la Corte, LUCIO A. POMBO.—El Secretario, *Gabriel Rosas*.

RELACION

DE LOS NEGOCIOS DESPACHADOS POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 1893.

Señor Magistrado doctor Pombo.

1.—Abril 19.—Civil de casación.—Juicio seguido por Rafael Aizpuru contra J. G. Luque, sobre cumplimiento de un contrato.

2.—Abril 15.—Suministros etc.—Reclamación de Miguel A. Arango y otros.

3.—Abril 23.—Suministros etc.—Reclamación de Alejandro Gutiérrez y otros.

4.—Abril 19.—Auto civil.—Juicio seguido contra Valentín Pérez, por contrabando.

5.—Abril 22.—Suspensión de Ordenanza.—Solicitud de José María Sierra S., sobre suspensión de la Ordenanza número 13 (1892) de Cundinamarca.

6.—Abril 25.—Recompensa militar.—Solicitud de Dominga Muñoz, por haber muerto su hijo José Pérez en la guerra de 1876.

7.—Abril 25.—Recompensa militar.—Solicitud del Sargento 2.° Vicente Acosta Ospina, por invalidez causada en la guerra de 1860.

Señor Magistrado doctor Isaza.

1.—Abril 25.—Auto criminal.—Causa seguida contra Miguel Piedrahita Casas, Juez del Circuito de Toro, por mala conducta.

2.—Abril 15.—Negocio criminal de una instancia.—Denuncio de Carlos Carbons contra el Magistrado del Tribunal de Panamá, doctor Agustín Jované, por infracción del artículo 439 del Código Penal.

3.—Abril 14.—Criminal de una instancia.—Denuncio suscrito por Ildefonso Manrique, vecino de Neiva, contra el Magistrado del Tribunal de allí, doctor Elisio Medina, por infracción del artículo 540 del Código Penal.

4.—Abril 24.—Recompensa militar.—Solicitud de Aureliano Rojas, por invalidez causada en la guerra de 1876.

Señor Magistrado doctor Botero Uribe.

1.—Abril 27.—Pena capital.—Causa seguida contra Apolinar Restrepo, por el delito de parricidio perpetrado en la persona de su esposa Dolores Ochoa.

2.—Abril 8.—Suministros etc.—Reclamación de Pedro Miguel Pérez.

3.—Abril 27.—Suministros etc.—Reclamación de Juan N. Rincón Motta.

4.—Abril 18.—Negocio vario.—Solicitud del preso Hipólito Sánchez sobre rebaja de pena.

5.—Abril 29.—Recompensa militar.—Solicitud de Digna Perlaza, por haber muerto su esposo en la guerra de 1860.

Señor Magistrado doctor Casas Rojas.

1.—Abril 14.—Civil de casación.—Juicio seguido por Julián Campuzano contra la Compañía del Acueducto de Bogotá, para que ésta se abstenga de quitar el agua que mueve un molino de propiedad de aquél.

2.—Abril 18.—Sentencia civil común.—Juicio seguido por el Fiscal del Tribunal Superior del Cauca contra José J. Bayer y Pedro Ríos, sobre posesión de la mina denominada "La-Granja."

3.—Abril 21.—Suministros etc.—Reclamación de Vicente B. Villa & Hijos y otros.

4.—Abril 29.—Suministros etc.—Reclamación de Agustín y Leandro Mogollón.

5.—Abril 14.—Criminal de una instancia.—Denuncio de H. Simpson Burke contra el Magistrado del Tribunal de Panamá, doctor Agustín Jované, por falta en el cumplimiento de sus deberes.

6.—Abril 14.—Recompensa militar.—Solicitud de Mercedes y María Josefa Carrasquilla, como nietas de un militar de la Independencia.

Señor Magistrado doctor Corrales.

1.—Abril 7.—Auto civil.—Juicio seguido por Angélica Giróu y otros, contra la Sociedad explotadora de los bosques del "Alto Chilibre."

2.—Abril 14.—Suministros etc.—Reclamación de Santos Hurtado.

3.—Abril 17.—Proceso militar seguido contra el Subteniente Aristides Liévano, por heridas á un superior.

4.—Abril 4.—Criminal de una instancia.—Denuncio dado por Elciario María Torres contra el doctor Rafael E. Castañeda, Magistrado del Tribunal de Tunja, por varios cargos.

5.—Abril 22.—Recompensa militar.—Solicitud de Félix Torrijos, como nieto de un General de la Independencia.

Señor Magistrado doctor Galindo.

1.—*Abril 25.—Civil* de casación.—Juicio seguido sobre nulidad del testamento de Bautista Vaca G.

2.—Abril 14.—Suministros etc.—Reclamación de Demetrio Hurtado M.

3.—Abril 5.—Proceso militar seguido contra Buenaventura Caicedo, por homicidio.

4.—Abril 22.—Auto criminal—Juicio seguido contra Luis Carlos Piñeres, por varios hechos criminosos, como Prefecto de la Provincia de San-Andrés, en el Departamento de Bolívar.

5.—Abril 18.—Criminal de una instancia.—Denuncio suscrito por Apolinar Ruiz Manzano contra el señor Gonzalo Mejía, Magistrado del Tribunal de Popayán, por haber fallado contra ley expresa.

6.—Abril 26.—Criminal de una instancia.—Denuncio dado por Lorenzo Gaona contra los señores Jesús María Quintero Manuel A. Rueda G. y Nicolás Enciso, Magistrados del Tribunal de Cundinamarca, por infracción de leyes expresas.

7.—Abril 18.—Recompensa militar.—Solicitud de Lucinda Ortiz, por haber muerto su esposo en la guerra de 1876.

8.—Abril 18.—Recompensa militar.—Solicitud de Juan Domingo Soscué, como inválido de la guerra de 1876.

9.—Abril 22.—Recompensa militar.—Solicitud de Leticia Lindo, como hija de un militar de la Independencia.

10.—Abril 28.—Recompensa militar.—Solicitud de María Juliana Rivera, por haber muerto su esposo en la guerra de 1885.

Señor Magistrado doctor Trujillo.

1.—Abril 17.—Recompensa militar.—Solicitud de María Fidela Caicedo, por muerte de un hermano en la guerra de 1860.

PENA CAPITAL.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veinticinco de Febrero de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Mariana Sánchez, en su calidad de reo del delito de parricidio, y su defensor, han interpuesto recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, de fecha diez y nueve de Octubre del año próximo pasado, sentencia que confirmó la de primera instancia del Juez 1.° Superior del mismo Distrito Judicial, de fecha treinta de Julio del año expresado, por la cual fué condenada Mariana Sánchez á sufrir la pena capital.

Elevado á la Corte el expediente y encargado ante ella de la defensa Bernardo Escobar, se ha seguido la sustanciación propia del recurso hasta el estado de ser decidido por esta Superioridad, lo que hará en seguida después de una breve relación de los hechos.

En la mañana del siete de Enero del yá citado año de mil ochocientos noventa y dos, fué descubierto por Zoraida Márquez y Ana Josefa Cano el cadáver de un niño recién nacido y medio sepultado en el solar de la casa de la misma Márquez, situada en la población de Segovia. Ese descubrimiento tuvo por causa las sospechas que las citadas mujeres concibieron de que Mariana Sánchez, que ocho días antes había ido á servir de cocinera en casa de la Márquez, había dado á luz al expresado niño la noche anterior, ya porque la Cano había notado el estado interesante de la Sánchez, ya por las huellas de sangre que notaron en la cama en que ella había dormido, cerca de la cama en el suelo, en el corredor de la casa, y en la pesebrera ó caballeriza de la misma, ya, en fin, por las señales de susto que notaron en la misma Sánchez.

Sorprendidas dichas mujeres con el hallazgo del cadáver, llamaron á Mercedes Moncada, madre de la Márquez, á Encarnación Gómez y á Balbaneda Rendón, quienes de común acuerdo y sin exhumar enteramente el niño muerto, resolvieron dar parte á la autoridad. Inmediatamente se presentó el Juez municipal de Segovia, y asociado de los peritos Pío F. González, Fermín Arboleda y Sixto Uribe, se practicó la exhumación completa del cadáver, el cual, dicen, fué hallado cubierto con tierra de la cintura para arriba, y con una herida punzón, entre el ombligo y el esternón, que según la autopsia que ellos mismos practicaron, había interesado el hígado y el corazón del niño. Los mismos peritos reconocieron en la Sánchez señales evidentes de un reciente parto, y en la indagatoria que rindió el mismo día siete, al preguntarle si conocía la criaturita que se le puso de presente, y cuándo y por qué mujer fué dada á luz, contestó: "Esta criatura es mía, la di á luz anoche como á las doce, la cual, después de nacida, por una media *movencionsita*, comprendí que estaba viva." Preguntada si sabía qué le había sucedido

á esa criaturita en el vientre, mostrándole la herida que reconocieron los peritos, contestó: "quién sabe eso con qué sería, porque arma no tenía yo; que busquen. Yo fuí quien enterró esa criatura; otro no podía hacerlo, porque conmigo no había nadie; yo la enterré, creyendo estaba muerta."

Aunque la misma Sánchez en su indagatoria posterior negó sistemáticamente todo lo que pudiera comprometerla, y aun los hechos que yá había afirmado, es lo cierto que á varias personas, según lo han declarado, entre otras, Alejandro Orozco, Rosa Amelia Jaramillo, Ana Joaquina Ramírez y Cecilia Mesa, les dijo la Sánchez que ella había dado muerte al niño por ser hijo de Juan Bautista Zapata, á quien aborrecía, por haber contraído matrimonio con Cristina Tamayo, siendo notable la relación que la citada Ramírez hace de lo que le dijo la Sánchez, á saber: "que el niño había nacido en el corredor de la casa de Justiniano Gómez, que es la misma que habita Mercedes Moncada; que allí le tapó la boca para que no llorara y salió con él para el solar, y que hizo el hoyito, y..... comprendí, dice la testigo, que me iba á decir que había hecho el hoyito para enterrarlo; pero en eso llegó el señor Alcalde, y yo me retiré, pues ella se sorprendió, y no volví á conversar más con ella. Sí, me dijo, agrega la Ramírez, que había conocido el niño al nacer, porque la noche estaba muy clara." Estas confesiones de la Sánchez, de que hablan los testigos, tuvieron lugar en la cárcel de Segovia.

Resulta, además, comprobado en el proceso, que Mariana Sánchez fué condenada por un infanticidio anterior, y que sufrió la pena de presidio en Medellín; que de allí salió, y acompañada de Juan Bautista Zapata, se trasladaron á Segovia, en donde vivieron públicamente amancebados, diciendo que eran casados; que después se separaron, porque Zapata contrajo matrimonio con Cristina Tamayo, y enfurecida la Sánchez, creyéndose yá encinta, lanzó la amenaza de no criar al hijo de Zapata, como lo declara también el mismo Zapata.

El Juez 1.° Superior del Distrito Judicial de Antioquia, como lo dice en su auto de diez y seis de Mayo, no encontrando que el examen pericial diera la plena prueba del hecho importante, de si la criatura nació viva, por no haberse practicado la docimasia pulmonar, creyó que era el caso de convocar Jurado de acusación, para que éste declarara si había lugar al seguimiento de causa. Al efecto, sorteado y reunido el Jurado, éste resolvió el enjuiciamiento, y en consecuencia, el mencionado Juez de acuerdo con ese veredicto, abrió causa criminal contra Mariana Sánchez por el delito de homicidio perpetrado en la persona de un hijo suyo recién nacido.

Seguido el juicio por la tramitación que la ley señala, aunque sin producirse prueba alguna en favor de la procesada, se reunió el Jurado de calificación, compuesto de José María Martínez C., Celedonio Restrepo y Julián Vásquez U., y en veredicto de veintisiete de Julio último, se declaró: "Se ha cometido el delito de que tratan los artículos 583, 584, 585, 586, 593 y castiga el 615 del Código Penal vigente, consistente en haber dado muerte á un hijo suyo recién nacido, lo que tuvo lugar en el Municipio de Segovia en la noche del seis al siete de Enero del corriente año. Mariana Sánchez es responsable de esta infracción como autora principal."

Basado en este veredicto se pronunció por el Juzgado la sentencia de treinta del mismo mes de Julio, por la cual se condenó á Mariana Sánchez á sufrir la pena de muerte. La notificación de esta sentencia hubo de suspenderse hasta el veintiuno de Septiembre siguiente, por la circunstancia de haberse sospechado que la condenada estuviese de nuevo encinta, para dar cumplimiento á lo dispuesto en el artículo 53 del Código Penal, y hecho el respectivo reconocimiento por los profesores nombrados, éstos creyeron que no había signos de embarazo. Hecha la notificación de la sentencia, la procesada interpuso apelación, que le fué concedida para ante el Tribunal, y sustanciada allí la causa, se pronunció la sentencia de segunda instancia, de fecha diez y nueve de Octubre, yá citada, por la cual se confirmó la de primera.

Tanto la procesada como su defensor hicieron uso del derecho de interponer el recurso de casación, que les fué concedido, y en consecuencia, se han remitido los autos á la Corte, la que procede, previa la sustanciación del recurso, á examinar si en el proceso que se tiene á la vista concurre alguna de las tres causales que en materia criminal dan derecho á interponer el recurso de casación, conforme al artículo 370 de la Ley 105 de 1890.

El señor Procurador de la Nación en su concienzuda, jurídica y erudita exposición del veintitrés de Enero último, después de demostrar que no aparece del proceso la prueba culminante plena y completa de la existencia de una criatura viva, que en tratándose de infanticidio es el cuerpo del delito, base del procedimiento criminal, después de hacer notar, fundado en opiniones de autores respetables de Medicina legal, que esa prueba sólo puede obtenerse satisfactoriamente con el examen docimástico de los órganos respiratorios que no se practicó en el cadáver del niño de que se trata, y después de algunas observaciones acerca de los indicios que sirvieron de fundamento á los Jurados de acusación y de calificación para estimar en conciencia la existencia del cuerpo del delito, ó lo que es lo mismo, el hecho de que Mariana Sánchez dió muerte á su hijo recién nacido, dice el señor Procurador: "Mas como entre tales indicios hay algunos vehementes, el referido veredicto (hablando del de calificación), no es tachable de injusticia notoria en razón á que no se le puede considerar contrario en manera alguna á la evidencia de los hechos que se tuvieron en cuenta para dictarlo;" y luégo agrega: "Siendo esto así, y no obstante los reparos que dejo hechos sobre la calidad de algunas de las pruebas del proceso, soy de opinión que la sentencia apelada no es casable, por no estar en ninguno de los casos del artículo 370 de la Ley 105 de 1890, es decir, por no haberse incurrido en informalidad alguna, de las que pudieran viciar el procedimiento, ni ser dicha sentencia violatoria de ley sustantiva ó doctrina legal, ni notoriamente injusto el veredicto del Jurado."

La Corte ha visto también con satisfacción los laudables esfuerzos hechos por el defensor del reo ante la Corte en el no menos jurídico y erudito alegato presentado por él, y reconoce que su laborioso escrito acaso habría sido muy importante ante el Jurado de calificación para desvirtuar la convicción de la no existencia de una prueba plena y completa de la muerte violenta del niño recién nacido con la demostración evidente de que nació vivo. Y aunque toda su defensa ha sido encaminada á demostrar que el veredicto del Jurado, es notoriamente injusto, por no estar evidenciado en el proceso el cuerpo del delito, olvida que esta causal de casación no puede ser acogida por la Corte sino en el caso de que aparezca del proceso que el veredicto es contrario á la evidencia, ó lo que viene á ser lo mismo, cuando del proceso resulta que es *evidente* que no se ha cometido el delito declarado ó calificado en ese veredicto. ¿Y quién podría sostener que en el caso de que se trata es evidente que el niño que fué dado á luz por Mariana Sánchez nació muerto? ¿Si esa evidencia debe buscarse en el proceso mismo, en qué parte de él podría señalarse la prueba que produjera á la Corte esa convicción?

La relación de los hechos tales como aparecen del proceso y que no pueden dejar de calificarse de indicios vehementes, como lo dice el señor Procurador, no tienen hecho alguno en contrario y evidentemente probado que pudiera hacer formar una convicción contraria á la del Jurado. Por consiguiente, no tendría en qué apoyarse la Corte para calificar de notoriamente injusto el veredicto, que ha sido la base de la sentencia que se examina, y que ha sido también la única causal de casación alegada contra ella. En cuanto á las otras causales, yá lo dijo el señor Procurador, ni la sentencia es violatoria de ley sustantiva ó de doctrina legal, ni en el seguimiento de la causa se ha incurrido en informalidad alguna de las que pudieran viciar de nulidad el proceso.

En esta virtud, la Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador de la Nación, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, por la cual se confirmó la de primera instancia que condenó á Mariana Sánchez á sufrir la pena capital, no es casable, y en consecuencia, la aprueba.

Por lo demás, esta Superioridad acoge las observaciones hechas por el señor Procurador de la Nación y por el defensor respecto de la falta de una prueba incontestable de que el hijo de Mariana Sánchez hubiese nacido vivo, prueba que diese á conocer con evidencia la existencia del cuerpo del delito; y por lo mismo, y viéndose en la necesidad de confirmar la sentencia de muerte que ha sido materia de la casación, no vacila en hacer uso de la facultad que le confiere el artículo 4.° de la Ley 56 de 1887, para pedir, como pide al Excelentísimo Señor Presidente de la República, la conmutación de la pena impuesta á Mariana Sánchez.

Notifíquese, déjese copia, insértese en la *Gaceta Judicial* y remítase la causa á Su Señoría el Ministro de Justicia para los efectos ulteriores.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintitrés de Febrero de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: En el juicio ordinario que ha sido objeto del presente proceso, promovido por Alejandro Rodríguez F. contra Leonidas Posada Gaviria, para que se condenara á éste á entregar al demandante la suma de diez y seis mil noventa y ocho pesos sesenta y cinco centavos ($ 16,098-65), en libranzas contra las Aduanas del seis por ciento anual, provenientes de ajustamientos militares de varios individuos, ó á pagarle su valor estimado por peritos, más los intereses legales de dicha suma, devengados desde que tales documentos debieron ser entregados por el demandado, y las costas procesales, juicio en el cual han figurado como partes coadyuvantes, en calidad de acreedores primitivos de algunos de esos ajustamientos, Apolinar Ruiz Manzano y Julián Caicedo V., por medio de su apoderado Andrés Lara, interpuso Rodríguez F. recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia, que en grado de apelación, pronunció el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca con fecha diez y ocho de Marzo de mil ochocientos noventa y dos.

Concedido aquel recurso y sustanciado debidamente ante la Corte, es yá tiempo de decidirlo, y á ello procede esta Superioridad.

La sentencia de primera instancia, proferida por el Juez 3.° del Circuito de Bogotá, que conoció de la controversia en ese grado, fué pronunciada en estos términos:

"1.° Condénase al señor Leonidas Posada Gaviria á entregar al demandante las libranzas que corresponden por ajustamientos militares á los señores Julián Victoria y Julián Caicedo V., éste por sí y como Habilitado de un Cuerpo que sirvió al Gobierno en la guerra de mil ochocientos ochenta y seis (1886) y mil ochocientos ochenta y siete (1887), ó á pagarle el valor de ellas estimado por peritos, más los respectivos intereses legales, computados desde que Posada recibió las libranzas;

"2.° Condénase al mismo señor Posada Gaviria á entregar las libranzas que por el mismo motivo corresponden al señor Apolinar Ruiz Manzano, ó su valor estimado pericialmente y los intereses legales correspondientes. La entrega ó pago de estas libranzas debe hacerse al señor Andrés Lara, último apoderado constituído por Ruiz Manzano para recibir;

"3.° Absuélvese al demandado de los demás cargos de la demanda, porque no se probó que el causante del actor hubiera tenido poderes de algunos de los individuos militares á que hace referencia la demanda, y porque aunque se presentó el poder de los otros, ese poder no lo facultaba para vender como cosa propia las libranzas que obtuvo en los reclamos que hizo á nombre de ellos. Esta absolución no indica que se reconoce á Posada como dueño de las libranzas, porque ellas pertenecen á los individuos militares verdaderos dueños, quienes tienen derecho de reclamarlas;

"4.° No están probadas las excepciones perentorias de falsedad y petición antes de tiempo ó de un modo indebido, y

"5.° Está probada la de ilegitimidad de la personería, sólo en parte ó sea en cuanto tiene que ver con los individuos de quienes el causante del actor no presentó poder, y con aquéllos de quienes aunque existe poder, éste no tiene facultad ó cláusula de disponer del fruto de los reclamos sobre ajustamientos militares."

Y el Tribunal Superior, decidiendo la apelación que contra tal fallo se intentó, resolvió lo siguiente:

"1.° Condénase á Leonidas Posada Gaviria á entregar al demandante Alejandro Rodríguez F. las libranzas que por ajustamientos militares, corresponden á Julián Victoria, ó á pagarle el valor de ellas, estimado por peritos, más los intereses legales respectivos, computados desde que Posada recibió las libranzas;

"2.° Absuélvese al demandado de los demás cargos de la demanda, sin que por esto se entienda que se le reconoce derecho de dominio en los valores que depositó en el Banco;

"3.° Declárase probada en parte la excepción perentoria de *ilegitimidad de la personería del demandante*;

"4.° No están probadas las otras excepciones, y

"5.° Queda en estos términos reformada la sentencia apelada. No hay costas."

Comparando estos dos fallos se ve que hay contrariedad entre ellos, en una parte de lo que ha sido objeto principal del pleito, dado que en el primero se condena al demandado á entregar libranzas ó pagar valores, de cuya entrega y pago se le absulve en el segundo, y observando á la vez que con este requisito concurren todos los demás que la ley exige para que sea admisible el recurso de casación interpuesto por Rodríguez F., como son: el de haberse intentado oportunamente y por persona hábil; el de versar el pleito sobre intereses particulares, cuya cuantía excede de tres mil pesos ($ 3,000); el de regir en toda la República las leyes en que se funda y ha debido fundarse la sentencia recurrida, y el de haber sido ésta dictada definitivamente en juicio civil ordinario, y en segunda instancia, por un Tribunal Superior de Distrito Judicial,—esta Superioridad, cumpliendo con el precepto del artículo 381 de la Ley 105 de 1890, admite dicho recurso y entra, en consecuencia, á examinar, para decidirlo, las causales de casación alegadas por el recurrente, siguiendo el mismo orden adoptado por éste al proponerlas.

Sostiene en primer lugar el recurrente que la sentencia acusada debe casarse por la causal 4.ª de las que enumera el artículo 369 de la Ley 105 de 1890, ó sea por haber habido incompetencia de jurisdicción inprorrogable en el Tribunal sentenciador para sustanciar y decidir este juicio en segunda instancia, en razón á que no habiendo consignado la parte apelante sino un solo sello de papel y no el papel necesario para dar curso al negocio en el término señalado por el artículo 122, en relación con el 58 de la Ley 105 citada, el recurso interpuesto queda desierto conforme á la primera de esas disposiciones, y el Tribunal perdió por esto *ipso facto* la jurisdicción que le daba la apelación concedida, sin que le quedara otra facultad que la de declarar ejecutoriado el fallo objeto de la alzada, por lo cual se ha avocado, al conocer de esa segunda instancia y decidirla, una jurisdicción que no tenía y que no ha podido prorrogársele por ministerio de la ley ni por voluntad de las partes.

Según el artículo 15 de la Ley 72 de 1890, jurisdicción en lo judicial, es la facultad de administrar justicia, y corresponde al Poder Judicial, esto es, á los Jueces y Tribunales á quienes se ha conferido el ejercicio de ésta, y según el artículo 156 del Código Judicial, esa facultad respecto de una causa determinada depende de la naturaleza de ésta y del lugar en que se ha de ventilar. En el presente caso no se ha disputado al Tribunal de Cundinamarca su competencia por razón de la naturaleza de la causa, ni podía hacérsele con fundamento semejante objeción, pues en el ordinal 1.°, artículo 74 del Código de Organización Judicial, se atribuye clara y terminantemente á los Tribunales Superiores de Distrito, el conocimiento en segunda instancia de todos los negocios civiles de que en primera conocen los Jueces de Circuito, entre los cuales se hallan expresamente compren-

didos los juicios ordinarios de mayor cuantía, como el que han seguido Rodríguez F. y Posada Gaviria, según se ve en el inciso 15, artículo 113 del Código últimamente citado, salvo los atribuídos á la Corte Suprema y Tribunales de Distrito, á cuya clase no pertenece el presente.

Tampoco se ha negado por el recurrente la jurisdicción del Tribunal sentenciador, por razón del lugar en que el juicio se ha ventilado, y aunque originariamente hubiera habido incompetencia por ese motivo, ninguna de las partes tendría derecho de alegarla, porque tratándose, como se trata, de una causa que, según se ha visto, es por su naturaleza de la incumbencia del Juez y Tribunal que han conocido de ella sucesivamente, y siendo prorrogable la jurisdicción en cuanto depende del lugar en que debe seguirse el juicio, por voluntad de las partes, según los artículos 166 á 168 del citado Código de Organización, tanto el demandante como el demandado la habrían prorrogado tácitamente, conforme á esas disposiciones, el primero, al proponer su demanda ante el Juez del Circuito de Bogotá y el segundo, al contestarla sin oponer la excepción de declinatoria de jurisdicción.

Lo que la parte recurrente alega es que el Tribunal no tenía jurisdicción para sustanciar y librar este pleito en segunda instancia, por háberla perdido desde que el recurso de apelación interpuesto para ante él quedó desierto, y la sentencia de primera instancia contra la cual se intentó virtualmente ejecutoriada, por sólo el hecho de no haber consignado el apelante en oportunidad sino un solo sello de papel y no el papel necesario para dar curso al negocio; y éste es, por consiguiente, el punto sujeto á la decisión de la Corte, con motivo de la causal de casación deducida en primer término por parte de Rodríguez F. En tal concepto, esta Superioridad observa que en efecto el apelante Posada Gaviria no suministró más que un sello de papel para la actuación en el término señalado para ello por el artículo 122 de la Ley 105 de 1890, y juzga que por esta razón bien pudo el Tribunal, considerando que ese papel no era el necesario para dar curso al negocio, declarar ejecutoriada la sentencia de primera instancia; pero como aquella Superioridad rehusó hacer esta declaración, interpretando diversamente la citada disposición legal y negando, en consecuencia, las solicitudes que sobre el particular le fueron dirigidas, es obvio que no existe ni ha existido la causa generadora de la pérdida de la jurisdicción del Tribunal, para conocer en esta causa, porque según el inciso 3.°, artículo 152 del Código de Organización Judicial, que es el aplicable en la cuestión, tal pérdida no tiene lugar sino cuando el negocio se halla fenecido y ejecutoriada la sentencia que le puso término, lo cual, como se ha visto, no ha sucedido en el caso presente, sin que pueda razonablemente decirse que la ejecutoria de la sentencia se ha surtido *ipso jure*, ó por el solo ministerio de la ley, tanto porque el artículo 122 supracitado exige que se haga declaración expresa de la ejecutoria, como porque ésta envuelve cuestiones de hecho, que requieren necesariamente una resolución del Juez ó Tribunal de la causa en la oportunidad señalada por la ley.

La otra causal de casación alegada es la primera de las establecidas por el artículo 369 de la Ley 105 de 1890, y se funda en que la sentencia del Tribunal es violatoria de ley sustantiva siéndolo directamente y por interpretación errónea del artículo 1871 del Código Civil en relación con el 1857 ibidem, en apoyo de lo cual se expresa el recurrente en estos términos:

"La sentencia contra la cual interpongo este recurso desconoce mi derecho de propiedad ó dominio sobre las libranzas materia de la demanda. Estas libranzas fueron vendidas por el doctor Manuel José Patiño al señor Braulio Jiménez por documento de fecha veinticuatro de Mayo de mil ochocientos ochenta y nueve, y el señor Braulio Jiménez me vendió á mí las mismas libranzas en documento de fecha seis de Septiembre del mismo año. Si el doctor Manuel José Patiño no tenía facultad como apoderado legalmente constituído de los individuos dueños de esas libranzas para venderlas al señor Braulio Jiménez, le vendió cosa ajena, y el señor Jiménez me hizo á mí la misma clase de venta. Estas ventas son válidas conforme al citado artículo del Código Civil, que dice: "La venta de cosa ajena vale, sin perjuicio de los derechos del dueño á la cosa vendida, mientras no se extingan por el lapso de tiempo;" es decir, que tales ventas surten todos sus efectos contra el señor Leonidas Posada Gaviria, que no es el dueño de las libranzas, que no ha demostrado serlo y que está probado en el juicio que no lo es, pues que está acreditado que pertenecían á los primitivos dueños de los ajustamientos militares de donde provienen dichas libranzas. En consecuencia, son estos dueños los que pueden reclamar contra aquellas ventas, mientras no se extingan sus derechos por el lapso de tiempo. Y esto es tanto más cierto cuanto que en los documentos de las mencionadas ventas constan éstas como hechas pura y simplemente, es decir, sin sujetar la validez de los contratos á la validez de los poderes ni de las facultades que al vendedor doctor Patiño hubieran conferido los primitivos dueños de los ajustamientos militares origen de las libranzas vendidas."

En vista de las disposiciones del Código Civil que el recurrente considera violadas por la sentencia del Tribunal y de los documentos con que se han tratado de probar las ventas sucesivas hechas por Manuel José Patiño á Braulio Jiménez, y por éste á Alejandro Rodríguez F., de unas libranzas provenientes de ajustamientos militares que no pertenecían á los vendedores, y cuya entrega persigue en este juicio el último comprador, bien pueden reputarse válidamente, celebradas esas ventas y válidas por consiguiente las obligaciones que ellas imponen á los contratantes, junto con los derechos correlativos, salvo los del dueño ó dueños de las cosas vendidas, que no se hayan extinguido por la prescripción, y dedúcese de aquí derecho en los compradores para pedir la entrega de las libranzas objeto de aquellos contratos; pero este derecho y la acción que de él nace son puramente personales y no pueden hacerse valer sino contra las personas que por un hecho suyo ó la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas, según lo establece el artículo 666 del Código citado, lo que quiere decir en el presente caso que Rodríguez F. ha podido reclamar la entrega de las libranzas en cuestión de su vendedor Jiménez; mas no de Posada Gaviria, quien no consta que se haya obligado á ello, ni lo está tampoco por la sola disposición de la ley. El recurrente cree y sostiene que por la sentencia del Tribunal se le desconoce su derecho de propiedad ó dominio sobre las libranzas materia de la demanda, sin embargo de no haber probado la adquisición de ese derecho por alguno de los medios ó modos establecidos por el artículo 673 del Código Civil, que son: la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción, juzgando que basta la celebración de un contrato de compraventa sobre una cosa, para que el comprador adquiera la propiedad de ésta, lo cual envuelve un error manifiesto, pues ese derecho y la acción reivindicatoria que de él nace y en virtud de los cuales el dueño de una cosa corporal de que no está en posesión, puede reclamar que el poseedor de ella sea condenado á restituírsela, son reales, conforme á los artículos 665 y 667 del preindicado Código, y no se adquieren sino por alguno de los modos señalados en el artículo 673 ibidem y de que arriba se ha hecho mención; ninguno de los cuales, se repite, ha sido justificado por el demandante en este juicio. La compraventa es uno de los títulos traslaticios del dominio, y en virtud de ella puede hacerse válidamente la tradición de éste (artículos 745 y 765 del Código Civil); pero por la mera celebración de ese contrato no se trasmite al comprador el derecho real de dominio sobre la cosa vendida, si ésta no se le ha entregado en la forma legal, y así lo declara la Corte en cumplimiento del artículo 371 de la Ley 105 de 1890 y para los efectos allí determinados.

A mérito de las precedentes consideraciones, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara infundado el recurso de casación interpuesto por la parte de Alejandro Rodríguez F. contra la sentencia definitiva que para decidir el presente juicio pronunció en segunda instancia el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca con fecha diez y ocho de Marzo del año próximo pasado; apruèba en consecuencia ese fallo, y condena al recurrente en las costas del recurso.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial*, y devuélvanse los autos al Tribunal de su procedencia.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Febrero veintisiete de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Petrona Mateo de Villalobos, vecina de San Juan de Córdoba en el Departamento del Magdalena, solicita de la Corte, por medio de apoderado, le conceda la recompensa militar á que le da derecho de conformidad con la Ley 84 de 1890, su carácter de madre legítima del Capitán Ignacio Villalobos, quien rindió la vida en defensa de las actuales instituciones, en el combate de Barú, el veinte de Abril de mil ochocientos ochenta y cinco.

Comprueban el derecho de la demandante los siguientes documentos:

1.° Tres certificaciones expedidas por el párroco de San Juan Bautista de la Ciénaga y que acreditan: la primera, que Petrona Mateo contrajo matrimonio eclesiástico con Ignacio Villalobos en Abril de mil ochocientos cuarenta; la segunda, que en los libros parroquiales de San-José de Pueblo-viejo y de San-Juan Bautista de la Ciénaga, no aparece la partida de bautismo de Ignacio Villalobos, hijo legítimo de Petrona Mateo, ni la de defunción del padre legítimo de aquél, llamado también Ignacio Villalobos, á causa de hallarse incompleto el archivo de la primera de estas dos parroquias con motivo de los incendios frecuentes que han ocurrido allí; y la tercera, que Petrona Mateo no ha contraído segundas nupcias, y que su hijo Ignacio no fué casado;

2.° Una certificación del Notario público de San-Juan de Córdoba, con la cual se acredita que no hay en la Notaría partida de nacimiento de Ignacio Villalobos (hijo), ni de defunción de su padre, del mismo nombre, ni constancia de que el primero se hubiese casado ni civil ni eclesiásticamente ni hubiese hecho reconocimiento alguno de hijos naturales ni otorgado testamento;

3.° Informe dado de orden del Gobernador del Magdalena por el Subjefe de Archivos, del cual resulta que el libro en que fueron extendidos los decretos expedidos por el Presidente del extinguido Estado del Magdalena en el mes de Enero y primeros días de Febrero de mil ochocientos ochenta y cinco, desapareció con motivo de haber tenido el Gobierno que evacuar la plaza de Santamarta el veintiuno de Febrero del dicho año de mil ochocientos ochenta y cinco; y que, en consecuencia, no existe el nombramiento que se hizo en Ignacio Villalobos para Capitán de una de las Compañías del *Batallón Santamarta;*

4.° Copia autorizada del Decreto número 239 de veintiséis de Agosto de mil ochocientos ochenta y cinco, expedido por el Presidente del Estado, y por medio del cual se concedió á los herederos de varios finados, entre ellos el Capitán Ignacio Villalobos, muerto en el combate de Barú, ciertas recompensas del Tesoro del Estado, habiendo correspondido á los del expresado Capitán la suma de ochenta y un pesos veinticinco centavos que recibió la madre, Petrona Mateo;

5.° Copia autorizada de varias notas oficiales cruzadas entre el Secretario general del Magdalena y el comisionado fiscal del mismo Estado, con una de las cuales se acredita plenamente la muerte del Capitán Villalobos en el combate de Barú;

6.° Declaraciones rendidas ante el Juez 1.° del Municipio de San-Juan de Córdoba por cuatro testigos idóneos con intervención fiscal, y en virtud de las cuales se acreditan plenamente los siguientes hechos: 1.° que el Capitán Villalobos era notoriamente reconocido como único hijo legítimo de Ignacio Villalobos y Petrona Mateo; 2.° que el padre murió de muerte natural el año de mil ochocientos sesenta y nueve; 3.° que la madre está hoy en avanzada edad y sumamente pobre, y que observó tanto con su esposo como con su hijo muy buena conducta y vivió en completa armonía con ellos;

7.° Certificaciones de los Jefes militares, Lázaro A. Riascos y Policarpo Costañeda, quienes dan testimonio cierto del fallecimiento del Capitán Villalobos en el combate indicado de Barú, prueba que todavía se halla reforzada por declaraciones contestes rendidas ante el Juez 1.° del Circuito de Santamarta, de las cuales, además, se deduce el empleo de Capitán que Villalobos tenía á tiempo de morir;

8.° Otras declaraciones rendidas ante el propio Juez 1.° del Circuito de Santamarta para acreditar que el Capitán tántas veces citado no fué casado ni dejó otro deudo que pueda optar derecho á la recompensa, que la madre Petrona Mateo, y

9.° Certificación del señor Ministro del Tesoro, sobre que la demandante no ha recibido del Tesoro público nacional recompensa alguna.

Estos comprobantes no dejan duda acerca de la justicia que asiste á la expresada demandante, razón por la cual la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el parecer del señor Procurador, declara que Petrona Mateo de Villalobos tiene derecho, según los artículos 5.° (inciso 2.°) y 9.° de la Ley 84 de 1890, á una recompensa unitaria definitiva de tres mil ciento veinte pesos ($ 3,120), que se le pagarán del Tesoro público nacional, por la muerte de su hijo el Capitán Ignacio Villalobos.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial*. comuníquese á Su Señoría el Ministro del Tesoro, y archívese,

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintiocho de Febrero de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Evangelista Llantén demandó ante la Comisión de suministros el reconocimiento de mil setecientos cincuenta pesos ($ 1,750), proveniente de expropiaciones que dice le hicieron de varios semovientes autoridades al servicio del Gobierno, en el Distrito del Tambo, Departamento del Cauca, en los meses de Marzo y Abril de mil ochocientos ochenta y cinco.

La Comisión absolvió á la Nación del cargo, por no haber presentado el demandante la prueba legal del derecho que reclama, por resolución de cuatro de Agosto de mil ochocientos noventa y dos, confirmada por el Ministerio del Tesoro, en cinco de Octubre siguiente.

Por haber apelado el apoderado de Llantén, corresponde á la Corte fallar definitivamente el asunto.

En la referida resolución de la Comisión, dictada después de dos autos para mejor proveer, encaminados á llenar los defectos de la prueba testimonial, única aducida, se demostró de una manera clara y que no deja lugar á duda que no existen respecto de cada hecho las declaraciones de tres testigos hábiles y que den razón satisfactoria de su dicho, requerida en estos casos por la Ley 44 de 1886.

El interesado se ha limitado después á apelar sin decir siquiera en qué funda el recurso ni si puede presentar otras pruebas complementarias de lo deficiente que se encuentra ya en los autos.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la resolución apelada.

Déjese copia de este fallo, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

IMPRENTA DE ANTONIO M. SILVESTRE.
Director, Tomás Galarza.

REPÚBLICA DE COLOMBIA.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AÑO VIII | Bogotá, 10 de Mayo de 1893. | NÚM. 388.

CONTENIDO.

Págs.

Acuerdos de la Corte..... 193

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

La que declara no ser casable el fallo pronunciado por el Tribunal Superior de Cundinamarca en el juicio seguido por Medardo Ribas contra Enrique y Angel María Zalamea, sobre pago de una suma de pesos. (Magistrado ponente, doctor Corrales)..... 195

La que concede á Beatriz Bedoya una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Galindo)..... 198

La que reconoce á favor de Gregorio Agudelo y otros un crédito, por empréstitos. (Magistrado ponente, doctor Corrales)..... 198

NEGOCIOS CRIMINALES.

La que confirma el fallo por el cual el Consejo de Guerra ordinario condenó á prisión al Cabo 1.º Juan Luna, como responsable de la fuga de un preso. (Magistrado ponente, doctor Botero Uribe). 199

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

El que niega la revocación de la resolución dictada por la Corte, con fecha seis de Febrero último en el juicio ejecutivo seguido por Guillermo Ponce contra Vicente Berrío. (Magistrado ponente, doctor Trujillo)..... 200

El que revoca el auto ejecutivo dictado por el Administrador municipal de Hacienda de Buriticá contra Teodoro David. (Magistrado ponente, doctor Corrales)..... 200

GACETA JUDICIAL.

ACUERDO NUMERO 743.

En la ciudad de Bogotá, á trece de Agosto de mil ochocientos noventa y dos, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con el objeto de tomar en consideración un oficio de Su Señoría el Ministro de Justicia, fecha de ayer, en el que solicita de esta Corporación la terna, de la cual debe nombrarse un Magistrado para llenar la vacante ocurrida en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Panamá, por el fallecimiento del señor Magistrado doctor Luis R. Alfaro.

Procedióse á la elección, y verificada ésta, dió por resultado la adopción, por unanimidad, de la terna siguiente:

Señores doctores Facundo Mutis Durán, José Antonio Sosa y José María Vives León.

En consecuencia, dispuso la Corte se comunicara esta elección á Su Señoría el Ministro de Justicia, para dejar cumplida la nota arriba citada.

Con lo que se terminó el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados y el Secretario.

El Presidente, LUCIO A. POMBO.—El Vicepresidente, LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

ACUERDO NÚMERO 744.

En la ciudad de Bogotá, á diez y nueve de Agosto de mil ochocientos noventa y dos, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con el objeto de adoptar las ternas que pide el señor Ministro de Justicia para llenar las vacantes ocurridas en los Tribunales del Tolima y Cundinamarca, en el primero, por excusa admitida al señor Magistrado doctor Nicasio Barreiro, y en el segundo, por renuncia del señor Magistrado doctor José María González Valencia.

Y para este efecto, se procedió á la elección, que dió por resultado la adopción unánime de las ternas siguientes:

Para el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Sur del Tolima, la compuesta de los señores doctores Juan Nepomuceno Méndez, Enrique Esguerra M. y Julio Estévez Bretón.

Para el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, la compuesta de los señores doctores Isaías Castro U., Alejandro Motta y Nicolás Enciso.

Y verificada esta elección, dispuso luégo la Corte que se comunicara á su Señoría el Ministro de Justicia, para dar cumplimiento á su nota fechada en diez y ocho de los corrientes, y para que ese Ministerio pueda dar igualmente cumplimiento á lo que dispone el inciso 2.º del artículo 119 de la Constitución de la República.

Con lo cual terminó el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados con el Secretario.

El Presidente, LUCIO A. POMBO.—El Vicepresidente, LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

ACUERDO NÚMERO 749.

En la ciudad de Bogotá, á veintiséis de Octubre de mil ochocientos noventa y dos, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, y Su Señoría el Presidente de ella, puso en su conocimiento un oficio del señor Ministro de Justicia, en el que solicita de esta Corporación elija y remita á ese Ministerio la terna correspondiente, de la cual debe nombrarse un Magistrado para llenar la vacante ocurrida en el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Sur en el Departamento del Tolima, por renuncia aceptada al doctor Elisio Medina.

Procedióse, pues, á la elección, y ésta dió por resultado la adopción unánime de la terna siguiente:

Doctores Germán D. Pardo, Alejandro Motta y Adolfo León Gómez.

Y en consecuencia, la Corte dispuso que se comunicara esta terna á Su Señoría el Ministro de Justicia, en respuesta á su nota de fecha 22 de los corrientes, marcada con el número 277.

Con lo cual se dió por terminado este Acuerdo, que firman los señores Magistrados y el suscrito Secretario de la Corte.

El Presidente, LUCIO A. POMBO.—El Vicepresidente, LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—MARIANO DE JESÚS MEDINA.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—Gabriel Rosas, Secretario.

ACUERDO NÚMERO 751.

En la ciudad de Bogotá, á veintitrés de Enero de mil ochocientos noventa y tres, se reunió la Corte Suprema de Jus-

ticia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, y el señor Presidente de ella puso en su conocimiento un oficio del señor Ministro de Justicia, en el que se solicita de esta Corporación designe la terna que debe llenar una vacante en el Tribunal del Distrito Judicial de Popayán, por separación del señor Magistrado doctor José N. Vernaza.

A este efecto, se procedió á la elección de la terna, y hecho el escrutinio resultó adoptada la terna que sigue, por mayoría de votos:

Doctor José Nicolás Vernaza, doctor Célimo Bueno y doctor León Solarte.

La Corte ordenó se comunicara al señor Ministro esta terna, dejando así contestada su nota número 665, de fecha 20 de los corrientes.

Con lo cual se concluyó el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, LUCIO A. POMBO. — El Vicepresidente, LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—FEDERICO PATIÑO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO. — LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

ACUERDO NÚMERO 752.

En la ciudad de Bogotá, á veintiocho de Enero de mil ochocientos noventa y tres, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, compuesta de los señores Magistrados, doctores Lucio A. Pombo, Presidente; Luis M. Isaza, Vicepresidente; Baltasar Botero Uribe, Federico Patiño, Jesús Casas Rojas, Juan Evangelista Trujillo y Lucas Villafrádez, con el objeto de dar cumplimiento á lo dispuesto en el artículo 51 del Código de Organización, sobre el nombramiento de Conjueces de la Corte Suprema; y al efecto, esta Corporación adoptó por unanimidad la siguiente lista para el presente año de 1893:

1. Adolfo Vargas.
2. Alejo de la Torre.
3. Andrés Lara.
4. Aníbal Galindo.
5. Antonio Roldán.
6. Aristides Forero.
7. Carlos Martínez Silva.
8. Domingo Ospina C.
9. Felipe Silva.
10. Jesús Rozo Ospina.
11. Jesús María Arteaga.
12. José Ignacio Trujillo.
13. José Ignacio Escobar.
14. Joaquín Martínez E.
15. Luis Rubio S.
16. Nicolás J. Casas.
17. Octavio Salazar.
18. Rafael Martínez R.
19. Rafael Mariño C.
20. Salomón Forero.

La Corte dispuso que esta elección se comunicara á los señores nombrados y á Su Señoría el Ministro de Justicia.

Con lo cual se dió por terminado este Acuerdo, que firman los señores Magistrados con el Secretario de la Corte.

El Presidente, LUCIO A. POMBO.—El Vicepresidente, LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—FEDERICO PATIÑO. — JUAN EVANGELISTA TRUJILLO. — LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

ACUERDO NÚMERO 753.

En la ciudad de Bogotá, á primero de Febrero de mil ochocientos noventa y tres, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, compuesta de los señores Magistrados doctores Lucio A. Pombo, Presidente; Luis M. Isaza, Vicepresidente, Baltasar Botero Uribe, Jesús Casas Rojas, Federico Patiño, Juan Evangelista Trujillo y Lucas Villafrádez, con el objeto de nombrar las dos ternas que deben llenar las vacantes ocurridas en el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cauca, la una por renuncia del Magistrado doctor Abraham F. de Soto, y la otra, por muerte del doctor Anselmo V. Delgado.

Verificada la elección, la Corte adoptó las dos ternas siguientes:

1.ª Doctor Manuel A. Sanclemente, doctor Célimo Bueno y doctor Luis Felipe Campo.

2.ª Doctor Gonzalo Mejía, doctor Teófilo Valenzuela y doctor José Inocencio Calero.

Con lo cual se dió por terminado el Acuerdo, que firman los señores Magistrados y el Secretario de la Corte, después de haber dispuesto esta Corporación que se comunicara el presente Acuerdo á Su Señoría el Ministro de Justicia para los fines legales.

El Presidente, LUCIO A. POMBO.—El Vicepresidente, LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS. — FEDERICO PATIÑO. — JUAN EVANGELISTA TRUJILLO. — LUCAS VILLAFRÁDEZ. — *Gabriel Rosas*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 754.

En la ciudad de Bogotá, á diez de Febrero de mil ochocientos noventa y tres, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, compuesta de los señores Magistrados doctores Lucio A. Pombo, Presidente; Luis M. Isaza, Vicepresidente; Baltasar Botero Uribe, Jesús Casas Rojas, Federico Patiño, Juan Evangelista Trujillo y Lucas Villafrádez y del infrascrito Secretario.

El señor Presidente dió cuenta de un oficio de Su Señoría el Ministro de Justicia, en el cual solicita las dos ternas que deben llenar dos plazas nuevas, creadas la una en el Tribunal Superior del Norte de Santander y la otra en el Tribunal Superior de Panamá.

A este efecto, se procedió á la elección, y verificado el escrutinio, dió por resultado adoptar las dos ternas siguientes, que la Corte propone á Su Señoría el Ministro de Justicia:

Para llenar la nueva plaza del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Norte de Santander, la compuesta de los señores doctores Juan de la Cruz Duarte, Aníbal García Herreros y Víctor Manuel Otero.

Para llenar la nueva plaza del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Panamá, la compuesta de los señores doctores José Antonio Sosa, Justo Arosemena y Lino Clemente Herrera.

En consecuencia, se dispuso comunicar este Acuerdo á Su Señoría el Ministro de Justicia, para dar cumplimiento á lo solicitado en el citado oficio número 695, de fecha 31 de Enero del año en curso.

Con lo que se dió por concluído el presente Acuerdo.

El Presidente, LUCIO A. POMBO.—El Vicepresidente, LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS. — FEDERICO PATIÑO. — JUAN EVANJELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

ACUERDO NÚMERO 755.

En la ciudad de Bogotá, á catorce de Febrero de mil ochocientos noventa y tres, hallándose la Corte Suprema de Justicia, constituída en Sala de Acuerdo, Su Señoría el Presidente de ella puso en conocimiento de la Corporación una nota oficial de Su Señoría el Ministro de Justicia, conducto por el cual solicita el Poder Ejecutivo una terna para nombrar el Magistrado que debe llenar la vacante ocurrida en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca.

Y para el efecto, se procedió á la votación, que dió el siguiente resultado:

Siete votos por el señor doctor Alejandro Motta, seis por el señor doctor Joaquín Molino, cuatro por el señor doctor Enrique Rojas B., tres por el señor doctor Ricardo Pardo y uno por el señor doctor Germán D. Pardo.

Habiendo obtenido la mayoría los señores Motta, Molino y Rojas B., la Corte adoptó esta terna, y dispuso proponerla á Su Señoría el Ministro de Justicia, para los efectos legales.

dando así cumplimiento á lo solicitado en el oficio de fecha de hoy y marcado con el número 792.

Con lo cual se dió por terminado el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados y el Secretario.

El Presidente, LUCIO A. POMBO.—El Vicepresidente, LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO. — LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

ACUERDO NÚMERO 756.

En la ciudad de Bogotá, á diez y ocho de Febrero de mil ochocientos noventa y tres, hallándose reunida la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, Su Señoría el Presidente de ella, dió cuenta á los señores Magistrados de un oficio de Su Señoría el Ministro de Justicia, en el cual solicita de la Corte una terna para nombrar el Magistrado que debe constituír el Tribunal Unitario del Distrito Judicial del Pacífico.

A este efecto, se procedió á la elección, y hecha la votación y verificado el escrutinio, dió el siguiente resultado:

Siete votos por cada uno de los doctores Gonzalo Mejía, Zenón Fabio Lemus y Antonio Mercado.

La Corte adoptó esta terna y dispuso proponerla á Su Señoría el Ministro de Justicia, en respuesta á su nota de fecha once de los corrientes, marcada con el número 788.

Con lo que se dió por terminado el presente Acuerdo.

El Presidente, LUCIO A. POMBO.—El Vicepresidente, LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO. — LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

ACUERDO NÚMERO 757.

En la ciudad de Bogotá, á primero de Marzo de mil ochocientos noventa y tres, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, compuesta de los señores Magistrados doctores Lucio A. Pombo, Presidente; Luis María Isaza, Vicepresidente; Baltasar Botero Uribe, Jesús Casas Rojas, Manuel E. Corrales, Aníbal Galindo y Juan Evangelista Trujillo, y del Secretario que suscribe este Acuerdo, con el objeto de nombrar los dos Escribientes para la Secretaría de esta Corporación, creados por el artículo 3.° de la Ley 100 de 24 de Diciembre de 1892, y de que cada uno de los señores Magistrados nombre su Escribiente, conforme á lo dispuesto en el mismo artículo.

A este efecto, se procedió á la elección, la cual dió por resultado el nombramiento unánime de los señores Román Baños, Jenaro Orjuela, Ignacio Ruiz O. y Antonio Pachón, destinados para el servicio de la Secretaría, con advertencia de que este último se ocupará de preferencia en la tarea de que habla el inciso segundo del mencionado artículo.

Cada uno de los señores Magistrados nombró su Escribiente, en la forma que pasa á expresarse:

El Magistrado doctor Pombo, al señor Leopoldo Silva.

El Magistrado doctor Isaza, al señor Daniel Caro G.

El Magistrado doctor Botero Uribe, al señor Venancio E. Ortiz.

El Magistrado doctor Casas Rojas, al señor Rafael Pombo M.

El Magistrado doctor Corrales, al señor Anatolio Castillo.

El Magistrado doctor Galindo, al señor Bruno Gutiérrez.

El Magistrado doctor Trujillo, al señor Plácido Malo.

Se dispuso comunicar este Acuerdo á Su Señoría el Ministro de Justicia para los efectos legales, y á los señores nombrados para que se presenten en el Despacho de la Corte á tomar posesión de su empleo.

Con lo que se dió por terminado y lo firman los señores Magistrados y el Secretario de la Corte.

El Presidente, LUCIO A. POMBO.—El Vicepresidente, LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO. — *Gabriel Rosas*, Secretario.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintiocho de Febrero de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Previo el repartimiento practicado el 23 de Septiembre de 1890 por el Juez 3.° del Circuito de Bogotá, el Juez 1.° del mismo Circuito, principió á conocer de la demanda civil ordinaria instaurada por Medardo Ribas contra Zalamea Hermanos, vecinos de esta capital, disponiendo, por auto de 25 del mismo mes, que las partes concurrieran á celebrar la conferencia amigable prevenida por la ley. Este acto se verificó el 15 de Octubre siguiente, con la concurrencia de Daniel Vaquero Torres, apoderado del demandante, y la de los demandados, y como no hubiese habido arreglo entre ellos, el Juez del conocimiento dió curso á la demanda por la tramitación legal.

En el escrito correspondiente, Medardo Ribas pidió lo que se inserta:

"Pido á usted que en sentencia definitiva pronunciada previa la tramitación de un juicio ordinario, se sirva declarar con citación y audiencia de los señores Angel María Zalamea y Enrique Zalamea, que la Sociedad civil ó comercial denominada "Zalamea Hermanos," si existiere legalmente esa Sociedad, ó personalmente los prenombrados señores Zalameas, si tal Sociedad no existiere en forma legal, está obligada ó están obligados desde el día 15 de Julio de 1884 y durante todo el tiempo que desde entonces hayan sido ó sean contratistas con el Gobierno nacional para la impresión del *Diario Oficial*, á pagarme la cantidad de cincuenta pesos ($ 50) mensuales, tomando como día inicial para el cómputo ó cuenta de las mensualidades, el día 1.° de Junio de 1884; y que desde el día 31 de Diciembre del mismo año, ó desde aquel día que se pruebe que no volvieron á pagarme tales $ 50 mensuales, están en mora en el cumplimiento de su obligación.

"Y pido también que, como consecuencia de estas declaratorias, se condene á Zalamea Hermanos, ó personalmente á los señores Ángel María Zalamea y Enrique Zalamea, según que exista ó no en forma legal la Sociedad de aquella denominación, á pagarme la cantidad total, que según resulte de lo que se pruebe, salgan á deberme hasta el día del pago, á razón de cincuenta pesos($ 50) mensuales, contando los meses conforme al calendario común; cincuenta pesos $ 50 mensuales en lo sucesivo, el día último de cada mes y durante todo el tiempo que sean contratistas con el Gobierno nacional para la impresión del *Diario Oficial*, y los intereses legales que correspondan á cada mensualidad vencida y no pagada el día de su vencimiento."

Cada uno de los demandados, á su turno, contestó la demanda, negando los hechos en que ella se funda, y desconociendo el derecho, la causa ó razón que el demandante trata de hacer valer, apoyado en el convenio que por escrito se celebró entre las partes actora y demandada, el día 15 de Julio de 1884, por carecer el expresado convenio de causa, y en el evento de tenerla, la causa es ilícita y su objeto también ilícito. Igualmente propusieron las excepciones perentorias de invalidez de la obligación por falta de causa y de condición no cumplida, y de cualesquiera otras excepciones cuyos hechos aparezcan acreditados, aun cuando no hayan sido propuestas ni alegadas, de acuerdo con lo que preceptúa el artículo 138 de la Ley 57 de 1887.

Además, cada uno de los demandados estableció contra el actor principal, Medardo Ribas, contrademanda ó demanda de reconvención, para que en sentencia definitiva se decida que está en la obligación de restituír á Angel María Zalamea y Enrique Zalamea, la cantidad de doscientos cincuenta y seis pesos cincuenta centavos ($ 256-50), mitad de la de quinientos trece pesos ($ 513) que por error de derecho y sin causa legítima de deber le entregaron á Ribas, no habiendo de parte de ninguno de los dos Zalameas, ni de Zalamea Hermanos, obligación siquiera natural de pagársela.

Daniel Vaquero Torres, como apoderado de Ribas, contestó en un sólo escrito ambas contrademandas, por juzgarlas propuestas en un mismo sentido, no conviniendo en los hechos ni en el derecho que sirven de fundamento á tales accio-

nes, por lo que el juicio se abrió á pruebas y cada parte produjo las que convenían á sus pretensiones, y citadas las partes para sentencia, la de primera instancia se profirió en esta forma: "Se absuelve á los señores Enrique y Ángel María Zalamea de los cargos contenidos en la demanda que les promovió el señor Medardo Ribas, y se absuelve á éste de pagar á aquéllos la cantidad que le piden en sus demandas de reconvención. No se hace especial condenación en costas."

Notificada esta sentencia á las partes, Carlos Gamboa, como apoderado de Enrique y Ángel María Zalamea, y Daniel Vaquero Torres, como apoderado de Medardo Ribas, interpusieron apelación, que les fué concedida en ambos efectos, para ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, donde el recurso se sustanció por los trámites prescritos en la ley, y citadas las partes para sentencia, se dictó ésta en los términos que siguen:

"1.° Declárase de oficio nulo, con nulidad absoluta, el contrato de fecha 15 de Julio de 1884, celebrado entre Zalamea Hermanos y Medardo Ribas, que ha servido de base á este pleito;

"2.° En consecuencia, absuélvese tanto á los demandados en la demanda principal como al demandado en la demanda de reconvención, de los cargos en ellas contenidos. Esta resolución, en lo que toca á la demanda de reconvención, se funda en lo dispuesto en el artículo 1525 del Código Civil vigente;

"3.° Queda así adicionada la sentencia apelada;

"4.° No hay condenación en costas por la temeridad, tanto en la demanda principal como en la de reconvención, y por haber apelado ambas partes la sentencia de primera instancia."

Publicada y notificada á las partes el 30 de Mayo de 1892 la sentencia de segunda instancia, proferida por el Tribunal de Cundinamarca en 21 de dicho mes, Medardo Ribas, con fecha 24 de Junio siguiente, interpuso contra dicho fallo el recurso de casación para ante esta Superioridad, recurso que le fué otorgado en auto del día siguiente, por haberlo interpuesto oportunamente el mismo demandante.

Recibido y repartido este asunto, el Magistrado sustanciador ha preparado el recurso por los trámites que determina la Ley 105 de 1890, sobre reformas á los procedimientos judiciales, hasta ponerlo en estado de dictarse el fallo que corresponde.

La Corte, como lo previene dicha ley, ha examinado si en el juicio civil ordinario, sostenido por Medardo Ribas con Ángel María Zalamea y Enrique Zalamea, coexisten las circunstancias que enumera el artículo 366 de la mencionada Ley 105 de 1890, á saber:

1.ª Si la sentencia definitiva pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, que es objeto del presente recurso de casación, se funda en leyes que rigen ó hayan regido en toda la República á partir de la vigencia de la Ley 57 de 1887, ó si se funda en leyes del extinguido Estado de Cundinamarca, en donde se celebró por ambas partes el convenio que ha dado origen á la controversia judicial, y que sean idénticas en esencia á las nacionales que están en vigor;

2.ª Si la referida sentencia, dictada en 21 de Mayo de 1892, versa sobre el estado civil de las personas ó sobre intereses particulares en que la cuantía del juicio sea ó exceda de $ 3,000, y

3.ª Si hay contrariedad en las sentencias de primera y de segunda instancia, en cuanto á la inteligencia, ó aplicación de las leyes en que ambas se apoyan, ó en cuanto á lo principal del pleito.

Del examen verificado resulta que coexisten, ciertamente, *las circunstancias que se dejan expresadas*; porque la sentencia del Tribunal de Cundinamarca se funda en leyes que regían en el extinguido Estado del mismo nombre, el día 15 de Julio de 1884, cuando se celebró el convenio referido, idénticas en esencia á las del Código Civil nacional que rige actualmente en la República; porque la sentencia, así como la controversia que se ha sostenido entre las partes, versa sobre intéreses particulares en que la cuantía excede de $ 3,000, y, finalmente, porque entre la sentencia de primera instancia, proferida por el Juez 1.° del Circuito de Bogotá, y la de segunda instancia pronunciada por el Tribunal Superior hay contrariedad en cuanto á la inteligencia ó aplicación de las leyes en que se apoyan.

En tal virtud, la Corte declara admisible dicho recurso, y procede á examinar la causal ó causales en que se funda, pues el escrito en que el recurrente las designa fué presentado en la Corte dentro del término de seis días que señala el artículo 377 de la Ley 105 de 1890.

Dice el doctor Alejo de la Torre, en su carácter de apoderado del doctor Medardo Ribas, que la sentencia de segunda instancia es casable, no sólo porque se funda en leyes que rigieron en el extinguido Estado de Cundinamarca, esencialmente idénticas á las nacionales que hoy están en vigor y en disposiciones de esta última legislación y por versar la controversia entre particulares sobre una cuantía mayor de $ 3,000, sino porque hay contrariedad entre las sentencias de primera y de segunda instancia en cuanto á la inteligencia ó aplicación de las leyes en que se apoyan y en cuanto á lo principal del pleito; y agrega en sostenimiento de esta tesis: 1.° que la sentencia de primera instancia estima que la obligación cuyo cumplimiento se demanda en el juicio, tiene causa lícita, y la sentencia del Tribunal estima que esa misma obligación tiene causa ilícita; 2.° que la sentencia de primera instancia absuelve á los demandados Enrique y Ángel María Zalamea de la demanda principal, por considerar que la obligación contraída por ellos era condicional, mientras que la de segunda instancia la reputa nula, y 3.° que igual contrariedad existe en la estimación de las disposiciones legales, en virtud de lo cual se absuelve al demandante Ribas de la contrademanda.

Conviene insertar á continuación el contrato del cual nace la controversia, una vez que las sentencias hacen mérito de él con frecuencia.

El contrato referido dice así:

"Los abajo firmados, mayores de edad y vecinos de esta ciudad, hemos celebrado el siguiente contrato: Zalamea Hermanos se comprometen á darle al señor doctor Medardo Ribas una subvención mensual de cincuenta pesos de ley ($ 50), mientras tengan con el Gobierno el contrato del *Diario Oficial* de la Nación. Esta subvención principia á contarse desde primero de Junio de este año. Ribas, por su parte, se compromete á que de su imprenta no saldrá escrito, manifestación ni petición alguna al Gobierno, pidiendo que se saque á licitación dicho *Diario Oficial*, ó que se interrumpa el contrato actualmente celebrado con los señores Zalamea Hermanos; y que bien al contrario, ayudará con su influencia á que este contrato continúe. Y en caso contrario perderá el derecho á la subvención arriba expresada á favor del doctor Ribas. Firmamos dos de un tenor en Bogotá y con testigos, á quince de Julio de mil ochocientos ochenta y cuatro."

Teniéndose sólo en consideración lo que expresa el documento preinserto, y por los términos dudosos empleados en su redacción, aparece que la cuantía de la controversia no alcanzaría á $ 3,000, porque el contrato celebrado entre las partes, como que hace referencia al tiempo de duración de la vigencia del que los Zalameas tenían ajustado con el Gobierno nacional para la impresión del *Diario Oficial*, puesto que en el mes de Octubre de 1887 renovaron el anterior; de suerte que computándose el tiempo trascurrido desde el 1.° de Junio de 1884, en que principió á cumplirse el convenio materia de esta litis, á Octubre de 1887, á razón de cincuenta pesos ($ 50) mensuales, el total sólo alcanzaría á poco más de dos mil pesos ($ 2,000.) En el presente caso la Corte debe atenerse de preferencia á los términos de la parte petitoria de la demanda de Ribas, que dice así: "Y pido también que, como consecuencia de estas declaratorias, se condene á Zalamea Hermanos, ó personalmente á los señores Angel María Zalamea y Enrique Zalamea, según que exista ó no en forma legal la Sociedad de aquella denominación, á pagarme la cantidad total que, según resulte de lo que se pruebe, salgan á deberme hasta el día del pago, á razón de cincuenta pesos ($ 50) mensuales, contando los meses conforme al calendario común; cincuenta pesos ($ 50) mensuales en lo sucesivo, el día último de cada mes, y durante

todo el tiempo que sean contratistas con el Gobierno nacional para la impresión del *Diario Oficial*, y los intereses legales que correspondan á cada mensualidad vencida y no pagada el día de su vencimiento."

Según el libelo de demanda, el doctor Ribas exige el pago de las mensualidades vencidas y que se venzan en todo el tiempo que los demandados continúen siendo contratistas con el Gobierno nacional para la impresión del *Diario Oficial*, lo que implica que en la opinión del demandante, los demandados continúan aún sometidos á la obligación de pagarle la subvención de $ 50 mensuales; y en este supuesto, aunque el convenio no sea bien claro á este respecto, sí lo es la demanda; excediendo, por lo mismo, la cuantía de $ 3,000.

En el caso que se examina, aparece con evidencia que hay contrariedad entre la sentencia que profirió el Juez de la primera instancia y la que dictó el Tribunal sentenciador en cuanto á la aplicación de varias leyes sustantivas y á lo principal del pleito. Esta contrariedad consiste en que el Juez de la primera instancia afirma que el convenio celebrado entre Ribas y los Zalameas no carece de objeto, y que éste es lícito; en que el mismo convenio tiene causa lícita, y por último, en que Ribas no ha cumplido la condición á que quedó sujeto conforme á lo estipulado, de haber procurado influír para que los Zalameas no quedaran privados de las ventajas que tenían adquiridas al tenor del contrato vigente cuando se ajustó el mencionado convenio, porque tratándose de un hecho positivo, le habría sido fácil acreditar que ciertamente había ejercido influencias moralmente admisibles, en el sentido que yá se ha expuesto. La falta de comprobación de haber Ribas cumplido la aludida condición, para poder derivar derecho al cobro de la subvención, sirvió de fundamento al Juez de la primera instancia para absolver á los demandados.

El Tribunal sentenciador, por el contrario, ha asentado en su fallo que el convenio que ha dado origen á este pleito es nulo, por nulidad absoluta, que estaba obligado á declarar de oficio; y al efecto, razona de esta manera:

"El contrato que Medardo Ribas y Zalamea Hermanos consignaron en el documento que acaba de trascribirse, y que ha servido de fundamento á la acción principal, y es origen del pago materia de la reconvención, adolece de nulidad absoluta, al tenor de lo dispuesto en los artículos 1511, 1527, 1533 y 1749 del Código Civil cundinamarqués, nulidad que por aparecer de manifiesto en el contrato, el Tribunal está en el deber de declarar de oficio, conforme al artículo 15 de de la Ley 95 de 1890. Un análisis breve de dicho contrato hará resaltar la verdad de esta afirmación.

"Revélase allí claramente el hecho de que Zalamea Hermanos temían que el establecimiento tipográfico de Medardo Ribas pudiera privarlos del contrato que tenían con el Gobierno para la impresión del *Diario Oficial*, haciendo escrito, manifestación ó petición para que se sacase á licitación, ó se interrumpiese dicho contrato. Y aquí cabe preguntar, ¿por qué abrigaban tal temor? Sin duda porque sabían que mediante la licitación ó en fuerza de los escritos, manifestaciones ó solicitudes dirigidas por Medardo Ribas al Gobierno, éste podría obtener un contrato más ventajoso. Ribas recibe la promesa de que le darán cincuenta pesos mensuales, y ofrece abstenerse de aquello que, en concepto de los contratantes, podía conducir al Gobierno al resultado de obtener el servicio con menos gravamen para el Tesoro, es decir, promete por dinero faltar al deber en que está todo ciudadano de contribuír para que la cosa pública marche bien. Pero hay más: Ribas no sólo promete esto, sino que se obliga también á ayudar con su influencia para que continúe un contrato que, según la mente de los contratantes, podía ser reemplazado con otro más ventajoso para el Gobierno. La obligación de Ribas tiene por objeto la ejecución de un hecho contrario á la moral, y la que contraen Zalamea Hermanos tiene, por consiguiente causa ilícita, al tenor de la terminante disposición del artículo 1533 del Código Civil de Cundinamarca, que en su inciso 3.° dice:

"Así, la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe, carece de causa, y la promesa de dar algo en recompensa de un delito ó de un hecho inmoral, tiene una causa ilícita."

La Corte entra á considerar si está ó no probada la causal en que el doctor Alejo de la Torre, como apoderado del doctor Medardo Ribas, funda el recurso de casación, y que es la primera de las causales que menciona el artículo 369 de la Ley 105 de 1890, esto es, ser la sentencia violatoria de ley sustantiva ó de doctrina legal; ya sea directa la violación; ya sea ésta efecto de una interpretación errónea de la ley, ó de la doctrina legal; ya de aplicación indebida de leyes ó de doctrinas legales.

Dicho apoderado se expresa así:

"Procedo ahora á fundar el recurso: lo fundo en la causal primera mencionada en el artículo 369 de la Ley 105 de 1890.

"La sentencia hace falsa aplicación de las disposiciones contenidas en los artículos 1511, 1527, 1533 y 1549 del Código Civil cundinamarqués y de la del artículo 15 de la Ley 95 de 1890.

"Hace falsa aplicación la sentencia de estas disposiciones legales, porque, como lo dice muy bien el señor Juez de la primera instancia en su fallo, en el que hace un concienzudo y luminoso estudio del punto, 'no hay oposición del compromiso del señor Ribas con el orden público y las buenas costumbres; no con el primero, porque, como se deja demostrado, los hechos de que se trata no están en desacuerdo con las leyes del país, y porque ellos no contribuyen de ninguna manera á que las cosas públicas dejen de seguir la marcha regulada y armónica que deben tener para que los gobernantes y los gobernados logren los fines sociales que persiguen; no con las buenas costumbres, porque no es generador de ninguna inmoralidad el hecho de abstenerse uno del ejercicio de un derecho que las leyes le confieren, y porque no está contra las buenas costumbres poner uno su interés en que otra persona adquiera una ganancia, ó se procure un bien cualquiera, por medios lícitos."

Los precedentes razonamientos son inaceptables para la Corte, por los motivos que pasa á expresar:

Es exacto que los particulares no están obligados á promover que el Gobierno celebre nuevos contratos, con el objeto de que obtenga mayores ventajas en determinados servicios, como por ejemplo, tratándose de *ediciones oficiales*. En materia de servicios, así públicos como privados, los adelantos de las ciencias y de las artes contribuyen á que se obtengan con más prontitud, más perfección y por un costo menor; y corresponde á los encargados de los ramos respectivos en la administración pública, procurar que el Gobierno se proporcione oportunamente todas las ventajas apetecibles. El patriotismo de los ciudadanos los inclina á veces á hacer presente lo desventajoso que sea el modo como se prestan los servicios públicos, y cómo pueden obtenerse ventajas para cambiar lo que existe, á fin de que por los funcionarios correspondientes, y en su oportunidad, se adquieran las ventajas de que se ha hablado, sin vulnerar derechos adquiridos legalmente. Pero los ciudadanos no tienen obligación perfecta de estudiar la mejor manera de administrar la cosa pública, y pueden prescindir de hacer uso del derecho que naturalmente tienen como miembros de la asociación política, de insinuar la adopción de ciertas medidas útiles.

Así, pues, el doctor Medardo Ribas pudo muy bien renunciar el derecho que tenía y tiene de promover lo conducente para que el Gobierno nacional obtenga ventajas en el servicio relativo á las ediciones oficiales; mas no le fué lícito concertar con Zalamea Hermanos, quienes á la sazón prestaban el servicio de imprimir el *Diario Oficial*, los medios de mantener á éstos en la subsistencia del contrato que tenían ajustado según determinadas bases; ni á los Zalameas les fué lícito convenir con uno ó más tipógrafos, en que éstos guardasen silencio con la mira de poder continuar en la posición que tenían adquirida. Si el convenio de 15 de Julio de 1884, suscrito por las partes interesadas en esta controversia no es contrario á las leyes, como lo sostiene el apoderado del recurrente, porque ninguna de ellas obliga á los particulares á promover lo que interesa al bien social, sí juzga la Corte que es contrario al orden público y á las buenas costumbres, desde que prescribiéndose en las leyes fiscales que la edición del *Diario Oficial* se verifique á virtud de licitación pública y

mediante contratos debidamente celebrados, los particulares pacten, con miras de provecho, el ejercicio de influencias que hagan nugatorias dichas leyes. Más claro: el doctor Ribas pudo prescindir de hacer uso del derecho de llamar la atención del Gobierno, ó de permitir que otros la llamaran por medio de publicaciones que salieran de su oficina tipográfica, con el objeto de que fuesen celebrados nuevos contratos que mejorasen las estipulaciones del que estaba vigente en interés del Tesoro público; pero no le fué lícito servirse de ese derecho como materia obligada de un contrato bilateral; porque ni esa manera de proceder está reconocida como una costumbre, ni está de acuerdo con las doctrinas que son aplicables por punto general en los diversos ramos que constituyen el Gobierno. Este principio se comprende mejor en el caso de que los Zalameas, contratantes con el Gobierno para hacer ciertas ediciones oficiales, no se hubieran limitado á estipular con el doctor Ribas que éste procurase que se mantuviera en vigor el contrato que preexistía el quince de Julio de 1884, sino que los Zalameas hubieran procedido del mismo modo con todos los impresores. En tal hipótesis el Gobierno no habría tenido medios de mejorar las estipulaciones del contrato vigente, porque dichos contratistas le habrían cerrado todo camino para conseguirlo. Y desde luégo no es de creerse que sería permitido á los Tribunales declarar eficaz cualquier contrato que propendiera á anular la acción del Gobierno, instituído con fundamento para procurar á los asociados la mayor suma de bien posible y grandes economías y ventajas al erario nacional.

Lo que se dice de las ediciones oficiales puede aplicarse á los demás objetos de la administración pública. Si se supone que un fabricante de armas que ha celebrado con un Gobierno el suministro de ellas en cantidad y calidad determinadas, contratara con los demás fabricantes lo conducente para que no se le hiciera competencia, de manera de poder seguir suministrando armas de inferior calidad, prescindiéndose de los inventos conocidos como más adecuadas en la guerra para dotar á los ejércitos de armamento de mayor precisión, colocaría al respectivo Gobierno en la imposibilidad de medir sus fuerzas militares, llegado el caso, con los que estuvieran dotados de armamento de calidad superior; y de consiguiente, quedarían comprometidos desventajosamente el honor nacional y acaso la integridad territorial.

De lo expuesto se deduce que la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, que es objeto del debate que se ha sostenido en el presente recurso de casación, es legal y no violatoria de ley sustantiva ni de doctrina legal, puesto que su principal fundamento es exacto, á saber: que el convenio ajustado entre el doctor Medardo Ribas y Zalamea Hermanos, adolece de nulidad absoluta, conforme á los artículos 1511, 1527, 1533 y 1749 del Código Civil del extinguido Estado de Cundinamarca y á sus concordantes del Código Civil nacional que hoy rige en la República, así como al artículo 15 de la Ley 95 de 1890.

Verdad es que la declaración de nulidad absoluta del convenio arriba expresado, que contiene el número 1.° de la parte resolutiva de dicha sentencia, pudo y debió establecerse como un razonamiento legal en la parte considerativa, y limitar la decisión á la absolución de los demandados, como consecuencia precisa de la misma nulidad; pero aun con el defecto advertido, el fallo merece la aprobación de la Corte, y por tanto, ella, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que la sentencia definitiva que acaba de examinar no es casable, y de consiguiente, le imparte su *aprobación*, en lo que es materia del recurso, y condena al recurrente al pago de las costas del mismo recurso.

Y con el fin de establecer doctrina acerca del punto debatido, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 383 de la Ley 105 de 1890, la Corte fija, en términos generales, que constituyan regla de derecho, lo siguiente:

Es nulo, con nulidad absoluta, todo contrato ó convenio celebrado ó que se celebre por escrito ó de palabra que tenga por objeto impedir ó evitar que se verifique la licitación pública para la celebración de contratos con el Gobierno.

Notifíquese, publíquese, cópiese é insértese esta sentencia en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, cuatro de Marzo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Beatriz Bedoya, vecina del Municipio de Dolores, en el Departamento del Cauca, demanda del Tesoro nacional la recompensa unitaria á que se cree con derecho como madre de Juan Bedoya, muerto en clase de Sargento 1.°, por consecuencia de heridas recibidas en la guerra de 1876 y de conformidad con la disposición especial del artículo 11 de la Ley 84 de 1890. Como en el caso especial de que se trata, no podían existir en las oficinas públicas ni la hoja de servicios de Bedoya, ni los comprobantes oficiales de su muerte por consecuencia de las heridas recibidas en la acción de guerra, pues Bedoya servía en las fuerzas revolucionarias que combatían el Gobierno legítimo de aquella época, la peticionaria ha tenido que hacer uso de la prueba supletaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la ley; y al efecto está comprobado con las declaraciones de cinco testigos idóneos que dan razón de su dicho como testigos presenciales de los hechos: 1.° que Juan Bedoya servía á las fuerzas antes dichas, en su calidad de Sargento 1.°, al mando del General Manuel Villota; 2.° que fué mortalmente herido en el tiroteo que tuvo lugar en los egidos de la ciudad de Popayán, en Abril de 1877, y 3.° que murió por consecuencia de dicha herida, en el Hospital de caridad de aquella ciudad, el 3 de Mayo siguiente. Con la certificación del Cura Párroco de Timbío, expedida en nueve de Abril de 1891, folio 1.°, se comprueba que la peticionaria era la madre de Juan Bedoya; y con la de igual clase expedida por el mismo Párroco, con fecha treinta y uno de Octubre de 1892, folio 14, se comprueba la defunción del esposo de la peticionaria, acaecida el 14 de Julio de 1892 y su consiguiente estado de viudez. Las informaciones de testigos relativas á la muerte de Bedoya, por consecuencia de las heridas recibidas en acción de guerra, deponen también sobre la buena conducta de la peticionaria y el estado de pobreza en que se halla. Y finalmente, con el certificado expedido por el señor Ministro del Tesoro, con fecha veinticuatro de Agosto de 1892, folio 13, se acredita que la peticionaria no ha recibido hasta hoy recompensa alguna del Tesoro nacional.

En mérito de lo expuesto y de conformidad con lo pedido por el señor Procurador general de la Nación, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara á Beatriz Bedoya, con derecho á recibir como recompensa militar por la muerte de su hijo Juan Bedoya, por una sola vez, la suma novecientos doce pesos ($ 912), equivalente al monto del sueldo íntegro de cuatro años, correspondiente al empleo de Sargento 1.° que Bedoya tenía en las fuerzas de que hacía parte, á razón de doscientos veintiocho pesos ($ 228) por año, conforme al artículo 29 de la Ley 86 de 1886.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial*, dése el correspondiente aviso al señor Ministro del Tesoro y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS. M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, siete de Marzo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: A virtud de apelación interpuesta por Andrés Lara, como apoderado de Manuel J. Alvarez C., vecino de Medellín, contra la resolución que dictó el Ministerio del Tesoro en el mes de Mayo de 1892, aprobatoria de las que también dictó la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones en 23 de Abril y 28 de Mayo del mismo año, según las cuales dicha Comisión negó el reconocimiento del crédito

de $ 2,394 procedente de los empréstitos con que varios individuos contribuyeron en el extinguido Estado de Antioquia para el restablecimiento del orden público, en la guerra de 1885, la Corte conoce del expresado recurso, y para fallarlo considera:

1.° Los prestamistas endosaron á Manuel J. Alvarez C. los créditos que tienen contra la Nación; y así sus nombres como las cantidades de que son acreedores se expresan á continuación:

Gregorio Agudelo enteró en Don Matías	$ 85
Heladio Mendoza, id	20
Alejo Agudelo, id	150
Joaquín Alzate, id	90
José Miguel Luján, id	100
José Jaramillo Pérez, id	10
Pedro Osorno, id	80
Clemente Barrera, id	40
Francisco Barrera, id	300
Camilo A. Macías id	300
Pablo López, id	30
José María Cardona enteró en Amalfi	336
José María, Ricardo, Vidal y Zabulón Posada enteraron en Yarumal	853
Suma	$ 2,394

2.° La referida Comisión absolvió al Tesoro de la demanda por dos motivos, á saber: porque no constaba acreditado el carácter oficial del Recaudador de la contribución nacional de guerra, Alejandro Restrepo R., que suscribió los trece recibos que corren de fojas 1.ª á 13, inclusive; y porque según el inciso 2.° del artículo 2.° de la Ley 44 de 1886, tales recibos debieron ser registrados para que pudieran constituír prueba de los respectivos enteros, y no lo fueron en la forma legal;

3.° La Corte, por auto para mejor proveer y para subsanar dichas omisiones, dispuso, en 19 de Septiembre del año próximo pasado, que se remitiese original el expediente á la Gobernación del Departamento de Antioquia, á fin de que ella, con vista de todos los informes y datos que pudiera obtener, relativos á este asunto, no sólo ordenara que se acreditase por la Oficina ó empleado respectivo el carácter oficial del Recaudador Alejandro Restrepo R. en las fechas en que expidió los recibos aludidos, sino que las firmas que aparecen estampadas en ellos son autógrafas;

4.° La Gobernación tuvo á bien disponer que el expediente se entregara en traslado á Manuel J. Alvarez C., como interesado y residente en Medellín, para que, ocurriendo á la prueba testimonial, diera cumplimiento á lo mandado por la Corte en el auto citado, y por no aparecer constancia alguna en la Oficina acerca del ejercicio de las funciones del Recaudador;

5.° Manuel J. Alvarez C. presentó, en efecto, una información por la que consta, según los testimonios jurados de Julio Fernández A. y Heliodoro Zapata F., rendidos ante el Juez 3.° de lo civil del Circuito de Medellín, con asistencia del respectivo agente del Ministerio Público, que Alejandro Restrepo R. ejerció en la época mencionada las funciones de Recaudador de la contribución nacional de guerra, lo que constaba al primero por haber sido también empleado dependiente de Julio Betancourt, agente del Fisco nacional en el Departamento de Antioquia, y el segundo, porque este agente principal se lo hizo saber;

6.° También presentó el referido Alvarez una declaración rendida por el Recaudador Alejandro Restrepo R. ante el Juez municipal de Puerto-Berrío, el día 7 de Diciembre último, como comisionado por el Juez 2.° del Circuito de Santo-Domingo, en la cual declara, entre otras cosas, que él desempeñó las funciones de Recaudador de la contribución nacional de guerra en 1885, por delegación del agente del Fisco nacional, y por unos pocos días; que por instancias del señor General Marceliano Vélez convino el declarante en trasladarse al Norte y Nordeste de Antioquia, provisto de una nota de nombramiento dirigida por el agente expresado á los Prefectos de los Departamentos del Norte y Nordeste, para que prestaran al declarante los auxilios necesarios en el cumplimiento de su encargo; que los trece recibos que figuran en este expediente fueron expedidos por él en su calidad de Recaudador; y finalmente, que respecto del recibo que dió á favor de José María Cardona hacía presente que no recibió en dinero suma alguna, sino la escritura de cesión de unos créditos importantes, $ 336, de los cuales sólo pagaron uno ó dos deudores, y que de los señores José María, Ricardo, Vidal y Zabulón Posada sólo recibió $ 200, y el resto fué consignado por el primero de ellos (José María Posada T.) á otros agentes del Fisco.

Subsanadas, á juicio de la Corte, las omisiones arriba mencionadas, es de concepto que debe proceder á hacer el reconocimiento de los créditos cuyo pago se ha demandado.

Mas como de la misma declaración dada por el ex-Recaudador, se deduce que en cuanto á los créditos de José María Cardona y de José María, Ricardo, Vidal y Zabulón Posada no pudo asegurar, á ciencia cierta, que hubieran satisfecho las cuotas respectivas en su totalidad, pues expuso relativamente á dichos créditos que sólo recibió de Cardona una escritura de cesión de créditos hipotecarios, constituídos á favor del cedente, y no dinero efectivo ó cantidades en otras especies que le hubieran sido entregadas; y que de los referidos Posadas apenas recibió doscientos pesos, porque el resto de la suma que les fué asignada en calidad de empréstito lo pagaron á otros Recaudadores, y esto hace que se dude si ese resto ha podido ó puede figurar en otros expedientes de reclamaciones por suministros, la Corte debe hacer del total reclamado las deducciones del caso.

Además, como no aparecen hechos los endosos de los créditos parciales á favor de Manuel J. Alvarez C. en la forma debida, pues ninguno de dichos endosos está autorizado con las firmas de dos testigos, requisito exigido por la Ley 44 de 1886, la Corte se ve en la necesidad de ordenar el reconocimiento á favor de cada endosante.

Por todo lo expuesto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve reconocer y reconoce á cargo del Tesoro nacional y á favor de los acreedores que á continuación expresa, las cantidades que respecto de cada uno de ellos consta acreditada; esto es: á favor de Gregorio Agudelo, $ 85; de Eladio Mendoza, 20; de Alejo Agudelo, $ 150; de Joaquín Alzate é Hijos, $ 90; de José Miguel Luján, $ 100; de José Jaramillo Pérez, $ 10; de Pedro Osorno, $ 80; de Clemente Barrera, $ 40; de Francisco Barrera, $ 300; de Camilo A. Macías, $ 300; de Pablo López, $ 30, y de José María, Ricardo, Vidal y Zabulón Posada, $ 200, y absuelve al mismo Tesoro del pago de la cantidad de $ 336, demandada por José María Cardona, y del de la suma de $ 941 que no han comprobado satisfactoriamente los citados Posadas, una vez deducidos del total de su crédito los doscientos pesos $ 200 que se les manda pagar.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Baltasar Botero Uribe.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Aníbal Galindo.—Juan Evangelista Trujillo.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, cuatro de Marzo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Por haberse fugado el procesado Luis Chaves, conducido por una escolta del *Batallón Junín*, comandada por el Cabo 1.° Juan Luna, siguióse causa militar para averiguar la responsabilidad de éste; y el Consejo de Guerra ordinario, reunido en Popayán, declaró, en dos de Enero último, infringido por el reo el artículo 1621 del Código respectivo, y previa la calificación del delito en grado mínimo, fué condenado el susodicho Cabo á la pena señalada por el artículo 288 del Código Penal, es decir, á cuatro meses de prisión en el cuartel respectivo.

Ha venido en consulta á la Corte el fallo del Consejo de Guerra ordinario expresado, y sustanciado debidamente el negocio, es el caso de pronunciar sentencia.

El examen del proceso se reduce, según los artículos 413 de la Ley 105 de 1890 y 1534 del Código Militar, á averiguar si se ha incurrido en alguna de las causales de nulidad

provenientes de incompetencia de jurisdicción, ó de informalidades sustanciales é insanables en el procedimiento.

A este respecto conviene trascribir aquí lo que dice el señor Procurador de la Nación, en su anterior dictamen:

"Por lo que resulta del proceso, se ve que el Cabo Luna fué encargado de orden superior, para conducir de Silvia á Cali con una escolta de cinco soldados, al preso Luis Chaves, reclamado por la autoridad civil. Entregado dicho preso por el Alcalde de Silvia al Cabo Luna, éste, contrariando las órdenes que tenía recibidas, no se puso en marcha imediatamente y aun se demoró en el tránsito, descuidando la vigilancia del preso, hasta el extremo de que al llegar á Cali, entrada ya la noche, aquél se fugó, novedad de que el expresado conductor no dió parte formal sino pasadas algunas horas.

"Según el artículo 1621 del Código Militar, los militares que dejen evadir á los prisioneros de guerra ó á otros individuos presos, detenidos ó arrestados, cuya guardia ó custodia se les hubiere confiado, ó que favorezcan la fuga de tales individuos, ó los oculten ó hagan ocultar, sufrirán las penas correspondientes del Código Penal.

"Como se ve, el delito por el cual se ha procedido contra el Cabo Luna está definido como militar en el Código de la materia; lo cual basta para concluír que el juzgamiento por dicho delito correspondía al Consejo de Guerra ordinario, y que, por tanto, no se ha incurrido en la causal de nulidad proveniente de incompetencia de jurisdicción."

La Corte ha examinado el proceso y verificado las citas legales que hace el señor Procurador, y ha hallado que los hechos son exactos y las expresadas citas conformes.

Tampoco se ha incurrido en informalidad sustancial alguna de las que, según el artículo 1536 del mismo Código, vician el procedimiento; se acreditó la identidad del reo con la respectiva filiación (foja 9); se hicieron todas las notificaciones que la ley manda hacer personalmente al reo y al defensor; la pena aplicada en la sentencia es la que corresponde al delito conforme á la ley penal; en fin, se llenaron todas las formalidades legales.

Se dió cumplimiento al artículo 1545 del Código Militar, y la Corte resolvió negativamente las cuestiones propuestas sobre incompetencia y sobre informalidades.

Por lo expuesto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confírmase la sentencia consultada.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el proceso.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Marzo cuatro de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Narciso Reyes ha pedido revocación de la resolución de esta Superioridad que lleva fecha seis de Febrero y en que se declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada el siete de Marzo de mil ochocientos noventa y dos, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en la tercería excluyente que propuso el mismo Reyes, en el juicio ejecutivo seguido por Guillermo Ponce contra Vicente Berrío.

El peticionario funda su memorial de revocación en que habiéndose aplicado por el Tribunal la legislación española, que fué derogada expresamente por el artículo 15 de la Ley 153 de 1887, la Corte al no admitir el recurso de casación no hace otra cosa que hacer revivir una legislación derogada, y en que aun dando por sentado que las leyes españolas estuvieran en vigor, debería tenerse en cuenta lo que dicen los artículos 5.°, 8.° y 40 de la Ley 153 antes citada.

Es verdad que la legislación española dejó de regir en toda la República hace muchos años, pero eso no implica en manera alguna, como equivocadamente lo pretende el reclamante, que no se aplique á las controversias y los pleitos sobre actos, derechos, obligaciones y contratos que tuvieron lugar ó nacieron durante la vigencia de dicha legislación, para cumplir lo que ordena terminantemente el Código Civil nacional, en su artículo 2683, que fué el que derogó las leyes civiles españolas, en los asuntos que eran de la competencia del Gobierno nacional.

Las citas de los artículos 5.°, 8.° y 40 de la Ley 153 de 1887 son completamente impertinentes en el presente caso, porque para resolver si la sentencia recurrida reunía la primera condición que señala el artículo 336 de la Ley 105 de 1890, no había la menor necesidad de ocurrir á los principios que consagran esas disposiciones, pues bastaba saber que desde el régimen federal en que se expidieron nuevos Códigos dejó de regir en el país la legislación española.

No estará por demás repetir una vez más, que el fin principal del recurso de casación no es el de enmendar los agravios que causen con las sentencias de los Tribunales de Distrito Judicial, sino el de uniformar la jurisprudencia; pero debe entenderse que ésta es la que se refiere á la legislación vigente, no á la española, que está abolida.

En mérito de lo expuesto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, niega la revocación solicitada.

Notifíquese y cópiese.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Marzo cuatro de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: El Administrador municipal de Hacienda nacional de Buriticá, Departamento de Antioquia, con vista de la resolución dictada por la Prefectura de la Provincia de Occidente, en la cual declaró incurso en la multa de $ 9 al Juez municipal de Buriticá, Teodoro David, por infracción de algunas disposiciones de la Ley 110 de 1888, orgánica de la renta de papel sellado y timbre nacional, libró mandamiento ejecutivo contra el expresado David, para hacer efectivo el cobro de la suma expresada; pero como el ejecutado interpuso en oportunidad apelación del expresado auto para ante esta Superioridad, que le fué concedido, el expediente se ha recibido en este Supremo Tribunal, donde se ha sustanciado con arreglo á la ley.

En el expediente que se examina consta que la resolución del Prefecto de la Provincia de Occidente, en el Departamento de Antioquia, fué notificada al Juez municipal, Teodoro David, en 25 de Septiembre de 1891, sin que éste la hubiera reclamado, por lo cual la misma Prefectura pasó las diligencias en copia al Administrador municipal de Hacienda nacional de Buriticá, con el objeto de que exigiera el pago de la multa.

Dicho Administrador de Hacienda, en vez de emplear el procedimiento sumarísimo que establece el artículo 218 de la Ley 147 de 1888, á fin de que el deudor consignara los $ 9 dentro de tercero día, y en caso contrario diera cuenta á la Prefectura para que ésta la convirtiera en arresto, á razón de un día por cada peso, procedió con observancia de los trámites que el Código Judicial señala para seguir juicio ejecutivo. Y como el funcionario multado al acto de la notificación del mandamiento ejecutivo interpuso apelación para ante la Corte, el referido Administrador municipal concedió el recurso y envió el expediente, como arriba se ha expuesto.

Mas como la Corte observa que el auto apelado es ilegal, por no ser el caso de exigir por los trámites allí indicados el pago de la multa, como yá lo tiene decidido en otras ocasiones análogas, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador general de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca el auto materia del recurso, y dispone que se devuelvan estas diligencias al empleado ejecutor, para que proceda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 218 de la Ley 147 de 1888.

Notifíquese, déjese copia é insértese en la *Gaceta Judicial*.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

IMPRENTA DE ANTONIO M. SILVESTRE.

REPÚBLICA DE COLOMBIA.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AÑO VIII } Bogotá, 15 de Mayo de 1893. { NÚM. 389.

CONTENIDO.

Págs.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

La que concede á Belarmina González una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Corrales)..... 201
La que reconoce á favor de Jeremías Durán y otros un crédito, por empréstitos y suministros. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas..... 202
La que niega á Ricardo Solano el reconocimiento de un crédito procedente de suministros. (Magistrado, ponente doctor Galindo). 202
La que concede á María Francisca Paz una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Isaza)..... 203

NEGOCIOS CRIMINALES.

La que absuelve á los señores Magistrados del Tribunal Superior de Antioquia, doctores José de Jesús Alviar, Julián Cock Bayer y Fabriciano Escobar, del cargo de violación de leyes expresas por que se les había llamado á juicio. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas..... 203

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

El que declara nulo lo actuado en el juicio seguido por el Fiscal del Circuito de Pasto contra Angel María Ordóñez, sobre reposición de un puente. (Magistrado ponente, doctor Corrales)..... 207
El que confirma el auto dictado por el Tribunal Superior de Cundinamarca en el juicio seguido por Rafael A. Toledo, cesionario de James Wilson, contra la Nación, por pesos. (Magistrado ponente doctor Botero Uribe)..... 207
El que resuelve que no es el caso de declarar desierto el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tundama en el juicio seguido por Deogracias y Circuncisión Bernal y otros contra Teresa Urrea, sobre dominio de unos terrenos. (Magistrado ponente, doctor Corrales)..... 208

GACETA JUDICIAL.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Marzo seis de de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Belarmina González, mayor de edad, y natural del Distrito de Patía, en el Departamento del Cauca, por medio de apoderado, ha establecido demanda ante este Supremo Tribunal, para que se le declare con derecho á recibir una recompensa del Tesoro nacional, por la muerte de su padre José González, acaecida en la Cuchilla del Tambo, en el año de mil ochocientos setenta y seis, combatiendo en defensa de los principios que informan las actuales instituciode la República.

Admitida y sustanciada la demanda por los trámites que establece la Ley 84 de 1890, el señor Procurador, en la última vista fiscal que dió en este asunto, es de concepto que aparecen comprobados todos los hechos fundamentales de la acción, y que, por lo mismo, opina que debe declararse á la demandante con derecho á la recompensa que tiene solicitada.

Con efecto, examinadas las pruebas que fueron presentadas con la demanda y las que con posterioridad se produjeron en virtud de auto para mejor proveer, resultan acreditados los hechos siguientes:

1.° Que la demandante Belarmina González es hija legítima de José González y Visitación Velasco;

2.° Que José González militó en la guerra de 1876 y 1877 en el empleo de Sargento Mayor, según varios testigos, y en el de Capitán, según otros;

3.° Que habiendo asistido José González al combate que se verificó en la Cuchilla del Tambo, rindió en él su vida defendiendo los principios que actualmente rigen;

4.° Que Visitación Velasco murió en el Distrito parroquial de Bolívar, en el mismo Departamento del Cauca;

5.° Que la demandante es célibe, hija única de José González, vive en suma pobreza y estuvo al lado de sus padres durante sus primeros años, y después de la muerte de González ha observado y observa buena conducta, y

6.° En fin, que la solicitante, según lo certifica Su Señoría el Ministro del Tesoro, no ha recibido pensión ni se encuentra inscrita en los libros de la Sección 3.ª que se llevan en el despacho del Ministerio del Tesoro.

Figuran como pruebas los documentos y declaraciones de que se pasa á hacer mérito:

El bautismo de la solicitante está comprobado con la certificación librada por el Cura Párroco de la iglesia de Patía, en la cual consta que es hija legítima de José González, aun que en la partida de inscripción que se inserta no se hace constar el nombre de la madre (fojas 9), con otra certificación del mismo Párroco se ha comprobado la falta en los libros parroquiales, de la partida de matrimonio celebrado por José González con Visitación Velasco, pero dicha falta está subsanada con la prueba supletoria de testigos.

La defunción de José González en el campo de batalla aparece comprobada con el testimonio de varios compañeros de armas que militaron á órdenes del mismo González, y aunque no están de acuerdo en el empleo que éste tenía en las fuerzas regeneradoras, el mayor número expresa que era Capitán en la caballería de Patía, y la Corte, como lo tiene resuelto en casos análogos, acepta la graduación menor.

La muerte de Visitación Velasco no ha podido comprobarse con la partida correspondiente, tomada de los libros parroquiales de la iglesia de Bolívar, porque el mismo Cura manifiesta que el archivo se encuentra desordenado, pero varios testigos afirman que la vieron muerta en el expresado Distrito.

El estado de pobreza y la circunstancia de permanecer célibe la demandante aparecen justificados con declaraciones de testigos, recibidas con juramento y en presencia del respectivo Agente del Ministerio Público.

En tal virtud, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que la demandante Belarmina González, vecina de Patía é hija legítima de José González, tiene derecho á una recompensa unitaria definitiva por la suma de tres mil ciento veinte pesos ($ 3,120) conforme á los artículos 1.°, 5.°, 9.° y 11 de la Ley 84 de 1890, por ser hija única legítima de José González, quien militó y murió en la Cuchilla del Tambo el año de 1876.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial*, remítase copia de este fallo al Ministerio del Tesoro y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA. — BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Marzo seis de de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: De la resolución número 3,153 por medio de la cual el Ministerio del Tesoro aprobó en diez y ocho de Agosto último, la que bajo el número 3,837 había pronunciado en veinticuatro de Junio anterior la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, apeló el apoderado del demandante para ante esta Superioridad, y habiéndose dado á la apelación la tramitación que le corresponde con arreglo á la ley, es tiempo de decidirla, á lo cual se procede, mediante las siguientes consideraciones:

La demanda se había intentado por la suma de dos mil doscientos veintidós pesos cuarenta centavos ($ 2,222-40), de los cuales sólo se reconocieron:

En favor de Rodulfo Aguilar, mil pesos	$ 1,000
En favor de Jeremías Durán, ciento cincuenta pesos	150
Total, mil ciento cincuenta pesos	$ 1,150

Dejóse, en consecuencia, de reconocer la diferencia, ó sea la suma de mil setenta y dos pesos, cuarenta centavos ($ 1,072-40), suma acerca de la cual versa la apelación.

Para sustentarla el demandante hizo en memorial de veintidós de Septiembre último observaciones referentes á Durán, en vista de las cuales se dictó por la Corte el auto para mejor proveer, de fecha cuatro de Octubre, por medio del cual se dispuso librar despacho al Juez del Circuito del Quindío, para que hiciese que el testigo Cipriano Melo, que había declarado yá, pero cuya idoneidad no parecía establecida, declarase de nuevo, y para que el Juez y el Fiscal respectivo certificasen acerca de su idoneidad.

Practicada la prueba así ordenada, resultó de ella:

1.° Que dicho testigo declaró que el año de mil ochocientos ochenta y cinco (1885), residiendo él en un sitio denominado "La-Paz," contiguo á la finca llamada "La-Algería" perteneciente á Jeremías Durán, presenció que éste sufrió la expropiación de cinco novillos que valían á treinta pesos ($ 30), de tres caballos á razón de cincuenta pesos ($ 50), y cinco novillos á razón de veinte pesos ($ 20), y

2.° Que la idoneidad del testigo fué certificada por el Juez y el Fiscal.

Ahora bien: como acerca de las tres exacciones declaradas por Cipriano Melo, habían declarado yá uniformemente Francisco González Aguirre y Pedro María Aguado (fojas 24, 25 y 26 del expediente), visto es que la suma de trescientos cincuenta pesos á que ellas ascienden, está plenamente comprobada. Obérvase, además, que la expropiación del caballo avaluado en sesenta pesos, está comprobada por la declaración de los dos testigos anteriormente citados, y por la de Daniel Sanz.

Respecto del resto, valor no reconocido por la Comisión, el apelante no ha hecho observaciones ni presentado documentos que puedan ser fundamento para el reconocimiento correspondiente.

Por lo demás, las exaccciones sufridas por Durán fueron hechas por las fuerzas revolucionarias el año de mil ochocientos ochenta y cinco (1885), y el carácter de amigo y sostenedor del Gobierno que tenía Durán se halla plenamente acreditado.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el parecer fiscal resuelve:

Reconócese á cargo del Tesoro público las dos partidas siguientes:

1.ª A favor de Rodulfo Aguilar, mil pesos	$ 1,000
2.ª A favor de Jeremías Durán, ó de su apoderado Julio Fernández M., cuatrocientos sesenta pesos	460
Total, mil cuatrocientos sesenta pesos	$ 1,460

Queda en estos términos reformada la resolución apelada.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, siete de Marzo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Ricardo Solano, vecino del Municipio de La-Sierra, en el Departamento del Cauca, demanda al Tesoro nacional la suma de doscientos treinta pesos ($ 230), valor de suministros hechos á las fuerzas del Gobierno nacional, en la pasada guerra de 1885, y consistentes en:

Un caballo de valor de	$ 80
Otro caballo	70
Dos vacas, á $ 20	40
Una montura aparejada	40
Total	$ 230

A falta de atestación del Jefe militar que recibió estos suministros, y de toda otra prueba de carácter oficial consistente en certificación de alguna autoridad política, el reclamante apoyó su demanda con el dicho de tres testigos: Juan Isidro Muñoz y Juan Domingo y Eloy Cruz, quienes rindieron sus declaraciones ante el Juez municipal de La-Sierra, con fechas veintidós y veinticuatro de Enero de 1887 (folios 3 á 6), aseverando todos uniformemente "que como testigos presenciales vieron que en la pasada revolución de 1885 el señor Ricardo Solano dió voluntariamonte para el uso y sostenimiento de las fuerzas comandadas por el General José María González, á fines del mes de Enero del mismo año (1885) los objetos que en su legítimo precio son como sigue" (los que arriba quedaron expuestos).

Objetadas estas declaraciones por no haber sido recibidas por el respectivo Juez del Circuito ó de Provincia, como lo previene el ordinal 3.° del artículo 2.° de la Ley 44 de 1886, solicitóse su ratificación ante el Juez del Circuito de Popayán, pero sustituyendo el testimonio de Juan Antonio Hernández al de Eloy Cruz, que no pudo ser hallado. Hernández declaró en los mismos términos de los otros testigos. Quedan, pues, como testigos hábiles para comprobar el suministro, el expresado Hernández, Juan Isidro Muñoz y Juan Domingo Cruz, pues la declaración de Eloy Cruz, que no pudo ser ratificada con las formalidades legales, carece de todo valor probatorio. Pero como de los testigos que quedaron en pie, el Fiscal sólo abonó el dicho de Hernández, expresando que no abonaba el de Muñoz porque en otro asunto de suministros aparecía negando un hecho que después resultó confirmado por el dicho de otros testigos, y que se abstenía de abonar el de Domingo Cruz porque no le conocía, y no había encontrado quién le diera razón de su conducta, la Comisión, de acuerdo en todo con el parecer del señor Fiscal, negó en su totalidad la reclamación de Solano, por resolución número 3,870, de trece de Julio de 1892, resolución que fué confirmada por la del Ministerio del Tesoro, de nueve de Septiembre último, número 3,189, la cual ha venido en apelación á esta Suprema Corte, sin que á virtud de auto para mejor proveer se haya abundado de pruebas en esta instancia.

Como se ve de la prueba testimonial, única exhibida por el demandante para fundar su reclamación, sólo ha quedado vigente la del testigo Juan Antonio Hernández, y como el ordinal 2.° del artículo 2.° de la ley de la materia, 44 de 1886, exige terminantemente para la comprobación de cada hecho la declaración de tres testigos idóneos y contestes, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma en todas sus partes la resolución ministerial apelada, absolviendo en consecuencia al Tesoro nacional de la reclamación materia de esta providencia.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, nueve de Marzo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: María Francisca Paz, vecina del Bordo, Departamento del Cauca, solicita recompensa, por medio de su apoderado Manuel D. Paz, por haber muerto su hijo José María Paz, en defensa del Gobierno.

Ha comprobado la demandante con declaraciones de tres testigos idóneos, á falta acreditada de las actas ó partidas del estado civil: que es madre natural de José María Paz; que éste murió en la batalla de "Los-Arboles," librada en treinta y uno de Diciembre de mil ochocientos sesenta y uno, entre las fuerzas comandadas por el Coronel Julio Arboleda, que defendían al Gobierno de la Confederación Granadina y fuerzas revolucionarias; que Paz pertenecía al Ejército de la Confederación y tenía el empleo de Alférez, que equivale al de Subteniente; que la solicitante es muy pobre, vivió en buena armonía con su hijo, ha observado buena conducta y permanece soltera; y que Paz murió soltero, sin dejar más heredero que su referida madre.

El Ministerio del Tesoro ha certificado que María Francisca Paz no figura en el registro de los pensionados de la República, ni hay constancia de que haya recibido recompensa del Tesoro público por razón de la muerte de José María Paz, y el de Guerra, que en la Memoria de ese Ministerio del año de mil ochocientos sesenta y cinco, figura el nombre de José María Paz, en el empleo de Alférez con la antigüedad de diez y ocho de Julio de mil ochocientos sesenta y uno. No consta que este individuo sea el mismo que murió el treinta y uno de Diciembre en la batalla de "Los-Arboles;" pero si no hay identidad, las declaraciones de testigos sirven como prueba supletoria.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el parecer del Procurador de la Nación, y de conformidad con lo que disponen los artículos 1.°, 5.°, 9.° y 11 de la Ley 84 de 1890, declara que María Francisca Paz, vecina de Bordo, en el Departamento del Cauca, es acreedora á una recompensa unitaria de mil novecientos veinte pesos ($ 1,920) que se le pagará del Tesoro nacional.

Notifíquese esta sentencia, á las partes, publíquese en la *Gaceta Judicial*, comuníquese al Ministerio del Tesoro, déjese copia y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, quince de Marzo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: En virtud de acusación que, como apoderado de Jesús María Ramírez, propuso Juan B. Quintero C. contra los Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, doctores José de Jesús Alviar, Julián Cock Bayer y Fabriciano Escobar, por varios cargos deducidos de la sentencia definitiva que dictaron en siete de Junio de mil ochocientos ochenta y ocho en la tercería de dominio que instauraron Alvaro Antonio, Lucio y Valeriano Ramírez en la ejecución seguida ante el Juzgado 3.° del Circuito de Medellín por Manuel Ochoa contra Jesús María Ramírez, por cantidad de pesos, la Corte, practicadas que fueron todas las diligencias informativas del caso, profirió su auto de diez y nueve de Julio último, por medio del cual llamó á juicio de responsabilidad, por los trámites extraordinarios á los tres expresados Magistrados, por el cargo consistente en haber dado sentencia contra leyes expresas y terminantes en cuanto no existía prueba legal suficiente de la nulidad declarada en aquella sentencia, delito definido en la segunda parte de uno de los artículos comprendidos en el capítulo 7.°, título 10, libro 3.° del Código Penal de Cundinamarca, adoptado para la Nación por la Ley 57 de 1887.

Comisionado el Gobernador de Antioquia para la práctica de las diligencias señaladas para el caso por el artículo 1906 del Código Judicial, hízose á los acusados la respectiva notificación, y ellos han rendido á la Corte sus informes, con lo cual, y hecha la citación para sentencia, ha llegado el caso de pronunciarla, á lo que se procede, previas las siguientes consideraciones á que dan lugar los razonamientos expuestos por los informantes:

Sostienen ellos no haber incurrido, al dictar la sentencia definitiva de siete de Junio de mil ochocientos ochenta y ocho, en violación de leyes expresas y terminantes, sino que, muy al contrario, abrigan confianza y tienen conciencia de haber hallado plena prueba de la simulación del contrato celebrado por Jesús María Ramírez con sus hermanos, el veintiocho de Noviembre de 1883, con el único fin de eludir el pago de dos mil pesos á que cuatro días antes había sido condenado Ramírez, en una ejecución seguida contra él por Manuel Ochoa.

Para mayor claridad en la exposición de los hechos y también de las razones que determinaron aquel fallo del Tribunal, tómase del informe del doctor Cock Bayer, la parte siguiente:

"En la Corte debe estar actualmente el expediente en que corre la sentencia que hizo la condenación, y allá se verá que fué el 24 de Noviembre de 1883, cuatro días antes del otorgamiento de la escritura de venta, cuando se dictó la que causó ejecutoria. (*Crónica Judicial de Antioquia*, número 108 del 28 de Febrero de 1884).

"Ramírez, hombre sumamente laborioso y sin vicios, como él mismo se ha encargado de justificarlo con numerosos testigos, y así lo declaran sus hermanos en posiciones, heredó de sus padres varios bienes, y con su trabajo inteligente y asiduo los aumentó hasta el punto de que en la fecha de la escritura tenía inmuebles y semovientes por valor de diez y seis mil novecientos noventa y nueve pesos ($ 16,999), según el avalúo pericial que cinco meses y medio después, el 14 de Junio de 1884 (fojas 16, cuaderno de copia), se hizo de estos bienes en la ejecución. Véanse las posiciones y declaraciones de fojas 20 y siguientes del primer cuaderno.

"Ramírez, quien trató de probar en el juicio que había hecho pérdidas considerables; pero no lo logró. Apenas se sabe que en 1876, siete años antes de la venta, perdió dinero en una compra de ganado; más no se sabe en qué cantidad.

"Ramírez, que ha dicho que debía á sus hermanos y que éstos pagaron por él deudas. Adelante demostraré que Ramírez no justificó que debiera tales cantidades ni á sus hermanos ni á nadie, antes de la venta. Solamente aparece un documento en favor de D.ª Braulia Mejía de T. por ochocientos pesos ($ 800), (fojas 217 del 2.° cuaderno) en que dicen Lucio y Alvaro Ramírez que su hermano Jesús debía á dicha señora; pero lo dicen el 24 de Febrero de 1884, fecha del documento, casi tres meses después de otorgada la consabida escritura de venta.

"Jesús María Ramírez, pues, que no es ni loco ni imbécil y que sólo aparecía con un crédito pasivo insignificante con relación á su fortuna (el de $ 2,000 en favor de Manuel Ochoa, crédito que tiene su origen en relaciones y negocios de larga data entre él, Manuel José Viveros, ya muerto, y Ochoa), con quien éstos vivieron en un tiempo y que fueron sucesivamente sus confidentes y amigos íntimos (fojas 38 vuelta, cuaderno de copia), y según resulta de piezas tomadas de un juicio entre Ramírez, Ochoa y Epitacio Vélez, que acompaño; Ramírez, repito, entrega todos sus bienes á título de venta por escritura otorgada, cuatro días después de ser irrevocablemente sentenciado; escritura hecha en favor de sus hermanos Lucio y Alvaro con quienes ha vivido siempre en buena armonía y muy unidos, como lo ha comprobado con las declaraciones de fojas 243 y siguientes del 2.° cuaderno; y los vende en la suma de seis mil doscientos quince pesos ($ 6,215), incluyendo los semovientes y la silla de montar, suma que el vendedor declara haber recibido á su satisfacción.

"¿Podrá exhibirse más clara la falta de verdad en el contrato de venta?

"Más tarde dice Ramírez contestando la posición 9 (fojas 17 vuelta, cuaderno 1.°): 'Es cierto, he recibido de Alvaro y Lucio Ramírez el valor de las fincas que les vendí en *descuento de deudas que yo les debía y en pagos que ellos han hecho por mí.*"

"Luégo veremos que no había á la sazón de la simulada venta ninguna deuda de Ramírez á sus hermanos ni á otros, que éstos hayan satisfecho.

"Dije que Ramírez vendió todos sus bienes, porque él juró tres meses después, el 8 de Marzo de 1884 (fojas 7, cuaderno de copia), que no tenía sino unos pocos créditos de poco valor, los que no se sabe si serían ciertos, á juzgar por lo que declaró Felipe Ochoa á fojas 133 y 134 del primer cuaderno, y unos muebles de valor insignificante, entre ellos una caja de fierro, lo qué prueba que Ramírez manejaba dinero.

"Vender lo que se tiene, sin urgencia, y sin estar loco, por la mitad ó casi la tercera parte de su valor, es cosa inconciliable con la razón; y el ánimo se inclina naturalmente á juzgar que hay ficción en el contrato; pero si el que vende es hombre sano de juicio, económico, trabajador, sin vicios degradantes, sin deudas, que lucha desde largo tiempo atrás por no pagar una que cree no deber, y por la cual ha sido condenado; que no resulta tener más créditos pasivos al tiempo de la venta que lo constriñeran al sacrificio de más de la mitad de lo que tenía; que vende á sus hermanos con quienes ha vivido en amistosa comunicación; que da por recibido el precio de los inmuebles y declara en un recibo que se le ha satisfecho el de los semovientes; que más tarde dice que ese precio fué satisfecho á sus acreedores, que no se sabe quiénes serían, ni por cuánto; que después jura que no posee sino cosas de exiguo valor y de existencia dudosa; que se queda administrando como dueño y aprovechándose de los productos de las mismas fincas que figuran vendidas, con poder de sus compradores que viven en el mismo lugar, que no son ricos y que allí mismo tienen fincas, y que continúa negociando con buen crédito como antes, según lo declara Lucio Ramírez á la 12.ª posición (fojas 20, primer cuaderno) y lo revelan las declaraciones de fojas 55 á 76, cuaderno 1.°, y 329 á 331 del cuaderno 2.°, entonces, señores Magistrados, cuando todas esas circunstancias se reúnen, y están *plenamente justificadas*, como realmente lo están en este proceso, la razón tiene forzosamente que afirmar que se ha *fabricado* una composición entre los actores para engañar la justicia, burlar la ley y no pagar lo que se es cobra.

"Y si á esos indicios se agrega la grave presunción que resulta de lo que declaró Juan Pablo Arango R. á fojas 55, el cual dice en su declaración, que es de fecha 28 de Septiembre de 1886, "que el mismo Ramírez Jesús le dijo en tiempo atrás que estas negociaciones de fincas eran para evadir el pago de una suma que el señor Manuel Ochoa A. le cobraba injustamente, según le dijo el mismo Ramírez, y que *éste no podía tener nada á la vista.*"

"Y además, la significativa, por lo vacilante y contradictoria declaración de Alvaro Ramírez, uno de los supuestos compradores de las fincas de Jesús, el cual dice en sus respuestas á las posiciones (fojas 23 del primer cuaderno):

"A la primera: 'Que no sé cuáles son las fincas denunciadas en esa ejecución; pero nosotros hicimos tercería en unas fincas que *le compramos á Jesús Ramírez*, por cuanto no nos notificaron el embargo, según creo.

"A la tercera: 'Que no sé si mi hermano Jesús ha continuado comprando ganado después de que otorgó la escritura *en mi favor y á favor de mis hermanos Lucio y Valeriano;* pero sí lo he visto realizando en la plaza de este Distrito.

"A la doce: 'No sé que á mis hermanos Lucio y Valeriano, ó al depositario, les haya pedido mi hermano Jesús con qué hacer gastos invertidos en las mencionadas fincas, *y no sé, ó por lo menos no recuerdo, que haya tocado conmigo ó con mis hermanos para la administración de ellas;* pero los gastos podía él hacerlos de los productos de las mismas fincas; *pero que siempre ha tocado conmigo para hacer cualquier cosa en las fincas.*"

"A la veinte: 'La escritura con la cual hicimos tercería no es nula y *las fincas referidas pertenecen á mí y á mis hermanos Lucio y Valeriano. Agrega que cree que su hermano Valeriano no ha comprado finca raíz á su hermano Jesús sino al exponente y á su hermano Lucio.*"

"En donde se ve que Alvaro Ramírez afirma que su hermano Valeriano Ramírez también figura en la escritura de venta de los inmuebles que les hizo su hermano Jesús, y por último, solamente *cree* que su hermano Valeriano no entró en la compra con el declarante y Lucio, sino solamente estos dos. Un comprador que no está seguro de los que se asociaron para comprar, ni por consiguiente, qué acción representa en la negociación, cuando ésta se había hecho solamente entre tres personas y por valores relativamente cuantiosos, cuando no había pasado tanto tiempo (dos años y medio apenas), para que puedan olvidarse los hechos, y cuando éstos eran y han seguido siendo motivo de encarnizada disputa judicial, revela con gran fuerza que no ha habido verdad en estos hechos; que ha intervenido farsa, cuyos términos se han olvidado.

"Para mentir con éxito, siquiera sea pasajero, se necesita mucha memoria; ley providencial, como son todas las que están destinadas á la conservación del orden moral.

"Es clara, por otra parte, la contradicción en que incurre el declarante al absolver la posición doce: no sabe ó no recuerda que su hermano Jesús haya tocado con él para la administración de las fincas, y á renglón seguido dice: "*Pero que siempre ha tocado conmigo para hacer cualquier cosa en las fincas.*"

"El artículo 454 del Código Judicial contiene un sabio principio que la legislación española también consagraba: el litigante que se perjura á sabiendas sobre un hecho sustancial del pleito, debe perderlo si es el demandado. Este artículo lo aplicasteis vosotros hace poco en el caso de simulación en el pleito de Teresa Quijano con Elías Garay (*Gaceta Judicial* número 305)."

De esta exposición, acorde en el fondo con las de los otros dos acusados, se deduce que los elementos á que dan ellos fuerza de plena prueba y en virtud de los cuales dictaron la sentencia que fué motivo de la acusación, se reducen principalmente á los siguientes indicios:

1.° Si entre la fecha de la sentencia que condenó á Jesús María Ramírez á pagar á Ochoa dos mil pesos ($ 2,000) y aquélla en que Ramírez vendió todos sus bienes, inclusive la silla de montar, á sus hermanos, no hubo sino cuatro días de intervalo, se puede conjeturar que el objeto de tal venta fué eludir el pago de los dos mil pesos ($ 2,000) á Ochoa.

2.° Los Ramírez, compradores, no intentaron la tercería excluyente sino casi tres años después de la compra y cuando se persuadieron de que las excepciones opuestas en la ejecución se habían decidido adversamente para el ejecutado. Si los compradores lo hubieran sido en serio y no simulada y maliciosamente, habrían intentado su tercería desde que las fincas fueron embargadas.

3.° Entre el precio de la venta y el avalúo pericial de los bienes vendidos, hay una diferencia que es casi de uno á tres; y hay imposibilidad moral ú ordinaria en que un hombre inteligente y laborioso venda sin necesidad sus bienes, de un día para otro, por la tercera parte de su valor; y debe desconfiarse de la seriedad de una venta semejante, particularmente si se hace en circunstancias en que el vendedor está esquivando pagar una deuda á que se le ha condenado y cuyo pago no puede eludir sino aparentando insolvencia, conjetura más vehemente si se considera que los compradores son los hermanos del vendedor, con quienes éste ha vivido en la más grande intimidad, habiendo habido entre el uno y los otros comunidad de negocios é intereses.

4.° Pablo Arango R. afirma bajo juramento que Jesús María Ramírez le dijo que esas negociaciones tenían por único objeto eludir el pago de Ochoa. Si por ser singular esta declaración no se puede considerar como plena prueba de una confesión extrajudicial de Ramírez, es cierto á lo menos que constituye un nuevo indicio. (Artículo 606 del Código Judicial).

5.° Jesús María Ramírez, después de la venta que de sus bienes hizo, siguió manejándolos como cosa propia, y aunque unos dos meses después de la venta, Lucio y Alvaro Ramírez otorgaron á Jesús María un poder para que éste administrase los mismos bienes vendidos, dicho poder no tuvo efecto sino durante cinco meses, porque en veintiuno de Junio de 1884 los bienes fueron embargados y depositados en poder de Manuel Ramírez, también hermano de Jesús María, y el depositario

no efectuó ningún acto que sirva para explicar por qué Jesús María continuó manejando, y parece que hoy mismo maneja, las fincas vendidas por él y rematadas luégo por el depositario Manuel, sin que en manera alguna se sepa ni los terceristas hayan intentado dar sobre esto explicaciones, en virtud de qué Jesús María sigue en posesión y como en dominio de tales bienes, sin rendir cuenta de ellos ni á los compradores ni al rematador. Si no hubo entrega material de los inmuebles vendidos, no pasaron éstos en realidad á poder de los compradores y el registro del correspondiente instrumento sólo tuvo por objeto dar efecto legal aparente á un acto simulado, para lograr los fines de la simulación. (Artículos 1880 y 740 del Código Civil).

6.° Tampoco hubo entrega del precio de la venta de los inmuebles; porque aunque en la escritura del contrato simulado se expresó que Jesús María había recibido cinco mil pesos ($ 5,000), precio convenido, Jesús María, contestando tres años después una posición, dijo que el modo de recibir aquella suma fué en descuento de deudas que lo gravaban en favor de sus hermanos y de otros individuos á quienes aquéllos habían pagado en su nombre; y hecho el examen de tales deudas resulta que las que los interesados han querido hacer figurar como tales, ó fueron contraídas y cubiertas antes del contrato simulado, ó contraídas después, sin que acerca de este punto se hayan podido hacer explicaciones satisfactorias. Si dando crédito á lo que reza la escritura se admite que Jesús María recibió el precio al contado, Jesús María debía tener algo con que pagar á Ochoa, y no podía jurar su insolvencia, y si juró ésta, se perjuró; si dando crédito á lo dicho en la posición por Jesús María, se admite que el pago de la venta no se hizo en dinero al contado sino en compensación de créditos pasivos que reconocía en favor de sus hermanos compradores, ya directos de ellos ó ya por razón de deudas suyas cubiertas por ellos ú otros acreedores, han debido presentarse sobre estos puntos explicaciones y documentos ó pruebas claras, precisas y terminantes; y como esto no se ha hecho claro, resulta que hay necesidad de desechar tal supuesto, y que Jesús María, al absolver, como lo hizo, tal posición, se perjuró á sabiendas sobre un hecho sustancial en el pleito. Además, si no hubo entrega del precio por parte de los compradores, faltó este otro requisito para que se efectuara la tradición según las citas hechas de los artículos 1880 y 740 del Código Civil. Véase lo que con relación á este punto dice el doctor Cock en su informe:

"Con los testigos que declararon de fojas 224 en adelante, trató de probar Ramírez que sus hermanos Lucio y Alvaro habían pagado por él varias sumas de dinero. Ni uno sólo de esos testigos contestó afirmativamente á la *pregunta* 6.ª, en donde se inquiría el hecho, y algunos ni aun *lo habían oído decir*."

"Y estos testigos son de Envigado, presentados por el interesado; son sus amigos ó relacionados y viven en un pueblo pequeño en donde es difícil que no se sepan cosas de esa naturaleza."

7.° Alvaro Ramírez, uno de los compradores, al absolver posiciones, se contradice manifiestamente en varios puntos de los contestados por él, cosa que naturalmente induce á juzgar que no hay verdad en la venta disputada. Si además, la contradicción fuese manifiesta y á sabiendas y versara sobre un hecho sustancial del pleito, como lo es el saber si efectivamente el contrato de venta había sido ó no real, que era precisamente el punto que se trataba de fijar, motivo suficiente habría habido de conformidad con la disposición del artículo 454 del Código Judicial para fundar en este sólo hecho, una vez que estuviese plenamente establecido, la sentencia que ha dado lugar á esta acusación.

8.° Alvaro Ramírez dejó comprender, al absolver posiciones, que no sabía quiénes eran sus compañeros verdaderos en la compra de los bienes de su hermano Jesús. En un contrato de la importancia que debía tener para los contratantes aquel de que allí se trataba, es inverosímil que uno de ellos estuviera tan desorientado en puntos que le incumbían é interesaban directamente. Esta desorientación no puede explicarse sino por el supuesto de la simulación del contrato. Si éste hubiera sido real y efectivo, el interés que habría conducido á Alvaro á celebrarlo por su parte bien habría producido el efecto de fijar su atención en aquellos puntos de que dependía su conveniencia y ganancia, á saber: qué parte le tocaba en las fincas compradas, en qué proporción debían distribuírse sus productos, cuántos y cuáles eran sus compañeros etc., etc., etc. No se concibe que un hombre de negocios, después de haber comprado en compañía de otros, algunos años antes, ciertas fincas de valor considerable, y de haber aceptado la escritura en que el contrato quedó fijado, ignórase en compañía de quién ó de quiénes verificó esa negociación, como si toda su intervención en ella hubiese consistido simplemente en dar una firma, y como si una vez adquiridas dichas fincas se hubiese desentendido completamente de ellas. Esto sólo puede explicarse por el supuesto de la simulación del contrato.

Aunque en el auto de proceder se hizo examen de algunos de estos indicios y se expusieron objeciones contra la fuerza que cada uno de ellos tuviera, eso estaba bien hecho allí en donde se formulaban los cargos de que debían responder los acusados, y á efecto de que respondieran. Después de que ellos han informado, la Corte ha menester escrupuloso cuidado para sentenciar, porque no solamente se castiga aplicando la pena señalada para cada caso por la ley penal, sino también por medio de los conceptos que se emitan sobre la culpabilidad de los sindicados. Y en tratándose de altos empleados públicos que han envejecido en el ejercicio de la magistratura, no sería lícito á la Corte dejar correr conceptos que afectasen su reputación de buenos empleados sino en el caso de que, en toda realidad de verdad, ellos fueran fundados según las pruebas de los autos.

Sabido es que la prueba de indicios es de naturaleza tal que no comporta fuerza suficiente sino mediante el conjunto que con ellos se forma. Por sí sólo cada uno es como débil hilo que no tiene tal vez resistencia para soportar un leve peso; pero unidos y trabados entre sí, se convierten como en fuerte y poderoso cable capaz de vencer grandes resistencias, y adquieren, por disposición expresa de la ley, valor de plena prueba.

Y hay que reconocer que á las objeciones con que en el auto de enjuiciamiento se combatió la probanza procedente de los indicios que sirvieron de base á la sentencia por la cual se acusó á los Magistrados de Antioquia, han contestado éstos satisfactoriamente. Díjose, por ejemplo, que la diferencia entre el precio de la simulada venta y el avalúo de las fincas vendidas, podía provenir de la diferencia de los tiempos en que estos dos actos tuvieron lugar; pero á eso replican los acusados que entre el año de 1883 en que se verificó el primero de dichos actos, y el de 1884 en que se efectuó el segundo, no pudo haber diferencia de tiempos que consigo llevase una alza tan considerable en el precio de las cosas, sino que antes bien los rumores de la guerra que en el último de esos dos años empezó, debieron determinar una baja en los precios.

Las transacciones que se verifican realmente todos los días y á cada paso en el comercio, *producen efectos* visibles que palpan los que intervienen en ellas. Las transacciones que se fingen no producen esos mismos efectos sino los contrarios. Por eso el tiempo es el que se encarga de poner de manifiesto la verdad de los contratos, y entre ellos principalmente la enajenación de la propiedad. Quien realmente compra una cosa, la recibe, la posee, hace de ella el uso que le conviene; pero quien finge comprar una cosa que en realidad no compra, la deja en poder de su dueño, sin hacer caso de ella. Y esto es precisamente lo que aquí ha sucedido.

En efecto, al informe del Magistrado doctor Cock Bayer se acompaña una información de testigos levantada á petición del informante y de orden del Gobernador del Departamento, por el Alcalde de Envigado, documentos en que se corrobora la verdad de los hechos de que proceden los indicios enunciados, principalmente el consistente en haber Jesús María Ramírez continuado poseyendo las fincas por él vendidas á sus hermanos, y á pesar del embargo, depósito y remate. También se acompaña la copia de algunos de los documentos citados en el informe.

Ahora bien, los artículos 590 y 591 del Código Judicial, son del tenor siguiente:

"Art. 590. Los indicios no necesarios sólo forman plena prueba cuando son vehementes y diversos pero enlazados entre sí, concurriendo todos á demostrar sin dejar duda alguna, la verdad del hecho controvertido."

"Art. 591. Las pruebas incompletas son apreciables como indicios y como fuentes de conjeturas, y en número plural pueden formar una prueba completa, si tienen los requisitos expresados en el artículo anterior."

De manera que con tal de que los hechos de que los indicios nacen sean diversos, vehementes y enlazados entre sí, convergentes todos á demostrar el hecho controvertido, forman plena prueba; y que las pruebas de otro orden que sean incompletas, se pueden estimar á lo menos como indicios ó fuertes conjeturas.

Pero quién sino el Juez de la causa es el encargado de juzgar si los indicios diversos que contribuyen á demostrar un hecho, son tales que no dejen duda alguna?

Acerca de este punto el Magistrado doctor Escobar sustenta la doctrina de que es al Juez, y sólo á él á quien toca estimar las pruebas, y trascribe en su apoyo las siguientes palabras de Bonnier: "La cuestión de saber hasta qué punto al elemento conocido hace verosímil la existencia de tal ó cual causa desconocida, subordinada por su naturaleza á las luces de la razón, depende en general únicamente de la apreciación del Juez."

Por su parte la Corte no vacila en aceptar que esta doctrina es corriente y jurídica en tratándose de la prueba de indicios, la cual solamente es inadmisible cuando le falta alguno de los requisitos que, como se ha visto, le señala la ley para considerarla como completa, á saber: que los hechos de que los indicios proceden, estén plenamente probados; que dichos hechos sean entre sí diversos; que conduzcan todos los indicios á demostrar una misma verdad; y que sean vehementes.

En otros términos: si procediendo de hechos claros, ciertos y conocidos y entre sí diferentes, los indicios no necesarios se enlazan en el resultado común á que todos conducen, y son, por otra parte, vehementes, forman plena prueba; y el Juez de la causa es el natural encargado por la ley para formar juicio acérca de la eficacia con que ellos contribuyen á producir en su ánimo un pleno convencimiento del hecho que se controvierte.

Los Magistrados acusados afirman perentoriamente que en virtud de los indicios que se dejan enumerados adquirieren absoluta certeza moral de que la venta hecha por Jesús María Ramírez á sus hermanos era simulada, porque no hubo la entrega que el dueño debió hacer de las fincas vendidas á los fingidos compradores de ellas, ni hubo la intención por parte de aquél de transferir el dominio, ni por parte de los compradores la intención de adquirirlo; requisitos que en efecto exige el artículo 740 del Código Civil para que se realice la tradición efectiva, así como el 1880 señala esta formalidad como primera obligación del vendedor. Siendo esto así y no pudiéndose negar que los indicios que á tal resultado condujeron á los Magistrados acusados reúnen los requisitos legales necesarios para su recta estimación, se ve que no hay modo de sostener que los Magistrados encausados hayan violado leyes expresas y terminantes al dictar la sentencia por la cual se les acusa.

Con efecto, las disposiciones que en el auto de enjuiciamiento se expresó que podían haber sido violadas por medio de la referida sentencia, son las de los artículos 536 á 540, 555, 561, 562, 574, 588 á 591, 593, 594, 606 á 609 y 635 del Código Judicial de la Nación; y haciendo escrupuloso examen de estas disposiciones, se descubre que no ha habido violación de ellas.

Los artículos de 536 á 540 definen y clasifican las pruebas; pero se ha visto ya que la prueba en que los Magistrados del Tribunal de Antioquia apoyaron su sentencia fué prueba indirecta, de indicios, que en el presente caso reunió las condiciones legales necesarias para que pudiese ser considerada, como en efecto lo fué, con fuerza de plena ó completa, siendo de cargo de los Jueces de la causa estimarla, sin que en contra de esta estimación sea potestativo del Superior argüir, sino en el caso de que careciese de las condiciones que la ley señala para su validez, ó lo que es lo mismo, que ella fuese manifiestamente irracional é injurídica, cosa que no ocurre en el presente caso.

Los artículos 555, 561, 562 y 574, que tratan, de la confesión en general el primero, de la confesión extrajudicial y de su valor como prueba los otros tres, no son aplicables al caso desde que la declaración que Pablo Arango R. rindió afirmando que Jesús María Ramírez le había dicho que esas negociaciones eran solamente con el fin de eludir el pago de Ochoa, no se tomó en cuenta sino con fuerza de gran presunción, de conformidad con el artículo 606 del propio Código Judicial. La mencionada declaración de Arango R. no forma por sí sola plena prueba, ni puede tampoco considerarse como suficiente para dar en su virtud como establecida una confesión extrajudicial de Jesús María Ramírez; pero constituye una gran presunción que, agregada á las otras, contribuye á establecer la plena prueba que ha servido de fundamento á la sentencia; y es evidente que tomada dicha declaración en este sólo sentido, no viola en manera alguna las disposiciones que se dejan citadas.

Los artículos 588 á 591, 593 y 594, no solamente no han sido violados, sino que, muy al contrario, de lo expuesto se deduce que ellos han sido las disposiciones en aplicación de las cuales la sentencia objeto de la acusación ha podido dictarse jurídicamente, porque queda demostrado que ha sido el caso en que los Jueces han podido dar á la prueba de indicios el valor de plena ó completa.

Con efecto, se ha visto ya que no se pudo aquí disputar ni la diversidad de los hechos que han sido origen de los varios indicios, ni su comprobación plena, puesto que todos aparecen de autos, ni su concurrencia á demostrar una misma conclusión, la de la simulación del contrato, conclusión á que todos tienden con vehemente eficacia. El enlace racional que cada uno de ellos guarda con dicha conclusión es perfectamente claro y mayor no podría exigirse sino en el caso de que alguno ó algunos de ellos fuesen indicios *necesarios;* y entonces habría bastado uno según la ley para que pudiese mirarse constituída por él la plena prueba de la simulación, y por ende de lo jurídico de la sentencia acusada.

El artículo 606 se ha visto ya que es disposición en virtud de la cual se puede y debe estimar la declaración de Arango R., como gran presunción de la confesión extrajudicial de Jesús María Ramírez; el 609, no es aplicable, porque refiriéndose la declaración de Arango R. á palabras que Jesús María Ramírez expresó comunicándole confidencialmente asuntos personales, dicha declaración tiende á establecer que Ramírez hizo confesión extrajudicial de la simulación controvertida, mientras que aquella disposición legal alude manifiestamente á la prueba testimonial, ya por razón de los términos en que está concebida, ya por el capítulo en que está incluída. Tomada la declaración de Arango R. como un indicio ó conjetura de confesión extrajudicial de Ramírez, no da lugar á que se le aplique el artículo 609 mencionado. Todavía son menos aplicables los artículos 607, 608 y 635, mirada la cuestión desde el punto de vista de la prueba resultante de los indicios que determinaron la sentencia acusada.

El anterior examen de las disposiciones que en el auto de enjuiciamiento se mencionaron como que habían podido ser violadas por dicha sentencia, pone en evidencia la irresponsabilidad de los Magistrados acusados. En sus informes ellos, principalmente el doctor Cock Bayer, han expuesto consideraciones decisivas que demuestran plenamente que como Jueces hallaron elementos suficientes que constituían plena prueba acerca del punto controvertido, en mérito de lo cual y haciendo debida aplicación de leyes pertinentes al caso y uso de la facultad de estimar honradamente la prueba, dictaron la sentencia aludida, seguros de cumplir así con su deber, tal como lo establece el artículo 837 del Código Judicial, que es como sigue:

"Art. 837. En toda sentencia, cualquiera que sea su especie, que hayan de dictar los funcionarios del orden judicial, deben tener en cuenta que el objeto de los procedimientos judiciales, y de las consiguientes reglas que las leyes establecen para ellos, es el de que la sentencia sea conforme con la verdad en los hechos, y conforme á la ley sustantiva en el

derecho. En consecuencia, toda interpretación y aplicación de las disposiciones legales relativas á los procedimientos judiciales debe dirigirse á esos fines, que son los de la jurisprudencia."

La Corte, en vista de tales informes, no vacila en reconocer la verdad y justicia con que los Magistrados acusados han eliminado el cargo por el cual los había llamado á juicio, no dejando sobre esto lugar á duda, que si la hubiera, todavía habría que resolverla en favor de los acusados, pues mal podría sentenciarlos á pena si las pruebas para ello aducidas no fuesen claras y precisas, siendo cierto que en el presente caso dichas pruebas no existen, toda vez que á las que se alegaban han contestado ellos satisfactoriamente.

Aunque en sus dichos informes los acusados oponen en subsidio la excepción de prescripción, la Corte juzga que no hay lugar á entrar á considerar tal excepción, ya que el caso es de absolver á los enjuiciados.

Y por todo lo expuesto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el parecer oportunamente emitido por el señor Procurador general, absuelve á los Magistrados doctores José de Jesús Alviar, Julián Cock Bayer y Fabriciano Escobar del cargo por el cual se les había llamado á juicio.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta*, devuélvanse al lugar de su procedencia las piezas que perteneciendo á otras causas se habían agregado al expediente, y archívese éste.

LUCIO A. POMBO.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ANÍBAL GALINDO.—ALEJO DE LA TORRE.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, seis de Marzo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Por apelación que interpuso Angel María Ordóñez, vecino de Pasto, en el Departamento del Cauca, ha sido elevada á esta Superioridad la sentencia definitiva que profirió el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, el 30 de Julio de 1892, en el pleito civil ordinario incoado por el Fiscal del Circuito de Pasto contra el expresado Ordóñez para que se le condene como contratista á hacer la reposición del puente del río Buesaquito, destruído por las avenidas del mismo río, y al pago de los daños y perjuicios consecuenciales á la falta de los compromisos que tenía contraídos.

Repartido el asunto, se dió cumplimiento á lo dispuesto en los artículos 151, 152, 154 y 155 de la Ley 105 de 1890, y citadas las partes para sentencia, y señalado día para oírlas en audiencia pública, es llegado el caso de pronunciar sentencia de 2.ª instancia; pero antes de hacer esto, conviene examinar si la actuación adolece de algún vicio que produzca nulidad.

Efectivamente lo hay desde que el Juez del Circuito de Pasto admitió la demanda y la sustanció por los trámites de la 1.ª instancia.

El artículo 12, inciso 2.° de la Ley 72 de 1890, prescribe lo siguiente:

"Art. 12. En lo sucesivo los Jueces de Circuito conocerán en primera instancia de los negocios siguientes.

..... "2.° De los juicios entre los Gobiernos de los Departamentos y los particulares cuando el interés de la acción no pase de mil pesos."

En este expediente constan estos hechos:

1.° Que Angel María Ordóñez contrató en 15 de Noviembre de 1887 con el Prefecto de la Provincia de Pasto, Sixto Guerrero, debidamente autorizado por el Gobierno del Departamento del Cauca, las composiciones del puente del río Juanambú, en los términos que el mismo contrato detalla; y la construcción de un puente de madera sobre el río Buesaquito, con la solidez que menciona el citado contrato, y

2.° Que el interés de la demanda fué fijado por el demandante en una suma mayor de mil pesos ($ 1,000).

Estos hechos debieron servir para que el Tribunal Superior de Popayán hubiera conocido del juicio, por ser el competente según la ley, y no el Juez del Circuito de Pasto, como aparece del expediente; así porque la materia del juicio interesa al Gobierno del Departamento, como por razón de la cuantía, dado que cuando se instauró la demanda en Septiembre de 1891 regía la Ley 72 de 1890, arriba citada.

Es cierto que aparece en la actuación que habiendo el Juez de 1.ª instancia mandado poner en noticia de las partes la nulidad causada por la falta de jurisdicción del mismo Juez por haber admitido la demanda y conocido de ella, las partes ratificaron expresamente lo actuado, y el Juez del conocimiento dió por bien hecha la ratificación (folio 52 y vuelto del cuaderno de 1.ª instancia); pero yá se ha decidido, de acuerdo con el artículo 133 de la Ley 105 de 1890 que los Agentes del Ministerio Público no están facultados para hacer dichas ratificaciones; de modo que aunque se hizo por el Fiscal demandante, puede considerarse como no hecha. Así lo decidió esta Superioridad por resolución que recayó en el juicio de Manuel María Ujueta contra la Nación, que está publicada en el número 359 de la *Gaceta Judicial*.

No puede, pues, la Corte entrar á decidir cosa alguna sobre lo principal del pleito, sino concretarse á la nulidad que lo afecta, nulidad que debió ser declarada por el Tribunal de Popayán.

En tal virtud, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, decide: que es nulo todo lo actuado en este proceso desde el escrito por medio del cual se entabló la demanda, por falta de jurisdicción, en el Juez del Circuito de Pasto, que no pudo prorrogarse; y en consecuencia, como la culpa de la nulidad no es enteramente del Juez 2.° del Circuito de Pasto, en su carácter de Juez suplente, señor Duarte (cuyo nombre no se expresa en los varios autos que dictó en el expediente), quien admitió y dió curso á la demanda, sino también del Tribunal Superior de Popayán, que aprehendió conocimiento del juicio á pesar de la nulidad inallanable de lo anteriormente actuado; haciendo aplicación de la doctrina del artículo 140 de la Ley 105 de 1890, la Corte declara que las costas causadas en la actuación verificada en el Juzgado 2.° del Circuito de Pasto, son de cargo del Juez suplente Duarte, y las causadas con posterioridad, en el Tribunal y la Corte, de cargo de los Magistrados doctores Felipe Meléndez, José N. Vernaza y Joaquín Rebolledo.

Notifíquese esta resolución, déjese copia, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, ocho de Marzo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: En la demanda entablada por Rafael A. Toledo, como cesionario de James Wilson, ciudadano de los Estados Unidos del Norte, por nueve mil ciento ochenta y ocho pesos, ochenta centavos ($ 9,188-80), valor de expropiaciones, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dictó auto ordenando que el Fiscal, como demandado, contestara de nuevo dicha demanda, en el sentido de indicar las razones de la negativa expuesta por él en su contestación, y que lo hiciera con la debida separación de los hechos fundamentales del libelo respectivo.

El Fiscal del Tribunal apeló de esa providencia para ante la Corte Suprema, y sustanciado el recurso, ésta se ocupa en resolverlo de la manera siguiente:

El Fiscal se limitó á decir en su contestación á la demanda del cesionario Toledo: que "á su modo de ver en ese expediente—el de reclamación por expropiaciones—no se encuentra jurídicamente acreditada la neutralidad del extranjero señor James Wilson, ni en el señor Rafael A. Toledo el carácter de cesionario con que intenta la reclamación, como se reserva demostrarlo cuando llegue el momento de alegar para la definitiva; y que 'por ahora, y siendo

deber del actor el dar la prueba de los hechos y del derecho que sustentan la acción personal ejercitada, se limita en esa contestación á negar la demanda en todas sus pretensiones, manifestando que en el curso del juicio, producirá las pruebas que crea conveniente á la defensa de la parte que representa."

El artículo 938 del Código Judicial, dice:

"Cuando el demandado no convenga en lo que se le exige en la demanda, expondrá con sencillez las razones que tenga para ello, pudiendo acompañar los documentos en que quiera apoyarlas y haciendo valer las excepciones perentorias que lo excusen de los cargos de la demanda; y respecto de los hechos contenidos y enumerados en el escrito de la demanda, contestará á cada uno de ellos, expresando si los acepta como ciertos ó exponiendo los motivos que tiene para no prestarles su asentimiento. Los hechos en que se apoya la contestación los pondrá el demandado en la misma forma en que se ordena lo haga el demandante."

El artículo 932 del mismo Código ordena al demandante la forma en que deba establecer la acción.

Basta ver el libelo del demandante y la contestación del Fiscal del Tribunal, y comparar éstos con las disposiciones citadas, para notar que el demandado no se ha ajustado á esa prescripción ó mandato de la ley; pues que ni propuso excepciones perentorias, ni expuso con sencillez las razones que tiene para no convenir en lo que se exige, ni contestó á cada uno de los hechos enumerados en el libelo, ni apoyó la contestación en la misma forma en que lo hizo la demanda.

Por consiguiente, hizo bien el Tribunal de Cundinamarca en cumplir con lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley 105 de 1890, y ordenar al Fiscal que llenara los requisitos exigidos á la contestación, requisitos que debe llenar todo demandado, sin excepción alguna.

El objeto de la ley al disponer de qué manera debe entablarse la demanda y en qué forma debe contestarse lo expone el señor Procurador de la Nación con bastante acierto: "Obtener el orden, y la claridad, dice en el debate, al mismo tiempo que ilustrar desde el principio al juzgador en los hechos y en las razones que sirven de apoyo á los contradictores, lo cual es de gran importancia especialmente para las pruebas, que deben más tarde decretarse, y cuya pertinencia debe previamente ser calificada por el Juez."

Obligar, por otra parte, hablando en términos generales, á un demandante á entrar en un debate judicial en que no sabe qué va á combatir, ni cómo debe hacerlo, sería comprometerlo injustamente á sostener un pleito en condiciones desventajosas.

Por lo expuesto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridadad la ley, confirma el auto apelado.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, nueve de Marzo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Venido el expediente á este Supremo Tribunal, por recurso de casación interpuesto por Ricardo S. Sarmiento, en su calidad de apoderado de Deogracias y Circuncisión Bernal, Nicomedes Granados, Bárbara y Antonia Mora, contra la sentencia que profirió el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tundama, con fecha cuatro de Noviembre de mil ochocientos noventa y uno, en el pleito que dichos individuos han sostenido por una parte, y Pedro E. Meléndez, Eustasio Leiva, Amílcar Gutiérrez, Pedro S. Leal y Teresa Urrea, por otra, y principiada la sustanciación del expresado recurso, el doctor Ricardo Ochoa G., como apoderado sustituto de los segundos, por medio del escrito que presentó el cinco de Diciembre del año próximo pasado, promovió articulación con el objeto de que la Corte declare desierto el recurso mencionado y ejecutoriada la sentencia contra la cual se interpuso.

Admitida y sustanciada dicha articulación por los trámites prescritos en las disposiciones procedimentales, la Corte pasa á resolverla como punto de puro derecho, y no por lo que resulta de lo actuado.

Funda el articulante su pretensión en que Ricardo S. Sarmiento, al interponer el recurso de casación ante el Tribunal sentenciador, no señaló las causales de casación en que lo apoyaba; y que aunque en este Supremo Tribunal las ha expuesto el doctor Felipe Silva, como mandatario sustituto de los recurrentes lo ha ha verificado después de trascurrido el término que la ley concede al efecto.

Examinada cuidadosamente la actuación resultan establecidos los siguientes hechos:

1.° Que el edicto por medio del cual el Tribunal de Tundama notificó á las partes la sentencia definitiva aludida, fué fijado el día once de Noviembre de mil ochocientos noventa y uno y desfijado el diez y ocho del mismo mes;

2.° Que Ricardo S. Sarmiento á nombre de sus poderdantes interpuso contra dicha sentencia el recurso de casación, presentando, como presentó, el respectivo memorial el cinco de Enero de mil ochocientos noventa y dos;

3.° Que previo informe favorable al recurrente, producido por el Secretario del Tribunal, éste concedió el recurso para ante esta Superioridad, y dispuso que el expediente se enviase, con noticia de las partes, como así se verificó;

4.° Que repartido el asunto en la Corte, el Magistrado sustanciador, ordenó que se fijase en lista por seis días para que las partes tuvieran conocimiento del recibo de dicho expediente y pudiesen nombrar apoderados;

5.° Que admitidas por la Corte las sustituciones de los poderes, se dictó auto en el cual se dispuso que lo actuado se diera traslado al doctor Felipe Silva, para que dentro del término legal fundase el recurso;

6.° Que dicho auto se notificó por edicto fijado á las doce de la mañana del veintitrés (23) de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos, y se desfijó á la misma hora del veinticuatro (24) siguiente; con la advertencia hecha por el señor Secretario, en el propio edicto de que el expediente quedaba á disposición de la parte recurrente desde el día siguiente á su desfijación, es decir, desde el veinticinco (25) del citado Noviembre;

7.° El doctor Silva devolvió el expediente el dos (2) de Diciembre, acompañado del escrito en que determinó la causal de nulidad de que adolece la sentencia recurrida con toda la claridad y precisión que la Ley 105 de 1890 prescribe; de suerte que contado el tiempo desde el veinticinco (25) de Noviembre del año próximo pasado, que tuvo á su disposición el proceso, hasta el dos (2) del citado Diciembre, inclusive, en que lo devolvió, trascurrieron ocho (8) días. Pero de éstos hay que descontar el veintisiete (27) de Noviembre, que fué feriado, y quedaron siete (7), y

8.° Como el referido doctor Silva está comprendido en la disposición del artículo 519 del Código Judicial, que es aplicable en los recursos de casación, y que dice así:

"Art. 519. Cuando se entreguen á las partes autos de más de doscientas fojas, tendrán para devolverlos, un día más del término designado, por cada cincuenta fojas, sobre las doscientas, con tal que el término total no pase de doce días."

Es claro que el expediente, que le fué entregado con quinientas setenta fojas útiles, lo devolvió aun antes de vencérsele el término que tenía para fundar el recurso.

A mérito de lo expuesto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: que no está en el caso de declarar decierto el recurso de que tántas veces ha hecho mención, por los motivos que ha alegado el doctor Ricardo Ochoa G.

Notifíquese, insértese en la *Gaceta Judicial* y continúese sustanciándose el recurso por todos los trámites señalados.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

IMPRENTA DE ANTONIO M. SILVESTRE.

REPÚBLICA DE COLOMBIA.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AÑO VIII | Bogotá, 18 de Mayo de 1893. | NÚM. 390.

CONTENIDO.

Págs.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

La que niega á Susana Velasco de Peña el reconocimiento de un crédito procedente de suministros. (Magistrado ponente, doctor Botero Uribe)..... 209
La que niega á Nicanor Carazo el reconocimiento de un crédito, por expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Trujillo)..... 209
La que concede á Diego Reyes una recompensa. Magistrado ponente, doctor Casas Rojas)..... 210
La que reconoce, en parte, un crédito, procedente de suministros y expropiaciones á favor de Rafael Camacho L. (Magistrado ponente, doctor Galindo)..... 210
La que anula, en recurso de casación, el fallo proferido por el Tribunal Superior de Cundinamarca en el juicio seguido por Rafael Roca contra Pantaleón Gaitán, sobre rendición de cuentas. (Magistrado ponente, doctor Galindo)..... 210
La que concede á José María Ortiz una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Isaza)..... 214
La que niega á Francisco C. Sánchez el reconocimiento de un crédito, por suministros. (Magistrado ponente, doctor Corrales)..... 214
La que niega á Toribia Cárdenas de Delgado el reconocimiento de un crédito, procedente de expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Isaza)..... 215

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

El que confirma un auto dictado por el Tribunal Superior de Pasto en las ejecuciones acumuladas, libradas por el Administrador de la Aduana de Tumaco contra Elías D. Morcillo. (Magistrado ponente, doctor Isaza)..... 215
El que niega la aclaración del fallo proferido por la Corte en el juicio seguido por Rafael Roca contra Pantaleón Gaitán, sobre rendición de cuentas. (Magistrado ponente, doctor Galindo)..... 216

GACETA JUDICIAL.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, once de Marzo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Carlos Calderón R., en su carácter de apoderado de Susana Velasco de Peña, vecina de la ciudad de Cali, presentó ante el señor Ministro de Guerra un expediente en siete fojas útiles, con el fin de acreditar que durante la guerra pasada de 1885 á 1886, la señora Velasco de Peña suministró para el servicio y sostenimiento de las fuerzas nacionales unos semovientes por valor de $ 490.

No se sabe cómo pasó dicho expediente á la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, la cual dió vista al Fiscal en 6 de Marzo de 1889, quien dió dictamen desfavorable á la reclamación.

La Comisión expresada dictó su resolución número 3,854, absolviendo á la Nación del pago de la cantidad demandada.

Consultada dicha resolución con el Ministerio del Tesoro, éste la aprobó en 9 de Septiembre de 1892, y el apoderado de la reclamante apeló para ante la Corte Suprema. Ésta dictó auto para mejor proveer en 15 de Noviembre de 1892, y habiéndose practicado algunas diligencias en orden al cumplimiento de dicho auto, se dió de nuevo vista al señor Fiscal, quien conceptúa que las pruebas presentadas no son suficientes para condenar á la Nación por el cargo que se le hace.

La Corte conceptúa de la misma manera, porque los únicos elementos de prueba presentados por la señora Velasco de Peña son: un certificado de Lucio Velasco (foja 21 vuelta) y las declaraciones de Manuel y Carlos Velasco. Aquel dice así:

"Lucio Velasco, Jefe municipal de Cali, certifico: que en los libros de cuenta de ganado tomado por el Gobierno para el sostenimiento de la guerra, á la página segunda, hay una partida que dice. '10 de Abril de 1885. A Clímaco Peña, diez vacas, avaluadas á catorce pesos cada una, igual á ciento cuarenta pesos..... $ 140

"Y en el libro de registro por caballerías dadas al Gobierno hay otra partida que dice: Consta en este despacho que la señora Susana Velasco de Peña suministró al señor Alcalde de este Distrito, señor Manuel Dolores Ayala, voluntariamente, cinco caballos y una mula de su propiedad que fueron tomados para el servicio del Gobierno de orden de esta Jefatura; y que dichos caballos fueron avaluados á cincuenta pesos cada uno..... 250

"Y la mula en la suma de cien pesos..... 100

"Total..... $ 490"

En cuanto al certificado que da el Jefe municipal de Cali, él no es documento fehaciente, aunque la firma puesta al pie está autenticada, pues no es un recibo que se hubiera presentado al Gobierno del Departamento para convertirlo en certificación del Gobernador, como lo dispone el artículo 3.° del Decreto ejecutivo número 102 de 17 de Febrero de 1886. Además, él está en desacuerdo con la relación presentada por la reclamante.

En cuanto á los testigos Velascos presentados por ésta, además de que no llenan el número exigido por el ordinal 3.° del artículo 2.° de la Ley 44 citada, se observa que no fueron testigos presenciales ni expresan su edad, y ni se sabe si les tocan generales de la ley con la señora Velasco de Peña, que lleva su mismo apellido.

De modo que el crédito de la reclamante no está en ninguno de los tres casos del artículo 2.° citado, ni los comprobantes que ha acompañado son suficientes para reconocérselo.

Por lo expuesto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, se confirma la resolución apelada.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO. *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, once de Marzo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Nicanor Carazo ocurrió á la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, para que le reconociera á cargo del Tesoro nacional la cantidad de setecientos cuarenta y nueve pesos ochenta centavos ($ 749-80), suma en

que estimó el valor de la ropa de su uso personal y el de su familia, el de unas mercancías que estaban en dos baúles y del mobiliario y servicio de mesa que tenía en mil ochocientos ochenta y cinco en su casa de habitación del "Pie de la Popa," en la ciudad de Cartagena, cuando fué sitiada esta plaza por las fuerzas robeldes capitaneadas por Ricardo Gaitán Obeso. La Comisión negó el reconocimiento solicitado alegando para ello, que no había un solo testigo que hubiera presenciado que los sitiadores expropiaran las cosas cuyo valor se reclamaba, puesto que únicamente afirmaron que esos objetos estaban en la casa al principiar el sitio, y que después no se encontraron al concluír éste. El Ministerio del Tesoro aprobó esa resolución el veinticuatro de Diciembre último en providencia que lleva el número 3,401, que ha venido en apelación á esta Superioridad.

Sustanciado el recurso en la forma legal, se procede á fallarlo.

En el expediente se encuentra un certificado del Gobernador del Departamento de Bolívar, con que se acredita plenamente que Carazo fué sostenedor y defensor del Gobierno, pero no se hallan tres declaraciones contestes de testigos hábiles que presenciaran que las fuerzas sitiadoras dispusieran de las cosas cuyo valor se reclama, y mucho menos que pormenorizaran la lista de los objetos con el valor de cada uno de ellos, que existían en la casa y que desaparecieron después; de modo que no existe la prueba del hecho principal sobre el cual debía girar la reclamación, cual era el de que hubiera habido expropiación por parte de los rebeldes.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el concepto del Fiscal de la Comisión, aprueba la resolución apelada.

Notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, once de Marzo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Como padre legítimo del soldado Tomás Reyes, que murió á consecuencia de herida recibida en el campo de batalla y en defensa del Gobierno el año de mil ochocientos setenta y seis en la Cuchilla del Tambo, Diego Reyes, vecino del Tambo, en el Departamento del Cauca, solicita de la Corte, por medio de apoderado, le otorgue la recompensa militar á que cree tener derecho, según la Ley 84 de 1890.

Que dicho soldado combatió en la Cuchilla del Tambo y que murió á causa exclusivamente de herida allí recibida, son hechos comprobados en el expediente mediante las declaraciones contestes de Primitivo Ramírez, Ignacio y Cecilio Urrea, quienes, además, testifican que les consta que el mismo soldado es hijo legítimo de Diego Reyes y Mercedaria Montenegro, y que murió sin casarse ni dejar descendencia; acerca de todo lo cual dan razón satisfactoria de su dicho.

A los folios 14 y 22 del expediente corren los certificados expedidos por el Cura del Tambo en siete de Mayo y veintinueve de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos, con los cuales se acredita plenamente que Diego Reyes y Mercedaria Montenegro contrajeron matrimonio eclesiástico en veintiuno de Agosto de mil ochocientos cincuenta y cuatro; y que en los libros parroquiales no existen ni la partida de *bautismo de Tomás Reyes ni las* de defunción de éste y de su madre Mercedaria Montenegro, circunstancia que hace aceptable la prueba supletoria acerca de estos últimos hechos, prueba que se adujo en efecto y consiste en declaraciones de más de tres testigos que uniformemente sostienen que la dicha Montenegro murió hace yá algunos años, y que Diego Reyes vivió siempre en muy buena armonía con su hijo Tomás.

Como además el señor Ministro del Tesoro certifica que el demandante no ha recibido recompensa alguna del Tesoro público nacional, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el parecer del señor Procurador, declara que Diego Reyes de conformidad con el inciso 2.° del artículo 5.° y artículo 9.° de la Ley 84 de 1890, tiene derecho á una recompensa unitaria definitiva de setecientos cuatro pesos ($ 704), que se le pagarán del Tesoro público nacional.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta*, avísese á Su Señoría el Ministro del Tesoro y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, quince de Marzo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Pásase á resolver la apelación interpuesta ante esta Corte, por el apoderado de Rafael Camacho L., vecino de Pare en el Departamento de Boyacá, contra la resolución ministerial número 2,663 de 7 de Marzo de 1892, por la cual se confirmó en todas sus partes la de la Comisión de suministros de 10 de Diciembre de 1891, número 3,244, que sólo reconoció al reclamante la suma de $ 1,590 de la de $ 2,200 importe de la demanda.

La apelación versa sobre la suma de $ 100, que la Comisión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 6.° de la Ley 44 de 1886, rebajó del avalúo general dado á las especies suministradas y expropiadas, y por la de $ 510, importe del recibo del folio 8, expedido por el Coronel Demetrio Cárdenas, en su calidad, dice el documento, de Jefe del *Batallón Ricaurte* del Ejército de reserva del Gobierno legítimo, recibo que la Comisión y el Ministerio objetaron por falta de autenticidad, y por tanto, sólo á estos dos puntos puede concretarse la decisión de la Corte.

Esta, en auto para mejor proveer, de 10 de Junio de 1892, folio 46, ordenó que el señor Ministro de Guerra se sirviera certificar acerca del carácter oficial con que Cárdenas suscribiera el recibo en cuestión, y también sobre la autenticidad de su firma; y como lo primero, lo relativo al carácter oficial con que se suscribió el recibo, no ha podido ser abonado, pues el General en Jefe encargado del Estado Mayor General del Ejército, en la certificación expedida de orden del Ministerio de Guerra, folio 51, dice que no hay en su archivo documentos ningunos del *Batallón Ricaurte*, el recibo ha quedado, pues, sin poder ser autenticado. El recibo, además, sólo sería valedero, en el caso de que en el Ejército á que pertenecía el Comandante que lo expidió, no hubiera habido Intendente ó Comisionado especial, como lo observó el señor Fiscal de la Comisión en su vista del folio 28 vuelto, lo que no se ha comprobado; esto de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 2.° del artículo 2.° de la Ley 44 de 1886.

La rebaja de $ 100 hecha al avalúo, la cree justa la Corte.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma en todas sus partes la resolución apelada.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez y siete de Marzo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Pantaleón Gaitán, vecino del Municipio de Facatativá, en el Departamento de Cundinamarca, fué instituído tutor y curador testamentario por el padre legítimo de la menor Angelina Pulido, en la cláusula 2.ª de su testamento nuncupativo, otorgado ante el Notario público de Villeta, Departamento de Cundinamaaca, á diez y nueve de Agosto de mil ochocientos sesenta y cuatro, bajo el número ciento once, "en atención," dice la citada cláusula, "á su buena conducta y á la confianza que me inspira de que cuidara con el mayor celo y vigilancia, tanto de mi dicha hija Angelina, esto es, de su educación y cultura, como de lá conservación y aumento de los intereses que le corresponden, suplicando

como suplico, al Juez ante quien se presente testimonio de esta cláusula, apruebe y confirme este nombramiento y discierna este encargo con relevación de fianzas, que así es mi voluntad " (folio 61, cuaderno B.) Discernido el cargo, practicado el inventario de los bienes de la menor y otorgada la escritura de recibo de ellos por el guardador Gaitán, ante el Notario 1.° del Circuito de Facatativá á veintitrés de Mayo de mil ochocientos sesenta y seis, bajo el número 40 (folio 1.°, cuaderno A.), el guardador entró en la administración de dichos bienes; y demandante y demandado están de acuerdo (folios 18 y 24 del mismo cuaderno), en que la administración de la guarda duró desde la fecha de la escritura citada (veintiséis de Mayo de mil ochocientos sesenta y seis) hasta el veintinueve de Octubre de mil ochocientos ochenta, en que á virtud del matrimonio contraído por la pupila con Rafael Roca, pasó á éste la administración de los bienes (folio 8, cuaderno idem).

Pedida por Roca, al guardador, la cuenta formal que debía haber llevado de la administración de los bienes de su pupila, éste le presentó la que corre al folio 14 del cuaderno C., firmada en la hacienda del Tablón, á diez de Diciembre de mil ochocientos ochenta, pero no habiéndola encontrado, á su juicio, exacta, arreglada ó corriente, Roca ocurrió en diez y siete de Junio de mil ochocientos ochenta y dos, ante el Juez del Circuito de Facatativá, demandando á Gaitán para que rindiera cuenta con pago como guardador de la menor, arreglada en todo á las disposiciones legales, á que debió someterse para la formación y rendición de dicha cuenta, que eran las del Código Civil cundinamarqués. Seguido el juicio por todos sus trámites, y después de haberse decidido en contra del demandado, por resolución del Tribunal Superior, una articulación de rebeldía y tácita aprobación de cuentas por él promovida, y de haberse decidido también por el mismo Tribunal, infundada la articulación de nulidad del proceso por ilegitimidad de la personería del demandante, el Juez de la primera instancia dictó sentencia con fecha diez de Junio de mil ochocientos ochenta y siete (folios 9 á 15, cuaderno J.), declarando que el doctor Pantaleón Gaitán no incurrió en dolo en la administración y desempeño de la guarda de su pupila; absolviéndolo, en consecuencia, del cargo de ocho mil pesos jurados por el demandante como perjuicios recibidos por su esposa, provenientes del dolo imputado á Gaitán, y condenando á la esposa del demandante, como resultado del juicio de cuentas, á pagar á Gaitán la cantidad de seis mil doscientos ochenta y siete pesos treinta y tres centavos ($ 6,287-33) como alcance líquido á su favor, provenientes de aquella administración.

Apelada esta sentencia por el demandante en su totalidad y por el demandado en lo desfavorable, y seguida la instancia por todos sus trámites, el Tribunal Superior de Cundinamarca pronunció la sentencia definitiva de ocho de Julio de mil ochocientos noventa y uno (folios 30 á 43 del cuaderno K.), confirmando la de primera instancia en cuanto á la absolución de los cargos de dolo y culpa grave é indemnización de perjuicios demandados al guardador; pero por un resultado diametralmente opuesto al de la sentencia de primera instancia, en cuanto al examen y resultado de la cuenta, condenándolo á pagar á su expupila la esposa del demandante, la suma de seiscientos veintinueve pesos veinte cs. ($ 629-20) que, como saldo líquido, en concepto de la sentencia, resulta á deberle, saldo que en virtud de aclaración hecha por auto del Tribunal de trece de Agosto de mil ochocientos noventa y uno (folios 49 á 50, cuaderno idem), quedó reducido á quinientos cincuenta y cuatro pesos cuarenta centavos ($ 554-40).

Contra aquel fallo interpusieron ambas partes recurso de casación ante esta Superioridad, el cual les fué concedido, respectivamente, por autos de tres de Septiembre de mil ochocientos noventa y uno (folio 54, vuelto, cuaderno K.) y veintiuno de Septiembre del mismo año (folio 56, vuelto, cuaderno idem), fundándolo una y otra en la primera de las causales que determina el artículo 369 de la Ley 105 de 1890, ó sea en que la sentencia acusada ha violado directamente las leyes sustantivas que allí se mencionan, y que, además, ha incurrido en errores de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas. El apoderado del demandado cita como expresamente violados los artículos 497, 501, 503, 520, 524, 528, 529 y 538 del Código Civil de Cundinamarca, por los cuales debe dirimirse el litigio, idénticos á los 472, 476, 478, 495, 499, 503, 504 y 513 del Código Civil nacional (folio 9 vuelto, cuaderno R.); y el abogado del demandante, los artículos 529 y 537 del Código Civil cundinamarqués y el 53 y 540 del Código Judicial de aquel mismo Estado, concordantes con los artículos 656 y 662 del Código Judicial nacional (folios 22 vuelto, y 28 vuelto, cuaderno R.)

El recurso fué interpuesto en tiempo oportuno y por persona hábil, y la sentencia, como queda expuesto, reúne los tres requisitos que para la admisión del recurso exigía el artículo 366 de la Ley 105 de 1890, vigente al tiempo en que se interpuso.

Entra, pues, la Corte á examinar si efectivamente la sentencia acusada adolece ó no de alguna ó algunas de las causales de nulidad alegadas, para aprobarla ó anularla y dictar en su lugar la que deba reemplazarla.

Tratándose de la rendición de cuentas de una curatela cuya administración duró desde el veintitrés de Mayo de mil ochocientos sesenta y seis, fecha de la escritura número 40 (folio 1, cuaderno A.), en que el guardador se hizo cargo de los bienes de su pupila, hasta Noviembre de mil ochocientos ochenta en que aquélla salió de su poder por el matrimonio contraído con el demandante, la legislación sustantiva aplicable al litigio es la del extinguido Estado de Cundinamarca, idéntica en su esencia á la nacional que está en vigor.

El artículo 529 del Código Civil cundinamarqués, repetido en el 504 del Código Civil nacional, conservando la estricta obligación que la legislación romana y después la española impusieron siempre á los guardadores de llevar fiel y estricta cuenta de la administración de los bienes de sus pupilos, dice así: " El tutor ó curador es obligado á llevar cuenta fiel, exacta y en cuanto fuere dable documentada, de todos sus actos administrativos, *día por día;* á exhibirla luégo que se termine su administración; á restituír los bienes á quien por derecho corresponda, y á pagar el saldo que resulte en su contra. Comprende esta obligación á todo tutor ó curador, incluso el testamentario, sin embargo de que el testador le haya exonerado de rendir cuenta alguna, ó le haya condonado anticipadamente el saldo; y aunque el pupilo no tenga otros bienes que los de la sucesión del testador, y aunque se le dejen bajo la condición precisa de no exigir la cuenta ó el saldo. Semejante condición se mirará como no escrita." Y nadie podrá revocar á duda la sabiduría de esta disposición destinada, junto con todo el cúmulo de garantías de que la ley rodea á los pupilos, á proveer á las restituciones y á la defensa futura de quien durante el pupilaje no puede defenderse.

Pero resulta de autos, con plena notoriedad, sin que el demandado mismo haya pretendido negarlo sino excusarlo, que él descuidó en absoluto el cumplimiento de este deber; que no se preocupó de llevar cuenta alguna, ni la más simple, ni la más ligera de la administración de los bienes de la curatela, que ascendían, según el recibo dado por él en la escritura número 40, antes citada, á ocho mil cuatrocientos veinte pesos treinta y cinco centavos ($ 8,420-35) durante los trece años y meses que duró aquella administración. Casada su pupila en Noviembre de mil ochocientos ochenta, el curador Gaitán, presentó á su marido, como cuenta, una cartilla, sinópsis, compendio, epítome ó resumen de cuenta, contenida en dos fojas y una exposición explicativa de ella, en cuatro fojas, corrientes de los folios 10 á 15 del cuaderno C. Las partidas de este resumen ó compendio de cuenta, en el capítulo más importante, el único verdaderamente importante, relativo á los gastos de cultivo y administración de los terrenos, son todas del tenor siguiente:

" Por las operaciones de cultivo de trescientas fanegadas de terreno, al respecto de catorce pesos ($ 14) fanegada.....	$ 4,200
Por las operaciones de cultivo de sesenta fanegadas, á $ 16 cada una.....	960
" Por los intereses de la suma de $ 2,580, mitad de los gastos de cultivo, al 12 por ciento anual, á	

cuya rata tomé prestada esta suma, y devengados en el curso de siete años.....$ 2,167-20."

No habiéndose conformado el demandante con esta cuenta, cuya autenticidad en ninguna parte de los autos ha desconocido el demandado, y establecido el juicio de cuentas, Gaitán presentó al Juez como nueva cuenta, formada en la fecha en que se suscribe (treinta de Junio de mil ochocientos ochenta y dos), otro compendio ó resumen, el que corre de fojas 12 á 17 del cuaderno A., en el cual las partidas correspondientes á los gastos de cultivo y administración de los terrenos son del tenor siguiente:

"1.° Por lo invertido en carros, yuntas de bueyes, carreteros y de azada, composición de caminos, peones etc., etc. (sic), suministrados como auxilio á Carlos Angel y Basilio Izquierdo, para cultivo de los terrenos de propiedad de la señora Angelina Pulido de Roca, á razón de $ 264 anuales, contados del 1.° de Enero de 1867 al 31 de Diciembre de 1878, que son doce años (documento D.), $ 3,168;

"3.° Por lo invertido en peones, carros, yuntas etc., etc. (sic) suministrados á Vicente Salinas, para el cultivo de parte de los terrenos antes expresados del 1.° de Enero de 1867 al 31 de Diciembre de 1872, al respecto de 85 pesos anuales (documento D.), $ 510;

"5.° Por la limpia y cultivo de 90 fanegadas de los mismos terrenos, hechos bajo mi inmediata dirección, del 1.° de Enero de 1871 á 31 de Diciembre de 1876, á razón de 22 pesos fanegada (documentos L., LL., M., N.), $ 1,980;

"7.° Por reparación de medianías en los años de 1867 á 1880 (documentos idem), $ 300;

"9.° Por la construcción de la casa de Bermeo en 30 de Junio de 1877 (documentos idem), $ 200."

El comprobante de la primera partida consiste en las declaraciones de los dichos Angel é Izquierdo, rendidas ahora, el veintitrés de Mayo de mil ochocientos ochenta y uno (folios 7 á 14, cuaderno D.), en virtud de interrogatorio del demandado (folios 3 á 6 idem), y en respuesta á preguntas como ésta:

"6.ª Si por término medio sembrábamos 12 cargas de trigo por año, y éste producía, á razón de cinco cargas por carga, pues aunque en dos ó tres años excedió la cosecha de ese número, en la mayor parte de ellos, produjo menos del 5, y en dos apenas sacamos las semillas;

"11.ª Si el jornal de los buenos peones en la época corrida del año de 60 á 79, no bajó de 30 centavos al día, ni de 40 al día el de los carreteros, ni de ochenta al día el alquiler de un carro, ni de igual suma el de una yunta de bueyes carreteros;

"24. Si en ese mismo año (1875) por fallecimiento de Vicente Salinas, que había estado trabajando en la parte superior de "Paso-ancho," me hice cargo de ella é inmediatamente hice repasar un descepe al pie del potrero; que lo hice arar y sembrar, y que sin embargo del cuidado que hubo preparando la tierra con arados extranjeros, no me compensó los gastos, puesto que de las siete cargas que sembré, sólo cogí 16. (Interrogatorio de folio 3 á 6, cuaderno D.)

"3.ª Digan si era cierto que después de descepada una extensión cualquiera, en los mencionados terrenos, todavía me costaba de 4 á 5 pesos la limpieza ó preparación de cada cuadra etc., etc.

"5.ª Digan si al resto de ese potrero, que hoy llaman "Garibaldi," le hice una vez una limpia, y me importó 30 pesos; y si la que le hice á una parte de "Paso-ancho," *juzgan* que me costaría cuarenta pesos.

"9.ª Digan si vió que hice limpiar la otra parte de esa medianía etc., y si ese trabajo me *importaría* 30 pesos. Digan también, Bolívar y Delgado, si vieron que le hice una composición á la medianía de 'Montecillos,' y si me importaría á 7 pesos la cuadra."

Con comprobantes de esta naturaleza no es de extrañarse que los gastos de desmonte, descepe y limpia de los terrenos, asciendan en la primera cuenta presentada al demandante (folio 14, cuaderno C.) por principal, fuera de intereses de las sumas invertidas, á cinco mil quinientos sesenta pesos ($ 5,560), y que los mismos gastos, también por principal, sumen en la cuenta del folio 16, cuaderno A., seis mil ciento cincuenta y ocho pesos ($ 6,158). Con intereses, la primera asciende á siete mil setecientos veintisiete pesos veinte centavos ($ 7,727-20), y la segunda, á nueve mil setenta pesos treinta centavos ($ 9,070-30). Por gastos personales y de educación de la menor, se cargan en la primera cuenta tres mil ochenta pesos cuarenta centavos ($ 3,080-40), y en la segunda, tres mil trescientos cuarenta pesos cincuenta y cinco centavos ($ 3,340-55), y con intereses, cuatro mil cuatrocientos cuarenta pesos ($ 4,440).

El activo de la administración, compuesto de las sumas en dinero de que el curador se hizo cargo, y del producto de las tierras, asciende en la primera cuenta á dos mil novecientos treinta y ocho pesos sesenta y dos centavos ($ 2,938-62) (folio 14, cuaderno C.), y en la segunda, también por principal, sólo á dos mil cuatrocientos seis pesos cincuenta y cinco centavos ($ 2,406-55) (folios 12 á 13, cuaderno A.) En la primera, los productos del capital, inclusive el de los terrenos, figuran por dos mil cuatrocientos diez pesos ($ 2,410), y en la segunda, los mismos productos sólo valen mil ochocientos setenta y siete pesos noventa centavos ($ 1,877-90) por principal.

Respecto á la extensión de terreno, limpiada ó cultivada, las discrepancias son todavía mayores. En el escrito de contestación á la demanda (folio 20, cuaderno A.), afirma el demandado que esa extensión fué de todo el terreno que medía trescientas ochenta y cuatro fanegadas, y esa le abona la sentencia de primera instancia, á razón de doce pesos ($ 12) por fanegada, ó sean cuatro mil seiscientos diez y ocho pesos treinta y un centavos ($ 4,618-31) (folio 14, cuaderno J.), cuando en la cuenta privada del folio 15, cuaderno C., sólo figuran trescientas fanegadas, y en la presentada al Juez (folio 16 vuelto, cuaderno A), apenas noventa.

La Corte cree, sin embargo, equitativo anticipar ó prevenir desde ahora, que estas discrepancias, como después se verá, no acusan dolo ó mala fe de parte del guardador; que son exclusivamente imputables á la falta de cuenta, pero que, por lo mismo, carece de todo valor aritmético la que se ha presentado.

Con razón dijo, pues, el Tribunal en la sentencia acusada, hablando de la cuenta, lo siguiente:

"Si no estuviera suficientemente probado el hecho de que el guardador no llevó cuenta diaria de su administración, y de que por lo mismo es contingente que la que ha presentado sea fiel y exacta, esa diferencia cardinal entre una y otra, lo probaría hasta la saciedad." (Folio 35 vuelto, cuaderno K).

"Empero, en este capítulo de la cuenta (el de la limpia de los terrenos), es donde más se nota la necesidad de que el administrador hubiese llevado la cuenta pormenorizada en su administración, pues la carencia de datos precisos habrá de redundar en perjuicio suyo (folio 39 idem).

"Si se hubiera llevado cuenta puntual de esas operaciones (las de limpia), el trabajo del contador habría quedado reducido simplemente á la verificación de sumas y restas; pero no ha sido así, y la labor tiene que ser más difícil por falta de datos, y quizá perjudicial para el omiso (folio 39, vuelto, cuaderno idem).

"Ahora hay que examinar desde qué fecha, por virtud de la terminación de los cultivos, empezaron á dar rendimiento los terrenos. Sobre esto no hay datos fijos en los autos." (Folio 40, vuelto, cuaderno idem).

Ha insistido la Corte en dejar evidenciado hasta la saciedad el hecho de la falta absoluta de la presentación de la cuenta formal y legal que debió llevar el guardador, y de que en su lugar sólo se ha presentado una Memoria de cuenta formada á la hora en que fué pedida, y comprobada en su mayor parte con inspección ocular, avalúos periciales y declaraciones de testigos sobre el valor probable, supuesto ó presunto de los productos y gastos; porque es este hecho—el de la presentación de una cuenta por tanteo, en lugar de la cuenta diaria, exacta y detallada de la curatela, que previenen los artículos 529 del Código Civil cundinamarqués y 504 del nacional,—el que informa los fundamentos jurídicos del fallo que la Corte debe dictar; y al efecto, se pregunta: ¿Cuáles son las consecuencias legales que se desprenden para el Juez y para las partes, *de la falta absoluta de la presentación de*

la cuenta del curador, del hecho irremediable de que el curador no pueda presentarla, porque no la llevó?

Y la Corte no vacila en contestar que el único remedio legal aplicable al caso, es el sabiamente previsto por el artículo 537 del Código Civil cundinamarqués, aplicable á litigio, idéntico textualmente al 512 del Código Civil nacional, que dice:

"Artículo 537. Contra el tutor ó curador que no dé verdadera cuenta de su administración, exhibiendo el inventario y las existencias, ó que en su administración fuere convencido de dolo ó culpa grave, habrá por parte del pupilo el derecho de apreciar y jurar la cuantía del perjuicio recibido, comprendiendo el lucro cesante; y se condenará al tutor ó curador en la cuantía apreciada y jurada, salvo que el Juez haya tenido á bien mostrarla."

Sostiene, pues, la Corte, y eso es lo lógico, lo racional, lo único posible, que en el caso en cuestión el Juez no está obligado á servir de Contador para formar después de trece ó catorce años, con pruebas supletorias, una cuenta por tanteo de la administración de la curatela, que en absoluto no se llevó. Bastaría para convencerse de lo absurdo de lo dislocado de esa tarea, ver los prolijos esfuerzos con que tanto el Juez de la primera instancia como el Tribunal de Cundinamarca quisieron, de buena fe, llenarla, pero como tenían que sustituír á los datos fijos de una cuenta, es decir, á cantidades ciertas, apreciaciones y cálculos arbitrarios y contingentes, llegaron á estos resultados: la sentencia de primera instancia á condenar á la pupila á pagar al guardador por saldo deducido á su favor, de aquellos cálculos, la suma de seis mil doscientos ochenta y siete pesos treinta y tres cs. ($ 6,287-33) (folio 15 vuelto, cuaderno J.); y la de segunda instancia al extremo diametralmente opuesto, al de condenar al guardador á pagar á la pupila, por saldo en contra de él, la suma de quinientos cincuenta y cuatro pesos cuarenta centavos ($ 554-40). (Folio 5.°, cuaderno K).

Y como la sentencia acusada hizo caso omiso de la disposición del artículo 537, arriba copiado, en cuya violación ha fundado una de las causales de nulidad el apoderado del demandante (folios 22, vuelto, y 28, vuelto, cuaderno R.), la Corte debe anular la sentencia acusada y proceder á dictar en su lugar la que debe reemplazarla; y para ello considera:

1.° Que aunque el guardador Gaitán no llevara y no hubiera, por tanto, presentado la cuenta formal de su administración, este descuido, muy común entre nosotros, y más común entre los hombres que proceden de buena fe y descansan en el testimonio de su conciencia, *pero siempre altamente censurable y represensible*, no acusa dolo ni culpa grave en la administración de esta curatela, porque los resultados generales exhibidos por el guardador Gaitán, abonan su probidad y su buena conducta. Respecto á los deberes personales y morales para con su pupila, consta plenamente probado de autos, que él la llevó al seno de su respetable familia, donde cuidó de ella con todo esmero, y después la mantuvo cinco años en los mejores colegios de la capital, para que allí recibiera, como recibió, esmerada educación.

Respecto de los bienes, los resultados generales, á falta de los aritméticos precisos, de una cuenta, son los siguientes: Tanto de la escritura de recibo, número 40 (folio 1.°, cuaderno A.), como de la número 37 (folio 5, idem), consta que los bienes de que el curador se hizo cargo, consistieron:

En el valor de unos terrenos apreciados entonces en seis mil pesos.....	$ 6,000 ...
En créditos activos, mil cuatrocientos sesenta y seis pesos sesenta y seis centavos.....	1,466-66
En semovientes, de que se hizo cargo como dinero, novecientos cincuenta y tres pesos sesenta y nueve centavos.....	953-69
	$ 8,420-35

2.° Que de estos bienes le fueron entregados ó devueltos al marido de la menor los terrenos y mil setecientos pesos, que él percibió directamente de la mortuoria de Pedro Pulido, abuelo de la menor, por lo que éste debía aún á su muerte á su nieta Angelina Pulido, suma que se computó en el activo de los bienes entregados al guardador Gaitán (folios 29 á 33 y 56, cuaderno B.);

3.° Que de los bienes de que se hizo cargo, sólo quedaron, pues, en poder del guardador los terrenos y setecientos veinte pesos treinta y cinco centavos ($ 720-35) en dinero, ó créditos y semovientes por este precio recibidos, con los cuales y con el producto de los mismos terrenos en cerca de catorce años, debió atender á los gastos de administración y mejora de ellos, y á los de manutención y educación de su pupila. Estos últimos, según la menor de las dos cuentas por él presentadas, sólo ascienden á tres mil ochenta pesos ($ 3,080) en trece años, ó sea al respecto de doscientos treinta y siete pesos ($ 237) por año, suma que no acusa ninguna exageración;

4.° Que respecto de lo gastado en la limpia, composición y cultivo de los terrenos, sólo existe en los autos la plena prueba de que una parte, probablemente la mayor parte de esos terrenos, estaba cubierta de maleza, y que no puede revocarse á duda que fué descepada y limpiada; así resulta de la prueba de la inspección ocular (folios 26 y 27, cuaderno B.); de las declaraciones contestes de muchos testigos (folios 1 á 16 y 21 á 26 y 58 á 82, cuaderno B.) y de la confesión del apoderado del demandante en su alegato del folio 24, cuaderno R. En cuanto al aumento de valor de los terrenos, el mismo demandante Roca en las posiciones absueltas al folio 12, cuaderno B., confiesa que estima la hacienda en cuarenta y ocho mil pesos ($ 48,000) fuertes. Pero como no hay prueba en los autos por la falta de cuenta, ni de cuánto fué en efecto la extensión limpiada y cultivada, ni cuánto costó aquella operación, ni cuánto produjeron los terrenos antes y después de aquel beneficio, no puede saberse cuánto del aumento de aquel valor es imputable á la mejora y cuánto al trascurso del tiempo por el aumento de población y progreso general del país. Culpe, pues, el guardador á su propia falta, á su propio descuido, el que el juzgador tenga que computar en conciencia y equidad, compensados los gastos impendidos en la administración de los bienes con sus productos, para moderar los perjuicios de ocho mil pesos ($ 8,000) jurados por el demandante.

Además, es lógico y racional suponer que el avalúo dado en mil ochocientos sesenta y seis á las trescientas ochenta y cuatro fanegadas de terreno situado en la Sabana de Bogotá por la suma de seis mil pesos ($ 6,000), fué excesivamente bajo, á quince pesos por fanegada; que esto se haría con el objeto de no abultar el monto de la curatela, en mira al pago de contribuciones, pero que esos terrenos no valdrían en aquel tiempo menos de veinte mil pesos ($ 20,000).

En mérito de las razones expuestas, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, anula la sentencia definitiva pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, con fecha ocho de Julio de mil ochocientos noventa y uno, y su aclaración de fecha trece de Agosto siguiente, materia del presente recurso de casación, y en su lugar, pronuncia la siguiente:

1.° Absuélvese al demandado Pantaleón Gaitán, de los cargos de dolo y culpa grave á que se refiere la demanda, con declaratoria expresa de que la administración de la tutela y curaduría de la menor Angelina Pulido, en nada perjudica á su buena reputación y fama;

2.° Declárase que con la devolución ó entrega hecha de los terrenos de la menor á su legítimo esposo Rafael Roca, con la suma de mil setecientos pesos ($ 1,700) que éste percibió directamente de la mortuoria de Pedro Pulido y con el pago de la suma de que trata el parágrafo 3.°, queda el guardador á paz y salvo con el demandante por la administración de los bienes de la curatela, sin que ni uno ni otro tengan derecho á reclamar ni exigir nada por esta cuenta, y

3.° Modérase por todas las consideraciones que quedan expuestas, la suma de ocho mil pesos ($ 8,000) de perjuicios jurados por el demandante, por la falta absoluta de la cuenta que debió llevar el curador, á la de mil pesos ($ 1,000) que pagará Pantaleón Gaitán á su expupila Angelina Pulido de Roca, ó á su legítimo representante, como indemnización de perjuicios por aquella falta.

La Corte, al hacer esta última condenación, no obstante los buenos resultados generales de la administración de la guarda, tiene en consideración que la defensa del patrimonio de los menores está expresa y especialmente encomendada

por la ley á los Magistrados, y que sería indisculpable é imperdonable no exigir la responsabilidad legal por la falta en que se haincurrido.

No hay condenación de costas.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO. — JUAN EVANGELISTA TRUJILLO. — *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez y ocho de Marzo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: José María Ortiz, vecino del Municipio del Tambo, en el Departamento del Cauca, reclama por conducto de su apoderado Andrés Lara, recompensa unitaria, conforme á la Ley 84 de 1890, por invalidez contraída en servicio del Gobierno.

En apoyo de su demanda ha presentado las siguientes pruebas:

1.ª Declaraciones contextes de tres testigos hábiles que dan razón satisfactoria de su dicho, con las cuales acredita que en la guerra de 1876 y 1877, sirviendo en defensa del Gobierno, en el *Batallón Invencibles*, perteneciente á la quinta División, fué herido de bala, en una pierna, en el combate de "Piedrarica," y que entonces era Teniente de la 3.ª Compañía del citado Batallón;

2.ª Reconocimiento pericial practicado ante el Gobernador del Cauca, por los profesores de medicina doctores Juan N. Wallis O., Domingo Arboleda y Alfredo Garcés, quienes exponen: que han hallado en la persona de José María Ortiz las cicatrices de tres heridas de bala que, entrando por la parte superior y anterior del muslo derecho dislaceraron músculos y vasos de consideración; que dichos proyectiles no alcanzaron á salir, y que aún se tocan en los músculos de la parte posterior del muslo; que estas lesiones causaron en este individuo una várice muy desarrollada de las venas inferiores de la pierna, todo lo cual hace que los movimientos de esa pierna sean incompletos y que no pueda hacer con ella ejercicios fuertes; que, por lo tanto, este individuo está afectado de una invalidez relativa y de por vida para trabajar como antes;

3.ª Certificación del Ministerio del Tesoro sobre que José María Ortiz no figura en el Registro de pensionados de la República, y que en los libros de la Sección 3.ª, no hay constancia de que dicho individuo haya recibido recompensa del Tesoro nacional, por razón de invalidez contraída en defensa del Gobierno;

4.ª Certificación de la Gobernación del Departamento del Cauca, de que ni en el archivo de esa Gobernación, ni en los de las Secretarías de Gobierno y de Hacienda existen documentos, ni escalafón militar relacionados con la guerra de 1876 y 1877;

5.ª Certificación del Subsecretario del Ministerio de Justicia, en la que consta que de los Estados de Bolívar, Cauca, Magdalena, Santander y Tolima, no se ha recibido dato alguno de los que oportunamente se pidieron para la formación del escalafón militar hecho en 28 de Febrero de 1878.

En atención á lo que disponen los artículos 1.°, 5.°, 9.°, 17, 19, 23, 24 y 51 de la Ley 84 de 1890, y 29 de la Ley 86 de 1886, en mérito de las pruebas presentadas, y de conformidad con el parecer del señor Procurador de la Nación, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que José María Ortiz, vecino del Tambo, en el Departamento del Cauca, tiene derecho á una recompensa unitaria de mil doscientos pesos ($ 1,200), por causa de invalidez relativa adquirida en campo de batalla y en servicio del Gobierno, en la guerra de mil ochocientos setenta y seis y mil ochocientos setenta y siete. Dicha recompensa se le pagará del Tesoro nacional.

Déjese copia de esta sentencia, comuníquese al Ministerio del Tesoro, insértese en la *Gaceta Judicial*, y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veinte de Marzo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Por recurso de apelación que interpuso Francisco Caicedo Muñoz, apoderado de Francisco C. Sánchez, contra la resolución que con el número 3,922, dictó la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, en veintiocho de Julio del año próximo pasado, por la cual absolvió al Tesoro nacional de la demanda entablada por el expresado Sánchez, se ha recibido en este Supremo Tribunal, el expediente relativo á dicha demanda; y en su virtud, previa la sustanciación correspondiente, la Corte pasa á pronunciar el fallo que es de su deber, y para ello considera:

1.° La demanda se estableció con el objeto de que se reconociese á cargo del Tesoro nacional y á favor del referido poderdante, la suma de cuatrocientos veinte pesos treinta y cinco centavos ($ 420-35), como valor de varias mercancías que para vestuario del Ejército del Gobierno rebelde del Tolima, contrató Sánchez con el Intendente del Ejército revolucionario, en el mes de Enero de mil ochocientos ochenta y cinco;

2.° La Comisión administrativa apoyó su fallo absolutorio, en las circunstancias de que el Gobierno al cual se hizo el suministro de las mercancías asumió el carácter de revolucionario, y que dicho suministro no podía ser acreditado con el recibo que el Intendente expidió á favor del contratista, sino con declaraciones de testigos presenciales de los hechos recibidas con las formalidades legales, pues el reclamante acompañó á su demanda sólo una declaración;

3.° El Ministerio del Tesoro impartió su aprobación á lo determinado por la Comisión, por encontrarlo legal;

4.° Aunque es exacto que en esta segunda instancia la parte demandante ha comprobado con certificación del señor Gobernador del Departamento del Tolima su carácter político en la guerra de mil ochocientos ochenta y cinco, es decir, de haber sido miembro caracterizado del partido nacional, y que como tal ayudó á sostener y defender al Gobierno nacional; y además ha justificado que en virtud de contrato celebrado con el Intendente del Ejército revolucionario, suministró á éste varias mercancías cuyo valor ascendió á cuatrocientos veinte pesos treinta y cinco centavos, la Corte no puede hacer reconocimiento alguno á favor del expresado demandante, ni mandarle pagar tal suma, porque carece de derecho á exigir ese reconocimiento la persona que contrata con un enemigo del Gobierno el suministro de efectos aplicables en la guerra.

Se comprende bien la doctrina que en todas ocasiones se ha sostenido y aplicado de que hay justicia en que el Gobierno nacional pague á los partidarios suyos las exacciones que con violencia les hayan causado los enemigos ó revolucionarios, porque ya que el mismo Gobierno no puede premunirlos de esas violencias, es justo que los indemnice de lo que hubieren perdido. Pero no es dable suponer que una persona ó entidad cualquiera que celebre un contrato con los revolucionarios para suministrarles esos elementos y cosas que necesiten, lo haga por la fuerza y no de su propia voluntad; y de consiguiente la autoridad judicial encargada de apreciar los hechos y de aplicar las leyes de la materia está en el caso de reputar el suministro que así se haga como un hecho hostil al Gobierno. Esta doctrina ha sido aplicada por la Corte, siempre que se ha tratado de reclamos provenientes de suministros hechos en el extinguido Estado de Antioquia, al Gobierno rebelde en la guerra de mil ochocientos setenta y seis y mil ochocientos setenta y siete, y es forzoso hacer igual aplicación en el presente caso.

Por tanto, y en fuerza de las precedentes consideraciones, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la resolución apelada.

Notifíquese, cópiese, insertése en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veinte de Marzo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Toribia Cárdenas de Delgado, vecina de Cartagena, demandó del Tesoro nacional, ante la Comisión de suministros, el reconocimiento de la suma de quinientos sesenta y siete pesos ($ 567), en que estima el valor de varios muebles que tenía en su casa de habitación del "Pie de la Popa," en Cartagena, en Marzo de mil ochocientos ochenta y cinco y que dice fueron tomados ó destruídos por las fuerzas revolucionarias acaudilladas por Ricardo Gaitán Obeso.

La Comisión se abstuvo de reconocer el crédito demandado, en su resolución de tres de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos, por considerar que no hay ley alguna que autorice el reconocimiento de créditos provenientes de daños causados por los rebeldes, y el Ministerio del Tesoro confirmó en veinticuatro de Diciembre del mismo año lo resuelto por la Comisión administrativa.

Toca á la Corte fallar definitivamente la reclamación, por haber apelado para ante ella el apoderado de la demandante.

Al llenar esta función, considera:

1.° Que no está comprobado que los revolucionarios tomaran ó destruyeran los muebles que la demandante tenía en su casa del "Pie de la Popa," pues no hay un sólo testigo que asevere el hecho; lo único que ha logrado acreditar es que dejó ó abandonó la casa regularmente amueblada cuando se acercaban á Cartagena las fuerzas rebeldes, y que cuando se retiraron encontró que todos los muebles habían sido robados ó destruídos;

2.° Que está comprobado que la solicitante fué persona pacífica y que tenía simpatías por la causa del Gobierno, pero no hay constancia de que ejecutara algún acto ó hecho que la colocara en la categoría de partidaria y sostenedora del mismo Gobierno;

3.° Que en este caso la ley sólo ha reconocido las exacciones que tuvieron la calidad de expropiaciones, pero no los daños ó perjuicios ocasionados por las fuerzas beligerantes, aunque fueran del Gobierno ó con motivo de la guerra, como lo ha resuelto esta Corte en repetidas ocasiones.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la resolución apelada.

Déjese copia de esta resolución, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez y siete de Marzo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: En las ejecuciones acumuladas, libradas por el Administrador de la Aduana de Tumaco contra Elías D. Morcillo, por cuatro mil pesos ($ 4,000), provenientes de derechos de introducción de sal marina por el expresado puerto de Tumaco, fué embargada para cubrir la ejecución la misma sal ó lo que restaba de ella, que se encontraba en las bodegas del ejecutado.

Francisco Benítez y Tomás Clark, éste por conducto de su apoderado Edmundo Jarvis, reclamaron, por medio de la articulación sumaria que reconoce el artículo 204 de la Ley 105 de 1890, el desembargo de la mencionada sal.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, á quien por resolución de esta Corte se pasaron los autos para decidir la articulación de desembargo, estimando que no existe la plena prueba exigida por el artículo 204 citado, declaró sin lugar el desembargo pedido, por auto de diez de Noviembre del año próximo pasado, auto que está sometido á la revisión de la Corte por recurso de apelación que interpusieron los articulantes.

Como prueba del derecho alegado por Benítez y Clark presentaron éstos testimonio de la escritura número nueve (9), otorgada en diez y ocho de Febrero de mil ochocientos noventa y uno (1891), ante el Notario 2.° del Circuito de Barbacoas, que contiene un contrato celebrado entre Morcillo, por una parte, como comisionista en el puerto de Tumaco, de Marron y Le Vihan, negociantes en sal de Huacho y compra de maderas del país, y los citados Benítez y Clark, representado éste por Edmundo Jarvis, cuyas principales estipulaciones son las siguientes:

"Clark se compromete á dar en venta á Morcillo su establecimiento de 'Aserrío' que tiene ubicado en esta población, tal como hoy se encuentra, con su correspondiente máquina de vapor y demás accesorios, casas y solares con todas sus anexidades, el cual, aunque se le tiene entregado, la venta no se perfeccionará sino al cumplimiento del presente contrato, y que será mediante el pago de la suma de diez mil pesos ($ 10,000); obligándose para entonces á otorgar la respectiva escritura pública de venta.

"En segundo término, Morcillo se compromete á verificar el pago á Clark de la citada suma de diez mil pesos ($10,000), en sal de Huacho, en la forma que pasa á expresarse:

"1.° Entregará á Clark y Benítez toda la existencia de sal que tiene depositada en este lugar, en cuatro bodegas, sin reservarse para sí ni para ninguna otra persona la más pequeña cantidad, y desprendiéndose por completo del dicho negocio, pues que el expendio de tal artículo queda desde luégo á cargo de Clark y Benítez, para lo cual Morcillo depositará las llaves de las bodegas que guardan el artículo, en la casa comercial de Gaminara & Leeder, quedándole sólo el derecho de presenciar por sí ó por medio de un empleado suyo las cantidades de sal que vayan sacándose para el efecto de llevar sus cuentas.

"2.° Morcillo se compromete, además, á no introducir sal de ninguna clase en la más pequeña cantidad durante el término de diez (10) meses, contados desde la fecha del otorgamiento de esta escritura..... Morcillo computará cada cien libras de sal por la suma de un peso cuarenta centavos, y el peso de la dicha sal no se tomará sino en Barbacoas, que es el punto á donde la destinarán los nuevos tenedores, señores Francisco Benítez y Tomás Clark, siendo por consiguiente de cuenta y riesgo de Morcillo las pérdidas ó mermas que sufra la sal en su trasporte á Barbacoas..... Benítez, por sí y por medio de un agente suyo en Barbacoas, se hace cargo de la realización de la sal en Barbacoas y en este puerto, si lo tuviere á bien vender alguna parte, procurando hacer la realización de dicho artículo al mejor precio posible, para lo cual llevará una cuenta comprobada, que presentará cuando haya terminado la realización para el arreglo definitivo de dicho negocio, á los señores Clark y Morcillo, siendo divisibles las cantidades que resulten de utilidades entre los dichos Clark y Benítez. Benítez pagará de lo primero que produzca la realización de la sal al señor Administrador municipal de Hacienda nacional de este Distrito la suma de cuatro mil pesos, que adeuda Morcillo al Tesoro nacional, por derechos de la sal mencionada, siempre que no haya sido pagada una letra que para el efecto tiene girada sobre la ciudad de Pasto, por la misma suma de pesos el citado Morcillo..... la falta de cumplimiento de las obligaciones de Morcillo, hará que no tenga efecto el contrato de venta del establecimiento de 'Aserrío,' á vapor, de que trata la cláusula primera de esta escritura, quedando obligado por ese hecho Morcillo á responder con la misma sal, de los daños y perjuicios que ocasionare; si por el contrario, cumple exactamente y se realiza la sal antes de cumplirse el término de los diez meses estipulados; se le relevará de todo compromiso, y Clark procederá á otorgar inmediatamente la escritura de compra-venta de que se ha hecho yá mención en la dicha cláusula."

El contrato contenido en esta escritura, no es un contrato de venta ó permuta, porque en virtud de él no se pretendió trasmitir á Morcillo el dominio del establecimiento de aserrar maderas, que ni siquiera se determinó por sus linderos en la escritura, ni Clark y Benítez pudieron adquirir á virtud del contrato el dominio de la sal que Benítez tenía depositada en sus bodegas, cuya cantidad no se expresa tampoco; porque para esto habría sido preciso que se les entregara esa sal como equivalente al precio del inmueble, lo que no sucedió, sino que se les dió ó prometió dárseles para que la realizaran y de su producto pagaran en primer lugar cuatro mil

pesos que Morcillo debía al Tesoro nacional, por derechos de consumo de la sal y luégo debían cubrirse de diez mil pesos, precio fijado al establecimiento de aserrar maderas. De modo que la convención sólo expresa la promesa de celebrar un contrato de permuta ó compra-venta, promesa que no trasmite inmediatamente el dominio de los objetos á que se refiere, y que sólo daría acción para obligar á la celebración del contrato en caso de que concurrieran las circunstancias que determina el artículo 89 de la Ley 153 de 1887, que no existen tampoco, por no haberse determinado con la precisión suficiente los bienes ú objetos que son materia de la promesa.

Por otra parte, consta en la misma escritura y lo acredita la existencia de esta misma ejecución, no contradicha en cuanto á la verdad de la deuda que se cobra ni por el ejecutado ni por los opositores, y antes bien confesada por unos y otros, que cuando se celebró el contrato que sirve de apoyo á la reclamación de desembargo, Morcillo no había pagado los derechos de consumo que gravaban la sal en cuestión, y sin verificar este pago y obtener la correspondiente guía del empleado de Hacienda nacional encargado de la prescripción del impuesto, dicha sal no podía ser objeto de un contrato de venta por el introductor.

Al efecto el Decreto número 617 de 24 de Septiembre de 1887, expedido en ejecución del artículo 3.° de la Ley 29 de ese mismo año, publicado en el *Diario Oficial* número 7,184, contiene las siguientes importantes disposiciones:

"Art. 1.° Desde el día 1.° de Diciembre próximo quedará abolido el monopolio de sal marina en el Departamento del Cauca. En consecuencia, desde dicha fecha en adelante, se podrá importar libremente sal marina por los puertos de Buenaventura y Tumaco.

"Art. 2.° La sal que se expenda en estos puertos y la que se interne en el Departamento del Cauca, pagará un derecho de consumo de dos y medio centavos por kilogramo, el cual liquidarán y recaudarán los Administradores de las Aduanas de Buenaventura y Tumaco, respectivamente, quienes expedirán las guías correspondientes para la internación de la sal luégo que se haya pagado el derecho referido.

"Art. 3.° La sal que se expenda sin haber pagado el derecho de que trata el artículo anterior, ó se conduzca sin guía, se considerará de contrabando, y al dueño ó conductor de ella se le aplicarán las penas detalladas en el artículo 2.° del Decreto número 441 del presente año." (*Diario Oficial* número 7,108).

La sal que fué materia del contrato entre Morcillo, Clark y Benítez, era pues, un artículo de contrabando, por no haberse pagado el correspondiente impuesto de consumo ni obtenido la respectiva guía; y, por consiguiente, tal contrato es nulo absolutamente por contener objeto ilícito, ó sea por contener la venta ó promesa de venta de un artículo no comerciable mientras no se pagara el correspondiente impuesto fiscal y se obtuviera del Administrador de la Aduana la guía necesaria para que la sal pudiera darse al consumo.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de conformidad con el parecer del señor Procurador, confirma la providencia apelada y declara que las costas del recurso son de cargo de los apelantes.

Déjese copia de esta resolución, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente al Tribunal de su procedencia.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, trece de Abril de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: El apoderado de Pantaleón Gaitán, en el juicio de cuentas que llevó ante el Juzgado del Circuito de Facatativá y Tribunal Superior de Cundinamarca con el representante legal de su expupila Angelina Pulido de Roca, y que la Corte falló en recurso de casación por sentencia de diez y siete del pasado Marzo, pide aclaración de dicha sentencia sobre perjuicios y frutos, de conformidad con el derecho que le da el artículo 99 de la Ley 105 de 1890; pero en realidad, lo que solicita en el largo escrito que á este efecto ha presentado, reproduciendo en el fondo todos los argumentos aducidos en sus alegatos ante esta Corte, y que ella tuvo presente para dictar su fallo, es que éste sea virtualmente invertido á su favor, revocándose la estimación de la suma de mil pesos de perjuicios hecha á cargo del curador, lo cual, si siempre se presentase igual pedimento, impondría á la Corte la labor, materialmente imposible de cumplir, de fallar dos veces la misma causa.

Insiste el apoderado de Gaitán en dar al artículo 537 del Código Civil cundinamarqués, literalmente repetido en el artículo 512 del Código Civil nacional, que sirvió de fundamento al fallo, no sólo una inteligencia diametralmente contraria á la que le dió la Corte, sino una inteligencia que dejaría sin objeto aquella disposición. Para el caso en que un curador no lleve, como dejó de llevar en absoluto Gaitán, la cuenta formal diaria y comprobada de las operaciones de su administración, y pretenda cubrir esta falta con una sinópsis de cuenta formada á posteriori por tanteo, la ley sabiamente condena al curador á responder de esta falta por el juramento de perjuicios que haga el menor, moderado por el Juez, é insiste el apoderado de Gaitán en sostener que este artículo presupone que el menor realmente haya sufrido perjuicio en la administración de sus bienes, lo cual es una verdadera petición de principio, porque como la ley deja esta estimación á juicio del Juez, estimando, como ha estimado la Corte, que sí ha habido perjuicio, la discusión no tendría fin. Y, ¿quién debe en derecho soportar las consecuencias de su falta sino el que la comete?

Para moderar, como hizo la Corte, de ocho mil á solo mil pesos los perjuicios jurados por la menor, la Corte tuvo en cuenta los resultados generales de la administración y la honorabilidad y honradez personal del curador; á estas dos cosas hizo la Corte ancha parte en su fallo, que parece no haber estimado en su justo valor el apoderado de Gaitán. Reclama también éste la décima parte de los frutos de bienes de la menor que corresponden al curador por estipendios de su administración. Pero, ¿de qué suma pretende el apoderado que la Corte extraiga dicha décima parte, no habiendo llevado ni presentado cuenta el curador, y cuando por indemnización de perjuicios, todo considerado, tuvo la Corte que hacer una condenación de mil pesos?

Complácese la Corte en repetir, á despecho de esta insistencia, que ha sido sólo la inexcusable falta de presentación de la cuenta, la que ha determinado este fallo, el cual en nada perjudica á la buena reputación y fama de Gaitán.

Al analizar, ó mejor dicho, al aludir á algunas ó á muchas de las problemáticas partidas de aquella memoria de cuentas presentadas por el curador, con el único objeto de mostrar la imposibilidad de formar con ellas una cuenta, y para llegar á los resultados generales del fallo, dijo la Corte, que según aparecía de algún documento, el marido de la pupila había percibido directamente de la mortuoria de su abuelo Pedro Pulido la suma de mil setecientos pesos ($ 1,700); y con tal motivo el apoderado de Roca pide también que se aclare la sentencia, por haberse incurrido en error de hecho á este respecto. Dice que aunque Roca reclamó realmente dichos mil setecientos pesos ($ 1,700), sólo recibió ochocientos cincuenta y seis pesos ($ 856), y que, para retener el resto, ni el señor Pedro Pulido ni sus herederos probaron nunca la inversión que aseguran le dieron en pago de deudas del padre de la menor; y que, por tanto, la diferencia debe cargarse al curador. Todo esto estaría muy bien, suponiendo el hecho cierto, si la Corte hubiera creído que se estaba en el caso de formar por tanteo la cuenta que no llevó el curador; pero la Corte lo que aplicó para poner fin al litigio, fué la disposición del artículo 537 del Código Civil cundinamarqués (512 del nacional), en virtud del cual, *por todo saldo* de cuentas condenó al curador al pago de mil pesos ($ 1,000) de perjuicios.

Por tanto, no ha lugar á las aclaraciones que se solicitan.

Notifíquese y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

REPÚBLICA DE COLOMBIA.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AÑO VIII | Bogotá, 25 de Mayo de 1893. | NÚM. 391.

CONTENIDO.

Págs.

PENA CAPITAL.

La que confirma el fallo por el cual el Tribunal Superior de Tundama condenó á Salomón Hernández ó Ladino á la pena de muerte, por el delito de asesinato perpetrado en la persona de Miguel Alvarez. (Magistrado ponente, doctor Galindo)..... 217

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

La que concede á Eugenio Potes una recompensa. militar. (Magistrado ponente, doctor Pombo)..... 219

La que declara no ser casable el fallo pronunciado por el Tribunal Superior de Antioquia en el juicio de concurso de acreedores formado á los bienes de Jesús María Ramírez. (Magistrado ponente, doctor Botero Uribe)..... 219

La que reconoce, en parte, á Pedro Pardo un crédito por expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Trujillo)..... 222

La que reconoce, en parte, á favor de Adolfo Martínez Navarrete un crédito procedente de expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Corrales)..... 222

La que reconoce á Rafael Navia un crédito por expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Botero Uribe..... 223

La que niega á Aparicio Peláez el reconocimiento de un crédito, procedente de expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Botero Uribe)..... 224

GACETA JUDICIAL.

PENA CAPITAL.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Marzo veintidós de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: En la noche del nueve de Junio de mil ochocientos noventa y uno, Salomón Hernández ó Ladino dió muerte violenta en la vereda de Moniquirá, Distrito de Sogamoso, á Miguel Álvarez, por las causas y con las circunstancias que después se expondrán. Surtido el juicio criminal por todos sus trámites, el Jurado de calificación reunido el trece de Julio de mil ochocientos noventa y dos, folios 99 á 100, declaró que Salomón Hernández ó Ladino era autor principal del delito de asesinato perpetrado en la persona de Miguel Álvarez, que define el artículo 440 y castiga el 441 del Código Penal de Cundinamarca, sancionado el diez y seis de Octubre de mil ochocientos cincuenta y ocho, adoptado por la República por la Ley 57 de 1887 y vigente el nueve de Junio de mil ochocientos noventa y uno, cuando se cometió el delito, y que éste alcanzaba el grado máximo de delincuencia, conforme al artículo 129 de la Constitución y al 221 de la Ley 153 de 1887.

El Juez Superior del Distrito Judicial de Tundama, capital Santa-Rosa, pasando por encima de este veredicto y apoyándose erróneamente en la disposición del artículo 324 de la Ley 57, pronunció su sentencia de veintidós del mismo Julio, fojas 100 á 102, en la cual se arrogó el derecho de determinar el grado del delito que yá estaba determinado por el Jurado, y calificándolo en primer grado se limitó á imponer al reo la pena de veinte años de presidio, equivalente de la de muerte, para cuando ésta no deba imponerse.

Apelada esta sentencia, tanto por el presunto reo, como por el Fiscal, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tundama, después de surtida la instancia pronunció la suya de veintisiete de Septiembre de mil ochocientos noventa y dos, folios 111 á 117, por la cual, fundándose en razonamientos legales, irrefutables, reformó la sentencia apelada, por lo que respecta al asesinato, que es lo único sometido á la Corte, en estos términos:

"En mérito de lo que antecede, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tundama, teniendo en cuenta la opinión del representante del Ministerio Público y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, reforma la sentencia apelada, condenando, de acuerdo con el veredicto del Jurado de calificación, al señor Salomón Hernández ó Ladino, vecino del Municipio de Sogamoso, como autor principal del delito de asesinato calificado en grado máximo, perpetrado en la persona de Miguel Álvarez, á sufrir la pena capital en los términos detallados en los artículos 233 á 235 de la Ley 153 de 1887, la que se ejecutará en la población de Sogamoso, declarando infame al reo Salomón Ladino y aplicando las armas con las cuales se perpetró el crimen á la República (artículos 441 del Código Penal adoptado y 66 del Código Penal novísimo), y la confirma en lo demás."

El artículo 324 de la Ley 37 de 1887, en que el Juez Superior de Tundama, erróneamente se apoyó para arrogarse la facultad de determinar el grado del delito, calificado yá en grado máximo de delincuencia por el Jurado, dice así:

"Artículo 324. Resueltas las cuestiones de la manera prevenida, el Juez declarará terminado el procedimiento, si el veredicto fuere absolutorio. En caso contrario pronunciará sentencia condenatoria dentro de tres días, á más tardar, determinando el grado del delito, si fuere el caso, y aplicando las penas correspondientes, con arreglo á las leyes y á las resoluciones del Jurado."

A este respecto dice la sentencia recurrida lo siguiente:

"5.° Es evidente que según el inciso primero del artículo 126 del Código Penal novísimo, ó sea de la Ley 19 de 1890, la pena de muerte tiene por equivalente la pena de veinte años de presidio; pero esa equivalencia tiene objeto muy distinto del que ha querido darle el señor Juez Superior al tomarse la facultad de calificar el grado de delincuencia. La pena capital que el legislador con razón filosófica ó sin ella, tiene establecida para el castigo de cierta clase de delitos, es fija y determinada, y en consecuencia, no tiene grados, y el artículo 125 del Código Penal novísimo dice: 'Cuando la ley imponga pena fija y determinada, no será necesario determinar el grado."

Interpuesto recurso de casación contra aquella sentencia, por el defensor del reo, el Tribunal lo concedió por auto de ocho de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos, foja 120, vuelta, por ser la sentencia á la cual se refiere, de las comprendidas en el artículo 368 de la Ley 105 de 1890, y háse surtido ante esta Superioridad el recurso, desde el auto de veintidós de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos, por el cual se nombró al doctor Aristides Forero defensor del reo, quien juró el cargo el veintitrés del mismo. Dado traslado al señor Procurador general por seis días, de conformidad con el artículo 390 de la Ley 105 de 1890, aquel funcionario lo devolvió con el extenso alegato de diez y nueve de Diciembre de mil ochocientos noventa y dos, folios 4 á 8 de la actuación de la Corte. Puesto el proceso á disposición del reo para formar su alegato, por auto de veinticinco de Enero último,

el defensor del reo no tuvo á bien alegar nada en su favor. Señalóse para que tuviera lugar la audiencia pública el trece de Febrero, por auto de nueve del mismo; pero ninguna de las partes tuvo á bien concurrir á ella; y ha llegado, por lo mismo, el caso de que la Corte pronuncie la sentencia definitiva que debe decidir el recurso, conforme á la ley y al mérito de los autos.

Y sea lo primero establecer que el presente recurso de casación debe fallarse, en cuanto á las causales que dan derecho á interponerlo, por las disposiciones del artículo 370 de la Ley 105 de mil ochocientos noventa, vigente cuando se concedió el recurso, y no por las de la Ley 100 de 1892, que principió á regir el primero del presente mes, por ser aquéllas más favorables al reo, que las de la ley últimamente citada. La primera incluye entre las causales la de ser, en concepto de la Corte, notoriamente injusto el veredicto del Jurado, que la segunda excluye del beneficio de la casación.

Si, pues, la Constitución y la ley conceden en materia criminal, el beneficio de la retroctividad para que se imponga al delito la pena menor de una ley posterior, y no la mayor señalada por la ley vigente cuando aquél se cometió, con mucho mayor razón deberán conservarse al reo para su defensa los beneficios de las leyes sustantivas vigentes cuando interpuso el recurso, siendo, además, claro que las causales designadas por la ley para que por ellas se juzgue de la validez ó nulidad de una sentencia definitiva, no pertenecen al derecho procedimental sino al sustantivo; pues que sus resultados definitivos pueden ser muy diversos, según que se admita ó no la causal de que se trata. Para comprenderlo mejor supongamos que realmente existiera en este proceso la injusticia notoria del veredicto del Jurado. Anulada la sentencia y reunido un segundo Jurado, éste podía calificar el delito, no yá de asesinato, sino de simple homicidio voluntario ó premeditado, y determinado por el Juez el grado de culpabilidad, la pena impuesta no sería la de muerte sino la de presidio. El resultado, pues, de la no admisión de una causal vigente cuando se interpuso el recurso, sería no sólo no imponer al reo la pena menor de una ley posterior sino una mayor de la señalada al delito, cuando él se perpetró, lo cual es á todas luces absurdo.

Y precisamente el defensor del reo ante el Tribunal de Tundama, ha fundado el presente recurso de casación en las causales 1.ª y 2.ª de las señaladas en el artículo 370 de la Ley 105 de 1890, que la Corte pasa á examinar, bien que ambas las reduzca el defensor en el escrito de folios 119 á 120, en que interpuso el recurso, á una sola, á la de injusticia notoria, fundándola en que no existe la prueba jurídica de que se cometió el delito de asesinato, "pues de autos resulta, dice, que hubo un hombre muerto, pero no un hombre asesinado."

Si la Corte no ha comprendido mal el argumento, parece que el señor defensor querría que en el delito de asesinato hubiera un cadáver, de cuyo reconocimiento resultara que el hombre muerto había sido asesinado. El argumento es agudo, pero carece de verdad: el cuerpo del delito del asesinato es el homicidio; lo que convierte el homicidio en asesinato son circunstancias extrínsecas cuya prueba pertenece al grado de criminalidad del delincuente.

Afirma también el defensor que tampoco está comprobada la premeditación del delito, condición *sine qua non* del asesinato, porque la confesión que á este respecto y sobre todas las demás circunstancias agravantes del crimen hizo Hernández Ladino en su indagatoria, no hacen plena prueba al tenor del artículo 1,660 del Código Judicial, que en su parte final dice: "siempre que por otra parte esté comprobado el cuerpo del delito." El artículo aludido dice así:

"Artículo 1660. La confesión libre y espontánea hecha por el procesado en presencia del Juez ó del funcionario de instrucción y por ante el Secretario, hace plena prueba contra él, y es por sí sola bastante para condenar, siempre que por otra parte esté suficientemente comprobado el cuerpo del delito."

Vuelve, pues, el defensor al círculo vicioso de que, por cuanto de autos no resulta el cadáver de un hombre asesinado, sino el de un hombre muerto, no está comprobado el cuerpo del delito, y por tanto, falta á la libre y espontánea confesión del procesado la base de la plena prueba; á lo cual debe volverse á responder, que el cuerpo del delito es el homicidio, que la ley convierte en asesinato cuando se perpetra con alguna de las circunstancias designadas en el artículo 440 del Código Penal: en virtud de dones ó promesas, con previa asechanza; con alevosía ó á traición y sobre seguro etc., tanto que el artículo 440 arriba citado, está contenido en el capítulo del homicidio, y que dicho artículo no habla de asesinato sino de asesinos.

Y homicidio, dice el artículo 432, es la muerte que un hombre da á otro sin mandato de autoridad legítima, expedido en cumplimiento de las leyes.

El argumento prueba tánto que no prueba nada. Como el cadáver de un hombre aparentemente muerto de muerte violenta no es tampoco por sí solo, la prueba de un homicidio, tampoco valdría la confesión libre y espontánea de quien dijera que él había sido su matador, si no existía además otra plena prueba distinta de la confesión, como por ejemplo, la declaración de dos testigos contestes, que aseveraran que él, el presunto reo, era quien le había dado muerte. Por manera que en todo caso, admitiendo esta teoría, está por demás ó sobra la confesión, lo cual es contrario á toda clara y sana idea sobre la materia y á las más elementales nociones de jurisprudencia criminal.

Las circunstancias bajo el imperio de las cuales dió Hernández Ladino muerte á Miguel Álvarez, las expone el procesado en su indagatoria, en estos términos. Dice así:

"Preguntado: ¿dónde se hallaba el martes próximo pasado (nueve de Junio) como á eso de las siete á las ocho de la noche, en compañía de quién ó quiénes, de qué se ocupaba y de qué asunto trataba? contestó: "por ahí, serían las ocho de la noche, me encontré para la molestia con Miguel Álvarez y Eleuteria Fernández, en el punto del Salitre de para arriba de la Florida, casi en derecho de la puerta del portón del potrero del señor Tadeo Moreno, me tenían amenazado el tal difunto Miguel Álvarez y su esposa, porque me tenía sonsacado la esposa de Félix Fernández; ésta me aconsejaba que del modo que vivíamos bien era matar á Miguel Álvarez y su esposa, bien con estricnina, si no podía matarlos así; que entonces me hiciera amigo de ellos y los convidara por hay á tomar guarapo y trago, y que los sacara á un campo á donde nadie me viera, y aunque fuera con fierro prestado que les tirara; nos encontramos el martes citado en esta población con Miguel Álvarez y su esposa Eleuteria Fernández, en la tienda del Cometa; después llegamos á la tienda de Nazario Barrera, tomamos más guarapo. y luégo, iyéndonos para el lado de Moniquirá, calle salida para nuestras casas, y llegamos á la tienda de la señora Amalia Avella, pe lí trago y les di á Álvarez y su esposa; éstos se querían quedar, y luégo resolvieron seguir, con el fin de ir á rezar al velorio de la difunta N. Fonseca, que había muerto en la vereda de Moniquirá, seguimos los tres nada más, y dando al punto del Salitre que nombré antes, y que estábamos retirados de alguna casa y solos, saqué el cuchillo y le tiré á Miguel, sin que éste me hubiera cometido falta alguna; le tiré la primera puñalada, y creo que se la pegué por el pescuezo; cayó al suelo, se levantó, y entre juntos con la esposa, me prendieron de la ruana y me tumbaron, y estando caído le seguí jalando puñaladas al difunto Miguel; no me acuerdo cuántas le pagaría; por hay serían como unas cuatro ó cinco.

"Preguntado: ¿cuánto tiempo hace que Miguel Álvarez lo tenía amenazado, qué clase de amenazas y por qué causa cree que fuera? Contestó: hace el espacio de cuatro años dentrados en cinco, que me tenía amenazado, por estar con su concuñada Nazaria Rodríguez; las amenazas eran que me decía, que por Dios lo hiciera, que me apartara de su concuñada, ó que si no me sacaba una orden del Alcalde y me bajaba amarrado; este mismo tiempo hace que la tal Nazaria Rodríguez me tenía sonsacado, pues no me dejaba ni aun vivir con mi madre."

Las respuestas relativas á sus relaciones ilícitas con Nazaria Rodríguez, no pueden trascribirse porque la decencia y el pudor no lo permiten. Esta confesión coincide punto por punto con el reconocimiento pericial de los facultativos que examinaron las heridas halladas en el cadáver de Álvarez y

que causaron su muerte, con la declaración de Eleuteria Fernández, esposa de Álvarez y testigo presencial de la comisión del delito, y con las de todos los demás testigos de referencia que obran en autos. Está, pues, probado hasta la evidencia, que Salomón Hernández ó Ladino dió muerte violenta en la noche del nueve de Junio de mil ochocientos nóventa y uno, á Miguel Álvarez, en un sitio de la vereda de Moniquirá, Municipio de Sogamoso, no sólo con premeditación sino con alevosía, á traición y sobre seguro, y así lo declaró el Jurado de calificación; sin que la víctima lo hubiese provocado en lo más mínimo y movido únicamente por el rencor ó el sentimiento de venganza que en él despertaban las reconvenciones que Álvarez le hacía para que abandonara las relaciones ilícitas que mantenía con su concuñada Nazaria Rodríguez.

El señor Procurador general de la Nación, extremando su conciencia en favor del reo, por un sentimiento de humanidad, cosa que le honra, indica en su vista fiscal, que tal vez la confusión del nombre dado en el proceso al reo apellidándolo Hernández ó Ladino, cuando en su indagatoria de folios 13 y en la partida de bautismo de fojas 47, vuelta, se llama simplemente Salomón Ladino, pudiera constituír la séptima de las causales de casación de que trata el artículo 264 de la Ley 57 de 1887, en relación con el inciso 3.° del artículo 370 de la Ley 105 de 1890. Pero además de que en el proceso no se ha suscitado la menor duda respecto de la identidad del reo, designado en esta causa con el nombre de Salomón Hernández ó Ladino, la partida de bautismo, antes citada, explica satisfactoriamente los dos apellidos; pues allí se dice que Salomón es hijo ilegítimo de Mercedes Ladino: también lo llamarían, pues, Hernández por el padre.

Y como por otra parte no se ha incurrido en ninguna de las causas de nulidad, designadas con los ordinales 1.°, 3.°, 4.°, 5.°, 6.° y 7.° del artículo 254 de la Ley 57 de 1887, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que no es el caso de reformar el fallo materia del presente recurso, ó sea la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tundama, con fecha veintisiete de Septiembre de mil ochocientos noventa y dos, contra Salomón Hernández ó Ladino, por el delito de asesinato perpetrado en la persona de Miguel Álvarez, excepto en cuanto impuso al reo la pena de infamia que el Código Penal vigente ha eliminado.

Notifíquese, cópiese, publíquese y remítase el proceso al Excelentísimo Señor Vicepresidente de la República, encargado del Poder Ejecutivo, por conducto de Su Señoría el Ministro de Justicia, para los efectos del artículo 119 de la Constitución.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veinte de Marzo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Eugenio Potes, vecino del Salado, Provincia de Cali, en el Departamento del Cauca, solicita, por medio de su apoderado Salvador Valencia Fernández, la concesión de una recompensa militar por motivo de invalidez adquirida por consecuencia de herida recibida en el campo de batalla, lidiando en defensa del Gobierno legítimo en 1856, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 84 de 1890.

Del expediente creado en apoyo de esta solicitud aparecen comprobados los hechos siguientes:

1.° El de que Eugenio Potes, en su carácter de Alférez del medio Batallón segundo de línea que hacía la guarnición de la plaza de Cali, á órdenes del Comandante Severo Rueda, recibió una herida el 24 de Diciembre de 1856, combatiendo en favor del Gobierno legítimo contra los rebeldes encabezados por el entonces Coronel Manuel María Victoria, en el sitio de "Pavas." Así lo aseveran los testigos José Julián Muñoz, José Eliseo Jaramillo, Eulogio Echeverri, Manuel y Pedro Cárdenas, declaraciones recibidas con las formalidades legales y dando los testigos razón satisfactoria de sus afirmaciones;

2.° La invalidez que la mencionada herida ha producido al solicitante está acreditada con el reconocimiento practicado ante el Prefecto de Cali, por los profesores doctores Evaristo García, Adolfo Tenorio y Enrique Garcés, del cual resulta que Potes tiene completamente inutilizado el brazo izquierdo por la anquílosis formada entre el hueso del brazo y la escápula, de manera que constituyen los dos una sola pieza, y aunque los dichos profesores califican esto de imposibilidad absoluta, tal calificación no está de acuerdo con lo que dispone el artículo 15 de la citada Ley 84, porque ni ha habido mutilación de miembro, ni se expresa que por la lesión recibida haya quedado Potes enteramente incapacitado para trabajar. La invalidez, por lo mismo, no puede calificarse sino de parcial ó relativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 19;

3.° A falta justificada del respectivo despacho se ha acreditado el empleo militar de Potes con la prueba testimonial yá mencionada, y con la misma prueba se ha establecido la identidad y la pobreza del solicitante;

4.° El Ministerio del Tesoro ha certificado que el expresado Potes no ha sido recompensado por causa de su invalidez.

Los hechos que se dejan relacionados son suficientes, en concepto de la Corte, para justificar el derecho de Eugenio Potes, porque si bien el artículo 11 de la Ley 84 sólo se refiere á defensores del Gobierno de la Confederación Granadina hasta el ocho de Mayo de mil ochocientos sesenta y tres, la Corte ha entendido que la disposición quiso comprender á los defensores de los Gobiernos legítimos anteriores al ocho de Mayo citado, y no puede dudarse que en 1856, Potes combatió en defensa del Gobierno legítimo de aquella época.

Por tanto, la Corte Suprema, de acuerdo con el concepto del señor Procurador general de la Nación, y con las disposiciones de los artículos 1.°, 5.° (inciso 8.°), y 6.°, 11 y 19 de la Ley 84 de 1890, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que Eugenio Potes tiene derecho á recibir del Tesoro nacional la recompensa unitaria y definitiva de novecientos sesenta pesos ($ 960), equivalente á la mitad del sueldo de un Subteniente en cuatro años, cantidad que puede recibir su apoderado.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial*, dése cuenta al Ministerio del Tesoro y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia. —Bogotá, veintidós de Marzo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: En el recurso de casación introducido por Jesús María y Valeriano Ramírez, en el juicio de concurso de acreedores formado á los bienes del primero, ante el Juzgado 2.° en lo civil del Circuito de Medellín, Distrito Judicial de Antioquia, es llegado el caso de pronunciar sentencia, después de observados los trámites legales para la sustanciación de dicho recurso.

La historia de este asunto, contenida en veinticinco cuadernos, es poco más ó menos la siguiente:

Desde el año de mil ochocientos setenta y siete, ó quizá desde antes, pero á ello no hay necesidad de hacer referencia, tenían negocios de intereses Manuel Ochoa A. y Jesús María Ramírez; en esa época permutaron dos inmuebles, y desde ahí hasta la fecha se han hecho mutuos cargos y han seguido una larga serie de pleitos intrincados y ruinosos.

Habiendo vendido Manuel Ochoa Arango una finca situada en Envigado á Manuel José Viveros, en la suma de mil cuatrocientos pesos ($ 1,400); por escritura de diez y seis de Agosto de mil ochocientos ochenta, venta ficticia, según confesión del mismo Viveros y de Ochoa Arango, Jesús María Ramírez compró después el expresado inmueble á Ochoa Arango; pero como Viveros tenía dicha escritura de venta á

su favor, hubo necesidad de que para efectuar el contrato entre Ochoa Arango y Ramírez concurriera el dicho Viveros en el otorgamiento de la escritura que debía hacérsele á Ramírez por la compra de tal finca.

No se sabe si antes ó después de este contrato, pero de ello hay constancia judicial, Ochoa Arango había dado al mismo Jesús María Ramírez, á interés, la suma de dos mil pesos ($ 2,000), cuyo documento ó pagaré se perdió, según la confesión hecha por ambas partes.

Posteriormente á los dos contratos anteriores entre Ochoa y Ramírez, Ochoa Arango instauró pleito contra Viveros para que se declarara nulo el contrato dicho, celebrado el citado día diez y seis de Agosto de mil ochocientos ochenta sobre compraventa del inmueble expresado; y efectivamente, por sentencia que causó ejecutoria, se declaró la nulidad pedida.

El mismo Ochoa Arango promovió entonces, por no haberle pagado Ramírez el valor de la finca, un juicio de reivindicación de ella contra el mismo Ramírez, en el cual fué favorecido el demandante en primera y segunda instancia, mas no en la tercera.

No habiendo logrado Ochoa Arango recuperar la finca por haber perdido el pleito sobre reivindicación, entabló demanda por la suma de cuatro mil quinientos pesos de ocho décimos ($ 4,500), ó sean tres mil seiscientos pesos de ley ($ 3,600) contra Ramírez, para cobrar de él el valor de la finca expresada, y en veinticuatro de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, se dictó sentencia de primera instancia, en la cual se condenó á Ramírez al pago de la suma mencionada y los intereses legales, sentencia que fué confirmada por el Superior Tribunal de Antioquia en diez y ocho de Octubre de mil ochocientos ochenta y ocho.

Por no haber pagado Ramírez á Ochoa Arango la suma de dos mil pesos ($ 2,000) de que se ha hecho mención, y que le había dado á préstamo á interés, estableció demanda ordinaria Ochoa Arango contra el deudor en veintitrés de Agosto de mil ochocientos ochenta y uno, y por sentencias de primera, segunda y tercera instancias fué condenado Ramírez al pago de dos mil ciento cincuenta pesos cincuenta centavos ($ 2,150-50).

Libráronse después en diferentes épocas sendas ejecuciones contra Ramírez por las dos cantidades expresadas, á saber: dos mil ciento cincuenta pesos cincuenta centavos ($ 2,150-50) dados á interés, y tres mil seiscientos pesos ($ 3,600) valor de la finca dicha. Estas ejecuciones tuvieron por fundamento las respectivas sentencias, dictadas en los dos juicios ordinarios de que se ha hecho mención; y hubo de hacerse acumulación de ellas para no dividir la continencia de la causa.

En ambas ejecuciones hicieron tercerías coadyuvantes y excluyentes, según los respectivos casos, los hermanos de Jesús María Ramírez (Lucio, Alvaro, Valeriano y Joaquín Ramírez), por créditos provenientes de actos y contratos posteriores á las sentencias dictadas en los pleitos ordinarios arriba expresados, y algunos de ellos posteriores á las fechas respectivas de los mandamientos ejecutivos. De una de esas ejecuciones surgió la acusación intentada por la parte de Jesús María Ramírez, contra los Magistrados del Tribunal Superior de Antioquia, que cursa hoy ante la Corte.

Habiendo sido rechazadas algunas de las tercerías expresadas, y no habiendo logrado hacer valer su crédito en los respectivos juicios de ellas sino el tercerista Joaquín Ramírez por la cantidad de cuatrocientos ochenta pesos de ley ($ 480) y los intereses, Jesús María Ramírez hizo entonces cesión voluntaria de bienes y presentó su concurso en doce de Junio de mil ochocientos noventa y uno ante el Juzgado expresado, que le fué admitido en doce del mismo mes. En ese concurso hicieron oposición los mencionados hermanos de Ramírez, y además dos sobrinos de él, y se dictó sentencia de primera instancia en veinticuatro de Noviembre del citado año, cuya parte resolutiva dice así:

"Por tanto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, se falla: con los fondos del concurso, que existen en efectivo pertenecientes á la masa, se cubrirán los acreedores en el orden siguiente:

"1.° Las costas judiciales causadas y que se causen en el interés general de los acreedores;

"2.° *Manuel Ochoa A.*, la suma de cinco mil setecientos cincuenta pesos cincuenta centavos y los intereses legales de esa cantidad en esta forma: por el capital de dos mil ciento cincuenta pesos cincuenta centavos ($ 2,150-50), desde el treinta y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta y uno en adelante; y por la cantidad de tres mil seiscientos pesos desde el veinticinco de Marzo de mil ochocientos ochenta y uno. *Joaquín Ramírez*, la suma de cuatrocientos ochenta pesos y los intereses al diez por ciento anual desde el veinticinco de Octubre de mil ochocientos ochenta y ocho en adelante. *Domingo Molina*, la cantidad de doscientos pesos y los intereses al doce por ciento anual desde el veintinueve de Marzo de mil ochocientos ochenta y nueve; y *Rafael Restrepo B.*, la suma de doscientos cuarenta pesos y sus intereses al doce por ciento anual desde el diez de Octubre de mil ochocientos ochenta y nueve;

"3.° *Alvaro A. Ramírez* (por los recibos), la suma de trescientos veinte pesos, sin intereses, porque no consta desde cuándo deban deducirse. *Valeriano Ramírez*, por el documento de tres de Agosto de mil ochocientos noventa y uno, doscientos ochenta pesos, y *Joaquín Ramírez*, por el documento de tres de Abril de mil ochocientos noventa y uno, la cantidad de setecientos veinte pesos y sus intereses al diez por ciento anual desde el diez de Octubre de mil ochocientos noventa. Estos créditos se pagarán á prorrata si no alcanzaren á cubrirse en su totalidad á cada uno de los tres acreedores que menciona este número 3.°;

"4.° *Lucio y Alvaro A. Ramírez*, la suma de cinco mil pesos que les mandó pagar la sentencia de cinco de Marzo de 1891, que se mencionó en la parte que se refiere á estos acreedores; y los intereses legales de esa cantidad en conformidad con tal sentencia;

"5.° *Valeriano Ramírez*, la suma de siete mil doscientos quince pesos veinte centavos que le mandó pagar la sentencia de ocho de Mayo de 1891 de que antes se habló, insertando su parte resolutiva. En la sentencia quedaron comprendidos los valores de que trata la escritura número 1,092 de diez y siete de Julio de mil ochocientos ochenta y nueve y el documento privado de fecha trece de Agosto de mil ochocientos noventa, de que se hizo mención en la parte respectiva de este fallo, documentos que fueron desglosados del juicio en que se pronunció tal sentencia, según lo da á entender la copia que al pie de ellos aparece, y

"6.° En este lugar se pagará á prorata, á Pedro Antonio González la suma de doscientos sesenta y siete pesos veinte centavos, á Lisandro Ramírez la de diez y seis pesos y á Manuel Ramírez U. la de cuarenta pesos. No se les manda pagar intereses, porque no han justificado desde cuándo deben deducirse.

"Los intereses mandados pagar correrán hasta la extinción de la deuda, y se cubrirán con la preferencia que corresponde á sus respectivos capitales (artículo 2,511 del Codigo Civil); y las costas invertidas por cada acreedor para hacer efectivo su derecho, se cubrirán en el mismo lugar señalado al respectivo crédito."

Esta sentencia fué reformada por la Sala de decisión del Tribunal Superior de Antioquia en veintiuno de Junio de mil ochocientos noventa y dos, de la manera siguiente:

"Por lo expuesto, la Sala de decisión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, falla: primero, con los fondos pertenecientes al concurso se cubrirán los acreedores reconocidos como tales en el juicio, y por sus respectivos créditos justificados por capital é intereses, determinados éstos por su cuantía en la parte motiva del presente fallo, y en la motiva y resolutiva del de la primera instancia, sin más reformas respecto de intereses que las que se hacen en esta sentencia; cubriránse, se repite, en el orden que pasa á expresarse:

"Primero. Las costas judiciales causadas y que se causen en el interés general de los acreedores reconocidos;

"Segundo. Los créditos de Manuel Ochoa A., Joaquín Ramírez, Domingo Molina y Rafael Restrepo;

"Tercero. El de Alvaro A. Ramírez, por la suma de tres-

cientos veinte pesos y los intereses computados desde la fecha del reconocimiento judicial de los dos recibos de la foja 1.ª del cuaderno de su oposición; el de Valeriano Ramírez, por la cantidad de doscientos ochenta pesos, y el de Joaquín Ramírez, por la cantidad de setecientos veinte pesos;

Cuarto. El de Lucio y Alvaro Ramírez, por la suma de cinco mil pesos; el de Pedro A. González, por la suma de doscientos sesenta y siete pesos veinte centavos; el de Lisandro Ramírez, por la de diez y seis pesos, y el de Manuel Ramírez U., por la de cuarenta pesos. Los tres últimos créditos de este número devengan intereses legales desde la fecha en que fueron reconocidos judicialmente en la respectiva relación del concursado; y

"Quinto. En último lugar se pagará, si alcanzaren los fondos de la masa común, el crédito de Valeriano Ramírez, por la suma de siete mil doscientos quince pesos veinte centavos con los intereses demandados;

"Segundo. Se declara que los acreedores de cada uno de los grupos que quedan clasificados por números, no tienen uno respecto del otro, prelación alguna en sus respectivos créditos; cuando los fondos del concurso no alcancen para cubrir en su totalidad alguno de los grupos, siguiendo el orden de prelación establecido, el pago á ese grupo se hará á prorrata, según sus créditos, y

"Tercero. Queda en estos términos reformada la sentencia de primera instancia, y confirmada en todas las demás declaratorias que no se opongan á lo expresamente resuelto en la presente."

La Corte debe ocuparse, en primer lugar, en examinar si el recurso se ha interpuesto oportunamente y por persona hábil; y si la sentencia es de aquellas contra las cuales puede interponerse recurso de casación. (Artículo 381, Ley 105 de 1890).

Que se interpuso oportunamente y por personas hábiles el expresado recurso, consta en el proceso; y la sentencia es de aquellas que dan lugar á él por coexistir las circunstancias de que trata el artículo 366 de la ley citada. Por consiguiente, entra la Corte á considerarlo.

Dice el artículo 367 de la citada ley:

"Puede también interponerse el recurso de casación contra las sentencias definitivas de segunda instancia dictadas por los Tribunales Superiores en los juicios de concurso de acreedores, cuando exista la primera de las causales del artículo 369 de esta ley, y ocurran, además, las tres circunstancias mencionadas en el artículo anterior."

La primera causal del citado artículo 369, es:

"Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva ó de doctrina legal; ya sea directa la violación; ya sea ésta efecto de una interpretación errónea de la ley ó de la doctrina legal; ya de aplicación indebida de leyes ó de doctrinas legales.

"Es entendido que al ocuparse la Corte en el examen de la sentencia con motivo de esta causal, es sobre la base de que son verdaderos los hechos en que se apoya la sentencia; á menos que se alegue por el recurrente contra la apreciación de determinada prueba, y del expediente mismo resulte que, en efecto, se incurrió en error de derecho ó en error de hecho, siempre que este último se acredite de un modo evidente, con documentos ó actos auténticos que obren en el proceso."

Que no existe la primera causal de que trata el artículo últimamente citado, es cosa evidente en el juicio; pues la sentencia recurrida no viola ni directa ni indirectamente ley sustantiva ó doctrina legal; no hay en ella interpretación errónea de una ni de otra; y se aplicaron debidamente las leyes á la materia del concurso.

No se ocuparía la Corte en examinar esta causal y en probar, por consiguiente, la proposición asentada, si la sentencia de segunda instancia no estuviera basada sobre hechos verdaderos; mas como sí lo está, y como á la vez los recurrentes alegan contra la apreciación de determinada prueba, pues tachan la admisión de algunas sentencias como elementos probatorios en el concurso, hay precisión de averiguar si del expediente resulta que en efecto se incurrió en error de derecho ó en error de hecho, al tenor de lo que dice el último párrafo del artículo 369 citado, para deducir de allí si existe ó no la expresada causal primera del mismo artículo.

Los recurrentes Jesús María y Valeriano Ramírez, por medio de su apoderado ante esta Corte, aseguran que en la sentencia de segunda instancia se incurrió en error de derecho ó en error de hecho, porque se estimaron como pruebas en favor de dos créditos reclamados por Manuel Ochoa Arango, dos sentencias proferidas por Jueces de Circuito, y haber dado preferencia, en virtud de ellas, á dichos créditos, no obstante ser nulas. Esas sentencias son: la del Juzgado 1.º del Circuito de Medellín, de fecha doce de Junio de mil ochocientos ochenta y dos, confirmada por la del Tribunal Superior, de veintiséis de Julio de mil ochocientos ochenta y tres, y ésta, por la de la Sala de tercera instancia, de veinticuatro de Noviembre del mismo año, por las cuales se condena á Jesús María Ramírez, á pagar á Ochoa Arango la cantidad de dos mil ciento cincuenta pesos cincuenta cvos. ($ 2,150-50); y la del Juzgado 2.º del Circuito de Medellín, de fecha veinticuatro de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, confirmada por el Tribunal en diez y siete de Octubre de mil ochocientos ochenta y ocho, por la cual se condenó al mismo Ramírez á pagar á Ochoa la cantidad de tres mil seiscientos pesos ($ 3,600).

Una vez admitidas esas sentencias como pruebas en el juicio de concurso de acreedores hecho á los bienes de Jesús María Ramírez, el Juez, al dictar su fallo de primera instancia en dicho juicio, y el Tribunal en la segunda, hicieron bien en estimar esos documentos tales como allí figuraron, debidamente registrados, sin entrar á examinar si estaban basados ó no en ley, si eran ó no nulos; porque es sabido que sentencias ejecutoriadas, aducidas como pruebas en una causa, y traídas al expediente con las formalidades exigidas en el capítulo VII, libro 2.º del Código Judicial, que no han sido tachadas en tiempo legal de falsas ó de nulas, son inviolables y deben respetarse y cumplirse su texto y su forma. El artículo 681 del Código Judicial, dice que los instrumentos auténticos cuando sean obtenidos de la manera ya expresada, hacen plena prueba acerca de su contenido, y el 831 preceptúa que "la sentencia ejecutoriada debe cumplirse: funda la excepción de cosa juzgada, y hace nula cualquiera otra sentencia posterior que le sea contraria," con las excepciones que establece el mismo Código, de las cuales no concurre ninguna en el presente caso. La Corte tampoco puede entrar al presente, en el estado que tiene hoy el juicio, á estimar las expresadas sentencias, porque siendo el recurso de casación un medio extraordinario, y siendo tan terminantes las disposiciones citadas, á esta Superioridad le está vedado suscitar de nuevo cuestiones que han sido debatidas hasta el extremo como las que resumen los expresados fallos.

La cita que se hace de los artículos 51, 131 y 138 de la Ley 105 de 1890, á este respecto, es inconducente: 1.º porque en la sentencia del Tribunal de Antioquia recurrida, debiendo ella versar sobre la justicia y legalidad de la de primera instancia respecto al derecho y á la graduación de todos y cada uno de los acreedores (artículo 1197 del Código Judicial), no se trataba de excepciones perentorias que se hubieran ó no propuesto en el juicio, sino de estimar los documentos auténticos, públicos ó privados y las demás pruebas del proceso, en el modo y términos como fueron traídas al concurso; 2.º porque los fallos que se calificaban por el Tribunal como elementos probatorios, habían pasado yá por la tramitación de largos y debatidos juicios, expresaban claramente los derechos y deberes que de ellos resultaban á las partes y no se trataba de ejecutarlos sino de apreciarlos en el juicio dicho; 3.º porque no se trataba en la decisión de última instancia de acciones ó excepciones de nulidad de sentencias definitivas, yá dictadas, conforme á la legislación vigente de los extinguidos Estados, y

4.º Últimamente, porque el Tribunal no podía, con los escasos expedientes y documentos que componían el proceso del concurso, entrar á dilucidar todas las cuestiones que habían precedido en largos pleitos á las susodichas sentencias, y en ejecuciones y tercerías al referido concurso.

En cuanto á la preferencia que tanto el Juez del concurso como el Tribunal Superior han dado á los créditos de Manuel Ochoa Arango, en virtud de las mencionadas sentencias ó instrumentos públicos auténticos, no han procedido con menos

razón aquél y éste, pues que la doctrina del artículo 36 de la Ley 57 de 1887 es clara, y según esa disposición, "en caso de prelación de créditos, la tendrán los instrumentos públicos sobre los instrumentos privados;" y como dichos créditos están justificados con las expresadas sentencias ejecutoriadas, pues son verdaderos documentos públicos ó auténticos, según el artículo 678 del Código Judicial, es claro que el orden en que se han colocado es el que determinan la razón y la ley.

También alega la parte recurrente, que por cuanto el fallo del Tribunal Superior coloca en último lugar el crédito de Valeriano Ramírez, de siete mil doscientos quince pesos veinte centavos ($ 7,215-20), fundándose en la sentencia de ocho de Mayo de mil ochocientos noventa y uno, que se adujo como prueba en el concurso, es violatorio de la ley. Es de advertirse que esa sentencia en su parte resolutiva dice así: "Se declara que esta sentencia no perjudica sino al señor Jesús María Ramírez y á sus *herederos*, pero de ninguna manera á otra persona." De modo que, conforme á esta rotunda declaración que consta en sentencia definitiva ejecutoriada, que es para el Juez una ley, y en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2,505, 2,508 y 2,509 del Código Civil nacional, que es el aplicable, porque el del extinguido Estado de Antioquia, invocado por los recurrentes, nada tiene que figurar en el asunto, y de acuerdo también con el artículo 36 de la Ley 57 de 1887 arriba citado, el Tribunal Superior no podía hacer otra cosa sino colocar el crédito de Valeriano Ramírez en último lugar, para no perjudicar ni aun á los acreedores que fundaron la demanda de sus créditos en la sóla confesión del concursado. Mal podría el Tribunal ir á buscar los antecedentes que dieron lugar á esa sentencia, para reformarla ó revocarla; él tenía que aceptarla y obedecerla al pie de la letra. Tampoco puede la Corte, al apreciar ese documento, en el recurso actual, hacer otra cosa que respetarlo y hacerlo respetar.

De suerte que, por los anteriores razonamientos, queda demostrado que la sentencia recurrida del Tribunal Superior de Antioquia, no es violatoria ni directa ni indirectamente de ley sustantiva ni de doctrina legal: no hay en ella interpretación errónea de una ni de otra, y se aplicaron debidamente las leyes á la materia del concurso. Tampoco resulta del expediente que, en efecto, se haya incurrido en error de derecho ó en error de hecho en la apreciación de determinada prueba.

Y si, como lo pretenden los recurrentes, la Corte debiera entrar á examinar todos los litigios anteriores al concurso y á las pruebas presentadas en este juicio, á calificar los hechos y aplicarles de nuevo la legislación bajo cuyo imperio se fallaron esos litigios, acaso no se hallaría identidad en esencia, entre las leyes aplicables del extinguido Estado de Antioquia, y las de la Nación que rigen actualmente; y entonces la sentencia acusada no sería tampoco de aquellas contra las cuales pueda interponerse recurso de casación, porque faltaría la circunstancia primera de que trata el artículo 366 de la Ley 105, á saber: "que la sentencia se funde ó deba fundarse en leyes de los extinguidos Estados, que sean idénticas en esencia á las nacionales que estén en vigor."

Por las razones anteriores, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 100 de 1892, declara:

No hay lugar á infirmar el fallo materia del recurso.

Notifíquese, cópiese, publíquese en audiencia, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA. —BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintidós de Marzo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Pedro Pardo ha demandado ante la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, el reconocimiento á favor suyo y á cargo del Tesoro nacional de la cantidad de doscientos pesos ($ 200), suma en que estima una vaca y el ajuar de una casa del "Pie de la Popa" de la ciudad de Cartagena, que asegura le fueron expropiados por los revolucionarios en mil ochocientos ochenta y cinco. La Comisión, haciendo uso de la facultad concedida por el artículo 6.° de la Ley 44 de 1886, solamente le reconoció cien pesos ($ 100), y absolvió á la Nación del resto, resolución que fué aprobada por el Ministerio del Tesoro el veinticuatro de Diciembre último, en providencia que lleva el número 3,405, que ha venido en apelación á esta Superioridad, por haber interpuesto ese recurso el apoderado de Pardo.

Sustanciado el negocio en la forma legal, se procede á fallarlo.

En los autos figura un certificado del Gobernador del Departamento de Bolívar, con que se acredita plenamente que el demandante fué partidario y sostenedor del Gobierno nacional en mil ochocientos ochenta y cinco; pero no se encuentran tres declaraciones contestes de testigos hábiles que presenciaran la expropiación por parte de los rebeldes, de la vaca y del ajuar de la casa del "Pie de la Popa," al ser sitiada la plaza de Cartagena; de suerte que en rigor de derecho, no existe prueba legal que demuestre la verdad de la exacción cuyo valor se reclama, y por eso la Comisión tuvo que obrar como Juez de conciencia para poder reconocer la cantidad de cien pesos ($ 100), que la Corte no halla motivo plausible para que se aumente como lo pretende el actor.

Por tanto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el concepto del Fiscal de la Comisión, se aprueba el auto apelado en la parte que ha sido materia de la alzada.

Notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, veintidós de Marzo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: El doctor Joaquín Martínez E., con poder escriturado de Adolfo M. Navarrete, vecino de esta capital, se presentó ante la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, demandando el reconocimiento y pago á cargo del Tesoro de la cantidad de ochocientos cuarenta pesos ($ 840), valor de siete mulas que fueron expropiadas á su poderdante por las autoridades militares que sostenían el Gobierno nacional en la guerra de mil ochocientos ochenta y cinco; y sustanciada la demanda, dicha Comisión la decidió en resolución número 177, que lleva la fecha de veinticuatro de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, en los siguientes términos:

"Se reconoce al señor Adolfo Martínez Navarrete, vecino de Bogotá, ó á su apoderado legal, señor doctor Joaquín Martínez E., como acreedor del Tesoro nacional por la cantidad de setecientos pesos ($ 700), y se declara este crédito comprendido en el inciso 2.°, artículo 2.° de la Ley 44 de 1886."

Enviado el expediente al Ministerio de Guerra, que en aquella fecha estaba encargado de revisar las decisiones de la Comisión dictadas en materia de exacciones de guerra, dicho Ministerio no tuvo á bien impartir su aprobación al fallo expresado, por lo cual el apoderado, doctor Martínez E., interpuso apelación para ante esta Superioridad contra lo resuelto por el Ministerio de Guerra.

Habiéndose concedido la apelación y remitido lo actuado á este Supremo Tribunal, se ha dado en él al asunto la sustanciación establecida por la ley, hasta ponerlo en estado de ser decidido, como se pasa á hacerlo mediante las siguientes consideraciones:

1.ª El miembro de la Comisión, señor Fídolo González, se apartó de la opinión de la mayoría y salvó su voto, por cuanto cree que si el precio de las mulas no está fijado definitivamente, la Comisión no tiene facultad para hacer el avalúo, porque la atribución legal es rebajar cuando parezca excesivo, mas no hacer el avalúo en absoluto. En el mismo argu-

mento se apoyó el Ministerio de Guerra para negar su aprobación á lo determinado por la mayoría de la Comisión, lo que dió lugar á la interposición del recurso.

2.ª Aunque consta por una parte que la expropiación de las siete mulas se verificó en el Distrito de Motavita, por el Comandante del *Escuadrón Volante de Observaciones*, Nemecio Dulcey, según certificado ó recibo que este Jefe dió al interesado en Cácota de la Matanza, con fecha cinco de Junio de mil ochocientos ochenta y cinco; documento que el interesado cuidó de presentar al Intendente accidental del Ejército del Norte, Enrique Navas, y este funcionario hizo constar en una nota extendida al pie del citado documento, que la exhibición la había verificado hallándose presente el referido Comandante Dulcey, comprobando de este modo la verdad ó exactitud de la expropiación de las siete mulas, y pedido informe al señor Ministro de Guerra sobre si en su Despacho existía constancia de que Enrique Navas hubiera desempeñado en algún tiempo la Intendencia de aquel Ejército, la contestación que se obtuvo fué negativa;—consta, por otra parte,—que se ha comprobado efectivamente que Navas ejerció la Intendencia por algunos días en reemplazo del Intendente propietario Julio A. Corredor. Este hecho lo acredita la certificación que expidió el doctor Aristides Calderón, que figura á la foja 9, en la cual expone: "Como yá lo dije en otro certificado, á pedimento del mismo solicitante Adolfo M. Navarrete, recuerdo que, habiéndose quedado enfermo en Pamplona en los primeros días de Junio de mil ochocientos ochenta y cinco, el Intendente del Ejército del Norte, doctor Julio A. Corredor, me consultó si podría encargar accidentalmente de la Intendencia del Ejército á su Secretario, señor Enrique Navas, bajo su responsabilidad, mientras se restablecía y podía alcanzar á incorporarse nuevamente al Ejército. El infrascrito, como Secretario de Gobierno en comisión y Jefe de dicho Ejército, en virtud de las facultades de que estaba investido por el Poder Ejecutivo nacional, le aprobó el procedimiento;"

3.ª Resulta de lo expuesto en el número anterior, que aunque el Comandante Dulcey llevó á cabo la expropiación de las mulas, puede considerarse que ella lo fué en efecto por el Intendente, puesto que este empleado tuvo conocimiento de la expropiación, y refrendó el respectivo documento para que el interesado pudiera hacer constar aquélla en tiempo oportuno;

4.ª El referido recibo ó certificado fué registrado oportunamente en la Secretaría de Gobierno del extinguido Estado de Boyacá, y la firma del Secretario aparece autenticada por el Ministerio de Gobierno (foja 2 vuelta), y

5.ª Finalmente, para subsanar toda falta, fueron recibidas por el Magistrado sustanciador, á virtud de auto para mejor proveer, las declaraciones juradas de los testigos Siervo Gómez, Pascual Rincón y Avelino Moreno, individuos que pertenecían al citado Ejército del Norte, quienes depusieron que les consta la expropiación de las siete mulas que pertenecían al reclamante Martínez Navarrete, porque las vieron en el Distrito de Motavita; que dichas mulas eran unas de silla y otras de carga, y se las destinó al servicio del mismo Ejército. En cuanto al valor de las mulas no están enteramente de acuerdo, pues Siervo Gómez opinó porque valían unas con otras á ciento diez pesos ($ 110); Pascual Rincón aseguró que podían valer á más de cien pesos ($ 100), y el último dijo que las vió justipreciar en ciento veinte pesos ($ 120) cada una; que habiendo reclamado el interesado contra dicho avalúo, porque le pareció muy bajo, y estando las fuerzas en marcha, cree que no se resolvió cosa alguna á este tenor. La Corte, haciendo uso de la facultad que se le tiene conferida, fija el precio de cada una de ellas, verdad sabida y buena fe guardada, en la cantidad de ciento diez pesos ($ 110).

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, reconoce á cargo del Tesoro nacional y á favor de Adolfo M. Navarrete, vecino de esta capital, la cantidad de setecientos setenta pesos ($ 770), como importe de las siete mulas de que trata este juicio, á razón de ciento diez pesos ($ 110) cada una, y absuelve á la Nación del mayor cargo deducido en la demanda; y queda así reformada la resolución de la Comisión de suministros, que ha sido materia de este recurso.

Notifíquese, déjese copia, insértese en la *Gaceta Judicial*, pásese copia al Ministerio del Tesoro y devuélvase lo actuado.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintitrés de Marzo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: En once de Noviembre de mil ochocientos setenta y ocho, se presentó Rafael Navia, ante el Juez del Circuito de Buga, demandando á la Nación para que se le pagaran diez y siete novillos de su propiedad que el comisario Manuel José Sanclemente, de orden del Alcalde del Distrito de Guacarí, le expropió de los pastales del doctor Rómulo Durán, en el sitio de "Sabaletas," para la guerra de 1876 á 1877. El demandante avaluó esos novillos en ochocientos cincuenta pesos ($ 850), á razón de cincuenta pesos ($ 50) cada uno; acompañó á su solicitud la relación que prescribía la Ley 67 de 1877, y fijó los puntos de su demanda en cumplimiento de lo dispuesto en la reforma 21, Ley 46 de 1876.

Después de alguna demora, se pasó la expresada demanda al encargado de llevar la voz del Ministerio Público, Benedicto Arce, quien la contestó negando el cargo, por no haberse acompañado, dice, los documentos comprobantes del crédito.

En catorce de Julio de mil ochocientos ochenta y siete, se presentó Francisco Groot, como apoderado de Rafael Navia, ante la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, pidiendo el reconocimiento y pago de la cantidad indicada, y acompañando en diez fojas los comprobantes legales.

La Comisión mandó practicar, en varias resoluciones, algunas diligencias para esclarecer los hechos, ya en el sentido de ampliar las declaraciones de los testigos doctor Rómulo Durán, Salvador Caicedo y José María Domínguez Castro, ya para averiguar si la demanda estaba pendiente al tiempo de la expedición de la Ley 44 de 1886; y, previas tales diligencias, falló el asunto el veintitrés de Septiembre de mil ochocientos noventa y dos, negando el reconocimiento del crédito y absolviendo á la Nación.

Por haber reclamado en tiempo el apoderado de Navia de esta resolución y de la que del Ministerio del Tesoro recayó aprobándola, ha venido el asunto á la Corte, la que después de sustanciado el proceso, cumple con el deber de fallarlo.

Consta, en primer lugar, por las diligencias de fojas 5 á 8 y 31 á 34, que la susodicha reclamación de Rafael Navia estaba pendiente ante el Juzgado del Circuito de Buga, cuando se expidió la Ley 44 citada, al tenor de lo dispuesto en su artículo 13 y al de la definición que da el artículo 3.° de la Ley 152 de 1887; y por consiguiente, no es el caso de desecharla. No importa que el expediente haya venido á la Comisión de empréstitos, suministros y expropiaciones por conducto de un particular debidamente apoderado por el interesado, y que no se haya remitido directamente por el Juez del Circuito dicho, formalidad que alegan el Fiscal especial y las resoluciones de la Comisión y del Ministerio del Tesoro para negar la solicitud de Navia. Basta que haya constancia de que la reclamación se había intentado ante la autoridad judicial competente al tiempo de la expedición de la Ley 44 citada y que no se dude de la autenticidad del hecho, para que se tenga por correcta la procedencia del expediente, y así lo ha resuelto ya la Corte en casos análogos.

Consta, en segundo lugar, que en mil ochocientos setenta y siete, el Alcalde de Guacarí hizo expropiar á Rafael Navia, por medio de sus agentes y vaqueros, diez y siete novillos cebados que éste mantenía hacía mucho tiempo en los pastales de "Zabaletas," de propiedad del doctor Rómulo Durán,

los cuales novillos estaban señalados con la marca *A*, que se dibuja en la pregunta del respectivo interrogatorio, y se expropiaron para el sostenimiento de la guerra nacional de mil ochocientos setenta y seis á mil ochocientos setenta y siete. Los testigos Rómulo Durán, José María Domínguez Castro y Salvador Caicedo, que declaran de fojas 11 á 13 y 15 á 18 y 25 vuelta, aseguran los hechos, y dicen que les consta: Durán, porque los presenció, y Domínguez, porque "dichos novillos estaban en el potrero de su cuñado (el doctor Durán) y la finca de campo del exponente queda contigua, y por tanto sabían todo lo que allí pasaba en esa época, porque permanecían escondidos el exponente y otros compañeros á los alrededores de la casa; al ver á los agentes del Gobierno se escondían, y luégo que éstos se retiraban, después de rondar ó rodear la casa, volvían á salir y los muchachos y mujeres que cuidaban la casa, daban inmediatamente cuenta de todo lo que había pasado;" y "afirma que los novillos del señor Navia fueron expropiados en la época que expresa por las partidas del Gobierno, pues aunque no los vió enlazar, notaban su falta en el momento que se alejaban las partidas, y aun observaba los rastros que quedaban, de lo cual tiene evidencia el testigo" (son sus palabras). El testigo Caicedo dice que le constan "por haber estado en la finca del doctor Rómulo Durán, encargado de su administración." Estos testigos que son idóneos, según lo certifican el Fiscal y el Juez ante quienes declararon, hacen plena prueba en concepto de la Corte, conforme al ordinal 3.°, artículo 2.°, Ley 44 de 1886.

Respecto del valor de los novillos, la Corte considera que como los testigos mencionados los valuaron, Durán y Domínguez, á no menos de cuarenta pesos ($ 40) cada uno, y Caicedo á no menos de treinta y dos pesos ($ 32), hay necesidad de optar por el último término, y aceptar el avalúo de Caicedo, mayordomo de la finca donde estaban los animales, que es el precio menor, y que es el que, como lo ha resuelto la Corte ya en otras ocasiones, debe reconocerse. Por consiguiente, el valor total de los novillos es el de quinientos cuarenta y cuatro pesos ($ 544), á razón de treinta y dos pesos ($ 32).

Por estas consideraciones, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca la resolución número tres mil trescientos noventa y uno (3,391) de diez y seis de Diciembre de mil ochocientos noventa y dos, dictada por el Ministerio del Tesoro, aprobatoria de la de veintitrés de Septiembre de mil ochocientos noventa y dos, número cuatro mil cincuenta (4,050) de la Comisión de empréstitos, suministros y expropiaciones; y reconoce á cargo del Tesoro nacional y á favor de Rafael Navia, el crédito de quinientos cuarenta y cuatro pesos ($ 544), valor de los diez y siete novillos expropiados por orden del Alcalde de Guacarí para el sostenimiento de la guerra de mil ochocientos setenta y seis á mil ochocientos setenta y siete, en el Departamento del Cauca.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente al Ministerio del Tesoro.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veinticuatro de Marzo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: El tres de Marzo de mil ochocientos ochenta y seis, se presentó ante el Secretario de Hacienda del Estado *de Antioquia, hoy Departamento*, Aparicio Peláez P., otorgando poder especial á "Bravo & Mejía," de Medellín, para que hicieran valer el crédito á que le diera derecho la expropiación de una mula que el Prefecto del Departamento de Oriente tomó de su finca de "El-Tablazo," en el Distrito de Rionegro.

El memorial se presentó personalmente por el interesado al Juez del Distrito del Retiro y su Secretario.

El veintisiete del mismo mes se presentaron "Bravo & Mejía," ante el Jefe civil y militar del Estado, como apoderados de Aparicio Peláez, y solicitaron una certificación por el crédito de sesenta y cuatro pesos ($ 64), importe de una mula expropiada para el servicio de las fuerzas nacionales.

Entre el primero y segundo documentos que figuran en las fojas 1.ª á 4.ª del expediente, obra una información de nudo hecho constante de dos fojas, en que se registran las declaraciones de Juan de Dios Botero y Joaquín María Gutiérrez, sobre la expropiación; y al pie de ella encuentro esta nota:

"Páguese el valor de esta reclamación al señor Jorge Bravo por valor en cuenta.

"Medellín, 10 de Noviembre de 1886.

"Por Aparicio Peláez, *Alejandro Mejía H.*"

Después de esto aparece el expediente registrado y rapartido en el Despacho de la Comisión de empréstitos, suministros y expropiaciones en primero de Septiembre de mil ochocientos noventa, sin saberse por qué conducto ni cómo llegó á dicho Despacho.

Allí se le dió vista al Fiscal, y el veinte de Junio de mil ochocientos noventa y dos, dictó la Comisión expresada la resolución número 3,815, negando la reclamación; resolución que fué aprobada por la del Ministerio del Tesoro, y apelada esta última por Santiago Ospina, como apoderado sustituto de *Jorge Bravo*.

Del estudio del expediente, resultan las siguientes informalidades:

1.ª El poder de Aparicio Peláez á Bravo & Mejía, no es valedero en la presente actuación, porque según el artículo 361 del Código de Procedimiento "ninguna sociedad, comunidad ó compañía, puede ser apoderado judicial;" y porque no habiéndose puesto en conocimiento de la parte contraria para que lo tachara, ó lo admitiera, no se ha subsanado el defecto;

2.ª La nota de endoso hecha por Aparicio Peláez á Jorge Bravo, en la forma que se ha expresado, no es una cesión formal del crédito, pues ni está firmada por el cedente;

3.ª El poder que ha otorgado *Jorge Bravo* á Santiago Ospina A., sin ser el primero apoderado legal ni cesionario del interesado, tampoco es admisible, porque no teniendo personería Bravo, no puede tenerla Ospina.

No obstante estas informalidades, la Corte debe entrar á fallar el asunto en el fondo.

La Comisión de empréstitos, suministros y expropiaciones procedió legalmente al negar el crédito solicitado por Aparicio Peláez, y el Ministerio del Tesoro hizo bien en aprobar esa resolución. No se presentó demanda en forma del expresado crédito y la solicitud se hizo después de pasado el término legal; el proceso además se ha sustanciado de una manera irregular como se ha visto. Las declaraciones de los testigos arriba citados son incompletas, porque éstos no dan razón de su dicho; y para que la prueba sea cabal se necesita, además, otro testigo, para llenar el número de tres que exige el artículo 2.°, inciso 3.° de la Ley 44 de 1886.

No se ha comprobado tampoco que esos testigos sean idóneos, ni que sus exposiciones se hayan recibido con las formalidades legales, entre ellas la presencia del respectivo Agente del Ministerio Público, y haber sido recibidos ante la autoridad judicial competente. (Artículo 5.°, Ley 152 de 1887).

Por las anteriores consideraciones, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la resolución número 3,396, de veinticuatro de Diciembre de mil ochocientos noventa y dos, dictada por el Ministerio del Tesoro, de la cual se ha apelado.

Notifíquese, déjese copia, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

IMPRENTA DE ANTONIO M. SILVESTRE.
Director, Tomás Galarza.

REPÚBLICA DE COLOMBIA.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AÑO VIII | Bogotá, 28 de Mayo de 1893. | NÚM. 392.

CONTENIDO.

Págs.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

La que niega á Eleázar y José Antonio López una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Corrales)..... 225
La que confirma la resolución que dictó el Ministerio del Tesoro en la reclamación de José Trinidad Moreno, por suministros. (Magistrado ponente, doctor Isaza)..... 225
La que niega á Prudencio Cantillo el reconocimiento de un crédito por daños y perjuicios. (Magistrado ponente, doctor Isaza)..... 226
La que concede á Ramón Ruiz una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Trujillo)..... 226
La que niega á Demetrio Hurtado el reconocimiento de un crédito procedente de expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Galindo)..... 227

NEGOCIOS CRIMINALES.

La que confirma el fallo que condenó á presidio á Buenaventura Caicedo, por el delito de homicidio perpetrado en la persona del soldado Cándido Gómez. (Magistrado ponente, doctor Galindo)... 227

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

El que confirma el fallo dictado por el Tribunal Superior de Cundinamarca en el juicio seguido por Honorato Espinosa contra la Nación, sobre denuncia de obra nueva. (Magistrado ponente, doctor Corrales)..... 228
El en que se abstiene la Corte de conocer en el juicio seguido entre Josefina y Angélica Girón y la Sociedad explotadora de los bosques del "Alto Chilibre," sobre deslinde de unos terrenos. (Magistrado ponente, doctor Corrales)..... 229

NEGOCIOS CRIMINALES.

El que confirma el auto por el cual el Tribunal Superior de Antioquia llamó á juicio á Matías A. Múnera, Juez del Circuito de Frontino, por abuso de autoridad. (Magistrado ponente, doctor Corrales)..... 231
El que declara que no hay mérito para proceder contra el Magistrado del Tribunal Superior de Tunja, doctor Rafael Castañeda, en el denuncio que contra él dió Elciario María Torres, por varios cargos. (Magistrado ponente, doctor Corrales)..... 231

GACETA JUDICIAL.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintitrés de Marzo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Mariano Groot, con poder de Eléazar y José Antonio López, vecinos del Municipio de Túquerres, en el Departamento del Cauca, instauró demanda en memorial de veintisiete de Octubre del año próximo pasado, para que la Corte, en atención á los servicios militares que Jenaro López, padre de los demandantes, prestó á la República en los años de mil ochocientos sesenta á mil ochocientos sesenta y tres, les reconozca el derecho á gozar de una pensión ó recompensa, conforme á la Ley 84 de 1890.

Con la demanda se presentaron los siguientes documentos:

1.° Una información en que varios testigos declaran, entre otras cosas, que Jenaro López, esposo de Nicolasa León y padre de los citados demandantes, prestó importantes servicios al Gobierno de la Confederación Granadina, en su carácter de Capitán efectivo; que el mencionado Jenaro López, el tres de Diciembre de mil ochocientos setenta y seis, recibió una herida de bala en la ingle, al tiempo en que una parte considerable del pueblo de Túquerres, encabezada por el Jefe municipal y su Secretario hacía fuego sobre los Jurados electorales y los que ocupaban las barras como espectadores, y que el expresado Jenaro López, en su carácter de Secretario del Juzgado del Circuito, y asociado al Juez respectivo, trató de contener á los sublevados, para evitar el derramamiento de sangre; que pocos días después de herido el citado López, murió de resultas de la herida que se le causó.

Aunque consta en autos que Eléazar y José Antonio López son hijos legítimos del citado Jenaro López, éstos no tienen derecho al goce de pensión ó recompensa alguna, según la Ley 84 de 1890, porque, en primer lugar, dicho López no fué herido en función de guerra, ni á manos de enemigos armados del Gobierno; y en segundo lugar, caso de que el padre de los reclamantes hubiera adquirido algún derecho á gozar de pensión por antigüedad de los servicios que como militar prestó á la República, tal derecho no es trasmisible á los deudos, según la ley citada. Esta doctrina se ha sostenido y aplicado por la Corte en casos análgos al presente.

Por tanto, de acuerdo con la opinión emitida en este juicio por el señor Procurador general de la Nación, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que los demandantes Eléazar y José Antonio López no tienen derecho al goce de pensión ó recompensa alguna del Tesoro nacional, por la muerte de su padre Jenaro López, ocasionada por una herida que recibió en una lucha electoral, ni por los servicios que el último prestó á la República sosteniendo al Gobierno de la Confederación Granadina.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintitrés de Marzo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: En la reclamación establecida por Benjamín Novoa Zerda, á nombre de José Trinidad Moreno, por diez mil doscientos pesos ($ 10,200), procedentes de suministros constantes en un documento que contiene el contrato celebrado entre el Intendente del Ejército del Norte y el citado Moreno, en mil ochocientos ochenta y cinco, en la ciudad de Tunja, la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, dictó sentencia en veinticinco (25) de Junio de mil ochocientos noventa y dos, reconociendo á favor de Moreno la suma de nueve mil quinientos pesos ($ 9,500), de la cual correspondía por cesión la décima parte á Benjamín Novoa Zerda, y absolvió al Tesoro del resto del cargo.

El Ministerio del Tesoro, por resolución de treinta y uno de Diciembre del mismo año, reconoció en contra de la Nación la cantidad de diez mil doscientos pesos ($ 10,200); y como el crédito se había subdividido, por virtud de cesiones, el Ministerio lo distribuyó así:

A favor de Moreno	$ 4,300
A favor de Novoa Zerda	1,200
A favor de Misael Solano	4,700
Suma	$ 10,200

Notificada esta resolución á Moreno y á Solano, manifestaron que se conformaban con ella; pero Novoa Zerda expresó que la aceptaba sólo en cuanto al reconocimiento que hace de diez mil doscientos pesos ($ 10,200), por valor principal de la obligación, pero que apelaba de ella, en la parte que es desfavorable, por no haberse reconocido los intereses expresamente estipulados en el contrato.

La Comisión, procediendo de un modo irregular, sobre lo cual le llama la Corte la atención, ordenó compulsar copia de las resoluciones respectivas para hacer efectivo el cobro de lo reconocido por el Ministerio del Tesoro, y concedió la apelación interpuesta por Novoa Zerda para ante esta Corte.

Y se dice que es irregular el procedimiento de la Comisión, porque no es permitido proceder á la ejecución de una sentencia cuando no ha terminado aún el juicio por sentencia definitiva, por haber un recurso pendiente. Si la Corte anulase la actuación, en virtud de jurisdicción que no puede disputársele, los efectos de su determinación serían poco menos que ineficaces por causa de la festinada ejecución ordenada por el miembro de la Comisión de suministros, á cuyo cargo estuvo la sustanciación del asunto.

Respecto á la materia del recurso, la Corte observa que la única prueba de la reclamación es la copia del documento que se dice otorgado entre el Intendente del Ejército del Norte, Julio A. Corredor, y José Trinidad Moreno, en tres de Marzo de mil ochocientos ochenta y cinco (1885). Esta copia no puede considerarse como documento auténtico, porque no tiene fecha y se ignora, por consiguiente, si cuando Corredor la expidió conservaba aún el carácter de Intendente y las copias de documentos públicos deben ser expedidos por los empleados públicos, á cuyo cargo estén los originales.

El documento original no ha sido agregado á los autos, y se encontraba en poder de Corredor mucho tiempo después de que había dejado de ser Intendente del Ejército del Norte, cuando hubo necesidad de examinarlo en un sumario que se instruyó con el fin de averiguar si se había cometido alguna falsedad, porque en la copia aparece que la fecha del contrato es de tres (3) de Mayo de mil ochocientos ochenta y cinco (1885), época en la cual no estaban en Tunja ni el Intendente ni Moreno ni los peritos que figuran en el documento, y en el original que conserva Corredor, la fecha de tres de Marzo del mismo año.

Por otra parte, se ha tratado de justificar por otros medios la realidad de los suministros que reza el documento y de su distribución en el Ejército, y no ha sido posible obtener una justificación satisfactoria en ese particular, á pesar de haber estado sometido el asunto á una investigación criminal.

Si pues, la reclamación no tiene fundamento en un documento auténtico y digno de crédito, á juicio de la Corte, no ha debido reconocerse ni aun la suma principal de que en él se habla, con razón mucho mayor debe ser negado el cargo por los intereses que son objeto de este recurso, aun dado caso que fuera legal el reconocimiento de intereses en demandas de esta clase.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la resolución apelada, en la parte que es objeto de este recurso.

Déjese copia de esta resolución, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS. M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veinticuatro de Marzo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: El apoderado de Prudencio Cantillo, vecino de Cartagena, apeló para ante esta Corte de la resolución dictada por el Ministerio del Tesoro en veinticuatro de Diciembre de mil ochocientos noventa y dos, confirmatoria de la proferida por la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones en diez y ocho de Octubre del mismo año, por la que fué absuelto el Tesoro nacional del cargo de doscientos pesos ($ 200), valor de la raparación de una canoa, que durante el sitio de Cartagena, en mil ochocientos ochenta y cinco, fué inutilizada, según afirma, por orden del Alcalde de esa ciudad.

La resolución de la Comisión analiza una á una las declaraciones aducidas para acreditar la reclamación, y demuestra que no está comprobado que la canoa fuera inutilizada por orden del Alcalde, y el deterioro que sufrió esa embarcación fué ocasionado por el abandono en que hubo de quedar durante el sitio.

Y como la República no ha reconocido créditos por daños ó pérdidas de esta clase, esa determinación y la que la confirma, son justas.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, aprueba la resolución apelada.

Déjese copia de esta resolución, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veinticuatro de Marzo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Ramón Ruiz ha propuesto demanda, por medio de apoderado, para que se le conceda del Tesoro nacional, de acuerdo con la Ley 84 de 1890, recompensa militar unitaria igual al monto del sueldo de Cabo 1.° en cuatro años, por razón de invalidez absoluta contraída en servicio del Gobierno de la Confederación Granadina, en el año de 1862.

Perfeccionado el expediente en virtud de varios autos para mejor proveer dictados por esta Superioridad, se procede á fallar.

En autos se encuentra lo siguiente:

1.° La diligencia original auténtica del reconocimiento de la persona del demandante, practicada por los profesores de medicina Modesto Guerrero, Tomás Uribe y Rafael Diago, que dijeron haberle hallado una herida de bala en la pierna derecha que, á pesar de su vejez, está en supuración y lo incapacita para poder trabajar como antes;

2.° Declaraciones contestes, recibidas con todas las formalidades legales, de cinco testigos presenciales é idóneos, que afirman haber visto á Ramón Ruiz, el mismo que figura actualmente como demandante, combatir con el cargo de Cabo 1.° del *Batallón Arboleda*, de las fuerzas legitimistas que lucharon en la batalla de "Los-Cristales," que tuvo lugar en las inmediaciones de la ciudad de Cali, en el año de mil ochocientos sesenta y dos, y recibió allí en la pierna derecha la herida de bala, y

3.° Un certificado del Ministerio del Tesoro, en que aparece que el reclamante no ha recibido de la Nación recompensa ni pensión alguna.

Aunque los médicos declaran que la invalidez de Ruiz es de por vida, no se puede considerar, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 84 antes mencionada, como absoluta, por no haber quedado mutilado de la pierna, y por lo mismo no hay lugar á concederle sino la mitad de lo que pide.

En mérito de lo expuesto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el concepto del señor Procurador y con lo que dicen los artículos 1.°, 5.° (ordinal 8.°), 9.°, 11 y 19 de la Ley 84 de 1890, concede del Tesoro nacional á Ramón Ruiz, vecino del Distrito municipal de Roldanillo, en el Departamento del Cauca, la recompensa militar unitaria de trescientos ochenta y cuatro pesos ($ 384), suma igual al monto del sueldo de Cabo 1.° en dos años.

Notifíquese, cópiese, dése cuenta al Ministerio del Tesoro y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BO-

TERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Abril catorce de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Demetrio Hurtado, vecino del Distrito de Silvia, en el Departamento del Cauca, reclama del Tesoro nacional, el pago de la suma de mil novecientos siete pesos ($ 1,907), valor de ganados y caballerías que dice le fueron expropiados por los rebeldes en jurisdicción del mismo Distrito de Silvia, en dos potreros llamados "Las-Delicias" y de "Cruz Ullumé," en los días primero y quince de Enero de mil ochocientos ochenta y cinco. Tanto la Comisión de suministros, en su resolución número 239, de diez y nueve de Octubre de mil ochocientos noventa y dos, como el Ministerio del Tesoro en la suya, número 3,390, de diez y seis de Diciembre siguiente, y ambos, de acuerdo con el dictamen del Fiscal de la Comisión, han rechazado unánimemente la reclamación, porque estando fundada sólo en informaciones de nudo hecho, ninguno de los hechos en que pretende apoyarse, ha podido reunir á su favor la declaración de tres testigos idóneos y contestes que den razón de su dicho, como lo requiere para reconocer el derecho del reclamante el ordinal tercero del artículo 2.° de la Ley 44 de 1886.

La Comisión de suministros hizo un detenido examen de aquellas declaraciones, que condensó así:

"De las declaraciones que se han examinado, resulta que las expropiaciones que se reclaman fueron llevadas á cabo en dos sitios distintos 'Las-Delicias' y el potrero de 'Cruz Ullumé.'

"Respecto de los bienes tomados en el sitio de 'Las-Delicias,' sólo la declaración de José Antonio Fernández es categórica á pesar de no ser satisfactoria la razón de su dicho.

"Antonio Ramos no expresa cómo le constan los hechos sobre que declara, y Custodio Tombé no puede determinar ni el número ni el precio de los animales que fueron expropiados del sitio indicado.

"Las expropiaciones verificadas en el potrero de 'Ullumé' están fundadas en el dicho de Daniel Velasco, que por estar escondido y por la manera misma con que se expresa, no da el convencimiento del número de semovientes de que realmente se compusiera la expropiación, y en la exposición de José María Tuminá, que no asevera terminantemente haber visto la expropiación, ni se encontró en capacidad de hacer la estimación de los animales á que se refiere.

"No existe, pues, la prueba suficiente al tenor del ordinal 3.° del artículo 2.° de la Ley 44 de 1886 para que pudiera decretarse el reconocimiento de ninguna de las dos partidas.

"El apoderado del reclamante, en el memorial de fojas 34 vuelta, estableciendo, confusión entre las expropiaciones hechas en los dos sitios que se han indicado, redujo la pretensión de su poderdante al reconocimiento del valor de 24 reses, dos caballos y una mula.

"Al hacer el examen de las pruebas y establecer la diferencia de los hechos que pasaron en dos distintas localidades, queda desvanecido el error en que incurre el interesado, pretendiendo que las declaraciones que se refieren á lo que pasó en 'Las-Delicias' sean consideradas como referentes á lo que se expropió en el potrero de 'Ullumé.'"

Y como en esta instancia ninguna nueva prueba se ha producido por parte del reclamante para robustecer su derecho, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la resolución apelada número 3,390, de diez y seis de Diciembre de mil ochocientos noventa y dos, dictada por el Ministerio del Tesoro en este asunto.

Notifíquese, cópiese, y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO. *Gabriel Rosas*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, cinco de Abril de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: El veintiséis de Marzo de mil ochocientos noventa y dos, el soldado Buenaventura Caicedo, de la cuarta Compañía del *Batallón Sucre número* 11, de facción en el campamento de "El-Papayo," á inmediaciones de la ciudad de Ibagué, custodiando los presos que allí trabajaban en la construcción de una carretera, dió muerte violenta y alevosa, disparándole el remington por la espalda y á quema-ropa, al soldado del mismo Cuerpo Cándido Gómez, quien murió de la herida pocos momentos después. El pretexto, que ni motivo puede llamarse de este alevoso crimen, según resulta plenamente comprobado en el proceso, fué el haber reconvenido Gómez á Caicedo, en términos moderados, sin inferirle ultraje alguno, porque el último estuviera, como en efecto estaba, pidiéndoles de su comida á los presos, y por haber agregado Gómez, á su justa improbación, la amenaza de que pondría el hecho en conocimiento del Sargento de la guardia.

Dado al delito el carácter de delito militar, y perfeccionado el sumario con el reconocimiento del occiso, las declaraciones contestes de los testigos presenciales, y la propia explícita confesión del agresor, éste fué llamado á juicio por el Comandante del *Batallón Sucre número* 11, por auto de cuatro de Abril de 1892 (folio 13, vuelto), por el delito de homicidio definido en el título 1.°, capítulo 1.°, libro 3.° del Código Penal común; y seguido el juicio por todos sus trámites, conforme al Código Militar, el Consejo de Guerra ordinario, convocado para fallar la causa, pronunció su sentencia de 1.° de Junio de 1892, folios 55 á 57, condenando al reo por el delito de homicidio voluntario, calificado en grado máximo, á sufrir la pena de doce años de presidio en el Panóptico de Bogotá, todo de acuerdo, dice la sentencia, con los artículos 587 (inciso 6.°), 600 y 56 del Código Penal común.

Consultada esta sentencia con la Corte Suprema, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1509 del Código Militar, la Corte, en conformidad en parte con el dictamen del señor Procurador general de la Nación, corriente de folios 12 á 13 de esta actuación, advirtiendo que se había incurrido en las informalidades sustanciales que determina el inciso 2.°, artículo 1536 del Código Militar, tanto por no haberse hecho al defensor del reo la notificación del auto de enjuiciamiento, como por haberse hecho al reo, que es menor de edad, la notificación del auto en que se dispone convocar el Consejo de Guerra, sin asistencia de su curador *ad litem*, la Corte, por sentencia interlocutoria de veintisiete de Octubre de 1892, folios 16 á 19, declaró nulo lo actuado con posterioridad al seis de Abril de 1892, y mandó reponer el proceso al estado de notificar al reo el auto de enjuiciamiento, con cuya diligencia debía principiar la reposición de la causa.

Aunque el señor Procurador general, en el dictamen antes aludido, indicó que tal vez el proceso adolecía de nulidad absoluta por falta de jurisdicción en la autoridad militar que la había seguido, porque acaso no debía haberse calificado de delito militar el homicidio de Gómez, por haberse éste originado de una querella ú ofensa puramente personal, y no por infracción de las leyes, ó de la disciplina militar con ocasión del servicio, la Corte hubo de abstenerse de declarar tal nulidad, respetando el tenor literal del artículo 1365 del Código Militar que dice: "Son delitos militares los que se cometen con infracción de las leyes militares en asuntos del servicio ó dentro del cuartel."

Subsanadas las informalidades advertidas por la Corte, un segundo Consejo de Guerra ordinario, reunido en la ciudad de Ibagué el veintiocho de Diciembre último, volvió á pronunciar sentencia, folios 38 á 39, condenando al reo á sólo nueve años de presidio por el delito de homicidio simplemente, voluntario, definido en el inciso 6.°, artículo 587 del Código Penal, previa calificación de la delincuencia en segundo grado.

Y es ésta la última sentencia que ha venido en consulta de revisión á esta Superioridad.

Surtida la instancia con audiencia del Procurador general y del defensor de oficio nombrado al reo, doctor Domingo Zaldúa, éste, en su prolijo escrito de folios 5 á 6, alega como nulidades del proceso, dos cosas: 1.ª que conforme al artícu

31 del Código Penal, su defendido no ha podido ser condenado á la pena de presidio, porque aquel artículo dispone que si un menor de doce años y mayor de siete comete un delito, se le ponga en una casa de reclusión hasta la época en que cumpla diez y ocho años de edad; pero como á falta de la partida de bautismo que no pudo ser hallada, según consta de la certificación expedida por el Cura párroco de Chiquinquirá, folio 37, existe la prueba supletoria de la filiación del reo, folio 7, de la cual aparece que éste tenía once años cumplidos el día catorce de Octubre de 1890, diez y ocho meses antes de la perpetración del crimen cometido el veintiséis de Marzo de 1892, es claro que el procesado está fuera de la disposición del artículo 31 antes citado; y 2.ª que siendo, afirma, menor de diez y seis años cuando cometió el delito, el Presidente del Consejo debió haber propuesto á los Vocales, y no la propuso, la pregunta final que ordena el artículo 1498 del Código Militar, en estos términos:

"¿El acusado ha cometido el delito con discernimiento?

De esta omisión deduce el defensor que se ha incurrido en la 5.ª de las informalidades sustanciales que vician el proceso, conforme al artículo 1536 del Código Militar, consistente en haber hecho una errónea aplicación de la pena legal, porque, dice, si el Consejo la hubiera contestado negativamente, el procesado habría sido absuelto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1500 del Código militar, á lo cual contesta la Corte: 1.° que los defectos ó informalidades del cuestionario sometido al Consejo, no están enumerados entre las informalidades sustanciales que vician el proceso, y 2.° que el reo, de acuerdo con su filiación, en la confesión que rindió con asistencia de su curador *ad litem*, el diez y ocho de Abril de 1892, folio 17 vuelto, veintidós días después de la comisión del delito, dijo ser mayor de diez y seis años.

Por el contrario, tiene la Corte que hacer notar que, dada la alevosía del homicidio cometido á traición y á mansalva en la persona del desgraciado Gómez, las autoridades militares que han intervenido en la formación de esta causa, lo han tratado con demasiada lenidad, calificando *a priori* el delito, que revestía muchas de las circunstancias del asesinato, de homicidio simplemente voluntario y graduándolo después de esta calificación en segundo grado de criminalidad.

Pero como la Corte carece de potestad conforme al artículo 413 de la Ley 105 de 1890, para variar la calificación hecha por el Consejo de Guerra, así respecto de la culpabilidad como de la inocencia del acusado, debiendo contraer el examen del proceso á las causales de nulidad señaladas en los artículos 1534, 1535 y 1536 del Código Militar; subsanadas las que se advirtieron, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma en todas sus partes la sentencia consultada, proferida por el Consejo de Guerra ordinario el veintiocho de Diciembre de 1892 contra el soldado Buenaventura Caicedo, del *Batallón 11 de Sucre*, por el delito de homicidio, perpetrado en la persona del soldado del mismo Cuerpo, Cándido Gómez.

Notifíquese, cópiese, devuélvase el expediente á la Comandancia en Jefe del Ejército para su cumplimiento, y publíquese en la *Gaceta Judicial*.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Crte Suprema de Justicia.—Bogotá, Marzo veinticuatro de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Ha venido á esta Superioridad, por recurso de apelación interpuesto por Juan B. Quintero, como apoderado de Honorato Espinosa, la sentencia interlocutoria que profirió el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, con fecha siete de Febrero del corriente año, en el juicio sumario de obra nueva, instaurado á nombre de dicho Espinosa, contra el Gobierno nacional, por los perjuicios que se le ha ocasionado en un predio de su propiedad, la construcción de una estacada en la ribera occidental del río San Francisco de esta ciudad, á inmediaciones del puente que recientemente se ha construído con el nombre de puente Núñez; y del auto que el mismo Tribual profirió á petición de los peritos agrimensores que asistieron al acto de la inspección ocular, en el cual consideró equitativa la estimación de sus honorarios, en la suma de treinta pesos ($ 30).

Resulta del expediente que habiéndose apreciado por la parte querellante el perjuicio que dice haber sufrido con la construcción de dicha estacada, en dos mil quinientos pesos ($ 2,500), el Tribunal de Cundinamarca fué competente para conocer y decidir la denuncia, conforme á lo dispuesto en los artículos 73 (ordinal 2.°), Ley 147 de 1888, y 12 (ordinal 1.° de la Ley 72 de 1890), y por consiguiente, previa la sustanciación del caso, la Corte procede á dictar el fallo de su incumbencia.

Consta que la querella ó demanda de Honorato Espinosa se ajustó á los trámites prescritos en los artículos correspondientes del Código Judicial, que versan sobre la denuncia de obra nueva, y que el querellante presentó con la demanda los documentos que determina el artículo 1338, á saber: la copia de la escritura, debidamente registrada, en la cual aparece acreditada la propiedad del terreno que se dice perjudicado con la estacada; una copia certificada, expedida por el Juez y el Secretario del Juzgado 3.° del Circuito de Bogotá, de la diligencia del remate que Honorato Espinosa, hizo de un lote que se vendió en la ejecución seguida contra Silvestre Torres; y una información sumaria, con la cual trata de acreditar el querellante el perjuicio que ha sufrido con la desmembración de una parte de su terreno.

El Tribunal, como lo prescribe el artículo 1339 del referido Código, nombró peritos á Rodrigo González y Diodoro Sánchez, y previo el juramento que les exigió de desempeñar bien y fielmente su encargo, se trasladó al paraje en que aparece construída la estacada, que es materia de la acción.

Cerciorado el Tribunal de la identidad del predio de propiedad de Espinosa y de que la obra nueva fué construída por orden y á expensas del Gobierno nacional, según lo que aparece de la relación publicada en el *Diario Oficial* de 12 de Julio de 1892, número 8,858, suscrita por el Inspector general de Obras públicas, el Tribunal, fundado especialmente en el dictamen de los peritos, declaró inadmisible la demanda y absolvió al Gobierno de ella.

Corresponde, pues, á la Corte examinar si el fallo apelado ha sido arreglado á las disposiciones pertinentes al caso, y para ello considera:

De la diligencia de inspección ocular se deduce que el lugar en que está construída la estacada, fué examinado cuidadosamente, porque en la expresada diligencia se dice que trasladados el Magistrado sustanciador, los peritos nombrados, los interesados y el Secretario, al extremo occidental de la Calle 9.ª á un predio adyacente al extremo oriental del puente Núñez, lugar donde debía practicarse la inspección, se observó: que el río San Francisco pasa por el pie y extremo occidental del predio, en una extensión de unos cincuenta (50) metros en dirección general Norte-Sur; que en la banda del río opuesta al citado predio, ó sea la derecha del río, se hallan dos estacadas de puntas de varas gruesas, que empiezan á unas pocas varas abajo del puente Núñez. Estándose practicando la inspección se observó que dos peones que conducían carros tirados por caballos arrojaban contra las estacadas tierra que traían en los carros. Interrogados esos peones de dónde llevaban esa tierra y por orden de quién la arrojaban allí, contestaron que la llevaban del Capitolio y por orden de un señor Olea, Sobrestante de los peones que trabajaban por cuenta del Gobierno, en el mismo Capitolio. Observóse, además, que en el extremo Noroeste del predio de Espinosa, desemboca la alcantarilla de la Calle 9.ª, cerca al estribo oriental del puente Núñez, la cual vierte sus aguas, en el río expresado. Al Sur del punto donde desemboca la alcantarilla se observa que hay un cauce seco y que las pocas aguas que lleva el río toman por otro que parece ser el antiguo y que se carga hacia la margen occidental del río, pasando por el pie de las estacadas de que se ha hecho mención; los dos hechos de que se ha hablado están separados por un

islote natural, en el cual se alcanzan á ver raíces de árboles que parecen haber formado en otro tiempo hilera continuada con otros cuyos troncos recortados se ven al extremo Sur del citado predio, y parece que ellos anteriormente hubieran servido de límite al mismo, por el lado que toca con la banda oriental del río. Se notó igualmente que cuando ha llevado agua el cauce oriental de que se ha hablado, ha arrastrado el suelo de unas habitaciones que hay en el citado predio y que á causa de esto dichas habitaciones se encontraron derruídas en parte.

En este estado el Magistrado del Tribunal interrogó á los peritos "sobre si en su concepto existe en el predio el daño que motiva la demanda, y en caso afirmativo cuál sea la causa de él," y expusieron de común acuerdo. "En el predio objeto de la inspección existe un daño causado por las aguas del río San Francisco, que consiste en que éstas han formado un lecho reciente como de seis metros de ancho y cuarenta de longitud; este lecho es motivo de que unas casas antiguas adyacentes se hallen en estado ruinoso por falta de cimiento necesario. En cuanto al motivo del desvío de las aguas ó formación del nuevo lecho opinamos que puede atribuírse á las fuertes avenidas del río San Francisco, á la mala calidad del terreno en esa parte, ó á la mala disposición de la boca de la alcantarilla de la Calle 9.ª que arroja abundantes aguas en tiempo de invierno, ó á la acción simultánea y combinada de las causas expresadas."

El mismo Magistrado preguntó de nuevo á los peritos "sobre la influencia que haya tenido la construcción del puente Núñez con respecto á la dirección de las aguas del río San Francisco y al daño causado en el predio á que la inspección se refiere," y éstos expusieron: "Aunque éste es un punto que requiere estudio detenido para resolverlo acertadamente, conceptuamos, basados en los datos recogidos en la inspección de hoy á simple vista, que el puente de que se trata no ha sido motivo de daño ó variación del curso de las aguas del río San Francisco."

En este estado el Magistrado del Tribunal de Cundinamarca impartió su aprobación al dictamen pericial, en cuanto há lugar en derecho.

De la actuación aparece que los interesados fueron citados personalmente antes de darse principio á la diligencia de inspección ocular, y que á ésta no asistió el Fiscal del Tribunal del Distrito.

Como de las pruebas presentadas por el actor ó querellante y del dictamen unánime de los peritos no se dedujo que la obra nueva denunciada causara realmente daño en el predio perteneciente en propiedad á Honorato Espinosa, el Tribunal Superior de Cundinamarca, por providencia que dictó en siete de Febrero del año en curso, declaró inadmisible la querella ó demanda de obra nueva propuesta por parte de dicho Espinosa, y absolvió á la Nación de la misma demanda.

Contra tal providencia presentó Juan B. Quintero, quien de antemano había sido reconocido como apoderado especial, un escrito firmado por el poderdante, en el cual se interpusieron dos recursos, esto es: el de revocación del fallo que declaró inadmisible la demanda y del auto que aprobó la tasación de los honorarios devengados por los peritos, y subsidiariamente el de apelación de ambas providencias.

El primer recurso con relación al fallo principal lo fundó el querellante en pruebas que adujo con posterioridad á la presentación de la demanda y á la inspección ocular, para infirmar el dictamen pericial; y el Tribunal resolvió desechar las mencionadas pruebas por dos razones que, en sentir de la Corte, son concluyentes y perentorias, á saber: la primera, porque conforme al Código Judicial el que intenta la acción ó querella de obra nueva debe presentarla al Juez con todos los documentos ó pruebas que juzgue necesarias para que en la inspección puedan los peritos estimarlas debidamente y asegurar á ciencia cierta si la obra que se está construyendo ó ha sido recientemente construída, ha causado ó causará el daño de que se queja el propietario demandante; y la segunda, porque tratando las nuevas pruebas presentadas por la parte demandante, de hechos diversos y aun contrarios á los hechos sobre los cuales versan las pruebas primeramente presentadas, no habría podido la decisión judicial que se dictó contraerse á las que no se tuvieron á la vista para dictarla.

En cuanto á la solicitud de revocación del auto que aprobó la estimación pericial, el Tribunal fué de concepto que atendiendo el tiempo empleado en la inspección y la calidad de los peritos, no podía considerarse la suma de treinta pesos ($ 30) como exagerada. Concedió, pues, el Tribunal en ambos efectos, el recurso de apelación interpuesto, como arriba queda dicho.

Y como la Corte no tiene más objeción que hacer á las providencias materia de la alzada, sino á la de que se absuelve á la Nación de la demanda propuesta por Honorato Espinosa, al mismo tiempo que declaró inadmisible la demanda, cosas que sin duda son incompatibles, porque la última indica que no se ocupa el Tribunal en discriminar los pormenores de un debate jurídico, y la primera, que implica la emisión de un juicio adverso al demandante y favorable al demandado, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la sentencia interlocutoria de siete (7) de Febrero de mil ochocientos noventa y tres (1893), en cuanto declara inadmisible la demanda, é igualmente confirma el auto de la misma fecha, en el cual estima equitativa la suma total de los honorarios devengados por los peritos, y revoca la parte de aquella sentencia por la cual se absuelve á la Nación, porque de suya queda absuelta con la inadmisión de la demanda.

Notifíquese, déjese copia, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Abril siete de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: La Gobernación del Departamento de Panamá, por resolución número 38, de veintiocho de Febrero de mil ochocientos noventa y uno, concedió permiso á Henry Garnier para explotar los bosques nacionales situados en jurisdicción de los Distritos municipales de Gorgona y Emperador, en una extensión de cinco mil hectáreas, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el capítulo 6.° de la Recopilación de leyes sobre tierras baldías; y, en consecuencia, de tal permiso y con el fin de llevar á cabo la explotación de los bosques, se constituyó en la ciudad de Panamá, una Sociedad civil, colectiva, nombrada "Sociedad explotadora de los bosques del Alto Chilibre," como consta de la escritura pública otorgada con el número 139 en veintinueve de Mayo de mil ochocientos noventa y uno, ante el Notario 2.° del Circuito de Panamá.

Con copia de la referida escritura, debidamente registrada, y con el plano del terreno de que trata el permiso gubernativo, Mauricio Brochet, con el carácter de Administrador de la Sociedad explotadora de los bosques del "Alto Chilibre," ante el Juez 2.° del Circuito en lo civil de Panamá, en quince de Julio de mil ochocientos noventa y uno, entabló demanda de deslinde y amojonamiento de los expresados terrenos ó bosques, para que conforme á las disposiciones prescritas para el caso en el Código Judicial, se determine en el mismo terreno la extensión y linderos del área de terreno del cual se cree con derecho el demandante, á nombre y en representación de la Compañía expresada, de verificar la explotación.

El Juez 2.° del Circuito de Panamá, en auto de fecha veintiuno de Julio de mil ochocientos noventa y uno, admitió la demanda especial de deslinde y amojonamiento del terreno, según lo que determina el artículo 1307 del Código Judicial, y dispuso que se corriera traslado de ella, por tres días á cada uno de los interesados. En cumplimiento de la mencionada providencia, el Secretario del Juzgado la notificó personalmente á Mauricio Brochet, al Fiscal del Circuito y á los representantes de las Sociedades Eidangue & Sons y Román & Compañía.

Contestóse el traslado por el referido Fiscal, quien manifestó que se oponía al deslinde y amojonamiento de los susodichos terrenos baldíos, así porque la Gobernación departamental sólo había concedido el permiso de explotarlos á Hen-

ry Garnier, como porque la Sociedad civil colectiva á cuyo nombre se instauró la acción, no tiene derecho á ejercitar ésta por no ser propietaria ni usufructuaria de los bosques, según lo que establece el artículo 1304 del Código Judicial.

La oposición hecha por el Fiscal al deslinde se sustanció como excepción dilatoria, y decidió con fecha tres de Agosto del citado año de mil ochocientos noventa y uno, en el sentido de considerarla infundada, y de esta resolución no se interpuso recurso alguno.

Seguidamente se corrieron los traslados de la demanda á los demás interesados, y éstos manifestaron que no tenían inconveniente en que se llevase á efecto el deslinde y amojonamiento solicitados.

En este estado, Angélica y Josefina Girón, vecinas de Matachín, Departamento de Panamá, ocurrieron, por escrito de siete de Agosto de mil ochocientos noventa y uno, manifestando al Juez del conocimiento, que tenían noticia del deslinde que se iba á practicar en los terrenos pertenecientes á la hacienda denominada "Chilibre," que son de la propiedad de las expresadas Girones, y por lo mismo, pidieron que se las citase para hacer valer sus derechos como propietarias ó colindantes, y para este fin, facultaban á Ildefonso Mecías Villanueva para que las representase en el acto del deslinde. Verificóse éste el día diez de Agosto de mil ochocientos noventa y uno, con la asistencia de los peritos nombrados y juramentados Felipe Rivera, Augusto Clement y Ricardo Piatti, y con vista de la resolución de la Gobernación de Panamá, en que se concede el permiso á Henry Garnier para hacer la explotación de los terrenos y del plano ó croquis presentado con la demanda, se llevó á cabo el amojonamiento pedido. Como se hubiese hallado presente Ildefonso Mecías Villanueva, apoderado de Angélica y Josefina Girón, pidió que se consignase en el acta la siguiente protesta: "que el sitio en que está constituído el Juzgado en asocio de los peritos arriba nombrados, que es el punto donde la quebrada Honda, brazo del Peñoncito, derrama sus aguas en el río Chilibre, elegido por los peritos para principiar la medición del lote de terreno que el señor Mauricio Brochet hace figurar en el plano que tiene acompañado á la demanda de deslinde con el lote concedido por el Gobierno al señor Henry Garnier para su explotación, es parte integrante de la hacienda de sus representadas, lo mismo que todo el lote de terreno que actualmente ocupa el dicho señor Brochet con sus trabajos de explotación."

Terminadas las diligencias de deslinde y amojonamiento de dicho terreno, se dió traslado de ellas á los interesados, y éstos lo contestaron sin hacer objeción alguna, inclusive el Fiscal, no obstante que al principio del juicio manifestó que se oponía al deslinde, porque el permiso otorgado por la Gobernación se dió á Henry Garnier, y no á la Sociedad explotadora de los bosques de "Chilibre," la cual en su concepto no es propietaria ni usufructuaria de los terrenos.

Una vez que los interesados aceptaron el deslinde y amojonamiento de los terrenos, el Juzgado señaló día para dar la posesión de ellos; pero como posteriormente se advirtiese que la Nación tenía interés en el asunto si se consideraban baldíos dichos terrenos, porque con esa calidad dió la Gobernación de Panamá el permiso para explotarlos, y además se dice que los indicados terrenos colindan con otras tierras baldías, el Juez que conocía del juicio se declaró incompetente para seguir interviniendo en él. Las partes, exceptuada la que representa á las Girones, manifestaron que ratificaban lo actuado, porque comprendieron que el Juez carecía de jurisdicción para conocer en primera instancia del juicio, y como según el artículo 133 de la Ley 105 de 1890, los Agentes del Ministerio Público no pueden hacer la misma ratificación, pidieron que el Juez declarara que había utilidad evidente en que siguiera conociendo del mismo asunto. Con este motivo el citado *Juez 2.° del Circuito de* Panamá, en veintidós de Marzo de mil ochocientos noventa y dos (folio 49 vuelto), dictó el auto siguiente:

"Juzgado del Circuito en lo Civil.—Panamá, Marzo veintidós de mil ochocientos noventa y dos.

"Como el deslinde á que se contrae el anterior memorial es del terreno perteneciente á la Nación que le fué concedido por el Gobierno para su explotación á Henry Garnier, considera el suscrito Juez que hay utilidad evidente en que sea ratificado lo actuado en ese deslinde por el Ministerio Público, á fin de evitar la práctica de una nueva diligencia, toda vez que en las presentes se llenaron las formalidades de la ley. En consecuencia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridadad la ley, así se declara y se dispone correr traslado de la solicitud que antecede al señor Fiscal del Circuito."

Notificadas las partes, el apoderado de Angélica y Josefina Girón, pidió que se declarase la nulidad del juicio de deslinde, por no ratificar lo actuado, y que si no se dictaba esta providencia, se le concediese apelación para ante el respectivo Superior.

Por auto de dos de Abril de mil ochocientos noventa y dos (folio 52 vuelto), el Juez no accedió á lo primero y concedió al apelante el recurso que había interpuesto, por lo cual remitió el proceso al Tribunal Superior de Panamá.

El Tribunal, después de sustanciado el recurso, decidió que por cuanto no era conocida la cuantía del pleito, no podía conocer de la apelación, y dispuso devolver el expediente á la Oficina de su origen. Esta resolución fué reclamada por Ildefonso Mecías Villanueva, para que se revocase por razones que adujo en escrito de ocho de Julio de mil ochocientos noventa y dos (fojas 58 á 60), mas el Tribunal no accedió á la revocación.

Recibido el expediente por el Juez *a quo*, ordenó que por cuanto el Tribunal se había declarado incompetente para conocer de la apelación, se enviase á este Supremo Tribunal para los efectos legales; y en virtud de esta determinación el expediente se ha recibido en la Corte, repartido y sustanciado por los trámites prefijados; siendo, por tanto, dicha determinación una de las providencias que le han sido sometidas.

Lo expuesto es la historia suscinta del juicio de deslinde y amojonamiento del terreno nombrado "Alto Chilibre," pero como se introdujo en él otro juicio de contradicción iniciado por Ildefonso Mecías Villanueva, como apoderado de Angélica y Josefina Girón, es menester averiguar igualmente qué providencias aparecen dictadas en dicho juicio contradictorio respecto de las cuales se hubiese concedido también el recurso de apelación.

En efecto, tres autos fueron proferidos por el Juez que conoce del juicio contradictorio de deslinde y amojonamiento practicado en los terrenos del "Alto Chilibre" y de la demanda misma de deslinde, á saber:

El primero, que lleva la fecha de veinticuatro de Octubre de mil ochocientos noventa y uno, corriente de foja 52 vuelta á 53, por el cual se declaró infundada la excepción dilatoria de inepta demanda, propuesta por el señor Francisco Ardila, en su calidad de apoderado del Administrador de la Sociedad explotadora de los terrenos del "Alto Chilibre" y dispuso que se contestase ésta dentro de veinticuatro horas. Pero el mismo apelante desistió del recurso de apelación por medio del escrito de foja 54;

El segundo, que está fechado á treinta de Noviembre del citado año (foja 65), por el cual se resolvió que la parte demandante en el juicio contradictorio expresado, no está obligada á prestar fianza de costas, y que fué apelado directamente por Mauricio Brochet, no aparece resuelto en ningún sentido, ni el que interpuso recurso hizo menor gestión con posterioridad, para que se determinara lo conveniente;

Y el tercero (folio 79), que se dictó en diez y ocho de Marzo del año próximo pasado, por el cual se declaró incompetente el referido Juez del conocimiento por falta de jurisdicción, en atención á que el asunto que se ventila vale más de mil pesos, y dispuso que se pusiese esta causal de nulidad de lo actuado en conocimiento de las partes, y verificado esto Ildefonso Mecías Villanueva, apoderado de Angélica y Josefina Girón, pidió al Juez que declarase la nulidad, y así se decretó en providencia de veintiocho de Marzo de mil ochocientos noventa y dos (fojas 80 vuelta y 81), aunque no reconociendo en dicho apoderado personería para pedir la nulidad del juicio principal, ó sea del deslinde y amojonamiento del terreno; y con tal motivo este apoderado interpuso apelación, que le fué otorgada para ante el Tribunal, el cual se abstuvo de conocer del recurso por las razones yá

expresadas; esto es, por estar interesada la Nación en un asunto cuya cuantía excede de mil pesos.

Esto dió lugar á que el Juez de primera instancia resolviese enviar, como ha enviado á la Corte, el expediente relativo al juicio de contradicción.

Hecha relación de lo actuado en el juicio contradictorio del deslinde y amojamiento de los terrenos, la Corte, previa la sustanciación correspondiente, procede á determinar lo que considera legal.

Dos providencias han sido sometidas al examen de la Corte; la una dictada en el juicio de deslinde con fecha veintidós de Marzo de mil ochocientos noventa y dos (folio 49 vuelto), según la cual el Juez del conocimiento declaró que había utilidad evidente en que el representante del Ministerio Público ratificase lo actuado, y la otra, en el juicio contradictorio que tiene la fecha diez y ocho de Marzo del año próximo pasado (fojas 79), en la que también se declaró dicho Juez sin jurisdicción por exceder la cuantía de mil pesos.

En el estado en que se encuentran ambos juicios, la Corte tiene necesidad de examinar si ella tiene jurisdicción para conocer y decidir los recursos interpuestos contra ambas providencias, y del estudio que ha hecho de ambos negocios, comprende que nada puede determinar en el fondo. Es cierto que la Corte Suprema es la competente para conocer en segunda instancia de los recursos de apelación que se interpongan contra las providencias que, ora el Juez de primera instancia, ora el Tribunal Superior respectivo dicten en los juicios ordinarios ó especiales en que la Nación esté interesada; mas también lo es que no puede revisar dichas providencias sin tener la seguridad de que ellas han sido dictadas por la autoridad que tenga jurisdicción al efecto; de manera que, siendo la cuantía del interés lo que determina la competencia para conocer en la primera instancia, es menester que esa cuantía conste con claridad por los medios que establecen las leyes; es decir, por el valor conocido de la cosa ó acción que se disputa, ó por la estimación que el actor haga en la demanda sin contradicción de la parte demandada, ó por la estimación pericial.

Mientras la cuantía no esté comprobada en el juicio, la Corte ignora si las providencias sometidas á su consideración han sido pronunciadas por la autoridad que ha tenido facultad para ello; y por la propia razón debe abstenerse de examinar si la Sociedad explotadora de los bosques del "Alto Chilibre," ha podido ó no intentar la acción de deslinde de los expresados terrenos; si ha sido bien dictado ó no por el Juez del Circuito de Panamá el auto en que declaró que había utilidad evidente en que el Ministerio Público ratificase lo actuado en los juicios de deslinde y de contradicción á éste etc.

Por lo expuesto, y resultando que la cuantía de estos juicios se ha apreciado por lo que consta en otro juicio y no por los medios legales arriba indicados, la Corte se abstiene por ahora de conocer de los recursos yá aludidos, y dispone, en consecuencia, que se devuelvan los expedientes á la Oficina de su procedencia, para que en ella se proceda con arreglo á derecho.

Notifíquese, déjese copia é insértese en la *Gaceta Judicial*.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO. — JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintidós de Marzo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Notificado Matías A. Múnera, en su calidad de Juez del Circuito de Frontino, en el Departamento de Antioquia, del auto dictado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial del mismo nombre, en treinta y uno de Octubre del año próximo pasado de mil ochocientos noventa y dos, en el cual llamó á juicio, por los trámites extraordinarios al expresado Juez, por abuso de autoridad, el enjuiciado interpuso en el acto de la notificación personal, dos recursos, á saber: el de revocación del mencionado auto de proceder, que fundó en un detenido escrito separado, y el de apelación para ante este Supremo Tribunal.

El primer recurso fué denegado por el mismo Tribunal Superior, en virtud de fundamentos que juzgó aplicables al caso que examinaba; pero el de apelación le fué concedido en el efecto suspensivo, y por esto fueron remitidas originales las diligencias informativas para que se surtiese la alzada en la Corte.

Repartido y sustanciado el recurso, concedido por los trámites legales, la Corte procede á expresar los fundamentos que le sirven de apoyo para dictar la determinación con que concluye este fallo.

Consta en la actuación acreditado el carácter del Juez del Circuito de Frontino, con la copia del Decreto de nombramiento que se hizo en él para servir el empleo y con la de la diligencia de posesión que tomó ante la Alcaldía del Distrito; y como el abuso de autoridad por el cual dicho Juez ha sido llamado á responder, se ha hecho consistir en las palabras injuriosas expresadas contra el Fiscal del mismo Circuito, en un auto que con fecha 13 de Febrero de 1892, profirió en el sumario instruído contra Ciriaco Ríos, por heridas, aparecen agregadas también copias del nombramiento y de la diligencia de posesión que Betancourt tomó como Fiscal del referido Circuito de Frontino.

Las diligencias sumarias que forman la base del procedimiento criminal han sido levantadas en virtud de denuncio que el citado Fiscal dió al Alcalde del Distrito, cabecera del Circuito, en su calidad de funcionario de instrucción; y aunque en las mismas diligencias se hace mención de multitud de hechos que no son pertinentes al que se averigua, aunque sí pueden servir para exclarecerlos, á fin de saber si por ellos debe procederse de oficio á su investigación, figura la copia del escrito que el Fiscal dirigió al Juez Múnera manifestándole su concepto de que el sumario contra Ríos debía pasarlo al Juez Superior del Distrito Judicial, é igualmente figura en copia el auto que dictó dicho Juez, que ha servido de materia á la queja del Fiscal. En dicho auto se expresa el Juez en estos términos: "No se comprende cómo el señor Fiscal si por malicia con ánimo de hacer trabajar demasiado al Juzgado, ó por demasiada ignorancia ó por burla se atreve á decir que este negocio es de la competencia de los Jueces Superiores, sin manifestar que en este sumario se descubra tentativa de asesinato y en qué consiste....."

Aunque el Juez procesado, al tiempo de solicitar la revocación del auto de proceder, manifestó las razones que lo obligaron á redactar la providencia en los términos consignados en ella, dichas razones podrán servir acaso para alegarlas como defensa en el estado oportuno de la causa; mas no para desvirtuar la fuerza que el Tribunal de Antioquia ha dado á las palabras del mencionado auto de 13 de Febrero de 1892.

Y como la Corte sí considera que dichas palabras son impropias para ser consignadas en providencia judicial, y además, estima que con ellas ha ofendido al funcionario que desempeña la Fiscalía, no encuentra motivo alguno legal para revocar el auto apelado, y por tanto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el concepto del señor Procurador general de la Nación, lo confirma.

El Tribunal de Antioquia dispondrá lo conducente para que se averigüen ciertos hechos que se aducen en las presentes diligencias y que pueden ser objeto de una investigación judicial.

Notifíquese, déjese copia, y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Abril cuatro de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Elciario María Torres, natural de esta capital, y vecino de Moniquirá, con fecha primero de Marzo de mil ochocientos noventa y dos, y por el órgano del Juez 2.° del Circuito de Ricaurte, en el Departamento de Boyacá, dirigió á la Corte un memorial, por medio del cual denunció al Magistrado del Tribunal Superior de Tunja, Rafael Castañeda, como responsable de varios cargos que le dedujo con motivo

de un juicio especial de deslinde y amojonamiento de unos terrenos, que se siguió en el Juzgado 2.° del Circuito del centro, en el Distrito Judicial de Tunja, entre Faustino Agüero y el mismo denunciante, el primero como esposo de Bárbara La Rotta, y el segundo también como marido de Olimpia La Rotta.

Recibido el denuncio en este Supremo Tribunal, fué repartido y se dispuso la ampliación de las diligencias que el denunciante presentó con su escrito, dándose todo en vista al señor Procurador general de la Nación, quien emitió un razonado y extenso concepto, con fecha cinco de Julio de mil ochocientos noventa y dos, contraído á todos los cargos mencionados en el denuncio escrito.

Los cargos fueron determinados por el denunciante de esta manera:

"Como se ve, el señor Castañeda, como Magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, cometió en dicha capital en los días trece y veintisiete de Noviembre de mil ochocientos noventa y uno, al conocer de la apelación de los autos expresados de primera instancia dictados en el mencionado juicio de deslinde, y con motivo de la oposición que hizo la señora Agapita La Rotta á la posesión que se trató de dar á Agüero, los delitos que paso á enumerar:

"1.° Haber faltado á algunos de sus deberes";

"2.° Haber dictado resoluciones contra ley expresa y bajo un supuesto falso;

"3.° Haberse excedido á sabiendas de las atribuciones de su empleo, cargo ú oficio, y ejerciendo otras que no le corresponden;

"4.° No haber cumplido leyes que como á Magistrado le corresponde cumplir;

"5.° Haber sido prevaricador;

"6.° Haber dado término al iniciarse no más el juicio promovido por la señora Agapita La Rotta, condenándola sin haber sido previamente oída y vencida en juicio;

"7.° Haber demorado las resoluciones más del término legal;

"8.° Todos los demás que la Corte Suprema observe en lo relacionado en este denuncio."

Para mayor claridad en este asunto, la Corte entrará á examinar separadamente cada uno de los cargos referidos; y como según el artículo 63 de la Ley 100 de 1892, sobre reformas judiciales. "Para hacer efectivas las responsabilidades criminal y civil contra Magistrados y Jueces por infracción ó violación de leyes en los autos y sentencias en juicio civil, en los casos prevenidos en el Código Penal se requiere acusación de parte;" disposición que principió á regir el 1.° del pasado mes de Marzo, la Corte se halla en el caso de prescindir del denuncio de Elciario María Torres contra el Magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, en lo que se refiere á los cargos 2.°, 4.° y 6.° porque éstos, caso de haberse perpetrado los hechos que los motivan, no han podido cometerse sino en providencias judiciales dictadas en el juicio civil de deslinde y amojonamiento de los terrenos nombrados "La-Colorada" y "Arbolocos," y de consiguiente no deben ser examinados sino mediando acusación de parte.

Entrando ahora en el examen de los demás cargos, hay que observar con respecto al primero, es decir, al que se refiere al hecho ó hechos de haber el Magistrado Castañeda "faltado á algunos de sus deberes," que el denunciante no concreta los hechos que constituyen el primer cargo, así como lo ha hecho respecto de otros cargos; y la Corte, á pesar del estudio detenido del expediente original relativo al juicio de deslinde arriba mencionado, que al efecto pidió y dispuso que se agregase á este informativo, no ha encontrado constancia alguna que sirva de apoyo al denunciante en lo que vagamente afirma, por lo cual considera infundado el aludido cargo.

El tercer cargo (por no poder la Corte ocuparse yá en el segundo, como lo tiene expresado), lo hace consistir el denunciante en "haberse excedido el Magistrado doctor Castañeda, á sabiendas, de las atribuciones de su empleo, cargo ú oficio, y ejercido otras que no le corresponden." Cuanto á este cargo, como lo dice el señor Procurador en su vista fiscal, el Magistrado Castañeda no desempeñó otras funciones que las que la ley asigna, á los funcionarios de su clase, esto es, decidir los litigios que ocurren y que se someten á su estudio. No hubo, pues, exceso de facultades, ni usurpación de atribuciones, porque habiéndose limitado el doctor Castañeda á decidir los recursos de apelación que fueron interpuestos, y á veces á declarar desierto el respectivo recurso por no haberse suministrado el papel necesario para la actuación, ejerció las funciones propias de la Magistratura de su cargo, una vez que le fueron repartidos los recursos indicados por la Presidencia del Tribunal.

El cuarto cargo, que lo funda el denunciante en que el referido Magistrado Castañeda "no cumplió leyes que como á tal le correspondía cumplir," en sustancia es el mismo que constituye el cargo segundo, que consiste, como en su lugar se ha expuesto, en haber infringido una disposición legal concreta, infracción que no puede examinarse sino en virtud de acusación.

Versa el quinto cargo sobre el delito de prevaricato. Para que se perpetre este delito, es preciso que concurran dos elementos indispensables, á saber: violación expresa de ley, y la prueba del móvil que induce á la violación, esto es, que el Juez ó Magistrado proceda apasionadamente por afecto ó desafecto á alguna de las partes etc. En el caso de que se trata, aunque el denunciante ha querido apoyar su denuncio de prevaricación en las relaciones íntimas que el denunciante asegura que el Magistrado doctor Castañeda cultiva con miembros de la familia La Rotta, aparece desvirtuado el concepto del denunciante con las declaraciones de las mismas personas que ha citado como sabedoras de la conducta del denunciado, pues dichas personas han declarado en sentido contrario al denuncio. (Fojas 21 á 27 de la actuación de la Corte).

Por las razones expresadas al principio no se examina el sexto cargo que se hace depender por el denunciante en una irregularidad cometida por el Magistrado doctor Castañeda en determinada providencia judicial.

El séptimo cargo lo deduce el denunciante del hecho de haber demorado el Magistrado doctor Castañeda las resoluciones más del término legal.

Prescindiéndose, como se prescinde, de los retardos con que los interesados suministraban el papel necesario para la actuación, y las decisiones pronunciadas con ocasión de los recursos de apelación interpuestos, se observa que por no haber anotado el Secretario del Tribunal de Tunja las fechas en que puso el expediente al despacho, para que en él se dictasen las providencias correspondientes, no se puede ahora averiguar si de parte del Magistrado Castañeda se causaron demoras en las secuelas de las apelaciones. Es de advertirse, además, que no se nota causada demora alguna que pueda estimarse como extraordinaria y escandalosa, lo cual hace que la Corte no esté en capacidad de deducir cargo alguno por este motivo contra dicho Magistrado.

Por último, el denunciante, después de determinar todos los cargos que en su opinión debía hacer é hizo al Magistrado Castañeda, por punto general incluye todos los demás cargos acerca de los cuales la Corte crea que debe responder el Magistrado mencionado. La Corte no ha hallado otras faltas ó irregularidades, además de las denunciadas, que hagan responsable al denunciado, y por tanto no considera que el denunciante tenga fundamento para deducir contra el doctor Castañeda nuevos ó distintos cargos de los que expresa el denuncio.

A mérito de todo lo expuesto, la Corte, de conformidad en parte con el dictamen del Ministerio Público, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que no hay mérito para proceder de oficio contra el doctor Rafael Castañeda, en su calidad de Magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, por los cargos aludidos.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial*, y archívense estas diligencias con devolución al Juzgado del Circuito del Centro, en el Distrito Judicial de Tunja, de la actuación relativa al juicio de deslinde y amojonamiento á que tántas veces se ha hecho alusión.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

REPÚBLICA DE COLOMBIA.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AÑO VIII | Bogotá, 31 de Mayo de 1893. | NÚM. 393.

REPÚBLICA DE COLOMBIA BIBLIOTECA PAZ ORDEN Y JUSTICIA

CONTENIDO.

Págs.

Acuerdo de la Corte 233

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

La que anula el fallo que el Tribunal Superior de Cundinamarca dictó en el juicio seguido por Julián Campuzano contra Antonio Martínez de la Cuadra y Ramón B. Jimeno, para que éstos se abstuvieran de quitar el agua necesaria para mover un molino de propiedad del demandante. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas) 233

La que concede á Mercedes y María Josefa Carrasquilla una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas) 239

La que niega á Santos Hurtado el reconocimiento de un crédito procedente de expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Corrales) 240

La que niega á María Fidela Caicedo una recompensa. Magistrado Ponente, doctor Trujillo) 240

GACETA JUDICIAL.

ACUERDO NÚMERO 759.

En la ciudad de Bogotá, á diez y nueve de Abril de 1893, hallándose reunida la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, Su Señoría el Presidente de ella, dió cuenta á los señores Magistrados de un oficio de Su Señoría el Ministro de Justicia, en el que solicita de la Corte una terna para nombrar el Magistrado que debe llenar la vacante ocurrida en el Tribunal de Panamá por muerte del doctor Agustín Jované.

A este efecto, se procedió á la elección, y hecha la votación dió el siguiente resultado:

Siete votos por cada uno de los doctores Gil Ponce, Juan N. Venero y Juan Noriega.

La Corte dispuso proponer esta terna al Gobierno ejecutivo, en respuesta á su nota número 1,234, de fecha 17 de los corrientes, con lo que se dió por terminado el presente Acuerdo.

El Presidente, LUCIO A. POMBO.—El Vicepresidente, LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, catorce de Abril de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: En el juicio civil ordinario promovido en diez y siete de Septiembre de 1889 por Julián Campuzano contra Antonio Martínez de la Cuadra y Ramón B. Jimeno, para que, como contratistas para la provisión de aguas por tubería de hierro á la ciudad de Bogotá, se abstuvieran de quitar el agua necesaria para el movimiento de un molino de su propiedad, denominado de Almansa, y le indemnizaran ciertos perjuicios, el Juez del conocimiento, que lo fué el segundo del Circuito de Bogotá, después de darle la tramitación prevenida por las leyes, pronunció, en veintisiete de Abril de mil ochocientos noventa y uno, la sentencia que puso fin á la primera instancia, por medio de la cual condenó á los demandados á la abstención pedida por el demandante, los absolvió de los perjuicios que se les imputaban, y declaró no probada la excepción perentoria de *caducidad* de la concesión y extinción de las obligaciones que produjo á favor de Campuzano un contrato celebrado entre dicho Campuzano y el Síndico municipal de Bogotá en Septiembre de 1880, excepción que había sido oportunamente opuesta por la parte demandada.

De dicha sentencia se apeló, y, habiéndose concedido el recurso, surtióse la segunda instancia del juicio ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, quien la terminó el día treinta de Noviembre del propio año de mil ochocientos noventa y uno, mediante la sentencia que reformó la de primera instancia, en cuanto condenó á de la Cuadra y Jimeno, no á la abstención de quitar el agua necesaria para mover el molino mencionado, sino á la abstención de quitar el agua que Campuzano derivaba del acueducto de esta ciudad el año de 1880, cuando se otorgó la mencionada escritura por el Síndico municipal, cantidad de agua que debía fijarse en juicio separado. En cuanto á los otros dos puntos resueltos por la sentencia de primera instancia, ellos fueron confirmados por la de segunda sin variación alguna.

Habiendo la parte demandada interpuesto oportunamente, por medio de apoderado legalmente constituído, recurso de casación contra la expresada sentencia de segunda instancia, concedióselo por auto de cuatro de Febrero de mil ochocientos noventa y dos, razón por la cual subió el expediente á la Corte, en donde sustanciado el recurso con observancia de todas las formalidades prevenidas por la Ley 105 de 1890, se procede á pronunciar el fallo correspondiente, empezando, como lo ordena el artículo 381 de dicha ley, por examinar si el expresado recurso se interpuso oportunamente y por persona hábil, y si la sentencia es de aquellas contra las cuales puede interponerse, porque si alguno de los requisitos necesarios faltara, la Corte tendría el deber de limitarse simplemente á negar la admisión.

De tal examen ha resultado:

1.° Que, como se ha dicho yá, la sentencia acusada se pronunció el día treinta de Noviembre de mil ochocientos noventa y uno, y que quedó notificada por medio del correspondiente edicto, el día diez y ocho de Enero de mil ochocientos noventa y dos; y que habiendo los demandados Jimeno y Martínez de la Cuadra constituído apoderado, por medio de escritura que en copia registrada corre en los autos, al doctor Emiliano Restrepo, para que en nombre y representación de aquéllos interpusiera el recurso de casación contra dicha sentencia, Restrepo lo interpuso en efecto el día veintiséis de Enero del mismo año, es decir, dentro de los treinta días señalados por el artículo 373 de la propia ley;

2.° Que el asunto es civil y el juicio ordinario; que la cuantía de éste excede de tres mil pesos; que la sentencia se funda y debe fundarse, á lo menos en parte, en leyes del extinguido Estado de Cundinamarca, que en esencia son iguales á las que están actualmente en vigor, y que la contrariedad que existe entre las sentencias de primera y de segunda instancia, es manifiesta, no sólo en cuanto á lo principal del pleito, ya que la de segunda instancia reformó en parte sustancial el primer punto resuelto por la de primera instancia, sino también en cuanto á la inteligencia y aplicación de las

leyes invocadas, toda vez que algunos de los considerandos en que se apoyó la primera, fueron totalmente desechados por la segunda, ocurriendo en esto contrariedad de doctrina.

Es, por tanto, claro que en el presente caso, se han reunido todos los requisitos que exigen los artículos 366, 373 y 381 de la mencionada Ley 105 de 1890, para que el recurso sea admisible y deba surtirse.

Procédese, en consecuencia, á exponer las causales alegadas por el recurrente.

Funda éste la casación intentada en las causales siguientes:

1.ª En la designada en el primer aparte del número primero del artículo 369 de la Ley 105 de 1890, en relación con lo dispuesto en el segundo aparte de dicho número primero, alegando, como alega, á nombre de los demandados, contra la apreciación hecha en la sentencia reclamada de determinadas pruebas, á saber: de la escritura pública, número mil quinientos setenta y uno, de fecha treinta de Septiembre de 1880, otorgada en esta ciudad ante el Notario 2.° del Círculo de Bogotá; y de la inspección ocular practicada en la primera instancia del juicio. Sostiénese también que ha habido error de derecho en la apreciación que se ha hecho de estas dos pruebas;

2.ª En la designada en el mismo número primero del mencionado artículo 369 de la Ley 105 de 1890, en cuanto sostiene que por medio de dicha sentencia se han violado leyes sustantivas y doctrina legal, diciéndo-e que tal violación consiste en haber contravenido á las disposiciones contenidas en los artículos 9, 12, 13, 15, 25 y 27 del Acuerdo número cuarto "orgánico del ramo de Aguas," expedido por la Municipalidad de Bogotá, con fecha veinte de Febrero de 1880; la del artículo 331 del Código Político y Municipal del extinguido Estado de Cundinamarca, vigente cuando se otorgó la escritura que se ha mencionado en el número anterior; y las de los artículos 1874 y 1555 del Código Civil de Cundinamarca, vigente en aquella misma época, en cuanto por medio de la sentencia se da por bien enajenada una cosa cuya enajenación estaba prohibida por la ley, y en cuanto se declara implícitamente irresoluble un contrato que es resoluble á voluntad de una de las partes, y se niega la existencia de la excepción propuesta de caducidad de una concesión, y

3.ª En la designada bajo el número segundo del dicho artículo 369 de la mencionada Ley 105, en cuanto se afirma que la sentencia acusada no está en consonancia con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes, por haber el demandante pedido que se condenara á la parte demandada á abstenerse de quitar á aquél el agua necesaria para mover su molino, y no haber la sentencia condenado sino á la abstención de quitar el agua que Julián Campuzano derivaba del acueducto público de la ciudad, para mover el molino de Almansa, cuando se le hizo el reconocimiento de que trata la escritura número 1,571 de veinte de Septiembre de 1880, cantidad de agua que debe fijarse en juicio separado; resolución que por no ser precisa y no recaer sobre la cosa, cantidad ó hecho demandado, y por remitir á las partes á otro juicio, es contraria á las reglas establecidas por los artículos 338 y 835 del Código Judicial, y debe anularse según el artículo 121 de la Ley 105 de 1890.

La Corte procede á examinar la primera causal. Para averiguar la fuerza jurídica de la alegación en que ella se ha expuesto conviene trascribir aquí la parte de la sentencia que contiene los conceptos que le sirven de fundamento. Es del tenor siguiente:

"Esta escritura de reconocimiento equivale á un título del derecho que se alega, porque es una verdadera confesión, que relevó al demandante de la obligación que tuviera de acreditar por otros medios el derecho que se ha querido controvertir, el cual deben respetar los demandados al tenor de la cláusula veinte del contrato celebrado por ellos con la Municipalidad. Sin que valga objetar con el artículo 331 del Código Político y Municipal de Cundinamarca, que los acueductos públicos no pueden enajenarse, porque no deben confundirse éstos con las mercedes que las Corporaciones municipales pueden conceder sobre ellos, pues uno de los objetos con que se construyen, es el de obtener una renta derivada de la *venta* del uso de cantidades más ó menos grandes del agua que se conduce por ellos."

Como en esta parte la sentencia se refiere á la escritura número 1,571, y como ésta es, en efecto, el documento principal en que se sustenta aquélla, es preciso conocerlo, á fin de saber si en realidad se puede estimar como título. Dicha escritura es la que bajo el número 1,571, el día treinta de Septiembre de 1880, otorgó el Síndico municipal de Bogotá, doctor Enrique Berbeo, ante el Notario segundo suplente del Circuito de Bogotá, doctor Agustín Convers, en virtud (según en ella se expresa) de lo resuelto por el Concejo municipal en su sesión del veinticinco del propio mes y trasmitido á la Sindicatura en nota número 67, y en virtud de haber pagado el señor Julián Campuzano en la Tesorería del Distrito la suma de diez pesos por el primero y segundo semestres de aquel año, sobre las pajas de agua sucia de que disfrutaba en su molino, según consta en un recibo allí inserto, suscrito por el señor Bruno Maldonado, como Tesorero. En su parte principal, tal escritura es del tenor siguiente:

"Y que por tanto, el expresado señor Síndico, por la presente, en la vía y forma que más haya lugar en derecho, otorga en favor del señor Julián Campuzano, el reconocimiento que tiene á el agua para mover su molino, situado en la carrera octava, al Oriente de esta ciudad, nombrado antiguamente de Almansa, que era antes del extinguido convento de Predicadores llamado de Las Aguas, quedando obligado dicho señor Campuzano por el artículo 15 del Acuerdo número 4.°, 'orgánico del ramo de aguas,' de veinte de Febrero del corriente año, á continuar pagando una anualidad de diez pesos, sin que por esto se entienda que se le otorgan derechos que extralimiten las disposiciones de los Códigos Civil y de Policía, y á lo demás que dicho Acuerdo disponga."

¿Obedece la escritura que se acaba de trascribir, á la prescripción del artículo 2,677 del Código Civil de Cundinamarca, que regía en 1880, en cuanto á lo en él dispuesto, sobre determinación clara y precisa de la especie ó naturaleza del contrato que en él se quiso hacer constar, y en cuanto á la determinación de la cosa, ó el derecho que se otorgó á Campuzano? ¿Fué aquel contrato de compraventa, ó de constitución de una servidumbre, ó de simple reconocimiento de un derecho que yá Campuzano tenía adquirido? Los términos de la escritura inducen á creer lo último, es decir, que fué simplemente el reconocimiento de un derecho anterior. Siendo esto así, es preciso convenir en que la escritura que se examina, la cual nada dijo, absolutamente nada, acerca del origen ó procedencia del título del reconocimiento hecho en ella á Campuzano, se refería sin duda á un título anterior, que es preciso buscar fuera de la misma escritura, puesto que en ella no existe.

En efecto, ¿qué se entiende en derecho por título?

Según Escriche, la palabra *título* tiene la acepción principal de "la causa en cuya virtud poseemos alguna cosa," y en segundo lugar, y como por metonimia, significa "el instrumento con que se acredita nuestro derecho."

Sabido es que en la idea del derecho subjetivo hay dos elementos igualmente necesarios, á saber: *el título* y *el modo*. Corresponde el primero á la esencia misma del derecho, y es el que constituye su razón de ser, ó sea su causa; y se refiere el segundo al hecho que da existencia concreta al derecho, individualizándolo en una persona determinada. Inmutable elemento es el primero, porque para que el derecho sea verdaderamente tál, es preciso que se apoye en lo que es objetivamente justo, ya que la justicia no es otra cosa sino una relación inmutable de proporción que regla las mutuas comunicaciones ó enlaces de los hombres entre sí; el segundo es elemento mudable, porque se funda en la naturaleza esencialmente contingente del hombre. En toda adquisición de derechos es indispensable que concurran estas dos condiciones: el título justo, y el modo legítimo. Ahora bien, ¿la escritura de que aquí se trata expresa la causa en virtud de la cual se reconoció á Campuzano el derecho que disputa? ¿Expresa el modo legítimo mediante el cual se individualizó en Campuzano tal derecho? Ni lo uno ni lo otro; porque se ha visto yá que en dicha escritura se omitió en absoluto dar cumplimiento al precepto contenido en la parte final del artículo

2677 del Código Civil de Cundinamarca, reproducido por el 2594 del Código nacional, en cuanto á la naturaleza del contrato y en cuanto á la determinación del derecho sobre que recaía.

Dicho artículo es, en efecto, del tenor siguiente:

"Artículo 2667. Por regla general, los instrumentos que se otorguen ante el Notario, contendrán: el número que les corresponda en la serie instrumental; el lugar y la fecha del otorgamiento; la denominación legal del Notario por ante quien se otorga; los nombres y apellidos, sexo, vecindad y edad de los otorgantes ó de sus representantes legales (las personas jurídicas serán designadas por su denominación legal ó pupular, y por el lugar de su establecimiento, y se extenderá á sus personeros lo que anteriormente se dice de los representantes legales de las personas naturales); la especie ó naturaleza del acto ó contrato, con todas las circunstancias que hagan conocer claramente los derechos que se dan y las obligaciones que se imponen, con expresión de las cauciones ó hipotecas que se constituyan, y de los gravámenes ó limitaciones que se impongan al derecho de propiedad, y el origen ó procedencia del título del enajenante.

"Las cosas y las cantidades serán determinadas de una manera inequívoca, y si en el instrumento se tratare principal ó accesoriamente de inmuebles, se pondrá constancia de la situación de éstos y de sus linderos, expresándose, si el inmueble fuere rural, su nombre y el Distrito ó Distritos de la situación; y si urbano, la ciudad, villa, parroquia ó aldea, la calle en que estuviere situado, y el número del inmueble, si lo tuviere."..... ....

Basta la lectura de la escritura para advertir que ella es un instrumento de pura referencia, en que se reconoció vagamente un derecho que no se sabe de dónde procede, ni en qué consiste, ni cómo fué adquirido; y un instrumento de esa naturaleza no puede considerarse como título justo de la adquisición, ni como modo legítimo de ella, sino en cuanto esté apoyado y sostenido por otro que llene satisfactoriamente las omisiones de que el primero adolece. Pero si no se exhibe el instrumento primitivo, ni se determina de algún otro modo preciso cuál es la causa y el modo de la adquisición disputada, dicha escritura no es un título propio y verdadero del derecho que se alega; y si la sentencia acusada afirmó que ella era título del expresado derecho, visto es que en la sentencia se ha incurrido en un error de derecho en la apreciación de la prueba, consistente en haber dado á un instrumento público un valor que no tiene, ni considerado desde el punto de vista de la ley positiva con omisión de la cual se extendió, ni considerado á la luz de los principios que definen los términos de la cuestión.

Agréguese á lo expuesto, que aunque en la escritura se alude á una resolución adoptada por el Consejo Administrativo, resolución que se dice fué trascritá ó comunicada al Síndico, no habiéndose insertado allí, sólo hay respecto de ella la simple afirmación de su existencia, pero sin que sea posible conocer sus términos, ni en consecuencia saber si en ella se determinó la clase del derecho que se reconocía á Campuzano, derecho que por tal motivo adolece de una vaguedad é indeterminación tales, que por sí sola la escritura no alcanza á corregir.

Es, por tanto, á este respecto fundada la alegación con que se pide la casación de la sentencia.

Mas como en ella se expone como razón para dar á la escritura la fuerza de título el que ella es una verdadera confesión, y como acerca de este punto el recurrente alega que la *confesión* "es prueba de forma especial determinada en nuestras leyes y cuya manera de crearse y producirse no es por medio de instrumentos públicos," hay necesidad de examinar este punto.

Obsérvese en cuanto á esto, que el Síndico no tenía entre sus atribuciones legales la de hacer confesiones de ninguna clase, por medio de las cuales pudiera enajenar ó comprometer los bienes ó derechos del Distrito. Sus funciones en este particular estaban limitadas á obrar como mandatario de la Municipalidad, ciñéndose estrictamente á las instrucciones que se le comunicaran. Esta Corporación, por su parte, no podía tampoco, al instruír al Síndico municipal para otorgar escrituras sobre reconocimiento de obligaciones ó derechos que afectaran los intereses del Distrito, excederse de lo que estaba prescrito en los Acuerdos municipales ó en las leyes de la materia, ó que constara en contratos legalmente celebrados.

Y como no se ha probado cuáles fueron los términos del mandato conferido por la Municipalidad al Síndico, ni se conocen los del reconocimiento del derecho que la escritura citada supone que tenía Campuzano, ni el que él reclama puede considerarse comprendido en ninguno de los que define el Acuerdo municipal número 4.° de 1880, á cuyos términos debieron ajustarse tanto la Municipalidad como el Síndico, es evidente que la aludida escritura no puede tenerse como una confesión del derecho invocado en la demanda y reconocido en la sentencia del Tribunal, ya por falta de facultades legales en el empleado que en ese acto obró á nombre del Distrito, ya por la indeterminación del mismo derecho que trató de reconocerse, y ya, en fin, porque no se conocen los títulos anteriores que constituyeran ese mismo derecho reconocido.

De lo cual se colige que, sin necesidad de otras reflexiones, por esta sola se establece que aquella escritura no puede considerarse como confesión; y que de consiguiente, es también á este respecto fundada la alegación del recurrente, en cuanto sostiene que al dar dicha sentencia á la escritura el valor de confesión, incurrió en error de derecho en la apreciación de la prueba, y debe, por tal motivo, casarse la sentencia.

Ahora bien, como según el artículo 59 de la Ley 100 de 1892, disposición procedimental que debe regir desde su vigencia para todos los casos que ocurran, aunque se refieran á recursos interpuestos antes, cuando la Corte encuentre justificada una causal de casación, no es necesario que éntre en consideraciones acerca de las otras causales alegadas, con sólo el fin de reforzar la invalidación del fallo, la cual habrá de proceder de la causal justificada, basta lo expuesto para poder declarar la nulidad de la sentencia á que el presente recurso se refiere.

Y como según el artículo 60 de la propia ley, la Corte tiene el deber de dictar en este caso el fallo que debe reemplazar al que queda anulado, para proceder á ello, empieza por plantear la cuestión cuya solución debe llevar en sí la decisión correspondiente.

Dicha cuestión puede formularse así:

¿Cuál es el título en que Campuzano funda el derecho que pretende tener para derivar de la acequiá, hoy del acueducto público construído por los empresarios en la provisión de aguas por tubería de hierro para la ciudad de Bogotá, el agua necesaria para mover su molino denominado de Almansa? Se ha visto ya que por sí sola la escritura número 1,571 de 1880, no es título suficiente del derecho que se alega; el cual necesita otro título que contenga su razón de ser y su modo legítimo.

Véase si en autos aparece este otro título.

En el expediente hay, fuera de la escritura que se acaba de mencionar, otros cuatro instrumentos públicos, que son:

1.° El que se otorgó, bajo el número 1712, ante el Notario 2.° de Bogotá, el día catorce de Octubre de mil ochocientos setenta, entre Nicolás Castro y Julián Campuzano, sobre compraventa del molino de Almansa. En él consta que el primero de los otorgantes vende al segundo, por la suma de dos mil seiscientos pesos de ocho décimos al contado, el dicho molino de Almansa, con todos sus utensilios, con sus casas de habitación de construcción de tapia y teja, y un rancho de paja dentro de un solar cuyos linderos se determinan allí. Especifícanse los útiles correspondientes al molino, y son: un cernidor, una romana, una barra, una garlancha, tres picas y un barrón; pero nada se expresó allí con respecto al motor del molino ó sea del agua. De manera que la adquisición de que este instrumento da testimonio fehaciente por parte de Campuzano, es perfectamente clara y terminante respecto del solar en que el molino estaba edificado, así como respecto de los edificios contenidos en él y de sus útiles; pero en cuanto al agua que sirviera de motor del molino, se guardó completo silencio, omisión que haciendo relación á un ele-

mento de tan especial importancia para un molino hidráulico, no puede menos de llamar vivamente la atención del Juez, que debiendo fallar precisamente sobre la adquisición del derecho al agua, busca el título correspondiente y no lo halla en el instrumento, donde sí se hizo constar la adquisición no sólo del molino sino también de sus más pequeños útiles, como las picas y la romana;

2.° La escritura número 1,243, otorgada el veintiséis de Junio de 1865, entre Miguel Castro y su hermano Nicolás del mismo apellido, en la cual consta que el primero vende al segundo el molino de Almansa, por cantidad de siete mil pesos de á ocho décimos, de los cuales recibe al contado cinco mil y da plazo por los dos mil restantes. La diferencia de precio que en este contrato se nota en comparación con el precio del contrato de que se habló en el número anterior, y también la diferencia de linderos hacen juzgar que no todo el terreno comprado por Nicolás Castro á Miguel, fué vendido por aquél á Julián Campuzano, sino solamente una parte de él. En esta escritura se expresa que dentro de la venta se comprenden, junto con el terreno, todas sus entradas y salidas, usos y costumbres y derechos de servidumbres, aguas vertientes y corrientes y todo lo demás que pueda pertenecerle ó le pertenezca;

3.° La escritura que en diez de Septiembre de 1850 se otorgó ante el Escribano público de Bogotá, entre José Manuel Restrepo y Laureano Copete, en la que consta que el primero vendió al segundo el molino de Almansa, que era antes del convento de Predicadores, y que Restrepo adquirió por remate público. No entra en la venta una parte del terreno. Consta que se comprende en este contrato "el edificio cubierto de teja en que se halla colocado dicho molino, la máquina de éste, las canales y la acequia ó acueducto con su agua correspondiente, según y como pasa por la fábrica de papel, que antes fué molino de Isidoro Vásquez, con su respectivo desagüe ó ladrón y una choza ó rancho cubierto de paja, todo lo cual vendió el doctor Restrepo en su estado actual." Precio, dos mil quinientos y un pesos, que á censo redimible con el interés de un cinco por ciento anual, se obligó Copete á seguir reconociendo en favor del Colegio de La Merced de Bogotá, subrogándose al señor Restrepo en dicha obligación; y

4.° La escritura pública número 1,052, en que el Notario 2.° de Bogotá, Julio Pinzón E., declara que Julián Campuzano le presentó para su protocolización, y fueron protocolizadas las diligencias del remate que en veintisiete de Junio de 1824, se verificó ante el Intendente del Departamento de Cundinamarca, D. Enrique Umaña, por parte de Luis Montoya, (quien traspasó el dicho remate al doctor José Manuel Restrepo) un molino de trigo, situado en las faldas de la colina de Guadalupe y que había pertenecido al convento suprimido de Las-Aguas de Bogotá. Este instrumento es el más antiguo de los presentados y en que consta la adquisición del molino, el cual, en virtud del remate de que se da fe en él, vino á poder del doctor José Manuel Restrepo, quien lo traspasó luégo el año de 1850, á Laureano Copete, quien á su turno y sin que se haya exhibido la correspondiente escritura, lo vendió, sin duda, á Miguel Castro, y éste lo vendió el año de 1865 á su hermano Nicolás, de quien, como se ha visto, lo hubo Julián Campuzano, el catorce de Octubre de 1870.

Este primitivo instrumento, en que el Intendente, doctor Umaña declara, que "embargados los bienes de las temporalidades del convento suprimido de Las-Aguas de esta capital, entre ellos fué un molino de trigo, situado á extramuros de esta capital, á las faldas de la colina de Guadalupe," y que habiendo Salvador Pulido propuesto que se le vendiese á censo redimible, se había resuelto proceder á la venta en remate público, como se ejecutó en efecto. Este instrumento, expresa que el remate debía recaer sobre dicho molino, sus tierras y hornos de cocer materiales; pero nada expresó con relación á las aguas que debían servir para mover el molino.

Se ve, por tanto, que ni en el instrumento primitivo de la adquisición sostenida por el demandante, ni en el instrumento inmediato de la enajenación hecha por Nicolás Castro á dicho demandante, se determinó derecho alguno sobre el agua del molino. Es claro que si dicha agua hubiese sido agua que naciese dentro del terreno vendido á Campuzano como parte del molino, no habría sido necesario exponer en aquellas escrituras nada con relación á ella, porque en tal caso ella habría sido una anexidad del inmueble comprado y pertenecía al comprador del terreno mismo, y porque como muy bien dijo la Ley 1.ª, título 28, partida 3.ª: "el home ha poder en su cosa de facer della et en ella lo que quisiere segúnt Dios et segúnt fuero." Pero tratándose de aguas no nacidas dentro de aquel terreno sino recibidas en él, de una procedencia diversa, y aguas públicas pertenecientes al común del Distrito de Bogotá, para poder acreditar la adquisición del derecho que defiende la parte de Campuzano, era indispensable que éste presentase el instrumento pertinente, el cual, según los artículos 1865 y 1767 del Código Civil de Cundinamarca, vigente en 1870, debía ser instrumento público, en que, según el 2677 ibidem, debía haberse expresado la determinación clara del derecho alegado, con expresión de su causa, ya fuera que se pretendiera derecho de dominio sobre el agua, ó ya fuera que sólo se pretendiera derecho á una servidumbre activa.

Y como en la escritura que es el título de adquisición del molino por parte de Campuzano, nada se estipuló con relación al agua, se explica así la necesidad en que él se vió de que el Síndico municipal le otorgase la marcada con el número 1571 de 1880, la cual, según se deja demostrado, no puede estimarse como título de adquisicion del agua.

Y siendo éste el intrumento en que se fundó la sentencia acusada, conviene examinarlo más detenidamente, y á la luz de las disposiciones vigentes al tiempo de su otorgamiento, tanto del Acuerdo municipal como de los Códigos Civil y Político.

En él declaró el Síndico de Bogotá, doctor Berbeo, que no había de entenderse que por los diez pesos anuuales que Campuzano se obligaba á pagar, según lo dispuesto por el artículo 15 del Acuerdo número 4.° de 1880, orgánico del ramo de Aguas, se le otorgaban á Campuzano derechos que extralimitaran las disposiciones de los Códigos Civil y de Policía, y que, además, Campuzano quedaba ligado á las demás disposiciones que dicho Acuerdo contuviera.

Esta cláusula es una verdadera restricción que limitó el derecho reconocido allí á Campuzano, á lo que acerca de la materia sobre que recaía el reconocimiento permitieran las leyes sustantivas que definen los derechos del Distrito en los bienes del Común, y al propio tiempo impuso á Campuzano el deber de cumplir con todas las obligaciones que el Acuerdo de la Municipalidad imponía á quienes optasen derecho á usar de las aguas públicas, y es claro que al aceptar Campuzano aquel instrumento, aceptó todas las condiciones contenidas en sus cláusulas.

De manera que, aunque indeterminado y vago, vacío en cuanto á la determinación del origen ó la causa del reconocimiento en él hecho, exento de las circunstancias que debían haber definido la naturaleza y especie del derecho reconocido, y en este sentido ilegal, como se ha demostrado yá, no por eso dejó aquel instrumento de advertir, como era natural que advirtiera, que él no tenía mayor alcance del que permitieran las leyes de la materia, ni eximía en manera alguna á Campuzano de las obligaciones comunes á que la Municipalidad, por medio del Acuerdo pertinente, había sujetado á los que usasen de las aguas del Común del Distrito, sino que antes bien y de un modo especial, lo sometía á ellas.

Para interpretar dicho instrumento y asignarle la extensión y alcance que tenga, y para resolver si en efecto él llega á cubrir la pretensión defendida en el pleito por Campuzano, la Corte tiene, en consecuencia, necesidad de rastrear su sentido correcto, calcando el derecho allí reconocido, dentro de los límites establecidos por las leyes de la materia y según las condiciones fijadas por el respectivo Acuerdo de la Municipalidad.

Y sea lo primero, que en cuanto á esto último se observa, que fué expedido en diez y ocho de Febrero de 1880, y sancionado por el Alcalde el día veinte del propio mes; de manera que cuando se otorgó la escritura número 1571 el 30 de Septiembre de 1880, estaba vigente, sin que en dicho año se hubiese modificado sino por el marcado con el número 23, de

siete de Octubre, el cual, en el punto de que se trata, está en consonancia con aquél.

Obsérvase en segundo lugar que el artículo 15 del Acuerdo, que es el citado en la escritura, impone á las personas que gozaren del derecho de conducir aguas de una acequia hasta sus casas, fábricas ó solares por *cañerías propias*, el deber de pagar una cantidad de diez pesos, sin que se entienda otorgarles derechos que extralimiten los Códigos Civil y de Policía; de manera que dicha disposición no concede á los interesados en ella derecho de propiedad en el agua que, por cañerías propias, conduzcan á sus fincas, ni siquiera la constitución de una servidumbre, sino que les impone una obligación: la de pagar una anualidad de diez pesos. Supone dicha disposición que las personas á que se refiere, gozan de un derecho que sin duda debe estar definido y reconocido mediante el cumplimiento de condiciones ó requisitos fijados por alguna otra disposición anterior, concretándose solamente á decir qué obligación contraen dichas personas. ¿Y cuál es esa otra disposición que determina el derecho en cambio del cual se ha de pagar la anualidad de los diez pesos? Los artículos 11 y 12 son del tenor siguiente:

"Artículo 11. Son propiedad del común del Distrito todas las fuentes públicas que están establecidas y que se establezcan en el Distrito, así como las cañerías y cajas matrices de donde, en la actualidad, se hace el reparto para cañerías particulares.

"Son propiedad particular, y como tales deben ser atendidas solamente por sus dueños, las cañerías que conducen agua á uno ó varios edificios; y las que toman el agua directamente de algunas fuentes ó ríos que vienen de la parte alta de la ciudad, siempre que se compruebe, con documentos auténticos, que esas cañerías han sido costeadas de fondos particulares; pero la propiedad de la cañería no implica propiedad en toda el agua de la fuente ó río sino *únicamente* de la cantidad de agua que el Cabildo ó la Municipalidad haya concedido ó conceda en cualquier época.

"Artículo 12. Los edificios cuyos dueños comprueben con documentos fehacientes que obtuvieron en tiempos pasados merced de aguas, sólo pagarán la contribución anual establecida en este Acuerdo, tanto en cuanto á cuantía, como en cuanto á épocas y condiciones. Una escritura de propiedad que determine el derecho de un edificio á tener aguas y determine la cantidad, será también documento fehaciente."

Parece que Campuzano no se hallaba en el caso de que trata el segundo de estos dos artículos, porque ni podía comprobar con documentos fehacientes que en tiempos pasados había obtenido *merced de aguas*, ya que el instrumento que le otorgó Nicolás Castro en 1870, que fué el que le dió título sobre el molino, no expresó nada con relación á *merced de aguas*, ni podía tampoco fundarse en la escritura otorgada en su favor por el Síndico municipal, porque tampoco se habló en ella de *merced de aguas* hecha en tiempos pasados, ni menos podía determinar la cantidad de agua á que tuviera derecho, cantidad que, según el artículo 10 del Acuerdo, debía medirse por el decímetro en centímetros de los tubos conductores, y no por el signo vago y variable de la *que fuese necesaria para mover un molino*.

El caso en que podía Campuzano tal vez hallarse, era el definido por la segunda parte del artículo 11, á saber: el de que pudiendo comprobar plenamente, por medio de documentos auténticos, que él ó sus causantes en el molino de Almansa, habían en tiempos pasados construído, á su costa, una cañería propia para conducir por ella el agua que movía el molino, tenía derecho de propiedad particular sobre dicha cañería, y era de su cargo atenderla y conservarla, sin que tal derecho implicase conjuntamente el de toda el agua de la fuente ó el río de donde la tomase, sino *únicamente* de la cantidad de ella que el Cabildo ó la Municipalidad le hubiese concedido ó le concediera en cualquiera época. Todo lo cual significa, sin lugar á la menor duda, que el Acuerdo, después de declarar en la primera parte del artículo 11, que eran propiedad del común del Distrito todas las fuentes públicas que en aquel tiempo estaban establecidas y las que en lo sucesivo se establecieran, y aun las cañerías y cajas matrices, de donde en ese entonces se hacía el repartimiento para las cañerías particulares, declara también, y en términos precisos, que son propiedad particular las cañerías construídas por individuos particulares, á sus expensas, pero con la restricción, eso sí, de que la cantidad de agua que se podía conducir por ellas, era solamente la que hubiese permitido ó permitiera la Municipalidad.

Si, pues, Campuzano hubiere tenido largo tiempo en acción su molino y si antes que él lo tuvieron en ejercicio sus dueños anteriores, cosa que parece plenamente comprobada en los autos, tanto por medio de testimonios intachables y suficientes, como por medio de inspecciones oculares; si el agua que le servía de motor hubiese sido, á lo menos en parte, agua tomada de la del común del Distrito; si en la escritura que le otorgó el Síndico municipal en Septiembre de 1880, se le reconoció un derecho, aunque indeterminado y vago y sin expresión de causa, pero siempre de algún valor sobre "el agua para mover su molino," según las palabras textuales de dicho instrumento, derecho sujeto, eso sí, á las disposiciones pertinentes del correspondiente Acuerdo; si entre tales disposiciones figura la del artículo 11 trascrito, y en ella se declaran de propiedad particular las cañerías construídas por los individuos particulares á su costa y derecho á conducir por ellas, para sus fábricas y edificios, la cantidad de agua que la Municipalidad hubiera permitido ó permitiera; y si, finalmente, el apoderado del demandante, doctor Alejo de la Torre, afirma en varios lugares de su último alegato, que la acequia de Las-Aguas no era pública sino de construcción particular, lo más que, mediante escrupuloso estudio de la cuestión controvertida, se podría tal vez aceptar acerca del alcance del derecho reconocido allí á Campuzano, sería que dicho derecho consistía en conservar una cañería propia, haciendo para ello los gastos necesarios, trayendo por ella la cantidad de agua que la Municipalidad le permitiera, y pagando por tal permiso una anualidad de diez pesos.

Si Campuzano, á virtud de concesiones que no se han comprobado plenamente en este juicio, tiene algún derecho á extraer agua del río de San Francisco, en la cantidad que se le haya permitido, y á conducirla á su molino por cañería propia, ese derecho no queda afectado por esta sentencia, y podrá él hacerlo valer contra quien haya lugar, pues aquí lo que se le desconoce es el derecho que pretende á que los actuales empresarios se abstengan de quitarle del acueducto por ellos construído, y que reemplaza la antigua acequia pública, el agua necesaria para mover su molino.

Si así no fuera, sino que Campuzano, por medio de la escritura tántas veces mencionada, hubiera obtenido de la Municipalidad derecho á cierto número de pajas de agua limpia, habría tenido que pagar por ellas una suma de dinero igual al producto que resultara de multiplicar la de doscientos pesos que el inciso 1.° del artículo 9.° del Acuerdo fija como precio de cada paja, por el número de pajas obtenidas, sin perjuicio de la anualidad de diez pesos; ó habría tenido que pagar cincuenta pesos al contado y una anualidad de cuatro pesos para obtener agua sucia tomada de los caños ó desagües en las calles ó plazas, según el texto del inciso 2.° de dicho artículo; y en cualquiera de los dos casos la escritura habría determinado la naturaleza del contrato, el recibo del pago, y las obligaciones de Campuzano.

Pero no fué así; y la simple lectura de la escritura convence plenamente de que sólo contiene ella el reconocimiento de un derecho anterior, que no pudiendo ser indefinido ni absoluto para que Campuzano usase de las aguas del común á su arbitrio y sin sujeción á reglas ningunas, se sujetó á las disposiciones del Acuerdo, entre las cuales la que por las circunstancias que determina, parece aplicable al derecho de Campuzano y concordar con él, es la del mencionado artículo 11.

En efecto, sostener que por cuanto en la escritura de 1880, se reconoció á Campuzano un derecho indeterminado, vago y sin causa, los empresarios actuales de la provisión de aguas potables se han de abstener de impedirle que derive del acueducto por ellos construído toda el agua limpia necesaria para mover su molino, y todo esto en cambio solamente de una anualidad de diez pesos, y sin que originariamente hubiese él pagado suma alguna por la adquisición de las muchas pajas

de agua que sin duda se hallarían contenidas en la necesaria para dar movimiento al molino, es caso abiertamente contrario á la justicia, al Acuerdo, á la ley y á la conveniencia pública, y que, por otra parte, constituiría en favor de Campuzano un privilegio enteramente gratuíto.

Imagínese, en efecto, que para mover su molino Campuzano necesitara usar de la mitad, de las dos terceras partes, de la totalidad del agua limpia que los actuales empresarios conducen por el acueducto. Aun así sería necesario dictar en favor de Campuzano la sentencia, si para para probar su acción Campuzano hubiese presentado plena prueba de su derecho, y en tal caso y siendo el agua propiedad particular y exclusiva de Campuzano, habría necesidad de promover el correspondiente juicio de expropiación para poder proveer de aguas á los habitantes de la ciudad.

Mas no es así; y á la luz del Acuerdo, Campuzano á lo más á que tal vez puede tener derecho es á reconstruír ó á conservar su cañería y á tomar del lugar donde exista agua pública, mediante el correspondiente permiso de la competente autoridad y en la cantidad por ella fijada, el agua que le convenga.

Si esta conclusión no fuera la única á que se puede llegar mediante el estudio escrupuloso de la escritura de 1880 y del Acuerdo á que en ella se alude, solamente habría otra, á saber: el parágrafo 4.° del artículo 27 del mencionado Acuerdo municipal es del tenor siguiente:

"Art. 27.

"§ 4.° Cuando el dueño de un edificio, quinta ó solar sólo compruebe que tiene derecho á disfrutar de agua, pero no pueda comprobar con certeza el número de pajas á que tenga derecho, sólo se le permitirá poner un tubo que mida *una sola paja*. Esto se determina en atención á que las entidades encargadas de la administración de las aguas en tiempos anteriores, en general no concedieron sino el uso de una paja en cada caso, previendo, sin duda, con prudencia, las mayores ó futuras necesidades de una poblaciónn cada día más numerosa."

De conformidad con esta disposición, si Campuzano comprueba con su escritura de 1880, que tiene derecho á disfrutar de agua, pero no puede comprobar con certeza el número de pajas á que ese derecho corresponda, sólo se le podría permitir un tubo que mida una paja. Y como en autos aparece que los actuales empresarios dejaron en el lugar conveniente y en favor de Campuzano un tubo para que por él pasara una cantidad de agua, que es por lo menos una paja, visto es que no hay lugar á demandar de ellos cosa diferente.

Véase ahora qué disponen sobre la materia los Códigos Civil y Político, y si dichas disposiciones guardan conformidad, con las ya examinadas del Acuerdo municipal.

El artículo 698 del Código Civil de Cundinamarca decía:

"Artículo 698. Son bienes de propiedad pública.....

.....

"3.° Los que pertenecen al común de una ciudad, villa, parroquia ó aldea, que se llaman 'bienes municipales."

Y el 699 dice que los bienes pertenecientes al común de una ciudad, villa, parroquia ó aldea, son de la competencia del Código Político y Municipal.

El artículo 331 del Código Político y Municipal decía lo siguiente:

"Artículo 331. Las vías, fuentes y acueductos públicos, como bienes de uso común, no podrán enajenarse ni reducirse en ningún caso. Toda ocupación permanente que se haga de estos objetos, es atentatoria á los derechos del Común, y los que en ella tengan parte serán obligados á restituír, en cualquier tiempo que sea, la parte ocupada y un tanto más de su valor, además de los daños y perjuicios de que puedan ser responsables."

Y el 344, así:

"Artículo 344. Las Corporaciones municipales pueden imponer contribuciones sobre los objetos y en la forma que se expresan en este artículo.....

.....

"5.° Sobre las aguas que se tomen de los acueductos públicos para uso especial de los particulares, la mitad de esta contribución, por lo menos, se invertirá en la conservación y mejora de los mismos acueductos, y en la mejora y establecimiento de fuentes públicas."

De manera que, conforme á estas disposiciones, estaba en el año de 1880 prohibida la enajenación, como lo está hoy, y aun la reducción de las fuentes y los acueductos públicos, y apenas sí podía la Municipalidad imponer contribuciones sobre ciertos objetos, y entre ellos sobre las aguas del común.

Pero el artículo 924 del Código Civil era del tenor siguiente:

"Artículo 924. Las aguas que corren por un cauce artificial construído á expensa ajena, pertenecen exclusivamente al que con los requisitos legales haya construído el cauce."

Estas citas legales bastan para demostrar, sin necesidad de mayores explicaciones, que estudiando la presente controversia desde el punto de vista legal, ó sea de las disposiciones aplicables de los Códigos Civil y Político, se llega á conclusiones idénticas á las que se han deducido del Acuerdo.

Falta sólo examinar si bajo el imperio de la legislación española que dejó de regir en Cundinamarca el día 1.° de Enero de 1860, mediante la sanción del Código Civil de dicho extinguido Estado, los antecesores de Campuzano en la propiedad del molino, obtuvieron algún título justo, en virtud del cual pueda aquél sostener un derecho real para tomar del acueducto público construído por los empresarios para la provisión de aguas potables por tubería de hierro, el agua necesaria para mover su molino.

A este respecto, la parte demandante sostiene tres cosas principales, á saber:

1.ª Que en autos hay indicios suficientes y que forman plena prueba, para colegir de ellos que en tiempos pasados se hizo merced de aguas, en el siglo XVII, por el Soberano, á D. Pedro Solís de Valenzuela, y que esta concesión permitió que, corriendo desde entonces el tiempo necesario para que los demás dueños de molinos ganasen por prescripción contra Valenzuela el derecho al agua, Campuzano, que representa á uno de los dueños de dichos molinos, ganase también, por ese mismo medio, el derecho á usar de dicha agua;

2.ª Que en autos figura un título antiguo, hallado entre los papeles del convento de Predicadores de Bogotá, del cual título se deduce la merced de aguas que se hizo en tiempos pasados á uno de los antecesores de dicho convento en la propiedad del molino;

3.ª Que según el antiguo derecho, las cosas comunes de los lugares y ciudades, podían adquirirse por tiempo inmemorial, y que este medio de adquisición está en el presente caso perfectamente demostrado, porque Campuzano y sus antecesores en la posesión y goce del agua disputada, junto con los demás dueños de molinos movidos por las aguas de la acequia de ese nombre, han venido poseyendo y gozando de ese derecho desde tiempo inmemorial. Acerca de este tercer punto, el Juez de primera instancia, después de estudiar detenidamente lo alegado por el demandante sobre prescripción y sobre tiempo inmemorial, consignó en su sentencia, los siguientes conceptos: "El goce inmemorial del agua queda, pues, comprobado; y de aquí surge la presunción de que, en su origen, quizá en la época de la fundación de la ciudad, se hizo merced de ella, por la autoridad correspondiente, al primero que la extrajo del río é hizo las obras necesarias para conducirla á los molinos, á fin de utilizarla como fuerza motriz."

La Corte observa respecto de estos tres puntos:

1.° Concediendo que fuera evidente que, como afirma el doctor Alejo de la Torre en su erudito alegato final, esté plenamente demostrado, de conformidad con los artículos 590 y 591 del Código Judicial, es decir, por medio de indicios que forman plena prueba, que Campuzano y sus causantes, desde época muy remota, igual poco más ó menos á la de la fundación de Bogotá, hayan estado en posesión y goce del agua necesaria para mover el molino de Almansa; y aun concediendo que del documento exhibido para comprobar que entre D. Pedro Solís de Valenzuela y Juan Bautista Castrellón, ocurrió á mediados del siglo XVII una demanda sobre el uso de las aguas de que disfrutaban los demandantes para dar movimiento á sus respectivos molinos, se deduzca necesariamente que el primero de los dos tenía merced de aguas, otor-

gada por el Soberano, y que Campuzano representa hoy derechos en aquel entonces legítimamente adquiridos, no es con todo posible pasar de estos supuestos así concedidos á derivar la consecuencia de que Campuzano tenga hoy derecho de exigir de los actuales empresarios de la provisión de aguas á la ciudad de Bogotá por tubería de hierro, le permitan tomar del acueducto por ellos construído, el agua necesaria para mover su molino; y no es posible deducir tal consecuencia, porque en ese mismo alegato el doctor de la Torre declara varias veces y afirma con seguridad, que la antigua acequia de Las-Aguas, fué obra de construcción particular. Al folio sexto del expresado alegato se halla el siguiente trozo: "Que esta acequia es obra de particulares y no de la ciudad, aparece del memorial dirigido por Castrellón al Alcalde, en el cual dice que fué construído por sus antecesores, y que si Solís de Valenzuela quiere aprovecharse de la merced de aguas, debe tomarlas éstas del río, construyendo sus propias acequias. Esto lo dice Castrellón á la autoridad pública de la ciudad, cuando ésta apenas tenía un siglo de fundada, y no podían haberse oscurecido los orígenes de la acequia, por el trascurso del tiempo; y era ciertamente imposible que un particular afirmara ante la autoridad de una ciudad reducida y de reciente fundación, que una acequia le pertenecía, si ella hubiese sido propiedad del público en aquella época. El memorial de Castrellón pone, pues, de manifiesto que en su tiempo la acequia de las aguas era tenida públicamente como obra particular. Que el Municipio ha continuado después considerándola como tal, aparece de la nota que el señor Bruno Maldonado, como Jefe municipal de la ciudad, dirigió á mi poderdante para que hiciera ciertas composiciones en la acequia; estas aguas están designadas así en la nota: "Las aguas que del Boquerón se dividen para abastecer los establecimientos que se hallen desde la Fábrica de tejidos hasta el 'Molino del Cubo.' Que las aguas son tomadas del río y no del acueducto, está consignado también en dicha nota, así: 'Como estas aguas se han tomado del río para usos particulares, no cree el infrascrito que el Distrito deba invertir fondos en evitar un derrumbe en el punto indicado, y sí estima que son los propietarios de los establecimientos que disfrutan de ellas, los que están obligados á construír una obra sólida con tal objeto (cuaderno de pruebas del demandante)."

Esta trascripción habla tan claro acerca del concepto que el demandante tiene respecto de que las aguas de su molino deben ser tomadas directamente del río de San Francisco, por cañería propia reconstruída y conservada ó reparada por él, que hace innecesaria cualquiera otra consideración referente á este punto.

Esto mismo es, como se ha demostrado yá, lo único que permitían tanto el Acuerdo número 4.°, expedido por la Municipalidad en 1880, como el artículo 924 del Código Civil de Cundinamarca, en correspondencia con el 331 del Político y Municipal. Empero, como no es esto lo intentado en la demanda, sino otra cosa totalmente diferente, á saber: que los actuales empresarios de la provisión de aguas se abstengan de quitar á Campuzano del acueducto por ellos construído la necesaria para mover su molino, visto es, que la justicia exige absolver á los demandados, y

2.° En cuanto á lo alegado por el demandante sobre título derivado por él, según la legislación española, por razón de prescripción, ó á causa de tiempo inmemorial, en su sentencia el Tribunal expuso muy acertadamente que la Ley 7.ª del título 29, de la partida 3.ª, prohibe terminantemente que hombre alguno pueda ganar por *tiempo* las cosas de uso común de las ciudades y villas; y que el título 8.° del libro 11 de la Novísima Recopilación Castellana, al expresar las excepciones hechas respecto de lo dispuesto por la ley anteriormente citada, calló acerca de las cosas del común.

En mérito de las consideraciones expuestas, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve:

1.° Anúlase la sentencia que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca pronunció el día treinta de Noviembre de mil ochocientos noventa y uno en la segunda instancia del juicio civil ordinario, promovido por Julián Campuzano contra Antonio Martínez de la Cuadra y Ramón B. Jimeno, como empresarios para la provisión de aguas á la ciudad de Bogotá por tubería de hierro, para que se abstuvieran de quitarle de la acequia el agua necesaria para dar movimiento al molino de su propiedad, denominado de Almansa, y para que le indemnizaran ciertos perjuicios;

2.° Absuélvese á los demandados de los cargos contra ellos deducidos en la demanda, cargos que no han sido probados.

Notifíquese, cópiese, publíquese, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente al lugar de su procedencia.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. SALOMÓN FORERO.—ANÍBAL GALINDO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, catorce de Abril de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Gregorio Gómez G., como apoderado de Mercedes y María Josefa Carrasquilla, pide en nombre de éstas á la Corte, se les conceda la recompensa unitaria definitiva que les corresponde como nietas legítimas que son de Pedro Carrasquilla, militar de la Independencia.

Hánse probado en apoyo de la demanda los siguientes hechos:

1.° Que el mencionado militar Pedro Carrasquilla prestó sus servicios á la causa de la Independencia desde el año de 1810 en adelante é hizo una carrera verdaderamente honrosa, subiendo de grado en grado, hasta que, en dos de Mayo de mil ochocientos cuarenta y tres, el Presidente de la Nueva Granada, General Pedro A. Herrán, en reconocimiento de sus méritos, lo ascendió á Coronel efectivo de infantería. Constan estos hechos en la copia de la hoja de servicios y en el despacho de Coronel expedido por el Oficial encargado del archivo republicano, con la debida autenticación;

2.° Que dicho Coronel fué casado con Cruz Ortega, según consta en la respectiva partida de matrimonio expedida en copia autorizada por el Cura de la Catedral de Bogotá; y que tanto él como ella murieron yá, según lo certifican el señor Ministro de Guerra y el Archivero municipal de Bogotá;

3.° Que Ricardo Carrasquilla fué hijo legítimo de los expresados esposos, Coronel Pedro Carrasquilla y Cruz Ortega, mediante declaración rendida ante el Juez 2.° Ejecutor de Bogotá, por Carlos Abondano y Ramón Argáez; prueba supletoria que se admite á falta de la directa, por aparecer comprobado, mediante el certificado del Cura de Quibdó, que en los libros parroquiales de este Distrito, donde se ha acreditado que Ricardo nació, no existe la partida de bautismo respectiva;

4.° Que Ricardo Carrasquilla se casó con Emilia Ortega, el 1.° de Diciembre de 1855, como se establece mediante la copia correspondiente de la partida de matrimonio expedida por el Cura de San Victorino de Bogotá;

5.° Que Mercedes y María Josefa Carrasquilla son hijas legítimas de Ricardo Carrasquilla y Emilia Ortega, y en consecuencia nietas del Coronel Pedro Carrasquilla, según resulta de las copias de las respectivas partidas de bautismo expedidas por el Cura de la Catedral de Bogotá;

6.° Que Ricardo Carrasquilla murió en Diciembre de 1886, como lo demuestra la respectiva partida de defunción expedida en copia por el Cura de Egipto de Bogotá;

7.° Que las demandantes son solteras, han observado siempre una conducta ejemplar, han guardado con su familia una completa armonía, y no tienen renta de ninguna clase, pues, al contrario, han sido y son muy pobres, hechos comprobados por medio de las declaraciones rendidas ante el Juez 2.° Ejecutor de Bogotá, por Diego Fallon y Bernardo Caicedo;

8.° Que las demandantes no han recibido hasta ahora recompensa alguna del Tesoro nacional; y que por razón de los servicios prestados por el Coronel Pedro Carrasquilla,

ninguna de las dos ha sido hasta ahora recompensada; cosas que se deducen de los certificados que el señor Ministro del Tesoro expidió el treinta de Junio y el primero de Septiembre del año pasado;

9.° Que los otros deudos del Coronel Carrasquilla son: Belén Carrasquilla, hermana de Ricardo; el Presbítero doctor Rafael Carrasquilla; Pedro é Ignacio Carrasquilla, hermanos legítimos de las demandantes; y que todos cuatro han manifestado á la Corte, por medio de memoriales debidamente presentados, que si algún derecho tuvieren á participar de la recompensa á que deben dar lugar los servicios prestados á la República por el expresado Coronel, lo renuncian expresamente en favor de las dos demandantes Mercedes y María Josefa Carrasquilla. Por otra parte los tres varones mencionados son mayores de edad y no se hallan en ninguno de los casos en que la ley permite pedir recompensa, y en cuanto á la señora Belén es dudoso su derecho, pues para que lo tuviera sería necesario que ella no gozara de una renta anual de seiscientos pesos, y

10. En virtud de auto para mejor proveer, pronunciado por la Corte, en veintidós de Noviembre último, se han traído á los autos la partida de defunción de la señora Eusebia Carrasquilla, hija del Coronel Carrasquilla, que murió soltera; y un certificado expedido por el Cura de la Catedral de Cartagena, con el cual se acredita que á los muertos de cólera en esa ciudad el año de 1849, no se les hizo entierro público, por lo que tampoco se asentó partida de defunción respecto del Coronel Pedro Carrasquilla, muerto entonces, en aquella ciudad, víctima de dicha epidemia. De lo cual resulta que es aceptable, de conformidad con el artículo 51 de la Ley 84, la prueba supletoria que se ha exhibido y de que yá se ha hecho mérito para dar por comprobado legalmente el fallecimiento del expresado Coronel de la Indepencia Pedro Carrasquilla.

Estos hechos, suficientemente comprobados, son los que según la ley se requieren para dar por bien probada la demanda; razón por la que la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el parecer del señor Procurador, declara que en virtud de las disposiciones de los artículos 2.° (inciso 1.°), 5.°, 9.° y 48 de la Ley 84 de 1890, y por ser nietas legítimas del Coronel Pedro Carrasquilla, Mercedes y María Josefa Carrasquilla, tienen derecho á una recompensa unitaria definitiva de seis mil setecientos veinte pesos ($ 6,720), que deben dividirse por mitad entre las dos, y que se les pagarán del Tesoro público.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta*, avísese á Su Señoría el Ministro de Guerra y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, catorce de Abril de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: La Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, creada por la Ley 44 de 1886, en resolución número 5,196, dictada en seis de Junio del año pasado, negó el reconocimiento á cargo del Tesoro, y favor de Santos Hurtado, de la suma de cinco mil doscientos sesenta pesos ($ 5,260), como valor de nueve caballos estimados en cien pesos ($ 100) cada uno, y tres mulas á ciento veinte pesos ($ 120) cada una, cuyos semovientes le fueron expropiados el día ocho de Junio de mil ochocientos ochenta y cinco, y doscientas cincuenta reses vacunas que le fueron tomadas al mismo *el día dos del propio Junio*; habiéndose verificado todos esos actos de expropiación por Rafael Bellicia, en su carácter de Jefe civil y militar de la Sección de Pore, en el Territorio de Casanare.

La referida Comisión, sin entrar en el examen de las pruebas testimoniales con las que sirven de fundamento á la demanda, decidió ésta negativamente, como queda dicho, porque no se acompañó la relación jurada que prescribe dicha Ley 44 de 1886, y que debió ser presentada en oportunidad á la Gobernación del Departamento de Boyacá, para que fuese registrada.

El Ministerio del Tesoro, con fecha seis de Agosto del año pasado, y en resolución número 3,108, impartió su aprobación á la que pronunció la Comisión administrativa; y apelada que fué para ante esta Superioridad por el interesado, se le otorgó el recurso interpuesto.

Sustanciado el recurso, se procede á determinarlo, y para ello la Corte considera:

La relación jurada es una prueba indispensable en esta clase de juicios, cuando se refieren á actos de expropiación, de manera que si no se presenta, no puede ni debe reconocerse el crédito, por más que aparezca comprobado en otra forma. En algunos casos en que ha sido presentada á la Gobernación respectiva la lista de los objetos expropiados, ó sea la relación de ellos, con expresión de todas las circunstancias que prescribe la ley, pero que no se menciona que al formarla el interesado, lo hace bajo la solemnidad del juramento, la Corte ha dispuesto que tales relaciones se juren ante un Juez comisionado, con el fin de subsanar la omisión. Mas en el caso de que se trata no hay analogía con los indicados, pues en éstos, si es cierto que no se exhibe una relación jurada, sí consta que se ha presentado á la primera autoridad política del Departamento, en la debida oportunidad una relación de las cosas que han sido objeto de las expropiaciones; mientras en el caso que se examina la omisión ha sido absoluta del deber de presentar la relación para su registro.

Así es que no puede estimarse en el presente juicio una manifestación jurada, hecha después de incoado, con un documento supletorio, de la relación que prescribe la ley; y en tal virtud, la Corte, sin necesidad de entrar en el estudio de las demás pruebas, supuesto que falta la más esencial, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el concepto del señor Fiscal especial, confirma la resolución apelada.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez y siete de Abril de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: María Fidela Caicedo, con el carácter de hermana de Marcelino Caicedo, que se dice murió en la guerra de 1860 defendiendo al Gobierno de la Confederación Granadina, pide se le conceda del Tesoro nacional, de acuerdo con la Ley 84 de 1890, una recompensa militar unitaria de setecientos cuatro pesos ($ 704).

Dada al negocio la sustanciación debida y oído el concepto el señor Procurador general de la Nación, se procede á resolver.

La Ley 84 de 1890 dice en su artículo 1.° que las recompensas militares pueden obtenerse por el mismo agraciado ó por algunos de sus deudos, entre ellos sus hermanas, siempre que sean célibes, condición que no reúne la peticionaria, por haber se casado, aunque actualmente está viuda.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el concepto del señor Procurador, niega la recompensa militar solicitada.

Notifíquese, cópiese y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

IMPRENTA DE ANTONIO M. SILVESTRE.
Director, Tomás Galarza.

REPÚBLICA DE COLOMBIA.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AÑO VIII | Bogotá, 3 de Junio de 1893. | NÚM. 394.

CONTENIDO.

Págs.

Cambio de personal 241

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

La que revoca la del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cauca, en la demanda ordinaria sobre nulidad de la posesión de la mina denominada "La-Granja." (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas) 241

La que concede una recompensa del Tesoro nacional á Juan Domingo Soseué, como inválido de la guerra de 1876. (Magistrado ponente, doctor Galindo) 243

La que concede una recompensa á Lucinda Ortiz, en su carácter de viuda del Capitán Alcides Fernández, muerto en la guerra de 1876. (Magistrado ponente, doctor Galindo) 244

La que revoca la resolución del Ministerio del Tesoro en la reclamación de Manuel José Alvarez, por empréstitos forzosos el año de 1885. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas) 244

NEGOCIOS CRIMINALES.

La que reformó la pronunciada por el Consejo de Guerra en el juicio militar seguido contra Aristides Liévano, por los delitos de ataque y heridas á un superior. (Magistrado ponente, doctor Corrales) ... 245

NEGOCIOS VARIOS.

Diligencia de visita practicada en la Secretaría de la Corte el 31 de Mayo de 1893 247

Relación de los negocios despachados por la Corte Suprema durante el mes de Mayo de 1893 247

GACETA JUDICIAL.

CAMBIO DE PERSONAL.

El 8 del pasado mes de Mayo (1893) tomó posesión del puesto de Magistrado principal el señor doctor Abraham Fernández de Soto, y se retiró el suplente, señor doctor Juan Evangelista Trujillo.

La Corte quedó constituída así: Presidente, doctor Lucio A. Pombo; Vicepresidente, Luis M. Isaza; Baltasar Botero Uribe, Jesús Casas Rojas, Manuel E. Corrales, Abraham Fernández de Soto y Aníbal Galindo.

Bogotá, Junio 1.° de 1893.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez y ocho de Abril de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Habiendo el Fiscal del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cauca intentado, ante dicho Tribunal, demanda ordinaria para que se declare la nulidad de la posesión que de la mina denominada "La-Granja," dió el Alcalde de Marmato á Pedro Ríos y José Joaquín Bayer el día doce de Octubre de mil ochocientos ochenta y siete, así como la nulidad del título que el Gobernador del Cauca expidió á favor de los expresados señores y respecto de la misma mina, el Tribunal, en decisión de ocho de Agosto último, declaró que el demandante no había probado su acción, y absolvió, en consecuencia, á los demandados.

De esta decisión apeló el Fiscal, y, concedido el recurso, subió el asunto á esta Superioridad, competente para resolverlo, ó en caso de que no se hubiese interpuesto, para conocer de la consulta á que había lugar por disposición expresa de la ley, consulta que fué ordenada por el Tribunal.

Sustanciándose el recurso, como lo previene el capítulo segundo del título IX de la Ley 105 de 1890, pidió el señor Procurador, de conformidad con el derecho que le otorga el artículo 159 ibidem, que se abriera el juicio á prueba por el término legal; y por medio del auto de fecha diez de Noviembre último, así se dispuso, fijando como término el período de quince días.

Más tarde, el diez y siete de Noviembre, el mismo señor Procurador, en consideración á que algunas de las pruebas pedidas debían practicarse en el Circuito de Toro y á la distancia considerable que separa á este lugar de Bogotá, pidió que previa la respectiva articulación, se concediese un término extraordinario para la práctica de dichas pruebas. Surtida la articulación se otorgó, por auto de veinticinco de Noviembre último, un término doble del de la distancia y diez días más para las pruebas que debían practicarse en Marmato.

Durante el término probatorio, produjéronse, á petición del Ministerio Público, las siguientes pruebas:

1.ª El señor Ministro de Gobierno de la República envió á la Corte dos ejemplares autenticados del *Diario Oficial* número 7,095, correspondiente al cuatro de Julio de 1887, en que están publicadas las siguientes piezas referentes al asunto del presente litigio, á saber:

a) El memorial que en trece de Abril de 1887 elevó al Ministerio de Fomento Carlos Goldsworty, como apoderado general de "The Western Andes Mining Company (Limited)," en el cual pidió que dictase el Ministerio una resolución que fijase cuáles eran las minas amparadas por el artículo 6.° de la Ley 38 de 15 de Marzo de 1887, é impidiese, por este medio, que tuvieran los arrendatarios de las minas de Marmato, Supía y Santa-Ana ciertas perturbaciones;

b) La resolución que con tal motivo dictó el Ministerio de Fomento, en veintiuno de Junio del propio año de 1887, de conformidad con lo solicitado por Goldsworty;

c) Una copia autorizada de la diligencia de posesión de las minas que el Juez Político del cantón de la villa de Supía dió al doctor Francisco Raulin, apoderado de la Casa de B. A. Goldsworty, el día catorce de Agosto de 1825;

2.° La diligencia original extendida por el Juez de lo Civil del Circuito de Marmato, en este lugar, el veinticinco de Enero último, en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte, sobre reconocimiento de la mina de "La-Granja," diligencia que por su importancia se inserta á continuación, y es como sigue:

"En veinticinco de Enero de mil ochocientos noventa y tres, siendo el día y hora señalados por auto de fecha veintiuno de los corrientes, para la práctica del reconocimiento de la mina de 'La-Granja,' mandado practicar por la Corte Suprema de Justicia en el despacho que antecede, el señor Juez civil del Circuito de Marmato, asociado de los dos testigos nombrados y juramentados al efecto, señores Abigaíl Piedrahita y Adolfo Suárez y el suscrito Secretario, se trasladó al sitio de 'La-Granja,' Municipio de Marmato, donde

se halla ubicada la mina de ese nombre, y una vez allí se reconocieron los linderos de las minas nacionales denominadas 'Minas de oro y plata de Marmato y Supía,' y después de que los testigos se manifestaron suficientemente ilustrados sobre la cuestión á que se refiere el reconocimiento, y luégo que se dió lectura al *Diario Oficial* número 7,095, de cuatro de Julio de 1887, adjunto al despacho, en la parte que trata de la diligencia de entrega que de dichas minas se hizo en el año de 1825, á Francisco Roulin, primitivo arrendatario de ellas, dichos testigos expusieron: que reconocidos los linderos del mineral de 'Cien-pesos' y los que demarcan la mina de 'La-Granja,' han visto que ésta está comprendida dentro de los linderos de aquélla; cuya mina de 'Cien-pesos' es una de las de oro y plata de Marmato y Supía, de que habla el despacho que motiva esta diligencia. El señor Juez, visto el dictamen de los testigos, y de conformidad con el reconocimiento que él mismo, personalmente, ha hecho con éstos, le imparte su aprobación, por ser un hecho cierto que la mina de 'La-Granja' se halla comprendida dentro de las minas nacionales de oro y plata denominadas 'Minas de oro y plata de Marmato y Supía,' como se ve en el croquis que levantó al efecto y se acompaña á la presente diligencia, teniendo en cuenta los linderos que constan en la mencionada diligencia de entrega, hecha en el año de 1825 al señor Roulin, corriente en el *Diario Oficial*, arriba citado.

Con lo que se dió por terminada la presente diligencia, que se firma por los que en ella intervinieron.

Guillermo Santacoloma. — Adolfo Suárez G. — Abigaíl Piedrahita.—Juvenal Aguilar P., Secretario en propiedad."

3.° Copias autorizadas de las diligencias de deslinde y amojonamiento de la mina denominada "Cien-pesos," diligencia practicada en cinco de Junio de mil ochocientos ochenta y ocho, por el Juez del Circuito de Toro y los peritos al efecto nombrados, junto con el respectivo Fiscal; del escrito de oposición presentado por parte del señor José J. Bayer en aquel acto; y de la diligencia de posesión que de dicha mina "Cien-pesos," perteneciente á la Nación, se dió en diez de Agosto de mil ochocientos ochenta y ocho, el señor Fiscal del Circuito de Toro, como representante de la Nación; documentos de los cuales también se insertan, por su importancia, el primero y el tercero, y son como siguen:

"El infrascrito Secretario del Juzgado civil del Circuito de Marmato, en cumplimiento de lo ordenado por el señor Juez en su auto anterior, expide la copia siguiente:

'En cinco de Junio de mil ochocientos ochenta y ocho, día señalado para verificar el deslinde y amojonamiento de la mina denominada 'Cien-pesos,' perteneciente al Gobierno de la Nación, el infrascrito Juez, acompañado de su Secretario, de los interesados, señores José María Hoyos, representante, como Fiscal del Circuito, de los intereses de la Nación y Carlos Goldsworty, apoderado legal de 'The Werstern Mining Company (Limited),' de los peritos, señores Lorenzo M. Palomino, Jesús María Franco y Carlos Greinffenstein, nombrados los dos primeros por los interesados presentes, y el último, por el colindante, señor Bartolomé Chaves, quien, á pesar de haber sido citado, no concurrió, se trasladó al punto donde termina la cañada llamada de 'Pedro-Antonio,' y una vez allí, después de posesionar legalmente á los peritos nombrados, los cuales juraron cumplir bien y fielmente y conforme á su leal saber y entender sus deberes de tales, procedió á reconocer la identidad del punto mencionado, y oído que fué el concepto de los peritos, se determinó con toda precisión la cañada llamada de 'Pedro-Antonio' ó 'Los Indios,' y se mandó fijar un mojón en su cabecera, ó sea en el punto donde termina. En seguida se procedió á hacer el reconocimiento de la cañada llamada 'Cien-pesos,' y vista que fué, se determinó ó señaló como otro de los linderos de la mina de cuyo deslinde se trata, disponiendo que se fijara allí otro mojón, en la dirección que marca el mojón que se encontró colocado en el camino que gira de Marmato para Loaysa ó Echendía. De este punto se siguió reconociendo dicha cañada de 'Cien-pesos' hasta su entrada en la de 'Pantano,' y seguido el curso de ésta, se reconoció ó determinó por medio de los dos peritos primeramente mencionados, el punto preciso de su desembocadura en el río Cauca, cuyo punto, por estar determinado como lindero de la mina que se deslinda en el título de propiedad presentado, consistente éste en la diligencia de posesión de fecha veintinueve de Octubre de mil ochocientos veinticinco, se mandó señalar con otro mojón. Acto continuo y desde un lugar dominante, se señaló por los peritos yá mencionados, el sitio ó paraje en que la cañada de 'Pedro Antonio' entra en el río Cauca, y como éste fuera otro de los puntos señalados como lindero en la diligencia de posesión de que se ha hablado, fué igualmente marcado con otro mojón, quedando así, en consecuencia, deslindada y amojonada la mina de 'Cien-pesos,' por los mismos linderos que constan puntualizados en la mencionada diligencia de posesión, esto es, del punto en que la cañada de 'Pedro-Antonio,' ó 'Los Judíos' entra en el río Cauca, cañada arriba, hasta su cabecera, de aquí, línea recta, á la cañada de 'Cien-pesos' hasta su entrada en la de 'Pantano;' ésta abajo hasta su entrada en el río Cauca; Cauca abajo hasta la entrada en él de la cañada de 'Pedro-Antonio' ó 'Los Indios,' primer lindero. Se hace constar, primero: que para hacer el reconocimiento de los linderos puntualizados en la presente diligencia, se oyó el dictamen de los peritos; se tuvo á la vista el título en que la Nación funda su derecho de propiedad, y se examinaron, con las formalidades legales, y bajo la religiosidad del juramento, los testigos Eudoro Lenis y Ricardo Suárez; segundo, que aunque el señor José Joaquín Bayer, con varios documentos, y entre éstos una diligencia de posesión de la mina de 'La-Granja,' dada por el Alcalde del Distrito en cumplimiento de lo ordenado por el Gobierno del Departamento, y la escritura pública número ciento sesenta y uno de treinta de Abril de mil ochocientos ochenta y uno, en que consta la compra hecha por Pedro Ríos de la finca de 'La-Granja,' se presentó haciendo oposición al deslinde de la mina de 'Cien-pesos;' como tales mina y finca de 'La-Granja' están comprendidas dentro de los linderos generales de aquélla, el Juez, considerando que el deslinde, aun cuando puede constituír un estado posesorio y servir también de justo título para prescripción si continúa la posesión con buena fe por el tiempo que la ley exige, no da ni quita por sí sólo derechos legalmente adquiridos, le dejó su derecho á salvo, para que lo hiciera valer en la forma y dentro del término que la ley señala; declarando legalmente practicado el deslinde y amojonamiento de la mina de 'Cien-pesos,' perteneciente á la Nación, por los linderos expresados en la presente diligencia; tercero, que siéndole necesarios al señor Bayer los documentos presentados, para intentar el juicio á que la ley le da derecho, se le han mandado devolver, agregando únicamente al juicio de deslinde, el escrito en que consta su presentación, el cual ha quedado resuelto en el punto que antecede, y cuarto, que en el presente deslinde, por tratarse más de las pertenencias que de la mina de 'Cien-pesos,' se han observado disposiciones contenidas en el capítulo V, título XI, libro segundo del Código Judicial de la Nación (edición del doctor Angarita).

"Con lo cual se concluyó la presente diligencia que firman todos los que han intervenido en ella con el Juez y el infrascrito Secretario; disponiendo que los mojones mandados fijar sean de material durable y marcados con los números 1, 2, 3 y 4, empezando por el mojón situado en la entrada de la cañada de 'Pedro-Antonio' ó 'Los-Indios' en el río Cauca, y terminando en la confluencia ó entrada de 'Pantano' en dicho río.

Marco Tulio Palau S. — El Fiscal, *José M. Hoyos. — Carlos Goldsworty. — Lorenzo M. Palomino. — Jesús María Franco. — Carlos Greinffenstein.—Eudoro Lenis.—Ricardo Suárez. — José J. Bayer. — Juan Bautista Betancourt*, Secretario en propiedad.

"DILIGENCIA DE POSESIÓN.

"En diez de Agosto de mil ochocientos ochenta y ocho, día señalado para llevar á efecto la posesión de la mina denominada 'Cien-pesos,' perteneciente á la Nación, el infrascrito Juez, acompañado de su Secretario, de los interesados, señores José María Hoyos, Fiscal del Circuito, y represen-

tante de los intereses de la Nación; Carlos GoldsWorty, apoderado de 'The Werstern Andes Mining Company (Limited),' y de los testigos, señores Inocencio Quebrada y Antonio García, sin que concurriera el colindante señor Bartolomé Chaves, á pesar de haber sido citado, se trasladó á un punto desde el cual se dominan los linderos señalados á la mina de 'Cien-pesos,' por la diligencia de fecha cinco de Junio último, y una vez allí, dispuso que el Secretario del Juzgado informara si por parte de los conlindantes se había hecho alguna contradicción respecto al deslinde practicado, y como tal empleado manifestara que, con excepción de la oposición hecha por el señor José Joaquín Bayer, como apoderado de Pedro Ríos y en su propio nombre, con respecto al globo de tierra y mina denominada 'La-Granja,' los colindantes, señores Chaves y Goldsworty, únicos citados por el señor Fiscal no han hecho observación alguna á tal deslinde, resolvió dar posesión. En este estado, el señor Lázaro Salas B., se presentó con poder conferido por el expresado señor Bayer, y pidió, por medio de un memorial, que fué leído, que se le tuviera como apoderado ó representante del predicho señor Bayer, y 2.° que si la contraparte no conviene en que se excluya la mina de 'La-Granja' de la posesión que va á darse de la de 'Cien-pesos,' se suspenda tal acto, por oponerse á él en debida forma en nombre de su poderdante; agregando que debía certificarse por el Secretario, si es verdad que el señor Bayer, por sí y en representación del señor Pedro Ríos, formalizó la oposición que hizo en el acto del deslinde.

"En tal virtud, el señor Juez resolvió: 1.° remitir al señor Lázaro Salas B., como apoderado del señor José Joaquín Bayer, y mandar poner el poder presentado en conocimiento del señor Fiscal, para los efectos del artículo 332 del Código Judicial; 2.° reconocer al señor Bayer su derecho, que alega con respecto á la mina y terreno de 'La-Granja,' para que lo haga valer en el juicio ordinario que yá tiene instaurado, y 3.° dar posesión á la Nación, en la persona de su representante legal el señor Fiscal del Circuito de Toro, de la mina de 'Cien-pesos,' por los siguientes linderos: del punto en que la cañada de 'Pedro-Antonio' ó 'Los-Indios," entra en el río Cauca, cañada arriba, hasta su cabecera; de aquí, línea recta, á la cañada de 'Cien-pesos,' hasta su entrada en la de 'Pantano;' ésta abajo, hasta su entrada en el río Cauca; Cauca abajo, hasta la entrada en él de la cañada de 'Pedro-Antonio' ó 'Los-Indios,' primer lindero, reconociendo á los otros colindantes la posesión de sus propiedades por los linderos que constan en sus respectivos títulos. Como el señor Salas B. manifestó que apela de esta resolución, el señor Juez, teniendo presente: 1.° que la posesión que hoy se da á la Nación de la mina de 'Cien-pesos,' no es otra cosa que la ratificación de la que en el año de mil ochocientos veinticinco, se dió al señor doctor Roulin, por el señor Juez político del cantón de la villa de Supía; 2.° que el señor Bayer no ha sido citado ni reconocido como colindante, y 3.° que dicho señor Bayer sí se cree afectado ó perjudicado con el hecho de la posesión en la propiedad que asegura tener de la mina y terreno de 'La-Granja,' puede hacer valer sus derechos en el juicio que tiene establecido y hacer uso de todos los recursos legales para impedir ó suspender los actos que puedan afectarle en los derechos que dice tener; resolvió negar la apelación interpuesta, y declaró, en consecuencia, consumado el acto de posesión de que trata la presente diligencia, por los linderos que se han anotado, y en los cuales se fijaron los mojones marcados con los números 1, 2, 3 y 4. Con lo cual se concluyó la presente diligencia, que firman todos los que han intervenido en ella con el señor Juez y el infrascrito Secretario.

"*Marco Tulio Pulau S.—José M. Hoyos.—Carlos Goldsworty.—Lázaro Salas B.* — *Antonio García.* — Rogado por Inocencio Quebrada, que no sabe firmar, *Manuel Cartagena. Juan Bautista Betancourt*, Secretario en propiedad.

"Es copia.—Riosucio, Enero 28 de 1893.—*Juvenal Aguilar P.*, Secretario en propiedad."

Fuera de esto, el Fiscal del Tribunal acompañó á su demanda los documentos que corren á los folios de 24 á 41 del expediente, en los cuales se hallan, en copia debidamente autorizada, las diligencias referentes al aviso, denuncio, posesión y título de la mina de "La-Granja," así como los memoriales en que consta que la Compañía inglesa "Western Andes Mining Company (Limited)," arrendataria de la minas pertenecientes al Gobierno nacional en Marmato y Supía, cumplió con el deber de hacer en tiempo la oposición que le incumbía contra la práctica de aquellas diligencias, alegando, que según el artículo 6.° de la Ley 38 de 1887, no se podían denunciar ni en parte las minas de oro y de plata explotadas por la Nación en Marmato, Supía y Santa-Ana, ni las tierras baldías comprendidas dentro de sus límites; que además de estar esto plenamente definido por la expresada disposición legal, así lo había resuelto terminantemente el Ministerio de Fomento, en virtud de la propia disposición, en documento que corre publicado en el número 7,095 del *Diario Oficial* de fecha veintiuno de Junio de 1887.

Para fallar en definitiva, se considera:

Los documentos así presentados en el juicio sirven para establecer plenamente el siguiente hecho:

La mina de "La-Granja," respecto de la cual se expidió título á Redro Ríos y José Joaquín Bayer, el treinta de Noviembre de 1889, está comprendida dentro de las de Marmato y Supía, que según el artículo 6.° de la mencionada Ley 38 de 1887, no son denunciables, ni en consecuencia se pueden titular en favor de ningún particular.

Basta tener presente la prohibición establecida por el mencionado artículo 6.° de la Ley 38 de 1887, para establecer que el denuncio dado por Ríos y Bayer respecto de la mina de "La-Granja," así como la diligencia de posesion y el título expedido por el Gobernador del Cauca en favor de dichos señores constituyen un objeto ilícito y están comprendidos en la definición general que el artículo 1741 del Código Civil da de la nulidad absoluta, nulidad que habiendo sido pedida por parte legítima debe ser declarada por el Juez competente, que lo es en segunda instancia la Corte, según el inciso 4.° del artículo 12 de la Ley 72 de 1890.

Y por tal consideración, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve:

1.° Revócase la sentencia apelada;

2.° Declárase nulo el título que el Gobernador del Cauca expidió en treinta de Noviembre de 1889, respecto de la mina de "La-Granja" en favor de Pedro Ríos y José J. Bayer, y nula la diligencia de posesión que de la misma mina se había dado antes á los expresados señores.

Notifíquese, cópiese, publíquese, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente al lugar de su procedencia.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, Abril diez y ocho de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Juan Domingo Soscué, mayor de edad, casado y vecino del Distrito de Timbío en el Departamento del Cauca, solicita la recompensa unitaria á que tiene derecho por la invalidez relativa que le causó la herida de bala que recibió en la acción de la Cuchilla del Tambo el veintinueve de Noviembre de mil ochocientos setenta y seis, combatiendo como Sargento 2.° de la 1.ª Compañía del *Batallón Timbío*, de la 5.ª División del Ejército del Gobierno legítimo.

Con las declaraciones de un número plural de testigos idóneos y contestes que dan razón de su dicho, como compañeros de armas del solicitante, aparece plenamente comprobado el hecho en que se funda la demanda, ó sea el de la herida recibida por Soscué en aquel combate, con el grado de Sargento 2.° del Cuerpo antes citado, á lo cual se agrega el reconocimiento oficial de la herida, practicado de orden del señor Gobernador del Departamento del Cauca por los profesores de medicina, doctores Domingo Arboleda, Domingo Cajiao y Alfredo Garcés, folio 15, del cual resulta que, habiendo herido la bala el aparato venal, Soscué ha quedado

sufriendo de una hematuria purulenta, que lo afecta con incapacidad relativa de por vida.

Consta del certificado del Ministerio del Tesoro, folio 21, que el peticionario no ha recibido recompensa alguna militar por esta causa, ni que su nombre figura en el Registro de pensionados.

Y, finalmente, la identidad de la persona del reclamante se halla satisfactoriamente establecida con las declaraciones de cuatro testigos, que lo son: José María Muñoz, Rufino Paz, Ignacio Garzón y Francisco Alegría, como lo exige el artículo 21 de la Ley 84 de 1890.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de conformidad en todo con el dictamen del señor Procurador general, declara á Juan Domingo Soscué acreedor á una recompensa militar unitaria, pagadera del Tesoro nacional, de la suma de ochocientos diez y seis pesos ($ 816).

Notifíquese, cópiese, publíquese, comuníquese para su cumplimiento al Ministerio del Tesoro y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez y ocho de Abril de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Lucinda Ortiz, vecina de la ciudad de Cali, en su carácter de viuda del Capitán Alcides Fernández, muerto en el combate que tuvo lugar en Cali, el veinticuatro de Diciembre de mil ochocientos setenta y seis, defendiendo, á órdenes del Coronel Carlos Patiño, los principios políticos que informan las instituciones que hoy rigen en la República contra las fuerzas del General David Peña, por sí y en nombre de sus menores hijos Roberto y Laurentina, demanda la recompensa militar unitaria á que tienen derecho, de conformidad con las disposiciones de los artículos 1.° y 11 de la Ley 84 de 1890.

Es éste uno de los expedientes más completos de los que en su clase pueden presentarse. Con las declaraciones contestes de tres de sus compañeros de armas: José Julián Muñoz, José Antonio Mercado y Santiago Mercado (fojas 3 á 5), se ha comprobado la muerte de Fernández en el campo de batalla y el empleo de Capitán que investía en las fuerzas del Coronel Patiño, pues perteneciendo oficialmente al Ejército rebelde, ha sido imposible que sus herederos presenten, por no poderse hallar de ello constancia en ningún archivo, el despacho en forma de su empleo militar, ni otros documentos oficiales que, á falta de él, lo comprueben.

La personería de los reclamantes está comprobada con las partidas de su estado civil, expedidas por el Cura Párroco de Jamundí. (Foja 1.ª)

La buena conducta de los peticionarios, su condición de pobres, que la viuda permanece célibe y la menor Laurentina, soltera, son hechos que igualmente se encuentran plenamente comprobados en autos con las declaraciones antes mencionadas y con las de Juan Clímaco Collazos, Agustín Teleche y Jacinto Velásquez. (Folios 18 á 19).

Del certificado del Ministerio del Tesoro (foja 11) aparece que ninguno de los peticionarios ha recibido recompensa alguna del Tesoro nacional por razón de la muerte de su padre, ni que figuren en el registro de pensionados de la República.

Y finalmente con las declaraciones de Manuel María Bonilla y Francisco A. Fernández (folios 13 á 14), ha quedado desvanecida la confesión que por la casi absoluta paridad de los apellidos, se ha hecho en algunas de las piezas del proceso *entre Alcides Fernández ó Hernández* y la identidad del esposo y padre de los reclamantes, Alcides Fernández, con la del Capitán muerto en el combate de veinticuatro de Diciembre de mil ochocientos setenta y seis.

Pero como Roberto Fernández, que cuando se inició el reclamo era menor de edad, es hoy mayor de veintiún años cumplidos, según aparece de su partida de bautismo, de la cual consta que nació el treinta y uno de Octubre de mil ochocientos setenta y uno, la recompensa que se demanda acrece sólo á la viuda y á la hija menor y soltera, Laurentina.

No cree la Corte, á pesar de la benévola opinión del señor Procurador general, que se está en el deber de retardar el fallo para poner oficiosamente en conocimiento de Roberto el hecho de haber salido yá de la menor edad, con el objeto de que pueda optar á la parte que le corresponde en el caso de que se encuentre inutilizado para trabajar, cosa de que ni la más remota alusión se ha hecho en autos.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara á Lucinda Ortiz, en su calidad de viuda, y á Laurentina Fernández, en su calidad de hija menor legítima y soltera del Capitán Alcides Fernández, muerto, como queda dicho, en el combate de veinticuatro de Diciembre de mil ochocientos setenta y seis, en Cali, con derecho á una recompensa militar unitaria pagadera del Tesoro nacional, de tres mil ciento veinte pesos ($ 3,120), divisible por mitad entre las dos agraciadas.

Notifíquese, cópiese, publíquese, comuníquese al Ministerio del Tesoro para su cumplimiento y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintiuno de Abril de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: La Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, por medio de resolución número 4,000, de fecha veinticuatro de Agosto último, negó el reconocimiento de cuatro mil ochocientos ochenta y cuatro pesos ($ 4,884) que Manuel José Alvarez reclama, como cesionario de varios individuos que hicieron empréstitos forzosos el año de 1885 al Gobierno de Antioquia.

El treinta de Septiembre último, bajo el número 3,238, el señor Ministro del Tesoro aprobó aquella resolución, de la cual apeló el interesado para ante esta Superioridad, donde sustanciado legalmente el recurso para decidirlo, se considera:

El argumento en que la Comisión apoyó su expresada resolución consiste en que los recibos exhibidos para comprobar el crédito fueron expedidos por autoridades ó empleados del Gobierno que en Antioquia se reveló contra el nacional el año de 1885; pero la Corte en cuanto á esto ha decidido yá (como puede verse en la *Gaceta Judicial* número 376, de fecha treinta y uno de Mayo último), fallo de veinticuatro de Noviembre de 1892, en demanda intentada por Guillermo Uribe, lo siguiente:

"La Ley 44 de 1886 no indicó la manera cómo debían acreditar los partidarios y sostenedores del Gobierno las exacciones que sufrieron de parte de los rebeldes, y de allí se ha creído que el único modo de justificarlas es con la prueba de testigos, recibida con todas las formalidades requeridas. Pero como los empréstitos y expropiaciones de que trata esta reclamación fueron decretados por el Gobierno del extinguido Estado de Antioquia, que estaba perfectamente organizado y dejaba constancia de sus actos en las oficinas públicas cuyos archivos se encuentran hoy en poder de las autoridades, y con los cuales se han confrontado los recibos presentados, es preciso convenir en que es difícil acreditar mejor con la prueba testimonial esos empréstitos y expropiaciones de lo que lo están con el certificado del Gobernador de Antioquia, que fué expedido en vista de documentos que reposan en las oficinas que tiene á su cargo, porque en derecho vale más la prueba literal preconstituída, que la de testigos."

El caso de que aquí se trata es de la misma especie que el que fué explicado y definido en aquel fallo, y debe, en consecuencia, resolverse según aquella misma doctrina.

Ahora bien, el Gobernador de Antioquia certificó que de los recibos presentados para sustentar esta demanda son legítimos todos los que aparecen marcados con el sello del Tribunal de Cuentas, sin más observación, respecto de algunos de los expedidos á favor de Antonio Mejía E. y Marcelino Uribe, que la que contiene el certificado del folio 74, el

cual hace una rectificación con relación solamente á la cuantía. (Véanse dichos certificados á los folios 79 y 74).

Empero, de la lista de individuos en favor de quienes se expidieron aquellos recibos, hay que excluír aquellos respecto de los cuales no se ha comprobado que fueran partidarios del Gobierno de la República, porque así lo requiere el inciso 2.° del artículo 1.° de la Ley 44 de 1886; y como el certificado que á este respecto expidió el Gobernador de Antioquia sólo comprende á algunos de dichos individuos, visto es que sólo se pueden reconocer las partidas comprobadas respecto de ellos. (Véase el certificado del folio 85).

Además, nótase que Antonio Jesús Uribe, que figura en la reclamación con tres recibos que suman trescientos veinticinco pesos, sólo figura en la relación respectiva presentada al Gobernador para su registro, en doscientos veinticinco.

De manera que examinados los documentos del expediente, sólo los individuos que á continuación se expresan reúnen las condiciones legales necesarias para el reconocimiento solicitado, y son:

Vicente B. Villa é Hijos, por dos mil pesos.....	$ 2,000
Villa y Hernández, por mil pesos...	1,000
Antonio y Braulio Chavarriaga, por quinientos...	500
Antonio Chavarriaga, por sesenta.....	60
Antonio Jesús Uribe, por doscientos veinticinco...	225
Jesús María Restrepo, por ochenta.....	80
Total, tres mil ochocientos sesenta y cinco pesos.	$ 3,865

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca la resolución apelada, y reconoce á cargo del Tesoro público nacional y á favor de Manuel José Alvarez, la suma de tres mil ochocientos sesenta y cinco pesos ($ 3,865), por los empréstitos forzosos consignados por los individuos de la anterior lista en manos de las autoridades rebeldes de Antioquia el año de 1885.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez y siete de Abril de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Por recurso de apelación interpuesto por el Subteniente Aristides Liévano, en su calidad de procesado, y también por su defensor, ha sido remitido á la Corte el expediente relativo al juicio militar seguido contra dicho Oficial, por los delitos de ataque y heridas á un superior, en el cual expediente se dictó por el Consejo de Oficiales generales, reunido en la ciudad de Popayán, el veintiséis de Enero del corriente año, la sentencia definitiva que es materia del recurso y que en su parte resolutiva dice lo siguiente:

"Por tales consideraciones, y habiéndose llenado en el curso de la causa y de la sesión del Consejo los trámites y formalidades legales, según consta en el proceso y en la minuta; y estando resueltas afirmativamente la 1.ª, 2.ª y 4.ª cuestiones de las propuestas por el señor Presidente, y negativamente la 3.ª, y calificada en tercer grado la culpabilidad del reo, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, el Consejo de guerra de Oficiales generales, condena al Subteniente Aristides Liévano, abanderado del *Batallón* 13 *de Junín*, por infracción de los artículos 1635 del Código Militar y 649 del Código Penal, á las penas siguientes:

"1.° A trece meses de reclusión, que sufrirá en el Establecimiento de castigo de esta ciudad, hecha la proporción prevenida en el artículo 133 del Código Penal;

"2.° A la destitución del empleo y lanzamiento del servicio, de acuerdo con el artículo 1565 del Código Militar;

"3.° A la pérdida de toda pensión pagadera por el Tesoro nacional y de los derechos políticos y suspensión de los civiles mientras dure la pena;

"Debe descontarse los tres meses de prisión sufridos yá por Liévano."

Recibido y repartido en este Supremo Tribunal dicho expediente, se ha dado á la segunda instancia la tramitación establecida en la Ley 105 de 1890, poniendo en posesión al defensor nombrado por el mismo procesado y dando vista del propio expediente por el término legal correspondiente al señor Procurador general de la Nación y al citado defensor.

Puesto el asunto en estado de ser decidido, la Corte procede á ello mediante las consideraciones de que pasa á hacer mérito:

El Director de la banda de música del *Batallón Junín*, que hace la guarnición en Popayán, asimilado á Sargento Mayor para los efectos fiscales, denunció, por escrito que figura á fojas 1.ª del proceso, la comisión del delito de ataque á un superior, perpetrado por el Subteniente abanderado del mismo Cuerpo, Aristides Liévano, en la persona del denunciante, y al efecto se expresó así en lo conducente:

"Ayer (28 de Octubre de 1892), á las doce del día, hora señalada para la instrucción de los músicos, en cuyo trabajo me encontraba desempeñando mis deberes, en el recinto del cuartel, se presentó á mí el Subteniente abanderado Aristides Liévano, á reconvenirme en términos groseros y agresivos por haber llevado yo á la instrucción al músico José Pinzón, que se encontraba jugando, lo que hice en cumplimiento de mis deberes y cuyo procedimiento no podía impedirme un inferior sino con escandaloso abuso. Como me negase á dejar sálir á Pinzón, no obstante las atrevidas reconvenciones de Liévano, éste se lanzó sobre mí y me dió un violento golpe en la cara con la mano cerrada, del cual al instante empecé á arrojar una gran cantidad de sangre, que no fué posible contenerla hasta que llegó el facultativo, doctor Juan Nepomuceno Wallis, quien hizo notar, delante de varios Oficiales, que esa gran cantidad de sangre, que no era posible estancarla en el momento, dependía de que me había roto el hueso ó ternilla de la nariz, puesto que me había desviado ésta para el lado derecho, porque el golpe lo sufrí del lado izquierdo."

El Comandante general de la 2.ª División del Ejército dispuso inmediatamente que se instruyera por el Coronel Lisímaco Pizarro, el sumario del caso para averigar el delito denunciado, y nombró al Capitán Ulpiano Arizabaleta para Fiscal de la causa, y ambos Jefes juraron desempeñar bien su respectivo encargo.

En seguida el instructor nombró al Capitán Agustín Lindo para que hiciese las veces de Secretario, y habiendo éste aceptado el cargo, prometió desempeñarlo bien y fielmente. Principióse la averiguación por hacer comparecer al Director de la banda de música, asimilado á Sargento Mayor, Ricardo Gálvez, para que jurase el denuncio que había dirigido al Estado Mayor de la División, y evacuadas todas las citas importantes que se hicieron, el Comandante general, en resolución de veintiocho de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos (folios 40 vuelto y 41), dispuso abrir causa contra el Subteniente abanderado del *Batallón* 13 *de Junín*, Aristides Liévano, por los delitos que define y castiga el capítulo XI, título 3.°, libro 5.° del Código Militar, y que el procesado continuase en la prisión á que había sido reducido.

Posesionado el Sargento Mayor Tomás Carvajal del cargo de defensor del procesado, y notificados uno y otro del auto de proceder, del que abrió la causa á prueba, de los que se dictaron ordenando la práctica de las pruebas pedidas por las partes; del que convocó el Consejo de guerra de Oficiales generales que había de decidir la causa, y finalmente del que señaló día, hora y lugar para la reunión de dicho Cuerpo, se procedió á extender el acta de la sesión, en la cual aparece relacionado todo lo que en aquel acto se practicó, dándose término á él con la sentencia que tuvo á bien dictar el Consejo en los términos arriba expresados.

Apelada dicha sentencia por el procesado y también por su defensor, es de preferencia examinar las razones en que los apelantes se fundan para pedir á la Corte la nulidad del fallo.

Aléganse contra éste varios motivos, á saber, incompetencia de jurisdicción, proveniente de irregularidad en la for-

mación del Consejo de guerra, porque dos de los Vocales ejercieron este cargo después de haber declarado como testigos en el juicio, irregularidad que constituye una causal de impedimento ó recusación, al tenor del artículo 1397 del Código Militar, que prescribe lo siguiente:

"Art. 1397. Son únicos motivos de impedimento ó de recusación en las causas militares.....

"3.° Tener interés directo en la causa ó haber sido testigo en el sumario declarando sobre el hecho motivo del proceso."

Examinado este primer fundamento, resulta que el defensor del procesado recusó en oportunidad á los Vocales General José María González U. y Coronel Lisímaco Pizarro N. (folio 109), porque á solicitud suya habían declarado en el plenario, y tal incidente fué resuelto negativamente en auto de veinticuatro de Enero de este año (folio id.) Si bien el inciso trascrito del artículo 1397 del Código Militar se opone á que el testigo que haya declarado en el sumario sobre el hecho motivo del proceso desempeñe las funciones de Juez ó Vocal del Consejo, en el caso de que se trataba los vocales referidos depusieron sobre puntos ajenos á lo principal de la causa.

Y en efecto, el testimonio rendido por el General González U., en forma de certificado y el dado por el Coronel Pizarro N., en la forma de declaración, que en sustancia son idénticos, no versan sobre lo principal de la causa, ó sea sobre la comisión del delito y sus circunstancias esenciales.

El primero expuso (folio 108):

"Certifico y juro: 1.° que soy mayor de edad, casado, vecino de este lugar y sin generales; 2.° que no tengo conocimiento si el día citado en la pregunta, el Director de la banda de música del *Junín*, llevaba alguna insignia militar; y que el cargo, los honores, la jurisdicción y el mando, la dependencia militar entre el mencionado Director y el Subteniente Aristides Liévano, y las órdenes que aquél pueda dar éste recibir, en servicio militar, están expresados con la claridad necesaria en el Código Militar y en los reglamentos respectivos á los cuales me refiero."

Y el segundo declaró así:

"1. Que es mayor de edad, casado, vecino de este lugar y sin generales;

"2.° Que no sabe si el día del acontecimiento al cual se refiere la pregunta, el señor Director de la Banda de música del *Batallón Junín*, llevaba alguna insignia militar, y que los reglamentos respectivos y el Código Militar, contra cuyas leyes no tendría valor el dicho de testigos, determinan claramente cuáles son los honores, la jurisdicción y el mando de dicho Director y la dependencia militar entre él y el Subteniente Aristides Liévano, así como también las órdenes que aquél pudiera dar y éste recibir."

Como se ve, los testimonios preinsertos no se refieren al hecho de haber el Oficial procesado atacado al Director de la banda, y además se observa que la incompatibilidad en el ejercicio de las funciones de Vocal del Consejo con el carácter que tiene asumido el testigo que haya declarado en el sumario, no se hace extensiva á la persona que declara ó haya declarado en el plenario de la causa. Se comprende bien la diferencia que establece el Código Militar. El testigo en un sumario, puede ser necesario, esto es, que sea preciso obligarlo á declarar para comprobar un hecho sustancial, á falta de otras personas; mientras que el declarante en el plenario ha podido ser obligado á asumir tal carácter por una de las partes, con el objeto de inhabilitarlo para ser Vocal. Pero aun cuando los testimonios del General González U. y del Coronel Pizarro N. se hubiesen dado en el curso de las diligencias sumarias, yá se ha visto que en esos testimonios nada se afirma *ni niega en* orden á las circunstancias principales del hecho criminoso; y por consiguiente, la resolución que dictó el Comandante general para no considerar impedidos á dichos Jefes, con el objeto de servir el cargo de Vocales, es perfectamente legal.

El segundo motivo que alega el procesado para pedir la anulación del proceso en la parte conducente, consiste en afirmar que el Consejo de guerra de Oficiales generales que falló la presente causa hizo errónea aplicación de la pena, por cuanto ella sólo es aplicable á otro delito del que cree que ha cometido, pues si el Director de la banda de música, Ricardo Gálvez, era un empleado público, no lo era militar, y por consiguiente, no podía ser superior del mismo procesado.

Respecto de este punto, aunque es cierto que el Director Ricardo Gálvez no era Sargento Mayor efectivo del Ejército, pues no figura en el escalafón de los Jefes y Oficiales, sino un empleado con funciones militares asimilado al empleo referido, el Consejo de Oficiales generales que falló esta causa, teniendo en cuenta la naturaleza de los servicios que prestaban el mismo Gálvez y el procesado Liévano, consideró al primero como superior del segundo, y en tal concepto hizo la calificación de la culpabilidad del enjuiciado, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1539 del Código Militar, aclarado por el artículo 413 de la Ley 105 de 1890, sobre reformas á los procedimientos judiciales. Le es prohibido, por tanto, á la Corte Suprema, variar la calificación hecha por el Consejo de guerra, en la sentencia que se está revisando.

Es exacto, como lo alega el procesado, que la Corte decide el recurso que se ha interpuesto, como Tribunal de derecho; pero igualmente lo es que el Consejo mencionado, al calificar la culpabilidad del reo, ha tenido por base, entre otras circunstancias, el carácter de Gálvez y su superioridad con relación á aquél; porque si Gálvez no hubiera investido carácter alguno militar, ni hubiera podido reputársele como superior, no habría podido calificarse el delito como militar, ni que éste se hubiera perpetrado en contravención á las leyes que prescriben la disciplina en el Ejército. También se tuvo en cuenta por el Consejo juzgador la circunstancia de que el procesado investía carácter militar, que el hecho punible se cometió dentro del cuartel y cuando el ofendido se hallaba desempeñando las funciones de Jefe de los músicos, á cuya banda pertenecía José Pinzón, de quien se hizo al principio mención especial.

Considerado por la Corte el caso sometido á su examen, en el cual ha de declararse nula la sentencia, materia del recurso, por las causales que ha alegado el reo, el señor Presidente de la Corte, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 1545 del Código Militar propuso las cuestiones que deben resolverse por los Magistrados sobre incompetencia del Consejo de Oficiales generales ó sobre informalidades insanables cometidas en la actuación, y por unanimidad se determinó que ni por las alegaciones susodichas, ni por otros motivos hay lugar á declarar nulo el fallo que se revisa; pues aparecen notificadas todas las providencias dictadas en el curso del juicio y practicadas las pruebas que se pidieron en oportunidad. También aparece acreditada la identidad del procesado con el certificado del Comandante del Cuerpo, á falta de la diligencia de posesión de su empleo, corriente á fojas 27, y llenadas las formalidades cuya omisión vicia lo actuado en los términos que dispone el artículo 1536 del referido Código.

En tal virtud, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el dictamen razonado del señor Procurador general de la Nación, condena al Subteniente Aristides Liévano, abanderado del *Batallón* 13 *de Junín*, calificado el delito en tercer grado y como lo fué por el Consejo, á las penas siguientes: doce meses y veintidós días de reclusión, que sufrirá en el Establecimiento de castigo de la ciudad de Popayán, hecha la proporción que establece el artículo 133 del Código Penal común; destitución del empleo de Subteniente del Ejército y lanzamiento del servicio; pérdida de toda pensión pagadera por el Tesoro nacional; pérdida de los derechos políticos; pago de las costas procesales é indemnización de los daños y perjuicios que hubiere causado por la comisión de los delitos. Del tiempo de la pena de reclusión se descontarán los días corridos desde el tres de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos, en que principió la detención del reo, hasta aquel en que comience á cumplir dicha pena, en los términos que determina el artículo 75 de la Ley 100 de 1892 sobre reformas judiciales, todo de conformidad con los artículos 1635 del Código militar, 649, 133, 86, 87 y 42 del Código Penal común.

En estos términos queda reformada la sentencia apelada.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

NEGOCIOS VARIOS.

ACTA DE LA DILIGENCIA DE VISITA PRACTICADA EN LA SECRETARÍA DE LA CORTE, POR SU SEÑORÍA EL PRESIDENTE DE LA MISMA, EL DÍA 31 DE MAYO DE 1893.

En la ciudad de Bogotá, á las nueve a. m., del día treinta y uno de Mayo de mil ochocientos noventa y tres, Su Señoría el Presidente de la Corte procedió á practicar en la Secretaría la visita que prescribe el artículo 7.° de la Ley 100 de 1892. Al efecto el señor Secretario puso de manifiesto los libros respectivos y los expedientes que cursan en la Secretaría, y, verificado su examen, dió el resultado siguiente:

1.° Los libros radicadores, de repartimiento y copiadores, se llevan con todo arreglo y se hallan al corriente;

2.° En la Secretaría todos los negocios siguen su curso, y sólo sufren demora algunos relativos á recompensas y suministros ó expropiaciones, en los cuales los interesados, ó no han suministrado papel sellado, ó no han hecho las gestiones del caso;

3.° En el cuadro de asistencia á la Oficina aparece que no ha habido en el mes otra falta que la de no haber concurrido á la Oficina el Portero interino, señor Julio Meléndez, el 20, y eso por causa de enfermedad;

4.° En los salones de la Secretaría y en el de Audiencias se están haciendo importantes mejoras, de las cuales se propone informar á la Corte el señor Secretario cuando estén terminadas;

5.° En el libro de estadística de la Corte consta que el movimiento de negocios durante el presente mes ha sido el siguiente:

CUADRO QUE REPRESENTA EL MOVIMIENTO DE NEGOCIOS EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DURANTE EL MES DE MAYO de 1893.

	SENTENCIAS.					AUTOS.							NEGOCIOS DE UNA SOLA INSTANCIA.				
	CASACIÓN.		CIVILES DE 2.ª INSTANCIA.														
	Civiles.	Pena capital.	Negocios varios.	Suministros etc.	Criminales de 2.ª instancia.	Civiles.	Criminales.	Procesos militares.	Competencias.	Recursos de hecho.	Recursos de revisión.	Negocios varios.	Civiles.	Criminales.	Suspensión de Ordenanzas.	Recompensas.	TOTALES.
Pendientes en 30 de Abril	25	3	12	165	2	8	5	2	...	2	2	3	3	16	5	560	813
Repartidos en Mayo	4	2	...	13	1	4	3	...	1	...	...	...	...	1	...	6	35
Totales	29	5	12	178	3	12	8	2	1	2	2	3	3	17	5	566	848
Despachados en el mes	5	...	4	13	2	5	4	2	...	...	...	1	...	3	2	14	55
Pendientes en 31 de Mayo	24	5	8	165	1	7	4	...	1	2	2	2	3	14	3	552	793

CUADRO QUE REPRESENTA EL NÚMERO DE PROYECTOS PRESENTADOS POR CADA UNO DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SOBRE LOS NEGOCIOS CUYO DESPACHO SE RELACIONA EN EL CUADRO ANTERIOR (MAYO).

	SENTENCIAS.					AUTOS.							NEGOCIOS DE UNA SOLA INSTANCIA.				
	CASACIÓN.		CIVILES DE 2.ª INSTANCIA.														
	Civiles.	Pena capital.	Negocios varios.	Suministros etc.	Criminales de 2.ª instancia.	Civiles.	Criminales.	Procesos militares.	Competencias.	Recursos de hecho.	Recursos de revisión.	Negocios varios.	Civiles.	Criminales.	Suspensión de Ordenanzas.	Recompensas.	TOTALES.
Doctor Pombo	1	...	...	2	...	1	1	...	...	...	...	...	...	...	...	2	7
Doctor Isaza	...	...	...	2	1	...	1	1	...	...	...	...	...	1	...	1	7
Doctor Botero Uribe	...	...	1	3	...	1	1	...	...	...	...	...	...	...	...	1	7
Doctor Casas Rojas	1	...	...	...	...	1	...	...	...	...	...	1	...	...	...	5	8
Doctor Corrales	2	...	...	2	1	1	...	...	...	...	...	...	...	1	...	4	11
Doctor F. de Soto (del 8 al 31)	...	...	...	1	...	1	1	...	...	...	...	...	...	1	1	1	6
Doctor Galindo	1	...	2	3	...	...	...	1	...	...	...	...	...	...	1	...	8
Doctor Trujillo (del 1.° al 7)	...	...	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1
Totales	5	...	4	13	2	5	4	2	...	...	...	1	...	3	2	14	55

RELACIÓN DE LOS NEGOCIOS DESPACHADOS POR LA CORTE SUPREMA DURANTE EL MES DE MAYO DE 1893.

Señor Magistrado doctor Pombo.

1.—Mayo 26.—Civil de casación.—Juicio seguido por José Hilario Cano contra la Compañía del Canal Interocéanico, sobre nulidad de un interdicto posesorio.

2.—Mayo 10.—Suministros etc.—Reclamación de Teresa Otálvora.

3.—Mayo 22.—Suministros etc.—Reclamación de Dionisio Rodríguez.

4.—Mayo 20.—Auto civil.—Ejecución seguida por el Agente Fiscal del Distrito Capital de Panamá contra Antonio Papi Aizpuru.

5.—Mayo 17.—Auto criminal—Causa seguida contra Manuel García Gordon, Juez 1.° del Circuito de Mompox, por prevaricato.

6.—Mayo 1.°—Recompensa.—Solicitud de Juana González é hijos, como deudos de un militar que murió en la última guerra.

7.—Mayo 26.—Recompensa.—Solicitud de Rosa Díaz, por haber muerto su esposo en la guerra de 1876.

Señor Magistrado doctor Isaza.

1.—Mayo 17.—Suministros.—Reclamación de Domingo Antonio y Calasancio Téllez.

2.—Mayo 29.—Suministros.—Reclamación de Federico Cortecero.

3.—Mayo 5.—Sentencia criminal de 2.ª instancia.—Causa seguida contra Miguel Ramírez Zoluaga, Juez del Circuito de Rionegro, por mala conducta.

4.—Mayo 30.—Auto criminal.—Sumario instruído contra Pedro A. Pallares, Prefecto de la Provincia de Guaduas, por falsificación de documento público.

5.—Mayo 31.—Proceso militar.—El seguido contra Jacinto Casanova, por asesinato frustrado.

6.—Mayo 3.—Negocio criminal de una instancia.—Denuncio del Fiscal del Tribunal del Cauca contra José Inocencio Calero, Prefecto de la Provincia de Buga, por abuso de autoridad.

7.—Mayo 30.—Recompensa.—Solicitud de Lorenzo Durán, como inválido de la guerra de 1876.

Señor Magistrado doctor Botero Uribe.

1.—Mayo 19.—Sentencia civil.—Juicio seguido por Sinforoso Mancera, sobre amparo de pobreza.

2.—Mayo 4.—Suministros.—Reclamación de Estéfana Ordóñez.

3.—Mayo 24.—Suministros.—Reclamación de José Ramírez.

4.—Mayo 31.—Suministros.—Reclamación de Heliodoro, Liborio y Manuel Mejía.

5.—Mayo 22.—Auto civil.—Ejecución librada por el Administrador de Hacienda del Circuito de Nóvita, contra Víctor Manuel Calderón.

6.—Mayo 27.—Auto criminal.—Sumario instruído contra Ramón Clavijo, Fiscal del Circuito de Ubaté, por suplantación de un nombre.

7.—Mayo 27.—Recompensa.—Solicitud de José Cobo, por enfermedad contraída en el servicio militar.

Señor Magistrado doctor Casas Rojas.

1.—Mayo 29.—Casación civil.—Juicio seguido por José Inocencio Rosero y Tertuliano Manzano contra los herederos de Juan E. Santacruz, sobre nulidad de un contrato.

2.—Mayo 24.—Auto civil.—Ejecución del Administrador-Tesorero de la Aduana de Barranquilla, contra López Olier & Compañía.

3.—Mayo 3.—Negocio vario.—Solicitud del preso Timoteo Peñalosa, sobre rebaja de pena.

4.—Mayo 10.—Recompensa.—Solicitud de Petrona Villota, por muerte de un hijo.

5.—Mayo 18.—Recompensa.—Solicitud de Dolores Ruiz de Monroy por muerte de un hijo.

6.—Mayo 18.—Recompensa.—Solicitud de Cecilio Buitrón, como inválido en la última guerra.

7.—Mayo 23.—Recompensa.—Solicitud de Catalina Fernández, por haber muerto su padre en la guerra de 1876.

8.—Mayo 27.—Recompensa.—Solicitud de Margarita Gómez y Teresa Ramírez, por haber muerto su esposo y padre, respectivamente, en la guerra de 1876.

Señor Magistrado doctor Corrales.

1.—Mayo 5.—Casación civil.—Juicio seguido por Fernando Robles contra Pedro Gaitán, sobre exclusión de un terreno de unos inventarios.

2.—Mayo 25.—Casación civil.—Demanda de Antonio y Carmen Pómez contra Dámaso y Eugenio Gaviria, sobre nulidad de un remate.

3.—Mayo 18.—Suministros.—Reclamación de Rogerio Rosas.

4.—Mayo 23.—Suministros.—Reclamación de Clemente Vera.

5.—Mayo 12.—Sentencia criminal de 2.ª instancia.—Causa seguida contra Tomás Navarro, Prefecto de la Provincia de Cartagena, por atentado contra los derechos individuales.

6.—Mayo 30.—Auto civil.—Ejecución del Administrador de la Aduana de Barranquilla, contra López Olier & Compañía.

7.—Mayo 23.—Negocio civil de una instancia.—Denuncio de Lisandro Moreno contra los Magistrados del Tribunal de Neiva, Arcadio Charri, Gabriel Vargas C. y Elisio Medina, por falsedad en documento público.

8.—Mayo 4.—Recompensa.—Solicitud de Nacianceno Sánchez, por invalidez causada en la última guerra.

9.—Mayo 20.—Recompensa.—Solicitud de María Rosario Sánchez, por muerte de un hermano en 1876.

10.—Mayo 29.—Recompensa.—Solicitud de Juana María Pérez, por haber muerto su esposo en la guerra de 1876.

11.—Mayo 29.—Recompensa.—Solicitud de Leticia Moriones, por muerte de su esposo en la guerra de 1876.

Señor Magistrado doctor Galindo.

1.—Mayo 26.—Casación civil.—Juicio seguido por Tomás Paredes contra H. Ehrman, por pesos.

2.—Mayo 17.—Sentencia civil varia.—Juicio que sigue Gonzalo Arroyo contra el Tesoro nacional, por pesos.

3.—Mayo 24.—Sentencia civil varia.—Juicio promovido por el Departamento de Santander contra José Antonio Ortiz, por pesos.

4.—Mayo 9.—Suministros.—Reclamación de Rafael Jaramillo Ll.

5.—Mayo 18.—Suministros.—Reclamación de Petrona Chacón.

6.—Mayo 23.—Suministros.—Reclamación de Adolfo Guerrero.

7.—Mayo 5.—Proceso militar.—El seguido contra Ignacio Contreras, por homicidio.

8.—Mayo 4.—Suspensión de Ordenanzas.—La número 56 (1892) de la Asamblea departamental de Cundinamarca.

Señor Magistrado doctor Trujillo (del 1.° al 7).

1.—Mayo 5.—Sentencia civil varia.—Juicio seguido por el Fiscal del Tribunal del Cauca contra Rudesindo Ospina, sobre reconstrucción de un puente.

Señor Magistrado doctor F. de Soto (del 8 al 31).

1.—Mayo 30.—Suministros.—Reclamación de Ignacio E. Fortich.

2.—Mayo 29.—Auto civil.—Ejecución seguida por el Administrador departamental de Hacienda del Tolima contra Pedro Antonio y Alejandro Laserna.

3.—Mayo 20.—Auto criminal.—Causa seguida contra Manuel F. Pineda, Juez 3.° del Circuito de Sugamuxi, por abuso de autoridad.

4.—Mayo 26.—Negocio criminal de una instancia.—Diligencias instruídas para averiguar el responsable de la falsificación de una cuenta de la Aduana de Buenaventura.

5.—Mayo 18.—Suspensión de Ordenanzas.—La número 28 de 1888 de la Asamblea de Boyacá.

6.—Mayo 18.—Recompensa.—Solicitud de Marcelina Cañar, por haber muerto un hijo en la guerra de 1876.

Como no hubo otros asuntos á qué referirse la visita, el señor Presidente la dió por terminada y dispuso que se publicase copia de esta acta en la *Gaceta Judicial*.

El Presidente de la Corte, LUCIO A. POMBO.—El Secretario, *Gabriel Rosas*.

IMPRENTA DE ANTONIO M. SILVESTRE.

REPÚBLICA DE COLOMBIA.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AÑO VIII | Bogotá, 7 de Junio de 1893. | NÚM. 395.

CONTENIDO.

Págs.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

La que anula, en parte, el fallo pronunciado por el Tribunal Superior de Panamá en el juicio seguido por Rafael Aizpuru contra José Gabriel Duque, sobre cumplimiento de un contrato y otros cargos. (Magistrado ponente, doctor Pombo) 249

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

El que declara nula la Ordenanza número 13 de 1892, expedida por la Asamblea de Cundinamarca. (Magistrado ponente, doctor Pombo)..... 254

NEGOCIOS CRIMINALES.

El en que declara la Corte que no ha lugar á ocuparse en el denuncio dado por Lorenzo Gaona contra los Magistrados del Tribunal Superior de Cundinamarca, doctores Jesús María Quintero P., Antonio María Rueda Gómez y Nicolás Enciso, por infracción de leyes expresas. (Magistrado ponente, doctor Galindo)..... 256

Por el cual la Corte se abstiene de adelantar todo procedimiento de oficio en el denuncio dado por Apolinar Ruiz contra el Magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, doctor Gonzalo Mejía. (Magistrado ponente, doctor Galindo)..... 256

Por el cual la Corte se declara incompetente para conocer en 2.ª instancia del sumario instruído para averiguar el responsable de la introducción clandestina por puertos no habilitados de setenta quintales de caucho. (Magistrado ponente, doctor Pombo)..... 256

GACETA JUDICIAL.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez y nueve de Abril de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Con fecha catorce de Marzo de mil ochocientos noventa y uno, Rafael Aizpuru, vecino de Panamá, estableció demanda ordinaria ante el Juez 1.° del Circuito en lo civil de esa misma ciudad, contra José Gabriel Duque, como representante de Duque Hermanos, concesionarios de la Lotería de Panamá, con los dos siguientes objetos, según lo dice el respectivo libelo de demanda, foja 25: "1.° Para que el demandado Duque cumpla el contrato que en veintisiete de Diciembre de mil ochocientos ochenta y cuatro celebró, en su carácter de representante de los concesionarios de la Lotería de Panamá, con el demandante Aizpuru, por el cual le dieron en arrendamiento el derecho exclusivo de establecer el juego llamado 'Lotería China' en la ciudad de Panamá, por el término de diez años, contados desde el 1.° de Enero de mil ochocientos ochenta y cinco, poniéndole, dice el demandante, en el goce de los derechos que por ese contrato tenía adquiridos; 2.° para que el demandado rinda la cuenta general de la administración de esos juegos desde el año de mil ochocientos ochenta y seis, que quedó á su cargo, hasta la fecha, y por las costas del juicio."

Esta demanda fué establecida después de que al mismo Aizpuru le habían sido negados los dos recursos judiciales á que ocurrió primero, ya estableciendo el interdicto de despojo contra Duque Hermanos, ya demandando á éstos ejecutivamente la rendición de cuentas.

El contrato á que se refiere la demanda dice así, foja 1.° de los autos: "Duque Hermanos y Rafael Aizpuru han celebrado el siguiente contrato:

"1.° Duque Hermanos dan en arrendamiento á Aizpuru el derecho exclusivo de establecer el juego llamado 'Lotería China,' en la ciudad de Panamá, por el término de diez años, á contar desde el 1.° de Enero de 1885;

"2.° Aizpuru acepta el arrendamiento y se compromete á pagar á Duque Hermanos del 5 al 7 de cada mes, cincuenta pesos ($ 50) mensuales por los diez años del arriendo;

"3.° La falta de pago de dos mensualidades sucesivas por parte de Aizpuru, ó de quien sus derechos representare, dará lugar á la rescisión de este contrato.

"Se hacen dos ejemplares de un tenor en Panamá, á 27 de Diciembre de 1884.

"*R. Aizpuru.—Duque Hermanos.*"

Los hechos fundamentales de la demanda, fojas 26 y 27, son los siguientes: "1.° El 27 de Diciembre de 1884, los señores Duque Hermanos, concesionarios de la 'Lotería de Panamá,' representados por el señor José Gabriel Duque, celebraron con el señor General Rafael Aizpuru, el contrato que debidamente reconocido, figura de fojas 1 á 3 de los documentos acompañados, por el cual dieron á éste en arrendamiento el derecho exclusivo de establecer en esta ciudad (Panamá) el juego llamado 'Lotería China,' por el término de diez años contados desde el 1.° de Enero de 1885; 2.° el señor General Aizpuru ha estado en pleno goce de los derechos que ese contrato le acuerda, hasta el año de 1886, en que, por motivo de fuerza mayor, tuvo que salir del país como desterrado político; 3.° el señor D. José Gabriel Duque, en vista de esa situación anormal, y tan sólo para salvar los intereses del General Aizpuru, hizo saber á éste que tomaba la administración de la 'Lotería China,' ofreciendo como lo ha cumplido, remesar todos los años sumas de dinero, tanto al señor Aizpuru como á su familia, por cuenta del producto de esa administración; 4.° ha cesado la causa que obligara al señor D. José Gabriel Duque á tomar la administración de la 'Lotería China,' y está en el deber de entregar esa administración al demandante, como único dueño, por todo el tiempo del contrato, y no presentar dificultades no obstante que reconoce el derecho del señor Aizpuru; 5.° los señores Duque Hermanos no han rendido la cuenta general de la administración de la 'Lotería China,' desde el año de 1886 hasta la fecha, y aunque el señor D. Tomás Duque ha afirmado, en posiciones, que sí se han rendido esas cuentas á satisfacción del señor Aizpuru, esto es un error, porque lo único que éste ha recibido son extractos de cuentas que no están en la categoría de cuenta corriente general de un negocio."

Después de falladas adversamente al demandado las excepciones dilatorias de incompetencia de jurisdicción y de inepta demanda, opuestas antes de la contestación de la demanda, se evacuó el traslado correspondiente (fojas 76 y 77), y en la contestación se dijo por el apoderado del demandado:

"En consecuencia, niego el derecho que el señor General Rafael Aizpuru tiene para que mi poderdante, en representación de Duque Hermanos, le entregue la administración de la 'Lotería China,' á que se refiere el contrato primitivo insubsistente y á que le rinda cuenta de la administración de negocios á que se refiere ese contrato que no subsiste. La

contestación que doy, la fundo en los hechos siguientes: 1.° el señor General Rafael Aizpuru hizo abandono del contrato á que se refiere la demanda, porque sólo pagó las tres primeras mensualidades de 1885. Aunque estaba ausente del país, tenía aquí apoderado que lo representara y subarrendó el derecho á que se refiere el contrato por todo el año expresado, en la suma de mil quinientos pesos, los cuales recibió; y 2.° el contrato primitivo fué novado y quedó en su lugar para mi poderdante la obligación á que se refiere la contestación de hechos tercero de la demanda. Hago presente al señor Juez, que de lo expuesto resulta alegada la excepción perentoria de novación.

"Otrosí.

"Por separado presento demanda de reconvención contra el señor Rafael Aizpuru."

A fojas 79 y 80 se encuentra la demanda de reconvención á que hace relación el anterior memorial, en la cual dice el mismo apoderado del demandado, "que demanda en reconvención al General Rafael Aizpuru para que devuelva ó pague á su poderdante las cantidades que le han pagado indebidamente, según cuentas aprobadas por el señor Aizpuru, que le fueron rendidas por causa de la novación que sufrió el contrato á que se refiere la demanda principal propuesta contra mi poderdante. Para que se declare que el contrato celebrado en Diciembre de 1884, quedó sin valor ni efecto alguno, por la falta de pago de las mensualidades correspondientes á los últimos nueve meses del año de 1885. Fundo esta demanda en los hechos siguientes: 1.° el señor Aizpuru sólo pagó á mi poderdante las mensualidades correspondientes á los tres primeros meses del año de 1885, y dejó de pagar las de los nueve meses restantes, y 2.° el señor Aizpuru ha recibido de mi poderdante parte del producto de los remates de los derechos sobre las 'Charadas y Rifas chinas,' que no le pertenecían ni conforme al contrato primitivo ni conforme al que lo sustituyó. Y en el derecho que me deriva mi poderdante de su condición de contratista y del hecho del pago que efectuó indebidamente."

Seguido el juicio por los trámites que la ley señala, terminó la instancia con la sentencia del Juez del Circuito, de fecha veintidós de Febrero de mil ochocientos noventa y dos, en la cual declaró: "1.° que están probados los hechos y el derecho en que se fundó la demanda principal; 2.° que no están probados los hechos ni el derecho en que se fundó la demanda de reconvención ni la excepción de novación alegada por Duque Hermanos, y, en consecuencia, condena á Duque Hermanos á que pongan en posesión á Rafael Aizpuru de los derechos que le otorga el contrato de arrendamiento de la 'Lotería China,' de fecha veintisiete de Diciembre de mil ochocientos ochenta y cuatro. Igualmente condena á dichos señores á rendir á Rafael Aizpuru la cuenta general de la 'Lotería China' en administración desde el año de mil ochocientos ochenta y seis (1886), que la tomaron á su cargo, hasta la fecha de su rendición, y al pago de las costas de este juicio."

Notificada esta sentencia á José Gabriel Duque, interpuso contra ella el recurso de apelación para ante el Tribunal Superior de ese Distrito Judicial, y concedido el recurso surtióse la instancia después de producirse por las partes algunas pruebas. Por fin, con fecha primero de Octubre último se pronunció por el Tribunal la sentencia que en su parte resolutiva dice así:

"Por tanto, y sin entrar el Tribunal á tratar lo alegado sobre fuerza mayor, abandono del derecho al juego de la 'Lotería China' por Aizpuru y demás documentos que figuran en autos, por estimarlos inconducentes al objetivo de la controversia, así como igualmente las razones aducidas á este respecto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca la sentencia definitiva de primera instancia y declara: primero, absuélvese á Duque Hermanos de la demanda de 14 de Marzo de 1891, propuesta por Gerardo Ortega, como apoderado especial de Rafael Aizpuru contra la firma social dicha, representada por José Gabriel Duque, por haber quedado resuelto desde el siete de Mayo de 1885 el contrato de arrendamiento del derecho de juego de la 'Lotería China' de Panamá; segundo, declárase que asimilándose el ofrecimiento de Duque Hermanos, en cuanto á la participación que convinieron darle á Aizpuru en la 'Lotería China' de Panamá, á una donación, aunque de derecho imperfecto en el modo de constituírlo, no deberá Aizpuru devolver cantidad alguna recibida por él á este respecto; tercero, declárase no probada la excepción perentoria de novación; cuarto, declárase que Rafael Aizpuru debe restituír á Duque Hermanos, ó á quien sus derechos representare, todas y cada una de las cantidades que como producto neto de las 'Charadas chinas y Rifas chinas,' consten de las respectivas cuentas á él pasadas, y quinto, sin especial condenación en costas."

Publicada y notificada personalmente la sentencia anterior, el siete de Octubre de mil ochocientos noventa y dos, el demandante Rafael Aizpuru, por escrito de veinte del mismo mes, interpuso el recurso de casación para ante la Corte, expresando en dicho escrito las causales que en su concepto existen para creer casable dicha sentencia.

Concedido el recurso, traídos los autos á esta Superioridad y sustanciado en la forma legal, la Corte, al dar cumplimiento á la disposición del artículo 381 de la Ley 105 de 1890, encuentra desde luégo que respecto del aludido recurso concurren las circunstancias que la misma ley señala para su admisión, y en consecuencia, procede á examinar las causales de casación que se han alegado como fundamento del dicho recurso, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 100 de 1892, que hoy rigen sobre la materia y las pertinentes de la Ley 105 arriba citada.

Tanto el demandante, en el escrito presentado ante el Tribunal, como su apoderado, en el alegato dirigido á la Corte, han alegado que existe la primera de las causales que señala el artículo 369 de la Ley 105 de 1890, para dar lugar á la interposición del recurso, aunque en el primero de dichos alegatos se sostiene que la ley sustantiva que se supone violada, es el Código de Comercio en sus artículos 733 y 734, y en el alegato ante la Corte, si bien se estima ajustado á la ley el razonamiento en que aquél se apoya para sustentar dicha violación, se hace consistir principalmente la existencia de la expresada causal en que el Tribunal sentenciador dejó de aplicar, y por consiguiente infrigió el Decreto ejecutivo número 254 de 1886, sobre interregno legal, Decreto que, conforme al artículo *L*, transitorio, de la Constitución de 5 de Agosto de 1886, es ley vigente en la República.

Siguiendo el orden de las argumentaciones, examinará primero la Corte si existe la violación de las disposiciones del Código de Comercio, que se dejan citadas. El artículo 733 de dicho Código, establece que "antes de la conclusión de la cuenta corriente, ninguno de los interesados es considerado como acreedor ó deudor;" y de allí deduce el recurrente, que teniendo él una cuenta corriente con Duque Hermanos, y que apareciendo en esa cuenta que éstos le abonaron trescientos pesos ($ 300) por arrendamiento de un semestre de la "Lotería China," el treinta de Junio de mil ochocientos ochenta y cinco, ninguno de los interesados en la cuenta corriente, puede ser considerado como acreedor ó deudor antes de la conclusión de ésta.

No toda cuenta que un comerciante forma ó lleva en sus libros para debitar y acreditar cantidades á otro individuo, comerciante ó no, puede llamarse cuenta corriente. Ésta, conforme al artículo 730 del Código de Comercio, "es un contrato bilateral y conmutativo, por el cual una de las partes remite á otra ó recibe de ella en propiedad cantidades de dinero ú otros valores, sin aplicación á un empleo determinado ni obligación de tener á la orden una cantidad ó un valor equivalente; pero á cargo de *acreditar al remitente por sus remesas*, liquidarlas en las épocas convenidas, compensarlas de una sola vez, hasta concurrencia del débito y crédito y pagar el saldo." El artículo 731 dice: "Las cuentas que no reúnan todas las condiciones enunciadas en el anterior artículo, son cuentas simples ó de gestión, y no están sujetas á las prescripciones de este título."

En el expediente no hay constancia alguna del contrato de cuenta corriente celebrado entre Aizpuru y Duque Hermanos, y no puede, por lo mismo, saberse si ese contrato reúne las condiciones del artículo 730 para calificarse el

extracto de cuenta que obra en los autos, como cuenta corriente; ese extracto probará á lo más, que Duque Hermanos llevaron á Aizpuru una cuenta simple ó de gestión, la cual no puede estar sujeta á las prescripciones de los artículos 733 y 734. Pero aun suponiendo que el extracto dicho prueba la existencia del contrato de cuenta corriente, ¿puede alegarse violación de dichos artículos, porque en la sentencia recurrida se haya absuelto á Duque Hermanos de la obligación de cumplir el contrato de veintisiete de Diciembre de mil ochocientos ochenta y cuatro, cuyo cumplimiento fué el principal objeto de la demanda? La Corte considera que la disposición del artículo 733 del Código de Comercio no puede referirse sino á las cantidades de dinero ú otros valores que á virtud del contrato de cuenta corriente deben constituírla; pero no puede tener un alcance tal que mientras esté pendiente una cuenta corriente entre dos comerciantes, no puede exigirse por parte de ninguno de los dos el cumplimiento de obligaciones que hayan contraído con motivo de otros contratos: eso sería establecer que por el hecho de existir una cuenta corriente entre dos individuos, éstos se hallaban en imposibilidad de contratar y de obligarse de otra manera, supuesto que no habría obligación alguna exigible, por extraña que fuese al objeto de la cuenta, antes de la conclusión de la misma. No debe perderse de vista que el pleito promovido por Aizpuru contra Duque Hermanos, tiene por objeto el obligar á éstos al cumplimiento de un contrato que por su naturaleza no es comercial; por consiguiente, al decidir ese pleito, no han podido tenerse presentes, como no se tuvieron, las disposiciones del Código de la materia, y por lo mismo, no puede alegarse como causal de casación la violación de esas mismas disposiciones.

Como se dijo yá, en el alegato presentado ante la Corte, se ha hecho consistir la causal de casación de que se viene hablando, en que el Tribunal de Panamá dejó de aplicar el Decreto ejecutivo número 254 de 1886, "que declaró interregno legal para el efecto de vencimiento de plazos, pago de créditos y reconocimiento de intereses de demora, tanto en obligaciones públicas como privadas, de cualquier fecha que sean, el lapso de tiempo trascurrido desde el 18 de Diciembre de 1884 en que se declaró perturbado el orden federal, hasta la fecha del presente Decreto (26 de Abril de 1886.") A este respecto dice el apoderado del recurrente: "No habiendo sido derogado por el Congreso el citado Decreto, ni revocado por el Gobierno, es una ley vigente en la República que el Tribunal sentenciador no pudo desatender; y por tanto, no puede negarse que la sentencia recurrida, al dejar de aplicar aquel Decreto al caso del pleito, infrigió una ley sustantiva, é incurrió, por consiguiente en la 1.ª de las causales de casación enumeradas en el artículo 369 de la citada Ley 105 de 1890."

La violación de ese Decreto se hace consistir en que el Tribunal sentenciador declaró que la resolución del contrato de arrendamiento de veintisiete de Diciembre de mil ochocientos ochenta y cuatro, se había efectuado por ministerio de la ley, en Mayo de mil ochocientos ochenta y cinco, época comprendida dentro del lapso de tiempo considerado como interregno legal, á lo cual se oponía el citado Decreto que excusó, como motivada por fuerza mayor, la falta de cumplimiento del contrato en aquella época.

El abogado de Duque Hermanos, al contestar este argumento, ha dicho: "Efectivamente el Decreto existe; contiene la doctrina que indica el señor doctor Escobar y tiene fuerza legislativa conforme al artículo *L* de la Constitución vigente. Pero ese Decreto no es la última palabra en el asunto. En efecto, otra resolución ejecutiva, que tiene la misma fuerza que el Decreto citado que lo aclara y lo reforma, es la de cinco de Junio de mil ochocientos ochenta y seis, expedida por el Gobierno, por el órgano del Despacho del Tesoro, que aparece publicada en el *Diario Oficial* número 6,698, correspondiente al nueve de Junio de 1886, y que dice así:

'Despacho del Tesoro.—Bogotá, 5 de Junio de 1886.

'Visto el anterior memorial,

'SE RESUELVE:

'Los pagarés y obligaciones, públicos y privados, otorgados desde el 18 de Diciembre de 1884 en adelante, no están comprendidos en las disposiciones del Decreto ejecutivo de 26 de Abril último, sobre pago de obligaciones públicas y privadas, como que los contratantes procedieron con conocimiento de la situación del país, y no podían, por tanto, alegar la fuerza mayor ni el caso fortuíto, que los ampara, según la legislación civil.'

"Esta resolución ejecutiva tiene también, como el Decreto número 254, fuerza legislativa, conforme al artículo *L* de la Constitución vigente. Ahora bien: el contrato celebrado por los señores Duque Hermanos es de fecha 27 de Diciembre de 1884; está comprendido en el caso de excepción que determina la resolución ejecutiva de 5 de Junio de 1886, y no está amparado por las disposiciones del Decreto de 26 de Abril, en cuanto á la mora."

El abogado de la parte recurrente ha tratado de desvanecer la fuerza de la observación anterior, por cuanto sostiene que la resolución de cinco de Junio que queda trascrita, no puede tener fuerza de ley, porque ella no es acto de carácter legislativo, *expedido por el Presidente de la República*, que es á los que únicamente dió fuerza de ley el artículo *L* de la Constitución; estableciendo, en consecuencia, que la citada resolución no fué acto expedido por el Presidente de la República, sino por el Ministro del Tesoro, y de allí la distinción entre decretos ejecutivos y resoluciones ministeriales, que hace el mismo abogado como base de su argumentación.

La Corte no puede asentir á esta distinción que vendría á establecer una diferencia entre actos ejecutivos y resoluciones ministeriales, que ninguna ley ha reconocido y que menos puede reconocerse en el estado anormal en que se hallaba el país cuando se expidió la resolución de cinco de Junio de 1886. En el laborioso alegato que el abogado de Colombia presentó ante Su Majestad Alfonso XII, designado como árbitro de derecho para fallar las cuestiones de límites territoriales pendientes entre Venezuela y Colombia, se trató extensamente esta cuestión, porque era absolutamente preciso fijar el sentido de lo que debiera entenderse por actos regios, ya que la adjudicación de los territorios litigados debía tener por base lo que por esos mismos actos hubiera pertenecido á las Repúblicas en litigio hasta 1810. Allí se dijo, página 21 del folleto impreso, edición oficial: "Actos regios son los emanados directamente de la autoridad del Soberano, los cuales, así en España como en todas las monarquías, constitucionales ó absolutas, son de dos clases: los que por costumbre ó estilo llevan la firma del Soberano, con la refrendación de un Ministro ó Secretario de Estado, y los que los Ministros ó Secretarios de Estado dictan en nombre y por autoridad del Soberano, con solo la firma del Ministro y bajo su responsabilidad, como sucede en los gobiernos republicanos bajo la autoridad presidencial. Las resoluciones de competencia del Poder Ejecutivo, se acuerdan y expiden unas en forma de decretos, autorizados con la firma del Presidente y la del respectivo Secretario, y otras, con sólo la firma ministerial, con ó sin esta adición: 'Por el Presidente, el Secretario, N. N.,' y sin que pueda decirse que los actos que asumen la forma de decretos sean los de mayor importancia, por la naturaleza y gravedad del negocio sobre que versan. Todos los nombramientos, hasta el del último Portero de un Ministerio, se hacen por un Decreto; y resoluciones aprobatorias de contratos que importan centenares de miles de pesos, ó de adjudicación de leguas enteras del territorio nacional, se hacen bajo la forma ministerial con la sola firma del Secretario de Estado. No hay ni ha habido en esto ley que reglamente el asunto: es materia de prácticas administrativas; pero tan acto ejecutivo es un decreto real ó presidencial, como una resolución ministerial dada en nombre y por autoridad del Presidente ó del Rey. Lo único que hay que comprobar es su autenticidad. Si la resolución ministerial fué expedida públicamente en la fecha que ella comporta, en nombre del Rey ó del Presidente, la falta material de la firma del Jefe del Estado en cuyo nombre se habla, es una simple cuestión de etiqueta en las monarquías, y de práctica administrativa en las Repúblicas; pero así el decreto como la resolución tienen igual fuerza; ambos provienen de la autoridad del Jefe de Estado y son igualmente obligatorios. Si la resolución ministe-

rial fuere apócrifa ó surrepticia, el Ministro habría sido estrepitosamente depuesto y castigado como reo de alta traición."

La Corte acepta, como perfectamente correcta, la exposición que acaba de insertarse, y por lo mismo, estima que la disposición del artículo *L* de la Constitución comprendió no sólo los actos que en forma de decreto fueron expedidos por el Presidente de la República, sino las resoluciones ministeriales dadas por sus Ministros ó Secretarios de Estado, en aclaración de esos mismos decretos. Por consiguiente, la resolución de 5 de Junio de 1886, dictada por el Ministro del Tesoro, tiene, en concepto de la Corte, la fuerza de ley que le dió el citado artículo transitorio de la Constitución. Y en cuanto á la argumentación de que el 27 de Diciembre de 1884, fecha del contrato, no podía saberse en Panamá que se había declarado turbado el orden público, porque no había tiempo para que se hubiese comunicado el Decreto de 18 del mismo mes, que así lo declaró, y que en consecuencia, se celebró el contrato sin tenerse conocimiento de tal Decreto, esta argumentación no puede aceptarse, porque ella equivaldría á exigir que se hubiesen fijado en la resolución tantas fechas para que ella tuviese cumplimiento, como lugares hay en la República. La resolución de 5 de Junio de 1886, que aclaró el Decreto número 254, de que se ha hablado, tuvo por objeto exceptuar del interregno legal las obligaciones que se hubieran contraído después del 18 de Diciembre de 1884, teniendo en consideración que yá en esa fecha debía saberse en todo el país la situación anormal de la República, si no porque en toda ella había estallado la guerra, sí porque la situación de alarma y de inseguridad debía sentirse, como se sintió en efecto, desde mucho antes de declararse turbado el orden público por un acto oficial. Quiso, pues, la resolución que las obligaciones que se hubieran contraído con conocimiento de esa situación anormal, tuviesen cumplimiento, y si se fijó el 18 de Diciembre de 1884 como fecha desde la cual debía entenderse que ese conocimiento existía en toda la República, fué únicamente por haber sido esa la fecha del Decreto que declaró turbado el orden público, y no precisamente porque en ella se considera empezada la rebelión; tan cierto es eso, que el artículo 1.° de la Ley 44 de 1886, fijó el 12 de Diciembre de 1884, como la fecha en que debía entenderse principiada la guerra.

Se ha alegado también ante la Corte, en relación con la primera causal de casación, que la sentencia acusada violó los artículos 1591 del Código Civil de Panamá, y 1546 del nacional, por cuanto "en el contrato de arrendamiento de 27 de Diciembre de 1884 no se pactó claramente que él se resolvería de pleno derecho por falta de cumplimiento por parte del arrendatario, pues lo acordado á ese respecto fué que esa falta daría lugar á la rescisión, sin decir de qué modo, y los señores Duque Hermanos entendieron que ella debía efectuarse á virtud de declaración judicial, como lo acredita el haber demandado ellos en 1885 al General Aizpuru para que con su audiencia se declarase resuelto el contrato."

La cláusula del referido contrato, como se ha visto yá, está concebida en estos términos: "3.° La falta de pago de dos mensualidades sucesivas por parte de Aizpuru ó de quien sus derechos representare, dará lugar á la rescisión de este contrato." El Tribunal sentenciador, encontrando plenamente probado en los autos, aun por confesión de Aizpuru y los recibos exhibidos por él, que sólo pagó las mensualidades correspondientes á los meses de Enero, Febrero y Marzo de 1885; que Duque Hermanos habían demandado en reconvención para que se declarase que el contrato celebrado en Diciembre de 1884, quedó sin valor ni efecto alguno por la falta de pago de las mensualidades correspondientes á los últimos nueve meses del año de 1885, y considerando que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes *y no* puede ser invalidado sino por consentimiento mutuo ó por causas legales; que los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente, obligan no sólo á lo que en ellos se expresa, sino á todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, ó que por la ley pertenecen á ella (artículos 1602 y 1603 del Código Civil nacional, idénticos á los correspondientes del de Panamá), dicho Tribunal encontró motivo legal suficiente para declarar, como declaró, que había quedado resuelto el contrato de 27 de Diciembre, tántas veces citado, desde el 7 de Mayo de 1885, que no existía en Duque Hermanos la obligación de rendir cuentas, y en consecuencia, los absolvió de la demanda.

No encuentra la Corte que lo resuelto por el Tribunal envuelva la violación del artículo 1546 del Código Civil nacional, desde que en el contrato se estipuló expresamente que la falta de pago de dos mensualidades sucesivas daría lugar á la rescisión, porque esta cláusula no puede tener otro sentido que el de resolutoria del contrato; y si en los contratos bilaterales, como lo establece dicho artículo, va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado, es claro que lo estipulado expresamente en la referida cláusula, con mayor razón debe considerarse como condición resolutoria, y si ella es una condición resolutoria expresa porque no puede considerarse tácita, que es á la que se refiere el artículo 1546, no puede considerarse infringida esta disposición, que no es aplicable sino á los contratos en que nada se ha estipulado para su resolución.

Si en concepto de la Corte la cláusula de que se trata es condición resolutoria expresa, tiene que declarar que el cumplimiento de ella resuelve el contrato de pleno derecho, como lo declaró en la sentencia de 31 de Mayo de 1892 (*Gaceta Judicial*, número 342), en la cual se lee: "Estima también la Corte que al considerar el Tribunal que el albacea no podía arrendar la hacienda antes de que se declarase judicialmente resuelto el contrato celebrado con Ramírez, aplicó indebidamente al caso del pleito el artículo 1546 del Código Civil, el cual sólo es aplicable á la condición resolutoria tácita, esto es, á la que va envuelta en todos los contratos bilaterales, y no lo es á la condición resolutoria expresa, pues el cumplimiento de ésta resuelve el contrato de pleno derecho, ó sin necesidad de declaración judicial, según se deduce del artículo 1544 del mismo Código, y lo admiten uniformemente los expositores del Derecho."

En el alegato presentado ante el Tribunal, se dijo también que concurría en la sentencia la segunda de las causales de casación de que habla el artículo 369 de la Ley 105 de 1890, porque ella no está en consonancia con las pretensiones oportunamente aducidas por los litigantes, dado que, según el recurrente, en la demanda principal los demandados han reconocido la vigencia del contrato, y sus derechos como arrendatarios de la "Lotería China," limitándolos solamente á la proporción insinuada por ellos en sus propuestas de modificación que no aceptó el demandante. En la contestación de la demanda, transcrita al principio de esta sentencia, de las fojas 76 y 77 de los autos, se ha visto que se negó al demandante el derecho que tuviera para pedir que los demandados le entregaran la administración de la "Lotería China," á que se refiere el contrato primitivo insubsistente, y se agregó que ese contrato había sido novado y quedado en su lugar para los demandados la obligación á que se refiere el tercero de los hechos enumerados en la demanda. No es cierto, pues, que los demandados hayan reconocido la vigencia del contrato primitivo; lo que sostuvieron fué su insubsistencia por lo mismo que reconocieron una novación de aquel contrato, novación que el demandante ha venido sosteniendo que no aceptó, por cuanto él demanda el cumplimiento del contrato primitivo. En consecuencia, no puede sostenerse que la sentencia no está en consonancia con las pretensiones oportunamente aducidas por los litigantes, fundándose en que ella ha absuelto á Duque Hermanos de una obligación reconocida por ellos mismos.

Por último, se alegó en el mencionado escrito del recurrente "que la sentencia contiene disposiciones contradictorias que no se concilían, y se agrega que la contradicción existe entre lo resuelto en los puntos 2.° y 4.°; que por el segundo se declara que Aizpuru no debe devolver cantidad alguna recibida por él en virtud del ofrecimiento que le hicieron Duque Hermanos, ofrecimiento que la sentencia asimila á donación; y por el cuarto se le obliga á restituír esas mismas cantidades, porque la sentencia ha hecho una distinción antojadiza entre 'Lotería China' en general y 'Charadas y Rifas chinas,' cuando en el documento de fojas 103 del cuaderno principal, de fecha 24 de Diciembre de 1884, consta

que los concesionarios, señores Duque Hermanos, le concedieron á Aizpuru licencia para establecer en la ciudad de Panamá, conforme á contrato, los juegos llamados 'Loterías ó Rifas chinas,' durante el año de 1885."

Debe la Corte examinar si existe la contradicción alegada. La sentencia acusada dice en el punto segundo de la parte resolutiva: "Declárase que asimilándose el ofrecimiento de Duque Hermanos en cuanto á la participación que convinieron darle á Aizpuru en la 'Lotería China de Panamá,' á una donación, aunque de derecho imperfecto en el modo de constituírlo, no deberá Aizpuru devolver cantidad alguna recibida por él á este respecto;" y en el punto 4.°: "Declárase que Rafael Aizpuru debe restituír á Duque Hermanos, ó á quien sus derechos rnpresentare, todas y cada una de las cantidades que como producto neto de las 'Charadas chinas' y 'Rifas chinas,' constan de las respectivas cuentas á él pasadas." No puede negarse que la sentencia distinguió entre producto de la "Lotería China de Panamá" y producto neto de las "Charadas y Rifas chinas," para declarar que Aizpuru no tenía obligación de restituír los primeros, que consideró donados por Duque Hermanos, y que debía restituír los últimos, respecto de los cuales consideró, sin duda, que no había habido donación, por cuanto los demandados exigieron en la demanda de reconvención la devolución de esos productos que, según aseveraron, no le pertenecían á Aizpuru, ni conforme al contrato primitivo, ni conforme al que lo sustituyó.

La distinción establecida por el Tribunal no puede decirse que envuelva disposiciones contradictorias que no se concilian, porque lo resuelto en los puntos 2.° y 4.° es una consecuencia de esa distinción. Ni esta causal de casación, que es la 3.ª del artículo 369 de la Ley 105 de 1890, puede alegarse sino cuando se ha pedido la aclaración de la sentencia respecto de las disposiciones que se hayan creído contradictorias, lo que no se hizo por el recurrente.

Pero esto no impide que la Corte examine si hubo error de hecho ó de derecho en la apreciación de la prueba que hizo el Tribunal al establecer la distinción entre "Lotería y Rifas y Charadas chinas," error que se ha alegado con insistencia ante la Corte.

No puede perderse de vista que Duque Hermanos han venido sosteniendo la existencia de una novación del contrato primitivo, á virtud de la cual, después que tomaron á su cargo la administración del contrato de arrendamiento que celebraron con Aizpuru, por haberlo abandonado éste en 1886, siguieron reconociendo á Aizpuru el derecho de participación en la mitad del producto del juego de "Lotería China en Panamá," y luégo le extendieron esa participación á la tercera parte del producto neto del mismo juego, en las Provincias de Panamá y Colón. A virtud de ese reconocimiento Duque Hermanos entregaron á Aizpuru las cantidades que creyeron le pertenían por consecuencia de la novación; pero como no ha podido probarse la existencia de tal novación, el Tribunal ha considerado que la participación que Duque Hermanos han estado dando á Aizpuru, sin obligación legal, tiene el carácter de una donación gratuíta, aunque imperfecta, no revocada, y declaró que lo recibido por Aizpuru á virtud de esa participación, no tenía el deber de devolverlo. ¿Pero será realmente aceptable la parte de la sentencia que ordena que Aizpuru devuelva lo que á virtud de esa misma participación ha recibido como producto de "Charadas y Rifas chinas?" ¿Existirá el error de derecho en la apreciación de la prueba, á virtud de la cual se ha hecho la distinción entre "Lotería" y "Charadas y Rifas chinas?" La cuestión parece que queda resuelta con la inteligencia que se dé á la palabra "Lotería China," que fué la empleada en el contrato de arrendamiento; y la Corte juzga que en esta materia no puede haber otra inteligencia que la que la ley le ha dado al definir lo que se entiende por "Lotería." El artículo 1.° de la Ley 9.ª de 1883 del Estado de Panamá, dice así: "Para los efectos de la presente ley, considérase como *Lotería* todo *juego* en que se emplean cédulas ó billetes distinguidos por combinaciones de números ó letras, en cualquier idioma ó dialecto y donde los premios, ya sean en dinero ó ya en otros valores, se determinan por medio de sorteo." Si, pues, las "Charadas y Rifas chinas" son juegos en que se emplean cédulas ó billetes distinguidos por combinaciones de números ó letras, y se determinan por sorteos, como lo declaran varios testigos, no puede dudarse que ellos están comprendidos en el género llamado "Lotería," conforme á la definición legal. Duque Hermanos entendieron que la concesión hecha á ellos por el Gobierno de Panamá y que en la escritura que se otorgó el doce de Noviembre de mil ochocientos ochenta tres se llamó simplemente "*Sorteos de Lotería*," los autorizaba para establecer los juegos llamados "Charadas y Rifas chinas," supuesto que los establecieron ó arrendaron. Duque Hermanos entendieron que los juegos llamados "Lotería ó Rifa china" eran la misma cosa, supuesto que así lo dijeron en el documento que se halla al folio ciento tres de los autos, y que fué reconocido por José Gabriel Duque. Duque Hermanos, al dar participación á Aizpuru del producto de los citados juegos, no hicieron distinción entre "Lotería y Rifas y Charadas chinas." Por consiguiente, si los mismos interesados han entendido siempre que no ha existido tal distinción; si conforme á la definición legal ella no existe, no ha podido el Tribunal establecerla para declarar que el producto del juego de "Lotería en Panamá" fué una donación hecha á Aizpuru, que éste no está en el deber de devolver, y que el de las "Rifas y Charadas" no puede tener ese carácter y que debe devolverlo como pago de lo indebido. ¿Por qué se considera indebidamente pagado lo uno y no lo otro? ¿Por qué se considera que lo dado á Aizpuru, como participación en el juego de "Lotería" fué una donación por parte de Duque Hermanos, y no tiene el mismo carácter lo que le dieron como producto de las "Charadas y Rifas chinas?" Para la Corte hubo error en el Tribunal al establecer una distinción que no reconoce la ley, dando mayor fuerza probatoria á lo que dijeron los testigos que á la definición legal y á lo entendido por los litigantes, y en esta parte de la sentencia se incurrió en error de derecho en la apreciación de la prueba. En concepto de la Corte no puede sostenerse que Duque Hermanos, al dar, como dieron á Aizpuru, todo lo que creyeron que le pertenecía, como producto de todos los juegos, lo hicieran á reserva de reclamar algo de eso que le dieron como indebidamente dado, pues no existiendo la distinción que se ha querido establecer, no hay fundamento para reclamar como indebidamente pagado lo que dieron como producto de "Charadas y Rifas chinas," á pretexto de que tales juegos son cosa distinta del juego de "Lotería." Aquí se presenta con toda claridad el siguiente dilema: una vez resuelto el contrato de arrendamiento con Aizpuru, ó *todo* lo que Duque Hermanos le dieron graciosamente, fué indebidamente pagado, y entonces han tenido derecho para reclamarlo con tal carácter, ó todo lo que le dieron constituye la donación gratuíta de que habló el Tribunal, y entonces no hay derecho para considerar donada una parte solamente de lo que se dió.

Por estas razones y encontrando esta Superioridad que del mismo expediente resulta que se incurrió realmente en error de derecho, en la apreciación que se hizo de la prueba para establecer la distinción que dió lugar á lo decidido en el punto 4.° de la sentencia recurrida, lo cual da lugar á la casación conforme á lo establecido en la segunda parte del inciso 1.° del artículo 369 de la Ley 105 de 1890; que en esta virtud, el fallo que pronuncie la Corte no tiene por qué afectar lo decidido en los otros puntos de dicha sentencia, de acuerdo con lo que dispone el artículo 60 de la Ley 100 de 1892, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, invalida el fallo que ha sido materia del recurso, solamente en cuanto á lo decidido en el mencionado punto 4.°, absteniéndose de invalidarlo en lo demás; y declara que Rafael Aizpuru no está obligado á restituír á Duque Hermanos ninguna de las cantidades que éstos le entregaron como producto de "Charadas y Rifas chinas."

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente al Tribunal de su procedencia.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Córte Suprema de Justicia. — Bogotá, Abril veintidós de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: José María Sierra S., en su carácter de cesionario del rematador de la renta sobre producción y venta de aguardiente de caña y sus compuestos, establecida en el Departamento de Cundinamarca, según consta de la escritura pública de fecha nueve de Diciembre de mil ochocientos noventa, número 1,016, ocurrió al Gobernador de dicho Departamento, solicitando la suspensión de las Ordenanzas números 13 y 21, por las cuales se aclara y adiciona la número 4 de 1889, sobre arbitrios rentísticos, expedidas por la Asamblea departamental en sus sesiones del año próximo pasado.

Dicho Gobernador no accedió á la solicitud de Sierra, y con tal motivo éste ocurrió al Tribunal Superior de Cundinamarca, reiterando su solicitud de suspensión de las referidas Ordenanzas, de la número 13 en su totalidad, y de la número 21 en sus artículos 1.° y 2.°, disposiciones que el solicitante cree violatorias de los derechos que dice ha adquirido en su carácter de cesionario del rematador de la aludida renta.

El Tribunal, después de observar la tramitación prevenida en el artículo 145 de la Ley 149 de 1888, sobre régimen político y municipal, dictó su resolución de veinte de Octubre del año próximo pasado, en la cual declaró que no había lugar á suspender las dos Ordenanzas acusadas de nulidad por José María Sierra S., y dispuso que si esa resolución no fuere apelada, se consultase con esta Corte Suprema. Sierra, sin embargo, interpuso apelación que le fué concedida, y remitidos los autos á esta Superioridad, se ha dado curso al expediente, como lo dispone el artículo 147 de la ley citada, y se procede á decidir definitivamente sobre la nulidad ó validez de las Ordenanzas de que se trata.

Como las expresadas Ordenanzas acusadas son ambas aclaratorias de la número 4 de 1889, sobre arbitrios rentísticos, es indispensable tener á la vista sus disposiciones.

Dicha Ordenanza dice así:

"ORDENANZA NÚMERO 4 DE 1889,

"sobre arbitrios rentísticos.

"*La Asamblea departamental de Cundinamarca,*

"En uso de la atribución que le confiere la segunda parte del numeral 31 del artículo 129 del Código Político y Municipal de 1888, y

"CONSIDERANDO:

.....

"ORDENA:

"Artículo 1.° Grávase la producción, introducción y venta de licores destilados embriagantes, en los términos siguientes:

"1.° La producción y venta de aguardiente de caña y sus compuestos, hasta con diez centavos cada litro;

"2.° La producción y venta de ron, hasta con veinte centavos;

"3.° La introducción de bebidas espirituosas destiladas, como brandy, ginebra wheskey, pouss-cafés etc., á razón hasta de $ 0.80 por cada 750 centímetros cúbicos de licor;

"4.° La introducción de aguardiente de otros Departamentos, hasta con veinte centavos cada litro;

"5.° Introducción de ron y otros licores del país, procedentes de otros Departamentos, hasta con treinta centavos el litro.

"Parágrafo. Exceptúase de lo dispuesto en el inciso 1.° de este artículo, el alcohol desinfectado de veintiocho á cuarenta grados, *el cual sólo pagará cinco centavos* el litro.

"Artículo 2.° Los efectos gravados por la presente Ordenanza, que hayan pagado el impuesto, no causarán derecho alguno por el tránsito.

"Artículo 3.° Facúltase al Gobernador para reglamentar la manera de cobro de este impuesto por el sistema de patentes, pudiendo hacerse la percepción por remate ó por administración."

Expidióse después la Ordenanza número 4 de 1890, que dispuso lo siguiente:

"ORDENANZA NÚMERO 4 DE 1890,

"por la cual se da al Gobierno del Departamento una autorización para arrendar y reglamentar un impuesto.

"*La Asamblea departamental de Cundinamarca*

"ORDENA:

"Artículo 1.° Autorízase al Gobernador del Departamento para arrendar en licitación pública, el impuesto sobre introducción, producción y venta de aguardiente de caña y sus compuestos.

"Artículo 2.° El arrendamiento puede hacerse por el término de cinco años, y su producido íntegro se aplicará á los gastos que se causen en el bienio económico de 1891 y 1892.

"Artículo 3.° Queda también autorizado el Gobernador para dictar las medidas conducentes á la reglamentación de esta renta.

"Artículo 4.° Será base mínima del arrendamiento, en el tiempo determinado en el artículo 2.° de esta Ordenanza, un producido efectivo de cuatrocientos mil pesos ($ 400,000)."

Por virtud de lo dispuesto en esta última Ordenanza, el Gobernador del Departamento sacó á licitación el arrendamiento del impuesto sobre introdnucción, producción y venta de aguardiente de caña y sus compuestos, que debía durar cinco años, y efectivamente se hizo el remate en los primeros días de Diciembre del mismo año de 1890 á favor de Luis Nieto, quien, con anuencia del Gobernador traspasó sus derechos de arrendatario á José María Sierra S., entrando éste en posesión de esos derechos desde 1.° de Enero de 1891, después de dar todas las garantías que se le exigieron.

En este estado, la misma Asamblea de Cundinamarca en sus sesiones de 1892, expidió las Ordenanzas números 13 y 21, publicadas en el número 485 de la *Gaceta de Cundinamarca*, que dicen así en lo conducente:

"ORDUNANZA NÚMERO 13,

"que adiciona y aclara la número 4 de 1889.

"*La Asamblea departamental de Cundinamarca*,

"En uso de sus atribuciones legales,

ORDENA:

"Artículo 1.° Grávase con diez centavos cada litro de alcohol sin desinfectar que se destile en el Departamento.

"Artículo 2.° El producto de este impuesto ingresará á los fondos comunes del Departamento.

"Artículo 3.° Autorízase al señor Gobernador del Departamento para que reglamente el cobro de este impuesto.',

"ORDENANZA NUMERO 21,

"que aclara la número 4 de 1889, sobre arbitrios rentísticos.

"*La Asamblea departamental de Cundinamarca,*

"En uso de sus facultades, y

"CONSIDERANDO:

.....

"ORDENA:

"Artículo 1.° Entiéndese por el alcohol desinfectado de que habla el parágrafo del artículo 1.° de la Ordenanza número 4 de 1889, el alcohol rectificado de 28 á 40 grados que se haya desinfectado por la destilación en aparatos apropiados para el efecto, ó por medio de procedimientos químicos.

"Artículo 2.° El artículo 2.° de la citada Ordenanza número 4 de 1889, dice: 'Los efectos gravados por la presente Ordenanza que hayan pagado el impuesto, no causarán derecho alguno por el tránsito.' En consecuencia, tales efectos ó licores, una vez que hayan pagado el impuesto que grava su producción, tendrán libre tránsito por todo el territorio del Departamento, y podrán buscar su mercado y darse á la venta, sin que sea lícito gravarse por nuevos impuestos.

"Artículo 3.° Quedan derogadas todas las disposiciones ó decretos emanados de cualquiera autoridad, que sean contrarias al espíritu y á la letra de la Ordenanza número 4 de 1889, aclarada por la presente, y en tal virtud el rematador de este impuesto no podrá cobrar otros derechos que los establecidos en ella."

Refiriéndose la solicitud de nulidad á estas dos últimas Ordenanzas, por creer el peticionario Sierra que ellas vulneran sus derechos de rematador, la Corte procede á examinar detenidamente sus disposiciones; pero al hacerlo encuentra que el señor Procurador de la Nación ha hecho á su vez un estudio tan detenido de ellas, que no puede dejar de acogerlo, como concienzudo y correcto.

Dice así el señor Procurador:

"La primera Ordenanza cuya suspensión se solicita, la 13 de 1892, establece un gravamen de diez centavos sobre cada litro de *alcohol sin desinfectar* que se destile en el Departamento.

"El rematador Sierra sostiene que esa materia quedó gravada por la Ordenanza número 4 de 1889, y que, en consecuencia, el impuesto sobre ese artículo quedó incluído en el contrato de arrendamiento de la renta de aguardiente que tiene celebrado con el Departamento, y, por consiguiente, constituye para Sierra un derecho adquirido, por lo cual, según el rematador, el Departamento no puede gravar hoy, como cosa distinta del aguardiente, el alcohol sin desinfectar, para destinar el nuevo impuesto á los fondos comunes del Departamento.

"En esa parte la pretensión de Sierra es fundada en mi opinión.

"La Ordenanza número 4 de de 1889, que sirvió de base al contrato de arrendamiento celebrado con Sierra, dice en su artículo 1.°:

"Artículo 1.° Grávase la producción, introducción y venta de licores destilados embriagantes en los términos siguientes:

"1.° La producción y venta de aguardiente de caña y sus compuestos, hasta con diez centavos cada litro."

Después, al final de este artículo, se dice lo siguiente:

"Parágrafo. Exceptúase de lo dispuesto en el inciso 1.° de este artículo, el alcohol desinfectado de veintiocho á cuarenta grados, el cual sólo pagará hasta cinco centavos el litro."

Esta única excepción contenida en el parágrafo anterior indica claramente que el otro alcohol, ya fuera desinfectado á grados distintos de los que allí se expresan, ó *sin desinfectar* en cualquier grado, quedó incluído en la expresión general de aguardiente, y, por consiguiente, sujeto al gravamen de que allí se habla, el cual, en virtud del contrato de arrendamiento, corresponde al arrendatario.

"Es regla también de interpretación de los contratos, la aplicación práctica que de éstos han hecho las partes contratantes (artículo 1622, inciso 3.° del Código Civil).

"En el presente caso, tanto Sierra, arrendatario, como el Departamento, arrendador, entendieron la Ordenanza número 4 de 1889 en los términos expuestos, es decir, considerando el alcohol sin desinfectar como materia gravada también en dicha Ordenanza, y de acuerdo con esto procedió Sierra, al cobrar el impuesto, y el Departamento, á permitir aquél cobro que reglamentó.

"En efecto. En el Decreto número 24 (de 19 de Enero de 1891), expedido por el Gobernador de Cundinamarca, "sobre producción, introducción y venta de licores destilados," se dispuso:

"Artículo 1.° De conformidad con el artículo 100 del Decreto número 329, de 30 de Diciembre de 1887, que organiza la Hacienda pública, el rematador se considerará sustituído al Departamento en los derechos que éste tiene respecto de la renta de aguardiente de caña y sus compuestos. En consecuencia, tiene los derechos que á continuación se expresan, y puede percibir por esa causa las cuotas que siguen:

.....

"*d)* Por la producción y venta, conjuntamente, del *alcohol sin desinfectar*, veinte centavos."

.....

No sólo, pues, el tenor literal de la Ordenanza 4 de 1889, sino también el modo práctico como ésta fué entendida por las partes, revelan que el *alcohol sin desinfectar*, sí quedó *comprendido en las materias* gravadas por aquella Ordenanza y que el derecho de percibir tal impuesto se trasmitió á Sierra como rematador de aquella renta, derecho de que éste sería despojado si se permitiese hoy que el impuesto fuese á las arcas comunes del Departamento, como lo dispone la Ordenanza número 13 de 1892, que debe ser suspendida.

"La otra Ordenanza á que se refiere la demanda de suspensión, es la marcada con el número 21 del propio año de 1892, respecto de sus artículos 1.° y 2.° que voy á examinar separadamente:

"El artículo 1.° dice:

"Artículo 1.° Entiéndese por el alcohol desinfectado de que habla el parágrafo del artículo 1.° de la Ordenanza número 4 de 1889, el alcohol rectificado de 28 á 40 grados que se haya desinfectado por la destilación en aparatos apropiados para el efecto, ó por medio de procedimientos químicos.

"Arriba queda transcrito el parágrafo del artículo 1.° de la Ordenanza número 4 de 1889. El artículo 1.° de ésta gravó con diez centavos la producción y venta de cada litro de alcohol (ó aguardiente) de caña, salvo el alcohol *desinfectado* de 28 á 40 grados, que sólo debía pagar cinco centavos por litro, de acuerdo con el parágrafo mencionado.

"El artículo 1.° de la Ordenanza número 21 de 1892, se limitó á declarar lo que debe entenderse por alcohol desinfectado de 28 á 40 grados, y dijo que éste era el alcohol rectificado de 28 á 40 grados desinfectado por la destilación ó por medios químicos.

"No alcanzo, pues, á comprender cómo este artículo pueda vulnerar derechos del rematador, puesto que ninguna novedad introduce en la Ordenanza 4 de 1889. Esta habla de alcohol *desinfectado* y la otra de alcohol rectificado que se *desinfecte*.

"No creo, por tanto, que haya lugar á suspender el artículo 1.° de la Ordenanza 21 de 1892.

"El artículo 2.° de esta Ordenanza, también acusado, dice:

"Artículo 2.° El artículo 2.° de la citada Ordenanza número 4 de 1889, dice: 'Los efectos gravados por la presente Ordenanza que hayan pagado el impuesto, no causarán derecho alguno por el tránsito.' En consecuencia, tales efectos ó licores, una vez que hayan pagado el impuesto que grava su producción, tendrán libre tránsito por todo el territorio del Departamento, y podrán buscar su mercado y darse á la venta, sin que sea lícito gravarse por nuevos impuestos."

"Como se ve, esta disposición tampoco agrega nada al artículo 2.° de la Ordenanza 4 de 1889 que allí se inserta. Se limita únicamente á repetir que los artículos gravados que hayan pagado el impuesto, quedan exentos de causar nuevos derechos por el tránsito.

"Sostiene Sierra, sin embargo, que al permitirse en aquella disposición que una vez pagado el impuesto, los artículos transiten libremente y puedan buscar distintos mercados para su venta sin pagar impuesto nuevo, se vulneran sus derechos, porque, según él, por el sólo hecho de la venta de aguardiente en lugar distinto de su producción, se causa el impuesto, aun que él haya sido pagado por el productor.

"Esta teoría no es aceptable, porque el aguardiente que para su producción ha pagado el impuesto, puede ser vendido libremente por quien quiera que lo tenga, sea por su productor ó por el sucesor de éste en la propiedad del artículo, y esa venta puede verificarse libremente en cualquier punto del Departamento, puesto que en todo él rige la Ordenanza que establece y reglamenta el gravamen. De otro modo y ampliando la doctrina del señor Sierra, se llegará al absurdo de que una misma cantidad de aguardiente vendida repetidas veces causara nuevo impuesto en cada una de sus ventas sucesivas.

"La prueba de que le basta al vendedor (quien quiera que sea éste y cualquiera que sea el lugar de la venta) el pago que hizo el productor para la venta libre del aguardiente, se encuentra en el mismo Decreto número 24 de 19 de Enero de 1891, sobre aguardiente, expedido por el Gobernador de Cundinamarca, que dice esto:

'Artículo 7.° Cuando el productor de licores destilados hubiese pagado el impuesto respectivo, el expendedor no estará obligado al pago; pero sí deberá comprobar que el productor lo ha verificado.'

"Este Decreto es el que ha servido de norma al rematador, para cobrar el impuesto; luego aquél sabía, desde que comenzó su contrato, que una vez que el aguardiente hubiese pagado el impuesto por la producción, podía expenderse libre-

mente en todo el Departamento, siempre que el vendedor comprobase el pago hecho por su antecesor, aunque ese pago se hubiere verificado en lugar distinto del de la producción.

"Por estas razones estimo que el artículo 2.° de la Ordenanza 21 de 1892, no puede considerarse lesivo de los derechos de Sierra, porque dicho artículo no es más que una repetición de lo consignado en el 2.° de la Ordenanza 4 de 1889, que permite el libre tránsito de los efectos gravados que hubiesen satisfecho el impuesto, y que, en consecuencia, sin pagarlo nuevo, pueden ir á ofrecerse á otros mercados.

"Sostiene también Sierra que el Secretario de Hacienda de Cundinamarca, en resolución de fecha 1.° de Diciembre de 1890, declaró que el rematador tenía facultad de exigir por el sólo paso de licores de un lugar á otro, un derecho igual al impuesto, facultad que se le arrebataba por el artículo 2.° de la Ordenanza 21 de 1892.

"Sobre este punto, el Tribunal de Cundinamarca se expresa así:

'Tal resolución no autoriza al rematador para exigir un nuevo impuesto, que á tánto equivale el gravar el tránsito del líquido, porque los derechos y obligaciones del rematador quedaron definidos en el pliego de cargos, y en éste no está comprendido el que confiere la resolución gubernativa, pues es de fecha anterior al de la celebración del contrato de arrendamiento, el cual quedaría sustancialmente modificado si se le diese valor á aquella decisión, porque suponiendo, en gracia de discusión, que ese derecho hubiera quedado incluído en el pliego de condiciones, que es la póliza del contrato, aun así no podría reconocerse, por cuanto la resolución gubernativa no fué publicada con la anticipación de que habla el artículo 1367 del Código Fiscal, porque los contratos no se modifican antes de celebrarse y porque por medio de simples resoluciones cuyo alcance es muy limitado, pues son de carácter especial (artículo 3.° de la Ley 149 de 1888), no se pueden establecer impuestos departamentales, porque esta atribución es de exclusiva competencia de la Asamblea (artículos 190 de la Constitución y 129 de la acabada de citar).'

"Esta argumentación del Tribunal inferior es suficiente para convencer de que la expresada resolución administrativa no pudo conferirle derecho alguno."

La Corte, que, como se dijo yá, no podría agregar nada á la exposición del señor Procurador, de acuerdo con ella y con lo que allí se solicita, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: que es nula la Ordenanza número 13 de 1892, expedida por la Asamblea de Cundinamarca, por ser lesiva de los derechos adquiridos por José María Sierra S., como rematador de la renta de licores. En consecuencia, revoca la resolución del Tribunal que declaró que no había lugar á la suspensión de dicha Ordenanza, y confirma dicha resolución en la parte en que hizo la misma declaración respecto de la Ordenanza número 21 del mismo año, que la Corte declara válida.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente al Tribunal.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Abril tres de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Lorenzo Gaona, vecino de Bogotá, ha dirigido á la Corte un denuncio documentado contra los señores Jesús María Quintero P., Antonio María Rueda Gómez y Nicolás Enciso, Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, que pronunciaron la sentencia definiva, sin lugar á recurso de casación, de fecha cinco de Marzo de mil ochocientos noventa y dos, que decidió en segunda instancia el juicio que Camila Forero promovió contra Daniel F. Macharaviaya, sobre reivindicación de una casa situada en esta ciudad. El denuncio versa sobre infracción de leyes expresas que se dicen pretermitidas en aquel fallo, y por la cual infracción cree el denunciante que debe exigirse la responsabilidad del artículo 539 del Código Penal; pero como el artículo 63 de la Ley 100 de 1892, vigente desde el primero del pasado, dispone que para hacer efectivas las responsabilidades criminal y civil contra los Magistrados y Jueces por infracción ó violación de leyes, en los autos y sentencias en juicio civil, en los casos prevenidos en el Código Penal, se requiere acusación de parte, la Corte, de conformidad con lo pedido por el señor Procurador general, resuelve que no há lugar á ocuparse en el denuncio arriba expresado.

Notifíquese.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Abril diez y ocho de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 100 de 1892, no puede hoy perseguirse de oficio, sino por acusación de parte, la responsabilidad criminal y civil en que incurran los Magistrados y Jueces por infracción ó violación de leyes en autos y sentencias en juicio civil en los casos prevenidos en el Código Penal; y hallándose en este caso el denuncio dado por Apolinar Ruiz contra el Magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judial de Popayán, doctor Gonzalo Mejía, la Corte Suprema se abstiene de adelantar todo procedimiento de oficio sobre el particular.

Publíquese y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO. *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Abril diez y nueve de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Por denuncio dado ante el Administrador de la Aduana de Orocué, se instruyó sumario para averiguar la introducción clandestina, por puertos no habilitados, de setenta quintales de caucho y treinta de cacao que se decía habían sido importados por un comisionado de Valentín Pérez, de San Fernando de Atabapo, en Venezuela.

Perfeccionado el sumario, se dictó por el Juez del Circuito de Casanare, el auto de tres de Diciembre del año próximo pasado, por el cual se declaró de contrabando la introducción de los artículos mencionados y de dos platones de metal, hecha por Francisco García y Rafael Jomasini, por los puertos de San Pedro y Orocué.

De esta resolución se pidió revocación por el apoderado de Ramón Real, y en subsidio se interpuso apelación para ante el respectivo Superior; y el Juez del Circuito, que no accedió á la revocación solicitada, concedió el recurso para ante esta Superioridad, por lo cual fueron remitidas á la Corte estas diligencias.

El señor Procurador general de la Nación, en vista de decisiones anteriores de la Corte, ha solicitado que esta Superioridad se abstenga de conocer del presente recurso; y siendo exacta la observación del señor Procurador, como puede verse en la resolución de cuatro de Abril de mil ochocientos noventa y dos (1892), publicada en el número 332 de la *Gaceta Judicial*, por cuanto la Corte carece de facultad para conocer en segunda instancia de los juicios de contrabando, conforme al artículo 43 del Código de Organización Judicial, así se resuelve y se dispone devolver el expediente al Juez mencionado para que conceda el recurso para ante el respectivo Tribunal Superior.

Notifíquese, déjese copia y publíquese en la *Gaceta Judicial*.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

IMPRENTA DE ANTONIO M. SILVESTRE.

REPÚBLICA DE COLOMBIA.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AÑO VIII | Bogotá, 10 de Junio de 1893. | NÚM. 396.

CONTENIDO.

Págs.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

La que reconoce á Manuel J. Alvarez, como cesionario de Miguel A. Arango y otros, un crédito procedente de empréstitos. (Magistrado ponente, doctor Pombo) 257
La que concede á Leticia Lindo una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Galindo) 258
La que reconoce en parte, á favor de Benjamín Palacio, cesionario de Alejandro Gutiérrez y otros, un crédito procedente de suministros y empréstitos. (Magistrado ponente, doctor Pombo) 258
La que concede á Aureliano Rojas una recompensa militar. (Magistrado ponente, doctor Isaza) 258
La que concede á Dominga Muñoz una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Pombo) 259
La que declara que no hay lugar á infirmar el fallo pronunciado por el Tribunal Superior de Popayán, en el juicio seguido por Manuela Gonzalías contra los ejecutores testamentarios de Bautista Vaca G., sobre nulidad del testamento de éste. (Magistrado ponente, doctor Galindo) 259
Salvamento de voto del señor Magistrado doctor Trujillo en la sentencia anterior 263

AUTOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

El que declara prescrita la pena que hubiera de imponerse á Luis Carlos Piñeres, ex-Prefecto del extinguido Territorio de San-Andrés y San Luis de Providencia por varios cargos. (Magistrado ponente, doctor Galindo) 264
El que confirma el auto de proceder dictado por el Tribunal Superior del Cauca contra Miguel Piedrahita Casas, Juez de lo Criminal del Circuito de Toro, por mala conducta. (Magistrado ponente doctor Isaza 264

GACETA JUDICIAL.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Abril quince de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: La Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, por resolución número 4,038, dictada el 17 de Septiembre del año próximo pasado, en el expediente número 4,069, negó el reconocimiento del crédito de seis mil sesenta y ocho pesos veinte centavos ($ 6,068-20), reclamado por Manuel J. Alvarez, como cesionario de varios individuos del Departamento de Antioquia, por empréstitos en dinero hechos por los cedentes al Gobierno local del extinguido Estado, en la guerra de 1884 á 1885.

Fundóse la Comisión en que la prueba presentada consistía en recibos expedidos por empleados subalternos del Gobierno rebelde de Antioquia que no constituyen por sí solos prueba suficiente para el reconocimiento, y en que, si tales recibos hubiesen sido expedidos por empleados subalternos del Gobierno legítimo, debían haberse convertido en la atestación gubernativa de que habla el Decreto número 102 de 1885. El Ministerio del Tesoro aprobó lo resuelto por la Comisión, en resolución de veintidós de Noviembre del mismo año, y el apoderado de Alvarez, doctor Andrés Lara, interpuso apelación para ante la Corte, por lo cual se ocupa esta Superioridad en la decisión definitiva del asunto.

Desde que se presentó ante el Gobernador de Antioquia la relación de los créditos para el efecto de ser registrados, se ordenó pasar el expediente al Tribunal de Cuentas para que certificase si el valor de los recibos de que constaba la reclamación figuraba en la cuenta del respectivo empleado. Según el certificado del Secretario de la Oficina general de Cuentas, José María Mesa Lince, se encontró que en las respectivas cuentas de la Administración general del Tesoro y de los colectores de Hacienda, había constancia respecto de doscientos cuarenta y ocho recibos que daban un total de cinco mil pesos sesenta centavos ($ 5,000-60), los cuales fueron distinguidos con el sello de la Oficina. El Gobernador del Departamento certificó después que eran legítimos los recibos en los cuales aparecía el sello mencionado. Pero como tratándose de exacciones hechas por los rebeldes, era indispensable acreditar que los individuos á quienes se exigieron los empréstitos fueron partidarios y sostenedores del Gobierno, conforme al artículo 1.° de la Ley 44 de 1886, el interesado ha ocurrido después á certificaciones del Gobernador de Antioquia, según las cuales no tienen aquel carácter sino los individuos que aparecen de la lista que ha formado al efecto el apoderado del reclamante, y cuyos recibos dan solamente la suma de dos mil setecientos doce pesos cuarenta centavos ($ 2,712-40).

En cuanto á la fuerza legal que tales recibos tengan para que la Corte ordene el reconocimiento á cargo del Tesoro, yá esta Superioridad, en sentencia de veinticuatro de Noviembre último, dijo lo siguiente:

"La Ley 44 de 1886 no indicó la manera como debían acreditar los partidarios y sostenedores del Gobierno las exacciones que sufrieran de parte de los rebeldes, y de allí se ha creído que el único modo de justificarlas es con la prueba de testigos recibida con todas las formalidades legales. Pero como los empréstitos y expropiaciones de que trata esta reclamación fueron decretados por el Gobierno del extinguido Estado de Antioquia, que estaba perfectamente organizado y dejaba constancia de sus actos en las oficinas públicas, cuyos archivos se encuentran hoy en poder de las autoridades y en los cuales se han confrontado los recibos presentados, es preciso convenir en que es difícil acreditar mejor con la prueba testimonial esos empréstitos de lo que están en el certificado del Gobernador de Antioquia, expedido en vista de documentos que reposan en las oficinas que tiene á su cargo, porque en derecho vale más la prueba literal preconstituída que la de testigos."

A virtud de lo que se deja expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca la resolución del Ministerio del Tesoro que ha sido apelada, y declara que el Tesoro nacional debe pagar á Manuel J. Alvarez, ó su apoderado, la cantidad de dos mil setecientos doce pesos cuarenta centavos ($ 2,712-40), á que asciende la suma de los recibos dados á favor de individuos que fueron partidarios y sostenedores del Gobierno legítimo, y que constan en la lista formada por dicho apoderado, presentada últimamente ante la Corte.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, veintidós de Abril de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: La señora Leticia Lindo, hija legítima del Teniente-Coronel de la Independencia, José Lindo, y viuda, obtuvo, por sentencia de esta Superioridad de siete de Noviembre de mil ochocientos noventa, una recompensa de dos mil pesos ($ 2,000), que le fué asignada de conformidad con la Ley 153 de 1887, y ahora demanda que dicha recompensa le sea complementada hasta el monto del derecho que á los deudos de los militares de la Independencia otorga el artículo 9.° de la Ley 84 de 1890, en los términos que lo permite el artículo 13 de la misma ley. Como los hechos constitutivos del derecho de la señora Leticia Lindo á ser recompensada por los servicios prestados por su finado padre en la guerra de la Independencia, fueron reconocidos por la Corte en la sentencia antes mencionda, no hay para qué ocuparse nuevamente en ellos; pero á la demanda del complemento de la recompensa ha accedido también Luis Pereira Lindo, en su calidad de nieto legítimo del Teniente-Coronel Lindo, como hijo legítimo de la señora Manuela Lindo y del doctor Guillermo Pereira, y aunque en el expediente existen todas las pruebas bastantes, relativas á la legítima filiación de Luis Pereira Lindo, como éste, que según consta también de autos, se encuentra atacado de demencia, confirmada esencialmente incurable, no ha sido representado en el juicio por su curador general, como expresamente lo exige la ley de la materia, no ha lugar, por ahora, á ocuparse en el examen y declaratorias de su derecho.

En autos hay la plena prueba de que no existen otros descendientes legítimos del Teniente-Coronel Lindo, sino Leonidas Lindo, soltero y mayor de edad, residente en la ciudad de Zipaquirá, Departamento de Cundinamarca, quien por no encontrarse incapacitado para trabajar, así lo ha manifestado á la Corte en memorial del folio 19, renunciando expresamente á toda participación en la demanda de recompensa, y Benilda Lindo, casada con Jenaro Quijano, y por tanto, sin derecho alguno á la recompensa (declaraciones de folios 15 á 18 de estos autos).

Como los dos mil pesos ($ 2,000) que la señora Leticia Lindo recibió por la sentencia de siete de Noviembre de mil ochocientos noventa, de conformidad con la Ley 153 de 1887, los hubo por un derecho exclusivo, en su calidad de hija del Teniente-Coronel Lindo, derecho de que aquella ley no hacía partícipes á los nietos, dichos dos mil pesos ($ 2,000) no tienen por qué volver al acerbo de la recompensa para ser divididos por mitad entre la hija y el Nieto, sino que se deducirán de la suma, para dividir el saldo entre los dos agraciados.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara á los deudos del Teniente-Coronel José Lindo que han intervenido en este juicio, con derecho á una recompensa complementaria de dos mil ochocientos pesos ($ 2,800), deducidos los dos mil pesos ($ 2,000), yá recibidos por la señora Leticia Lindo, de los cuales corresponden y serán pagados á dicha señora mil cuatrocientos pesos ($ 1,400). Los mil cuatrocientos pesos ($ 1,400) restantes se reservarán esperando á que el demente Luis Pereira Lindo, promueva sobre este mismo expediente la declaración de su derecho, por conducto de su legítimo guardador.

Notifíquese, cópiese, publíquese y comuníquese para su cumplimiento al Ministerio del Tesoro.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA. — BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO. — *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veinticuatro de Abril de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Manuel Antonio Valencia, titulándose apoderado de Benjamín Palacio, vecino de Medellín, solicitó ante la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, el reconocimiento y pago del crédito de mil novecientos setenta y un pesos veinticinco centavos ($ 1,971-25), procedente de suministros y empréstitos hechos durante la guerra de mil ochocientos ochenta y cinco por varios individuos que puntualizó en la lista que figura al folio 62 del expediente.

A la solicitud se acompañaron varios recibos, expedidos la mayor parte por autoridades del Gobierno rebelde de Antioquia y algunas informaciones de testigos que no fueron precedidas de la respectiva relación jurada, circunstancia exigida por la ley cuando la reclamación está apoyada en esta clase de prueba.

La Comisión, á pesar de no haberse legitimado la personería de Valencia, dió curso al expediente, y en siete de Junio del año próximo pasado dictó su resolución número 3,765, por la cual negó el reconocimiento solicitado y absolvió á la República del cargo. Esa resolución tuvo por fundamento el de que respecto de los empréstitos y suministros hechos á los rebeldes, faltaba el comprobante de haber sido los reclamantes partidarios y sostenedores del Gobierno nacional, y respecto de los hechos á este mismo Gobierno ó á agentes suyos faltaba la autenticación que era indispensable.

Confirmada esa resolución por la que dictó el Ministerio del Tesoro, en ocho de Agosto siguiente, bajo el número 3,146, se presentó el doctor Andrés Lara como apoderado de Benjamín Palacio, aunque solamente como representante de Antonio María González, Aniceto Vargas y Bartolomé Sierra de quienes Palacio era cesionario.

Lara pidió que se le tuviese como parte para el efecto de apelar de la resolución del Ministerio, en la parte que perjudicaba á sus representados. Así se resolvió, y notificada que le fué dicha resolución, apeló de ella para ante la Corte á donde se remitió el expediente.

Ante ella se han presentado por Lara los siguientes documentos:

Una certificación del Archivero de la Oficina general de Cuentas, de la que aparece que en la lista presentada por Heliodoro Zapata P., de los contribuyentes en Girardota, figura Bartolomé Sierra, por doscientos diez pesos;

Otra certificación de Su Señoría el Ministro de Guerra, según la cual, Ricardo M. Acero fué Comisario pagador de las fuerzas de Occidente, en mil ochocientos ochenta y cinco, con lo cual se autentica el recibo de cien pesos, expedido por Acero, á favor de Aniceto Vargas;

Y otra certificación del Gobernador del Departamento de Antioquia que comprueba que Marcelino Arango P., ejerció como Prefecto de la Provincia del Sur, en Enero de mil ochocientos ochenta y siete, quien con tal carácter autenticó el recibo expedido por Aldemar Sánchez, á favor de Antonio María González, por setenta y cinco pesos.

Como estos empréstitos fueron consignados á empleados nacionales y están respectivamente autenticados, y la Corte ha declarado yá que no hay necesidad de que las firmas de los recibos sean reconocidas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca la resolución del Ministerio, motivo de la apelación, y declara que el Tesoro nacional debe pagar al apoderado de los individuos ya mencionados, la cantidad de trescientos ochenta y cinco pesos ($ 385) como valor de los empréstitos que ellos hicieron al Gobierno, en la última guerra, y absuelve á dicho Tesoro del resto del crédito reclamado.

Notifíquese, déjese copia, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veinticuatro de Abril de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Aureliano Rojas, solicita por conducto de su

apoderado Salvador Valencia Fernández, que se le reconozca derecho á recompensa militar conforme á la Ley 84 de 1890.

Ha justificado los hechos siguientes:

1.° Con declaraciones de cuatro testigos hábiles, que presenciaron lo que afirman, que en la guerra de mil ochocientos setenta y seis y mil ochocientos setenta y siete, militó Rojas, en clase de Sargento primero, en las fuerzas revolucionarias que sostenían principios idénticos en esencia á los que informan las actuales instituciones; que concurrió á la batalla de la Cuchilla del Tambo, librada el veintinueve de Noviembre de mil ochocientos setenta y seis, y que en ella recibió una gravísima herida en el brazo derecho, por consecuencia de la cual le fué amputado en el Hospital de Popayán;

2.° Con certificación del Gobernador del Cauca expedida de acuerdo con lo que previene el artículo 20 de la citada ley, que ha sido reconocido por dicho Gobernador, y dos testigos y que realmente se halla inútil por mutilación absoluta y que está á la vista, del brazo derecho;

3.° Con certificaciones del Ministerio del Tesoro, que Rojas no figura en el registro de pensionados de la República y que no hay constancia en los libros respectivos de que haya recibido recompensa del Tesoro nacional, por razón de invalidez contraída en la guerra de mil ochocientos setenta y seis.

Las declaraciones de testigos presentadas, por falta de documento que por otra parte no harían fe, por no proceder de autoridades legítimamente constituídas comprueban que Rojas tenía en el Ejército el empleo de Sargento primero; pero como sólo se demanda la recompensa que corresponde al Sargento segundo, la Corte no puede otorgarle una mayor.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de conformidad con el dictamen del señor Procurador, y de acuerdo con lo que disponen los artículos 1.°, 4.°, 5.°, 6.°, 9.°, y 11 de la Ley 84 de 1890, declara que Aureliano Rojas, vecino del Tambo, en el Departamento del Cauca, es acreedor á una recompensa unitaria de ochocientos diez y seis pesos ($ 816) que se le pagará del Tesoro nacional, por invalidez absoluta contraída en defensa de los principios que informan las actuales instituciones.

Comuníquese esta sentencia á Su Señoría el Ministro del Tesoro, insértese en la *Gaceta Judicial*, déjese copia y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO. — JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veinticinco de Abril de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Andrés Lara, en ejercicio del poder que le fué conferido por Dominga Muñoz, vecina de La-Cruz, en el Departamento del Cauca, ha demandado la concesión de una recompensa unitaria que corresponde á su poderdante, como madre legítima de José Paz, muerto en el combate que se libró en once de Marzo de mil ochocientos setenta y siete, en el sitio de "Las-Llanadas," Distrito de La-Cruz, y en defensa de los principios que informan las actuales instituciones de la República.

Al expediente se han acompañado los siguientes documentos:

La partida de matrimonio contraído en el año de mil ochocientos treinta y siete, entre Salvador Paz y Dominga Muñoz, expedida por el Cura Párroco de La-Cruz;

La del bautismo de José Paz, como hijo legítimo de dicho matrimonio, extendida el diez y siete de Enero de mil ochocientos cincuenta y dos, por el Cura Párroco de la Catedral de Pasto;

Dos informaciones de cuatro testigos cada una recibidas con las formalidades legales, con las cuales se han acreditado plenamente los siguientes hechos: 1.° que José Paz, después de haber combatido en varios encuentros de armas que tuvieron lugar en el Sur del Cauca, en mil ochocientos setenta y seis y mil ochocientos setenta y siete, en su calidad de soldado defensor de los principios que informan las actuales instituciones, recibió un balazo que le causó la muerte, en el citado combate de "Las-Llanadas; 2.° que murió joven y sin dejar cónyuge ni descendientes; 3.° que fué muy buen hijo y vivió siempre al lado de sus padres y en buena armonía con ellos; 4.° que Dominga Muñoz es sumamente pobre, pues vive de la caridad pública, ha observado buena conducta y permanece viuda, y 5.° que su esposo Salvador Paz falleció hace mucho tiempo, sobre lo cual es admisible la prueba testimonial por haber certificado el Cura de La-Cruz, que en los libros de defunciones llevados en esa Parroquia no se encuentra la partida correspondiente á la de Salvador Paz;

Finalmente, el señor Ministro del Tesoro ha certificado que Dominga Muñoz no figura en el registro de pensionados de la República ni hay constancia de que haya recibido recompensa del Tesoro nacional por la muerte de José Paz.

Perfeccionado así el expediente y justificados como están los hechos que acreditan el derecho de la solicitante, á la cual representa hoy Salvador Valencia Fernández, por sustitución del poder hecha por Lara, la Corte Suprema en observancia de lo dispuesto en los artículos 1.°, 5.° 9.°, y 11 de la Ley 84 de 1890, y de acuerdo con el concepto del señor Procurador de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que Dominga Muñoz, tiene derecho á recibir del Tesoro nacional la recompensa unitaria y definitiva de setecientos cuatro pesos ($ 704), igual al sueldo de cuatro años asignado á un soldado por la muerte de su hijo José Paz, en el campo de batalla.

Notifíquese, déjese copia, avísese al Ministerio del Tesoro, publíquese y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, veinticinco de Abril de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Va la Corte á decidir en este proceso algunas cuestiones relativas á la calidad, estabilidad y derechos y obligaciones recíprocos, concernientes al estado civil de hijo y padres naturales, adquirido por reconocimiento circunstancial, á falta del reconocimiento expreso hecho en escritura pública ó por testamento, cuestiones que en un tiempo tuvieron celebridad en el foro hispano-americano; pero que hoy la han perdido por haberse llenado los vacíos de que adolecía la legislación positiva á este respecto; aquellas intrincadas y profundas disquisiciones, participando del destino de todas las cosas humanas, casi puede decirse que han entrado yá en el polvo de las bibliotecas.

Los hechos controvertidos en este proceso, y sobre los cuales debe recaer este fallo, son los siguientes:

Manuela Gonzalías, antigua esclava colombiana y neogranadina, que se supone nacida por los años de 1813, afirma que concibió y dió á luz entre 1832 y 1835, en el pueblo de Caloto, un niño, cuyo padre putativo, dice fué Antonio Vaca, al cual niño llamaron con el agua de socorro que le echaron al nacer, Juan Bautista y después José Benedicto de los Santos (folio 177, cuaderno A), cuando lo bautizaron, y que este niño, que ella amamantó, crió y formó hasta su mayor edad, y con quien después vivió siempre hasta su muerte, fué el mismo individuo que, con el nombre de Bautista Vaca G., falleció en Caloto el veintiocho de Diciembre de 1890, bajo el testamento cerrado que otorgó ante el Notario de aquel lugar el diez del mismo mes y año, y que, previas las formalidades lugales, fué elevado á instrumento público y convertido en testamento nuncupativo ó abierto, el tres de Enero de 1891, instrumento que corre de folios 1 á 8, cuaderno A.

Por la cláusula 3.ª, el testador hizo la siguiente declaración: "No tengo ni reconozco ningún heredero forzoso. A la señora Manuela Gonzalías, de quien dicen soy hijo natural, pero de quien no tengo conocimiento me haya reconocido legalmente, le dejo en gratificación, por los servicios que me

ha prestado, el derecho de habitación en una de las piezas de mi casa etc."

En virtud de esta declaración, Vaca dispuso libremente de todos sus bienes en favor de algunas obras pías y de algunas iglesias de la Diócesis de Popayán, ordenando que tales bienes se entregaran al Ilustrísimo Señor Obispo, doctor Juan Buenaventura Ortiz, por conducto del Cura de Caloto, doctor Tomás Caicedo V., para que, de común acuerdo, les diera la inversión que determina la cláusula 12.ª del indicado testamento.

Abierta la sucesión de Bautista Vaca, y creyéndose Manuela Gonzalías injustamente pretermitida del derecho que, conforme á los artículos 1226 y 1274 del Código Civil, cree tener á la mitad de los bienes que fincáron por la defunción de su hijo natural, demandó, por medio de apoderado, ante el Juez del Circuito de Caloto, con fecha veintitrés de Enero de 1891, á los albaceas ó ejecutores testamentarios de Bautista Vaca, para que, con su audiencia, se declararan nulas y de ningún valor las cláusulas que la habían despojado de sus derechos, para que en su lugar se la reconociera y declarara heredera forzosa, como madre natural reconocida de Bautista Vaca G., con derecho á la legítima rigurosa que le asigna la ley, y para que, por otros motivos ó razones, de que esta sentencia se ocupará en su lugar, se anularan y reformaran otras cláusulas de aquel testamento.

Surtido el juicio por todos sus trámites, el Juez del Circuito de Caloto lo falló por sentencia de doce de Mayo de 1891, folios 230 á 238, cuaderno F, declarando:

"1.° Que Manuela Gonzalías no es madre natural del que fué Bautista Vaca G., y por lo tanto, no ha lugar á adjudicarle á título de heredera, la mitad de los bienes que quedaron por óbito de éste;

"2.° Que no existe motivo alguno legal para reformar la cláusula 6.ª del testamento cerrado, otorgado por dicho Vaca G.;

"3.° Que no son inoficiosas las cláusulas 3.ª y 12.ª del citado testamento, y por lo tanto, no han perdido su eficacia, y

"4.° Que no adolecen de nulidad las cláusulas 7.ª y 12.ª del aludido testamento, y, en consecuencia, las disposiciones que ellas contienen, conservan su validez. Sin costas."

Apelada esta sentencia por el apoderado de la demandante; concedido el recurso por auto de quince de Mayo de 1891, folio 238 vuelto, y surtida la instancia con práctica de nuevas probanzas ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, éste pronunció la sentencia definitiva de doce de Agosto de 1892, folios 247 á 255, por la cual reformó la sentencia apelada en estos términos:

"1.° Manuela Gonzalías es madre natural del testador Bautista Vaca G., y como tal, es legitimaria y tiene derecho á la mitad de los bienes que fincaron por muerte de su hijo natural, hechas las deducciones legales; y, por consiguiente, es nula y de ningún valor la cláusula 3.ª del testamento;

"2.° Es nula la cláusula 2.ª y no lo es la 7.ª del referido testamento;

"3.° No hay motivo legal para reformar la cláusula 6.ª del mismo acto, y

"4.° No hay nulidad en la cláusula 12.ª, en cuanto no perjudique la legítima rigurosa á que tiene derecho Manuela Gonzalías como heredera forzosa.

"Queda en estos términos reformada la sentencia apelada. Sin costas."

Esta sentencia quedó legalmente notificada á las partes por el edicto del folio 257, fijado el veintitrés de Agosto, y desfijado el treinta del mismo á las doce del día.

Con poder especial conferido por los ejecutores testamentarios de Vaca al doctor Luis Enrique Bonilla, para interponer y sostener el recurso de casación contra dicha sentencia, *poder aceptado* por auto de veinte de Septiembre, folios 1 á 3, cuaderno E, Bonilla interpuso en tiempo dicho recurso, por el extenso memorial de veinte de Septiembre, folios 4 á 12 del mismo cuaderno, el cual le fué admitido por auto de veintidós de Septiembre, folio 12 vuelto.

Y surtida la instancia en esta Corte, con los alegatos por escrito para fundar el recurso, presentados por ambas partes, pero sin que ninguna de ellas hubiera concurrido á la audiencia pública que debió verificarse el seis de Marzo próximo pasado, ha llegado el tiempo de fallarlo.

La sentencia recurrida reúne, indudablemente, las tres circunstancias que para admitir contra ella el recurso de casación, designaba el artículo 366 de la Ley 105 de 1890, vigente cuando se interpuso el recurso: 1.° porque ella hubo de aplicar las disposiciones de las Leyes 57 y 153 de 1887, relativas á la persistencia ó estabilidad, y á las condiciones exigidas para la adquisición del estado civil de hijo y padres naturales, fundado en reconocimiento circunstancial, á falta de reconocimiento expreso en escritura pública ó por testamento, y se trata por lo mismo de saber qué alcance tiene ó hasta dónde se extiende la acción de esas leyes sobre lo pasado; 2.° porque dicha sentencia versa sobre hechos relativos al estado civil de las personas y sobre los intereses de la sucesión testamentaria de Vaca, por razón de esos mismos hechos, cuya cuantía excede en mucho á la de tres mil pesos, y 3.° porque, como se ha visto, hay completa contrariedad entre las sentencias de 1.ª y de 2.ª instancias, no sólo en cuanto á lo principal del pleito, sino en cuanto á la inteligencia y aplicación de las leyes en que se apoyan.

La parte recurrente ha señalado como causales para interponer el recurso, folio 4, cuaderno E, las designadas en los numerales 1.° y 3.° del artículo 369 de la Ley 105 de 1890, por ser, en su concepto, la sentencia recurrida violatoria de leyes sustantivas y de doctrinas legales aplicables á los hechos controvertidos; y por contener la misma sentencia en su parte resolutiva, disposiciones contradictorias irreconciliables entre sí.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 377 de la misma ley, la parte recurrente en su escrito de veinte de Septiembre de 1892 (folios 4 á 12, cuaderno E.), ante el Tribunal, reproducido en todas sus partes por el de veintinueve de Noviembre ante esta Corte, folio 10, ha designado con toda precisión la serie de disposiciones legales que ella cree infringidas, y las leyes que, en su concepto, deberían haberse aplicado rectamente al caso en cuestión, en todo lo cual se ocupará la Corte en el curso de la presente decisión.

Como se ve, el fundamento, el hecho cardinal del litigio, consiste en determinar si Manuela Gonzalías adquirió válida ó legalmente en algún momento de la existencia de su hijo, la condición ó el carácter legal de madre natural del testador; si aunque no lo hubiera adquirido en un tiempo dado, lo adquirió válidamente en otro, y si, una vez adquirido, pudo ser despojada de él por una ley posterior. El hecho es esencialmente complejo, y pasa la Corte á examinarlo, primero á la luz de los hechos, y después á la del derecho.

Falta en los autos la prueba legal preconstituída del nacimiento de Bautista Vaca, pues aunque la Gonzalías afirma en las posiciones absueltas al folio 177, cuaderno A., que su hijo fué bautizado en la iglesia parroquial de Caloto, por un sacerdote llámado Escobar; de la inspección ocular practicada en los libros parroquiales el diez y ocho de Marzo de 1891, con citación de la parte contraria, aunque no concurrió á ella, folios 196 á 199, aparece que, examinados los libros parroquiales, no se encontró en ellos, sin interrupción ninguna, ni en las partidas ni en los folios, desde el once de Septiembre de 1832 hasta el treinta uno de Julio de 1836, la partida de bautismo de Bautista Vaca, ni con este nombre ni con el de José Benedicto de los Santos; y que en todo ese tiempo tampoco aparece que hubiera funcionado como Cura ningún sacerdote de apellido Escobar. Establecido, pues, el hecho de que no pudo ser hallada la prueba principal del nacimiento ó de la filiación de Bautista Vaca, entraron á funcionar las pruebas supletorias admitidas por la ley.

Para establecer los hechos constitutivos del estado civil de que se trata, alega la parte contraria á la de la Gonzalías, que debió haberse exhibido la prueba consistente en las declaraciones de personas que hubieran presenciado el parto de la madre, y que por no haberse separado después un solo instante del hijo presumido, por lo menos hasta la edad en que el hombre adquiere característica y propia fisonomía, pudieran aseverar con absoluta evidencia, que el Bautista Vaca que murió en Caloto el veintiocho de Diciembre de 1890, era el mismo niño que ellas habían visto dar á luz y

cuya maternidad se disputa. Semejante prueba jamás se ha exhibido ni podrá exhibirse por tocar casi en lo imposible. Fuera de la presunción legal de la paternidad y de la maternidad legítimas, en todos los demás casos esa prueba ha consistido generalmente en el reconocimiento expreso ó presumido de los padres y en pruebas circunstanciales ó de indicios, consistentes en la lactancia, en la crianza y educación, en el trato social recíproco con el dictado de padre ó madre é hijo, en la aceptación pública del apellido etc., etc., etc. La prueba directa y continua es poco menos que imposible. Y en el caso presente y aun la simple relativa al parto de la Gonzalías, tampoco ha podido darse por el trascurso del tiempo, porque es natural suponer que las personas que pudieron presenciar no existían ya en 1891, pues nunca se llevan niños sino personas de edad provecta, como madre, hermanas, cuñadas, comadronas etc., á presenciar aquel acto, personas que, por lo general, no tienen menos de cuarenta años de edad; hoy deberían tener, á contar de 1832 á 1835, cerca de un siglo.

Pasa ahora la Corte á examinar en qué consisten las pruebas supletorias presentadas para acreditar que Manuela Gonzalías era madre natural de Bautista Vaca, y que éste la reconoció por tal.

Ante todo, debe reputarse por tal el contexto mismo de la cláusula 3.ª del testamento cuya invalidez se demanda, copiada al principio de esta exposición y cuya lectura debe repetirse aquí. Bien examinada, bien meditada á la luz de la imparcialidad y de la justicia, esa cláusula significa: "no me atrevo á negar la filiación que se me da de hijo natural de Manuela Gonzalías; pero niego que esta señora tenga las condiciones legales para heredarme;" mas como lo último constituye punto de puro derecho, no le toca decidirlo al testador sino á la Justicia; en esta parte su declaración no tiene valor; y lo único que queda en pie como primer indicio de la maternidad disputada, es la tácita confesión de esta maternidad hecha en la misma cláusula del desheredamiento. Si Bautista Vaca hubiera tenido conciencia, y quién otro sino él debía tenerla de que Manuela Gonzalías no era su madre, conciencia que debió formar en más de cincuenta años de vida común con ella, bien por el instinto de los sentimientos de la naturaleza, bien porque de cualquier otro modo hubiera llegado á su noticia que esa no era su madre; la habría repudiado sin temor ninguno; pero no se atrevió á hacerlo, y esa abstención, unida á las demás pruebas en que va á ocuparse la Corte, formaná los ojos de la justicia, hasta donde es posible hallar la certidumbre de lo que no puede ser probado con evidencia, la prueba de la maternidad presumida de Manuela Gonzalías, respecto de su hijo Bautista Vaca G.

Entre los testigos contemporáneos de la Gonzalías que aseveran haber visto á ésta cuando pareció encinta y haberla visto después criar ó nutrir á su hijo Bautista con sus propios pechos, es notable la declaración de la señora D.ª Margarita Suárez, corriente á folios 91 á 94 del cuaderno principal, á quien hay que calificar con estos títulos, porque de ellos depende su fuerza probatoria, pues dicha señora es hija de D.ª Tomasa Medina, de quien la Gonzalías era esclava, y en cuya casa vivía; y ella afirma que aunque no presenció el parto de la esclava (que naturalmente no pudo presenciar), oyó entonces que le habían puesto al niño el nombre de Juan Bautista, cuando le pusieron el agua de socorro, por haber nacido ahogándose; que la declarante recuerda, con precisión, que ella cargaba á dicho Bautista, para que la madre hiciera los oficios de la casa; que le consta que la misma Manuela Gonzalías amamantaba á su hijo, le dió después alimentos y vestidos, y lo trataba con todas las consideraciones y cariño de una madre afectuosa, durante el tiempo que permaneció al lado de sus padres; que en su propia casa vió crecer á Bautista Vaca, hasta que por su citada madre fué vendida Manuela á la señora Teresa Hurtado de García, vecina de Santander; y que afirma, con entera seguridad, que el niño, á quien se ha referido en su testimonio y que vió crecer, es el mismo Bautista Vaca que murió en este lugar (Caloto), el día veintiocho de Diciembre de 1890. Estos mismos hechos están corroborados por las declaraciones de Juana Balante, Petrona Usuriaga, Rafael Vaca, Felipa Carabalí, Manuel María Potocolí y José Sandoval, contemporáneos de la Gonzalías, que aseveran haber visto á ésta cuando estaba embarazada, y después nutrir ó criar, tener á su lado y cuidar como madre á su hijo Bautista.

La declaración de Sandoval, folio 46 vuelto, cuaderno A 1.° es también decisiva, porque este testigo afirma los hechos como sobrino de la señora Tomasa Medina, "cuya casa, dice, frecuentaba mucho, porque la mía estaba al frente, y no fué una ni dos veces que vi á la Gonzalías darle el pecho á Juan Bautista, sino muchas ocasiones."

Las declaraciones de los contemporáneos y condiscípulos de escuela de Bautista Vaca, Custodio Rengifo, Eliseo Bolaños, Antonio Torijano, corrientes de folios 54 á 61, tienen un gran valor probatorio, porque todas ellas son de personas mayores de cincuenta y seis años, que saben leer y escribir y de connotada posición social como hombres de fortuna, ó como empleados públicos, y todos ellos afirman, poco más ó menos, lo siguiente: que por los años de 1844 á 1846, teniendo los declarantes de diez á doce años de edad, poco más ó menos, estuvieron en la escuela pública de Santander, que regentaba el finado Francisco Navia, y que allí conocieron y tuvieron por condiscípulo *á un mulatico* llamado Bautista Vaca, que tendría la misma edad que ellos, y que vivía en la casa de D.ª Teresa Hurtado, yá finada, y que por pública notoriedad sabían que Bautista Vaca era hijo natural de Manuela Gonzalías. El testigo Eliseo Bolaños, afirma que Vaca daba á la Gonzalías el tratamiento de madre. El maestro de carpintería, Juan Antonio Ramírez, de setenta y cinco años de edad, que declara al folio 62, dice que Manuela Gonzalías llevó á Bautista, siendo muchacho, á su taller de carpintería en Caloto, y se lo entregó para que le enseñara el oficio de carpintero, diciéndole que era su hijo.

En autos existe la plena prueba, sin contradicción de la parte demandada, de que la Gonzalías fué y ha permanecido siempre soltera, y aunque se ha alegado que por su condición de esclava, igualmente reconocida y confesada por ella misma en el proceso, su hijo, nacido bajo esta condición servil, no podía ser tenido por natural, porque á su madre afectaba el impedimento dirimente de esta condición (conditio) para haberse podido casar libremente al tiempo de la concepción ó del parto con el padre presumido de su hijo, el argumento carece en absoluto de valor, porque es sabido, como lo enseñaron todos los expositores del derecho español y canónico en su tiempo, que el impedimento dirimente de la condición en lo que él se refería al estado servil, sólo anulaba el matrimonio cuando una persona libre se casaba con otra, que creía libre y era *sierva* ó esclava, pero jamás cuando una persona libre se casaba con una esclava á sabiendas de su condición, por lo cual, como enseñaba Berardi, citado por Escriche (Diccionario de Legislación, página 854), aquel impedimento se refería al *error*.

La ley española que reglaba el estado de hijo natural, era la Ley 11 de Toro, Ley 9.ª, título 8.°, libro 5.°, Recopilación Castellana, que decía:

"Porque no pueda dudar cuáles son hijos naturales, ordenamos y mandamos que entonces se digan ser los hijos naturales, quando al tiempo que nacieren ó fueren concebidos, sus padres podían casar con sus madres justamente sin dispensación, con tanto que el padre lo reconozca, por su hijo, puesto que no haya tenido la mujer de quien lo hubo en su casa ni sea una sola: ca concurriendo en el hijo las qualidades susodichas, mandamos que sea hijo natural."

Tanto el Juez de la primera instancia como los abogados que defienden la validez del testamento, han sostenido que para adquirir la calidad de hijo natural conforme á la ley recopilada, se necesitaba el reconocimiento expreso del padre, y que, como Bautista Vaca no lo obtuvo, no adquirió la calidad de hijo natural respecto de su madre, *que es de lo que aquí se trata*. Jamás fué dada á la Ley 11 de Toro semejante inteligencia, ni podrá dársela por ser contraria á la razón, á la equidad natural y hasta á la honestidad y buenas costumbres. La legislación española, como la romana, y como la nuéstra, y se atreve la Corte á creer, que como todas las de los países civilizados del mundo, siempre han mantenido el reconimiento de los hijos naturales como actos separados é independien-

tes del padre y de la madre, pero produciendo, por supuesto, los efectos sólo respecto del que reconoce, salvo el derecho de contradecirlo por las personas que tengan interés en ello. A este respecto dice con sobra de razón filosófica el ilustre comentador del derecho español, D. Joaquín Escriche, lo siguiente:

"El reconocimiento de un hijo natural hecho por el padre, sin aprobación de la madre, no tiene efecto sino con respecto al padre, porque no puede permitirse un hombre el atribuír hijos naturales á la mujer que le pluguiere escoger y deshonrar; ni tampoco el reconocimiento hecho por la madre sin aprobación del padre, puede surtir efecto sino con respecto á la madre, porque también sería injusto el permitir que una madre pudiese hacer recaer, según su capricho, una odiosa paternidad sobre un hombre inocente."

Como conforme á legislación de las partidas que en esta parte copió las disposiciones del Derecho romano, sólo era hijo natural el nacido de barragana ó concubina libre ó soltera que fuera una sola y habitara en la casa del que la tenía (ley 2, título 14, partida 14, ley 1, título 15, partida 4.ª, y ley 8, título 13, partida 6.ª), y como la Ley 11 de Toro extendió el beneficio de la condición de hijo natural al hijo de toda mujer libre, aunque no fuera concubina ó barragana del padre y viviese con él en la misma casa, para éstos y sólo para éstos fué para los que la dicha Ley 11 de Toro exigió el reconocimiento del padre para obrar contra él, pero no contra la madre, pues los hijos de la concubina no necesitaban de este recocimiento. Más claro: el hijo de la concubina sola y libre se presumía del que la tenía en su casa; el hijo de mujer libre, suelta, necesitaba que su presunto padre le reconociera para adquirir respecto de él los derechos de hijo natural; pero en ninguno de los dos casos necesitaba el reconocimiento expreso del padre para adquirir válidamente el de la madre. Darle á la Ley 11 de Toro otra inteligencia sería, como dice el sabio Rey D. Alfonso, no entender el entendimiento de ella. Todo lo expuesto está de acuerdo con las filosóficas disposiciones de la novísima legislación colombiana: con la parte final del artículo 7.° de la Ley 57 de 1887, que reconoció como hijos naturales los de una mujer libre aunque el padre sea casado; con el 54 de la Ley 153 de 1887, que solo exige el reconocimiento de uno de los dos padres para que los hijos tengan la calidad legal de hijos naturales respecto del padre ó de la madre que los haya reconocido, y con el 56 de la misma ley que dice: "que si es uno solo de los padres el que reconoce, no será obligado á expresar la persona en quien ó de quién hubo el hijo natural."

Manuela Gonzalías y Bautista Vaca G., vivieron, pues, bajo el imperio de esta ley (Ley 11 de Toro ó 9.ª, título 8.°, libro 5.° Recopilación Castellana) desde 1835, en que se supone efectuado el nacimiento de Bautista Vaca, hasta que se expidió por la legislatura del extinguido Estado Soberano del Cauca, el primer Código Civil de dicho Estado que, bajo la denominacion de Ley 95, principió á regir en él, desde el veinte de Julio de 1860, hasta que se expidó el segundo, Ley 283 de seis de Octubre de 1869, que principió á regir el primero de Julio de 1871; y aunque ambos, el primero en su artículo 35 y el segundo en el 41, exigieron que el reconocimiento de los hijos naturales se hiciera por instrumento público, además de que esta disposición no podía tener efecto sino sobre los hijos que á la fecha de su promulgación no tuvieran yá válidamente adquirido de parte de sus padres ó de uno solo de ellos el estado civil de hijos naturales, así lo reconoció expresamente el artículo final del último de los Códigos citados, el 2763, disponiendo que las controversias y los pleitos sobre actos, derechos y obligaciones anteriores á la fecha de su promulgación, se decidieran con arreglo á las leyes sustantivas que estaban vigentes cuando aquéllos se verificaron.

Pero hay más: la duda fué radicalmente cortada por la ley caucana 325 de diez y nueve de Septiembre de 1871, aclaratoria de las 95 y 283 (Código Civil del Estado), que dispuso que los hijos que gozaban de la calidad de naturales, conforme á la legislación española, no habían perdido esa calidad por las leyes 95 y 283, y la conservaban aun cuando no se hubieran llenado, ni se llenaran las condiciones exigidas por aquellas leyes. En consecuencia, dice "gozan de los mismos derechos, y están sujetos á las mismas obligaciones que determina la legislación vigente."

Y finalmente la ley caucana 48 de veinte de Otubre de 1873, dijo:

"Artículo 1.° Las disposiciones de la Ley 283 sobre el modo como debe hacerse el reconocimiento de los hijos naturales se refieren únicamente al padre. Respecto de la madre, para que los hijos de ésta puedan ser reputados como naturales, basta que se compruebe la maternidad y que hayan sido habidos cuando no tenía impedimento legal para contraer matrimonio con el padre de tales hijos."

Pero aunque fuera cierto en simple gracia de discusión, que el reconocimiento circunstancial ó no expreso que autorizaban las leyes españolas, constituyera un estado de simple espectativa, que podía ser mudado á voluntad por el legislador; aunque no hubieran existido las leyes caucanas que dejamos copiadas, que expresamente admitieron aquel reconocimiento circunstancial, á la Gonzalías le habría bastado para adquirir los derechos consiguientes al estado de madre natural de Bautista Vaca, haber vivido un solo instante antes de la muerte de su hijo, bajo el imperio de la legislación civil nacional, en santa hora unificada para la seguridad de los derechos civiles de todos los colombianos, porque, como yá se ha demostrado, las leyes que modifican la capacidad de las personas para la adquisición del estado civil, en sentido favorable á esa capacidad, ó sea quitando ó aboliendo las restricciones onerosas que para adquirirlo exigía una ley anterior, obran retroactivamente en beneficio de aquella capacidad, de tal manera que, por efecto de la nueva ley puede una persona que era incapaz para adquirir el estado de que se trata, hacerse capaz de él. Y como la parte final del artículo 7.° de la Ley 57 de 1887, dijo: "*No obstante* lo dispuesto en el aparte que precede (que exige el reconocimiento por escritura pública ó en testamento), se reputarán hijos naturales respecto de la madre, y para todos los efectos civiles, los habidos por una mujer que podía casarse libremente al tiempo de la concepción," dicha ley con su "no obstante" dispensó á la madre, del reconocimiento por escritura pública ó por testamento, ó la ley carecería de toda inteligencia racional y jurídica.

Vino en seguida el artículo 20 de la Ley 153 de 1887, que dijo:

"Artículo 20. El estado civil de las personas adquirido conforme á la ley vigente en la fecha de su constitución, subsistirá aunque aquella ley fuere abolida; pero los derechos y obligaciones anexos al mismo estado, las consiguientes relaciones recíprocas de autoridad ó dependencia entre los cónyuges, entre padres é hijos, entre guardadores y pupilos, y los derechos de usufructo y administración de bienes ajenos, se regirán por la ley nueva, sin perjuicio de que los actos y contratos válidamente celebrados bajo el imperio de la ley anterior tengan cumplido efecto."

De todo lo expuesto se deduce que las que pudieron ser meras espectativas ó esperanzas de adquirir el estado civil de madre natural reconida de Bautista Vaca G., durante el largo período de treinta y seis años, corrido desde 1835 hasta primero de Julio de 1871, durante el cual vivieron madre é hijo, para los efectos de la adquisición de dicho estado, bajo el imperio de la Ley 11 de Toro ó 9.ª, título 8.° de la Recopilación Castellana, se convirtieron en la adquisición positiva de dicho estado por las leyes caucanas y la legislación civil unificada nacional, de que prolija y extensamente se ha hecho mérito, y que por lo mismo el Tribunal, al reconocer á Manuela Gonzalías, en la posesión de dicho estado, y al asignarle la legítima rigurosa que en la sucesión de su hijo le corresponde, conforme á los artículos 1226 y 1274 del Código Civil, lejos de haber violado, ha aplicado rectamente, en sentir de la Corte, las disposiciones legales que la parte recurrente cita como violadas en los parágrafos 2.° y 4.°, en su escrito de veinte de Septiembre de 1892, por el cual se fundó el recurso.

La estimación de la prueba hecha por el Tribunal, sobre la maternidad disputada, no podría tampoco ser variada por la Corte, si se atiende á que conforme al artículo 369 de la

Ley 105 de 1890, sería necesario que del expediente resultara que se había incurrido en error de derecho ó en error de hecho, siempre que este último se hubiese acreditado de un modo evidente con documentos ó actos auténticos que obren en el proceso.

El respetable Magistrado que salva su voto en este fallo no da valor ninguno á la disposición de la parte final del artículo 7.° de la Ley 57 de 1887, arriba copiada, que exceptuó expresamente á los hijos naturales del reconocimiento por escritura pública respecto de la madre, porque cree que esa disposición quedó derogada por los artículos 54 y 56 de la ley posterior 153 del mismo año; pero aun concediendo, para evitar inútil discusión, que las disposiciones citadas de la Ley 153 de 1887 hubieran derogado la parte final del artículo 7.° de la Ley 57 del mismo año, á Manuela Gonzalías le habría bastado haber vivido un solo instante bajo el imperio de la primera ley para haber adquirido válida é irrevocablemente el estado civil que se le disputa.

En el considerando 4.° de su salvamento de voto conviene rotundamente el señor Magistrado, en que la Ley 153 en que él se apoya, no desconoció á Manuela Gonzalías la calidad de madre natural reconocida de su hijo Bautista Vaca, que adquirió válidamente conforme á la legislación española y á la caucana prolijamente citadas en este fallo; pero cree que como los derechos hereditarios que la madre reclama en la sucesión de su hijo, fueron abiertos ó deferidos estando en vigor la dicha Ley 153, que en su concepto le había privado de ellos, ningún derecho le asiste, lo cual es volver al argumento de la derogación del artículo 7.° de la Ley 57, que ya queda contestado. Pero el reconocimiento expreso que se hace en el salvamento, de que Manuela Gonzalías sí adquirió válidamente el estado de madre natural reconocida de su hijo Bautista Vaca, deja á la Corte tranquila respecto de su fallo, tanto porque el principio de legislación universal es el de que una vez adquirido válidamente un estado civil, dicho estado subsiste aunque la ley sea abolida, como porque así expresamente vino á ordenarlo y estatuírlo el artículo 20 de la Ley 153 de 1887, ley en que expresamente se apoya el salvamento de voto que arriba queda expresado. Lo que cambia libremente en manos del legislador es el conjunto, extensión y cuantía de los derechos y obligaciones que constituyen dicho estado. Así, por ejemplo, si el Código Civil nacional ó cualquiera otra ley vigente al tiempo de la apertura de la sucesión de Bautista Vaca, hubiera privado á la madre natural de sus derechos de legitimaria, Manuela Gonzalías, no heredaría nada en la sucesión de su hijo, aunque estuviera investida del carácter de madre natural reconocida de dicho hijo. Esto no lo niega la Corte; pero como el Código Civil vigente reconoce á los padres naturales, en su respectivo caso, como legitimarios de su hijo, y como la sentencia recurrida no ha deferido á Manuela Gonzalías sino los derechos que la ley le reconoce, dicha sentencia no es violatoria de ninguna ley sustantiva por lo cual deba anularse.

Las cláusulas 6.ª y 7.ª del testamento, por las cuales legó el testador mil pesos á beneficio y mejora de la iglesia de Caloto, y mil pesos para ayudar á la construcción del cementerio de dicho lugar, que la sentencia del Tribunal ha declarado perfectamente válidas, no han sido materia del presente recurso, y por lo mismo no tiene la Corte que intervenir en ellas. En el mismo caso se encuentra la cláusula 12 del testamento, en que el testador dispuso del remanente de sus bienes en beneficio de las iglesias de la Diócesis y de obras piadosas y de caridad, en cuanto ella no perjudique, como dice la sentencia recurrida, la legítima rigurosa de Manuela Gonzalías.

Y finalmente, la Corte considera perfectamente jurídica la interpretación que la sentencia del Tribunal ha dado á la clásula 2.ª, en que el testador ordena que se entregue su casa de habitación con sus llaves, en el mismo día en que él muera, al Presbítero doctor Tomás Caicedo V., para que habite en ella hasta que se arregle por completo su mortuoria, considerando dicha disposición como un legado del derecho de habitación, y como tal comprendido en el contexto ó tenor literal del artículo 84 de la Ley 153 de 1887, probado como está que dicho Presbítero confesó á Bautista Vaca un día antes de morir.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que no há lugar á infirmar la sentencia definitiva pronunciada en esta causa por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, con fecha doce de Agosto de 1892, materia del presente recurso, la cual debe cumplirse en todas sus partes.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

SALVAMENTO DE VOTO

DEL SEÑOR MAGISTRADO DOCTOR JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.

El infrascrito salva su voto en la sentencia que antecede, por las razones que pasa á expresar:

1.ª Que es principio de legislación universal que las sucesiones por causa de muerte se rijan por las leyes del domicilio del finado, vigentes al tiempo de su defunción, principio reconocido y consagrado en nuestra legislación nacional, en los artículos 1012 del Código Civil y 34, 35, 36 y 37 de la Ley 153 de 1887; es decir, que el derecho de heredar á una persona no nace ni puede tener principio sino inmediatamente después de su muerte, porque durante su vida sus parientes ó allegados no tienen sino una mera esperanza ó espectativa que la ley puede quitar cuando á bien tenga, siempre que la ley sea anterior á la delación de la herencia en que se haya de aplicar;

2.ª Que cuando murió Juan Bautista Vaca estaba vigente el Código Civil nacional y los artículos 54 y 56 de la Ley 153 de 1887, que no llamaban á la sucesión de aquél á los padres naturales según la legislación española, sino los definidos en los artículos 54 y 56 antes citados, que no comprendían á Manuela Gonzalías, porque ésta no reconoció como hijo á Juan Bautista Vaca por instrumento público;

3.ª Que al no llamar la legislación colombiana á los padres naturales según la legislación española á suceder á sus hijos muertos durante la vigencia del artículo 56 de la Ley 153 de 1887, no vulnera ningún derecho adquirido por aquéllos, porque la simple esperanza ó aptitud que tenían para heredar á sus hijos no constituía un derecho, sino una simple espectativa respecto de sucesiones que no se habían abierto antes de la expedición de dicha Ley 153;

4.ª Que esta ley no le desconoce á Manuela Gonzalías que fuera, según la legislación española y la caucana, madre natural de Juan Bautista Vaca ni los derechos abiertos ó deferidos antes de entrar en vigor la expresada Ley 153; de suerte que si Vaca hubiera muerto antes de la unificación de la legislación la demandante habría adquirido un derecho perfecto que no se le habría arrebatado por ley posterior;

5.ª *Que dejando á salvo la inmutabilidad de un estado*, como lo dice un ilustrado expositor chileno al tratar esta misma cuestión de derecho que se ha presentado en su patria con motivo de la expedición del Códigos Civil de D. Andrés Bello, las nuevas leyes pueden modificar los efectos que en adelante produzca ó subordinar el goce de ellos á condiciones que antes no existían. Nadie tacharía de retroactiva una ley que, dejando á un hijo legítimo en posesión de su estado, le privase, sin embargo, del título de heredero legitimario ó forzoso de sus padres. Esos efectos futuros, dependientes del goce de un estado, no constituyen sino simples espectativas que el legislador puede destruír ó modificar, sin necesidad de que atribuya á sus disposiciones una retroactividad expresa. De este modo aunque un hijo natural reconocido en forma bastante según la antigua ley, continúe en posesión de su estado y en el goce de las relaciones de familia que yá

había adquirido, no podrá, con todo, aspirar á la participación de derechos que una ley posterior difiera á los de su clase, siempre que exija para ello nuevas condiciones que no reúna en sí mismo. Tal hijo no tendría nada que oponer á semejante resultado; pues los derechos de que se trata aún no le pertenecían; sólo existían para él en calidad de meras esperanzas, las cuales podían desvanecerse á causa de mil accidentes. Si en estas circunstancias aparece una nueva ley aniquilándolas completamente, ó imponiendo nuevas condiciones para llegar á gozarlas, nadie podría quejarse con justicia de que se le arrebataban derechos adquiridos, sólo porque no se respetan los cálculos más ó menos fundados que, en vista de disposiciones anteriores, hubieran podido formarse.

"Así es que, á consecuencia de la condición impuesta por el Código Civil á los hijos naturales, de comprobar el reconocimiento paterno por instrumento público entre vivos, ó por un acto testamentario, para que puedan gozar de los derechos que les confiere, han venido á quedar privados de la facultad de reclamar los que después de su promulgación se hayan abierto, todos los que no cuenten con aquella especie de reconocimiento, aunque tengan otro á su favor que les habilite para perseguir en juicio los derechos deferidos bajo el imperio de la antigua legislación."

Por tanto, el infrascrito es de opinión que ha debido casarse la sentencia del Tribunal, por no ser heredera legitimaria la demandante Manuela Gonzalías.

Bogotá, veinticinco de Abril de mil ochocientos noventa y tres.

JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—POMBO.—ISAZA.—BOTERO URIBE.—CASAS ROJAS.—CORRALES.—GALINDO.—*Rosas*, Secretario.

AUTOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintidós de Abril de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Con fecha treinta y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta y dos, el Juez nacional de primera instancia del Territorio nacional de San-Andrés y San-Luis de Providencia, dirigió á esta Corte la nota número 169, en que denuncia varios atentados ó delitos que asevera haber sido cometidos por el señor Luis Carlos Piñeres, en su carácter de Prefecto del Territorio, siendo el más grave de todos el de la muerte que los soldados de la fuerza militar que estaba á sus órdenes dieron á Joseph Stephns, por herida de bala, en los disparos que hicieron para cumplir la orden perentoria que el Prefecto les dió de aprehender ó capturar, muerto ó vivo, á un Teodoro Castañeda, con quien el mismo Prefecto había tenido el día veinte del citado Agosto de mil ochocientos ochenta y dos una molestia.

Pero suponiendo que el Prefecto Piñeres hubiera podido ser declarado responsable como autor principal del homicidio perpetrado en la persona de Stephns, como conforme á la Constitución y al Código Penal nacional de 1873, vigentes cuando se cometió el hecho material del denuncio, el delito no habría podido castigarse con más de diez años de presidio, y como conforme al artículo 71 de dicho Código, en todos los demás delitos y culpas que tuvieran señalada pena corporal la pena se prescribía por diez años, habiendo trascurrido hoy, desde el veinte de Agosto de mil ochocientos ochenta y *dos* en que se cometió el hecho materia del denuncio, más de diez años, la Corte, de conformidad con el dictamen del Procurador general, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara prescrita la pena que hubiera podido imponerse al ex-Prefecto del extinguido Territorio nacional de San-Andrés y San-Luis de Providencia, Luis Carlos Piñeres, por los atentados que fueron objeto del denuncio en cuestión, y que, en consecuencia, debe cortarse todo procedimiento criminal sobre el particular.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el proceso al Juzgado de su procedencia.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Abril veinticinco de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: El Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cauca, por auto de seis de Septiembre del año próximo pasado, declaró con lugar á proceder por la vía ordinaria criminal contra Miguel Piedrahita Casas, Juez en lo criminal del Circuito de Toro, por el delito genérico de mala conducta, comprendido en el capítulo 7.°, título 10, libro 2.° del Código Penal, y sobreseyó respecto de otros cargos que se hacían al mismo Piedrahita Casas, en el sumario instruído á virtud de denuncio dado por Próspero B. Calvo.

Esta Corte, con quien fué consultado el sobreseimiento respecto del delito de amancebamiento que se imputaba al sindicado, se abstuvo de resolver la consulta, por no tratarse de ninguno de los casos previstos en el artículo 346 de la Ley 105 de 1890.

Notificado Piedrahita Casas del auto de proceder interpuso contra él recurso de apelación, que le fué concedido para ante esta Superioridad. Oídas las partes se procede á determinarlo.

En la citada resolución de la Corte se reconoció la existencia de relaciones ilícitas, que causaban escándalo en la cabecera del Circuito Judicial de Toro, hoy de Marmato, entre Piedrahita y Romelia Velásquez, mujer con quien aquél vivía antes de ejercer las funciones de Juez; pero como después separaron habitaciones, aunque siempre continuaron el mismo trato inmoral, según se deduce de las declaraciones de muchos testigos, si el modo de vivir entre ellos no es suficiente para que pueda imputárseles el delito de amancebamiento, que exige, entre otras circunstancias, la de habitar una misma casa; no por eso deja de ser cierto que estas personas llevan una vida relajada y escandalosa, muy censurable especialmente en una persona como Piedrahita Casas, que ejerce la primera autoridad judicial en el Circuito, que es de avanzada edad y casado, y que tiene, por tanto, obligación especial de dar buen ejemplo con una conducta moral y decorosa, que guarde armonía con las altas funciones de su empleo.

Fuera de esto, de las declaraciones citadas por el Tribunal y de otras muchas, resulta que el citado Juez observa una conducta relajada bajo otros aspectos y que ejecuta actos indecorosos, que no hay necesidad de mencionar especialmente.

Si los hechos que se imputan á Piedrahita no son punibles en un simple particular, aunque sean vergonzosos é inmorales, en un empleado público, y sobre todo en uno de su categoría, son altamente reprensibles y la ley los castiga con pérdida del empleo é inhabilitación temporal para obtener otro. (Artículo 550 del Código Penal).

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, confirma el auto apelado.

Déjese copia de esta determinación y devuélvase el expediente al Tribunal de su procedencia.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

IMPRENTA DE ANTONIO M. SILVESTRE.
Director, Tomás Galarza.

REPÚBLICA DE COLOMBIA.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AÑO VIII | Bogotá, 13 de Junio de 1893. | NÚM. 397.

CONTENIDO.

Págs.

Acuerdos de la Corte..... 265

PENA CAPITAL.

Fallo que declara incasable la sentencia pronunciada por el Tribunal de Antioquia en la causa seguida contra Apolinar Restrepo, por asesinato. (Magistrado ponente, doctor Botero U.)..... 266

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Declárase infundada la demanda de recompensa propuesta por Félix Torrijos. (Magistrado ponente, doctor Corrales)..... 268

Declárase que Vicente Acosta Ospina tiene derecho á una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Pombo)..... 268

Confírmase la resolución dictada por el Ministerio del Tesoro, en la cual se absuelve á la Nación de una demanda sobre expropiaciones, propuesta por Juan N. Rincón Motta. (Magistrado ponente, doctor Botero U.)..... 269

Declárase á María Juliana Rivera acreedora á una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Galindo)..... 269

Reconócese á Emigdio P. Solano, como cesionario de varios individuos, un crédito contra la Nación, procedente de expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas)..... 269

Declárase que Digna Perlaza de Ayala tiene derecho á una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Botero U..... 270

Concédese á Juana González y á sus hijas Ascensión y Rosario Mosquera una recompensa..... 271

AUTOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

El de sobreseimiento dictado con motivo de una acusación elevada á la Corte por Lorenzo Gaona contra los Magistrados del Tribunal de Cundinamarca, doctores Jesús María Quintero P., Antonio María Rueda G., y Nicolás Enciso. (Magistrado ponente, doctor Galindo)..... 271

GACETA JUDICIAL.

ACUERDO NÚMERO 759.

En la ciudad de Bogotá, á diez y nueve de Abril de mil ochocientos noventa y tres, hallándose reunida la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, Su Señoría el Presidente de ella dió cuenta á los señores Magistrados de un oficio de Su Señoría el Ministro de Justicia, en el cual solicita de la Corte una terna para nombrar el Magistrado que debe llenar la vacante ocurrida en el Tribunal de Panamá, por muerte del doctor Agustín Jované.

A este efecto se procedió á la elección, y hecha la votación dió el siguiente resultado:

Terna adoptada por la Corte para la vacante del Tribunal de Panamá, por la muerte del Magistrado Agustín Jované:

Doctor Gil Ponce.

Doctor Juan N. Venero.

Doctor Juan Noriega.

La Corte dispuso proponerla á Su Señoría, en respuesta á su nota número 1,234, de fecha 17 de los corrientes.

Con lo que se dió por terminado el presente Acuerdo.

El Presidente, LUCIO A. POMBO.—El Vicepresidente, LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

ACUERDO NÚMERO 760.

En la ciudad de Bogotá, á veinticinco de Abril de mil ochocientos noventa y tres, hallándose reunida la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, Su Señoría el Presidente de ella puso en conocimienio de los demás señores Magistrados, un oficio de Su Señoría el Ministro de Justicia, por medio del cual solicita de esta Corporación una terna para elegir el Magistrado que debe llenar la plaza del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, vacante por la muerte del señor doctor Manuel Jaime.

Al efecto, procedióse á la elección, la que dió por resultado la adopción unánime de la terna siguiente:

Doctor Bonifacio Torres.

Doctor Bernardo Arias.

Doctor Ignacio Vargas.

La Corte dispuso proponer hoy mismo al Poder Ejecutivo esta terna, para los efectos de la ley, dejando cumplido así el oficio de Su Señoría el Ministro, de fecha de hoy.

Con lo que se dió por terminado el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados con el Secretario de la Corte.

El Presidente, LUCIO A. POMBO.—El Vicepresidente, LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

ACUERDO NÚMERO 761.

En la ciudad de Bogotá, á veintisiete de Abril de mil ochocientos noventa y tres, hallándose reunida la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de los señores Magistrados y del Secretario de esta Corporación, Su Señoría el Presidente de ella dió conocimiento de la nota del señor Ministro de Justicia, fecha 26 de los corrientes, marcada con el número 1,290, en la que ese Ministerio solicita de la Corte una terna para llenar la vacante ocurrida en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tundama, por haber aceptado el doctor Bonifacio Torres el puesto de Magistrado, en el Tribunal de Tunja.

La Corte adoptó la siguiente terna:

Bernardo Arias.

Ignacio Vargas.

Eliseo Torres S.

Y se dispuso proponerla al Gobierno Ejecutivo para los efectos constitucionales, con lo que se terminó este Acuerdo, que firman los señores Magistrados y el Secretario.

El Presidente, LUCIO A. POMBO.—El Vicepresidente, LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

ACUERDO NÚMERO 763.

En la ciudad de Bogotá, á treinta de Mayo de mil ochocientos noventa y tres, hallándose reunida la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, Su Señoría el Presidente de ella, dió cuenta á los señores Magistrados de un oficio de Su Señoría el Ministro de Justicia, en el cual solicita de la Corte, una terna para elegir el Magistrado que debe llenar la plaza vacante en el Tribunal Superior del Distrito Judicial

del Sur, en el Departamento del Tolima, por renuncia aceptada al doctor Elisio Medina.

En tal virtud se adoptó la siguiente terna:

Doctor Félix María Dusán.

Doctor Enrique Esguerra M.

Doctor Julio Estévez Bretón.

La Corte dispuso proponer hoy mismo esta terna al Poder Ejecutivo para los efectos legales, quedando así cumplido el oficio de Su Señoría el Ministro de Justicia, de fecha 25 de los corrientes.

Dióse por terminado el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados con el Secretario.

El Presidente, LUCIO A. POMBO.—El Vicepresidente, LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

PENA CAPITAL.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, Abril veintisiete de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: El proceso seguido contra Apolinar Restrepo, por el grave delito de parricidio, ejecutado en su mujer Dolores Ochoa, en el Distrito de Envigado, contiene la siguiente historia:

Apolinar Restrepo, hijo legítimo de Vicencio Restrepo, y Petronila Londoño, de Envigado, contrajo matrimonio en dos de Junio de mil ochocientos setenta y nueve, con María Dolores Ochoa, hija de Aniceto Ochoa y Petronila García, en la misma parroquia de Envigado (folio 22).

En diez de Octubre de mil ochocientos ochenta y dos, fué condenado Restrepo, en tercer grado, á dos meses de arresto, que sufrió en la cárcel de Medellín, por heridas á Salvador Taborda, causadas el nueve de Abril del mismo año en Envigado. No se hizo constar el motivo ni circunstancias de este delito (folio 48).

Apolinar Restrepo hirió en veinte de Enero de mil ochocientos ochenta y cuatro, en el susodicho Distrito de Envigado, á su esposa Dolores Ochoa y á María de los Santos García; y fué condenado por el Jurado de calificación como infractor de los artículos 604 con relación á los 605 y 611 del Código Penal del extinguido Estado de Antioquia, respecto de las heridas causadas á su mujer, y 604 con relación al 605 respecto de la causada á María de los Santos García. Tanto el Fiscal como el Juez que conocieron de la causa, afirman que Restrepo cometió este delito con circunstancias de asesinato; que el reo, además de reincidente, observaba, según constaba de autos, mala conducta; que se hallaba ebrio, y atacó á las dos mencionadas mujeres, alevosamente; que llevaba prevención contra ellas cuando se dirigía á su casa situada en el "Hoyo de Buga," no "sólo de herirlas sino de matarlas;" que "había prometido, bajo de juramento, dar muerte á su esposa Dolores Ochoa;" que dichas mujeres fueron sorprendidas indefensas, descuidadas y desapercibidas, y con ventaja conocida de parte de Restrepo, pues estaba armado y aquéllas inermes (folios 35 á 37). Por este hecho fué condenado Restrepo á la pena de cuatro años de presidio que cumplió, con rebaja de tercera parte, y salió del establecimiento de castigo el treinta de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis (folio 46).

Cinco años después de este delito, Apolinar Restrepo cometió, el once de Octubre de mil ochocientos noventa y uno, en la persona de su legítima esposa, el grave delito de parricidio de que tratan estos autos. El testigo Jesús Rave, que presenció el acontecimiento, expone así los hechos: "Ayer, como á las dos de la tarde, poco más ó menos, estaba yo en la casa de habitación del señor Apolinar Restrepo, situada en el paraje denominado 'Buga' de este Municipio, y sentado con el dicho Restrepo frente á la casita; poco momento después de esto, se paró el señor Restrepo de donde estaba sentado y se fué para trás de la casa, y á poco rato después volvió muy ligero, y entró adentro de ella, y luégo salió con la ruana puesta, un taciso en la mano y un atado que parecía de ropa bajo la ruana, y saltó á la calle como para venirse para acá á Envigado, ó sea para la población; inmediatamente que él saltó á la calle, dijo la señora de él, llamada Dolores Ochoa, estas palabras: 'vea, cuñado; ya se va á beber, y ahora viene y me mata; pero yo aquí tengo una hacha para defenderme;' Restrepo, sin duda, oyó tales palabras, y se devolvió y le dijo: '¿qué es lo que vos estás diciendo hay?' y habiendo ella vuelto á decirle: 'vos como que estás sacando arma para tirarme,' le cargó el tal Restrepo á su esposa con el taciso, y con él le tiró por tres ocasiones, habiéndola herido gravemente en la cabeza; en la primera vez que le tiró con dicha arma cayó al suelo, y allí le tiró las otras dos veces; después de esto mi hermana Jesusa, que también presenció, dijo que hay venían Ildefonso y José Rave, con el objeto de ver si no le seguía tirando, é inmediatamente salió y se fué de huída, dejando el taciso prendido de la cabeza de su pobre esposa; antes del acontecimiento, me convidó el tal Restrepo, estando yo en mi casa, para que fuéramos á tomarnos un trago donde Aparicio García, y habiéndonos ido prontamente para la casa de Aparicio, en el camino le dije á Restrepo: 'que cuidado cómo le iba á faltar á mi cuñada,' á lo que me contestó, que no, y que no tuviera *pensión*. Ignoro absolutamente por qué otro motivo sería que Restrepo tiró de esa manera á su esposa, pues le tiraba como quien le tira á una culebra para matarla; pues para mí, Restrepo, al tirarle á su esposa con el *taciso*, que de presente se me pone, no fué sino con la intención de matarla, según mi concepto." Están conformes con esta exposición los testigos Dolores y María de Jesús Rave (folios 2 y 3), que también presenciaron el acontecimiento, y Santiago Lotero (folio 7), que presenció parte de él, y también lo está con la declaración instructiva de Dolores Ochoa, rendida poco después del suceso. El reo confesó su delito, después de haberlo negado rotundamente en sus primeras indagatorias (folios 8, 16 y 40), aunque alega algunas circunstancias exculpativas.

Llamado á juicio por el delito de homicidio perpetrado en la persona de Dolores Ochoa, consistente en haberla herido el once de Octubre de mil ochocientos noventa y uno, á consecuencia de lo cual murió ella el veinticinco de los mismos, y habiéndose sustanciado la causa con todas las formalidades de derecho, el Jurado declaró (folio 93), que Restrepo había cometido el delito definido en los artículos 593 y 615 del Código Penal vigente; es decir, que había cometido el delito de parricidio en la persona de su cónyuge en el caso más grave.

En consecuencia, el Juez 2.° Superior del Distrito Judicial de Antioquia, dictó sentencia en cuatro de Octubre del año de mil ochocientos noventa y dos, condenando á muerte á Apolinar Restrepo, á las costas procesales, al pago de perjuicios, y caso de conmutación de la pena de muerte, á la pérdida de todo destino y pensión públicos y á inhabilitación para gozar de ellos y de los derechos políticos; y tanto el reo como su defensor apelaron de esa sentencia para ante el Superior Tribunal del Distrito Judicial citado.

Este, en Sala de decisión en lo criminal, y con fecha veintidós de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos, confirmó, en todas sus partes, la sentencia apelada; y por recurso de casación, ha venido el proceso á conocimiento de la Corte Suprema.

El defensor de primera y segunda instancia funda el recurso en la segunda causal señalada por el artículo 370 de la Ley 105 de 1890, que dice así: "2.ª Ser, en concepto de la Corte, notoriamente injusto el veredicto del Jurado." Aunque la Ley 100 de 1892, en su artículo 87 derogó el inciso 2.° del citado artículo 370, que es el que trata de dicha causal, como el recurso se interpuso antes de la vigencia de la expresada Ley 100, la Corte, en atención á lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, en virtud del cual los términos que hubieren empezado á correr, y las actuaciones y diligencias que yá estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación, y en atención á que la parte recurrente ha adquirido el derecho de ser juzgada con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio, procede á examinar el recurso y á fallar, en consecuencia.

El veredicto del Jurado que resolvió las cuestiones sometidas á su dictamen en la causa de Apolinar Restrepo, se fun-

da en las pruebas recogidas en el proceso y en los demás datos que los Jueces de hecho hayan podido allegar para ilustrar su conciencia. Penetrar en ésta es tarea imposible, que en vano la Corte pudiera intentar con el objeto de apreciar de injusto, y sobre todo de notoriamente injusto, aquel veredicto, que debe suponerse siempre, atendidos el juramento y el examen que lo presiden, como emanación de la verdad, de modo que sólo le es permitido á esta Superioridad calificar ese dictamen con el criterio jurídico que pueda formar en presencia de las pruebas que arroja el incompleto expediente que ha venido á su estudio.

Esas pruebas, preciso es convenir en ello, no dan luz suficiente para poder afirmar que el veredicto pronunciado en este juicio, pugna contra la verdad al resolverse, como se resolvieron, afirmativamente, las cuestiones sometidas á la decisión del Jurado.

El expresado defensor de primera y segunda instancia raciocina así:

"Restrepo-Cura le tiró á su mujer tres golpes de taciso, *pero sin intención de matarla*, dice él mismo. De las heridas que le causó, una solamente interesó el hueso del cráneo, siendo las otras dos leves. La Ochoa vivió más de quince días después de ser herida, y en el reconocimiento pericial de su cadáver, aunque se afirma que ella murió á consecuencia de esas lesiones, infirman este concepto ciertos *tumores* ó gomas que observaron en su cerebro los médicos, y sobre las cuales no fueron nada explícitos. Esto, unido á los antecedentes de Restrepo para con su mujer, da fuerza á la no intención de matarla que él alega.

"Ahora bien: la ley reconoce que el homicidio puede ser *involuntario*, cuando el homicida no tuvo intención de causar la muerte. Y como la intención es un fenómeno psicológico que no puede apreciarse sino por los actos externos que la ponen de manifiesto, agrega la ley: 'Esto se conocerá por las circunstancias que precedieron, acompañaron ó siguieron al hecho; por la clase y naturaleza de las armas (el taciso no es esencialmente mortal), por el sitio, naturaleza y extensión de las heridas etc., etc. (artículo 589, obra citada).

"Pero como sí había motivo para creer que se quiso causar un mal grave á la Ochoa, era el caso de condenar á Restrepo Cura, de acuerdo con el artículo 610 del Código Penal, á una pena de siete á once años de presidio; pues no mediaron circunstancias de asesinato en la ejecución del delito. Como se ve, yo pedía una pena mayor que la correspondiente al homicidio voluntario.

"Que Dolores Ochoa no era una esposa digna de respeto; que los móviles del delito—admito siempre que no es excusable mi defendido—no fueron odiosos; que no hubo premeditación en el reo y que el caso de Restrepo Cura no es de los más graves, sino antes bien de los más leves y menos alarmantes, todo eso y mucho más está comprobado en el proceso.

"Y siendo ello así, como lo es, el veredicto y sentencia que lo condenan á la pena capital son *notoriamente injustos*."

Al hacerse cargo la Corte de esta argumentación, considera:

1.° Aunque Apolinar Restrepo dice (folio 40), que, "ciego de ira, cogió un taciso y le tiró con él á su esposa, pero sin intención de matarla," su dicho, que, por otra parte, no tiene valor ninguno, está desmentido ya por la declaración de Jesús Rave, que dice que aquél "tiraba á su esposa como quien le tira á una culebra para matarla; pues, agrega, para mí Restrepo, al tirarle á su esposa con el taciso, que de presente se me pone, no fué sino con la intención de matarla;" ya por la declaración de Dolores Rave (folio 3), que dice: "que Restrepo sacó el taciso debajo de la ruana y tiró con él á su esposa, habiendo ésta caído al suelo en el primer tiro, y estando en el suelo fué que le tiró las otras dos veces; inmediatamente que esto vi, añade, me dirigí donde Restrepo y lo aparté para que no la acabara de matar;" y ya, en fin, por la de María de Jesús Rave (folio 4), quien expone "que cuando sucedía el acontecimiento, se trasladó inmediatamente al punto, y luégo que llegó cogió por detrás al señor Restrepo y le dijo que eso por qué era, y que no acabara de matar á esa pobre mujer; después de esto, agrega, grité yo y dije que ahí venían Ildefonso y José Rave; pero esto lo hice yo con el fin de ver si el señor Restrepo no acababa de matar á su esposa." Estas declaraciones de testigos presenciales y contestes, después de hacer una narración del modo como Restrepo daba golpes á su mujer, hasta el extremo de ponerla en tierra y dejarle incrustada en el cráneo el arma homicida—exposiciones que horrorizan al lector más impasible—tienen una fuerza incontestable, y no dejan duda de la intención que Restrepo tuvo de matar á su mujer. Ellas—ampliadas después—en su texto y en sus adiciones y aclaraciones, ponen de patente, "las circunstancias que precedieron, acompañaron y siguieron al hecho, la clase y naturaleza de las armas, el sitio, naturaleza y extensión de las heridas etc," de que trata el artículo 589 del Código Penal, citado por el defensor; y basta conocer el arma expresada, é imaginar de qué modo el agresor la descargó sobre la cabeza de la víctima, á quien derribó en tierra, hasta dejársela clavada en el cráneo, de donde no pudo retirarla, para conocer y apreciar, por actos externos, el fenómeno psicológico de la intención de matar que precedió en el ánimo del victimario.

2.° Y si esto no fuera suficiente, la exposición de los peritos reconocedores y la muerte ocasionada por aquellas heridas, son testimonio elocuente de la intención del ofensor. Los peritos dicen después de hacer una exposición clara de la autopsia del cadáver de Dolores Ochoa: "Las lesiones que se encontraron en la cabidad craneana, las de la meningo-encefalitis traumática con dos abscesos bastante grandes, fueron más que suficientes para producir la muerte á Dolores Ochoa, como la hubiera producido cualquiera de las dos afecciones separadas, meningitis ó encefalitis con los caracteres anatomo-patológicos presentados" (folio 21). En esa exposición no se dice que hubieran aparecido los "*tumores ó gomas*" de que habla el defensor, "que *infirmen* el concepto" de que la Ochoa murió á consecuencia de las lesiones que se hallaron en su cráneo: los "dos abscesos bastante grandes," que según dicho documento, aparecieron en la cavidad craneana, fueron efecto de las expresadas lesiones, y contribuyeron á causar la muerte de Dolores Ochoa.

3.° Las circunstancias de que Dolores Ochoa no fuera una esposa digna de respeto, que los móviles del delito no fueron odiosos, que el caso de Restrepo no fuera de los más graves, sino antes bien, de los más leves y menos alarmantes, de que trata el defensor de la primera y la segunda instancia, no están debidamente acreditados en el proceso, y si lo estuvieran, ellas no serían bastantes para calificar de *involuntario* el parricidio perpetrado por Apolinar Restrepo.

4.° El artículo 586 del Código Penal dice:

"El homicidio premeditado toma la denominación de *asesinato*, cuando los agresores lo cometen mediando en él una ó más de las circunstancias siguientes:.....

"3.ª Con alevosía y sobreseguro; ya sorprendiendo..... indefensa ó desapercibida á la persona asesinada .....

"6.ª Con algún acto de ferocidad ó de crueldad, bien se cause la muerte por alguno de estos actos....."

Nadie, al leer el proceso, puede negar que concurrieron estas circunstancias en el desgraciado acontecimiento de que se trata; y en cuanto á la *premeditación*, el artículo 585 de la citada obra dice:

"El homicidio se presume premeditado, siempre que no se pruebe ó resulte que pertenece á otra de las clases que reconoce la ley."

De modo que aun prescindiendo de las razones no constantes en el proceso que pudieran tener los Jueces de hecho para pronunciar su veredicto, comprobado se halla hasta la evidencia, que el hecho ejecutado por Restrepo es por lo menos un parricidio *voluntario*, aun en el caso de que se hubieran acreditado circunstancias exculpativas capaces de excluír la premeditación; y que, por consiguiente, el acusado se halla en el caso de los artículos 593 y 615 del Código Penal, que dicen:

"Artículo 593. El homicidio toma la denominación de *parricidio* cuando se cometa en la persona de algún ascendiente ó descendiente ó cónyuge, á sabiendas de que existe el vínculo expresado.

"Al parricidio son extensivas las calificaciones de pre-

meditado, asesinato, simplemente voluntario é involuntario, que se han dado al homicidio común."

"Artículo 615. En el parricidio se definen como casos más graves, y se castigarán con pena de muerte, salvas disposiciones especiales de la ley:

"1.° El parricidio voluntario, el premeditado y el asesinato, cometidos en la persona de cualquier ascendiente ó del cónyuge..... .."

De manera que no existe la causal 2.ª señalada por el artículo 360 de la Ley 105 citada, porque en concepto de la Corte no es injusto ni menos notoriamente injusto el veredicto del Jurado.

La parte recurrente no alega ninguna otra causal de casación; y como la sentencia de segunda instancia no es violatoria de ley sustantiva ó doctrina legal en forma alguna, y como no se ha incurrido en las causas de nulidad designadas con los ordinales 1.°, 3.°, 4.°, 5.°, 6.° y 7.° del artículo 264 de la Ley 57 de 1887, nada tiene la Corte que decir acerca de las causales 1.ª y 3.ª de que trata el citado artículo 370.

Por las anteriores consideraciones, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el concepto del señor Procurador y con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 100 de 1892, declara:

No es el caso de infirmar el fallo materia del recurso.

Notifíquese, cópiese y publíquese en la *Gaceta Judicial*, y remítase el expediente al Ministerio de Justicia para los fines legales.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Baltasar Botero Uribe.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Aníbal Galindo.—Juan Evangelista Trujillo.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintidós de Abril de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: En escrito de nueve de Marzo próximo pasado, Félix Torrijos propuso demanda ante este Supremo Tribunal, en su calidad de descendiente del General de la Independencia Joaquín Ricaurte, para que se le conceda la recompensa á que se cree con derecho conforme á la Ley 84 de 1890. Al propio tiempo manifiesta en su libelo de demanda, que teniendo noticia de que á su prima hermana Magdalena Ricaurte le reconoció la Corte el derecho á percibir del Tesoro nacional una recompensa militar definitiva por la suma de cuatro mil ochocientos pesos ($ 4,800), como nieta del citado General Ricaurte, según la sentencia proferida por la Corte en once de Septiembre de mil ochocientos noventa y uno, reclama "que se modifique dicha sentencia en el sentido de que se ordene que se le entregue la mitad de la recompensa que por dicha sentencia se reconoció á favor de la citada señora Ricaurte; y subsidiariamente, para el caso de que esto se deniegue en definitiva, pide que se declare que tiene perfecto derecho á cobrar á la señora Magdalena Ricaurte, y que ésta está obligada á pagarle, la mitad de la recompensa reconocida á su favor, que es por valor total de cuatro mil ochocientos pesos ($ 4,800).

Dada vista de la demanda de Torrijos al señor Procurador general de la Nación, este funcionario opinó, por razones idénticas á las que aducirá la Corte, que se declare infundada tal reclamación.

Acumulado el expediente archivado, relativo al juicio instaurado por la señora Magdalena Ricaurte, al de la demanda que se examina, y citadas las partes para sentencia, la Corte procede á dictarla.

Una vez que la sentencia aludida, de once de Septiembre de mil ochocientos noventa y uno, reconoció á Magdalena Ricaurte como nieta del General de la Independencia, Joaquín Ricaurte, derecho al goce del *máximum* de la recompensa unitaria señalada en la Ley 84 de 1890, por no haber figurado en el juicio en que recayó el expresado fallo, otro deudo de aquel General, la Corte carece de facultad para modificarlo, pues conforme al artículo 99 de la Ley 105 de 1890, sobre reformas á los procedimientos judiciales, las sentencias definitivas no pueden revocarse ni reformarse por el mismo Juez ó Tribunal que las pronuncie; de suerte que no habiéndose reservado para atender á las reclamaciones ó demandas de otros parientes de dicho General cantidad alguna de la que está designada en la mencionada Ley 84, no hay de dónde tomar la que hubiera de asignarse al demandante Félix Torrijos.

En cuanto á la demanda subsidiaria del mismo, la Corte no puede declararle el derecho que indica para dirigir su acción contra Magdalena Ricaurte, porque, prescindiéndose de que tal demanda no se dirige contra la Nación sino contra un particular, en que la Corte sería incompetente para conocer y decidirla, prejuzgaría sobre el derecho que asistiera ó no al expresado Torrijos para instaurar su acción, y sobre la obligación en que estuviera constituída la referida señora de devolver una cuota parte de lo que tiene reconocido.

En esta virtud, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de conformidad con el dictamen del señor Procurador general, declara infundada la demanda que ha incoado Félix Torrijos con echa nueve de Marzo del corriente año, de que queda hecha mención.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Baltasar Botero Uribe.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Aníbal Galindo.—Juan Evangelista Trujillo.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Abril veinticinco de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Examinado el expediente formado por Vicente Acosta Ospina, para apoyar su solicitud de recompensa por causa de invalidez, conforme á la Ley 84 de 1890, se encuentran acreditados los siguientes hechos:

1.° Que en la guerra de 1860 y 1861, Acosta hacía parte de las fuerzas que en el Distrito de Guasca estaban en armas al mando de los Coroneles Obando y Casabianca, y en defensa del Gobierno de la Confederación Granadina, contra las que sostenían la rebelión encabezada por el General Tomás C. de Mosquera; que en el combate que tuvo lugar á fines de 1861, en el sitio llamado "Patio de Bolas," Acosta recibió una herida de bala enemiga en el brazo derecho, cuando funcionaba como Sargento 2.° en un Escuadrón de caballería. Esto lo aseguran cuatro testigos que afirman hacían también parte de las fuerzas defensoras del citado Gobierno y que presenciaron el hecho de haber sido herido Acosta, en el combate mencionado;

2.° Que conforme al reconocimiento practicado en Acosta ante el Comandante en Jefe del Ejército, por la Junta de facultativos que previenen los artículos 17 y 18 de la citada Ley 84, al peticionario le encontraron una extensa cicatriz en el brazo derecho, ocasionada por una herida de bala que fracturó la parte inferior del radio, acompañada de una luxación del cúbito con falsa articulación y deformación del puño; que también le encontraron otra cicatriz en el dorso de la mano derecha, y que estas heridas han producido una invalidez relativa y parcial para mover el brazo;

3.° Que el demandante es pobre y observa buena conducta, sobre lo cual se ha presentado otra información de testigos, recibida con las formalidades legales;

4.° Que Acosta no ha recibido pensión ni recompesa del Tesoro público por causa de su invalidez, según lo certifica el señor Ministro del Tesoro.

Siendo suficientes los hechos relacionados para justificar la demanda de recompensa promovida por Acosta, la Corte Suprema, de acuerdo con lo pedido por el el señor Procurador de la Nación y con lo que disponen de los artículos 1.°, 5.°, 6.° 11 y 19 de la Ley 84 de 1890, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que Vicente Acosta Ospina, ó su apoderado, José María León Martín, tiene derecho á recibir del Tesoro nacional la recompensa unitaria y definitiva de cuatrocientos ocho pesos

($ 408), igual á la mitad del sueldo de cuatro años asignado á un Sargento segundo, que es la que le corresponde por causa de la invalidez relativa contraída en el campo de batalla.

Notifíquese, déjese copia, comuníquese al señor Ministro del Tesoro, publíquese y archívese.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintisiete de Abril de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Juan Nepomuceno Rincón Motta se presentó en trece de Enero de 1888, por medio de su apoderado Francisco Groot, reclamando el valor de un caballo que dice le expropiaron en la madrugada del trece de Diciembre de 1884, en Soatá (Departamento de Boyacá), las fuerzas revolucionarias á órdenes de Daniel Hernández.

La Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones dictó su resolución número 4,082, de once de Octubre de 1892, absolviendo á la Nación del pago de la cantidad de ciento cincuenta pesos ($ 150), valor de la expropiación, y de esa providencia apeló el apoderado de Rincón Motta, para ante el Ministerio del Tesoro, el cual confirmó en resolución número 3,407, de veinticuatro de Diciembre del mismo año, la dictada por la Comisión.

Apeló de esa providencia para ante la Corte Suprema la parte agraviada, y es llegado el caso de decidir el recurso intentado.

El fundamento de la Comisión para negar la reclamación de Juan N. Rincón Motta, consiste en no aparecer registrado el crédito ante la Gobernación del Departamento de Boyacá, donde se verificó la expropiación, en la forma de relación, jurada como lo exigen los artículos 16 de la Ley 44 de 1886 y 8.° de la Ley 36 de 1888, que prorogó hasta el treinta de Junio del mismo año el tiempo para presentar la relación jurada exigida por la resolución ejecutiva de diez y siete de Mayo de 1886. La Comisión tuvo razón en su negativa; porque efectivamente, á pesar de la prórroga concedida por la ley citada, el solicitante descuidó llenar las formalidades exigidas por el artículo 16 de la Ley 44 de 1886.

Además de esto, la información de testigos presentada por Rincón Motta, sobre la expropiación verificada en Soatá del caballo de su propiedad, tiene el defecto de que los exponentes no dan razón de su dicho y declaran sobre hechos que pueden ser exactos; pero que no se sabe si los presenciaron ó no los testigos, circustancia que también exige la ley (artículo 2.°, ordinal 3.°) para reconocer el crédito.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la resolución número 3,407, de fecha veinticuatro de Diciembre de 1892, proferida por el Ministerio del Tesoro.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintiocho de Abril de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: En la demanda que María Juliana Rivera, vecina del Distrito de Cajibío, en el Departamento del Cauca, ha promovido ante esta Corte para que se le conceda la recompensa militar unitaria á que se cree con derecho como viuda del soldado Angel María Rivera (ó Pillimué), muerto en 1887, por consecuencia de la herida que recibió combatiendo en defensa del Gobierno legítimo, en el "Alto de Piendamó," en 1885, llegado el caso de pronunciar sentencia, el señor Procurador general de la Nación, ha presentado el dictamen que á la letra dice:

"*Señores Magistrados:*

"María Juliana Rivera ha solicitado recompensa como viuda de Angel María Rivera (ó Pillimué), que falleció en 1887, á consecuencia de heridas que recibió en 1885, combatiendo en favor del Gobierno legítimo.

"La muerte de Rivera en 1887 se ha acreditado con la partida de defunción correspondiente.

"La herida que él recibió en la expresada guerra, en defensa del Gobierno legítimo, también se ha comprobado por medio de testigos que presenciaron el hecho en el 'Alto de Piendamó,' lugar del combate, en que fué herido el soldado legitimista Rivera.

"La relación entre la herida y la muerte, es decir, el hecho de haber sido ésta ocasionada por aquélla, se ha comprobado con el testimonio de muchas personas que presenciaron los padecimientos de Rivera desde 1885, época de la herida, hasta 1887, época de su muerte. Todos estos testigos, inclusive Ramona Mercado, única persona que recetaba á Rivera, aseguran que el fallecimiento de éste provino de la herida que recibió en 1885, lo cual, por otra parte, es de mera presunción común, si se considera que dicha herida fué causada por un proyectil de arma de fuego, y en el pecho.

"No habiéndose encontrado la partida de matrimonio que Rivera contrajo con la solicitante, ésta ha acreditado su estado civil de cónyuge de aquél por medio de testigos, que presenciaron el acto matrimonial.

"Ha acreditado también que Rivera no tuvo hijos en su matrimonio, que ella es pobre, observa buena conducta, vivió en armonía con su esposo y no ha contraído nuevas nupcias.

"Se halla igualmente en los autos una certificación especial de Su Señoría el Ministro del Tesoro, en la que se hace constar que la demandante no ha recibido pensión ni recompensa por la muerte de su marido.

"Como los comprobantes enumerados bastan para justificar el derecho á la gracia que se solicita, os pido que concedáis á la señora Rivera la recompensa á que es acreedora por el fallecimiento de su esposo.

"Bogotá, 21 de Abril de 1893.

"CARMELO ARANGO M."

Y como dicho dictamen está ajustado al mérito de los autos, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara á María Juliana Rivera acreedora á una recompensa unitaria, pagadera del Tesoro nacional, de setecientos cuatro pesos ($ 704) equivalente al sueldo de un soldado en cuatro años, de conformidad con el derecho que le dan los artículos 1.° y 9.° de la Ley 84 de 1890.

Notifíquese, cópiese, publíquese y comuníquese al Ministerio del Tesoro para su cumplimiento.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintinueve de Abril de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: De dos mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos ($ 2,654) que Emigdio P. Solano demandó de la Comisión de suministros, por valor de exacciones de guerra sufridas en la de 1885 por varios individuos que le cedieron sus respectivos creditos, la Comisión, en resolución dictada el diez y ocho de Marzo del año de 1892, bajo el número 3,469, reconoció las siguientes partidas:

A favor de Leandro Mogollón, treinta y dos pesos.	$ 32
A favor de José de J. Turizo, sesenta y cuatro.....	64
A favor de Josefa B. de Mogollón, trescientos.....	300
A favor de Emigdio P. Solano, trescientos veinticuatro.....	324
Total, setecientos veinte pesos.....	$ 720

Y el Ministerio del Tesoro, en resolución número 2,993, de fecha veinticinco de Junio último, aprobó la de la Comisión; pero habiéndose concedido al apoderado de Solano recurso de apelación para ante esta Superioridad, se ha sustanciado legalmente el recurso, y para decidirlo se observa lo siguiente:

En escrito de fecha veintitrés de Septiembre último el apelante pide que se reconozca el valor total de las certifi-

caciones números 311 y 520, expedidas por el Gobernador de Bolívar, la primera por la suma de ochocientos treinta y nueve pesos ($ 839), y la segunda por la de quinientos cuarenta y cinco pesos ($ 545), y que se refieren una y otra á documentos en que se dice que constan varios empréstitos y suministros hechos á las fuerzas del Gobierno por varios individuos en la última guerra nacional. En apoyo de su petición hace notar que la Comisión dedujo del total de dichas certificaciones la partida de cuatrocientos noventa y dos pesos ($ 492), valor de unas bestias de Ildefonso Sánchez, y la de cien pesos ($ 100) valor de un caballo de Leopoldo Díaz, sin tener presente que estas dos partidas no están incluídas en dichas certificaciones, y para sostener el valor probatorio de éstas últimas, invoca la resolución del Ministerio de Guerra, de fecha veinticuatro de Diciembre de 1887, en la cual, haciéndose referencia al Decreto número 102 de 1886 y al artículo 2.° de la Ley 44 del propio año, se declara que esta clase de documentos hace plena prueba respecto de las certificaciones que en ellos se hagan constar.

Pero la Corte siempre ha creído que puede y debe examinar los documentos mencionados en las certificaciones expedidas por los Gobernadores, con el fin de esclarecer los puntos dudosos en este caso, y para mejor proveer, dictó su auto de diez y nueve de Octubre último, por medio del cual dispuso pedir al Gobernador de Bolívar los documentos que se tuvieran á la vista para expedir la certificación número 520; y habiendo el Gobernador informado que dichos documentos fueron enviados, junto con todos los de su clase, al Ministerio del Tesoro, libróse á éste un despacho, suplicándole que se sirviera remitirlos á la Corte, originales ó en copia; el señor Ministro dispuso que pasara el exhorto á la Comisión para que esa Corporación lo diligenciara; y el Secretario de la Comisión informó, con fecha veinticuatro de Enero último, que los antecentes de la certificación mencionada, número 520, habían sido agregados en 23 fojas útiles á este mismo expediente.

Pero examinando éste detenidamente se observa que los documentos á él agregados en 23 fojas útiles son los correspondientes á la certificación número 311, y no los que debieron servir para la expedición de la que aparece marcada con el número 520; y que fuera de dichos documentos, en el expediente sólo hay otros, de los cuales unos no concuerdan con dicha certificación 520, y otros consisten en declaraciones de nudo hecho que no son susceptibles de cambiarse por certificaciones, según lo que á este respecto dispone el artículo 3.° del Decreto número 102 de 1886, en que sólo se permite cambiar por ellos las atestaciones ó recibos expedidos por los subalternos de los Recaudadores de Hacienda ó de los Gobernadores, pero nunca las declaraciones de que trata el inciso 3.° del artículo 2.° de la Ley 44 de 1886.

De manera que la certificación número 520 no está en manera alguna apoyada por los documentos respectivos en ella mencionados; mientras que sí lo está la marcada con el número 311 cuyo valor de ochocientos treinta y nueve pesos ($ 839) es el único que puede reconocerse.

De todo lo cual resulta que aunque sea fundada la observación del apelante, en cuanto á que en las certificaciones no se hallan comprendidas las partidas deducidas por la Comisión, nunca puede la Corte decretar un reconocimiento que exceda la suma á que asciende la certificación número 311, suma que sin embargo es mayor que la reconocida por la Comisión.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, reconoce á cargo del Tesoro público nacional y á favor del cesionario Emigdio P. Solano la suma de ochocientos treinta y nueve pesos ($ 839), valor de la certificación número 311, y absuelve á la Nación del resto de la suma reclamada, por no haberse presentado acerca de ella las pruebas conducentes. Queda en estos términos reformada la resolución apelada.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA. — BALTASAR BOTERO URIBE. — JESÚS CASAS ROJAS. — MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO. — JUAN EVANGELISTA TRUJILLO. — *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintinueve de Abril mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Solicita recompensa militar Digna Perlaza, como viuda de Angel María Ayala, muerto en defensa del Gobierno de la Confederación Granadina, á consecuencia de una herida que recibió el once de Abril de mil ochocientos sesenta y dos, en el combate de "El-Cabuyal."

Consta bien probado por las declaraciones de Pedro Cárdenas, Vicente Ochoa, Jacinto Velásquez (folios 6 á 9) y doctor Rafael Paredes (folio 13 vuelto), testigos presenciales y libres de toda tacha, y por el *Registro Oficial*, órgano de publicaciones del Gobierno seccional del Cauca, que Angel María Ayala fué herido en la fecha citada y muerto después, el veintinueve de Diciembre de mil ochocientos sesenta y nueve, á consecuencia de la herida grave que recibió sobre la rodilla; que varios médicos quisieron hacerle la amputación poco después del combate, y Ayala no se dejó, y que después vivió siempre inhábil caminando en muletas, hasta que murió. De los médicos que estuvieron presentes el día del combate, doctores Francisco Córdoba, Primitivo Sinesterra y Rafael Paredes, citado, sobrevive el último, quien confirma las exposiciones de los testigos Cárdenas, Ochoa y Velásquez.

A fojas 3 se registra la partida de matrimonio de Angel María Ayala con Digna Perlaza, expedida por el Presbítero Buenaventura Jiménez, Cura de la Parroquia de San Nicolás de Cali, documento que hace fe.

La partida de defunción del mismo Ayala corre al folio 2, expedida por el Presbítero Severo González, Cura interino de la misma Parroquia.

Consta igualmente que la solicitante está pobre, observa buena conducta, vivió en armonía con su esposo y no ha vuelto á contraer matrimonio (folios 28 á 30), y que Ayala no tuvo hijo que pudiera solicitar recompensa.

Al folio 17 se registra el certificado de Su Señoría el Ministro del Tesoro en que consta que Digna Perlaza no figura en el registro de pensionados de la República y que no hay constancia en los libros de la Sección 3.ª de pensiones, de que haya recibido recompensa del Tesoro nacional.

Los testigos aseguran que Ayala era Coronel el día del combate de "El-Cabuyal," y en esto no hay duda porque, según el despacho expedido por el Comandante en Jefe del Ejército Unido, Julio Arboleda, Ayala fué ascendido á Coronel efectivo de las milicias del Estado del Cauca, atendiendo al mérito y servicios y distinguido comportamiento en aquel hecho de armas. Ese despacho lleva fecha once de Abril de mil ochocientos sesenta y dos. Por consiguiente, y como el artículo 9.° de la Ley 84 de 1890, dice expresamente que "recibirán los agraciados ó quienes sus derechos representen una suma igual al monto ó alcance de cuatro años del sueldo íntegro del último empleo que tenga el reclamante, ó del que se le había concedido antes ó después de morir, si los reclamantes son sus deudos," es claro que debe considerarse á Ayala en el empleo dicho de Coronel efectivo.

Por consiguiente, la recompensa debe conferirse á la viuda, teniendo en cuenta que su esposo fué herido combatiendo en "El-Cabuyal" como Coronel efectivo.

Por tanto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo en parte con el señor Procurador y con los artículos 1.°, 4.°, 5.° (ordinal 2.°) 6.°, 9.° y 11 de la Ley 84 de 1890, se concede á Digna Perlaza, viuda de Angel María Ayala, muerto el veintinueve de Diciembre de mil ochocientos sesenta y nueve, á consecuencia de herida que recibió en el combate de "El-Cabuyal," en defensa del Gobierno legítimo, una recompensa unitaria de seis mil setecientos veinte pesos ($ 6,720), suma igual al monto ó alcance de cuatro años del sueldo de Coronel efectivo.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial*, dése cuenta al Ministerio del Tesoro y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA. — BALTASAR BOTERO URIBE. — JESÚS CASAS ROJAS. — MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO. — JUAN EVANGELISTA TRUJILLO. — *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, primero de Mayo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Juana González, por sí y en representación de sus menores hijas, Angelina, Ascensión, Rosario y Natividad, todas vecinas del Distrito municipal de Timbío en el Departamento del Cauca, ha solicitado una recompensa militar por la muerte del Sargento primero, Santiago Mosquera, esposo de la primera, muerte que ocurrió en el mes de Abril de 1855, por razón del servicio que, como militar, prestaba Mosquera en favor del Gobierno.

En apoyo de la demanda, se han presentado estos comprobantes:

1.° Una información sumaria de cuatro testigos, recibida con las formalidades legales, los cuales aseguran como testigos presenciales y compañeros de armas de Mosquera, que la muerte de éste ocurrió á inmediaciones de Timbío, causada por un balazo que le disparó Ángel Narváez, soldado que hacía parte de una escolta que mandaba Mosquera, el cual trataba de impedir que los soldados tomasen licor, por lo que éstos se insubordinaron, y Narváez disparó contra el Sargento Mosquera, causándole la muerte instantáneamente. El fallecimiento de Mosquera, como lo dice el señor Procurador, tuvo lugar en desempeño del servicio militar y por razón de éste, y sus deudos pueden fundar su recompensa en la causal 2.ª del artículo 5.° de la Ley 84 de 1890;

2.° Las partidas de bautismo de Ascensión y Rosario Mosquera, únicas que aparecen como hijas legítimas del matrimonio contraído en 1879 entre Santiago Mosquera y Juana González, pues respecto de las otras dos no ha podido acreditarse lo mismo, ya porque, según la misma González, su hija Angelina fué habida antes de su matrimonio y no fué Mosquera su padre, ya porque Natividad, aunque hija de dicho Mosquera, nació en 1874, antes de que se verificara el matrimonio de éste con la González, y no hay constancia de que su padre la hubiera reconocido;

3.° La partida de matrimonio de Santiago Mosquera y Juana González, celebrado el diez y seis de Junio de 1879;

4.° Otra información de testigos, con la que se acredita que la viuda de Mosquera y sus hijas Ascensión y Rosario, son pobres y observan buena conducta; que aquélla permanece viuda y vivió siempre en buena armonía con su esposo. En cuanto á las menores, que nacieron, respectivamente, en 1882 y 1884, nada puede decirse de su conducta para con su padre, á quien apenas conocieron;

5.° Certificación del señor Ministro del Tesoro, en que se hace constar que ni la viuda ni las citadas hijas de Mosquera han recibido pensión ni recompensa por la muerte de éste.

Con los comprobantes relacionados está acreditado el derecho de Juana González y sus dos hijas menores Ascensión y Rosario para obtener la recompensa solicitada, pues respecto de las otras dos, Angelina y Natividad, no existe el mismo derecho, por no haber acreditado ser hijas del militar por quien se reclama. En tal virtud, la Corte Suprema, de acuerdo con lo pedido por el señor Procurador de la Nación, y en observancia de lo dispuesto en los artículos 1.°, 5.°, 6.° y 9.° de la citada Ley 84, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que Juana González y sus hijas, Ascensión y Rosario Mosquera, tienen derecho á recibir del Tesoro nacional, una recompensa unitaria y definitiva de novecientos doce pesos ($ 912), igual al sueldo de cuatro años asignado á un Sargento primero, cantidad que se dividirá en dos partes iguales, una para la viuda y la otra para las dos hijas.

Notifíquese, déjese copia, avísese al Ministerio del Tesoro, publíquese y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

AUTOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintiséis de Abril de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Camila Forero, vecina de Bogotá, demandó en juicio civil ordinario, ante el Juez 3.° de la misma ciudad, á Daniel F. Macharaviaya, para que con su audiencia se declarase que una casa baja situada en el barrio de Las Nieves de la misma ciudad de Bogotá, de que después se hablará, y que Macharaviaya poseía con título que la demandante reputaba nulo ó de ningún valor, era de su propiedad; intentó, pues, la reivindicación de dicho inmueble con plena acción de dominio. El Juez de la causa falló el pleito, por sentencia de catorce de Agosto de mil ochocientos noventa y uno, por la cual declaró que la casa en cuestión, pertenecía en pleno dominio y propiedad á Camila Forero; condenó, en tal virtud, al demandado á restituír dicha casa dentro del término de treinta días, con las prestaciones á que, conforme á la ley, está obligado el poseedor de buena fe vencido en juicio de reivindicación. Como el pleito fué oportunamente denunciado por Macharaviaya á sus inmediatos causantes Lorenzo Gaona y Rafael Garzón, se declaró también que éstos estaban obligados al pleno saneamiento en favor de Macharaviaya, y que á su vez tenían igual derecho contra su vendedora, Petronila Forero Bárcenas. Apelada esta sentencia por parte de Macharaviaya, y surtida la segunda instancia por todos sus trámites ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, éste pronunció el fallo definitivo de cinco de Marzo de mil ochocientos noventa y dos, confirmando en todas sus partes la sentencia apelada; y es dicha sentencia de segunda instancia, firmada por los Magistrados Jesús María Quintero P., Antonio María Rueda G. y Nicolás Enciso, y que por ser confirmatoria de la de primera instancia, no admitía recurso de casación, la que sirve de fundamento á Lorenzo Gaona, perjudicado por ella, para intentar la acusación que ha introducido ante esta Corte, con las formalidades legales, por escritos de quince y veintuno del presente contra dichos Magistrados, por el delito definido en el artículo 539 del Código Penal vigente cuando se pronunció dicho fallo, que á la letra dice así:

"Artículo 539. El Magistrado ó Juez que dictare, en juicio ó negocio civil ó criminal, sentencia definitiva contra ley expresa y terminante, si es de las inapelables ó irrevocables, ó contra las cuales no haya ningún recurso para invalidar, enmendar ó revocar el fallo; además de satisfacer al agraviado las costas y perjuicios que le ocasiona, pagará una multa de veinte á doscientos pesos.

"Entre los perjuicios se contará el del interés del pleito, injustamente perdido por la sentencia definitiva de que trata el inciso anterior.

"Si la sentencia no causa ejecutoria, pero se ha ejecutoriado, por omisión de las partes en interponer los recursos ó remedios legales, la pena será una multa de diez á cien pesos, sin indemnización de perjuicios, en cuanto se refieran al valor del pleito perdido."

La violación de ley expresa en la sentencia materia de la acusación, la funda el acusador en que consistiendo el título de propiedad del inmueble reclamado por la Forero en la cláusula tercera del testamento otorgado por el Presbítero Salvador Forero, con fecha diez de Julio de mil ochocientos sesenta y siete, por la cual legó dicha casa á Camila Forero, sin haberla designado por sus linderos ni siquiera por su ubicación de carrera, cuadra ó calle en la ciudad; dicha cláusula era nula, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2677 del Código Civil de Cundinamarca, vigente cuando se otorgó el testamento; en que el Tribunal declaró válida dicha cláusula contra lo dispuesto en el artículo 1748 del mismo Código, que declara nulo todo acto ó contrato á que falte alguno de los requisitos que la ley prescribe para su legalidad; y finalmente, en que dicha falta de designación de los linderos de la casa legada, constituía una nulidad absoluta conforme al artículo 1749, que el Juez debía declarar de oficio, de conformidad con el artículo 1750. Es esencial advertir que el acusador no ha acompañado á su escrito de acusación sino la copia legalizada de la sentencia que la motiva, y las diligencias de posesión de los Magistrados que la suscribieron, por creer, como expresamente lo dice en su escrito de veintiuno del presente, que aquella pieza basta para el fallo que debe pronunciar la Corte, por constar en ella la existencia de los documentos jurídicos, materia de la acusación. No se acusa,

pues, dicha sentencia, de contener inexactitudes ó falsedades en la relación de los hechos, sino de injurídica aplicación de la ley, en lo cual pasa á ocuparse la Corte.

La cláusula tercera del testamento del Presbítero Salvador Forero, raíz de este litigio, dice así:

"En tercer lugar declaro que no tengo más bienes que una casita baja de tapia y teja, situada en esta ciudad en la carrera de..... (hay un espacio en blanco), en la cual vive la señora Ramona Abreo, mi hermana uterina, y es mi voluntad que durante los días de su vida disfrute de los usufructos ó arriendos de dicha casa, y muerta mi hermana, pase á ser propiedad de la señorita Camila Forero, mi sobrina."

El Presbítero Forero falleció el diez y siete de Agosto de mil ochocientos sesenta y siete. Seguida la causa mortuoria, la nuda propiedad de la casa fué adjudicada, con todas las formalidades legales, á Camila Forero, quien á la muerte de Ramona Abreo, acaecida el diez y seis de Marzo de mil ochocientos setenta y dos, adquirió el dominio útil del inmueble y entró en plena posesión de él, posesión que retuvo hasta Mayo de mil ochocientos ochenta y seis, en que fué despojada de ella por Eduardo Ochoa, apoderado general de Petronila Forero Bárcenas. Esta Bárcenas, que por motivos que la sentencia no expresa, se creía con derecho á la casa por el hecho que ella afirma, pero de que no hay prueba en los autos, que el Presbítero Forero se la había entregado en vida, viéndose á la muerte del testador despojada de esa esperanza, pensó en fraguar un título cualquiera de propiedad que le sirviera para disputar la casa á la Forero; y con tal propósito, compareció vendiendo dicha casa á Juan Nepomuceno Torres Torrente, por escritura número 1038 de doce de Junio de mil ochocientos setenta y cinco; pero como se viera obligada á hacer mención del título en virtud del cual hacía la venta, tuvo que confesar en aquel primer instrumento, que no tenía para ello más título que la entrega que de dicha casa le había hecho el Presbítero Salvador Forero. Pero era preciso apresurarse á hacer desaparecer este primer título, que por sí solo revelaba su invalidez, su vacuidad, su carencia absoluta de derecho para trasferir el dominio de aquel inmueble, y entonces aparece la Bárcenas ejecutando á Juan Nepomuceno Torres Torrente, ante el Juez 2.° del Distrito de Bogotá, juicio en el cual se remató la casa á favor de la Bárcenas, por no haberse presentado otro licitador que mejorase la postura de dos mil pesos ($ 2,000) en que se avaluó el inmueble; habiendo renunciado previamente el ejecutado Torres Torrente los pregones y demás formalidades del juicio ejecutivo que constituyen las garantías del ejecutado, lo que prueba claramente que aquel juicio procedía de una simulación pactada entre el ejecutante y el ejecutado, con el único objeto de constituír en favor de la Bárcenas un título de propiedad de la casa, fundado en remate público. Armada yá de este título, la Bárcenas vendió de nuevo la casa á Rafael Garzón y Lorenzo Gaona, por instrumento número 401, de 26 de Agosto de mil ochocientos ochenta y seis; y Garzón y Gaona la vendieron á Daniel F. Macharaviaya, por escritura número 369 de once de Mayo de mil ochocientos ochenta y ocho, ante el Notario 4.° del Bogotá. Hé aquí fielmente relatada, como la relata la sentencia acusada, la historia de los medios por los cuales se despojó de la posesión de la casa á Camila Forero, quien, como queda dicho, se vió obligada entonces á entablar juicio ordinario de reivindicación del inmueble, con acción de dominio contra el actual poseedor, juicio que fué fallado en ambas instancias á su favor. Debe hacerse constar, que aunque la sentencia acusada declaró á Macharaviaya poseedor de buena fe, como no alcanzó á ganar el dominio de la casa por prescripción, de nada pudo aprovecharle aquella condición.

La acusación de Gaona *contra* los Magistrados que suscribieron la sentencia de cinco de Marzo de mil ochocientos noventa y dos, se funda, como se ha dicho, en que no habiendo el testador particularizado, individualizado ó determinado por ubicación y linderos ciertos la casa legada, dicha cláusula era nula, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2677 del Código Civil cundinamarqués, que hablan lo de las designaciones que *por regla general* deben contener los instrumentos que se otorguen ante los Notarios, dice:

"Las designaciones del nombre, de la situación y de los linderos de una finca, se harán, aun cuando sólo se trate de la enajenación, hipoteca ó gravamen de la parte de una finca que se posea *proindiviso*. En tal caso, se designarán el nombre, la situación y los linderos de la finca común, expresándose que en ella está contenida la parte enajenada, hipotecada ó gravada."

Pero, además de que el mismo artículo, en su parte final, dispone que el testamento se arregle á las designaciones prevenidas en el libro 3.°, título *Ordenación del testamento*, la sentencia acusada con mucha propiedad dice que las disposiciones aplicables á la decisión de la controversia son las especiales referentes á legados, que consagran los artículos 1126, 1173, 1174 y 1175 del Código Civil de Cundinamarca, vigentes cuando se otorgó el testamento, bajo el cual murió el testador. El artículo 1126 dice: "Toda asignación deberá ser, ó á título universal ó de especies determinadas, ó que por las *indicaciones del testamento puedan claramente determinarse*, ó de géneros ó cantidades que igualmente lo sean ó puedan serlo. De otra manera se tendrá por no escrita." Tratándose, pues, de la determinación de la especie legada (una casita baja, de tapia y teja, situada en esta ciudad), aunque no se hubieran precisado, como no se precisaron efectivamente en la cláusula tercera, la ubicación y los linderos, las indicaciones contenidas en la misma cláusula son más que suficientes para determinarla. Esas indicaciones son dos: 1.ª la de que la casa legada es la *única* que posee, y 2.ª la de que en dicha casa habitó su hermana uterina Ramona Abreo. Habría bastado la última para determinar con toda claridad cuál era la especie legada; pero además, como en la sucesión del Presbítero Forero no se encontró otra casa de su propiedad que esa, que habitaba Ramona Abreo, comprada por el testador al Reverendo Padre fray Gabriel Rodríguez, por escritura número 50, de siete de Marzo de mil ochocientos cincuenta y nueve, ante el Notario 2.°; y como, por otra parte, los demandados, aunque al principio lo ensayaron, no se atrevieron á sostener que la casa reclamada por la Forero no fuera la misma é idéntica casa vendida por la Bárcenas á Garzón y Gaona y por éstos á Macharaviaya, tánto que la acusación no se funda en que la sentencia haya adjudicado á la Forero una casa distinta de la que ella reclama, de la que habitaba la Abreo y de la que el testador Forero poseía por compra que de ella había hecho al Padre Rodríguez, sino únicamente en que la designación de la cláusula tercera del testamento no consta por linderos, es claro que la sentencia de primera instancia y la confirmatoria de la de segunda, lejos de haber violado las disposiciones legales que cita el acusador, no han hecho sino aplicar é interpretar rectamente las leyes por las cuales debía ser dirimido el pleito para amparar el legítimo derecho. La sentencia acusada es un modelo de erudición, en que brillan la rectitud y la justicia. En ella confronta el Tribunal el primer título de la falsa propiedad de la casa ideado por la Bárcenas; ó sea la escritura de venta que ella hizo á Torres Torrente, para demostrar, á la luz de todas las leyes que dan nacimiento al derecho de propiedad y que rigen su trasmisión, que los causahabientes de aquélla, nada pudieron adquirir de quien nada podía trasmitirles.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, desecha la acusación presentada por Lorenzo Gaona contra los Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en la Sala de lo Civil, doctores Jesús María Quintero P., Antonio María Rueda G. y Nicolás Enciso, que pronunciaron dicha sentencia, y sobresee en el procedimiento, declarando sin lugar al seguimiento de causa, de acuerdo con lo dispuesto en la parte final del artículo 1628 del Código Judicial.

Notifíquese, cópiese, publíquese, en la *Gaceta Judicial* y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

IMPRENTA DE ANTONIO M. SILVESTRE.

REPÚBLICA DE COLOMBIA.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AÑO VIII | Bogotá, 17 de Junio de 1893. | NÚM. 398.

CONTENIDO.

Págs.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

La que niega á Nacianceno Sánchez el complemento de una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Corrales) 273
La que confirma la resolución del Ministerio del Tesoro, número 3,330, por la que niega el reconocimiento de un crétito á favor de Estefanía Ordóñez, por suministros. (Magistrado ponente, doctor Botero Uribe) 273
La que confirma la que dictó el Tribunal Superior del Cauca en el juicio seguido contra Rudesindo Ospina sobre reconstrucción de un puente. (Magistrado ponente doctor Trujillo) 274
La que niega á Francisco A. Magaña y otros el reconocimiento de un crédito proveniente de suministros. (Magistrado ponente, doctor Galindo) 275

NEGOCIOS CRIMINALES.

La confirmatoria de la que pronunció el Tribunal Superior de Antioquia, en la que condena al Juez del Circuito de Ríonegro, Miguel Ramírez Zoluaga, por mala conducta. (Magistrado ponente, doctor Isaza) 276
La que confirma la pronunciada por el Consejo de Guerra, en la cual condena al soldado Ignacio Contreras por homicidio involuntario. (Magistrado ponente, doctor Galindo) 277

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Por el cual se niega la revocación solicitada por el apoderado de Angélica y Josefina Girón, de auto dictado por la Corte, en el juicio instaurado por la Compañía explotadora de los bosques de "Alto Chilibre." (Magistrado ponente, doctor Corrales) .. 277
El que niega la admisión del recurso de casación interpuesto por Pedro Goitia en un juicio sobre dominio del terreno llamado "Trapesoide." (Magistrado ponente, doctor Corrales) 278

NEGOCIOS CRIMINALES.

El de sobreseimiento en el sumario seguido contra el Prefecto de la Provincia de Buga, José Ignacio Calero, por abuso de autoridad. (Magistrado ponente, doctor Isaza) 280

GACETA JUDICIAL.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, cuatro de Mayo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Manuel Paz y V., por medio del escrito fechado en tres de Febrero del corriente año, y en ejercicio del poder que le ha conferido especialmente Nacianceno Sánchez, vecino de Totoró, en el Departamento del Cauca, ha ocurrido á la Corte, estableciendo demanda contra la Nación para que, por sentencia definitiva, se le declare con derecho al goce del complemento de la recompensa que antes se le había declarado, y funda dicha demanda en la Ley 84 de 1890, sobre la materia, y en que es militar inválido en el empleo de Sargento Mayor.

A los comprobantes que acompañan la demanda, se agregó un ejemplar del número 234 de la *Gaceta Judicial* de la Corte, en que está inserta la sentencia de treinta y uno de Julio de 1890, por la cual se otorgó al referido Nacianceno Sánchez la recompensa de mil doscientos cincuenta pesos ($ 1,250) del Tesoro nacional, conforme á la Ley 153 de 1887, por invalidez, proveniente de una herida que recibió en el brazo derecho en el combate que tuvo lugar en Silvia el mes de Enero de 1885, en defensa del Gobierno nacional.

Dada vista del expediente al señor Procurador general de la Nación, este funcionario es de opinión que Sánchez no tiene derecho al goce del complemento de la recompensa que ha demandado, y que debe decidirse la demanda negativamente.

El dictamen del Procurador manifiesta lo siguiente:

"La Ley 84 de 1890 solamente reconoce á los deudos de los militares de la Independencia, que se hallan en el caso de su artículo 13, el derecho á complementar las recibidas á virtud de la Ley 153 de 1887.

"Según el artículo 61 de la misma Ley 84, los militares que merced á leyes anteriores sobre premios y recompensas, hubiesen hecho calificar y premiar sus servicios, y que á causa de ellos se hallasen actualmente en el goce de pensión, ó que hubiesen recibido recompensa de alguna clase al tenor de la Ley 153 de 1887, no tienen derecho á recibir recompensa unitaria definitiva por los servicios que hasta el presente han prestado; de donde se deduce que si tal cosa se dispone para el caso de nuevos servicios, con mayor razón debe entenderse tratándose de un aumento de recompensa en que no concurre siquiera esa circunstancia.

"Por lo demás, el artículo 41 de la misma Ley 84, comprende solamente á los militares que se hallen en el goce de *pensión*, conforme á las leyes anteriores á las expedidas desde 1876 en adelante, caso en que tampoco se halla el solicitante, y como lo que dice el señor Procurador en su vista que precede, es exacto, la Corte lo reproduce para declarar, como declara, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, que Nacianceno Sánchez no tiene derecho al complemento de la recompensa que solicita.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, cuatro de Mayo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: En quince de Junio de mil ochocientos sesenta y seis, se presentó Vicente Sarmiento, con poder de Estefanía Ordóñez, ante el Juez del Circuito de Santander, Distrito Judicial de Popayán, demandando la cantidad de mil doscientos veinte pesos ($ 1,220), valor de varios semovientes tomados á su poderdante del sitio de "La-Paila," en los meses de Septiembre y Octubre de mil ochocientos sesenta, y Julio y Agosto de mil ochocientos sesenta y uno, por fuerzas revolucionarias, y en Febrero de mil ochocientos sesenta y dos, por fuerzas de la Confederación.

El Juez del Circuito de Santander dictó sentencia en ocho de Agosto de mil ochocientos sesenta y seis, y reconoció á favor de Estefanía Ordóñez la suma de mil ciento veinte pesos ($ 1,120), absolviendo al Gobierno del mayor valor de la demanda; y como la sentencia debía consultarse, elevóse el expediente á la Suprema Corte en tres de Agosto del mismo año.

La Corte mandó poner en conocimiento del demandante, que por no aparecer autorizada la presentación del poder por el respectivo Juez, no está legalmente representado; y para en caso de que la parte demandante ratificara lo actuado, ordenóse la práctica de algunas diligencias para mejor proveer. Ese auto tiene fecha veinticinco de Mayo de mil ochocientos sesenta y nueve.

El demandante no compareció siquiera ante la Corte, y el expediente, sin haberse hecho anotación ninguna en la Secretaría, apareció en la Oficina de la Comisión de suministros, el cinco de Julio de mil ochocientos noventa y dos, sin expresarse la razón del caso.

En papel que suplió la Secretaría de la Comisión expresada, por no haber suministrado la parte interesada el necesario para la actuación, á pesar de los requerimientos que por publicaciones se le hicieron, según dice la nota respectiva, se dió vista al Fiscal, se sustanció el asunto y se dictó la resolución número 3,886, en que se absolvió á la Nación de la demanda intentada, sin que compareciera la parte demandante ni aun para la notificación de dicha resolución. Ésta lleva fecha diez y seis de Julio de mil ochocienta noventa y dos.

En primero de Septiembre del mismo año, se presentó Leonor Medina ante dicha Comisión, acompañando á su memorial copia de parte del testamento de Estefanía Ordóñez, y como heredera de ésta, cediendo el crédito á Marcial O. Lemos, quien á su turno lo cedió á Julio Fernández M. en el mismo memorial, sin comprobar siquiera la defunción de la reclamante testadora.

La resolución negativa de la Comisión de suministros fué confirmada por el Ministerio del Tesoro en nueve de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos, y de esta última ha apelado para ante la Corte el cesionario Fernández M.

La Comisión expresada fundó su resolución en que las declaraciones, corrientes de la foja 5 vuelta á la 8, carecen del requisito legal de haber hecho constar en ellas los testigos la razón de su dicho; y también en el abandono que la parte interesada, Estefanía Ordóñez, hizo de la reclamación. La Corte encuentra razonable el argumento hecho por la Comisión, porque efectivamente los testigos Francisco Medina, Manuel Santos Vergara y Pedro Ramírez, únicos declarantes, no expresan la razón de su dicho en sus exposiciones, formalidad que exige el artículo 30 de la Ley de 22 de Mayo de 1866, vigente á la sazón; y porque el abandono por más de veinticinco años que hizo Estefanía Ordóñez de sus derechos consta en el proceso, abandono que duró hasta que Leonor Medina vino á promover de nuevo el asunto.

Además de las razones aducidas por la Comisión, la Corte encuentra que ni la nueva interesada en la reclamación (Leonor Medina), ni su cesionario Marcial O. Lemos, ni el de éste, Julio Fernández M., han presentado la partida de defunción de Estefanía Ordóñez, de cuyo testamento pretende hacer derivar la primera su derecho al pago del crédito demandado.

Por las anteriores consideraciones, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la resolución número 3,330 del Ministerio del Tesoro, de nueve de Noviembre citado, materia del recurso.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO. — JUAN EVANGELISTA TRUJILLO. — *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, cinco de Mayo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: El Fiscal del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cauca, entabló demanda ordinaria, el siete de Noviembre de mil ochocientos noventa, ante el mismo Tribunal, para que se condene á Rudesindo Ospina, vecino del Distrito municipal de Supía, á reponer el puente que, según contrato celebrado el diez y ocho de Octubre de 1888, con el Prefecto de la Provincia de Toro, se comprometió á construír sobre el río Supía, y á pagar los daños y perjuicios, ó á devolver, con dichos daños, la cantidad de mil seiscientos pesos ($ 1,600) que recibió como precio del puente, el cual fué destruído antes de dos años después de haber sido recibido.

El Fiscal apoyó la demanda en el artículo 2060 del Código Civil y presentó como hechos fundamentes de ella los siguientes:

"1.° Que Rudesindo Ospina se obligó á construír un puente sobre el río Supía completamente sólido, garantizando su conservación por diez años;

"2.° Que se comprometió igualmente á reparar los daños que por defecto de construcción ocurrieran durante dichos diez años, obligándose á concurrir á su inmediata reparación, y

"3.° Que cuando ocurrió el daño, natural y consiguiente á las avenidas y crecientes del río, lejos de ir á repararlo se obstinó en no concurrir siquiera al lugar del daño."

Ospina negó el derecho que se alegaba para demandarlo, y contestó así los hechos fundamentales:

Al 1.° Que es cierto se obligó á construír un puente sobre el río Supía, en el punto en que corta el camino público que une el Municipio de este nombre, con el de Riosucio, y de la clase y condiciones á que se refiere el contrato de diez y ocho de Octubre de 1888, con las modificaciones introducidas por el Gobernador del Departamento del Cauca, en la diligencia de aprobación de dicho contrato, puente que fué entregado al Prefecto de Toro, el catorce de Mayo de 1889, como aparece en la diligencia que al efecto se extendió.

Al 2.° Que es cierto que al tenor del mismo contrato y de las modificaciones apuntadas, se obligó á responder de los daños del puente provenientes de defectos en su construcción ó de mala calidad de los materiales empleados, daños que por esos motivos no resultaron.

Al 3.° Que es cierto que cuando ocurrió el daño causado por las grandes avenidas del río no concurrió á repararlo, porque no era de aquellos que estaba obligado á reparar.

El memorado contrato de diez y ocho de Octubre de mil ochocientos ochenta y ocho y sus modificaciones dicen así:

"Clemente Díaz, Prefecto provincial de Toro, debidamente autorizado, por una parte, y por la otra, Rudesindo Ospina, hemos celebrado un contrato, bajo las siguientes bases y estipulaciones:

"1.ª Rudesindo Ospina se compromete á construír un puente de madera, sobre estribos de cal y canto con cubierta de teja de barro, en el río Supía, y en el punto á donde dicho río corta el camino que pone en comunicación á este Distrito con aquél.

"La madera será de la mejor calidad, y toda la obra se entregará á satisfacción del Gobierno;

"2.ª El puente será entregado dentro del término de cuatro meses, contados desde la fecha en que sea aprobado el presente contrato;

"3.ª Díaz, en representación del Gobierno del Departamento, se compromete á hacer pagar á Ospina la suma de mil seiscientos pesos ($ 1,600), así: ochocientos pesos al principiar la obra; y el resto, ó sean ochocientos pesos, al terminarla y entregarla, y

"4.ª Rudesindo Ospina da por su fiador, mancomunadamente, al señor Carlos Goldsworthy, en seguridad del cumplimiento de las obligaciones que contrae, y se obliga á pagar la cantidad de mil pesos ($ 1,000), en caso de que no cumpla el presente contrato.

"En fe de lo cual firman el presente contrato por duplicado, en Riosucio, á diez y ocho de Octubre de mil ochocientos ochenta y ocho.

"*Clemente Díaz.—Rudesindo Ospina.—Carlos Goldsworthy.*—Testigo, *Pedro Juan Parra D.*—Testigo, *Lázaro Salas B.*

"Despacho de Hacienda.—Popayán, 3 de Noviembre de 1888.

"Apruébase el contrato que se acompaña, con las siguientes modificaciones: la de exigir completa solidez y garantías de duración en el puente que va construírse; la de que éste se levante de la misma ó semejante estructura y condiciones que acompañan al que existe sobre el río de Auna, en el camino de Aguadas á Abejorral; la de que se pinten las barandas y demas piezas de madera que queden á

la vista, de tal suerte que el color de que se usea sea permanente; y la de que se señale el mismo término que tenía el puente que va á reponerse para que el contratista responda de los daños que por motivo de construcción le resulten, y concurra á su reparación.

"*Miguel A. Paláu.*"

"Digo yo, Rudesindo Ospina, vecino del Distrito de Supía, y mayor de edad: que acepto en todas sus partes las modificaciones hechas por la Secretaría de Hacienda del Departamento al anterior contrato, comprometiéndome á responder por el término de diez años por los daños que por defecto de construcción le resulten, y concurriré á su inmediata reparación.

"En fe de lo cual firman la presente modificación, con su fiador y el señor Prefecto.

"*Benigno Gutiérrez.* — *Rudesindo Ospina.* — Testigo, *Juan Bautista Betancourt.*—Testigo, *Lorenzo M. Palomino.*

"Es copia tomada de su original.

"Riosucio, Junio 30 de 1890.

"El Secretario de la Prefectura,

"*Gonzalo Paláu.*"

Abierto á prueba el juicio, tanto el demandante como el demandado trajeron á los autos é hicieron practicar pruebas de instrumentos públicos, de peritos y de testigos. Y adelantado el pleito hasta ponerlo en estado de ser fallado, el Tribunal dictó el veintinueve de Octubre último sentencia absolutoria, que ha venido en apelación por haber interpuesto ese recurso el Ministerio Público.

Sustanciado el negocio en esta Superioridad por los trámites de segunda instancia, sin que las partes hayan pedido ni traído al expediente una prueba más, se procede á resolverlo mediante algunas consideraciones.

Del contrato de diez y ocho de Octubre de 1888, con las modificaciones del Secretario de Hacienda del Departamento, y de las demás piezas que figuran en el expediente, se viene en conocimiento de lo siguiente: que Ospina se obligó á hacer el puente sobre el río Supía; que se comprometió á responder de los daños que provinieran de defectos en su construcción ó de la mala calidad de los materiales que se emplearan en él; que en Junio de 1890, durante las fuertes avenidas del río sufrió algunos deterioros el estribo oriental, y que el Prefecto de la Provincia, á consecuencia de los daños, hizo quitar el puente.

La cuestión, pues, que hay que resolver es la de si el daño del puente provino de defectos en su construcción ó de la mala calidad de los materiales empleados en él, ó bien de causas distintas á éstas; porque si fué lo primero, es obvio que Ospina debe responder de esos daños, y si fué lo segundo, no tiene responsabilidad civil ninguna.

Basta la simple enunciación de esta cuestión para comprender que su resolución depende exclusivamente de la que enseñen á ese respecto la ciencia y arte que tratan de la construcción de puentes y calzadas; es decir, de lo que digan ingenieros prácticos que hayan estudiado la localidad donde se encontraba el puente, y hubieran visto su construcción y los materiales de que se componía, por ser un punto cuyo esclarecimiento depende de los principios de que trata la ingeniería.

Antes de establecerse este juicio, el Fiscal del Circuito de Toro pidió al Juez de ese Circuito que, con intervención de Ospina, se practicara una inspección ocular con peritos facultativos para que resolvieran cabalmente esta misma cuestión.

El Fiscal nombró de perito al ingeniero Ramón Hoyos, Ospina al doctor Carlos Gartner, y el Juez al ingeniero Enrique Villa.

Practicada la inspección ocular, los tres peritos declararon, de común acuerdo, que los daños ocurridos en el puente no habían provenido de defectos en su construcción ni de los materiales empleados en él, sino de la falta de cuidado en canalizar el río para reducir y obligar las aguas á pasar por enmedio de los estribos.

Esta pieza fué presentada por el Fiscal del Tribunal con su libelo de demanda, y el apoderado de Ospina la reprodujo dentro del término de prueba y pidió que fueran llamados los peritos á ratificarse en su exposición.

Citados Hoyos y Gartner, dijeron, bajo juramento, lo siguiente:

El primero (foja 23, cuaderno número 5.°):

"Si se hubiera tenido canalizado el río en un trayecto de doscientos metros ó menos, las avenidas de él, por fuertes que hubieran sido, no hubieran hecho daño ninguno en el referido puente y habría durado más de diez años."

Y luégo (foja 24 vuelta), agrega:

"Que ciertamente el puente fué construído con toda la solidez del caso; pero que si hubo una destrucción parcial de él, por el desquiciamento del estribo oriental, debe atribuírse únicamente á la no canalización del río en la extensión de metros antes indicada."

El segundo, Gartner (cuaderno 5.°, foja 27):

"Si se hubiera mantenido limpio el cauce del río Supía en la extensión necesaria para conservar su corriente por entre los dos estribos, el puente, en cuanto humanamente se puede prever, se habría conservado por diez y más años, como sucedió con el anterior que había allí mismo.

Y agrega (página 27 vuelta):

"Que en concepto del testigo y por lo que vió después de destruído el puente, el daño de éste provino de que se descuidó mantener limpio el cauce del río, con lo cual se colmó de arenas y piedras que hicieron desviar la corriente."

Estando los demás testigos de acuerdo en que era indispensable para la conservación del puente canalizar el río, para impedir que sus aguas en las grandes crecientes invadieran la barranca oriental, y no habiéndose obligado Ospina á estar practicando periódicamente ese trabajo, es forzoso concluír que el demandado no tiene por qué responder de los cargos que son materia de este pleito, mucho menos si se considera que los tres hechos fundamentales de la demanda no son generadores del derecho que se reclama y que el actor no hizo practicar la única prueba pertinente en el asunto, cual era la pericial.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con lo pedido por el señor Procurador, confirma la sentencia apelada.

Publíquese, notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE. — JESÚS CASAS ROJAS. — MANUEL E. CORRALES.—ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Mayo nueve de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: De un expediente por suministros y expropiaciones presentado á la Comisión del ramo por Francisco A. Magaña, heredero de Gregorio Bonilla, Francisco A. Arrechea y Rafael Jaramillo Ll., por cinco mil cuarenta y cinco pesos cuarenta centavos ($ 5,045-40) pidió este último que se desglosaran los documentos pertenecientes á sus propios créditos, para que con ellos se formara expediente aparte que siguiera su curso separado, á lo cual accedió la Comisión por auto de veintitrés de Mayo de mil ochocientos noventa y uno, folio 29 vuelto, y quedó, en consecuencia, formando este expediente una reclamación por valor de tres mil quinientos cincuenta pesos cuarenta centavos ($ 3,550-40), procedente de los valores suministrados y expropiados que expresa la relación jurada del folio 10, sustentada únicamente por una información de nudo hecho, compuesta de las declaraciones de cuatro testigos, recibidas ante el Juez municipal del Distrito del Zarzal y ratificadas ante el Juez del Circuito de Tuluá, que obran de folios 4 á 8 y 14 á 24 del expediente.

Las expropiaciones, consistentes en su mayor parte en novillos, vacas y bestias mulares y caballares, tuvieron lugar en la hacienda de "Las-Cañas," ubicada en jurisdicción del Distrito del Zarzal, Departamento del Cauca, por orden, se dice, de los Jefes municipales de Tuluá y Quindío, para el servicio del Gobierno durante la guerra de 1885; y sin embargo el interesado no presenta en apoyo de su reclamación una sola prueba oficial, ni un recibo ni una atestación ni un

certificado de aquellas autoridades que continuaron y han continuado subsistiendo, por haber triunfado en la guerra civil la causa del Gobierno. La misma relación jurada á que la ley da gran valor, carece completamente de él en este proceso, porque no está suscrito por el interesado sino por un apoderado, y es claro que semejante prueba sólo tiene el valor del juramento deferido cuando emana del que afirma la conciencia de los hechos personales que expresa.

"Todos los testigos" (los cuatro únicos de que consta la información), expone la Comisión en su fallo, "dicen que vieron ejecutar varios actos de expropiación, de donde se deduce que no los presenciaron todos, para poder fijar el número de objetos expropiados; ninguno de ellos llevó cuenta del número de semovientes expropiados en cada acto; ninguno determina con precisión el número de cada especie de animales que existían en la hacienda; el último testigo afirma que existían vacas que él estaba encargado de ordeñar, que fueron expropiadas treinta y seis, y sin embargo no quedó ninguna, sino solamente unos terneros; tampoco se encuentra en las expropiaciones el dato positivo de los animales que quedaron en la hacienda después de la revolución. Si de las declaraciones citadas pudiera deducirse que al reclamante se le hicieron efectivamente algunas expropiaciones, éstas han sido exageradas en la reclamación, hasta el punto de ser imposible encontrar el medio equitativo en qué fijarlas."

Con estos fundamentos la Comisión negó la reclamación, por su resolución número 4,055, de veintiséis de Septiembre de mil ochocientos noventa y dos, confirmada por la del Ministerio del Tesoro, número 3,350, de veintidós de Noviembre, que ha venido en apelación ante esta Superioridad.

Y con los mismos, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que no há lugar á revocar ni reformar la resolución apelada, por la cual se absuelve al Tesoro nacional de la reclamación que queda referida.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, Mayo cinco de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia inició sumario para averiguar la conducta del Juez del Circuito de Rionegro, Miguel Ramírez Zoluaga, á quien se sindicaba de embriaguez habitual y de manifiesta desidia en el cumplimiento de sus deberes.

Terminada la indagación, el Tribunal, por auto de treinta de Junio del año próximo pasado, reconoció que no había plena prueba de la embriaguez habitual, "porque aunque un número plural de testigos afirma que Ramírez Z., á la sazón que desempeñaba las funciones de Juez del Circuito de Rionegro, se presentó en público embriagado varias veces, esos testigos no han fijado las respectivas fechas en que tuvieron lugar esos actos. Que esta falta de precisión en los declarantes conduce á la duda, porque no se sabe si dos por lo menos de esos testigos, se refieren á un mismo caso de embriaguez, para que haya plena prueba de cada acto, quedando, además, el requisito de la habitualidad en la embriaguez sujeto á dudas invencibles por el trascurso del tiempo."

Respecto al de desidia habitual en el cumplimiento de los deberes de empleado, dice el Tribunal que está muy bien establecido en los autos, y efectivamente, con informes de varios empleados, copias de las partes conducentes de los procesos y otras muchas piezas, se acredita de una manera plena que Ramírez abandonó por más de un año una multitud de negocios criminales que se le pusieron al despacho por el Secretario, después de que los devolvió el Fiscal con la vista correspondiente, y en todo ese lapso de tiempo el Juez Ramírez no hizo en esos asuntos absolutamente nada con el fin de que se prosiguiera su curso.

Sustanciado el juicio con audiencia del acusado y recibidas las pruebas pedidas oportunamente por el defensor, el citado Tribunal profirió sentencia en veintisiete de Enero del año en curso, y en ella, considerando que el cargo de desidia habitual está plenamente comprobado, y no pudo ser desvanecido por la defensa, que hay circunstancias atenuantes, que Ramírez no desempeña yá el empleo de Juez, por lo cual se le aplica la pena de multa en subsidio de la de pérdida del empleo, de conformidad con los artículos 77, 86, 118, 123 y 550 del Código Penal, calificando la culpa en tercer grado, condenó al acusado á pagar al Tesoro de la República, por vía de multa, la suma de veinte pesos, y á no poder obtener empleo alguno público por seis años, á menos que antes haga constar su completa enmienda, y al pago de las costas procesales.

El defensor del procesado apeló de esta sentencia. Concedido el recurso para ante esta Suprema Corte, elevados á ella los autos y sustanciado con arreglo á la ley el recurso, ha llegado el caso de fallarlo.

Interpuesto y concedido el recurso de que se trata antes de que empezara á regir la Ley 100 del año próximo pasado, cuando no era consultable la sentencia, por no encontrarse en ninguno de los casos que señala el artículo 354 de la Ley 105 de 1890, la Corte debe limitarse á examinar la sentencia en cuanto es desfavorable al acusado, aunque conforme al artículo 67 de la Ley primeramente citada, hoy estaría sujeta á consulta esa sentencia, por tratarse de delito que requiere procedimiento ordinario.

El señor Procurador de la Nación y el defensor del procesado, piden que se revoque la sentencia apelada y se absuelva á Ramírez, porque el cargo que le resulta es el de haber demorado varios negocios criminales, definido en el artículo 536 del Código Penal, y no el de mala conducta que define el 550 del mismo Código, por cuya infracción se le ha condenado, de acuerdo con el auto de proceder.

Ramírez fué juzgado por la demora que se observó en varios negocios criminales que estaban á su cargo y condenado á pagar la multa de quinientos noventa pesos, á razón de diez pesos por cada negocio demorado.

Los asuntos demorados, ó más bien, abandonados por el mismo Juez, son distintos de aquéllos y en número mucho mayor, de modo que no puede decirse que ha sido yá juzgado por esa falta.

El artículo 536 del Código Penal vigente (339 del anterior) castiga á los Magistrados y Jueces que no despachen los negocios con la prontitud que prescriben las leyes; que no dicten las sentencias dentro de los términos que las mismas leyes asignan... ... ó que de cualquier modo demoren la conclusión de los procesos civiles ó criminales, con una multa por cada una de las faltas expresadas, y sin perjuicio de mayor pena si incurrieren en caso que la tengan señalada.

Y el 550 (413 del de Cundinamarca) señala como caso de mala conducta en un empleado público el de manejarse con conocida desidia habitual en el desempeño de su cargo, é impone á este delito la pena de pérdida del empleo é inhabilitación temporal para obtener otro alguno.

Entre esta disposición y la anterior hay diferencia, porque la primera castiga el simple hecho de demorar el despacho de alguno ó algunos negocios, y la segunda el de formar un hábito ó costumbre de demorar el despacho, ó sea la negligencia ó desidia habitual en el desempeño de las funciones de cargo de un empleado.

En el caso ocurrido en esta causa, la negligencia ó desidia habitual del Juez Ramírez, se deduce de que le ponía el Secretario á su estudio gran número de negocios criminales, y no dictaba en ellos providencia alguna y los dejó como archivados por mucho más de un año. De modo que no sólo hubo demora sino también que el Juez se habituó á no despachar y á mirar con una indiferencia altamente culpable el despacho de esos asuntos, en términos tales, que si el denuncio del Fiscal y la instrucción de este sumario, no vienen á poner término á ese intolerable estado de cosas, la mayor parte de esos negocios habría quedado indefinidamente abandonada, se habrían prescrito las penas que debían imponerse á los acusados ó sumariados, ó se habría hecho imposible la investigación, lo que

equivale á suprimir la administración de justicia en gran parte, dejando sin castigo los delitos. La ley no quiere, ni á la sociedad le conviene, que empleados que causan estos graves males continúen desempeñando los puestos que se les habían confiado. La simple demora en uno ó varios negocios es una falta menos grave, y cuando no constituye un hábito ó costumbre, se castiga con una simple multa.

Juzga la Corte que debe hacer alguna observación sobre la doctrina consagrada por el Tribunal de Antioquia acerca de la prueba necesaria para probar la mala conducta de un empleado por embriaguez habitual. Según esa doctrina, no basta que la costumbre ó hábito de un vicio notorio se acredite con los testimonios de las personas más notables é imparciales que hayan visto repetidos actos de los que constituyen la costumbre, sino que es necesario que cada acto se pruebe de nuevo con dos testigos, porque no se sabe si el hecho que presenció uno lo presenciaría también otro de los testigos.

En casos de esta especie en que el delito no lo constituye un solo hecho, sino el hábito ó la costumbre, semejante rigorismo en la apreciación de la prueba, conduciría á sancionar poco menos que la impunidad de uno de los delitos más graves en que puede incurrir un empleado, delito, por desgracia harto frecuente, á causa, sin duda, de esa misma impunidad. La interpretación racional y jurídica de las disposiciones relativas á la estimación de la prueba testimonial, en casos de esta clase, exige por la naturaleza misma de los hechos, que la costumbre se acredite con testigos que depongan acerca de ella; la repetición de los actos que la constituyen no es otra cosa que la razón del dicho del testigo, y debe aceptarse el testimonio como suficiente, mientras no se desvirtúe por algún medio legal.

En virtud de las anteriores consideraciones, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la sentencia apelada.

Déjese copia de ésta, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvanse los autos al Tribunal de su procedencia.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO. — *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Mayo cinco de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Por sentencia pronunciada por el Consejo de guerra ordinario de la primera División del Ejército nacional, estacionada en Bogotá, de fecha veinticinco de Febrero próximo pasado, previas todas las formalidades del juicio militar, fué condenado el soldado Ignacio Contreras, del *Batallón* 3.° *de Boyacá*, por el delito de homicidio involuntario, definido en el artículo 598 del Código Penal, perpetrado en la noche del siete de Diciembre de mil ochocientos noventa y dos, en la persona de Antonio Romero, soldado del mismo Cuerpo, previa calificación de la culpabilidad en tercer grado, á sufrir las siguientes penas: cuatro años de presidio, pérdida del empleo y de toda pensión y privación de los derechos políticos por el tiempo que dure la pena.

Consultada la sentencia con la Corte, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 1509 del Código Militar, y surtida la instancia, para pronunciar el fallo definitivo se observa: 1.° que el delito era de la competencia de la jurisdicción militar, por haberse cometido por un individuo del Ejército y dentro del cuartel; 2.° que no se ha incurrido en este proceso en ninguna de las informalidades sustanciales que vician el procedimiento, detalladas en el artículo 1536 del Código Militar. Estos dos puntos fueron decididos separadamente por la Corte y por unanimidad de votos, á propuesta del Presidente, como lo manda el artículo 1545 del mismo Código; 3.° que á la Corte le está prohibido por el artículo 413 de la Ley 105 de 1890 variar la calificación hecha por el Consejo de guerra respecto de la culpabilidad ó inocencia del acusado; pero que debe resolver como Tribunal de derecho en cuanto á la aplicación de la pena; 4.° que conforme al artículo 1565 del Código Militar las penas de reclusión y de presidio implican las de destitución del empleo y lanzamiento del servicio; 5.° que conforme al artículo 42 del Código Penal (Ley 19 de 1890), vigente cuando se cometió el delito, las mismas penas llevan consigo la privación perpetua, no temporal, de los derechos políticos, y 6.°, finalmente, que conforme al artículo 55 del mismo Código, el condenado á presidio debe ser conducido al Establecimiento respectivo, donde será obligado á trabajar en las obras que designe la autoridad política, nueve horas diarias por lo menos, salvo impedimento físico.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con lo pedido por el señor Procurador general, y por el defensor nombrado al reo en esta instancia, confirma la sentencia pronunciada en esta causa, por el Consejo de guerra ordinario, con fecha veinticinco de Febrero de mil ochocientos noventa y tres, contra Ignacio Contreras, soldado del *Batallón* 3.° *de Boyacá*, por el delito de homicidio involuntario, definido en el artículo 598 del Código Penal, con las siguientes aclaraciones: 1.ª que el reo debe ser lanzado del servicio y conducido á cumplir su condena en el Panóptico de Bogotá, y 2.ª que la privación de los derechos políticos en que el reo ha incurrido es perpetua.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el proceso al señor Comandante general de la primera División del Ejército para su cumplimiento.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, primero de Mayo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: El doctor Liborio D. Cantillo, en su calidad de apoderado sustituto de Angélica y Josefina Girón, por medio del memorial que antecede, presentado en tiempo oportuno, ha pedido á la Corte, que reconsidere el auto que ella dictó en siete de los corrientes, en el cual se abstuvo de resolver los recursos de apelación interpuestos contra los autos dictados por el Juez 2.° del Circuito de Panamá, en el juicio instaurado por la "Compañía explotadora de los bosques del "Alto Chilibre," para obtener el deslinde y amojonamiento de los terrenos conocidos con este nombre, respecto de los cuales Henry Garnier obtuvo permiso de la Gobernación del Departamento de Panamá para explotarlos, con sujeción á las disposición legales de la materia, considerados dichos terrenos como baldíos, y también los proferidos en el juicio contradictorio del deslinde incoado por Ildefonso Mecías Villanueva con poder especial de Angélica y Josefina Girón.

La solicitud de reconsideración del expresado auto de la Corte, se funda en las siguientes consideraciones:

Que siendo la Corte Suprema competente para conocer de las apelaciones iterpuestas contra los autos interlocutorios dictados en esta clase de juicios por el Juez de primera instancia ó por el Tribunal Superior respectivo, dicha Corte no debe abstenerse de declarar la nulidad de la actuación, en la parte que de ésta se ha solicitado.

Que de lo actuado se infiere que la cuantía del negocio excede de mil pesos, y que, por consiguiente, correspondía al Tribunal de Panamá conocer en primera instancia de ambos juicios, esto es, del de deslinde y del contradictorio del mismo deslinde.

Y por último, que disponiendo la Corte, como ha dispuesto, en el auto de fecha siete de los corrientes, que se devuelva el expediente á Panamá, para que por la autoridad judicial competente, se proceda con arreglo á derecho, es tanto como no resolver cosa alguna, lo cual dejaría los juicios sin poderse adelantar por ninguna autoridad.

Para resolver la aludida solicitud, la Corte tiene en cuenta:

Que los inconvenientes que se exponen nacen de no haberse cuidado de hacer constar la cuantía del juicio principal y del contradictorio, según el caso, y no siempre toca á los Tribunales allanar de cualquier modo tales inconvenientes.

Es cierto que la Corte es la llamada á revisar las provi-

dencias dictadas por el Juez del Circuito ó por el Tribunal en los juicios en que la Nación es parte ó tiene interés; pero de esto no se deduce que la Corte conozca en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos contra los autos que profiera un Juez de Circuito cuando la cuantía del interés exceda de mil pesos; ni contra los proferidos por el Tribunal Superior en los juicios en que la cuantía del interés no llegue á mil pesos; porque en uno y otro supuesto es claro que los mencionados autos, no serían dictados con jurisdicción; y para que la Corte proceda con jurisdicción en la segunda instancia, es menester que la haya habido en la primera.

No es exacto que de lo actuado conste de un modo cierto la cuantía de los asuntos que se examinan, pues ni en el juicio de deslinde y amojonamiento del terreno se estableció legalmente la cuantía, ni en el contradictorio, á pesar de lo que se asegura en el precedente memorial. Se tomó como cuantía indebidamente la que hizo constar en otro juicio relativo al mismo terreno, aunque con objeto distinto, y esta aserción la corrobora lo que en seguida se copia del escrito del doctor Eladio C. Gutiérrez, como apoderado de la Sociedad explotadora del "Alto Chilibre:"

"La Corte Suprema no es competente para conocer del juicio expresado sino en cuanto los terrenos baldíos, materia del deslinde, valgan más de mil pesos.

"Me parece, pues, que para que la Corte pudiera fallar el recurso interpuesto, sería necesario que en el expediente constara, por apreciación de las partes, ó de alguna otra manera, que efectivamente los terrenos valen más de dicha cantidad. No se encuentra tal prueba en el expediente; y el único fundamento que el señor Juez de Panamá tuvo para declararse incompetente, fué "que las maderas cortadas en el expresado terreno han sido apreciadas *en otro juicio* incoado en su despacho en sesenta mil pesos por lo menos."

La doctrina admitida siempre por los Tribunales y Juzgados, es ésta: que el Superior, cuando revoca, reforma, aprueba ó confirma una providencia del inferior, ó anula una parte de lo actuado está facultado para indicar al inferior el modo como debe proceder en lo sucesivo, si esto fuere preciso; indicación que se deriva de su competencia para hacerla. Mas en los casos en que el Superior se abstiene de conocer ó decidir de un recurso, por falta de jurisdicción, no le es lícito ordenar al inferior que ajuste su procedimiento á determinadas reglas, porque aunque Superior en el orden gerárquico del Poder Judicial, como la Corte lo es respecto de los Tribunales y de los Juzgados de Circuito, no lo es para determinar lo que el inferior debe hacer bajo su estricta responsabilidad y con arreglo á las leyes. Por este motivo, la Corte en el auto reclamado, apenas pudo decir que el inferior procediera con arreglo á derecho, tocando á éste saber qué es en cada caso lo que prescribe la ley.

Además, si la Corte, por las razones expuestas en el auto reclamado y en el presente, carece de jurisdicción para entrar en lo principal de los recursos interpuestos, con igual razón carece de ella para anular el todo ó parte de lo actuado en ambos juicios, pues el que decreta la nulidad de un proceso tiene jurisdicción para conocer.

De consiguiente, corresponde á las partes interesadas pedir al Juez respectivo lo que fuere legal para enderezar el curso de los juicios, y al Juez ó Tribunal respectivo decretar lo que fuere conforme á los procedimientos legales, sin que la Corte esté llamada á dar reglas de procedimiento, no habiendo conocido de lo principal.

Por lo expuesto, la Corte no accede á la revocación solicitada ni á decretar la nulidad de lo que se ha hecho en primera instancia.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS. M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.— Bogotá, Mayo cinco de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Fernando Robles, vecino del Distrito municipal de Aguadulce, Departamento de Panamá, con fecha veintiuno de Febrero de mil ochocientos ochenta y nueve, propuso ante el Juez del Circuito de Coclé, residente en Penonomé, demanda civil ordinaria con el objeto de que se excluyera de los inventarios practicados en el juicio de sucesión de Josefa Gumersinda Robles de Goitia, que indebidamente fué incluído en ellos, un potrero ó cerco sembrado de pasto del Pará, situado en la ribera izquierda del río Santa-María, nombrado el "Trapezoide," que dicho Robles lo considera de su propiedad.

Después del trascurso de más de tres meses, ó sea el cuatro de Junio del mismo año, el Juzgado dispuso que se corriese traslado de dicha demanda, y por el término de cinco días, á Pedro Goitia, natural de Parita y vecino de Aguadulce, en su doble carácter de cónyuge sobreviviente y de guardador de sus menores hijos legítimos, Florencio, Juan Evangelista y Dídimo Goitia, y á José María Goitia, en su calidad de heredero de su madre Josefa Gumersinda Robles de Goitia.

Es de advertirse que en el escrito de la demanda, Robles no determina á los individuos expresados como demandados, sino que el Juez entendió que con ellos debía seguirse el juicio, supuesto que lo demandado fué la exclusión de un inmueble de los inventarios de la sucesión.

Como en el territorio de la República sólo se encontraba Pedro Goitia, se dió á éste traslado de la demanda, como se había ordenado, quien la contestó contradiciendo el derecho y los hechos en que aquélla se fundaba.

Dispúsose también emplazar por el término legal, al heredero mayor de edad, José María Goitia; pero su padre constituyó fianza de rato para responder de que todo lo que hiciera éste en nombre de su hijo sería ratificado por él, y con esta previa formalidad contestó la demanda incoada por Robles.

Pero Pedro Goitia no sólo dió respuesta á la demanda en nombre suyo y en el de su referido hijo, sino que estableció contrademanda, ó sea demanda de reconvención contra Fernando Robles, así para reivindicar el inmueble llamado "El Trapezoide," como para obtener la indemnización de todo perjuicio consiguiente á la privación por seis años de sus respectivos frutos.

Ambas demandas siguieron su curso correspondiente, mas en tiempo oportuno Fernando Robles presentó al Juzgado el escrito por medio del cual corrigió su primitiva demanda, y se dió traslado de la corrección á la parte demandada.

Pedro Goitia, á nombre propio y de sus tres hijos menores y también de su hijo mayor de edad, en virtud del poder especial que éste le confirió y fué admitido en el juicio, contradijo todos los fundamentos en que se apoya la nueva demanda de Robles, como lo había hecho al contestar la demanda primitiva; y repitió asimismo la contrademanda ó demanda de reconvención, fundando el derecho con que de nuevo instauraba las dos acciones, á saber: la de dominio en "El Trapezoide," para que le sea restituído, y la derivativa de ese dominio, que consiste en poder exigir el importe de los frutos en nueve años, estimados en tres mil pesos ($ 3,000), en la escritura pública registrada, de veinticinco de Enero de mil ochocientos setenta y dos, número 8. (Fojas 1 á 3, cuaderno 2.°)

En el propio escrito de reconvención aparecen designados los linderos del inmueble que Goitia trata de reivindicar, así:

"Al Este, el predio denominado 'El Borcico,' que dice ser suyo mi demandante, señor Fernando Robles, poseído en 1871, por su finado hermano D. Sebastián Robles, á cuyo predio tiene cambiado el nombre sin previa escritura pública y mi demandante lo denomina 'La-Panela;' al Oeste, el predio denominado 'San-Juan,' que poseyó en 1871 el finado señor Valentín López, y que hoy es propio de su hermano señor José Manuel López; al Sur, el río de Santa María, teniendo á éste por cerca en una extensión de trescientos veintiocho metros; y al Norte, una ceja de monte de trescientos setenta y dos metros, que los separaba de los llamados pastaderos de los ganados de la hacienda del 'Corozo,' que era en 1871 de la finada señora Josefa Gumersinda Robles de Goitia, mi suegra y tía carnal, madre legítima de mi demandante, señor Fernando Robles; cuya ceja de monte, espaldar de mi dicho predio, hoy no existe."

Siguiendo el juicio su tramitación legal, el mismo demandante principal, Fernando Robles, presentó al Juez del conocimiento un escrito en el cual manifestó que desistía de su demanda; y apoyó su desistimiento en la circunstancia de haber advertido que el inmueble nombrado "El-Trapezoide" no estaba inscrito en los inventarios de la sucesión de la señora Gumersinda Robles de Goitia, pues lo que en ellos aparece inscrito es el derecho á demandar al señor José de la Rosa Fuentes el que haga buena la enajenación del terreno denominado "El-Trapezoide," ubicado en la margen oriental del río Santa María, á que se refiere la escritura número ocho, otorgada en la ciudad de Los-Santos, el veinticinco de Enero de 1872, según el título traslaticio de dominio y posesión registrada, que de esa propiedad rural se le dió en aquella fecha; ó la acción posesoria de ese bien inmueble, del que se despojó al cónyuge sobreviviente por el Alcalde de este Distrito, señor Teodoro Ponce, para dar la finca aludida al señor Fernando Robles.

Según lo que se acaba de exponer, el debate jurídico quedó reducido á la contrademanda ó demanda de reconvención, instaurada por Pedro Goitia, en nombre propio, en el de sus hijos menores y en el de José María Goitia, hijo mayor de edad, contra Robles, sobre reivindicación del globo de tierra conocido con el nombre de "El-Trapezoide," y para que el demandado satisfaga al actor el importe de los frutos producidos en nueve años.

Aducidas las pruebas pertinentes al derecho de las partes, en el término probatorio, y citadas éstas para sentencia, el Juzgado del conocimiento, con fecha doce de Marzo del año próximo pasado, pronunció la que era de su deber, y que puso fin á la primera instancia, cuya parte resolutiva es del tenor siguiente:

"Por todo lo que se deja expuesto, el infrascrito Juez del Circuito de Coclé, en el Departamento de Panamá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: que Pedro Goitia no es dueño del suelo en que estuvo edificado el predio rural llamado "El-Trapezoide;" que ese suelo pertenece á las tierras indultadas compradas por la Municipalidad de Natá para el uso de la comunidad; que la posesión que el Alcalde de Aguadulce diera á Robles para que cultivara el mentado terreno abandonado, como miembro de esa comunidad, es legal, y por lo mismo, Robles es poseedor eventual de buena fe, y que no está obligado á restituír el terreno "Trapezoide" y sus frutos, como lo solicita el señor Pedro Goitia en el juicio que motiva este fallo, y de cuyo cargo se le absuelve. No hay especial condenación de costas." (Foja 20, cuaderno 9.°)

Notificado el fallo preinserto, ambas partes interpusieron el recurso de apelación para ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Panamá, que les fué concedido en ambos efectos: Fernando Robles de la parte que no hace condenación especial al pago de costas, y Pedro Goitia de todas las partes de dicho fallo. En el Tribunal se sustanció la alzada por los trámites prescritos en la Ley 105 de 1890, sobre reformas á los procedimientos judiciales; y oídos los alegatos de las partes, y previa la correspondiente citación, pronunció la sentencia de segunda instancia, que en lo más conducente y esencial, dice así:

"Por lo expuesto, y considerando:

"Que lo demandado es el dominio sobre el área de terreno llamado "El-Trapezoide;"

"Que la escritura de veinticinco de Enero de mil ochocientos setenta y dos, no es título traslaticio de dominio del suelo, pues que carece de requisito esencial, como lo es es la forma ó manera como fuera adquirido por el vendedor;

"Que el título de indulto sí es título fehaciente y traslaticio de dominio, pues que el Rey de España tenía derecho en el terreno de la jurisdicción de Natá, vendido á su Cabildo para el uso común de los vecinos de esa jurisdicción;

"Que el actor Pedro Goitia, no ha probado el derecho que cree tener á que el demandado le pague el lucro cesante respecto de "El-Trapezoide;"

"Que ha demandado Pedro Goitia frutos derivativos del dominio del suelo, y no ha probado su derecho de propiedad sobre él;

"Que otro derecho que crea tener el actor debe ser demandado, y entonces podrá estimarse debidamente;

"Que sobre los terrenos llamados indultados hay leyes especiales de preferente aplicación;

Que la sentencia de primera instancia ha hecho acertada apreciación de las pruebas y aplica bien las leyes conducentes.

"Por tanto, el Tribunal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve confirmar la sentencia apelada, y se condena en costas á la parte apelante." (Foja 65 vuelta, cuaderno número 9.°)

El citado Pedro Goitia, dentro del término legal, interpuso contra la dicha sentencia de segunda instancia, el recurso de casación (foja 67) que le fué concedido por el Tribunal Superior para ante la Corte; y con noticia de las partes, se dispuso remitir el expediente, como fué remitido, para que se surta la casación.

Conforme al artículo 366 de la Ley 105 de 1890, vigente cuando se dictó el falló de segunda instancia, y se interpuso y concedió el aludido recurso, lo primero que debe examinar la Corte es si concurren las tres circunstancias que determina dicho artículo, una vez que la sentencia se ha proferido en juicio civil ordinario, á saber: 1.ª que la sentencia se funde ó deba fundarse en leyes que rijan ó hayan regido en toda la República á partir de la vigencia de la Ley 57 de 1887; ó que se funde ó deba fundarse en leyes de los extinguidos Estados, que sean idénticas en esencia á las nacionales que estén en vigor; 2.ª que la sentencia verse sobre hechos relativos al estado civil de las personas, ó sobre intereses particulares en que la cuantía del juicio sea ó exceda de tres mil pesos ($ 3,000), y 3.ª que haya contrariedad en las sentencias de primera y de segunda instancia en cuanto á la inteligencia ó aplicación de las leyes en que se apoyan, ó en cuanto á lo principal del pleito.

Y aunque según el artículo 49 de la Ley 100 de 1892, vigente desde el primero de Marzo del presente año, no es necesario que concurra la tercera circunstancia de las expresadas, esto es, que exista contrariedad entre las dos sentencias proferidas en primera y en segunda instancia, dicha disposición debe tenerse en cuenta en los recursos de casación que se interpongan y concedan en adelante, mas no cuando se trata de los interpuestos antes de la vigencia de la referida Ley 100 de 1892; de suerte que en este recurso ha de atenderse á las tres circunstancias de que habla el artículo 366 de la Ley 105.

Respecto de la primera circunstancia, es evidente que el fallo definitivo contra el cual se interpuso el recurso de casación, se fundó en leyes sustantivas que sólo habían regido en el extinguido Estado de Panamá, porque en ninguno de los otros Estados que compusieron la Unión Colombiana rigieron disposiciones relativas á terrenos llamados indultados, es decir, á tierras que pertenecieron desde la colonización de la América á la corona de España, y que en virtud de enajenación en pública subasta, vinieron á ser comunes á los habitantes de varios Distritos ó Municipios del Istmo; de manera que el dominio directo de esas tierras correspondió al Estado de Panamá, el cual se sustituyó á la República en todo lo concerniente á la legislación civil sustantiva, y sólo el usufructo de ellas podía corresponder á los particulares, mientras estuviesen en posesión eventual y no abandonasen las mismas tierras.

Aunque actualmente estén vigentes las disposiciones relativas al uso de los terrenos indultados, esas disposiciones no hacen parte de la legislación nacional sustantiva, sino que rigen en el Departamento de Panamá con el carácter de Ordenanzas.

De consiguiente, habiéndose fundado las sentencias de primera y de segunda instancia en leyes especiales, como lo eran el ordinal 2.° del artículo 668 del Código administrativo de Panamá, que principió á regir en aquel Estado el 1.° de Febrero de 1871 y en el artículo 3.° de la Ley 35 de 1874, sobre predios rústicos, es claro que la mencionada sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Panamá, de diez y ocho de Julio de mil ochocientos noventa y dos, que es objeto de este recurso, no está comprendida en el ordinal 1.° del citado artículo 366 de la Ley 105 de 1890.

Con efecto, la expresada disposición contenida en el numeral 2.° del Código Administrativo, dice lo siguiente:

"Artículo 668. Son bienes del Estado:

.....

"2.° Las tierras llamadas *indultadas*, que se adquirieron del Gobierno español por varios pueblos del Istmo, y que se extienden con pequeñas interpolaciones de propiedades particulares, desde Punta de Chame hasta Punta-Burica, y desde la cima de la cordillera á las playas del Pacífico."

Y el artículo 3.° de la referida Ley 35 de 1874 está redactado así:

"Artículo 3.° Mientras se legisla de una manera conveniente sobre posesión de las tierras indultadas, se respetará la posesión de los ocupantes, bien sea con ganados ó fincas agrícolas, hasta tanto sean abandonadas, en cuyo caso volverán á la comunidad."

Finalmente, como no hay contrariedad entre la sentencia que profirió el Juez del Circuito de Coclé y la que dictó el Tribunal Superior de Panamá en este pleito, también es claro que no concurre la tercera circunstancia de que habla el artículo 366 de la Ley 105 de 1890, puesto que la última declara que han sido bien interpretadas y aplicadas en el fallo por el Juez, las disposiciones pertinentes á la posesión y al usufructo de los terrenos indultados, y que por esto, lo confirma en todas sus partes.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con lo que previene el artículo 381 de la susodicha Ley 105 de 1890, se limita simplemente á negar, como niega, la admisión del recurso.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, tres de Mayo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: El Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cauca, por sentencia proferida el primero de Junio de 1892, condenó á Desiderio Martínez, casado, y á Vicenta Bedoya, soltera, por el delito de amancebamiento, á sufrir el primero la pena de seis meses de prisión en la cárcel de varones de la ciudad de Buga, y la segunda, cuatro meses de arresto en el mismo establecimiento en el departamento de mujeres.

Por sentencia del mismo Tribunal de seis de Agosto del citado año, fueron condenados César Concha y Ana Joaquina Leudo, solteros, también por el delito de amancebamiento, á sufrir el primero un año de confinamiento en la ciudad de Pereira, y la segunda, cuatro meses de arresto en la cárcel pública de Buga, ó en otro lugar de los señalados en el artículo 63 del Código Penal en vigor, según que la autoridad á quien tocare llevar á cabo la sentencia, así lo determinara.

La Leudo ocurrió al Prefecto de la Provincia de Buga, que lo era á la sazón el doctor José Inocencio Calero, solicitando que se le permitiese sufrir el arresto en su casa de habitación, por ser mujer honesta, gracia que el Prefecto le concedió, por resolución de veintisiete de Septiembre de 1892, previa la fianza de que habla el artículo 64 del Código Penal.

Vicenta Bedoya ocurrió á la Prefectura, solicitando la misma gracia, y el citado Prefecto Calero resolvió, en trece de Octubre del mismo año, no acceder á la petición de la Bedoya, teniendo para ello en consideración, que la sentencia por la cual fué condenada la última, no insinúa, como en el caso de la Leudo, que la Bedoya fuese mujer honesta, y que la autoridad política pudiera otorgarle la gracia ó favor de sufrir el arresto en su propia casa, y expresando otros motivos que no hay necesidad de reproducir.

Vicenta Bedoya ocurrió al Fiscal del Tribunal del Distrito Judicial del Cauca, quejándose de la injusticia que el Prefecto Calero había cometido al tratarla á ella con mayor severidad que á Ana Joaquina Leudo, á pesar de encontrarse ambas en idéntico caso.

El Fiscal acogió este denuncio, y, en consecuencia, acusó al Prefecto ante el Tribunal por el cargo de abuso de autoridad de que trata el capítulo 8.°, título 10, libro 2.° del Código Penal, no por haber negado á la Bedoya la gracia que demandaba, sino por haberla concedido á la Leudo, pues sostiene que una mujer condenada por el delito de amancebamiento público y escandaloso no puede ser calificada como mujer honesta.

El Tribunal del Cauca, después de practicar todas las diligencias que juzgó conducentes al esclarecimiento de los hechos materia del denuncio, elevó el sumario á esta Suprema Corte, por ser ésta competente para conocer en una sola instancia del asunto, porque el acusado, doctor Calero, se encuentra actualmente ejerciendo las funciones de Magistrado del mismo Tribunal, en calidad de suplente. (Acuerdo de esta Corte, número 350, de seis de Julio de 1889).

Para resolver, la Corte considera lo siguiente:

Conforme al artículo 65 del Código Penal, el arresto se sufrirá en la cárcel que determine la sentencia, ó bien en el lugar y en la forma en ella especificados, de donde se deduce que es al Juez ó Tribunal que pronuncia la sentencia á quien corresponde decidir si tal pena debe sufrirse en cárcel, cuartel, cuerpo de guardia ú otros establecimientos de los que determina el artículo 63 del mismo Código, y también si esa pena puede cumplirse en la misma casa del arrestado, por encontrarse éste en alguna de las condiciones personales que determina la parte final del mismo artículo.

En el caso de Vicenta Bedoya, la sentencia es terminante, puesto que ordena que la acusada sufra la pena de arresto en el departamento de mujeres de la cárcel pública de la ciudad de Buga. El Prefecto, encargado de la ejecución de la sentencia, no podía, pues, sin desvirtuarla, determinar que la arrestada cumpliera la pena fuera de la cárcel.

No sucede lo mismo en el caso de la Leudo, porque el Tribunal, después de observar que ésta, á pesar de estar convicta de un delito anterior, que no se aviene con la honestidad, cual es el de amancebamiento, insinúa que esta mujer había cambiado de costumbres; y que por su vida recogida y ejercicios de piedad, podría ser considerada actualmente como mujer honesta; y por eso en la parte resolutiva de la sentencia y en virtud de lo que dispone el artículo 63 del Código Penal yá citado, facultó á la autoridad que debía llevar á cabo la sentencia para que determinara si el arresto debía sufrirse en la cárcel pública, ó en otros lugares de los indicados en el artículo mencionado, entre los cuales está la casa de habitación de la mujer honesta.

Las consideraciones de la sentencia y la parte dispositiva sugieren la idea de que el Tribunal consideró que la Leudo, á pesar de su vida anterior, podía considerarse actualmente como mujer honesta y dejó al arbitrio de la autoridad política la calificación de esa condición.

Por lo mismo, no puede sostenerse que haya habido abuso de autoridad por parte del Prefecto que interpretó la sentencia, de acuerdo con la facultad que ella misma le concedía, en sentido benigno ó favorable al reo.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el dictamen del señor Procurador general de la Nación, sobresee en esta investigación, y declara no haber lugar á seguimiento de causa contra el ex-Prefecto de la Provincia de Buga, Magistrado actual del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cauca, José Inocencio Calero, por el delito de abuso de autoridad, de que fué acusado por el Fiscal de dicho Tribunal.

Déjese copia de esta determinación, insértese en la *Gaceta Judicial* y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO. *Gabriel Rosas*, Secretario.

IMPRENTA DE ANTONIO M. SILVESTRE.
Director, Tomás Galarza.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AÑO VIII | Bogotá, 21 de Junio de 1893. | NÚM. 399.

CONTENIDO.

Págs.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

La que niega á Teresa Otálvora el reconocimiento de un crédito procedente de expropiaciones y suministros. (Magistrado ponente, doctor Pombo) 281
La que niega una recompensa á Petrona Villota. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas) 281
La dictada en la reclamación instaurada ante la Comisión de suministros por los herederos del Presbítero Domingo Antonio Téllez y de José Calasancio Téllez. (Magistrado ponente, doctor Isaza). 282
La que absuelve á la Nación de la demanda propuesta por Rogerio Rosas y otros ante la Comisión de suministros, sobre pago de unas expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Corrales) 283
La que absuelve al Tesoro nacional de una demanda relativa á pago de expropiaciones de guerra, propuesta por Petrona Chacón. Magistrado ponente, doctor Galindo) 283
La que concede una recompensa á Marcelina Cañar. (Magistrado ponente, doctor Abraham Fernández de Soto) 284
La que concede una recompensa á María del Rosario Sánchez. (Magistrado sustanciador, doctor Corrales) 284
La que reconoce á José Ramírez un crédito contra la Nación, procedente de expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Botero Uribe) 285

NEGOCIOS CRIMINALES.

La confirmatoria de la sentencia pronunciada por el Tribunal del Distrito Judicial de Bolívar, en la causa seguida á Tomás Navarro, ex-Prefecto de la Provincia de Cartagena, por detención arbitraria. (Magistrado ponente, doctor Corrales) 285

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

El que confirma la resolución del Tribunal Superior de Cundinamarca sobre suspensión de la Ordenanza número 56 de la Asamblea de Cundinamarca. (Magistrado ponente, doctor Galindo)... 286
El revocatorio de un auto dictado por el Tribunal de Cundinamarca en el juicio seguido por Gonzalo Arroyo contra el Departamento de Cundinamarca, sobre pago de una suma de pesos. (Magistrado sustanciador, doctor Galindo) 286
El revocatorio de un auto dictado por el Administrador de Hacienda de Nóvita en la ejecución que éste sigue contra Víctor Manuel Calderón. (Magistrado ponente, doctor Botero Uribe) 287
El confirmatorio del mandamiento ejecutivo librado por el Administrador de la Aduana de Barranquilla contra López Olier & Compañía, por pesos. (Magistrado ponente, doctor Corrales) 287

NEGOCIOS CRIMINALES.

El que revoca el de sobreseimiento dictado en el sumario instruído contra el Juez 1.º del Circuito de Mompos, Manuel García Gordon, por prevaricato. (Magistrado ponente, doctor Pombo) 287
Abstiénese la Corte de revisar el auto dictado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tundama en el sumario instruído contra el Juez 3.º de ese Circuito, Manuel F. Pineda por abuso de autoridad. (Magistrado ponente, doctor Fernández de Soto) 288

NEGOCIOS VARIOS.

Acuerdo pronunciado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, en el cual se deplora la muerte del señor Magistrado doctor Manuel Jaime 288

GACETA JUDICIAL.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Mayo diez de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: La Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, por resolución número 1,901, de fecha veintiséis de Abril de mil ochocientos noventa, declaró prescrito el derecho de Teresa Otálvora y de su cesionario Teodomiro Calderón, para reclamar el reconocimiento de la cantidad de cuatro mil ochocientos veinte pesos ($ 4,820), valor de expropiaciones y suministros que tuvieron lugar durante la guerra de 1876 á 1877, y, en consecuencia, absolvió al Tesoro de la República del pago demandado.

Fundóse la Comisión en que la reclamación fué iniciada por Calderón el treinta de Junio de mil ochocientos ochenta y ocho, cuando el último término legal asignado al efecto por el artículo 1.º de la Ley 36 de dicho año quedó cerrado el 27 de Febrero anterior, concretándose á las reclamaciones provenientes de la guerra de 1885 la excepción contenida en el artículo 6.º de dicha ley.

El Ministerio del Tesoro aprobó la resolución de la Comisión por la que dictó el treinta de Abril del mismo año de 1890, bajo el número 1,287, y de esta última se interpuso apelación para ante la Corte por José María Calderón, como último cesionario del crédito.

Concedido el recurso y sustanciado debidamente, la Corte procede á resolverlo.

En cuanto al fundamento alegado por la Comisión nada puede observarse por esta Superioridad, porque la disposición legal en que está apoyado sólo permitió acoger reclamaciones que estuviesen pendientes á la fecha de la ley y que ya se hubiesen instaurado ante el Poder Judicial, ante autoridades administrativas ó ante la misma Comisión; de manera que las reclamaciones referentes á la guerra de 1876 y 1877 establecidas después del veintisiete (27) de Febrero de mil ochocientos ochenta y ocho (1888) quedaron sin derecho á ser acogidas. Y como Teodomiro Calderón introdujo la reclamación ante la Comisión el treinta (30) de Junio del citado año, no queda duda de que lo hizo fuera de tiempo. Además se observa que, si bien el memorial de Calderón se refiere á un juicio propuesto ante el Juez del Circuito de Tuluá, en el mes de Enero de mil ochocientos setenta y nueve (1879), tal juicio no aparece agregado á la reclamación y por consiguiente ésta se encuentra desnuda de todo comprobante, de tal modo que el expediente sólo lo constituye el memorial en que se introdujo.

Por tanto, la Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen del señor Fiscal especial, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la resolución apelada.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez de Mayo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: A la solicitud que, por medio de apoderado, ha elevado Petrona Villota, vecina de Pasto, á la Corte, para que se le conceda una recompensa militar, á causa de que su legítimo esposo Gregorio López, que prestó sus servicios al Gobierno, como soldado del Ejército del Cauca, en la guerra de 1884 y 1885, murió poco tiempo después de aquella campaña, no puede la Corte acceder, porque según la afirmación que

la demandante misma hace en su escrito del folio 2.° y que corroboran los testigos Angel Mideros y Miguel María Villota, en sus exposiciones de los folios 3 y 4, la muerte del expresado López fué ocasionada por enfermedad que le acometió en el servicio, y no en el campo de batalla ni á consecuencia de heridas recibidas en acción de guerra, ó en desempeño de alguna función del servicio á manos de enemigos armados del Gobierno, únicos casos en que, según el inciso 2.° del artículo 5.° de la Ley 84 de 1890, se puede cónceder recompensa á los deudos de los que mueren en defensa del Gobierno.

El inciso 6.° del propio artículo autoriza la concesión de recompensa por razón de enfermedades contraídas en el servicio de las armas, pero esto sólo favorece á los inválidos mismos como medio de subsistencia, pero no á sus deudos.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, declara que no há lugar á conceder lo que se solicita.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta* y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO. *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez y siete de Mayo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: En la reclamación instaurada á nombre de los herederos del Presbítero Domingo Antonio Téllez y de José Calasancio Téllez, por suministros y expropiaciones hechos en el Distrito de Vélez en la guerra de mil ochocientos sesenta á mil ochocientos sesenta y tres por autoridades revolucionarias, la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones dictó su fallo en veintiuno de Junio de mil ochocientos noventa, reconociendo lo siguiente:

A favor de los herederos del Presbítero Domingo Antonio Téllez, treinta y seis mil pesos ($ 36,000), precio de los animales expropiados y de un empréstito, para cubrir el cual se remataron varias fincas raíces;

A favor de los herederos ó representantes de Calasancio Téllez, nueve mil cuatrocientos pesos ($ 9,400).

La Nación fué absuelta del resto del cargo, que ascendía nada menos que á la suma de cuatrocientos mil seiscientos treinta pesos ($ 400,630) en que se estimaron los bienes expropiados y rematados y los frutos de ellos en veinticinco años.

El Ministerio del Tesoro, en dos de Junio de mil ochocientos noventa, reformó la resolución de la Comisión, en los siguientes términos:

Reconoció á favor de los herederos ó representantes de Domingo Téllez:

Por seiscientas bestias, á treinta y cinco pesos cada una, veintiún mil pesos	$	21,000
Por cuatrocientas reses, á diez y seis pesos cada una, seis mil cuatrocientos pesos		6,400
Por empréstitos, según las diligencias de remate de las fincas, seis mil pesos		6,000
A favor de los herederos de José Calasancio Téllez ó de sus representantes:		
Por doscientas cincuentas reses, á diez y seis pesos cada una, cuatro mil pesos	$ 4,000	
Por ciento treinta bestias, á treinta y cinco pesos cada una, cuatro mil quinientos cincuenta pesos	4,550	8,550
Suma todo lo reconocido, cuarenta y un mil novecientos cincuenta pesos	$	41,950

Notificada esta determinación al Fiscal de la Comisión, se conformó con ella, y Wenceslao Camacho, que figuraba en el juicio con poder de la mayor parte de los demandantes, aunque lo había sustituído, manifestó que renunciaba el derecho de reclamar en la parte relacionada con sus poderdantes; pero Antonio José Iregui, á quien Samuel Téllez sustituyó el poder de algunos interesados, poder que había sustituído antes al citado Camacho, apeló de lo resuelto por el Ministerio del Tesoro y lo mismo hizo Aquilino Matiz, que figuraba también como apoderado.

Otorgado el recurso, se elevaron los autos á esta Súprema Corte, en donde se declaró la existencia de una nulidad, por haber sido mal representados dos de los herederos que habían sido considerados en interdicción judicial sin previo decreto del Juez, expedido con las formalidades que prescribe la ley. Allanada que fué la nulidad, después de practicadas numerosas diligencias con el fin de poner en claro la personería de muchos de los demandantes, ha llegado el caso de decidir el recurso interpuesto.

Ante la Corte no han aducido las partes prueba alguna con el objeto de mejorar la que habían producido para acreditar la realidad y cuantía de las expropiaciones y empréstitos, y se han limitado á disputar el derecho á recibir la orden de pago que debe expedir el Ministerio del Tesoro por la cantidad que se reconozca. Esta controversia se ha suscitado después del fallo de la Comisión, con motivo de que Samuel Téllez, como apoderado de Matías, Francisco, Sixto, Isidora, Zenaida, Isabel y Josefa Téllez, había cedido á favor de Wenceslao Camacho y Abel Paúl, las dos terceras partes del valor de la presente reclamación, en pago de las gestiones que ha hecho el primero, y entre ambos hagan en lo sucesivo, pago de abogados, suministro de papel, estampillas, portes de correo, hasta obtener el pago de dicha reclamación, según documento privado de veinte de Enero de mil ochocientos ochenta y ocho, y de que Nepomuceno Téllez cedió también al mismo Camacho las dos terceras partes del valor de lo que le corresponda en la reclamación, como heredero de Domingo Antonio Téllez, en pago del honorario de Camacho, como apoderado del cedente.

Respecto á este punto, que ha ocasionado una larga disputa entre Camacho y Paúl por una parte, como cesionario de una cuota del crédito que se litiga, y por la otra, el nuevo apoderado de los mismos cedentes, la Corte considera que no le corresponde decidirla, porque la cuestión que se ventila versa sólo sobre los derechos que los herederos de Domingo Antonio y Calasancio Téllez tengan contra la Nación por razón de los empréstitos y suministros mencionados.

Las controversias ó disputas que se originen entre los mismos herederos ó sus cesionarios por razón de su cuota en la reclamación ó de la legitimidad ó nulidad de las cesiones hechas por algunos, no son del resorte de la Corte en estas circunstancias. El fallo sobre pretensiones de esta clase entre simples particulares corresponde á otra jurisdicción.

Cierto es que la ley reconoce que pueden entablar reclamaciones los cesionarios de los acreedores, pero aquí la reclamación no se ha hecho por cesionario sino por los interesados mismos por medio de apoderados, y la decisión sobre el honorario que el cliente debe pagar á su abogado ó agente, que es lo que en realidad se pretende que la Corte resuelva, es asunto totalmente extraño á la cuestión que la Corte debe resolver á virtud de la jurisdicción que le conceden leyes especiales en estos casos.

Por este motivo se abstiene de fallar sobre los derechos y obligaciones entre los herederos de Domingo Antonio y Calasancio Téllez, y Wenceslao Camacho y Abel Paúl sobre cumplimiento de los contratos que celebraron relativamente al pago de honorarios por agencias y otros servicios en la reclamación de que se trata.

En cuanto á lo principal, la Corte juzga equitativa la resolución del Ministerio del Tesoro respecto al aprecio de los semovientes y fincas rematadas á los Téllez en la guerra de mil ochocientos sesenta á mil ochocientos sesenta y tres.

Respecto á los frutos que pudieron producir los bienes expropiados ó rematados en el espacio de veinticinco años, la ley no autoriza para reconocer á cargo del Teroro estos perjuicios.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la resolución apelada.

Déjese copia de este fallo, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO,—ANÍBAL GALINDO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez y ocho de Mayo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: En Julio de mil ochocientos ochenta y ocho, Wenceslao Rengifo, con poder de Rogerio Rosas, Miguel Cataño y Anacleto Mejía, el primero vecino de Ibagué, y los dos últimos, de Riosucio, en el Departamento del Cauca, y también como cesionario de Serafín Hernández, ocurrió á la Comisión de suministros creada por la Ley 44 de 1886, con el objeto de que ésta reconociese á cargo del Tesoro nacional y á favor de sus representados, el valor de los suministros que hicieron y de las expropiaciones que sufrieron, respectivamente, en el curso de la guerra de 1885.

La Comisión expresada admitió la reclamación y la decidió en resolución de ocho de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos, absolviendo al Tesoro de todos los cargos que contra él se dedujeron.

Este fallo fué aprobado por el Ministerio del Tesoro en resolución de diez y seis de Diciembre del mismo año, con el número 3,387; y notificada que fué á las partes, se interpuso apelación para ante este Supremo Tribunal, por Wenceslao Rengifo, y otorgado el recurso, el expediente ha venido para que se surta la última instancia.

Observada la tramitación prescrita por la ley, es el caso de proceder á dictar el fallo correspondiente.

Los fundamentos en que descansa la resolución apelada, son éstos:

Según la relación jurada que corre á la foja 5, presentada al Secretario de Hacienda de la Gobernación del Cauca por C. Piedrahita, en doce de Septiembre de mil ochocientos ochenta y siete, y no por Rogerio Rosas, dueño del crédito, á éste le fueron expropiados los siguientes semovientes:

Diez y siete reses, avaluadas á nueve pesos cada una, ciento cincuenta y tres pesos.....	$ 153
Una yegua, avaluada en veintiséis pesos.....	26
Suma.....	$ 179

Este crédito de ciento setenta y nueve pesos ($ 179) no fué aceptado por la Comisión, porque los documentos presentados por el interesado, consistentes en un decreto que expidió el Alcalde de Ansermaviejo y un documento de compañía contraída por Carlos Villa para apastar ganados, no determinan con fijeza los expropiados de "La-Unión," ni tales documentos fueron cambiados ni podían cambiarse por certificación expedida por la Gobernación del Cauca.

Figura al folio 15 la relación jurada que C. Piedrahita presentó á la Gobernación del Cauca á nombre de Anacleto Mejía y Miguel Cataño, de los bienes que fueron expropiados y de los suministros hechos por sus poderdantes; y estas exacciones se verificaron así:

Cinco novillos expropiados por los revolucionarios, estimados en doscientos doce pesos.....	$ 212
Cien pesos valor de un empréstito que hizo Juan de D. Franco al Jefe municipal de Toro, para sostenimiento del Gobierno nacional, y cuyo crédito fué endosado á Anacleto Mejía y á Miguel Cataño.....	100
Suma.....	$ 312

La Comisión administrativa tampoco aceptó este crédito, porque la expropiación de los novillos sólo está acreditada con un recibo firmado por el Proveedor de los rebeldes, y aunque el interesado ocurrió á la prueba testimonial, no se ha dado razón por los testigos del valor de cada uno de los cinco novillos.

Respecto de los cien pesos ($ 100) del empréstito, éste se ha hecho constar en un salvo-conducto librado por el Jefe municipal de Toro, y al presentarse á la Gobernación para su cambio, la Secretaría de Hacienda estampó al reverso de dicho documento la siguiente nota:

"Despacho de Hacienda.—Popayán, 25 de Abril de 1888.

"Su Señoría el Gobernador ordenó se presentara recibo original expedido por la autoridad competente, que recibiera los cien pesos de que trata este salvo-conducto para poder verificar el cambio por certificación, como lo dispone el Decreto 102 de 17 de Febrero de 1886.

"El Oficial encargado,

"*F. J. Arboleda A.*"

Además, en orden á la prueba testimonial observa la Comisión referida que no se llenaron, al recibirse las declaraciones de los testigos, los requisitos que exige el artículo 2.° de la Ley 44 de 1886.

Cuanto al crédito de Serafín Hernández, proveniente del valor de dos mulas que le fueron tomadas en diez de Mayo de mil ochocientos ochenta y cinco, para el servicio de la columna en operaciones sobre Guarumo, según el recibo suscrito por José Joaquín Escallón, que figura como Intendente, la Comisión no juzgó bien establecida la prueba del hecho, no sólo porque la firma de Escallón no está autenticada, sino porque no se ha podido comprobar el carácter oficial de este empleado.

Parece que las dos mulas expresadas fueron estimadas en doscientos pesos ($ 200), á juzgar por los términos en que está redactado el recibo, sin embargo de que éste no expresa quiénes fueron los avaluadores.

Explicados por la Comisión los defectos de que adolecen los comprobantes presentados por la parte interesada, y habiendo ésta apelado de la resolución del Ministerio del Tesoro, que aprobó la de aquella Corporación, natural era esperar que ante la Corte se hubiese tratado de corregir las faltas advertidas y de complementar las pruebas; pero ninguna se exhibió á este respecto.

El Magistrado sustanciador, como de costumbre, dictó, sin embargo, en ocho de Marzo del corriente año, el auto que en lo principal es de este tenor:

"Como ninguna prueba se ha presentado por el interesado ante la Corte, debería resolverse en el fondo el recurso de apelación interpuesto. Empero, para mejor proveer, la Corte resuelve que el mismo interesado, haciendo un estudio prolijo de la resolución de la Comisión en que se hace mérito de las faltas cometidas antes de dictarla y hace las observaciones necesarias para considerar no legalmente establecidas las pruebas con las cuales ha debido acreditarse cada crédito, presentará á esta Superioridad en consonancia con dicha resolución los comprobantes é informaciones que prescriben las leyes de la materia."

Los pocos comprobantes que últimamente se han aducido no satisfacen las exigencias legales, de manera que no resultan acreditados los hechos que sirven de fundamento á esta reclamación.

La Corte, observa, además, que las relaciones juradas de los objetos expropiados por cada uno de los representados por Wenceslao Rengifo, fueron suscritas por apoderado, no por los respectivos dueños, y ya la Corte tiene resuelto en casos análogos, que el juramento relativo á esta clase de documentos es personal y no puede prestarse por delegación. Y como la relación es un comprobante indispensable, la falta de él es bastante para no dar por acreditada la reclamación.

Por los fundamentos expuestos y los que tuvo la Comisión para negar el reconocimiento demandado, la Corte, de acuerdo con el dictamen del señor Fiscal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la resolución apelada; quedando absuelto el Tesoro de los cargos deducidos contra él en la demanda.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez y ocho de Mayo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: La Corte, en diversos fallos, tiene yá aceptada como estrictamente jurídica y defensiva de los intereses na-

cionales, la inteligencia que la Comisión de suministros y el Ministerio del Tesoro han dado al artículo 1.° de la Ley 61 de 1887, en el sentido de que para que puedan ser admitidos como auténticos los expedientes de las reclamaciones por empréstitos y suministros de la guerra de 1860 á 1863, que estaban pendientes ante los Juzgados de primera instancia ó ante la Corte Suprema, es preciso que tales expedientes sean remitidos oficialmente á la Comisión por aquellos funcionarios, y no presentados sin autenticación de ninguna clase, sin saber de dónde proceden, por los mismos interesados. A este respecto ha dicho la Comisión y repetido la Corte, con sobra de razón, lo siguiente:

"Si hubiera de aceptarse la práctica de admitir como auténticos y corrientes los expedientes que, perteneciendo á archivos públicos, paran en poder de particulares sin razón legal para ello, se expondrían los funcionarios llamados á decidir ó fallar las reclamaciones que ellos compartan, á reconocer créditos que han podido ser juzgados ó cuya ilegalidad pudiera aparecer de manifiesto en los mismos autos cuya integridad sería imposible examinar."

En esta condición se encuentra la reclamación que José María Calderón introdujo con fecha veintiséis de Enero de mil ochocientos ochenta y nueve, presentando, sin autenticación de ninguna clase, el expediente de la demanda que el apoderado de Petrona Chacón propuso ante el Juzgado del Circuito de Popayán, con fecha veintitrés de Marzo de mil ochocientos sesenta y seis, para el reconocimiento y pago de la suma de tres mil novecientos sesenta y seis pesos, cuarenta centavos ($ 3,966-40), procedente de las expropiaciones que se le hicieron en la guerra de 1860 á 1863; con la circunstancia agravante de que habiendo la Comisión, por auto de diez y seis de Febrero de mil ochocientos ochenta y nueve, ordenado la autenticación del expediente, el reclamante dejó sin cumplimiento el auto.

Por tanto, la Comisión, por resolución de siete de Octubre de mil ochocientos noventa y dos, número 4,077, negó el reconocimiento del crédito, resolución que fué confirmada por la número 3,355 del Ministerio del Tesoro, de treinta de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos, que es la que ha venido en apelación á esta Superioridad.

Y con los mismos fundamentos, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma en todas sus partes la resolución apelada, absolviendo al Tesoro nacional del reconocimiento y pago del crédito á que ella se refiere.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO. —*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez y ocho de Mayo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Como apoderado de Marcelina Cañar, madre legítima de Juan Achinte, estableció Andrés Lara demanda contra el Tesoro nacional, para que se le conceda recompensa unitaria definitiva, en virtud del derecho que le confiere la Ley 84 de 1890, por haber muerto el expresado Achinte, en acción de guerra combatiendo contra enemigos del Gobierno legítimo, en la campaña de 1876 á 1877.

Para obtener la gracia solicitada, se han aducido los siguientes comprobantes:

La filiación del causante de la Cañar con la respectiva partida de nacimiento, expedida por el Cura Párroco del Tambo, en la Diócesis de Popayán, José A. Negret B., y el sepelio de José M. Achinte, esposo de Marcelina Cañar y padre de Juan Achinte;

La muerte de éste, ocurrida en el combate de "Piedra. rica," en la revolución de 1876 y 1877, en defensa del Gobierno legítimo de entonces, con una información de cuatro testigos, recibida con intervención de un Agente del Ministerio público, de la cual consta también que Achinte tenía al tiempo de su muerte el empleo militar de Teniente, en la fuerza que comandaba el Coronel Rufino Pérez, á la que pertenecían los declarantes; que la Cañar y su hijo vivieron en unión y buena armonía y que éste no dejó otros herederos.

De la misma información resulta que la demandante es muy pobre; que no dispone de renta alguna para su subsistencia y que observa buena conducta.

Además, consta de sendos certificados de los Ministros de Guerra y del Tesoro que no existe el despacho de Teniente de Juan Achinte y que en la lista de pensionados de la República no consta que se haya otorgado pensión ni recompensa por causa de la muerte del último.

Están, pues, plenamente justificados los hechos que informan la demanda, ó sean los exigidos por la Ley 84, sobre recompensas militares.

Por lo tanto, de acuerdo con lo pedido por el señor Procurador general de la Nación, la Corte Suprema, en consonancia con lo dispuesto en los artículos 1.°, 5.° (numeral 2.°), 6.° y 9.° de la ley citada, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que Marcelina Cañar, madre legítima del Teniente Juan Achinte, tiene derecho á recibir del Tesoro nacional la recompensa unitaria y definitiva de dos mil cuatrocientos pesos ($ 2,400), por haber muerto éste en el campo de batalla en defensa del Gobierno legítimo.

Notifíquese, cópiese, dése cuenta al Ministerio de Guerra, publíquese y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA. — BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO. *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veinte de Mayo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: María del Rosario Sánchez, por medio de apoderado, ha demandado la recompensa de setecientos cuatro pesos ($ 704) á que se cree con derecho conforme á la Ley 84 de 1890, por haber muerto su hermano Felipe Sánchez el día tres de Diciembre de mil ochocientos setenta y seis en que tuvo lugar el combate de la Cuchilla del Tambo, en defensa del Gobierno nacional.

De los documentos presentados por la parte interesada junto con la demanda, y después por disposición de la Corte en auto para mejor proveer, á fin de complementar las primeras pruebas, resultan acreditados los siguientes hechos:

1.° La muerte de Felipe Sánchez á manos de enemigos armados del Gobierno, en la función que tuvo lugar el tres de Diciembre de mil ochocientos setenta y seis, en la Cuchilla del Tambo;

2.° Que la muerte la recibió combatiendo en clase de soldado á órdenes de los Comandantes Vicente Guzmán y Leonidas Ayerve;

3.° Que Felipe Sánchez era hijo legítimo de Miguel Sanchez y Dolores Guevara, quienes yá han fallecido;

4.° Que la demandante María Rosario Sánchez es la única hermana legítima de Felipe, que sobrevive; y que siendo célibe, como hasta ahora se conserva, vivía con su citado hermano que la protegía;

5.° Que la misma demandante es sumamente pobre y observa buena conducta;

6.° Que Felipe Sánchez no fué casado ni dejó descendiente alguno, siendo, por consiguiente, la única parienta de su hermano Felipe, que tiene derecho á la recompensa militar por la defunción de éste.

Estos hechos están acreditados con plenitud respectivamente, con las declaraciones judiciales rendidas por Manuel Alfaro, Juan Pisso, Juan Ule, Eugenio Pisso y Agapito Rojas, vecino del Distrito de Páez (Departamento del Cauca), quienes han dado al rendirlas razón de sus dichos.

Varios de los referidos testigos han declarado sobre el matrimonio que contrajeron Miguel Sánchez y Dolores Guevara ante el Cura Párroco de la iglesia de Inzá, Presbítero Emigdio Gómez, así como sobre la defunción de éstos consortes; y su testimonio está corroborado con la certificación librada por el propio Cura, que corre á la foja 22, en los siguientes términos:

"Parroquia de Inzá.—Vicaría del Páez en la Diócesis de Popayán.

"Emigdio Gómez, en mi carácter de Párroco de Inzá y Vicario del Páez, á petición oral de interesados, certifico:

"Que no han sido halladas en el archivo eclesiástico de esta santa iglesia las actas de matrimonio de mis feligreses Miguel Sánchez y Dolores Guevara, ni sus defunciones;

"Que mi parroquiana María del Rosario Sánchez, hija legítima de este matrimonio, vive pobre, no ha contraído nupcias hasta esta fecha y observa buena moralidad.

"En mi supradicho carácter afirmo que estos hechos son evidentes, pues hace más de treinta años que administro esta Parroquia y Vicaría.

"Dado en Inzá á diez y seis de Enero de mil ochocientos noventa y tres.

"EMIGDIO GÓMEZ."

En los certificados del Ministerio del Tesoro consta que Miguel Sánchez, Dolores Guevara y María del Rosario Sánchez no han recibido pensión ni recompensa por consecuencia de la muerte de Felipe Sánchez.

Acreditados todos los hechos que sirven de fundamento á la presente reclamación, de conformidad con el dictamen del señor Procurador general de la Nación, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de ley, declara que María del Rosario Sánchez, hermana legítima de Felipe Sánchez, tiene derecho al goce de una recompensa unitaria definitiva, del Tesoro nacional, por la suma de setecientos cuatro pesos ($ 704) que es el importe del sueldo en cuatro años asignado al soldado; todo de conformidad con el inciso 2.°, artículo 1.°, inciso 2.°, artículo 5.° y artículo 9.° de la Ley 84 de 1890.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial*, pásese copia al Ministerio del Tesoro y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veinticuatro de Mayo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Demandó á la Nación José Ramírez por mil setecientos veinte pesos ($ 1,720), valor de las expropiaciones que le hizo el Gobierno en la guerra de 1876 á 1877, en su finca del "Alto del Zarzo," Distrito de Manizales, Departamento de Antioquia.

La relación que juró es del tenor siguiente:

Sesenta fanegas de maíz que le fueron tomadas en el mes de Febrero de 1877, para alimentación de las brigadas del Ejército del Sur, á razón de diez pesos ($ 10) cada una.....$	600
Una mula parda, valuada en ciento sesenta pesos.....	160
Un caballo amarillo.....	100
Dos caballos, uno negro y otro zaíno, á cien pesos cada uno.....	200
Una yegua parida, color amarillo.....	80
Una potranca mora-oscura.....	40
Dos potros sin amansar.....	40
Cincuenta marranos, á $ 10 cada uno.....	500
Suma.....$	1,720

La Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, por resolución número 3,920, de veintiocho de Julio de 1892, reconoció el crédito á favor de Ramírez; pero el Ministerio del Tesoro por resolución número 3,155, de diez y ocho de Agosto del mismo año, revocó aquélla, y absolvió á la Nación del cargo hecho por el solicitante. Éste ha apelado para ante la Corte Suprema de esta última providencia, y es el caso de decidir la instancia.

Fundóse el Ministerio del Tesoro para negar la reclamación de Ramírez, en que la relación presentada al Presidente del extinguido Estado de Antioquia (foja 2.ª) está firmada por Antonio María Ramírez, á nombre del reclamante, *por no saber saber firmar*, y en las páginas 1.ª, 5.ª, 10.ª y 13.ª aparece la firma de José Ramírez; de donde deduce, ó que Ramírez no sabía firmar, y entonces son falsos los documentos en que figura su firma, ó sí sabía firmar, y entonces es falsa la relación.

Mas como la Corte dictara auto para mejor proveer (foja 28 vuelta), con el fin de averiguar el motivo de la indicada contradicción ó inconsecuencia, se ha puesto en claro por la declaración de José Ramírez (foja 38), que él autorizó á su hijo Antonio María para que firmara y presentara la relación de las expropiaciones, no porque él no supiera firmar, sino porque no estaba presente; y que su hijo sufrió un error al asegurar que el reclamante no sabía firmar. Agrega otras razones que dan á entender que efectivamente su hijo Antonio María procedió de una manera inocente al decir que firmaba la relación, por no saber hacerlo su padre. De otro lado, estando como está comprobada la expropiación de los objetos arriba mencionados, de propiedad de José Ramírez, y habiendo éste ratificado posteriormente bajo juramento la expresada relación, en nada afecta la naturaleza de la demanda la contradicción ó inconsecuencia de que hace mérito el Ministerio del Tesoro.

Los testigos Rogerio Cardona, Valerio Tabares y Sotero López (fojas 14 á 17), libres de toda tacha, declaran contestes sobre todos y cada uno de los hechos materia de la expropiación, y dan razón de su dicho. El Juez y el Fiscal que recibieron los testimonios, certifican sobre la idoneidad de tales declarantes (foja 18).

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el señor Fiscal especial, revoca la resolución del Ministerio del Tesoro, número y fecha citados, y declara á favor de José Ramírez y á cargo de la Nación el crédito de mil setecientos veinte pesos ($ 1,720), valor de las expropiaciones que le hizo el Gobierno en la guerra de 1876 á 1877, en el Distrito de Manizales (Departamento de Antioquia).

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial*, dése cuenta al Ministerio respectivo y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Mayo doce de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: En virtud de acusación particular entablada por José A. Tons, vecino de Cartagena, contra el Prefecto de la Provincia del mismo nombre, en el Departamento de Bolívar, Tomás Navarro S., fué éste sometido á juicio de responsabilidad por los trámites extraordinarios por el delito de atentado contra los derechos individuales; y seguido el juicio con arreglo á la ley, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bolívar pronunció sentencia definitiva de primera instancia, en la cual, previa calificación del delito en tercer grado, condenó al ex-Prefecto Navarro S., á sufrir la pena de seis meses de suspensión del destino de Prefecto de esta Provincia y una multa de ocho pesos, más el pago de las costas procesales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 573 en relación con el inciso 3.° del artículo 572 del Código Penal; y como el encausado podía no estar ejerciendo yá el destino de Prefecto, ordenó se convirtiera la pena de suspensión del mismo empleo en una multa de diez pesos, de acuerdo con el artículo 77 del Código ya citado.

Notificada dicha sentencia, que fué proferida en siete de Noviembre del año próximo pasado, ninguna de las partes interpuso apelación contra ella, por lo que el Tribunal Superior dispuso que fuese consultada con este Supremo Tribunal, previa la sustanciación correspondiente, y citadas las partes, se remitió el proceso, al cual se le ha dado el curso que detalla el artículo 361 de la Ley 105 de 1890, sobre reformas á los procedimientos judiciales.

El hecho que constituye el delito que perpetró el ex-Prefecto Tomás Navarro S., por el cual lo ha acusado José

A. Tons, consistió en que habiendo este individuo cometido un escándalo en la Calle de Lozano, de la ciudad de Cartagena, la noche del diez y ocho de Julio de mil ochocientos noventa y dos, é irrespetado á un agente de policía en el acto en que éste reconvino á Tons por aquel desorden, el referido Prefecto Tomás Navarro S., le impuso la pena correccional de arresto por cinco días, en el Cuerpo de Guardia en que se hallaba establecida la misma policía, librando al efecto la boleta del caso, sin haber practicado por sí mismo, ni dispuesto que se practicaran por otro empleado del ramo, las diligencias prevenidas en el artículo 115 del Decreto expedido por la Gobernación del Departamento de Bolívar, que reglamenta las leyes vigentes sobre policía seccional, que dice lo que sigue:

"Artículo 115. El procedimiento que tiene por objeto la aplicación de una pena correccional será escrito, breve y sumario, y estará reducido:

"*a)* A extender una diligencia en que consten detalladamente la irregularidad de que se trata y el modo como se ha tenido noticia de ella y de su ejecutor;

"*b)* A hacer comparecer al presunto contraventor personalmente ó por apoderado constituído ante Juez, y á notificarle los cargos y las pruebas que contra él existan;

"*c)* A oír los descargos y á practicar las pruebas que presente y pida dicho contraventor, dentro de las setenta y dos horas siguientes á la notificación;

"*d)* A dictar, después de tenerse noticia cierta del hecho, y del responsable, el respectivo fallo, el cual será firmado por el Jefe de Policía y su Secretario, y en defecto de éste, por algún subalterno del Jefe previamente designado y juramentado para el efecto;

"*e)* A notificar personalmente el fallo, con advertencia de que si la multa no es abonada dentro de tercero día, será conmutada por arresto, á razón de un día por cada peso;

"*f)* A dictar, siempre que sea necesario, la correspondiente providencia conmutativa y á hacerla cumplir con las ritualidades del caso."

De suerte que, aunque los Prefectos están facultados para imponer pena á los contraventores de las disposiciones que reglan la Policía, tienen el deber de instruír previamente las diligencias indispensables que acrediten las faltas que se cometan y que son materia del procedimiento breve y sumario. El Tribunal, pues, en la sentencia que consulta no desconoció la facultad de que estaba investido el Prefecto acusado para actuar en el asunto é imponer el castigo que mereciera la falta, sino que dedujo la responsabilidad en que incurrió dicho empleado, por la omisión en el cumplimiento de su deber; omisión que consistió en no haber practicado antes de imponer el arreto á José Angel Tons, las diligencias de las cuales debía resultar comprobada la falta.

De lo expuesto se deduce rectamente que la sentencia que ha venido en consulta está arreglada al mérito del proceso que la Corte tiene á la vista, y á las disposiciones legales en que se apoya; y por tanto, de conformidad con el dictamen del señor Procurador general de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, la confirma, con la advertencia de que la multa debe enterarse en el Tesoro nacional.

Notifíquese, déjese copia, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el proceso.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO. *Gabriel Rosas*, Secretario.

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, Mayo cuatro de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: La Asamblea de Cundinamarca expidió la Ordenanza 56 de 16 de Agosto de 1892, por la cual fijó en los términos que á bien tuvo, y en que no hay para qué ocuparse, los límites del Municipio de Arbeláez. Sosteniendo que para fijar dichos límites la Ordenanza había cercenado territorio del Distrito de Pandi, sin que para la expedición de aquel acto se hubieran observado las formalidades requeridas por el Código Político y Municipal, varios vecinos de este Distrito ocurrieron al Tribunal Superior de Cundinamarca acusando su nulidad y pidiendo, en consecuencia, su suspensión.

El Tribunal, sin entrar en el examen de los hechos, se abstuvo de decretar tal suspensión. Fundóse en que pidiéndose la nulidad no porque la Ordenanza fuese lesiva de derechos civiles sino por ser violatoria de las leyes generales del orden político y municipal, caso en el cual correspondía al Congreso resolver en último término sobre su validez, y habiendo sido dicha Ordenanza expresamente aprobada por la Ley 113 de 1892, como así es la verdad, ley publicada en el número 9,039 del *Diario Oficial*, correspondiente al 9 de Enero próximo pasado, la validez de aquel acto había quedado irrevocablemente establecida cualesquiera que fueran, por otra parte, los vicios cometidos en su expedición. Aquella resolución debía venir, no obstante, en consulta á la Corte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del Código Político y Municipal tantas veces citado.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo en todo con el dictamen del señor Procurador general de la Nación, confirma en todas sus partes la resolución consultada.

Notifíquese, cópiese, publíquese y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez y siete de Mayo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Gonzalo Arroyo G., vecino del Municipio de Bogotá, se presentó con fecha veintitrés de Septiembre de 1892, ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, demandando al Gobierno del mismo Departamento el pago de la suma de mil novecientos cuatro pesos ($ 1,904), importe del avalúo judicial que se dió á una zona de terreno que afirma le fué expropiada y ocupada de hecho para la apertura del camino de Madrid (antiguo Serrezuela), á La-Mesa, por la Junta Administradora de dicho camino, á Cosme Rodríguez, de quien Arroyo se dice cesionario al tenor de la escritura pública número 825, de veintiséis de Septiembre de 1890, otorgada ante el Notario 3.° del Circuito de Bogotá. Subsidiariamente Arroyo demandó la restitución del terreno ocupado y no pagado. (Folios 26 á 28 del proceso).

Conferido traslado de la demanda al Fiscal del propio Tribunal, en representación de la entidad demandada, aquél, haciendo uso del artículo 463 del Código Judicial, propuso antes de contestarla la excepción dilatoria de ilegitimidad de la personería del actor, fundándola en la disposición del artículo 53 de la Ley 105 de 1890, hoy derogado por el artículo 87 de la Ley 100 de 1892, que decía:

"Artículo 53. Puede oponerse la excepción de ilegitimidad de la personería cuando el demandante no ha presentado la prueba que acredite la adquisición de las cosas ó derechos que reclama, en caso de que en concepto del demandado, pertenezcan á persona determinada, distinta del demandante, tales cosas ó derechos."

Admitida y sustanciada la excepción, el Tribunal la declaró probada por auto de veintidós de Febrero último, por estimarse que Arroyo no había acreditado que la faja de tierra cuyo valor demandaba pertenecía á la cedente.

Apelado el auto por la parte demandante, y concedido el recurso para ante esta Corte, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 4.° del artículo 43 del Código de Organización Judicial, y sustanciada la instancia, procede la Corte á fallarla.

Como muy bien dice el señor Procurador general en su dictamen de veintiuno de Abril último, con fundamentos jurídicos de elemental apreciación; saber si el lote ó zona de tierra cuyo valor se demanda, pertenece ó no al demandante por haber pertenecido ó no á sus cedentes, es punto fundamental de la demanda, es la base misma del derecho

que se reclama, punto que no puede ser ventilado en un simple artículo de excepciones dilatorias, sino que tiene que ser materia del debate principal para que sea decidido en la sentencia.

"La excepción de la ilegitimidad de la personería desig. nada en el citado artículo 53 de la Ley 105 de 1890, agrega el Procurador, no era propiamente una excepción dilatoria sino perentoria, puesto que se encaminaba á negar el derecho mismo del actor, ó á la prueba de ese derecho, es decir á la prueba de la personería sustantiva, la cual no necesita acreditarse al comenzar el pleito (artículo 466 del Código Judicial), y ésta ha sido, además, la doctrina de la Corte en repetidos casos análogos."

A lo cual agrega la Corte: que en su concepto los hechos que constituyen una excepción dilatoria, pertenecen esencialmente á la legislación adjetiva y derecho procedimental, el cual se aplica al proceso, como lo dispone el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 en el estado en que lo halla. Supóngase, por ejemplo, el caso de una excepción dilatoria por incompetencia de jurisdicción, fundada en la cuantía del pleito y cierta cuando se propuso. Si al tiempo de fallarla una nueva ley hubiera hecho yá competente al Juez por razón de esa misma cuantía, la excepción debería desecharse. Derogado, pues, como fué por el artículo 87 de la Ley 100 de 1892 el mencionado artículo 53, fundamento de la excepción propuesta y del auto que la declaró probada, es inútil adelantar más la discusión sobre la ilegalidad de aquella providencia.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca el auto apelado, declarando, como declara, que la excepción propuesta tiene el carácter de perentoria, y que por tanto la demanda debe ser contestada por el representante oficial de la entidad demandada, para decidir de los fundamentos de dicha excepción en la sentencia definitiva.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintidós de Mayo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: El Administrador de Hacienda nacional del Circuito de Nóvita, libró en ocho de Mayo de 1891, mandamiento ejecutivo contra Víctor Manuel Calderón, por ciento once pesos diez centavos ($ 111-10), alcance líquido á su cargo, como Administrador subalterno de correos del Distrito de aquel nombre, en las cuentas de tres meses del año de 1888, ramo de papel sellado; y habiendo apelado del auto respectivo el ejecutado Calderón, para ante la Corte Suprema, es llegado el caso de resolver sobre el recurso.

La base de la ejecución consiste en un oficio de diez y siete de Marzo de 1891, que el Administrador subalterno de correos de Cali dirigió al expresado Administrador de Hacienda nacional de Nóvita, en que le ordena que cobre de Víctor Manuel Calderon, los ciento once pesos diez centavos ($ 111-10), por el saldo que resultó á cargo de éste en las cuentas de Marzo y Abril y veintitrés días de Mayo de 1888, y que en caso de que no consigne la cantidad indicada, se sirva librar mandamiento ejecutivo. No acompañó el Administrador subalterno de correos de Cali comprobante alguno del saldo á que debía contraerse el mandamiento ejecutivo; pues no aparece ninguno de los documentos que exigen los artículos 1096, ordinal 1.° y 1010 del Código Judicial.

El oficio de que se ha hablado no presta mérito ejecutivo, como erróneamente lo dice el auto apelado.

Por tanto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el concepto del señor Procurador, se revoca el citado auto.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO. *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veinticuatro de Mayo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: El Administrador de la Aduana de Barranquilla, en uso de la jurisdicción coactiva que le compete, teniendo á la vista el reconocimiento liquidado á favor del Tesoro público y á cargo de López Olier & Compañía, por derechos de Aduana, correspondientes á mercancías importadas en Junio y Julio del año de mil ochocientos noventa y dos, y que, con el recargo del veinticinco por ciento (25 °/o), perteneciente á los Departamentos, ascendieron á la suma de dos mil novecientos cuarenta y nueve pesos noventa y cinco centavos ($ 2,949-95), y en virtud de lo dispuesto por el inciso 2.° del artículo 1096 del Código Judicial, libró, en dos de Septiembre último, mandamiento ejecutivo á favor de la Nación y contra López Olier & Compañía, por la expresada suma y los intereses de demora, á razón del uno por ciento mensual hasta el día del pago, y de conformidad con el artículo 168 del Código Fiscal, en relación con el artículo 5.° de la Ley 36 de 1886.

Notificado personalmente Arturo López Olier, como socio de la casa expresada, apeló del auto, recurso que se le concedió para ante esta Superioridad, competente para despacharlo, según el inciso 6.° del artículo 43 del Código de Organización Judicial.

Sustanciado legalmente el recurso, para decidirlo se observa que las citas legales hechas por el Administrador de la Aduana de Barranquilla para fundar su providencia, son pertinentes y correctas, ora acerca del mérito que para la ejecución presta el reconocimiento aludido, ora respecto del recargo adicional correspondiente á los Departamentos, y ya también respecto del interés de la demora.

Por tanto, la Corte, de acuerdo con el parecer del señor Procurador y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la providencia apelada.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA. — BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO. — *Gabriel Rosas*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez y siete de Mayo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: José de la Cruz Zambrano denunció ante el Alcalde de Mompox el delito de prevaricato atribuído por el denunciante al Juez 1.° del Circuito, Manuel García Gordón, y para demostrar la certidumbre de su denuncio solicitó las declaraciones de cuatro testigos vecinos del lugar.

El prevaricato se ha hecho consistir en que García Gordón se dirigió como Juez á Ignacio Palomino, y le dijo que aconsejara á su hermano Juan Agustín Rodríguez que se afirmara y ratificara en la declaración que había rendido en el sumario que el mismo Juez instruía al Alcalde Manuel Castillo, añadiendo que si no se afirmaba y ratificaba en ella lo declararía perjuro ante la ley.

Recibidas por el Alcalde las declaraciones indicadas por el denunciante, y acreditado el carácter oficial del Juez sindicado, se decretó por el Alcalde la detención de dicho Juez en la cárcel pública de la ciudad, para lo cual pidió al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bolívar que ordenase la suspensión. El Tribunal, por resolución de veintiuno de Abril del año próximo pasado, declaró que el referido Alcalde no tenía facultad para decretar la detención del sindicado y pidió el sumario original instruído contra García Gordón, supuesto que á él correspondía el conocimiento en primera instancia del juicio de responsabilidad iniciado contra el Juez del Circuito.

Recibido el sumario por el Tribunal, éste sin ampliarlo debidamente, siguiendo la opinión del respectivo Fiscal y fundándose en que no aparecía del sumario el afecto ó desafecto que hubiera sido el móvil del procedimiento del Juez, dictó el auto de sobreseimiento, de fecha veintiuno de Febrero último, que ha remitido en consulta á esta Superioridad.

Dado en vista el sumario al señor Procurador general de la Nación, este funcionario ha sido de concepto que ha de-

bido ampliarse en el sentido de averiguar si el Juez García Gordón obró realmente por desafecto á Castillo, supuesto que en el sumario instruído contra éste era en el que figuraba la declaración de Juan Agustín Rodríguez, que, según el denunciante Zambrano, quería hacer ratificar el Juez García Gordón, valiéndose de amenazas. Y como no figura en el presente sumario la declaración de Rodríguez y su posterior ratificación, y los testigos que declaran acerca de la enemistad entre García Gordón y Manuel del Castillo, dicen solamente haber oído decir al primero que le tenía odio al segundo, sin que expresen hecho alguno que acredite ese odio, la Corte Suprema, de acuerdo con lo que dispone el artículo 1628 del Código Judicial y con lo pedido por el señor Procurador, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca el auto de sobreseimiento consultado, y dispone que se amplíe el sumario con la práctica de las diligencias que indica dicho señor Procurador, para lo cual se devolverá el expediente al Tribunal de su origen.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Baltasar Botero Uribe.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Abraham Fernández de Soto.—Aníbal Galindo. *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Mayo veinte de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Cursaba en el Juzgado Superior del Distrito Judicial de Tundama, en el Departamento de Boyacá, un sumario iniciado para averiguar los responsables del delito de homicidio que se había perpetrado en la persona de Teófilo López, en Pueblo viejo del mismo Departamento, desde el año de 1876. Con el objeto de perfeccionar dicho sumario comisionó aquel Juzgado al del Circuito de Sugamuxi; y como hay allí más de un Juez de esta categoría, según la división territorial judicial, hubo de repartirse el asunto y correspondió en turno al Juez 3.°, Manuel F. Pineda, quien decretó la práctica de las diligencias que creyó pertinentes para llenar su cometido, tales como la detención de Cayetano Riveros, sindicado de ser autor del delito, el escrutinio ó registro de los papeles de éste y su incomunicación con los demás detenidos, mientras se le recibía declaración indagatoria.

La inmediata ejecución de estas providencias indujo á Riveros á dirigir al Juez Superior del Distrito expresado, el de Tundama, el memorial que obra al folio 2 de esta información, en el cual se queja contra los procedimientos del Juez Pineda y le formula los cargos de haber despachado la comisión aludida sin previo repartimiento, como lo previene la ley; haberlo mandado detener sin pedir y decretarse antes su separación de los empleos de Tesorero y Administrador de Hacienda municipal que ejercía en Santa Rosa el citado Riveros; haberlo tratado mal en palabras y privádole de los alimentos, y haber tomado, por último, de su guarniel, unas escrituras públicas y más de $ 25 en papel-moneda. Para investigar estos hechos, de suyo graves, se mandó pasar el memorial en referencia al Prefecto provincial de Sugamuxi, y en efecto este funcionario dió vado al asunto, hasta ponerlo en estado de que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tundama dispusiese de su mérito, como lo hizo, por medio del auto de seis de Abril próximo pasado, en el cual sobresee en favor del Juez acusado por los abusos que se le imputan en el ejercicio de sus funciones, y declara que el último de los cargos incriminados cae bajo la sanción del derecho común, y que no le corresponde conocer de él al Tribunal, por no ejercer á la sazón las funciones de Juez el mismo acusado.

Consideró el Tribunal que los hechos de que se trata están comprendidos en el Código Penal bajo la denominación genérica de "*abusos de autoridad*" y que aun cuando las penas que allí se asignan son incorporales, el procedimiento, según lo estatuído en el artículo 70 (?) de la Ley 100 de 1892, caso de hallarse comprobado alguno, sería el ordinario; y apoyado en este razonamiento, remite en consulta el auto á esta Superioridad.

Surtida aquí la tramitación propia de la instancia, y oído el dictamen del señor Procurador general, se procede á dictar la resolución que comporte la Legislación procesal en vigor.

Es indudable que la acusación versa sobre faltas que no tienen señalada por la ley pena corporal ó de privación ó de suspensión de los derechos políticos ó civiles, ó de inhabilitación para ejercer empleo; y siendo así, como lo es realmente, el juicio habría de seguirse, si hubiera razón plausible para ello, por los trámites extraordinarios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 360 de la Ley 105 de 1890, sobre reformas á los procedimientos judiciales.

Un breve análisis de tales faltas bastará para convencer de la exactitud de esta afirmación.

El no haber sometido el negocio á repartimiento implicaría, á lo más, la pretermisión de una formalidad legal, lo que haría responsable al autor, como lo cree el Ministerio Público, al tenor de dispuesto en el artículo 515 del Código Penal en referencia, esto es, á una multa y al resarcimiento de los perjuicios que se hubieren causado.

La detención de Riveros estaría comprendida entre los atentados contra los derechos individuales de que trata el Capítulo IX, Título X, Libro II del Código que se ha invocado, y sería castigada con una suspensión del destino de Juez por seis meses á dos años y con una multa de $ 8 á $ 40, penas distintas de aquellas que aparejan el procedimiento ordinario.

Los demás abusos no alcanzan tampoco á merecer ninguna de esas penas, siquiera se consideren como exceso de funciones, según puede verse en el artículo 551 de la obra supracitada.

Dedúcese, pues, de todo lo expuesto que conforme al artículo 67 de la Ley 100 de 1892, sobre reformas judiciales, no está sujeto á consulta el auto del Tribunal Superior del Distrito de Tundama.

Por lo tanto, la Corte, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador general, se abstiene de revisarlo y dispone que se devuelva el expediente á la Oficina de su origen para los fines legales.

Notifíquese, cópiese y publíquese en la *Gaceta Judicial*.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Baltasar Botero Uribe.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales. Abraham Fernández de Soto.—Aníbal Galindo.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

NEGOCIOS VARIOS.

ACUERDO NÚMERO 12,

POR EL CUAL SE HONRA LA MEMORIA DEL SEÑOR MAGISTRADO DOCTOR MANUEL JAIME.

En la ciudad de Tunja, á siete de Abril de mil ochocientos noventa y tres, reunido el Tribunal Superior, en Sala de Acuerdo, con asistencia de los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, acordó unánimemente lo siguiente:

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja,

CONSIDERANDO:

Que el 29 de Marzo último falleció el señor doctor Manuel Jaime;

Que el doctor Jaime ocupaba una plaza en este Tribunal, siendo al mismo tiempo Presidente de él, y

Que en sus decisiones judiciales dejó muestras de su probidad, de su ilustrado criterio jurídico y de su gran deseo de acertar en tan ingrata tarea,

ACUERDA:

1.° El Tribunal deplora la muerte del señor doctor Manuel Jaime y la estima como la pérdida de un distinguido jurisconsulto.

2.° Pásese copia de este Acuerdo á la Suprema Corte de Justicia, á los Tribunales Superiores y á la señora viuda del finado.

Publíquese en el periódico órgano del Poder Judicial.

El Vicepresidente, Miguel Motta.—Rafael Castañeda A.—Bernardo Arias.—*Joaquín Reyes*, Secretario.

Es copia.—Tunja, Abril trece de mil ochocientos noventa y tres.

El Secretario del Tribunal, *Joaquín Reyes.*

IMPRENTA DE ANTONIO M. SILVESTRE.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AÑO VIII | Bogotá, 25 de Junio de 1893. | NÚM. 400.

CONTENIDO.

Págs.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

La que reconoce á Dionisio Rodríguez un crédito procedente de suministros, empréstitos y expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Pombo)..... 289

La que reconoce á Clemente Vera un crédito, procedente de expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Corrales)..... 290

La que concede á Catalina Fernández una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas)..... 291

La que concede á Rosa Díaz una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Pombo..... 291

La que concede á José Cobo una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Botero Uribe)..... 292

La que concede una recompensa á Margarita Gómez y Teresa Ramírez. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas)..... 293

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Declárase inadmisible el recurso de casación interpuesto por Antonio Pómez en un juicio seguido contra Dámaso Rosendo Gaviria, sobre nulidad de unos documentos y reivindicación de una casa. (Magistrado ponente, doctor Corrales..... 293

NEGOCIOS CRIMINALES.

Sobreséese en las diligencias sumarias instruídas por denuncio de Lisandro A. Moreno contra los Magistrados del Tribunal del Tolima, doctores Arcadio Charri, Gabriel Vargas C. y Elisio Medina. (Magistrado ponente, doctor Corrales)..... 295

Declárase terminado un proceso criminal formado contra Lisandro Caicedo. (Magistrado ponente, doctor Fernández de Soto)..... 296

Revócase el auto de sobreseimiento dictado por el Tribunal de Cundinamarca en un sumario instruído contra Ramón Clavijo, por suplantación de unos nombres. (Magistrado ponente, doctor Botero Uribe)..... 296

GACETA JUDICIAL.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintidós de Mayo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Por solicitud dirigida por Francisco Groot, al señor Ministro de Guerra, con fecha diez y siete de Enero de 1887, se inició reclamación á nombre de Dionisio Rodríguez, vecino de Pereira, en el Departamento del Cauca, para que se reconociese á favor de dicho Rodríguez y á cargo del Tesoro nacional, el crédito de setecientos veintisiete pesos cuarenta centavos ($ 727-40), valor de suministros, empréstitos y expropiaciones efectuados durante la última guerra, según aparecía de los comprobantes acompañados á la solicitud. Y aunque entre éstos no figuró el poder con que Groot obrara á nombre de Rodríguez, la Comisión de suministros, admitió después, en seis de Junio de 1892, á José Joaquín Rico G., como apoderado, y dió curso á la reclamación, sin que se sepa cuándo pasó el expediente al conocimiento de aquella Corporación.

Oído el concepto favorable del Fiscal especial, la Comisión dictó la resolución de dos de Septiembre del año próximo pasado, número 4,006, en la cual sólo se estimó como documento digno de fe la certificación número 774 del Gobernador del Departamento del Cauca, expedida en cambio de algunos recibos, por la cantidad de doscientos veintitrés pesos ochenta centavos ($ 223-80), cantidad que se mandó pagar como crédito á cargo de la República, absolviendo á la Nación del pago de la mayor suma reclamada. Esta resolución obtuvo la aprobación del Ministerio del Tesoro por la que éste dictó bajo el número 3,384, de fecha diez y seis de Diciembre último.

El apoderado de Rodríguez interpuso apelación para ante la Corte de la resolución del Ministerio y en esa virtud esta Superioridad procede á resolver el recurso después de oír el concepto del señor Fiscal.

Como la parte de la reclamación no reconocida consiste en suministros y expropiaciones que tienen por apoyo la prueba testimonial, y la Comisión no estimó con mérito legal suficiente algunas de las declaraciones, aunque recibidas con las formalidades legales y certificada por el Agente del Ministerio Público la idoneidad de los declarantes, la Corte dictó auto para mejor proveer á fin de que los testigos José María y Jesús María Jaramillo expresasen con claridad cuáles de las expropiaciones hechas á Rodríguez fueron presenciadas por los declarantes.

José María Jaramillo afirmó que el reclamante suministró al Jefe municipal del Quindío, en diez y seis de Enero de 1885, tres bueyes aparejados que valían á cuarenta pesos cada uno..... $ 120 ...

Que el veinte del mismo mes le fué expropiada por el Jefe militar Bruno Gutiérrez, una yegua que valía $ 32, y un freno que valía 2-40..... 34-40

Que el primero de Marzo del mismo año, suministró Rodríguez, en Pereira, al Coronel Rafael Ocampo, diez reses que valían á veinte pesos cada una..... 200 ...

Que el tres del mismo mes le fué tomado á Rodríguez, por el militar Fortunato García, un revólvers que valía..... 30 ...

Que el quince de Julio siguiente suministró al Alcalde Mariano Rivera dos reses que valían á $ 18..... 36 ...

Que el mismo mes de Julio suministró también al mismo Alcalde, un buey que valía $ 32..... 32 ...

Que el quince de Agosto suministró del mismo modo una res, que valía por lo menos..... 20 ...

Que en el mismo mes suministró al citado Jefe municipal tres reses que valían, á $ 14 cada una... 42 ...

Que en Noviembre suministró al militar Carlos Durán, un novillo que valía $ 14..... 14 ...

Es de advertir que de estos suministros, el de dos reses, en $ 36, y otra en $ 20, dadas al Alcalde de Pereira, constan en recibos que fueron incluídos en la certificación del Gobernador del Cauca, de que se habló al principio.

El testigo Jesús María Jaramillo declara exactamente lo mismo que el anterior, y ambos han dicho en sus declaraciones rendidas el veinticuatro de Abril último, que saben y les constan los hechos sobre los cuales habían declarado, por haber presenciado tanto las expropiaciones como los suministros.

El testigo Aureliano Jaramillo (foja 34), confirma, porque los vió, los suministros hechos al Alcalde, y además, el que

hizo Rodríguez al Jefe municipal, de tres reses que valían á catorce pesos cada una.

Higinio Duque (foja 35 vuelta), asegura el suministro de los tres bueyes al Jefe municipal, porque el declarante tenía dichos bueyes, y confirma el valor de ellos, á $ 40 cada uno; que respecto de la expropiación de la yegua ayudó á cogerla y vió cuando tomaron el freno; que vió también que Rodríguez suministró voluntariamente al Alcalde Rivera un buey que valía $ 32, y al citado Jefe municipal, tres reses que valían á $ 14 cada una; que ayudó á arrear el novillo que suministró al militar Carlos Durán, y que valía catorce pesos.

Ernesto Arango (foja 37 vuelta), declara que ayudó á llevar las diez reses que Rodríguez suministró al Coronel Ocampo para el Ejército del Gobierno, que fueron sacadas de la finca de "Los-Planes," y que valían á veinte pesos cada una.

Pedro Barberi (foja 35), confirma la expropiación del revólvers, que dice también valdría treinta pesos.

Calixto Sánchez (foja 38 vuelta), afirma que ayudó también á conducir las diez reses suministradas por Rodríguez al Coronel Ocampo, que fueron sacadas de la finca de "Los-Planes," y que á su juicio valían veinte pesos cada una.

Como se ve, las dos primeras declaraciones de José María y Jesús María Jaramillo, están corroboradas con otras declaraciones, de donde resulta que cada expropiación ó suministro tiene en su apoyo por lo menos tres testigos contestes.

Por consiguiente, quedan bien justificadas las siguientes partidas, por expropiaciones y suministros:

Tres bueyes, á $ 40 cada uno	$ 120 ...
Una yegua, en $ 32	32 ...
Un freno, en $ 2-40	2-40
Diez reses, á $ 20 cada una	200 ...
Un revólvers, en $ 30	30 ...
Un buey, en $ 32	32 ...
Tres reses, á $ 14 cada una	42 ...
Un novillo, en $ 14	14 ...
Suma	472-40

Por lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo con el concepto del señor Fiscal de la Comisión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, reforma la resolución apelada y declara que la suma reconocida á favor de Rodríguez ó de su apoderado, debe ser aumentada con la cantidad de cuatrocientos setenta y dos pesos cuarenta centavos, de manera que la suma total á que se condena al Tesoro nacional asciende á seiscientos noventa y seis pesos veinte centavos ($ 696-20), absolviendo á la Nación de la mayor suma demandada.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO. *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintitrés de Mayo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: En virtud de recurso de apelación interpuesto por José María Calderón, como apoderado de Clemente Vera, vecino de Suratá, en el Departamento de Santander, contra la resolución dictada por el Ministerio del Tesoro, con el número 2,810, en diez de Mayo de mil ochocientos noventa y dos, por la cual fué aprobada la señalada con el número 3,530, que pronunció la Comisión de suministros negando el *reconomiento de ochocientos* diez y nueve pesos ($ 819) demandado, ha sido remitido este expediente relativo á la reclamación de Vera, para que se surta en la Corte la segunda instancia; y después de sustanciado dicho recurso por los trámites legales, ella procede á determinarlo mediante las siguientes consideraciones:

La falta casi absoluta de comprobantes de la reclamación sirvió de fundamento á la Comisión administrativa, para absolver al Tesoro nacional, no obstante que en oportunidad dispuso la misma Comisión que se librase despacho con el objeto de que se recibieran en el Circuito de Bucaramanga varias declaraciones, pues la parte interesada no suministró el papel sellado necesario para la actuación, y con este motivo el referido despacho fué devuelto por el Juez comisionado, sin haberlo diligenciado.

Estando yá el expediente en la Corte, se libraron dos despachos para mejor proveer, con el fin de que se recibiesen las declaraciones con las cuales debieron ser acreditados ante la Comisión los hechos fundamentales de la demanda; y en efecto, á virtud de esta determinación, resultan comprobados los que en adelante se indicarán:

El interesado juró ante el Juez 3.° del Circuito de Bucaramanga que la relación que prsentó en la Gobernación de Santander de los bienes que le fueron expropiados, era exacta en todas sus partes, documento que corre á la foja 1.° del expediente.

Para mayor claridad en esta exposición, se mencionarán los actos de suministros y expropiaciones, en el orden cronológico que se verificaron.

El dos de Octubre de mil ochocientos setenta y seis consignó en la Tesorería municipal de Suratá once pesos ($ 11) por empréstito, y esta consignación sólo está acreditada con el testimonio jurado de José Santos Herrera y Bautista Valencia, que no constituye la prueba completa ó plena, conforme á la Ley 44 de 1886.

El doce de Enero de 1877 le fueron expropiados á Vera, por la guerrilla comandada por José Rodríguez:

Una mula negra, de silla, estimada en	$ 200
Un caballo negro, de silla, estimado en	80
Un toro negro, hosco, en	40
Una silla de montar, aperada, en	50
Una escopeta, en	12
Un rejo de enlazar, en	4

Estas expropiaciones aparecen acreditadas con las declaraciones de los dos testigos arriba referidos, y con la de Cayetano Guerrero, aunque respecto del caballo de silla no están de acuerdo en el valor que tenía, porque Valencia lo estima en cincuenta pesos ($ 50), y Guerrero en setenta y dos ($ 72). Igual cosa sucedió relativamente á la escopeta y al rejo de enlazar, pues no se reúnen tres declaraciones contestes en cuanto á su estimación.

Consta justificado el suministro de dos escopetas, cada una de dos cañones, y de un machete, verificado á las autoridades legítimas para la organización de una fuerza en el Distrito de Suratá; las primeras estimadas en doce pesos ($ 12) cada escopeta, y en cuatro pesos ($ 4) el machete, pues aunque otros testigos presenciales del suministro estimaron estos efectos en mayor cantidad, la Corte opta, como respecto de las partidas precedentes, por el avalúo menor.

Con el testimonio de los individuos arriba referidos consta que un potrero ubicado en el Distrito de Suratá, de la propiedad del demandante, fué ocupado repetidas veces y alternativamente por las brigadas de los ejércitos del Gobierno y las de los revolucionarios, y el pasto que en dicho potrero había lo estimaron en cincuenta pesos ($ 50).

Las expropiaciones verificadas el quince de Enero, quince de Abril y cuatro de Junio de 1877, de un toro, una novilla, una yegua, un muleto, una ruana de paño, otra de pellón, otra de lana, y algunas otras cosas de uso personal; de seis azadones, seis hoces, siete arrobas de trigo y de una yegua parida, no aparecen debidamente comprobadas en el expediente, por no reunirse el número de tres testigos que den razón exacta y completa de las expropiaciones de estos bienes.

De todo lo expuesto resulta solamente acreditada la expropiación de

La mula negra de silla, estimada en	$ 200
Del caballo negro, estimado en	50
El toro negro, hosco, estimado en	40
La silla de montar, estimada en	40
De la escopeta, estimada en	11
Del rejo de enlazar	3

De las dos escopetas de dos cañones, estimadas cada una en $ 12	24
Del machete	4
Y del uso del potrero	50
Suma $	422

En atención á que hace más de un año que la Comisión pronunció el fallo apelado, y que en el largo trascurso de dicho tiempo el interesado no ha podido obtener la comprobación de las demás exacciones, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, reconoce á cargo del Tesoro nacional y á favor de Clemente Vera, vecino de Suratá, la suma de cuatrocientos veintidós pesos ($ 422), y absuelve al mismo Tesoro del resto del cargo deducido contra él en la presente reclamación. En estos términos queda reformada la sentencia apelada.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Baltasar Botero Uribe.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Abraham Fernández de Soto.—Aníbal Galindo. *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintitrés de Mayo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: A la demanda que por medio de apoderado ha elevado á la Corte Catalina Fernández, vecina de Timbío, en el Departamento del Cauca, para que como á hija legítima del Capitán Pedro Fernández, y por haber éste muerto en defensa del Gobierno y á causa de la herida que recibió en el combate de la Cuchilla del Tambo, el quince de Septiembre de 1876, ha acompañado los documentos que se expresan á continuación:

1.° Copia certificada por el Cura Párroco de Timbío de la partida de bautismo de la solicitante, con la cual se comprueba su filiación legítima, y de las partidas de defunción de sus padres, Pedro Fernández y Basilia Calibío, ocurrida la primera el veinte de Diciembre de 1876, y la segunda el veintinueve de Noviembre de 1881;

2.° Certificación del Gobernador del Cauca, con la cual se establece que en el archivo respectivo no existe ninguna constancia respecto del empleo militar que tuviera Pedro Fernández, ni de sus servicios prestados al Gobierno, ni de las heridas que recibiera en la Cuchilla del Tambo. El señor Ministro de Guerra, certifica igualmente que en su archivo no existe el despacho de Capitán dado á Pedro Fernández;

3.° Una información de cinco testigos mayores de toda excepción, con la cual se acredita plenamente el hecho de la muerte de Pedro Fernández, á causa de herida de lanza recibida en la Cuchilla del Tambo, en defensa del Gobierno, el de que en aquel combate peleó como Capitán del Batallón denominado *Invencible;* el de que dicho Capitán fué casado con Basilia Calibío, yá finada, y tuvo dos hijas, quienes vivieron en buena armonía y observando buena conducta con sus padres, y el de la suma pobreza de la solicitante;

4.° Otra información de testigos que afirman que del matrimonio de Fernández y Basilia Calibío no existen más hijos que Catalina y Francisco, de los cuales el último dirigió á la Corte, en treinta y uno de Octubre último, un memorial en que declara que no habiéndose podido comprobar su edad precisa, por no parecer en los libros parroquiales de Timbío su partida de bautismo, y siendo él persona hábil para proporcionarse mediante el trabajo la subsistencia, renuncia en favor de su hermana Catalina, todo derecho que pudiera tener á participar de la recompensa á que deba dar lugar la muerte de su padre. A esta prueba se agrega otra información de dos testigos que expresan su concepto, de que Francisco Fernández, á juzgar por su aspecto, puede tener de veintidós á veintitrés años de edad; y un certificado del Cura Párroco de Timbío sobre la no existencia de la partida de bautismo;

5.° El mismo Párroco de Timbío certifica, con fecha cuatro de Abril último, que Catalina Fernández no se ha casado; y el señor Ministro del Tesoro da fe de que no hay ninguna constancia en su Oficina de que se haya otorgado recompensa militar á Catalina y Francisco Fernández.

En vista de estos comprobantes, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con lo pedido por el señor Procurador, y de conformidad con los artículos 5.°, (inciso 2.°) y 9.° de la Ley 84 de 1890, declara que Catalina Fernández, como hija del Capitán Pedro Fernández, tiene derecho á una recompensa unitaria y definitiva de tres mil ciento veinte pesos ($ 3,120), que se le pagarán del Tesoro público.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta*, comuníquese á Su Señoría el Ministro del Tesoro y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Baltasar Botero Uribe.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Abraham Fernández de Soto.—Aníbal Galindo. *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Mayo veintisóis de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Rosa Díaz, viuda, vecina de Timbío, en el Departamento del Cauca, ha demandado, por medio de su apoderado Manuel D. Paz y V., la concesión de una recompensa militar por la muerte de su esposo José Antonio Astaiza, ocurrida en el combate de "Piedrarrica," en 1877 y en defensa del Gobierno legítimo de aquella época.

A virtud de autos para mejor proveer dictados por la Corte, se ha perfeccionado el expediente hasta el punto de aparecer plenamente justificados los siguientes hechos:

1.° El matrimonio católico contraído por José Antonio Astaiza con Rosa Díaz, el cual se ha acreditado con las declaraciones de testigos que presenciaron el acto, por no existir en los libros parroquiales de Timbío la respectiva partida de matrimonio, según lo certifica el Cura Párroco de ese lugar;

2.° La muerte de Astaiza aparece comprobada con las declaraciones de varios testigos, recibidas con las formalidades legales, los cuales aseguran haberla presenciado por haberse encontrado en el combate que tuvo lugar en "Piedrarrica," el diez y siete de Marzo de 1877, en el cual figuró Astaiza como Sargento primero de las fuerzas que defendían al Gobierno legítimo, y en el cual combate también recibió Astaiza el balazo que le causó la muerte;

3.° El hecho de no haberse encontrado en el archivo de la Gobernación del Cauca ningún documento que acredite la muerte y el empleo de José Antonio Astaiza, según lo certifica el Gobernador de ese Departamento;

4.° Que la reclamante Díaz es pobre, anciana, observa buena conducta, vivió siempre en armonía con su esposo y permanece viuda, está acreditado con otra información de testigos que conocen de cerca á la solicitante;

5.° Que ésta no ha recibido pensión ni recompesa del Tesoro público por la muerte de su marido, consta de la certificación expedida por el señor Ministro del ramo;

6.° Finalmente, que aunque del matrimonio de Astaiza y Rosa Díaz hubo dos hijas legítimas llamadas Carmen é Isidora, se ha comprobado satisfactoriamente que la primera murió hace unos cuatro años, y que la segunda se halla casada con José Astudillo.

Los hechos relacionados dan derecho exclusivo á la solicitante para obtener la recompensa que ha solicitado, de acuerdo con lo que disponen los artículos 1.°, 5.°, 6.° y 9.° de la Ley 84 de 1890; y en esa virtud, la Corte Suprema, de conformidad con el dictamen del señor Procurador general de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que Rosa Díaz tiene derecho á recibir del Tesoro nacional la recompensa unitaria y definitiva de novecientos doce pesos ($ 912) equivalente al sueldo de un Sargento primero en cuatro años, por la muerte de su esposo en el campo de batalla.

Notifíquese, cópiese, publíquese, en la *Gaceta Judicial*, dése cuenta al Ministerio del Tesoro y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Baltasar Botero Uribe.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Abraham Fernádez de Soto.—Aníbal Galindo.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Mayo veintisiete de de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: En once de Noviembre último dirigió desde Cali el Teniente-Coronel José Cobo, el siguiente memorial:

"Señores Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

"Yo, José Cobo, vecino de Cali y mayor de edad, respetuosamente os represento:

"Que hace siete años estoy padeciendo una grave enfermedad de reumatismo crónico, que me ha inhabilitado completamente para trabajar y ganar la subsistencia y ayudar á mis pobres padres en la dura tarea de sostener la numerosa familia que está á su cargo. Esta enfermedad la contraje en el servicio militar, en defensa del Gobierno legítimo, en la excepcional campaña de la Costa en 1885.

"Cuando entré á servir en el Ejército del Gobierno desde 1884, era yo un joven robusto, sano, lleno de vida y vigoroso: contaba apenas veintitrés años de edad y tenía delante de mí, como era natural, un horizonte de ilimitadas esperanzas. En 1885, después de terminada la campaña de "El Boquerón," hice parte de la expedición de la Costa, embarcándome en un desvencijado *pontón*, que estaba en la bahía de Buenaventura, y yendo á Panamá, de allí á la Costa Atlántica, y por el Magdalena á Bogotá, contribuyendo con mis débiles fuerzas á la pacificación de esas importantes comarcas, que casi íntegramente se encontraban en poder de los enemigos del Gobierno. Mi salud empezó á quebrantarse desde la Costa; pero mi robustez juvenil y mi entusiasmo en defensa del Gobierno me dieron resistencia bastante para terminar la campaña. Abrumado yá por las enfermedades en Bogotá, pude trasladarme con muchas dificultades al lado de mi familia, donde he permanecido enfermo durante *siete años* sin poder consagrarme á ninguna clase de trabajos, por mis dolencias permanentes. El reumatismo crónico ha atacado de tal manera mi organismo, que hace muy poco tiempo, con un pequeño esfuerzo, se me fracturó el brazo derecho; convenciéndome entonces de mi fatal desgracia, pues mis enfermedades aparecen como incurables. En la documentación que os presento en siete fojas útiles, encontraréis comprobados todos los hechos que os dejo narrados, y además, que mis servicios no fueron inútiles, puesto que fuí ascendido desde Subteniente hasta Teniente-Coronel, grado que me confirió el ilustre Jefe del Ejército, entonces General Rafael Reyes, y que más tarde confirmó el Supremo Gobierno, como consta en el despacho que, con fecha 8 de Octubre de 1885 y registrado con el número 3,490, me fué conferido en Bogotá por el Excelentísimo Señor Presidente de la República. Habiendo esperado tánto tiempo, sin poder alcanzar mi restablecimiento y continuando en la misma miserable situación, sin poder ganar siquiera la subsistencia, me he determinado á recurrir á la munificencia del Gobierno, pidiéndole, por vuestro autorizado conducto, que me otorguéis la recompensa que asigna la ley á sus leales servidores, por causa de enfermedades incurables, contraídas en el servicio de las armas (causal 6.ª, artículo 5.° de la Ley 84 de 1890)."

El Teniente-Coronel José Cobo ha probado de una manera superabundante, los hechos que narra en el memorial anterior con notable exactitud; ya con declaraciones de individuos que lo acompañaron en la larga campaña de Cali á Bogotá por Buenaventura, Panamá y Cartagena, entre ellas la del Jefe de Estado Mayor, León Solarte, la del doctor Gonzalo Córdoba, y la del General Lucio Velasco, ya con despachos expedidos por el General Rafael Reyes, Jefe de aquella campaña, y por el Excelentísimo Señor Presidente de la Unión, doctor Rafael Núñez, sobre su empleo militar, ya con certificación del Ministerio del Tesoro, de que no ha recibido pensión ni recompensa del Tesoro nacional, ya con la exposición de los peritos Evaristo García, Adolfo Tenorio y Enrique Garcés, el primero y el último que han tratado en su enfermedad al Teniente-Coronel Cobo, y los tres, que lo han reconocido el diez y seis de Febrero anterior, habiéndolo hallado con varias enfermedades graves que lo han puesto hasta deforme y reducídolo á inhabilidad perpetua y absoluta, y ya con testimonios idóneos de que no disfruta de renta que pase de $ 600 anuales y de que ha observado buena conducta.

La exposición de los peritos dice así:

"En la ciudad de Cali, á diez y seis de Febrero de mil ochocientos noventa y tres, el señor Prefecto de la Provincia, asociado con los señores facultativos que forman la Comisión de reconocimiento de inválidos, señores doctores Evaristo García, Adolfo Tenorio y Enrique Garcés, debidamente juramentados con el infrascrito Secretario, procedieron al examen del señor José Cobo, del cual resultó: que los Profesores, doctores García y Garcés, dieron su dictamen así: '1.° que les consta que el señor José Cobo hizo la campaña de la Costa en 1885 en defensa del Gobierno, empezando por el "Boquerón del Dagua," después en Panamá, habiendo hecho parte de la famosa expedición marítima en el viejo buque conocido con el nombre de *Pontón*, en Buenaventura; después siguió á Cartagena é hizo la campaña de la Costa Atlántica hasta llegar á Bogotá. Que saben todo esto porque, como vecinos de Cali, lo vieron salir en las fuerzas, y supieron de él durante la ausencia, siendo un joven muy robusto, sano y muy bien parecido, pues tendría en esa época unos veinticuatro años, poco más ó menos; 2.° apenas regresó del servicio militar á su ciudad natal, exigió nuestros cuidados como médicos y amigos. Su constitución física había sido minada profundamente por una enfermedad constitucional con deformación de los huesos, úlceras, deformación de las narices, dolores articulares y óseos, ectima de la cara y debilidad general. No ha sido posible curarle, á pesar de una larga medicación durante muchos años. El mal ha corroído los huesos, la osteitis varificante hace que al menor esfuerzo experimente fracturas en los huesos de los miembros, ha venido un lupus roedor de la cara, y lo ha imposibilitado físicamente para todo trabajo. Todo este desastre constitucional en un joven lozano, bien parecido y de lo más granado del Ejército en 1885, proviene de las fatales consecuencias de la vida de campaña en climas cálidos, pantanosos y malsanos, como son los de la Costa, en Colombia, y de las fatigas y demás faenas á que se exponen los jóvenes en las duras luchas de nuestras desgraciadas guerras civiles; 3.ª ya dejamos dicho que á pesar de una medicación bien dirigida por hábiles profesores durante muchos años, no se ha logrado combatir el mal, á tal punto, que es verdad que en 1891, al tirar con una piedra á una ave del corral, se fracturó el hueso húmero, fractura que también les tocó ver y tratar, como médicos de la casa del señor Cobo;' y el señor doctor Adolfo Tenorio expuso su concepto así: 'que encuentra que el señor Cobo está afectado profundamente de una diáctesis que le ha minado su constitución, atacando principalmente la piel y los huesos; que se le encuentran varias cicatrices en la cara que lo deforman en extremo, y otra en el hueso del húmero derecho, proveniente de una fractura con tendencia á la atrofia del mismo brazo; que lo conoció antes de la guerra de 1885, robusto y bien parecido; que sabe de manera cierta, que esta enfermedad la adquirió el joven Cobo en la campaña de la Costa atlántica en servicio del Gobierno; que por la relación que ha hecho, lo juzga incapacitado para entregarse á labores de escritorio ó de campo."

"El señor Prefecto no hizo observación ninguna, por hallarse conforme con lo expuesto por los señores Profesores, concluyéndose la presente diligencia, que firma con los facultativos, por ante mí el Secretario.

"*Rodolfo Sinisterra.—Enrique Garcés.—Adolfo Tenorio.—Evaristo García.*—El Secretario, *Francisco A. de la Cruz.*"

Por tanto, la Corte Suprema, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 5.° (inciso 6.°) y 16, segunda parte de la Ley 84 de 1890, y con el dictamen del señor Procurador, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que el Teniente-Coronel José Cobo es acreedor á una recompensa unitaria definitiva de tres mil doscientos pesos ($ 3,200), cantidad igual á las dos terceras partes de su sueldo en cuatro años, por haber sido inutilizado por completo por una enfermedad incurable contraída en la guerra de 1885 y en defensa del Gobierno nacional.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial*, dése cuenta al Ministerio del Tesoro y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Baltasar Bo:

TERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, veintisiete de Mayo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: A nombre de Margarita Gómez y Teresa Ramírez, vecinas del Santuario, en el Departamento de Antioquia, y á virtud de poder que para ello le confirieron, el doctor Andrés Lara pide á la Corte para sus poderdantes la recompensa militar á que tienen derecho, por haber Roque Ramírez, esposo de la primera y padre de la segunda, muerto en el campo de batalla el día catorce de Noviembre de mil ochocientos sesenta y uno, en defensa del Gobierno de la Confederación Granadina.

Adjuntos á la demanda, aparecen los siguientes comprobantes:

1.° Copia certificada por el Cura párroco del Santuario de dos partidas, extendidas de sus libros parroquiales, á saber: la del matrimonio que en veintinueve de Enero de mil ochocientos cuarenta y cinco contrajo Roque Ramírez con Margarita Gómez; y la del bautismo que á veintisiete de Agosto de mil ochocientos cincuenta y cuatro, se administró á una niña de tres días de nacida, á quien se puso el nombre de Teresa Josefa María, hija legítima de los dos esposos antes mencionados;

2.° Una información de tres testigos mayores de toda excepción, que ante el Juez y el Fiscal del Circuito de Marinilla, dijeron bajo juramento que les constaba, porque lo vieron, como compañeros de armas que fueron de Roque Ramírez, que éste murió herido de bala en el campo de batalla, en la que en mil ochocientos sesenta y uno tuvo lugar á inmediaciones de Santo Domingo contra las fuerzas enemigas del Gobierno de la Confederación Granadina, que invadieron el territorio de Antioquia á órdenes de Mendoza; que les consta igualmente que la viuda Margarita Gómez y la hija Teresa de dicho Ramírez, vivieron en completa armonía con éste, observaron y han observado después muy buena conducta, y que viven en estado de suma pobreza, sin tener renta de ninguna especie;

3.° Dos certificaciones del Cura párroco del Santuario, con las cuales se acredita, que de las demandantes la primera se conserva viuda y la segunda soltera;

4.° Declaraciones juradas en que Segundo Villegas y Mariano Salazar afirman, que los hijos de Roque Ramírez y Margarita Gómez fueron José María, Nazario, Daniel, Ana Joaquina, Roque y Teresa. De éstos, Teresa es una de las demandantes; Ana Joaquina se halla casada con Antonio Ramírez, según aparece comprobado por medio de la respectiva partida de matrimonio, que en copia autorizada expidió el Cura párroco del Santuario; Nazario, Daniel y Roque, junto con la misma Ana Joaquina, elevaron á la Corte un memorial en que manifiestan que siendo los tres varones personas no incapacitadas para proporcionarse la subsistencia mediante el trabajo, y siendo casada la mujer, ó sea Ana Joaquina, se consideran sin derecho á participar de la recompensa solicitada por su madre y su hermana. Igual manifestación hace en memorial de treinta de Enero último José María Ramírez. Con todo lo cual queda establecido, que los únicos deudos de Roque Ramírez que puedan pretender derecho á la expresada recompensa, son las dos indicadas demandantes, y

5.° El señor Ministro del Tesoro certifica que dichas dos demandantes no han recibido recompensa alguna del Tesoro público.

La Corte, considerando que estos comprobantes concuerdan con los requisitos que señala la ley para otorgar recompensas militares, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, declara que Margarita Gómez y Teresa Ramírez, la primera como viuda y la segunda como hija del soldado Roque Ramírez, tienen derecho á una recompensa unitaria definitiva de setecientos cuatro pesos ($ 704) que se les pagarán del Tesoro público nacional, y se dividirán por mitad entre las dos agraciadas (artículos 1.°, 5.° (inciso 2.°), 6.° y 9.° de la Ley 84 de 1890.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial*, comuníquese á Su Señoría el Ministro del Tesoro y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO. — *Gabriel Rosas*, Secretario.

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, veinticinco de Mayo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: En el Juzgado 2.° del Circuito de Bogotá, y con fecha 24 de Junio de 1890, Antonio Pómez, en su propio nombre y como apoderado de Carmen Pómez de Miranda, y también Daniel é Isabel Pómez, por sí mismos, instauraron demanda civil ordinaria contra Dámaso Rosendo Gaviria y Eugenio Gaviria, para que con citación y audiencia de éstos, se declare en sentencia definitiva:

"Primero. Que son nulos y de ningún valor ni efecto, el remate que ante el Juzgado 3.° del Circuito de Bogotá, hizo el señor Francisco Gaviria, por la cantidad de $ 4,101, el 13 de Octubre de 1871, de una casa de tapia y teja, situada en la antigua Carrera de Cartagena de esta ciudad, calle 1.ª, números 9 y 11, con una tienda y trastienda accesorias, y deslindada así: por el frente, calle de por medio, con el edificio del Capitolio; por el costado derecho, es decir, Sur y Occidente, con casa y solares del rematador, señor Francisco Gaviria, y por la otra parte ó costado, con casa y solar del señor Enrique Grice y unas señoras Céspedes, y una tienda que fué de las mismas señoras Céspedes; lo mismo que la venta que, con posterioridad á ese remate, le hizo al señor Francisco Gaviria el señor José María Pontón, respecto de la misma finca, por escritura pública número 1,641, de fecha 23 de Octubre de 1871, ante el Notario 2.° de Bogotá;

"Segundo. Que es igualmente nula y de ningún valor ni efecto la venta que de la dicha casa hizo el señor Francisco Gaviria á los señores Dámaso Rosendo Gaviria y Eugenio Gaviria, por medio de la escritura pública número 1,012, otorgada ante el Notario 3.° del Círculo de Bogotá, á 17 de Junio de 1882;

"Tercero. Que la casa en referencia pertenece á la sucesión indivisa del señor Francisco Pómez, representada hoy por sus herederos, y debe ser restituída á la dicha sucesión, junto con los frutos naturales y civiles que ella produzca, desde la notificación de esta demanda hasta el día de la restitución ó entrega, pues que para tal efecto se considera á los demandados como poseedores de buena fe;

"Cuarto. Que la restitución, ó entrega de la finca con su tienda y trastienda accesorias, deben hacerla los demandados á los herederos y representantes de la sucesión de Francisco Pómez, dentro del término que señala el artículo 870 del Código Judicial."

El derecho, causa ó razón para establecer la demanda, lo fundan los demandantes en las disposiciones de los artículos 6.°, inciso 1.°, 757, 952, 964, inciso 3.°, 1741, 1746 y 1748 del Código Civil de Cundinamarca, y demás disposiciones concordantes de este Código y de las leyes que lo adicionaron y reformaron. Les sirvieron de fundamento los hechos de que pasa á hacerse mérito:

"1.° Que los demandantes por sí, y la representada por medio de apoderado, son todos herederos y representantes de la sucesión del señor Francisco Pómez;

"2.° Que la casa materia de esta demanda fué bien perteneciente á la sucesión de dicho señor, por haber sido de propiedad de él durante su vida, y haber quedado en condición de tal á la fecha de su muerte;

"3.° Que como bien de la sucesión del señor Francisco Pómez, fué inventariada y avaluada en el juicio de sucesión

respectivo, y como finca perteneciente á esa sucesión, fué adjudicada á los herederos de Francisco Pómez;

"4.° Que el señor José María Pontón no era legalmente curador de los menores hijos y herederos del señor Francisco Pómez, á la fecha en que demandó la venta en pública subasta de la casa en referencia, ni á la fecha en que se hizo el remate de ella;

"5.° Que la dicha casa fué rematada por el señor Francisco Gaviria ante el Juzgado 3.° del Circuito el 13 de Octubre del año de 1871, por la cantidad de $ 4,101, y que á este mismo señor se le otorgó escritura de venta de dicha casa por el titulado curador, señor José María Pontón, ante el Notario 2.° de Bogotá, á veintitrés de Octubre de 1871, bajo el número 1,641;

"6.° Que la precitada casa fué vendida por el señor Francisco Gaviria á los señores Dámaso Rosendo Gaviria y Eugenio Gaviria, por medio de la escritura pública número 1,012, de fecha 17 de Junio de 1882, otorgada ante el Notario 3.° de Bogotá;

"7.° Que el Juzgado 4.° del Circuito de Bogotá, por medio de su sentencia definitiva de fecha 16 de Mayo de 1884, declaró nulo el juicio de partición de los bienes de Francisco Pómez, y nula la sentencia que en dicho juicio se dictó en el año de 1870, aprobando esa partición;

"8.° Que la misma declaratoria de nulidad del juicio de partición y de la sentencia aprobatoria referidas, hizo el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, por medio de la sentencia definitiva que pronunció con fecha 27 de Junio de 1888, en el juicio que para tales efectos se pronunció."

No habiendo habido avenimiento entre las partes en el acto de la conferencia amigable prevenida por la ley, se contestó el traslado de la demanda, que se confirió á los demandados, no conviniéndose en el derecho alegado por los actores; aceptando expresamente los hechos señalados con los ordinales 1.°, 2.°, 6.° y 7.° y negando el 4.° y la última parte del 3.°; admitieron con ligeras explicaciones los hechos 5.° y 8.°, y propusieron como perentorias las excepciones de prescripción de la acción de nulidad del remate; la que nace del artículo 1415 del Código Civil de Cundinamarca (1408 del Código Civil nacional); la de prescripción de dominio, y la de petición antes de tiempo ó de un modo indebido.

Dió lugar esa contestación á que el juicio se abriera á prueba por 30 días, durante los cuales cada parte produjo las que convenían á sus pretensiones; y citadas las partes para sentencia, después de presentados los alegatos de conclusión, se pronunció por el Juez de primera instancia, en 27 de Octubre de 1891, la que, en su parte resolutiva, dice así:

"De todo lo expuesto hay que concluír que las acciones ejercitadas no se han probado, y que, por lo mismo, los demandados deben ser absueltos.

"Dado este resultado, no hay objeto en examinar las excepciones perentorias propuestas, porque los términos *acción* y *excepción* se excluyen; porque si la excepción se da para destruír la acción, donde aquélla (*ésta*, quiso decir), no existe, tampoco concurre ésta (*aquélla*, debió decir); y porque, finalmente, si de otro modo se procediera, se correría el riesgo de prejuzgar cuestiones no sometidas á la decisión del Juzgado.

"En mérito de lo expuesto, el Juzgado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve:

"1.° Absuélvese á los demandados, Dámaso Rosendo y Eugenio Gaviria, de todos y cada uno de los cargos formulados contra ellos en el libelo de demanda;

"2.° Decláranse no probadas las excepciones perentorias propuestas por los demandados;

"3.° Cancélase la inscripción de la demanda. En tiempo oportuno, líbrese al señor Registrador el despacho correspondiente, y

"4.° No hay condenación en costas."

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca vino á conocer de la controversia, por recurso de apelación interpuesto por las dos partes, en lo que respectivamente les era desfavorable el fallo definitivo; y después de sustanciado dicho recurso, se pronunció en 6 de Abril de 1892, el de segunda instancia, en estos términos:

"1.° Absuélvese á los demandados Dámaso Rosendo Gaviria y Eugenio Gaviria, de todos y cada uno de los cargos formulados contra ellos en el libelo de demanda;

"2.° Declárase que no hay lugar á decidir si están probadas ó no las excepciones perentorias propuestas, no habiendo acreditado los demandantes la acción que ejercitaban;

"3.° Cancélase la inscripción de la demanda. En tiempo oportuno, líbrese el despacho correspondiente al Registrador de instrumentos públicos y privados.

"4.° No se hace condenación de costas de primera y segunda instancia."

"Queda en estos términos reformada la sentencia apelada."

Surtida por edicto la notificación de la sentencia de segunda instancia, el diez de Mayo del año próximo pasado de 1892, Antonio Pómez, con fecha 2 de Junio siguiente, interpuso el recurso de casación, que le fué concedido por el Tribunal de Cundinamarca, en auto de 4 del propio mes; y remitido á este Supremo Tribunal el expediente, con noticia de las partes, se ha dado al asunto la tramitación prescrita en los respectivos artículos de la Ley 105 de 1890; habiendo sido reemplazado el señor Magistrado doctor Juan Evangelista Trujillo, en quien asistía impedimento legal, por haber hecho parte de la Sala que pronunció la sentencia de segunda instancia, por el Conjuez, doctor Rafael Mariño C. Pero reemplazado el Magistrado suplente, señor doctor Trujillo, por el Magistrado principal, señor doctor Abraham Fernández de Soto, con éste ha venido á completarse el personal de la Corte, que pasa á determinar el presente recurso.

Una vez acreditado que Antonio Pómez figuró como parte demandante en la litis, y que en oportunidad interpuso el recurso que concede la ley citada, la Corte entra á examinar si en este juicio civil ordinario concurren las tres circunstancias que determina el artículo 366, para que sea admisible dicho recurso, y en caso de serlo, si hay necesidad de casar ó no la sentencia definitiva aludida.

Los fallos que se han examinado se fundan en leyes que rigieron en el extinguido Estado de Cundinamarca, idénticas á las nacionales que están en vigor; y la cuantía del pleito excede de $ 3,000. Falta, pues, poner en claro si la tercera circunstancia de las expresadas concurre igualmente en el caso de que se trata, es decir, si hay contrariedad entre las sentencias definitivas de ambas instancias en cuanto á la inteligencia de las leyes sustantivas que en ellas se han aplicado ó en lo principal del pleito.

El fundamento principal en que los demandantes apoyan la acción que han dirigido contra Dámaso Rosendo y Eugenio Gaviria, lo hacen consistir en esta doctrina que consideran correcta, á saber: que habiéndose anulado por sentencia del Juez 4.° del Circuito de Bogotá, de 16 de Mayo de 1884, el juicio de sucesión de los bienes de Francisco Pómez, y la sentencia que aprobó la partición de dichos bienes, sentencia que fué aprobada en parte por la que profirió el Tribunal Superior de Cundinamarca en 27 de Junio de 1888, los indicados bienes quedaron indivisos, como lo estaban antes de hacerse por el partidor la adjudicación de los bienes de la sucesión entre los herederos; y de consiguiente, que la venta de la casa y tiendas accesorias, celebrada en remate público á favor de Francisco Gaviria, así como la que hizo á favor del mismo, en escritura pública, José María Pontón, en su carácter de guardador de los menores Daniel, Antonio, Francisco é Isabel Pómez, son también nulas, atendido lo que preceptúa el artículo 773 del Código Civil de Cundinamarca, igual al 757 del nacional, que dice:

"En el momento de deferirse la herencia, la posesión de ella se confiere, por Ministerio de la ley, al heredero; pero esta posesión *legal* no lo habilita para disponer en manera alguna de un inmueble, mientras no preceda:

" 1.° El decreto judicial que da la posesión *efectiva*, y

" 2.° El registro del mismo decreto judicial y de los títulos que confieren el dominio;" pues los demandantes agregan que "siendo nulas esas dos ventas, lo es la hecha por Francisco Gaviria á sus dos hijos Dámaso Rosendo y Eugenio Gaviria, porque quedó afectada con el vicio que invalidó á las que le sirvieron de fuente."

Así planteada la doctrina sentada por los demandantes Pómez contra los demandados Gavirias parece exacta, y que contra ella no podría hacerse objeción que la desvirtuase; pero es el caso de que los Gavirias no figuraron como partes en el juicio en que se declaró la nulidad de la partición de los bienes de la sucesión de Francisco Pómez; ni los referidos Gavirias, aunque sucedieron á su padre Francisco Gaviria, por muerte de éste, en todos sus derechos y obligaciones, no adquirieron dominio sobre la casa y tiendas accesorias aludidas, por herencia de su referido padre, sino que, por el contrario, tal dominio les fué trasmitido por su padre varios años antes de su muerte, en virtud de contrato de compra-venta celebrado entre ellos antes de dictarse aquellos fallos; y, por tanto, los demandados Gavirias no están comprendidos en la disposición del artículo 846 del Código Judicial, redactado así:

" La sentencia dada en un pleito no perjudica sino á los que litigaron por sí ó legalmente representados, ó á sus herederos, ó á sus legatarios, si éstos lo son de la misma cosa que fué materia del pleito, y á los que posteriormente adquieran de aquéllos la dicha cosa, por cualquier título, conforme á lo prevenido en los artículos siguientes."

De modo que la doctrina sostenida por los actores no pudo ser aplicada en los fallos mencionados, y desde luégo los demandados tuvieron que ser absueltos en las dos instancias de este nuevo juicio; deduciéndose de aquí que ambas sentencias, en vez de ser contrarias, son conformes en la inteligencia de las disposiciones legales que fueron aplicadas, ó sea en cuanto á lo principal del pleito. Y si esto es así, la Corte no puede entrar á considerar en el fondo las razones alegadas por el recurrente ni por la contraparte de éste, dado que tiene que limitarse á decidir si es ó no admisible el recurso.

Resta examinar un punto, que la Corte no quiere dejar sin solución, y es éste:

El Juez de primera instancia, convencido de que la razón primordial alegada por los demandantes carecía de mérito legal, prescindió, como era natural, de averiguar si resultaban probadas las excepciones perentorias propuestas por los demandados, con el objeto de destruír la fuerza de las acciones instauradas, caso de que por algún motivo pudieran éstas declararse probadas, y por tanto, explicó en el mismo fallo, su prescindencia en hacer la correspondiente dilucidación, cuando expuso:

" De todo lo expuesto, hay que concluír que las acciones ejercitadas no se probaron, y que, por lo mismo, los demandados deben ser absueltos.

" Dado este resultado, no hay objeto en examinar las excepciones perentorias propuestas, porque los términos *acción* y *excepción* se excluyen; porque si la excepción se da para destruír la acción, donde aquélla no existe, tampoco concurre ésta; y porque, finalmente, si de otro modo se procediera, se correría el riesgo de prejuzgar cuestiones no sometidas á la decisión del Juzgado."

Esta explicación debió producir, por consecuencia, que el mismo Juez *a quo* se abstuviera de expresar si las excepciones perentorias resultaban ó no probadas; empero, determinó lo que contrariaba su argumento, porque "declaró no probadas las excepciones propuestas por los demandados;" es decir, que en la parte motiva del fallo expuso muy bien que no había necesidad de examinar cosa alguna con relación á las excepciones, y sin embargo, las declaró no probadas en la parte resolutiva, sin haber aducido, para hacer semejante declaración, el más leve argumento.

Ocupándose el Tribunal Superior de Cundinamarca en el fallo de segunda instancia en esta irregularidad, expuso con sobra de razón, lo que sigue:

" El Juez *a quo* dijo con acierto en su sentencia, que averiguado que los demandantes no tenían la acción que ejercitaban, no había para qué estudiar las excepciones propuestas como perentorias, porque los términos *acción* y *excepción* se excluyen; pues si la excepción se da para destruír la acción, donde aquélla no existe tampoco concurre ésta. Pero en lugar de expresar esto en la parte resolutiva, en los mismos términos ó en otros semejantes, afirmó que no estaban probadas las excepciones; aserción que no podía sostener, acabando de decir que no había examinado las pruebas que se habían aducido á ese respecto."

Fundado, pues, el Tribunal en la aserción de que acaba de hacerse mérito, consignó en la parte resolutiva lo que se copia:

" 2.° Declárase que no hay lugar á decidir si están probadas ó no las excepciones perentorias propuestas, no habiendo acreditado los demandantes la acción que ejercitaban."

De todo lo que precede, nace esta cuestión: ¿por el hecho de haber el Juez de primera instancia declarado no probadas las excepciones perentorias propuestas por los demandados, y de haber prescindido el Tribunal de hacer igual declaración, podría sostenerse que hay contrariedad entre los dos fallos? Para la Corte es claro que no hay tal contrariedad; porque, en primer lugar, el Tribunal no resolvió que dichas excepciones estuviesen probadas, y en segundo lugar, porque en ambas sentencias se hace notar que no había necesidad de considerar si ellas estaban ó no probadas, supuesto que los demandados resultaban absueltos de las acciones instauradas contra ellos. El Juez 2.° del Circuito de Bogotá hizo la aludida declaración con ligereza, sin tener en cuenta que él mismo se contradecía.

En consecuencia, es exacto que entre las dos sentencias en que se han aplicado las mismas leyes sustantivas y de procedimento y las propias doctrinas de legislación, no hay contrariedad bajo cualquier aspecto que la cuestión se considere.

Por tanto, la Corte, no hallando que concurren en el presente recurso de casación las tres circunstancias que designa el artículo 366 de la Ley 105 de 1890, vigente cuando se interpuso y concedió dicho recurso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve no admitirlo.

Notifíquese, déjese copia, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO. — ANÍBAL GALINDO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintitrés de Mayo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Lisandro A. Moreno, en su carácter de Juez del Circuito del Pital, en el Distrito Judicial del Sur del Tolima, con oficio fecha veintisiete de Enero del presente año, remitió á este Supremo Tribunal, copia de varias piezas que figuran en el juicio que se siguió por dicho Juez contra el del Municipio del Hato, por infracción del artículo 539 del Código Penal; é hizo la remisión con el objeto de que fuese examinada la conducta oficicial de los Magistrados del Tribunal, pues en concepto del Juez referido, aquéllos habían cometido el delito de falsedad en documento público, al aseverar en el fallo de segunda instancia, que profirieron en la causa que se siguió al expresado Juez del Hato, que el del Circuito del Pital omitió citar á las partes para sentencia, antes de que dictase la de primera instancia.

Fundado el Tribunal en la supuesta omisión declaró al Juez del Circuito del Pital incurso en la multa de dos pesos ($ 2), según lo que dispone el artículo 1919 del Código Judicial; pero el Tribunal, advertido después de que no se había prescindido de disponerse y hacerse la citación de las partes para sentencia, relevó al Juez multado del pago de la mencionada cantidad.

Verificado así el hecho que ha dado lugar á la investigación, él no constituye delito de falsedad, como lo ha denunciado el Juez del referido Circuito, y más bien debe conside-

rarse que el Tribunal inadvertidamente creyó que se había omitido aquella formalidad. A este respecto el señor Procurador general, en el dictamen que ha emitido sobre las diligencias sumarias que se tienen á la vista, y que la Corte dispuso se instruyeran con el fin de saber si efectivamente había habido alteración en el proceso, ha expuesto lo que sigue, que la Corte reproduce como fundamento bastante para considerar que no se tuvo intención de perpetrar delito alguno.

"La conducta ó procedimiento del Tribunal no puede considerarse como constitutivo del delito de falsedad de documentos públicos, porque ésta, según se desprende del capítulo 6.°, título 7.°, libro 2.° del Código Penal, requiere cambio ó alteración fraudulenta del acto ó documento auténtico á fin de desfigurar la verdad de éste. En el presente caso el auto del Juez que citó á las partes para sentencia permanece intacto en el expediente tal como fué proferido. Lejos de haber sido alterado, ni siquiera fué observado por el Tribunal, por lo cual éste, debido á la ligereza con que examinó el proceso, creyó que aquella citación no se había hecho, y de allí la multa que por la supuesta omisión se impuso al expresado Juez. Hubo, pues, descuido, si se quiere, de parte del Tribunal, pero no falsedad."

Es de este lugar hacer notar la ligereza con que también procedió el Juez del Circuito del Pital al calificar de falsedad el descuido ó inadvertencia del Tribunal de que se ha hecho alusión arriba, no sólo porque dicho Juez debía saber en qué consiste esencialmente esa clase de delito, sino porque atribuía al Tribunal la comisión de un hecho indecoroso, tratando de su inmediato superior, que siempre es digno de respeto.

A mérito de lo expuesto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de conformidad con el parecer del señor Procurador general de la Nación, sobresee en estas diligencias informativas, pues declara que no hay mérito para abrir causa de responsabilidad contra los Magistrados del Tribunal del Sur en el Departamento del Tolima, doctores Arcadio Charri, Gabriel Vargas C. y Elisio Medina, por el delito denunciado.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial*, devuélvase la causa original que se pidió, y archívense estas diligencias.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Baltasar Botero Uribe.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Abraham Fernández de Soto.—Aníbal Galindo. *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Mayo veintiséis de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Al fallar el Juez del Circuito de Buga, en el Departamento nacional del Cauca, las excepciones que propuso Bernardo González, en el juicio ejecutivo que siguió contra éste el Administrador de la Aduana de Buenaventura por suma de pesos, procedente de derechos de importación de mercancías, dispuso que se sacase copia de lo conducente para averiguar si se había cometido el delito de falsedad en el documento que sirvió de recaudo ejecutivo. Extendida la copia y practicadas otras diligencias informativas, tendientes al mismo fin, se viene en conocimiento de que el Administrador Lisandro Caicedo libró mandamiento de ejecución contra el citado González, valiéndose de la jurisdicción coactiva que ejercía, con una liquidación parcial que extractó de un manifiesto presentado á la Aduana por Jaime Otero en el que sólo figuraban algunos bultos con la marca $\frac{B\,G}{H}$, de donde dedujo probablemente el empleado ejecutor que correspondían á González y que eran de cargo suyo los derechos causados.

En esto consiste el hecho sujeta materia de la investigación; pero como Caicedo, que es el único que aparece sindicado, falleció en la ciudad de Manizales desde el 26 de Julio de 1891, según la partida de defunción que se ha agregado al sumario, cesó el derecho de imponerle pena por la infracción que pudiera haberse cometido.

Por tanto, la Corte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1504 del Código Judicial, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, declara terminado el procedimiento criminal iniciado contra Lisandro Caicedo con motivo de la ejecución que libró contra Bernardo González.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y archívese el sumario.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Baltasar Botero Uribe.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Abraham Fernández de Soto.—Aníbal Galindo. *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Mayo veintisiete de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Conviene, antes de resolver sobre el auto consultado, que se practiquen las siguientes diligencias:

1.ª Debe hacerse constar en el sumario cuál ha sido la conducta oficial y particular del sindicado, ya como Fiscal, ya como ciudadano;

2.ª Asimismo debe hacerse constar si él, durante el tiempo que ha ejercido el Ministerio público, se ha ocupado ó no en asuntos judiciales civiles de particulares;

3.ª Debe conseguirse la mortuoria de Miguel Arévalo, que es probable esté protocolizada en la Notaría del Circuito de Ubaté (fojas 8 vuelta), y si no, donde se halle; y hacer constar, en vista de ella: *a)* si allí figuró Ramón Clavijo de alguna manera y con qué carácter; y se agregará copia de la pieza ó piezas en que conste tal cosa; *b)* si se pagaron los derechos de Lazareto, quién los pagó, en qué cantidad, y si hay recibo ó certificado; de todo lo cual se extenderá copia; *c)* en qué época se inició y se terminó dicha mortuoria; *d)* si el hijo de Ramón Clavijo, Carlos, figuró allí en esa sucesión;

4.ª Debe traerse á la vista la mortuoria de José María Pachón, y agregarse copia de todas las piezas en que conste que Ramón Clavijo figuró en ella como Recaudador de Hacienda, y que actuó como Juez municipal. También debe explicarse el motivo de la demora en que se encontraba cuando se expidió el certificado de fojas 68; y si todavía está demorada y por qué razón;

5.ª Agustina Ballesteros debe decir si ella buscó á Ramón Clavijo para que le siguiera ó interviniera en el seguimiento de la mortuoria de su esposo Miguel Arévalo; y si igualmente lo buscó para que terminara la de José María Pachón. La testigo expresará todos los pormenores de lo que hubo entre ella y Ramón Clavijo respecto á ambas sucesiones;

6.ª Debe averiguarse, si es posible, de quién es la letra del memorial que figura á la foja 1.ª, firmado por Domingo Garzón á ruego de Agustina Ballesteros; y si se logra saber de quién es, debe recibirse declaración á la persona que escribió tal memorial, sobre todos los puntos relacionados con el delito y el presunto delincuente;

7.ª El certificado de fojas 2 debe compararse por peritos, y en lo que hace al nombre de "*José María Pachón*" con otros caracteres de letra de otros individuos que puedan haber tenido interés directo ó indirecto en la falsificación de ese documento;

8.ª Debe insistirse en conseguir las declaraciones de Justiniano Martínez, Andrés Rosely, Vicenta Ballesteros y los dos casanareños de que habla Ramón Clavijo, ó hacerse constar que no existen.

Por tanto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, se revoca el auto consultado y se ordena la práctica de las diligencias indicadas.

Notifíquese y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Baltasar Botero Uribe.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales. Abraham Fernández de Soto.—Aníbal Galindo.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

IMPRENTA DE ANTONIO M. SILVESTRE.
Director, Tomás Galarza.

REPÚBLICA DE COLOMBIA.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AÑO VIII | Bogotá, 27 de Junio de 1893. | NÚM. 401.

CONTENIDO.

Págs.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

La que niega á Dolores Ruiz de Monroy una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas)....
La que concede á Cecilio Buitrón una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas).... 297
La que anula la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Popayán en el juicio promovido por José Inocencio Rosero y otro, sobre nulidad de un contrato. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas).... 298
La que concede á Cristina López una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Corrales).... 301
La que niega á Federico Cortecero el reconocimiento de un crédito por expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Isaza).... 302
La que concede á Lorenzo Durán una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Isaza).... 302
La que niega á Ignacio E. Fortich el reconocimiento de un crédito por expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Fernández de Soto).... 303

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Suspéndese la ejecución del artículo 16 de la Ordenanza número 21 de 1888, expedida por la Asamblea de Boyacá. (Magistrado ponente, doctor Fernández de Soto).... 303
El en que se declara incompetente la Corte para conocer de la apelación interpuesta por Antonio Papi Aizpuru contra el auto ejecutivo dictado por el Agente Fiscal de Panamá. (Magistrado ponente, doctor Pombo).... 304
Declárase ejecutoriada la sentencia dictada por el Tribunal de Panamá en un juicio de nulidad de un interdicto promovido por la Compañía del Canal Interoceánico contra José Hilario Cano. (Magistrado ponente, doctor Pombo).... 304

NEGOCIOS CRIMINALES.

El confirmatorio del auto de sobreseimiento dictado por el Tribunal Superior de Cundinamarca en las diligencias sumarias seguidas contra Pedro A. Pallares, como ex-Fiscal del Circuito de Villeta y Prefecto de la Provincia de Guaduas, por el delito de falsificación de documento público. (Magistrado ponente, doctor Isaza)... 304

GACETA JUDICIAL.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez y ocho de Mayo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Por medio de apoderado, Dolores Ruiz de Monroy, vecina de Tunja, pide á la Corte le conceda la recompensa á que cree tener derecho por causa de los servicios que su hijo legítimo Rodolfo Monroy R. prestó al Gobierno en la Guardia colombiana en un término de diez años en que perteneció á ella, y por razón de haber muerto con motivo de enfermedad que contrajo en el servicio de las armas.

Oído el dictamen del señor Procurador, la Corte, para resolver, no necesita entrar en un examen de las pruebas aducidas, porque considera:

1.° Que habiendo sido la muerte del militar Rodolfo Monroy R. efecto de una enfermedad natural, no da lugar á recompensa alguna, por no ser ninguno de los casos de que trata el inciso 2.° del artículo 5.° de la Ley 84 de 1890, y

2.° Que las recompensas que se pueden otorgar por razón de enfermedad y también por motivo de antigüedad en el servicio, sólo favorecen á los militares mismos, pero no á sus deudos, según lo que á este respecto dispone la mencionada Ley 84, y lo que la Corte ha resuelto en casos análogos al presente.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el parecer del señor Procurador, declara que no há lugar á conceder la recompensa solicitada.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta* y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez y ocho de Mayo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Cecilio Buitrón, vecino de Bolívar en el Departamento del Cauca, pide á la Corte, por medio de apoderado, se le conceda la recompensa militar á que le da derecho la Ley 84 de 1890, á causa de haber recibido en el sitio de Chambuco, el año de 1885, estando en servicio en defensa del Gobierno de la República, heridas que le produjeron invalidez relativa.

Comprueban el derecho del demandante los siguientes documentos:

1.° La diligencia del reconocimiento que en el inválido practicaron, el veintitrés de Diciembre último, á presencia y con intervención del Gobernador del Cauca, los profesores en medicina y cirugía, doctores José María Irragori, Francisco F. Velasco, y Domingo Cajiao C., documento con que se acredita que en efecto Buitrón adolece de una invalidez relativa que le impide trabajar como lo hacía antes de sufrir las heridas que la ocasionaron;

2.° Las declaraciones que ante el Juez del Distrito de San Pablo y con intervención del respectivo Agente del Ministerio Público, rindieron los testigos Romualdo Cerón, Eladio López, Rafael Muñoz, Amador Zambrano, Darío Bolaños, y César Zambrano, con las cuales se acredita plenamente que fué cierto que siendo el expresado Buitrón soldado del Gobierno el año de 1885, á órdenes del Comandante Jacinto López, salió del Distrito de San Pablo en desempeño de una comisión militar en compañía de otros, y que enemigos armados del Gobierno le atacaron y le causaron dos heridas graves en el hombro y brazo derecho, de tal modo que quedó en tierra y no pudo volver al pueblo sino conducido en una camilla ó *chacuna*, y estuvo postrado más de cuatro meses;

3.° Otras tres declaraciones legalmente tomadas por el propio Juez del Distrito de San Pablo, mediante las cuales se establece la identidad del solicitante Buitrón y su estado de suma pobreza, y

4.° El certificado del Ministerio del Tesoro, que justifica el hecho de no haberse hasta ahora otorgado recompensa alguna á Buitrón.

La Corte, en vista de estos comprobantes, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

de acuerdo con el concepto favorable del señor Procurador, declara que el soldado Cecilio Buitrón se halla en el caso señalado por el inciso 8.° del artículo 5.° y artículos 9.° y 19 de la Ley 84 de 1890, y tiene derecho á una recompensa unitaria definitiva de trescientos cincuenta y dos pesos ($ 352) que, por razón de invalidez relativa, se le pagarán del Tesoro público.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta*, comuníquese á Su Señoría el Ministro del Tesoro y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES,—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO. —*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, veintinueve de Mayo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: En diez de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis, el doctor Salvador Valencia Fernández, como apoderado de José Inocencio Rosero y Tertuliano Manzano, demandó ante el Juez provincial de lo civil en Popayán, á la sucesión y herederos de Juan E. Santacruz, para que, por dicho Juez se declararan dos cosas, á saber: 1.ª la nulidad del contrato de compra-venta contenido en una escritura que fué otorgada bajo el número 266, el veintiséis de Julio de 1877, ante el Notario del Circuito de Popayán, entre Concepción Gómez, como viuda y heredera de Graciano Caicedo, por una parte, y Juan E. Santacruz, por la otra, y consistente en la venta que la primera hizo al segundo de unos terrenos y otros inmuebles pertenecientes todos á la sociedad conyugal de la vendedora con su difunto esposo Graciano Caicedo, quien había fallecido el año de mil ochocientos setenta y seis, sin que quedaran más herederos que su dicha viuda y un hermano llamado Francisco Caicedo; y 2.ª que las fincas así vendidas por la Gómez pertenecían en propiedad á los dos poderdantes de Valencia Fernández, José Inocencio Rosero y Tertuliano Manzano, por haberlos comprado éstos á Filomena Rosero, á quien, como viuda de Francisco Caicedo, también finado yá, se habían adjudicado en la partición de los bienes de Graciano Caicedo.

Afirma el demandante que los únicos herederos del mencionado Graciano Caicedo, entre quienes podía distribuírse la herencia, eran dichas dos viudas, Concepción Gómez y Filomena Rosero, y que á esta última se adjudicaron en la partición correspondiente, los mismos bienes que la primera había vendido á Santacruz; que la Rosero vendió una parte de ellos á su hermano José Inocencio Rosero, y á Tertuliano Manzano otra parte, según lo comprueba con las escrituras públicas números 283 y 177, otorgadas ante el Notario de Popayán, el veintitrés de Junio de 1882 la primera, y el primero de Marzo del mismo año la segunda; y que es, en virtud de tales títulos, como reclama para sus poderdantes el dominio de tales bienes.

Cuando la demanda se intentó, había yá muerto también el comprador Santacruz, razón por la que la notificación de ella se hizo á su viuda María Ángela Gómez, quien denunció el pleito á la otra viuda Concepción Gómez, y ésta contestó (folio 52) negando absolutamente el fundamento de la demanda, sosteniendo la validez del contrato cuya nulidad se pedía, y oponiendo como excepciones las de nulidad y falsedad de las escrituras mencionadas, números 283 y 177, otorgadas el año de 1882, en favor de los actores en el pleito, Rosero y Manzano, y con las cuales intentaron ellos su acción, y la de juicio pendiente, el promovido sobre nulidad del de sucesión de Graciano Caicedo y sobre nulidad de la cuenta de partición y adjudicación de los bienes de dicha sucesión. El Juez no admitió la excepción de juicio pendiente, por considerar que se había opuesto extemporáneamente; pero admitió la otra, considerándola como perentoria, y abrió el juicio á prueba, declarando que debía la controversia versar sobre la validez ó nulidad, tanto de la escritura número 266, otorgada por Concepción Gómez á Santacruz, como de las números 283 y 177, otorgadas por Filomena Rosero en favor de los actores en el pleito, y á las cuales se refería la excepción perentoria opuesta.

Por auto de veintiocho de Julio de 1888, el Juez de la causa decretó la acumulación al juicio de que se acaba de hablar, del que en siete de Abril de mil ochocientos ochenta y siete había promovido Concepción Gómez, por medio de apoderado, ante el Juez del Circuito de Popayán, sobre nulidad de la cuenta y adjudicación de los bienes de Graciano Caicedo y nulidad de todo lo actuado en el correspondiente juicio de sucesión. El enunciado auto de acumulación fué apelado, y el Tribunal lo confirmó por providencia de fecha veinticuatro de Enero de mil ochocientos ochenta y nueve. Fundábase dicha demanda en la suposición de que tanto en los inventarios como en la partición de la mencionada mortuoria, se incurrió en informalidades muy notables, como la falta de varias notificaciones á las partes, la falta de citación del Agente del Ministerio Público, y principalmente en que no se hizo en la cuenta de la partición la separación de patrimonios y de gananciales prevenidos al efecto por el Código Civil, de lo cual resultó que Concepción Gómez fué gravemente perjudicada en la expresada cuenta.

La primera instancia de estos juicios así acumulados terminó por la sentencia que el Juez del conocimiento pronunció en veintinueve de Julio de mil ochocientos noventa y uno, cuya parte resolutiva es del tenor siguiente:

"Por lo expuesto, el Juzgado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve:

"1.° No es nula la escritura número 266, otorgada por Concepción Gómez á favor de Juan E. Santacruz;

"2.° No están probadas las excepciones propuestas por la parte demandada sobre nulidad y falsedad de las escrituras marcadas con los números 283 y 177;

"3.° No son nulos los inventarios practicados en la sucesión de Graciano Caicedo, ni la partición de los bienes;

"4.° Condénase en las costas á Concepción Gómez, por haber intentado la demanda de nulidad de los inventarios y la partición.

"Y por cuanto el Secretario, señor Antonio Ruiz, dejó de notificar varios autos é incurrió en otras informalidades, se le impone la multa de cinco pesos ($ 5).

"Comuníquese, cópiese, publíquese y notifíquese.

"LUIS ENRIQUE BONILLA.

"El Secretario interino, *Francisco de P. Velasco.*"

De esta sentencia se alzó el apoderado de la parte demandante, para ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, quien en 1.° de Agosto último dictó la que le incumbía, y por medio de ella, modificó la primera, según se ve en la parte resolutiva, que es como sigue:

"Por los anteriores fundamentos, este Tribunal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resolviendo los tres puntos controvertidos, declara:

"1.° Es nulo el contrato de compra-venta celebrado por Concepción Gómez y Juan E. Santacruz, de que habla la escritura pública otorgada en la Notaría de este Circuito el 26 de Julio de 1877, bajo el número 266, nulidad aparejada desde la fecha de su otorgamiento;

"2.° No se ha probado la nulidad de la cuenta, liquidación y partición verificadas en la sucesión intestada del finado Graciano Caicedo, y

"3.° No son nulos los contratos celebrados por Filomena Rosero á favor de Tertuliano Manzano é Inocencio Rosero, de que se ocupan las escrituras números 277 y 283, otorgadas en primero de Mayo y 23 de Junio, respectivamente, en el año de 1882.

"Queda en estos términos reformada la sentencia apelada. Sin costas.

"Notifíquese, cópiese y devuélvase.

"FELIPE MELÉNDEZ.—JOAQUÍN REBOLLEDO. — JOSÉ N. VERNAZA.—*Foción Mantilla*, Secretario."

Contra este fallo interpuso la parte demandada recurso de casación, que el Tribunal le concedió por auto de doce de Septiembre último, por lo cual fue remitido el asunto á la Corte, en donde sustanciado, con observancia de todas las forma-

lidades legales correspondientes, para despacharlo se procede á examinar si el recurso reúne los requisitos legales para su admisión, según lo que á este respecto previene el artículo 381 de la Ley 105 de 1890.

Interpúsose el recurso por Juan Evangelista Muñoz, actual esposo de Concepción Gómez, y en tiempo oportuno; es decir, dentro de los treinta días que señala para ello el artículo 372 de la misma ley; entre las dos sentencias cuyas partes resolutivas quedan trascritas, hay la contrariedad manifiesta de que la segunda declara la nulidad de un contrato cuya validez se declara en la primera; versa la sentencia sobre intereses particulares en que la cuantía es de más de tres mil pesos; y las disposiciones legales invocadas en la sentencia son los artículos 1037, 785, 787 y 1545 del Código Civil del Cauca, adoptado por la Ley 283, expedida por la respectiva Legislatura á cinco de Octubre de 1869, y que empezó á regir el primero de Julio de 1871, disposiciones que son idénticas, respectivamente, á los artículos 1013, 757, 759 y 1524 del actual Código Civil nacional.

El recurso es, en consecuencia, admisible y debe surtirse.

Y para cumplir el precepto que impone á la Corte el artículo 59 de la Ley 100 de 1892, es preciso examinar el escrito en que el recurrente fundó el recurso.

En él, invirtiendo el orden de las cuestiones resueltas por la sentencia acerca de la cual versa el debate, el recurrente empieza por exponer las razones que en su concepto vician el punto resuelto en la tercera de ellas, á saber: "que no son nulos los contratos celebrados por Filomena Rosero á favor de Tertuliano Manzano é Inocencio Rosero, en que se ocupan las escrituras números 177 y 283, otorgadas en primero de Mayo y veintitrés de Junio, respectivamente, en el año de 1882." Y es la principal de tales razones la que se explica en el siguiente aparte del supradicho alegato:

"Por esas escrituras los señores Ramón Pérez y José María Sánchez O., vendieron inmuebles, como apoderados de Filomena Rosero, pero ambos poderes fueron conferidos por memoriales presentados ante el Juez del Distrito de Bordo, como para pleitos, y dirigidos al Notario, sin que la ley ni la costumbre autoricen hoy ni hayan autorizado nunca semejante proceder."

De lo cual deduce el recurrente que en esta parte de la sentencia se han violado los artículos 2186, 2195, inciso 2.°; 2205, 2729, ordinales 11 y 12; 2653, inciso 2.°; 1780 y 2751 del Código Civil que regía en el Cauca el año de 1882, cuando se otorgaron las supradichas escrituras números 283 y 177, disposiciones respectivamente idénticas á las de los artículos 2149, 2158, 2168, 2652, ordinal 10; 2577, inciso 2.°; 1760 y 2673 del Código Civil nacional, con lo cual afirma él que se ha incurrido en la primera de las causules de casación que señala el artículo 369 de la Ley 105 de 1890, agregando que también se ha violado el inciso 2.° del artículo 794 del primero de estos dos Códigos, idéntico al inciso 2.° del 676 del segundo; y que hay error de derecho en la argumentación de que se sirvió el Tribunal, consistente en afirmar que las excepciones de nulidad y falsedad opuestas por la demandada, respecto de las escrituras con que Manzano y Rosero intentaron su acción, "no tienen tal carácter," porque la nulidad excepcionada no podía destruír ni enervar la acción ejercida por las demandantes."

Expone en seguida el recurrente que, en su concepto, fueron indebidamente aplicados los artículos 785, 787 y 1545 del Código Civil del Cauca, correspondientes á los marcados con los números 757, 759 y 1524 del nacional; y violado el inciso 2.° del artículo 1420 del primero de dichos Códigos, idéntico al del 1401 del segundo. Refiérese, sin duda, en esta parte á la resolución primera de la sentencia, y se funda en que al declararse allí nulo el contrato de compra-venta celebrado por Concepción Gómez y Juan E. Santacruz, según la escritura número 266 de 1877, se dió á la enajenación que un coasignatario hizo de bienes que en la partición fueron adjudicados á otro coasignatario, efecto y resultados enteramente diferentes de los que le señalaba el Código Civil caucano y de los que hoy mismo señala el Código Civil nacional, no debiendo tal enajenación ser nula, sino debiendo considerarse como caso de venta de cosa ajena. Agrega que al exponer el Tribunal que dicho contrato fué simulado, fundándose para ello en el solo dicho de una de las partes contratantes, incurrió en error en la apreciación de la prueba. Y sostiene que, con respecto á esta primera resolución de la sentencia, existe también, por lo expuesto, la primera causal de casación de que trata el artículo 369 de la mencionada Ley 105 de 1890. Además, advierte aquí el recurrente que la escritura número 266 no fué registrada en el libro número 1.° de la correspondiente Oficina, sino en el libro número 2.°, y que no ha sido presentada en copia tomada del original sino de otra copia, por el Secretario del Juzgado de Popayán, de lo cual deduce que no hace fe en juicio.

Finalmente, el recurrente hace con relación al punto 2.° de los resueltos por la sentencia que es objeto de la casación, observaciones encaminadas á demostrar que, adoleciendo la cuenta, liquidación y partición de los bienes pertenecientes á la mortuoria de Graciano Caicedo de varias informalidades sustanciales, se incurrió en violación del artículo 1762 del Código Civil del Cauca, idéntico al 1742 del Código Civil nacional, y además del artículo 90 de la Ley 153 de 1887 y 15 de la Ley 95 de 1890, y que á este respecto ocurre también para la casación solicitada la causal primera de las enunciadas por el artículo 369 de la mencionada Ley 105 de 1890, causal que es la única invocada en las distintas argumentaciones del recurrente.

Y debe la Corte examinar la fuerza en que se pretende fundarla, con relación, en primer lugar, á la parte primera de las tres que comprende lo fallado por la sentencia acusada, puesto que en dicha primera parte se decide el punto principal que ha sido objeto de la presente controversia judicial: el de la validez ó nulidad del contrato de que trata la escritura número 266 de 1877, y ya que la segunda parte se refiere al juicio de partición de los bienes que quedaron por óbito de Graciano Caicedo, y la parte tercera mira á las excepciones propuestas por la demandada Concepción Gómez. A ello procede la Corte.

Estriba la argumentación que se endereza contra la expresada primera parte, en que se declaró la nulidad del contrato que reza la escritura número 266 de 1877, en los siguientes elementos:

Sostienen los demandantes que la venta hecha por Concepción Gómez á Juan E. Santacruz, según la escritura 266 de mil ochocientos setenta y siete, es nula por cuanto en la época en que tuvo lugar, la vendedora apenas era heredera de su primer esposo Graciano Caicedo, sin que siquiera se hubiera declarado así por el Juez competente, pues el auto que la declaró heredera es posterior á la venta, y principalmente por cuanto, practicadas después las diligencias legales del juicio de partición de los bienes de Graciano Caicedo, en él se adjudicaron á Filomena Rosero, en pago del haber que le cupo en aquella herencia, los mismos bienes que la Gómez había antes vendido á Santacruz en el contrato cuya nulidad se pide, con lo cual se contravino á lo que prevenían los artículos 785 y 787 del Código Civil caucano.

Es verdad que el segundo aparte del artículo 1037 del Código Civil caucano, idéntico al segundo aparte del 1013 del Código Civil nacional, declara "que la herencia ó legado se *defiere* al heredero ó legatario en el momento de fallecer la persona de cuya sucesión se trata, si el heredero ó legatario no es llamado condicionalmente; ó en el momento de cumplirse la condición, si el llamamiento es condicional;" verdad que según el artículo 785 del primero de dichos dos Códigos, idéntico al 757 del segundo, "en el momento de deferirse la herencia, la posesión de ella se confiere por ministerio de la ley al heredero; pero esta posesión legal no lo habilita para disponer en manera alguna de un inmueble mientras no preceda: 1.° el decreto judicial que da la posesión efectiva; 2.° el registro del mismo decreto judicial y de los títulos que confieren el dominio;" cierto que por disposición expresa del artículo 787 del Código Civil del Cauca, ó sea 759 del Código Civil nacional, "los títulos traslaticios de dominio que deben registrarse, no darán ó trasferirán la posesión efectiva del respectivo derecho mientras no se haya verificado el registro en los términos que dispone el título del Registro de Instrumentos públicos;" y cierto, en fin, que es principio recono-

cido por el artículo 6.° del Código Civil nacional, que en materia civil son nulos los actos ejecutados contra expresa prohibición de la ley.

Con todo, es igualmente cierto que este principio general tiene la excepción de que la prohibición legal tenga señalada por la ley misma un efecto diverso del de la nulidad, pues en tal caso es ese efecto especial determinado para el caso de que se trate, el que se surte y no el general de la nulidad; y como según el inciso 2.° del artículo 1420 del Código Civil caucano, idéntico al 1401 del nacional, cuando alguno de los coasignatarios en una sucesión ha enajenado alguna cosa que en la partición se adjudica á otro de ellos, se puede proceder como en el caso de venta de cosa ajena; y como según el artículo 1892 del Código Civil caucano, ó sea del 1871 del nacional, la venta de cosa ajena vale, sin perjuicio de los derechos del dueño de la cosa vendida, mientras no se extinguen por el lapso del tiempo, visto es que si Concepción Gómez vendió por la escritura número 266 de 1877, á Juan E. Santacruz, bienes pertenecientes á la mortuoria de su finado primer esposo, Graciano Caicedo, y que fueron luégo en la partición respectiva adjudicados á su coasignataria Filomena Rosero, quien los vendió á su turno á Inocencio Rosero y Tertuliano Manzano, aquella venta no adoloce de vicio de nulidad, sino que lleva consigo efecto de venta de cosa ajena, y la acción que pudieron intentar los representantes de la adjudicataria Filomena Rosero, debió ser acción de dominio de los bienes por ellos comprados á la Rosero é indebida ó ilegalmente vendidos antes por la Gómez á Juan E. Santacruz, y no acción de nulidad del contrato que consta en la mencionada escritura número 266, por no ser efecto de nulidad el atribuído por la ley á tal ilegal contrato, sino efecto de venta de cosa ajena, el cual, según el texto legal, lleva anexa la salvedad de los derechos del dueño de la cosa vendida.

Dice sobre esto la ley:

"La venta de cosa ajena vale, sin perjuicio de los derechos del dueño de la cosa vendida, mientras no se extingan por el lapso del tiempo."

De manera que la validez que se asigna por la ley á la venta de la cosa ajena, salva siempre los derechos del dueño de ella, quien puede y debe hacerlos valer intentando para ello la correspondiente acción reivindicatoria.

Mas como en el libelo de demanda sí se pidió que declarara el Juez que los bienes vendidos por la Gómez á Santacruz, pertenecían en propiedad á los actores Rosero y Manzano, por haberlos comprado á la adjudicataria de ellos, Filomena Rosero, y en este sentido, es claro que la acción de dominio se intentó conjuntamente con la de nulidad del contrato contenido en la escritura número 266 de 1877, forzoso es examinar ahora si dichos actores tenían justo título para reputarse dueños de las cosas disputadas y poder reivindicarlos, punto referente á la tercera cuestión resuelta por la sentencia acusada.

El inciso 1.° del artículo 2195 del Código Civil del Cauca, exigía poder especial para que la Rosero pudiese autorizar á otros para vender los bienes que son objeto del pleito; el miembro segundo del 2653 exigía la escritura pública para todos los contratos que consistían en enajenación ó mutación de inmuebles; el 2186 dice que no se admita la escritura privada en los casos en que la ley exige la pública; el 2205 dice que en la facultad de vender se comprende la de recibir el precio; los incisos 11 y 12 del 2729 exigen que se registren los poderes generales ó especiales que se confieran para el desempeño de toda clase de negocios, excepto los conferidos para sólo pleitos, y todos los documentos que se otorgan ó protocolizan por ante un Notario; el 2751 dice que ninguno de los títulos sujetos á la inscripción ó registro, hace fe en juicio ó ante ninguna autoridad, empleado ó funcionario público, si no ha sido inscrito en el libro respectivo; y el 1780 dice que la falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los actos ó contratos en que las leyes exigen esa solemnidad, sin la cual se mirarán como no ejecutados ó celebrados. Además, el inciso 2.° del artículo 794, declara que no es justo título el conferido por una persona en calidad de mandatario ó representante legal, sin serlo; de todo lo cual deduce el recurrente que Inocencio Rosero y Tertuliano Manzano no tenían título ninguno para presentarse á demandar á Concepción Gómez, porque las escrituras con que han pretendido acreditar sus derechos son nulas, y que la sentencia que declaró lo contrario, ha violado las disposiciones que se dejan citadas.

Es verdad que el artículo 3.° de la Ley 27 de 1883 dijo lo siguiente:

"Artículo 3.° El mandato, para el otorgamiento de escritura pública, podrá conferirse por medio de un memorial dirigido al Notario del Circuito respectivo, y será presentado al Juez del lugar de la residencia del poderdante, para que este funcionario extienda á continuación una diligencia autorizada por su Secretario, en que exprese que dicho memorial ha sido presentado personalmente por el interesado. La autoridad política respectiva certificará en seguida, si el Juez y Secretario que firman, ejercen las funciones de tales. Este memorial se insertará en la escritura del caso."

Sin embargo, bien se ve que esta disposición legal es posterior al otorgamiento de las escrituras números 283 y 177, que fueron otorgadas en nombre de Filomena Rosero á Inocencio Rosero y Tertuliano Manzano, las cuales son del año de 1882, cuando no regía en el Cauca la disposición que se acaba de trascribir.

Si esta disposición hubiera sido anterior á tales escrituras, y si en virtud de ella se hubieran podido otorgar válidamente aquellos poderes y las escrituras mencionadas, la Corte no tendría para qué ocuparse en este punto, por la sencilla razón de que aquella ley no tiene con las nacionales en vigor actualmente la uniformidad exigida para la casación de la sentencia, y en tal caso sería acerca de este punto inadmisible el recurso; pero como dicha ley es posterior á las escrituras y no existe otra anterior en cuya virtud las mencionadas dos escrituras se otorgaran, visto es que los poderes, por medio de los cuales Filomena Rosero trató de acreditar á Ramón Pérez y José María Sánchez, para que otorgaran dichas escrituras (que en efecto otorgaron ante el Notario público de Popayán en Julio y Marzo de 1882, bajo los números 283 y 177, en favor, respectivamente, de José Inocencio Rosero y Tertuliano Manzano) poderes que se hallan insertos en tales escrituras, las cuales se han acompañado en copia y figuran en los folios de 1 á 6 del cuaderno principal, no tienen valor ninguno ante la ley, ni las escrituras con ellos extendidas pueden estimarse como justos títulos traslaticios de dominio en virtud de los cuales, los actores Rosero y Manzano, hayan adquirido la propiedad de los inmuebles disputados, ni en consecuencia puedan, como dueños de ellos, reivindicarlos.

Acerca de esto, la sentencia acusada no expone más argumentos para sustentar lo en ella resuelto, sino el de que la nulidad de dichas escrituras, alegada por la parte demandada como excepción perentoria, no merece que se considere con tal carácter, porque, dice, "que la nulidad excepcionada no podía destruír ni *enervar* la acción ejercitada por los demandantes," y que "esas nulidades de las escrituras pudieron ser, además, materia de acción;" argumento acerca del cual el recurrente sostiene que implica error de derecho, en cuanto da á entender que la nulidad de una obligación no se puede oponer como excepción perentoria, siendo perfectamente cierto que el artículo 479 del Código Judicial, la incluye entre las excepciones de esa especie.

La Corte halla que es fundada esta observación del recurrente, como que si son nulos los títulos con que los demandantes se presentaron á ejercitar su acción, y si en consecuencia de esa nulidad no son ellos dueños de los inmuebles disputados, no tienen derecho á reivindicarlos, aunque la venta que de ellos hubiera hecho Concepción Gómez el año de 1877 á Juan E. Santacruz, deba considerarse como venta de cosa ajena y traer consigo la acción reivindicatoria en el verdadero dueño de ellos.

Ni carece tampoco de fundamento la alegación que el recurrente hace de que incurrió el Tribunal en error de derecho al afirmar en la sentencia que el contrato celebrado por la Gómez con Santacruz, mediante la escritura número 266 de 1877, fuera simulada, fundándose para ello en la simple afirmación hecha por la Gómez en el poder judicial que corre al folio 1.° de los autos acumulados; pues es evidente

que dicha afirmación no es prueba plena del hecho de la simulación.

Mas no son éstas las únicas razones en que debe fundarse una decisión que deseche la acción reivindicatoria de los actores en el pleito Rosero y Manzano, y absolver, en consecuencia, á la parte demandada, sino que existe otra de no menos fuerza y que se deriva del examen referente al juicio acumulado, ó sea al de sucesión de Graciano Caicedo, examen al cual se procede.

Según el artículo 1424 del Código Civil caucano (1405 del nacional) las particiones se anulan y rescinden de la misma manera y según las mismas reglas de los contratos; y es verdad que á los folios 25 y 26 del cuaderno respectivo, se halla la cuenta que los partidores Leonidas Sarmiento y M. Zamora, presentaron al Juez de Popayán, el seis de Octubre de 1880, y que en tal documento aparece que á Filomena Rosero se le adjudicaron todos los inmuebles de la mortuoria, más una mula, todo por valor de mil quinientos noventa y cuatro pesos ($ 1,594); que á Concepción Gómez se le adjudicaron los semovientes por valor de mil quinientos treinta y cuatro pesos cuarenta y siete y medio centavos (1,534-47½), y que para el pago de los gastos de la mortuoria, por valor de doscientos cincuenta y dos pesos ($ 252) se señalaron otros semovientes.

De manera que toda la cuenta queda reducida á lo que se expresa á continuación:

Pago de su hijuela á Filomena Rosero.....	$ 1,594 ...
Pago de su hijuela á Conccepión Gómez.....	1,534-47½
Pago de gastos.....	252 ...
Suman las tres partidas.....	$ 3,380-47½

Sin embargo, en la cuenta se dice que sólo suman tres mil trescientos diez y nueve pesos ($ 3,319), que es á lo que ascienden los inventarios, como puede verse en los folios 7 y 8. Hay, pues, error en dicha cuenta. Pero aunque el Juez la aprobó sin observación alguna, según aparece en el auto de fecha veintitrés de Octubre de mil ochocientos ochenta, folio 28 vuelto, así como por auto de fecha cuatro de Marzo de 1881, dispuso dar la posesión efectiva de los bienes adjudicados á las dos herederas, estos dos autos no están notificados á las partes, de manera que no se han ejecutoriado, y el juicio está pendiente.

Es verdad que, como se ha visto yá, de la cuenta trascrita resulta que á la viuda de Francisco Caicedo, ó sea á Filomena Rosero, se le liquidó en calidad de heredera de su marido, en la sucesión de Graciano Caicedo, una hijuela de mil quinientos noventa y cuatro pesos ($ 1,594), para cuyo pago se le adjudicaron todos los inmuebles que figuraban en la mortuoria, mientras que á la viuda del mismo Graciano, ó sea á Concepción Gómez, sólo se le liquidó una hijuela de mil quinientos treinta y cuatro pesos cuarenta y siete y medio centavos ($ 1,534-47½), que se le debían pagar con el valor de la mayor parte de los semovientes; es decir, que á ésta última se le asignó por todo haber una suma, poco más ó menos, sesenta pesos menor de lo que se asignó á la Rosero; haciendo caso omiso de las disposiciones legales pertinentes sobre disolución de la sociedad conyugal y partición de gananciales, según se hallan expuestas en el capítulo quinto, título 22, libro 4.° del Código Civil del Cauca.

Empero, á este respecto la Corte observa lo siguiente:

Que siendo cierto, como se ve al folio 28 vuelto del cuaderno respectivo, que la sentencia de veintitrés de Octubre de 1880, aprobatoria de la partición de los bienes de Graciano Caicedo, y el auto adicional ó complementario de fecha cuatro de Marzo de 1881, no se han notificado á las partes, y que, en consecuencia, aquel juicio debe considerarse pendiente; cierto también que ni en la partición ni en los inventarios que la precedieron se determinaron en ninguna forma los linderos de los inmuebles que se adjudicaron á la Rosero, y que, de consiguiente, no es posible establecer identidad entre dichos inmuebles y los que son objeto de la demanda; y cierto, en fin, que, según se deja expuesto, en esta partición se incurrió en el error cardinal y manifiesto de no haber liquidado la sociedad conyugal que existió entre Graciano Caicedo y Concepción Gómez, y de haber privado á ésta de sus derechos á los gananciales que debían corresponderle como cónyuge superviviente, la Gómez tiene hoy derecho perfecto de apelar de aquella sentencia, á fin de que surtido en debida forma el recurso, haga valer en él todos los que la asistan, de conformidad con las leyes.

Y esta consideración contribuye á patentizar al propio tiempo lo ineficaz de los fundamentos con que los actores, Rosero y Manzano, han intentado su acción, ya que si el argumento en que ellos apoyan la fuerza de tales fundamentos es el carácter que suponen tenía Filomena Rosero como adjudicataria de los inmuebles por ella vendidos á ellos, y si dicho carácter no puede aceptarse como hecho consumado, por estar pendiente el juicio de sucesión de Graciano Caicedo, ni los actores en el pleito ni su causante Filomena Rosero, tienen acción reivindicatoria sobre tales inmuebles, por no ser dueños de ellos.

De todo lo expuesto se colige rectamente:

1.° Que efectivamente en la sentencia acusada ocurre la primera causal de casación de que trata el artículo 369 de la Ley 105 de 1890; 2.° que el contrato que consta en la escritura número 266 de 1877, debe considerarse como contrato de venta de cosa ajena; 3.° que los contratos que rezan las escrituras números 283 y 177 de 1882, son nulos, porque fueron aquellas escrituras otorgadas por individuos que no tenían el carácter legal de apoderados; y 4.° que el juicio de sucesión de Graciano Caicedo está pendiente y pueden interponer contra la sentencia aprobatoria de la partición, tan luégo como sea notificada, recurso de apelación, las partes que se consideren perjudicadas con ella.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, anula la sentencia que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán pronunció el día primero de Agosto último, en el juicio promovido por José Inocencio Rosero y Tertuliano Manzano, sobre nulidad de un contrato y reivindicación de unos inmuebles.

Y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley 100 de 1892, procede á dictar el fallo que reemplaza al que queda anulado, y

RESUELVE:

Primero. Absuélvese á la parte demandada de los cargos contra ella formulados sobre nulidad del contrato celebrado por Concepción Gómez con Juan E. Santacruz, que consta en la escritura otorgada bajo el número 266, el veintiséis de Julio de 1877, ante el Notario público del Circuito de Popayán, y sobre reivindicación de unos inmuebles;

Segundo. Declárase probada la excepción de nulidad opuesta por la parte demandada, respecto de los títulos con que los demandantes principales intentaron la acción reivindicatoria;

Tercero. No ha lugar á declarar la nulidad del juicio de sucesión de Graciano Caicedo, por estar dicho juicio aun pendiente y tener las partes que se crean perjudicadas con la partición derecho á interponer contra ella recurso de apelación.

Notifíquese, cópiese, publíquese, insértese en la *Gaceta* y devuélvase el expediente al lugar de su procedencia.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintinueve de Mayo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Por la muerte de Sergio López, acaecida el 15 de Septiembre de 1876, en el paraje de "La-Buitrera" (Cuchilla del Tambo), defendiendo los principios que informan las instituciones actuales de la República, en el empleo de Sargento 2.° de una de las Compañías del *Batallón Córdoba*, su esposa Leticia Moriones dió poder al doctor Salvador Valencia Fernández, vecino de esta capital, para que en nombre de la poderdante instaurase ante este Supremo Tribunal

demanda contra el Tesoro de la Nación, y que, con audiencia del Ministerio Público se declare á su legítima hija Cristina López, menor de edad, en el goce de la recompensa á que ésta tiene derecho conforme á la Ley 84 de 1890, sobre la materia, admitida la demanda, y sustanciada por los trámites legales, con previa audiencia del señor Procurador general de la Nación, la Corte pasa á dictar el fallo de su incumbencia.

De los documentos presentados con la demanda y de los que posteriormente se han agregado al expediente, resultan comprobados los siguientes hechos fundamentales de la acción:

1.° El matrimonio contraído por Sergio López con Leticia Moriones, ante el Cura Párroco de la iglesia de Dolores, Presbítero Juan H. Realpe, con arreglo á las instituciones canónicas, á 10 de Mayo de 1873. (Foja 11);

2.° El nacimiento de Cristina López según la partida de bautismo extendida en el respectivo libro parroquial, por el Cura, Presbítero Francisco A. Valverde R., con fecha 25 de Julio de 1876, á la cual se refiere el certificado del actual Párroco, Presbítero Manuel María Malo, que corre á la foja 11 vuelta;

3.° La muerte de Sergio López, verificada en el combate de "La-Buitrera" (Cuchilla del Tambo), el 15 de Septiembre de 1876, donde recibió la herida que le produjo la muerte, peleando como Sargento 2.° en favor de los principios que hoy sirven de base á las instituciones políticas de la República. Este hecho consta de las declaraciones juradas, rendidas ante el Juez de lo civil del Circuito de Popayán, en el año de 1891, con asistencia del Fiscal del mismo Circuito, los cuales testigos fueron Pablo Perafán, José Rafael Estela y Cornelio Córdoba, vecino del Municipio de Dolores, quienes afirman que fueron compañeros de armas de López, en el combate referido, donde lo vieron herido, y después muerto en el campo de batalla;

4.° Que Leticia Moriones, esposa de López, sólo tuvo una hija en el matrimonio que contrajo con López, llamada Cristina;

5.° Que tanto la esposa de López, como su hija Cristina vivieron en buena armonía con el mencionado López hasta que éste murió, como queda dicho; observando aquéllas antes y después de la muerte de López buena conducta moral;

6.° Que Cristina López es muy pobre y carece de los recursos suficientes para su subsistencia;

7.° Que habiendo contraído Leticia Moriones segundas nupcias con Pedro Antonio López, fué necesario nombrar guardador á la menor Cristina López, como en efecto fué nombrado el General José María González U., quien después que se le discernió el cargo, confirió poder al propio apoderado doctor Salvador Valencia Fernández, y éste, en virtud del nuevo nombramiento, ha continuado interviniendo en el presente juicio;

8.° Leticia Moriones y Cristina López, esposa la primera é hija legítima la segunda de Sergio López no figuran en el registro de pensionados de la República, y en los libros de la Sección 3.ª no hay constancia de que dichas personas hayan recibido recompensa del Tesoro nacional, por razón de la muerte del mencionado López. Esto lo certifica el señor Ministro del Tesoro, con fecha 6 de Febrero de 1892. (Foja 19).

A mérito de todo lo relacionado y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.°, 5.° inciso 2.° y 9.°, de la Ley 84 1890, y con el parecer del señor Procurador general, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve que Cristina López, menor de edad é hija legítima de Sergio López, muerto en "La-Buitrera" (Cuchilla del Tambo), en 1876, tiene derecho al goce de la recompensa unitaria definitiva de ochocientos diez y seis pesos ($ 816), cantidad igual al sueldo del Sargento 2.° en cuatro años.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial*, avísese al señor Ministro del Tesoro y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO. *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, veintinueve de Mayo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Federico Cortecero, vecino de Cartagena, demandó ante la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, el reconocimiento á cargo del Tesoro de la República, de dos mil cien pesos ($ 2,100), provenientes de lo siguiente:

1.° Valor de una quinta con sus muebles, situada al pie de la Popa, fuera de las murallas de la plaza de Cartagena, que fué destruída completamente durante el sitio de esta plaza en el año de mil ochocientos ochenta y cinco por la artillería del fuerte del Reducto, para desalojar á las fuerzas rebeldes, que se habían situado en la dicha quinta $ 1,600

2.° Valor de los daños causados en una casa del demandante, situada en el barrio de Jetsemaní de la ciudad de Cartagena por las bombas explosivas que arrojaban los sitiadores desde el castillo de San Felipe... 500

Suma..... .....$ 2,100

La Comisión negó el reconocimiento, porque ninguna ley de las que reglan esta materia reconoce á cargo del Tesoro público los daños que se causan con motivo de operaciones de guerra, y su resolución fué confirmada por el Ministerio del Tesoro en siete de Marzo del año en curso.

La Corte Suprema, á cuyo conocimiento se ha elevado este negocio por recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, debe confirmar esta decisión, como lo ha hecho en otros muchos asuntos iguales, porque las leyes que le dan jurisdicción especial en estos casos sólo reconocen derecho á indemnización del Tesoro público por los suministros, empréstitos y expropiaciones hechos al Gobierno, y las exacciones causadas por los rebeldes á amigos y sostenedores del mismo Gobierno. Pero como los daños que resultan necesariamente de operaciones de guerra, no tienen ninguna de esas calidades y se consideran aún en derecho de gentes, como meros accidentes ó casos fortuítos, y se equiparan á los que causaría un incendio por el rayo, una inundación etc., no tiene el Estado obligación de pagarlos, á no ser que por motivos de equidad, si su Tesoro lo permite, decrete voluntariamente una indemnización, como lo han hecho algunos Gobiernos en casos análogos.

En tal virtud, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la providencia apelada.

Déjese copia de esta resolución, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA. — BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS. — MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO. — ANÍBAL GALINDO. *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, treinta de Mayo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Lorenzo Durán, vecino de Popayán, solicita por conducto de su apoderado, Salvador Valencia Fernández, que se le otorgue recompensa militar, por causa de invalidez relativa contraída en servicio de principios análogos á los que informan las actuales instituciones.

Ha comprobado con declaraciones de cinco testigos hábiles, que dan razón satisfactoria de su dicho, que Durán fué soldado del *Batallón Cauca*, y que como tal combatiendo en defensa de principios sustancialmente idénticos á los que forman las instituciones hoy vigentes, recibió dos heridas, en uno de los tiroteos que tuvieron lugar en el puente del Cauca, en el mes de Abril de mil ochocientos setenta y siete, en el hombro y brazos derechos.

Con el reconocimiento practicado ante el Gobernador del Departamento del Cauca por los profesores en medicina, doctores Domingo Cajiao, Juan N. Wallis y Domingo Arboleda, que dicho Durán tiene las cicatrices de una herida de bala que entrando por la articulación del hombro derecho, atravesó los músculos de esa parte, principalmente el del

toides, rompió el húmero en su cabeza articular fué lamiendo el omoplato por su cara interna y salió á un centímetro de la espina dorsal; que esta herida ha dejado muy limitados los movimientos del brazo derecho, y por consiguiente se ha ocasionado una invalidez relativa.

Con certificaciones del Ministerio del Tesoro está acreditado que el demandante no ha recibido recompensa del Tesoro público.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, y aplicando los artículos 1.°, 5.°, 9.° y 11 de la Ley 84 de 1890, declara que Lorenzo Durán, vecino de Popayán, es acreedor á una recompensa unitaria y definitiva de trescientos cincuenta y dos pesos ($ 352), por la invalidez relativa de que se ha hecho mérito, que le será pagada del Tesoro nacional.

Comuníquese esta sentencia al Ministerio del Tesoro, dése copia de ella y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS. M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO. *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, treinta de Mayo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Como apoderado sustituto de Ignacio E. Fortich, vecino de Bocachica, en el Departamento de Bolívar, estableció Rufino Gutiérrez ante la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, el veinticuatro de Noviembre de 1887, demanda contra el Tesoro nacional, para que se reconociese á favor de su constituyente la suma de novecientos noventa y ocho pesos noventa centavos ($ 998-90), procedente de exacciones que dijo le habían causado á éste las fuerzas nacionales durante la pasada guerra civil de 1884 á 1885. Acompañó una relación que el mismo interesado presentó al Gobernador de aquel Departamento de lo que constituye el objeto de la reclamación y otros documentos pertinentes, entre ellos una lista en que Fortich detalla todo lo que perdió en el incendio de Bocachica, el tres de Abril de 1885, producido por los disparos de cañón de las fuerzas que hacían la defensa de Cartagena contra los rebeldes, lista que se refiere á las mismas especies puntualizadas en la relación antes citada.

Aunque estos documentos aparecen corroborados por las declaraciones de varios testigos, recibidas por Juez competente y con intervención de un Agente del Ministerio Público, la Comisión se abstuvo de reconocer el crédito reclamado, por cuanto se trata de perjuicios causados en una función de armas y no de suministros y expropiaciones. Pasado el asunto al Ministerio del Tesoro fué confirmada la resolución aludida, y habiendo sido apelada para ante la Corte, previa la secuela correspondiente, procede á dictar su fallo con arreglo á la legislación aplicable.

En efecto, ninguna ley autoriza el reconocimiento de tales perjuicios en favor de los damnificados, sin duda porque se ha tenido en cuenta la doctrina que sobre este punto priva en las naciones civilizadas, las cuales consideran los daños provenientes de operaciones de guerra como meros accidentes ó casos fortuítos que se equiparan á los que causaría un incendio y que el Estado no tiene obligación de pagar, á no ser por motivo de equidad.

Fundado en dicha doctrina este Supremo Tribunal, y en lo que expresamente establece el artículo 1.° de la Ley 44 de 1886, que regula íntegramente esta materia, tiene decidido en muchos casos análogos que no son aplicables las disposiciones de la ley que acaba de invocarse.

En consecuencia, la Corte, de acuerdo con el parecer del señor Fiscal de la Comisión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la providencia apelada.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO. *Gabriel Rosas*, Secretario.

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, Mayo diez y ocho de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Consulta el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja el Acuerdo de siete de Noviembre del año próximo pasado, por el cual declara que el artículo 16 de la Ordenanza número 21 de 1888, expedida por la Asamblea departamental de Boyacá, no es lesivo de derechos civiles y que no le corresponde, por lo mismo, suspenderlo en ejercicio de sus atribuciones legales. Recibido el asunto en la Corte y surtida la tramitación que para el caso señala el artículo 147 del Código Político y Municipal, procede esta superioridad á resolver lo que corresponda.

Varios vecinos del Distrito municipal de Zotaquirá, excitaron, por medio de un memorial, al Concejo de Miraflores para que solicitara de dicho Tribunal la suspensión del artículo 16 de la Ordenanza en referencia, por cuanto este artículo dispone la reintegración de las veredas de "Suna" y "Rusa": al primero de los Municipios expresados, segregándolas del segundo, con grave perjuicio de esos vecinos, por las distancias que tendrán que recorrer para comunicarse con la cabecera de la entidad municipal á que han sido anexados. El Concejo acogió la excitación y gestionó de acuerdo con ella, según se ve del pedimento que obra de folios 14 á 17 del cuaderno que contiene lo actuado en primera instancia, fundándose, entre otras razones, en que aquella disposición es contraria al artículo 186 de la Constitución y al inciso 26 del artículo 129 del Código Político y Municipal, por no haberse consultado los intereses locales de las dos referidas secciones.

Como prueba del perjuicio á que se alude en el aparte anterior acompáñase una información de testigos, practicada á solicitud del Personero municipal del Distrito de Miraflores, de la cual resulta que ciertamente los partidos ó fracciones de "Suna" y "Rusa" están más cerca de la capital del último Municipio que de Zotaquirá; y la Corte, por su parte, hizo agregar al expediente un ejemplar auténtico del periódico oficial de Boyacá que contiene la Ordenanza motivo de este examen y un informe del Gobernador del Departamento, en que aparece que este empleado no solicitó de la Asamblea el cambio de límites ó la reintegración de que se trata; que esa Corporación procedió *motu proprio*, y sin la formalidad prevenida por el artículo 193 del Código Político y Municipal, tan necesaria para la promoción de nuevos Distritos, como para segregar un territorio determinado de uno de los existentes para agregarlo á otro, y, en suma, que el de Miraflores quedó con una población de 14,000 habitantes después de la reintegración.

El Tribunal se abstuvo de acceder á lo pedido, como se dijo antes, porque considera que la atribución primera, artículo 75 del Código de Organización Judicial, le confiere facultad únicamente para conocer de las solicitudes relativas á la suspensión de las Ordenanzas departamentales denunciadas por los particulares como lesivas de derechos civiles, en los casos en que se trate de evitar un grave perjuicio, y que esos derechos "son los que á cada uno pertenecen estrictamente por su persona considerados (sic) según las leyes del Código Civil," de donde deduce que el Poder Judicial sólo interviene en suspender una Ordenanza cuando ésta hiere intereses privados.

Estudiado el punto á la luz de los preceptos constitucionales y legales, se viene en conocimiento, sin mucho esfuerzo, de que la suspensión puede decretarse también cuando las Ordenanzas contravengan á la Constitución ó á la ley, ó cuando se refieran á asuntos que no sean de la incumbencia de las Asambleas. Tanto es así, que el artículo 144 del Código Político y Municipal supracitado concede acción popular, vencido cierto término, para solicitar la suspensión ante el respectivo Tribunal del Distrito Judicial en el caso de contravención.

Sucede sí que cuando la Corte conoce de una Ordenanza denunciada como lesiva de derechos civiles, en vez de resolver sobre la suspensión, decide sobre la validez ó nulidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 del Código relacionado. En los demás casos se limitará á resolver sobre la suspensión, y pasará el asunto al Congreso para que éste decida definitivamente sobre tal validez ó nulidad.

Por lo demás, siendo evidente que la Asamblea prescindió de las formalidades prevenidas en el Capítulo II, Título VI del Código tantas veces invocado, claro se está que contravino á estas disposiciones; y de aquí la inexequibilidad de la Ordenanza en la parte en que ella ha sido objetada, por lo cual debió suspenderla el Tribunal para darle estricto cumplimiento á la ley que previene aquellas formalidades.

A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador general, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca el Acuerdo del Tribunal del Distrito Judicial de Tunja, de fecha siete de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos, y suspende, en consecuencia, la ejecución del artículo 16 de la Ordenanza número 21 de 1888, expedida por la Asamblea del Departamento de Boyacá. Pásese este asunto al Congreso en sus próximas sesiones para que decida definitivamente sobre la validez ó nulidad del artículo suspendido.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y dése cuenta al Tribunal consultante.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO. *Gabriel Rosas*,—Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veinte de Mayo de mil ochocientos noventa y tres.

Antonio Papi Aizpuru, vecino de Panamá, ha interpuesto apelación del mandamiento ejecutivo librado contra él por el Agente Fiscal de esa ciudad para hacer efectiva la cantidad de setenta pesos ($ 70), procedente de contribución urbana que se recauda en esa ciudad á favor del Departamento.

Concedido el recurso para ante la Corte se ha remitido original el expediente, y dado en vista al señor Procurador general de la Nación, este funcionario, de acuerdo con resoluciones anteriores de este Supremo Tribunal, ha solicitado que la Corte se declare sin facultad para revisar el auto apelado y que se ordene la devolución del expediente á la Oficina de su origen, para que de allí se pase al Tribunal competente.

La Corte ha declarado yá que, desde que se expidió la Ley 5.ª de 25 de Agosto de 1892, por la cual se reformaron las leyes 48 de 1887 y 43 y 83 de 1888, relativas á la Legislación Fiscal y electoral del Departamento de Panamá, no pertenecen á la Nación otras rentas y contribuciones de las que se recaudan en aquel Departamento que las que se especificaron en el artículo 1.° de dicha Ley 5.ª, y como entre ellas no figura la que con el nombre de contribución urbana ha seguido recaudándose en Panamá, es claro que esta contribución no hace parte hoy de las rentas públicas nacionales, y por consiguiente, que no toca á la Corte, conforme al inciso 6.° del artículo 43 del Código de Organización Judicial, conocer de la apelación de los autos ejecutivos dictados por los recaudadores de la expresada renta.

Por tanto, la Corte Suprema, de acuerdo con lo pedido por el señor Procurador, se declara incompetente para conocer de la apelación de que se trata, y dispone que se devuelva el expediente á la Oficina de su origen, para que se le dé el curso legal.

Notifíquese, cópiese y publíquese en la *Gaceta*.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO. —*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Mayo veintiséis de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: José Hilario Cano ocurrió de hecho ante la Corte para que se le concediese el recurso de casación que le había sido negado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Panamá, y que aquél interpuso contra la sentencia de segunda instancia proferida por dicho Tribunal, en un juicio de nulidad de un interdicto promovido contra el recurrente por la Compañía Universal del Canal Interoceánico.

La Corte, por providencia de veintidós de Octubre del año próximo pasado, admitió el recurso de hecho interpuesto, y dispuso pedir al mencionado Tribunal los respectivos autos y citar á la parte contraria para que se presentase á estar á derecho en el recurso de casación. Librado el correspondiente despacho, tuvo su exacto cumplimiento y se devolvió á la Corte con los autos pedidos, en donde fueron recibidos desde el ocho de Febrero último. Pero no habiéndose consignado el papel necesario para darle curso al negocio ni hechose las gestiones necesarias para la continuación del juicio, según lo informa el Secretario de la Corte; transcurridos como están más de los sesenta días fijados por el artículo 122 de la Ley 105 de 1890, la Corte Suprema, en cumplimiento de lo dispuesto en dicho artículo, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara ejecutoriada la sentencia de fecha veinticinco de Noviembre de mil ochocientos noventa y uno, dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Panamá y contra la cual interpuso José Hilario Cano recurso de casación.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO. *Gabriel Rosas*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, treinta de Mayo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, consulta con esta Corte el auto de sobreseimiento que pronunció en veintinueve de Abril último, en favor de Pedro A. Pallares, ex-Fiscal del Circuito de Villeta y Prefecto de la Provincia de Guadnas, á quien se sindicaba del delito de falsificación de documento público.

El hecho motivo de la investigación consistió en que Pallares, siendo Fiscal del Circuito de Villeta, y habiendo dado una vista en la cual opinaba que debía hacerse comparecer al despacho del Juzgado á Ismael Cifuentes, con el objeto de que rindiese indagatoria en un sumario contra unos Recaudadores de Hacienda del Distrito de Nimaima, agregó á esa vista, después de que el expediente había salido de su poder y estado en el Juzgado, las palabras "puesto que yá no es empleado."

La Corte juzga, de acuerdo con el señor Procurador y con el Tribunal de primera instancia, que al hecho ejecutado por Pallares le faltan circunstancias esenciales para revestir carácter de delito de falsificación, porque no se descubre en él ánimo de adulterar el documento en perjuicio ó beneficio de la causa pública ó por interés particular, sino simplemente el intento de agregar la razón de su solicitud, que antes había omitido, agregación que, por otra parte, no alteraba la sustancia de la vista ni tenía importancia alguna.

Pallares ha debido hacer esto en una vista aparte, y no valerse de un medio irregular é inconveniente para expresar lo que había omitido; pero la forma ó medio á que ocurrió no puede ciertamente calificarse como falsificación maliciosa ó fraudulenta de documento público.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto consultado.

Notifíquese, cópiese en el libro respectivo, insértese en la *Gaceta* y devuélvase el negocio al Tribunal consultante.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO. *Gabriel Rosas*, Secretario.

IMPRENTA DE ANTONIO M. SILVESTRE.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AÑO VIII | Bogotá, 30 de Junio de 1893. | NÚM. 402.

CONTENIDO.

Págs.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

La confirmatoria de la resolución del Ministerio del Tesoro, dictada en la reclamción por suministros de Manuel José Alvarez C. (Magistrado ponente, doctor Botero Uribe)..... 305

La que declara probada la excepción de error de cuenta, propuesta en el juicio ejecutivo seguido contra Ignacio Castañeda, como rematador de la renta de aguardientes y degüello del extinguido Estado de Boyacá. (Magistrado ponente, doctor Isaza).. .. 306

NEGOCIOS CRIMINALES.

La confirmotoria de la sentencia pronunciada por el Consejo de Guerra en el juicio seguido contra el soldado Jacinto Casanova, del *Batallón Colombia* número 17. (Magistrado ponente, doctor Isaza)..... 308

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

El que declara inadmisible el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Panamá, dictado en el juicio seguido por Tomás Paredes contra Henry Ehrman, por honorarios de un pleito. (Magistrado penente, doctor Galindo)..... 309

El que revoca un auto dictado por el Administrador-Tesorero de la Aduana de Barranquilla, en la ejecución seguida contra la casa comercial de López Olier & Compañía. (Magistrado ponente, doctor Corrales)..... 311

El que niega la revocación pedida por Liborio D. Cantillo, como apoderado de Tomás Paredes, del auto de la Corte que declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por Paredes contra la sentencia del Tribunal de Panamá, en juicio seguido con Henry Ehrman. (Magistrado ponenté, doctor Galindo)..... 312

El que niega la revocación del auto de la Corte, dictado en la apelación interpuesta contra una providencia del Administrador de la Aduana de Barranquilla. (Magistrado ponente, doctor Corrales). 312

GACETA JUDICIAL.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, treinta y uno de Mayo mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: En veintiocho de Diciembre de mil ochocientos ochenta y siete, se presentó Manuel José Alvarez C., ante el Gobernador del Departamento de Antioquia, acompañando cuatro recibos sobre suministros de la guerra de mil ochocientos ochenta y cinco; y pidió que fueran registrados conforme á la Ley 44 de 1886, sobre empréstitos, suministros y expropiaciones. Tales recibos fueron expedidos á favor de Heliodoro, Liborio y Manuel María Mejía y Rafael Espinal, por el valor total de mil trescientos pesos ($ 1,300).

Posteriormente se presentó el veintiséis de Enero de mil ochocientos ochenta y ocho, ante la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, Manuel A. Valencia, titulándose apoderado de Manuel José Alvarez C., pero sin acompañar el respectivo poder, y solicitó en nombre de aquél el reconocimiento de mil quinientos setenta pesos treinta y dos y medio centavos ($ 1,570-32½), valor de varios recibos que acompañó á la demanda, entre los cuales están los cuatro de que se ha hecho mención.

La Comisión, por haber espirado el término de noventa días, dentro del cual debió haber ocurrido el interesado á perfeccionar el expediente, según la resolución publicada en el *Diario Oficial* número 8,563, de veintiuno de Septiembre de mil ochocientos noventa y uno, procedió á resolver la expresada reclamación; y en efecto, con fecha diez y ocho de Junio de mil ochocientos noventa y dos, la negó y absolvió á la República del cargo.

La resolución de la Comisión pasó en consulta al Ministerio del Tesoro, el cual la revocó en catorce de Octubre de mil ochocientos noventa y dos, y reconoció á favor del solicitante la suma de mil cuatrocientos cincuenta pesos sesenta y siete y medio centavos ($ 1,450-67½).

Andrés Lara se presentó en veintidós de Octubre de mil ochocientos noventa y dos, en nombre de su poderdante Manuel José Alvarez C., reclamando de dicha providencia, por haber habido error, según se dice, en reconocer solamente mil cuatrocientos cincuenta pesos sesenta y siete y medio centavos ($ 1,450-67½) y no mil ochocientos sesenta y un pesos sesenta y siete y medio centavos ($ 1,861-67½), conforme á la liquidación que se hizo en la resolución del Ministerio del Tesoro. También hace notar el error aritmético que dice existe en la demanda del folio 33, consistente en haber sumado allí cantidades que dan un total de mil quinientos setenta pesos treinta y dos y medio centavos ($ 1,570-32½), en vez de mil ochocientos setenta pesos treinta y dos y medio centavos ($ 1,870-32½), y como Lara expresó en el memorial respectivo que si no se corregía el error indicado, apelaba á la Corte, la Comisión le concedió el recurso, y se ocupa esta Superioridad en resolver la susodicha apelación.

Ante todo, la Corte debe definir el punto materia del recurso, pues aunque el apelante no expresó que reclamaba de la resolución del Ministerio del Tesoro en lo desfavorable, se comprende del memorial citado que esa fué su pretensión. De modo que la Corte no debe fallar sobre lo yá reconocido, es decir, sobre el crédito de mil cuatrocientos cincuenta pesos sesenta y siete y medio centavos ($ 1,450-67½), sino sobre si realmente hubo error aritmético en la resolución apelada.

El solicitante hace consistir dicho error, según el contexto de su memorial de fojas 42: 1.° en que dejó de incluírse el crédito de seiscientos pesos ($ 600), valor del recibo en que consta que Rafael Espinal pagó esa cantidad al Agente del Fisco nacional Julio Betancourt, por empréstito en la guerra de mil ochocientos ochenta y cuatro á mil ochocientos ochenta y cinco, y 2.° en haber sumado en la demanda del folio 33 las cantidades que allí se expresan, con el resultado de mil quinientos setenta pesos treinta y dos y medio centavos ($ 1,570-32½), en lugar de mil ochocientos setenta pesos treinta y dos y medio centavos ($ 1,870-32½).

Respecto del primer error observa la Corte que el señor Ministro del Tesoro procedió legalmente al omitir en el reconocimiento los seiscientos pesos ($ 600), valor del recibo de Rafael Espinal; porque no consta en el certificado del Ministerio de Hacienda en que se apoyó aquél para hacer el cargo á la Nación, que esa cantidad hubiera sido enterada como contribución de guerra en el Tesoro nacional. La Corte agrega, además, las siguientes razones: 1.ª que tal recibo no está reconocido por el que lo firmó, ni debidamente autenticado; 2.ª que aunque Manuel José Alvarez presentó el expresado recibo, en veintiocho de Diciembre de mil ochocientos ochenta y siete, ante el Gobernador del Departamento de

Antioquia, este empleado no certificó ni de conformidad con el Decreto de diez y siete de Febrero de mil ochocientos ochenta y seis, ni con el artículo 16 de la Ley 44 de 1886. De modo que es infundada la pretensión del apelante.

En cuanto al segundo error, la Corte ha verificado la operación de sumar las cantidades que expresa la demanda del folio 33, y ha hallado que la operación aritmética fué bien ejecutada, de manera que no alcanza á comprender por qué el apelante hace tal argumentación.

En mérito de lo expuesto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el dictamen del Fiscal especial, confirma la resolución del Ministerio del Tesoro, de fecha catorce de Octubre de mil ochocientos noventa y dos, número 3,313.

Notifíquese, cópiese, publíquese esta resolución en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA. — BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.— ANÍBAL GALINDO. — *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, Junio seis de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: El Administrador general de Hacienda del Departamento de Boyacá, liquidó la cuenta de Ignacio Castañeda, como rematador de las rentas de aguardientes y degüello del extinguido Estado de Boyacá, con fecha siete de Noviembre de mil ochocientos ochenta y nueve. Esta liquidación, que, dice, ha sido formada en observancia de la orden comunicada por la Secretaría de Hacienda en nota de treinta y uno de Octubre de mil ochocientos ochenta y nueve, y de acuerdo en cuanto al principal, con la resolución del Gobernador, de fecha nueve de Mayo del mismo año, y en cuanto á intereses, de conformidad con lo resuelto por la Secretaría de Hacienda, en nota de seis del mismo mes de Noviembre, sirvió de base al mandamiento ejecutivo que en uso de la jurisdicción coactiva, libró el Juez ejecutor del Departamento de Boyacá en veintiocho del mismo mes de Noviembre, contra el citado Ignacio Castañeda, por la suma de cinco mil seiscientos sesenta y un pesos cuarenta y cinco cs. ($ 5,661-45), los intereses de demora, á razón del cuatro por ciento mensual, el cinco por ciento de recargo y los costos y costas de la cobranza.

La citada liquidación, desprovista de todo documento que le sirviera de apoyo ó comprobación, es del tenor siguiente:

" Debía el señor Ignacio Castañeda el 30 de Noviembre de 1886, fecha en que celebró arreglos (que la Asamblea no aprobó) con el Gobierno del Departamento, por saldo como rematador de las rentas rentas de aguardientes y degüello del mencionado Departamento del Centro del extinguido Estado de Boyacá, inclusive el Distrito de Zotaquirá, en la de degüello..... $ 4,967-05

" Saldo á su cargo causado después de los arreglos, hasta la fecha en que terminaron los respectivos remates..... 498-65

" Suma total del saldo á su cargo..... $ 5,465-70

" Se descuenta por abono:

" Cuatrocientos pesos que consignó el 8 de Julio de 1887, en cumplimiento de una de las estipulaciones de aquellos arreglos..... 400 ...

" Quinientos pesos decretados por rebaja por la Asamblea legislativa en sus últimas sesiones... 500 ...

" Queda reducido el crédito de Castañeda á.. $ 4,565-70

" Premios de demora, á razón del 4 por ciento mensual, sobre esta suma, computados según la aludida resolución de la Secretaría de Hacienda, *desde el 9 de Mayo del presente año y liquidados* hasta el 9 del presente mes 1,095-75

" Suma total que se liquida á cargo de Castañeda..... $ 5,661-45

" Tunja, 7 de Noviembre de 1889.

" El Administrador, " CEFERINO MATEUS."

Notificado al deudor el auto ejecutivo y embargado, depositado y avaluado un inmueble que presentó, fué citado para sentencia de pregón y remate, después de lo cual, y en tiempo oportuno, propuso por medio de apoderado que lo representó en el juicio, las excepciones de pago y error de cuenta. Los autos pasaron al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, competente para conocer del juicio de excepciones en primera instancia, y habiéndose abierto á prueba y recibido la mayor parte de las que pidió el ejecutante, el Tribunal, previa citación, dictó sentencia en veinte de Octubre del año próximo pasado, declarando no probadas las excepciones propuestas.

De este fallo apeló el apoderado del ejecutado, se le otorgó el recurso para ante esta Suprema Corte, se elevaron á ella los autos, se ha sustanciado dicho recurso, de acuerdo con las prescripciones de la ley, y ha llegado el tiempo de decidirlo, lo que se hace, teniendo en cuenta las consideraciones siguientes:

La liquidación que sirvió de recaudo ejecutivo, no es un documento ó acto de los que tienen mérito de ejecución conforme al artículo 1,010 del Código Judicial, ni es tampoco ninguno de los tres señalados en el artículo 1096 del mismo Código, porque ni puede ser calificado como alcance deducido contra un responsable del Erario por alguna Oficina de Cuentas, ó por otro empleado con funciones análogas, ni es copia de decreto alguno sobre imposición de multa. El caso en que ha querido colocársele, es probablemente el segundo de dicho artículo, que trata de las copias de los reconocimientos hechos por los recaudadores á cargo de los deudores al Fisco por rentas ó contribuciones, y tampoco puede considerarse en este caso la liquidación antes trascrita, porque ella no contiene copia de asientos ó reconocimientos á cargo de Castañeda por rentas ó contribuciones, sino partidas desprovistas de toda comprobación, que se dice provienen de un saldo liquidado cuando se hizo un arreglo no aprobado, sobre el cual se dedujeron intereses por orden del Gobernador de Boyacá.

De modo que si el ejecutado hubiera apelado del mandamiento ejecutivo, éste habría sido revocado, por no estar basado en un acto ó documento de los que aparejan ejecución.

Cuando las obligaciones de una persona para con el Erario público tienen su origen en un contrato celebrado con el Gobierno, la ejecución debe tener por fundamento preciso é indispensable el documento en que conste el contrato, porque es sólo de éste de donde se derivan los derechos y obligaciones de cada una de las partes, y el juicio ejecutivo por su naturaleza requiere una prueba plena y preconstituída.

Una simple liquidación, formada por orden del acreedor, sin contener copia de los asientos ó reconocimientos á cargo de los deudores, y á la cual no se acompañan los contratos fuente de la obligación, no es una prueba de la existencia de ésta, y el juicio, que en tan débil fundamento se apoya, está minado por su base.

El ejecutado ha propuesto sólo las excepciones de pago y error de cuenta, porque la ley no le permite alegar fuera de éstas sino la de falsedad del documento en todo ó en parte sustancial; pero juzga la Corte que la excepción de error de cuenta, no definida por la ley, no se limita á simples errores aritméticos ó de cálculo, que en cualquier tiempo pueden corregirse, sino que se extiende también á la inclusión en la cuenta de partidas indebidas ó respecto de las cuales no resulte claramente la obligación de pagarlas de alguno de los actos ó documentos que aparejan ejecución en los casos comunes ó en los especiales de la jurisdicción coactiva.

En este sentido puede muy bien sostenerse que hay error en todas las partidas de la cuenta que sirvió de instrumento ejecutivo.

Lo hay en la primera partida, porque ésta se refiere á una liquidación de treinta de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, fecha en que se dice haberse celebrado con el deudor arreglos que la Asamblea no aprobó, y como no se conocen esos arreglos improbados, ni las bases que sirvieron para formar la liquidación, ni si ella está conforme con la escritura otorgada por Castañeda, que no figura en autos, tal partida no tiene más apoyo que el dicho del acreedor y no

puede admitirse por sí sola como fundamento de la obligación.

Aunque es verdad que pueden servir para fundar una ejecución los reconocimientos hechos por los recaudadores á cargo de los deudores por rentas ó contribuciones, eso se refiere únicamente á aquellos deudores que lo son directamente por haber causado á deber al Fisco una contribución, impuesto ó renta, como sucede con las contribuciones de Aduanas, ó con el impuesto directo, respecto de las cuales la deuda no se contrae por voluntad de la persona sino por ministerio de la ley, y en que la obligación, por su naturaleza misma, no puede constar en documento firmado por el deudor.

Los deudores al Erario, á virtud de contratos ó remates sobre arrendamiento de rentas ó contribuciones, como lo es Castañeda, no se encuentran en el caso de que se trata, porque su obligación, que es voluntaria y procedente de un contrato, debe tener por prueba y fundamento el mismo contrato, que el Juez debe examinar para juzgar de su validez y la extensión y naturaleza de los derechos y obligaciones que de él emanen.

La segunda partida de la cuenta, que expresa ser el saldo á cargo de Castañeda después de los arreglos hasta la fecha en que terminaron los respectivos remates, se encuentra en el mismo caso, y no puede ser admitida como corriente mientras no se conozca la causa de deber.

La partida de abono de cuatrocientos pesos ($ 400), que se dice haber consignado Castañeda el ocho de Julio de mil ochocientos ochenta y siete, en cumplimiento de una de las estipulaciones de aquellos arreglos, da á conocer que las obligaciones que quieren hacerse efectivas por el ejecutante provienen no sólo del contrato primitivo sino también de un arreglo que se dice fué improbado, cuyos términos se ignoran, y que sin embargo se tiene en cuenta tanto para el cargo como para la data de la cuenta.

La partida de mil noventa y cinco pesos setenta y cinco centavos ($ 1,095-75) por intereses á la rata del cuatro por ciento mensual, computados, según se expresa, de acuerdo con una resolución de la Secretaría de Hacienda, no puede tampoco admitirse como corriente, por no figurar en autos los fundamentos que haya habido para liquidar en esos términos los intereses, y porque, como lo observa con mucha razón el señor Procurador, en esa liquidación puede haberse liquidado intereses sobre intereses, lo que es indebido.

En resumen, para que la cuenta formada con el objeto de fundar esta ejecución no pudiera ser tachada de errores ó de vicios, ó, más bien, para que ella pudiera ser admitida como exacta ó corriente, debería haberse acompañado la escritura ó escrituras en que consten las obligaciones que Castañeda contrajo para con el extinguido Estado de Boyacá y una cuenta que contuviese todas las partidas de cargo y data referentes á esos contratos; de otro modo es imposible conocer el verdadero saldo á cargo del deudor, y la cuenta debe suponerse afectada de error mientras no contenga los elementos necesarios para juzgar sobre la naturaleza y alcance de la obligación del ejecutado.

Las observaciones que acaban de hacerse pueden ser consideradas como glosas á la cuenta por falta de comprobante de las partidas de cargo que figuran en ella, comprobante que ha debido anticipar el ejecutante, y sin el cual no es razonable dar por establecida ó justificada la obligación que pretende hacerse efectiva. Y no habiendo el ejecutante dado la prueba que en este caso le correspondía, es forzoso admitir el fundamento de la tacha ó glosa de la cuenta que le opone el ejecutado, ó lo que es lo mismo, declarar la existencia del error de cuenta.

A más de lo dicho, resulta que el ejecutado ha acompañado un legajo de recibos (fojas 92 á 116) suscritos por el Administrador de Hacienda del Estado de Boyacá, con los cuales se acredita el pago de varias cantidades por el remate de la renta de aguardientes y degüello, y no se sabe si esas cantidades están ó no abonadas en el saldo que se liquidó en treinta de Noviembre de mil ochocientos ochenta y nueve, y no puede saberse si ese saldo es ó no corriente mientras no figure, por una parte el documento que acredite la obligación ó causa de deber, y por otra, una cuenta en que figuren todas las partidas de cargo y data.

Con motivo de la guerra de 1884 y 1885, el Presidente provisional del Estado de Boyacá, expidió el Decreto que á continuación se copia:

"DECRETO NÚMERO 9,

"sobre recaudo de la renta de degüello.

"*El Presidente provisorio del Estado de Boyocá,*

"CONSIDERANDO:

"Que no se ha organizado por el funcionario respectivo el modo de hacer efectivo el derecho de degüello que establece el Decreto del Poder Ejecutivo nacional número 62, del presente año;

"Que por consecuencia de esto, hay una completa anarquía en el cobro de tal renta, no recaudándose ni el derecho del Gobierno nacional, ni el del Estado;

"Que el establecimiento de Carnicerías oficiales no ha producido buenos resultados al Gobierno, puesto que sus productos han sido muy pocos,

"DECRETA:

"Art. 1.° El derecho de degüello de tres pesos por cada cabeza de ganado mayor que se mate en el territorio del Estado, continuará cobrándose en los mismos términos que antes de la guerra:

"Art. 2.° Los actuales rematadores de la expresada renta, cumplirán con las obligaciones que contrajeron al hacer los remates, y tendrán derecho á hacer los reclamos del caso, debidamente comprobados, por los perjuicios que hubieren sufrido durante el tiempo en que ha estado suspendido el cobro de tal renta.

"Art. 3.° Deróganse los artículos 1.° y 2.° del Decreto del Comandante general de las fuerzas nacionales en el Estado, de 25 de Enero último, sobre arbitrios rentísticos.

"Dado en Tunja, á 7 de Marzo de 1885.

"CLODOMIRO TEJADA.

"El Secretario de Hacienda,

"*Francisco Mendoza P.*"

Este Decreto, emanado de la autoridad que entonces administraba ó gobernaba el Estado con facultades extraordinarias, acredita plenamente que durante algún tiempo estuvo suspendido el cobro de la renta de degüello, que se establecieron carnicerías oficiales, y que, por tal motivo, los rematadores sufrieron perjuicios y se les reconoció derecho á reclamar tales perjuicios. Sin que se acredite si en la cuenta está ó no incluído el tiempo de la suspensión del cobro del impuesto de degüello por los rematadores, porque el Gobierno había tomado á su cargo esa renta, no es justo admitir la exactitud de la liquidación formada por el Recaudador; y aunque se expresa en ella que la Asamblea rebajó quinientos pesos, quizá en atención á la suspensión del cobro del impuesto y consiguientes perjuicios sufridos por el rematador, como una sola de las partes, no puede, de propia autoridad, fijar la cuantía del perjuicio sufrido y cuya existencia es evidente, es necesario para admitir la legitimidad de un cargo líquido ó que de la cuenta se deduzca la suma correspondiente al tiempo en que el rematador no pudo recaudar la renta, por haber tomado su administración el Estado ó la Nación, ó que la cuantía de ese perjuicio se fije por las partes de común acuerdo, ó por medio de un juicio.

Demás de esto es indudable que el Gobierno del Estado declaró rescindido el contrato celebrado con Castañeda, sobre arrendamiento de la renta de degüello, y reconoció el derecho del rematador á indemnización por los perjuicios que se le causaron en la guerra. Júzguese si no por las piezas que á continuación se insertan:

"Número 80.—República de Colombia.—Estado de Boyacá.—Jefatura departamental del Centro.—Tunja, 6 de Febrero de 1886.

"*Al señor Ignacio Castañeda, rematador de la renta de degüello del Departamento del Centro.*—Ramiriquí.

"Para su conocimiento y fines consiguientes, remito á usted copia del Decreto número 46, dictado por el señor Gobernador civil y militar del Estado, de fecha veintiocho de Enero

último, y por el cual se declaran rescindidos los contratos de arrendamiento de degüello del Estado, y se ordena la celebración de un nuevo contrato de dicha renta.

"Soy de usted atento servidor,

"ARQUIMEDES CALDERÓN."

"DECRETO NÚMERO 46,

"por el cual se declaran rescindidos los contratos de arrendamiento de la renta de degüello del Estado, y se ordena la celebración de un nuevo contrato de arrendamiento de dicha renta.

"*El Gobernador civil y militar del Estado,*

"CONSIDERANDO:

"Que por Decreto número número 616 de 1885 (21 de Septiembre) del Poder Ejecutivo nacional, se ordenó se cobrara en toda la República un derecho de cinco pesos por cada cabeza de ganado mayor que se ofreciera al consumo;

"Que este derecho debe principiar á cobrarse desde el primero de Febrero del presente año;

"Que los rematadores del derecho de degüello del Estado han solicitado que, al principiar á cobrar el derecho nacional de degüello, se declaren rescindidos los contratos que ellos celebraron para la recaudación de esta renta;

"Que el Poder Ejecutivo nacional resolvió fijar como *máximum* del impuesto de degüello de ganado mayor que pueda cobrar este Estado, la cantidad de dos pesos por cabeza,

"DECRETA:

"Art. 1.° Decláranse rescindidos desde el 1.° de Febrero de este año, los contratos de arrendamiento para cobrar la renta de degüello del Estado, celebrado con los señores Ignacio Castañeda, Heliodoro Ramos Ruiz, Simón Quiñones, Francisco Corso, Gregorio Ojeda, Ignacio Jiménez y Zoilo Cerezo;

"Art. 2.° Hechos los pagos por los rematadores de todo lo que queden á deber al Tesoro del Estado, se procederá, por quien corresponda, á cancelar las escrituras que han otorgado para seguridad del contrato.

"Art. 3.° Por la Secretaría de Hacienda se dictarán las providencias del caso para que se celebre inmediatamente nuevos contratos de arrendamiento de la renta de degüello del Estado, teniendo en cuenta que por este año no pueden cobrarse sino dos pesos por cada cabeza de ganado mayor que se dé al consumo.

"Dado en Tunja, á 28 de Enero de 1886.

"CLODOMIRO TEJADA.

"El Secretario de Hacienda,

Francisco Mendoza P."

"Número 35.—Estados Unidos de Colombia. — Estado Soberano de Boyacá.—Poder Ejecutivo del Estado. — Secretaría de Hacienda. — Sección de Hacienda.

"*Señor Ignacio Castañeda.*—Ramiriquí.

"El Poder Ejecutivo ha dispuesto, por Decreto del 9 del presente mes, que se continúe cobrando en el Estado la renta de degüello en los mismos términos que se hacía antes de la guerra, quedando los rematadores respectivos sujetos á las obligaciones que contrajeron al hacer los remates, y teniendo derecho á hacer los reclamos correspondientes por los perjuicios que hubieren sufrido durante la guerra.

"Acompaño á usted un ejemplar autenticado del expresado Decreto.

"Lo que noticio á usted para lo de su cargo.

"Soy de usted atento servidor,

Francisco Mendoza P."

"Estados Unidos de Colombia.—Estado de Boyacá. — Gobernación civil y militar.—Secretaría de Hacienda.—Sección de Hacienda. — Número 110.—Tunja, Junio 29 de 1885.

"*Señores Ignacio Castañeda y Nicanor Rincón.*— Ramiriquí.

"Al memorial que con fecha 19 de Junio elevaron ustedes *al señor Gobernador, recayó la siguiente* resolución:

'Despacho de Hacienda.—Tunja, Junio 20 de 1885.

'Los señores Ignacio Castañeda y Nicanor Rincón solicitan que se suspenda el cobro que se les hace, del primer trimestre de este año, mientras comprueban los daños y perjuicios que han sufrido como rematadores de la renta de degüello del Departamento del Centro, ora por parte de la revolución, ora por los decretos y disposiciones del Gobierno; y que respecto del segundo trimestre, se exija la cuenta á los comisionados que puso el Gobierno en varios Distritos. Siendo evidente que los rematadores de la renta de degüello han sufrido perjuicios por causa de la guerra, muy justo es atender á los reclamos que hagan; y así es que, una vez que lo hayan comprobado, si no se ordena que hagan los abonos respectivos en las cuentas, por no tener para ello autorización, por lo menos se suspenderá todo procedimiento contra ellos, hasta que el Cuerpo Legislativo resuelva lo que debe hacerse definitivamente en este asunto.

'El Gobierno, con el fin de disminuír los perjuicios á los rematadores y evitar en lo posible la desmoralización de las rentas, autorizó á los agentes de Hacienda hicieran el cobro en aquellos Distritos en donde, por causa de la guerra, estuviera abandonada la recaudación, y se les advirtió que, al hacer remesas al Administrador, debían decir qué sumas correspondían á esa renta para hacer los abonos y aclaraciones respectivas en los libros.

'Una vez que los señores rematadores pueden hacer los cobros por sí mismos, no hay razón para que el agente intervenga en el asunto.

'No es por demás hacer notar á los señores rematadores, que se ha citado en las resoluciones anteriores á ésta, el artículo 181 del Código Fiscal, porque en la escritura que otorgó el señor Castañeda, para asegurar el remate de la renta de degüello, se obligó expresamente á lo dispuesto en el artículo 171 del Código Fiscal vigente cuando se hizo el contrato, el cual artículo corresponde textualmente al 181 del actual.

'Por el señor Gobernador, el Secretario de Hacienda,

Francisco Mendoza P.'

"Lo que trascribo á ustedes para su conocimiento y demás fines.

"De ustedes atento servidor,

"*Francisco Mendoza P.*"

¿En la liquidación se incluyó ó no el tiempo que duró la rescisión del contrato? ¿Cuándo terminó el contrato? Nada se sabe de esto, y este conocimiento es tan importante, que sin él, la cuenta carece de una de sus bases esenciales.

Dedúcese de las consideraciones anteriores que es fundada la excepción de error de cuenta propuesta por el ejecutado.

No puede decirse lo mismo de la de pago, porque la circunstancia de no haberse acompañado por el ejecutante una liquidación pormenorizada de la cuenta, se ignora si los pagos acreditados con los recibos presentados están ó no abonados en la liquidación.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara probada la excepción de error de cuenta alegada por el ejecutado y no probada la de pago.

En consecuencia, cese la presente ejecución y desembárguese la finca embargada en ella.

Refórmase así la sentencia apelada, sin costas.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvanse los autos al Tribunal de su procedencia.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, treinta y uno de Mayo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: En las primeras horas de la noche del primero de Enero del año en curso, encontrándose en el Cuartel del *Batallón Colombia* número 17, en la ciudad de Panamá, los soldados Jacinto Casanova y Pantaleón Parra, de la segunda Compañía de ese mismo Cuerpo, y estando dormido el último, Casanova tomó un rifle de los que estaban en el armero, y con él hizo un disparo á quema-ropa sobre Parra; éste sólo sufrió una quemadura de segunda intención, que le ocasionó una enfermedad de unos veinte días, porque debido á que el rifle tenía en el ánima la vara de un Cabo, que fué despedazada y convertida en parte en una especie de espiral y quizá

á la corta distancia, el proyectil no fué lanzado con fuerza considerable y se encontró casi intacto debajo del ofendido.

La causa de esta alevosa agresión parece haber sido un disgusto que poco antes habían tenido Casanova y Parra, por motivo del cual éste dió á aquél una bofetada en un ojo.

Instruído el sumario correspondiente por el Capitán Ayudante Mayor del Cuerpo, Daniel Salcedo, y con intervención del Fiscal, Teniente-Coronel Miguel Guerrero, se pasó lo actuado al Comandante del Cuerpo, Coronel Rafael María Gaitán, quien, de acuerdo con el Auditor de Guerra M. J. Díez, declaró haber lugar á formación de causa criminal contra Casanova, ante un Consejo de Guerra ordinario, por el delito de asesinato frustrado, que definen los artículos 7 y 586 del Código Penal y castiga el 599.

A pesar de lo que prescribe el artículo 345 de la Ley 105 de 1890, sobre el cual la Corte ha llamado muchas veces la atención de los Jueces militares,—disposición que previene se formule en el auto de proceder el cargo por el delito en general, sin citar el artículo infringido de la ley,—no se le da cumplimiento en los procesos militares; y aunque ella no es causa de nulidad, sí ocasiona inconvenientes graves en la secuela de los juicios.

Fué notificado al acusado el auto de enjuiciamiento, lo mismo que al defensor que nombró; se convocó el Consejo de Guerra ordinario, con permiso del Comandante militar del Departamento de Panamá; se verificó el sorteo de los Vocales con asistencia del Fiscal, del reo y su defensor, se señaló día para la reunión del Consejo, y este señalamiento se hizo saber á todas las partes.

Finalmente, reunido el Consejo en la ciudad de Panamá el día veintidós del mismo Enero y surtida la audiencia de las partes con las formalidades que prescribe el Código Militar, el Consejo, por unanimidad de votos, resolvió que se había cometido el delito de asesinato frustrado, definido en el inciso 3.° del artículo 586 del Código Penal, por el cual se ha procedido en esta causa, y que el acusado es responsable como autor. En consecuencia, profirió en acto continuo la sentencia que ha sido consultada con esta Corte, por la cual condena al soldado Jacinto Casanova, á la pena de trece años cuatro meses de presidio, que sufrirá en el Establecimiento de la ciudad de Panamá, al lanzamiento del servicio militar, á la privación de todo empleo público y de toda pensión y á la privación perpetua de los derechos políticos.

Para dictar este fallo el Consejo consideró que el autor del delito de asesinato, en el caso del inciso tercero del artículo 586 del Código Penal, merece pena de muerte conforme al artículo 598 del mismo Código, pena que equivale á la de veinte años de presidio, según el artículo 126, y que el delito frustrado tiene señalada por el artículo 7.° del citado Código las dos terceras partes de la pena que menciona el delito principal.

El defensor del acusado hace observaciones acerca de la calificación del delito hecha por el Consejo, porque no juzga que tenga la circunstancia de premeditación esencial en el asesinato, á causa de la exaltación en que debía hallarse Casanova por la ofensa que se dice había recibido de Parra poco antes, y también por el estado de embriaguez en que acaso estaba en el momento de ejecutar el hecho incriminado; pero como en estos casos á la Corte le está prohibido expresamente por el artículo 413 de la Ley 105 de 1890 variar la calificación hecha por el Consejo de Guerra respecto de la culpabilidad ó inocencia del acusado, debe abstenerse de examinar los argumentos del defensor para impugnar el veredicto del Consejo.

Por lo demás, se observa que está acreditado el carácter militar del reo, que el delito es de la jurisdicción militar, por haberse ejecutado dentro del Cuartel; que se hicieron saber al procesado y á su defensor todas las providencias de la causa; que el Consejo fué debidamente sorteado y compuesto de Vocales que no resulta tuvieran motivo de tacha ó inhabilidad, y que si las partes no produjeron pruebas, fué porque no lo tuvieron á bien, pues se les concedió para ello el término legal.

Por estas razones, la Corte, interrogada por el Presidente, en conformidad con lo que previene el artículo 1545 del Código Militar, resolvió, por unanimidad de votos, que no hay en la causa incompetencia de jurisdicción ni informalidades de las que producen nulidad.

Respecto á la aplicación de las penas, la sentencia consultada está conforme con las resoluciones del Consejo sobre el carácter del delito, la responsabilidad del acusado y las disposiciones concercientes del Código Penal.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, confirma la sentencia materia de esta consulta, sólo con la adición de que la pena de presidio debe empezar á contarse desde el día primero de Enero de este año, día en que fué detenido el procesado, y que éste debe pagar las costas del juicio.

Notifíquese esta sentencia, déjese copia de ella, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO.
Gabriel Rosas, Secretario.

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintiséis de Mayo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Tomás Paredes, natural y vecino de la ciudad de Panamá, se presentó, por medio de apoderado, ante el Juez de primera instancia de lo civil de aquel Circuito, en turno, con fecha treinta de Octubre de mil ochocientos noventa y uno (folio 7), demandando al señor Henry Ehrman, francés, comerciante y vecino de la misma ciudad, "para que pague á mi mandante (habla el apoderado) el señor Tomás Paredes, de esta naturaleza y residencia, la suma de trece mil setecientos setenta y dos pesos cuarenta y nueve centavos ($ 13,772-49) por sus honorarios como abogado en el juicio ejecutivo del expresado señor Henry Ehrman contra el señor Augusto Tanguy, y para que lo pague las costas y gastos que le ocasiona la presente demanda." Redujo á trece los hechos en que fundaba su acción, y designó como las disposiciones especiales por las cuales debía fallarse el litigio las de los capítulos 1.° y 3.°, título 28, libro IV del Código Civil, y los artículos 342 y 356 del Código Judicial.

El apoderado de Ehrman, contestó la demanda (folios 19 á 21), conviniendo en ser cierto que, con fecha diez y nueve de Enero de mil ochocientos ochenta y ocho, Ehrman había conferido á Paredes poder especial "para que continuara hasta su terminación el juicio ejecutivo que tenía promovido ante el Juzgado 2.° de lo civil contra Augusto Tanguy, en su carácter de representante de Ligee, Fouaillet y Brochet; Tanguy, Fouaillet y Brochet, y Fanguy y Touaillet, por sumas de pesos que le adeudaban;" pero que Ehrman nada debía á Paredes por esta causa, porque habiendo procedido la ejecución entablada por Ehrman, de un convenio previo con el ejecutado Tanguy, á quien convenía dicho juicio ejecutivo para adelantarse á embargar y cobrar de la Compañía Universal del Canal Interoceánico, antes de que fracasaran en la liquidación de dicha Compañía las sumas que ésta debía á las razones sociales antes expresadas, había sido el señor Francisco Ardila, abogado de Tanguy, el que hizo conferir á su asociado Paredes el poder de Ehrman, para que lo ejercitase en dicho juicio ejecutivo bajo su dirección; que Ardila había cubierto á Paredes todos sus honorarios por los servicios profesionales que había prestado en los asuntos de Tanguy, como se comprobaría en autos; que en virtud de haber sido Ardila el que dirigía las fórmulas de aquel juicio ejecutivo, Paredes no había presentado un solo escrito en dicho juicio, habiéndose reducido todo su trabajo á recibir y firmar las nueve notificaciones que corren de folios 14 á 29 del juicio ejecutivo; en suma, que fuera de ser por demás exagerada la demanda de Paredes, éste, según lo expuesto, debía entenderse con Ardila y no con Ehrman. No es fuera de lugar anticipar que efectivamente, según resulta de autos, parece fuera de toda duda que la ejecución entablada por Ehrman contra Tanguy, procedió de convenio pactado con éste, por-

que así convenía á sus intereses, pues el documento que sirvió de recaudo ejecutivo fué un extracto de la cuenta corriente de Tanguy con Ehrman, que arrojaba á cargo del primero y á favor del último un saldo de ciento treinta y siete mil setecientos veinticuatro pesos noventa y cinco centavos ($ 137,724-95), el cual reconoció judicialmente Tanguy, lisa y llanamente en diligencia de diez y ocho de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, que en copia legalizada corre á fojas 2 de estos autos; porque no sólo consintió sin apelarla la sentencia definitiva de pregón y remate, sino que aparece después presentando escrito sobre escrito para que se conmine á los representantes de la Compañía del Canal, secuestre de los fondos denunciados para el pago para que los entregue á Ehrman. (Folios 72 á 73). Consta igualmente del certificado del Secretario del Juzgado del Circuito de lo civil ante quien se siguió el juicio ejecutivo de Ehrman contra Tanguy, que Paredes no presentó en dicho juicio ningún escrito suscrito por él, como apoderado de Ehrman, y que toda su intervención en dicho juicio se limitó á recibir y firmar las diez notificaciones de la sentencia y autos que el certificado expresa. (Folio 69).

El recibo dado por Paredes á Ardila con el cual la parte de Ehrman cree que Paredes quedó cubierto de los honorarios que demanda, corriente al folio 17, dice así:

"Consta que el señor Francisco Ardila me ha pagado en diversas partidas la cantidad de cinco mil pesos ($ 5,000), valor de mi cuota de honorarios por los diferentes pleitos que el dicho señor Ardila y yo hemos defendido al señor Augusto Tanguy. Con el pago de la referida suma declaro que nada más tengo que reclamar al señor Tanguy ni á sus apoderados ni representantes por honorarios como abogado hasta la fecha.

"Panamá, Diciembre 9 de 1889.

"*Tomás Paredes.*"

Que el juicio ejecutivo, origen de la demanda de honorarios en que Paredes intervino desde el diez y nueve de Enero de mil ochocientos ochenta y ocho hasta el once de Abril siguiente, en que se declaró ejecutoriada la sentencia de pregón y remate, era uno de aquellos en que Paredes servía por cuenta de Ardila y Tanguy, y no por cuenta propia, parece deducirse claramente del contexto de la carta que Paredes dirigió á Ardila, con fecha diez y ocho de Octubre de mil ochocientos ochenta y nueve, que presentada como prueba por el apoderado de Ehrman y no contradicha por Paredes, corre al folio 44, y su tenor es el siguiente:

"Tomás Paredes.—Abogado.—Panama.—Colombia.—Panamá, 18 de Octubre de 1889.

"*Señor doctor Francisco Ardila.*—P.

"Estimado doctor y amigo:

"Mis desgracias domésticas me obligarán al fin á ausentarme del país de un momento á otro, y no quiero dejar pendientes asuntos que debieran estar arreglados hace mucho tiempo. En los libros de usted aparezco yo como debiéndole cinco mil y pico de pesos que en realidad no debo sino el pico, que procuraré arreglar en estos días.

"Recordará usted que D. Henry (Ehrman) nos dijo á fines de Julio del año pasado que quedaban reconocidos por él ocho mil quinientos pesos por cuenta de Tanguy, que con mil quinientos pesos que éste nos había dado se completaban los diez mil pesos en que ajustamos los primeros tres pleitos, sin contar con los otros muchos que vinieron después, en los cuales hemos trabajado de balde.

"Suplícole, pues, que consiga le abonen á usted el todo en su cuenta, para que usted á su vez cancele la mía; de otro modo, aunque me cause mucha pena, tendré que tomar alguna providencia para hacerme pagar é impedir la prescripción. Para esto espero de usted me avise en todo el curso de la presente semana.

"Como siempre, su atento seguro, servidor y amigo,

"*Tomás Paredes.*"

Abierto á prueba el juicio, el debate jurídico-legal quedó establecido desde que el apoderado de Ehrman pidió como prueba por su escrito de diez y siete de Noviembre de mil ochocientos noventa y uno (folio 40), que se decretara el nombramiento de peritos conforme á la ley, para estimar el trabajo que había ejecutado Paredes, como apoderado de Ehrman, en el juicio ejecutivo de que procedía la demanda. El Juez accedió al pedimento por auto de la misma fecha (folio 40 vuelto), pero el apoderado de Paredes se opuso formalmente á la providencia, por escrito de diez y ocho del mismo (folio 42), alegando que la controversia debía fallarse por las reglas del mandato por los artículos 2184, 2054, 2063 y 2144 del Código Civil, conforme á los cuales, á falta de estipulación previa, la remuneración del servicio se regla por lo que sea usual y corriente pedir por él, y no por la disposición especial del artículo 347 del Código Judicial. Paredes tenía yá recibidas en autos las declaraciones de varios abogados de Panamá, afirmando que en el foro de dicha ciudad el honorario usual y corriente del abogado en los juicios ejecutivos, era cuando menos el diez por ciento del importe de la ejecución, elevándose muchas veces al quince y al veinte, siempre, por supuesto, que el resultado del juicio hubiese sido favorable al reclamante.

El Juez negó la revocación, por auto de veintiuno de Noviembre de mil ochocientos noventa y uno (folio 50), y concedió la apelación que en subsidio se había interpuesto para ante el Tribunal, quien, como debía en sentencia interlocutoria estrictamente jurídica de catorce de Diciembre de mil ochocientos noventa y uno (folio 57 y 58), sin decir el punto controvertido de si la remuneración en disputa debía fallarse por las reglas del mandato ó por la especial del artículo 347 del Código Judicial, lo cual dijo con mucha propiedad, era materia de la definitiva y no de una articulación, confirmó el auto apelado mandando practicar la prueba del avalúo pericial pedida por Ehrman, pero no como decisiva, agregó, sino como una prueba pertinente que, unida á las otras que se practicasen, "podía dar luz para fijar el precio de lo demandado al decidir la controversia."

En consecuencia, fueron nombrados peritos avaluadores el señor Gerardo Ortega, por parte de Ehrman, y el señor Francisco de Fábrega, hijo, por parte de Paredes, quienes en la prolija diligencia que corre de folios 82 á 83, estimaron de común acuerdo, sin la menor discrepancia, los honorarios de Paredes, en la suma de doscientos pesos "por el servicio, dicen, único que aparece en autos de haber oído las notificaciones de los folios 14 á 29."

El juicio terminó en la primera instancia con la sentencia de once de Mayo de mil ochocientos noventa y dos (folios 149 á 152), cuya parte resolutiva dice así:

"Como el precio fijado por los peritos que las partes nombraron ha sido estimado por el suscrito Juez equitativo y justo, administrando justicia etc., condena á Henry Ehrman á pagar á Tomás Paredes tan solo la suma de doscientos pesos como precio de sus servicios prestados al demandado, como abogado en el juicio ejecutivo contra Tanguy, absolviéndole del exceso demandado. Las costas como se han causado."

Apelada esta sentencia y surtida por todos sus trámites la instancia, sin que por ninguna de las partes se haya alegado causal alguna de nulidad, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Panamá, falló el recurso por su sentencia definitiva de quince de Diciembre de mil ochocientos noventa y dos (folios 304 á 312), cuya parte resolutiva dice así:

"Por todo lo expuesto, el Tribunal, administrando justicia etc, *de acuerdo con los fundamentos de la sentencia apelada*, la confirma sin especial condenación de costas."

Contra este fallo interpuso el demandante mismo recurso de casación, por escrito de nueve de Febrero (folio 317), el cual le fué admitido por auto de trece del mismo. (Folio id.)

Sentado ya por la Corte como doctrina legal, que los recursos de casación interpuestos y concedidos bajo la vigencia de la Ley 105 de 1890, deben conformarse para su admisión á las prescripciones del artículo 366 de dicha ley, debe ante todo la Corte ocuparse en este examen. La sentencia acusada se funda, como queda expuesto, en leyes que han regido en toda la República, á partir de la vigencia de la Ley 57 de 1887, puesto que el contrato materia del litigio, ó sea el hecho colativo del derecho controvertido, fué el poder que Ehrman confirió á Paredes, con fecha diez y nueve de Enero de mil ochocientos ochenta y ocho. El interés del pleito, ó sea la cuantía del juicio, excede con mucho á tres mil pesos.

Reúne, pues, la sentencia acusada las dos primeras circunstancias exigidas por dicho artículo 366, en lo cual están de acuerdo los litigantes; y se controvierte la tercera, á saber, que haya contrariedad entre las sentencias de primera y segunda instancia, bien en cuanto á la inteligencia ó aplicación de las leyes en que se apoyan, ó en cuanto á lo principal del pleito. Que no la hay en cuanto á lo principal del pleito, es de evidencia notoria, puesto que una y otra sentencia, sin discrepancia, adición ni sustracción de ninguna clase, se han limitado en su parte resolutiva, por éstas ó las otras razones, á condenar á Ehrman al pago de doscientos pesos ($ 200), como remuneración de los servicios prestados por Paredes, como su apoderado judicial en el juicio, asunto de la demanda; pero el recurrente alega que existe contrariedad entre las dos sentencias en cuanto á la inteligencia ó aplicación de las leyes en que se apoyen, porque el Juez de la primera instancia, dice, aplicó en su sentencia á la decisión del litigio, una disposición del Código Civil y otra del Código Judicial, y el Tribunal Superior únicamente la del último de los Códigos citados, folio 10 vuelto del escrito del recurrente, dirigido á esta Corte desde Panamá, fundando el recurso.

El artículo del Código Judicial en que ambas sentencias se apoyaron fundamentalmente para decidir el litigio, fué el 347, que consideraron de especial y preferente aplicación á la causa, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 5.° de la Ley 57 de 1887. Dicho artículo 347 dice así:

"Artículo 347. Los apoderados pueden estipular con sus poderdantes libremente lo que éstos deban pagarles por remuneración de su trabajo. A falta de estipulación, se fijará dicha remuneración por dos peritos nombrados, uno por el poderdante y otro por el apoderado y en caso de discordia entre los peritos, ó de que alguna de las partes no nombre el que le corresponde, nombrará el Juez el que haya de dirimir la discordia ó llenar la falta."

El Juez de la primera instancia dijo en el último considerando de su sentencia, que el precio de los servicios demandados lo habían fijado los peritos "según lo prescriben los artículos 2054 del Código Civil y 347 del Código Judicial que se encuentran, agregó, en perfecta armonía y correspondencia íntima;" al paso que el Tribunal en el último considerando dijo, que para fijar la remuneración usual de que habla el ordinal 3.° del artículo 2184 del Código Civil debía apelarse á la disposición del artículo 347, "especial para el caso," son las palabras textuales del Tribunal, á las cuales agregó, como hemos visto en su parte resolutiva, que "de acuerdo con los fundamentos de la sentencia apelada, la confirma, sin especial condenación de costas."

Que fuera más aplicable á la decisión del pleito, según el juicio que de él formaron ambos Jueces, y en el que la Corte no tiene para qué entrar, el artículo 2184 que el 2054 del Código Civil, es el caso que ambas sentencias, en lo que fundamental y esencialmente se apoyaron, fué en conceptuar que el pleito debía dirimirse por la disposición del artículo 347 del Código Judicial, que reforzaron con consideraciones más ó menos pertinentes á su aplicación.

Pero á este respecto tiene sentado la Corte como doctrina legal pronunciada en más de un fallo "que los razonamientos é interpretaciones jurídicas que no se traducen en la parte resolutiva de un fallo, hay que tomarlas como consideraciones abstractas de derecho, que jamás pueden formar parte de lo que propiamente se llaman motivos objetivos de una sentencia y elemento esencial de lo que constituye la cosa juzgada de un fallo definitivo y ejecutoriado;" y "que cuando *hay en el fondo uniformidad*, ó lo que es lo mismo, cuando la sentencia de segunda instancia se basa en lo sustancial en los mismos fundamentos de la de primera, no hay contrariedad entre ellas." (*Gaceta Judicial* número 324 de 1892).

Por tanto, reservando todas sus opiniones sobre la justicia intrínsica del fallo acusado y del que por él fué confirmado, sin prejuzgar en nada la cuestión legal de si los servicios de un apoderado judicial ó de un abogado en su caso, cuando no ha precedido estipulación, deben reglarse por la disposición del artículo 347 del Código Judicial ó por la del artículo 2144, en consonancia con el ordinal 3.° del 2184 del Código Civil, encontrando, como queda expuesto, que no hay contrariedad de ninguna clase entre los dos fallos y que por tanto falta en el presente caso la tercera de las circunstancias exigidas por artículo 366 la Ley 105 de 1890, vigente cuando se interpuso y concedió este recurso, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Tomás Paredes contra la sentencia definitiva pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Panamá, con fecha quince de Diciembre de mil ochocientos noventa y dos, en el pleito que dicho Paredes siguió contra Henry Ehrman, por la suma de trece mil setecientos setenta y dos pesos cuarenta y nueve centavos ($ 13,772-49), procedentes de honorarios como abogado y apoderado judicial de dicho Ehrman, en el juicio ejecutivo que éste siguió contra Augusto Tanguy. Las costas á cargo del recurrente.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, treinta de Mayo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: El Administrador-Tesorero de la Aduana de Barranquilla, en ejercicio de la facultad coactiva de que está legalmente investido, libró mandamiento ejecutivo contra la Casa comercial establecida en la ciudad del mismo nombre, con la razón social de López Olier & Compañía, para hacer efectivo el cobro de cantidades que dicha Casa adeuda al Tesoro nacional por derechos de importación, que no han sido satisfechos en oportunidad.

Como no se consignó por parte de los ejecutados, en el acto de la notificación del mandamiento ú orden de ejecución la suma por la cual procedía el Administrador, ni se presentaron bienes para cubrir la deuda, el mismo Administrador de la Aduana denunció para el pago una quinta ubicada en la ciudad de Barranquilla, conocida con el nombre de "La-Esperanza," que consideró el funcionario referido como de la propiedad de los deudores, y al efecto decretó embargo de esa quinta, en auto de 15 de Octubre del año próximo pasado, por no haber otros bienes conocidos de la sociedad ejecutada.

Para llevar á efecto el embargo decretado de la referida finca, dispuso el Administrador dar aviso al Registrador de instrumentos públicos y privados del Circuito, para que procediera, como lo prescribe la ley, á hacer el registro del embargo en el libro respectivo de su Oficina. Así lo verificó el Registrador, quien devolvió al empleado ejecutor la comunicación oficial que había recibido de éste, con la nota en que hizo constar haber extendido en el libro correspondiente la inscripción del embargo de la finca aludida, nota que aparece redactada en los siguientes términos:

"Oficina de Registro de instrumentos públicos y privados y anotación de hipotecas.

"Se ha registrado, bajo el número veintiocho, á las páginas setenta y ocho y setenta y nueve del libro de autos de embargos del presente año.

"Barranquilla, veinticinco de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos.

"El Registrador,

"*Antonio D. Samper Grau.*"

Aunque la nota preinserta no menciona la finca embargada, se colige que es la misma quinta á que se refiere el oficio que el empleado ejecutante remitió al Registrador.

Hallándose en este estado la ejecución y sin que la finca se hubiese depositado, Enrieta y Susana López ocurrieron al Administrador de la Aduana, con escrito de 18 de Febrero del presente año, proponiendo articulación, de acuerdo con lo que dispone el artículo 204 de la Ley 105 de 1890, á cuyo fin pidieron que en ejercicio del derecho que les otorga el artículo citado, y previa la sustanciación de la articulación como esa misma disposición lo ordena, limite el embargo á la propiedad del suelo en que está construída la quinta expresada, con reconocimiento de que tienen constituído el usufructo del mismo suelo por cuarenta y cinco años etc.

Por auto de 27 de Febrero último el Administrador resolvió que no habiéndose aún constituído el depósito de la finca embargada, ni nombrado depositario de ella, la solicitud de Enrieta y Susana López O. era extemporánea, y que el escrito fuese archivado.

Informadas las articulantes de esta determinación, reforzaron sus argumentos en otro escrito, para apoyar su petición anterior, y al propio tiempo demandar la renovación del auto que les fué notificado, interponiendo en subsidio el recurso de apelación para ante esta Superioridad, en el caso de que no se accediese á la revocación.

A pesar de las nuevas razones alegadas por Enrieta y Susana López, el Administrador de la Aduana se denegó á acceder á la revocación de su auto primitivo, concedió en ambos efectos la apelación interpuesta, y dispuso remitir el expediente á esta Corte para los ulteriores efectos.

Repartido y sustanciado el asunto por la tramitación que prescribe la ley y con previa audiencia del señor Procurador general de la Nación, la Corte procede á determinar el recurso.

No es necesario, en sentir de la Corte, que los bienes embargados en una ejecución hayan sido depositados con las formalidades legales para que pueda proponerse la articulación de que habla el artículo 204 de la Ley 105 de 1890, pues basta para ejercitar el derecho que tal disposición concede, que el empleado ejecutor haya decretado el embargo de ellos, que en cumplimiento de ese decreto haya dado aviso al Registrador respectivo y que éste haya inscrito ó sentado en el libro correspondiente el embargo mencionado. Así lo hace comprender la citada disposición en que Enrieta y Susana López fundan su articulación, pues el inciso primero del artículo dice así:

"Toda persona distinta de la ejecutada puede reclamar como suyos, sumariamente, los bienes de su pertenencia *que hayan sido embargados* en una ejecución."

Además, consta en el expediente que las articulantes presentaron con su petición varias pruebas sumarias con las cuales consideran que pueden acreditar su derecho, y la falta de dichas pruebas sería lo único en que habría podido apoyarse el Administrador para negar la solicitud; mas como este requisito fué cumplido por Enrieta y Susana López, es claro que el Administrador de la Aduana debió pasar el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bolívar, como competente para conocer de la articulación.

Por estas consideraciones y las que expone el señor Procurador general de la Nación en su anterior vista fiscal, que la Corte reproduce, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca el auto apelado.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Baltasar Botero Uribe.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Abraham Fernández de Soto—Aníbal Galindo. *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, dos de Junio de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Liborio D. Cantillo, apoderado de Tomás Paredes, ha solicitado en tiempo hábil, revocación de la providencia de fecha veintiséis del presente, por medio de la cual, la Corte declaró inadmisible el recurso de casación que su poderdante interpuso contra la sentencia definitiva, pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Panamá, con fecha quince de Diciembre de 1892, en el pleito que dicho Paredes siguió contra Henry Ehrman, por suma de pesos. Fúndase el pedimento en la opinión que el apoderado doctor Cantillo sostiene de que la Corte para decidir si el recurso, aunque interpuesto bajo el imperio de la Ley 105 de 1890, era ó no admisible, debió haberlo hecho conforme á las prescripciones de la Ley 100 de 1892, vigente al tiempo de fallarlo. La primera de las leyes citadas exigía el concurso de tres circunstancias, las que enumera su artículo 366 para que el recurso de casación fuese admisible, y la última derogó la tercera de ellas, la de que hubiera contrariedad entre las sentencias de primera y segunda instancia, bien en cuanto á lo principal del pleito ó en cuanto á la inteligencia ó aplicación de las leyes en que se apoya; y sosteniendo el peticionario, que en su concepto estas disposiciones son de carácter procedimental, pide que la Corte revoque su decisión, admita el recurso y éntre á conocer de él.

En sentir de la Corte, el peticionario carece absolutamente de razón, y basta breve raciocinio para demostrarlo. Las condiciones que una ley exija para que contra una sentencia definitiva sea admisible un recurso de anulación ó casación, pertenecen por excelencia al derecho sustantivo, porque si al tiempo de interponerse el recurso, una de esas circunstancias falta, la parte por esa sentencia favorecida, ha adquirido el derecho de que ella entra en autoridad de cosa juzgada. Nada, absolutamente nada, tienen que ver estas disposiciones que atañen á la esencia misma del derecho controvertido, con las leyes puramente adjetivas ó procedimentales, concernientes á la sustanciación y ritualidad de los juicios, de que trata el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 y los Acuerdos de la Corte, invocados por el peticionario que á ella se refieren. Además, la Corte tiene yá sentado como doctrina legal en todas las decisiones dictadas á este respecto, después de la vigencia de la Ley 100 de 1892, lo que deja expuesto y que el apoderado de Paredes impugna ó combate.

Por estos fundamentos, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, niega la revocación solicitada.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Baltasar Botero Uribe.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Abraham Fernández de Soto.—Aníbal Galindo.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, tres de Junio de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Pide en su anterior memorial el apoderado de López Olier & Compañía, que se revoque la providencia que la Corte pronunció el día veinticuatro de Mayo último en la apelación interpuesta contra el mandamiento ejecutivo librado por el Administrador de la Aduana de Barranquilla, para el pago de dos mil novecientos cuarenta y nueve pesos noventa y cinco centavos ($ 2,949-95), liquidados á favor del Tesoro público y á cargo de los expresados López Olier & Compañía, por derechos de importación causados en los meses de Junio y Julio últimos.

Dáse á entender en tal memorial que la Corte no tomó en consideración, al dictar aquella providencia, el escrito presentado por el apoderado con fecha diez y ocho del propio Mayo, por cuanto no refutó el argumento con que se pedía la revocación del supradicho mandamiento ejecutivo, argumento consistente exclusivamente en confundir el reconocimiento de un crédito hecho por un Recaudador de Hacienda, al extender en el Diario de su cuenta una partida cuya copia presta mérito ejecutivo al tenor de lo que declara el inciso 2.° del artículo 1096 del Código Judicial, con el *Reconocimiento* de las mercaderías de que trata el Código Fiscal en su Sección 6.ª del capítulo 2.° del libro primero.

Hízose la Corte cargo del mencionado argumento al pronunciar aquella decisión; pero nada dijo para refutarlo, por que la confusión de que procede es tan visible, que resalta mediante su sola enunciación.

Efectivamente, si los reconocimientos de que trata el inciso 2.° del artículo 1096 del Código Judicial, fuesen los *Reconocimientos de mercaderías* que define el Código Fiscal en los lugares citados, es claro que los Recaudadores que no fuesen Administradores de Aduanas, no podrían nunca librar mandamiento ejecutivo en el caso 2.° de dicho artículo 1096, porque aquéllos nunca reciben ni examinan mercaderías.

La voz *Reconocimiento* es palabra técnica que tiene en la contabilidad oficial un sentido que es excusado explicar aquí.

Por tanto, no hay lugar á lo solicitado.

Notifíquese y publíquese junto con la resolución principal.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Baltasar Botero Uribe.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales. Abraham Fernández de Soto.—Aníbal Galindo. —*Gabriel Rosas*, Secretario.

IMPRENTA DE ANTONIO M. SILVESTRE.

REPÚBLICA DE COLOMBIA.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AÑO VIII } Bogotá, 1.° de Febrero de 1893. { NÚM. 368.

CONTENIDO.

Págs.

PENA CAPITAL.

Sentencia por la cual se condena á Tobías Morillo á sufrir la pena de muerte, por el delito de asesinato perpetrado en la persona de Ramón Buitrago y votos salvados. (Magistrado ponente, doctor Isaza) 33

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

La que concede á Ignacio Piamba una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Villafrádez) 35

La que concede á Manuel Solarte Chaux una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Villafrádez) 36

La confirmatoria de la resolución dictada por el Ministerio del Tesoro, en la reclamación de Anastasio Duque. (Magistrado ponente, doctor Trujillo) 36

La que concede una recompensa á Francisca Antonia Gil y otros. (Magistrado ponente, doctor Trujillo) 36

La que concede á Ildefonso Urrea una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas) 37

La que concede á José Eugenio Robles una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Trujillo) 37

NEGOCIOS CRIMINALES.

Sentencia confirmatoria de la proferida por el Tribunal de Bolívar en el juicio seguido contra Diego G. de Castro, ex-Prefecto de la Provincia de Barranquilla y votos salvados. (Magistrado ponente, doctor Trujillo) 38

La reformatoria de la sentencia proferida por el Consejo de Guerra en el juicio seguido contra el soldado Jesús María Muñoz, por insubordinación. (Magistrado ponente, doctor Corrales) 39

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Auto que ordena la devolución del expediente del juicio seguido á Jesús María Zorrilla, ex-Juez del Circuito de Roldanillo. (Magistrado ponente, doctor Isaza) 40

GACETA JUDICIAL.

PENA CAPITAL.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Octubre ocho de mil ochocientos noventa y dos.

Vistos: El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia ha remitido á esta Suprema Corte, en consulta, en cumplimiento de lo que disponen los artículos 368 y 388 de la Ley 105 de 1890, para que se surta de oficio el recurso de casación, la sentencia que profirió el veintitres de Abril del año en curso, por la cual confirma con una pequeña variación, en cuanto al lugar de la ejecución de la pena, la dictada por el Juzgado 2.° Superior del mismo Distrito Judicial, en ocho de Febrero del citado año, en la que de acuerdo con el veredicto del Jurado que declaró á Tobías Morillo autor principal del delito de asesinato, en grado máximo, perpetrado en la persona de Ramón Buitrago, el veintiocho de Octubre de mil ochocientos noventa, en la fracción de Nare del Distrito de Puerto-Berrío, fué condenado dicho Morillo á sufrir la pena de muerte.

Surtida en la Corte la tramitación que determina la ley en estos casos, es tiempo de decidir la consulta.

Conforme al artículo 370 de la citada Ley 105, en materia criminal, el recurso de casación sólo procede en tres casos, á saber:

1.° Cuando la sentencia viola ley sustantiva ó doctrina legal, yá directamente, yá por efecto de una interpretación errónea ó de aplicación indebida de una ó de otra; debiendo el Juez, no obstante, tener por norma el veredicto del Jurado, en consonancia con el cual debe hallarse la parte resolutiva de la sentencia.

Este motivo de casación no concurre en esta causa, porque la sentencia está de acuerdo con las disposiciones penales que regían al tiempo de la comisión del delito cuya existencia y autor aparecen de la resolución del Jurado que hace plena prueba para el Juez de derecho.

2.° Si el veredicto del Jurado es en concepto de la Corte notoriamente injusto.

Desgraciadamente, á causa de descuido, ignorancia ó falta de aptitudes de los empleados que intervinieron en la formación del sumario, no pudo obtenerse una comprobación satisfactoria, ó que no deje lugar á dudas, acerca del cuerpo del delito y de los delincuentes, ni á esto podía aspirarse en una fracción tan desprovista de recursos de todo género para la instrucción de un sumario, como aquélla donde sucedieron los hechos en cuestión.

Hubo, pues, necesidad de convocar Jurado de acusación, por no haberse obtenido la prueba legal necesaria para enjuiciar directamente, y tanto este Jurado como el de calificación, si se atuvieron á los datos del proceso, como es de suponerse, tuvieron que formar su convicción sólo á virtud de indicios ó presunciones.

Esos indicios ó presunciones, analizados yá en varias piezas del proceso, se reducen en general á lo siguiente:

1.° La existencia de relaciones ilícitas entre el procesado Tobías Morillo y Ascensión, del mismo apellido, esposa de Ramón Buitrago, mujer de mala reputación, en el paraje de la "Boca de Cocorná," donde tuvieron lugar los hechos materia de esta causa;

2.° El haber manifestado á varias personas, tanto la Morillo como el procesado, sus deseos de dar muerte á Buitrago;

3.° El haber hecho, dicho Morillo un disparo de remington cerca al lugar en donde Buitrago se ocupaba en cortar leña, haberse oído por un testigo inmediatamente un fuerte quejido humano y haber desaparecido desde ese momento Buitrago, de quien no se ha vuelto á tener noticia, y cuyo cadáver fué con toda probabilidad arrojado á las aguas del río Magdalena, que corre á pocas varas de distancia del punto en donde tuvo lugar este suceso;

4.° El haberse presentado Morillo después de la detonación á varias personas muy asustado, manifestando que había hecho un tiro á un venado, y diciendo á unos que tenía que ir á ver el resultado, y á otros que el venado se había arrojado al río y no había podido cogerlo;

5.° La indiferencia que tanto Morillo como la mujer de Buitrago manifestaron después del desaparecimiento de éste, y el haber explicado su muerte como ocasionada por un caimán que lo sacó de una canoa, sin que haya dato alguno que justifique esta explicación;

6.° La creencia general entre los habitantes de la vecindad de que Buitrago fué asesinado por el procesado, de acuerdo con la mujer de aquél.

En vista de estos indicios y de otros de menor importancia, la Corte no puede tachar de injusto, ni mucho menos de contrario á la evidencia, el veredicto del Jurado; pero en atención á que la prueba de indicios es con frecuencia ocasionada á errores, y á que la pena de muerte no debe apli-

A solicitud del señor Procurador general se justificó también, de una manera satisfactoria, la identidad del reclamante, y el señor Ministro del Tesoro informa que no hay constancia en su Oficina de que haya recibido recompensa ni pensión por motivo de la expresada invalidez.

Ahora, como del reconocimiento que ante el Gobernador del Departamento del Cauca hicieron los facultativos Juan N. Wallis O., Domingo Cajiao C. y Domingo Arboleda, en cumplimiento de lo que previene el artículo 17 de la ley citada, resulta que la invalidez de Trujillo no es absoluta sino relativa, no tiene cabida la disposición invocada por el demandante y sí la del artículo 19 de allí, que da derecho solamente á una recompensa igual á la mitad de la que se asigne para el caso de que la invalidez sea absoluta.

Por lo tanto, la Corte, de conformidad con el dictamen del señor Procurador y con lo estatuído en la causal 8.ª del artículo 5.°, en consonancia con el artículo 19 de la ley prenotada, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que el soldado Tomás Trujillo tiene derecho á percibir del Tesoro nacional la recompensa unitaria definitiva de trescientos cincuenta y dos pesos ($ 352), por invalidez relativa ó parcial causada en acción bélica en defensa del Gobierno legítimo, en veintiocho de Agosto de 1876.

Notifíquese, déjese copia, comuníquese al señor Ministro del Tesoro, publíquese en la *Gaceta Judicial* y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza. — Baltasar Botero Uribe.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Abraham Fernández de Soto.—Aníbal Galindo. *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Junio tres de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Manuel Vidal Gutiérrez, vecino del Tambo en la Provincia de Popayán, solicita por medio de apoderado, que se le conceda recompensa por haber muerto su hijo legítimo Ismael Gutiérrez defendiendo á mano armada los principios que informan las actuales instituciones.

Ha acompañado, para apoyar la demanda, las siguientes pruebas:

Partida de matrimonio de Gutiérrez con María Rafaela Rosaura Sánchez, celebrado en la Parroquia del Tambo, en veinte de Mayo de mil ochocientos cuarenta y seis, y atestación del Cura de la misma Parroquia, de que no existe en los libros respectivos el acta de nacimiento de Ismael Gutiérrez, hijo habido en aquel matrimonio;

Partida de defunción de la mujer de Vidal Gutiérrez, ocurrida en el Tambo, en veintisiete de Junio de mil ochocientos sesenta y ocho;

Declaraciones de testigos hábiles, en número suficiente, recibidas ante el Agente del Ministerio Público y con las demás formalidades del caso, con las cuales se ha acreditado:

1.° Que Ismael Gutiérrez fué hijo legítimo, habido en el matrimonio de Manuel Vidal Gutiérrez y Rosaura Sánchez, que vivió con su padre en muy buena armonía y lo auxiliaba con el producto de su trabajo;

2.° Que dicho Ismael Gutiérrez no contrajo matrimonio ni dejó al morir otro heredero que su padre, quien está muy pobre y anciano y ha observado buena conducta;

3.° Que Ismael Gutiérrez, siendo Cabo 1.° de las fuerzas que combatieron en la Cuchilla del Tambo, en defensa de principios idénticos á los que informan las instituciones actuales, murió en esa batalla.

Se ha justificado también con certificación del Ministerio del Tesoro que el demandante no ha recibido recompensa del Tesoro público.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador de la Nación, y en conformidad con lo que disponen los artículos 1.°, 5.°, 6.°, 9.° y 11 de la Ley 84 de 1890, declara que Manuel Vidal Gutiérrez, vecino del Tambo, es acreedor, por la causal indicada, á una recompensa unitaria y definitiva de setecientos sesenta y ocho pesos ($ 768) que se le pagarán del Tesoro nacional.

Comuníquese esta sentencia al señor Ministro del Tesoro, déjese copia de ella, publíquese en la *Gaceta Judicial*, y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Baltasar Botero Uribe.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Abraham Fernández de Soto.—Aníbal Galindo. *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Junio ocho de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: En la reclamación intentada por Andrés Morales, de esta capital, por la expropiación de unas arrobas de sal en 1885, la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones y el Ministerio del Tesoro, negaron el crédito y absolvieron á la Nación del cargo, y habiendo apelado la parte demandante, la Corte procede á dictar el fallo correspondiente.

Morales se presentó en veintiséis de Febrero de mil ochocientos ochenta y seis ante el Gobernador del Distrito Federal y acompañó en cuatro fojas útiles los documentos que creyó comprobantes de su reclamación, lo que hizo en virtud del Decreto ejecutivo número 660 de 1.° de Octubre de 1885, y por la Secretaría de Gobierno se hizo la inscripción y se devolvieron los documentos al interesado.

En veinticuatro de Diciembre de mil ochocientos ochenta y siete, Miguel Vargas C., presentó ante la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones el expediente que creó Morales para su reclamación; y en veintiuno de Junio de mil ochocientos ochenta y ocho el mismo reclamante presentó ante el Gobernador del Departamento de Cundinamarca la relación jurada de la expropiación que se le hizo por Agentes del Gobierno nacional en la guerra de 1885, relación que ha figurado ante la Comisión expresada, en el proceso que contiene la demanda.

Mas como hubiese muerto Morales, presentóse Irene Ospina de Morales, su viuda, en representación de su hija Isabel de aquel apellido, y manifestó que continuaba el juicio de la reclamación, y que daba su poder para ello á Enrique Gamboa, pero sin comprobar siquiera la defunción de su esposo.

Después de practicar algunas diligencias para subsanar los defectos de la primera información de testigos aducida por Morales, la Comisión dictó la resolución á que se ha aludido y que lleva fecha veinticuatro de Septiembre de mil ochocientos noventa y dos, confirmada por la de diez y seis de Diciembre del mismo año, del Ministerio del Tesoro, número 3,389.

Dichas resoluciones están fundadas en que las declaraciones de Isidro Triana, Carlos Galindo, Eulogio Páez, Vicente y Heliodoro González (fojas 12 á 20), no son suficientes para comprobar la expropiación de la sal cuyo valor se reclama. Efectivamente, leídas con detención tales exposiciones se ve con claridad que no tienen ningún mérito probatorio, porque, aparte de que los testigos no presenciaron los hechos en que se apoya la demanda, no están de acuerdo sus testimonios en varios puntos y circunstancias indispensables para poder juzgar con acierto; tales como el número de arrobas de sal que tenía el reclamante y su valor el día de la expropiación. Además, el señor Fiscal no certifica sobre la idoneidad de dichos testigos, y es notable la circunstancia de que el reclamante no hubiera solicitado del empleado ó empleados que hicieron la expropiación el recibo ó documento en que ella constara ó que se hubiesen recibido las declaraciones de los empleados dichos ó sus agentes.

Por tanto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confírmase la providencia apelada.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Baltasar Botero Uribe.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Abraham Fernández de Soto.—Aníbal Galindo. *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, nueve de Junio de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Carmen Amador de Núñez, viuda y legítima esposa del General Juan Bautista Núñez, ha ocurrido á este Supremo Tribunal, estableciendo demanda contra la Nación, para que se la declare con derecho al goce de una recompensa unitaria definitiva conforme al ordinal 2.° del artículo 5.° de Ley 84 de 1890, por haber fallecido su marido durante el asedio que los revolucionarios pusieron á la ciudad de Cartagena en el año de 1885.

Aunque la Corte consideró que tal demanda no se hallaba fundada en disposición alguna de la ley citada, la admitió y sustanció por los trámites correspondientes, con audiencia del señor Procurador general de la Nación, porque no le era dado á la Corte rechazar la acción *a priori*. Pero una vez que el juicio se encuentra en estado de ponérsele fin, se procede á ello, para lo cual se considera:

La demanda de Carmen Amador de Núñez se apoya, como lo manifiesta en su libelo, en el hecho de haber estado el General Juan Bautista Núñez desempeñando las funciones de Guarda-parque en la plaza de Cartagena hasta el 10 de Mayo de 1885, fecha en que falleció, debido á las fatigas y privaciones de la campaña en defensa del Gobierno legítimo.

Cree la demandante que por ese motivo es acreedora á la gracia que dispensa la referida Ley 84 de 1890, y que se halla comprendida en la disposición del inciso 2.° del artículo 5.° de la misma ley, que dice:

"Artículo 5.° Hay ocho causales que dan derecho á recompensas militares, saber:

"....

"2.ª Por muerte recibida en el campo de batalla ú ocasionada por heridas causadas en acción de guerra ó en desempeño de alguna función del servicio, ó á manos de enemigos armados del Gobierno legítimo de la Nación."

Como se deduce de la parte conducente del artículo preinserto, Carmen Amador de Núñez no está realmente comprendida en ninguno de los cuatro casos determinados en dicho inciso; porque el General Núñez no murió en el campo de batalla, ni por consecuencia de heridas recibidas en combate, ni á manos de enemigos armados, ni en desempeño de función alguna del servicio militar; y aunque se alega por la demandante, que su esposo perdió la vida á consecuencia de las privaciones y fatigas que sufrió durante el asedio, ellas no pueden estimarse como comprendidas en los casos que señala la ley.

Las privaciones que se sufren en el tiempo del asedio de una plaza, afectan también á todos sus habitantes de ambos sexos y edades, los cuales no pueden tener derecho al goce de recompensa, sólo por esta circunstancia. La muerte, no les sobreviene, como uno de tantos accidentes ó calamidades originadas por la guerra, y no habría Tesoro que resistiera el pago de recompensas si á todos los moradores hubiera de concedérsele alguna, por pequeña que fuese.

Por tanto, la Corte, de acuerdo con el dictamen razonado del señor Procurador general de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve que la demandante Carmen Amador de Núñez no tiene derecho á la recompensa que ha solicitado.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Baltasar Botero Uribe.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Abraham Fernández de Soto.—Aníbal Galindo. *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Junio diez de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Francisco Moreno, Sargento 2.° del *Batallón 13 de Junín*, demanda ante esta Superioridad que se le declare con derecho á recibir del Tesoro nacional la recompensa militar unitaria que le corresponde, por invalidez absoluta y consiguiente incapacidad para trabajar, proveniente de enfermedad incurable contraída en el servicio militar, petición que hace de conformidad con la causal 6.ª, artículo 5.° de la Ley 84 de 1890.

Con la ampliacion del reconocimiento médico practicado por los facultativos doctores Juan N. Wallis O., Domingo Cajiao C. y Alfredo Garcés, en virtud del auto para mejor proveer, de la Corte, de diez y ocho de Febrero último, el derecho del reclamante ha quedado plenamente justificado.

Con efecto, del expediente resulta:

1.° Que Moreno sentó plaza de soldado en el *Batallón 13 de Junín*, en Diciembre de 1886; que fué después ascendido á Sargento 2.° y dado de baja el 1.° de Febrero de 1891, por hallarse imposibilitado para continuar en el servicio, por enfermedad contraída en él. Así lo certifican el General Jefe del Estado Mayor de la División y el 1.° y 2.° Jefes del Cuerpo. (Folios 11 á 12);

2.° Que Moreno se halla absolutamente incapacitado para trabajar por consecuencia de un abceso en el hígado, que ha habido necesidad de abrile varias veces, lo cual ha producido una larga supuración que le ha dejado adherencias que lo imposibilitan en absoluto para trabajar, y que esta enfermedad es en concepto de los facultativos que lo reconocieron, incurable. Así lo han declarado bajo juramento los profesores arriba mencionados, tanto en su primera exposición, como en su ampliación. (Folios 2 á 3 y 30 á 32 del expediente);

3.° Que esta enfermedad fué contraída por causa de las fatigas y privaciones del servicio militar, pues el reclamante se encontraba en perfecto estado de salud, cuando fué reclutado para el servicio de las armas. Así lo testifican los facultativos mencionados y cinco de los compañeros de armas de Moreno con declaraciones contestes, rendidas ante el Juez del Circuito de Popayán, en lo civil. (Folios 4 á 8);

4.° Que el solicitante ha observado siempre buena conducta y que se halla en extrema pobreza, y

5.° Finalmente, que Moreno no ha recibido pensión ni recompensa alguna del Tesoro por esta causa, como lo asevera el certificado del Ministerio del Tesoro, que obra al folio 20 de estos autos.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridadde la ley, declara á Francisco Moreno, ex-Sargento 2.° del *Batallón Junín*, número 13 con derecho á recibir del Tesoro nacional la suma de quinientos cuarenta y cuatro pesos ($ 544), equivalente á las dos terceras partes de la de ochocientos diez y seis pesos ($ 816), sueldo de su clase en cuatro años, como recompensa unitaria y definitiva, por invalidez proveniente de enfermedad incurable contraída en el servicio militar, todo de conformidad con la causal 6.ª del artículo 5.° y con el artículo 16 de la Ley 84 de 1890.

Notifíquese, cópiese, publíquese y comuníquese al Ministerio del Tesoro para su cumplimiento.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Baltasar Botero Uribe.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Abraham Fernández de Soto.—Aníbal Galindo. *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez de Junio de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Lorenzo Solís, vecino de Cartagena, solicita se le reconozca á cargo de la Nación, y á su favor, la cantidad de cuatrocientos treinta y un pesos diez centavos ($ 431-10), procedente de exacciones que sufrió en la última guerra.

Al efecto presentó ante el Gobernador del Departamento de Bolívar la siguiente relación jurada, que fué debidamente registrada, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 44 de 1886, y que consta de efectos que dice le fueron expropiados en el Pie de la Popa, por las fuerzas que sitiaron la plaza de Cartagena:

Sesenta estantes de guayacán, bálsamo y lumbre, á cinco pesos cada uno..... $	300 ...
Diez y siete docenas de varas de guayaba, á seis pesos docena.....	102 ...
Veintinueve docenas varas de lata, á treinta centavos docena.....	8-70
Doce tirantes de canalete, á un peso veinte centavos.....	14-40

Cuatro asentaderas de canalete, á un peso cada una.....	4 ...
Dos cumbreras de canalete, á un peso cada una.	2 ...
Suma.....$	431-10

Repartido el expediente ante la Comisión de empréstitos, suministros y expropiaciones, el primero de Marzo de mil ochocientos noventa, y surtida allí la tramitación del caso, dictóse la resolución número 4,558, de fecha once de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos, declarándose incompetente aquella Corporación para conocer de la demanda de Lorenzo Solís.

Dicha resolución fué aprobada por la del Ministerio del Tesoro, de fecha veintiocho de Marzo de mil ochocientos noventa y tres, de la cual apeló para ante la Corte Suprema Salvador Valencia Fernández, como apoderado del reclamante.

Ambas resoluciones se fundan en que las declaraciones de los testigos presentados por Solís para comprobar su reclamación, son insuficientes, porque sólo atestiguan que los objetos de que trata la relación jurada existían en la casa de Solís, situada en el Pie de la Popa, pocos días antes de establecerse el sitio de Cartagena por las fuerzas revolucionarias, y que después de abiertas las puertas de la ciudad encontraron, aunque en fragmentos, gran parte de aquellos materiales en las derruídas fortificaciones que habían construído los sitiadores, pero sin expresar los testigos que presenciaran la expropiación y sin decir qué empleado ó empleados ó agentes revolucionarios la ejecutaron. Además, se fundan las susodichas resoluciones en que las exposiciones de los testigos carecen de las formalidades exigidas por la ley de la materia para que sean consideradas con mérito probatorio; por no certificar el Fiscal acerca de la idoneidad de los declarantes; y en que lo que se deduce de la información presentada por el reclamante, es que éste sufrió el daño consiguiente á haber empleado las fuerzas sitiadoras en fortificaciones, objetos de la propiedad de aquél, que no ha comprobado suficientemente.

La Corte considera que efectivamente son insuficientes é informales las declaraciones de los testigos presentados por Solís, por las razones expresadas en las resoluciones de la Comisión y del Ministerio del Tesoro.

Por tanto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, se confirma la resolución número 3,417 del Ministerio del Tesoro.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO. *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Junio doce de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Como viuda de Anacleto Martínez, Agustina Ortega, vecina del Distrito de Dolores, en el Departamento del Cauca, por medio de apoderado solicita de la Corte se le conceda la recompensa militar unitaria á que le da derecho la Ley 84 de 1890, por haber muerto su expresado esposo en el campo de batalla en defensa de los principios que informan las actuales instituciones, en la Cuchilla del Tambo, en Noviembre del año de 1876.

Para acreditar tal derecho se han presentado, junto con la demanda, los siguientes comprobantes:

1.° La copia certificada por el Cura Párroco de San Pedro de Timbío, de la partida de matrimonio con que se acredita que en quince de Octubre de 1875 se casaron, según el rito de la Iglesia Católica, Anacleto Martínez y Agustina Ortega;

2.° Declaraciones rendidas ante el Juez y el Fiscal del Circuito de Popayán, por Cornelio y Froilán Córdoba y Rafael Estela, quienes afirman contestes que les consta, porque lo presenciaron, que Anacleto Martínez entró en combate en condición de Capitán y en favor de los principios que informan las actuales instituciones, en la batalla de la Cuchilla del Tambo, en Noviembre de mil ochocientos setenta y seis, y que murió allí, herido de bala; que no dejó á su muerte ni ascendientes ni descendientes; que la única persona que hoy puede optar derecho á recompensa militar, por causa del fallecimiento de dicho Capitán, es su viuda Agustina Ortega, quien vivió en buena armonía con aquél, observó y observa hoy muy buena conducta, y se halla en estado de suma pobreza, sin tener capital ni renta de ninguna especie;

3.° Una certificación expedida por el General José María González U., en su calidad de Jefe de Estado Mayor de la 2.ª División del Ejército nacional, en la cual se da testimonio de los mismos hechos indicados bajo el anterior número;

4.° La certificación del Ministerio del Tesoro, con la cual se acredita que la demandante no ha recibido hasta ahora recompensa alguna del Tesoro público;

5.° La certificación del Cura Párroco de Timbío, que justifica el hecho de que la Ortega no ha contraído nuevas nupcias.

En virtud de tales comprobantes, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el parecer del señor Procurador, declara que Agustina Ortega, como viuda del Capitán Anacleto Martínez, de conformidad con los artículos 1.°, 5.° (inciso 2.°), 9.° y 11 de la mencionada Ley 84 de 1890, tiene derecho á una recompensa unitaria definitiva de tres mil ciento veinte pesos ($ 3,120), que se le pagarán del Tesoro público nacional.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta*, dése el correspondiente aviso á Su Señoría el Ministro del Tesoro y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO. *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Junio doce de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: El Sargento 1.° Jaime Zúñiga fué herido en la guerra de 1876 á 1877, en el combate de la Cuchilla del Tambo, en defensa de los principios, base de las acuales instituciones; y como hubiese sido inutilizado por consecuencia de la herida, ha solicitado recompensa conforme á la Ley 84 de 1890.

El reclamante ha comprobado con una información de testigos en que han declarado varios de los Jefes y compañeros de armas, que efectivamente recibió una herida en dicho combate (fojas 2 á 6 y 13 á 15); con el reconocimiento de los profesores Juan N. Wallis O., Domingo Arboleda y Francisco J. Velasco (foja 24 vuelta), ha acreditado que aquélla fué ocasionada por un balazo en que el proyectil despedazó la tibia completamente y el peroné en su parte media, y que por consecuencia de la gran fractura conminutiva que produjo el proyectil, le ha quedado una caries de la tibia y una consolidación viciosa de los fragmentos, que ha torcido y deformado completamente la pierna, produciéndole á Zúñiga una incapacidad absoluta y de por vida para trabajar. Tanto la información de testigos como la exposición de los peritos reconocedores, fueron recibidas con las formalidades legales.

También ha comprobado el peticionario, con declaraciones de testigos, por no existir en los archivos documento alguno oficial, que cuando fué herido, tenía el empleo de Sargento 1.° en el Ejército regenerador que obró en la Cuchilla del Tambo en la guerra expresada.

Últimamente ha comprobado el solicitante, con certificación del Ministerio del Tesoro (foja 20), que no figura en el registro de pensionados de la República, y que en los libros de la Sección 3.ª no hay constancia de que haya recibido recompensa del Tesoro nacional por razón de invalidez contraída en la guerra.

Aunque los profesores que reconocieron al reclamante dicen que la inutilidad que sufrió por consecuencia de la herida fué absoluta, no habiendo, como no hubo, mutilación

de la pierna, no es el caso del artículo 15 de la Ley 84 citada, sino el del 19, que trata de la invalidez parcial ó relativa, y que solamente da derecho á una recompensa unitaria definitiva igual á la mitad de la que se asigna para el caso de invalidez absoluta.

Por tanto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, se declara que el Sargento 1.° Jaime Zúñiga es acreedor á una recompensa á cargo del Tesoro nacional de la cantidad de cuatrocientos cincuenta y seis pesos ($ 456), por razón de invalidez parcial ó relativa contraída á consecuencia de haber sido herido en el combate de la Cuchilla del Tambo, en defensa de los principios que informan las actuales instituciones, en la guerra de 1876 á 1877.

Notifíquese, cópiese, publíquese, dése cuenta al Ministerio respectivo y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO.
Gabriel Rosas, Secretario.

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Junio diez de mil ochocientos noventa y tres

Vistos: En virtud de denuncio dirigido por escrito al señor Gobernador del Departamento de Panamá por Francisco Ardila, con fecha 30 de Marzo de 1892 (folio 1.°), sobre que Martín Pastore ó Pastola, en su carácter de arrendatario de José María y Domingo Icaza, ocupaba y explotaba, por medio de otros colonos, las tierras denominadas "Agua-Buena," de la antigua propiedad del monasterio de la Concepción de Panamá y pertenecientes hoy definitivamente á la Nación, como bienes desamortizados en virtud de las leyes sobre la materia y del Concordato celebrado con la Santa Sede, el señor Gobernador del Departamento instruyó al Fiscal del Tribunal Superior para que entablara la acción judicial que á su juicio fuese eficaz, á efecto de recuperar la posesión de dichas tierras é impedir su actual explotación por los que al parecer las ocupaban sin justo título. (Fojas 4 y 5).

En tal virtud, el expresado señor Fiscal entabló, con fecha seis de Agosto de mil ochocientos noventa y dos, ante el Tribunal Superior, demanda ordinaria de reivindicación de dichas tierras de "Agua-Buena," contra el señor Domingo de Icaza, no dirigiéndola también contra José María, por constar que éste había fallecido en una de las Repúblicas de Centro-América. Fundó su acción: 1.° en que dichos terrenos pertenecían originariamente al antiguo monasterio de la Concepción de Panamá; 2.° en que fueron inscritos y ocupados por la Nación como bienes desamortizados; 3.° en que no hay constancia que dichos terrenos hayan sido enajenados por la Nación, y 4.° en que esos terrenos no están comprendidos en los que la Nación debe devolver á la Iglesia, conforme al artículo 28 del Concordato; y en cuanto al derecho basó la demanda de reivindicación en todas las disposiciones del derecho de dominio contenidas en el título 12, libro 2.° del Código Civil. Y finalmente, para los efectos de la competencia y jurisdicción del Tribunal, estimó los terrenos en la suma de mil quinientos pesos ($ 1,500). (Foja 16).

A la demanda acompañó el Fiscal copia íntegra expedida por el Notario 1.° de Panamá, de orden del Juez 2.° del Circuito en lo civil, del contrato de arrendamiento de dichos terrenos, hecho por Sor Rufina Robles, en su calidad de Presidenta del monasterio de la Concepción, á Agustín Fernández, con fecha catorce de Septiembre de mil ochocientos cuarenta y tres (1843), por tiempo indefinido y por la suma de veinticinco pesos ($ 25) anuales. En dicho documento, que es fundamental en el presente recurso, se dice que las tierras de "Agua-Buena" se hallan situadas "en el camino de Cruces," y comprendidas "bajo las líneas de puntos señalados por las faldas de los tres cerros del Muerto, Puerto-Frío y del Rayo y por las orillas de las tres quebradas del Saladillo, Pedro Miguel y del Rayo." "También van —agrega—por la quebrada del Rallo (sic) á mano derecha buscando la cabecera de quebrada Tagarria, que confinan al camino real de Cruces y su cordillera á el (sic) Cerro-Grande del Rallo." Y acompañó también declaración previamente pedida á Domingo Icaza (foja 7), en la cual confiesa Icaza que efectivamente él y su hermano José María han dado en arrendamiento á Martín Pastore ó Pastola, de nacionalidad italiana, las tierras de "Agua-Buena," situadas en el antiguo camino de Panamá á Cruces, por la suma de trescientos pesos anuales.

Icaza, sin objetar en lo mínimo la autenticidad del documento de arrendamiento del monasterio de que queda hecha referencia, opuso, antes de contestar la demanda, las excepciones dilatorias de ilegitimidad de la personería del demandante y de inepta demanda. (Foja 18). Fundó la primera, confundiéndola con una excepción perentoria, en que el demandante no había presentado la prueba que acreditara la adquisición de la cosa que reclamaba, ó sea del derecho mismo materia del pleito, á cuya confusión daba lugar el artículo 53 de la Ley 105 de 1890, sabiamente derogado por la Ley 100 de 1892; y la segunda, en que las tierras que él posee con el nombre de "Agua-Buena" y las mismas que ha dado en arrendamiento á Martín Pastore ó Pastola, son distintas de las del mismo nombre pertenecientes al monasterio de la Concepción; que las suyas (las de Icaza), están situadas á la derecha del camino real de Cruces, yendo de Panamá para dicha población, y las expresadas en la copia del contrato (foja 3) (las del monasterio), corren al lado opuesto, ó sea á la izquierda del mismo camino, yendo de aquí para Cruces, sin tocar por ninguno de sus lados con la quebrada de Agua-Buena, á cuya margen oriental de su parte Sur (sic) corren los terrenos que está explotando Martín Pastore.

Nótase desde aquí la confusión que ha pretendido establecerse de dichos terrenos, aseverando que los del monasterio están situados del lado izquierdo del camino de Panamá á Cruces, y los que con el mismo nombre posee ó retiene el demandado, al lado derecho, cuando el documento de arrendamiento, hasta hoy base de la demanda, en ninguna parte hace tal diferencia, ni habla de la quebrada de Agua-Buena.

Abierta á prueba la articulación de excepciones propuestas, la principal, la que ha servido al Tribunal para fallar la de inepta demanda, ha sido la inspección ocular pedida por el demandado, y practicada en el campo de María Angola, con fecha veintidós de Febrero de mil ochocientos noventa y tres, por los peritos nombrados por las partes y el tercero en discordia nombrado por el Tribunal, presididos por el Juez político del Distrito de la Gorgona, comisionado para la práctica de dicha diligencia; y en ella expusieron que habiendo tenido á la vista la copia del contrato de arrendamiento (el del monasterio), y otra copia de los linderos de las tierras de "Agua-Buena," que pertenecen al señor Domingo de Icaza, la copia reducida del mapa del Istmo, del señor Jorge Fotten, obra del señor Tomás Harrison del año de 1857, y habiendo oído previamente á los vecinos de las tierras en cuestión, creen que los terrenos de la labranza nombrada "Agua-Buena" que pertenecieron al monasterio de la Concepción, están enteramente separados de los terrenos de "Agua-Buena" que son propiedad de Icaza, por el viejo camino real de Panamá á Cruces.

Y fundado en este dictamen, el Tribunal, en auto de quince de Marzo último, falló la articulación de las excepciones propuestas, declarando no probada la de ilegitimidad de la personería y probada la de inepta demanda, auto que ha venido en consulta á esta Superioridad.

Como se ve, el documento de arrendamiento de los terrenos de "Agua-Blanca" hecho por la Priora del monasterio de la Concepción, en Septiembre de 1843, que es el que ha servido de base á la demanda, no da por señas del terreno de "Agua-Blanca," la derecha ó la izquierda del camino de Panamá á Cruces, sino las faldas de los cerros del Muerto, Puerto-Frío y Rayo, y las orillas de las quebradas Saladillo, Pedro Miguel y Rayo. Los peritos, en vista de este docu-

mento, base de la demanda y de la inspección, han debido expresar si esos cerros y esas quebradas quedaban sobre la margen izquierda del camino de Panamá á Cruces, sobre lo cual nada dicen; y entonces confesando Icaza que sus terrenos sólo llegan hasta la margen derecha del mismo camino, habría podido el Tribunal, sobre la base de esa separación, entrar á discutir si ello era bastante para apoyar la excepción de inepta demanda; pero mezclados ó confundidos como aparecen, los términos de los terrenos, la prueba de que los de "Agua-Blanca" poseídos por Icaza y demandados por la la Nación, son propiedad de aquél, pertenece al plenario del juicio y á la sentencia definitiva que sobre él recaiga. Mal ha podido, pues, el Tribunal de Panamá decidir el pleito, ó sea la cuestión de dominio de dichos terrenos en la excepción dilatoria de inepta demanda.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca el auto proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Panamá, de fecha quince de Marzo último, en la parte en que declaró probada dicha excepción dilatoria de inepta demanda, y lo confirma en cuanto declaró no probada la excepción de ilegitimidad de la personería del Fiscal del mismo Tribunal, como representante de la Nación en este juicio; y ordena, en consecuencia, que el demandado Domingo Icaza conteste en el fondo la demanda de reivindicación de dichos terrenos para que el juicio siga su curso legal.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Baltasar Botero Uribe.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Abraham Fernández de Soto.—Aníbal Galindo. *Gabriel Rosas*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, ocho de Junio de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Por denuncio del Fiscal del Circuito de Neira, contra Joaquín Buitrago, en su carácter de Juez del mismo Circuito, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, procedió á instruír el correspondiente sumario para la averiguación de los hechos materia del denuncio. Estos hechos consistían: 1.° en que habiendo impuesto el Juez al Fiscal la multa de veinte pesos ($ 20) porque éste no concurrió á la celebración del juicio en la causa contra Juan Onofre Cuesta, y habiendo pedido el Fiscal revocación del auto y en subsidio apelación, el Juzgado no resolvió el pedimento, reservándose hacerlo en la sentencia definitiva, á lo cual se agregó que habiendo pedido el Fiscal copia de los documentos conducentes para quejarse contra el Juez, éste la mandó dar únicamente de las diligencias que comprobaban la falta de asistencia del Fiscal á la celebración del juicio, y no de la de los otros documentos solicitados por el Fiscal que al Juez perjudicaba; 2.° el haber concedido el Juez excarcelación á Rafael Alfonso y socios llamados á juicio por el delito de heridas causadas á Alejandro Fernández, Alcalde de Garagoa, en circunstancias en que según el concepto del Fiscal no podía concederse la excarcelación; y 3.° en haber ordenado el Juez que por la Secretaría se dirigiese al Fiscal la comunicación que corre á fojas 17 de estos autos, que á la letra dice así:

"Poder Judicial.—Secretaría del Juzgado del Circuito de Neira.—Garagoa, 14 de Junio de 1892.

"*Señor Agente Fiscal del Circuito.*—P.

"A su nota sin número, de fecha 8 de los corrientes, recayó la resolución que en lo conducente dice:

'El encargado del Juzgado no teme las amenazas del Fiscal y aguarda que en éste, como en todos los asuntos que á bien tenga, proceda á averiguar la responsabilidad en que haya incurrido, asegurándole sí que por mucha que sea su maledicencia, no encontrará ningún hecho punible, á menos que se recurra á la calumnia, arma que no ha sido muy vedada para el Agente del Ministerio Público.'

"Dios guarde á usted,

"*Régulo Salazar*,"

El Tribunal, en auto de veinticuatro de Febrero último (folios 40 á 42), llamó al Juez Buitrago á juicio de responsabilidad por los trámites extraordinarios, por el delito de abuso de autoridad deducido del hecho tercero, y sobreseyó respecto de los otros cargos. Notificado el auto á las partes, es decir, al Fiscal del Tribunal y al procesado, éste interpuso recurso de apelación de la parte de dicho auto que le era desfavorable para ante esta Superioridad. En cuanto al sobreseimiento por los otros cargos, el auto del Tribunal de Tunja, como muy bien observa el señor Procurador general, quedó ejecutoriado, tanto porque él no fué apelado en esta parte por el representante del Ministerio Público, como porque los hechos de los cargos materia del sobreseimiento, no están sujetos á consulta con esta Superioridad, porque en ellos no podía basarse un juicio de responsabilidad por los trámites ordinarios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 100 de 1892.

El artículo 551 del Código Penal que el Tribunal Superior ha aplicado para llamar á juicio de responsabilidad por los trámites extraordinarios al Juez Buitrago, por el delito de abuso de autoridad, dice así:

"Artículo 551. El funcionario ó empleado público de los que ejercen mando ó jurisdicción, que excediéndose de las facultades de mandar, amonestar, advertir, reprender, corregir ó castigar arregladamente, ultraje, injurie ó maltrate de obra, de palabra ó por escrito á alguno de sus subalternos ó dependientes, ó á cualquiera otra persona que tenga que tratar con él por razón de su empleo, pagará una multa de diez á cien pesos, sin perjuicio de mayor pena, si incurriere en caso que la tenga señalada.

"En la misma pena incurrirán los empleados de que habla este artículo, aunque los abusos de que se trata sean motivados por causas diferentes á las expresadas al principio."

Y como basta confrontar este artículo con los términos de la incalificable nota pasada por el Juez Buitrago al Agente Fiscal del Circuito, la cual, como muy bien observa el señor Procurador general, envuelve manifiesto ultraje á la persona del Fiscal y á la dignidad del carácter público de que se halla investido; como basta esta comparación para comprender la justicia con que el Tribunal ha procedido, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto apelado.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Baltasar Botero Uribe.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Abraham Fernández de Soto.—Aníbal Galindo. *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Junio ocho de mil ochocientos noventa y tres

Vistos: Por denuncio que en siete de Marzo de 1892 dió Luis Sánchez C., ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cauca, contra el Juez del Circuito de Roldanillo, Crisanto Valenzuela, por abuso de autoridad, el Tribunal, previo repartimiento del asunto, dispuso, con audiencia del agente del Ministerio Público, la práctica de las diligencias conducentes á establecer el carácter público del denunciado y á fijar los hechos constitutivos del delito que se le atribuye; con lo cual, y en vista de tales diligencias, pronunció, en seis de Abril último, un auto en que declaró no haber lugar á abrir causa de responsabilidad contra dicho Juez, auto que ha sido enviado en consulta á la Corte, donde, para despacharlo, se considera lo siguiente:

De las copias adjuntas al proceso, resulta:

Que habiendo el expresado Juez Valenzuela nombrado Juez municipal segundo suplente, del Distrito de Ansermanuevo á Luis Sánchez C., éste se excusó de admitir el cargo; que no habiéndosele admitido la excusa, insistió en ella por medio de una nota, en que alega que es Inspector local de Instrucción Pública y se considera por tal motivo eximido del deber de aceptar el nombramiento de Juez, fundándose para ello en varias disposiciones legales y ejecutivas que cita allí;

que el Juez Valenzuela le admitió esta segunda excusa, pero al propio tiempo y por considerar que en ella se habían empleado expresiones irrespetuosas, condenó á Sánchez, en calidad de pena correccional, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 141 de la Ley 61 de 1886 (yá derogada), á sufrir quince días de arresto, en la cárcel de Roldanillo, y que habiendo dicho Sánchez pedido revocación de esta providencia condenatoria, el Juez Valenzuela redujo la pena á cinco días de arresto.

También se halla adjunta la boleta de arresto por cinco días dada al Alcaide de la cárcel de Roldanillo, y firmada por el Juez Valenzuela; de lo cual se deduce que en realidad Sánchez estuvo arrestado por ese término en la mencionada cárcel de Roldanillo.

Ahora bien, que el Juez Valenzuela no pudo apoyarse en la disposición del artículo 141 de la Ley 61 de 1886 para dictar aquella providencia, es cosa cierta, porque en treinta de Enero de 1892, en que se dictó, dicha disposición estaba derogada.

El Tribunal apoyó el auto de sobreseimiento consultado en el concepto de que según el artículo 346 y el inciso 6.° del 347 del Código Político y Municipal, el Juez Valenzuela podía imponer á Sánchez C., en calidad de pena correccional, por razón de irrespetos inferidos por éste á aquél, un arresto de cinco días.

La Corte, sin embargo, observa:

1.° Que la pena primeramente impuesta por Valenzuela á Sánchez C., fué de quince días de arresto, *máximum* de las señaladas por la disposición derogada del mencionado artículo 141 de la Ley 61 de 1886; pena excesiva que aunque se redujo luégo á cinco días de arresto por solitud del interesado, apareció siempre aplicada en virtud de tal disposición, y sólo disminuída por calificar en tercer grado la falta que al principio se había calificado en primer grado, y 2.° que el artículo 346 del Código Político y Municipal que el Tribunal invoca como fundamento del sobreseimiento, salva en su parte final las disposiciones especiales de la ley; y que la disposición, especial aplicable al caso de irrespeto cometido por Sánchez C. al Juez Valenzuela, era el inciso 6.° del artículo 115 del Código de Organización Judicial, que sólo permite á los Jueces de Circuito castigar el desobedecimiento ó las faltas de respeto con multas que no excedan de diez pesos ó arrestos que no excedan de dos días.

De manera que de autos aparece plenamente comprobado que el Juez Valenzuela se excedió de las atribuciones de su empleo y que en consecuencia de esto, el auto consultado debía ser revocado si él fuera susceptible de consulta según la ley.

Pero en cuanto á esto debe tenerse presente que como la pena señalada por el artículo 565 del Código Penal no permite el procedimiento por los trámites ordinarios sino por los extraordinarios, según lo que sobre esto previene el artículo 67 de la Ley 100 de 1892, el auto expresado no está sujeto á consulta; razón por la cual la Corte se abstiene de de conocer del asunto y determina devolver el expediente al lugar de su procedencia.

Notifíquese, cópiese y publíquese en la *Gaceta*.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Baltasar Botero Uribe.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Abraham Fernández de Soto.—Aníbal Galindo.
Gabriel Rosas, Secretario.

NEGOCIOS VARIOS.

ACTA DE LA DILIGENCIA DE VISITA PRACTICADA EN LA SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, POR SU SEÑORÍA EL PRESIDENTE DE LA MISMA, EL DÍA 30 DE JUNIO DE 1893.

En la ciudad de Bogotá, á treinta de Junio de mil ochocientos noventa y tres, Su Señoría el Presidente de la Corte procedió á practicar la visita legal correspondiente al presente mes, la cual dió el resultado siguiente:

1.° Que los libros de radicaciones y de repartimiento y los copiadores de autos y sentencias se llevan al corriente, con especial esmero, y que contienen índices bien formados;

2.° Que los negocios que se hallan en la Secretaría siguen su curso sin demora imputable al señor Secretario;

3.° Que se han hecho al Ministerio de Gobierno repetidas solicitudes á fin de obtener que la Corte distribuya la *Gaceta Judicial*, que según informan los Tribunales y Juzgados de la República, no ha sido recibida en el presente año, y

4.° Que el movimiento de negocios en la Corte ha sido el que manifiesta los cuadros siguientes:

CUADRO QUE REPRESENTA EL MOVIMIENTO DE NEGOCIOS EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DURANTE EL MES DE JUNIO de 1893.

	SENTENCIAS.					AUTOS.							NEGOCIOS DE UNA SOLA INSTANCIA.				
	CASACIÓN.		CIVILES DE 2.ª INSTANCIA.		Criminales de 2.ª instancia.			Procesos militares.	Competencias.	Recursos de hecho.	Recursos de revisión.	Negocios varios.			Suspensión de Ordenanzas.	Recompensas.	TOTALES.
	Civiles.	Pena capital.	Negocios varios.	Suministros etc.		Civiles.	Criminales.						Civiles.	Criminales.			
Pendientes en 30 de Mayo	24	5	8	165	1	7	4	...	1	2	2	2	3	14	3	552	793
Repartidos en Junio	3	1	1	12	...	3	3	...	...	...	...	2	...	1	1	9	36
Totales	27	6	9	177	1	10	7	...	1	2	2	4	3	15	4	561	829
Despachados en el mes	3	1	2	6	...	2	2	...	1	...	...	2	...	1	...	15	35
Pendientes en 30 de Junio	24	5	7	171	1	8	5	...	...	2	2	2	3	14	4	546	794

CUADRO QUE REPRESENTA EL NÚMERO DE PROYECTOS PRESENTADOS POR CADA UNO DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SOBRE LOS NEGOCIOS CUYO DESPACHO SE RELACIONA EN EL CUADRO ANTERIOR (JUNIO).

	SENTENCIAS.					AUTOS.										
	CASACIÓN.		CIVILES DE 2.ª INSTANCIA.										NEGOCIOS DE UNA SOLA INSTANCIA.			
	Civiles.	Pena capital.	Negocios varios.	Suministros etc.	Criminales de 2.ª instancia.	Civiles.	Criminales.	Procesos militares.	Competencias.	Recursos de hecho.	Recursos de revisión.	Negocios varios.	Civiles.	Criminales.	Suspensión de Ordenanzas.	Recompensas.	TOTALES.
Doctor Pombo	...	...	1	...	...	...	...	...	1	...	...	...	...	1	...	2	5
Doctor Isaza	...	...	1	1	...	...	...	...	...	...	...	1	...	...	...	1	4
Doctor Botero Uribe	..	...	...	2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2	4
Doctor Casas Rojas	...	...	...	1	...	...	1	...	...	...	...	...	...	...	...	4	6
Doctor Corrales	2	...	...	1	...	1	...	...	...	...	...	1	...	...	...	2	7
Doctor F. de Soto	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2	3
Doctor Galindo	...	1	...	1	...	1	1	...	...	...	...	...	...	...	...	2	6
Totales	3	1	2	6	...	2	2	...	1	...	...	2	...	1	...	15	35

RELACIÓN DE LOS NEGOCIOS DESPACHADOS POR LA CORTE SUPREMA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 1893.

Señor Magistrado doctor Pombo.

1.—Junio 3.—Recompensa.—Solicitud de Juana María Delgado, por muerte de un hijo en la guerra de 1876.

2.—Junio 22.—Criminal de una instancia.—Sumario contra los Magistrados del Tribunal de Bolívar, por haber hecho un nombramiento en persona inhábil.

3.—Junio 26.—Civil común.—Juicio promovido por Eusebio Torres, sobre deslinde del terreno llamado "Chamuscado."

4.—Junio 26.—Competencia en sumarios instruídos contra Milcíades Heredia y Miguel Daza, por hurto.

5.—Junio 28.—Recompensa.—Solicitud de Dimas Gómez y Delfina Delgado, por muerte de su padre y esposo en la guerra de 1876.

Señor Magistrado doctor Isaza.

1.—Junio 3.—Recompensa.—Manuel Vidal Gutiérrez solicita recompensa, por haber muerto un hijo en la guerra de 1875.

2.—Junio 3.—Negocios varios.—Diligencias relativas á un alcance deducido contra el Gobernador del Departamento de Panamá, Juan N. Aycardi.

3.—Junio 6.—Sentencia civil común.—Juicio seguido por el Departamento de Boyacá contra el señor Ignacio Castañeda, por una suma de pesos.

4.—Junio 26.—Suministros.—Reclamación de Juan Pablo Pereira y otros.

Señor Magistrado doctor Botero Uribe.

1.—Junio 10.—Suministros.—Reclamación de Lorenzo Solís.

2.—Junio 8.—Suministros.—Reclamación de Andrés Morales.

3.—Junio 12.—Recompensa.—Solicitud de Jaime Zúñiga, por invalidez.

4.—Junio 28.—Recompensa.—Solicitud de María Concepción Perlaza, por muerte de su padre en 1885.

Señor Magistrado doctor Casas Rojas.

1.—Junio 8.—Auto criminal.—Sumario contra Crisanto Valenzuela, por abuso de autoridad.

2.—Junio 12.—Recompensa.—Solicitud de Agustina Ortega, por muerte de su esposo en 1876.

3.—Junio 14.—Recompensa.—Solicitud de Valentina Posse, como hija de un militar de la Independencia.

4.—Junio 19.—Recompensa.—Solicitud de Cornelia Beltrán de G., por muerte de su esposo en la guerra de 1876.

5.—Junio 19.—Recompensa.—Solicitud de Manuel María Caicedo, por muerte de un hijo en 1875.

6.—Junio 27.—Suministros.—Reclamación de Esteban Romero.

Señor Magistrado doctor Corrales.

1.—Junio 9.—Suministros.—Reclamación de Evarista J. Fernández.

2.—Junio 9.—Recompensa.—Solicitud de Carmen Amador de Núñez, por muerte de su esposo en 1885.

3.—Junio 14.—Auto civil.—Juicio ejecutivo seguido contra Juan E. Chamorro.

4.—Junio 17.—Negocios varios.—Solicitud de Juan B. Rodríguez, sobre rebaja de pena.

5.—Junio 26.—Recompensa.—Solicitud de Nepomuceno Escobar, por invalidez.

6.—Junio 27.—Casación civil.—Juicio seguido por Gabriel Rubio contra Clotilde Rubio, por pesos.

7.—Junio 30.—Casación civil.—Concurso de acreedores formado á los bienes de Joaquín Piñeros.

Señor Magistrado doctor F. de Soto.

1.—Junio 3.—Recompensa.—Solicitud de Tomás Trujillo, por invalidez.

2.—Junio 14.—Casación civil.—Juicio seguido por Manuel Camacho, sobre dominio del terreno llamado "Monterralo."

3.—Junio 19.—Recompensa.—Solicitud de Marta Gómez, por muerte de un hijo en la guerra de 1876.

Señor Magistrado doctor Galindo.

1.—Junio 8.—Sumario contra el Juez del Circuito de Neiva, Joaquín Buitrago, por abuso de autoridad.

2.—Junio 10.—Pena capital.—Causa seguida contra Froilán Márquez, por asesinato.

3.—Junio 10.—Recompensa.—Solicitud de Francisco Moreno, por invalidez.

4.—Junio 10.—Auto civil.—Juicio seguido por el Fiscal del Tribunal de Panamá contra Domingo de Icaza, por reivindicación de unos terrenos.

5.—Junio 23.—Recompensa.—Solicitud de Petrona Campo de Hernández, por muerte de su esposo en la guerra de 1876.

6.—Junio 28.—Suministros.—Reclamación de Juan C. Silva.

Presentados que fueron estos cuadros, Su Señoría dió por terminada la visita, por no haber otro asunto á que referirla.

El Presidente de la Corte, LUCIO A. POMBO.—El Secretario, *Gabriel Rosas.*

IMPRENTA DE ANTONIO M. SILVESTRE.

REPÚBLICA DE COLOMBIA.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AÑO VIII | Bogotá, 14 de Julio de 1893. | NÚM. 404.

CONTENIDO.

Págs.

PENA CAPITAL.

Declárase válida la sentencia pronunciada por el Tribunal de Antioquia en la causa seguida contra Froilán Márquez, por asesinato. (Magistrado ponente, doctor Galindo)..... 321

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Concédese una recompensa á Juana María Pérez. (Magistrado ponente, doctor Corrales)..... 322
Niégase á Evarista Figueroa de Espinosa el reconocimiento de un crédito por daños sufridos en la guerra de 1885. (Magistrado ponente, doctor Corrales)..... 323
Concédese una recompensa á Valentina Posse. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas)..... 323
Concédese una recompensa á Marta Gómez. (Magistrado ponente, doctor Fernández de Soto)..... 324
Concédese una recompensa á Manuel María Caicedo y María Josefa Navia. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas)..... 324
Concédese una recompensa á Cornelia Beltrán y Ascención García. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas)..... 325
Concédese una recompensa á Petrona Campo de Hernández y á José Eusebio y Emperatriz Hernández. (Magistrado ponente, doctor Galindo)..... 326

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Revócase un auto ejecutivo dictado por el Administrador municipal de Hacienda de Soledad contra Alejandro Laserna. (Magistrado ponente, doctor Fernández de Soto)..... 326
Declárase infundado el recurso de casación interpuesto contra la sentencia pronunciada por el Tribunal del Distrito Judicial del Norte del Tolima, en el juicio sobre partición y dominio de los terrenos de "Monterralo." (Magistrado ponente, doctor Fernández de Soto)..... 327

GACETA JUDICIAL.

PENA CAPITAL.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez de Junio de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Froilán Márquez, hombre bueno, pacífico y honrado labrador, que vivía honestamente con su esposa Dolores Rojas, en el Distrito de la Concordia, Departamento de Antioquia, dió muerte alevosa en su propia casa, descargándole sobre la cabeza formidable tajo de hacha, que lo dejó en el sitio, á Jaime González, hombre malo, camorrista y pendenciero, de mala ley y de malas costumbres, el quince de Julio de mil ochocientos noventa y uno. Así lo establece el proceso, y así lo declaran la defensa y la acusación. Perpetróse el delito, bajo el imperio de terribles circunstancias. Habiendo adquirido Márquez fundadas sospechas de que González requebraba de adulterio á su mujer, lo reconvino primero pacíficamente, previniéndole que no volviera á su casa, y se abstuviera de proseguir en sus criminales propósitos; reconvención y prevención de que González, abusando de su superioridad y de la intimidad y predominio de sus relaciones en la casa, pues había sido el padrino de matrimonio de Márquez con la Rojas, no hizo el menor caso, y continuó introduciéndose en el hogar de Márquez y persiguiendo á su esposa, confiado, sin duda, en el carácter pacífico de su adversario.

Continuaban así las cosas, y habiendo adquirido Márquez la certidumbre de que el adulterio se había consumado, por confesión de su propia esposa, quien se disculpó diciendo que á ello se había visto obligada más por miedo que por amor, bajo la incesante persecución y las amenazas de González, Márquez resolvió, fría y deliberadamente, darle la muerte, sin volver á reconvenirlo, sin correr ningún peligro, asechando el momento de cogerlo desprevenido y sobre seguro; y así lo hizo, como queda referido, en la mañana del citado quince de Julio de mil ochocientos noventa y uno, en el momento en que Márquez que, como se ha dicho, no había dejado de frecuentar la casa, entró en ella de visita, y se encontraba sentado conversando y chanceándose con Emiliana Rojas, cuñada de Márquez: la mujer estaba ausente.

Hé aquí el caso moral y jurídico del crimen pintado en toda su desnudez; y aunque por no haber lugar al examen de la injusticia notoria del fallo, la Corte no debería estrictamente ocuparse en él, consideraciones relacionadas con el ejercicio que el Consejo de Estado y el Presidente de la República tengan que hacer de la facultad que al último concede el artículo 119 de la Constitución, sobre conmutación de la pena capital, la obligan á ello.

El caso de la satisfacción de la propia venganza del marido por el adulterio de la mujer, es tan antiguo como el mundo, y en él se ha ocupado la legislación de todos los pueblos. Pasando sobre la legislación de los tiempos bárbaros, que ponían á las adúlteras á disposición del marido, y que autorizaban los más atroces castigos, la legislación cristiana de los pueblos civilizados, se limita, como el ordinal 9.° del artículo 591 de nuestro Código Penal lo establece, á declarar la exculpabilidad del homicidio con tal, eso sí, de que se ejecute sobre los cómplices sorprendidos en infraganti delito.

Y no podía ser de otro modo, porque la ley, so pena de perder su carácter, no puede en ningún caso, por vehemente que sea, autorizar la satisfacción deliberada y premeditada del ofendido, es decir, sustituír la venganza particular á la satisfacción de la justicia, porque esto sería zapar por su base los fundamentos del orden social. La idea elemental de sociedad constituída, de ley ó de Gobierno, en una palabra, es la del reemplazo de la fuerza por la justicia. Lo único que la ley ha hecho en este caso, aun siendo el más grave de todos, es exculpar el delito, no porque en principio reconozca derecho alguno á la venganza individual, sino porque reconoce que ha sido cometido sin libertad moral de refrenarlo, en los momentos en que la razón desaparece bajo el imperio, por decirlo así, de la fuerza mayor de formidable pasión, por lo cual exige sabia y moralmente la ley, que el homicidio se cometa en el momento de sorprender el acto del adulterio, ó el aproximado ó preparatorio de consumarlo.

Y tal no es el caso de Márquez; porque además de que él no sorprendió nunca á su esposa en adulterio, dejó pasar mucho tiempo entre la certidumbre adquirida de la ofensa y la ejecución de su venganza, cosa que, como queda enunciado, no puede en ningún caso, autorizar la ley.

Pero además de la exculpación del crimen, cuando hay lugar á ello, la ley sabiamente ha reconocido circunstancias

agravantes y atenuantes para su calificación. Y la primera de las circunstancias atenuantes que el derecho penal de todos los países civilizados reconoce, es la de la naturaleza, índole ó carácter del motivo seductor que impele al crimen, atenuación que está en razón inversa de la bajeza del móvil, por corresponder también estas circunstancias á lo que se ha llamado el mal de segundo y de tercer orden del delito, al mayor ó menor temor de que los asociados se sientan con justicia poseídos de poder ser víctimas de igual atentado, por la impunidad del crimen; y medido en esta escala ó en este rasero el delito de Márquez, no hay duda de que está cobijado por la primera y más aceptable de las circunstancias atenuantes, la de la naturaleza del móvil que lo indujo á perpetrarlo. Al inmenso dolor de la honra y de la felicidad perdidas por la infidelidad de la esposa, sólo pueden sobreponerse almas de primera magnitud, pero no la de un rústico labriego perteneciente á las últimas capas sociales. Y el temor ó el miedo que su crimen infunda en otros, es casi nulo, porque para librarse del peligro, basta abstenerse de cometer el crimen que causó la muerte de González. Caso muy distinto es el de asesinar por rivalidad, por envidia, por pura venganza personal de ofensas, que de otro modo pueden ser castigadas, ó por robar; porque además de la comparativa bajeza del móvil, es inmenso el número de personas que sin su voluntad pueden ser alcanzadas por el delito.

Hecha esta necesaria digresión, reasume la Corte el curso del proceso.

Reunido un primer Jurado de calificación, éste declaró á Márquez responsable como autor principal del delito de homicidio premeditado, definido en el artículo 595 del Código Penal, que dice así (folios 86 á 90):

"Artículo 595. El homicidio premeditado será castigado con la pena de presidio por 12 á 18 años."

El Juez de la causa, previa calificación del delito en tercer grado, pronunció su sentencia de siete de Octubre de mil ochocientos noventa y dos, condenando á Márquez á la pena de doce años de presidio, pago de costas, indemnización de perjuicios y demás penas accesorias que establece la ley (folio 91).

Apelada esta sentencia por el reo, el Tribunal del Distrito Judicial de Antioquia, por causa verdaderamente trivial, y no justificada, en concepto de la Corte, fundándose en que en la lista de Jurados que se presentó á las partes para que hicieran uso del derecho de recusar, figuraba Londoño *R.* Rafael, en vez de Londoño *L.* Rafael (folio 78), que era el nombre escrito en la lista publicada "en hoja volante y en la *Crónica Judicial*," aplicando á esta confusión, sin que hubiera duda ninguna sobre la identidad de la persona designada en la lista, la disposición del ordinal 3.° del artículo 265 de la Ley 57 de 1887, el Tribunal, por sentencia de cinco de Noviembre pasado, declaró nulo el proceso, desde la diligencia del sorteo del Jurado (folio 96).

Repuesto el proceso, practicado nuevo sorteo y reunido nuevo Jurado, éste declaró á Márquez responsable como autor principal del delito de asesinato, que definen los artículos 583 á 585 y 586, circunstancia 3.ª del Código Penal, caso comprendido en el grado máximo de delincuencia conforme al artículo 597 y que el 598 castiga con la pena de muerte (folios 103 á 105).

Conformándose á este veredicto, el Juez 1.° Superior condenó á muerte á Márquez en sentencia de seis de Diciembre último (folio 106), la cual fué confirmada en todas sus partes por la del Tribunal Superior de Antioquia, de diez y seis de Marzo próximo pasado, materia del presente recurso de casación (folio 120).

Por involuntario error del señor Procurador general, ó por el filantrópico deseo de buscar manera de remediar la injusticia notoria de que, en su concepto, adolece el segundo veredicto, pide en su extensa y erudita vista de trece de Mayo último, que la Corte éntre á conocer de la injusticia notoria de aquel fallo, "porque, dice, la Corte tiene resuelto que la derogación del inciso 2.° del artículo 370 de la Ley 105 de 1890 por la Ley 100 de 1892, no priva del beneficio de la casación por esa causal, á los reos juzgados por los Tribunales antes de que entrara á regir la dicha Ley 100 de 1892."

No; lo que la Corte tiene resuelto (fallo de veintidós de Marzo de mil ochocientos noventa y tres en el caso de Salomón Hernández ó Ladino), no es que los reos juzgados bajo el imperio de la Ley 105, cuyo inciso 2.° les daba derecho á interponer el recurso de casación, "por ser notoriamente injusto el veredicto del Jurado," continúen gozando de ese beneficio á pesar de la derogación expresa que de aquella causal hizo la Ley 100 de 1892, sino que los recursos de casación fundados en aquella causal son admisibles y la Corte debe fallarlos, si se interpusieren durante la vigencia del artículo 370 de la Ley 105; pero como la sentencia definitiva del Tribunal de Antioquia, materia del presente recurso, fué dictada con fecha diez y seis de Marzo próximo pasado y la Ley 100 de 1892, que derogó el citado inciso 2.° del artículo 370 de la Ley 105, había entrado en vigor desde el primero de dicho mes; y como, por otra parte, no se ha incurrido en ninguna de las causales de nulidad designadas en los ordinales 1.°, 3.°, 4.°, 5.°, 6.° y 7.° del artículo 264 de la Ley 57 de 1887, como así lo declaran el señor Procurador general en su aludida vista, y el defensor nombrado al reo en esta instancia, doctor Francisco Eustaquio Álvarez, en su alegato de veinte de Mayo próximo pasado, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que no ha lugar á infirmar el fallo materia del presente recurso, ó sea la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia con fecha diez y seis de Marzo de mil ochocientos noventa y tres, contra Froilán Márquez, por el delito de asesinato perpetrado en la persona de Jaime González. Pero la Corte, haciendo una excepción que cree de su deber hacer por las consideraciones que ha dejado expuestas, solicita del Excelentísimo Señor Presidente de la República la conmutación de la pena.

Notifíquese, cópiese, publíquese y remítase el proceso al Excelentísimo Señor Vicepresidente de la República, encargado del Poder Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Justicia, para los efectos del artículo 119 de la Constitución.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintinueve de Mayo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: El doctor Andrés Lara, con poder de Juana María Pérez, vecina del Distrito de Bolívar, en el Departamento del Cauca, en escrito de 22 de Septiembre de 1892, estableció demanda contra el Tesoro nacional con el objeto de que la Corte decretase á favor de su constituyente, el goce de una recompensa militar por la muerte de su legítimo esposo Segundo Sánchez, acaecida inmediatamente después del combate que tuvo lugar en Marzo de 1877, en el paraje de "Piedrarica" ó "Palomocho," defendiendo al Gobierno de la Unión Colombiana.

La demanda tiene por fundamento los siguientes hechos mencionados en el respectivo libelo:

Que el Sargento, Segundo Sánchez, murió en el combate de "Piedrarica" en la guerra de 1876 y 1877 estando al servicio militar del Gobierno;

Que Juana María Pérez era esposa legítima del expresado Sánchez, con quien vivió en completa armonía y buena inteligencia;

Que del matrimonio que contrajeron Segundo Sánchez y Juana María Pérez, no hubo sucesión, y

Que la viuda demandante está sumamente pobre, observa buena conducta moral, y no ha contraído nuevas nupcias.

Sustanciada la demanda por los trámites que señala la Ley 84 de 1890, sobre recompensas militares, es llegada la oportunidad de ponerle término al juicio, según el mérito que ofrece la actuación.

Los hechos que sirven de fundamento á la solicitud, y que

quedan mencionados, están acreditados con el testimonio jurado de Rodolfo Muñoz, Luis Felipe Muñoz y Cenón F. Muñoz, vecinos del Distrito de Bolívar, y con el de los testigos Domingo Ramírez, Rafael Chaux y Juan Rico, vecinos del Distrito del Tambo; á excepción de lo que se refiere al empleo militar en que sirvió el susodicho Sánchez.

El matrimonio católico que contrajeron el 29 de Noviembre de 1854, ante el Cura párroco de Jesús Nazareno del Tambo, Presbítero Matías Antonio Gutiérrez, los citados Sánchez y Pérez, está comprobado con la certificación que en 30 de Agosto de 1892 libró el actual párroco José A. Negret B., que figura á fojas 16.

Además, resulta acreditado con la certificación del señor Ministro del Tesoro (fojas 15), que Juana María Pérez no ha recibido pensión ni recompensa del Tesoro nacional por el fallecimiento de su esposo; y con las declaraciones de los testigos arriba indicados se comprueba que la citada esposa es la misma que ha demandado la recompensa por medio de su apoderado.

Cuanto al empleo que tuviera Sánchez al tiempo de morir, los testigos no dan razón satisfactoria, por lo que personalmente les constara, pues ninguno de ellos afirma que dicho Sánchez fuera Sargento, como se expresa en el escrito de la demanda; pero como combatió en Piedrarica en defensa del Gobierno, á falta de prueba relativa al empleo referido, es justo considerarlo, á lo menos, como soldado.

En mérito de lo expuesto, y de conformidad con el dictamen del señor Procurador general de la Nación y lo dispuesto en los artículos 1.°, 5.° (inciso 2.°) y 9.° de la Ley 84 de 1890, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que Juana María Pérez, legítima esposa de Segundo Sánchez, tiene derecho al goce de la recompensa unitaria definitiva de setecientos cuatro pesos ($ 704), suma igual al monto del sueldo del soldado en cuatro años.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial*, dése aviso al Ministerio del Tesoro y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ABRAHAM FELNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO. — *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, nueve de Junio de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Evarista Figueroa de Espinosa, viuda y vecina de Cartagena, por medio de apoderado demandó ante la Comisión administrativa creada por la Ley 44 de 1886, el reconocimiento y pago á cargo del Tesoro, de la suma de ochocientos siete pesos treinta centavos ($ 807-30), á que asciende el valor de varios efectos que tenía en una tienda ubicada en la referida ciudad, y que fueron destruídos con la explosión de un proyectil arrojado por los rebeldes que asediaron dicha plaza durante la guerra de 1885, efectos que constan en la relación que presentó al Gobernador del Departamento de Bolívar en oportunidad, y que figuran en el expediente que se tiene á la vista.

Aunque la referida Comisión dió curso á la demanda, decidió ésta en sentido negativo, fundándose en que las leyes de la materia no la facultaban para decretar el reconocimiento de los daños inferidos en el curso de la guerra, ó sea de los perjuicios que los particulares recibieran con motivo de las operaciones bélicas; por lo cual en resolución de once de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos, absolvió al Tesoro de esta demanda; y como tal fallo fué aprobado por el Ministerio del Tesoro, por el que dictó en veintiocho de Marzo último, con el número 4,556, el representante de Evarista Figueroa de Espinosa interpuso apelación para ante esta Superioridad, la que le fué otorgada en ambos efectos.

Sustanciada la segunda instancia por los trámites prescritos para esta clase de asuntos se procede á determinar lo que corresponde, y para ello se considera:

Que los perjuicios que sufrió la reclamante, los cuales aparecen comprobados en el expediente, con las declaraciones juradas de varios testigos, no pueden reputarse como exacciones de guerra, en la categoría de suministros y expropiaciones; y yá la Corte tiene resuelto en varios casos análogos que no le es dado decretar el reconocimiento de dichos daños á cargo del Tesoro nacional.

En esta virtud y de conformidad con el concepto del señor Fiscal de la Comisión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la resolución apelada.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO. *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, Junio catorce de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Valentina Posse, vecina de Bogotá, solicita de la Corte, en su calidad de hija legítima del Teniente-Coronel de la Independencia, Mariano Posse, la concesión de una recompensa militar, en mérito de los servicios prestados por su finado padre á la República en la guerra de la Independencia.

Después de diversas ampliaciones, el expediente ha quedado completo y contiene los comprobantes que se enumeran á continuación:

1.° La hoja de servicios del expresado Teniente-Coronel Posse, debidamente certificada por el Comandante general Joaquín París, en trece de Julio de 1842, y presentada en copia, que se expidió en ocho de Febrero de mil ochocientos sesenta y cuatro, en la cual se le computan veintidós años y tres días de servicio activo, descontando el tiempo en que estuvo separado, y duplicando aquél en que estuvo en campaña, y habiendo comenzado el año de 1813, como Alférez del *Batallón Cali* y terminado el año de 1841, como Teniente-Coronel, después de haber asistido á las funciones de armas de Calibío, Juanambú, Buesaco, Tasines y Egido de Pasto, y á las de Santa Lucía y Carabobo, á órdenes de Bolívar, Nariño y otros esclarecidos Jefes;

2.° Copia autorizada de la diligencia en que consta que en seis de Abril de 1841, en virtud de un oficio del Secretario del Senado, se expidió por la Secretaría de Guerra y Marina despacho de Teniente-Coronel efectivo de infantería al Sargento Mayor Mariano Posse; y además, dos comunicaciones, la primera firmada por el Secretario de Guerra y Marina, José Acebedo, en Julio de 1842, y la segunda, por el Presidente de la República, General José María Obando, en Agosto de 1853, en las cuales se reconoce á dicho militar su empleo de Teniente-Coronel efectivo de infantería;

3.° Habiéndose certificado por el doctor Rudesindo Arenas, como Cura de la Catedral de Tunja, que en el libro de defunciones de su archivo, correspondiente al año de 1858, no existe la partida de defunción del Teniente-Coronel Posse, y que dicho libro está incompleto y le faltan la mayor parte de los folios, inclusive, entre ellos, el correspondiente al mes de Noviembre de 1858, el doctor Ramón Sierra, en su calidad de Representante al Congreso de la República, certifica que le consta y sabe de ciencia cierta, que dicho militar de la Independencia falleció en Tunja en Noviembre de 1858; y á este certificado se agrega la declaración rendida ante el Juez 1.° Ejecutor de Bogotá, en Diciembre último, por Casimiro Leal, quien afirma también que le consta, porque lo presenció, que el expresado Posse murió en el lugar y época yá indicados; con todo lo cual queda legalmente establecida la defunción de aquél;

4.° El doctor Rudesindo Arenas, como Cura de la Catedral de Tunja, expidió un certificado al cual agrega copia de la partida de bautismo de Valentina Posse, hija legítima de Mariano Posse y Josefa Acebedo; y tanto la defunción de esta última, como su matrimonio contraído el diez y seis de Mayo de 1822 con Mariano Posse, se hallan también comprobados mediante las copias certificadas de las respectivas partidas de entierro y de matrimonio;

5.° Guillermo Tavera y Flavio Vargas declararon ante el Juez 1.° Ejecutor de Bogotá, con intervención fiscal, en Agosto de 1890, que por el conocimiento personal que tenían de la familia del Teniente-Coronel Posse y Josefa Acebedo, afirmaban que las únicas hijas sobrevivientes de aquéllos, eran en aquel año, las siguientes: Elvira Posse, esposa legítima de Ricardo Ruiz, Francisca y Valentina;

6.° El Cura de Somondoco certifica, que en primero de Julio de 1890, celebró las exequias de Francisca Posse, hija legítima de Mariano Posse y Josefa Acebedo;

7.° Rafael Rojas y Aníbal Ruiz declararon ante el Juez 2.° Ejecutor de Bogotá, con intervención del Fiscal respectivo, y dijeron que por el conocimiento que tenían de la familia de la demandante, les constaba que las únicas nietas legítimas del Teniente-Coronel Posse que existían, eran Aquiles, Ofelia y Ana Benilda Ruiz, hijas de Ricardo Ruiz y Elvira Posse, y las hijas del doctor Ricardo Monroy y Silvia Posse, señoras Rafaela y Olimpia Monroy, y que son ambas casadas;

8.° Habiéndose librado sendos despachos á los Jueces de Tunja y de Chiquinquirá, para que pusiesen en conocimiento de los expresados nietos legítimos de Mariano Posse, que cursaba en la Corte el presente juicio, Ricardo Ruiz y Elvira Posse, y sus tres hijos Aquiles, Ofelia y Ana Benilda, fueron notificadas por el Juez, y manifestaron que no creían estar en el caso de la ley para "coadyuvar la demanda;" de lo cual se deduce que creen no tener derecho alguno á participar de la recompensa solicitada, sin duda por no concurrir en ellas las circunstancias señaladas por el inciso 2.° del artículo 1.° de la Ley 84 de 1890. Además, en memorial presentado al Juez de Chiquinquirá por Rafaela y Olimpia Monroy de Borda, bien se ve que éstas son casadas y no pueden, en consecuencia, participar de dicha recompensa, ni ellas desean sino que se conceda á su tía Valentina, ó sea á la demandante;

9.° Resultando del memorial de las señoras Monroyes de Borda, que existieron otros tres hijos legítimos del Teniente-Coronel Posse, á saber: Tiberio, Anacarsis y Napoleón, pidió el señor Procurador que se comprobase la defunción de ellos, y además que se acreditara que no habían dejado á su muerte descendientes legítimos de personas que pudiesen optar derecho á participar de la recompensa. Comprobóse, en efecto, por medio de un certificado expedido por el señor Ministro de Guerra, la muerte de Anacarsis Posse, y mediante dos certificados expedidos por el doctor Ramón Sierra, Representante al Congreso nacional y el doctor Bernardo Arias, Consejero de Estado, y también con declaraciones rendidas ante el Juez del Circuito de Tunja por tres testigos, exentos de toda excepción, se estableció no sólo el fallecimiento de los tres mencionados hijos de Mariano Posse, sino también el hecho de haberse ellos muerto sin casarse y sin dejar descendencia legítima. Son admisibles estas pruebas supletorias, por haberse establecido mediante las certificaciones dadas por los Curas de Manizales, de Santa Bárbara de Tunja y de la Catedral de Bogotá, que no existen las partidas respectivas de defunción.

La circunstancia de no haberse casado Valentina Posse, de haber observado buena conducta y de no haber recibido recompensa del Tesoro público, se hallan igualmente comprobadas con los certificados y declaraciones necesarios.

La Corte, por tanto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el parecer del señor Procurador, declara:

Que Valentina Posse, como hija del Teniente-Coronel de la Independencia, Mariano Posse, tiene derecho á una recompensa unitaria definitiva de cuatro mil ochocientos pesos ($ 4,800), que se le pagarán del Tesoro nacional. (Artículos 1.°, 5.° inciso 1.°), 9.° y 12 de la Ley 84 de 1890).

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta*, comuníquese al señor Ministro del Tesoro y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA. — BALTASAR BOTERO URIBE. — JESÚS CASAS ROJAS. — MANUEL E. CORRALES. — ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO. — ANÍBAL GALINDO. — *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez y nueve de Junio de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: De acuerdo con el derecho que consagra la Ley 84 de 1890, sobre recompensas militares, pide Marta Gómez ante la Corte, por medio de apoderado, que se le conceda del Tesoro nacional la de setecientos cuatro pesos ($ 704), á que se cree acreedora como madre legítima de Miguel Ignacio Valencia, por haber muerto éste combatiendo en defensa de los principios que informan las actuales instituciones, en la batalla de "Los-Chancos," que se libró en treinta y uno de Agosto de mil ochocientos setenta y seis.

En apoyo de esta pretensión, se han aducido los siguientes comprobantes:

1.° Certificaciones del señor Cura párroco de la ciudad de Cartago, en que consta que Miguel Ignacio Valencia, fué hijo legítimo de la demandante, pues así aparece en la partida de bautizo; y que no se ha encontrado en los libros parroquiales ni la partida de matrimonio de Marta Gómez con Segundo Valencia, ni la de sepelio de éste. También certifica el mismo Cura que la Gómez no había contraído en su parroquia nuevo matrimonio hasta el diez y seis de Junio del año próximo pasado;

2.° Una información de tres testigos abonados, recibida con intervención del Fiscal del Circuito del Quindío, en la cual declaran éstos, que el causante de la Gómez, recibió una herida mortal en la referida batalla, y murió luégo á manos de los enemigos en una casa de teja, en donde había sido colocado con otros heridos. Además, expresan dichos testigos, que el esposo de la Gómez, y padre de Valencia, había muerto antes, y que el último no fué casado ni dejó descendencia legítima ni natural, y vivió siempre en unión y buena armonía con su madre, la que ha observado y observa buena conducta y está pobre;

3.° Certificación jurada del Prefecto de la Provincia de Buga, á donde pertenece el territorio de "Los-Chancos," en la que se expresa que el archivo de la Oficina de su cargo fué destruído por un incendio que tuvo lugar el diez de Septiembre de mil ochocientos ochenta y tres, razón por la cual no hay en él documento alguno relacionado con la batalla librada el treinta y uno de Agosto de mil ochocientos setenta y seis;

4.° Informe del señor Ministro del Tesoro, de que la Gómez no figura en el registro de pensionados de la República, y que no hay constancia de que haya recibido recompensa alguna del Tesoro nacional por la muerte de su hijo Miguel Ignacio Valencia.

Están, pues, justificados los hechos que dan opción á la recompensa que se reclama, en consonancia con el artículo 11 de la Ley 84; y como no existen otras personas con derecho á heredar al fallecido, tiene cabida lo dispuesto en el inciso 2.°, artículo 6.°, relacionado con la causal 2.ª, artículo 5.° de la ley en referencia, esto es, que le corresponde asumir el total de la reclamación á la demandante.

Por lo expuesto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de conformidad con el dictamen del señor Procurador general, declara que Marta Gómez, como madre legítima de Miguel Ignacio Valencia, tiene derecho á percibir del Tesoro público, la recompensa unitaria definitiva de setecientos cuatro pesos ($ 704), que es la que corresponde al sueldo íntegro de un soldado en cuatro años, que era el empleo militar que tenía el citado Valencia.

Notifíquese, cópiese en el libro respectivo, publíquese en la *Gaceta Judicial* y dése cuenta al señor Ministro del Tesoro, para los fines consiguientes.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA. — BALTASAR BOTERO URIBE. — JESÚS CASAS ROJAS. — MANUEL E. CORRALES. — ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO. — ANÍBAL GALINDO. *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez y nueve de Junio de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Por medio de apoderado, Manuel María Caicedo y María Josefa Navia, vecinos de Palmira, piden á la Corte

les conceda la recompensa militar que les corresponda, á causa de que su hijo legítimo, Jerónimo Caicedo Navia, entró en el combate de Sonso á defender, con empleo de Sargento primero, al Gobierno de la República, y murió allí valerosamente.

Constan en el expediente, plenamente comprobados, los siguientes hechos:

1.° Que Jerónimo Caicedo Navia fué hijo legítimo de los expresados demandantes, de lo cual da fe el Cura párroco de la Catedral de Popayán, trascribiendo en su certificación la respectiva partida de bautismo;

2.° Que es cierto que Caicedo Navia recibió la muerte en la fecha y lugar que se han expresado, en defensa del Gobierno, como Sargento primero del *Batallón décimo de Palmira*, habiéndose distinguido por su valor; sobre lo cual certifican el doctor Manuel Antonio Sanclemente, como Gobernador del Cauca, el General José María González U., Jefe de Estado Mayor de la 2.ª División del Ejército; y declaran en debida forma, Andrés Bolaños é Ignacio Castrillón, Oficiales á cuyas órdenes militó aquél en la jornada de Sonso, y lo corroboran varios otros testigos;

3.° Que el expresado Sargento primero Caicedo Navia, fué muy buen hijo y vivió en buena armonía con sus padres; y que éstos han observado y observan muy buena conducta, y no tienen hoy capital ni renta, como que subsisten mediante los recursos que les proporcionan otros hijos que tienen;

4.° Que los dos demandantes son realmente casados, como aparece de la respectiva partida de matrimonio, cuya copia figura en los autos, expedida por el Cura de la Candelaria de Popayán;

5.° Que aunque Jerónimo Caicedo Navia fué casado con Beatriz Peña y tuvo en ella una hija póstuma, llamada Soledad, ésta murió de edad de dos años, como se acredita con el certificado del Notario del Circuito y la copia de la partida respectiva de defunción; y la madre, Beatriz Peña, se casó en segundas nupcias, el primero de Mayo de mil ochocientos ochenta y siete, con Lucio Jaramillo, hecho comprobado con la copia de la respectiva partida de matrimonio traída á los autos, debidamente sellada y certificada. Sobre estos dos hechos declaran también varios testigos, y de ellos se deduce que no hay otras personas, fuera de los demandantes, que tengan derecho á pedir la presente recompensa, ya que la viuda perdió el suyo, por haberse casado segunda vez, y su hija única murió, y

6.° Que los expresados dos demandantes no han recibido hasta ahora recompensa alguna del Tesoro nacional.

Vistos tales comprobantes, la Corte, de conformidad con las disposiciones de los artículos 1.°, 5.° (inciso 2.°), 6.° y 9.° de la Ley 84 de 1890, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, declara que Manuel María Caicedo y María Josefa Navia, son acreedores del Tesoro público nacional por la suma de novecientos doce pesos ($ 912), que les corresponde y debe pagárseles á causa de la muerte que recibió en Sonso, en defensa del Gobierno, su hijo legítimo el Sargento primero Jerónimo Caicedo Navia.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta*, comuníquese al señor Ministro del Tesoro y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO.
Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, diez y nueve de Junio de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Por medio de apoderado, Cornelia Beltrán, vecina del Salado, Departamento del Cauca, pide para sí y para su menor hija legítima Ascensión García, la recompensa militar á que tienen derecho en virtud de haber muerto el Teniente-Coronel Aquilino García, esposo de la primera y padre de la segunda, en mil ochocientos setenta y seis, en defensa de las actuales instituciones.

Para comprobar los hechos en que la demanda se apoya, se han presentado las pruebas siguientes:

Carlos Patiño, Pedro Cárdenas, Federico Yanguas, Rosendo Naranjo, Marcial Borrero, Arcesio González, Jacinto Vela, Tiberio Sánchez y Jacinto González, con sus declaraciones rendidas ante el Juez y el Fiscal del Circuito de Cali, comprueban plenamente que Aquilino García, después de haber prestado grandes servicios como militar, entró con empleo de Teniente-Coronel, en el combate que el veinticuatro de Diciembre de mil ochocientos setenta y seis tuvo lugar en Cali contra las fuerzas del General David Peña, y murió en el campo de batalla; que la viuda, Cornelia Beltrán, quedó en estado de grande miseria y llena de obligaciones, por estar sus hijos en la infancia; que dicha viuda observó siempre con su esposo buena conducta y ha continuado observándola después.

El Cura Párroco y el Notario de Cali certifican que de los muertos de aquel combate no se pudo asentar partida ninguna de defunción, por la confusión que ocurrió en la ciudad y por el número considerable de víctimas, las cuales fueron sepultadas en el solar de San Pedro y en otros lugares, sin dejar constancia oficial de los nombres.

Como el Cura Párroco de Roldanillo certifica que en sus libros parroquiales no aparecen las partidas de bautismo de Mercedes y Ascensión García, hijas legítimas de Aquilino García, ni la del matrimonio que éste contrajo con Cornelia Beltrán, los testigos José Cruz, Manuel Antonio Barbosa y Manuel Marmolejo, en declaraciones rendidas ante el Juez y el Fiscal de Roldanillo, dan testimonio cierto del expresado matrimonio contraído entre Aquilino García y Cornelia Beltrán, así como de la filiación legítima de Mercedes y Ascensión García.

El señor Ministro del Tesoro certifica que las demandantes no han recibido recompensa alguna del Tesoro público.

Juan N. Beltrán, hermano de Cornelia, y Juan Lemos, lego del convento de San Francisco de Cali, dan testimonio de que presenciaron el matrimonio de Aquilino García con dicha Cornelia; y afirman, el primero, que Aquilino tuvo empleo de Teniente-Coronel, y el segundo que sabe que el mismo Aquilino fué Oficial de alta graduación; y ambos dicen que los despachos en que constaban los nombramientos hechos á dicho militar, se perdieron después de las derrotas sufridas por las fuerzas amigas de las actuales instituciones el año de mil ochocientos setenta y seis.

El Cura Párroco y el Notario de Cali vuelven á certificar que no existe la partida de defunción de Aquilino García.

Varios testigos idóneos declaran que sólo existen hoy tres hijos de Aquilino García y Cornelia Beltrán, á saber: Jesús María, quien en primero de Marzo del presente año dirigió á la Corte un memorial en que declara que teniendo treinta y dos años de edad y estando sano y robusto, no pretende derecho á participar de la recompensa militar pedida en esta demanda, recompensa que sólo debe corresponder á su madre Cornelia y á su hermana soltera.

Mercedes, que se casó en Julio de mil ochocientos ochenta y siete con Bernabé Ramos, según lo afirman varios testigos que presenciaron el acto, prueba supletoria admisible á falta de la directa, por haber el Cura Párroco de Cali certificado que no existe la correspondiente partida de matrimonio; y últimamente, Ascensión, que es la soltera, que junto con Cornelia puede obtener la recompensa solicitada.

Y que de éstas dos últimas la una se conserva viuda y soltera la otra, es también hecho comprobado, tanto por declaraciones de testigos, como por la certificación expedida por el Cura Párroco de Cali, á veintinueve de Mayo último.

Para que sea admisible la prueba testimonial con que se establece que Aquilino García tenía empleo de Teniente-Coronel cuando rindió la vida en defensa de las actuales instituciones, trájose á los autos una certificación en que el Gobernador del Cauca afirma que no existe en su Oficina ninguna constancia del grado militar que tuviera dicho García.

En virtud de los comprobantes que se acaban de mencionar, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, declara que Cornelia Beltrán, como viuda, y Ascensión García, como hija del Teniente-Coronel

Aquilino García, tienen, de conformidad con los artículos 1.°, 5.° (inciso 2.°), 6.° y 9.°, de la Ley 84 de 1890, derecho á una recompensa unitaria definitiva de cuatro mil ochocientos pesos ($ 4,800), que el Tesoro público nacional les pagará para que lo dividan entre sí por partes iguales.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta*, avísese al señor Ministro del Tesoro y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO. *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintitrés de Junio de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Petrona Campo de Hernández, vecina del Distrito de La Victoria, Departamento del Caúca, demanda en unión de sus dos hijos legítimos, Emperatriz, menor y soltera, y José Eusebio, menor de edad, la recompensa unitaria y definitiva á que se creen con derecho conforme á la Ley 84 de 1890, por la muerte de Miguel Hernández, esposo de la primera y padre de los segundos, acaecida el treinta y uno de Agosto de mil ochocientos setenta y seis, en la batalla de "Los-Chancos," defendiendo los principios que sirven de base á las actuales instituciones. Con las pruebas mandadas practicar por la Corte en repetidos autos para mejor proveer, ha quedado establecido:

1.° Que el expresado Hernández murió sobre el campo de batalla de "Los-Chancos," por las heridas que allí recibió en el empleo de Teniente 1.° de una Compañía del *Escuadrón Victoria*, mandada por el Teniente-Coronel Carlos Bermúdez, muerto igualmente en dicho campo. Así lo declaran con las formalidades legales, tres testigos presenciales del hecho, á saber: Lorenzo Lasprilla, compañero de armas de Hernández, como Teniente 1.° del mencionado *Escuadrón Victoria;* Miguel Solano, Capitán Ayudante del Teniente-Coronel Bermúdez, y Pedro Salazar, Capitán de la segunda Compañía del mismo Escuadrón (folios 20 á 21);

2.° Que la peticionaria es la viuda de dicho Hernández, en virtud de legítimo matrimonio católico, celebrado en la iglesia parroquial de La Victoria, en el año de mil ochocientos cincuenta y uno, se ha comprobado á falta de la correspondiente partida, con las declaraciones de tres testigos presenciales de aquel acto, á saber: Andrés Vélez Soto (folio 20 vuelto), Juan de Dios Vélez (folio 33 vuelto), y Carlos Ruiz (folio 34);

3.° La filiación de José Eusebio, como hijo legítimo de Miguel Hernández y Petrona Campo, se ha establecido con la misma prueba de los testigos que declaran sobre el matrimonio, por no haber sido hallada su partida de bautismo, según aparece del certificado expedido por el Presbítero Sacramento Jiménez, Cura de la Parroquia de La Victoria. (Folio 3 vuelto);

4.° La filiación de Emperatriz consta de su correspondiente partida de bautismo que tuvo lugar el diez y seis de Octubre de mil ochocientos setenta, según el certificado del propio Párroco. (Folio 3);

5.° Que los otros dos hijos legítimos del mismo matrimonio, Rafaela y Ramón Hernández, no tienen derecho á participar de la recompensa, la primera por ser casada, según aparece de la correspondiente partida de matrimonio católico verificado con Joaquín Poso, el tres de Febrero de mil ochocientos setenta y seis, en la iglesia parroquial de La Victoria, que en copia expedida por aquel Párroco corre al folio 33 del expediente, y el segundo, por ser, como él mismo lo manifiesta en el memorial de fojas 36, mayor de edad, y no encontrarse imposibilitado para trabajar;

6.° Con las declaraciones de más de cinco testigos idóneos, se ha comprobado la buena conducta de la peticionaria y de sus dos hijos menores, y que todos vivieron en paz y armonía con el finado Hernández, esposo de la una y padre de los otros, y

7.° Finalmente, que los peticionarios no han recibido pensión ni recompensa alguna por la muerte del Teniente Miguel Hernández, acaecida, como se ha dicho, en la batalla de "Los-Chancos," se acredita con los certificados del Ministerio del Tesoro, que corren á folios 24 y 43 del expediente.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el dictamen del señor Procurador general de la Nación, en su vista de veintiuno de Mayo de mil ochocientos noventa y dos (folio 41), declara que Petrona Campo de Hernández, como viuda de Miguel Hernández, y José Eusebio y Emperatriz Hernández, en su calidad de hijos legítimos de dicho matrimonio, soltera la una y menor de edad el otro, tienen derecho á recibir del Tesoro nacional, como recompensa unitaria definitiva, por la muerte de dicho Hernández, en las circunstancias que quedan expresadas, la suma de dos mil cuatrocientos pesos ($ 2,400), la mitad de ella, ó sean mil doscientos pesos ($ 1,200), para la viuda, y seiscientos pesos ($ 600) para cada uno de los hijos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.° de la dicha Ley 84 de 1890.

Notifíquese, cópiese publíquese y comuníquese al Ministro del Tesoro para su cumplimiento.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO. *Gabriel Rosas*, Secretario.

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, veintinueve de Mayo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: El Administrador departamental de Hacienda nacional del Tolima, por auto de veinte de Enero del corriente año, declaró á cargo de Pedro Antonio y Alejandro Laserna, como Administradores municipales de correos de Soledad, las sumas de cuarenta y un pesos cincuenta y cinco centavos ($ 41-55), y ciento veinte pesos setenta y cinco centavos ($ 120-75), respectivamente, que en varias partidas de dinero habían recibido del Admidistrador-Telegrafista de dicho lugar, Jesús M. Arbeláez; y expresó que este empleado había quedado exonerado del deber de reintegrar tales cantidades en un juicio de cuentas que se había seguido para examinar las de su manejo, por cuanto probó que aquéllos son los responsables de su reintegro.

Comisionado por el Administrador departamental el municipal de Hacienda de Soledad para el cobro ejecutivo de las sumas relacionadas, dictó el mandamiento de pago correspondiente, el diez y seis de Marzo del año en curso, contra Alejandro Laserna, por la suma de ciento veinte pesos, setenta y cinco centavos ($ 120-75) de que se le hizo responsable; y notificado del auto en la forma legal por el empleado ejecutor, interpuso el recurso de apelación que le fué concedido para ante esta Superioridad, en donde se ha surtido la tramitación propia de la instancia, y se procede á resolver lo que sea legal.

Desde luégo la Corte observa que el auto que sirvió de recaudo ejecutivo, no es un alcance definitivo deducido contra el ejecutado, ya por no aparecer que se haya surtido contra éste el respectivo juicio de cuentas y se le haya oído en él conforme á las leyes, ya por ser obvio que á los Administradores departamentales sólo les corresponde examinar, glosar ó fenecer en primera instancia las cuentas de las Administraciones subalternas de Correos y de las Oficinas telegráficas de Departamento y remitirlas á la Oficina general de Cuentas para su examen definitivo, según la atribución 8.ª, artículo 17 de la Ley 111 de 1888, y ya, en suma, porque aquel auto fué dictado en juicio de cuentas seguido contra persona distinta del mismo ejecutado y no puede servir de base contra él, como muy bien lo demuestra el señor Procurador general.

No tiene cabida, pues, el artículo 1096 del Código Judicial para justificar la providencia en examen; y como no puede apoyarse tampoco en el artículo 179 de la Ley 105 de 1890, sobre reformas á los procedimientos judiciales—que allí se cita—claro se está que la ejecución decretada es á todas luces improcedente.

En esta virtud, la Corte, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca el auto recurrido y declara que el documento con el cual se aparejó el juicio no presta mérito ejecutivo.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente á la Oficina de su origen.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO. — *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Junio catorce de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Con fecha doce de Noviembre de mil ochocientos setenta y cinco, se presentó Manuel Camacho ante el Juez del Circuito de Purificación, en el extinguido Estado Soberano del Tolima, y estableció demanda de partición material del terreno de "Monterralo," entre los comuneros de éste, á los cuales designó, en escrito posterior, que dirigió con el fin de aclarar y adicionar aquélla. Se emplazó por edictos á los que se creyesen con derecho al expresado globo de tierra, y siguió surtiéndose la tramitación del juicio en consonancia con las disposiciones procesales, vigentes entonces en ese Estado, hasta que estalló la guerra civil de 1876 á 1877, que vino á suspenderla por algún tiempo; y continuado en Junio de mil ochocientos setenta y ocho, á solicitud de Facundo y Eustaquio Luna, ocurrió al Juzgado Antonio María Forero, con poder de Eustaquio Caicedo D., solicitando se le confiriese traslado de la demanda de partición incoada por Camacho, á lo que accedió el Juez de la causa por auto de catorce de Agosto del año que acaba de citarse, corriente de fojas 67 á 69, del legajo número 1.° de este voluminoso expediente.

Por memorial de diez y ocho de Enero de mil ochocientos setenta y nueve, contestó Forero el traslado, y se opuso á la demanda de partición en referencia, fundado en las razones que allí expuso, encaminadas todas á demostrar que Camacho no era interesado en el terreno de "Monterralo," por no haberlo sido su causahabiente Marcelina Luna. Después de esta oposición, el diez y seis de Junio del mismo año, aclaró personalmente Caicedo D. el escrito de su apoderado Forero, reclamando para sí la propiedad exclusiva de "Monterralo" por los linderos determinados en la escritura pública número 360, de veintiocho de Diciembre de mil ochocientos setenta y siete, otorgada á favor de aquél por Francisco Caicedo J., y manifestó que dirigía su acción contra varios de los que aparecían como condueños en el terreno disputado; y negando éstos, á su vez, las pretensiones de Caicedo D., quedó así trabado el litigio.

Pendiente el juicio de división del terreno de "Monterralo," y la oposición consiguiente de Caicedo D. en los términos que quedan puntualizados, propuso el Personero del último, en diez y siete de Enero de mil ochocientos ochenta, contra Lino, Lázaro y Facundo Luna, demanda de reivindicación de dos potreros de pasto artificial, ubicados en "Monterralo" y sus frutos naturales y civiles, que estimó en dos mil pesos ($ 2,000) Los demandados contestaron negando el derecho de Caicedo, y, por su parte, propusieron demanda de reconvención ó mutua petición contra éste, por arrendamientos del terreno de "Monterralo" en veinticuatro años que se utilizó de él con plantaciones y sementeras, arrendamientos que ellos apreciaron en doce mil pesos ($ 12,000).

Estos nuevos juicios fueron acumulados á los anteriores, según auto de veintiuno de Noviembre de mil ochocientos ochenta, y sustanciados todos en uno solo, dictó el Juez, en primera instancia, el fallo de fecha veintidós de Diciembre de mil ochocientos ochenta y uno (folios 1 á 22, legajo número 17), que en su parte dispositiva contiene las siguientes textuales declaraciones:

"1.ª El globo de tierras conocido con el nombre de "Monterralo," ubicado en jurisdicción de este Distrito, es de propiedad común y se halla comprendido dentro de los linderos señalados por el Juzgado, el veinticuatro de Noviembre de mil ochocientos ochenta, en la diligencia extendida en aquella misma fecha, y corriente á los folios 16 y 17 del cuaderno número 5, ó sean los siguientes: desde el peñón negro, mirando hacia el Sur, hasta la 'Piedra-enmochilada;' de aquí, línea recta, hacia Occidente, hasta la laguna 'Monterralo,' que es la que queda al pie de la capilla de Nuestra Señora de los Desamparados, y siguiendo la misma línea hasta la depresión del terreno de vega; de este punto hacia el Sur á dar á la quebrada de 'La-Mata.' Del peñón negro hacia Occidente, siguiendo por los linderos del terreno del 'Contadero,' que fueron de propiedad del señor Felipe Pinto, hasta encontrar la vega que antes pertenecía á los egidos de este Distrito; y de aquí, hacia el Sur, por los mismos linderos de la vega, hasta la quebrada de 'La-Mata;'

"2.ª Consiguientemente, además del demandante, son *accionados* legalmente en el globo mencionado, los demandados señores Manuel Camacho, Buenaventura García, Jenaro Montalvo, Patrocinio y Teodoro Quintero, Joaquina Pinto, Facundo Luna, Lino Luna, Lázaro Luna, Eustaquio Luna, Carlos Luna, Jesús Luna, Marcelina Luna, Francisca Quintero y Toribia Villalba; esta última por sí y como curadora *ad litem* de sus menores hijas Ana Rosa y Camila Luna, en las porciones de terreno que les correspondan por los derechos que tienen adquiridos en dicho globo conforme á las escrituras exhibidas en el presente juicio;

"3.ª No ha sido probada la acción reivindicatoria ó de dominio establecida por el demandante contra los señores Lino, Lázaro y Facundo Luna, para que se condenara á éstos á restituír con sus frutos naturales y civiles dos potreros de pasto artificial, ubicados en los terrenos de 'Monterralo;'

"4.ª No han sido probados los cargos aducidos contra el demandante en la demanda de reconvencion propuesta por los demandados Lino, César, Lázaro y Facundo Luna el treinta y uno de Julio de mil ochocientos ochenta. En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 1.° del artículo 706 del Código Judicial, se condena en las costas de esta instancia al demandante, señor Eustaquio Caicedo D., y se dispone que la estimación de ellas se haga de conformidad con lo preceptuado en el artículo 709 del referido Código."

Contra este fallo se interpuso el recurso de apelación para ante el Tribunal Superior del Estado del Tolima por la parte de Eustaquio Caicedo D., y habiéndose concedido la alzada por auto de quince de Febrero de mil ochocientos ochenta y dos, previa citación de los colitigantes, se elevó el proceso al despacho de esa corporación, en donde se hallaba pendiente cuando tuvo lugar el nuevo régimen que trajo consigo la organización judicial existente, y por ende correspondió decidir en la instancia al Tribunal Superior del Distrito Judicial del Norte de ese Departamento, el que, tras dilatada exposición de los hechos concomitantes del juicio, profirió sentencia en veinte de Septiembre de mil ochocientos noventa y dos (folios 1 á 43, legajo número 18), y declaró lo siguiente:

"Que no se ha probado la acción de dominio de los terrenos de "Monterralo," ubicados en la jurisdicción de Purificación, que fué intentada por el señor Eustaquio Caicedo D. contra los señores Manuel Camacho, Facundo, Lázaro y Lino Luna, Jenaro Montalvo, Ventura García, Patricio y Teodoro Quintero, Joaquina Pinto, Eustaquio, Carlos, Jesús y Marcelina Luna, Francisca Quintero y Toribia Villalba;

"Que el terreno citado es de propiedad común, y que el juicio sobre su división en partes materiales, promovido por Manuel Camacho, debe continuarse por el Júez de la primera instancia;

"Que de los individuos que han sido declarados como accionados en el terreno de que se trata, se suprime de ellos á Marcelino y Carlos Luna, por haber vendido los derechos

que tenían en él, según lo han manifestado á las fojas 140 y 141 del cuaderno principal;

"Que no se ha probado la acción sobre reivindicación de los dos potreros de pasto artificial, situados en los terrenos de 'Monterralo,' promovida por el señor Eustaquio Caicedo D., contra los señores Lino, Lázaro y Facundo Luna, y que no se ha tenido derecho para establecerla;

"Que igual cosa sucede con relación al cargo hecho por el señor Caicedo D. contra los mismos señores Lunas, por razón de frutos naturales y civiles y deterioros de los citados potreros;

"Que no se ha probado la obligación en que estuviera el señor Caicedo D. de pagar arrendamientos de los terrenos de 'Monterralo' á los señores Lino, Lázaro y Facundo Luna, y que no se ha tenido derecho para intentar esta demanda;

"Que se absuelve al señor Eustaquio Caicedo D. del pago de las costas á que fué condenado.

"En todo lo demás se confirma la citada sentencia.

"Sin costas."

Notificado á las partes el fallo que precede, como aparece de autos, fué tácitamente consentido por las que sostienen la comunidad de "Monterralo" contra las pretensiones de su contrincante Caicedo D., no obstante haber sido éste absuelto de las costas y de la declaración contenida en él de que dos de los demandados no tienen el carácter de aparceros ó interesados en dicha comunidad. Por el contrario, Caicedo D., advertido del agravio que creyó le infería tal fallo, dirigió al Tribunal sentenciador, en veinte de Octubre de mil ochocientos noventa y dos, el memorial que obra al folio 47 del legajo indicado enantes, y manifestó sencillamente que interponía para ante la Corte Suprema de Justicia el recurso de casación, "contra la sentencia que puso fin á la segunda instancia del juicio civil ordinario promovido ante el Juez del Circuito de Purificación, sobre dominio y propiedad del globo de tierra de 'Monterralo' y del de reivindicación de unos potreros de pasto cultivado ó artificial, ubicados en el mismo globo de tierra; y cuyos juicios figuran acumulados en el expediente en que aparece la sentencia relacionada."

Concedióse el recurso por auto de veintiocho de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos, y remitido el asunto á este Despacho, previa la sustanciación especial que el negocio comporta, se procede á examinar ante todo hasta dónde sea exequible el argumento hecho por el apoderado del recurrente, relativo á la aplicación de la Ley 100 de 1892, que en su artículo 49 da amplio derecho para interponer la casación, aunque no haya contrariedad en las sentencias de primera y segunda instancia, en vez de la Ley 105 de 1890, que, en su artículo 376, exigía la coexistencia de las circunstancias allí determinadas, ley que regía cuando fué interpuesto y concedido el presente recurso.

Basta observar á este respecto, que yá la Corte tiene fijada la doctrina legal sobre el particular al desarrollar en muchos de sus fallos el principio de la no retroactividad de las leyes, doctrina que estriba principalmente en que la acción de la ley sólo se extiende al porvenir y no puede retrotraer sus efectos á las relaciones jurídicas formadas de antemano, ni afectar derechos adquiridos, ó como dice el célebre jurisconsulto Demolombe, destruír ó cambiar aquello con que hayan podido contar firmemente los particulares; semejante retroceso al pasado causaría un perjuicio grave é injusto al interés privado, y, por consiguiente, una perturbación, un desorden en la sociedad misma, que es preciso evitar.

Esto sentado y siendo evidente la aplicación de la última ley citada, con preferencia á la expedida después de su imperio, se hace preciso analizar si la sentencia recurrida es de aquellas contra las cuales puede interponerse la casación, conforme á la ley aludida, dado que el recurso se interpuso oportunamente y por persona hábil, porque si no lo es, debe la Corte limitarse simplemente á negar la admisión de éste, en conformidad con lo estatuído en el artículo 381 de la propia ley.

Ahora bien, las circunstancias exigidas por este artículo son las siguientes: 1.ª que la sentencia se funde ó deba fundarse en leyes que rijan ó hayan regido en toda la República, á partir de la vigencia de la Ley 57 de 1887; ó que se funde ó deba fundarse en leyes de los extinguidos Estados, que sean idénticas en esencia á las nacionales que estén en vigor; 2.ª que la sentencia verse sobre hechos relativos al estado civil de las personas, ó sobre intereses particulares en que la cuantía del juicio sea ó exceda de tres mil pesos, y 3.ª que haya contrariedad en las sentencias de primera y segunda instancia, en cuanto á la inteligencia ó indebida aplicación de las leyes en que se apoyan, ó en cuanto á lo principal del pleito.

Por lo que hace á la primera circunstancia y á la última parte de la segunda, que es la pertinente, es claro que concurren en el caso en cuestión, de modo que, si sólo á ellas debiera atenderse, el recurso sería sin duda admisible, y la Corte tendría que ocuparse en examinar detenidamente las causales en que se funda, puesto que ha sido aplicado el Código Civil del extinguido Estado del Tolima, idéntico en esencia al nacional que hoy rige en la República, y puesto que, por otra parte, la cuantía de la acción excede en mucho de tres mil pesos ($ 3,000). Mas no sucede lo propio respecto de la tercera circunstancia, porque las dos sentencias son conformes en el fondo, ó sea en punto á las declaraciones que contienen, y aun en cuanto á la inteligencia dada á las disposiciones en que se apoyan.

En efecto, tanto el Juez del Circuito de Purificación, como el Tribunal del Norte del Tolima están de acuerdo en la aplicación de los artículos 974 y 975 del Código Civil enunciado, para desechar la acción reivindicatoria propuesta por Caicedo D., y si bien es cierto que el Tribunal se apoyó también en el artículo 976 del mismo Código, en corroboración de aquéllos, y citó, además, los artículos 1973 y 1979, para demostrar la improcedencia de la demanda de reconvención, no lo es menos que uno y otro llegaron á idéntica conclusión, y que el Juez no invocó tales disposiciones, y por ende no pudo hacer de ellas indebida aplicación.

Verdad es que el Tribunal reformó el fallo del Juez, eliminando del número de los comuneros en el terreno de "Monterralo" á Marcelino y á Carlos Luna, por haber vendido los derechos que tenían en él, y absolviendo de las costas á Caicedo D., condenado á pagarlas en primera instancia; pero acerca de estos dos puntos no puede considerarse interpuesta la casación, ya porque la reforma no afecta lo sustancial de la decisión, ya porque al excluír á Marcelino y á Carlos Luna del número de los comuneros, lejos de negárseles sus derechos, se reconocen á favor de sus sucesores, y ya, en fin, porque mal puede suponerse que Caicedo D. reclamase de la sentencia en la parte que le favorece.

Acaso difieran las dos sentencias en algunas apreciaciones de su parte expositiva, mas no por esto debe la Corte tomar en consideración esas discrepancias que no dan derecho á interponer de un modo eficaz el recurso de casación. Las consideraciones abstractas de derecho que se hagan en la parte motiva de un fallo, ha dicho la misma Corte, no pueden tomarse como infracción de ley, sino cuando se traducen en una determinación que en consonancia con ellas produzcan la violación ó desconocimiento de un derecho.

Por todas las razones expuestas, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Eustaquio Caicedo D. contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Norte del Tolima, de fecha veinte de Septiembre de mil ochocientos noventa y dos, proferida en la controversia de que se ha hecho mérito.

Notifíquese, déjese copia en el libro respectivo, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente al Tribunal de su origen.

LUCIO A. POMBO.—LUIS. M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHÁM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO.

Gabriel Rosas, Secretario.

IMPRENTA DE ANTONIO M. SILVESTRE.
Director, Tomás Galarza.

REPÚBLICA DE COLOMBIA.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AÑO VIII | Bogotá, 21 de Julio de 1893. | NÚM. 405.

CONTENIDO.

Págs.

ACUERDOS.

El que declara incurso en una multa á ciertas autoridades administrativas y judiciales, por falta de cumplimiento á la disposición del artículo 71 de la Ley 100 de 1892..... 329

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

La que reconoce á Juan Pablo Pereira un crédito por expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Isaza)..... 329

La que concede á Nepomuceno Escobar una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Corrales)..... 330

La confirmatoria de la sentencia dictada por el Juez 2.º del Circuito de Neiva, en el juicio especial de deslinde de un terreno de la Nación, seguido por Eusebio Torres. (Magistrado ponente, doctor Pombo)..... 330

La que niega á Esteban Romero el reconocimiento de un crédito por expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas)..... 332

La que reconoce á Ramón Angarita, como cesionario de Juan C. Silva y Gregorio Uribe, un crédito por suministros. (Magistrado ponente, doctor Galindo)..... 332

La que declara válida la sentencia pronunciada por el Tribunal de Tunja en el juicio seguido por Primitivo Freire contra Heliodoro Monroy, por pesos. (Magistrado ponente, doctor Corrales)..... 333

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

El que declara inadmisible el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal de Cundinamarca en la tercería excluyente que se interpuso en el juicio ejecutivo seguido por Gabriel Rubio contra Luis María Rubio, por cantidad de pesos. (Magistrado ponente, doctor Corrales)..... 335

GACETA JUDICIAL.

ACUERDO NUMERO 767.

En treinta de Junio de mil ochocientos noventa y tres, la Corte Suprema de Justicia, compuesta de los señores Magistrados doctores Lucio A. Pombo, Presidente; Luis M. Isaza, Vicepresidente; Baltasar Botero Uribe, Jesús Casas Rojas, Manuel E. Corrales, Abraham Fernández de Soto y Aníbal Galindo y del infrascrito Secretario, se constituyó en Sala de Acuerdo, con el objeto de dar cumplimiento á la disposición del artículo 71 de la Ley 100 de 1892, que empezó á regir en la República desde el 1.º de Marzo del presente año, y teniendo á la vista el cuadro formado al efecto, en que aparecen las actas de las visitas practicadas en los Tribunales Superiores de Distrito por los Secretarios de Gobierno de los Departamentos y los respectivos Fiscales, que han sido remitidas á la Corte, de él resulta: que no se ha recibido hasta hoy de los Tribunales de Tundama, Norte y Sur del Tolima, una sola de las actas de las visitas que en ellos han debido practicarse mensualmente por los Secretarios de Gobierno ó Prefectos, en su caso, y por los Fiscales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 241 de la Ley 153 de 1887; que el artículo 71 de la Ley 100 citada, previene que la Corte imponga multas de cincuenta á cien pesos á los referidos empleados que no le envíen mensualmente las actas de las visitas referidas; que hay tiempo más que suficiente para que esa remisión haya podido verificarse á lo menos respecto de las visitas correspondientes á los meses de Marzo y Abril, cosa que ha sucedido aun respecto del Tribunal de Panamá, el más distante de la capital, y, finalmente, que la Corte no puede desatender el cumplimiento de un deber legal que tiene el importante objeto de conocer la marcha de la administración de justicia en todos los Tribunales de la República, acuerda lo siguiente: 1.º declarar, como declara, incursos en la multa de cincuenta pesos ($ 50), á cada uno de los Prefectos de las Provincias de Santa-Rosa y de Neiva, como primeras autoridades políticas de los lugares en donde residen los Tribunales de Tundama y Sur del Tolima; al Secretario de Gobierno del Departamento del mismo Tolima, y á los Fiscales de dichos Tribunales, y al del Norte del citado Departamento, por no haber dado cumplimiento á la disposición del artículo 71 de la Ley 100 de 1892;

2.º Comunicar este Acuerdo á los multados, para los efectos legales y á los empleados de Hacienda respectivos, para que hagan efectivas las multas;

3.º Enviarlo en copia al señor Ministro de Justicia para su inmediata publicación en el *Diario Oficial*, y publicarlo también en la *Gaceta Judicial*.

Con lo cual se terminó el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados conmigo el Secretario.

El Presidente, LUCIO A. POMBO.—El Vicepresidente, LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO.—El Secretario, *Gabriel Rosas*.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Junio veintiséis de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: En la reclamación que intentó Manuel Valencia, en nombre de Manuel José Alvarez contra la Nación, por la suma de mil trescientos sesenta y siete pesos ($ 1,367), proveniente de exacciones causadas por los rebeldes en la guerra de 1885, á Juan Pablo Pereira, vecino de Frontino, Departamento de Antioquia y de empréstitos hechos al Gobierno nacional, en la misma guerra, por otras personas, la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones reconoció á cargo del Tesoro doce pesos, por un empréstito hecho por Vicente Galeano, cedido á Alvarez, y absolvió del resto del cargo al demandado, en la resolución de nueve de Noviembre de 1892, señalada con el número 4,557, que fué confirmada por el Ministerio del Tesoro, en veinticuatro de Diciembre del mismo año.

La parte demandante apeló de la última determinación para ante esta Suprema Corte, y habiéndose sustanciado el recurso y admitido nuevas pruebas en autos para mejor proveer, se procede á fallar definitivamente la reclamación.

La resolución de la Comisión, pronunciada en virtud de las imperfectas pruebas que entonces obraban en la actuación, es legal, y el Ministerio del Tesoro, al confirmarla, dió cumplimiento á la ley.

Efectivamente, las sumas provenientes de empréstitos de pequeñas cantidades, cuyo reconocimiento fué negado, no están acreditados, ya por falta de autenticación de los recibos, ya por no estar endosados al reclamante, ya porque no fueron registrados oportunamente.

Respecto de la suma de mil doscientos cincuenta pesos

($ 1,250) que reclama Juan Pablo Pereira, de quien es apoderado Andrés Lara, se ha presentado una información de más de tres testigos hábiles, practicada ante el Juez del Circuito de Frontino, en presencia del Fiscal respectivo, con la cual se ha comprobado que en el mes de Julio de 1885, tenía el citado Pereira unas mercancías extranjeras que había depositado en la casa de Micaela Vahos, con el propósito de ver si así evitaba que le fueran expropiadas, lo que no consiguió, porque en el mes citado fueron descubiertas y tomadas por los revolucionarios mandados por Raimundo Peláez y otros, y distribuídas á la tropa.

Peláez, al jurar la relación por orden de la Corte, estimó estas mercancías en mil quinientos pesos ($ 1,500); la reclamación se estableció por mil doscientos cincuenta pesos ($ 1,250) y los testigos que presenciaron la exacción les asignan distintos precios, que varían entre seiscientos cuarenta pesos ($ 640) y mil doscientos pesos ($ 1,200). La Corte juzga equitativo asignarles el precio menor siguiendo la práctica yá establecida, y también en atención á la falta de determinación de los objetos, pues los testigos no pudieron examinarlos con la proligidad necesaria para fijar el número y calidad de cada artículo.

Está acreditado, con certificación del Gobernador del Departamento de Antioquia que Pereira fué partidario y sostenedor del Gobierno, en la guerra de 1885.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, reconoce á cargo del Tesoro nacional y á favor de Juan Pablo Pereira la suma de seiscientos cuarenta pesos ($ 640), que unida á la que se reconoció en la resolución de la Comisión, asciende á seiscientos cincuenta y dos pesos ($ 652), total de lo que se reconoce en este expediente, y absuelve á la Nación del mayor cargo.

Queda así reformada la resolución apelada.

Déjese copia de este fallo, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO. *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintiséis de Junio de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Nepomuceno Escobar ha instaurado demanda contra la Nación, como inválido en la guerra de mil ochocientos ochenta y cinco, para que se le declare en el goce de la recompensa unitaria definitiva á que se cree con derecho, con arreglo á la Ley 84 de 1890; y al efecto, ha presentado con dicha demanda los documentos con los cuales se acreditan los siguientes hechos:

1.° Que el solicitante recibió una herida, combatiendo en defensa del Gobierno nacional, en la guerra de mil ochocientos ochenta y cinco; hecho que se comprueba con el reconocimiento practicado el diez y siete de Diciembre de mil ochocientos noventa y dos, ante la Gobernación del Departamento del Cauca, por los facultativos oficiales, debidamente juramentados, los cuales expusieron: "que han reconocido y examinado detenidamente al señor Nepomuceno Escobar y le han hallado la cicatriz de una herida en la pierna derecha producida por arma de fuego, y cuyo proyectil entró por la parte anterior de la misma. Este motivo ha producido la anemia y debilitamiento general que no permiten á Escobar trabajar en la profesión de albañil, como lo hacía antes, por lo que lo declaramos en invalidez parcial ó relativa." La diligencia que se extendió en el acto del reconocimiento, y que corre á la foja siete vuelta, fué suscrita por los señores Gobernador José N. Vernaza, los facultativos reconocedores José M. Iragorri, Aníbal Bonilla y Gentil Jordán y Secretario de Gobierno, Simón Rojas;

2.° Que el demandante ejercía el empleo de Cabo 1.°, en la fecha en que fué herido combatiendo en defensa del Gobierno. Este hecho resulta comprobado con las declaraciones de los testigos Carlos Bonilla C., Manuel San Juan Ledesma y doctor Carlos Albán, rendidas con juramento ante el Juez municipal de Popayán Liborio J. Navia C., con asistencia del respectivo Agente del Ministerio Público. Los mismos testigos exponen que vieron combatir á Nepomuceno Escobar, el día treinta de Enero de mil ochocientos ochenta y cinco, en la función de armas que se verificó en el punto denominado "Hatoviejo," en la cual recibió el reclamante la herida en la pierna derecha; que el demandante pertenecía á la segunda Compañía del *Batallón número veinte de Popayán*, comandada por el Coronel Juan Antonio Maya, y que las fuerzas legitimistas estaban en dicha fecha al mando del General Eliseo Payán (fojas 2, 3, 4 y 5);

3.° Que con las declaraciones de los expresados testigos aparecen acreditados los hechos de ser pobre el reclamante, que se encuentra inválido por consecuencia de la herida alu dida y que por el conocimiento que tienen de él aseguran que es el mismo que ha instaurado este juicio, y que además ha observado y observa buena conducta;

4.° Que el demandante Nepomuceno Escobar no ha recibido pensión del Tesoro nacional; y que en los libros de la Sección 3.ª, no se ha encontrado constancia alguna de que haya recibido recompensa por los servicios que ha prestado á la República y por su invalidez. Este hecho consta acreditado en las certificaciones expedidas por el señor Ministro del Tesoro, con fechas veintiocho de Abril y cinco de Junio de mil ochocientos noventa y tres (fojas 13 y 14).

Como aparecen llenados todos los requisitos que exige la referida Ley 84 de 1890, para optar derecho á la recompensa que la misma ley determina, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de conformidad con el dictamen favorable del señor Procurador general de la Nación, de lo dispuesto en el inciso 8.° del artículo 5.° y en el artículo 19 de la citada Ley 84, declara que el Cabo 1.° Nepomuceno Escobar tiene derecho á percibir del Tesoro nacional la recompensa unitaria de trescientos ochenta y cuatro pesos ($ 384), suma equivalente á la mitad del sueldo en cuatro años señalado al Cabo 1.°, por el parágrafo 35 del artículo 29 de la Ley 86 de 1886, vigente cuando principió á regir la ley sobre recompensas militares.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial*, dése cuenta al señor Ministro del Tesoro y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO. *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintiséis de Junio de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: En veinte de Enero de mil ochocientos noventa y dos, Ildefonso Manrique C., como apoderado de Eusebio Torres, vecino del Municipio de Baraya, en el Departamento del Tolima, se presentó ante el Juez 2.° del Circuito de Neiva y estableció el juicio especial de deslinde para que se fijasen los límites que separan el predio denominado "El-Chamuscado," de las tierras de la Nación por el lado oriental, entre las corrientes llamadas Bejucal y Guarocó, y que se determinaran dichos límites por medio de mojones. Solicitó al efecto el demandante que el deslinde se practicase con la concurrencia del Fiscal de ese Circuito, como representante de los intereses de la Nación, y previa citación de Antonio E. Vélez, esposo legítimo de Matilde Díaz, de quien Agustín Duque, vendedor de "El-Chamuscado" á Eusebio Torres, adquirió dicho predio, á fin de que se presentase á defender los derechos de éste.

Invocó el demandante en apoyo de su derecho las disposiciones de los artículos 900 y 1897 del Código Civil, 1304 del Judicial y 147 de la Ley 105 de 1890, y lo fundó en los siguientes hechos:

"1.° Por escritura número 161 de 16 de Marzo de 1889 el señor Torres compró á Agustín Duque el predio de 'El-Chamuscado,' y el señor Duque lo compró á la señora Matilde Díaz, esposa del señor Vélez, por escritura otorgada en Bogotá el 11 de Agosto de 1881;

"2.° 'El-Chamuscado' perteneció á la sucesión del señor Gaspar Díaz y fué adjudicado en la partición de bienes á la señora Matilde Díaz;

"3.° El señor Díaz adquirió 'El-Chamuscado,' por compra al doctor Eloy Manrique el 27 de Abril de 1856;

"4.° El doctor Manrique lo hubo por donación entre vivos que le hizo su padre D. Angel Manrique, el 1.° de Mayo de 1839, y este señor expresa en la escritura de donación haberlo adquirido por compra al doctor Joaquín Cardoso;

"5.° De los actos públicos enumerados aparece que el predio de 'El-Chamuscado,' ó sea 'todo el terreno sabanoso y montuoso que abrazan desde su confluencia para arriba hasta las montañas altas, el río llamado Guarocó y la quebrada nominada El-Bejucal, ha estado en dominio privado durante un lapso de tiempo mayor de cincuenta años, y que hoy pertenece al señor Eusebio Torres, en propiedad y posesión;

"6.° El predio vale menos de mil pesos (artículo 12, 1.° Ley 72 de 1890)."

A la demanda se acompañaron estos documentos: una información sumaria de diez testigos hábiles, levantada ante el Juez municipal de Baraya, en cuya circunscripción territorial se halla el predio de "El-Chamuscado;" la escritura de fecha primero de Mayo de mil ochocientos treinta y nueve, en que consta la donación que Angel Manrique hizo de ese predio á su hijo Eloy y las escrituras en que aparecen las ventas sucesivas que del mismo predio se hicieron por Eloy Manrique á Gaspar Díaz, la adjudicación por muerte de éste á su hija Matilde, venta de ésta á Agustín Duque y de éste al demandante Torres.

Establecida la competencia del Juez de acuerdo con lo dispuesto en el ordinal 1.°, artículo 12 de la Ley 72 de 1890, se dió curso al juicio, y contestados los traslados correspondientes, el representante de la Nación aceptó la demanda, aunque expresó que, en cuanto á la alinderación solicitada, él defería á la que señalara la escritura de la antigua hacienda de "Caballeriza."

Señalóse por el Juzgado el día y la hora en que debía practicarse el deslinde solicitado con la concurrencia de las partes y de los peritos nombrados por éstas, y el primero de Abril á las doce tuvo lugar la diligencia con inspección del terreno y la comprobación de su identidad, y se observó por los peritos que el indicado predio está determinado así: "por el Sur, por la *quebrada* (corriente de agua) de El-Bejucal, y por el Norte, por el río Guarocó, ambos de cauces bien marcados; tienen su dirección de Oriente, á Occidente, en toda la parte que limitan respectivamente al expresado globo, y son de agua corriente permanente; aquélla tiene su origen inmediatamente en el filo alto montuoso llamado Cerronegro, y éste se remonta más hacia el Oriente pasando por el pie de la base de dicho cerro ó filo, efectuándose la confluencia de ellos hacia el Occidente de dicho globo en donde cierra el perímetro de éste por ese lado. La superficie de dicho terreno es en parte sabanosa y en parte montuosa, extendiéndose ésta hasta la parte más alta del cerro ya mencionado, el cual domina el resto del globo, en donde, según los títulos presentados con la demanda, cierra por el lado de Oriente el perímetro de dicho globo."

Se expresó en las diligencias (fojas 60 y 61), que el Fiscal manifestó que si las pretensiones de la demanda se dirigen á que el límite del predio, por el Oriente, sea la parte más alta ó filo llamado Cerronegro, comprendido entre el origen de la *quebrada* de El-Bejucal y la corriente del río Guarocó, su oposición cesará por encontrar razonable en ese sentido la alinderación dada al mencionado terreno por los títulos de propiedad del demandante.

Finalmente, exigido por el Juez el dictamen de los peritos, éstos lo expresaron en los siguientes términos: "Que por el lado de Oriente fijan como línea divisoria del terreno de 'El-Chamuscado' de los baldíos limítrofes, el nacimiento de la quebrada de El-Bejucal, de éste línea recta al filo, ó sea á la parte más alta de Cerronegro, siguiendo éste hacia el Norte hasta su descenso en el río Guarocó. Que este es en su concepto y según su leal saber y entender el límite que separa dicho terreno de los baldíos de propiedad de la Nación, pues es la alinderación que estiman más razonable y equitativa, atendida la configuración del terreno y la voz de los documentos escriturarios que las partes han exhibido."

Dado después traslado á las partes del anterior dictamen pericial, sin que fuese objetado ó contradicho, el Juez dictó su sentencia de trece de Junio de mil ochocientos noventa y dos, en la cual, después de minucioso examen de los documentos presentados y apoyado en el expresado dictamen, aprobó el deslinde practicado y fijó, en consecuencia, como límite oriental del terreno de "El-Chamuscado," el nacimiento de la quebrada de El-Bejucal, de éste, línea recta, al filo, ó sea la parte más alta de Cerronegro; siguiendo éste hacia el Norte hasta su descenso en el río Guarocó. En consecuencia, ordenó dar la posesión judicial de la finca deslindada y dispuso consultar su decisión con la Corte Suprema.

Remitido el expediente á esta Superioridad y sustanciado el asunto, aunque el señor Procurador de la Nación fué de concepto que debía confirmarse el fallo consultado, por no hallar razón alguna jurídica que oponerle, la Corte, sin embargo, por resolución de veintiséis de Agosto siguiente, revocó la sentencia y ordenó devolver el expediente, para que los peritos que intervinieron en la diligencia fundaran su dictamen en la identificación de los puntos que allí se señalan como linderos con aquellos que en la demarcación de la hacienda de "Caballeriza" se expresan, tomando en cuenta lo que puedan declarar á la vista de los mismos, personas ancianas conocedoras de aquellos terrenos, y expresaran, además, si al Occidente de la línea fijada tienen establecidas labores algunos individuos, en la creencia de ocupar terrenos baldíos; hecho lo cual el Juzgado debía resolver lo que estimara legal.

En cumplimiento de lo ordenado por la Corte, practicóse el cinco de Diciembre del año próximo pasado una nueva diligencia de deslinde, en la cual intervinieron las mismas personas que habían concurrido á la anterior, y además algunos testigos; y después de proceder de conformidad con las indicaciones de la Corte y con vista de una extensa información de testigos conocedores del terreno de "El-Chamuscado," los peritos declararon que este terreno limita al Oriente con terrenos de propiedad nacional, por los mismos términos ó linderos que habían señalado en la diligencia de deslinde practicada el primero de Abril de mil ochocientos noventa y dos.

El Juez de primera instancia, fundado en este último dictamen pericial y en la aquiescencia dada á él por el representante de la Nación, pronunció su segundo fallo el seis de Marzo último, en el cual volvió á fijarse como lindero oriental del terreno mencionado el mismo señalado en el fallo anterior.

Consultado con la Corte este nuevo fallo, y oído el dictamen del señor Procurador, quien ha insistido en su anterior opinión, esta Superioridad no encuentra observación que hacer á la sentencia que es materia de la consulta, pues ha desaparecido la duda que ocasionó la anterior resolución de la Corte, la cual había nacido de haberse dicho en el inventario de los bienes de Gaspar Díaz que los límites orientales del terreno de "El-Chamuscado," eran los que aparecían en la escritura de la antigua hacienda de "Caballeriza." Pero ni esos linderos coinciden con los que se señalaron á ese terreno, en la escritura de compra que se otorgó al mismo Díaz, ni con los que en escrituras posteriores se siguieron señalando al mismo terreno; y en la diligencia de deslinde practicada últimamente ha quedado establecido que los linderos señalados por el Oriente, á la antigua hacienda de "Caballeriza" corresponden á los globos llamados "Cardón" y "Cucharito" que hicieron parte de dicha hacienda y ubican en una zona de terreno distinta de la conocida con el nombre de "El Chamuscado."

Por tanto, la Corte Suprema, de acuerdo con el parecer del señor Procurador de la Nación, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la sentencia consultada.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO.

Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintisiete de Junio de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: La Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, por resolución de veinte de Mayo de mil ochocientos noventa y dos, número 3,711, negó á Esteban Romero el reconocimiento de doscientos cincuenta pesos ($ 250), que reclamaba en razón de haber sufrido el año de mil ochocientos ochenta y cinco, la expropiación de un caballo de su propiedad que las fuerzas del General Daniel Aldana, en su paso por Ubaté, en la campaña del Norte, le tomaron y no le devolvieron, y que en concepto del Comandante del *Escuadrón Husáres de Junín*, Elías Cortés, valía la expresada suma de doscientos cincuenta pesos.

Dicha resolución fué aprobada por la que el Ministerio del Tesoro pronunció en veintitrés de Julio siguiente, bajo el número 3,099, y habiéndose apelado de esta última, fué remitido el expediente á esta Superioridad, en donde, surtida la tramitación correspondiente para fallar, se considera lo siguiente:

La prueba en que se funda la reclamación consiste en la certificación que el Secretario de Gobierno de Cundinamarca, expidió en favor de Esteban Romero, con el número 105, el veintiocho de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, en la cual se hace constar que los comprobantes que la motivan fueron presentados y anotados en el libro respectivo dentro del término legal y debidamente autenticados.

Pero la Comisión manifestó en su expresada resolución que aquel documento carecía de las formalidades legales necesarias para que pudiese ser estimado como prueba suficiente del hecho de la expropiación, fundando tal concepto en que, como el inciso 2.° del artículo 2.° de la Ley 44 de 1886, al dar el valor de plena prueba á las certificaciones expedidas por los Gobernadores, hizo referencia al Decreto número 102, de diez y siete de Febrero de mil ochocientos ochenta y seis, y como este Decreto en su artículo 3.° sólo permite á los Gobernadores cambiar por certificaciones suyas las atestaciones de sus propios sub lternos y no de otros empleados, la mencionada certificación número 105, no podía estimarse como prueba suficiente de la reclamación sino en caso de que hubiese sido efecto de cambio hecho por alguna atestación de algún subalterno del Gobierno de Cundinamarca que hubiese tenido autoridad suficiente para expedirla, y cuyo valor ó importe figurara en la cuenta respectiva; agregando que como Elías Cortés, que es quien, como Comandante de un Escuadrón del Ejército del Norte, aparece firmando la atestación en vista de la cual se expidió la certificación número 105, no era subalterno del Gobernador de Cundinamarca, esa atestación no debía haber sido convertida en dicha certificación número 105; y que no correspondiendo la autenticación de la firma de Cortés sino al Gobierno nacional, y no habiendo éste podido autenticar tal firma por falta de datos, la certificación mencionada carece de fuerza probatoria.

Expónese, además, en la resolución de la Comisión que no se ha comprobado que en el Ejército del Norte no hubiese Intendente ó comisionado especial para hacer expropiaciones, que es el caso en que, según el inciso 2.° del artículo 2.° de la Ley 44, pueden firmar los recibos los Comandantes generales.

Y estas razones fueron acogidas por el Ministerio del Tesoro, y la Corte no halla que ellas puedan desecharse; razón por la cual, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el parecer del señor Fiscal, confirma la resolución apelada.

Notifíquese, cópiese, publíquese, en la *Gaceta* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO.
Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, veintiocho de Junio de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Ramón Angarita, vecino del Socorro, Departamento de Santander, reclama del Tesoro nacional, en su carácter de cesionario de los señores Juan C. Silva y Gregorio Uribe, el pago de la suma de ciento noventa y ocho pesos ($ 198), procedente del valor de empréstitos y suministros hechos á las fuerzas del Gobierno nacional durante la guerra de mil ochocientos ochenta y cinco, en esta forma:

Valor de una mula mora, resto de once, de las cuales fueron devueltas diez, de propiedad de Silva, tomadas de un potrero en el Distrito de La-Florida, el veinticuatro de Enero de mil ochocientos ochenta y cinco, por el Coronel Francisco Aguilera, al servicio del Gobierno, estimada en cien pesos..... $ 100

Flete de dicha mula, de Piedecuesta al Socorro, cuatro pesos..... 4

Valor del aparejo, cuatro pesos..... 4

Suma..... $ 108

Y noventa pesos, importe de los suministros hechos por Uribe, así:

Valor de un caballo, cuarenta pesos..... $ 40

Consignado por empréstito..... 50

Suma..... $ 90

Las dos últimas partidas están superabundantemente comprobadas con los recibos originales y decididamente autenticados de las autoridades que recibieron el suministro, el uno del Alcalde de Piedecuesta por el valor del caballo, con fecha veintidós de Noviembre de mil ochocientos ochenta y cinco, folio 18, y el otro por el Tesorero municipal del mismo Distrito con fecha veintinueve de Enero, recibos que con las formalidades legales fueron después admitidos y reconocidos por la Gobernación del Departamento de Santander y convertidos en la atestación que corre al folio 13.

Respecto de la expropiación de la mula hecha á Silva, el reclamante no ha podido satisfacer la prueba que exigen el ordinal 3.° del artículo 2.° de la Ley 44 de 1886, concordante con el artículo 5.° de la Ley 152 de 1887, consistente en las declaraciones de tres testigos idóneos y contestes, rendidas ante cualquiera de los Juzgados de Circuito ó Ejecutores de la República, con intervención del representante del Ministerio Público, pues ante la Comisión sólo pudieron presentarse las declaraciones de Lucas Ardila y Pablo Monsalve, folio 4, rendidas ante el Juez municipal de Oiba.

Por estas razones, la Comisión, en su resolución número 3,835, de veintitrés de Junio de mil ochocientos noventa y dos, folio 21, sólo reconoció á Angarita los noventa pesos ($ 90), valor de la atestación de los suministros hechos por Uribe, y absolvió al Tesoro de los ciento ocho pesos ($ 108) de las expropiaciones hechas á Silva, resolución confirmada por la del Ministerio del Tesoro, número 3,190, de fecha nueve de Septiembre de mil ochocientos noventa y dos, folio 23.

Apelada esta última para ante la Corte, ésta, por auto para mejor proveer, dictado á solicitud del interesado, de fecha tres de Febrero próximo pasado, folio 30 vuelto, dispuso que se recibieran en la forma legal ante el Juez del Circuito del Socorro, las declaraciones de Daniel D. Meléndez, Pablo Monsalve y Lucas Ardila; pero de ellas sólo ha podido presentarse la de Meléndez, y aun ésta misma sin valor alguno probatorio, pues se ha reducido á decir: "que lo único que puede declarar sobre el particular, es lo siguiente: que un día del año de mil ochocientos ochenta y cinco, un hombre de apellido Rueda, vecino del Municipio de Oiba, pariente político del señor Juan C. Silva, le contó en esta ciudad (Socorro), que le habían quitado unas mulas, que más tarde recuperó, excepción hecha de una mula mora, que el exponente había conocido antes, y que ignora el resto de la pregunta." (Folio 33 vuelto).

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma en todas sus partes la resolución apelada, por la cual se reconoce á cargo del Tesoro y á favor de Ramón Angarita, la suma de noventa pesos ($ 90), procedente de sumistros hechos por Gregorio Uribe, de quien Angarita es cesionario, al Gobierno nacional en la guerra de mil ochocientos ochenta y cinco, y se absuelve al Tesoro de los ciento ocho pesos ($ 108) reclamados por el mismo Angarita, como cesionario de Juan C. Silva.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, cuatro de Julio de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: El doctor Bernardo Gutiérrez, como endosatario de Primitivo Freire, ejecutó á Heliodoro Monroy por cantidad de pesos, y reconocido el documento que el ejecutante presentó, se libró mandamiento, y al notificársele al ejecutado, éste denunció para el pago y como de su propiedad, la mitad de un potrero denominado "El-Pantano," ubicado en Samacá, señalando los linderos generales de todo el potrero, que aseguró haber comprado á Florencia Munévar, y ofreció presentar los correspondientes títulos. En efecto, como lo afirma el Juez de la primera instancia en su fallo definitivo, Monroy exhibió en la ejecución la escritura pública en que consta que Florencia Munévar, viuda de Ángel María Novoa y madre de Cándido Novoa, le vendió los derechos que pudieran corresponder á la vendedora en el juicio de sucesión por causa de muerte de su expresado hijo. Embargado y depositado el potrero denunciado por Monroy, se presentó el doctor José Anunciación Vargas, con poder de Mercedes Novoa de Escamilla y su marido, y como curador *ad litem* de Lucinda Novoa, estableciendo tercería excluyente ó de dominio en el referido potrero.

Como fundamento de la acción, acompañó las dos hijuelas, debidamente registradas, en las cuales consta la adjudicación que en la sucesión de su padre, Nicolás Novoa, se les hizo del mismo potrero, que en la fecha de la adjudicación se denominaba "Patagüí," y una información para acreditar con la prueba testimonial, que dicho inmueble, conocido hoy con la denominación de "El-Pantano," se había llamado "Patagüí."

Los hechos en que se funda la tercería son éstos:

"1.° En que el potrero enunciado fué del señor Nicolás Novoa, á la muerte del cual pasó á sus legítimas herederas;

"2.° En que en la sucesión del señor Novoa se adjudicó el potrero á mis poderdantes, señoras Mercedes Novoa de Escamilla y Lucinda Novoa;

"3.° En que, además de los títulos de propiedad, mis poderdantes han ganado por prescripción el dominio y posesión del potrero, uniendo, si fuere necesario, su posesión á la de sus causantes."

El ejecutado, Heliodoro Monroy, contestó el traslado que de la tercería se le confirió, manifestando que no era exacto que el inmueble que había denunciado como de su propiedad en la ejecución que seguía contra él Bernardo Gutiérrez, y que es materia de las tercerías, fuese de la exclusiva propiedad de las actoras ó terceristas, pues de la escritura de compra-venta del propio inmueble, aparece que varios indígenas le trasfirieron el dominio que tenían en él á Nicolás Novoa y á su hermano Ángel María Novoa, proindivisos; escritura que, registrada en la Oficina respectiva, fué otorgada en cinco de Diciembre de mil ochocientos cincuenta y dos, y que en copia figura en la actuación.

Bernardo Gutiérrez, en su calidad de ejecutante, al contestar el traslado que también se le dió del escrito de la tercería, se limitó á reproducir los razonamientos aducidos por el ejecutado; y por no estar de acuerdo las partes en el punto primordial de la controversia, el Juez lo abrió á prueba, sin que en el respectivo término las partes hubieran producido prueba alguna para justificar sus pretensiones, ni alegaron de bien probado. El Juez, en ese estado, decretó la citación para sentencia, y notificada la providencia, pronunció el fallo definitivo, cuya parte resolutiva se copia en seguida:

"1.ª Se halla probada la tercería excluyente propuesta por Mercedes y Lucinda Novoa;

"2.ª En consecuencia, el potrero denominado 'El-Pantano,' ubicado en el Municipio de Samacá, pertenece en propiedad y posesión á las terceristas, ya por haber probado su propiedad con los respectivos títulos, como por la prescripción de más de diez años y con las demás formalidades legales;

"3.ª Desembárguese dicho terreno, entréguesele á sus dueños, dando el aviso correspondiente al Registrador de instrumentos públicos para la cancelación de la diligencia de embargo, y

"4.ª Condénase en las costas del juicio á Heliodoro Monroy, por su temeridad en el denuncio de bienes que no le pertenecen."

Notificada á las partes dicha sentencia, el ejecutante, doctor Bernardo Gutiérrez, y el ejecutado Heliodoro Monroy, interpusieron el recurso de apelación, que les fué concedido para ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, y en éste se adelantó el recurso por la tramitación prescrita en la ley procesal, hasta poner el juicio en estado de ser decidido en segunda instancia; habiéndose ella abierto á pruebas por veinte días, durante los cuales las partes produjeron las que estimaron convenientes á sus respectivos derechos.

Dicha sentencia termina así:

"En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: el dominio del terreno de 'El Pantano,' ubicado en Samacá, y que en este juicio de tercería se litiga, corresponde á las terceristas Mercedes y Lucinda Novoas, y no al ejecutado Heliodoro Monroy, sin perjuicio de los derechos que Florencia Munévar pueda conservar á los bienes hereditarios de su finado marido Ángel María Novoa y de su difunto hijo Cándido Novoa. En consecuencia, levántase el embargo hecho del terreno indicado, el que queda excluído de la ejecución, quedándole á salvo sus derechos al ejecutado Monroy para repetir por las prestaciones que le correspondan. No se probó la acción de prescripción, quedando con estas modificaciones ó reformas confirmada la sentencia apelada, por lo cual no se hace condenación en costas."

Contra esta sentencia, que lleva la fecha de diez y ocho de Noviembre de mil ochocientos noventa, y que se notificó en diez y seis de Diciembre siguiente, el ejecutado Heliodoro Monroy, por medio del escrito corriente á las fojas 55, 56 y 57, interpuso para ante este Supremo Tribunal, el recurso de casación que concedía la Ley 61 de 1886; escrito que presentó al Secretario del Tribunal Superior de Tunja, el día tres de Febrero de mil ochocientos noventa y uno, junto con la cantidad de cincuenta pesos ($ 50), que, en atención á la cuantía ó valor del inmueble le correspondía consignar al recurrente, según los artículos 40 á 45 de dicha ley. Previo informe del Secretario del Tribunal, en que aseguró que la interposición del recurso había tenido lugar en tiempo hábil, el mismo Tribunal lo otorgó, por cuanto constaba que el valor del terreno disputado excedía de la cantidad de mil pesos ($ 1,000) (folio 58).

Notificada á las partes de la concesión del mencionado recurso, se envió el expediente á la Corte, donde, repartido y sustanciado por los trámites legales, es de oportunidad dictar el fallo que corresponda.

Antes de ocuparse la Corte en el examen de las causales de nulidad alegadas por el recurrente, procede á examinar si en el presente caso concurren las circunstancias que determina la Ley 61 de 1886, vigente cuando se interpuso el recurso para que sea éste admisible; y efectivamente, resulta de lo actuado:

1.° Que el recurrente es parte legítima en la controversia suscitada, con motivo de las tercerías propuestas;

2.° Que el escrito por medio del cual Heliodoro Monroy interpuso el recurso, lo presentó en el Tribunal á los veintiocho días siguientes al en que se surtió, por edicto, la notificación de la sentencia recurrida; y, por tanto, dentro del término señalado en la ley, y

3.° Que aparece que el recurrente, en el referido escrito, expresó las causas de nulidad de que adolece, en su concepto, la sentencia de segunda instancia.

Cumplidos estos requisitos, la Corte declara admisible el recurso, y pasa á examinar las causales alegadas.

La primera causal en que Heliodoro Monroy se apoya para no estimar justa la mencionada sentencia, es ésta:

"Ser la sentencia, en su parte dispositiva, violatoria de ley sustantiva ó de doctrina legal, ó fundarse en una interpretación errónea de la una ó de la otra."

Para sostener el recurrente que el fallo tiene los vicios de que se trata en esta causal primera, hace los siguientes razonamientos: que la sentencia reconoce como dueño del terreno á Mercedes y Lucinda Novoa, en virtud de la adjudicación que les fué hecha en la causa mortuoria de su padre Nicolás Novoa, por ser éste uno de los modos de adquirir el dominio establecido por el artículo 705 del Código Civil de Boyacá, y asienta la presunción de la adquisición del dominio á favor de ellas como poseedoras, en tanto que otro no justifique ser el dueño, según la doctrina del artículo 778 ibidem; para entrar luégo á examinar los títulos presentados por el recurrente; que comprobado como está que Nicolás y Angel María Novoa compraron proindiviso el terreno, por la escritura pública de cinco de Diciembre de mil ochocientos cincuenta y dos, y que así lo administraron hasta la muerte de Ángel María, no puede reconocerse derecho exclusivo á favor de Nicolás ó de sus sucesores sino en virtud de título traslaticio de dominio otorgado entre ellos; sin que obste el que uno solo de los compradores haya continuado en la posesión, porque subsistiendo el título de dominio común ó *proindiviso*, la posesión del condueño se entiende recaer sobre la parte ó derecho que le toque, conforme á la doctrina del artículo 796 ibidem; que la adjudicación hecha en el juicio de sucesión de Nicolás Novoa no mejora el título que él tuviera sobre el terreno, ni varía el carácter de la posesión; pues representando los herederos la persona del difunto para suceder en todos sus derechos y obligaciones trasmisibles, conforme á los artículos 1020 y 1157 ibidem, Mercedes y Lucinda Novoa no adquirieron por la adjudicación derecho de dominio y la posesión de todo el terreno, porque su causante no los tenía. Los actuales poseedores han alegado á su favor la posesión anterior, caso en el cual se la apropian con todas sus calidades y vicios, como lo establece el artículo 795 del mismo Código. El recurrente agrega, á lo que queda expuesto, que por la sentencia recurrida se violan especialmente las disposiciones legales citadas, ó se hace interpretación errónea de ellas, verificándose una ú otra cosa, de un modo general de las disposiciones sobre posesión consignadas en el título 7.°, libro 2.° del Código citado, sobre sucesión por causa de muerte, del libro 3.°, y sobre tradición del título 6.°, libro 2.° de dicho Código.

La Corte, para refutar los precedentes razonamientos del recurrente tiene en consideración que aunque es cierto que por la escritura de cinco de Diciembre de mil ochocientos cincuenta y dos, Nicolás y Ángel María Novoa compraron á varias familias indígenas el terreno de que se trata, adquirido por los vendedores en el repartimiento que se hizo del resguardo en mil ochocientos treinta y cuatro; que á la muerte de Angel María Novoa estaban ambos compradores en posesión de él como comuneros, consta en este expediente que la parte que correspondía á Ángel María Novoa, fué adjudicada á su hermano Nicolás en pago de una suma que aquél debía á éste, de modo que después de la muerte del deudor, Nicolás quedó siendo dueño de todo el globo de tierra conocido en época anterior con el nombre de "Patagüí," y en la actualidad con el de "El-Pantano," ubicado en jurisdicción del Municipio de Samacá.

Probablemente, en virtud de dicha adjudicación, por óbito de Nicolás Novoa, el aludido terreno fué inventariado entre los bienes que éste dejara á su muerte, y formada la causa mortuoria respectiva, se adjudicó el mismo terreno á sus hijas nombradas Mercedes y Lucinda Novoa, por partes iguales, lo cual aparece plenamente probado con las hijuelas que ellas, como terceristas, han presentado al juicio con citación de la contra-parte. Estos títulos han sido expedidos por el Notario que protocolizó el juicio de sucesión de Nicolás Novoa, y han sido registrados en la Oficina de Registro correspondiente; de suerte que con dichas hijuelas no sólo acreditan los terceristas haber sucedido por muerte de su padre en el dominio del terreno aludido, sino que están en posesión de él.

El ejecutado Monroy alega que la mitad del terreno que pertenecía á Ángel María Novoa, lo adquirió por venta que hizo á su favor Florencia Munévar, después de la muerte de su marido y de la de Cándido, su hijo, porque esa venta se extendía á todos los derechos hereditarios que pudiera la vendedora tener en el respectivo juicio de sucesión; pero como no se determinó en la venta el expresado terreno, con expresión de sus linderos, no advirtió el comprador el dominio en tal inmueble. Prueba de que Florencia Munévar no vendió á Monroy el terreno sujeta materia del litigio, es que el referido Monroy no ha presentado la respectiva escritura de venta en el juicio, mientras que las terceristas sí han exhibido los títulos que reconoce la ley como comprobantes del dominio adquirido por sucesión de su padre Nicolás Novoa. Por consiguiente, no es exacto que el Tribunal Superior de Tunja hubiera violado las disposiciones sustantivas contenidas en el Código Civil de Boyacá, que cita el recurrente.

La segunda causal de nulidad que establecía el ordinal 2.° del artículo 38 de la Ley 61 de 1886, es la de hacer la sentencia indebida aplicación de leyes ó de doctrinas legales al caso del pleito. Algo deja expuesto la Corte relativamente á esta segunda causal, y agregará en seguida otras razones.

La ley civil ciertamente, no prohibe al heredero que venda los derechos que pueda tener en determinado juicio de sucesión; pero como en la presente controversia no se trata de la venta que hizo Florencia Munévar á favor de Monroy de los derechos que ella pudiera tener legalmente en la sucesión de su esposo y de su hijo legítimo Cándido Novoa, sino del punto cardinal de qué Monroy no adquirió dominio en el terreno de "El-Pantano," en virtud de aquella venta, la Corte no considera pertinente la cita que él hace del artículo 1973 del Código Civil de Boyacá. Ese artículo, invocado en el debate que se ha sostenido entre el ejecutado y el ejecutante, por una parte, y las terceristas por otra, es como sigue:

"Artículo 1973. El que cede á título oneroso un derecho de herencia ó legado sin especificar los efectos de que se compone, no se hace responsable sino en su calidad de heredero ó legatario."

Y no tiene la Corte como pertinente en la cuestión el artículo copiado, porque, según él, el vendedor no se hace responsable para con el comprador de los bienes herenciales, sino de su calidad de heredero ó legatario; circunstancia que establece una diferencia entre dicha disposición y las del mismo Código Civil, que imponen al vendedor de un inmueble la obligación de sanear la venta y de salir á la evicción, cuando no renuncie esta obligación expresamente con asentimiento del comprador.

Lo propio debe decirse respecto de los artículos 773, 1749 y 1750 del referido Código, que también se citan en el escrito en que el recurrente fundó el recurso de casación.

El artículo 773 prescribe lo siguiente:

"Artículo 773. En el momento de deferirse la herencia, la posesión de ella se confiere por ministerio de la ley al heredero; pero esta posesión legal no lo habilita para disponer en manera alguna de un inmueble mientras no preceda:

"1.° El decreto judicial que da la posesión efectiva;

"2.° El registro del mismo decreto judicial y de los títulos que confieran el dominio."

¿Qué consecuencia puede deducirse de la disposición trascrita y de las contenidas en los artículos 1749 y 1750 del citado Código, que tratan de la oportunidad de la enajenación de los bienes herenciales y de nulidad de ciertos actos y contratos que pueda servir de fundamento á las alegaciones del recurrente? Conforme á los mismos artículos, ¿puede estimarse vendido el terreno llamado "El-Pantano" á Heliodoro Monroy? De ninguna manera. Aunque los argumentos de éste, aducidos en sostenimiento de su pretensión, se fundan en la escritura por la cual Florencia Munévar le vendió los derechos que tuviera ó pudiera tener á que se le adjudicasen ciertos bienes de su marido y de su hijo Cándido Novoa, es lo cierto que la referida Munévar, como se ha dicho arriba, no otorgó al comprador escritura de la venta de "El-Pantano" con especificación de sus linderos, de su valor y demás requisitos que el Código Civil prescribe, tratándose de bienes raíces cuyo dominio no puede trasmitirse sino por instrumen-

to público debidamente registrado, en el cual instrumento hiciera constar la vendedora que había adquirido el inmueble por sucesión de su hijo; ni se ha probado que dicho terreno se hubiera adjudicado á la vendedora. Y si nada de esto se ha justificado por el recurrente, la Corte considera que el Tribunal sentenciador no ha hecho indebida aplicación de leyes ó de doctrinas legales al caso del pleito.

La causal octava de nulidad que determina el artículo 38 de la Ley 61 de 1886, consiste en haberse incurrido en la apreciación de las pruebas en error de derecho ó en error de hecho, si este último resulta de documentos ó actos auténticos que demuestren la equivocación evidente del juzgador.

Alégase por el recurrente, que el Tribunal sentenciador estimó como bastantes las declaraciones de testigos que aseguran que en la causa mortuoria de Ángel María Novoa se adjudicó á su hermano Nicolás la parte que al primero correspondía como comunero en el terreno de "El-Pantano," para satisfacerle un crédito que Ángel María adeudaba á Nicolás, no obstante que el Código Judicial de Boyacá, vigente cuando tuvo lugar el juicio de sucesión del referido Ángel María, prescribía que todas las diligencias judiciales ó extrajudiciales de inventarios y partición de los bienes herenciales debían hacerse constar por escrito, y que al juicio de tercería no han venido en copia dichas diligencias; pero como en el juicio de sucesión de Nicolás Novoa, se adjudicó el terreno de "El-Pantano" á sus hijas Mercedes y Lucinda Novoa, es lógico deducir que el referido inmueble fué inventariado en su totalidad como propiedad de Nicolás, porque sabido es que la partición y adjudicación de bienes en un juicio mortuorio tienen por base el inventario de los mismos bienes. De consiguiente, no pudo adjudicarse á las hijas de Nicolás Novoa un inmueble que en su totalidad no hubiera sido inventariado como de propiedad de éste. Además, no sería oportuno en esta controversia examinar los antecedentes que sirvièron para expedir los títulos presentados por los terceristas para justificar su adquisición en el mencionado terreno y su actual posesión, una vez que la parte contraria no ha exhibido documento alguno fehaciente para destruír ó enervar la fuerza ó valor probatorio de las hijuelas de que ya se ha hecho mérito. Cierto es que en la nota de registro de la hijuela presentada por Lucinda Novoa, el Registrador Manuel María Cifuentes, no expresa categóricamente, como debió haberlo hecho, que tal hijuela ha sido registrada en el *libro primero;* pero lo es también que dicho Registrador hizo constar en la misma nota que ese instrumento público había sido registrado en el *Libro de registro de causas mortuorias*, y como la contraparte no ha probado que ese libro fuera ó sea distinto del *libro primero*, no puede deducirse rectamente que la hijuela no se hubiese registrado en el libro que previene la ley. El ejecutado Monroy no pidió, por otra parte, el cotejo de la referida nota con el asiento del libro á que ella se refiere, y ese cotejo habría disipado toda duda que pudiese asistir á este particular.

No hay, pues, error de derecho en la estimación de las pruebas referentes á este punto.

El Tribunal Superior de Tunja no cometió error de hecho ni error de derecho, al apreciar las pruebas que obran en el expediente; porque acreditado como está el hecho de haber estado Nicolás Novoa en posesión de todo el terreno nombrado "El-Pantano" á la fecha de su muerte, lo más natural era que el Tribunal sentenciador resolviera que Mercedes y Lucinda Novoa habían probado su adquisición en el mencionado terreno y su actual posesión, toda vez que ellas han acreditado ser poseedoras regulares del inmueble, y que, conforme á la ley, se presume que el poseedor es dueño de la cosa poseída, mientras otra persona no acredite serlo; y como Heliodoro Monroy no ha justificado haber estado en posesión del mismo terreno, en virtud de la venta que le hizo Florencia Munévar de las acciones y derechos que ella creía tener á los bienes de su hijo Cándido, entre los cuales no se menciona especialmente el terreno de "El-Pantano," es concluyente que dicho Monroy no tuvo fundamento legal para denunciar como suyo tal inmueble en la ejecución seguida contra él por el doctor Bernardo D. Gutiérrez.

En mérito de lo expuesto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que no ha lugar á infirmar la sentencia definitiva pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, en diez y ocho de Noviembre de mil ochocientos noventa, materia del presente recurso de casación.

Se condena al recurrente al pago de las costas causadas en él, y á la pérdida de la suma depositada, que se aplicará al Establecimiento de beneficencia que determine el Gobernador del Departamento de Boyacá.

Notifíquese, cópiese, publíquese, insértese en la *Gaceta Judicial*, y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO.
Gabriel Rosas, Secretario.

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, veintisiete de Junio mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Ante el Juzgado 2.° del Circuito de Bogotá, Gabriel Rubio instauró juicio ejecutivo contra Luis María Rubio, en su carácter de guardador de la demente Clotilde Rubio, por cantidad de pesos que le adeudaba de plazo cumplido, según el documento que al efecto fué presentado y reconocido por el mismo curador; y habiéndose librado el mandamiento de pago por la vía ejecutiva, el curador manifestó que no tenía dinero de contado con qué cubrir la deuda de quinientos pesos ($ 500) por capital ni los intereses vencidos no pagados, y denunció el terreno de "San-José" como de propiedad de la demente, por lo cual el Juzgado decretó el embargo, depósito y avalúo del terreno.

Pendiente el juicio ejecutivo, el doctor Fernando Cortés Monroy, con poder especial de Daniel M. Rubio París, vecino del Distrito municipal de Anolaima, propuso tercería excluyente del terreno embargado y de que se ha hecho mención, el cual linda con los adyacentes de este modo: desde una piedra herrada que queda en la orilla del camino que va de "San-Francisco" para "Bajamón;" todo éste abajo, á dar al punto llamado "Palo de la Cruz," juntas del camino que va para La-Mesa, y por todo éste, á dar al paso de la quebrada del Totumo, y por toda ésta arriba, á dar á su nacimiento; y de aquí á una laja que está sobre tres piedras en el alto de 'Chumbacalá;' y tomando por la izquierda por toda la cuchilla á mirar, línea recta, á donde se encuentra la piedra herrada, primer lindero, la cual está situada cerca de la quebrada del Limón ó de San-Francisco.

Y como el decreto de embargo del terreno denominado "San-José," ubicado en jurisdicción de Anolaima, expresa los mismos linderos, el Juzgado que conoce de la ejecución admitió la demanda de tercería, y dispuso darle el curso correspondiente.

El tercerista fundó la acción, ó sea el derecho, causa ó razón de ella "en que el terreno fué de propiedad del señor Daniel Rubio, padre de mi poderdante; en que éste representa hoy á aquél y en lo que disponen, entre otros, los artículos 773, 781, 782, 795, 797, 800, 806, 1024, 1025, 1028, ordinal 2.°, 1412, 1418, 1748, 1749 y sus concordantes del Código Civil de Cundinamarca, en sus correspondientes del Código Civil y otras leyes de la República, y en los artículos 217, 218, 219 y siguientes de la Ley 105 de 1890;" y la apoyó en los hechos siguientes:

"1.° El terreno denominado 'San-José,' de que vengo ocupándome, pertenecía al señor Daniel Rubio, en propiedad;

"2.° Ese terreno quedó comprendido entre los bienes de la sucesión del señor Rubio, cuando éste falleció;

"3.° El señor Daniel Rubio otorgó testamento abierto por ante el Notario del Círculo de Facatativá, el día diez de Octubre del año de mil ochocientos ochenta y uno, por medio del instrumento número quinientos cuarenta y uno;

"4.° En la cláusula duodécima de su testamento, el señor Daniel Rubio instituyó por heredero suyo universal á mi poderdante, que es hijo legítimo de dicho señor y de la señora María Luisa París;

"5.° El señor Daniel Rubio murió en Anolaima en Noviembre de mil ochocientos ochenta y uno, y fué sepultado el día quince de dicho mes;

"6.° Al morir el señor Daniel Rubio, dejó entre los bienes de que gozaba como dueño, por pertenecerle en propiedad, el terreno de 'San-José,' ubicado en Anolaima, y al cual vengo refiriéndome;

"7.° Ese terreno no lo ha adquirido de ninguna manera legal la demente Clotilde Rubio, pues ella ni ha sido ni es asignataria de ningún título en la sucesión del señor Daniel Rubio;

"8.° Pertenece, pues, el terreno de 'San-José' á la sucesión del señor Daniel Rubio, toda vez que la demente prenombrada no es ni heredera, ni legataria, ni donataria, ni nada de este señor, que pueda investirla del carácter de dueña de tal terreno;

"9.° Mi poderdante es menor de veintiún años, pero goza del beneficio de habilitación de edad, concedido por el Juzgado 1.° del Circuito de Tequendama el veinticinco de Abril del presente año;

"10. El terreno de que me ocupo ha sido embargado en el juicio ejecutivo que el señor Gabriel Rubio sigue ante usted, por supuesta deuda de pesos contra la demente Clotilde Rubio, representada por su guardador, Luis María Rubio."

No habiendo convenido el ejecutante ni el ejecutado en los fundamentos de la demanda, el juicio se abrió á prueba, y siguió su curso hasta que se pronunció en veintitrés de Febrero de mil ochocientos noventa y dos la sentencia de primera instancia, cuya parte resolutiva se inserta en seguida:

"..... Bastan las precedentes razones para ponerle término á la presente disputa; y, fundado en ellas, el Juzgado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara no probada la tercería excluyente, propuesta por Daniel María Rubio París, respecto del terreno de 'San-José, atrás determinado por su ubicación y linderos.

"En consecuencia, luégo de observadas todas las ritualidades legales aplicables, pregónese y remátese para cubrir el crédito que con acción ejecutiva persigue Gabriel Rubio contra Clotilde del mismo apellido, representada por Luis María Rubio.

"No hay condenación en costas."

Apelada dicha sentencia por el apoderado de Daniel María Rubio París y concedido el recurso en ambos efectos, se surtió la segunda instancia en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, quien previa la tramitación correspondiente, le dió fin con la sentencia definitiva de nueve de Diciembre de mil ochocientos noventa y dos, que, en su parte resolutiva, dice así:

"..... el Tribunal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca la sentencia apelada, y resuelve: 1.° declárase probada la tercería excluyente que respecto del terreno de 'San-José,' propuso Daniel María Rubio París en representación de la sucesión de Daniel Rubio, en el juicio ejecutivo seguido por Gabriel Rubio contra Luis María Rubio, en su calidad de curador de la demente Clotilde Rubio; 2.° ordénase el desembargo de dicha finca, para lo cual se dirigirá el correspondiente despacho; 3.° condénase á Clotilde Rubio á entregar el referido inmueble con los frutos naturales y civiles percibidos desde la contestación de la demanda á la sucesión de Daniel Rubio, representada por Daniel María Rubio París; 4.° declárase que si el poseedor vencido tuviere algún saldo que reclamar, en razón de expensas y mejoras, podrá retener la cosa hasta que se verifique el pago, ó se le asegure á su satisfacción (artículos 970 del Código Civil y 10 de la Ley 95 de 1890). Habiéndose decretado la reivindicación del inmueble que se dió en pago á Clotilde Rubio por el valor del crédito que ésta tenía contra la mortuoria de Daniel Rubio, dicha señora podrá, en juicio separado, perseguir del heredero ó herederos, la efectividad de sus derechos."

Puesta en conocimiento de las partes la sentencia de segunda instancia por medio de edicto, Luis María Rubio V., guardador de la demente Clotilde Rubio, interpuso, en oportunidad, el recurso de casación, que le fué concedido por auto del Tribunal sentenciador de fecha diez de Febrero último (fojas 39 vuelta), y enviado el expediente á la Corte, con noticia de todas las partes, se sometió á repartimiento.

Observada, en el recurso la tramitación que establecen los artículos correspondientes de la Ley 105 de 1890, y de la 100 de 1892, respectivamente, es el caso de resolver lo que sea legal.

Como el recurso se interpuso y concedió bajo la vigencia de la citada Ley 105 de 1890, la Corte, ante todo, debe examinar si el recurrente es persona hábil, y si, además, concurren las tres circunstancias que determina su artículo 366, y, en efecto, el guardador de la demente figura como parte legítima y principal en el juicio de tercería excluyente, porque es ésta la persona ejecutada.

El Tribunal sentenciador aplicó varias disposiciones sustantivas del Código Civil de Cundinamarca, que regían cuando los hechos fundamentales de la acción tuvieron lugar, y esas disposiciones son, en esencia, iguales á las nacionales que están en vigor, de modo que la primera circunstancia de las mencionadas en el artículo 366 de la Ley 105 referida, concurre en este caso.

Consta que el inmueble que reclama el tercerista, por considerarse con mejor derecho á poseerlo que el ejecutante y el ejecutado, fué justipreciado últimamente en el juicio ejecutivo en la cantidad de nueve mil pesos ($ 9,000), por lo cual la cuantía que señala el propio artículo para que sea admisible el recurso, excede de la legal.

Finalmente, la sentencia de primera instancia es contraria en lo principal, á la de segunda, pues en aquélla se declaró no probada la tercería excluyente propuesta por Daniel María Rubio París, respecto del terreno de "San-José," ubicado en jurisdicción del Municipio de Anolaima, en tanto que la sentencia de segunda instancia, que es materia del recurso, la declaró probada. Hay, pues, contrariedad entre los dos fallos, y, por tanto, concurre igualmente la tercera circunstancia que señala el expresado artículo 366.

A pesar de todo lo que queda expuesto, como el apoderado de Luis María Rubio V., guardador de la demente Clotilde Rubio, aunque recibió el expediente para que fundase el recurso que tenía interpuesto y determinar las causales de nulidad de que habla el artículo 369 y las disposiciones sustantivas que, en su concepto, hubieran sido violadas por el Tribunal sentenciador en el fallo de segunda instancia, no cumplió con este deber como debió hacerlo, según lo prescrito en el artículo 377 de la citada Ley 105, la Corte no tiene la base indispensable para resolver respecto del recurso de casación, si él estaba ó no fundado.

Cierto es que el doctor Fídolo González Lineros, dentro del término legal, presentó un extenso escrito en el cual impugnaba la sentencia contra la cual se interpuso el presente recurso; pero en dicho escrito omitió designar la causal ó causales en que debió fundar su interposición, ya que no fueron determinados ante el Tribunal de Cundinamarca al tiempo de interponerse el expresado recurso, con expresión clara y precisa de las razones por las cuales estimaba haberse incurrido en la causal ó causales designadas.

Sabido es que el recurso de casación se ha introducido en la legislación patria con el objeto de uniformar la Jurisprudencia y también con el de que se enmienden los agravios que se infieran por las sentencias definitivas que profieran los Tribunales Superiores en asuntos civiles y en juicio ordinario, ó que tengan el carácter de tales; de suerte que para que se llenen esos objetos primordiales, es menester que el recurrente haga expresión de esos agravios, sin lo cual la Corte no puede ocuparse en enmendarla de oficio.

Por lo expuesto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara inadmisible el aludido recurso, por no haberlo fundado la parte recurrente.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO.
Gabriel Rosas, Secretario.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AÑO VIII | Bogotá, 28 de Julio de 1893. | NÚM. 406.

REPÚBLICA DE COLOMBIA BIBLIOTECA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTENIDO.

Págs.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

La que anula en parte la sentencia del Tribunal de Cundinamarca, dictada en las tercerías excluyentes propuestas en el juicio de concurso de Joaquín Piñeros. (Magistrado ponente, doctor Isaza) 337

Voto salvado por el señor Magistrado doctor Corrales en la sentencia anterior 343

AUTOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Auto en que se declara la Corte incompetente para conocer de las diligencias sumarias instruídas contra el Capitán del vapor *Rafael Núñez*, por desobediencia á la autoridad. (Magistrado ponente, doctor Fernández de Soto) 343

Auto que dirime la competencia negativa provocada por el Juez del Circuito de Chocontá al de Guateque, en el sumario instruído contra Milciades Heredia Vaca, por el delito de hurto. (Magistrado ponente, doctor Pombo) 343

GACETA JUDICIAL.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, treinta de Junio mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: En el Juzgado 3.° del Circuito de Bogotá (Departamento de Cundinamarca) se abrió juicio de concurso universal de acreedores á los bienes de Joaquín Piñeros, y con motivo de figurar entre los acreedores el Cuerpo fiscal de Instrucción pública, y de ser parte, por lo mismo, el referido Departamento, como Administrador de las rentas de Instrucción pública, el Juez del conocimiento en auto que dictó en 20 de Marzo de 1890 (folio 79 del cuaderno 3.°), dispuso pasar el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, como competente para seguir conociendo del juicio de concurso, por cuanto estaba interesado en la litis el propio Departamento, conforme al numeral 4.° del artículo 73 de la Ley 147 de 1888, de organización judicial, que atribuía á los Tribunales Superiores de Distrito el conocimiento en primera instancia de los juicios entre los Gobiernos de los Departamentos y los particulares, sin distinción alguna por razón de la cuantía; y dicho Juez 3.° del Circuito de Bogotá quedó, por tanto, separado del conocimiento.

El Tribunal Superior de Cundinamarca, en auto de 7 de Mayo del citado año (folio 54, cuaderno 1.°), resolvió aprehender, y aprehendió el conocimiento del juicio referido, por tener jurisdicción para ello, y siguió sustanciándolo por los trámites establecidos en las leyes de procedimiento.

Pendiente la primera instancia, se introdujeron tres tercerías excluyentes ó de dominio:

Una por León Vargas Calvo, respecto de un inmueble ubicado en el Municipio de Quetame, conocido con el nombre de "Las-Burras;"

Otra por Secundino Salazar, respecto de otro inmueble, situado en el Municipio de Usme, y

Otra por el doctor José C. Romero, *en su calidad de apoderado* de Indalecia Ruiz de Piñeros y de los hijos de ésta, Francisco, Rafael y Teresa Piñeros, relativamente al expresado terreno de Usme.

Dichas tercerías fueron decididas por el Tribunal Superior de Cundinamarca, con fecha 16 de Diciembre de mil ochocientos noventa, en los términos que se copian:

"1.° No está probada la tercería excluyente, propuesta por Secundino Salazar en este juicio de concurso;

"2.° Está probada la tercería excluyente, propuesta por Indalecia Ruiz de Piñeros, Francisco, Rafael y Teresa Piñeros, sobre el terreno ubicado en Usme, demarcado por estos linderos: del potrero de 'El-Arenal,' pasando al boquerón de Chipaque, hasta su portachuelo, deslindando con el resguardo de Chipaque, á dar al de Une, y de ahí hasta encontrar con el páramo de Fosca, y tomando la derecha hasta encontrar una quebrada que se atraviesa y sale vía recta á una piedra llamada 'Piedra-gorda,' y de aquí hasta llegar á un cerrito llamado 'Pedregoso,' siguiendo hasta salir á las tierras de los resguardos de los indígenas de Usme, en donde se hallan unas piedras cargadas que salen á un cerrito redondo, pelado, y de éste hasta encontrar línea recta, una quebrada llamada Raquelina, y de aquí, tomando la quebrada, aguas arriba, por el lado izquierdo, hasta encontrar con una piedra grande, blanca y cifrada con un número 8, que divide el terreno de Hilario Chaves; y de aquí, tomando vía recta, de la mencionado piedra á un terrenito de Jerónimo González, tomando para arriba del lado derecho hasta encontrar con un chorro llamado el 'Chorro del Ajisal,' de aquí tomando la orilla arriba, á dar á un boqueroncito donde está una piedra blanca y grande; de ésta á dar, línea recta, á donde se encuentra una piedra herrada hacia lo orilla de una laguna, que por esta parte deslinda con un terrenito de Margarita Salazar; y de aquí, línea recta, hasta llegar al primer lindero, en la parte que corresponde á los tres últimos; pero no lo está en la cuarta parte, correspondiente á la tercerista, señora Ruiz de Piñeros. Esta parte pertenece al concurso;

"3.° No está probada la tercería excluyente propuesta por el señor León Vargas Calvo, sobre el terreno de 'Las-Burras,' ubicado en el Distrito municipal de Quetame, comprendido dentro de estos linderos: Por el Norte y Occidente, desde las cabeceras del río Contador, que deslinda con tierras de Francisco Gutiérrez, Riberos, Morales, Ramos, Parrado, Romero y Castro; al Sur, con una quebrada ó corriente de agua que baja del páramo en forma circular y entra en dicho río, deslindando con tierras de Diego Riberos, y al Oriente, con las cabeceras de las montañas baldías que suben de allá para acá y rodean el potrero del páramo de esta propiedad, en el cual se encuentran muchas lagunas.' En consecuencia, tal inmueble pertenece al concurso.

"Condénase en costas al tercerista Secundino Salazar."

Pronunciada la sentencia de primera instancia, cuya parte resolutiva queda inserta, principió á regir la Ley 72 de 1890, reformatoria de la 147 de 1888. Aquella ley estableció distinción en su artículo 12, inciso 2.°, por razón de la cuantía de los pleitos, pues está redactado de este modo:

"Artículo 12. En lo sucesivo los Jueces de Circuito conocerán en primera instancia de los negocios siguientes:

.....

"2.° De los juicios entre los Gobiernos de los Departamentos y los particulares, cuando el interés de la acción no pase de mil pesos."

De manera que los Tribunales Superiores debían continuar conociendo en primera instancia, en los casos de que la cuantía excediera de mil pesos, y la Corte Suprema en segunda instancia.

Antes de que se notificase la sentencia proferida por el Tribunal, éste pasó el expediente del juicio de concurso al Juzgado 3.° del Circuito de Bogotá, para que dispusiera la notificación de aquélla, por haber perdido el Tribunal la jurisdicción que tenía asumida según la Ley 147 de 1888; y en efecto, dicho Juzgado asumió á su turno la que le confería la citada Ley 72 de 1890; de suerte que el Juez 3.° concedió el recurso de apelación que contra la mencionada sentencia de primera instancia interpuso el doctor Francisco Montaña, y expresó en el auto de 12 de Marzo de 1891, que la apelación la otorgaba para ante el *Superior respectivo*, seguramente porque en el ánimo de dicho funcionario asistía la duda respecto de quién debía conocer del negocio en segunda instancia.

La misma duda asistió al Tribunal Superior de Cundinamarca, donde se recibió el expediente, porque, á su turno, lo pasó á esta Corte para que conociera de la apelación interpuesta. Fué, pues, preciso que la Corte dispusiera la devolución al Tribunal del expediente citado, por considerarlo competente para conocer y decidir en segunda instancia las respectivas tercerías de dominio; y como realmente el caso ocurrido era nuevo, ó por lo menos raro en cuanto al punto de jurisdicción, no se limitó la Corte á resolver simplemente la devolución, sino que consignó en el auto dictado en 25 de Noviembre de 1891 (foja 10), todas los fundamentos que debían tenerse presentes sobre la materia, á fin de dejar con claridad establecido el precedente para casos análogos. Por eso dijo:

".....es menester, ante todo, examinar si ha habido ó no razón legal para que el Tribunel Superior de Cundinamarca dispusiera la nueva remisión del mencionado expediente á esta Superioridad. En el referido juicio de concurso de acreedores formado á los bienes de Joaquín Piñeros, es parte el Departamento de Cundinamarca, porque figura como acreedor del concursado el ramo de Instrucción pública departamental, por una cantidad menor de mil pesos ($ 1,000), y cuando se inició el juicio aludido el Tribunal Superior de Cundinamarca era competente para conocer de él y decidirlo en primera instancia, con arreglo al inciso 4.° del artículo 73 de la Ley 147 de 1888, que es el Código de Organización Judicial; y así pudo muy bien dictar la sentencia que es objeto de la apelación interpuesta y concedida, en cuanto se refiere al punto de la jurisdicción.....

"Pronunciada en 16 de Diciembre del año próximo pasado la referida sentencia, que puso término, en primera instancia, á las indicadas tercerías excluyentes, y antes de que tal fallo quedase ejecutoriado, principió á regir la Ley 72 de 1890, que reforma la 147 de 1888, sobre organización judicial, en cuyo artículo 12, inciso 2.°, prescribe que en lo sucesivo los Jueces de Circuito conozcan en primera instancia de los juicios entre los Gobiernos de los Departamentos y los particulares, cuando el interés de la acción no pase de mil pesos ($ 1,000).

" En cumplimiento de la nueva disposición citada pasó el expediente al Juzgado 3.° del Circuito de Bogotá, y á éste correspondió conceder el recurso de apelación que se interpuso contra la mencionada sentencia del Tribunal Superior.

" Y traído á la Corte dicho expediente, se profirió por ella, en doce de Junio último, el auto por el cual se declaró incompetente para conocer y decidir la apelación, por el mismo motivo que hizo incompetente para lo sucesivo al Tribunal Superior; es decir, porque correspondiendo á los Jueces de Circuito el conocimiento en primera instancia de los juicios entre los Gobiernos de los Departamentos y los particulares, *cuando la acción en que* dicha entidad política está interesada no pase de mil pesos ($ 1,000), toca al Tribunal del Distrito Judicial respectivo el conocimiento del mismo asunto en segunda instancia; quedando sólo á la Corte la atribución de conocer de los mismos juicios por recurso de casación, cuando hubiere lugar á éste. Empero, por providencia del mismo Tribunal Superior de Cundinamarca, de treinta de Septiembre de este año, se declaró incompetente para revisar su propia providencia apelada, no obstante que las partes interesadas en el expresado juicio universal de concurso de acreedores, prorrogaron la jurisdicción al Magistrado sustanciador que había fallado, como Magistrado en la Sala plural que pronunció la sentencia de primera instancia, en virtud de la causal de impedimento que manifestó para conocer del mismo asunto en segunda instancia, y, en consecuencia, ordenó que el proceso se remitiera á esta Corte, como superior inmediato del Tribunal de Cundinamarca, según la organización que la Ley 147 de 1888 ha dado al Poder Judicial; pero de esto no se infiere que la Corte pueda conocer en segunda instancia de las controversias que han sido falladas, toda vez que la cuantía de la acción del Departamento que se ha hecho valer en el concurso no llega á mil pesos ($ 1,000). Cierto es también que hay una irregularidad consistente en que un mismo Tribunal decida dos instancias referentes á un solo juicio; mas dicha irregularidad nace de la nueva disposición que fija la competencia por razón de una cuantía determinada; circunstancia que no existía antes de expedirse la Ley 72 de 1890.

" Por lo demás, la ley provee un medio para que los Magistrados del Tribunal que profirieron el fallo de primera instancia no sean los mismos que hayan de conocer de la segunda, en el caso de que no se allanen los impedimentos, habiendo, como hay, un número excedente de Magistrados del Tribunal, respecto de los cuales no asistía el mismo impedimento, pues si asistiera á todos se reemplazarían, del modo que indica el artículo 2.° de la Ley 72 referida.

Por tanto, la Corte se abstiene de conocer de este asunto por vía de apelación, y dispone que se devuelva el expediente, á efecto de que en el Tribunal aludido se le dé el curso correspondiente, y que fuere conforme á la ley."

Como en la segunda instancia se produjeron otras pruebas, el Tribunal, con apoyo de éstas, dictó la sentencia correspondiente, que en su parte resolutiva es de este tenor:

"Así, pues, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara probada la tercería excluyente propuesta por León Vargas Calvo, sobre el terreno de 'Las-Burras,' ubicado en el Distrito municipal de Quetame, comprendido entre estos linderos: por el Norte y Occidente, desde las cabeceras del río Contador, que deslinda con tierras de Francisco Gutiérrez, Riberos, Morales, Ramos, Parrado, Romero y Castro; al Sur, con una quebrada ó corriente de agua que baja del páramo en forma circular y entra en dicho río, deslindando con tierras de Diego Riberos, y al Oriente, con las cabeceras de las montañas baldías que suben de allá para acá, y rodean el potrero del páramo de esta propiedad, en el cual se encuentran muchas lagunas. En consecuencia, el inmueble debe excluírse de la traba, y desembargarse.

" Queda así reformada, en parte, la sentencia apelada y vigente en lo demás.

" Condénase en las costas del juicio á la tercerista Indalecia Ruiz de Piñeros."

En oportunidad el Síndico del concurso de acreedores, José A. Obregón, interpuso el recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia, para ante esta Corte, y habiéndosele concedido en auto de 14 de Noviembre de 1892, porque según la escritura, aparece que la acción que se ventila en las tercerías pasa de tres mil pesos ($3,000), con noticia de las partes fué enviado el expediente á la Corte, y en ella, después del repartimiento, se ha sustanciado el aludido recurso por los trámites que señala la ley respectiva, hasta poner el asunto en estado de ser decidido, como se procede á verificarlo.

Conforme al artículo 366 de la Ley 105 de 1890, se requiere la concurrencia de tres circunstancias para que el recurso de casación que se haya interpuesto ante el Tribunal Superior y concedido por éste, sea admitido por la Corte, á saber:

1.ª Que la sentencia definitiva de segunda instancia, pronunciada por el mismo Tribunal, se haya fundado ó deba fundarse en leyes que rijan ó hayan regido en toda la República, á partir de la vigencia de la Ley 57 de 1887; ó que se funde ó deba fundarse en leyes de los extinguidos Estados, que sean idénticas en esencia á las nacionales que estén en vigor;

2.ª Que la sentencia verse sobre hechos relativos al estado civil de las personas ó sobre intereses particulares en que la cuantía del pleito sea ó exceda de $ 3,000, y

3.ª Que haya contrariedad entre las sentencias de primera y segunda instancia en cuanto á la inteligencia, ó aplicación de las leyes en que se apoyan, ó en cuanto á lo principal del pleito.

Y es evidente que las tres referidas circunstancias concurren en el presente caso.

Además, la Corte, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 381 de la Ley 105 de 1890, ha examinado y hallado que el recurso se ha interpuesto en tiempo y por persona hábil, pues los Síndicos en los juicios de concurso de acreedores están facultados, según el numeral 3.° del artículo 1164 del Código Judicial, para "la defensa de todos los derechos del concurso, y el ejercicio de las acciones y excepciones que les competan."

El Síndico recurrente ha fundado este recurso en la causal 1.ª del artículo 369 de la mencionada Ley 105, por estimar que la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior de Cundinamarca en segunda instancia, contra la cual lo ha interpuesto, es violatoria de ley sustantiva y de doctrina legal, ya sea directa la violación; ya sea ésta efecto de una interpretación errónea de la ley ó de la doctrina legal; ya de aplicación indebida de leyes ó de doctrinas legales. Y expresa el recurrente que proviene esta violación (foja 12 de la actuación de la Corte) de haberse apreciado equivocadamente varias de las pruebas que corren en el proceso, que fueron precisamente las que decidieron al Tribunal á fallar en favor de algunos terceristas. Para explicarse con claridad el recurrente, se refiere, en primer lugar, á la tercería excluyente de León Vargas Calvo, y dice: que cuando el Tribunal de Cundinamarca profirió el fallo de primera instancia sobre la misma tercería, la declaró no probada, y funda el recurrente su aserción en estas razones:

"La tercería propuesta por León Vargas Calvo, fundada en la escritura número 1,083, de fecha 18 de Julio de 1879, no está probada, porque de ella aparece que el terreno de 'Las-Burras,' fué vendido al tercerista por Simón Piñeros, hijo del concursado, y no se ha probado que éste fuera dueño de la finca que vendía, sino que era de la sociedad conyugal, como comprada por la señora Ruiz de Piñeros al señor Salvador Ramos, vigente aquélla (escritura de folios 20 vuelto á 24, cuaderno 9.°)

"La venta hecha por Simón Piñeros á León Vargas Calvo la fué de cosa ajena, venta válida entre los contratantes para los efectos legales (artículo 1879 del Código Civil de Cundinamarca); pero como ella no aparece ratificada por el legítimo dueño de la finca, que es la sociedad conyugal (artículo 1882 ibidem), ésta no perdió el dominio que sobre la finca así vendida tiene, y bien puede reivindicarla directamente ó por medio de sus acreedores, que á eso equivale el presente juicio (artículo 974 ibidem).

"Al reconsiderar la misma tercería, en segunda instancia, dijo el Tribunal:

'En la segunda instancia ha presentado el apelante en copia auténtica registrada la escritura número 228, otorgada ante el Notario del Círculo de Fómeque, que se echó menos en la primera instancia, de la cual aparece que Joaquín Piñeros vendió en esa fecha á su hijo Simón Piñeros la finca á que esta tercería se refiere, con lo cual queda establecido legalmente el orden de trasmisión del expresado inmueble, de Salvador Ramos á la sociedad conyugal formada por Indalecia Ruiz y su marido Joaquín Piñeros, de ésta á Simón Piñeros, y de éste al tercerista.'.

"Por manera que lo que decidió al Tribunal á declarar probada esta tercería, fué la escritura 228, otorgada en Fómeque el día veintidós de Agosto de 1878 y registrada el veinticuatro del mismo mes, porque según este documento la venta hecha por el señor Simón Piñeros al señor Vargas Calvo dejó para el Tribunal de ser venta de cosa ajena.

"Pero es el caso que esa Corporación no tuvo en cuenta que tal escritura adolece del vicio de nulidad absoluta, como que hay objeto ilícito en el contrato que reza.

"En efecto, corren en los autos dos certificados del señor Registrador del Círculo de Cáqueza, uno de ellos presentado por el mismo apoderado del señor Vargas Calvo, doctor Francisco Montaña, que corre á los folios 4 y 5 de su cuaderno de pruebas de segunda instancia, y otro presentado por mí (folio 4 del cuaderno número 9.°)

"En esos dos certificados consta que el terreno denominado 'Las-Burras,' fué embargado día el 20 *de Mayo de* 1878, en la ejecución seguida por el señor Jenaro Romero contra el señor Joaquín Piñeros, embargo que no se canceló sino el día 14 de Julio de 1879. Es así que la escritura número 228 que ha servido de base al fallo de segunda instancia, fué otorgada por el señor Joaquín Piñeros, á su hijo Simón el día 22 de Agosto de 1878, y registrada el 24 del mismo, cuando estaba en todo su vigor el embargo á que vengo refiriéndome; luego hubo objeto ilícito en esa venta, y por lo tanto adolece de nulidad absoluta, tanto el contrato como la escritura y su registro (artículo 1530 del Código Civil de Cundinamarca y 1521 del nacional).

"El señor Simón Piñeros no adquirió, pues, la propiedad del terreno denominado 'Las-Burras,' y por lo mismo, al vendérselo al señor Vargas Calvo, no hizo sino venderle una *cosa ajena*, como lo estimó el Tribunal en la primera instancia, venta que, en consecuencia, no afecta los derechos de la sociedad conyugal formada por el señor Joaquín Piñeros y la señora Indalecia Ruiz, que eran los verdaderos dueños, ni los derechos de los acreedores de esta sociedad, quienes pueden reclamar para el concurso los bienes que á ella pertenezcan.

"Esa sociedad no ratificó el contrato hecho por el señor Simón Piñeros con el señor Vargas Calvo, ni ha prescrito la acción reivindicatoria; luego el señor Vargas Calvo no ha adquirido el dominio de los terrenos denominado 'Las-Burras.'

"Así, pues, la apreciación que el Tribunal hizo de la tántas veces citada escritura, considerándola válida y reconociéndole todos los efectos legales, siendo nula en absoluto, adolece de error gravísimo, y ese error es el que ha dado margen á que se hayan violado los artículos 7.°, 8.°, 772, 775, 782 (inciso 3.°), 974, 1634 (numeral 8.°), 1879, 1530 (inciso 2.°), 1532, 1748, 1749, 1750 del Código Civil de Cundinamarca y sus correspondintes del Código Civil nacional que les son idénticos en esencia, y el artículo 15 de la Ley 95 de 1890, vigente cuando se pronunció la sentencia."

En segundo lugar, al fundar el Síndico del concurso su recurso de casación, se refiere á las tercerías excluyentes propuestas por Rafael, Francisco y Teresa Piñeros, hijos del deudor concursado Joaquín Piñeros, respecto del terreno ubicado en el Municipio de Usme, y se expresa de este modo:

"Se fundan las tercerías en una escritura otorgada ante el señor Notario 1.° del Círculo de Bogotá, bajo el número 89, en fecha 6 de Febrero de 1881, de la cual aparece que el señor Secundino Salazar les vendió á los terceristas el terreno situado en Usme, objeto de esta tercería.

El concursado, señor Joaquín Piñeros, suscribió esta escritura en nombre propio para dar autorización á su esposa, según dice, para representar á la entonces menor señorita Teresa Piñeros.

"El Tribunal desechó las pretensiones de la señora Ruiz, declarando no probada la tercería en cuanto á ella se refería, por considerar la adquisición que dicha señora hizo como de la sociedad conyugal; pero acogió las de los otros tercerista reconociéndoles el dominio á las tres cuartas partes del terreno.

"Es en esto último en lo que creo que el Tribunal erró al estimar como prueba la referida escritura.

"Yo impugné la aseveración que en ella se hace de que la compra del terreno se hizo con dinero de los terceristas, teniendo, como tengo, evidencia de que la compra la hizo el señor Joaquín Piñeros, concursado yá, con dinero propio, ó mejor dicho, de sus acreedores.

"Desde luégo quedaron los terceristas obligados á probar su aserto, porque las declaraciones que se hagan en una escritura pública no hacen fe sino contra los declarantes

(artículos 1766 del Código Civil de Cundinamarca, 1759 del nacional).

"Consecuente con esta doctrina, el Tribunal negó la pretensión de la tercerista, señora Ruiz, porque ella no probó que el dinero que dió por la parte en el terreno, era del que decía haber aportado al matrimonio; pero no sucedió lo mismo respecto á los otros, cuando habiéndoles negado yo el origen del dinero invertido en la compra, debieron probar ese origen, es decir, que el dinero lo adquirieron por su trabajo, como lo afirmaron al absolver posiciones (fojas 11, 13 y 14, cuaderno 9), prueba á que estaban obligados conforme al artículo 1766 citado.

"Pero no sólo no dieron esta prueba, sino que antes bien por indicios necesarios y vehementes ha quedado establecido en el proceso lo contrario.

"Es este el lugar de observar que la Corte ha establecido como doctrina legal, que contra las declaraciones hechas en escritura pública, se pueden oponer los indicios comprobados, y aquí es el caso de aplicar esa doctrina, aunque bien pudiera por sólo la ausencia de la prueba que los terceristas debieron presentar, declararse no probada su tercería.

"Basta detenerse un poco á examinar la escritura para convencerse de que es supuesta la aseveración que hacen los terceristas de que el terreno fué comprado con dinero propio. En efecto, allí aparece que el terreno costó la cantidad de $ 12,000, y que todos los cuatro compradores pusieron partes iguales, es decir $ 3,000 cada uno. ¿De dónde sacó cada uno esos $ 3,000? La señorita Teresa, que compró, *representada por su padre*, por ser menor de edad, dice en posiciones, que adquirió esa suma en sus economías de costura. Si es difícil que una mujer con su oficio de costurera simplemente, pueda ganar para sus gastos, es más que imposible que una niña menor de edad haga sus economías con ese oficio, y forme un capital de tres mil pesos, en esta tierra en donde vale tan poco el trabajo de la mujer, y especialmente el de la costurera.

"La señorita Teresa, como menor de edad, no podía contratar por sí misma; fué, pues, representada por su padre, quien dió el dinero y aceptó la escritura; pero él no ha explicado ni probado de una manera fehaciente que ella adquiriera ese dinero de cualquier modo que no fuera dándoselo él, y debe, por tanto, convenirse en que ese dinero era del concursado, puesto que fué él quien lo dió, ó mejor dicho, del concurso.

"Un concursado está en el deber de explicar la procedencia de todos los valores que maneja, y si afirma que pertenecen á terceros, debe probarse plenamente esa circunstancia, so pena de considerarse que tales bienes pertenecen al concurso.

"El terreno de Usme, adquirido por la escritura número 89, de 6 de Febrero de 1881, fué pues, comprado con fondos del concurso, y por tanto, la estipulación de que se compró para los terceristas es nula, según el artículo 2569 del Código Civil de Cundinamarca y 2490 del nacional, debiendo desde luego concluírse que el terreno ó los $ 12,000 empleados en él, pertenecen al concurso."

Insertas las razones en que el Síndico recurrente ha apoyado el recurso de casación que interpuso, corresponde á la Corte examinarlas y deducir del examen si aquéllas son conformes con las prescripciones contenidas en las leyes sustantivas que se dice fueron violadas.

Como se ha visto yá, el fundamento del recurso de casación en lo relativo al terreno de "Las-Burras," reconocido en la sentencia del Tribunal como de propiedad de León Vargas Calvo, consiste en que ese terreno, cuando fué vendido por Simón Piñeros á Vargas Calvo, pertenecía á la *sociedad conyugal de Joaquín Piñeros é Indalecia* Ruiz, por ser absolutamente nulo, por objeto ilícito, el contrato de venta celebrado entre Joaquín Piñeros, jefe de esa sociedad, y su hijo Simón, por hallarse embargado á la sazón el mencionado tereno, en la ejecución promovida contra el vendedor por Jenaro Romero.

De los certificados expedidos por el Registrador de instrumentos públicos y privados del Circuito de Cáqueza, (foja 4.ª, cuaderno 9.° y 4.ª 5.ª, cuaderno de pruebas de Vargas Calvo), resulta que el terreno de "Las-Burras," fué embargado el veinte de Mayo de mil ochocientos setenta y ocho, en el juicio ejecutivo que siguió Jenaro Romero contra Joaquín Piñeros, y que este embargo fué cancelado el catorce de Julio de mil ochocientos setenta y nueve, por orden del Juez 2.° del Distrito de Bogotá.

La venta que del mismo terreno de "Las-Burras," hizo Joaquín Piñeros á Simón Piñeros, se efectuó por medio de la escritura pública, otorgada en veintidós de Agosto de mil ochocientos setenta y ocho, registrada en veinticuatro del mismo mes; es decir, en un tiempo en que el terreno vendido estaba embargado por orden de autoridad judicial, y no había sido cancelado el registro del embargo, pues la cancelación no se verificó hasta el catorce de Julio de mil ochocientos setenta y nueve, cuatro días antes de que Simón Piñeros vendiera á León Vargas Calvo el aludido terreno.

El contrato de venta celebrado entre Joaquín y Simón Piñeros, es un contrato afectado de nulidad absoluta conforme á los artículos 1749 y 1530 del Código Civil de Cundinamarca (15 de la Ley 95 de 1890 y 1521 del Código Civil nacional), por adolecer de objeto ilícito, y si por causa de esta nulidad Simón Piñeros no adquirió el dominio del inmueble en cuestión, la venta que del mismo inmueble hizo á León Vargas Calvo, el diez y ocho de Julio de mil ochocientos setenta y nueve, fué venta de cosa ajena, que no pudo perjudicar los derechos del verdadero dueño, que continuaba siéndolo Joaquín Piñeros ó la sociedad conyugal de éste é Indalecia Ruiz (artículo 1879 del del Código Civil de Cundinamarca y 1871 del nacional).

Se objeta contra esto que la nulidad absoluta que afecta el contrato de venta celebrado entre Joaquín y Simón Piñeros, no aparece de manifiesto en el acto ó contrato, y no puede, en consecuencia, declararse de oficio por el Juez, y también que no ha sido alegada en tiempo hábil ni por parte que tenga derecho para ello.

En cuanto á lo primero, debe observarse que aunque la nulidad no aparece de manifiesto en el contrato, la existencia de ella no puede revocarse á duda en presencia de la escritura del mismo contrato y de la certificación del Registrador que acredita el embargo del inmueble al tiempo de la enajenación, y que solicitando una parte que tiene interés en ello, la declaración de nulidad, el Tribunal no ha debido abstenerse de pronunciarla, aunque no se hubiera alegado expresamente como excepción en la contestación de la demanda ó antes de abrirse el juicio ó prueba, porque el artículo 51 de la Ley 105 de 1890, reproducción, casi textual, del 138 de la Ley 57 de 1887, previene que "cuando el Juez halle justificado los hechos que constituyen una excepción perentoria, aunque ésta no se haya propuesto ni alegado, debe reconocerla en la sentencia, y fallar el pleito en consonancia con la excepción reconocida."

Cuanto al derecho de alegar ó hacer valer la excepción ó acción de nulidad, que se niega al síndico del concurso de Joaquín Piñeros, aduciendo como razón que el síndico representa al concursado, y que habiendo concurrido éste á la celebración del contrato nulo, sabiendo ó debiendo saber el vicio que lo invalidaba, no le es permitido alegar la nulidad, basta para demostrar lo infundado de este argumento considerar que el síndico de un concurso no representa sólo al deudor sino los intereses del mismo concurso; es decir, los de los acreedores que deben ser pagados con los bienes comprendidos en la cesión, y al concursado mismo, pero el interés de éste no puede perjudicar á los acreedores. De modo que teniendo un interés evidente el concurso, entidad distinta del deudor, no puede negarse al síndico ni á los acreedores el derecho de invocar la nulidad de los actos y contratos en que intervino el concursado.

No se opone al precepto del artículo 51 de la Ley 105 de 1890 la doctrina del artículo 15 de la Ley 95 de ese mismo año, según la cual la nulidad absoluta sólo puede y debe ser declarada por el Juez de oficio cuando aparezca de manifiesto en el acto ó contrato, porque la disposición de la ley adjetiva habla sólo de la no necesidad de proponer expresamente la excepción en determinado estado del juicio, y la disposición

sustantiva de la Ley 95 trata del caso en que la nulidad aparezca de manifiesto en el mismo acto ó contrato, lo que no se opone á la declaración de la existencia de la excepción cuando ésta se acredita en juicio con pruebas distintas del documento en que consta el contrato nulo.

Por otra parte la prohibición que el artículo 15 contiene respecto del que ha celebrado á sabiendas un contrato nulo, no es incompatible con la del artículo 51 de la citada Ley 105, porque éste se refiere razonablemente sólo á aquellas nulidades que la parte tiene derecho de alegar y que no ha propuesto dentro de ciertos términos, aunque sí las ha probado y dado á conocer su intención de valerse de ellas ó de no reconocer la eficacia de la acción del demandante. Más claro: esta disposición habla de excepciones reconocidas por la ley sustantiva y que pueden aprovechar ó servir de defensa á una parte.

Dedúcese de lo expuesto que el contrato de venta del terreno de "Las-Burras," celebrado entre Joaquín y Simón Piñeros adolece de nulidad absoluta; que esta nulidad constituye una excepción perentoria que el Tribunal ha debido declarar aunque no se propusiera expresamente por el síndico ó los acreedores; que siendo nulo absolutamente el referido contrato no pudo trasmitir al comprador el dominio del inmueble en cuestión; que la venta que Simón Piñeros hizo del mismo inmueble á León Vargas Calvo, fué venta de cosa ajena que no pudo perjudicar ni perjudicó los derechos del verdadero dueño del inmueble, que lo era la sociedad conyugal de Joaquín Piñeros é Indalecia Ruiz, y que esta sociedad, representada hoy por el concurso de Piñeros, ha podido con pleno derecho denunciar ese inmueble como de propiedad del concursado, para que con su producto se cubran los acreedores de aquél.

El señor Magistrado sustanciador no juzga que esté probado el embargo del inmueble de que se trata al tiempo en que se otorgó y registró la escritura de 22 de Agosto de 1878, por medio de la cual vendió dicho terreno Joaquín Piñeros á Simón del mismo apellido, porque estima que las certificaciones del Registrador de instrumentos públicos no son documentos auténticos suficientes para acreditar el hecho que asevera el Registrador, por no contener copia de las respectivas inscripciones.

La mayoría de la Corte no juzga la cuestión del mismo modo, y estima que las certificaciones del Registrador son prueba bastante de los hechos que en ellas se afirman con relación á los libros que maneja ese empleado, y se funda para ello en las siguientes razones:

1.ª El Registrador de instrumentos públicos tiene entre otros deberes el de *certificar*, con vista de los respectivos libros, acerca del estado ó situación en que se encuentren los inmuebles existentes en el Circuito, y respecto de los cuales quieran los interesados saber tal situación; esto es, quién sea el propietario del inmueble ó inmuebles; la libertad ó gravámenes y limitaciones del dominio que pesen sobre ellos y las otras constancias que haya en las inscripciones. Las certificaciones que el Registrador expidiere deben ser claras y bien circunstanciadas: con expresión de los años á que correspondan y los libros que se hubieren consultado para expedirlas (artículo 2924 del Código Civil de Cundinamarca y 2640 del nacional). Dedúcese de aquí que la ley ha querido que la prueba relativa á la situación de la propiedad inmueble, como gravámenes, servidumbres, trasmisiones, embargos etc., sea una certificación del funcionario encargado de llevar y custodiar los libros en que deben constar esos actos, certificados que deben contener los indicios necesarios para que pueda confrontarse en caso de duda el contenido de ellas con las partidas de los libros á que se refiere;

2.ª El artículo 2756 del Código Civil de Cundinamarca (2671 del nacional), fija los derechos de que gozan los Registradores por los actos de su cargo, y entre ellos está el correspondiente á toda certificación que expidan, y no hay ninguno asignado á las copias, como lo había hecho el Código respecto de los Notarios, lo que depende indudablemente de que entre las funciones de los Registradores no está la de expedir copias de las inscripciones de sus libros, porque la ley ha querido que la certificación sea prueba bastante del contenido de las inscripciones siempre que dé una idea suficiente del estado de la propiedad á que se refiere;

3.ª Como consecuencia de esto, la ley requiere que en ciertos casos se presente para saber la existencia de relaciones jurídicas relativas á determinados inmuebles, certificación del Registrador y no copia de las inscripciones. Llama notablemente la atención sobre esto la disposición del artículo 2762 del Código cundinamarqués, igual al 2575 del nacional, que admite como prueba supletoria de un título cuando se ha perdido el protocolo ó expediente en que estaba consignado el original, la certificación que expida el Registrador acerca del punto ó de los puntos de que haya constancia en el registro, relativamente á los contenidos en el título original perdido. Si, pues, una simple certificación del Registrador puede suplir un título que ha desaparecido, con mayor razón un documento de la misma clase debe servir de prueba sobre los hechos que en él se afirman, cuando sólo se trata de saber si se ha hecho ó no una inscripción, si se ha cancelado ó subsiste, ó cuál es el estado de la propiedad raíz, existiendo los títulos originales que sirvieron para el registro, con los cuales puede cotejarse en caso de que alguien dude de la verdad de la certificación;

4.ª La certificación del Registrador dada en uso de atribuciones que le están conferidas por la ley, es un documento auténtico de los que menciona el inciso 1.º del artículo 678 del Código Judicial, porque el funcionario que la expidió ejerce un cargo por autoridad pública, y es parte integrante del ejercicio de sus funciones expedir á quien lo solicite certificaciones de la clase de las que se han aducido en este juicio en tiempo debido, por parte legítima y con citación de las otras partes que no las han objetado ni redargüido de falsas.

Dedúcese de lo expuesto que es fundada la causal de casación alegada contra la sentencia del Tribunal de Cundinamarca, consistente en violación de ley sustantiva al apreciar el mérito de las pruebas sobre nulidad de la venta hecha por Joaquín Piñeros á Simón Piñeros.

Esto por lo que hace á la tercería propuesta por León Vargas Calvo, en el juicio de concurso formado á los bienes de Joaquín Piñeros, y se contraerá la Corte á dilucidar lo que se refiere á las demás tercerías.

Conviene, pues, entrar en el examen de los razonamientos aducidos por el Síndico recurrente, para deducir que del mismo modo que fué decidida la tercería excluyente ó de dominio, propuesta por Indalecia Ruiz de Piñeros, debió resolverse en la sentencia de segunda instancia: que las tercerías de igual especie, propuestas por Francisco, Rafael y Teresa Piñeros, hijos legítimos del concursado Joaquín Piñeros, no fueron probadas, y de consiguiente, que el terreno ubicado en Usme, al cual se contrajeron las mencionadas tercerías, debió hacer parte de la masa de bienes del concurso universal de acreedores.

Ya la Corte hizo mérito de esos razonamientos al principio de este fallo, y desde luégo procederá á exponer las doctrinas admisibles en el particular para infirmarlo.

Se colige muy bien que no habiendo Indalecia Ruiz, consorte legítima del concursado, producido pruebas con las cuales acreditara que por subrogación hubiera adquirido el dominio en la cuarta parte del terreno ubicado en Usme, ó que la cuarta parte de su valor la hubiera tomado del precio de venta de otros bienes raíces suyos que había vendido, el Tribunal sentenciador debió declarar dicha cuota parte como perteneciente al concurso, puesto que la misma tercerista, Ruiz de Piñeros, hizo tal adquisición para la sociedad conyugal, considerándose como un bien social, afecto á las obligaciones contraídas por su esposo Joaquín Piñeros; y así lo declara en efecto. Pero no militan iguales razones para que se decidiese que las cuotas partes del expresado terreno ó de su valor, pertenecientes á Francisco, Rafael y Teresa Piñeros, se acumulasen á la masa de la quiebra; porque los hijos habidos en un matrimonio no forman, según la ley, sociedad de especie alguna con sus padres, como sí la forma la mujer con su marido.

La prueba con la cual justificaron los hijos del concursado haber adquirido proindiviso el dominio en las tres cuartas partes del inmueble aludido, consiste en la escritura pública de venta que á favor de ellos otorgó el vendedor Secundino Salazar, ante el Notario primero del Círculo de Bogotá, Miguel Gaitán, el día 16 de Febrero de 1881, marcada con el número 89 (folio 3, cuaderno número 3). En la copia de dicho título aparecen determinados los linderos del bien rural objeto de la venta, y ese título se halla extendido en el papel sellado correspondiente, debidamente registrado en 3 de Febrero siguiente á su otorgamiento, y aparecen las firmas de todos los otorgantes, de Joaquín Piñeros, padre de la menor Teresa y marido de Indalecia Ruiz; de los testigos instrumentales y del Notario; de suerte que no se observa en el mencionado título, de una manera manifiesta, ninguna causal de nulidad absoluta que hubiera habido necesidad de declarar de oficio.

Y como las escrituras públicas siempre, y los documentos auténticos cuando sean obtenidos del modo que prescribe la ley, hacen plena prueba acerca de su contenido, según el artículo 681 del Código Judicial; y la parte contraria no ha redargüido de falso ese título, que sirvió para decidir la tercería, fué natural que en la sentencia de segunda instancia decidiera, como decidió el Tribunal de Cundinamarca, que los terceristas Francisco, Rafael y Teresa Piñeros, habían probado su derecho de dominio en el terreno materia de las tercerías.

Alega el Síndico contra la sentencia recurrida, que los terceristas debieron probar el origen del dinero con el cual pagaron al vendedor Salazar el precio del inmueble, y acerca de este punto dice que "un concursado está en el deber de explicar la procedencia de todos los valores que maneja, y si afirma que pertenecen á terceros, debe probarse plenamente esa circunstancia, so pena de considerarse que tales bienes pertenecen al concurso. Que el terreno de Usme, adquirido por la escritura número 89 de 16 de Febrero de 1881, fué, pues, comprado con fondos del concurso, y por tanto, la estipulación de que se compró para los terceristas es nula, según el artículo 2,569 del Código Civil de Cundinamarca y 2,490 del nacional, debiendo desde luégo concluírse que el terreno ó los doce mil pesos ($ 12,000) empleados en él, pertenecen al concurso."

La Corte no juzga pertinentes estas observaciones, porque no ha sido el concursado Piñeros, quien ha entablado la tercería sino sus hijos, de modo que el primero no tiene obligación de explicar la procedencia del inmueble situado en Usme, que no manejaba. Tal obligación la cumplieron los terceristas con la presentación oportuna en el juicio, de la escritura pública á que yá se ha hecho referencia, como que son ellos los que manejan ó administran sus propios bienes; notándose, además, que el inmueble, objeto de las tercerías, no figura en la relación de los bienes que constituyen el activo del concursado, de modo que no está comprendido, como lo afirma el recurrente, en la disposición del artículo 2569 del Código Civil de Cundinamarca, igual, en esencia, al 2490 del nacional, que prescribe lo siguiente:

"Artículo 2569. Son nulos todos los actos ejecutados por el deudor relativamente á los bienes de que ha hecho cesión, ó de que se ha abierto concurso á los acreedores."

Manifiesta igualmente el recurrente en el escrito exhibido para fundar el recurso de casación, que la Corte ha establecido como doctrina legal, que contra las declaraciones hechas en una escritura pública, se pueden oponer los indicios comprobados, y que es de oportunidad aplicarla en el caso presente, aunque bien pudiera por la ausencia de la prueba que los terceristas debieron presentar, declararse no probada su tercería. Si se pudieran oponer indicios comprobados contra algunas declaraciones que los otorgantes hagan en un instrumento público, no corresponde á éstos oponer tales indicios, y menos comprobarlos. Esto toca á la parte que sostiene lo contrario, como sucede aquí; pues el Síndico sostiene que el dinero que los terceristas entregaron á Secundino Salazar, como precio del inmueble, pertenecía al deudor Joaquín Piñeros, y pertenecería hoy á la masa de bienes del concurso. Pero no se ha traído al juicio prueba alguna con la cual se justifiquen los indicios alegados como queda dicho. ¿En qué principio ó teoría se apoya el Síndico recurrente para sostener que la persona ó personas que administran como suyo un inmueble, cuya adquisición consta en una escritura pública, tienen el deber de acreditar el origen del dinero con el que han hecho la compra? Evidentemente que la parte que sostiene la pretensión contraria, es á quien incumbe probar que no fué del comprador ó compradores aquel dinero; á menos que se trate, por ejemplo, de una mujer casada que sostenga que el inmueble comprado lo aportó al matrimonio, ó lo adquirió por subrogación, caso en el cual la subrogación debe constar de la propia escritura.

El recurso de casación interpuesto por el Síndico del concurso, no se extiende á la tercería entablada por Indalecia Ruiz de Piñeros, puesto que dicha tercería fué desechada en la sentencia de segunda instancia; y es de necesidad hacer esta advertencia, porque en el alegato del recurrente la redacción se presta á una inteligencia diversa, cuando dice (folio 14, actuación de la Corte) "paso á ocuparme en la tercería relativa á los terrenos de Usme. Son actores en ésta la señora Indalecia Ruiz de Piñeros, esposa que fué del concursado, y los señores Rafael, Francisco y Teresa Piñeros, hijos legítimos del mismo."

De todo lo que precede se deduce que es fundado el recurso de casación interpuesto por el Síndico del concurso de Joaquín Piñeros en lo relativo á la oposición de dominio hecha por León Vargas Calvo al terreno denominado "Las Burras," y que no es fundado el mismo recurso en cuanto á la oposición de dominio de Francisco, Rafael y Teresa Piñeros, referente al terreno de Usme.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara fundado el recurso de casación interpuesto por el Síndico del concurso de acreedores de Joaquín Piñeros contra la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca en 20 de Octubre de 1892, en la parte en que declara probada la tercería excluyente propuesta por León Vargas Calvo, sobre el terreno de "Las-Burras," ubicado en el Distrito municipal de Quetame, é infundado en lo demás.

En consecuencia, anula dicha sentencia en la parte en que declara probada dicha tercería y resuelve que no ha lugar á infirmar la misma sentencia en los otros puntos á que se refiere.

Fallando sobre lo principal, la Corte decide que León Vargas Calvo no ha probado el derecho de dominio que pretende sobre el mencionado terreno de "Las-Burras," absuelve al concurso de la demanda ú oposición de dominio de Vargas Calvo, y dispone que continúe el embargo y depósito del terreno reclamado, que se ha rematado para que, con su producto se cubran los acreedores del concurso.

No se hace condenación en las costas del recurso.

Déjese copia de esta sentencia, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente al Tribunal de su procedencia.

Llámase la atención del Tribunal sentenciador á las disposiciones de los artículos 1187 y 1218 del Código Judicial, de las cuales se deduce que en el juicio de concurso de acreedores, que es universal, no debe haber sino una sola sentencia que decida todos los puntos que sean objeto de controversia, ya se refieran al dominio ó exclusión de determinados bienes, ya al reconocimiento y graduación de créditos, y que la naturaleza y procedimiento propio de estos juicios no permiten que se dé cabida á irregularidades como las que resultan de seguir un juicio especial para alguna ó algunas oposiciones, paralizando el curso general del juicio y dando lugar á que se dicten en una misma instancia varias sentencias parciales sobre puntos que deben ser materia de la sentencia definitiva universal.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO. *Gabriel Rosas*, Secretario.

SALVAMENTO DE VOTO

DEL MAGISTRADO DOCTOR CORRALES.

El infrascrito Magistrado tiene la pena de disentir de la opinión de la mayoría de la Corte, respecto del punto relativo á la prueba del embargo del terreno de "Las-Burras," cuando éste fué vendido por Joaquín Piñeros á favor de su hijo Simón Piñeros.

La prueba de este hecho consiste en el certificado expedido por el Registrador del Círculo de Cáqueza, señor José Gregorio Leiva, en diez y nueve de Septiembre de mil ochocientos ochenta y dos, no pedido por el Juez del conocimiento en primera instancia, sino presentado, sin previa citación, por el acreedor del concursado Joaquín Piñeros, señor José A. Obregón.

Se comprende muy bien que los certificados que expide un Registrador, con el fin de que los particulares que tengan interés en saber las condiciones á que estén sujetos los inmuebles, estén ciertos y seguros de que no los afecta ningún gravamen, y que pueden entrar en la libre circulación de las propiedades, sin exponerse á los peligros consiguientes.

Pero cuando se trata, como en el presente caso, de acreditar en juicio civil que tal inmueble tiene algún gravamen especial, ó se encuentra embargado al tiempo de verificarse la enajenación de él, esta prueba debe llevarse al juicio con citacion de la contraparte y en la *forma* que prescriben terminantemente los artículos 679 y 681 del Código Judicial, que están redactados de este modo:

"Artículo 679. Para que los documentos auténticos (como los certificados de los Registradores) sean estimados *como prueba en la sentencia á que ha precedido término probatorio*, será preciso: 1.° que los documentos que hayan venido al pleito sin citación, se cotejen con sus originales, previa citación, á no ser que la persona á quien perjudiquen haya prestado á tales documentos su asentimiento etc.; 2.° que los documentos que hayan de obtenerse por la parte *durante el juicio*, se pidan por el Juez de la causa á la Oficina respectiva, previa citación de la parte á quien hayan de perjudicar, y 3.° que si el testimonio que se pide fuere de parte de unos autos ó documentos solamente, se adicione á él lo que la parte contraria señalare si tuviere relación ó fuere conducente.

"Artículo 681. Las escrituras públicas siempre, y los instrumentos auténticos *cuando sean obtenidos de la manera ya expresada*, hacen plena prueba acerca de su contenido."

Y como el certificado del Registrador del Círculo de Cáqueza no se ha traído al juicio en la forma establecida en el Código Judicial, es claro que no hace plena prueba del hecho de haber estado embargado el inmueble denominado "Las-Burras" cuando lo vendió Joaquín á Simón Piñeros.

Bogotá, treinta de Junio de mil ochocientos noventa y tres.

MANUEL E. CORRALES. — POMBO. — ISAZA. — BOTERO URIBE.—CASAS ROJAS.—FERNÁNDEZ DE SOTO.—GALINDO. *Rosas*, Secretario.

AUTOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Julio diez de mil ochocientos noventa y tres

Vistos: El Alcalde municipal de Magangué comunicó al Gobernador del Departamento de Bolívar, por nota oficial de veinte de Marzo de mil ochocientos noventa y dos, que el Capitán del vapor *Rafael Núñez*, que navega en el río Magdalena, se había negado á conducir un reo que, con la debida custodia, enviaba dicho Alcalde á la Provincia de Cartagena, para ponerlo á disposición del Prefecto. Con tal motivo se mandó pasar copia de la nota oficial en referencia al Fiscal del Circuito respectivo para que promoviera la averiguación del hecho; y al efecto, se instruyeron las presentes diligencias sumarias, encaminadas á investigar la responsabilidad del Capitán, diligencias que remite á la Corte el Juez del Circuito de Magangué, en la creencia de que se trata en un negocio comprendido en la atribución VII, artículo 40 del Código de Organización Judicial.

Recibido el expediente en el Despacho de este Supremo Tribunal y pasado en vista al señor Procurador, opina este funcionario que no puede aplicarse al caso presente la disposición citada, por no tratarse en él de negocio alguno contencioso sobre navegación marítima ó fluvial, sino de la falta de obediencia de un particular á la autoridad de que, según las reglas generales, deben conocer los Jueces comunes.

La Corte no vacila en acoger los conceptos del Agente del Ministerio Público, en cuanto la considera incompetente, por ser para ella obvio que la atribución relacionada no comprende, por más amplitud que quiera dársele, los asuntos de esta naturaleza. Las palabras *causa* y *juicio* allí empleadas demuestran claramente que debe haber controversia relativa á la navegación marítima ó de ríos navegables que bañen el territorio de la República, y claro es que aquí sólo se trata de inquirir la culpabilidad del Capitán de la nave *Rafael Núñez*, por la falta que se le imputa.

En virtud de lo expuesto, la Corte dispone que se devuelvan estas diligencias al Juez remitente, para que les dé el curso legal.

Notifíquese, déjese copia é insértese en la *Gaceta Judicial*.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO—ANÍBAL GALINDO.—JESÚS MARÍA QUINTERO P. *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, veintiséis de Junio de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: El Alcalde del Municipio de Somondoco en el Departamento de Boyacá, inició sumario para averiguar el delito de hurto de una vaca, denunciado por Balbina Torres, quien aseguró que le había sido sustraída en la noche del treinta de Abril del año próximo pasado, del sitio del "Neme," de la jurisdicción de Machetá, y sindicó como autor del hurto á Milcíades Heredia Vaca. Contra el mismo individuo se inició otro sumario por el Alcalde de Guayatá, á virtud de denuncio dado por Benedicto Marín quien atribuyó al denunciado el hurto de dos bueyes y una vaca parida que le fueron sustraídos de su campo cercano á Chocontá.

Perfeccionados ambos sumarios, fueron remitidos al Juez del Circuito de Guateque, quien, después de practicar algunas diligencias, de las cuales resultó sindicado también del delito que se investigaba, Miguel Daza, los remitió al Juez Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, por creer que este funcionario era el competente para decidir de su mérito.

El Juez 2.° Superior, á quien tocó el asunto, declaró que, tratándose de dos delitos cometidos en distintas fechas y en lugares diferentes, y no alcanzando la cuantía de los objetos hurtados, tomados separadamente, á la señalada por la ley para fijar su jurisdicción, él no era competente para decidir del mérito de los sumarios, y ordenó su remisión al Juez del Circuito de Chocontá, por estar dentro de la jurisdicción de éste los sitios de donde se habían sustraído los animales hurtados.

El Juez del Circuito de Chocontá convino en que el conocimiento del asunto no correspondía al Juez Superior, pero se creyó incompetente á su vez para avocar el conocimiento, y remitió los sumarios al Juez del Circuito de Guateque, á quien provocó al efecto competencia negativa. Aceptada la competencia por el Juez provocado, y preparada convenientemente la actuación relativa á la controversia, se ha remitido á la Corte para decidir la competencia, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3.° del artículo 47 de la Ley 147 de 1888, por versar la contienda de jurisdicción entre dos Juzgados de distintos Distritos Judiciales.

El señor Procurador de la Nación, á quien se pasó en vista el asunto, en la exposición detenida y jurídica que ha dirigido á la Corte, se expresa así:

"Sostiene el Juez de Chocontá que aun cuando es cierto que la sustracción de la reses se verificó en sitios ubicados dentro del Circuito de su jurisdicción, no lo es menos que el consiguiente delito de hurto no llegó á consumarse sino en el Circuito de Guataque, donde aquéllas fueron vendidas, circunstancia que constituye un delito crónico, del cual deben conocer á prevención, según el artículo 229 de la Ley 57 de 1887, el Juez del Circuito en que el delito comenzare á perpetrarse y el de aquél en que se consumare, debiendo prevenir el que primero instruya ó reciba el sumario, que en el caso que se discute lo fué el Juez del Circuito de Guateque.

"Éste replica que el hurto ó robo de las reses quedó consumado por el mero hecho de la sustracción de ellas del lugar en que las tenían sus dueños, puesto que tal sustracción se verificó contra la voluntad de éstos, y con ánimo de apropiarse dichas reses por parte de los que las tomaron, y que en ese caso es al Juez del Circuito de Chocontá, donde ocurrieron esos hechos, á quien corresponde conocer en el asunto, conforme á las reglas generales que establecen la competencia en materia criminal.

"Antes de exponeros mi opinión en el asunto, debo haceros presente que las diligencias sumarias no arrojan aún luz suficiente sobre los verdaderos autores de la sustracción de las reses á que se contrae la investigación. Con efecto, lo único que hasta ahora se ha descubierto respecto de las de Benedicto Marín, es que, después de haber desaparecido del lugar en que se hallaban cerca de Chocontá, fueron vendidas en Guateque por Miguel Daza á Milcíades Heredia, dato que no basta para inculpar con entero fundamento á dicho Daza de haber sido él el autor de la referida sustracción, mayormente si se considera que este individuo ha manifestado que él hizo la venta por recomendación de un tercero, quien á su vez niega lo que respecto de él afirma el citado Daza. En estado semejante se halla la averiguación del hurto de la vaca perteneciente á Balbina Torres, pues sobre este punto apenas se sabe que tal vaca desapareció una noche del lugar donde la tenía la citada mujer, y que luégo fué hallada en la casa ó campo de José Domingo Calderón, donde la dejó, por cansada, un hijo de Milcíades Heredia, quien por su parte ha manifestado que la intervención de su hijo en la conducción de la vaca, provino de que un hombre á quien no conocía por entonces, le pagó para que permitiese á su citado hijo ayudarle á conducir dicho animal al potrero de un señor Niño.

"Comprobado como está con los datos apuntados, que las reses hurtadas fueron sustraídas fraudulentamente de lugares situados dentro de la jurisdicción del Circuito de Chocontá, las razones expuestas por el Juez provocado, en sostenimiento de que no es á él sino al Juez del expresado Circuito, á quien corresponde conocer en el asunto, son, en mi sentir, las aceptables como legales, puesto que ellos se ajustan á la prescripción general contenida en el artículo 228 de la Ley 57 de 1887, de que "en los juicios en que deben conocer los Jueces de Circuito ó los Municipales, sólo son competentes el del Circuito ó Distrito municipal respectivos en que se haya cometido el delito por que se proceda.

"El que algunas de esas reses (las de Marín) fueran vendidas en Guateque, no obsta en contrario á la enunciada opinión, por cuanto el delito no lo constituye esencialmente esa venta, sino el hecho mismo de la sustracción verificada contra la voluntad del dueño de los animales sustraídos, y mediando, además, por parte de los autores de la sustracción, el ánimo de apropiarse dichos animales, como así permiten persumirlo las circunstancias con que el delito aparece cometido.

"Según el Juez que provocó la competencia, el delito de hurto de las reses, aun cuando iniciado en Chocontá, con la sustracción de éstas, no se consumó sino á virtud de la venta de las mismas, efectuada en Guateque, siendo, por tanto, dicho delito de carácter crónico.

"Contra esta afirmación, aplicable solamente al caso de Marín, pues la vaca perteneciente á la Torres no aparece vendida, como se ha dicho, en parte alguna, observo lo siguiente:

'Comete hurto, dice el artículo 792 del Código Penal, el que quita ó toma lo ajeno fraudulentamente, con ánimo de apropiárselo, sin fuerza ni violencia contra las personas ni las cosas.

'*Este ánimo se presume mientras no se pruebe ó resulte claramente lo contrario.*'

"Es así que los respectivos sumarios no suministran la prueba de que los que se sustrajeron fraudulentamente las reses de que se viene hablando, procedieran sin ánimo de apropiárselas, luego hay que convenir en que existe contra ellos la presunción legal establecida en la preinserta disposición penal, lo cual basta, dadas las demás circunstancias de falta de voluntad de los dueños etc., para dar por consumado el delito de hurto por el hecho de la sustracción.

"Escriche, en su *Diccionario de Legislación y Jurisprudencia*, define el hurto así: 'Hurto. La sustracción fraudulenta de la cosa ajena sin voluntad del dueño, con ánimo de apropiarse el dominio, la *posesión* ó el *uso* de ella.' Esta definición va seguida de la siguiente, tomada de la Ley I, Título 14, Partida 7: 'Furto es malfetría que facen los homes que toman alguna cosa mueble ajena escondidamente sin placer de su señor, con entención de ganar el señorío ó la *posesión* ó el *uso* della.'

"Como se ve, en las anteriores definiciones del delito de hurto, el ánimo requerido en el delincuente no se limita al dominio; sino que se refiere también á la posesión y al uso, casos estos dos últimos no extraños á nuestra legislación penal, aun cuando bajo otra denominación distinta de la del hurto, que pudiéramos llamar común.

"Si las precedentes consideraciones no bastaren á demostrar que el delito de hurto se consumó en Chocontá, por el solo hecho de la sustracción fraudulenta de las reses, sustracción en que, según se ha indicado, el ánimo de apropiarse los animales sustraídos habría de presumirse legalmente en los responsables, aun cuando no existiese, que sí existe, ninguna otra circunstancia que lo indicase, si no bastare esto, repito, cabría preguntar: "¿Cómo se habría considerado la referida sustracción si las reses vendidas por Daza en Guateque hubieran sido halladas en poder de ese individuo, ó de otro, antes de verificarse la venta de ellas y después de haber desaparecido del poder de su dueño? ¿Habría dejado de cometerse en ese caso el delito de hurto definido en el artículo 792 del Código Penal, que no exige como circunstancia esencial para la consumación de dicho delito, la de que el autor de él haya dispuesto de las cosas tomadas ó quitadas fraudulentamente á su dueño y traspuestas ocultamente del lugar en que éste las tenía? ¿Y qué decir, si el que tomó las cosas ajenas, con las circunstancias indicadas, no dispone de ellas y resuelve mantenerlas ocultas en su poder?

"Creo que lo expuesto es suficiente para concluír que el delito de hurto de las reses de Marín, y con mayor razón si cabe, el de la vaca perteneciente á la Torres, animal que apenas apareció traspuesto pero no vendido, se cometieron en el Circuito de Chocontá, y que, en esa virtud, y para dar cumplimiento al artículo 228 antes citado de la Ley 57 de 1887, debéis dirimir la competencia en el sentido de declarar que es al Juez de dicho Circuito á quien corresponde el conocimiento en el asunto."

La Corte, que nada tendría que agregar á los razonamientos del señor Procurador, los acoge de grado, y, en consecuencia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, dirime la competencia de que se trata, declarando que corresponde al Juez del Circuito de Chocontá el conocimiento de los sumarios á que se ha hecho referencia, á quien se remitirán al efecto, y dispone que se comunique esta resolución al Juez del Circuito de Oriente, residente en Guateque.

Póngase en conocimiento del señor Procurador, déjese la copia respectiva y publíquese en la *Gaceta Judicial*.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO,—ANÍBAL GALINDO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

IMPRENTA DE ANTONIO M. SILVESTRE.
Director, Tomás Galarza.

REPÚBLICA DE COLOMBIA.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AÑO VIII | Bogotá, 4 de Agosto de 1893. | NÚM. 407.

CONTENIDO.

Págs.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

La que concede á Dimas Gómez y Delfina Delgado una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Pombo)..... 345
La que concede á María Concepción Perlaza una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Botero Uribe)..... 345
La que invalida la sentencia dictada por el Tribunal de Cundinamarca, en una demanda ordinaria promovida por Tomás Currea contra Leopoldo Montejo, sobre resolución de un contrato é indemnización de perjuicios. (Magistrado sustanciador, doctor Casas Rojas)..... 346
La que declara fundado el recurso de casación interpuesto por Eduardo Uribe U & C.ª, contra la sentencia del Tribunal Superior de Antioquia, en la demanda ordinaria instaurada por dicha Sociedad, por pesos, contra Inés Restrepo de Piedrahita, por sí y como representante legal de su hijo menor José Eusebio Piedrahita. (Magistrado ponente, doctor Isaza)..... 348
La que concede á Manuel Ruiz una recompensa. (Magistrado sustanciador, doctor Isaza)..... 350
La que reconoce á César Sánchez N., como último cesionario de Luis Escobar C. un crédito por suministros, empréstitos y expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Jesús M. Quintero P.)..... 351

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

El en que se declara la Corte incompetente para conocer de un auto ejecutivo dictado por el Tesorero municipal de La-Vega, contra Eusebio Bejarano, para hacerle efectiva una multa. (Magistrado ponente, doctor Fernández de Soto)..... 352
El confirmatorio del auto dictado por el Juez 3.º del Circuito de Sugamuxi, en las diligencias practicadas para el deshaucio de una casa. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas)..... 352

GACETA JUDICIAL.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintiocho de Junio de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Dimas Gómez, viuda del Capitán Largo Delgado, y su hija Delfina Delgado, vecinas del Municipio de Concepción en el Departamento de Antioquia, han ocurrido á la Corte, por medio de su apoderado el doctor Andrés Lara, en demanda de la recompensa que les otorga la Ley 84 de 1890, por la muerte de dicho Capitán en el campo de batalla y en defensa de los principios que informan las actuales instituciones de la República.

En justificación de los derechos de las solicitantes se han presentado las siguientes pruebas:

La partida de matrimonio celebrado conforme al rito católico, entre Largo Delgado y Dimas Gómez y ante el Cura párroco de Concepción, en diez y nueve de Enero de mil ochocientos cincuenta y tres;

La de nacimiento de Delfina Delgado, como hija legítima de dicho matrimonio, extendida también por el mismo Cura párroco, y de la cual se deduce que ésta es mayor de edad;

Las declaraciones de los Generales José María Ramírez y David Gómez G. y de Marco A. Villegas, recibidas con las formalidades legales, con las cuales se acredita que Largo Delgado concurrió á la batalla de Garrapata, librada el veinte de Noviembre de mil ochocientos setenta y seis, é hizo parte de las fuerzas de la 4.ª División Giraldo, con el grado de Capitán; que allí vieron que Delgado recibió una herida que le causó la muerte, y que fué sepultado en el mismo campo de batalla.

A falta del respectivo despacho de Capitán, se ha traído á los autos copia del *Boletín Oficial*, órgano del Gobierno de Antioquia, de fecha treinta de Diciembre de mil ochocientos setenta y seis, en el cual aparece entre la lista de los muertos de la expresada División, el Capitán Largo Delgado.

Una certificación del Gobernador del Departamento de Antioquia, de no haber constancia en su despacho del empleo militar del citado Delgado.

Declaraciones de varios otros testigos que aseguran que las solicitantes son pobres, han observado y observan buena conducta moral y vivieron en perfecta armonía con el expresado Capitán.

Con una última certificación del enunciado Cura párroco, se ha acreditado que la Gómez permanece viuda y su hija Delfina permanece soltera.

El señor Ministro del Tesoro ha certificado que las peticionarias no han recibido pensión ni recompensa por la muerte de su causante.

Es indudable, por otra parte, que las solicitantes son las únicas personas que tienen derecho á la recompensa demandada, pues los otros dos hijos de ese matrimonio: Manuel Antonio y María Candelaria Delgado, han manifestado expresamente que no se creen con derecho á participar de dicha recompensa, por cuanto el primero tiene aptitudes para trabajar, y la segunda está casada con Juan B. Tejada, quien ha firmado también la manifestación hecha por su esposa.

Por todo lo expuesto, y estando claramente justificado el derecho de las demandantes, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con lo que disponen los artículos 1.º, 5.º, 6.º y 9.º de la Ley 84 de 1890, y con el dictamen del señor Procurador general de la Nación, declara que Dimas Gómez y Delfina Delgado tienen derecho á recibir del Tesoro nacional una recompensa unitaria y definitiva de tres mil ciento veinte pesos ($ 3,120), equivalente al sueldo de un Capitán en cuatro años, por la muerte de Largo Delgado en el campo de batalla, la cual dividirán por mitad.

Notifíquese, cópiese, dése cuenta al Ministerio del Tesoro, publíquese y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Junio veintiocho de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Demandá María Concepción Perlaza, como hija legítima del militar de la Independencia, Manuel José Perlaza, recompensa del Tesoro de la Nación por los servicios prestados por su padre en la guerra de la Independencia.

Seguido el juicio por los trámites legales, y habiéndose dado vista al señor Procurador, éste expuso lo siguiente:

"Señores Magistrados:

"Examinada nuevamente la documentación relativa á la solicitud de recompensa que os dirige María Concepción Per-

laza, como hija legítima del militar de la Independencia, Manuel José Perlaza, resultan comprobados los hechos constitutivos de dicha solicitud en la forma que paso á indicar:

"La calidad civil de hija legítima de la solicitante, habida en el matrimonio de Manuel José Perlaza y Mariana Mendoza, con copia legalizada de la partida eclesiástica de dicho matrimonio y con la de la correspondiente partida de bautismo;

"El empleo militar y los servicios prestados á la causa de la Independencia por el padre de la solicitante, con copia auténtica de la respectiva hoja de servicios, en la cual consta que aquél se afilió como soldado en el Ejército patriota desde el año de 1811 y que ascendió por rigurosa escala al empleo de Sargento Mayor, habiendo servido por más de 33 años, parte de ellos en la fuerza naval, y habiendo sido prisionero y condenado á servir como soldado por los españoles en 1816;

"La muerte del Mayor Perlaza, ocurrida el año de 1838 en la ciudad de Santamarta, con copia de la partida eclesiástica de defunción;

"La muerte de la señora Mariana Mendoza, madre de la solicitante, con información de testigos que expresan la razón de su dicho, prueba á que hubo que ocurrir á falta justificada de la correspondiente partida de defunción;

"El hecho de ser la solicitante la única hija que tuvo el Mayor Perlaza, la pobreza de la misma, su buena conducta, el hecho de permanecer soltera y el mal estado de su salud, constan en las declaraciones fundadas de varios testigos, confirmadas en lo que respecta al estado de soltería con dos certificaciones, procedente la una del respectivo Cura párroco, y la otra del Notario público del Circuito de Santamarta;

"Finalmente, la circunstancia de no haber sido recompensada la peticionaria, por los servicios militares de su finado padre, aparece justificada en la certificación expedida sobre el particular por el Ministerio del Tesoro.

Por lo visto, el derecho de la peticionaria á ser recompensada de conformidad con las disposiciones de la Ley 84 de 1890, aplicables á los deudos de los militares de la Independencia, está comprobado, y así os pido que lo declaréis."

La Corte ha examinado con escrupulosidad los documentos de que hace mención el señor Procurador, y ha hallado que la prueba es completa y el expediente perfecto.

Por tanto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1.°, 3.°, 4.°, 5.°, inciso 1.°, 6.° y 9.° de la Ley 84 de 1890, declara que María Concepción Perlaza tiene derecho á una recompensa unitaria de tres mil ochocientos cuarenta pesos ($ 3,840), suma igual al monto ó alcance en cuatro años del sueldo íntegro que tenía su padre el Sargento Mayor Manuel José Perlaza, militar de la Independencia.

Notifíquese, cópiese, publíquese, dése cuenta al Ministerio del Tesoro y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, tres de Julio de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Como apoderado de Tomás Currea, el doctor Valentín Gálvez demandó ante el Juez del Circuito de Bogotá, á Leopoldo Montejo, para que con audiencia de éste y en virtud de lo dispuesto por los artículos 1546, 1602, 1603, 1613, 1615 y sus concordantes del Código Civil, el Juez declarara la resolución de un contrato de promesa de cesión, celebrado entre dichos Currea y Montejo y no cumplido por el último de los dos, y para que pagase Montejo á Currea los perjuicios consiguientes al no cumplimiento del mismo contrato, estimados en la demanda, por lucro cesante y daño emergente, en la suma de diez mil pesos.

Admitida la demanda, opúsose en la contestación de ella la excepción perentoria de pago ó cumplimiento de la obligación contraída por parte de Montejo; y surtida la tramitación correspondiente al juicio ordinario, el Juez del conocimiento, pronunció en quince de Diciembre mil ochocientos noventa y uno, una sentencia cuya parte resolutiva es del tenor siguiente:

"Teniendo en cuenta las precedentes consideraciones, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, se declara:

"1.° Está resuelto el contrato celebrado entre los señores Tomás Currea y Leopoldo Montejo, relativo á la cesión del remate de la renta de aguardiente de caña y sus compuestos del Departamento de Cundinamarca;

"2.° El señor Leopoldo Montejo debe pagar al señor Tomás Currea los perjuicios provenientes del lucro cesante á que dió lugar el no cumplimiento de las obligaciones que contrajo dicho señor Montejo, perjuicios que se determinarán en cantidad líquida en juicio separado, y

"3.° No está probada la excepción de pago propuesta por el demandado.

"Sin costas.

"Publíquese, notifíquese y cópiese.

"ANTONIO JOSÉ CADAVID A.—*Angel M. Olivos*, Secretario en propiedad."

De esta sentencia apelaron para ante el Tribunal Superior tanto el demandado, como el demandante, quien limitó el recurso solamente á la parte de ella en que no se fijó el valor de los perjuicios reclamados, aceptándola en todo lo demás.

Concedida la apelación, remitióse el expediente al Tribunal, en donde con observancia de todas las formalidades correspondientes á la segunda instancia, terminóse el juicio mediante la sentencia de diez y siete de Noviembre último, en la cual el Tribunal manifestó hallarse en un todo de acuerdo con el Juez en lo concerniente á la resolución del contrato, punto principal del debate, sin que acerca de él se descubra entre las dos sentencias más diferencia que la de que la última agrega á las citas hechas en el cuerpo de la primera, la de los artículos 768, 740, 745, 749, 1608 (ordinal 2.°), 1609, 1610 (ordinal 3.°) del Código Civil, citas de disposiciones que estando intímamente conexionadas y en completa armonía con las de los artículos mencionados por el Juez, lejos de introducir variación de doctrina entre dichas dos sentencias, sirven al contrario para corroborar y confirmar la que ha sustentado la decisión.

Pero en cuanto á la indemnización de perjuicios, el Tribunal, no sólo decide el punto de su declaración, sino que procede á fijarla, haciendo para ello las consideraciones que juzgó conducentes.

La parte resolutiva de dicha sentencia es como sigue:

"En consecuencia, el Tribunal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve:

"1.° Declárase resuelto el contrato celebrado entre Tomás Currea y Leopoldo Montejo, sobre cesión del remate de la renta de aguardiente de caña y sus compuestos del Departamento de Cundinamarca, á que se refiere este pleito;

"2.° Condénase á Leopoldo Montejo á pagar al demandante Currea, por vía de indemnización de perjuicios, en virtud del no cumplimiento del contrato, la suma de tres mil trescientos treinta y tres pesos y trescientos treinta y tres milésimos de peso ($ 3,333-333);

"3.° No está probada la excepción de *pago ó cumplimiento de la obligación*, propuesta por el demandado;

"4.° Absuélvese á éste de los demás cargos de la demanda;

"5.° No se hace condenación en costas;

"6.° Queda en estos términos reformada la sentencia apelada.

"Publíquese, notifíquese y cópiese esta providencia, y manténgase el proceso en la Secretaría á disposición de las partes, por treinta días, para los efectos que se indican en los artículos 372 á 375 de la Ley 105 de 1890.

"TOBÍAS GAONA.—JESÚS MARÍA QUINTERO P.—ANTONIO MARÍA RUEDA G.—*Enrique Rojas B.*, Secretario interino."

Contra este fallo interpusieron recurso de casación tanto el demandante como el demandado, y les fué concedido según

lo dispuesto en autos, de fecha diez y siete de Diciembre de mil ochocientos noventa y dos y de veinticinco de Enero último.

Sustanciado tal recurso según las formas legales del caso, la Corte lo admite, por concurrir en él los requisitos señalados por los artículos 381 y 366 de la Ley 105 de 1890, vigente entonces.

En efecto, interpúsose por personas hábiles y dentro del término legal; fúndase la sentencia acusada en leyes que han regido en toda la República desde la vigencia de la Ley 57 de 1887; la cuantía del pleito es demás de tres mil pesos; y entre las sentencias de primera y de segunda instancia hay la diferencia de que mientras que la primera remitió á un nuevo juicio la fijación de los perjuicios reclamados por Currea, la segunda los fijó en la suma de tres mil trescientos treinta y tres pesos y trescientos treinta y tres milésimos de peso ($ 3,333-333), lo cual establece contrariedad en uno de los puntos principales de la demanda, ya que en ella se pidió la condenación de Montejo al pago de la suma de diez mil pesos por razón de tales perjuicios.

Y para cumplir con lo prevenido por el artículo 59 de la Ley 100 de 1892, se debe proceder á examinar con la debida separación, cada una de las causales en que se ha fundado el recurso para poder resolver en virtud del resultado que de tal examen se obtenga, si es ó no el caso de casar la expresada sentencia.

La parte de Montejo fundó el recurso en las causales de casación designadas en los números 1.° y 2.° del artículo 369 de la Ley 105 de 1890, y la parte de Currea lo fundó solamente en la segunda de ellas.

Sostiene el abogado, doctor Julián Restrepo, apoderado de Montejo, que la sentencia acusada es violatoria de ley sustantiva, y que no se halla en consonancia con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes, en cuanto por una parte se dictaron en ella resoluciones que recaen sobre puntos que no son objeto de la controversia, y por otra se dejó de resolver sobre lo que sí era objeto de ella.

Para averiguar la fuerza jurídica que comporte la primera parte de la alegación de Restrepo, conviene fijar, de un modo preciso, el objeto de la demanda, y con tal fin se trascribe á continuación la parte petitoria de ella, que es como sigue:

"Yo, Valentín Gálvez, vecino de Bogotá y apoderado especial del señor Tomás Currea, como consta del poder adjunto, ante usted, con todo respeto, expongo: que en uso de dicho poder y siguiendo las instrucciones de mi poderdante, propongo formal demanda ordinaria contra el señor Leopoldo Montejo, varón, soltero, mayor de edad y de la propia vecindad, para que con su intervención y audiencia, se declare en la sentencia definitiva que se pronuncie:

"1.° La resolución del contrato bilateral en virtud del cual, el señor Montejo se obligó á ceder al señor Currea el manejo y administración de la renta de aguardiente de caña y sus compuestos, de este Departamento, renta que Montejo remató ante la Junta de Hacienda, el 17 de Mayo del corriente año, y cuya adjudicación se le hizo por escritura número 554, otorgada con fecha 29 del citado mes, por ante la Notaría 4.ª de este Círculo;

"2.° Habiéndose pactado como base esencial del contrato expresado, que Montejo cedería á Currea el manejo y administración de la renta de licores, á condición de que éste le prestase la fianza con que aquél debía asegurar al Gobierno el remate de la misma renta, aparece que Currea cumplió por su parte, con la obligación ú obligaciones que contrajo, mientras Montejo no cumplió, por la suya con la de hacerle la entrega convenida, de la administración y manejo de la precitada renta;

"3.° En consecuencia, Montejo es responsable á Currea de los daños y perjuicios provenientes de la falta de cumplimiento del contrato, estimados tales perjuicios en la suma de diez mil pesos ($ 10,000), incluyendo en ellos el lucro cesante y el daño emergente, con la obligación además de libertar á Currea de la fianza prestada y de responderle de las erogaciones que se le hubieren de exigir como tal fiador, en cualquier caso, mientras conserve este cargo.

"Tales son los puntos principales de la demanda que entablo; y si no pido el cumplimiento del contrato mismo, es porque no subsistiendo por más de un año el arrendamiento de la renta rematada, de nada aprovecharía al señor Currea insistir en él, si el presente juicio que provoco tiene necesariamente que emplear tiempo en su lenta tramitación. Es por eso que sólo demando la resolución del contrato, la exoneración de la fianza á mi parte, y la indemnización de perjuicios, que es el segundo término de las acciones en los contratos bilaterales perfectos, cuando por alguna de las partes contratantes deja de cumplirse lo pactado."

La anterior trascripción pone de manifiesto que lo que el apoderado de Currea demandó fué la resolución de una promesa de cesión del remate en referencia; y como de la sentencia acusada se deduce, que lo que ella resolvió fué el contrato que reza la escritura número 589, de siete de Junio de mil ochocientos noventa, celebrado entre Montejo y Currea, puesto que allí se aduce como fundamento el no haber Montejo cumplido con las formalidades que los decretos del Gobierno de Cundinamarca exigían para que fuese aceptada la expresada cesión, la sentencia acusada cae por su base en el examen jurídico que de ella se hace.

Si dicha sentencia se hubiera ocupado en la resolución de la promesa sujeta materia del litigio, no sería exequible sino en el caso de que se hubiera exhibido la prueba literal de ella con las demás condiciones exigidas por la ley.

Ahora bien, el artículo 89 de la Ley 153, es del tenor siguiente:

"Artículo 89. La promesa de celebrár un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurran las circunstancias siguientes:

"1.ª Que la promesa conste por escrito;

"2.ª Que el contrato á que la promesa se refiere no sea de aquéllos que las leyes declaran ineficaces, por no concurrir los requisitos que establece el artículo 1511 del Código Civil;

"3.ª Que la promesa contenga un plazo ó condición que fije la época en que ha de celebrarse el contrato;

"4.ª Que se determine de tal suerte el contrato, que para perfeccionarlo sólo falte la tradición de la cosa ó las formalidades legales.

"Los términos de un contrato prometido, sólo se aplicarán á la materia sobre que se ha contratado."

Y como en autos no existe comprobación ninguna que estableza la existencia de la promesa con los requisitos prevenidos por esta ley, claro está que el fundamento de la expresada sentencia tampoco existe, y que la demanda misma no es exequible mientras no empiece por acreditar plenamente no sólo la promesa sino también el hallarse ella revestida de las condiciones en derecho necesarias para que pueda producir obligación exigible.

Acerca de esto el apoderado, doctor Restrepo, se expresa así:

"Si ese contrato de promesa de venta fué meramente verbal; y ello así resulta del expediente; y si tal contrato no se hizo constar por escrito, y no se observaba en él las circunstancias que prescribe dicho artículo 89, y que nada de eso se hizo es evidente, evidente es también que tal promesa fué un acto baldío, y que él no produjo obligación alguna á cargo de Montejo y á favor de Currea.

"Por tanto, si en la sentencia se hubiera fallado sobre el verdadero objeto de la controversia, y á tal promesa se le hubiera otorgado eficacia, se habría violado el artículo 89 de la ley citada; é indirectamente se vino á violar esa disposición sustantiva al declararse resuelto el contrato consecuencial de la promesa, cosa que no se demandó como consecuencial de aquella promesa, dándole así valor en derecho, á lo que en derecho no lo tiene."

En el fondo, esta alegación es fundada, no tanto por la razón que allí se expone, cuanto por la que se desprende del texto de la primera circunstancia de las que encierra el artículo 366 de la Ley 105 de 1890, que es del tenor siguiente:

"1.° Que la sentencia se funde ó deba fundarse en leyes que rijan ó hayan regido en toda la República, á partir de la vigencia de la Ley 57 de 1887."....

La distinción que por medio de la expresión *se funde* ó *deba fundarse* establece aquí la ley, es de fundamental im-

portancia, porque consigo lleva dos modos de violación de la ley sustantiva, á saber: el modo que consiste en violarla invocándola en una inteligencia diversa de la que realmente tenga, ó aplicándola indebidamente, y el modo en que se viola dejándola de aplicar con la significación que le corresponde en derecho al caso á que ella es aplicable. Es decir, que se viola la ley ó por comisión, aplicándola en un sentido que no tiene, ó en casos no pertinentes, ó por omisión, pretermitiendo su recta aplicación á casos que la requieren y la reclaman.

Y en la sentencia que es materia de esta casación se ve, con entera claridad, que debiendo haberse aplicado al caso del pleito la doctrina del artículo trascrito de la Ley 153 de 1887, para declarar de conformidad con ella que no existía allí promesa que hubiera podido producir obligación legal, el Tribunal omitió en absoluto aplicarla, con lo cual la violó por omisión, dando con esto margen no sólo á la casación pedida de la sentencia, sino también á que la que debe reemplazarla sea de absolución en favor del demandado, puesto que no apareciendo probada la promesa que se dice fué hecha por Montejo á Currea faltan á un mismo tiempo el fundamento de la demanda y su prueba.

Y como según el artículo 59 de la Ley 100 de 1892, cuando la Corte halla justificada una causal de casación, no necesita examinar las otras que se hayan alegado para invalidar el fallo, basta lo expuesto para que la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, invalide, como lo hace en efecto, la sentencia de diez y siete de Diciembre último, dictada en la demanda ordinaria, promovida por el General Tomás Currea contra Leopoldo Montejo, sobre resolución de un contrato é indemnización de unos perjuicios.

Y teniendo la Corte, de conformidad con el artículo 60 de la misma ley, el deber de pronunciar sentencia para reemplazar la anulada,

RESUELVE:

Absolver á Leopoldo Montejo de los cargos de la demanda, los cuales no han sido probados. Sin costas.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta*, y devuélvase el expediente al lugar de su procedencia.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Julio cuatro de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: La Sociedad colectiva denominada Eduardo Uribe U. & Compañía, domiciliada en Medellín, entabló demanda ordinaria en treinta de Junio de mil ochocientos noventa, ante el Juez de Circuito de Rionegro, Distrito Judicial de Antioquia, contra Inés Restrepo de Piedrahita, como viuda de Emiliano Piedrahita, y representante legal de su hijo menor José Eusebio Piedrahita, que representan la sucesión del citado Piedrahita, para que se les obligue á pagar á la casa demandante la cantidad de mil cien pesos treinta y dos y medio centavos ($ 1,100-32½) y los intereses vencidos, y que se venzan hasta el pago.

Fundó el actor la demanda en los hechos siguientes:

1.° El finado Emiliano Piedrahita hizo parte de la Sociedad rematadora de la renta de licores destilados de los Distritos del Peñol, Guatapé y Rionegro en el cuatrienio que principió el cinco de Febrero de mil ochocientos ochenta y seis;

2.° En la administración de esa renta, la Sociedad rematadora perdió una considerable cantidad, de la cual corresponde al citado Piedrahita la suma demandada, según las *acciones que representaba en la Sociedad*, y de acuerdo con el cómputo formado al efecto;

3.° Habiendo fallecido Piedrahita, no ha sido posible á la Sociedad demandante cobrar la suma enunciada, que desembolsó por cuenta de él para atender á la pérdida que le correspondía.

La demandada dió contestación á la demanda por medio de su apoderado, Ramón Piedrahita, en cuatro de Septiembre del mismo año, manifestando que ignoraba que su finado marido, Emiliano Piedrahita, hubiera hecho parte de la Sociedad rematadora de las rentas del Peñol, Guatapé y Rionegro, y no convenía, por lo mismo, en tal hecho.

Que no tenía tampoco conocimiento de que dicha Sociedad rematadora hubiera ó no perdido cantidad alguna, ni mucho menos de que le pudiera corresponder pérdida en tales rentas á su finado marido, por lo que no aceptó el cargo.

Que no tenía tampoco conocimiento alguno del estado de los negocios de la sucesión de su marido.

En la misma fecha de la contestación, propuso el apoderado de la demandada demanda de reconvención contra Eduardo Uribe U. & Compañía, para que se les obligue á devolver á Inés Restrepo de Piedrahita y á su hijo menor José Eusebio Piedrahita, como representantes de la sucesión del finado Emiliano Piedrahita, el saldo que resulte á favor de dicha sucesión de las cantidades que entregó Ramón Piedrahita á la mencionada casa, provenientes de la renta de licores del Distrito de El-Carmen en el período de 1886 á 1889, antes mencionado, después de haber pagado lo correspondiente al Gobierno, saldo que el demandante estimó en cuatro mil pesos ($ 4,000).

Fundóse esta demanda de reconvención en lo siguiente:

"1.° Que Emiliano Piedrahita, que murió en el Distrito de San-Vicente, de donde era vecino, remató y se le adjudicó la renta de licores del Distrito del Carmen en el período próximamente pasado, habiendo sido sus fiadores Eduardo Uribe U. & Compañía;

"2.° Que Ramón Piedrahita, recomendado de los negocios de su finado hermano Emiliano Piedrahita, mandó á la mencionada casa todas las cantidades de dinero que se realizaban de la renta de licores en El-Carmen, para que ella, como fiadora y responsable de su hermano, hiciera los pagos al Gobierno y estuviera asegurada en su fianza, debiendo devolver lo que sobrara después de saldar con el Gobierno las cuentas de la mencionada renta;

"3.° Que, como de las cuentas por él remitidas á la predicha Sociedad con el objeto mencionado, sobraron algunas sumas de consideración, después de haber pagado al Gobierno, han debido ser devueltas, bien al recomendado de los negocios del finado, ó bien á Inés Restrepo de Piedrahita, que en asocio de su hijo menor Eusebio, representa la sucesión, porque el que ha recibido dinero que no se le debe, es obligado á la restitución (Artículo 2318 del Código Civil)."

Esta demanda de reconvención fué contestada en diez de Octubre de mil ochocientos noventa, por el apoderado de Eduardo Uribe U. & Compañía, negando los hechos relacionados en ella, y el derecho en que se apoya, en estos términos:

"1.° Niego el hecho que se afirma, de que el finado Emiliano Piedrahita, hubiera sido el rematador exclusivo de la renta de licores de El-Carmen en el período próximo pasado, é ignoro que los señores Eduardo Uribe U. & Compañía hubieran sido fiadores de aquél;

"2.° No sé si el señor Ramón de J. Piedrahita enviara á la casa comercial referida, 'todas las cantidades de dinero que se realizaban de la renta de licores en El-Carmen, para que ella, como fiadora y responsable del finado Piedrahita, hiciera los pagos al Gobierno y estuviera asegurada en su fianza.' Presumo que si el señor Piedrahita enviaba tales sumas, era porque sobre ellas tenía algún derecho la casa que las recibía, mas no porque fuera fiadora del finado, porque es irregular que el deudor principal pague á su fiador y no á su acreedor. Además, este hecho es personal del señor Ramón de J. Piedrahita, y en derecho es inaceptable demandar como ajeno lo que no es propio, más claro: la demanda de reconvención debe fundarse en hechos propios del demandador, y no en los que pertenecen á un tercero, aunque éste venga á ser apoderado de aquél. Niego, pues, este hecho;

"3.° Ignoro que de las cantidades á que se refiere el punto anterior, hubieran sobrado algunas sumas de consideración, después de haberse pagado al Gobierno, y por lo mismo niego el hecho que pretende deducirse de lo que reza este numeral, y estaré á lo que se compruebe de una manera legal.

"Negados, como quedan, los hechos relacionados en la reconvención, negada queda la cita que se hace del artículo 2318 del Código Civil.

"Niego, asimismo, lo que expresa la parte petitoria de la demanda, de que mis comitentes estén obligados á devolver la cantidad ó saldo de cuatro mil pesos, ni ninguna otra suma resultante de la presente demanda de reconvención."

Abrióse á prueba el juicio doble, se siguió éste por los trámites regulares y terminó la primera instancia con la sentencia que profirió el Juez del Circuito de Rionegro en veinte de Junio de mil ochocientos noventa y uno, cuya parte resolutiva es de este tenor:

"Por lo expuesto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, se falla:

"1.° Absuélvese á la sucesión del finado Emiliano Piedrahita, representado por su esposa Inés Restrepo de P. y su hijo José Eusebio Piedrahita, de los cargos que por medio de apoderado le formuló la casa comercial de Eduardo Uribe U. & Compañía;

"2.° Asimismo se absuelve á la mencionada casa comercial, de los cargos que por vía de reconvención se le hicieron por los expresados representantes de la sucesión del finado Emiliano Piedrahita; y

"3.° No se hace condenación en costas."

Apeló de este fallo el apoderado de Inés Restrepo de Piedrahita, y se le otorgó el recurso para ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, quien, después de haber sustanciado el asunto con arreglo á lo que previene la ley sobre la segunda instancia del juicio ordinario de mayor cuantía, profirió la sentencia de doce de Agosto de mil ochocientos noventa y dos, que dice así en la parte resolutiva:

"Por tanto, la Sala de decisión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, falla:

"Refórmase la sentencia apelada en el sentido de que la casa comercial llamada de Eduardo Uribe U. & Compañía, debe á la sucesión de Emiliano Piedrahita, representada por su esposa Inés Restrepo de P. y su hijo José Eusebio Piedrahita, la suma de tres mil seiscientos setenta y ocho pesos cuarenta centavos ($ 3,678-40), procedente de las sumas en dinero entregadas por Ramón de J. Piedrahita á la casa demandada, para pagar lo que la expresada sucesión debía al Gobierno del Departamento, á cuenta del valor del remate hecho por Emiliano Piedrahita de la renta de licores destilados del Distrito de El-Carmen.

"La casa comercial de Eduardo Uribe U. & Compañía, pagará la suma expresada en el anterior aparte á la sucesión de Emiliano Piedrahita, dentro de los seis días siguientes á la notificación de esta sentencia. En todo lo demás, se confirma la sentencia de primera instancia.

"Sin especial condenación en costas."

La Sociedad de Uribe U. & Compañía, por medio de uno de sus socios administradores, interpuso recurso de casación oportunamente contra la sentencia que acaba de trascribirse, y aunque no designó las causales, manifestó en el escrito respectivo lo siguiente:

"Aunque no es forzoso designar las causales en que fundo el recurso de casación, me permito decir cuatro palabras á ese respecto.

"Si las remesas de dinero hechas por Ramón de J. Piedrahita á la casa que represento como producto de la renta de El-Carmen, no lo fueran sobre la seguridad de que esa renta pertenecía á la Compañía rematadora de las de Rionegro, Peñol y Guatapé, tuvieron que serlo con calidad de mandato conferido á la casa dicha; y siendo así, la sentencia, no ha debido condenar á ésta al pago de una cantidad líquida, sin previa deducción de los gastos causados para la ejecución del mandato y de la remuneración convencional ó usual que debiera abonarse al mandatario. (Artículos 2143, 2184, números 1.° y 2.° y 2188 del Código Civil y 333 del Código de Comercio)."

Otorgóse el recurso para ante esta Suprema Corte, á donde se elevaron los autos.

Recibidos en ella, se confirió traslado al apoderado especial de la parte recurrente, doctor Emiliano Restrepo E., quien en tiempo hábil presentó un memorial, por medio del cual fundó el recurso interpuesto, alegando contra la sentencia del Tribunal la causal que bajo el número 1.° designa el artículo 369 de la Ley 105 de 1890.

"La sentencia recurrida, dice, es violatoria de ley sustantiva y de doctrina legal; y la violación es no sólo directa, sino que también es efecto de una interpretación errónea de la ley, y de indebida aplicación de leyes al caso del pleito.

"Además, en la sentencia recurrida se incurrió en error de derecho en apreciación de determinadas pruebas, cuales son la de la confesión rendida en posiciones por la demandada, señora Inés Restrepo de P. y la testimonial, producida en primera instancia en la demanda principal, á petición del apoderado de la Sociedad de Eduardo Uribe U. & Compañía.

"En la sentencia recurrida se absolvió á la señora Inés Restrepo de P. de la acción deducida contra ella y contra su hijo en la demanda principal, no obstante estar suficientemente acreditada en el proceso esa acción. Tal absolución provino de haberse apreciado erróneamente en la sentencia recurrida las probanzas aducidas por la parte demandante. Pero si acaso estimare la Corte insuficiente, por vaga é indeterminada, la confesión rendida por la señora Restrepo de P., en manos de la Corte está suplir á tal deficiencia por medio de un auto para mejor proveer, para lo cual la faculta el artículo 18 de la Ley 100 de 1892; auto que puede proferir la Corte, ya de oficio, ya á petición de parte, conforme á lo dispuesto en el artículo 19 de la ley que acabo de citar. Tal auto debería proferirse en el sentido de que se constriñera á la señora de Restrepo de P. á precisar, por medio de respuestas categóricas, lo que sepa y le conste, ó de que tenga conocimiento ó conciencia íntima acerca de los hechos fundamentales de la demanda.

"En el expediente traspira de un modo que se impone al espíritu la certidumbre de la exactitud de los hechos que se relataron en la demanda principal. De la verdad de esos hechos da convencimiento moral la lectura del proceso; como así lo reconoció expresamente el Tribunal Superior de Antioquia en la sentencia recurrida. Por tanto, si la ley brinda hoy á la Corte un recurso, cual es el de un auto para mejor proveer, para traer más luz al juicio, y evitar así el tener que sacrificar un derecho cuya existencia salta á los ojos, no cabe duda de que el ilustrado Tribunal, al cual me dirijo, usará de la facultad que invoco.

"En cuanto á la demanda de reconvención, la ilegalidad de la sentencia recurrida es notoria.

"En ella se hizo indebida aplicación de las disposiciones civiles que reglamentan la *Agencia oficiosa* ó *gestión de negocios ajenos*, y el contrato de *mandato*, al caso del pleito. En ella se partió del supuesto de que, muerto el señor Emiliano Piedrahita, su hermano Ramón quedó encargado de la administración de la renta de licores del Distrito de El-Carmen. De tal hecho no hay comprobación en los autos. Se supone en la sentencia que por recomendación del señor Ramón Piedrahita, los señores Eduardo Uribe U. & Compañía, recibían los productos de la renta de El-Carmen, para pagar con ellos los contados del remate; y de allí se deduce en la sentencia que los señores Eduardo Uribe U. & Compañía asumieron el carácter de *agentes oficiosos* ó *gestores de negocios ajenos*, contrayendo para con la sucesión de Emiliano Piedrahita las obligaciones que al mandatario imponen los artículos 2181 y 2305 del Código Civil.

"Pero no estando comprobado el mandato conferido por la sucesión del señor Emiliano Piedrahita para la administración de la renta de El-Carmen, no puede estar comprobado que por recomendación del señor Ramón Piedrahita, hubieran venido á ser los señores Eduardo Uribe U. & Compañía mandatarios ó agentes oficiosos de la sucesión del señor Emiliano Piedrahita. Lo serían, si se quiere, del señor Ramón Piedrahita, y en ese supuesto, sería éste quien tendría acción de *mandante* contra aquéllos; acción que no habría podido deducir en este juicio por vía de reconvención.

"Por tanto, carece de legalidad, por deficiencia absoluta de prueba, la sentencia recurrida, en cuanto, declarándose en ella que los señores Eduardo Uribe U. & Compañía fueron agentes oficiosos de la sucesión del señor Emiliano Piedrahita,

se condenó á aquéllos á pagar á dicha sucesión una suma de pesos."

Llenadas las demás prescripciones referentes á la tramitación del recurso de casación ante la Corte, es yá tiempo de decidir el presente.

Desde luégo debe afirmarse que el recurso de que se trata es admisible conforme al artículo 366 de la Ley 105 de 1890, vigente cuando se interpuso, porque la cuantía del negocio excede de tres mil pesos ($ 3,000), porque se interpuso por parte legítima, como lo es uno de los socios administradores de la casa de Eduardo Uribe U. & Compañía, que tienen en el juicio el doble carácter de demandante y demandada, porque hay contradicción notoria entre las sentencias de primera y de segunda instancia en cuanto á lo resuelto respecto á la demanda de reconvención, y, finalmente, porque la sentencia acusada se apoya en leyes sustantivas que han regido en la República á partir de la época en que se unificó la legislación nacional.

En tal virtud, la Corte procede á examinar las causales alegadas, considerando separadamente la demanda principal y la de reconvención, decididas ambas en contra del recurrente en la sentencia del Tribunal de Antioquia.

Fúndase la sentencia en cuestión para absolver á la sucesión de Emiliano Piedrahita del cargo que se le hizo por la Sociedad de Eduardo Uribe U. & Compañía, en que no se dió la prueba legal necesaria de haber existido una Compañía entre el demandante y el demandado para la administración del arrendamiento de las rentas de licores de los Distritos del Peñol, Guatapé y Rionegro, en el cuatrienio que terminó el treinta y uno de Diciembre de mil ochocientos ochenta y nueve, y la Corte halla que el fundamento de esa parte del fallo es estrictamente legal, pues el actor no logró acreditar la existencia de la Compañía ni con documentos ni con confesión de parte ni con declaraciones de testigos hábiles ni con libros de cuentas llevados en debida forma; y en esto conviene implícitamente el recurrente al solicitar que se dicte auto para mejor proveer, con el objeto de esclarecer varios hechos que pudo haber demostrado en la primera ó en la segunda instancia del juicio.

La Corte no puede dictar semejantes autos con el objeto de dar apoyo á motivos de casación que no aparecen debidamente justificados en los autos. Sólo después de casada una sentencia por motivos que resulten de lo actuado, es permitido á la Corte, con el objeto de fundar el fallo que debe dictar sobre la materia del pleito, decretar, para mejor proveer, la práctica de pruebas que juzgue necesarias: así lo determina el artículo 19 de la Ley 100 de 1892.

Cuando á la demanda de reconvención, la Corte juzga que hay una deficiencia absoluta de prueba de los hechos que le sirven de fundamento, que el demandado ha debido ser absuelto, y que la sentencia debe casarse, por adolecer de error en la apreciación de las pruebas y en cuanto á la aplicación de leyes sustantivas.

Efectivamente, la sentencia sostiene la existencia de un cuasi-contrato de agencia oficiosa ó gestión de negocios ajenos entre la sucesión de Emiliano Piedrahita y la casa de Eduardo Uribe U. & Compañía, y los autos no suministran prueba de tal ó cuasi-contrato. El demandante, en reconvención, afirma que Ramón Piedrahita, como recomendado de los negocios de la sucesión de su hermano Emiliano, remitía á Eduardo Uribe U. & Compañía los fondos que se realizaban de la administración de la renta de licores del Distrito de El-Carmen, para que, como fiadores que eran del rematador, pagasen al Tesoro del Departamento de Antioquia, el precio del arrendamiento con cargo de restituír el sobrante, y sobre este hecho cardinal, que habría dado lugar á un mandato verdadero entre Ramón Piedrahita y la Compañía demandada, no hay en los autos otra prueba que el dicho del mismo demandante Piedrahita, á quien correspondía acreditar su afirmación, ya que el demandado niega haber recibido esos fondos en calidad de mandatario, al mismo tiempo que sostiene que lo hacía como compañero y no como mandatario ó agente oficioso.

La confesión de Eduardo Uribe, socio de la casa demandada, sobre recibo de sumas provenientes de la renta de licores de El-Carmen, no debe considerarse aisladamente y admitir de ella sólo lo que es favorable al demandante y perjudicial al demandado, porque siendo esa confesión explicada ó conteniendo circunstancias ó modificaciones que restringen ó destruyen la intención de la parte contraria, que no constituyen una verdadera excepción, porque son inseparables del hecho principal ó forman un todo con él en la intención del confesante, no es lícito hacer la separación ó considerar la confesión como simple (artículos 567 y 568 del Código Judicial).

Uribe confesó haber recibido sumas que le remitía Piedrahita, no para pagar el arrendamiento de la renta mencionada y devolver el resto, sino como socio administrador de una Compañía en que Piedrahita tenía sólo algunas acciones, y negado así el hecho de donde se desprende la obligación que sostiene el actor, ha debido éste acreditar que los hechos pasaron como él los afirma y no como lo dice el demandado.

Por otra parte, es muy verosímil que las cosas hayan sucedido como lo afirma el demandante, pues no es de suponerse que para pagar el valor del arrendamiento de la renta de El-Carmen, que sólo ascendía en el cuatrienio á cinco mil setecientos treinta pesos cuarenta y dos y medio centavos ($ 5,730-42½), se remitiesen una suma casi doble, sólo para tranquilizar á los fiadores, y que perteneciendo el saldo á una sucesión pobre no se acordasen de reclamarlo sino cuando se les exigió la pérdida habida en otras rentas.

En la cuenta que figura al folio 70 del cuaderno de pruebas de Piedrahita, documento aceptado por éste al presentarlo en juicio, se expresa que el saldo *á favor de la Sociedad* es de cuatro mil doscientos sesenta y seis pesos quince centavos ($ 4,266-15), y si se acepta este saldo por el que lo reclama para sí y no lo objetó cuando le fué pasado, es forzoso que se reconozca también que ese saldo es de una *Sociedad*, y que no tiene derecho para reclamarlo como propio, si por otros medios no acredita que le pertenece.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara fundado el recurso de casación interpuesto por Eduardo Uribe U. & Compañía contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia en doce de Agosto de mil ochocientos noventa y dos, en la parte en que esa sentencia resuelve que la casa citada de Eduardo Uribe U. & Compañía debe á la sucesión de Emiliano Piedrahita la suma de tres mil seiscientos sesenta y ocho pesos cuarenta centavos ($ 3,668-40) y condena á la misma casa á pagarla dentro de los seis días siguientes á la notificación de dicha sentencia; y en consecuencia, la anula en la parte que acaba de expresarse.

Declara, asimismo, que no ha lugar á infirmar la sentencia acusada en cuanto confirma la de primera instancia, en la parte en que absuelve á la sucesión de Emiliano Piedrahita del cargo que se le hizo por Eduardo Uribe U. & Compañía en la demanda principal.

Absuélvese á la Sociedad de Eduardo Uribe U. & Compañía del cargo contenido en la demanda de reconvención.

No se hace condenación en costas.

Publíquese esta sentencia, notifíquese á las partes, déjese copia de ella, insértese la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente al Tribunal de su origen.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ABRAHAM FELNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO.— *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, once de Julio de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Manuel Ruiz, vecino del Municipio de La-Victoria, Departamento del Cauca, demanda, por conducto de su apoderado Carlos N. Rosales, recompensa militar, por causa de invalidez adquirida en la guerra de mil ochocientos setenta y seis.

Ha justificado con declaracianes de cuatro testigos hábiles que presenciaron los hechos y que fueron recibidas con las formalidades prevenidas por la ley, que en la batalla de Los-

Chancos, verificada el treinta y uno de Agosto de mil ochocientos setenta y seis, siendo Ruiz soldado raso, y sirviendo á la causa de la revolución, que sostenía principios idénticos á los que informan las actuales instituciones, recibió en la cara una herida de bala, que le produjo la invalidez de que actualmente padece.

Ante el Prefecto de la Provincia del Quindío fué reconocido Ruiz por los profesores de medicina Joaquín E. Botero, José Ignacio Durán y Federico Byrne, quienes expusieron: "que le encontraron dos cicatrices de herida de arma de fuego: una de entrada debajo del hueso molar, afuera de la fosa canina, y otra de salida hacia atrás de la rama ascendente del maxilar inferior; que el proyectil interesó la piel, músculo macetero, la rama ascendente del maxilar inferior que desapareció junto con la glándula parótida por el proceso inflamatorio consiguiente á la herida. Que dicha herida produjo lesiones del nervio facial y ramas del nervio trigemelo, determinando las lesiones tróficas siguientes en la mitad derecha de la cara; en el ojo, lagoftalmos y conjuntivitis crónica consecutiva; en el oído, notable disminución de las funciones auditivas; en la nariz, sequedad y casi obstrucción, y en la articulación temporo-maxilar, que fué destruída, la producción de una seudasteosis que la reemplaza imperfectamente. Que la Junta lo declara con inutilidad absoluta, porque, según lo expuesto, una herida grave en el rostro, ha dejado lesiones definitivas en órganos tan interesantes como el ojo, el oído y la nariz."

Con certificación del Ministerio del Tesoro, se ha justificado que Ruiz no ha recibido recompensa del Tesoro nacional, porque aunque consta que Manuel Dolores Ruiz, soldado del *Batallón* 5.° *de Cali*, recibe una pensión de diez pesos, por haber comprobado su invalidez á causa de heridas recibidas el treinta y uno de Agosto de mil ochocientos setenta y seis, en la acción de Los-Chancos, declarada desde mil ochocientos setenta y siete, éste último no es el mismo que reclama recompensa ahora, ya por la diferencia que se nota en el nombre, ya porque el uno pertenecía al *Batallón* 5.° *de Cali* y el otro á un Batallón formado de vecinos de Cartago, ya, en fin, porque antes de expedirse la Ley 84 de 1890, no había reconocido derecho á recompensa á los que habían combatido contra el Gobierno.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador y en conformidad con lo que disponen los artículos 1.°, 5.°, 9.°, 11 y 15 de la Ley 84 de 1890, declara que Manuel Ruiz, vecino de La-Victoria, en el Departamento del Cauca, tiene derecho á una recompensa unitaria de setecientos cuatro pesos ($ 704), por inutilidad absoluta contraída por una herida que recibió en la batalla de Los-Chancos en treinta y uno de Agosto de mil ochocientos setenta y seis, defendiendo como soldado los principios que informan las actuales instituciones.

Déjese copia de este fallo, publíquese en la *Gaceta Judicial*, comuníquese al Ministerio del Tesoro y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza. — Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Abraham Fernández de Soto.—Aníbal Galindo. — Jesús María Quintero P. — *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, once de Julio de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: José María Calderón, vecino de esta ciudad, en su carácter de cesionario del crédito que Luis Escobar C., cree tener contra la Nación por suministros, empréstitos y expropiaciones, hechos en la guerra civil de mil ochocientos ochenta y cuatro á mil ochocientos ochenta y cinco, según se acredita con el documento privado otorgado en Cali (Departamento del Cauca), el diez de Diciembre de mil ochocientos ochenta y siete, firmado por el endosante y autorizado por dos testigos, que se exhibe al folio 1.° de este expediente, ocurrió ante la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, demandando para sí el reconocimiento de la cantidad de doscientos diez y siete pesos ($ 217), á que asciende el valor de los suministros y expropiaciones, que asegura se le hicieron á su cedente en la guerra de que se ha hablado.

Surtida la tramitación del caso, la Comisión dictó, bajo el número 1,533, la resolución de fecha veintiuno de Octubre de mil ochocientos ochenta y nueve, por la cual reconoció á cargo del Tesoro de la República y á favor del precitado José María Calderón, la cantidad á que se hace subir la reclamación.

El expediente pasó al Ministerio del Tesoro, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.° de la Ley 44 de 1886 (3 de Noviembre), y allí se revocó la mencionada resolución de la Comisión.

De esta nueva resolución apeló para ante esta Superioridad la parte agraviada; y como el recurso ha sufrido yá en la instancia de revisión la tramitación que le corresponde, atendidas su clase y naturaleza, es llegado el caso de determinarlo; y á ello se procede, mediante las consideraciones siguientes.

Pero antes de entrar en materia, bien será observar que el crédito en referencia fué á su vez cedido por Calderón á Rafael Ruiz L., quien á su turno lo endosó á favor de César Sánchez N.

La reclamación de que se trata se sustenta en las siguientes pruebas:

a) En dos certificaciones ó atestaciones expedidas por el señor Gobernador del Departamento del Cauca, de fecha quince de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, distinguidas con los números 178 y 179, las cuales se hallan debidamente legalizadas;

b) En la copia de la partida número 2.° en que se hizo constar ante el Alcalde del Municipio de Cali lo siguiente: que el Gobierno constitucional, en la guerra intestina de mil ochocientos ochenta y cuatro á mil ochocientos ochenta y cinco, ocupó por medio de sus agentes una dehesa de propiedad de Luis Escobar C., ubicada á inmediaciones de la ciudad de Cali en el sitio denominado "La-Sardinera;" que estuvo al servicio del Gobierno por el término de cinco meses; que en ella se mantuvo el ganado gordo que se destinaba para el abasto público; que para poderla utilizar hubo necesidad de ponerla en comunicación con otra dehesa de Juan Antonio García, para lo cual se rompieron las cercas medianeras; y que el daño que se dice sufrió Escobar C., á consecuencia de la ocupación del inmueble, lo estimaron los testigos juramentados, Salvador Manzano y Salvador Sánchez, en cien pesos ($ 100);

c) En el cheque número 253 girado por el Jefe municipal de Cali contra el Banco del Cauca y á favor del preindicado Luis Escobar C., por la cantidad de ciento diez y siete pesos ($ 117), el cual está protestado por no haberse presentado oportunamente para su pago, según aparece de la nota trasversal que en él se halla, y en que dice la persona que la autoriza, que cuando se exhibió el cheque para su conversión yá estaba cerrada la cuenta corriente que el Gobierno tenía en el Banco, y

d) En las declaraciones de los testigos Rodolfo Ibarra, Martiniano Caicedo A., Aquilino Aparicio, Alejandro Vallecilla, Juan Umaña y Víctor Montaño, las cuales se recibieron ante el Juez del Circuito de Cali con asistencia del respectivo Agente del Ministerio Público, y á virtud del auto acordado por la Corte para mejor proveer.

El señor Ministro del Tesoro, de acuerdo con el concepto del Fiscal especial de la Comisión de empréstitos, suministros y expropiaciones, negó la reclamación que se examina, fundado en que el Gobierno no está obligado á pagar, conforme á las leyes que rigen sobre la materia, cantidad alguna proveniente de daños y perjuicios, y en que un cheque no puede ser convertido en una certificación.

La Corte estima que la reclamación de Escobar C. se halla satisfactoriamente comprobada con las pruebas relacionadas, pues los documentos presentados se encuentran comprendidos entre los de que habla el ordinal 2.° del artículo 2.° de la Ley 44 de 1886, y además, están debidamente autenticados. Mas suponiendo, en gracia de discusión, que estos documentos no fuesen prueba bastante para acreditar los hechos que deben establecerse, aun así se llegaría á la misma conclusión,

porque, por medio de los testimonios de que queda hecha mención atrás, se justifica plenamente el derecho que hace valer Escobar C., de acuerdo con lo estatuído en el ordinal 3.° del artículo 2.° de la memorada Ley 44 de 1886; testimonios que merecen entera fe, por reunir todos los requisitos que la ley exige.

Cuanto á la observación que hace el señor Ministro de que Escobar C. no tiene derecho á reclamar daños y perjuicios por la ocupación de la dehesa de su propiedad, fundado en el espíritu que informa las leyes sobre empréstitos, suministros y expropiaciones, cabe tener en cuenta que propiamente no son daños y perjuicios los que exige el reclamante, sino el precio de un suministro por el uso y goce que hizo el Gobierno del inmueble, como lo tiene yá resuelto la Corte en casos idénticos á éste.

Ahora, por lo que hace al cheque, si la observación del señor Ministro y del Fiscal tuvo en su principio razón de ser, puesto que en él no se expresaba la procedencia del crédito, cosa que no se estila en documentos de esta naturaleza, al presente no tiene valor alguno, porque por medio de las deposiciones de tres testigos contestes y mayores de toda excepción, entre los cuales figura nada menos que Aquilino Aparicio, el mismo que, en su carácter de Jefe municipal de Cali, expidió el cheque, se ha demostrado que el valor de éste provenía de cinco novillos que suministró al Gobierno Luis Escobar C., y que para pagárselos se giró contra el Banco del Cauca el cheque de que se ha hablado, el cual se protestó por falta de aceptación.

De todo lo expuesto se deduce que el crédito, materia de esta reclamación, se halla debidamente comprobado, no sólo por medio de documentos auténticos, sino también por declaraciones de testigos idóneos, y que, por lo mismo, debe reconocerse.

Estando en curso la reclamación de que se viene hablando, se envió á esta Superioridad por la Comisión de empréstitos, suministros y expropiaciones, otro expediente señalado con el número 4,175, que ha creado el mismo Luis Escobar C., con el fin de que se le reconozca otro crédito de la misma naturaleza por valor de cien pesos ($ 100), proveniente de un caballo que suministró para el servicio de las fuerzas del Gobierno; pero como acerca de esta reclamación se observa que no sólo no se ha dictado aún la resolución que corresponde á la Comisión, sino que no está concluída la sustanciación que previene la ley, la Corte no ha adquirido jurisdicción para resolver nada acerca de ella, pues de lo contrario se avocaría el conocimiento de un negocio que no ha sido apelado ni consultado y pretermitiría una instancia.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca la resolución apelada, y en consecuencia, resuelve: Primero. Reconócese á favor de César Sánchez N., último cesionario, y á cargo del Tesoro de la República la cantidad de doscientos diez y siete pesos ($ 217), valor de las dos certificaciones números 178 y 179, y segundo: devuélvase el expediente á la Comisión para lo de su cargo, y para que respecto del expediente número 4,175, se le dé el curso legal.

Notifíquese, cópiese, publíquese.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO.—JESÚS M. QUINTERO P.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Julio once de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: En ejercicio de la jurisdicción coactiva que confiere la ley á los Recaudadores de rentas públicas, libró el Tesorero municipal del Distrito de La-Vega, en la Provincia de Facatativá, ejecución contra Eusebio Vejarano y Samuel Flórez, por cincuenta y seis pesos ($ 56) contra el primero, y cinco pesos ($ 5) contra el segundo, á que, respectivamente, fueron condenados por vía de multa, como contraventores de la Ley 7.ª de 1888, sobre elecciones populares, según aviso que dió al empleado ejecutor el Alcalde del mismo Distrito, en notas oficiales números 64, 65 y 74 del mes de Mayo del año próximo pasado. El mandamiento ejecutivo se notificó únicamente á Vejarano, y éste interpuso el recurso de apelación para ante el Prefecto de la Provincia expresada, quien devolvió los autos al Tesorero, por haberse creído incompetente para intervenir en el asunto, y pasados al Juez del Circuito para que conociese de la alzada, se abstuvo, á su vez, de revisar la providencia recurrida, porque dijo que esa era atribución del Tribunal del Distrito Judicial, en donde tampoco se dió vado al negocio, por idéntica razón, y por suponerse que corresponde á la Corte su conocimiento, con arreglo al ordinal 6.°, artículo 43 de la Ley 147 de 1888.

Después de surtida la tramitación que el asunto comporta y de oír el dictamen del señor Procurador general, que niega la jurisdicción á la Corte, se procede á resolver lo que sea legal.

Aunque es cierto que las multas que se imponen de conformidad con las disposiciones del Código Electoral deben ingresar al Tesoro de la Nación, en consonancia con lo estatuído en el artículo 193 de allí, también lo es que esas multas se convierten en arresto cuando el penado no las paga oportunamente, por precepto terminante del artículo 192 de dicho Código. En consecuencia, no era el caso de cobrarlas ejecutivamente sino de hacer la conversión aludida, para lo cual debió adoptarse otro procedimiento distinto del que determina la sección 2.ª, título XI, capítulo I, libro II del Código Judicial.

Pero hay todavía más, y es que, librada la ejecución por un Tesorero municipal y no por un Recaudador de rentas públicas nacionales, no tiene cabida la facultad á que se refiere el ordinal 6.°, artículo 43 de la ley primeramente citada.

Por lo tanto, la Corte, de acuerdo con el parecer del señor Procurador general, se declara incompetente para conocer del recurso interpuesto, y dispone que se devuelva el expediente á la Oficina de su origen, para que se le dé el curso legal.

Notifíquese, cópiese en el libro respectivo y publíquese en la *Gaceta Judicial*.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO.—JESÚS M. QUINTERO P.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Julio once de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: El Juez 3.° del Circuito de Sugamuxi consulta con la Corte, el auto que pronunció en diez y siete de Marzo último, por medio del cual decretó el desahucio de una casa que el Administrador subalterno de Correos nacionales había tomado en arrendamiento, sin término fijo, á Jesús Avella para el servicio de la respectiva Oficina, y según consta en contrato que se halla publicado en el *Diario Oficial* número 8,547.

Dicho auto fué dictado en virtud de que habiéndose corrido traslado de la respectiva demanda intentada por el dueño de la casa al respectivo Agente del Ministerio Público, éste manifestó que convenía en el desahucio, y como no habiéndose fijado término para la duración del expresado arrendamiento, éste puede cesar cuando el dueño lo pida, sin más requisito que el del desahucio, según los artículos 2009 y 2034 del Código Civil, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el parecer del señor Procurador, confirma el auto consultado.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO.—JESÚS M. QUINTERO P.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

IMPRENTA DE ANTONIO M. SILVESTRE.

REPÚBLICA DE COLOMBIA.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AÑO VIII | Bogotá, 11 de Agosto de 1893. | NÚM. 408.

CONTENIDO.

Págs.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Reconócese á Gabino Cote un crédito procedente de expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas)..... 353
Revócase la sentencia pronunciada por el Tribunal de Cundinamarca en el juicio seguido por Pablo Bermúdez contra el Tesoro nacional, sobre derecho al pago de unas pensiones. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas)..... 354
Reconócese, en parte, á Francisco Groot, como cesionario de Domingo Forero y otros un crédito, procedente de expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Jesús María Quintero P.)..... 354
Niégase á Manuel A. Valencia, como cesionario de varios individuos, un crédito, procedente de suministros. (Magistrado ponente, doctor Fernández de Soto)..... 355
Concédese á María López una recompensa. Magistrado ponente, doctor Casas Rojas)..... 355
Niégase á Dolores Gamero una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Isaza)..... 357
Niégase al General Francisco de P. Santander una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Joaquín Martínez E.)..... 358
Reconócese á Urbano Salgado un crédito, procedente de expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Pombo)..... 361

NEGOCIOS CRIMINALES.

Confírmase la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior de Tundama en el proceso formado contra Juan B. Ortiz y Cifuentes, Juez 2.º del Circuito del Norte, por falta de asistencia al Despacho. (Magistrado ponente, doctor Jesús María Quintero P.)..... 359

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Impruébase el dictamen pericial sobre tasación de costas en el recurso de casación interpuesto en el juicio de concurso de acreedores formado á los bienes de Jesús María Ramírez. (Magistrado ponente, doctor Jesús María Quintero P.)..... 360

GACETA JUDICIAL.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Julio once de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: La Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, por medio de resolución número 1,316, de fecha veintidós de Julio de mil ochocientos ochenta y nueve, negó á Gabino Cote el reconocimiento de quinientos pesos ($ 500) que reclamaba por valor de cinco mulas que le expropiaron las fuerzas del Gobierno, en la guerra que empezó el año de mil ochocientos ochenta y cuatro. Fundóse dicha resolución en que el reclamante no había llenado el requisito que exige el artículo 16 de la Ley 44 de 1886, es decir, que no había presentado á la primera autoridad política del respectivo Departamento, la relación jurada prevenida por tal disposición legal.

Habiendo el apoderado José Joaquín Rico G., pedido después, el diez y ocho de Febrero de mil ochocientos noventa y uno, la reconsideración de aquella resolución y acompañado la diligencia del juramento rendido por el mismo Cote, ante el Juez del Circuito de Pamplona, el diez y siete de Septiembre de mil ochocientos ochenta y nueve, la Comisión dispuso que se librase despacho al expresado Juez del Circuito de Pamplona, para que en vista de la relación que corre al folio siete y que fué presentada al Jefe civil y militar de Santander, en Marzo de mil ochocientos ochenta y seis, recibiese juramento á Gabino Cote para que dijera si era verdad el contenido de tal relación. Libróse, en efecto, el despacho y se diligenció en primero de Agosto de mil ochocientos noventa y dos, habiendo el interesado rendido nuevo juramento y expuesto que era cierto lo afirmado en la relación.

En virtud de esto la Comisión pronunció, bajo el número 2,573, el día cinco de Octubre mil ochocientos noventa y dos, una nueva resolución en que declara que habiéndose llenado la formalidad del juramento cuya omisión había determinado la anterior, reconoce á favor del reclamante la suma pedida de los quinientos pesos; pero el Ministerio del Tesoro revocó en nueve de Noviembre de aquel año, bajo el número 3,331 este reconocimiento y absolvió á la Nación, fundándose para ello en que no satisfacían, por razón de su vaguedad, las declaraciones de testigos con que se había pretendido probar la exacción que servía de fundamento á la reclamación.

Apelada la resolución del Ministerio, ha venido el expediente á la Corte, quien para decidirla debe examinar la prueba aducida y poner en claro si reúne ó no las condiciones legales necesarias para su admisión como plena.

Ramón Romero, Amadeo Galvis J. y Secundino Bautista son testigos idóneos, según lo certifican el Juez y el Fiscal del Circuito de Pamplona, y en declaraciones rendidas ante estos dos funcionarios están acordes en afirmar que vieron en el punto de "El-Mortiño," que la División que por allí pasaba á órdenes del General Montúfar, llevaba cinco mulas de propiedad de Gabino Cote, y que valían á cien pesos cada una. Esto queda establecido como hecho cierto, de conformidad con el inciso 3.º del artículo 2.º de la Ley 84 de 1886.

Para asegurar su fallo la Corte dispuso en auto para mejor proveer, de fecha cuatro de Mayo último, librar despacho al señor General Manuel D. Montúfar, para que como Comandante general de la primera División del Ejército, certificara sobre los hechos que le constaran con respecto á la presente reclamación, y en efecto él ha certificado en la forma siguiente:

"Yo, Manuel D. Montúfar, General de División, Comandante General de la 1.ª División del Ejército, en obedecimiento á lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia, en el auto que antecede y en vista de la relación inserta,

"CERTIFICO:

"Es cierto y me consta que, del diez al once de Diciembre de mil ochocientos ochenta y cuatro, en un punto del páramo de Juan Rodríguez, denominado 'Cruz de Piedra,' en jurisdicción de Silos, se tomaron unas pocas bestias mulares, para servirlas en la movilización de las fuerzas nacionales que entonces estuvieron á mis órdenes y que componían la 2.ª División del Ejército, las cuales bestias no volvieron á poder de su dueño, por haber continuado en servicio del Gobierno; y creo muy probable,—aunque no se diera el recibo del caso, por el sitio en que fueron tomadas,—que ellas pueden ser de las que reclama el señor Gabino Cote, tanto por su corto número y por la información de testigos á que alude la relación citada, como por el moderado avalúo de los

peritos, pues bien sabido es que en Santander las mulas en todo tiempo son muy apreciadas y más caras que en cualquier otro Departamento.

"Lo que certifico como resultado de lejanas reminiscencias y de consultas hechas por mí á personas ausentes que fueron mis Ayudantes en aquella época.

"Bogotá, Julio cuatro de mil ochocientos noventa y tres.

"*M. D. Montúfar.*"

Como se ve, este certificado corrobora la prueba en que la reclamación se apoya.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca la resolución apelada y reconoce á cargo del Tesoro público y á favor de Gabino Cote, la suma de quinientos pesos ($ 500), valor de cinco mulas que le fueron expropiadas en la guerra de mil ochocientos ochenta y cuatro, por las fuerzas del Ejército nacional que hicieron campaña en el Norte, á órdenes del General Manuel D. Montúfar.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO.—JESÚS M. QUINTERO P.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Julio once de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: En representación de Pablo Bermúdez, Oficial inválido del Ejército de la República, propuso Gonzalo Arroyo, en diez y siete de Agosto de 1892, ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, demanda civil ordinaria contra el Tesoro nacional, para que se reconociese á su poderdante el derecho al pago de la suma de cinco mil setecientos cincuenta y seis pesos cuarenta centavos ($ 5,756-40), valor de las pensiones que devengó como Teniente de la Guardia colombiana, en diez y ocho años, á razón de $ 26-65 mensuales que corresponden al sueldo de ese empleo militar. El fundamento de esta demanda estriba principalmente "en que Bermúdez capitalizó las pensiones de que gozaba por invalidez desde el 1.° de Septiembre de 1865 y las descapitalizó en 1.° de Septiembre de 1883, en virtud de la facultad que les concedió á él y á su hermano Práxedes, la Ley 20 de 5 de Junio del año últimamente citado, de acuerdo con la cual hizo el reintegro de la cantidad de $ 6,838 en bonos flotantes del 3 por 100 que se cotizaban al 13 por 100, en el año de la capitalización, según lo certifica el señor Ministro del Tesoro.

Surtido el juicio en la forma legal, con intervención del agente respectivo del Ministerio Público, se desató la controversia en 1.ª instancia por la sentencia de 27 de Enero del año en curso (fojas 20 á 22 del cuaderno número 1.°), en la que el Tribunal absuelve á la Nación del cargo deducido en la demanda y declara, al propio tiempo, que no habiéndose probado la acción no hay lugar á resolver sobre la excepción de petición antes de tiempo ó de un modo indebido propuesta por el Fiscal. El actor interpuso oportunamente el recurso de apelación contra el fallo aludido, y por concesión de él se remitieron los autos á la Corte, en donde se ha dado al asunto la tramitación que le es propia, y se procede á resolver lo conveniente.

La Ley 20 de que se hizo mérito enantes, estatuyó lo siguiente en sus artículos 1.°, 2.° y 3.°:

"Art. 1.° Se reconoce á los señores Pablo y Práxedes Bermúdez, militares inválidos de la Guardia colombiana, el derecho de descapitalizar las pensiones que habían capitalizado en 1865, reintegrando al Tesoro los bonos flotantes del 3 por 100 que recibieron. El Poder Ejecutivo queda autorizado para convenir con los expresados señores Bermúdez en el modo, tiempo y especie de verificarles el pago, teniendo en cuenta el valor que tenían los bonos flotantes en la época de la capitalización.

"Art. 2.° Desde 1.° de Septiembre próximo el Coronel Pablo y el Teniente-Coronel Práxedes Bermúdez, inválidos de la Guardia colombiana, disfrutarán de las pensiones que antes tenían asignadas.

"Art. 3.° La cantidad que se estime necesaria para dar cumplimiento al artículo 1.° de esta ley, se incluirá en el Presupuesto de Gastos de 1883 á 1884."

Basta parar mientes en las disposiciones transcritas y en el preámbulo de la ley que las contiene, para comprender, sin mayor esfuerzo, que ella no tuvo más objeto que autorizar la descapitalización de las pensiones de los dos militares á que se refiere, ordenar el pago de las devengadas durante el tiempo de la capitalización y reconocerles el derecho de seguir percibiendo lo que se les había asignado; y al efecto, de acuerdo con el artículo 1.° se votó en el Presupuesto de Gastos correspondiente á la vigencia económica de 1883 á 1884 la partida de $ 13,673-80 (Capítulo 69, Departamento de la Deuda nacional, página 52, de la 1.ª liquidación general de dicho Presupuesto).

No debió, pues, inmiscuírse el Poder Judicial en este negocio en que se trata de la aplicación de una ley especialísima que confiere facultades claras y terminantes al Poder Ejecutivo, y según la cual está reservada á éste la resolución admidistrativa de la reclamación de los señores Bermúdez. El Tribunal estaba en el caso de reconocerse incompetente por no tratarse de una controversia suscitada sobre algún derecho litigioso, tanto más cuanto yá la Corte había decidido un negocio análogo, el referente al "Teatro Maldonado," en que se abstuvo de fallar el pleito por idénticas ó semejantes razones á las que aquí militan.

En una palabra, no siendo contencioso el derecho del demandante á ser cubierto de lo que la citada ley le reconoce, y debiendo efectuarse el pago en consonancia con lo que ella establece, mal puede sustraerse de la vía gubernativa el asunto á que se contrae esta demanda. Huelga el razonamiento de que las resoluciones que acuerda la administración nada prejuzgan; y por lo mismo no puede prescindirse de aquella vía para ejercitar ante el Poder Judicial derechos que el Gobierno no ha negado y que no podía negar, toda vez que no han sido materia de gestión administrativa.

Por los anteriores fundamentos, la Corte Suprema, apartándose del concepto del señor Procurador, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca la sentencia apelada y declara que no es el caso de que el Poder Judicial decida en el juicio intentado por Gonzalo Arroyo, en representación de Pablo Bermúdez, sobre pago de pensiones, y que sólo toca al Poder Ejecutivo darle cumplimiento á la Ley 20 de 1883.

Notifíquese, cópiese en el libro respectivo, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS. M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO.—JESÚS MARÍA QUINTERO P. *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, catorce de Julio de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Francisco Groot, en nombre propio y en su carácter de mandatario de algunas personas, según lo afirma, elevó al conocimiento del señor Ministro del Tesoro, un memorial fechado en esta ciudad el veintisiete de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis, en que pide se reconozca á cargo del Tesoro nacional un crédito por valor de setecientos veintiséis pesos ochenta centavos ($ 726-80), proveniente de suministros, empréstitos y expropiaciones causados en la guerra civil de 1884 y 1885, y se expida á su favor la orden de pago correspondiente.

La cantidad reclamada se descompone así:

Seiscientos diez y seis pesos, valor de seis mulas, que se dice suministró Domingo Forero, á razón de cien pesos ($ 100) cada una..... $ 600 ...

Diez y seis pesos que afirma el mismo reclamante pagó el prenombrado Domingo Forero por los herederos de Tibagota..... 16 ...

Cincuenta pesos que, según la aseveración del mismo Groot, consiguó Timoteo Gutiérrez N. por el empréstito forzoso que se le asignó..... 50 ...

Diez pesos ochenta centavos que, por la causa

acabada de expresar, pagó Pedro Benítez al Administrador de Hacienda de Zipaquirá..... 10-80

Y cincuenta pesos que consignó el reclamante como parte del empréstito fozoso que se le asignó en el antiguo Departamento de Tequendama..... 50 ...

Suma.....$ 726-80

Esta misma relación se hace en el memorial que se exhibe al folio 13 de este expediente, por el cual se solicita del señor Gobernador del Departamento de Cundinamarca la conversión de los recibos expedidos á favor de los interesados, por las certificaciones de que habla el artículo 3.° del Decreto número 102 de 1886.

A la solicitud de Groot se le dió curso en la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, en donde, previa la tramitación legal del caso, se dictó, bajo el número 407, la resolución de fecha treinta y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta y nueve, cuya parte dispositiva está concebida así: "Por las razones expuestas, no se reconocen las cantidades reclamadas."

Consultada esta resolución con el señor Ministro del Tesoro, fué confirmada por la correspondiente al trece de Septiembre del mismo año, señalada con el número 782.

La parte desfavorecida se alzó de esta resolución para ante la Corte, y como del proceso aparece que el recurso ha sido debidamente sustanciado en la instancia de revisión, se procede á determinarlo, previas las consideraciones siguientes:

La reclamación de que se trata, se apoya principalmente en los documentos que se enumeran en seguida:

a) En tres certificaciones expedidas por el señor Secretario de Gobierno del Departamento de Cundinamarca, de fecha trece de Junio y veintinueve de Julio de mil ochocientos ochenta y ocho, distinguidas con los números 686, 711 y 713, respectivamente.

b) En una carta dirigida por el susodicho Francisco Groot á su hermano Mariano, en que le dice entregue á Roberto Alvarez, ó á su orden, la suma de cincuenta pesos ($ 50) que se le asignó como parte del empréstito forzoso que se repartió en el Distrito municipal de Nilo. Esta cantidad se pagó al Capitán José Antonio Caicedo, según aparece del recibo que éste expidió el treinta de Marzo de mil ochocientos ochenta y cinco, y

c) En cuatro recibos expedidos por Vicente Aldana, en su calidad de Comandante general de la 2.ª División de Cundinamarca, por Olegario Martínez, como Recaudador de Hacienda del Municipio de Subachoque, por Julio L. Herrera, en su carácter de Recaudador Fiscal del empréstito decretado por el señor Gobernador de Cundinamarca y por Demetrio Vélez, como Administrador de Hacienda del antiguo Departamento de Zipaquirá.

Examinados estos comprobantes y consultadas las disposiciones legales aplicables al caso, la Corte está enteramente de acuerdo con el concepto que sobre el particular han emitido yá las autoridades que han tenido que ver en el asunto respecto de los tres primeros créditos que se relacionan en el escrito de demanda que Groot dirigió al señor Ministro del Tesoro, porque efectivamente aparece que son exactas las afirmaciones que se hacen, así en las resoluciones dictadas como en las vistas que ha dado el Fiscal especial de la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, como se demostrará en el análisis siguiente:

Traídos á la vista los antecedentes que sirvieron para expedir la certificación número 686, se nota que el recibo que figura al folio 12 de este expdiente, lo dió Vicente Aldana, titulándose Comandante general de la 2.ª División del Ejército de Cundinamarca, y esto no es exacto, porque á la época en que lo expidió no estaba investido de tal carácter, como que fué en diez y siete de Diciembre de mil ochocientos ochenta y cinco cuando se le hizo tal nombramiento, según lo que se afirma en la resolución de la Comisión; y si bien es cierto que lo allí afirmado no está de acuerdo con la certificación del señor Secretario de Gobierno del Departamento de Cundinamarca, que se halla al pie de dicho recibo, en que se dice que Aldana desempeñaba el diez y ocho de Abril de mil ochocientos ochenta y cinco, las funciones de Comandante general, la Corte, á pesar de esta contradicción, se atiene más bien á lo aseverado por la Comisión que al dicho, por cierto muy respetable, del señor Secretario, por la razón de que en la resolución de aquélla se habla de una manera precisa de la fecha en que se dice se hizo el nombramiento del Comandante general á Vicente Aldana, lo que demuestra, á no dejar duda, que la Comisión estaba en posesión de datos que quizá no los tuvo en cuenta el señor Secretario al expedir la certificación de que se ha hablado. También milita en favor del anterior aserto la razón de que no está autenticada la firma que aparece puesta al pie de la tantas veces mencionada certificación.

Además, suponiendo, por vía de discusión, que en la fecha en que se expidió el recibo hubiera tenido realmente Vicente Aldana el carácter de Comandante general de la 2.ª División del Ejército de Cundinamarca, así y todo, no estaría acreditado el crédito que se registró y anotó por valor del suministro de seis mulas que se dice hizo Domingo Forero, porque conforme al ordinal 2.° del artículo 2.° de la Ley 44 de 1886, los Comandantes generales no estaban facultados para expedir recibos de esta naturaleza, sino en el caso de que no hubiese Intendente de Hacienda ó de Guerra, ó comisionados especiales, y no se ha comprobado este hecho.

Tampoco se pueden reconocer los créditos que se hicieron constar en las certificaciones números 711 y 713, por cuanto las sumas de los valores que en ella se expresan, no concuerdan de ningún modo ni con las cantidades de que hablan los recibos de que queda hecha mención, ni con la relación de créditos que hace el reclamante Francisco Groot, pues sumadas las partidas parciales que allí figuran, no dan el total que se hizo constar en dichas certificaciones.

De otro lado, aparece que Groot no tiene poder para reclamar los créditos correspondientes á Pedro Benítez y á los herederos de Tibagota, los cuales, aun dando por sentado que aquél tuviese facultad legal para representar á éstos, no podían ser reconocidos por la circunstancia de no haberse cambiado los recibos que se expidieron directamente á favor de los interesados por las certificaciones de que habla el artículo 3.° del Decreto número 102 de 1886.

Respecto del crédito de cincuenta pesos ($ 50), cabe observar lo siguiente: que realmente Francisco Groot hizo, por medio de su hermano, la consignación de esta suma en manos del Capitán José Antonio Caicedo, á quien endosó el crédito por el General Lucio C. Moreno, quien, en la fecha expresada ejercía las funciones de Comandante general de las fuerzas que se hallaban acantonadas en el antiguo Departamento de Tequendama al servicio del Gobierno legítimo, y que en dichas fuerzas no había Intendente ni comisionado especial para decretar y recibir empréstitos, según aparece del certificado expedido por el Subsecretario del Ministerio de la Guerra. Ahora, si esto es así, como evidentemente lo es, no puede ponerse en duda el perfecto derecho que asiste á Groot para reclamar este crédito, porque, como se ve, se halla justificado por un recibo expedido por autoridad competente, y que no era necesario convertir en certificación, por cuanto fué expedido directamente por un empleado de la Nación.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: primero, reconócese á cargo del Tesoro y á favor de Francisco Groot, la cantidad de cincuenta pesos ($ 50), que reclama por valor del empréstito forzoso que se le asignó y que pagó, según consta del recibo que obra en este expediente, y segundo, absuélvase á la Nación de los demás cargos que se formulan contra ella en la demanda de Groot. Queda, en estos términos, reformada la resolución apelada.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—JOAQUÍN MARTÍNEZ E.—JESÚS MARÍA QUINTERO P. *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Julio catorce de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: En nombre de Manuel J. Álvarez C., cesionario

de varios individuos, presentó Manuel A. Valencia en veintiocho de Diciembre de mil ochocientos ochenta y siete, á la Comisión de suministros, una relación y setenta y nueve recibos referentes á los empréstitos que los causahabientes de Álvarez C. hicieron para los gastos de la última guerra, por valor de tres mil cuatrocientos noventa y tres pesos setenta centavos ($ 3,493-70); y aunque no se exhibió poder alguno para legitimar la personería de Valencia, la reclamación de la suma expresada aparece promovida desde esa fecha. Más tarde se acreditó Andrés Lara, como apoderado del referido Álvarez C. y pidió á la Comisión que remitiera el expediente al Gobernador de Antioquia, para efectuar el cambio de los recibos por la certificación de que trata el Decreto número 102 de 1886; pero la atestación no llegó á expedirse por carencia de datos acerca de la certidumbre de la efectividad de los empréstitos, según lo afirma el mismo Gobernador á la vuelta del folio 106.

Por falta de este requisito indispensable y previo el dictamen del Fiscal especial, adverso al reclamante, dictó la Comisión administrativa la resolución número 4,066, de 3 de Octubre del año próximo pasado, por la cual niega el reconocimiento de la suma demandada. A su vez el señor Ministro del Tesoro, á quien se pasó el expediente, ratificó aquella resolución por la número 3,327, de nueve de Noviembre del año en referencia.

Notificada esta última al representante del interesado, interpuso apelación para ante la Corte, en donde se ha preparado debidamente la instancia y se procede á proferir el fallo correspondiente.

Con el objeto de suplir los documentos de que trata el ordinal 2.° del artículo 2.° de la Ley 44 de 1886, que no pudieron cambiarse oportunamente, ordenó esta Superioridad, por auto para mejor proveer, de veintisiete de Enero del año en curso, que se acreditase cada hecho con tres declaraciones de testigos idóneos y contestes, que dieran razón de su dicho y fueran examinados en presencia del Fiscal del Circuito de Medellín. Mas nada de esto se obtuvo, porque el demandante no ha podido conseguir el número de testigos exigido á causa, dice, de que en el trascurso de tiempo de ocho años, es difícil que haya quien precise los hechos; y en cambio, acompaña una certificación del señor Gobernador de Antioquia, fechada el diez de Junio último, en que ese funcionario manifiesta: "que todos los documentos que hacen parte de este expediente son corrientes, y por consiguiente, efectivos los suministros, empréstitos ó expropiaciones á que ellos se refieren."

Subsiste, pues, el fundamento en que se apoyó la resolución apelada, ó sea el de que la ley no concede á los recibos que sustentan esta reclamación fuerza probatoria suficiente para el reconocimiento de tales créditos, sino á la certificación que se hubiere expedido en cambio de ellos, sin que pueda argüirse que la del Gobernador de Antioquia, de que antes se hizo mérito, sea la atestación requerida por la ley para justificar los suministros ó empréstitos de que se trata. Para que lo fuera sería preciso que los valores que comportan los recibos figurasen en la cuenta de los empleados subalternos á quienes se hicieron las consignaciones, y que el Gobernador hubiera revisado dicha cuenta, lo que no ha sucedido toda vez que el cambio no se hizo en la Gobernación precisamente por falta de datos respecto á la certidumbre de la efectividad de los empréstitos, como se vió al principio, sin contar, por otra parte, en que no era yá el tiempo de verificar la conversión.

En cuanto á las exacciones que se dicen hechas por agentes del Gobierno rebelde de Anitioquia, en la guerra relacionada, que promiscuamente figuran en esta reclamación, no se ha comprobado que fueran hechas por la fuerza ni con los testimonios contestes de testigos idóneos que presenciaron los hechos.

Por lo tanto, la Corte, de acuerdo con el dictamen del Fiscal especial y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la resolución apelada que absuelve á la Nación del cargo deducido contra ella.

Notifíquese, cópiese en el libro respectivo, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA. — JESÚS CASAS ROJAS. — MANUEL E. CORRALES. — ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO. — JOAQUÍN MARTÍNEZ E. — JESÚS MARÍA QUINTERO P. — *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, Julio catorce de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: María López, vecina de Bolívar en el Departamento del Cauca, pide recompensa militar, fundándose para ello, en que su hijo Pedro Telmo López, murió en defensa de las actuales instituciones el año de mil ochocientos sesenta y seis, en el sitio denominado de "Las-Cuevitas."

La documentación adjunta al expediente consta:

1.° De una certificación expedida por el Cura de Bolívar, en la cual se insertan la partida de bautismo de Pedro Telmo López, con la que se comprueba que éste es hijo natural de María López, y la partida de matrimonio con que se acredita que él se casó, según el rito de la Iglesia Católica, con María Heliodora Castro, el veinticuatro de Febrero de mil ochocientos setenta y seis;

2.° De otra certificación expedida por el señor Ministro del Tesoro, con que se comprueba que la demandadante no ha recibido hasta ahora recompensa del Tesoro nacional;

3.° De otra certificación expedida por el Síndico de la iglesia de Bolívar, en la cual se afirma que la viuda de Lopez, Heliodora Castro, contrajo nuevas nupcias en Diciembre de mil ochocientos noventa y dos con Manuel María Martínez;

4.° De la certificación del mencionado Cura de Bolívar, que trascribe la partida de defunción de Juan Clímaco López, hijo legítimo de Pedro Telmo López y Heliodora Castro;

5.° De la certificación del Prefecto de la Provincia de Caldas, quien, como testigo presencial de la muerte de Pedro Telmo López, en el combate de "Las-Cuevitas" el año de mil ochocientos setenta y seis, en defensa de los principios que informan las actuales instituciones, da testimonio cierto de tal hecho, agregando que le consta que la viuda, Heliodora Castro, contrajo segundas nupcias;

6.° De declaraciones de más de cinco testigos contestes, que establecen plenamente los siguientes hechos:

a) El de la muerte en el combate y época yá indicados, del expresado soldado Pedro Telmo López, quien fué sepultado en el mismo lugar en que murió, y

b) El de que la madre, María López, se conserva soltera, demasiado pobre, enferma, sin recursos de ninguna especie, y que durante la vida de su finado hijo guardó con él completa armonía, como que era él quien atendía á sus necesidades, y

7.° De un memorial dirigido á la Corte por Heliodora Castro, en el cual ésta afirma haberse casado en segundas nupcias con Manuel María Martínez; y que un hijo que tuvo en su primer matrimonio, murió; por todo lo cual renuncia cualquier derecho que pudiera tener á participar de la recompensa solicitada.

Estos comprobantes demuestran completamente que la demandante es, según la ley de la materia, acreedora á la recompensa que solicita y la única persona que puede reclamarla, ya que la viuda del finado López se casó en segundas nupcias, y el hijo único que tuvo, murió.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el parecer del señor Procurador, declara que María López tiene derecho á que se le dé del Tesoro público la recompensa unitaria definitiva de setecientos cuatro pesos ($ 704), que según los artículos 5.° (inciso 2.°), 9.° y 11 de la Ley 84 de 1890, le corresponden por razón de la muerte de su hijo.

Notifíquese, cópiese, publíquese, comuníquese á Su Señoría el Ministro del Tesoro y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA. — JESÚS CASAS ROJAS. — MANUEL E. CORRALES. — ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO. — JOAQUÍN MARTÍNEZ E. — JESÚS MARÍA QUINTERO P. — *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, quince de Julio de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Dolores Gamero, vecina del Municipio de Cali, solicita, por medio de apoderado, que se le otorgue recompensa del Tesoro público, conforme á la Ley 84 de 1890, por ser hija legítima del militar de la Independencia, Basilio Gamero.

Ha acreditado en este juicio los hechos siguientes:

1.° Que en veintidós de Marzo de mil ochocientos treinta y cuatro, contrajo matrimonio conforme al rito católico, Basilio Gamero, vecino de la villa de Ica, con María de Jesús Yanguas. (Partida de matrimonio de la foja 38);

2.° Que de este matrimonio nació en primero de Marzo de mil ochocientos treinta y seis, una niña que fué bautizada con el nombre de María Dolores, que es la misma demandante. (Partida de bautismo, foja 11);

3.° Que Basilio Gamero falleció en Cali en veintisiete de Febrero de mil ochocientos setenta, y María de Jesús Yanguas había muerto desde el doce de Agosto de mil ochocientos cincuenta y siete (fojas 10 y 32);

4.° Que no hay otros hijos del citado Gamero ó descendientes que puedan tener derecho á recompensa. (Declaraciones de fojas 43 y 44);

5.° Que la demandante se conserva soltera, que es muy pobre, que cuidó de su padre como muy buena hija, y ha observado y observa muy buena conducta en todo sentido. (Declaraciones de fojas 2 á 8 y certificación de la foja 42);

6.° Que á Basilio Gamero se le expidió despacho de Teniente-Coronel efectivo del Ejército de la República, en veintiséis de Agosto de mil ochocientos sesenta y uno, con antigüedad de veintiocho de Octubre de mil ochocientos sesenta.

Hay constancia también en documentos acompañados, de que Gamero prestó servicios militares con posterioridad á la guerra de la Independencia, pero no ha podido la parte demandante, á pesar de repetidas exigencias de la Corte, presentar la hoja de servicios de dicho Gamero, ni ningún documento que acredite directa ó indirectamente que Gamero, natural del Perú, prestó servicios militares á la independencia de Colombia, ni de que fuera tenido oficialmente en este país como uno de los militares de la Independencia.

Toribio Llanos (foja 6), declaró que conoció á Gamero desde el año de mil ochocientos veinticuatro, y que combatió con él en las batallas de Junín y Ayacucho; que en esta última fué ascendido á Alférez. Que desde mil ochocientos veintiséis se fijó Gamero en Cali, sirviendo siempre en las fuerzas patriotas; pero ni da el testigo la razón de su dicho en cuanto á lo último, ni determina la fecha y clase de servicios que prestara en Colombia á la causa de la Independencia.

Juan Antonio Arboleda (fojas 6 y 7), asegura que vió marchar á Gamero á la campaña del Perú, y que entonces era Sargento de caballería; y que desde que regresaron del Perú las fuerzas auxiliares, en mil ochocientos veintiséis ó mil ochocientos veintisiete, se quedó en Cali sirviendo como Alférez.

Vicente Cruz (foja 7) afirma que vió marchar á Gamero como Sargento de caballería, con las fuerzas que fueron al Perú á combatir por la Independencia, y que volvió á ver á Gamero en el año de mil ochocientos veintiséis, cuando regresaron esas fuerzas, sirviendo siempre á la causa de la Independencia.

Vicente Jiménez (foja 8) asegura que trató á Gamero desde mil ochocientos veintiséis, en que vino con las fuerzas vencedoras del Perú, y que lo vió desde entonces sirviendo á la causa de la Independencia.

En las Oficinas públicas, en donde pudieran hallarse la hoja de servicios de Gamero ú otros documentos que acrediten sus servicios á la Independencia, nada se ha encontrado.

El Ministro de Guerra informa (foja 35), que en las relaciones de los militares de la Independencia publicadas hasta el año de mil ochocientos sesenta y nueve, no figura Basilio Gamero, ni existe en el archivo de ese Ministerio documento alguno sobre los servicios de ese militar.

El Oficial del Ministerio de Gobierno, encargado del archivo republicano, certifica que en la Oficina de su cargo, no se encuentra otro documento relativo á Gamero que el despacho de Teniente-Coronel, yá citado.

Como el artículo 48 de la Ley 84 de 1890, exige, para que pueda concederse recompensa á los hijos, hijas etc. de los militares de la Independencia, que se presente la hoja de servicios del deudo á cuyo nombre reclaman, y tal documento no ha sido presentado, ni se ha acreditado que existiera en alguna Oficina ó archivo, ni la circunstancia de haber desaparecido, no puede estimarse la prueba supletoria de testigos conforme al artículo 51 de la misma ley; y manifestando el apoderado de la demandante que no presenta esas pruebas por no existir; es necesario dar término á la reclamación con la absolución del demandado.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que no ha probado Dolores Gamero el derecho que reclama en este juicio, y absuelve al Tesoro nacional del cargo contenido en la demanda.

Publíquese en la *Gaceta Judicial* y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—JOAQUÍN MARTÍNEZ E.—JESÚS MARÍA QUINTERO P. *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, Julio quince de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Con fecha 26 de Enero del año en curso, ocurrió á esta Corte el General graduado del Ejército de la República, Francisco de P. Santander, demandando la recompensa unitaria definitiva á que cree tener derecho, de conformidad con la causal 6.ª del artículo 5.° de la Ley 84 de 1890, con motivo de invalidez absoluta, proveniente de enfermedades incurables, contraídas en servicio de las armas durante la campaña emprendida sobre las fuerzas rebeldes que obraban en el Estado de Boyacá, de Mayo á Agosto de mil ochocientos ochenta y cinco, y desempeñando el empleo de Jefe de Estado Mayor de la primera columna de la quinta División del Ejército de Reserva á las órdenes del General Antonio Valderrama. A su demanda acompañó el peticionario: 1.° su despacho de General, expedido por el Presidente de la República con fecha nueve de Marzo de mil ochocientos noventa y uno, abonándole la antigüedad de siete de Agosto de mil ochocientos ochenta y seis; 2.° una información de testigos, consistente en las declaraciones de Domingo Mendoza, Federico Ferro y Carlos Barriga, adjuntos al Estado Mayor de la dicha primera columna de la quinta División del Ejército de Reserva, de que era Jefe el demandante, del Coronel José Domingo Paz y de Alberto Bernal Ospina, el primero como Secretario de la Comandancia de dicha columna, y el segundo, como adjunto al Estado Mayor de la misma, quienes, contestando en todo de conformidad al interrogatorio que se les hace, afirman "que por consecuencia de las fatigas de la campaña, se le agravó por completo al peticionario una enfermedad hemorroidal de que iba padeciendo, de la cual ha quedado liciado, y que, por simpatía y á consecuencia de tales hemorroides, han sobrevenido otras novedades que muy seriamente han minado su salud, y que *al parecer*, le tienen completamente inutilizado para toda clase de trabajo."

Estos testimonios, como se ve, carecen de todo valor probatorio en la parte en que ellos se extienden á dar opiniones profesionales, respecto á las enfermedades contraídas por el peticionario y á su estado de invalidez, y sólo sirven para establecer dos hechos: *a)* que el peticionario iba yá enfermo cuando entró en servicio, y *b)* que sus dolencias se agravaron con las marchas y fatigas de la campaña. Respecto del primero existe, además, la confesión del peticionario, quien en el punto sexto de su interrogatorio (folio 2 vuelto), dice: "6.° si saben y les consta, por haberlo presenciado, que, cuando marchamos de esta ciudad, en la época aludida y con la misión indicada, iba yo un tanto enfermo de una afección hemorroidal, y convaleciente de una pulmonía fulminante que, aunque me proporcionaban algunos sufrimientos, me permitían moverme sin mayor dificultad etc.;" 3.° la diligencia de reconocimiento de sus enfermedades y de su invalidez, extendida por

los médicos oficiales nombrados por el General Comandante en Jefe del Ejército, General Guillermo Quintero Calderón, doctores Antonio María Barrera, Abraham Aparicio y Enrique Pardo, en la Oficina de la Comandancia, en cuatro de Mayo de mil ochocientos noventa y dos (folio 16 á 17), en la cual dichos Profesores se expresan así: "que han reconocido al señor General Francisco de P. Santander, y han hallado que tiene hemorroides externas complicadas con prolapsus del recto, y hemorragias consecuenciales á estas lesiones; además, tiene orquitis crónica,..... En ambas piernas hay ezema crónico, y que todas estas enfermedades ocasionan invalidez absoluta; 4.° la certificación del Ministro del Tesoro, corriente al folio 18, de la cual consta que el peticionario nunca ha figurado en la lista de pensionados, ni ha recibido recompensa alguna del Tesoro, por razón de servicios prestados á la República en la carrera de las armas.

Como del reconocimiento médico no apareciese ó constase que dichas enfermedades hubieran sido contraídas en la campaña de mil ochocientos ochenta y cinco, campaña que, por otra parte, sólo duró de Mayo á Agosto de dicho año, la Corte, en auto para mejor proveer, de siete de Febrero de mil ochocientos noventa y tres (folio 23), dispuso que los médicos ampliasen su exposición, y en la ampliación rendida ante la Comandancia en Jefe del Ejército con fecha primero de Marzo último (folio 27), los mismos Profesores dijeron: "que no pueden asegurar que las hemorroides de que padece el General Santander, así como las demás lesiones descritas en su anterior reconocimiento, fueran contraídas en la campaña de mil ochocientos ochenta y cinco."

Con tal motivo, el señor Procurador general, en su vista de 13 de Marzo (folio 30), se expresó así:

"La enfermedad, pues, no fué contraída en la época del servicio, sino antes, y, en consecuencia, Santander no puede acogerse á la causal 6.ª del artículo 5.° de la Ley 84 de mil ochocientos noventa.

"Por lo expuesto, os pido que declaréis infundada la solicitud de recompensa á que me refiero."

El artículo 25 de la Ley 84 de mil ochocientos noventa, dice así:

"Artículo 25. Cuando la inutilidad provenga de algún daño en función del servicio ó de enfermedades incurables, adquiridas en él, será preciso que la comprobación se haga con el testimonio en la forma legal, de cinco testigos caracterizados, en que se demuestre, que el reclamante, estando en servicio activo en las filas del Ejército de la Nación, se hallaba en pleno goce de su salud, y que allí, con el motivo que hubiere tenido lugar, fué donde se inutilizó ó enfermó de por vida."

Después de concedida la ampliación de los facultativos, adversa al peticionario, de que se ha hecho referencia, y el dictamen del Procurador, igualmente adverso, arriba copiado, y de citadas las partes para sentencia, por auto de 23 de Marzo (folio 26 vuelto), el demandante solicitó ante el Juez Ejecutor de Bogotá, las declaraciones de Luis María Caro, Juan N. Silva y Sixto Barriga, con el objeto de cubrir el precepto del artículo 25 de la ley arriba copiada, los cuales afirman, lisa y llanamente, que cuando en Diciembre de mil ochocientos ochenta y cuatro fué el Coronel Santander llamado al servicio por el General Leonardo Canal, General en Jefe del Ejército de Reserva, y destinado como Jefe de Estado Mayor de la primera Brigada de la primera División del Ejército, se hallaba el peticionario en pleno goce de su salud; pero no dicen con qué motivo fué que contrajo las enfermedades que hoy lo han inutilizado (fojas 40 á 42).

Finalmente, por una tercera ampliación de los médicos, practicada ante la Comandancia, con fecha 7 de Junio próximo pasado (folio 48), éstos expusieron: "que las hemorroides de que sufre el señor General Francisco de P. Santander, pueden considerarse como incurables."

Con estas nuevas pruebas, el señor Procurador, en su vista de 23 de Junio (folio 50 á 51), cree que han quedado justificados los hechos constitutivos de la demanda, y que el peticionario tiene derecho á ser recompensado en los términos del artículo 16 de la ley de la materia.

Pero la Corte, apoyándose en las opiniones expuestas por el mismo funcionario en sus vistas anteriores de 13 de Marzo y 16 de Mayo (folios 30 y 44), cree que el expediente, á pesar de haber sido ampliado á satisfacción y á contentamiento del peticionario, ha dejado por fuera la prueba del hecho esencial, fundamental de su derecho, á saber: que las enfermedades que han producido su invalidez, hubieran sido contraídas con posterioridad á su entrada en el servicio militar.

Hay, además, contrariedad entre la demanda introducida á la Corte por el memorial de 26 de Enero (folios 19 á 20), y el interrogatorio de la información de testigos, en que dicha demanda se apoya (folios 2 á 12), documentos en los cuales la invalidez se refiere á la campaña de mil ochocientos ochenta y cinco; y el interrogatorio y las declaraciones de los folios 40 á 42, en que la misma causal no se refiere yá á aquella campaña, sino á la fecha de su llamamiento al servicio en Diciembre de mil ochocientos ochenta y cuatro.

Del proceso resulta plenamente comprobado el estado actual de invalidez é inutilidad en que, por causa de enfermedad, se encuentra el General Santander, y sus importantes servicios militares prestados leal y uniformemente á la causa de unos mismos principios; pero falta, como queda dicho, la prueba del hecho fundamental ó esencial del derecho á la recompensa por esa causa; y si la Corte, por cualesquiera otras consideraciones, agregara á la liberalidad de la ley sobre recompensas militares, la liberalidad de la relajación de las pruebas que la misma ley exige, abriendo con esto la puerta á inumerables y cuantiosas reclamaciones sobre el Tesoro público, incurriría en inmensa responsabilidad de injustificables y perniciosos resultados para el Erario.

Por estas razones, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, absuelve al Tesoro de la demanda de recompensa unitaria definitiva, hecha por el General graduado, señor Francisco de P. Santander, fundado en la causal 6.ª del artículo 5.° de la Ley 84 de 1890.

Notifíquese, cópiese y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA. — JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—JOAQUÍN MARTÍNEZ E. — JESÚS MARÍA QUINTERO P.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez y siete de Julio de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Urbano Salgado, vecino de Tocancipá, demandó ante el Juez del Circuito de Zipaquirá, el doce de Julio de mil ochocientos sesenta y seis, el reconocimiento y pago de la cantidad de mil quinientos sesenta y un pesos veinte centavos ($ 1,561-20), valor de las expropiaciones que durante la guerra de mil ochocientos sesenta y dos se le hicieron por las fuerzas al servicio del General Tomás C. de Mosquera.

Dado el traslado de la demanda al representante del Ministerio Público, se siguió el juicio de acuerdo con el procedimiento que regía á la sazón, y terminó la instancia con la sentencia de fecha veintisiete de Febrero de mil ochocientos sesenta y siete, por la cual fué condenada la Nación á pagar á Urbano Salgado la cantidad demandada. En la misma sentencia se ordenó que fuese consultada con la Corte Suprema federal, pero no aparece que el expediente fuese recibido en la Corte, aunque está agregada la nota remisoria dirigida por el Juez al Secretario de esa Corporación, con fecha cinco de Octubre de mil ochocientos sesenta y nueve. Sin embargo, hay constancia en el mismo expediente de que él fué remitido por la Corte, á la Comisión de suministros, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 44 de 1886, por no haberse dictado por aquélla el fallo definitivo.

En esa virtud, la Comisión de suministros, por resolución número 3,845, de fecha veintiocho de Junio de mil ochocientos noventa y dos, apoyándose en pruebas creadas en el juicio y dándoles la fuerza probatoria que las leyes procedimentales vigentes les daban cuando se produjeron, y haciendo uso, además, de la facultad de estimarlas, verdad sabida y buena fe guardada, fijó el valor de la reclamación, en la cantidad

de ochocientos pesos, que reconoció á cargo del Tesoro de la República y á favor de Salgado.

Pasado el expediente al Ministerio del Tesoro, éste dictó la resolución número 3,308 de catorce de Octubre del año yá citado, y no creyendo equitativa la suma reconocida por la Comisión, reformó el fallo de ésta, y reconoció á favor del reclamante la cantidad de mil pesos.

Tanto el Fiscal de la Comisión como el apoderado de Salgado interpusieron recurso de apelación contra lo resuelto por el Ministerio del Tesoro, y concedido el recurso se remitió el expediente á esta Superioridad, en donde se procede á dictar la sentencia definitiva.

Funda el Fiscal su apelación en que los testigos que declararon en el juicio, en mil ochocientos sesenta y seis, no habían dado la razón de su dicho, y este argumento lo rechazó la Comisión por cuanto no existía entonces disposición legal que exigiese esa formalidad. Además, el juicio se estableció ante el Juez que era competente conforme al artículo 4.° de la Ley de 2 de Mayo de 1865, y si bien las declaraciones habían sido recibidas ante un Juez de Distrito, ellas fueron ratificadas durante el término de prueba con citación del encargado del Ministerio Público.

La apelación por parte del interesado tiene por objeto recabar de la Corte el reconocimiento de toda la suma reclamada, por creer sin duda muy disminuída la estimación de los objetos expropiados. Esa estimación, tal como aparece comprobada, es la siguiente:

Un caballo en ciento sesenta pesos.....$	160
Dos caballos, á cien pesos cada uno.....	200
Cuatro caballos, á sesenta pesos.....	240
Una yegua en sesenta pesos.....	60
Otra yegua en cuarenta y dos pesos.....	42
Un macho en cincuenta pesos.....	50
Once bueyes, á treinta pesos cada uno.....	330
Veinte cargas de maíz, á doce pesos.....	240
Cuatro clarinetes, á veinte pesos.....	80
Un corneta pistón en veinticinco pesos.....	25
Suma.....$	1,427

Sin incluír la partida de noventa y cuatro pesos veinte centavos ($ 94-20), valor de tres monturas, porque no hubo más que un testigo que declarara acerca de él.

La Corte no encuentra que de la suma indicada de mil cuatrocientos veintisiete pesos pueda hacerse, como se ha hecho, una rebaja de casi la tercera parte, porque si se exceptúa el precio de los caballos en el cual puede hallarse alguna exageración, las de los demás objetos es equitativa. Y si se tiene en cuenta que hace más de treinta años que se verificó la expropiación, la Corte no vacila en reformar la resolución apelada, y haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 9.° de la Ley 44 de 1886, fija el reconocimiento en la cantidad de mil doscientos pesos ($ 1,200), que es la que, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que debe pagarse del Tesoro nacional á Ismael Salgado M., como apoderado de Urbano Salgado, por el valor de las expropiaciones que se hicieron á éste en el año de mil ochocientos sesenta y dos. Absuélvese á dicho Tesoro de la mayor suma demandada.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—JOAQUÍN MARTÍNEZ E.—JESÚS MARÍA QUINTERO P.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez y siete de Julio de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Por auto de fecha veintidós de Marzo del año pasado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tundama, en el Departamento de Boyacá, abrió juicio de responsabilidad por los trámites extraordinarios contra el Juez 2.° principal del Circuito del Norte, Juan Bautista Ortiz y Cifuentes, por el delito de abandono temporal del destino, de que trata el capítulo 5.°, título 10, del libro 2.° del Código Penal.

Puesto en noticia del enjuiciado el auto de proceder, apeló de él para ante la Corte, y esta Superioridad, de acuerdo con el concepto del Procurador, determinó el recurso reformando la providencia recurrida en el sentido de llamar á juicio de responsabilidad al precitado Juan Bautista Ortiz y Cifuentes, no por el delito de abandono del destino, sino por el de falta de asistencia al desempeño de sus obligaciones, definido en el artículo 528 del Código Penal.

Surtidos en primera instancia todos los trámites señalados por la ley, se puso término á ésta por medio de la sentencia que se pronunció el quince de Febrero más inmediato, cuya parte resolutiva está concebida así:

"En mérito de lo expuesto, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, se condena á Juan Bautista Ortiz y Cifuentes, Juez 2.° del Circuito del Norte, á pagar la multa de cuatro pesos, la que ingresará en el Tesoro nacional y las costas del juicio. Comisiónase al Juez 1.° del mismo Circuito para que notifique esta sentencia, para lo cual se le acompañará el expediente, librando el despacho de estilo."

El acusado interpuso oportunamente recurso de apelación contra el fallo preinserto para ante esta Superioridad, el que también fundó dentro del término hábil, y como aparece fulminado el proceso, pues se han llenado en la instancia de revisión todas y cada una de las formalidades legales que deben preceder al pronunciamiento de la sentencia, es llegado el caso de proferir ésta, y á ello se procede mediante las consideraciones siguientes:

La historia fidedigna de este proceso puede resumirse así: Juan Bautista Ortiz y Cifuentes, se hallaba en ejercicio legal del cargo de Juez 2.° del Circuito del Norte, el diez y nueve de Noviembre de mil ochocientos noventa y uno, puesto que mucho antes de esta fecha se le había hecho el nombramiento de Juez y tomado posesión del destino. En dicho día solitó licencia de la primera autoridad política del lugar, donde regentaba el Juzgado para separarse en los días veintitrés y veinticuatro de dicho mes del ejercicio del empleo, licencia que le fué concedida inmediatamente; en uso de ella se ausentó desde el veintiuno, después de practicar la visita de cárcel, sin esperar á que se encargara del despacho el respectivo suplente, y no regresó hasta el veinticinco, fecha en que volvió á hacerse cargo del Juzgado. Durante los días veintitrés y veinticuatro, estuvo acéfalo éste, porque, llamado el primer suplente, se excusó de servirlo, por estar desempeñando el destino de Fiscal del Circuito, y porque no se encontró en el lugar el segundo suplente.

Estos hechos brevemente compendiados, y respecto de los cuales hay plena prueba en el proceso, acusan indudablemente falta de cumplimiento á las obligaciones que contrajo Juan Bautista Ortiz y Cifuentes al aceptar el destino y al tomar posesión de él, porque el artículo 212 de la Ley 147 de 1888, especial al caso, dice que el funcionario del orden judicial, á quien se conceda licencia, *no podrá* separarse del desempeño de sus funciones, mientras no se haya hecho cargo del destino el individuo que deba reemplazarlo ó sucederle.

Y como la ejecución de este hecho apareja responsabilidad, pues envuelve la comisión de un delito en los términos del artículo 528 del Código Penal, vigente á la época en que se realizó aquél, claro es que el procesado se ha hecho merecedor de la pena de que allí se trata, y por lo mismo hay que condenarlo.

El enjuiciado responde al cargo que se le hace diciendo "que se separó del destino sin aguardar á que se le reemplazara, porque confió en que el Prefecto de la Provincia llamaría oportunamente á los suplentes, pero que no sucedió así, sin duda porque este empleado le profesa inquina, debido á divergencia de opiniones políticas que no hay para qué traer á cuento aquí." Puede que sea cierto lo que asevera el procesado; pero ni aun dando por sentado esto, habría razón para librarlo de la responsabilidad que sobre él gravita, por cuanto tales hechos no justifican su conducta, y sólo revelan falta de prudencia de parte de éste, porque si abrigaba la íntima persuación de que el Prefecto no le tenía buena voluntad, no ha debido separarse del destino inopinadamente,

sobre todo sabiendo, como debía saber, que tal hecho era punible, toda vez que no le eran propicias las circunstancias que lo rodeaban.

También alega que al separarse de las funciones de la judicatura sin ser reemplazado, obró de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 2.° del artículo 335 del Código Político y Municipal; pero la enfermedad que hace valer como justa causa, no está, en primer lugar, comprobada, porque un certificado de un médico que no tiene carácter oficial, no es documento auténtico que por sí solo merezca plena fe, y porque, en segundo término, la enfermedad de que se dice padece el enjuiciado (dispepsia), no es de tal naturaleza grave que no le hubiera permitido esperar á que se encargara del despacho el respectivo suplente. Y la prueba elocuente de que el Juez acusado no está en el caso de la excepción de dicha disposición legal, es que en el memorial en que solicitó la licencia, no hizo mención del motivo que lo obligaba á separarse del destino, el cual tenía que ser establecido previamente, á juzgar por los términos en que aparece redactado el artículo; con efecto, allí se dice: "Exceptúase el caso en que no sea preciso llenar la falta, *y también cuando se concede una licencia con justa causa;*" de suerte que si para otorgar ésta hay que tener en cuenta la justa causa que se alegue, de su peso se cae que hay que acreditar é-ta, porque en los negocios públicos, á diferencia de lo que sucede en los privados, no se cree á los hombres bajo su sola palabra, aunque estén investidos de funciones que los coloquen fuera del nivel común de los demás.

Asimismo alega su buena conducta anterior; y al efecto, hizo recibir varias declaraciones de testigos, quienes aseveran que el procesado es muy recto é imparcial en el desempeño de sus funciones. Estos testimonios, que pueden ser tan respetables como se quiera, y que demuestran que el enjuiciado, obedeciendo á los dictados de una conciencia honrada, se ha penetrado bien de la augusta misión que está encomendada á los dispensadores de la justicia en la tierra, no le quitan al hecho que se investiga el carácter de delito, y sólo sirven para atenuar la falta.

Y, en resolución, manifiesta que al separarse del destino no tuvo voluntad ni malicia de faltar al cumplimiento de sus deberes; pero esta alegación está fuera de lugar en vista de lo dispuesto en el artículo 2025 del Código Judicial.

Ahora, cuanto á la apreciación del delito para el efecto de imponer la pena á que se ha hecho merecedor el procesado, la Corte estima que el concepto del Tribunal sobre el particular se halla ajustado al mérito de los autos, y á él debe estarse para calificar el delito en tercer grado, porque realmente la falta de asistencia por dos días al Juzgado, no es de gran trascendencia ó gravedad, ni de ella ha resultado perjuicio alguno á la Nación ó á un tercero.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el concepto del Procurador, confirma la sentencia apelada.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—JOAQUÍN MARTÍNEZ E.—JESÚS MARÍA QUINTERO P. *Gabriel Rosas*, Secretario.

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, once de Julio de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Liborio D. Cantillo, en su carácter de apoderado de Jesús María y Valeriano Ramírez, ha solicitado oportunamente que se imprueba la tasación de costas, verificada *en el presente* recurso de casación, y que se modere el precio en que se han estimado los alegatos escritos de la parte favorecida en el recurso, porque á su juicio es exagerado.

Para resolver la petición que entraña el memorial de Cantillo, es preciso tener en cuenta las breves reflexiones siguientes:

El peticionario es de sentir que las costas causadas en el recurso, no pueden ser tasadas sino de acuerdo con las leyes que, sobre la materia regían antes de la vigencia de la Ley 100 de 1892, porque asevera que bajo el imperio de ellas se hizo valer el recurso y se sustanció éste, lo que equivale á decir que las disposiciones legales relativas á costas tienen el carácter de leyes sustantivas, en lo cual está muy puesto en razón el reclamante, porque realmente confieren derechos é imponen obligaciones. De suerte que lo que se debe examinar al presente, es si en punto á costas, puede ó no haber *derechos* adquiridos ó únicamente meras expectativas que pueden desvanecerse por la voluntad de un tercero; pero para ello es necesario establecer previamente la línea de separación que divide aquéllos de éstos.

¿Qué es un derecho adquirido? Derecho adqurido es aquél que hace parte de nuestro patrimonio y que está fuera del alcance del hecho de un tercero, como es, por ejemplo, el que uno tiene á recoger los bienes de una persona que ha muerto y que válidamente nos ha instituído herederos en su testamento; ó en otros términos, es el que "se nos presenta como algo que se *intima* con nosotros; que está sujeto á nuestra *dominación* y que forma parte de nuestro *haber*."

¿Qué son simples expectativas? Son esperanzas débiles que uno se ha formado de llegar á adquirir derechos que pueden ser destruídos por la voluntad, esencialmente mudable, del que quiere conferirlos; tal es, verbi gracia, la esperanza que concibe el legatario de recibir la cosa legada á la época de la muerte de la persona que lo hace, si ésta ha persistido en la voluntad de agraciar á aquél.

De acuerdo con esta doctrina nadie negará que, respecto de costas procesales, la ley, que debe tenerse en cuenta para su regulación es precisamente la que rige á la época en que se ha consolidado el derecho de la parte favorecida en el recurso, lo que sucede cuando ha quedado en firme el auto ó sentencia en que se hace la condenación, sino la que estaba en vigor en la fecha en que se dedujo la acción, se hizo valer la excepción ó se interpuso el recurso, porque es la que conocían las partes, y en la cual fundaron sus cálculos para obrar en el juicio. Y tan cierto es esto, que si el recurrente en el caso que ocurre hubiera tenido la certidumbre de que en lo porvenir se expidiera una ley que impusiera fuertes gravámenes pecuniarios á los litigantes que se alzan de los fallos del inferior para ante el superior, y que en su aplicación abrazase los hechos pasados, es muy probable y aun seguro que no habría interpuesto el recurso de casación que se determinó por la sentencia de fecha veintidós de Marzo último.

Aplicando esta misma doctrina en el caso concreto que se analiza, resulta que la ley que debe regir la tasación de los costas causadas en el presente recurso, es el artículo 867 del Código Judicial, porque era el que estaba vigente no sólo cuando se hizo valer éste, sino también durante el tiempo de la sustanciación del recurso.

Si la ley 100 de 1892 fuera la que se debiese aplicar en el caso que se examina y no el artículo 867 del Código Judicial, indudablemente que se vendría contra el principio de la no retroactividad de la ley, porque se haría extender su imperio al pasado con perjuicio manifiesto del recurrente, quien, para determinar su voluntad en el sentido en que lo hizo, ajustó su conducta á la ley vigente, que es la norma que deben seguir gobernantes y gobernados.

Cuanto á la moderación del precio de los alegatos de la parte favorecida en el recurso, la Corte, sin desconocer el mérito del trabajo del apoderado, estima que quedan bien justipreciados en ciento cincuenta pesos ($ 150) el uno, y en ochenta pesos ($ 80) el otro, y á estas sumas reduce su valor, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 47 de la Ley 147 de 1888, ordinal 5.°

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, imprueba el dictamen pericial, y ordena, en consecuencia, que se rehaga dentro de tres días por los mismos expertos, en los términos de que se ha hablado.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO.—JESÚS MARÍA QUINTERO P. *Gabriel Rosas*, Secretario.

REPÚBLICA DE COLOMBIA.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AÑO VIII | Bogotá, 18 de Agosto de 1893. | NÚM. 409.

CONTENIDO.

Págs.

PENA CAPITAL.

Confírmase la sentencia pronunciada en la causa seguida contra Liboria Barrera, por asesinato. (Magistrado ponente, doctor Isaza) 361

Confírmase la sentencia que condenó á Eleuterio Ospina á sufrir la pena capital. (Magistrado ponente, doctor Corrales)..... 362

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Niégase á María Josefa Casanova una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Fernández de Soto)..... 365

Confírmase, en parte, la resolución dictada por el Ministerio del Tesoro en la demanda entablada por Camilo Domínguez contra la Nación, por $ 182,565, valor de unas expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Isaza)..... 366

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Declárase incompetente la Corte para examinar el fallo pronunciado por el Juez del Circuito del Guamo, con motivo de la demanda propuesta por Edelina Nieto, sobre patronato de una capellanía. (Magistrado ponente, doctor Fernández de Soto)..... 367

Declárase inadmisible el recurso de casación interpuesto en el juicio seguido por Francisco de P. Manotas, como cesionario de Manuel Esteban Márquez Romero, para que se declarase á éste heredero de Ricardo Márquez. (Magistrado ponente, doctor Fernández de Soto)..... 367

GACETA JUDICIAL.

PENA CAPITAL.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez y siete de Julio de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: En el paraje de "San-Martín," Distrito de Santa-Librada, Departamento del Tolima, dieron muerte violenta Quiterio y Santos Pérez á Liborio Silva, casado con Liboria Barrera. Este delito, que reunió las circunstancias más graves del asesinato, fué ejecutado por reiteradas sugestiones de la Barrera y á presencia de ésta y de María de la Paz Cuéllar, joven que servía en la casa de Silva y que apenas había cumplido doce años.

La citada Barrera había tratado también de envenenar á su marido y no lo había logrado á pesar de haberse valido, con la cooperación de otras personas, de todos los medios que estuvieron á su alcance para lograr su criminal intento.

El Juez Superior del Distrito Judicial del Sur del Departamento del Tolima, á cuya jurisdicción pertenece el Distrito en donde se ejecutó el crimen de que se trata, después de perfeccionado el sumario, en el cual se acreditó plenamente el delito y los delincuentes con el reconocimiento del cadáver de Silva por facultativos, con la confesión espontánea de los sindicados y con algúnos indicios, declaró con lugar á seguimiento de causa, por auto de siete de Agosto de mil ochocientos noventa y uno, contra Liboria Barrera, Quiterio y Santos Pérez, Nicasio Polo, Toribia Vargas y Sergia Muñoz, por tentativa del delito de envenenamiento en la persona de Liborio Silva, y por el delito de homicidio en la misma persona de Silva, contra los citados Liboria Barrera, Quiterio y Santos Pérez, Sergia Muñoz y María de la Paz Cuéllar.

Surtidos los trámites del juicio criminal con intervención del Jurado, éste declaró en el veredicto de nueve de Marzo de mil ochocientos noventa y dos, que se había cometido en la persona de Liborio Silva el delito especificado en el artículo 440 del Código Penal, con las circunstancias primera y tercera allí enumeradas, delito que alcanza el grado máximo de gravedad, conforme al artículo 221 de la Ley 153 de 1887, que castiga el 441 del citado Código Penal, y que Liboria Barrera y Santos y Quiterio Pérez, son responsables de este delito como autores principales. Declaró no responsable á María de la Paz Cuéllar y resolvió otras cuestiones que no hay necesidad de traer á cuenta ahora.

El Juez de la causa dictó sentencia en veintiuno de mismo mes y en ella, de acuerdo con la resolución del Jurado, condenó á Santos y Quiterio Pérez á sufrir la pena de muerte; pero respecto de Liboria Barrera declaró notoriamente injusto el veredicto por lo que hace relación al delito de homicidio.

El Tribunal Superior del expresado Distrito Judicial, á quien se elevó la causa en apelación, dictó sentencia en seis de Julio del año citado últimamente, y en ella confirmó lo resuelto por el Juez de primera instancia, en lo relativo á la pena de muerte impuesta á Quiterio y Santos Pérez y á la declaración de injusticia notoria respecto de Liboria Barrera, en cuanto al delito de homicidio. Declaró también notoriamente injusto el veredicto absolutorio de María de la Paz Cuéllar.

Dispuso el Tribunal que el expediente se elevase á esta Corte, en consulta en lo tocante á la pena de muerte impuesta á los Pérez y ordenó sacar copia del proceso y remitirla al Juez Superior respectivo, para que convocase nuevo Jurado en la causa que quedaba pendiente por la declaración de injusticia notoria.

Elevados á la Corte los autos, fué decidido en ella el recurso de casación, en la sentencia de veintinueve de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos, publicada en el número 376 de la *Gaceta Judicial*, correspondiente al treinta y uno de Marzo del año en curso, en la que se hace detallada relación de los hechos materia de esta causa, por lo cual y por no haber necesidad, no se repiten aquí. El fallo de la Corte aprobó la sentencia consultada en la parte que hace referencia á la imposición de la pena de muerte á los reos Quiterio Pérez y Santos Pérez.

Sabido es que el primero de éstos sufrió la pena á que fué condenado, y que al segundo, en atención á ser menor de edad, se le conmutó por el Presidente de la República la de muerte por la de veinte (20) años de presidio.

En cumplimiento de lo resuelto por el Tribunal se sacó copia del proceso y se remitió al Juez Superior del Distrito Judicial del Sur, para que se convocase otro Jurado que debía resolver sobre el cargo de homicidio imputado á Liboria Barrera, y sobre este mismo y sobre la tentativa de envenenamiento de que estaba acusada María de la Paz Cuéllar.

Verificado con arreglo á la ley el sorteo del nuevo Jurado, resultaron elegidos para formarlo los designados Rafael Durán, Lucas A. Tobar y Gabriel Trujillo L., y por ausencia

del primero fué reemplazado con el designado Francisco A. Gutiérrez.

Celebróse el juicio en los días seis, siete y diez de Diciembre del año próximo pasado, y el Jurado declaró que Liboria Barrera es responsable como autora del delito de parricidio en el artículo 219 de la Ley 153 de 1887, con las circustancias 2.ª y 3.ª enumeradas en el artículo 440 del Código Penal de 1858, además de la de premeditación; delito que alcanza grado máximo de gravedad, conforme al artículo 219 citado, y que castiga el 217 de la precitada Ley 153 de 1887.

Respecto de María de la Paz Cuéllar, el Jurado resolvió que no era responsable del delito de asesinato ni de la tentativa de envenenamiento.

El Juez Superior, en consonancia con las resoluciones del Jurado, y no siéndole yá permitido hacer nueva declaración de injusticia notoria, por sentencia que profirió el treinta de Enero del año en curso, condenó á Liboria Barrera, como autora principal del delito de parricidio cometido en la persona de su esposo Liborio Silva, á sufrir la pena de muerte, la cual se ejecutaría en el lugar que designase el Tribunal del Distrito Judicial; y declaró terminado el procedimiento contra María de la Paz Cuéllar, por los delitos de homicidio y tentativa de envenamiento. Condenó, además, á Liboria Barrera á pagar las costas procesales á favor del Tesoro nacional.

Elevados los autos en consulta de la sentencia del Juez de primera instancia al Tribunal Superior del Distrito Judicial del Sur, por no haberse interpuesto recurso de apelación contra la sentencia, y sustanciado el asunto allí, con arreglo á las leyes de la materia, ese Tribunal dictó la sentencia de ocho de Abril del año en curso, por la cual confirma la del Juez Superior, y señala la plaza del pueblo de Santa-Librada para la ejecución de la pena de muerte impuesta á Liboria Barrera, en el caso de que no le sea conmutada.

Ordenó también la consulta de la sentencia con esta Suprema Corte respecto de la pena capital mencionada, en caso de que no se interpusiese el recurso de casación; pero como el defensor de Liboria Barrera hizo valer oportunamente tal recurso, el Tribunal lo concedió por auto de veintiséis del mismo mes y ordenó remitir el proceso á esta Corte, en donde se ha surtido la tramitación correspondiente, con intervención del señor Procurador de la Nación y del defensor de la acusada.

Siendo yá tiempo de fallar, se procede á ello.

El proceso no adolece de ninguna de las causales que en materia criminal dan derecho á interponer el recurso de casación conforme al artículo 370 de la Ley 105 de 1890.

En efecto, la sentencia del Tribunal, confirmatoria de la del Juzgado Superior, por la cual se impone á Liboria Barrera la pena de muerte, por el delito de parricidio, no es violatoria de ley sustantiva ni de doctrina legal, pues debiendo acatar el veredicto del Jurado no les era permitido ni al Juez ni al Tribunal hacer una calificación distinta de los hechos que constituyen el delito, aunque la resolución del Jurado es jurídicamente injusta en cuanto declara á la Barrera autora principal del delito de homicidio, no siendo sino cómplice, conforme á los artículos 91 y 92 del Código Penal que regía cuando ese delito se cometió. Para el Juez de derecho la determinación del Jurado constituye plena prueba de los hechos y la sentencia ha tenido que sujetarse forzosamente á esa determinación, aunque de los autos aparezca con evidencia otra cosa.

No puede la Corte tampoco declarar notoriamente injusto el veredicto del Jurado, pronunciado cuando regía el inciso 2.º del mencionado artículo 370 de la Ley 105 de 1890, porque el inciso 3.º del artículo 391 de la misma ley, inciso también derogado por el artículo 87 de la Ley 100 de 1892, disponía que cuando la sentencia se fundase en el veredicto pronunciado por un segundo Jurado, con motivo de haber declarado el respectivo Tribunal notoriamente injusto el primer veredicto, la Corte debía respetar el último y abstenerse de anular la sentencia por la causal de injusticia notoria.

Tampoco puede hoy la Corte casar la sentencia por causa de injusticia notoria en la resolución de los jueces de hecho.

No se encuentra tampoco en el proceso causal alguna de nulidad de las designadas en los ordinales 1.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º y 7.º del artículo 264 de la Ley 57 de 1887.

Pudiera dudarse de la competencia del Tribunal para conocer de la causa á virtud de consulta que hizo de la sentencia el Juez Superior del Distrito Judicial, por no haber ley que ordene terminantemente hacer esa consulta cuando la sentencia no ha sido apelada; pero si se tiene en cuenta que, conforme al artículo 368 de la Ley 105 de 1890, cuando no se interpone recurso de casación contra la sentencia del Tribunal, tal recurso se surte de oficio y por vía de consulta con la Corte, y que él no puede tener cabida sino respecto de las sentencias definitivas que pronuncien los Tribunales Superiores, por la comisión de alguno de los delitos designados en el artículo 29 de la Constitución, si en la sentencia se impone la pena de muerte,—hay que convenir en que la intervención de una sentencia del Tribunal en estos casos es indispensable para que pueda surtirse la casación ante la Corte Suprema, y para ello no hay otro medio que la consulta de la sentencia de primera instancia con el inmediato Superior, en caso de que no sea apelada.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, declara que no há lugar á infirmar la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Sur del Departamento del Tolima, en ocho de Abril del año en curso, en cuanto por ella se confirma la del Juez Superior del mismo Distrito Judicial, pronunciada en treinta de Enero de este mismo año, en la parte en que se impone la pena de muerte á Liboria Barrera.

A pesar de que las circunstancias que acompañaron y precedieron al delito de que se trata, hacen á Liboria Barrera moralmente principal responsable de él, como según el artículo 91 del Código Penal vigente cuando se perpetró el crimen, ella no podía ser considerada autora principal por no haberlo ejecutado personalmente, ni los Pérez, á quienes encargó la ejecución de él, estaban legalmente obligados á obedecer y ejecutar sus órdenes, ni fueron forzados á ello con violencia, ni privados por la Barrera del uso de la razón; la citada Barrera sólo ha debido ser considerada y castigada como cómplice, conforme al artículo 92 del mismo Código; y los veredictos de los dos Jurados, que la declararon autora principal, son evidentemente contrarios á la ley expresa. Por tanto la Corte, con el fin de evitar las consecuencias de este desconocimiento de la ley escrita, obligatoria para el Jurado, que no puede investir las atribuciones del legislador, y sólo en interés de la misma, solicita del Excelentísimo Señor Presidente de la República la conmutación de la pena de muerte impuesta á la Barrera, por la de veinte años de presidio.

Déjese copia de esta sentencia y publíquese en la *Gaceta Judicial*.

Pásese el proceso al Excelentísimo Señor Vicepresidente de la República para que pueda determinar lo de su cargo respecto á la conmutación de la pena capital.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—JOAQUÍN MARTÍNEZ E.—JESÚS M. QUINTERO P. *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez y ocho de Julio de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: El veintiocho de Febrero del año próximo pasado de mil ochocientos noventa y dos, Lorenzo Estrada dió aviso al Alcalde municipal de Remedios, en el Departamento de Antioquia, de haber observado en el camino de Otusito, distante como dos leguas de la población, una charca de sangre y por el suelo señales de haber sido arrastrado un objeto, señales que se dejaban conoçer en toda la extensión del *amagamiento*, y dos bestias cargadas de plátanos; que al principio creyó que la sangre provendría de haberse estacado alguna de las bestias referidas, y comenzó á llamar al conductor, que lo era Juan de la Cruz Hernández, porque tales semovientes los conocía como de propiedad de éste; pero que ad-

virtiendo que la sangre continuaba por el camino, se impresionó fuertemente, pues sospechó que en aquel paraje se hubiese perpetrado algún delito.

El Alcalde inmediatamente procedió á trasladarse al lugar designado por el denunciante, con el objeto de cerciorarse de la verdad, y al efecto, se asoció de los vecinos Manuel S. Gaviria y Juan Cancio Yolí, y también del Secretario de su Despacho. Llegados al paraje de "Otusito," en el camino de "Ocá," observaron que se encontraban allí dos bestias, cargadas, una con maiz y otra con plátanos, y que dichas bestias, según la opinión de Salvador Chacón y Lorenzo Estrada, eran de Juan de la Cruz Hernández, y hacia un lado del *amagamiento* llamado "Otusito," al pie de una falda y en el punto en que el camino forma un codo, una charca de sangre como de una libra, y señales de haber caído una persona en tierra. A un lado del camino, una especie de *pateadero*, donde el mismo camino forma el codo dentro del rastrojo, por lo que supusieron, que allí había permanecido alguna persona en acecho. Las sospechas se aumentaban á medida que se descubrían señales indudables de haberse perpetrado algún crimen, pues por el camino hasta llegar al amagamiento y en una extensión como de ocho varas, seguía la sangre, y un arrastradero que se prolongaba *amagamiento* abajo; siguieron por todo éste, y como á media cuadra de distancia, hallaron un sombrero de fieltro negro, que fué reconocido por Chacón y Estrada como del referido Hernández, y como el arrastradero se prolongaba, siguieron los concurrentes, y á una cuadra de distancia, más ó menos, en un arenal, se encontró á medio enterrar el cadáver de una persona que tenía descubierto un pie y parte de la cara; á los lados de la excavación ó sepultura, se vieron rastros de dos personas, por ser aquéllos de diferentes dimensiones, los cuales eran frescos, pudiendo asegurarse que serían formados el mismo día.

Dispúsose por el Alcalde, que se extrajese ó exhumase el cadáver, y estando ejecutada tal operación, todos reconocieron que el cuerpo muerto era del mencionado Hernández, y examinado con el mayor cuidado, se notó que el pecho y la garganta habían sido perforados con balines ó municiones de escopeta.

Distante aquel paraje de las casas de habitación de algunos agricultores, se trasladó el cadáver á la población de Remedios, con el fin de que en ella se hiciese un reconocimiento más completo y científico de él; y luégo que se tuvo noticia en dicha población del acontecimiento, fué voz general de que los autores habían sido Eleuterio y José María Ospina y Pablo Galeano, ó su hijo Pedro.

Nombrados los peritos reconocedores del cadáver, y juramentados en debida forma, se practicó el examen con la mayor escrupulosidad posible, y los peritos, Eladio Valderrama y Valeriano Arango, en sustancia, expusieron uniformemente:

"Examinado el cadáver, nos dió el resultado siguiente: en el frontal le hallamos unas tres equímosis; las dos laterales, que partían de las cejas para arriba, y que se extendían cada una de ellas hasta las sienes, esto en su anchura, pero en su longitud penetraban hasta el cuero cabelludo; lo mismo que la del centro, que tenía una anchura en su base, la que quedaba en medio de las dos cejas como de una pulgada. Es nuestra opinión que las equímosis, de que acabamos de hablar, serían resultado, más bien que de golpes, de aglomeración de la sangre y de su descomposición. A la izquierda del ojo izquierdo, y como media pulgada abajo del ángulo, le encontramos una peladura, y la creímos efecto de un golpe recibido al caer ó al pasar el cuerpo de una parte á otra. Esta peladura, de poca significación. Creemos que en el cuello, como en el cuerpo, recibió el resultado de un disparo con arma de fuego, y que las consecuencias entramos á relacionarlas así: un proyectil de los que pudo contener el arma, que manifiesta por la extensión de la herida, como de una línea de diámetro, se le introdujo por el cuello como tres pulgadas más abajo de la oreja del lado derecho, dando el resultado de pasar al otro lado, sin dejar indicación de interesar tejidos ni músculos importantes. Al lado izquierdo, é inmediatamente después de la madíbula inferior, en el mismo cuello, aparecen dos señales de haber penetrado y salido un mismo proyectil, como igual al anterior, que ofendió solamente el cuero, dejando un intermedio como de dos líneas. A dos pulgadas abajo de esta herida, y con distancia de una pulgada de la perpendicular de esta herida, aparece la entrada de otro proyectil con señal de iguales dimensiones y que tuvo su salida diametralmente opuesta, sin que notáramos que pudiera producir resultado de muerte. Una y media pulgada abajo de esta última herida y oblícuamente al lado derecho, aparece otra, de un proyectil igual á los enunciados, que atravesó por la parte superior de la clavícula, dejando la indicación de que salió por el borde superior del homoplato, y no creemos, en vista de los tendones ofendidos, que el resultado causado por dicho proyectil fuera mortal. Encima de la clavícula se encuentra la herida formada por otro proyectil de iguales dimensiones que los anteriores, el que penetró produciendo la ruptura de la clavícula al lado izquierdo, y como resultado del golpe; mas suponemos, que por haber penetrado, produjo la ruptura de la arteria subclavia, la que pudo producir una hemorragia de más de una libra de sangre y un resultado mortal, después de un rato de vida. La última herida producida con igual proyectil, está localizada perpendicular á la anterior y debajo de la clavícula, como á media pulgada penetró, sin dejar indicación, así como la anterior, de haber vuelto á salir, y su efecto pudo ser el de romper y atravesar el cayado de la anterior aorta, lo que daría por resultado la muerte, después de un muy pequeño intervalo de tiempo, y produjo una hemorragia esta herida; como de ocho onzas de sangre, que debió ser la que encontramos al hacer la disección anatómica del cadáver debajo del pulmón de ese lado. El efecto producido por los proyectiles de que ya hemos hablado, está manifestando que, como entraron oblícuamente, el primero de ellos al cuello sobre el lado izquierdo, y de este mismo lado el resto sobre el cuerpo, deducimos de aquí lógicamente, que el agresor hizo su disparo, teniendo casi el costado derecho del agredido á su frente y con poca distancia."

El funcionario de instrucción, con notable interés y habilidad, continuó practicando todas las diligencias que creyó conducentes al descubrimiento de los responsables del delito de homicidio á medida que los indicios aumentaban, y recibió tres indagatorias á José Ospina y su hermano Eleuterio y á Pablo Galeano. En las dos primeras declaraciones, los Ospinas negaron ser autores del hecho, ó su participación en la comisión del crimen. La misma conducta observó Galeano en las indagatorias que le fueron recibidas; no reconocieron el cadáver de Juan de la Cruz Hernández, que se les puso de manifiesto, sin embargo de que dicho Hernández era persona perfectamente conocida de ellos. Al fin el funcionario de instrucción logró de José Ospina, con acierto, que declarara en la tercera indagatoria, los antecedentes y el modo como se consumó el delito. Es éste el lugar de insertar lo conducente de dicha declaración, que corre de la foja 43 á la 45 del sumario, rendida en cuatro de Marzo de mil ochocientos noventa y dos.

..... "¿Conoce usted este rifle? Contestó: sí, señor. Este fué el que tuvo Eleuterio, mi hermano, el domingo último. Preguntado: ¿de quién es? Contestó: de Pablo Galeano. Preguntado: ¿cómo fué á su casa? Contestó: no supe; ocho días antes lo llevó mi hermano de donde Pablo Galeano. Preguntado: ¿qué hicieron usted y su hermano el domingo último? Contestó: el domingo salimos de "Cosme" mi hermano Eleuterio y yo como á las ocho de la mañana, y nos dirigimos á "Otusito," donde llegamos como á las diez del día. Un rato después, mi hermano Eleuterio se colocó al lado derecho del camino, yendo de esta cabecera para "Ocá," en un punto que estaba preparado por nosotros mismos del lado de allá del amagamiento á atisbar á Juan de la Cruz Hernández. Como á las doce del día pasó, y antes de llegar yo, le dije á mi hermano que no le tirara á ese hombre, porque tenía mucho miedo, y cuando oí fué la descarga. Una vez sucedido esto, entre los dos lo arrastramos por el amagamiento abajo, y depositámos el cadáver en una sepultura que los dos habíamos abierto el domingo anterior, es decir, ocho días antes; esto inducidos por un mal consejero llamado Pablo Galeano. Después del hecho, mi hermano Eleuterio y yo llorámos, horrorizados del hecho que habíamos cometido *uchados*

por Galeano. Salímos de aquel punto y llegámos pòr la tardecita á la casa de Galeano, quien le preguntó á mi hermano Eleuterio si yá estaba consumado el hecho, y mi hermano, con miedo, le contestó que sí; entonces Galeano dijo estas mismas palabras: "Gracias á Dios. (Este relato lo hizo el interrogado con aparente impavidez al principio, y luégo rompió á llorar). Preguntado: ¿qué otras personas los acompañaron á ejecutar el hecho? Contestó: nadie; los dos solos. Preguntado: ¿después de herido Hernández, le dieron algún golpe en la cabeza? Contestó: no, señor, inmediatamente murió. Preguntado: ¿qué expresiones vertió Hernández al sentirse herido, ó qué dijo al expirar? Contestó: yo no oí nada, señor, porque el susto fué espantoso. Yo creí haber recibido una herida mortal, pues quedé horrorizado. Preguntado: ¿Pablo Galeano sabía que ustedes habían preparado la sepultura, ó les ayudó? Contestó: sí, señor, sí sabía todo; pero no ayudó. Él no estaba sino por perjudicarnos á nosotros. Preguntado: ¿qué ofrecimientos ó promesas les hizo Galeano? Contestó: ninguna. Preguntado: ¿quién les preparó los alimentos que debían gastar ese día? Contestó: no trajimos alimentos de ninguna clase....."

Con fecha cinco de Marzo del mismo año, en que se le recibió la tercera declaración indagatoria á Eleuterio Ospina (fojas 48 á 50 del sumario), después de negar los hechos sobre los cuales se les hicieron varias preguntas, se determinó á confesarlo todo, probablemente persuadido de que su hermano José había descubierto el responsable del delito al ser interrogado de este modo..... "¿El domingo veintiuno de Febrero último, por la mañana, dónde amaneció usted? Contestó: amanecí en "Cosme" con Antonio, hijo de Mercedes Villegas, y muy de mañana fué Rafael Quirós á hacer un arreglo conmigo de diez cuartillas de roza, que tengo en compañía de su hermano, llamado José María Quirós, que está preso en Amalfi..... Ultimamente, quemada mi casa, quemada la ajena.

"Es un hecho que nosotros cometimos inducidos por consejos de Pablo Galeano, quien hace mucho tiempo nos está *uchando*, pues él mismo me prestó la escopeta ocho días antes del acontecimiento, y me dijo que fuera por ella antes de que la familia se levantara, para que no viera; lo cual hice yo. Me dió una caja con fósforos, y me dijo: si esos fósforos no sirven, en la culata de la escopeta, en el guarda-fósforos, hay unos que no faltan. Él sabía todo, y era él que me daba todas las instrucciones de cómo debía ejecutar las cosas. Me dijo que buscara un punto aislado donde no hubiera gente; que hiciera la sepultura en un día de la semana, y que extraviara el camino, para que nadie me viera; que le apuntara bien, y que él, después del hecho, me gratificaría; que si no hacíamos lo que él decía, es decir, sacar á Hernández del medio, porque era mal vecino; que éramos muy sinvergüenzas, y que no volviéramos á ocuparlo más. Como nosotros estábamos muy acosados y él nos servía, pues nos fiaba plátanos y nos ayudaba con lo que tenía en su casa, no queríamos perder su apoyo. Juan de la Cruz Hernández fué enemigo de nosotros hace mucho tiempo; pero últimamente fuimos muy amigos, y me fué muy bueno; él me servía bastante, y aunque yo no tuviera dinero, me llevaba de Remedios lo que necesitaba, aunque no tuviera dinero. Me daba plátanos, y yo le cociné muchas veces á sus peones y le di mi rancho para que entrojara maíz.

"En fin, éramos amigos íntimos, y Galeano nos hizo perder las relaciones por consejos que nos daba, diciéndonos que sí que éramos sinvergüenzas; que íbamos á la casa de Hernández, después de que había sido nuestro enemigo. Yo hice el tiro á Hernández, y después del hecho, me dió tánto miedo, que no me hallaba en ninguna parte; pues jamás nos habíamos visto en esos lances, y le decía á mi hermano José, que *ya nos habíamos sacrificado* por culpa de Galeano, quien nos había inducido al crimen. Mucho he recapacitado y negado, porque ese es mi deber; pero yo he visto que yá que nos vemos en estas circunstancias, debo al menos decir que el principal autor es Pablo Galeano, que con su ayuda y consejos, nos metió á nosotros como ignorantes y faltos de conocimiento. La escopeta que se me pone de presente, es la de Pablo Galeano, quien me la prestó el viernes 19 de Febrero último, al amanecer el sábado, pues yo dormí allá, la arregló con disimulo, y me dijo: véala, allá está; sáquela bien de mañana, para que la familia no vea. Yo fuí á darle una boleta para D. Constantino Zea, y él me dijo: ¡ah! y ¿ustedes no van á hacer aquello? y yo le dije que no; y entonces él me dijo, pero al siguiente día, cuando yo me venía: 'dele duro, cosa que no colée.' Me dijo, además, dándome un calabacito de totuma con unos fósforos: 'á éstos no les tenga confianza, porque faltan mucho; pero en la culata de la escopeta van dos, que son seguros.' Y en efecto, en el guarda-fósforos había dos de los que llaman de agua, los cuales gasté yo uno primero, botando un tiro, y el otro, en el acontecimiento. En seguida se le puso de presente la mochilita con pertrecho, de Galeano, y dijo, sacando el calabacito: éste, lo hice yo, y los dos fósforos de agua son de los mismos que hay en esta caja, señalando una que había en la mochila con fósforos. También llevé de esta cabuya para los tacos, señalando un montoncito que se separó, junto con el calabacito y la caja de fósforos, y se envolvieron en un papel. Preguntado: ¿qué otras personas son cómplices auxiliadoras ó encubridoras en el hecho que se investiga? Contestó: no, señor, fuera de Pablo Galeano, no hay más."..... .....

Pablo Galeano, como se expuso al principio, no se determinó á declarar cosa alguna referente al hecho que se averiguaba.

El Juez 2.° Superior del Distrito Judicial de Antioquia, á quien tocó en repartimiento este asunto, después de oír el dictamen del respectivo Agente del Ministerio Público, en el cual aparece la relación exacta de todas los circunstancias que precedieron á la perpetración del homicidio y de las que le siguieron, abrió causa criminal contra Eleuterio y José Ospina y Pablo Galeano, por los trámites del juicio en que interviene el Jurado por el delito de homicidio, perpetrado en la persona de Juan de la Cruz Hernández, ocurrida el día veintiocho de Febrero de mil ochocientos noventa y dos.

Nombrados y juramentados los defensores que los reos designaron, la causa siguió su curso legal, siendo de advertir que, respecto de pruebas, que pudieron destruír, ó por lo menos enervar la fuerza de los cargos deducidos en el auto de proceder, se limitaron los defensores á hacer recibir las declaraciones de varias personas, para probar la buena conducta anterior de los procesados; lo que demuestra evidentemente que no las tuvieron para patentizar la inocencia de sus defendidos. Puesta la causa en estado de ser sometida al fallo del Jurado, éste resolvió las cuestiones que se le propusieron en la forma siguiente:

Cuestiones relativas á Euleterio Ospina.

1.ª ¿Se ha cometido el delito de homicidio de que trata el artículo 586 del Código Penal, y que, conforme á la primera parte del 597 de la misma obra, alcanza grado máximo, por haberse verificado con alguna de las circunstancias de que hablan los numerales 1.°, 2.° y 3.° del mencionado artículo 586; delito que castiga el 598 del Código mencionado, perpetrado en la persona de Juan de la Cruz Hernández, la que ocurrió el día veintiocho de Febrero del corriente año, cerca al amagamiento de "Otusito," en el camino de "Ocá," Municipio de Remedios?

2.ª ¿Eleuterio Ospina es responsable de esta infracción?

3.ª ¿Eleuterio Ospina es autor principal?

Cuestiones relativas á José Ospina.

1.ª ¿Se ha cometido el delito de homicidio de que trata el artículo 586 del Código Penal, y que, conforme á la primera parte del 597 de la misma obra, alcanza grado máximo, por haberse verificado con algunas de las circunstancias de que hablan los numerales 1.°, 2.° y 3.° del mencionado artículo 586, delito que castiga el 598 del Código mencionado, perpetrado en la persona de Juan de la Cruz Hernández, lo que ocurrió el día veintiocho de Febrero del corriente año, cerca del amagamiento "Otusito," en el camino de "Ocá," Municipio de Remedios?

2.ª ¿José Ospina es responsable de esta infracción?

3.ª ¿José Ospina es encubridor?

Cuestiones relativas á Pablo Galeano.

1.ª ¿Se ha cometido el delito de homicidio de que trata el artículo 586 del Código Penal, y que, conforme á la primera parte del 597 de la misma obra, alcanza grado máximo por haberse verificado con algunas de las circunstancias de que hablan los numerales 1.°, 2.° y 3.° del mencionado artículo 586, que castiga el 598 del Código mencionado, perpetrado en la persona de Juan de la Cruz Hernández, lo que ocurrió el día veintiocho de Febrero del corriente año, cerca del amagamiento "Otusito," en el camino de "Oká," Municipio de Remedios?

2.ª ¿Pablo Galeano es responsable de esta infracción?

3.ª ¿Pablo Galeano es cómplice?

El Juez 2.° Superior del Distrito Judicial de Antioquia pronunció en diez y seis de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos, la sentencia definitiva que debía poner fin al juicio en primera instancia, de acuerdo con el *veredicto* del Jurado, y en consecuencia falló de este modo:

"En mérito de las anteriores consideraciones, dando aplicación á los artículos 22, 26, 27, 42, 55, 28, 73, 91, 74, 90, 86, 87, 88, 120 á 124, 586 y 598 del Código Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, se resuelve:

"1.° Condénase á muerte á Eleuterio Ospina, y al efecto, será pasado por las armas en el Municipio de Remedios;

"En su ejecución se cumplirán las prescripciones de los artículos 47 á 52 del Código Penal y la resolución del Gobierno publicada en el número 7,899 del *Diario Oficial;*

2.° Condénase á Pablo Galeano á la pena de trece años cuatro meses de presidio, que cumplirá en el correspondiente lugar de castigo. Además presenciará la ejecución de Eleuterio Ospina.

"El mismo Galeano pierde los derechos políticos, lo mismo que toda pensión y empleo público de que goce actualmente. Ambos reos, Eleuterio Ospina y Pablo Galeano, pagarán las costas procesales y la cantidad de mil pesos ($ 1,000) en que fueron avaluados los perjuicios á los herederos de Juan de la Cruz Hernández.

"Oportunamente se hará á favor de Galeano el cómputo por el tiempo de la detención;

"3.° Declárase libre de pena á José Ospina, por su participación en el homicidio de Hernández. Póngasele en libertad.

"Notifíquese esta sentencia, y si no fuere apelada por Eleuterio Ospina, se consultará."

Apelada la sentencia por los reos é igualmente por el defensor, Antonio José Restrepo, se les concedió el recurso en ambos efectos para ante el Tribunal Superior de Antioquia, y con noticia de las partes se verificó la remisión de la causa al Superior.

Repartida la causa en el Tribunal referido, se le dió curso por la tramitación establecida en la ley, y se terminó la segunda instancia, en la cual no se adujo prueba alguna, con la sentencia definitiva, que concluye así:

"Por tanto, de acuerdo con la opinión del señor Fiscal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, se confirma la sentencia apelada, con las siguientes advertencias:

"1.ª El arma con que se cometió el delito se aplicará como multa á favor del Estado;

"2.ª Eleuterio Ospina será ajusticiado, llegado el caso, en la plaza de la fracción de Belén de este Municipio, pues al Tribunal le asisten motivos de conveniencia pública para esta determinación, por lo muy frecuentes que se han hecho los homicidios en aquella localidad;

"3.ª Caso de que el citado reo Ospina sea favorecido con la conmutación de su pena en la de presidio, queda sujeto á la pérdida de todo empleo y de toda pensión, así como también á la privación perpetua de los derechos políticos.

"Notifíquese, y si por parte de Eleuterio Ospina no se interpusiere el recurso de casación en el acto de la notificación, consúltese con la Corte Suprema de Justicia."

Interpúsose, en efecto, por el reo Eleuterio Ospina, el recurso de casación, para ante esta Corte Suprema, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Antioquia, de que se ha hecho alusión, y concedido dicho recurso, el expediente ha sido remitido con noticia de las partes, á esta Superioridad.

El recurso se ha sustanciado como lo prescriben los artículos 388 á 391 de la Ley 105 de 1892.

Como en la presente causa que ha venido por recurso de casación interpuesto por el reo Eleuterio Ospina, en el acto de ser notificado de la sentencia del Tribunal, no concurre ninguna de las causales que expresa el artículo 370 de dicha ley, pues no es la sentencia recurrida violatoria de ley sustantiva ni de doctrina legal; ya sea la violación efecto de una interpretación errónea, ó ley de doctrina legal; ya de aplicación indebida de leyes ó de doctrinas legales; ni es, en concepto de la Corte, el veredicto del Jurado notoriamente injusto, supuesto que resulta de la causa plenamente comprobado el cuerpo del delito, es decir, el homicidio perpetrado en la persona de Juan de la Cruz Hernández, y también aparece comprobada la responsabilidad de Eleuterio Ospina, con su propia confesión, con la declaración de su hermano José Ospina, quien lo acompañó en el acto de la ejecución del crimen, y de muchos indicios vehementes que ponen en claro la culpabilidad del expresado reo; crimen consumado con varias de las circunstancias que caracterizan el asesinato, como son la premeditación, la sangre fría y alevosía, la Corte no encuentra en el proceso ni en la sentencia recurrida, motivo alguno legal para anular ésta, ó sea para casarla.

Y como tampoco ocurren las causales de nulidad de que trata el inciso 3.° del artículo 370 de la Ley 105 de 1890; la Corte, de acuerdo con el dictamen razonado del señor Procurador general de la Nación, y en vista de las consideraciones que preceden, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, decide que no hay lugar á infirmar la sentencia condenatoria aludida, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia en diez y seis de Noviembre del año próximo pasado.

Se advierte para en lo sucesivo, que el Código Penal vigente no establece como pena necesaria para el cómplice, el que éste presencie la ejecución del autor principal que sea condenado á muerte.

Publíquese, notifíquese, insértese en la *Gaceta Judicial* y pásese original el proceso al Ministerio de Justicia para que le dé el curso constitucional.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—JOAQUÍN MARTÍNEZ E.—JESÚS M. QUINTERO P.

Gabriel Rosas, Secretario.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, catorce de Julio mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: María Josefa A. Casanova, hermana legítima del militar de la Independencia, Antonio Casanova, pide á la Corte, por medio de apoderado, que se le conceda la recompensa unitaria definitiva de tres mil ochocientos cuarenta pesos ($ 3,840), sueldo correspondiente á un Sargento Mayor en cuatro años, por creerse asistida del derecho que consagra el inciso 2.°, artículo 1.° y su concordante de la Ley 84 de 1890, sobre recompensas militares.

Ha presentado en justificación de esta demanda, entre otros comprobantes, la hoja de servicios del expresado militar, de la cual aparece que éste sentó plaza desde mil ochocientos veintiséis, en calidad de Sargento 1.° aspirante, y que concurrió á varios hechos de armas que se puntualizan en dicha hoja. Además, aparecen acreditados los siguientes hechos: 1.° el estado civil de la demandante como hermana del Teniente-Coronel Antonio Casanova; 2.° la circunstancia de haber sido protegida por él; 3.° que no existe hoy ninguna otra persona con derecho preferente á la recompensa que se

reclama, y 4.° que está sumamente pobre y es viuda de Prudencio Duque, desde el año de mil ochocientos cuarenta y ocho.

Fundado en este último hecho, opina el señor Procurador general que debe declararse inadmisible la demanda relacionada, por cuanto la disposición en que ella se apoya sólo se refiere á las hermanas célibes, y habiendo sido casada la Casanova, no está en el caso de invocarla en su favor. La Corte estima correcta esta observación y la acoge para absolver á la Nación del cargo deducido, en lo cual no se hace otra cosa que corroborar la doctrina que tiene yá sentada á este respecto en muchos de sus fallos.

Por lo expuesto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el parecer del señor Procurador general, rechaza la demanda propuesta, sobre recompensa militar de que se ha hecho mérito.

Notifíquese, cópiese en el libro respectivo, publíquese en la *Gaceta Judicial* y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA. — JESÚS CASAS ROJAS. — MANUEL E. CORRALES. — ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—JOAQUÍN MARTÍNEZ E.—JESÚS MARÍA QUINTERO P.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Julio diez y ocho de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: En veintitrés de Septiembre de mil ochocientos ochenta y siete, Camilo Domínguez, en su propio nombre y como heredero y albacea de su finado padre, del mismo nombre, y también á nombre de sus hermanos, Celia, Adelinda, Celsa y Víctor Manuel Domínguez, entabló demanda ante el Juez del Circuito de Buga, contra el Tesoro de la República, por la suma de ciento ochenta y dos mil quinientos sesenta y cinco pesos ($ 182,565), valor de las expropiaciones que se le hicieron al citado Camilo Domínguez, en la guerra de 1860 á 1863, en la Provincia de San-Juan, del actual Departamento del Cauca.

El mencionado Juez del Circuito de Buga, en auto de veintiocho del mismo mes, declaró sin lugar la acción propuesta y ordenó archivar el expediente. Esta resolución se notificó al Fiscal y al demandante, y en la misma fecha se archivaron las diligencias.

Sin embargo, el doce de Junio de 1888 ocurrió José María Calderón, presentando estas mismas diligencias, que debían estar archivadas en el Juzgado del Circuito de Buga, á la Comisión de suministros, titulándose apoderado de Camilo Domínguez Sánchez, sin presentar poder, y solicitando se le tuviera como apoderado legal en tal reclamación, como si se tratara de un asunto pendiente en el cual debía recaer alguna decisión.

En doce de Noviembre de mil ochocientos noventa, ocurrió á la misma Comisión César Sánchez, con poder de Teodomiro Calderón y con un documento privado, por medio del cual Camilo Domínguez declara que cede y traspasa á T. Calderón los reclamos que contra la Nación tiene establecidos como albacea de su padre, Camilo Domínguez, entre ellos uno correspondiente á la guerra de mil ochocientos sesenta, por más de ciento ochenta mil pesos ($ 180,000). Este documento lleva fecha de nueve de Diciembre de mil ochocientos ochenta y nueve (1889). Sánchez sólo pidió que se notificase la cesión al Fiscal, pero ni estableció demanda ni reprodujo la yá archivada, ni siquiera la irregular solicitud de José María Calderón.

Se ha seguido luégo una larga controversia ante la Comisión de suministros, en la cual se ha debatido más bien que la existencia del crédito reclamado, el dominio de él, entre el representante de Teodomiro Calderón y algunos herederos de Camilo Domínguez, padre de Camilo Domínguez Sánchez.

La Comisión ordenó al fin tener como cesionario legítimo y dueño del crédito á Teodomiro Calderón, y por resolución de trece (13) de Enero de mil ochocientos noventa y dos (1892), reconoció á favor de los herederos de Camilo Domínguez, ó de su *representante legal* César Sánchez N., la suma de noventa mil pesos ($ 90,000), y absolvió á la Nación del resto del cargo.

El Ministerio del Tesoro con quien se consultó, en cumplimiento de la ley, la decisión de la Comisión, resolvió en veintiséis de Febrero de este mismo año, lo siguiente:

"1.° El señor Julio Fernández M., ó sus sustitutos, señores Luis A. Robles y Gil Colunje, tienen derecho á continuar siendo parte en esta reclamación, pues se admite la sustitución que el primero hizo á los segundos, del poder que se le había conferido;

"2.° Reconócese á cargo del Tesoro nacional y á favor de quien ó quienes, por cualquier título legítimo hayan sucedido á los señores Camilo Domínguez y Petronila Sánchez, en el crédito que se reclama, la suma de cuarenta y dos mil pesos ($ 42,000), procedente de expropiaciones sufridas en la guerra de mil ochocientos sesenta á mil ochocientos sesenta y tres (1860 á 1863), por el señor Camilo Domínguez;

"3.° La Sección segunda de este Ministerio no hará el reconocimiento de la suma expresada sino á favor de la persona ó personas que presenten sentencia judicial ejecutoriada que las declare dueños de él. Esto, sin perjuicio de lo que resuelva la Corte Suprema, si esta decisión fuere revisada por ella."

De la anterior resolución apelaron el apoderado de Teodomiro Calderón y el de los otros interesados. Otorgado el recurso para ante esta Suprema Corte, se ha sustanciado con audiencia de las partes.

Desde el veinte (20) de Mayo del año próximo pasado se dictó por la Corte un auto para mejor proveer con el objeto de averiguar, por medio de informes de algunos empleados y declaraciones de testigos, si se había establecido anteriormente algún juicio sobre las expropiaciones que son materia de esta reclamación y si estaba pendiente ó terminado. El resultado de la indagación ha dado á conocer que no hay actualmente otra reclamación, que la presente, y que con toda probabilidad no se entabló tampoco en oportunidad ante el Poder Judicial.

Las partes han presentado ante la Corte muchas pruebas y alegatos encaminados unos y otros á reforzar la prueba de las expropiaciones ó á infirmar ó apoyar la cesión del crédito hecha por Camilo Domínguez á Teodomiro Calderón.

Es yá tiempo de fallar el negocio en definiva.

Lo primero que debe determinarse es si la reclamación se intentó ó no oportunamente.

La Comisión y el Ministerio la han considerado comprendida probablemente en la disposición del artículo 1.° de la Ley 36 de 27 de Febrero de 1888, que da jurisdicción á la Comisión de suministros para conocer de las reclamaciones procedentes de la guerra de mil ochocientos sesenta, sea que tales reclamaciones se hubieren instaurado ante el Poder Judicial, ante autoridades administrativas ó ante la misma Comisión, hasta la expedición de la misma ley.

La Corte ha resuelto yá en otras ocasiones que la disposición citada habla de asuntos que estuvieran pendientes, ó sobre los cuales, debiera recaer alguna resolución al tiempo de expedirse la ley y no de negocios yá fenecidos ó archivados, como lo estaba el presente, á los cuales no ha dado nueva existencia la ley en cuestión.

Empero, como de la resolución del Ministerio del Tesoro sólo apeló la parte demandante, y la apelación se entiende limitada á lo que perjudica á dicha parte, la Corte no puede hacer variación respecto de la suma reconocida, porque hay en cuanto á ella cosa juzgada; pero tampoco puede tomar en consideración las pruebas aducidas para el efecto de aumentar el monto del reconocimiento, por lo mismo que estima qué había caducado ó prescrito el derecho de los demandantes cuando se introdujo la reclamación ante la Comisión.

En cuanto á lo resuelto por el Ministerio del Tesoro en lo relativo á la propiedad del crédito reconocido, ó sea al derecho para percibir la respectiva orden de pago, la Corte estima justa y razonable la decisión de dicho Ministerio, porque en estas reclamaciones, que tienen carácter de contencio-administrativas, sólo se deciden derechos entre la República y los particulares, y no las controversias entre los particulares sobre propiedad del crédito que ellos de común acuerdo hacen valer contra la Nación: esas controversias son de la com.

petencia de los Jueces ordinarios. Si habiendo disputa entre los interesados sobre si el crédito reconocido pertenece á todos ó alguno de ellos exclusivamente, se resuelve administrativamente sobre el dominio, á lo que equivale la expedición y entrega de la orden de pago, es claro que se hace de mejor condición al que se prefiere para la entrega, porque entra desde luégo en la posesión de la cosa disputada en perjuicio de los que pretenden mejor derecho á ella, sin que se les dé siquiera una garantía que ponga á cubierto su derecho en caso de que lo reconozca el Poder Judicial.

Cierto es que ordinariamente en esta clase de reclamaciones se reconoce y manda pagar el crédito á los cesionarios ó demandantes, pero esto sucede cuando otros coherederos, cesionarios ó condueños no disputan el derecho al dominio de tales créditos, como sucede en la reclamación de que se trata.

La Corte, para no avanzar opiniones sobre una cuestión cuya solución puede corresponderle más tarde, se abstiene de emitir juicio acerca de la validez de la cesión hecha por Camilo Domínguez á T. Calderón, sobre si Domínguez es efectivamente albacea de su padre, sobre las facultades que tuviera para disponer de un crédito de la sucesión y, en fin, sobre la legalidad de la forma en que se hizo dicha cesión; pero no puede prescindir de la importante observación hecha por el Ministro del Tesoro, relativa á la omisión de los derechos que pudiera tener Petronila Sánchez, mujer del finado Camilo Domínguez, que vivía al tiempo en que se verificó la expropiación de bienes que pertenecían á la sociedad conyugal, y que, según se colige, había muerto cuando tuvo lugar la cesión del crédito disputado.

Sólo una adición debe hacerse á la resolución apelada, con el objeto de abrir á los interesados el camino para un arreglo ó transacción extrajudicial sobre la propiedad del crédito reconocido; la citada resolución no reconoce otra prueba para justificar la expedición de la orden de pago y entrega á determinadas personas, que una sentencia judicial; pero no hay inconveniente en que una vez que los herederos de Camilo Domínguez y Petronila Sánchez se pongan de acuerdo entre sí y con los que pretenden derecho á título de cesionarios, se entregue la orden de pago ó los bonos correspondientes, á la persona ó personas que designe la transacción.

En tal virtud, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la resolución apelada, en cuanto por ella se decide que ninguno de los que pretenden derecho exclusivo al crédito que se reclama, tiene derecho para que se le entregue la orden de pago.

Se abstiene de resolver cosa alguna sobre aumento de la cantidad reconocida por el Ministerio del Tesoro, y dispone que la entrega de la orden de pago ó de los bonos por la suma de cuarenta y dos mil pesos ($ 42,000), se haga á la persona ó personas que por virtud de sentencia judicial ejecutoriada ó por convenio entre los que se han disputado en esta reclamación el derecho de la propiedad del crédito de que en ella trata, sean reconocidas como dueños de dicho crédito.

Publíquese esta sentencia en la *Gaceta Judicial*, déjese copia de ella y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—JOAQUÍN MARTÍNEZ E.—JESÚS MARÍA QUINTERO P. *Gabriel Rosas*, Secretario.

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, Julio diez de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Por escrito de fecha 13 de Marzo de 1890, estableció Eduardo Casas ante el Juez del Circuito del Guamo, demanda ordinaria en representación de Ederina Nieto, madre legítima del menor Fermín Buenaventura, vecino del Chaparral, para que se declare á favor del último el patronato ó capellanía mercenaria que mandó fundar Francisca de Soria y Oviedo, por cláusula testamentaria, desde el año de 1798, y que se fundó, en efecto, por escritura pública de 15 de Agosto de 1815, por los albaceas de Josefa Tapia, hija de aquélla, con la suma de mil setecientos pesos ($ 1,700), y en los terrenos denominados "Cuidadentro."

El hecho fundamental que sustentó esta acción, estriba en que la fundadora designó por capellanes ó patronos á sus descendientes por línea recta, prefiriendo el mayor al menor, y el varón á la hembra.

Previa la secuela que para esta clase de juicios señalaban las leyes á la sazón vigentes, y dándole á la vez intervención al Ministerio público, se desató el juicio en primera instancia por la sentencia de diez de Diciembre del año próximo pasado, folios 49 á 54 del cuaderno principal, en la cual se declara al menor Fermín Buenaventura, patrono de la capellanía expresada, " por lo que respecta al principal de mil setecientos pesos y réditos al cinco por ciento anual reconocidos por el Tesoro público nacional, á virtud de la redención hecha por Diego María Galindo de la capellanía laical de que hablan los testamentos de las señoras Francisca de Soria y Oviedo y Josefa Tapia y la escritura pública otorgada en la Parroquia del Chaparral el diez y ocho de Agosto de mil ochocientos quince, por los señores doctor José María Bustamante é Ignacio Cuéllar, en su carácter de albaceas fideicomisarios de D.ª Josefa Tapia."

En el supuesto de que la Nación está interesada en este asunto, por virtud de la redención de que se habla en el aparte anterior, dispuso el Juez del conocimiento la cuantía del fallo en referencia con esta Suprema Corte, en donde fué recibido el expediente, y se han surtido los trámites que deben preceder á la resolución definitiva. En consecuencia, procede á dictar la que sea legal.

Es obvio que en las capellanías cuyo principal se ha redimido en el Tesoro público, sólo corresponde al Gobierno la obligación de pagar los réditos al patrono ó capellán, en manera alguna la facultad de declarar á quién toque el derecho de gozarlos. Por consiguiente, no caen bajo la jurisdicción de la Corte en segunda instancia, las controversias entre particulares concernientes á la provisión de tales capellanías, porque en ello no se mezcla para nada el interés de la Nación.

Verdad es que el censo pertenece á ésta desde que se redimió en su Tesoro, de acuerdo con la Ley de 30 de Mayo de 1851, que autorizaba al Poder Ejecutivo para hacer uso de varios arbitrios rentísticos; pero de ahí no se infiere que la Nación deba inmiscuírse en la calificación de los que hayan de suceder en el patronato, para el efecto de percibir los cánones devengados ó que se devenguen; y como la demanda versa sobre este punto, es clara la incompetencia de la Corte para revisar, por vía de consulta, la sentencia del Juez del Circuito del Guamo, de que se ha hecho mérito. Así lo cree también el señor Procurador general, y pide expresamente, que este Supremo Tribunal se declare sin facultad para intervenir en el asunto.

Por lo expuesto, la Corte, en consonancia con el dictamen fiscal, se abstiene de examinar el fallo consultado, por no referirse á ningún negocio contencioso en que figure como parte la Nación.

Notifíquese, cópiese en el libro respectivo, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente al Juzgado de su origen.

LUCIO A. POMBO.— LUIS M. ISAZA. — JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO. — JESÚS MARÍA QUINTERO P.— *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintidós de Julio de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Ante el Juez 1.º del Circuito de Barranquilla, se

presentó Francisco de P. Manotas, en cinco de Marzo de mil ochocientos noventa, con el carácter de cesionario de Manuel Esteban Márquez Romero, y estableció juicio sumario, para que se declarase á su cedente, heredero de Ricardo Márquez, en calidad de hijo natural reconocido de éste; y al efecto, legitimó su personería para demandar con ese carácter, con la escritura pública número 411, otorgada el veintiocho de Noviembre de mil ochocientos ochenta y nueve, ante el Notario público 1.°, principal, de dicho Circuito, instrumento que obra á los folios 24, 25 y 26 de estos autos. Surtidos los trámites correspondientes á este juicio, en el cual intervino el Ministerio Público, se dictó sentencia en veinticuatro de Mayo del año en referencia, y se declaró no probada la filiación de Manuel E. Márquez R.; y aunque se recurrió de esa providencia al Tribunal del Distrito Judicial de Bolívar, fue confirmada por el fallo de seis de Agosto del mismo año.

Con motivo de tales decisiones, propuso el citado Manotas la demanda ordinaria que obra al folio 4 del legajo número 1.° de este expediente, en la que, con el propio carácter de cesionario de los derechos hereditarios de que se ha hablado, pidió que se resolviera en definitiva la controversia suscitada, y dirigió la acción contra Manuel María, José de la Trinidad y Antonio Márquez y Eladia Márquez de Insignares, declarados yá herederos de Ricardo Márquez. Los demandados negaron el nuevo postulado y opusieron la excepción perentoria de cosa juzgada, fundados en la resolución que había recaído en el juicio sumario; y continuó así la secuela del negocio hasta que recayó el fallo de primera instancia, que en su parte dispositiva, es como sigue: "Administrando, pues, justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, este Juzgado declara: 1.° que no está probada la excepción perentoria de cosa juzgada, opuesta por el demandado, y 2.° que Manuel E. Márquez R. no es hijo natural reconocido del finado Ricardo Márquez; y que, por lo tanto, no tiene derecho á heredar á éste.

"En consecuencia, absuelve á los señores doctores Manuel María y Antonio J. Márquez y José de la T. Márquez y á la señora Eladia J. Márquez de Insignares de la presente demanda.

"Y teniendo en cuenta que muy bien ha podido provenir esta litis de lo no muy frecuente que es el asunto que la ha motivado, por lo cual el Juzgado estima que no es notoria la injusticia de la pretensión del demandante, absuelve á éste de las costas de este juicio."

Del fallo anterior interpuso Manotas apelación para ante el inmediato Superior. Concedido el recurso por auto de veinte de Enero del año próximo pasado (folio 131, legajo número 1.°), y elevados los autos al Tribunal de Bolívar, previa la ritualidad que señala la ley para la segunda instancia, profirióse allí la sentencia de cinco de Diciembre de mil ochocientos noventa y dos, en que se resuelve lo siguiente: "En mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, se confirma la sentencia apelada. Con costas."

Habiendo interpuesto la parte agraviada, en tiempo oportuno, el recurso de casación para ante esta Suprema Corte, se le concedió por auto de veintitrés de Enero del año en curso (folio 163, legajo citado). Repartido el asunto y verificada la sustanciación especial que él comporta, no sin haberle dado debida aplicación al artículo 11 de la Ley 100 de mil ochocientos noventa y dos, sobre reformas judiciales, pasa á examinarse si el recurso se interpuso por persona hábil, y si concurren las circunstancias que requería el artículo 366 de la Ley 105 de 1890, en vigor cuando se introdujo y admitió aquél, que es la única aplicable; porque si ellas faltan, la Corte debe limitarse simplemente á negar su admisión.

Las circunstancias exigidas por ese artículo son éstas: 1.ª que la sentencia se funde ó deba fundarse en las leyes que rijan ó hayan regido en toda la República, á partir de la vigencia de la Ley 57 de mil ochocientos ochenta y siete; ó que se funde ó deba fundarse en leyes de los extinguidos Estados que sean idénticas en esencia á las nacionales que estén en vigor; 2.ª que la sentencia verse sobre hechos relativos al estado civil de las personas, ó sobre intereses particulares en que la cuantía del juicio sea ó exceda de tres mil pesos ($ 3,000), y 3.ª *que haya contrariedad en las sentencias de primera y segunda instancia* en cuanto á la inteligencia ó aplicación de las leyes en que se apoyan ó en cuanto á lo principal del pleito.

Ahora bien, el señor Procurador general, á quien se dió vista de este juicio, por tratarse en él de la apreciación de la prueba del estado civil de las personas, es de concepto que debe rechazarse el recurso, por ser del todo conformes las dos sentencias de primera y segunda instancia, y por haberse interpuesto éste antes de la vigencia de la Ley 100 de mil ochocientos noventa y dos, que empezó á regir desde el primero de Marzo del corriente año. Sirven de apoyo á esta opinión las reiteradas decisiones de la Corte en el mismo sentido, esto es, que la ley últimamente citada, no puede aplicarse sino á los recursos que se hayan interpuesto después de su sanción, so pena de violar la ejecutoria de la sentencia, contra la cual no concedía ningún recurso la ley anterior en el caso especial de que se trata.

Salta á la vista que en la decisión del Tribunal concurren las circunstancias primera y segunda de que se ha hecho alusión, siendo, además, claro que la parte que interpuso el recurso lo hizo en tiempo oportuno y con facultad legal para ello. Mas como falta la circunstancia de ser contrarias las dos sentencias de primera y segunda instancia en cuanto á la inteligencia ó aplicación de las leyes en que se apoyan, ó en cuanto á lo principal del pleito, es evidente que no tiene cabida el remedio extraordinario que la ley consagra con el fin principal de uniformar la jurisprudencia y también con que el de que se enmienden los agravios inferidos por los fallos definitivos de los Tribunales Superiores, cuando concurren las causales que la misma ley determina.

En efecto, tanto el Juez del Circuito de Barranquilla como el Tribunal sentenciador, apoyan sus decisiones en la Ley 7.ª, Parte 5.ª de la Recopilación de Bolívar, reformatoria del Código Civil de ese extinguido Estado, y en las demás disposiciones generales de esta obra, para llegar ambos á la conclusión de que no está probado el reconocimiento de hijo natural, en que se apoya principalmente la demanda; y siendo patente la conformidad de las dos sentencias, no sólo en la parte expositiva, sino también en la dispositiva, el recurso es de todo punto improcedente y no debe admitirse. No empece á este razonamiento el que, para reforzar los fundamentos del fallo, hubiera el Tribunal hecho uso de nuevos argumentos é invocado nuevas leyes que no se tuvieron en cuenta en primera instancia, por cuanto esto no implica desacuerdo en lo sustancial.

Por las consideraciones anteriores, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de conformidad con el dictamen del señor Procurador, que se reproduce, declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Francisco de P. Manotas contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bolívar, proferida el cinco de Diciembre de mil ochocientos noventa y dos, en el juicio ordinario promovido por Manotas contra los herederos de Ricardo Márquez.

Notifíquese, déjese copia, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente al Tribunal de su origen.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—JOAQUÍN MARTÍNEZ E.—JESÚS MARÍA QUINTERO P.

Gabriel Rosas, Secretario.

AVISO IMPORTANTE.

Con el número 416, que contendrá el índice, termina el tomo 8.° de la GACETA JUDICIAL.

IMPRENTA DE ANTONIO M. SILVESTRE.
Director, Tomás Galarza.

REPÚBLICA DE COLOMBIA.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AÑO VIII | Bogotá, 25 de Agosto de 1893. | NS. 410-411.

CONTENIDO.

Págs.

PENA CAPITAL.

Declárase no haber lugar á casar la sentencia pronunciada por el Tribunal de Cundinamarca en la causa seguida contra Horacio y Arturo Sáenz, por asesinato. (Magistrado ponente, doctor Fernández de Soto, quien fué comisionado por el señor Presidente de la Corte, para redactar el proyecto de sentencia, en virtud de no haber admitido la mayoría de la Corte el proyecto presentado por el señor Magistrado sustanciador, doctor Casas Rojas)..... 369

Voto salvado en el fallo anterior por el señor Magistrado doctor Casas Rojas..... 372

Voto salvado en el mismo fallo por el señor Magistrado doctor Corrales..... 377

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Revócase la resolución dictada por el Ministerio del Tesoro en la demanda propuesta por Enrique Moreno y otros, sobre pago de unas expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas). 378

Niégase una recompensa á Matilde Rivera de Pérez. (Magistrado ponente, doctor Joaquín Martínez E.)..... 379

Confírmase la resolución dictada por el Ministerio del Tesoro, en la reclamación de Pantaleón González Ospina, sobre pago de unos suministros. (Magistrado ponente, doctor Isaza)..... 379

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Declárase no haber lugar á suspender las Ordenanzas números 27 de 1890 y 5.ª de 1892, expedidas por la Asamblea de Panamá. (Magistrado ponente, doctor Quintero P.)..... 379

Voto salvado en la resolución anterior por el señor Magistrado doctor Casas Rojas..... 381

NEGOCIOS CRIMINALES.

Declárase que no hay lugar á seguir causa criminal contra José Inocencio Calero, Prefecto de la Provincia de Buga, por los cargos de que le acusó Cayetano Delgado. (Magistrado ponente, doctor Pombo)..... 381

Confírmase el auto de sobreseimiento proveído por el Tribunal de Cundinamarca en el sumario instruído contra Carlos Sampedro, como Secretario del Juzgado 2.º Superior, por pérdida de varios procesos criminales. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas)... 382

NEGOCIOS VARIOS.

Acta de la diligencia de visita practicada por Su Señoría el Presidente de la Corte el 31 de Julio de 1893..... 383

GACETA JUDICIAL.

PENA CAPITAL.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, Agosto veintidós de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: El Juez 2.º Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, por auto de veintiuno de Julio de mil ochocientos noventa y uno, declaró con lugar á formación de causa criminal, con intervención del Jurado para la calificación de los hechos, contra Horacio y Arturo Sáenz, por los delitos de homicidio y heridas de que tratan, respectivamente, los capítulos 1.º y 2.º, título 1.º, libro 4.º del Código Penal de mil ochocientos cincuenta y ocho, y demás leyes que lo adicionan y reforman. Apelado este auto por los procesados y sus defensores, para ante el Tribunal del mismo Distrito Judicial, previa la tramitación correspondiente, fué confirmado por esa Superioridad, en catorce de Septiembre del año primeramente citado, y se surtió la causa en la forma prevenida en el título 6.º, capítulo 1.º, libro 3.º de la Ley 57 de mil ochocientos ochenta y siete.

A vuelta de algunos incidentes relativos á la prórroga del término probatorio y al reemplazo de alguno de los Jurados sorteados, incidentes de que tuvo conocimiento el Tribunal, se celebró el juicio en varios días hábiles hasta que el día catorce de Julio de mil ochocientos noventa y dos, constituído el Jurado en sesión secreta, resolvió las cuestiones que le fueron propuestas en cuatro series, referentes á los dos acusados y á los delitos materia del juicio, en la siguiente forma:

1.º Que se ha cometido el delito de asesinato perpetrado en la persona de Rafael Quevedo M., en el sitio de "Juntas de Apulo," el veintisiete de Abril de mil ochocientos noventa y uno, delito que define el artículo 240 del Código Penal de mil ochocientos cincuenta y ocho, vigente al tiempo en que se cometió el hecho, con la circunstancia tercera del mismo artículo; que este delito alcanza el grado máximo de delincuencia, conforme á los artículos 216, 217 y 221 de la Ley 153 de mil ochocientos ochenta y siete, y es el mismo que castiga el artículo 441 del Código Penal citado;

2.º Que Horacio Sáenz es responsable de esta infracción, y

3.º Que es autor principal.

Declaró también el Jurado responsable á Arturo Sáenz, hermano de aquél, del delito en referencia como auxiliador; y que Horacio es, además, autor principal del delito de heridas causadas á Antonio María Hinestrosa, conforme al artículo 517 del Código Penal supracitado.

Atemperándose el Juez Superior á este veredicto, y dando cumplimiento al artículo 324 de la Ley 57, pronunció sentencia el diez y nueve de Julio del propio año de mil ochocientos noventa y dos, folios 64 á 79, sentencia que en su parte resolutiva termina así:

"1.º Condénase al señor Horacio Sáenz, como autor principal del delito de asesinato perpetrado en la persona del señor Rafael Quevedo M. á sufrir la pena capital, en los términos de los artículos 232 á 235 de la Ley 153 de 1887;

"2.º Previa calificación del delito en primer grado, se condena á este mismo individuo, además, á sufrir, en caso de conmutación de la pena capital, la de seis meses de prisión que le corresponde, según el artículo 517 del Código Penal de mil ochocientos cincuenta y ocho, por el delito de heridas, perpetrado en la persona del señor Antonio María Hinestrosa, la cual sufrirá en el Panóptico de esta ciudad. En este mismo caso (en el de conmutación), esta pena se reducirá, como lo dispone el artículo 127 del Código Penal de mil ochocientos cincuenta y ocho, á la de dos meses de presidio, y quedará, además, condenado: á la privación de todo destino, cargo ó empleo público que actualmente ejerza, y de toda pensión pagada por la República, y á la pérdida de los derechos políticos;

"3.º Condénase al señor Arturo Sáenz, como auxiliador del delito de asesinato y previa calificación en tercer grado, á sufrir, en el Establecimiento de castigo arriba citado, la pena de diez años de presidio, y, además, las accesorias señaladas en el artículo 22 del precitado Código, en los mismos términos arriba expresados;

"4.º Habiendo declarado el Jurado que el señor Arturo Sáenz no es responsable del delito de heridas, se le absuelve de este cargo;

"5.º Condénase también á los señores Horacio y Arturo Sáenz al pago de las costas procesales, resarcimiento é indemnización de los daños y perjuicios sufridos por la comisión del delito y al pago de cincuenta y cinco pesos mensuales á

la señora madre del señor Rafael Quevedo M., mientras viva, que es el medio aritmético resultante de los diferentes avalúos hechos por los peritos (artículo 653 del Código Judicial, en concordancia con el 2021 del mismo y 113 de la Ley 57 de 1887). Igualmente se les condena á pagar al señor Antonio María Hinestrosa, la suma de cuatro pesos por cada uno de los días en que estuvo imposibilitado para trabajar, según el avalúo hecho por la mayoría de los peritos (artículo 653 citado).

"El tiempo que los mencionados Sáenz han estado detenidos, se les computará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 363 de la Ley 105 de 1890.

"Las armas con que se ejecutó el delito se aplicarán á la República (artículo 66 del citado Código)."

En el acto de la notificación manifestaron los reos y sus defensores que apelaban de este fallo é interponían de una vez los recursos de injusticia notoria y nulidad; y habiéndose concedido la alzada para ante el inmediato Superior, en el efecto correspondiente, hubo de ventilarse el incidente sobre injusticia notoria, y decidido éste por las dos Salas del Tribunal, con la resolución de no existir tal injusticia, se surtió la apelación y se confirmó la sentencia de primera instancia, de que se ha hecho mérito, por la que profirió el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, el trece de Diciembre de mil ochocientos noventa y dos, en la cual declara esa Corporación, que la causa no adolece de ninguna de las informalidades alegadas para invalidar el procedimiento, y que estando el fallo del Juez Superior de acuerdo con el veredicto del Jurado, y obedeciendo á la terminante disposición del artículo 324 de la Ley 57 prenotada, el Tribunal no tiene ninguna observación que hacerle y lo aprueba.

Contra esta nueva determinación interpusieron el defensor de Horacio Sáenz y éste mismo el recurso de casación para ante esta Suprema Corte, al cual se adhirió el defensor de Arturo Sáenz, á pesar de la disposición del artículo 368 de la Ley 105 de 1880, sobre reformas á los procedimientos judiciales, que limita el recurso extraordinario de que se trata, en materia criminal, á las sentencias que se pronuncien por los Tribunales Superiores por la comisión de alguno de los delitos designados en el artículo 29 de la Constitución, si en dichas sentencias se impone pena de muerte. Otorgado el recurso y sustanciado como ha sido con las fórmulas que las leyes consagran, sin pretermitir ni aquélla que es potestativa de la Corte, procede ésta á examinar las causales alegadas por las partes recurrentes como fundamento que, á su juicio, infirman la sentencia que impone la pena capital al primero de los reos expresados, y lo hará al propio tiempo y en lugar oportuno, como es de su deber, respecto de la causal expuesta por el Magistrado sustanciador, con el objeto de infirmarla también, para consignar el motivo de la disidencia ó desacuerdo ocurrido con él y las razones que sustentan el fallo de la mayoría de este Supremo Tribunal, ya que la admisión del recurso es punto poco menos que controvertible desde que la Corte tiene declarado, en casos análogos, que los recursos de casación fundados en la causal 2.ª del artículo 370 de la Ley 105, antes invocada, pueden progresar cuando se han interpuesto durante la vigencia de esa ley, como sucede con el presente.

Ante todo se observa, que aunque la defensa dedujo varios motivos de nulidad en el procedimiento de la causa, alguno de los cuales pudiera ser capítulo de ca ación, ésta se apoya únicamente en la citada causal 2.ª del artículo 370 de la Ley 105, y es evidente, como lo expresa el señor Procurador general, por otra parte, que esos motivos de nulidad se hacen provenir de omisiones ó irregularidades que no alcanzan á producirla ó no son alegables en el estado actual del juicio, ó han sido suplidas ó subsanadas por medio de actos expresos suficientes á excluir el cargo de haberse cohibido ó frustrado de alguna manera los derechos de la defensa, que sería lo único que pudiera dar lugar á invalidar la sentencia recurrida por la omisión de alguna de las formalidades ó garantías designadas en los ordinales 1.°, 3.°, 4.°, 5.°, 6.° y 7.° del artículo 264 de la Ley 57 de 1887.

Ahora, la injusticia notoria del veredicto del Jurado se hace consistir en que, entre el occiso Quevedo y los Sáenz, había precedido una ardiente polémica por la prensa y un reto formal dirigido por el primero á Horacio, al rotularle una de las publicaciones que hizo contra el padre de los hermanos Sáenz y contra éstos, y en una carta que se dice escribió al mismo Horacio y que no se ha presentado en el juicio. De estas premisas deducen la defensa y el señor Procurador, quien se espacia en prolijas disquisiciones jurídicas, que no hubo premeditación en el homicidio y que el delito no alcanza el grado máximo de gravedad ó delincuencia en que fué declarado por el Jurado; y todavía se va más lejos, pues de los antecedentes apuntados se hace derivar una riña ó pelea provocada por Quevedo, y se dice que el homicidio ejecutado en la persona de éste, dado que concurrieran las circunstancias de asesinato, estaría comprendido en el caso 9.° del artículo 586 del Código Penal que hoy rige, reputado como menos grave en el artículo 597 de allí, y que no se castiga, por ende, con la pena de muerte.

Las circunstancias del hecho imputado á Horacio Sáenz, según la relación de muchos testigos oculares, están fielmente relatadas en la sentencia de primera instancia, y pueden resumirse así: los Sáenz se dirigieron á las "Juntas de Apulo" el veinticinco de Abril de mil ochocientos noventa y uno, con el objeto plausible de atender á su padre, que estaba gravemente enfermo, cosa que supieron por un telegrama dirigido á Horacio en la mañana de ese día por Parménides Becerra y Simón Aza. El viaje fué rápido, pues sólo se detuvieron en La-Mesa, en donde Horacio compró una peinilla (sable) y dos cuchillos, á pesar de que iban provistos de sendos revolvers; rindieron su viaje en la noche del mismo día, y al siguiente permanecieron en "Las-Juntas." Algún propósito siniestro debió traslucir en ellos el señor su padre, cuando se valió del Inspector de Policía del lugar, Manuel Zota, para que evitara cualquier lance entre sus hijos y Quevedo, quien debía venir al día siguiente en el tren; mas lo cierto fué que Zota se limitó á dirigir un telegrama á Girardot, preguntando si venía Quevedo, y otro al Alcalde de Tocaima, en que lo urgía para que se viniera en el tren, como lo hizo en efecto. En realidad de verdad en Girardot no fué advertido Quevedo de la presencia de los Sáenz en "Las-Juntas," ni menos de lo que se temía, y sólo supo lo primero en Tocaima, según lo declara Antonio María Hinestrosa, quien no expresa que le advirtiera del peligro que podía correr, sino simplemente haberle dicho que aquellos individuos estaban en "Las-Juntas."

Al llegar el tren á ese lugar, y antes de detenerse los wagones, los Sáenz, Horacio y Arturo, que esperaban en la estación, atacaron con revolver en mano á Quevedo y causaron la muerte á éste y una herida grave al testigo Hinestrosa. Cuantos presenciaron el acontecimiento y han declarado en el juicio están acordes en que la víctima de este atentado se hallaba inerme, y así resulta también del reconocimiento que se hizo inmediatamente en su persona.

Estos hechos, debidamente justificados, debieron servir al Jurado para formar su convicción acerca de la naturaleza del delito y para declararlo comprendido en el artículo 240 del Código Penal de 1858, y en los casos más graves definidos en la Ley 153 de 1887, y aun habría sido libre para hacerlo sin ese cúmulo de probanzas, dada la latitud que tiene para deducir la verdad del hecho juzgado, pues la ley no le pide cuenta de los medios por los cuales se ha convencido, ni le prescribe reglas de las cuales deba hacer depender particularmente la plenitud y suficiencia de una prueba: sólo le manda interrogarse á sí mismo en el silencio y en el recogimiento, y que examine en la sinceridad de su conciencia qué impresión han hecho en su razón las pruebas aducidas contra el acusado y los medios de su defensa.

De aquí que el artículo 313 de la Ley 57 de 1887, en vigor cuando se interpuso el recurso, estableciera que el veredicto del Jurado no estaba sujeto, por regla general, á ningún recurso, y sólo permitía el de injusticia notoria cuando dicho veredicto fuera contrario á la evidencia de los hechos.

Siendo esto así, y versando el recurso sobre la misma notoria injusticia del veredicto del Jurado—que es la causal deducida—tiene la Corte que empezar por fijar la verdadera inteligencia de las voces para rastrear su alcance legal y fijar la doctrina en esta materia.

Notorio es lo que consta por la evidencia de la cosa y que ninguna tergiversación puede ocultar, ó por declaración de testigos idóneos y otras pruebas legítimas á las cuales nada puede *razonablemente* oponerse; y si bien no sería extraño que se arguyera que un hecho mirado como notorio por una persona puede ser dudoso y aun desconocido para otras, esto no provendría ciertamente de defecto ó falta de evidencia en la cosa misma y sí de falta en el sujeto que la contempla; pues que la evidencia, causa de la notoriedad, reside primariamente en el objeto y secundariamente en el sujeto, por cuanto ella es "la aptitud de aquél para presentarse al entendimiento con tal viveza y lucidez que obligue á éste á un asenso irresistible." A diferencia de los demás medios de que solemos valernos para fundar nuestra persuación, que admiten diferentes grados de fuerza ó intensidad en nuestra creencia, la evidencia constituye motivo absolutamente cierto para juzgar, y es considerada como criterio infalible de verdad.

Sentados estos preliminares, y no resultando, como no resulta, de las pruebas que se tuvieron en cuenta para dictar el veredicto, ni de otras producidas por las partes, el desacuerdo entre los hechos y la calificación que se les dió, el veredicto no alcanza la calificación de *notoriamente injusto;* y la Corte sólo tiene facultad para casar la sentencia cuando en su concepto concurra la causal 2.ª del artículo 370, que se examina.

Sería, por ejemplo, notoriamente injusto un veredicto dictado con violación de una ley de naturaleza universalmente conocida, como el que atribuyera á un individuo la comisión de un delito ejecutado en determinado lugar donde él no pudo ni podía hallarse á tiempo del hecho, aun dado los medios actuales de locomoción. Ningún testimonio positivo, cualquiera que fuera su importancia, haría pasar por verdadera la presencia simultánea del acusado en dos lugares, siendo la justificación de la coartada la más concluyente prueba de su inocencia.

Nótese que todos los argumentos aducidos para demostrar la supuesta injusticia notoria del veredicto en cuestión se derivan de conjeturas más ó menos probables, relativas á la falta de premeditación del homicida, á la riña que, se dice, provocó Quevedo, y á otras circunstancias que conducen al mismo resultado; y esto mismo patentiza de manera incontrastable la falta de notoriedad en la injusticia que se alega: lo que es público y sabido de todos no necesita demostración.

El señor Procurador general deriva también la injusticia notoria del veredicto de la aplicación del Código Penal de 1858, en vez del Código Penal que hoy rige, el cual considera más favorable ó permisivo, por estar, según él, comprendido el caso en el ordinal 9.° del artículo 586 de la obra últimamente citada; pero es obvio que esto no alcanzaría á constituír aquella causal, aun en el supuesto de ser exacta la aplicación de un Código por otro, sino la de violación de ley sustantiva penal, comprendida en el ordinal 1.° del artículo 370 de la Ley 105 de 1890, causal que no puede la Corte entrar á examinar. La razón es perentoria: conforme á esta disposición, al ocuparse la Corte en la apreciación de la sentencia por esta causal, debe tener en consideración el veredicto del Jurado, en consonancia con el cual se halla la parte resolutiva de la sentencia, y no hay para qué insistir en este punto.

Viniendo ahora á la causal en que se apoya el Magistrado sustanciador para proponer la casación de la sentencia acusada, que consiste en haberse incidido en la causal de nulidad especificada en el ordinal 7.° del artículo 264 de la Ley 57 de 1887, bastarán breves observaciones para poner en claro la razón que asiste á la mayoría de la Corte.

A juicio de dicho señor Magistrado debió proponerse por el Juez Superior al Jurado el cuestionario que debía éste resolver, citando el Código Penal de 1890, en lugar del de 1858, y aun abrirse la causa de acuerdo con aquel Código y no con arreglo á éste; y como no se hizo así y en el cuestionario no se preguntó al Jurado si en el homicidio de Quevedo concurrieron las circunstancias de asesinato que aquel Código determina en el aludido ordinal 9.° del artículo 586, reputado como menos grave, considera la omisión como una equivocación relativa á la denominación genérica del delito, y que se ha incurrido, en consecuencia, en la causal de nulidad de que se ha hecho mención.

Nada de esto es exacto, porque la equivocación relativa á la denominación genérica del delito no se refiere ni puede referirse á las nulidades que resultan de los diversos medios que el agente de una acción punible emplea para cometerla, sino á la clase del mismo delito, ó á su género, esto es, al hecho que lo constituye y no á las circunstancias que envuelven *atenuación* ó *exención* de pena. A este propósito dice un célebre tratadista de Derecho Penal, que no es posible que haya lugar á la confusión entre los *hechos constitutivos* y las *circunstancias* de un delito; en el de asesinato, por ejemplo, la premeditación y la alevosía no son elementos constitutivos de un crimen nuevo, sino circunstancias agravantes del homicidio.

Por otra parte, la ley ha dicho claramente lo que debe entenderse por género y especie de un delito, al disponer en el artículo 345 de la Ley 105, tántas veces citada, cómo debe formularse el cargo en el acto de proceder. Hé aquí esa disposición:

"Artículo 345. En la parte resolutiva del auto de enjuiciamiento se formulará el cargo mencionando el delito con la denominación que le da el Código Penal en el respectivo capítulo, ó en el correspondiente título, cuando éste no se divide en capítulos como homicidio, heridas, robo, hurto, estafa, delitos y culpas contra los funcionarios y empleados públicos etc., sin calificar desde luégo si el homicidio fué premeditado, involuntario *ó de otra especie,* ni señalar algún artículo especial en el capítulo ó sección correspondiente de la ley penal que trate del delito materia del proceso."

Luego las circunstancias son consideradas como especies y no como género del delito.

Pero se arguye que el Jurado no tuvo libertad para resolver en sentido negativo la cuestión relativa al homicidio, y declarar que se había cometido otro delito específicamente diferente del propuesto. Mas para contestar á esta objeción es suficiente traer á la vista el artículo 308 de la Ley 57 de 1887, artículo que estaba en vigor cuando se reunió el Jurado, y que dice así:

"Artículo 308. En caso de ser negativa la resolución de la primera cuestión, el Jurado, sin interrumpir la sesión secreta, expondrá á continuación de las cuestiones que se le hubieren propuesto, y de las firmas del Juez y del Secretario, si no se ha cometido otro delito.

"Si esto resolviere no resolverá las otras cuestiones.

"Si en concepto del Jurado se ha cometido algún otro delito lo expresará, también á continuación de las cuestiones propuestas, así:

"Se ha cometido el delito definido en el artículo (tantos) del Código Penal ó de la ley (tal).

"En este último caso, y á continuación de esta manifestación, se dirá una de estas cosas:

"N. N. no es responsable, ó N. N. es autor, ó N. N. es cómplice, ó N. N. es auxiliador, ó N. N. es encubridor.

"Las resoluciones que se dicten serán firmadas por los miembros del Jurado, y en seguida por el Juez y por el Secretario."

Tanto es así, que el Jurado hizo uso de la expresada facultad al resolver las cuestiones relativas al delito de heridas.

Además, éste es punto ya resuelto por la Corte, en su Acuerdo número 213, de treinta de Junio de mil ochocientos ochenta y ocho (1888), que en la parte conducente dice así:

"1.° Siempre que el Jurado crea en conciencia que del proceso sometido á su conocimiento resulte comprobado un delito de naturaleza distinta del designado en el auto de proceder, ó no de otra naturaleza, pero comprendido en un caso distinto del especificado por el Juez en la primera de las cuestiones de que trata el artículo 296 de la Ley 57 de 1887, debe resolverlo así, en obedecimiento á lo preceptuado en el artículo 308 de la misma ley."....

De todo lo expuesto se deduce, como corolario indispensable, que no existe ninguna de las causales alegadas para invalidar la sentencia que ha sido materia del presente recurso.

En mérito de todo lo expuesto, la Corte Suprema, admi-

nistrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, en desacuerdo con el parecer del señor Procurador general, declara que no há lugar á infirmar el fallo pronunciado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, con fecha trece (13) de Diciembre de mil ochocientos noventa y dos (1892), por el cual se impone la pena de muerte á Horacio Sáenz.

Pásese el proceso al Excelentísimo Señor Vicepresidente de la República, encargado del Poder Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Justicia, para los efectos del artículo 119, ordinal 6.° de la Constitución.

Notifíquese, cópiese, publíquese en audiencia é insértese en la *Gaceta Judicial*.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO. *Gabriel Rosas*, Secretario.

VOTO SALVADO

EN LA SENTENCIA ANTERIOR POR EL SEÑOR MAGISTRADO DOCTOR JESÚS CASAS ROJAS.

Yo, Jesús Casas Rojas, Magistrado sustanciador en la causa seguida á Horacio Sáenz, por el homicidio por él perpetrado en la persona de Rafael Quevedo M., la cual fué remitida á la Corte por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en recurso de casación, contra la sentencia de segunda instancia, propuse á la Corte que casara dicha sentencia, en virtud de la causal 3.ª señalada por el artículo 370 de la Ley 105 de 1890, en relación con la 7.ª del artículo 264 de la Ley 57 de 1887, y que declarando la nulidad del proceso desde el auto de proceder inclusive en adelante, dispusiese la renovación de él y la reunión de un nuevo Jurado para que calificara los hechos criminosos mediante un cuestionario nuevo formulado de conformidad con el Código Penal de 1890.

La mayoría de la Corte no aceptó mi proyecto, y aunque yo acato las razones que determinaron su fallo en sentido opuesto, tengo el deber de exponer las razones de mi disentimiento, á lo que procedo en seguida:

Como uno de los objetos que el recurso de casación tiene es el de uniformar la Jurisprudencia, abrigo la confianza de que mi presente voto sirva á lo menos para llamar la atención de los legisladores hacia diferentes vacíos que se descubren en nuestra legislación penal y procedimental, y se provea á la necesidad que hay de llenarlos.

Paréceme, asimismo, que la atribución concedida á la Corte por las leyes para revisar las sentencias sobre pena capital es de suyo tan importante y trascendental, que nunca es perdido el tiempo que se emplee en hacer constar por escrito, siquiera sea brevemente, los fundamentos en que se apoyan opiniones sinceras como son las mías, no sobre si la pena capital es buena ó es mala, que esto sólo compete á los legisladores y no á los Jueces que al tomar posesión de nuestros empleos hemos jurado á Dios cumplir la Constitución y las leyes tales como existen escritas, sino únicamente sobre si en cada causa se ha observado estrictamente la plenitud de las formas propias de ella.

Mi juicio en esta importante causa ha tenido por fundamento la verdad de las siguientes proposiciones:

1.ª Según la Constitución de la República y la Ley 153 de 1887, el Juez del conocimiento en esta causa no debió citar ni en el auto de enjuiciamiento, ni en el cuestionario propuesto al Jurado, ni en su sentencia, el Código Penal de 1858 sino el de 1890;

2.ª Habiendo citado el Juez el primero de estos dos Códigos en lugar del segundo, incurrió en equivocación relativa á la denominación genérica del delito cometido por Horacio Sáenz, y dió con ello lugar á que en la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca que confirmó la del Juez, exista una de las causales de casación señaladas por el inciso 3.° del artículo 370 de la Ley 105 de 1890, y á que de conformidad con el inciso final del artículo 391 de dicha ley, la Corte haya debido invalidar todo lo actuado desde el auto de proceder inclusive en adelante y disponer la reposición del proceso;

3.ª La denominación genérica del delito, cuya equivocación constituye causal de casación, es elemento jurídico que según el texto terminante del artículo 345 de dicha Ley 105 y el del 297 de la Ley 57 de 1887, consta á lo menos de dos partes igualmente indispensables, á saber: el nombre genérico del delito, y la cita del Código Penal ó de la ley respectiva que lo haya definido. Y es claro que la equivocación que constituye causal de casación puede hallarse tanto en la una como en la otra parte, tanto en el nombre genérico del delito como en la cita del Código que lo define;

4.ª El artículo 29 de la Constitución de la República, al ordenar la imposición de la pena capital para el castigo de ciertos delitos, solamente en los casos que el legislador definiese como más graves, prohibiéndole imponerla en ningún otro caso ni en ningún otro tiempo, designó dichos delitos, entre los cuales figura el de *asesinato*, como *géneros*, y los subdividió en dos especies, á saber: la especie de los de máxima gravedad definida por el legislador que debían dar lugar á la aplicación de la pena capital, y la especie de los de menor gravedad que no debían dar lugar á la aplicación de dicha pena sino de otra menor;

5.ª El Código Penal de 1890 definió el delito denominado asesinato reproduciendo bajo los ordinales 1.°, 2.°, 3.°, 4.°, 5.°, 6.° y 7.° las mismas circunstancias que contenía la definición dada por el Código Penal de 1858, pero introduciendo bajo los ordinales 8.° y 9.° dos casos nuevos, de los cuales solamente el último es el de menor gravedad y no permite la aplicación de la pena capital, y el 8.°, junto con los otros siete, son casos de mayor gravedad y llevan consigo la aplicación de la pena capital. La modificación introducida por la definición del nuevo Código respecto de la del anterior es para la causa de Sáenz tan sustancial, que si el procesado llegare á estar, como han sostenido tanto la defensa como el Ministerio Público que en efecto está, en el caso del inciso 9.° del artículo 586 del mencionado Código Penal de 1890, á él no se le puede aplicar en rigor jurídico la pena capital;

6.ª El resolver si Sáenz está ó no en dicho caso es cuestión de hecho que según la ley incumbe exclusivamente al Jurado, y acerca de la cual no puede inmiscuírse ni la Corte, ni el Tribunal, ni ningún Juez de derecho; pero el Jurado no resolvió ni pudo resolver nada acerca de este punto, y no pudo resolver nada por la sencilla razón de que no se le propuso, y no se le propuso porque no habiéndose citado ni en el auto de proceder ni el cuestionario el Código Penal de 1890, que es el único que lo contiene, á lo menos como una de las especies del asesinato y con pena menor, no entró él (dicho caso) en las preguntas del cuestionario;

7.ª El artículo 29 de la Constitución hace parte del título III de ella, que trata *de los derechos civiles y garantías sociales*. Al prohibir expresamente dicho artículo al legislador imponer la pena capital fuera de los casos que definiera como más graves de los delitos allí designados, estatuyó una garantía de la vida en favor de los reos que no estuvieran comprendidos en los casos más graves, sino al contrario, en los menos graves, y

8.ª Según el artículo 368 de la Ley 105, el encargo de la Corte de casación en asuntos criminales, se reduce en fin de fines á decidir si la pena capital se ha aplicado jurídicamente ó no; y es imposible sostener que la decretada contra Sáenz sea jurídica antes de que el Jurado resuelva si él está en efecto ó si no está en el caso del inciso 9.° del artículo 586 del Código Penal de 1890.

La conexión y enlace que entre sí guardan las anteriores proposiciones demuestran, en mi concepto, del modo más decisivo, que en la causa de Sáenz no se han llenado todas las formas propias de esta clase de juicios, y que, en consecuencia, la Corte no ha debido aprobar la sentencia contra la cual se ha recurrido en casación, sino que ha debido casarla, á efecto de que se subsanaran, mediante la reposición de la mayor parte de lo actuado, las omisiones en que se ha incurrido, con lo cual nada se habría perdido, y antes bien más tarde habría podido la Corte desempeñar su encargo de Tri-

bunal de casación, si era el caso de hacerlo, sin dejar lugar á dudas ni objeciones de ningún género.

Como la solidez de mi demostración depende de la verdad de las mencionadas proposiciones, ocúpome á cotinuación en desarrollarlas, exponiendo las razones que las sustentan.

I

De conformidad con la garantía de que nadie pueda ser juzgado sino en virtud de leyes preexistentes al acto que se impute, garantía establecida por el artículo 26 de la Constitución, declaró el artículo 43 de la Ley 153 lo siguiente:

"Art. 43. La ley preexistente prefiere á la *ex-post-facto* en materia penal. Nadie podrá ser juzgado ó penado sino por ley que haya sido promulgada antes del hecho que da lugar al juicio. Esta regla sólo se refiere á las leyes que definen y castigan los delitos, pero no á aquéllas que establecen los Tribunales y determinan el procedimiento, las cuales se aplicarán con arreglo al artículo 40."

Y el artículo 40 está concebido en está forma:

"Art. 40. Las leyes concernientes á la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar á regir. Pero los términos que hubieren empezado á correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación."

La primera parte de esta doctrina, en cuanto exige la preexistencia de la ley penal sustantiva respecto del juicio criminal, es perfectamente filosófica, ya que "delito es la voluntaria y maliciosa infracción de la ley por la cual se incurre en alguna pena," ley que mal podría ser violada si no fuese anterior; la segunda parte de dicha doctrina, que establece que las leyes de procedimiento, *adjetivas*, aunque sean posteriores, prevalezcan sobre las anteriores, y se observen de preferencia desde que entren en vigencia, no es menos fundada, ya que el procedimiento criminal no es otra cosa cosa que el conjunto de reglas á que la ley sujeta al Juez y á las partes con el fin de "investigar los delitos, descubrir y castigar á los delincuentes y dar seguridad á la sociedad."

Pero la primera parte, que es la que en el presente caso importa profundizar y conocer completamente, ¿no da lugar á excepción ninguna?

El propio artículo 26 de la Constitución contiene en su segunda parte, como garantía no menos importante, la excepción que corrobora y afirma el principio establecido en la primera:

"En materia criminal la ley permisiva ó favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia á la restrictiva ó desfavorable;" y en consonancia con este cánon, que también es fruto de filosofía jurídica, vino el artículo 44 de la mencionada Ley 153, y dijo: "En materia penal la ley favorable ó permisiva, prefiere en los *juicios* á la odiosa ó restrictiva, aun cuando aquélla sea posterior al tiempo en que se cometió el delito;" y el 45 fijó de un modo más terminante su significación, agregando: "La precedente disposición tiene las siguientes aplicaciones:

.....

"Si la ley nueva minora de un modo fijo la pena que antes era también fija, se declarará la correspondiente rebaja de pena."

Y en su parte última advirtió todavía lo siguiente: "Los casos dudosos se resolverán por interpretación benigna."

Y en tratándose de la aplicación de la pena capital, los Jueces no han de mostrarse menos escrupulosos y prudentes que lo fué el legislador constituyente, cuando en el artículo 29 de la Constitución estampó su pensamiento acerca de este punto trascendental, por medio del siguiente precepto obligatorio para aquéllos.

"Art. 29. Sólo impondrá el legislador la pena capital para castigar, en los casos que se definan como más graves, los siguientes delitos, jurídicamente comprobados, á saber: traición á la patria en guerra extranjera, parricidio, asesinato, incendio, asalto en cuadrilla de malhechores, piratería y ciertos delitos militares definidos por las leyes del Ejército.

"En ningún tiempo podrá aplicarse la pena capital fuera de los casos en este artículo previstos."

Los delitos aquí enumerados deben ser castigados con la pena capital, sólo esos delitos, y no siempre, sino únicamente en los casos que el Legislador definiera como más graves. Ordenó aquí el constituyente al Legislador imponer la pena capital en los casos que su sabiduría elevara al grado más alto de responsabilidad de reos convictos de esos únicos delitos atroces, y le prohibió expresamente y con cierta redundante insistencia imponer dicha pena en tiempo alguno fuera de tales casos, como si hubiese querido dejar constancia del concepto de que si bien es cierto que la pena capital no se puede eliminar de la legislación de un país bien constituído, no por eso es menos cierto que su aplicación ha de sujetarse á reglas de graduación en el delito y á definiciones fijas, tanto respecto de los casos gravísimos que deban comportarla, como respecto de las formas propias del juicio en que se aplique.

En concordancia con dicho artículo 29 de la Constitución la mencionada Ley 153, refiriéndose al Código Penal de Cundinamarca, expedido en 1858 y adoptado para la Nación por medio de la Ley 57 de 1887, definió en su artículo 221 como casos más graves del delito de asesinato, aquéllos en que ocurriera alguna de las circunstancias especificadas en los seis primeros incisos de su artículo 440, y como menos grave el del inciso 7.° Pero esta parte de dicha ley 153 quedó derogada por el Código Penal de 1890, el cual, como se ha dicho, definió en su artículo 586 el asesinato agregando á las siete circunstancias, de que habla el 440 citado del de 1858, otras dos bajo los ordinales 8.° y 9.°; y en sus artículos 597, 598 y 599, declaró lo que á continuación se ve:

"Art. 597. En el asesinato se reputan como más graves los casos definidos en los ocho primeros números del artículo 586; y como menos grave el que señala el número 9.° del mismo artículo."

"Art. 598. El asesino, en los casos más graves, especificados en el artículo anterior, sufrirá pena de muerte."

"Art. 599. El asesino, en el caso menos grave, definido en el artículo 597, sufrirá la pena de diez y ocho á veinte años de presidio."

De manera que el nuevo Código Penal modificó sustancialmente la disposición que en la ley anterior definía los casos de asesinato que siendo más graves debían dar lugar á la aplicación de la pena capital, introduciendo en la definición general del asesinato dos incisos diferentes, y declarando que de ellos el último, el marcado con el número 9.°, constituía el caso menos grave de dicho delito, caso en el cual no debía aplicarse la pena capital, y el otro, así como los siete precedentes de la enumeración, constituían, cada uno por su parte, los casos más graves de dicho delito y daban lugar á la aplicación de la pena capital.

Como se ve, el nuevo Código tiene como caso de gravedad menor en el delito de asesinato el siguiente:

"Art. 586. .....

9.° En el acto de una riña provocada por el contrario, por cualquier medio, pero empeñada por el homicida, con la concurrencia de alguna ó algunas de las circunstancias indicadas en los números precedentes."

Y este caso en que según el artículo 599 no se puede aplicar la pena capital, sino la de diez y ocho á veinte años de presidio, no estaba comprendido en el Código anterior sino en el inciso de su artículo 450, aunque no exactamente en la misma forma.

Dicho artículo es como sigue:

Art. 450. El que provocado por otro á riña ó pelea la acepte voluntariamente, y riñendo ó peleando sin traición ni alevosía mate al provocador, sufrirá la pena de cuatro meses á un año de destierro á diez miriámetros por lo menos del lugar en que tuvo lugar la riña.

"Si lo matare á traición ó con alevosía, será castigado como asesino."

Este inciso disponía castigar como asesino, á quien provocado á riña ó pelea matase a su contendor á traición ó con alevosía; y como la traición y la alevosía son las circunstancias á que se refiere el inciso 3.° del artículo 440, es claro que según el artículo 221 de la Ley 153, dicho inciso está incluído entre los casos de pena de muerte, en tanto que el

inciso 9.° del artículo 586 del nuevo Código no tiene para el propio caso sino pena de diez y ocho á veinte años de presidio, según el precepto del artículo 599 que se deja copiado arriba.

Y esto patentiza del modo más perfecto que, si Sáenz se hallare, como lo afirman la defensa y el Ministerio Público, en el caso preciso de dicho inciso 9.° del artículo 586 del Código Penal de 1890, caso semejante si no del todo idéntico al del inciso del artículo 450 del Código Penal de 1858, el Código Penal de 1890 es para Sáenz más permisivo y favorable que el de 1858, puesto que por igual delito le impone la pena de diez y ocho á veinte años de presidio, en tanto que el otro le impone la pena de muerte.

Y como se ha visto que lo único que según la Constitución y la ley se requiere para que la ley *ex-post-facto* prefiera sobre la anterior en materia penal, es que dicha ley sea permisiva y favorable en comparación de la anterior, resulta demostrada de una manera inconcusa la verdad de mi primera proposición.

Se objetará tal vez en contra de la precedente conclusión que la aplicación de la ley incumbe al Juez y no al Jurado; pero breves consideraciones evidencian de que la aplicación que el Juez en esta causa estaba en el deber de hacer de la ley posterior ó sea la de 1890, debió comenzar en el auto de proceder, seguir luégo en el cuestionario propuesto al Jurado y terminar en la sentencia.

Con efecto, el artículo 324 de la Ley 57 de 1887, es del tenor siguiente:

"Art. 324. Resueltas las cuestiones de la manera prevenida, el Juez declarará terminado el procedimiento, si el veredicto fuere absolutorio. En caso contrario pronunciará sentencia condenatoria dentro de tres días, á más tardar, determinando el grado del delito, si fuere el caso, y aplicando las penas correspondientes con arreglo á las leyes y á las resoluciones del Jurado."

Y el artículo 236 de la propia ley dice lo siguiente:

"Art. 236. La calificación de los hechos criminosos que constituyen los delitos mencionados en el artículo 102 de la Ley 61 de 1886 provisional, orgánica del Poder Judicial, corresponde al Jurado, y la aplicación de la ley al Juez Superior del Distrito."

Además, según el artículo 313 de allí, el veredicto del Jurado no estaba sujeto á ningún recurso, por regla general, y solamente en el caso de que al Juez pareciera notoriamente injusta alguna de las resoluciones del Jurado, es decir, contraria á la evidencia de los hechos, podía el Juez declararlo así, sin oír á las partes ni practicar nueva actuación. Si el Juez no hallaba injusticia notoria, el veredicto era para él, y hoy mismo es un molde definitivo é invariable, sobre el cual ha de estamparse inquebrantablemente la sentencia.

Ante el Tribunal Superior, podía Sáenz, según el artículo 316 intentar recurso de injusticia notoria, y en efecto lo intentó, habiéndolo dicho Tribunal fallado desfavorablemente para el interesado.

Esto demuestra, sin necesidad de más citas, que el Jurado ha sido erigido por la ley como una institución que suministra al Juez de derecho la materia de sus decisiones, con carácter de plena prueba, de fuerza inapelable, casi infalible, superior á la de las otras pruebas jurídicas.

De ahí las advertencias que el Juez hace á los Jurados á tiempo de tomarles el juramento, y también cuando deben dar principio á la conferencia, como lo previenen los artículos 293 y 304 de la ley. Y en la misma proporción en que es amplia é ilimitada la facultad de los Jurados, para escoger sus pruebas y formar en virtud de ellas su juicio, es estrecha y reducida la del Juez de derecho para desechar las decisiones de aquéllos.

El procedimiento judicial, principalmente en el ramo de lo criminal, se halla de tal manera eslabonado, que los yerros en que el Juez incurra en el auto de proceder, en cuanto á la denominación del delito, se trasmiten necesariamente al cuestionario que se debe proponer al Jurado; los del cuestionario reaparecen en el veredicto; y los de este último tienen por fuerza que resultar en la sentencia de primera instancia. Después fácilmente se imponen en la sentencia de segunda instancia, y de tal modo se arraigan y conservan, que aun cuando el inciso primero del artículo 370 de la Ley 105 establece como primera causal de casación el hecho de ser la sentencia violatoria de ley sustantiva ó de doctrina legal, advierte luégo en su segunda parte que aunque dicha violación exista, no por eso se ha de casar la sentencia si ella está en consonancia con el veredicto.

Dicho inciso es, en efecto, del tenor siguiente:

"Art. 370.....

".....1.° Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva ó de doctrina legal; ya sea directa la violación; ya sea ésta efecto de una interpretación errónea de la ley ó de doctrina legal; ya de la aplicación indebida de leyes ó de doctrinas legales, como en el caso, entre otros, de que se aplique la ley vigente al tiempo de la comisión del delito, y no una posterior que impone menor pena.

"Es entendido, que al ocuparse la Corte en la apreciación de la sentencia por esta causal, debe tener en consideración el veredicto del Jurado, pues en consonancia con éste debe hallarse la parte resolutiva de aquélla."

Y esto es precisamente lo que ha sucedido en la presente causa, á saber: que habiendo el Juez citado por equivocación en el auto de proceder, el Código Penal de 1858 en lugar del de 1890, el vicio de que quedó adoleciendo dicho auto, se trasmitió al cuestionario, y al veredicto, y á la sentencia de primera instancia, y á la de segunda, y, en mi concepto y con la venia de mis honorables colegas de la mayoría, al fallo mismo de la Corte Suprema de Justicia; y que aun cuando el expresado vicio sustancial envuelve la violación directa é indiscutible del artículo 26 (2.ª parte) de la Constitución y del artículo 44 de la Ley 153 de 1887, no se puede, sin embargo, casar la sentencia por dicha causal, pues lo prohibe expresamente la segunda parte del inciso 1.° trascrito del artículo 370 de la Ley 105 de 1890.

Mas, no es posible creer que en asuntos de tan vital importancia la ley de la materia no tuviera otro recurso contra un veredicto en que se ha incidido en un yerro tan notable; y examinar ese punto será el objeto del estudio que va en seguida.

II

El inciso 3.° del artículo 370 de la mencionada Ley 105 de 1890, es del tenor siguiente:

"Art. 370.....

.....

"3.° Haberse incurrido en las causas de nulidad designadas con los ordinales 1.°, 3.°, 4.°, 5.°, 6.° y 7.° del artículo 264 de la Ley 57 de 1887."

Y el inciso 7.° del artículo allí citado, es como sigue:

"Art. 264.....

".....7.° Haberse incurrido en equivocación relativa á la denominación genérica del delito, á la época y lugar en que se cometió, ó al nombre ó apellido de la persona responsable, ó del ofendido."

El tenor de esta última disposición claramente está diciendo que toda equivocación en que se incida con referencia á la denominación genérica del delito es causa de nulidad. Y que pueden ocurrir en cuanto á esto equivocaciones de distintas clases y por diferentes motivos, es cosa que se deduce del propio texto legal. Si no pudiera haber en este punto sino una clase de equivocación, la ley habría precisado su disposición diciendo simplemente: '*haberse incurrido en equivocación en el género del delito;*' pero no usó de esta forma sino de esta otra: 'haberse incurrido en equivocación relativa á la denominación genérica del delito.' Equivocación es, según el Diccionario, error que consiste en tomar una cosa por otra cosa, y por medio de la expresión legal, *equivocación relativa á la denominación*, debe entenderse que todo error que consista en que se haya tomado en lugar del género del delito que legalmente podía ó debía tomarse, otro género de delito de algún modo diferente del primero, lleva consigo vicio de nulidad.

¿Qué es un género?

Las voces *género*, *especie* y *deferencia* son vocos traídas

de la Filosofía al Derecho, y representan en ella ciertos conceptos conocidos con el nombre genérico de "*las universales en particular.*" Llámanse *universales* por cuanto representan ideas que abrazan un conjunto de seres, y se dicen *en particular* por contraposición á otras, de que se dice que lo son *en general.* Como los seres externos, las ideas con que el hombre se los presenta, hállanse clasificados. La *diferencia* desempeña el doble papel de agrupar en una clase todos los seres ó las ideas que en cierto concepto no la tienen entre sí, y de distinguir dicha clase de otra clase que sí la tiene. Nacen de aquí los diferentes grupos de seres y de ideas, clases que en su extensión más ó menos considerable comprenden dentro de sí otras más pequeñas. La clase que comprende otras más pequeñas se llama con respecto á estas últimas *género*, y las últimas, ó sean las inferiores, se llaman *especies* con respecto á las superiores. De lo cual resulta que la clase que respecto á otras inferiores es *género*, puede á su turno ser especie con relación á la superior dentro de la cual se halla comprendida junto con otras.

El *género* que no tiene sobre sí otros, es el *supremo;* el que tiene sobre sí otros, y también otros debajo, es el *medio;* y el que sólo tiene debajo especies que no pueden subdividirse sino en individualidades, es el *ínfimo.* Esta misma clasificación se adopta para la *especie* y la *diferencia.*

Aplicando estas nociones filosóficas á la clasificación de los delitos del Código Penal vigente, fácilmente se descubre que allí el género supremo es *delito;* que hay muchos *géneros medios*, como son los delitos contra la Nación, que corresponden al libro segundo, y los delitos contra los particulares, que corresponde al libro tercero; que estos *géneros medios* comprenden otros inferiores, no son en el libro tercero el homicidio, el envenenamiento, las heridas, correspondientes todos al Título 1.° de dicho Libro; que todavía estos géneros, también medios, comprenden otros inferiores, como son en el Homicidio, el premeditado, el asesinato, el simplemente voluntario etc., etc., y que todavía el género ínfimo *asesinato*, puede clasificarse, ó en nueve especies, por las nueve circunstancias en que el artículo 586 lo especifica, ó sólo en dos, según que por concurrir en él alguna de las ocho primeras circunstancias de dicho artículo, deba aplicarse al asesino la pena de muerte, ó que no ocurriendo sino la circunstancia 9.ª no deba aplicarse la pena capital sino otra menor.

Un género de delito es, por tanto, un grupo de delitos, que teniendo entre sí cierta cualidad común, se subdividen sin embargo en clases inferiores, por razón de las diferencias específicas que los caracterizan. El legislador tiene la potestad constitucional de definir tales grupos, y en efecto, los ha definido, mediante la expedición de diferentes leyes sucesivas, y en cada una de ellas ha establecido modificaciones más ó menos sustanciales respecto de las anteriores.

Ahora bien, según el artículo 345 de la Ley 105 de 1890, el Juez, en la parte resolutiva del auto de enjuiciamiento, no podía designar el delito cometido sino genéricamente, pero siempre, por supuesto, con subordinación á las definiciones dadas respecto de los géneros de delitos en el Código Penal aplicable al caso; y como, según puede verse al folio 50 del cuaderno 5.°, en el auto de proceder, dictado en esta causa en veintiuno de Julio de mil ochocientos noventa, se citó el Código Penal de 1858, importa averiguar si era ésta la cita que legalmente se podía y debía hacer.

Dicho artículo está concebido en la forma siguiente:

"Art. 345. En la parte resolutiva del auto de enjuiciamiento, se formulará el cargo mencionando el delito con la denominación que le da el Código Penal en el respectivo capítulo, ó en el correspondiente título cuando éste no se divide en capítulos, como homicidio, heridas, robo, hurto, estafa, delitos y culpas contra los funcionarios y empleados públicos etc., sin calificar desde luégo si el homicidio fué premeditado, involuntario ó de otra especie, ni señalar algún artículo especial en el capítulo ó sección correspondiente de la ley penal que trate del delito materia del proceso."

Al prescribir esta disposición legal al Juez que en la parte resolutiva del auto de enjuiciamiento mencionara el cargo con el nombre genérico del delito, expresa de un modo preciso que ese nombre se tome del Código Penal, por supuesto del Código Penal que sea aplicable al caso, según los preceptos y la doctrina que se han dejado expuestos en la parte anterior de este estudio. Y eso es cosa que se cae de su propio peso, pues siendo el Código Penal la ley que clasifica y define los delitos, el nombre con que se les designa no significaría nada sin la referencia correspondiente al lugar de dicha ley donde se halle la definición; y, si como en el presente caso ocurre, la definición *ex-post-facto* tiene razón de preferencia sobre la anterior, ella es la única que se puede invocar. La denominación de los delitos es asunto de tecnicismo legal que no puede tratarse sino en relación con la ley que encierre la clasificación y definición de aquéllos. Su importancia procede de la relación que cada delito debe tener con la pena que le corresponde, pues si se clasifican los delitos en géneros y en especies, y se subdividen en casos, es con el objeto exclusivo de establecer la proporcionalidad que la justicia exige que haya entre ellos y las penas con que se castigan.

La equivocación relativa á la denominación genérica del delito, es motivo de nulidad, no por otra razón sino por la de que equivocando el delito se equivoca la pena que le corresponde, lo cual es enteramente opuesto á la justicia. Confundir un delito con otro, ó una especie con otra, ó un caso con otro, es por regla general dar lugar á que se aplique una pena determinada en lugar de otra pena, lo cual introduce en el sistema penal trazado por el Código respectivo, una alteración sustancial, contraria á las garantías establecidas por las leyes.

Proviene de aquí el escrupuloso cuidado con que la ley hace sobre este punto al Juez las advertencias necesarias. Fuera de la prevención contenida en el artículo 345 trascrito, el 297 de la Ley 57, prevenía lo siguiente:

"Art. 297. El Juez, al fijar la primera cuestión, expresará con la mayor claridad posible, el hecho que constituya el delito y sus circunstancias, ajustándose á las indicaciones del auto de enjuiciamiento, y citará el artículo del Código Penal, ó de la ley respectiva, donde esté señalada la pena al delito cometido.

"Cuando el juicio verse sobre alguno de los seis primeros delitos mencionados en el artículo 29 de la Constitución, el Juez, al fijar la primera cuestión, tendrá en cuenta lo que se dispone en el artículo 63 de esta ley, y, en consecuencia, ampliará debidamente la pregunta, á fin de que el Jurado exprese si el delito es de los más graves, para que al dictar la sentencia el Juez, pueda dar cumplimiento á lo que en dichos artículos se dispone."

Ahora bien, para cumplir el precepto encerrado en el artículo trascrito, el Juez presentó al Jurado un pliego, en que la primera cuestión formulada, estaba concebida en la forma siguiente:

"Primera cuestión, ¿Se ha cometido el delito de asesinato, perpetrado en la persona del señor Rafael Quevedo M., en el sitio de 'Juntas de Apulo,' el 27 de Abril de 1891, delito que define el artículo 440 del Código Penal de 1858, vigente al tiempo en que se cometió el hecho, con la circunstancia 3.ª del mismo artículo; este delito alcanza el grado máximo de delincuencia, conforme á los artículos 216, 217 y 221 de la Ley 153 de 1887, y es el mismo que castiga el artículo 441 del Código Penal citado?—Sí, y alcanza el grado máximo de delincuencia."

Como se ve, para determinar el delito acerca de cuya comisión debía el Jurado decidir, citó el Juez los artículos 440 y 441 del Código Penal de 1858; para que se fijase por el Jurado si el delito, en caso de haberse cometido, alcanzaba el grado máximo de delincuencia, mencionó solamente la circunstancia tercera de las seis que, según el artículo 221 de la Ley 153 de 1887, constituían entonces grado máximo de delincuencia, con lo cual el Juez privó al Jurado del derecho que tenía naturalmente de resolver si el asesinato de que allí se trataba, estaba en alguno de los otros seis casos que el artículo 440 comprende.

Esto sólo constituye ya un yerro que afecta los derechos de Sáenz en un punto trascendental.

Tal vez parezca á primera vista poco fundada, ó de importancia muy secundaria la precedente aseveración; pero si se considera que, según se deja explicado atrás, el asesinato

es un *género ínfimo* de delito que tiene dos especies, á saber: la especie de asesinato que debe ser castigada con la pena capital, y la especie de asesinato que debe ser castigada con una pena inferior; y si se tiene luégo en cuenta que al restringir el Juez su interrogatorio al solo caso definido en en el inciso 3.° del artículo 440 del Código Penal de 1858, hizo imposible el que el Jurado pudiese resolver que Sáenz se hallaba en el caso del inciso 7.°, único caso en que conforme al artículo 221 de la Ley 153 el asesinato no podía ser castigado con pena de muerte, si se considera esto, se verá cuánta importancia cobra la mencionada observación.

Con efecto, al Jurado sólo se le preguntó, con respecto á las circunstancias del asesinato, si el delito en cuestión se había cometido con las señaladas en el inciso 3.° del artículo 440 del Código Penal de 1858. Ahora bien, según el artículo 307 de la mencionada Ley 57 de 1887, el Jurado no puede contestar á las preguntas propuestas por el Juez, sino por medio de las palabras *sí* ó *no*.

Pues bien, suponiendo que fuera aplicable el Código Penal de 1858, se puede razonar como sigue:

Redactada como está la primera cuestión que se deja trascrita, si el Jurado contestaba, como contestó, con la palabra *sí*, quedaban, como en efecto quedaron, respecto de Sáenz, resueltos definitivamente dos puntos cardinales, á saber: 1.° que el delito cometido por él era asesinato, y 2.° que dicho delito debía ser castigado con la pena capital. Así no podía el Jurado resolver afirmativamente el primer punto y negativamente el segundo, es decir, no podía dar á la pregunta una solución que significara ser asesinato el delito, pero no asesinato de los que comportan la pena capital, sino de los que no la comportan. De manera que en realidad de verdad, el Jurado no podía establecer, aunque quizá ese hubiera sido su juicio, el término medio de que se acaba de hablar, calificando el delito de asesinato, pero no de asesinato de los que deben ser castigados con pena diversa de la capital.

Ahora bien, si hubiera el Jurado contestado que *nó*, habría quedado resuelto no solamente que el delito cometido por Sáenz no tenía la pena capital, sino también que no se había cometido delito de asesinato. La pregunta, de consiguiente, tal como se halla concebida, constituía para el Jurado un problema de verdadera tortura en el caso no imposible de que él hubiese querido hallar una solución, por decirlo así, *media*, en que declarando la existencia del asesinato, declarara al propio tiempo que no era sin embargo de los que asumiendo el grado máximo de delincuencia deben ser castigados con la pena capital.

Todo esto se habría podido obviar si el Juez, de conformidad con la segunda parte del artículo 297 ibidem, hubiese ampliado la pregunta debidamente, de modo que extendiéndola a todas las circunstancias que especifican los incisos del artículo 440 del Código Penal de 1858, hubiese dejado al Jurado en disponibilidad de resolvolverla según su propia conciencia, de tal manera que en la dicha solución cupiera ser el asesinato, ó de los que deben ser castigados con la pena capital, ó de los que no deben ser castigados con dicha pena.

Se dirá que en esta tortura el Jurado tenía el recurso de contestar á la pregunta trascrita negativamente, y de hacer luégo uso de la facultad que le concede el artículo 308 ibidem, para declarar á continuación que se había cometido otro delito diferente del denominado por la ley asesinato; pero esto, más bien que contestación á la dificultad, es una salida que no satisface, y no satisface, porque si en autos hay pruebas que demuestren que el delito cometido fué el de asesinato, mal se puede admitir como resolución satisfactoria aquélla en que se declare otra cosa, particularmente si á este resultado conduce la vacilación en que fué colocado el Jurado, por razón de la forma en que se redactó la pregunta.

"Ampliará debidamente la pregunta, á fin de que el Jurado *exprese si el delito es de los más graves*, para que al dictar la sentencia, el Juez pueda dar cumplimiento á lo que en dichos artículos se dispone," tales son las expresiones con que la ley advierte al Juez que el punto de si el asesinato es ó nó de los más graves, es punto que al Jurado incumbe resolverlo y resolverlo con entera libertad.

Verdad es que la Corte, por Acuerdo número 213 de 30 de Junio de 1888, y en virtud de consulta que le dirigió el Juez Superior del Distrito Judicial del Cauca (*Gaceta Judicial* número 80), resolvió que siempre que el Jurado creyera en conciencia, que del proceso sometido á su consideración, resultaba comprobado un delito de naturaleza distinta del designado en el auto de proceder, ó comprendido en un caso distinto del especificado por el Juez en la primera de las cuestiones de que trata el artículo 296 de la Ley 57 de 1887, debía resolverlo así en obedecimiento al precepto del artículo 308 de la misma ley.

Pero es también verdad: 1.° que en dicho Acuerdo está claramente consignado por la Corte el principio de que el Jurado, como Tribunal de conciencia, debe gozar de toda libertad en el criterio que le sirva para formar su juicio; 2.° que el Jurado, que no es Juez de Derecho, no tiene obligación de conocer las resoluciones adoptadas por la Corte en desarrollo y explicación de las leyes; 3.° que el concepto de la libertad de criterio que el Jurado debe tener para formar su juicio, lleva consigo el de que el Juez, al formular el cuestionario, no limite las preguntas á casos determinados, sino que las extienda á todos los casos comprendidos dentro de la definición general del delito, y 4.° finalmente, que formulando el cuestionario con la amplitud que previene la segunda parte del artículo 297 de la Ley 57, no hay lugar á que el Jurado vacile acerca de lo que se le pregunta con respecto á si el caso es ó no de pena capital.

Supóngase, sin embargo, en gracia de discusión, que fuese contestación satisfactoria á la anterior objeción, la de que el Jurado podía, de conformidad con el artículo 308 y con el Acuerdo de la Corte número 213, que se han citado, resolver negativamente la pregunta del cuestionario y pasar luégo á resolver que Sáenz había cometido un delito diferente, por ejemplo, el definido por el inciso único del artículo 450 del propio Código de 1858.

Pues dicha contestación no salva en manera alguna la dificultad, porque lo que yo he sostenido y demuestro es que el Código aplicable no era el de 1858, sino el de 1890; y no habrá quien se atreva á afirmar que el Jurado podía también haber pasado del Código citado en el cuestionario á otro Código que acababa de entrar en vigencia y del cual es muy probable, casi seguro, que el Jurado no tuviera noticia. El Jurado no es Juez de Derecho, ni tiene obligación de saber las leyes, ni facilidad de entrar en un momento dado á resolver cuestiones tan difíciles como son las de preferencia de unas leyes sobre otras leyes. No es, de consiguiente, verosímil que el Jurado pudiera haber pasado del Código citado en el cuestionario, al de 1890; ni eso sería tampoco legal, pues no hay ley ninguna ni Acuerdo de la Corte que le autorice para semejante tránsito. Con todo, para mi aserto, bueno sería que se afirmara que el Jurado podía y debía haber pasado á resolver sus cuestiones de conformidad con el Código Penal de 1890, porque eso sería el reconocimiento explícito de la verdad de mi tesis. Y en efecto, ésta se impone por la fuerza de los fundamentos que la sostienen.

Supóngase que el delito de Sáenz estuviera realmente especificado por las circunstancias de que trata el inciso único del artículo 450 del Código Penal de 1858. Como según dicho Código y el artículo 221 de la Ley 153 de 1887, dicho delito tenía pena de muerte; y como dicho delito, así especificado, no aparece definido en el Código Penal de 1890, sino bajo el inciso 9.° del artículo 586, inciso que, según los artículos 597 y 599, no apareja pena de muerte sino de presidio, de diez y ocho á veinte años, resultan de ahí dos consecuencias igualmente evidentes é ineludibles, á saber: 1.ª que el Código aplicable, como más benigno y favorable, es solamente el de 1890; y 2.ª que este Código definió el delito genérico de homicidio, introduciendo modificaciones tan sustanciales como la de pasar el *homicidio en riña al asesinato*, y como la de cambiar, para tal caso, la pena de muerte por la de presidio; de lo cual se deduce rectamente que al modificar los límites que separaban en el Código anterior unos delitos de homicidio de otros delitos de la misma denominación genérica, varió el género, pues no se alteran las partes de que una cosa se compone sin alterar la cosa misma. El homicidio en general y el asesinato en particular fueron definidos en el

Código nuevo de tal modo que no son las mismas entidades que contenía el Código anterior, sino que son entidades sustancialmente diferentes, es decir, que los géneros ó grupos de delitos del nuevo Código no son idénticos á los del anterior. Por tanto, tomar el género homicidio ó el género asesinato del Código Penal de 1858, como lo hizo el Juez en esta causa, en lugar de los géneros de esos mismos nombres del Código de 1890, es incurrir en equivocación relativa á la denominación genérica del delito, que es lo que se trata de demostrar.

Un género de delito es una entidad á la cual la ley ha puesto dos señales que deben servir al Juez que lo estudia y castiga para distinguirlo y determinarlo inequívocamente, á saber: el nombre genérico y el Código que lo define y le señala la pena. La equivocación que ocurra en cualquiera de dichos dos elementos necesarios, vicia de nulidad el proceso, porque envuelve cambio injusto de pena, y en el presente caso ocurrió dicha equivocación en el segundo de ellos, y por eso el proceso está viciado y debía reponerse.

III.

Para concluír sólo me falta trascribir el siguiente artículo de la Ley 105 de 1890, y hacer acerca de él obvias consideraciones:

"Art. 368. En asuntos criminales se concede recurso de casación, con los mismos fines mencionados en el artículo 366, contra las sentencias definitivas que pronuncien dichos Tribunales Superiores por la comisión de alguno de los delitos designados en el artículo 29 de la Constitución, si en la sentencia se impone pena de muerte.

"Cuando en el caso de este artículo no se interponga recurso de casación, el Tribunal remitirá la sentencia, con todo lo actuado, en consulta á la Corte Suprema."

Esta disposición patentiza que la Corte Suprema no es Tribunal de casación, en asuntos criminales, sino solamente con el objeto de que decida si la aplicación de la pena de muerte ha sido en cada causa jurídica ó no, y yo afirmo que en la presente no ha sido jurídica, toda vez que no se siguió el juicio de conformidad con el Código Penal de 1890, que es ley *ex post facto*, pero permisiva y favorable, por contener para el caso en que se supone colocado á Sáenz pena de presidio, en tanto que el Código anterior señala pena de muerte; y porque la resolución de si en efecto Sáenz se halla ó no en en dicho caso compete exclusivamente al Jurado, quien no pudo decidir nada acerca de este punto, porque no se le propuso. La sentencia de muerte se ha dictado, pues, haciendo caso omiso de esta circunstancia.

Para que fuera jurídica dicha sentencia, era absolutamente indispensable que el Jurado hubiese resuelto que Sáenz no se encontraba en el caso del inciso 9.° del artículo 586 del Código de 1890, sino en el caso de algún otro de los ocho incisos precedentes del mismo artículo; y como esto no ha sucedido así, el aprobar la sentencia que le condenó al último suplicio, privándolo de ser oído por el Jurado acerca de este punto, es, en mi concepto, injurídico

Aun concediendo que no fuese tan sólida como á mí parece la demostración, que creo haber dado de ser esta sentencia casable por la razones expuestas, es por lo menos cierto de toda certidumbre que el presente caso es dudoso; y como "*los casos dudosos se resuelven por interpretación benigna*," y como la interpretación benigna no podía aquí consistir sino en casar la sentencia para que se subsanasen los yerros yá explicados, claro resulta que aun así debía la sentencia haber sido casada por la Corte.

Bogotá, veintidós de Agosto de mil ochocientos noventa y tres.

JESÚS CASAS ROJAS.—POMBO.—ISAZA.—BOTERO URIBE.—CORRALES.—FERNÁNDEZ DE SOTO.—GALINDO.—*Rosas*, Secretario.

VOTO SALVADO

POR EL SEÑOR MAGISTRADO DOCTOR MANUEL E. CORRALES.

El suscrito Magistrado tiene la pena de disentir de la opinión de la mayoría de la Corte, porque, en su concepto, la sentencia pronunciada en esta causa, por la cual se confirma la que el Juzgado 2.° Superior, dictó de acuerdo con el veredicto del Jurado, en la parte referente á la imposición de la pena capital á Horacio Sáenz, es violatoria de una de las leyes expresas que determinan el derecho del respectivo procesado.

El suscrito Magistrado es de sentir que la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, que es sujeta materia del presente recurso, debe casarse, por estar comprendida en el número 2.° del artículo 370 de la Ley 105 de 1890; esto es, "ser, en concepto de la Corte, notoriamente injusto el veredicto del Jurado;" pero no entrará en largas disertaciones, porque el señor Procurador general de la Nación, en su extensa vista de catorce de Abril del corriente año, que figura original en el proceso, y se halla inserta en el *Diario Oficial* número 9,134, ha expuesto varios razonamientos para establecer que la sentencia definitiva, objeto del actual examen, es casable por injusticia notoria, y el suscrito Magistrado se adhiere al concepto que tiene por fundamento varios de esos razonamientos.

El *Diccionario de la lengua castellana* explica lo que debe entenderse por *notorio*. Dice así: "*notorio:* lo que es público y sabido de todos." Mas esta definición ó explicación, en la opinión del suscrito, no puede aplicarse al caso de que se trata, ni cree que el legislador la hubiera querido comprender, al determinar las causales que dan derecho á interponer el recurso de casación en el ordinal 2.° del artículo 370 citado.

Si la disposición aludida se hubiese limitado á establecer como causal de casación, prescribiendo que lo es cuando el veredicto del Jurado es notoriamente injusto, sin expresar que lo sea á juicio de la Corte, parece que en tal hipótesis debería considerarse injusto el veredicto del Jurado, en el sentido que el *Diccionario de la lengua* da al vocablo *notorio*, como cosa ó hecho público y sabido de todos; mas desde que la mencionada disposición hace depender la injusticia del veredicto, del criterio de la Corte, queda restringida la disposición, porque yá no está sometido al concepto de los demás.

Se dirá que lo que es injusto para el común de los individuos, forzosamente ha de serlo para la Corte Suprema; pero para el suscrito Magistrado esta conclusión no siempre será exacta, y la razón es fácil darla. Los Magistrados que forman el personal de la Corte han hecho especial estudio de la jurisprudencia y de la legislación, así civil como criminal, y por tanto están más al alcance de los principios ó doctrinas que reglan los asuntos propios del foro.

Además, es natural que el legislador se atenga ó defiera al criterio que forman los Jueces que intervienen en las causas, ó que se imponen detenidamente de ellas por razón de su ministerio, más bien que al juicio de la generalidad, que carece de la base indispensable para considerarlo correcto, y que es la lectura del proceso.

En algunos casos, aunque muy raros, el público podría formar el mismo juicio que la Corte respecto de la injusticia de un veredicto, que, por lo mismo, sería notoria, como cuando el procesado aduce la prueba de la *coartada*, y que sin embargo el Jurado no la estima, y condena al procesado. En tales casos la injusticia sería tan evidente como notoria, según la definición que trae el *Diccionario de la lengua*. Pero en los casos más comunes no sucede lo mismo, y con especialidad siempre que se trate de la responsabilidad en que incurre un individuo que da muerte á otro, sin mandato ni orden de la autoridad pública. Aun las personas de sentido común saben muy bien que la ley castiga á los que privan á otro de la vida, y tal vez algunos de éstos saben que ese hecho se llama en el Código Penal, homicidio, el cual es fácil de acreditar con el reconocimiento pericial del cadáver y otras pruebas. No obstante la indicada prueba pericial, no es fácil á muchos distinguir el *homicidio* del *asesinato*; porque aunque éste sea especie y aquél género, es menester atender á todas las numerosas circunstancias que preceden y acompañan á la perpetración del crimen.

Fundado el suscrito Magistrado en lo grave y delicado de esta distinción, se persuade que el ordinal 2.° del artículo 370 de la Ley 105 de 1890, no puede referirse al juicio de la

sociedad, que debe suponerse desnudo del conocimiento de causa, sino al concepto de la Corte, que antes de fallar el recurso de casación está impuesta del proceso y de las razones aducidas en el largo debate jurídico.

La Ley 105 de 1890, al incluír entre las causales que dan derecho á interponer el recurso de casación en materia criminal, el ser, en concepto de la Corte, notoriamente injusto el veredicto del Jurado, no ha definido lo que debe entenderse por un veredicto *notoriamente injusto;* y aunque se diga que tal explicación es innecesaria, puesto que el *Diccionario de la lengua* la trae de la palabra *notorio*, siempre es conveniente que el legislador exprese la acepción en que debe tomarse aquella frase.

El doctor Lucio Gómez y Negro, en su obra póstuma intitulada *Elementos de práctica forense*, edición de la Casa de Rosa (1830), refiriéndose al recurso de *injusticia notoria* (página 87) dice que "la hay en toda sentencia judicial dada contra ley expresa ó contra su recta interpretación ó aplicación en los casos ó hechos cuya evidencia conste claramente del proceso."

Si es cierto que Horacio Sáenz cometió el delito estando en vigor el Código Penal de Cundinamarca de 1858, adoptado por la Ley 57 de 1887, también lo es que la causa criminal fué abierta estando yá vigente y en plena observancia el nuevo Código Penal de 1891; de manera que, tanto en el auto de proceder como en las cuestiones que el Juez 2.° Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, sometió á la resolución del Jurado, debió citarse el último Código: en el auto de enjuiciamiento, porque, conforme á un principio legal, en ese auto debe expresarse el género del delito por el cual se ha de juzgar al procesado, y en las cuestiones aludidas, porque como ellas sirven de base á las respuestas, ó sea al veredicto del jurado, y consecuencialmente dicho veredicto sirve de fundamento obligado de la sentencia del Juez de derecho, es doctrina observada en todas ocasiones y en todas las causas criminales, que no se puede condenar sino por el delito ó los delitos determinados en el auto de proceder.

Era tanto más obligatorio al Juez de derecho citar en el expresado auto, el respectivo capítulo del Código Penal de 1891, cuanto en él se mencionan otras circunstancias que no se refieren en el Código de 1858, tratándose del asesinato, y en las cuales no se establece la pena capital, de suerte que, por esto, debe considerarse como ley permisiva más favorable ó benigna que la anterior.

Comprendido está el caso que se ventila en la definición que el expositor referido trae ó da del recurso de injusticia notoria. Empero, si no se quiere tener en cuenta tal definición, no habría inconveniente en preferir la que contiene el artículo 81 de la Ley 1.ª, Parte 2.ª, Tratado 2.° de la Recopilación Granadina, el cual artículo, tratando del recurso de injusticia notoria que anteriormente se concedía en los asuntos civiles ordinarios, para ante la Corte Suprema de la Nueva Granada, dice:

"Art. 81. De las sentencias definitivas pronunciadas en causas civiles en segunda instancia sobre lo principal del pleito, quedará á la parte que se sintiere agraviada el recurso de nulidad, cuando se ha faltado á las formalidades sustanciales de los juicios, cuya falta anule los procesos; ó el de injusticia notoria cuando se ha contravenido á ley expresa de las que determinan el derecho entre las partes. Estos recursos se interpondrán ante el Tribunal que ha sentenciado, dentro de los cinco días siguientes al de la notificación, y no tendrán lugar, si se interponen después."

Y aunque el aludido recurso de *injusticia notoria* sólo podía interponerse en los asuntos civiles ordinarios de mayor cuantía, y no en los criminales, es de creerse que á nadie se le ocurriría entonces alegar para fundarlo en lo que era *público y sabido de todos*, sino que el recurrente lo apoyaría en la violación de leyes que determinaban el derecho entre las partes.

Quiere esto decir que la injusticia notoria causada en un fallo y alegada por una de las partes, quedaba sometida al criterio de la Corte Suprema, la cual debía resolver si de autos resultaba ó no probada.

El suscrito Magistrado opina que en la actualidad debe aceptarse el mismo principio, porque ahora, como antes, se trata de injusticia notoria, la cual debe también en todo caso resolverse por lo que resulta plenamente probado del proceso.

Y como del proceso ó causa que se ha examinado, resulta acreditado, en sentir del suscrito Magistrado, que si bien es cierto que Horacio Sáenz dió muerte á Quevedo, y por tanto cometió un homicidio, en su ejecución no precedieron ni concurrieron las circunstancias que lo constituyen ó caracterizan en asesinato.

En consecuencia, el veredicto del Jurado de calificación, es notoriamente injusto, toda vez que del proceso aparece lo contrario, esto es, que se cometió un homicidio y no un asesinato.

De todo lo expuesto ha de concluírse, que la sentencia del Tribunal de Cundinamarca, materia del recurso, debe infirmarse.

Bogotá, Agosto veintidós de mil ochocientos noventa y tres.

MANUEL E. CORRALES.— POMBO.— ISAZA.— BOTERO UBIBE.—CASAS ROJAS.—FERNÁNDEZ DE SOTO.—GALINDO. *Rosas*, Secretario.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez y nueve de Julio de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: El Juez del Circuito de Santander, Departamento del Cauca, pronunció, en trece de Junio de mil ochocientos sesenta y seis, una sentencia, por medio de la cual condenó al Tesoro de la Unión, á pagar á Enrique Moreno, Jacoba González y Venancia Viveros, la suma de mil doscientos sesenta y seis pesos ($ 1,276), que con poder de aquéllos reclamó José Fernández, por razón de las expropiaciones que sufrieron en la guerra de mil ochocientos sesenta y uno á mil achocientos sesenta y dos, en el sitio denominado "La-Cuelga," Circuito de Santander, de parte de las fuerzas del General Julio Arboleda.

Consultado dicho fallo con la Corte Suprema Federal, hallábase pendiente el asunto cuando fué enviado á la Comisión de suministros, la cual pronunció en veinticinco de Julio de mil ochocientos noventa y dós, su resolución número 3,913, que notificó después, en veintitrés de Septiembre del propio año, bajo el número 4,051, y aprobó el Ministerio del Tesoro, en diez y seis de Diciembre último, negando en absoluto el reconocimiento de la suma pedida, y absolviendo al Tesoro público del cargo formulado contra él.

Apelada para ante la Corte, la última de tales resoluciones, fué enviado el expediente á esta Superioridad, en donde, cumplidas las formalidades propias de la instancia, es tiempo de decidir, y para ello se considera:

Entre las declaraciones con que se estableció en la instrucción seguida ante el Juez de Santander, la prueba de la demanda, es notable la del testigo Matías Lenis, quien en dos ocasiones manifestó que tenía conocimiento cierto de las expropiaciones sufridas por los demandantes, por haberlas presenciado como prisionero que fué del General Arboleda, y las determinó circunstanciadamente, indicando los semovientes expresados y su valor, según puede verse en los folios 4.° vuelto y 7 vuelto del expediente.

Y á las declaraciones de este testigo se han agregado últimamente las de los testigos José Ramón Lucumí, mayor de sesenta años y Gregorio Lazo, mayor de cuarenta y ocho, quienes afirman igualmente que presenciaron aquellas expropiaciones y dan razón satisfactoria de su dicho. Estos dos testigos son idóneos, según lo certifica el Fiscal respectivo.

El hecho fundamental de la demanda se halla, en consecuencia, comprobado por medio de tres declaraciones de testigos competentes, mayores de toda excepción y que expresan la razón de sus afirmaciones; por lo cual, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el dictamen del señor Fiscal de la

Comisión, revoca la resolución apelada y reconoce á cargo del Tesoro público de la Nación y á favor del cesionario de los demandantes Julio Fernández M., las siguientes partidas:

Por razón de las expropiaciones hechas á Enrique Moreno, en la guerra de mil ochocientos sesenta á mil ochocientos sesenta y tres, por las fuerzas del General Julio Arboleda, la suma de cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos..... $ 444

Por las causadas á Jacoba González en esa misma época, doscientos cincuenta y seis pesos..... 256

Por las que sufrió María Venancia Viveros en dicha guerra, quinientos setenta y seis pesos..... 576

Total, mil doscientos setenta y seis pesos..... $ 1,276

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta* y devuélvase el expediente á su procedencia.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Abraham Fernández de Soto.—Joaquín Martínez E.—Jesús María Quintero P. *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veinticuatro de Julio de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Matilde Rivera de Pérez, con el carácter de viuda del Capitán Dámaso Pérez, por memorial presentado á la Corte el treinta de Junio último, demanda á la Nación en los términos siguientes, que se copian en la parte conducente:

"Con lo expuesto, creo que tendré derecho para alegar y pedir una pensión vitalicia igual al medio sueldo de Teniente, que fué la última graduación con que sirvió durante más de tres años; sin embargo, prefiero y pido una recompensa unitaria, en atención á que falleció en Cúcuta por motivos del servicio militar, en desempeño de comisión importante, como consta en el expediente, y en la cuantía á que da derecho la ley de la materia, ó sea según el artículo 9.° de la Ley 84 de 1890, una suma igual al monto de cuatro años del sueldo íntegro del empleo de Teniente con un 25 por ciento adicional, de acuerdo con el artículo 8.° de la misma ley, con motivo de tener una causal más para pedir recompensa.

"Si la Corte Suprema, no hallare suficiente motivo para concederme la recompensa unitaria que solicito, entonces pido que me sea reconocida la pensión vitalicia á que tengo derecho por la antigüedad de más de diez años de los servicios de mi esposo."

Habiéndose admitido esta demanda, por auto de fecha cuatro del presente mes, se dispuso correr traslado de ella al señor Procurador general de la Nación, quien en vista del ocho del mismo, se expresa así:

"Prescindiendo del examen de las pruebas aducidas en apoyo de la solicitud, me limito á observar que, conforme á la Ley 84 de 1890, ninguna de las causales alegadas por la peticionaria la favorece en sus pretensiones, sabido como es que la antigüedad ó tiempo de servicio en la carrera de las armas solamente es recompensable en la persona del militar que prestó dicho servicio, pero no en la de ninguno de sus deudos, y que la muerte de un militar no les da derecho á éstos á ser recompensados, sino en el caso de que ella haya ocurrido en el campo de batalla, ó por heridas recibidas en el mismo, ó en función del servicio, ó á manos de enemigos armados del Gobierno.

"Siendo esto así, como lo es, termino pidiéndoos que declaréis, *como lo habéis hecho en un considerable número de casos análogos*, sin lugar á la gracia solicitada en el presente juicio, por carencia de motivo legal en qué fundarla."

La Corte para resolver considera:

1.° Que no obstante los honrosos documentos presentados por la demandante, para justificar lo que pretende, como viuda del Capitán Dámaso Pérez, la ley no ha hecho trasmisible á los herederos derechos personales de los militares para obtener *pensión vitalicia*, pues que es solamente un derecho personal que espira con ellos, y

2.° Que la *recompensa* unitaria puede ser decretada en favor de los herederos del militar muerto, cuando este hecho ha ocurrido en batalla ó por heridas recibidas en ella, ó en función del servicio, ó á manos de enemigos armados del Gobierno.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justiciaen nombre de la República y por autoridad de la ley, declara sin lugar la demanda de Matilde Rivera de Pérez, en que pide recompensa unitaria, ó en subsidio pensión vitalicia.

Publíquese, notifíquese, cópiese esta sentencia en el libro respectivo y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Abraham Fernández de Soto.—Joaquín Martínez E.—Jesús María Quintero P. *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veinticinco de Julio de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: La Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones absolvió al Tesoro nacional, por resolución de veinte de Enero del corriente año, de la demanda intentada por un apoderado de Pantaleón González Ospina, para que se le reconociese la suma de dos mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos ($ 2,654), valor de suministros que el mismo González Ospina y otras personas de quienes es cesionario, hicieron al Gobierno de Antioquia, en la guerra que este Gobierno sostuvo con el nacional, en los años de mil ochocientos setenta y seis y mil ochocientos setenta y siete.

La resolución de la Comisión fué confirmada por el Ministerio del Tesoro, en diez de Abril último, y los autos han sido elevados á esta Suprema Corte, por haber apelado de la determinación del Ministerio del Tesoro el representante de González.

Ninguna ley ha reconocido á cargo del Tesoro nacional los suministros y empréstitos hechos al Gobierno de Antioquia en la guerra citada, sino en el caso de que los contribuyentes hubieran sido partidarios del Gobierno general en esa guerra, y como consta que ni González ni sus cedentes se contaban en el número de los amigos de dicho Gobierno, la resolución apelada es estrictamente legal y conforme con repetidas y razonadas resoluciones de la Corte en casos de la misma clase.

Por tanto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, se confirma la decisión materia de este recurso.

Insértese esta sentencia en la *Gaceta Judicial*, déjese copia y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Abraham Fernández de Soto.—Joaquín Martínez E.—Jesús María Quintero P.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintidós de Julio de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Santiago Herrera, Higinio Álvarez, Clemente Castro, Adolfo J. de León y otros, vecinos del extinguido Municipio de Atalaya, en la Provinciade Veraguas (Departamento de Panamá), en ejercicio del derecho que reconoce el artículo 144 de la Ley 149 de 1888, "sobre régimen político y municipal," ocurrieron al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Panamá, solicitando la suspensión de la Ordenanza número 5.° de nueve de Julio de mil ochocientos noventa y dos, expedida por la Asamblea departamental del mismo nombre, "por la cual se elimina el Distrito de Atalaya en la Provincia de Veraguas," y se agrega al de Santiago, que forma parte de la misma Provincia.

Idéntica solicitud habia yá hecho Juan Francisco Molina al mismo Tribunal, la que hizo extensiva á la Ordenanza número 27 de mil ochocientos noventa (de 28 de Julio), "sobre división territorial," la cual contiene la siguiente disposición:

"Art. 1.° Suprímense los Distritos de Boquerón y San-Pablo, y se agregan éstos, respectivamente, á los Distritos de Alanje y de David en la Provincia de Chiriquí."

Las Ordenanzas acusadas se hallan publicadas en la *Gaceta de Panamá*, según aparece de los dos ejemplares de este periódico, números 360 y 578, de fechas veintisiete de Julio de mil ochocientos noventa, y diez y ocho de Julio de mil ochocientos noventa y dos, los cuales se han presentado debidamente autenticados.

El Tribunal, á quien se dirigieron los peticionarios, después de haber oído el concepto del Fiscal, y de allegar al proceso las pruebas que decretó y que estimó conducentes al esclarecimiento de los hechos que debían justificarse para proceder en tan delicado asunto con pleno conocimiento de causa y para dictar un fallo acertado, resolvió, en Sala de Acuerdo, por sentencia de fecha siete de Enero del presente año, lo que se trascribe en seguida: "No se accede á la solicitud del señor Juan Francisco Molina, ni á la de los vecinos del caserío 'Atalaya;' y dispone remitir el proceso á la Corte Suprema, en consulta de esta providencia en el próximo correo."

Con tal motivo se remitió el expediente á esta Suprema Corte, en donde se ha sustanciado el negocio, de acuerdo con la tramitación señalada en el artículo 147 de la Ley 149 de 1888; y por ello se procede á dictar la decisión que le incumbe, previas las consideraciones siguientes:

Los peticionarios sustentan la tesis de que ambas Ordenanzas son nulas, por ser contrarias á la Constitución y á leyes generales de la República, pues sostienen que se oponen á los artículos 3.°, 5.°, 6.°, 7.° y 76 de la Constitución, 36, 38 y 39 de la Ley 149 de 1888, 30 y 48 de la Ley 118 de 1890; y como fundamento de sus pretensiones aducen, más ó menos, las siguientes razones: que la Asamblea del Departamento de Panamá no ha podido, sin violar la Constitución y las leyes de la República, expedir las Ordenanzas acusadas, porque por ellas se hace novedad á los límites del territorio de la República, los cuales no pueden ser variados sino por el Congreso, facultad que ni aquélla ni éstas conceden á las Asambleas, cuyo campo de acción está perfectamente determinado en la Constitución y en las leyes; que por la Ley 118, yá mencionada, el Congreso, en ejercicio de una atribución constitucional, dividió el Distrito Judicial de Panamá en Circuitos judiciales, entre los cuales figuran el de Chiriquí, compuesto de los Municipios de Boquerón, San-Pablo y otros, y el de Veraguas, que lo constituyen los Distritos de Santiago, *Atalaya*, Calobre etc., que al procederse así, implícitamente se reconoció la existencia jurídica de las entidades suprimidas, y que por lo mismo no han podido borrarse del mapa, ni eliminarse sin quebrantar la Ley 118, la cual, por el hecho de mencionar en ella todos los Municipios que componían los Departamentos á la época en que se expidió, quita á las Asambleas departamentales la facultad que les confiere el artículo 129, ordinal 26, para crear y suprimir Distritos; que esta función no podía ejercerla la Asamblea de Panamá antes de que hubiese surtido sus efectos legales la Ley 109 de mil ochocientos noventa, por la que se ordena levantar el censo de población de toda la República; y, en fin, que las Ordenanzas sometidas á la censura de esta Superioridad, no pueden ponerse en ejecución mientras no merezcan la aprobación del Congreso, conforme al artículo 196 del Código Político y Municipal.

Estas son, en síntesis, las razones principales en que se apoyan los peticionarios para solicitar la suspensión de las aludidas Ordenanzas, y en ellas se parará mientes para ver de inquirir si son ó no realmente fundadas; esto es, si se sustentan en la ley, y si son de tal naturaleza, que por medio de ellas se lleve al ánimo el convencimiento íntimo de que realmente son nulos los actos legislativos de la Asamblea de Panamá.

Desde luégo salta á la vista que las Asambleas departamentales están expresamente facultadas por la Constitución y por la ley, para crear y suprimir Municipios, con arreglo á la base de población que determine la ley y para segregar y agregar términos municipales, consultando los intereses locales (artículos 186 de la Constitución, 129, ordinal 26, y 189 de la Ley 149 de 1888); facultad que abraza también á la Asamblea del Departamento de Panamá, en virtud de la autorización que se le confirió por los Decretos de fechas nueve y diez y nueve de Mayo de mil ochocientos noventa y mil ochocientos noventa y dos, respectivamente, por los cuales se señalan las funciones que ésta había de ejercer en sus sesiones ordinarias de los años referidos, expedidos en cumplimiento de la disposición contenida en el artículo 32 de la Ley 83 de mil ochocientos ochenta y ocho. De suerte que para sostener, con visos de razón, que las Asambleas no pueden ejercer esta atribución clara, es preciso que se demuestre una de estas dos cosas, á saber: que por un acto reformatorio de la Constitución, se las privó de aquella facultad, ó que por una ley terminante, posterior á la misma Constitución, se quitó á aquellas Corporaciones la función expresada (artículo 209 de la Constitución y 6.° de la Ley 153 de 1887); no hay otro medio de lograr el mismo fin. Según esto, la cuestión queda sólo reducida á averiguar si por las leyes que citan los solicitantes, en apoyo de su intención, ha quedado ó no abrogada la facultad que se concede á las Asambleas por las disposiciones mencionadas, porque es visto que hasta ahora la Constitución no ha sido tocada, y porque no se concibe cómo se pueda sostener con fundamento plausible, que los cánones ó principios sancionados en una Constitución, que informan su espíritu, y que son la base angular sobre que descansa el edificio político, sean algunos de ellos de tal modo incompatibles entre sí, que de la aplicación del uno resulte virtualmente la anulación del otro, porque si esto sucediera así, desaparecería la armonía del conjunto, y las partes que lo constituyen, lejos de conspirar á un mismo fin, obrarían en sentido contrario, produciendo, como consecuencia ineludible la destrucción del todo. La antinomia que pueda, pues, existir entre los artículos de una misma Constitución, no puede ser sino aparente, contradicción que desaparece mediante un estudio atento de la naturaleza de las disposiciones que, *prima facie*, parecen inconciliables, y mediante la aplicación de las reglas de la hermenéutica.

Es cierto que conforme á los artículos 3.°, 5.°, 6.°, 7.° y 76, ordinal 2.°, de la Constitución, sólo corresponde al Congreso la facultad de modificar la división general del territorio de la República, y establecer y reformar, cuando convenga, las otras divisiones territoriales de que se habla en dichas disposiciones; pero de que ello sea así no se sigue, en rigor lógico, que las Asambleas departamentales no estén autorizadas para ejercer, llegado el caso, la atribución que les confiere el artículo 186 de la Constitución, repetida, como para que no quedara duda, si es que pudiera haberla en un texto tan claro, en el artículo 129, ordinal 26 de la Ley 149 de 1888, porque en nada menoscaban éstas la atribución concedida á aquél, toda vez que las Asambleas, al crear ó suprimir Municipios, hecho del cual tiene que resultar forzosamente la alteración de los términos municipales, no invaden el campo de acción del Congreso, como que la alteración no alcanza á modificar en lo más mínimo las divisiones territoriales hechas por el Congreso, por ser éstas generales y aquéllas parciales, pues efectivamente están en la relación de continente á contenido. Como se ve, pues, no hay tal implicación entre las disposiciones constitucionales citadas, y mal podía haberla después de lo que se ha dicho; y si no existe la contradicción de que se viene hablando, es claro que las dos Ordenanzas acusadas no son contrarias á los referidos artículos 3.°, 5.°, 6.°, 7.° y 76 de la Constitución ni al 186 de la misma, porque la única condición que allí se exige, á saber: que la creación ó supresión de Municipios se haga "con arreglo á la base de población que determine la ley," está cumplida al presente, pues el artículo 189 del Código Político y Municipal, exige que una porción de territorio no puede erigirse en Distrito sin que tenga tres mil habitantes por lo menos, y demostrado está, en vista del último censo levantado en mil ochocientos setenta, de los informes del señor Gobernador del Departamento de Panamá y del Prefecto de la Provincia de Veraguas, que ninguno de los Municipios eliminados tiene una población que alcance á tres mil habitantes. Tampoco son contrarias las expresadas Ordenanzas á los artículos 36, 38 y 39 de la memorada Ley 149 de mil 1888, porque éstos tratan de "la clasificación de las leyes," y yá se ve que aquéllas en nada pueden afectar las disposiciones citadas, dada la diversa naturaleza

de la materia á que unas y otras se refieren; con efecto, la creación ó eliminación de Municipios nada tiene que ver con la clasificación técnica de que habla el capítulo 4.°, título 2.° del Código Político y Municipal. Y si la contrariedad se pretende hallar en el hecho de que en dichas disposiciones se habla de divisiones judiciales y políticas, asuntos que son de la competencia del Congreso, tampoco existe la contradicción que notan los peticionarios, porque la alteración de límites municipales, proveniente de la creación ó supresión de Distritos no afectaa'quellas divisiones, que, por ser generales, no pueden ser alteradas por las parciales, emanadas de la variación de términos municipales.

Comparados los actos legislativos que están sujetos á la revisión de la Corte con los artículos 30 y 48 de la Ley 118 de 1890, "sobre división territorial judicial," se observa igualmente que no hay contradicción alguna por cuanto esta ley, como lo indica su título, se expidió con el único y exclusivo objeto de establecer la división territorial judicial de la República, lo que no implica cambio alguno en el ramo político y administrativo, como lo que se refiere á la creación ó eliminación de Municipios.

Las tantas veces citadas Ordenanzas en nada pueden modificar el artículo 30 de la Ley 118 de 1890, porque las porciones de territorio suprimidas, junto con sus moradores, quedan sujetos á la jurisdicción de los Jueces de Circuito expresados en dicha ley.

Cuanto á la contrariedad que advierten los vecinos del suprimido Municipio de Atalaya, en lo que dice relación á la Ley 109 de 1890, y artículo 196 del Código Político y Municipal, sólo basta observar, en conclusión, lo siguiente: que el artículo 186 de la Constitución no exige para ejercer las Asambleas departamentales la atribución de que allí se habla, como condición *sine qua non*, el requisito que echan de menos; efectivamente, por él no se exige que la base de la población se determine, de acuerdo con el nuevo censo que se levante; y que la última disposición citada no tiene aplicación en el caso que se analiza, por cuanto no se trata de creación de Distritos que no reúnan las condiciones exigidas por la ley.

En mérito de lo expuesto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: que no ha lugar á la suspensión de las Ordenanzas acusadas de nulidad; y ordena, en consecuencia, que se dé cuenta del asunto al próximo Congreso, para que éste decida definitivamente sobre la validez ó nulidad de ellas.

Notifíquese, cópiese, devuélvase y publíquese.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—JOAQUÍN MARTÍNEZ E.—JESÚS MARÍA QUINTERO P. *Gabriel Rosas*, Secretario.

VOTO SALVADO

POR EL SEÑOR MAGISTRADO CASAS ROJAS.

El infrascrito, salva su voto en la anterior decisión, por la razón principal de que cree aplicable al caso de la supresión de Municipios la disposición del artículo 195 del Código Político y Municipal, disposición según la cual, para ese efecto, se requiere la observancia de las formalidades señaladas en el capítulo 2.°, título 6.° de dicho Código; y como no se observaron tales formalidades al expedir las dos Ordenanzas de cuya suspensión se trata, éstas son ilegales y debieron suspenderse.

Bogotá, veintidós de Julio de mil ochocientos noventa y tres.

JESÚS CASAS ROJAS.—POMBO.—ISAZA.—CORRALES. FERNÁNDEZ DE SOTO.—J. MARTÍNEZ E.—QUINTERO.—*Rosas*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez y ocho de Julio de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: El doctor Cayetano Delgado, en su carácter de Fiscal del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cauca, y por escrito de fecha primero de Diciembre del año próximo pasado, dirigido al mismo Tribunal, estableció acusación contra el Prefecto de la Provincia de Buga, doctor José Inocencio Calero, por los cargos de falta de cumplimiento á un deber expreso, de haber dado oficialmente un informe falso y de haber abusado de su autoridad tratando de verdugo al Fiscal acusador.

Al escrito de acusación se acompañaron varias notas cruzadas entre los dichos Fiscal y Prefecto, como los comprobantes de los cargos imputados al acusado y la copia de la diligencia de posesión que acredita el carácter oficial de Calero, en su calidad de Prefecto. Pero al ocuparse el Tribunal en la decisión del mérito del sumario, desempeñaba yá el puesto de Magistrado el mismo doctor Calero, y con tal motivo, y agregada la copia de la diligencia de posesión que así lo comprueba, se remitió el sumario á esta Superioridad, á quien corresponde decidir de su mérito.

Después de practicadas las ampliaciones solicitadas por el señor Procurador general de la Nación y oído el concepto de este funcionario, la Corte procede á examinar los fundamentos de los cargos en que se apoya la acusación.

El primero de los mencionados cargos, que se hace consistir en la falta de cumplimiento á un deber expreso, tiene por fundamento la omisión en que incurrió el Prefecto de Buga, lo mismo que todos los demás Prefectos de las Provincias que forman el Distrito Judicial del Cauca, dejando de dar cumplimiento á la disposición del artículo 729 de la Ordenanza número 33, de diez y seis de Agosto de mil ochocientos noventa, sobre Policía, que dice así:

"Los Prefectos provinciales darán cuenta al Secretario de Gobierno y al Fiscal del Tribunal Superior respectivo, tanto de las providencias que dicten por sí en el ramo de Policía, como de las que hayan dado cuenta los Concejos municipales y Alcaldes de los Distritos. Esto lo harán cada cuatro meses."

El Fiscal del Tribunal del Cauca creyó de su deber dirigir una circular á los Prefectos, exigiéndoles el cumplimiento de la disposición que se deja transcrita y un informe acerca del que hubieran tenido en los Distritos municipales las de los artículos 469, 470, 480 y 495 de la misma Ordenanza, y al efecto extendió la que obra en copia en la primera foja del sumario, con fecha veintiséis de Octubre de mil ochocientos noventa y dos. Mas como en la expresada circular no solamente se fijaba término perentorio á los Prefectos para rendir el informe pedido, sino que se les advertía que la falta ó morosidad en verificarlo los haría responsables conforme al artículo 528 del Código Penal, el Prefecto de Buga, en resolución de veintinueve del mismo Octubre transcrita al Fiscal como respuesta á su circular, manifestó, entre otras cosas, la creencia de que la cuenta á que se refiere el artículo 729 de la Ordenanza sobre Policía, debía darse al Fiscal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, por residir ese empleado en la capital del Departamento, estar más inmediato al Gobernador y en mejores condiciones para auxiliarlo con los datos que necesitase, y que esa misma creencia le había sido manifestada al Fiscal de Buga, por uno de los Prefectos antecesores de Calero, en nota de once de Junio de mil ochocientos noventa y uno. Sin embargo, dispuso el Prefecto que el Secretario tomase del archivo los datos necesarios para dar el informe dentro del término que permitiera el cúmulo de negocios de la Prefectura. Además, hizo notar el Prefecto que los inmediatos ejecutores de las otras disposiciones de la Ordenanza, citados en la circular, eran los Alcaldes de los Distritos, y de ellos debía exigirse su cumplimiento; que no había constancia en la Prefectura de esas contravenciones y por lo mismo nada se podía informar acerca de ellas. Ordenó el Prefecto que se trascribiese á los Alcaldes la circular aludida, para que diesen los informes que en ella se exigen, y concluyó manifestándose ultrajado por el Fiscal, ya por la fijación del término para dar el informe, ya por las advertencias hirientes con que le amenazaba como el verdugo á su víctima, constituyéndose en superior jerárquico del Prefecto etc.

Esa comunicación del Prefecto dió margen á otra más extensa del Fiscal, y ésta á otra del primero, degenerando así

en polémica personal lo que no debió salir de los límites serios, reposados y sobrios que deben caracterizar el lenguaje oficial. Pero es lo cierto que las comunicaciones del Prefecto han venido á ser el fundamento de los cargos hechos por el Fiscal.

A fojas 10 y 11 se halla la copia de las resoluciones de Policía dictadas por el Prefecto Calero durante el tiempo de su administración, que sólo empezó el catorce de Marzo de mil ochocientos noventa y dos, copia que fué remitida al Fiscal el cinco de Noviembre, pero este funcionario creyó que esa copia era insuficiente, por no contener la de las providencias dictadas por los Concejos municipales y los Alcaldes, y dirigió otra nota al Prefecto exigiendo la cuenta de todo lo que la Policía hubiese ejecutado en el cuatrimestre, pero empleando siempre un lenguaje impropio del funcionario público, que está más obligado que el particular á respetar el decoro de las autoridades. El Prefecto, después de contestar que creía personal la obligación impuesta por el artículo 729 de la Ordenanza citada, y que, por lo mismo, no se creía en el deber de hacer lo que sus antecesores habían omitido, dictó, sin embargo, otra resolución, por la cual ordenó que el Secretario informase si en el despacho había constancia escrita de haberse pasado al Fiscal del Tribunal del Cauca ó al de Popayán la cuenta de que habla el indicado artículo, antes del catorce de Marzo, en que empezó á funcionar como Prefecto. El Secretario informó que en el despacho no había constancia escrita del hecho apuntado y ese informe se trasmitió al Fiscal, junto con los informes que posteriormente remitieron los Alcaldes de Buga y Guacarí. El Fiscal avisó recibo de esas piezas, en nota de veintinueve de Noviembre, y en ella insistió en no creer cumplido el deber por parte del Prefecto, y terminó por manifestarle que había abusado de su autoridad al tratarlo de verdugo, por lo que promovería la correspondiente acusación.

A solicitud del señor Procurador ordenó la Corte que se pidiese al Secretario de Gobierno del Departamento del Cauca, una certificación sobre si en esa Oficina había constancia de que el Prefecto de Buga, doctor José Inocencio Calero, hubiese rendido el informe ó relación á que se refiere el artículo 729 de la Ordenanza 33 de 1890, y dicho Secretario ha certificado, con fecha diez de Junio último, "que existen en ese despacho los informes ó relaciones de providencias de Policía que, en cumplimiento del artículo 729 de la Ordenanza citada, rindió el Prefecto de Buga, doctor Calero, bajo los números 98 y 121, correspondientes al tiempo que desempeñó la Prefectura."

Por la relación que se ha hecho de los documentos que constituyen el sumario, se viene en conocimiento de que los cargos aducidos por el Fiscal contra el Prefecto de Buga, no tienen una gravedad tal que lo constituyan responsable de un hecho punible.

Como se ve, el cargo de falta de cumplimiento á un deber expreso, consistente en no haber dado cumplimiento á lo dispuesto en el artículo 729 de la Ordenanza 33, de que se ha venido hablando, está desvirtuado en cuanto se refiere al Secretario de Gobierno, como lo demuestra la certificación de este funcionario, de manera que aquel deber quedó cumplido en parte. Y en cuanto á la parte referente al Fiscal, si bien es cierto que se había omitido el cumplimiento de la citada disposición, tal omisión había tenido por fundamento una creencia, si se quiere errónea, aunque había sido sostenida por el Prefecto antecesor de Calero; pero omisión que trató de repararse inmediatamente por éste, como lo demuestran los documentos enviados en copia de todo lo que existía en el despacho de la Prefectura referente á las providencias de Policía.

En cuanto á la falsedad que se dice cometida por el Prefecto en un documento oficial y que constituye el segundo cargo de la acusación, observa con razón el señor Procurador que no aparece del sumario la comisión de ese delito, supuesto que el Prefecto se limitó á enunciar una simple creencia de que la cuenta á que se refiere el artículo 729 de la Ordenanza supracitada, debía darse al Fiscal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán; pero él no afirmó, como se pretende sostener, que había remitido á dicho Fiscal los datos pedidos por el del Cauca, caso en el cual su afirmación habría quedado desmentida con la nota oficial del primero de dichos Fiscales, en la que manifiesta no haberse recibido en su Oficina la cuenta ó datos de que se trata.

El último cargo hecho al Prefecto de abuso de autoridad, y en el cual no se ocupó siquiera el señor Procurador, se hace consistir en que en la primera nota que contestó el Fiscal, después de quejarse de las advertencias hirientes que se dice lastiman y ultrajan la autoridad del Prefecto, se encuentra esta frase: "y amenazarla, como el verdugo á su víctima, con citas del Código Penal."

La Corte no encuentra que la comparación de que se valió el Prefecto para ponderar sin duda la crueldad de la amenaza, envuelva el delito de abuso de autoridad, en ninguno de los casos de que habla el capítulo 8.°, título 10.°, libro 2.° del Código Penal.

Por lo demás, la acusación Fiscal para alejar toda sospecha de parcialidad, que no se compadece con el estricto cumplimiento del deber, ha debido dirigirse contra todos los Prefectos que se hallaban en el mismo caso que el acusado, y no esperar dos años para establecerla.

En mérito de lo expuesto y de acuerdo con lo prevenido en el artículo 1628 del Código Judicial, la Corte Suprema, siguiendo en parte el concepto del señor Procurador de la Nación y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, sobresee en el presente sumario y declara sin lugar al seguimiento de causa.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—JOAQUÍN MARTÍNEZ E.—JESÚS MARÍA QUINTERO P.

Gabriel Rosas, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintiséis de Julio de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca remite á la Corte en consulta el auto de sobreseimiento, que en catorce de Junio último pronunció, en el sumario instruído para averiguar la responsabilidad en que haya incurrido Carlos Sampedro, por haberse perdido del Juzgado 1.° Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, del cual aquél era el Secretario, varios procesos criminales, entre ellos el seguido contra Antonio Rojas, por homicidio.

Está comprobado que Sampedro es hoy Juez 5.° del Circuito de Bogotá, razón por la que el asunto es de competencia del Tribunal en primera instancia y de la Corte en segunda.

Habiéndose oído al señor Procurador y fijado el negocio en lista por cuatro días, es tiempo de decidir la consulta, y para ello se considera:

Fundóse el auto consultado en el siguiente razonamiento:

Aunque el hecho de la pérdida de los expresados procesos criminales está perfectamente comprobado, y aunque se han practicado las diligencias conducentes á descubrir quién sea el autor de él, no ha sido posible reunir acerca de este punto prueba de ninguna clase, ni siquiera de indicio. La buena conducta y acuciosidad de Sampedro como Secretario de aquel Juzgado se halla acreditada, y es por otra parte cierto que el local de aquella Oficina no prestaba suficiente seguridad, porque habiendo servido antes para las sesiones de la Asamblea legislativa del extinguido Estado de Cundinamarca, la cerradura de la puerta tenía varias llaves de las cuales algunas debieron quedar en manos de particulares, por lo que no era difícil penetrar en dicho local á horas en que el Juzgado estaba cerrado, y sustraer de allí parte del archivo sin que el Secretario pudiera advertirlo inmediatamente.

Estas razones son concluyentes y á ellas sólo tiene la Corte que agregar la de que la aplicación del artículo 394 del Código Penal á Sampedro, artículo que sería pertinente al

caso, presupone la comprobación de haber sido él quien había sustraído los expedientes perdidos. Y como esa comprobación no existe, y antes bien, aparece en autos acreditada su buena conducta; la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de conformidad con el dictamen del señor Procurador, confirma el auto consultado.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—JOAQUÍN MARTÍNEZ E.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

NEGOCIOS VARIOS.

ACTA DE LA DILIGENCIA DE VISITA PRACTICADA EN LA SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, POR SU SEÑORÍA EL PRESIDENTE DE LA MISMA, EL DÍA 31 DE JULIO DE 1893.

En Bogotá á treinta y uno de Julio de mil ochocientos noventa y tres, Su Señoría el Presidente de la Corte practicó en la Secretaría de la misma la visita legal, cuyo resultado fué el siguiente:

1.° Que todos los libros se llevan con esmero y corrección y van al corriente;

2.° Que Su Señoría el Ministro de Fomento ha suministrado seis buenos escritorios para uso de la Secretaría, y ha dado la orden del caso para que se coloque un teléfono *local* que ponga en comunicación la Secretaría con el Salón de Conferencias;

3.° Que el movimiento de negocios en la Corte ha sido el que manifiestan los cuadros siguientes:

CUADRO QUE REPRESENTA EL MOVIMIENTO DE NEGOCIOS EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DURANTE EL MES DE JULIO de 1893.



	SENTENCIAS.					AUTOS.							NEGOCIOS DE UNA SOLA INSTANCIA.				
	CASACIÓN.		CIVILES DE 2.ª INSTANCIA.		Criminales de 2.ª instancia.			Procesos militares.	Competencias.	Recursos de hecho.	Recursos de revisión.	Negocios varios.			Suspensión de Ordenanzas.	Recompensas.	TOTALES.
	Civiles.	Pena capital.	Negocios varios.	Suministros etc.		Civiles.	Criminales.						Civiles.	Criminales.			
Pendientes en 30 de Junio	24	5	7	171	1	8	5	...	...	2	2	2	3	14	4	546	794
Repartidos en Julio	3	...	1	6	2	4	2	...	1	3	...	2	1	2	...	1	28
Totales	27	5	8	177	3	12	7	...	1	5	2	4	4	16	4	547	822
Despachados en el mes	5	2	2	13	1	3	2	...	1	1	...	1	...	2	1	9	43
Pendientes en 31 de Julio	22	3	6	164	2	9	5	...	...	4	2	3	4	14	3	538	779

CUADRO QUE REPRESENTA EL NÚMERO DE PROYECTOS PRESENTADOS POR CADA UNO DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SOBRE LOS NEGOCIOS CUYO DESPACHO SE RELACIONA EN EL CUADRO ANTERIOR (JULIO).

	SENTENCIAS.					AUTOS.							NEGOCIOS DE UNA SOLA INSTANCIA.				
	CASACIÓN.		CIVILES DE 2.ª INSTANCIA.		Criminales de 2.ª instancia.			Procesos militares.	Competencias.	Recursos de hecho.	Recursos de revisión.	Negocios varios.			Suspensión de Ordenanzas.	Recompensas.	TOTALES.
	Civiles.	Pena capital.	Negocios varios.	Suministros etc.		Civiles.	Criminales.						Civiles.	Criminales.			
Doctor Pombo	1	...	...	3	...	1	...	...	...	...	...	...	....	1	...	1	7
Doctor Isaza	1	1	...	3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3	8
Doctor Casas Rojas	1	...	1	2	...	1	1	...	...	...	...	...	...	...	...	1	7
Doctor Corrales	1	1	...	...	...	...	1	...	...	1	...	...	...	1	...	....	5
Doctor F. de Soto	1	...	1	2	...	1	...	...	...	...	...	1	...	...	...	1	7
Doctor Quintero (del 7 al 25)	...	...	...	3	1	...	...	...	1	...	...	...	...	...	1	...	6
Doctor Martínez (del 13 al 30)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3	3
Totales	5	2	2	13	1	3	2	...	1	1	...	1	...	2	1	9	43

RELACIÓN DE LOS NEGOCIOS DESPACHADOS POR LA CORTE SUPREMA DURANTE EL MES DE JULIO DE 1893.

Señor Magistrado doctor Pombo.

1.—Julio 7.—Suministros.—Reclamación de Miguel Arenas.

2.—Julio 17.—Suministros.—Reclamación de Urbano Salgado.

3.—Julio 18.—Criminal de una instancia.—Juicio seguido contra José Inocencio Calero, por violación del capítulo 8.°, título 10, libro 2.° del Código Penal.

4.—Julio 27.—Suministros.—Reclamación de Braulio y Pablo Nichols.

5.—Julio 29.—Casación civil.—Juicio sobre reivindicación del terreno llamado "Los-Curas," seguido por Hilario Quintero.

6.—Julio 29.—Recompensa.—Solicitud de Blas Chito, como inválido de la guerra de 1876.

7.—Julio 29.—Auto civil.—Ejecución seguida contra Alejandro Mosquera.

Señor Magistrado doctor Isaza.

1.—Julio 4.—Casación civil.—Juicio seguido por Eduardo Uribe U. & Compañía contra Inés Restrepo de Piedrahita, por pesos.

2.—Julio 11.—Recompensa.—Solicitud de Manuel Ruiz, como inválido en la guerra de 1876.

3.—Julio 15.—Recompensa.—Solicitud de Dolores Gamero, como hija de un militar de la Independencia.

4.—Julio 17.—Pena capital.—Causa seguida contra Liboria Barrera, por parricidio.

5.—Julio 18.—Suministros.—Reclamación de Camilo Domínguez.

6.—Julio 25.—Suministros.—Reclamación de Pantaleón González.

7.—Julio 26.—Recompensa.—Solicitud de Matilde Barriga, como nieta de un militar de la Independencia.

8.—Julio 29.—Suministros.—Reclamación de Clara Morales de B.

Señor Magistrado doctor Casas Rojas.

1.—Julio 3.—Casación civil.—Juicio seguido por Tomás Currea, sobre resolución de un contrato.

2.—Julio 11.—Auto civil.—Juicio seguido por Jesús Abella, sobre desahucio.

3.—Julio 11.—Suministros.—Reclamación de Gabino Cote.

4.—Julio 11.—Sentencia civil.—Juicio seguido por Pablo Bermúdez contra la Nación, por pesos.

5.—Julio 14.—Recompensa.—Solicitud de María López, por muerte de un hijo en la guerra de 1876.

6.—Julio 19.—Suministros.—Reclamación de Enrique Moreno.

7.—Julio 26.—Auto criminal.—Sumario instruído contra Carlos Sampedro, por la pérdida de unos expedientes.

Señor Magistrado doctor Corrales.

1.—Julio 4.—Casación.—Juicio promovido por Primitivo Freire, por pesos.

2.—Julio 18.—Pena capital.—Causa seguida á Eleuterio Ospina, por asesinato.

3.—Julio 22.—Criminal de una instancia.—Juicio contra Ramón Romero Rojas, por varios cargos, como Administrador de la Salina de Cumaral y Upín.

4.—Julio 26.—Auto criminal.—Sumario contra Carlos S. Nieto, por abuso de autoridad.

5.—Julio 29.—Recurso de hecho.—Solicitud de Domingo C. Suárez.

Señor Magistrado doctor F. de Soto.

1.—Julio 10.—Negocio vario.—Sumario contra Luis Pérez.

2.—Julio 10.—Sentencia civil común.—Juicio seguido por Fermín Buenaventura, sobre capellanía laica.

3.—Julio 11.—Auto civil.—Ejecución contra Eusebio Bejarano.

4.—Julio 14.—Recompensa.—Solicitud de María Josefa Casanova, como hermana de un militar de la Independencia.

5.—Julio 14.—Suministros.—Reclamación de Antonio M. Hernández, y otros.

6.—Julio 22.—Casación.—Juicio seguido por Francisco de P. Manotas para que se declare á Manuel Esteban Márquez heredero de Ricardo Márquez.

7.—Julio 29.—Suministros.—Reclamación de Dolores Quintero.

Señor Magistrado doctor Quintero (del 7 al 25).

1.—Julio 11.—Suministros.—Reclamación de Luis Escobar C.

2.—Julio 14.—Suministros.—Reclamación de Domingo Forero.

3.—Julio 17.—Sentencia criminal.—Juicio seguido contra Juan B. Ortiz y Cifuentes, por falta de asistencia al despacho de un Juzgado.

4.—Julio 19.—Competencia.—Sumario seguido contra Félix Blandón, por heridas.

5. Julio 22.—Suspensión de Ordenanzas.—Solicitud sobre suspensión de las Ordenanzas número 5 de 1882 y 27 de 1890 de Panamá.

6.—Julio 25.—Suministros.—Reclamación de Ramón Soto R.

Señor Magistrado doctor Martínez E. (del 12 al 30).

1.—Julio 15.—Recompensa.—Solicitud de Francisco de P. Santander, como inválido de la guerra de 1884 á 1885.

2.—Julio 21.—Recompensa.—Solicitud de Domitila Soto por muerte de un hijo en la guerra de 1876.

3.—Julio 24.—Recompensa.—Solicitud de Matilde Rivera de Pérez, como viuda del Capitán Campo E. Pérez.

4.° Que en el personal de los señores Magistrados ha habido los siguientes cambios:

El señor Magistrado doctor Galindo se separó en uso de licencia el 11 y volvió á ocupar su puesto el 31. Durante su ausencia, ó sea del 12 al 30 fué reemplazado por el señor Magistrado interino doctor Joaquín Martínez Escobar

El señor Magistrado doctor Botero Uribe se separó, también con licencia, el 6 y volvió á su puesto el 26. Fué reemplazado del 7 al 25, por el señor Magistrado interino doctor Jesús M. Quintero P.

En la Secretaría, el señor D. Rafael Pombo Martínez reemplazó, por treinta y cinco días, contados desde el 15 de Junio último, al señor doctor Antonio Pachón, y para sustituír al señor Pombo, fué nombrado el señor D. Plácido Malo. El Oficial-Escribiente de la Secretaría, señor D. Jenaro Orjuela, se separó con licencia desde el 26 del mismo mes, y su puesto ha sido ocupado por el señor D. Manuel María Pardo, á virtud de nombramiento hecho en él por la Corte.

Cumplida la licencia concedida al doctor Pachón volvió éste á ocupar su puesto, pero el 27 del presente mes se separó nuevamente de su destino, por el término de veinte días, y entró á desempeñarlo el citado señor Malo;

5.° Que se ha recibido en la Secretaría toda la edición de la *Gaceta Judicial*, del número 364 en adelante, la que consta de 2,000 ejemplares, cuyo repartimiento á todas las Oficinas de la República se ha estado haciendo, no sin bastante trabajo, por no contarse con una pieza adecuada ni con estantes para colocar ordenadamente el periódico. Del Ministerio de Gobierno no se ha obtenido dato alguno referente á las Oficinas á donde se remitía la *Gaceta* ni la lista de suscriptores. La Secretaría se ha dirigido al Ministerio de Fomento, que siempre ha atendido con loable interés las solicitudes de la Corte, con el fin de obtener un local para dicha agencia, ó, por lo menos, estantes suficientes.

Presentados los anteriores cuadros y dados estos informes, Su Señoría el Presidente de la Corte, dió por terminada la visita y dispuso se publicase el acta respectiva en la *Gaceta Judicial*.

El Presidente de la Corte, LUCIO A. POMBO.—El Secretario, *Gabriel Rosas*.

IMPRENTA DE ANTONIO M. SILVESTRE.

REPÚBLICA DE COLOMBIA.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AÑO VIII — Bogotá, 1.° de Septiembre de 1893. — NÚM. 412.

CONTENIDO.

Págs.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Concédese á Domitila Soto una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Joaquín Martínez E.) ... 385

Confírmase la resolución dictada por el Ministerio del Tesoro en la demanda de Ramón Soto R., sobre pago de unos suministros y expropiaciones de guerra. (Magistrado ponente, doctor Jesús M. Quintero P.) ... 385

Concédese á Matilde Barriga una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Isaza) ... 387

Confírmase la resolución dictada por el Ministerio del Tesoro en la demanda entablada por Braulio Nicholls y otros, sobre pago de unos suministros. (Magistrado ponente, doctor Pombo) ... 388

Concédese á Blas Chito una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Pombo) ... 388

Anúlase la sentencia pronunciada por el Tribunal de Cundinamarca en el juicio promovido por Hilario Quintero contra Adelaida Rodríguez de Forero, sobre dominio del terreno llamado "Los-Curas." (Magistrado ponente, doctor Pombo) ... 388

AUTOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Confírmase el auto promovido por el Tribunal del Distrito Judicial de Bolívar, en el proceso formado contra Carlos S. Nieto, Inspector de Instrucción pública de Mompox, por abuso de autoridad. (Magistrado ponente, doctor Corrales) ... 392

GACETA JUDICIAL.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintiuno de Julio de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Por memorial de tres de Septiembre de mil ochocientos noventa y uno, se presentó Andrés Lara á esta Superioridad, como apoderado legalmente constituído de Domitila Soto, demandando al Tesoro nacional por la cantidad de setecientos cuatro pesos ($ 704), que dice le corresponden por recompensa y como madre del soldado Roque Arango, que murió en el combate de "El-Calvario," el diez y seis de Julio de mil ochocientos setenta y seis, en defensa de las actuales instituciones.

A su demanda acompañó varios documentos, y de ellos resulta:

1.° Que con las declaraciones de los testigos Pedro Molina, Narciso y Pedro Millán, se comprueba que Roque Arango entró á servir como soldado, el año de mil ochocientos setenta y seis, en la fuerza que organizó en la población de Victoria, Departamento del Cauca, Telmo Ormaza, para combatir en defensa de los principios que informan las actuales instituciones;

2.° Que el citado Roque Arango se encontró en la acción de armas que se libró por la fuerza que comandaba Ormaza contra las del Gobierno del Estado del Cauca, comandadas por Ramón Perea, en el sitio de "El-Calvario," caserío de Santa-Ana, *del Distrito de La-Victoria*, que tuvo lugar el diez y seis de Julio de mil ochocientos sesenta y seis; y que les consta á los testigos, como testigos presenciales, que en dicha acción fué herido gravemente Roque Arango, el cual murió por consecuencia de dicha herida;

3.° Que Domitila Soto es pobre, que no tiene renta anual que alcance á trescientos pesos, pues que subsiste de su trabajo, y que el finado Roque Arango vivía al lado de su madre Domitila Soto, en perfecta armonía; pues era viuda desde antes de mil ochocientos setenta y cuatro, y Roque murió soltero sin dejar sucesión;

4.° Que los testigos citados rindieron sus declaraciones con asistencia del encargado del Ministerio Público, y que tanto este empleado como el señor Juez del Circuito del Quindío, certifican que los testigos son idóneos, y

5.° Que Domitila Soto no figura en el registro de pensionados de la República, ni en los libros de la Sección 3.ª del Ministerio del Tesoro hay constancia de que dicha Soto haya recibido recompensa del Tesoro nacional, como madre de Roque Arango, ni por cualquier otro motivo.

Posteriormente, por auto para mejor proveer, de nueve de Octubre de mil ochocientos noventa y uno, y de acuerdo con el concepto emitido por el señor Procurador, en siete del mismo Octubre, se produjeron otras pruebas que dan los siguientes resultados:

1.° Que en el cementerio de la iglesia parroquial de La-Victoria, á cuatro de Febrero de mil ochocientos sesenta y seis, se le dió sepultura sagrada al cadáver de Jesús María Arango, marido que fué de Domitila Soto;

2.° Que con las declaraciones de Gonzalo Echeverri y Gaspar Lemos, rendidas con asistencia del encargado del Ministerio Público, se comprueba que la conducta de Domitila Soto es intachable y aun ejemplar, testigos sobre los cuales certifica el señor Juez del Corregimiento de Obando que reúnen las condiciones que la ley exige, y

3.° Que con dos certificaciones expedidas por el Cura de la Parroquia de El-Naranjo, se comprueba que Domitila Soto ha permanecido viuda—hecho que está, además, plenamente comprobado con las declaraciones de Julio Gómez y Julio Torrente—las que se rindieron con las formalidades requeridas por la ley, y en virtud de auto para mejor proveer de veinticuatro de Enero último.

Como se ve, por el examen verificado de las pruebas de este expediente, se halla plenamente comprobado el derecho que se demanda, lo cual reconoce la Corte, y de acuerdo con los conceptos favorables del señor Procurador general, esta Superioridad, teniendo en cuenta lo que disponen las leyes 86 de 1886 y la 84 de 1890, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, condena á la Nación á pagar por vía de recompensa á Domitila Soto, ó á su apoderado Andrés Lara, la suma de setecientos cuatro pesos ($ 704), que es el monto en cuatro años del sueldo de soldado. Dése cuenta al señor Ministro del Tesoro, para lo de su cargo.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—JOAQUÍN MARTÍNEZ E.—JESÚS MARÍA QUINTERO P. *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veinticinco de Julio de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: El expediente número 2,329, que contiene la re-

clamación de Ramón Soto R., por valor de cuatro mil setecientos treinta y seis pesos ($ 4,736), proveniente de los suministros, empréstitos y expropiaciones que, asegura, sufrió en la guerra civil de mil ochocientos ochenta y cuatro á mil ochocientos ochenta y cinco, ha subido al conocimiento de esta Superioridad en grado de apelación de la resolución que, bajo el número 3,323, dictó el señor Ministro del Tesoro, por la cual reformó la de la Comisión, y reconoció á cargo de la Nación, y á favor del reclamante, la cantidad de dos mil ciento ochenta pesos ($ 2,180) por la causa expresada.

Surtidos yá los trámites propios del recurso en toda la plenitud de la forma, es llegado el caso de determinarlo, y á ello se procede, previas las consideraciones siguientes:

La suma reclamada, según la relación que se hace en el memorial de fecha cuatro de Marzo de mil ochocientos ochenta y seis (folios 23 y 24 de este expediente), dirigido al señor Secretario de Gobierno del Distrito Federal, consta de las siguientes partidas:

Mil pesos por contribución de guerra.....$	1,000
Novecientos pesos, valor de tres caballos de silla suministrados al General Daniel Aldana.....	900
Cien pesos que pagó el reclamante por empréstito forzoso.....	100
Ciento ocho pesos, valor de dos novillos gordos que suministró para raciones del Ejército del Norte.	108
Quinientos pesos, valor de una mula que le expropiaron las fuerzas del General Antonio Valderrama.....	500
Mil quinientos pesos, valor de cinco caballos que tomaron las mismas fuerzas.....	1,500
Quinientos pesos, valor de tres caballos que le expropiaron las referidas fuerzas.....	500
Ciento veintiocho pesos, canon del arrendamiento de una casa de su propiedad, que se destinó para cuartel durante ocho meses, á razón de diez y seis pesos mensuales.....	128
Suma. (S. E. ú O.) .....$	4,736

La primera partida por valor de mil pesos ($ 1,000) debe reconocerse, pues se halla debidamente comprobada con el recibo que expidió á favor del reclamante, el Coronel Jorge Moya Vásquez, encargado de recaudar la contribución de guerra en Ubaté, según aparece de la certificación del señor Ministro de Guerra, puesta al pie de dicho recibo.

La segunda y tercera partidas, que ascienden á la suma de mil pesos ($ 1,000), constan en una certificación expedida por el señor Secretario de Gobierno del Departamento de Cundinamarca, distinguida con el número 478, de fecha diez y seis de Enero de mil ochocientos ochenta y ocho, la cual se ha exhibido con nota de autenticación, autorizada por el Subsecretario de Gobierno de la República. Los antecedentes que se tuvieron en cuenta para hacer la conversión de que trata el Decreto número 102 de 1886, se han traído á los autos, y los constituyen dos recibos, uno expedido por Daniel Aldana, como Gobernador del extinguido Estado de Cundinamarca, en el cual se dice que Ramón Soto R. le suministró voluntariamente para el servicio de las fuerzas que obraban á su mando, en operaciones sobre el Norte, tres caballos de silla, avaluados á trescientos pesos ($ 300) cada uno, y otro, firmado por Andrés Iguarán, en su carácter de Habilitado general del Ejército del Norte, quien acusa recibo al precitado Soto R., por valor de cien pesos ($ 100), que éste consignó en sus manos, provenientes del empréstito forzoso que se le asignó, como vecino del antiguo Departamento de Ubaté. El recibo expedido directamente por el Gobernador de Cundinamarca hace plena fe del hecho del suministro de los tres caballos, porque se halla comprendido en el ordinal 2.° del artículo 2.° de la Ley 44 de 1886, y porque reúne, además, los requisitos señalados en los artículos 1.° y 3.° del Decreto número 102 de 1886 (17 de Febrero). La Comisión tacha este recibo, por cuanto no se halló en los libros que, sobre suministros, empréstitos y expropiaciones, se llevaban en la Prefectura de la Provincia de Ubaté, dato alguno relativo á la reclamación de Ramón Soto R., y por cuanto tampoco apareció la diligencia de avalúo de los semovientes, los cuales fueron justipreciados por los peritos Epifanio Laverde y Antonio Herrera, quienes declararon sobre el particular, y afirman que por orden del General Aldana estimaron el precio de unos caballos que suministró el susodicho Soto R., cuyo número no recuerdan con precisión ni el valor que les dieron, pero que una vez que fueron avaluados, aquél ordenó que el Habilitado del Ejército, expidiera el recibo correspondiente. Esta omisión, á juicio de la Corte, no priva á Soto R. del derecho perfecto que le asiste para exigir el reconocimiento y pago de lo que justamente valgan los tres caballos, porque está comprobado que los suministró voluntariamente; que se destinaron al servicio del Ejército, y que fueron avaluados, y esto es lo esencial para reconocer un crédito de esta naturaleza, conforme á las disposiciones vigentes que rigen sobre la materia. Mas como el precio que se dió á los semovientes es exagerado, porque en ese tiempo estaba muy abatido el precio de los animales, y porque si los presentó voluntariamente, es seguro que no escogería de los mejores en su clase sino de los de mediana calidad, la Corte, en ejercicio de la atribución que le concede el artículo 6.° de la Ley 44 de 1886, reduce á quinientos pesos ($ 500) el valor de los caballos.

Cuanto al recibo expedido por Andrés Iguarán se observa que no habiéndose establecido el carácter del empleo que se dice ejercía, y en desempeño del cual dió el recibo, puesto que no se halló en la Oficina donde debía existir, ni el decreto en que se hiciera el nombramiento ni la diligencia de posesión que tomara del destino, mal puede estimarse como prueba tal carta de recibo, siendo así que entre los hechos que es menester acreditar para tener derecho al pago de los suministros, empréstitos y expropiaciones causados en la última guerra, conforme al artículo 1.° del Decreto número 102 de 1886, el cual tiene fuerza de ley, figura éste: "El carácter de empleado público que tuviera esa misma persona, ó la facultad de que se hallara investido, ya por el ejercicio de sus peculiares funciones, ya por delegación expresa y terminante que al efecto se le hiciera para exigir y recibir." Cierto que el Secretario de Gobierno del Departamento de Cundinamarca certifica acerca de la autenticidad de la firma que autoriza el expresado recibo, pero esto no basta, á juicio de la Corte, para dar por demostrado un hecho de tan cardinal importancia, máxime si se tiene en cuenta que el empleado que expidió la certificación declara bajo juramento que no recuerda absolutamente en qué antecedentes se basó para haber hecho la afirmación que ésta contiene.

La cuarta partida se ha pretendido justificar con las declaraciones de los testigos Gabriel Franco, Antonio Pinilla y Agustín Pachón, las cuales se recibieron en Enero de mil ochocientos ochenta y seis, fecha en que no regían ni la Ley 44 del mismo año "sobre suministros, empréstitos y expropiaciones," ni mucho menos las posteriores que después se expidieron sobre la materia. A primera vista parece, pues, que para juzgar del mérito probatorio de estas disposiciones, se debería tener en cuenta las disposiciones legales que á la sazón estaban en vigor. Pero no es así, porque por el Decreto número 102 de 1886, que estaba yá vigente á la época en que tuvo lugar la recepción de la prueba, no se estableció clara y terminantemente el modo como se debía hacer la reclamación y las condiciones que habían de reunir las declaraciones de testigos para que fuesen apreciadas; allí no se hizo sino preparar las bases de ésta, pero nada se dijo en cuanto á las ritualidades del juicio, ó de la actuación que había que instruír para poner en claro el derecho; y así lo ha entendido el reclamante cuando hizo que se ratificaran algunos de los testigos que ha presentado.

Ahora bien, como por la Ley 44 de 1886 se exigen tres declaraciones de testigos contestes y mayores de toda excepción, que den la razón de su dicho, para comprobar un empréstito, un suministro ó una expropiación, y como en la deposición del declarante Pachón no concurre la última de las condiciones apuntadas, es claro que no puede estimarse la prueba testimonial aducida, porque se necesitan tres testigos por lo menos. Y si á lo expuesto se agrega que no se ha comprobado que las especies que se dice se suministraron figuren en las cuentas de la Oficina de manejo respectiva, como lo

prescribe la última parte del artículo 2.° del aludido Decreto número 102 de 1886, nadie pondrá en duda la legitimidad de la conclusión á que se ha llegado.

La quinta, sexta y séptima partidas, referentes á los semovientes que, al decir del reclamante, le fueron expropiados por las fuerzas que obraban á órdenes del General Antonio Valderrama, se ha tratado de acreditar con las declaraciones de los testigos Joaquín Sierra, Pericles Neira y José María López. Estos testimonios no constituyen plena prueba, porque no reúnen en sí todas y cada una de las condiciones que la ley exige; con efecto, nótase, en primer lugar, que los dos primeros testigos citados no dan la razón de su dicho en cuanto al hecho importantísimo de la propiedad de los semovientes, pues no expresan por qué medio han adquirido conocimiento para aseverar, como aseveran, redondamente, que éstos pertenecían en dominio á Soto R., y si respecto del tercero y último se llena este requisito, sabido es, por ser cosa trivial, que un testimonio singular no puede formar por sí solo prueba completa; adviértese, en segundo lugar, que ratificados los testigos, Neira no lo hizo conforme al artículo.... del Código Judicial; por consiguiente, su testimonio no debe ser apreciado; que el testimonio de Sierra no guarda completa conformidad, pues en la primera declaración que rindió, afirmó que la expropiación había tenido lugar en la hacienda de "La-Ramada," al paso que en la segunda dice que las bestias fueron tomadas no sólo de este fundo sino también de "El-Páramo."

Sólo resta por analizar la última partida, que la constituye la suma de ciento veintiocho pesos ($ 128), procedente del canon ó arrendamiento de una casa de propiedad del reclamante que, según éste, la ocupó una fuerza del Gobierno. Con el fin de establecer este hecho y de fijar el precio del alquiler, se recibieron ante el Juez 1.° del Circuito de Ubaté las deposiciones de los testigos Miguel Clavijo, Timoteo Vélez y Aquilino Márquez. Desde luégo se nota, al entrar en el análisis de esta prueba, que el testimonio de Clavijo no puede ser apreciado, por no aparecer autorizada la diligencia de declaración con la firma del Secretario del Juez que la recibió. Eliminada del debate la deposición del primer testigo mencionado, quedan en pie las otras dos, con las cuales no se comprueba la expropiación, pues yá se ha visto que conforme á la Ley 44 de 1886, se necesitan tres declaraciones por lo menos.

El crédito reclamado, de acuerdo con las premisas sentadas, debía quedar reducido á sólo mil quinientos pesos ($ 1,500); pero es el caso que habiendo únicamente apelado el apoderado de Soto R. de la resolución del señor Ministro del Tesoro, en lo que le era desfavorable, ésta se halla ejecutoriada y no se puede variar en lo más mínimo.

Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la resolución apelada.

Notifíquese, cópiese y publíquese este fallo en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—JOAQUÍN MARTÍNEZ E.—JESÚS MARÍA QUINTERO P. *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintiséis de Julio de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Matilde Barriga, viuda, vecina de esta ciudad, solicita recompensa conforme á la Ley 84 de 1890, por ser nieta legítima de un militar de la Independencia.

Su apoderado, Gregorio Gómez Gutiérrez, ha comprobado en este juicio sumario, seguido ante la Corte, siendo contraparte el señor Procurador general de la Nación, los siguientes hechos:

1.° Que Ildefonso Escalona contrajo matrimonio con María de Jesús Silva, en el pueblo de Betoyes, República de Venezuela, según certificación de Fray Domingo Obregón, Cura de aquel pueblo, expedida en diez y siete de Julio de 1816, y varias declaraciones de testigos que obran originales ó en copia en el expediente;

2.° Que del matrimonio expresado nació Natalia Escalona y Silva, la que fué bautizada en la ciudad de Angostura, en el año de 1817. No ha sido posible hallar la partida de bautismo, á pesar de haberse solicitado de las autoridades eclesiásticas de Venezuela, por conducto del Cónsul de Colombia, en Ciudad Bolívar; pero las exposiciones de algunos Jefes de la Independencia y las declaraciones de otros testigos que declaran sobre la posesión notoria del estado de hija legítima de dicha Natalia Escalona y Silva, no dejan duda sobre este hecho;

3.° Que el Presidente de las Provincias Unidas de Nueva Granada, D. Camilo Torres, confirió á Ildefonso Escalona el empleo de Capitán de la 2.ª Compañía del *Escuadrón de Dragones* del Ejército de la República, según se ve en el despacho expedido en Santafé, en veinticuatro de Marzo de 1816 y registrado en la Secretaría de Guerra, en el Cuartel general del Puente Nacional, en catorce del mismo mes (copia de la foja 3.ª y 55);

4.° Que el Presidente de la República de la Nueva Granada, General Tomás Cipriano de Mosquera, concedió conforme á la Ley de 29 de Mayo de 1846 á Jesús Silva, como viuda del Capitán Ildefonso Escalona una pensión de diez y seis pesos ($ 16) mensuales, según consta del título original, expedido en trece de Agosto del año últimamente citado (foja 8);

5.° Que Jesús Silva fué sepultada en el cementerio de esta ciudad, en diez de Julio de 1872 (certificación del folio 14);

6.° Que en veintitrés de Octubre de 1843 contrajeron matrimonio en esta ciudad José María Barriga y Natalia Escalona (certificación del folio 15);

7.° Que el veinticuatro de Agosto de 1891 se dió sepultura eclesiástica en esta ciudad á Natalia Escalona, viuda de José María Barriga é hija de Ildefonso Escalona y María de Jesús Silva (certificación del folio 16);

8.° Que en veinticinco de Abril de 1851 fué bautizada en esta ciudad María de Jesús Matilde, nacida el 17 de Marzo del mismo año, hija legítima de José María Barriga y Natalia Escalona (certificación de folio 17);

9.° Que en treinta de Abril de 1878 contrajeron matrimonio civil Antonino Zornosa y Matilde Barriga, ante el Notario 3.° del Círculo de Bogotá (folio 18);

10. Que Antonino Zornosa falleció de muerte natural el día ocho de Septiembre de 1885 (folio (19);

11. Que Matilde Barriga de Zornosa no recibe pensión de la República ni consta que se le haya dado recompensa del Tesoro nacional (certificación del Ministerio del Tesoro folio 21);

12. Que Matilde Barriga no había contraído nuevo matrimonio hasta el treinta de Abril de 1893 (certificación de folio 57);

13. Que en el Ministerio del Tesoro no figura Natalia Escalona entre los pensionados de la República, ni consta que haya recibido recompensa del Tesoro nacional (folio 57);

14. Que entre las hojas de servicio de militares de la Independencia que existen en el archivo nacional llamado "Republicano," no figura la del Capitán José Ildefonso Escalona (certificado del folio 61);

15. Se ha acreditado la muerte de Ildefonso Escalona acaecida, según se cree, en la isla de Trinidad, en el año de 1817, por consecuencia de heridas recibidas en servicio de República, en la güerra de la Independencia. No puede dudarse de ese hecho, en atención al largo tiempo trascurrido desde que empezó á servir y á que un Decreto del Gobierno dictado en el año de 1846, reconoció á Jesús Silva como viuda del Capitán Escalona, y le otorgó una pensión vitalicia;

16. Se ha acreditado igualmente con declaraciones de testigos hábiles y las consiguientes partidas de defunción que entre los descendientes de Escalona sólo la demandante puede tener derecho á recompensa, pues sus hermanos legítimos han muerto, y otra hermana que sobrevive está casada y ha manifestado á la Corte no considerarse con derecho á reclamar recompensa;

17. Se ha presentado asimismo prueba testimonial suficiente para acreditar que la demandante permanece viuda que es muy pobre y ha observado buena conducta.

En atención al mérito de las pruebas mencionadas, á lo que disponen los artículos 1.°, 2.°, 5.°, 6.°, 9.° y 12 de la Ley 84 de 1890, y teniendo en consideración que la muerte del Capitán Escalona ocurrió algunos años antes de la Constitución de la República de Colombia, en la época más cruda de la guerra, por lo cual no podía exigirse la hoja de servicios, la Corte juzga que la solicitante tiene derecho á la recompensa unitaria que reclama.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el concepto del señor Procurador, declara que Matilde Barriga de Zornosa, nieta legítima de José Ildefonso Escalona, Capitán de Ejército que fué en la guerra de la Independencia, tiene derecho á una recompensa unitaria de tres mil ciento veinte pesos ($ 3,120), monto del sueldo del empleo de Capitán en cuatro años.

Déjese copia de esta sentencia, comuníquese á Su Señoría el Ministro del Tesoro y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—JOAQUÍN MARTÍNEZ E.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Julio veintisiete de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Por memorial de fecha diez y nueve de Octubre de mil ochocientos ochenta y ocho, Braulio Nicholls, por sí y á nombre de Rafael Acebedo, Froilán Rodríguez y Pablo Nicholls, introdujo ante la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, la reclamación del reconocimiento del crédito de mil quinientos cincuenta pesos ($ 1,550), como valor de suministros hechos al Gobierno durante la última guerra, en el extinguido Estado de Antioquia. Al memorial se acompañó una certificación del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la cual aparece que la reclamación intentada por Eduardo Nicholls, se inició en ese Ministerio el veintitrés de Abril de 1887, pero que dicha reclamación se resolvió negativamente porque figuraban en ella bienes pertenecientes á nacionales, y se acompañó también una información de testigos creada ante el Juez del Circuito de Rionegro, en el mes de Septiembre de 1888.

Por resolución de quince de Junio del año próximo pasado, señalada con el número 3,800, declaró la Comisión prescrito el derecho de los reclamantes, por haberse intentado la reclamación el diez y nueve de Octubre de 1888, es decir, con posterioridad al día fijado por la Ley 36 de ese mismo año. El Ministerio del Tesoro impartió su aprobación á lo resuelto por la Comisión, según se ve de la resolución número 3,224, de fecha veintiocho de Septiembre siguiente.

De esta última se interpuso apelación para ante la Corte, en donde después de oídos el Fiscal especial y el apoderado del apelante, se procede á resolver en definitiva.

Se ha hecho el argumento de que á la expedición de la Ley 36 de 1888, se había instaurado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores una reclamación; pero consta de autos que la reclamación allí instaurada lo fué por Eduardo Nicholls, en su calidad de extranjero, y por la suma cinco de mil quinientos sesenta pesos ($ 5,560), de donde se deduce que tal reclamación no es la misma introducida á la Comisión por otros individuos y por diversa suma. Y suponiendo que fuese la misma, consta también de la certificación del mismo Ministerio que aquella reclamación había sido resuelta negativamente, es decir, que no podía considerarse pendiente el diez y nueve de Octubre de 1888, en que se introdujo á la Comisión, como lo ha resuelto yá la Corte en casos análogos.

Por tanto, la resolución de la Comisión que declaró prescrito el derecho de los reclamantes y la del *Ministerio del Tesoro que la confirmó* son estrictamente legales, y por lo mismo, la Corte Suprema, de acuerdo con el concepto del señor Fiscal especial, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la resolución apelada.

Notifíquese, déjese copia, publíquese en la *Gaceta*, y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—JOAQUÍN MARTÍNEZ E.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintinueve de Julio de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Blas Chito, vecino del Distrito de Dolores, en el Departamento del Cauca, ha solicitado, por medio de su apoderado Salvador Valencia Fernández, la concesión de una recompensa militar por motivo de invalidez, proveniente de herida recibida en el campo de batalla y en defensa del Gobierno legítimo de la Confederación Granadina, en 1862.

En el expediente se hallan justificados los hechos siguientes:

1.° Que Blas Chito militó en la guerra de 1860, á órdenes del General Jacinto Córdoba, en el empleo de Alférez que dicho General le confirió, y que en un combate parcial que se libró con una guerrilla de las del General José María Sánchez, en el sitio de "Eguizábalo," cerca del pueblo de Dolores, el primero de Noviembre de 1862, Chito fué herido por una bala enemiga que le atravesó ambas piernas. Estos hechos, así como la pobreza y buena conducta y la identidad del reclamante constan de la información de cinco testigos compañeros de armas de Chito, que dan razón satisfactoria de sus dichos, y que han declarado con las formalidas legales;

2.° Que no ha sido hallado en el archivo de la Gobernación del Cauca, dato alguno respecto del empleo militar de Chito, el cual está acreditado por otra parte con las declaraciones citadas y con el certificado del General José María González U., como Jefe de Estado Mayor de la 2.ª División;

3.° Que según el reconocimiento practicado ante el Gobernador del Departamento, por la junta de profesores Juan N. Wallis O., Domingo Cajiao C. y Domingo Arboleda, "Chito tiene las cicatrices de una herida de bala en la parte superior de la pierna izquierda, en la cual el proyectil atravesó y fracturó la extremidad superior de la tibia; que el mismo proyectil penetró por la parte inferior é interna del muslo derecho y ha quedado alojado en el hueso poplíteo, y que á consecuencia de esta herida ha quedado una incapacidad relativa que le impide trabajar como antes, pues la pierna ha quedado deformada y más corta que la otra;"

4.° Que Chito no ha recibido pensión ni recompensa alguna por causa de su invalidez, lo certifica el señor Ministro del Tesoro.

Siendo los hechos enumerados constitutivos del derecho del solicitante, conforme á los artículos 1.°, 5.°, 6.°, 9.° y 19 de la Ley 84 de 1890, la Corte Suprema, de acuerdo con lo pedido por el señor Procurador de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que Blas Chito tiene derecho, en su calidad de Subteniente, á recibir del Tesoro nacional la recompensa unitaria y definitiva de novecientos sesenta pesos ($ 960), equivalentes á la mitad del sueldo de ese empleo en cuatro años, por la invalidez relativa que contrajo con motivo de herida recibida en el campo de batalla.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta*, dése cuenta al Ministerio del Tesoro y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—JOAQUÍN MARTÍNEZ E.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintinueve de Julio de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Hilario Quintero, vecino de Chocontá, en su propio nombre, como curador de las menores María Alejandrina, Anselma de las Mercedes y Tomasa Josefina Martínez, y como apoderado de Carlos Calderón M., estableció demanda por la vía ordinaria, ante el Juez del Circuito de Chocontá, en diez y seis de Octubre de mil ochocientos noventa, y la dirigió contra Adelaida Rodríguez de Forero y sus menores hijos, para que se declarara: "1.° que más de las dos terceras partes, ó sean $ 2,688 con 91 centavos, del terreno denominado

'El potrero de los Curas,' situado en esta jurisdicción y comprendido dentro de los linderos expresados al principio de este memorial, y que fué avaluado en el juicio de sucesión de los señores Martínez, ya citados, y de la señora Antonina Calderón, en la suma de cuatro mil pesos, pertenece á mis pupilas enunciadas y á mi poderdante preindicado, ó sea á la esposa de éste y al que suscribe, en la forma que paso á expresar: mil doscientos noventa y tres pesos veintisiete y medio centavos ($ 1,293-27½), que me fueron adjudicados en el juicio de sucesión de los señores José María Martínez y Antonina Calderón é hijos, señores Wenceslao, Evaristo, Rafael y Martín Martínez; cuatrocientos sesenta pesos ($ 460) á que alcanzan los derechos que compré á la señora Griselda Benavides, por sí y en representación de sus hijas, y de que trata la escritura yá citada, y novecientos treinta y cinco pesos cincuenta y siete y medio centavos ($ 935-57½), que fueron adjudicados á los herederos del señor Evaristo Martínez; 2.° para que sea obligada por sentencia judicial á entregarme la parte del potrero citado y que equivalga al valor de dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos noventa y un centavos (2,688-91), partiendo del hecho de que el valor total del terreno ó potrero citado vale tan sólo cuatro mil pesos ($ 4,000), valor que le fué determinado en los inventarios del juicio de sucesión de los señores Martínez; 3.° para que sea obligada á pagarme el valor proporcional á mis derechos de los frutos naturales y civiles de dicho potrero á contar desde el año en que lo poseen sin derecho alguno, y 4.° para que sea obligada á pagar las costas del juicio que inició por medio de este memorial."

En el mismo libelo afirmó el demandante estos hechos: "1.° el potrero que hoy retiene la señora Adelaida Rodríguez de Forero, fué adquirido durante el matrimonio del señor José María Martínez con la señora Antonina Calderón; 2.° muerto el señor José María Martínez, y posteriormente su esposa, lo mismo que alguno de sus hijos, llamados Wenceslao, Evaristo, Rafael y Martín Martínez, se siguió el juicio de sucesión de dichos señores, en el cual se adjudicó á las personas á quienes represento y á mí, más de las dos terceras partes de dicho potrero y en la forma que dejo indicada en la parte petitoria de esta demanda; 3.° la señora Adelaida Rodríguez de Forero retiene el potrero aludido en su totalidad sin derecho legal; 4.° durante el tiempo que duró la sociedad conyugal, compuesta del señor José María Martínez y su esposa la señora Antonina Calderón, el terreno no fué vendido; 5.° á la muerte del señor José María Martínez, el terreno quedó como de propiedad de la entidad de su sucesión, la cual fué liquidada definitivamente en Abril del año en curso."

Fundó, por último, el derecho de la demanda en los hechos expresados y en la doctrina consignada en el capítulo 4.° del título 7.° del libro 3.° del Código Civil nacional.

Dado el traslado respectivo á la demandada, ésta confirió poder á Julio Gómez, por sí y como tutora y curadora de sus menores hijas Mercedes y Epimenia Forero, y el apoderado, por memorial de nueve de Abril de mil ochocientos noventa y uno, dió contestación á la demanda, empezando por negar la acción que tuviera Hilario Quintero para demandar de Adelaida Rodríguez de Forero la entrega de la mayor parte del potrero de "Los-Curas," y de que tratan los artículos 1321 y siguientes del Código Civil.

Explicando los hechos, que son el fundamento de la demanda, se expresó así:

"1.° El potrero de 'Los-Curas,' que hoy posee la señora Adelaida Rodríguez de Forero con sus dos menores hijas, Mercedes y Epimenia Forero, fué adquirido durante el matrimonio del señor José María Martínez con la señora Antonina Calderón; pero este potrero fué vendido por la citada señora Antonina Calderón y sus hijos Dolores, Gumersinda, Alejandrina, Medardo, Adolfo y Francisco Martínez al señor Pacífico Forero, por escritura pública otorgada ante el señor Notario de este Círculo con fecha 28 de Abril de 1883, bajo el número 169.

"La señora Calderón de Martínez vendió la mitad del potrero, ó sean los derechos y acciones que en él tenía y que le correspondían como gananciales en su matrimonio, lo mismo que la parte que le tocaba por herencia de su hijo Wenceslao Martínez, que murió sin dejar sucesión.

"Muerto el señor Pacífico Forero, pasaron los derechos acciones que él había comprado en el potrero á la señora Antonina Calderón y á varios de sus hijos, á ser de propiedad sus menores hijas, Mercedes y Epimenia, según consta de l respectivas hijuelas que de la adjudicación de los bienes les hizo en la respectiva división y partición de ellos.

"Posteriormente, por escritura otorgada en esta misn Notaría el 13 de Diciembre de 1887, número 630, los señor Julio, Agripina y José María Martínez, vendieron á mi pode dante, la señora Adelaida Rodríguez de Forero, viuda d señor Pacífico Forero, los derechos y acciones que tenían el mismo potrero y que les correspondían por herencia de s finado padre el señor Rafael Martínez, hijo también de l señores José María Martínez y Antonina Calderón;

"2.° Es cierto que por muerte del señor José María Ma tínez, de su esposa señora Antonina Calderón y de sus hij Wenceslao, Evaristo, Rafael y Martín Martínez, éste últin hijo de Rafael, se siguió, á pedimento del señor Hilario Qui tero, el juicio de sucesión de estos señores; pero este juic fué extemporáneo, porque de antemano estaban enajenad los derechos que la señora Antonina Calderón y varios de s hijos tenían en el potrero, y esa adjudicación, que se hizo señor Quintero, fué con el exclusivo fin de perjudicar á poderdante y á sus dos menores hijas; pues ese juicio de s cesión recientemente seguido por el señor Quintero sólo tenido por objeto despojarlas del legítimo dominio que ti nen sobre la finca. De consiguiente, no es cierto que el cit do señor Quintero sea dueño de más de las dos terceras part de dicho potrero, como lo afirma;

"3.° Niego lo que asevera el señor Quintero, de que poderdante retenga el potrero sin título legal; pues repit la señora Rodríguez de Forero y sus dos menores hijas, Me cedes y Epimenia Forero, son dueñas de casi la totalid de él;

"4.° Convengo en que durante el tiempo de la socied conyugal del señor José María Martínez y de su esposa la s ñora Antonina Calderón, no fué vendido el potrero, y

"5.° A la muerte del señor José María Martínez, el p trero quedó como de propiedad de la sucesión, pero su viu é hijos, que tenían derechos á los bienes de la herencia, ve dieron los que tenían en el potrero, primero al señor Pacífi Forero, y posteriormente á su viuda, señora Adelaida Rod guez de Forero; de consiguiente, no es cierto que la sucesi del citado señor José María Martínez se hubiera liquida definitivamente en el mes de Abril último."

Propuso en seguida el apoderado de la demandada, excepciones perentorias siguientes: "ilegitimidad de la p sonería del demandante, Hilario Quintero; la de petici antes de tiempo ó de un modo indebido; la de nulidad de títulos en que apoya su acción el demandante; la de que señores Manuel y Clodoveo Martínez no son herederos señor Wenceslao Martínez, ni que las señoritas Anselma las Mercedes y Tomasa Josefina Martínez lo sean del se Evaristo Martínez, ni que la señora Griselda Benavides sea de su hijo Martín Martínez ni éste del señor Rafael M tínez; ni tampoco las menores Mercedes, Ana Rosa, Josef y Belén Martínez sean herederas del mismo señor Raf Martínez. Y, por último, propuso la excepción de presc ción. Agregó que fundaba las excepciones en los siguien hechos:

"La primera en esto: 1.° en que los señores M quienes compró derechos en el potrero el señor Hi tero y á los que él representa como comprador, curador, no eran ni son dueños de tales derechos, porque ascendientes y cónyuges sobrevivientes actualmente no fue casados conforme á la Ley de 30 de Agosto de 1864 del tinguido Estado de Cundinamarca, sobre matrimonio, estaba vigente cuando se efectuaron aquellos matrimo católicos, y 2.° en que el poder conferido por el señor C Calderón M. y su esposa, señora Hersilia Roa al señor Q tero, es para reivindicar una parte del potrero, y lo qu ha pedido en su demanda es entrega de tal parte del mi potrero.

"La de petición antes de tiempo ó de un modo indeb la fundo: en que el señor Quintero no ha debido inici

eguir el juicio de sucesión del señor José María Martínez, le la señora Antonina Calderón y de varios de sus hijos sin ntervención de los demás hijos de aquéllos que eran sus herederos, pues tampoco se citó oportunamente, y para el juicio le sucesión á los mismos herederos y á los poseedores de las incas, entre los cuales está mi poderdante y sus dos menores ijas.

"La de nulidad de los títulos que ha presentado el demandante, la fundo: en que las escrituras é hijuelas que ha presentado el señor Quintero á este juicio, fueron otorgadas y adjudicado derechos á los bienes de la herencia de la familia Martínez, pues ellos, de antemano, fueron vendidos por los legítimos herederos, que eran los dueños de aquellos derechos.

"La de que los señores Manuel y Clodoveo Martínez y demás personas que he señalado en esta excepción, no son herederos de las personas que llevo mencionadas, la fundo: en que los matrimonios de sus antecesores y las defunciones y los nacimientos de ellos, tuvieron lugar todos estos hechos, bajo el imperio de la ley cundinamarquesa de 30 de Agosto de 1864, sobre matrimonio, que yá he citado arriba, y

"La de prescripción la fundo: en que el que ha poseído con las condiciones y por el tiempo determinado por las leyes una finca raíz como la de que se trata, la adquiere por prescripción; en que el que posee puede añadir á su posesión la posesión de sus causantes. Agrego, pues, á la posesión que tienen las menores Mercedes y Epimenia Forero, la posesión de sus causantes que lo fueron: la viuda, señora Antonina Calderón y sus hijos Dolores, Gumersinda, Alejandrina, Medardo, Adolfo y Francisco Martínez, causantes del señor Pacífico Forero; este mismo señor Forero, de sus menores hijas Mercedes y Epimenia, á quienes se les adjudicaron los derechos en el potrero que su padre había adquirido. A la posesión de los derechos propios de la señora Rodríguez de Forero, añado: la posesión que tuvo primero el señor Rafael Martínez; y seguidamente, la que adquirieron, á nombre de él, sus hijos legítimos Julio, Agripina y José María Martínez, causantes de la mencionada señora Rodríguez de Forero.

"Como se ve, esta posesión data de un tiempo mayor de veintinueve años, esto es, desde la muerte del señor José María Martínez.

"Las escrituras é hijuelas de que hago mención en el punto primero de los hechos que contesto y los de las excepciones perentorias que propongo, lo mismo que el documento referente al discernimiento de la tutela y curatela que se hizo á la señora Rodríguez de Forero, de sus hijos, los adjunto todos en diez y nueve fojas útiles."

Abierta la causa á prueba y producidas por ambas partes las que juzgaron necesarias, terminó la primera instancia con la sentencia del Juez del Circuito de Chocontá, de fecha treinta y uno de Octubre de mil ochocientos noventa y uno, que en su parte resolutiva dice así:

"Por las razones expuestas, el Juzgado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara:

"1.° Las señoritas Josefina y Alejandrina Martínez Ruiz, quienes representa en este juicio el señor Hilario Quintero, como apoderado de la señora Hersilia Ruiz, tienen derecho de propiedad en común, á la cuota que correspondía á su padre varisto Martínez, finado, en la sucesión de José María Martínez, con sus frutos y acciones en el potrero de 'Los-Curas;'

"2.° El señor Hilario Quintero tiene igual derecho y en la misma forma, á las cuotas que corresponden á los hijos de Rafael Martínez y Griselda Benavides, en representación de su padre, y á la que corresponde á Griselda, en representación de su hijo Martín Martínez, también hijo de Rafael, que *murió, cuya cuota le corresponde* al señor Quintero en el potrero de 'Los-Curas,' que fué de la propiedad de José María Martínez, con sus frutos y acceciones;

"3.° La señora Adelaida Rodríguez tiene igual derecho los comprados en el mismo terreno á los hijos del primer matrimonio de Rafael con Martina Bernal, llamados Julio, José María y Agripina Martínez, como herederos de Rafael, la sucesión de José María Martínez;

"4.° Las menores hijas del señor Pacífico Forero, Mercedes y Epimenia Forero, tienen igualmente derecho á la mitad del terreno de 'Los-Curas,' por compra que su padre hizo á la señora Antonina Calderón, por sus gananciales, como cónyuge de José María Martínez, y á la cuota que pudiera caber á Wenceslao Martínez, que la misma señora vendió al señor Forero, como su representante, cuyos derechos les fueron adjudicados á las señoritas Foreros en la partición de los bienes de la sucesión de su padre en el terreno de 'Los-Curas,' con sus frutos y acciones;

"5.° No está probada la excepción de prescripción;

"6.° Está probada, en parte, la excepción de petición antes de tiempo;

"7.° No está probada la falta de personería sino respecto al derecho reclamado por la herencia de Wenceslao Martínez, en la compra á Manuel José y Clodoveo Martínez.

"Sin especial condenación en costas."

Por reclamación del apoderado de la demandada, se adicionó la sentencia anterior, declarando: "que las señoritas Mercedes y Epimenia Forero tienen también derecho de propiedad á los derechos y acciones que su padre, Pacífico Forero, compró en el terreno del potrero de 'Los-Curas' á los señores Dolores, Medardo, Adolfo, Francisco, Gumersinda y Alejandrina Martínez, y que les fueron adjudicados á las expresadas señoritas Foreros en la sucesión de su padre."

Contra dicha sentencia interpusieron recurso de apelación tanto el demandante como el apoderado de la demandada, siendo de notar, que éste alegó entre otros motivos, para interponerlo, el de que no se hubiesen resuelto en la sentencia todas las excepciones perentorias propuestas en la contestación de la demanda.

El Juez concedió la apelación para ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, y recibido allí el expediente, se surtió la segunda instancia y se pronunció el fallo definitivo de cinco de Octubre de mil ochocientos noventa y dos, que decidió lo siguiente:

"En mérito de las consideraciones precedentes, el Tribunal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve:

"1.° Condénase á Adelaida Rodríguez de Forero y á sus hijas Mercedes y Epimenia Ferero, á entregar á Josefina y Alejandrina Martínez Ruiz, en dominio y posesión, la cuota que al finado Evaristo Martínez correspondía en la sucesión de José María Martínez en el potrero de 'Los-Curas;'

"2.° Condénase á la misma Rodríguez de Forero y á sus precitadas hijas, á entregar á Hilario Quintero, en dominio y posesión, las cuotas que corresponden á los hijos de Rafael Martínez y Griselda Benavides, en representación de su padre; y la que corresponde á Griselda, en representación de su hijo Martín Martínez, también hijo de Rafael, que murió, cuotas que corresponden á Quintero en el potrero de 'Los-Curas;'

"3.° Condénase á la misma Rodríguez de Forero y á sus hijas, á entregar al prenombrado Quintero, en dominio y posesión, la cuota que á Quintero le fué adjudicada en el potrero de 'Los-Curas,' en la partición de los bienes pertenecientes á las sucesiones de José María Martínez, Antonina Calderón y algunos de los hijos de éstos;

"4.° Absuélvase á las expresadas demandadas de todos los demás puntos de la demanda;

"5.° Declárase probada la excepción consistente en que Manuel y Clodoveo Martínez no son herederos de Wenceslao Martínez, y no probadas todas las demás excepciones propuestas;

"6.° Declárase que si las demandadas tuvieren algún saldo que reclamar en razón de expensas, al tenor de lo estatuído en el artículo 965 del Código Civil, podrán retener el inmueble demandado hasta que se verifique el pago, ó se les asegure á su satisfacción, y

"7.° Condénase á las demandadas al pago de los frutos correspondientes á las porciones que deben restituír desde que se hallan en posesión del inmueble. La cuantía de estos frutos se fijará en juicio separado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 840 del Código Judicial.

"Queda en estos términos reformada la sentencia apelada. Sin costas."

El apoderado de la demandada pidió aclaración de esta sentencia, y en el escrito de dos de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos, se demostraron las notables contradicciones en que se había incurrido y las dudas á que daba lugar, supuesto que excluídos de la sucesión de José María Martínez, Manuel y Clodoveo Martínez, que allí se hicieron figurar como partícipes, la parte ó porción adjudicada á éstos debía acrecer al fondo común y alterar por lo mismo la liquidación y partición de la sucesión, que, sin embargo, no se mandaba rehacer, porque el Tribunal se abstuvo de decretar la nulidad de esa partición, á pesar de haber sido alegada como excepción. Se hizo notar también que la sentencia mandaba entregar al demandante Quintero la cuota que á éste se había adjudicado en el potrero de "Los-Curas," cuando en esa cuota estaba incluída la parte correspondiente á los citados Manuel y Clodoveo Martínez, respecto de los cuales declara la sentencia que no son herederos de Wenceslao Martínez. Pero el Tribunal declaró que no era el caso de resolver la aclaración, por haberse solicitado ésta fuera de tiempo.

En esa virtud, la parte demandada constituyó apoderado especial para establecer el recurso de casación, y por escrito de fecha diez y ocho del mismo Noviembre se estableció dicho recurso, y desde luégo se fundó éste en las causales señaladas en los ordinales 1.°, 2.°, 3.° y 5.° del artículo 369 de la Ley 105 de 1890. El Tribunal, después de hacer estimar por peritos la cuantía del negocio, y por aparecer del avalúo que ésta excedía de tres mil pesos, concedió el recurso intentado, y ordenó la remisión del expediente á esta Superioridad, en donde, después de surtida la tramitación legal, procede la Corte á examinar si el recurso es admisible, como lo dispone el artículo 381 de la citada Ley 105. En cuanto á esto, no queda duda de que el recurso se interpuso en tiempo oportuno, por persona hábil y la sentencia es de aquéllas contra las cuales puede interponerse, supuesto que concurren las circunstancias exigidas por el artículo 366 de la misma ley. Por consiguiente, el recurso es legalmente admisible y debe, por lo mismo, entrarse en el examen de las causales de casación que se han alegado contra la sentencia del Tribunal.

En el escrito presentado ante la Corte para ampliar los fundamentos del recurso, se expresa así el recurrente:

"Hay una razón que presento contra el fallo en su totalidad, y la alego antes de todo, porque creo que ella basta para destruír la base de toda la sentencia, á saber: los demandantes presentaron como título para fundar sus pretensiones unas hijuelas obtenidas en un juicio de sucesión, y la sentencia les reconoció derechos, fundándose exclusivamente en esas hijuelas, las cuales no tienen ningún valor. Los derechos que se han fundado en esos títulos sin valor, no tienen razón de ser, y la sentencia que los ha reconocido es ilegal y debe anularse." Extiéndese en seguida el recurrente en poner de manifiesto las razones que cree tener para que se hubiera declarado por el Tribunal la nulidad del juicio de sucesión de José María Martínez, promovido por Hilario Quintero, en el examen de las cuales va á ocuparse la Corte, porque encuentra que el Tribunal, al examinar la nulidad de los títulos de los demandantes, alegada como excepción perentoria desde la contestación de la demanda, se expresó así: "Fúndase la nulidad de los títulos que ha presentado el demandante, en que las escrituras ó hijuelas que se acompañaron á la demanda, fueron otorgadas y adjudicado derechos á personas que no tenían tales derechos á los bienes de la herencia de la familia Martínez, pues ellos de antemano estaban vendidos por los legítimos herederos, que eran los dueños de aquellos derechos. Como lo que se ha pedido es la nulidad de los títulos, y éstos se hallan revestidos de las solemnidades externas que la ley requiere para su validez, es innecesario entrar en el examen de la argumentación del excepcionante, pues ésta lo que aparejaría sería la nulidad de los actos ó contratos, pero no de los títulos. Ahora, si por títulos se entienden los actos ó contratos, no sería el caso de decretar la nulidad en un juicio en que no figuran como partes todos los que intervinieron en aquellos actos."

En concepto de la Corte, no ha podido entenderse por el Tribunal, que la nulidad de los títulos opuesta como excepción, pudiera referirse á las solemnidades externas de que deben estar revestidos, conforme á la ley, porque basta ver las razones alegadas contra ellos para persuadirse de que se trataba de la nulidad de un juicio de partición, del cual se habían hecho nacer los títulos en que se apoyaba el demandante. Y como el Tribunal se ha abstenido de decretar la nulidad de esos títulos, fundándose en que ella no puede declararse en un juicio en que no figuran como partes todos los que intervinieron en la partición de donde tales títulos proceden, la Corte encuentra que ha habido error en la apreciación de la prueba, desde que se han estimado como legítimos los títulos que se han presentado como fundamento de la demanda.

La Corte no puede aceptar el razonamiento del Tribunal para declarar, como declaró, no probada la excepción de la nulidad de la partición, á pretexto de que no figuran como partes en este juicio todos los que intervinieron en ella. Se trata de derechos de terceros interesados, que tampoco intervinieron en esa partición, y alegada por ellos la nulidad de aquel acto, del cual se han hecho nacer derechos que hoy se pretende hacer efectivos contra los mismos que se creen perjudicados por él, no puede el Juez declarar no probada esa nulidad, sin que esa declaración envuelva la validez de ese acto, y, por consiguiente, de los títulos emanados de él. ¿Y cómo se pretende por el Tribunal que la nulidad de esa partición sólo podría decretarse en un juicio en que figuraran, como partes, todos los que intervinieron en ella, si ese juicio no podría establecerse contra una sentencia yá ejecutoriada, que había reconocido los derechos y la validez de los títulos derivados de esa misma partición? Si á esto se agrega que la misma sentencia ha reconocido la ilegalidad con que en esa partición se procedió, adjudicando derechos á Manuel y Clodoveo Martínez, de quienes se ha declarado que no pudieron ser reconocidos como herederos de Wenceslao Martínez en la sucesión de José María Martínez, en la cual se verificó aquella partición, crece la necesidad de examinar si hubo error en la apreciación de la validez de un acto, en el cual se reconoce yá la ilegalidad apuntada, error que se ha alegado como la primera de las causales de casación que señala la ley.

Efectivamente, está plenamente acreditado en el expediente que el potrero de "Los-Curas" fué adquirido durante el matrimonio de José María Martínez y Antonina Calderón; que muerto el primero en Febrero de mil ochocientos sesenta y dos, su viuda y sus hijos Dolores, Gumersinda, Alejandrina, Medardo, Adolfo y Francisco Martínez vendieron á Pacífico Forero, por escritura pública de veintiocho de Abril de mil ochocientos ochenta y tres, número 169, las acciones y derechos que, como herederos de José María Martínez, pudieran corresponderles en el mencionado potrero, derechos y acciones que constituyen más de las dos terceras partes, supuesto que de los sucesores de Martínez sólo dejaron de figurar como vendedores, Rafael y Evaristo Martínez; pues que la viuda Calderón incluyó también en la venta los derechos que hubieran podido corresponder á su hijo Wenceslao, muerto sin descendientes legítimos antes de la venta. La validez de la venta hecha á Forero es punto decidido yá por la Corte, y por lo mismo no se ocupa en refutar los argumentos que se han hecho contra esa validez. Es, pues, evidente que Pacífico Forero fué poseedor legítimo y con justo título de los derechos comprados á los sucesores de José María Martínez, y, por consiguiente, muerto Forero, sus hijas Mercedes y Epimenia, á quienes se adjudicaron aquellos derechos, y su madre Adelaida Rodríguez, compradora de los derechos que correspondían á los hijos de Rafael Martínez, son poseedoras también legítimas de la mayor parte del valor de dicho potrero.

En esta situación las cosas, Hilario Quintero, con el título de comprador de derechos de los sucesores de Wenceslao y Evaristo Martínez, y como representante de los de Rafael Martínez, promovió en mil ochocientos ochenta y ocho la formación de la causa mortuoria de José María Martínez, Antonina Calderón y sus hijas, sin que se citara personalmente, como lo ordena el artículo 1,261 del Código Judicial á los poseedores de los bienes que iban á inventariarse y dividirse como pertenecientes á la sucesión. Se hicieron inventarios y

avalúos sin citar á los legítimos representantes de los herederos de José María Martínez, y se verificó la partición, sin que fueran parte en el juicio los dueños y poseedores de esos mismos bienes que eran objeto de la partición. Por consiguiente, la sentencia que aprobó esa partición no puede perjudicar á terceros, que no fueron citados para intervenir en ella; y derivándose los títulos del demandante de las adjudicaciones hechas en esa partición, y siendo ésta nula, en concepto de la Corte, es claro que al declararse por el Tribunal no probada la excepción de nulidad opuesta por el demandado, hubo error en la apreciación de la prueba presentada por el demandante, y por esta causa casable la sentencia recurrida.

Hubo otro error, en sentir de la Corte, al declarar no probada la excepción de prescripción, al asegurarse por el Tribunal que respecto de ella no se había producido prueba alguna. Si, como se ha visto, Pacífico Forero fué poseedor legítimo de los derechos comprados á Antonina Calderón y sus hijas, quienes desde mil ochocientos sesenta y dos habían estado en posesión de la herencia de José María Martínez; si muerto Pacífico Forero, sus hijas continuaron en esa posesión con el título de herederas legítimas, es evidente que del mismo expediente resulta el error en que incurrió el Tribunal al no estimar como prueba de la prescripción la posesión continuada de más de veinte años con justo título y buena fe. Y por haberse incurrido en ese error, se incidió también en el de condenar á las demandadas á la restitución de frutos, como poseedoras de mala fe.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, en cumplimiento de lo que disponen los artículos 59 y 60 de la Ley 100 de 1892, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, invalida el fallo del Tribunal que ha sido materia del recurso, y dicta en su lugar el siguiente: declara probada la excepción de nulidad opuesta á los títulos presentados por Hilario Quintero, por ser nula la partición de bienes de donde tales títulos proceden; decláraso igualmente probada la excepción de prescripción alegada por las demandadas, por aparecer apoyada en justos títulos y en los requisitos de posesión y buena fe que exige la ley. En consecuencia, absuélvese á las demandadas Adelaida Rodríguez de Forero y sus hijas Mercedes y Epimenia Forero, de los cargos deducidos contra ellas en la demanda promovida por Hilario Quintero, motivo del presente pleito. No hay condenación en costas.

Notifíquese, cópiese y publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente al Tribunal de su procedencia.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—JOAQUÍN MARTÍNEZ E.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

AUTOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, veintiséis de Julio de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Por auto de primero de Febrero del corriente año, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bolívar, llamó á juicio de responsabilidad por los trámites extraordinarios, á Carlos S. Nieto, en su carácter de Inspector de Instrucción pública de la Provincia de Mompós, en mil ochocientos noventa, por abuso de autoridad, y notificado dicho auto al procesado, interpuso apelación, que le fué concedida, en ambos efectos, para ante este Supremo Tribunal.

Remitido el proceso, repartido y sustanciado en esta Corte por los trámites determinados en la ley para los recursos de *autos interlocutorios, es llegada la oportunidad* de decidir el presente.

Consiste el cargo de abuso de autoridad, deducido contra el Inspector Nieto, en que éste suspendió indefinidamente al Director de la Escuela primaria de varones del Distrito municipal de Magangué, Paulino Arraut P., del ejercicio del empleo, sin haber comprobado previamente todos los hechos en que fundó la resolución que dictó el treinta de Octubre del citado año de mil ochocientos noventa (foja 37 del sumario), y sin aguardar la determinación del empleado superior del ramo, como está dispuesto de un modo terminante en la Ley 89 de 1888, sobre la materia de que se trata.

El señor Procurador general de la Nación ha opinado, en la precedente vista fiscal, que "se ha pretendido deducir la jurisdicción de la Corte para decidir el expresado recurso del inciso 1.° del artículo 43 de la Ley 147 de 1888, en el cual se designan los empleados de cuya responsabilidad debe conocer la Corte en segunda instancia, porque entre esos empleados figuran los Directores de Instrucción pública en los Departamentos, es el caso que de los empleados que designa la Ley 89 de 1888, 'sobre instrucción pública nacional,' solamente los *Inspectores generales*, dada la naturaleza y extensión de sus funciones, pudieran asimilarse á los Directores de Instrucción pública de que habla la citada Ley 147 de 1888; mas como dichos Inspectores generales fueron reemplazados por la Ley 89 de 1892 (artículo 5.°) por los Secretarios de Instrucción pública departamentales, creados por la misma ley, son estos últimos los que deben considerarse sujetos á la jurisdicción de la Corte en los casos de responsabilidad;" pero este Supremo Tribunal no estima correcta tal opinión, porque si es verdad que los Secretarios de Instrucción pública departamentales han reemplazado á los Directores generales del mismo ramo, también lo es que el Inspector en la Provincia de Mompós, Carlos S. Nieto, está comprendido en la disposición contenida en el referido inciso 1.° del artículo 43 del Código de Organización Judical, ó sea la Ley 147 de 1888. En este inciso no sólo están comprendidos los *Directores de Instrucción pública en los Departamentos*, sino todos aquellos empleados que les reemplacen en el ejercicio de sus funciones, atendida la naturaleza y la extensión de esas mismas funciones, conforme lo prescribe el artículo 44 de la Ley últimamente mencionada. Esto no obstante, el Inspector del aludido ramo en la Provincia de Mompós, Carlos S. Nieto, sí está comprendido en el inciso 1.° del susodicho artículo 43, aunque sus funciones no se extendieran á todo el Departamento de Bolívar, pues basta que hubiera desempeñado su empleo en una parte del territorio de esta entidad, para que así estuviese sujeto en los casos de responsabilidad á la jurisdicción de la Corte.

Más claro: el aludido inciso 1.° no se limita á mencionar entre los empleados á quienes la Corte debe juzgar en segunda instancia á los Directores generales ó Superiores de Instrucción pública en los Departamentos, sino á cualesquiera Directores de Instrucción que ejercieran ó hubieran ejercido sus funciones en una sección de los mismos Departamentos, como sucede respecto de Carlos S. Nieto, porque la aludida disposición no emplea la frase *de los Departamentos*, caso en el cual sí habría necesidad de establecer diferencia por razón de la importancia y extensión de las funciones de los Directores, ó de los empleados que con distinta denominación los reemplazaran, sino que hace uso de la frase *en los Departamentos*, con la cual se comprenden los *generales* y los *seccionales ó provinciales*.

Según lo expuesto, la Corte tiene jurisdicción para conocer del recurso de apelación, interpuesto por el procesado Carlos S. Nieto contra el auto del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bolívar, proferido en primero de Febrero último; y como de los autos resulta plenamente comprobado el hecho de haber el Inspector Nieto suspendido al Director de la Escuela primaria de varones establecida en Magangué, sin observar los requisitos que prescribe la ley de la materia, antes de hacer cumplir su providencia, se está en el caso de confirmar ó aprobar la determinación apelada, como en efecto la confirma la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

Notifíquese, déjese copia, insértese en la *Gaceta Judicial*, y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA. — BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS. — MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO. — JOAQUÍN MARTÍNEZ E.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

IMPRENTA DE ANTONIO M. SILVESTRE.

REPÚBLICA DE COLOMBIA.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AÑO VIII } Bogotá, 8 de Septiembre de 1893. { NÚM. 413.

CONTENIDO.

Págs.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Concédese á Clara Hernández Chicaiza una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Botero Uribe)..... 393
Reconócese en parte á Enrique Camargo, como cesionario de Fernando Ricaurte y José Santos un crédito procedente de expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Isaza)..... 393
Niégase á Germán Piñeres el reconocimiento de un crédito procedente de suministros. (Magistrado ponente, doctor Pombo)..... 394
Concédese á Anselmo Torres una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Botero Uribe..... 394
Concédese á Juan de Dios Muñoz una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Botero Uribe)..... 394
Concédese á Pedro Pérez y Pascuala Meneses una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Villafrádez)..... 395
Confírmase la resolución dictada por el Ministerio del Tesoro en la demanda de Dolores Quintero, sobre pago de una expropiación. (Magistrado ponente, doctor Fernández de Soto)..... 395
Niégase á Rafaela de Caicedo una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Botero Uribe)..... 495
Niégase á Joaquín Ruiz Vergara el reconocimiento de un crédito procedente de suministros. (Magistrado ponente, doctor Isaza)..... 496
Concédese á Antonia Pazos una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Galindo)..... 496
Concédese á José Jesús Ramírez y María Antonia Duque una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Pombo) 497
Concédese á Bárbara y Vicenta Quintero una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Galindo)..... 497
Niégase á Francisco Uní una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas)..... 498
Confírmase la sentencia proferida por el Juez 1.º del Circuito de Bogotá, en el juicio seguido por el Fiscal del Tribunal de Cundinamarca contra Bernardina Santamaría de Restrepo, sobre expropiación de una zona de tierra. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas)..... 498

NEGOCIOS CRIMINALES.

Confírmase la sentencia proferida por el Consejo de Guerra, seguido al soldado del Batallón 16 de Artillería *La Popa*, Santos Alvarez, por la fuga de un preso. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas)..... 499

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Confírmase la providencia dictada por el Juez del Circuito de San-Juan, en la ejecución promovida contra Alejandro Mosquera. (Magistrado ponente, doctor Pombo)..... 499
Niégase á Domingo C. Suárez el recurso de hecho interpuesto á fin de que se le concediera el de apelación que le fué negado por la Comisión de suministros en la demanda promovida por Suárez como apoderado de José M. Vargas. (Magistrado ponente, doctor Corrales)..... 400

GACETA JUDICIAL.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, primero de Febrero de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Por muerte de Antonio Hernández, Subteniente que fué del Ejército de la Nación, en el combate de Cuaspud, en defensa de la Patria, su hija, Clara Hernández Chicaiza, ha solicitado recompensa del Tesoro público. Surtido el juicio por los trámites legales, después de varios autos para mejor proveer, se ha comprobado plenamente:

1.º La muerte ó defunción de Antonio Hernández, con la repectiva partida eclesiástica y con declaración de testigos oculares, muerte ocurrida después de dicho combate, á consecuencia de herida recibida en él;

2.º Su grado de Subteniente, con declaraciones de testigos idóneos, por no haberse extendido despacho y habérsele reconocido ese grado antes del mencionado combate;

3.º La circunstancia de no haber recibido la solicitante pensión alguna de la Nación, con el certificado del Ministro del Tesoro;

4.º La de ser Clara Hernández hija legítima de Antonio del mismo apellido y de Ana María Chicaiza, con la respectiva partida de nacimiento;

5.º Y la de ser única heredera de su finado padre, haber siempre vivido en armonía con él, ser sumamente pobre y conservarse en estado célibe, con la partida de defunción de su madre Ana María Chicaiza, y con declaraciones de testigos exentos de toda tacha y recibidas previas las formalidades legales. Es de advertirse que aunque la demandante tenía un hermano, éste desapareció muchos años hace, y se cree que habrá muerto, lo cual se ha comprobado de una manera satisfactoria, fijándose edictos emplazatorios y por medio de testigos hábiles. De manera que no sería justo privar á la solicitante de la recompensa á que tiene derecho por la desaparición de su hermano.

Por lo tanto, de acuerdo con el concepto del señor Procurador y en virtud de los artículos 1.º, 4.º, 5.º y 9.º de la Ley 84 de 1890, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que Clara Hernández Chicaiza, tiene derecho á una recompensa del Tesoro nacional, de mil novecientos veinte pesos ($ 1,920), equivalente al monto total del sueldo de Subteniente, de que disfrutaba su padre, Antonio Hernández, muerto en el combate de Cuaspud.

Dése aviso al señor Ministro de Guerra.

Notifíquese, publíquese en la *Gaceta Judicial*, déjese copia y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—FEDERICO PATIÑO.—JUAN EEVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Febrero catorce mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: En la reclamación entablada ante la Comisión de suministros, por Enrique Camargo, como cesionario de Fernando Ricaurte y José Santos, por la suma de mil cien pesos ($ 1,100), provenientes de empréstitos y expropiaciones de la guerra de 1884 y 1885, la Comisión, por resolución de veinticuatro de Mayo de mil ochocientos noventa y dos, reconoció á cargo del Tesoro y á favor de Camargo diez y seis pesos ($ 16), y negó el resto del cargo.

Esta resolución fué confirmada por el Ministerio del Tesoro, en diez y seis de Julio del mismo año, y por haber apelado la parte demandante, debe ahora la Corte fallar el asunto definitivamente.

La determinación apelada es justa y legal, no sólo porque no hay constancia de que José Santos sea dueño de los créditos que cedió á Camargo, sino también porque la reclama-

ción no tiene en su apoyo otra prueba que una certificación del Gobernador del Departamento de Santander, referente á un expediente que no ha sido hallado, dada en vista de declaraciones de testigos y de recibos que se ignora por quién fueron expedidos algunos, ni á favor de qué personas, y otros por Jefes de fuerzas nacionales, que no pudieron ser cambiados por certificaciones, porque no provienen de agentes del Gobierno de Santander.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la providencia apelada.

Déjese copia de esta sentencia, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ. *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintiuno de Febrero de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Con una orden expedida por el General Rafael Reyes, en siete de Mayo de de mil ochocientos ochenta y seis, en su calidad de Comandante en Jefe del Ejército del Atlántico, dirigida al Comandante de la Brigada del mismo, para que se entregasen á Germán Piñeres cuatro mulas que se le habían tomado en el trapiche de "El-Porvenir," en Villeta, por fuerzas á órdenes del General Simón Hernández, y con una atestación puesta al pie de esa orden, por F. A. de Isaza, de la que aparece que Piñeres no recibió las mulas, se ocurrió por el interesado á la Comisión de suministros solicitando el reconocimiento del crédito, sin expresar á cuánto ascendía éste (foja 3).

Sin otro documento ni prueba alguna de las señaladas en el artículo 2.° de la Ley 44 de 1886, la Comisión, por resolución de veintisiete de Abril del año próximo pasado, número 3,632 absolvió á la Nación del reconocimiento solicitado, y ordenó pasar al Procurador de la Nación el documento original que contiene la orden expresada, por aparecer agregada al fin la frase "debiendo probar la identidad de las mulas avaluadas á ochenta pesos." Tal resolución fué aprobada por el Ministerio del Tesoro, en la que dictó bajo el número 3,026, con fecha cinco de Julio del mismo año, y de lo resuelto en esta última se interpuso apelación para ante la Corte.

Sustanciado en ella el recurso, y no pudiendo estimarse como comprobante de la expropiación ni de su valor el contenido de la orden relacionada, que no ha sido siquiera reconocida judicialmente, la Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen del Fiscal de la Comisión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la resolución apelada.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expepediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ. *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Febrero veinticinco de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: En la demanda intentada por Anselmo Torres, para que como habilitado en el servicio de las armas, se le otorgue una recompensa, se ha justificado de una manera plena que tiene derecho á ella.

En efecto, los peritos ó facultativos doctores Domingo Arboleda, Domingo Cajiao y Juan N. Wallis O. (fojas 3 á 4), declaran que Anselmo Torres tiene una hernia doble que lo imposibilita en absoluto para trabajar; y los testigos, Coronel Jacinto Muñoz, José Torres, Miguel Truque, Pioquinto Bedoya, Manuel María Valencia y Ramón Quiñones, asegurán:

Que sirvió en la campaña de mil ochocientos sesenta á mil ochocientos sesenta y tres, en defensa de la Confederación Granadina, en calidad de Subteniente; que en esa campaña se le formó dicha hernia, al alzar unos bultos del parque que movilizaba á marchas forzadas, y que desde entonces quedó invalidado para trabajar, y muy pobre.

Esta prueba está confirmada por el certificado del General de División del Ejército de la República, José María González U. (fojas 16 á 17), y los testigos son idóneos y declararon en presencia del agente del Ministerio Público y ante autoridad judicial competente.

El reclamante ha acompañado su despacho de Capitán que es el último empleo que tiene y cuyo sueldo debe servir de base para la recompensa (artículo 9.°, Ley 84 de 1890).

Torres ha comprobado, además, que no ha recibido recompensa del Tesoro público, por cuenta de la Nación, lo que ha acreditado con declaraciones de los susodichos testigos y con certificado del Ministerio respectivo.

Por lo expuesto, de acuerdo con lo que disponen los artículos 1.°, 4.° (ordinal 5.°), 5.° y 16 de la Ley 84 de 1890, y con el dictamen del señor Procurador, la Corte declara que el Capitán Anselmo Torres tiene derecho á una recompensa definitiva de dos mil ochenta pesos ($ 2,080), como Oficial inválido en la guerra de mil ochocientos sesenta.

Dése cuenta al Ministerio de Guerra, notifíquese, cópiese, publíquese y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Febrero veintiocho de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Juan de Dios Muñoz solicita una recompensa, porque como soldado del *Batallón Tambo*, del Ejército regenerador, en mil ochocientos ochenta y cinco, estando en Cali, en el servicio de custodiar una brigada, recibió una herida que lo imposibilita para trabajar.

Al juicio se le ha dado la tramitación legal, y la Corte entra á resolver la reclamación de Muñoz.

Consta por declaraciones de cinco testigos idóneos y contestes, compañeros del solicitante, en la custodia de dicha brigada, á inmediaciones de Cali, que Muñoz militó en la campaña de 1885, en defensa del Gobierno legítimo, en calidad de soldado del expresado Batallón, y que recibió una grave herida en el brazo izquierdo, cuando prestaba el servicio indicado, herida que lo inhabilitó para trabajar como antes. Estas declaraciones, recibidas ante autoridad competente y ante el respectivo agente del Ministerio Público, están corroboradas por el reconocimiento pericial que hicieron los facultativos, doctores Juan N. Wallis O., Domingo Cajio C. y Domingo Arboleda, quienes encontraron en el solicitante una invalidez relativa á causa de la mencionada herida.

Como los testigos declaran y lo confiesa así el reclamante que éste fué herido por uno de los compañeros de comisión á quien disparósele el arma por descuido é impericia, el señor Procurador opina que no está en ninguno de los casos del artículo 5.° de la Ley 84 de 1890, pues que la invalidez no fué producida por heridas en el campo de batalla, ó por causa que sea proveniente de asuntos del servicio.

La Corte respeta el concepto del señor Procurador, pero cree que si la herida, como consta probado, fué por culpa, negligencia ó descuido del soldado que dejó escapar el proyectil que hirió á Muñoz, estando éste en el servicio de custodiar una brigada, es claro que la invalidez provino de la prestación de ese servicio, acontecimiento que no se habría verificado si el reclamante no hubiera estado en esa ocupación ó fatiga militar. El inciso 8.° del artículo citado dice: "ó por cualquiera otra causa, siempre que sea proveniente de asuntos del servicio." La Corte cree que Muñoz se halla en este caso, pues que la herida é invalidez recibidas en la comisión que desempeñaba provinieron de asunto del servicio, porque no podían provenir de otra causa sino del descuido del compañero que lo hirió.

El reclamante ha comprobado, además, que es pobre, que no ha recibido recompensa del Tesoro nacional y no tiene medios de qué vivir, según las declaraciones citadas y el certificado del Ministerio del Tesoro.

Por tanto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, la Corte, en virtud de lo dispuesto en los artículos 1.°, 4.°, 5.°, 9.°, 14 y 19 de la Ley 84 de 1890, declara que el soldado Juan de Dios Muñoz, tiene derecho á la recompensa definitiva de trescientos cincuenta y dos pesos ($ 352), igual á la mitad del monto de la asignación que como tal tiene en cuatro años, recompensa de que disfrutará por invalidez relativa, á consecuencia de herida sufrida en servicio del Gobierno legítimo, en mil ochocientos ochenta y cinco.

Dése cuenta al Ministerio del Tesoro, notifíquese, cópiese, publíquese y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Baltasar Botero Uribe.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales. Juan Evangelista Trujillo.—Lucas Villafrádez.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintiocho de Febrero de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: La reclamación de recompensa que el apoderado de Pedro Pérez y Pascuala Meneses, vecinos del Distrito de Bolívar, Departamento del Cauca, ha dirigido á la Corte, considerando á dichos individuos con derecho á esa gracia, por ser padres legítimos de Agapito Pérez, y haber éste muerto á causa de heridas recibidas en un combate que tuvo lugar en Almaguer, el 21 de Octubre de 1876, y el cual defendía los principios consagrados en las actuales instituciones, siendo Sargento 1.° de las fuerzas regeneradoras, se halla perfectamente justificado en conformidad á lo que dispone la Ley 84 de 1890, sobre la materia, en parte con los comprobantes presentados con la demanda, y en parte con los que se han practicado á virtud de autos para mejor proveer, dictados por la Corte, en esta forma:

La muerte de Agapito Pérez, por causa de una herida de bala que recibió en el campo de batalla de Almaguer, yá mencionado, en la guerra de 1876 y 1877, combatiendo por el planteamiento de los principios que informan las actuales instituciones, como Sargento 1.° de las fuerzas de la revolución, con el testimonio legalmente rendido de más de cinco testigos que afirman esos hechos, como compañeros de armas del finado y por haberlos presenciado;

El matrimonio de Pedro Pérez con Pascuala Meneses, celebrado el 27 de Julio de 1855, en la iglesia de Almaguer, con la respectiva partida de ese acto, expedida por el Cura de dicha Parroquia;

La falta de la partida de bautismo del finado Pérez, con las certificaciones del mismo Cura, y del de la Parroquia de Bolívar, quienes afirman no haberla encontrado en sus respectivos archivos, agregando el último que por informes que ha tomado, Agapito Pérez era hijo legítimo de Pedro Pérez y Pascuala Meneses;

El hecho de ser éstos los padres legítimos de aquél, con varias declaraciones rendidas con las formalidades legales, por varios testigos que dan testimonio de esas relaciones, por haber conocido desde niño á Agapito Pérez y presenciado que los citados Pedro Pérez y Pascuala Meneses lo criaron á su lado, presentándolo y tratándolo como su hijo legítimo, por más de diez años, en el lugar de su vecindad, donde fué generalmente tenido como tal hijo;

La buena conducta de los reclamantes, su pobreza y la paz y armonía en que vivieron con su finado hijo, con las mismas declaraciones de testigos yá citados, y finalmente,

La circunstancia de no haber recibido los reclamantes recompensa ni pensión del Tesoro nacional, por razón de la muerte de su citado hijo, con certificación del Ministro del Tesoro.

Es, pues, indudable el derecho que tienen los demandantes á obtener recompensa militar al tenor de los artículos 1.°, 5.° (numeral 3.°), 9.° y 11 de la Ley 84 de 1890, por lo que la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el dictamen del señor Procurador general, concede á Pedro Pérez y su esposa Pascuala Meneses, la recompensa unitaria y definitiva de novecientos doce pesos ($ 912), que se les pagarán del Tesoro nacional, por razón de la muerte de su hijo Agapito Pérez, ocasionada por la herida recibida en el campo de batalla defendiendo los principios que informan las instituciones actualmente vigentes, en el empleo militar de Sargento 1.°

Notifíquese, publíquese en la *Gaceta Judicial*, comuníquese al Ministerio del Tesoro y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Baltasar Botero Uribe.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales. Juan Evangelista Trujillo.—Lucas Villafrádez—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintinueve de Julio de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: En la reclamación instaurada por Dolores Quintero, ante la Comisión de suministros, en seis de Diciembre de mil ochocientos ochenta y siete, por la suma de ciento treinta y cuatro pesos ($ 134), valor de expropiaciones que asegura le hicieron los rebeldes que comandaba Ricardo Gaitán O., en la guerra civil de mil ochocientos ochenta y cinco, se dictó la resolución número 4,693, de tres de Abril último, en la cual se niega el reconocimiento del crédito, por no estar comprobado de la manera establecida en el artículo 2.°, regla 3.ª de la Ley 44 de 1886. Pasado el expediente al señor Ministro del Tesoro aprobó la resolución aludida; y habiéndose recurrido de ella para ante esta Suprema Corte, en donde se han surtido los trámites que corresponden, se procede á resolver lo que sea arreglado á la ley.

El hecho de donde pretende derivarse la reclamación se hace consistir en la pérdida de varios artículos que la Quintero expresa tenía en el pie de "La-Popa," en la Provincia de Cartagena, á tiempo en que ocuparon ese lugar las fuerzas de Gaitán y que habiendo dejado tales artículos en su casa, bajo llave, los tomaron y consumieron dichas fuerzas. Mas los testigos que se han examinado para justificar la exacción no vieron ejecutarla y apenas dos de éstos dan testimonio acerca de la preexistencia de los objetos en poder de la reclamante, sin que aparezca abonada la idoneidad de ninguno de esos testigos por el agente del Ministerio Público.

Es claro, pues, que no se ha constituído la prueba del derecho demandado con las tres declaraciones contestes de que habla la disposición citada y en conformidad con lo prevenido en el artículo 5.° de la Ley 152 de 1887.

Por lo tanto, la Corte, de acuerdo con el parecer del Fiscal especial de la Comisión, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la resolución apelada.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Baltasar Botero Uribe.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales. Abraham Fernández de Soto.—Joaquín Martínez E.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, Agosto dos de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Rafaela de Caycedo, en su carácter de nieta legítima del prócer de la Independencia, doctor D. Joaquín Caycedo y Cuero, solicita que se decrete á su favor la recompensa unitaria definitiva á que cree tener derecho, conforme al artículo 2.° de la Ley 84 de 1890, "sobre recompensas militares."

A la demanda acompañó las pruebas siguientes:

1.ª Una certificación del Cura-párroco de Santiago de Cali, en la cual se inserta una partida ó acta de nacimiento, relativa á un niño que se bautizó el siete de Agosto de mil ochocientos ocho, hijo legítimo de D. Felipe Joaquín de Caycedo y Cuero y D.ª Juana María Camacho, á quien se puso el nombre de Fernando;

2.ª Otra certificación, expedida por el Cura-párroco de la Catedral de Bogotá, en la que se hace constar la defunción de Fernando de Caycedo, ocurrida el veintiuno de Enero de mil ochocientos setenta y cinco;

"3.ª Otra certificación expedida por el mismo Cura-párroco de la Catedral de Bogotá, en que se copia íntegramente

el acta de bautizo de Rafaela María Josefa, hija legítima de Fernando Caycedo Camacho y de Aquilina Martínez de Pinillos y Licht, en la cual se dice que la bautizada nació el trece de Octubre de mil ochocientos cuarenta y ocho, y

4.ª Las declaraciones de los testigos Salvador Nieva y Enrique A. Velasco, las cuales se recibieron por el Juez 1.° Ejecutor de esta ciudad en presencia del Fiscal del Circuito.

De la demanda, así como de los documentos que con ella se presentaron, se corrió traslado al señor Procurador, quien en su vista de fecha diez y ocho de Febrero del año pasado, sólo se limitó á manifestar que el expediente no se hallaba debidamente aparejado, pues hizo notar la falta de prueba de algunos hechos que, á su juicio, debían justificarse, y al efecto, solicitó que la Corte dictara un auto para mejor proveer, con el fin de que la parte interesada hiciese venir al proceso los comprobantes que echó menos.

Pero no siendo aún suficientes las pruebas que se trajeron al expediente, por ser incompletas las que se practicaron, la Corte, á instancia del señor Procurador, exigió otras.

Complementado el expediente, y ejecutoriado el auto en que se citó para sentencia, es llegado el caso de proferir ésta, y á ello se procede, mediante las consideraciones siguientes:

Con las pruebas que figuran en el proceso, se hallan satisfactoriamente establecidos los hechos que se expresan en seguida:

a) Que D. Joaquín de Caycedo y Cuero fué casado con D.ª Juana María Camacho;

b) Que en este matrimonio fué procreado Fernando Caycedo Camacho, quien contrajo legítimas nupcias con D.ª Aquilina Martínez de Pinillos y Licht, y que la solicitante es hija legítima de éstos;

c) Que la peticionaria permanece en estado de celibato; que es pobre; que ha observado y observa buena conducta moral; que no goza de pensión alguna del Tesoro, y que no ha sido recompensada por los inapreciables servicios prestados á la Patria por su abuelo D. Joaquín de Caycedo y Cuero, quien fué fusilado por orden del Presidente de Quito, D. Toribio Montes, en la ciudad de Pasto el veintiséis de Enero de mil ochocientos trece, según el testimonio unánime de los historiadores de aquella época, y

d) Que las personas que podían tener mejor derecho á la recompensa han fallecido yá, y que las que aún viven han renunciado expresamente en favor de la solicitante cualquier derecho que les conceda la ley.

Mas de los hechos establecidos no surge el derecho que hace valer la demandante; por cuanto del espíritu y letra de las disposiciones contenidas en la Ley 84 de 1890, "sobre recompensas militares," se deduce sin esfuerzo alguno, que sólo son recompensados los servicios de los *militares*, y no otros, siquiera sean de gran significación (artículos 1.°, 2.°, 12, 13, 46 y 48 de la ley citada). Y no se ha presentado ni la hoja de servicios del prócer D. Joaquín Caycedo y Cuero, ni el despacho ó nombramiento del último empleo que obtuvo en la milicia antes de su fallecimiento, así como tampoco se ha exhibido la partida de defunción del causante.

Cierto es que no se hallaron en los archivos nacionales los documentos cuya falta se nota en el proceso, pero también lo es que el artículo 51 de allí mismo, previendo el caso de extravío ó pérdida, dispone que se haga uso de la prueba supletoria, de conformidad con los Códigos Civil y Judicial, y no se ha ocurrido á este expediente, pues no se ha aducido la prueba testimonial requerida por la ley (artículo 683 del Código Judicial).

Es igualmente cierto que los que se encargaron de narrar los acontecimientos políticos y militares que se sucedieron con motivo de la guerra de la Independencia, entre otros, el historiador D. José Manuel Groot, están de acuerdo en que el prócer D. Joaquín Caycedo y Cuero tenía el grado de General, á la época de su muerte; pero como la ley no admite esta clase de pruebas, fuerza es desechar las pretensiones de la solicitante.

La Corte ha tenido que rechazar, en casos semejantes, reclamaciones de deudos de próceres de la Independencia, lo que es ciertamente deplorable; pero teniendo que ceñirse á la ley, está claro el juicio que debe dictar sobre el asunto.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y apartándose del concepto del señor Procurador, declara que no ha lugar á conceder la recompensa solicitada.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta* y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO. *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Agosto ocho de de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Joaquín Ruiz Vergara, vecino de Cartagena, demandó ante la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones el reconocimiento de la suma de cuatrocientos treinta y siete pesos ochenta y siete centavos ($ 437-87), valor de mercancías que tenía en una tienda situada al pie de La-Popa, que fueron tomadas por las fuerzas revolucionarias que sitiaron la ciudad de Cartagena, al mando de Ricardo Gaitán Obeso, en el año de mil ochocientos ochenta y cinco.

La Comisión absolvió al Tesoro por falta de prueba de los hechos en que se apoyó la demanda, en la resolución que profirió en dos de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos, que fué aprobada por el Ministerio del Tesoro en diez de Abril último.

Habiendo apelado de la decisión del Ministerio el apoderado de Ruiz Vergara, debe la Corte fallar en definitiva la reclamación.

La única prueba aducida por el demandante la constituyen las declaraciones de varios testigos, que no aseguran los hechos por no haber presenciado la exacción ni han podido fijar ni por aproximación el número de mercancías que estaban en la tienda al tiempo de la ocupación del pie de La-Popa por los rebeldes, ni su valor, ni siquiera que las hubieran tomado las tropas.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el dictamen del señor Fiscal de la Comisión de suministros, confirma la providencia apelada.

Déjese copia de esta sentencia, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, ocho de Agosto de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Antonia Pazos, vecina del Distrito municipal de Cajibío, Provincia de Popayán, Departamento del Cauca, demanda del Tesoro nacional la recompensa unitaria definitiva á que se cree con derecho como viuda del soldado Alejandro Zárate, muerto á manos de enemigos armados del Gobierno legítimo de la Confederación Granadina en la guerra civil de 1860 á 1863.

Con efecto, se ha comprobado satisfactoriamente que Zárate fué hecho prisionero en la batalla que perdieron las fuerzas de la Confederación en Santa Bárbara de Cartago el diez y ocho de Septiembre de 1862, y que conducido de allí á Silvia, fué bárbaramente asesinado en unión de otros, por los indios de Tierra-adentro. El hecho lo atestiguan José S. Fernández, folio 7; Manuel José Morales, folio 36, y Manuel León, folio 37, como testigos presenciales del asesinato, y, además, Fernando Pazos, folio 5 vuelto; José Mosquera, folio 9 vuelto; José Hilario Sules, folio 11; Coronel Nacianceno Sánchez, folio 12 vuelto, y Wenceslao Hurtado, folio 35 vuelto, como testigos de referencia con relación á la notoriedad pública y á otros testigos presenciales que á ellos se lo dijeron.

La calidad de legítima esposa, y viuda del reclamante, está comprobada con la declaración jurada de ella misma, rendida ante el Juez municipal de Cajibío, en cuatro de Julio último, folio 42, en que afirma que fué casada conforme al rito católico con el finado Alejandro Zárate, en la parroquia

de Cajibío el tres de Diciembre de 1861, y á falta de la correspondiente partida de matrimonio, por expresar el Párroco en el certificado que corre al folio 43 vuelto, que el libro respectivo se encuentra trunco en 1860 y destruído por la polilla, se ha presentado la declaración de José Hilario Sules, folio 11 vuelto, quien afirma que presenció el acto del matrimonio, y las de un número plural de otros testigos que aseveran el hecho como de notoriedad pública, en su calidad de vecinos de Cajibío y de amigos íntimos de Zárate y su esposa. Y viene, finalmente, en corroboración de estas pruebas el certificado de la defunción de Dolores Zárate, única hija habida en dicho matrimonio, en el cual expresa el Párroco, ser hija legítima de Alejandro Zárate y Antonia Pazos, folio 43 vuelto.

La buena conducta de la peticionaria, antes y después de su viudez, y el estado de absoluta pobreza en que se halla, los abonan los mismos testigos antes citados.

Y, finalmente, corre al folio 24 el certificado del Ministerio del Tesoro, que acredita que la peticionaria no figura como pensionada ni ha recibido recompensa alguna del Erario por esta causa.

Por tanto, la Corte, de conformidad con el derecho que á la peticionaria otorga el ordinal 2.° del artículo 5.° de la Ley 84 de 1890, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara á Antonia Pazos acreedora del Tesoro nacional por la suma de setecientos cuatro pesos ($ 704), equivalente del sueldo de un soldado en cuatro años, como recompensa unitaria definitiva, por la muerte de su esposo Alejandro Zárate, en las circunstancias de que se ha hecho mención.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta* y comuníquese al Ministerio del Tesoro para su cumplimiento.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Baltasar Botero Uribe.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales. Abraham Fernández de Soto.—Aníbal Galindo. — *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, ocho de Agosto de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: José Jesús Ramírez y María Antonia Duque, vecinos de Marinilla, en el Departamento de Antioquia, han demandado por medio de apoderado una recompensa militar, como padres legítimos de los Subtenientes José María y Jenaro Ramírez, muerto el primero por consecuencia de heridas recibidas en el combate librado en "La-Honda," Departamento del Cauca, el quince de Agosto de mil ochocientos sesenta y uno, muerto el segundo en el combate de "Morrogordo," en la guerra de mil ochocientos setenta y seis á mil ochocientos setenta y siete; el primero, defendiendo al Gobierno legítimo de la Confederación Granadina; el segundo, en defensa de los principios que informan las actuales instituciones de la República.

Complementado el expediente, conforme á la Ley 84 de 1890, á virtud de varios autos dictados por la Corte, es llegado el momento de resolver.

Figuran en el expediente los siguientes documentos:

1.° Copia expedida por el Cura Párroco de Marinilla, de la partida del matrimonio católico contraído por los solicitantes, en el año de mil ochocientos treinta y dos;

2.° Copias expedidas también por el mismo Cura Párroco, de las partidas de bautismo de José María y Jenaro Ramírez, de las cuales consta que fueron hijos legítimos de los solicitantes;

3.° Copia de la partida de defunción del Subteniente José María Ramírez, expedida por el Cura Párroco de La-Victoria, quien certifica que el diez y siete de Agosto de mil ochocientos sesenta y uno se dió sepultura eclesiástica al cadáver de Dicho Ramírez. Esto corrobora lo aseverado por los testigos, á saber: que herido Ramírez, en el combate de "La-Honda," fué trasladado á La-Victoria, en donde fué sepultado;

4.° Con un número plural de testigos, todos compañeros de armas de José María y Jenaro Ramírez, se ha acreditado la muerte del primero, por consecuencia de heridas recibidas en el combate de "La-Honda," y la del segundo, en el combate de "Morrogordo," el cinco de Abril de mil ochocientos setenta y siete;

5.° Otros varios testigos conocedores de los solicitantes han afirmado que éstos son pobres, de avanzada edad; que vivieron siempre en armonía con sus hijos y que han observado buena conducta. Con las mismas declaraciones se ha acreditado que los solicitantes son las únicas personas que tienen derecho á optar una recompensa por la muerte de los Ramírez, pues éstos fallecieron sin dejar viudas ni descendientes legítimos;

6.° Con certificaciones del señor Ministro de Guerra y del Secretario de Gobierno del Departamento de Antioquia se ha comprobado que no hay constancia en esas oficinas de los empleos militares que desempeñaran José María y Jenaro Ramírez; pero entre los declarantes figuran Jefes del Ejército de Antioquia que afirman que los expresados Ramírez murieron teniendo ambos el empleo de Subtenientes;

7.° Finalmente se ha presentado certificación del señor Ministro del Tesoro sobre el hecho de que los solicitantes no han recibido pensión ni recompensa por la muerte de sus hijos.

Justificado así el derecho de los demandantes, la Corte Suprema, en vista de lo que disponen los artículos 1.°, 5.° (inciso 2.°), 8.°, 9.° y 11 de la Ley 84 de 1890, de acuerdo con lo pedido por el señor Procurador de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que José Jesús Ramírez y María Antonia Duque tienen derecho á recibir del Tesoro nacional, la recompensa unitaria y definitiva de mil novecientos veinte pesos ($ 1,920), equivalente al sueldo de un Subteniente en cuatro años, más cuatrocientos ochenta pesos ($ 480), que es el veinticinco por ciento del mismo sueldo, ó sea un total de dos mil cuatrocientos pesos ($ 2,400), por la muerte en el campo de batalla de sus dos hijos José María y Jenaro Ramírez, quienes tenían el indicado empleo.

Notifíquese, cópiese, dése cuenta al Ministerio del Tesoro, insértese en la *Gaceta Judicial* y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Baltasar Botero Uribe.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Abraham Fernández de Soto.—Aníbal Galindo. *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, ocho de Agosto mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: La presente actuación, creada para sustentar la demanda que Bárbara y Vicenta Quintero, naturales y vecinas de la ciudad de Buga, en el Departamento del Cauca, hacen para reclamar el pago de la recompensa unitaria definitiva, á que se creen con derecho, como las únicas hermanas sobrevivientes y célibes del Jefe militar Miguel Leonidas Quintero, muerto á manos de enemigos armados del Gobierno legítimo de la Confederación Granadina, durante la guerra de mil ochocientos sesenta á mil ochocientos sesenta y tres, se halla plenamente revestida de las pruebas de los hechos que dan derecho á la recompensa que se demanda.

Con efecto, que el Jefe antes mencionado fué hecho prisionero, en el punto de "Taminango," el veinticinco de Diciembre de mil ochocientos sesenta y dos, en un combate que tuvo lugar entre el Batallón de su mando, y una fuerza comandada por el Jefe revolucionario Juan María Pantoja, y conducido de allí al castigo, donde fué fusilado de orden del mismo Pantoja, el primero de Enero del ochocientos sesenta y tres, es un hecho que además de su notoriedad histórica, se halla comprobado en el expediente, con las declaraciones de un número plural de testigos idóneos presenciales del fusilamiento.

El empleo militar que revestía Quintero en el Ejército de la Confederación, antes de su muerte, se ha comprobado, á falta del despacho en forma de que no se ha encontrado constancia en las Oficinas públicas, con el parte oficial de la batalla de "El-Cabuyal," librada el once de Abril de mil ochocientos sesenta y dos, que en copia auténtica se ha traído á los autos, corriente al folio 55, en el cual se halla mencionado Quintero, en el empleo de Teniente-Coronel, documento admisible en defecto de despacho, de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de la materia (84 de 1890).

La filiación de las peticionarias, como hermanas legítimas del Teniente-Coronel Quintero, se comprueba con las correspondientes partidas de bautismo de ellas y de él, que corren al folio, 1.° expedidas por el Cura de Buga, la de Bárbara, que lleva la fecha de nueve de Noviembre de mil ochocientos veinte; la de Vicenta, de seis de Abril de mil ochocientos treinta y la de Miguel Leonidas, de cinco de Julio de mil ochocientos treinta y tres, en todas las cuales se hace constar que los bautizados son hijos legítimos de Joaquín Quintero y de María Josefa Lozano.

La partida de matrimonio de éstos no ha podido ser hallada, según lo afirma el mismo Párroco en la certificación corriente al folio 34 vuelto; pero al anverso del mismo folio 34 en que corren las certificaciones de su defunción, en la de Joaquín, acaecida el seis de Marzo de mil ochocientos cuarenta y ocho, se dice: "casado que fué con la señora Josefa Lozano." Además, se han presentado las declaraciones de Cleotilde Quintero (folio 28), José María Cifuentes (folio 29 vuelto), y Julián Ortiz (folio 31), con las cuales se comprueba que los dichos Quinteros y María Josefa Lozano vivieron por más de veinte años tratados y recibidos por la sociedad de Buga como marido y mujer.

Al folio 42 se encuentra el certificado del mismo Cura y Vicario de Buga, en que afirma que registrados los libros correspondientes á los años de mil ochocientos ochenta á mil ochocientos noventa y uno, no se han encontrado en ellos las partidas de defunción de las otras hermanas de las peticionarias, Mariana, Dolores, Encarnación y Magdalena Quintero, por lo cual hubo de ocurrirse á la prueba testimonial de su fallecimiento, prueba que ha sido suministrada por el dicho de los testigos Liborio Quintero, Julián y Juan de Dios Ortiz, corrientes de folios 38 á 41.

Que el Teniente-Coronel Quintero no fué nunca casado, que tampoco dejó hijos naturales reconocidos, y que las peticionarias—que son por lo mismo las que en calidad de únicas hermanas sobrevivientes y célibes, tienen derecho á la recompensa—son pobres, dependían para subsistencia de los recursos que les suministraba el hermano muerto, que siempre vivieron con él en buena armonía, y han observado y observan buena conducta, está comprobado en autos con las declaraciones de un número plural de testigos idóneos recibidas y confrontadas en la forma legal.

Y finalmente, corre al folio 18 la certificación del Ministro del Tesoro, en que se hace constar que las peticionarias ni figuran como pensionadas de la República, ni han recibido recompensa alguna por esta causa.

Por tanto, la Corte, de acuerdo con los conceptos del señor Procurador general, favorables en todo á las peticionarias, el primero de veintiséis de Febrero último (folios 46 á 47), y el último del primero del presente (folio 57), y de conformidad con el derecho que á las peticionarias otorgan los artículos 1.°, 5.° (ordinal 2.°), 7.°, 9.° y 11 de la Ley 84 de 1890, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que Bárbara y Vicenta Quintero tienen derecho á recibir cada una la suma de dos mil cuatrocientos pesos ($ 2,400), ó sea entre ambas la de cuatro mil ochocientos pesos ($ 4,800), equivalente del sueldo de un Teniente-Coronel en cuatro años, como recompensa unitaria definitiva, por los servicios militares de su hermano legítimo el Teniente-Coronel Miguel Leonidas Quintero, muerto en defensa del Gobierno legítimo de la Confederación Granadina, en las circunstancias de que queda hecha mención.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y comuníquese al Ministerio del Tesoro para su cumplimiento.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO. *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, catorce de Agosto de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Por medio de apoderado, Francisco Uní solicitó le concediera la Corte la recompensa militar á que se creía con derecho por haber recibido el onco de Enero de 1877, en el combate de "La-Herradura," una herida que le ocasionó invalidez relativa.

Ampliábase el expediente con el fin de que el reconocimiento del inválido se practicara de conformidad con lo prevenido por el artículo 17 de la Ley 84 de 1890, cuando ocurrió la muerte del demandante, según se ha comprobado con la respectiva partida de defunción que expidió el Cura de El-Rosal y corre al folio 36.

Y aunque el apoderado, doctor Salvador Valencia Fernández, pide hoy dicha recompensa para la viuda é hijos del finado Uní, la Corte tiene resuelto, de conformidad con la mencionada Ley 84, que la recompensa que se puede conceder por razón de invalidez sólo favorece al inválido mismo y no á sus deudos, pues es enteramente personal, á diferencia de las que se otorgan por causa de muerte recibida en el campo de batalla, ó con motivo de heridas recibidas en él ó en funciones del servicio militar, las cuales sí son trasmisibles.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el parecer del señor Procurador, declara que no hay lugar á conceder la recompensa solicitada.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta* y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO. —*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, catorce de Agosto de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 968 del Código Judicial y por el inciso final de la Ley 72 de 1890, el Juez 1.° del Circuito de Bogotá dispuso en auto de seis de Mayo último, consultar con la Corte Suprema la sentencia por él pronunciada en trece de Febrero anterior, en el juicio de expropiación intentado por el Fiscal del Tribunal Superior contra Bernardina Santamaría de Restrepo, sobre una zona de terreno de la hacienda de "Capellanía," perteneciente á la demandada, y en extensión de veintiséis mil metros cuadrados, la cual zona fué ocupada por el Ferrocarril de la Sabana.

Sustanciado el juicio en segunda instancia del modo prevenido por la ley 105 de 1890, es yá tiempo de terminarlo, mediante el fallo definitivo que le corresponda; y para dictarlo, se procede á examinar las pruebas aducidas en el juicio.

La demanda se promovió ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, porque según lo dispuesto en el inciso 3.° del artículo 73 del Código de Organización Judicial, era dicho Tribunal el competente para conocer de ella en primera instancia; pero habiendo entrado en vigencia la Ley 72 de 1890, el Tribunal, por auto de tres de Febrero de 1891, declaró que había cesado su jurisdicción en el asunto y determinó remitir el expediente al Juez del Circuito de Bogotá, competente según el inciso 3.° del artículo 12 de dicha ley.

Cuando aún conocía del negocio el Tribunal, se dictó el auto de veintisiete de Noviembre de 1889, por medio del cual y por no haber la demandada contestado oportunamente la demanda, se la declaró confesa en los hechos que sirvieron de fundamento á la acción; y dicho auto quedó ejecutoriado y como ley del proceso. En el mismo auto se abrió el juicio á prueba por el término de diez y ocho días, y se dispuso el nombramiento de los peritos, que debían fijar el valor de la indemnización á que la demandada debía tener derecho por razón del terreno expropiado y de los perjuicios causados por la expropiación.

Nombrados peritos y debidamente posesionados Mariano Santamaría y Francisco Forero A., presentaron éstos su exposición de fecha 21 de Julio de 1891, en la cual manifiestan que estimaban el valor total de la dicha expropiación en la suma de cinco mil siete pesos tres centavos ($ 5,007-03); pero habiéndose objetado este dictamen por parte del apoderado de la Compañía del Ferrocarril, el Tribunal, á quien

pasó el expediente en apelación de un auto del Juez, dispuso que se practicara nuevo avalúo por otros motivos.

Los nuevos peritos, Carlos Michelsen y Agustín A. Jiménez, avaluaron en la siguiente forma:

La faja de terreno expropiada, en mil novecientos treinta y seis pesos	$ 1,936
El arrendamiento de la misma faja, en cuatro años en que ha estado ocupada por el Ferrocarril, doscientos cuarenta pesos	240
Los perjuicios sufridos por la demandada, por causa de la desmejora causada en la parte alta de su hacienda, á razón de un cinco por ciento en el valor de dicha parte que se calculó en sesenta y cuatro mil ochocientos pesos, en tres mil ciento treinta	3,130
El valor de las dos cercas que creyeron debían construírse para separar la línea del Ferrocarril, por uno y otro lado de la hacienda, en mil seiscientos cincuenta y ocho	1,658
El valor de las costas del juicio, en quinientos pesos	500
Total, siete mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos	$ 7,464

Este dictamen fué también objetado por el apoderado de la Compañía, y el Juez lo improbó; pero habiendo la parte demandada interpuesto recurso de apelación contra la providencia respectiva, y habiéndosele concedido el recurso, el Tribunal reformó aquella providencia, declarando que las partidas referentes al valor de la zona de tierra expropiada, y á los perjuicios sufridos por la demandada no adolecían de error esencial, y que las otras tres partidas no eran pertinentes al avalúo y que debía prescindirse de ellas.

En vista de esta decisión superior, el Juez en su sentencia fijó el valor de la indemnización á que tenía derecho la demandada en la suma de cinco mil sesenta y seis pesos ($ 5,066), á que ascienden las dos partidas mencionadas, ó sean la del valor del terreno expropiado y la de los perjuicios.

Por lo demás, las citas legales que en su mencionado fallo el Juez hace para fundarlo, tanto con relación á ser éste una de las cosas en que se permite el decretar una expropiación por causa de utilidad pública, como respecto de las formalidades que al efecto se requieren, son todas acertadas y correctas.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, confirma la sentencia consultada.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta* y devuélvase el expediente al lugar de su procedencia.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Febrero veintiocho de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: En Barranquilla, á nueve de Diciembre último, el Consejo de guerra ordinario, reunido para juzgar al soldado Santos Alvarez del *Batallón 16 de Artillería La-Popa*, á quien se había encausado por considerársele responsable de la fuga de un preso que sufría su prisión en la cárcel de aquella ciudad, dictó, previa observancia de las formalidades legales correspondientes, la sentencia que le condenó á cuatro meses de prisión en el calabozo del cuartel y á los gastos y costas procesales, la cual ha venido en consulta á esta Superioridad, en donde, sustanciado legalmente el asunto, para resolver lo procedente, se considera:

Según el artículo 413 de la Ley 105 de 1890, la Corte no tiene en esto otra atribución que la de resolver como Tribunal de derecho, en cuanto á la aplicación de la pena, siéndole prohibido variar la calificación hecha por el Consejo de guerra, respecto de la culpabilidad ó inocencia del acusado;

A este punto determinado y al de averiguar si ocurre en el proceso algún motivo de nulidad, está reducida la función que debe la Corte desempeñar. Y habiendo el señor Presidente de ella, en conformidad con lo ordenado por el artículo 1545 del Código Militar, propuesto las cuestiones pertinentes sobre incompetencia y sobre informalidades, ha resultado lo siguiente:

No ha habido en el caso incompetencia de jurisdicción, porque definiendo como define el Código Militar, en su artículo 1621, el delito de que se trata, el cual consistió en haber el soldado Alvarez dado lugar por descuido, á que en veinticuatro de Junio de mil ochocientos noventa y dos, en que estaba de centinela, en la cárcel de Barranquilla, se fugase de ella el reo José María de la Rosa Ibarra, claro se ve que es delito militar cuyo conocimiento incumbe al Consejo de guerra ordinario.

La identidad militar del acusado se acreditó por medio de la correspondiente filiación que se acompañó al expediente; hiciéronse al reo y á su defensor (que en tiempo oportuno fué nombrado por aquél), las notificaciones de que trata el inciso 2.° del artículo 1536 del citado Código Militar; ni el reo ni su defensor pidieron pruebas que no habiendo sido recibidas puedan dar motivo para la nulidad. De manera que no existe ninguna informalidad que vicie el proceso.

En su exposición, el señor Procurador observa con razón que se omitió en la sentencia consultada citar el artículo 1621 del expresado Código Militar, que define el delito por el cual se ha condenado á Alvarez; pero que estando dicho artículo acorde en lo sustancial con el 288 del Código Penal vigente, que sí fué citado, dicha omisión no afecta de nulidad la causa.

En cuanto á la aplicación de la pena no cabe hacer observación alguna, visto que por existir circunstancias atenuantes, se señaló al reo el *mínimum* de la pena indicada, por el artículo yá citado del Código Penal.

Por tales consideraciones, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el parecer del señor Procurador, confirma la sentencia consultada.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS. M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Julio veintinueve de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: El Juez del Circuito de San-Juan, declaró, por auto de seis de Septiembre de 1889, que Alejandro Mosquera había quedado incurso en la multa de cien pesos como fiador de cárcel de Cupertino Leudo, por no haber presentado á éste dentro del término que se le señaló para que cumpliese la pena á que fué condenado, por el delito de amancebamiento. Sin que aparezca que ese auto fuese notificado á Mosquera, el Administrador de Hacienda nacional, á quien se pasó en copia, libró mandamiento ejecutivo contra dicho Mosquera para el pago de los cien pesos, auto que no fué apelado por el ejecutado, quien se redujo á decir á tiempo de la notificación que no pagaba, porque no tenía dinero ni bienes de ninguna especie. El Administrador declaró luégo embargada la mitad de la casa en que habitaba Mosquera, y de esta resolución de embargo apeló éste para ante el Juez de Circuito. Este funcionario se declaró incompetente para decidir, y devolvió las diligencias al Administrador, quien volvió á intimar á Mosquera que nombrase depositario y avaluador. Mosquera se abstuvo de hacer tal nombramiento, y el juicio permaneció en suspenso desde el nueve de Enero de 1890 hasta el veinticinco de Febrero del presente año, en que se volvió á exigir al ejecutado que nombrase depositario y avaluador.

Fué al notificarse á Mosquera esta providencia cuando éste interpuso apelación del auto ejecutivo, la cual le fué negada por haber trascurrido más de tres años desde que tal auto había sido notificado y estaba ejecutoriado. Practicado el avalúo de la finca embargada, se mandó citar al ejecutado para sentencia de pregón y remate, y notificado el auto, Mosquera opuso en tiempo oportuno las excepciones de remisión ó perdón de la deuda y de caso fortuíto. Pasáronse las diligencias al Juez del Circuito para la decisión de las excepciones, y el Juez, por auto de veintisiete de Abril último, las declaró no probadas. Notificado este auto á Mosquera, no interpuso apelación y el Administrador ordenó llevar adelante la ejecución y señaló día para el remate, por providencia de cuatro de Mayo siguiente. De esta última ha interpuesto apelación el ejecutado para ante esta Superioridad, y concedido el recurso en el efecto devolutivo, se remitieron las diligencias en las cuales va á dictarse la resolución que convenga, después de oír el concepto del señor Procurador.

El auto del Administrador por el cual señaló día para el remate de los bienes embargados, después de haberse declarado no probadas las excepciones opuestas, es perfectamente legal, de acuerdo con la parte final del artículo 1055 del Código Judicial.

Verdad es que el Juez del Circuito falló acerca de las excepciones sin sustanciar el artículo, como lo previene el citado artículo 1055, pero el ejecutado no interpuso apelación del fallo y quedó ejecutoriado. No hay duda, pues, de que el ejecutado ha procedido con descuido y desacierto como lo hace notar el señor Procurador, pero el remedio á que hoy ha ocurrido es también desacertado porque la providencia apelada no puede ser revocada.

Por lo tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, confirma la resolución que ha sido objeto de apelación.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta*, y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—JOAQUÍN MARTÍNEZ E.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, Julio veintinueve de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: El doctor Domingo C. Suárez ha ocurrido de hecho á este Supremo Tribunal, para que por él se le conceda el recurso de apelación, que le fué denegado por la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, y que el recurrente interpuso contra lo resuelto por dicha Corporación en once de Marzo de 1892, en el juicio relativo á la reclamación de José M. Vargas, para que se le reconozca el crédito de cuatrocientos pesos á cargo del Tesoro nacional, valor de varios bienes que le fueron expropiados en el curso de la guerra de 1876 y 1877. El recurrente ha acompañado á su solicitud una copia expedida por el Secretario de la expresada Comisión, la cual contiene estas piezas: la resolución de la Comisión de suministros dictada en once de Marzo de 1892, con el número 3,437, por la cual niega el reconocimiento de los cuatrocientos pesos demandados por José María Vargas, y absuelve á la Nación de la cantidad materia del juicio;

La resolución del Ministerio del Tesoro, fecha diez de Mayo de 1892, 2,791, que aprueba la anterior;

La notificación, por edicto, de lo determinado por el Ministerio del Tesoro en la fecha arriba citada, notificación que se surtió el día ocho de Junio de 1892;

El escrito en que el doctor Domingo C. Suárez manifiesta á la Comisión, que no pudo apelar de la resolución de que se ha hecho mérito, porque el Secretario de la Oficina le informó que el expediente se encontraba en el despacho de la Comisión, pero que él (Suárez) interponía el aludido recurso para ante esta Corte, y que, al efecto, prestaba voz y caución de que se aprobaría lo que él hiciese en sostenimiento de los derechos del reclamante Vargas, y designó á los señores Luis Montalvo y Domingo Zaldúa como sus fiadores, llenando así los requisitos que exige el artículo 345 del Código Judicial;

La resolución de la Comisión, en la cual se niega al doctor Suárez, el recurso de apelación, por no haberlo interpuesto oportunamente, y estar el expediente yá archivado;

El escrito que el doctor Suárez dirigió á los miembros de la Sala de apelaciones de la expresada Comisión, con fecha diez y ocho de Febrero de este año, en que hace la relación ó historia del curso del negocio, para que se revoque lo determinado por el miembro señor Herrán en cinco de Julio de 1892, y se le conceda el recurso que tiene yá interpuesto;

La última determinación de la expresada Sala, dictada en veintidós de Febrero último, por la cual se niega en términos absolutos la solicitud del doctor Suárez; fundándose principalmente en que careciendo éste de personería legítima para representar al reclamante, José M. Vargas, no le es lícito á la Comisión convenir en que el doctor Suárez preste caución de que dicho interesado aprobará cuanto hiciere en nombre de éste; pues según el artículo 345 del Código Judicial, que permite la prestación de fianza para asumir personería en determinados casos, no autoriza, ni podía autorizar, el que, por este medio, un individuo cualquiera tomara la representación que corresponde al apoderado legalmente constituído;

Y por último, el escrito dirigido por el doctor Teodosio Moreno, apoderado de José M. Vargas, por el que sustituye al doctor Domingo C. Suárez el poder que le había sido conferido; y el auto que aceptaba dicha sustitución y que tiene la fecha cinco de Abril de este año, esto es, de fecha posterior á todo lo que precedentemente se ha narrado.

Contiene, pues, la copia presentada por el doctor Domingo C. Suárez todos los datos que exige el artículo 899 del Código Judicial, y por tanto, la Corte procede á resolver el recurso de hecho interpuesto, previas las consideraciones siguientes:

Conforme al artículo 345 del citado Código Judicial, "por regla general, ninguno puede representar á otro en juicio, sino con poder otorgado con las formalidades legales; pero para contestar una demanda, después de notificada al interesado, y entablar algún recurso, cuando de no hacerlo pueda la parte sufrir un gran perjuicio, no se necesita poder; cualquiera puede hacerlo, dando fianza á satisfacción del Juez, de que la parte por quien habla, lo aprobará como hecho por la misma;" de manera que tratándose en el presente caso de la interposición del recurso de apelación contra la resolución dictada por el Ministerio del Tesoro en diez de Marzo de mil ochocientos noventa y dos, que aprobó la de la Comisión de suministros, proferida el día once de Marzo del mismo año, señalada con el número 3,437, sí habría podido dicha Comisión concederlo, una vez que el doctor Suárez indicó á Luis Montalvo y Domingo Zaldúa, como fiadores, si éstos eran aceptables á juicio de la misma Corporación; pero como el doctor Domingo C. Suárez no figuró como parte legítima en el juicio, y además ocurrió á la Comisión interponiendo la apelación dos días después de vencido el término legal para apelar, ó más claro, ocurrió cuando la resolución del Ministerio del Tesoro estaba yá ejecutoriada, según la cuenta de los días trascurridos que el mismo doctor Suárez determinó en su escrito, es evidente que no se está en el caso de admitir el recurso de hecho que interpone y de que la Corte conceda el de apelación que le fué denegado.

Por tanto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, la Corte Suprema resuelve no conceder, como no concede, el recurso de apelación contra la resolución del Ministerio del Tesoro número 2,791, arriba mencionada, y dispone que se archive este expediente.

Notifíquese, déjese copia é insértese en la *Gaceta Judicial*.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—JOAQUÍN MARTÍNEZ E.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

IMPRENTA DE ANTONIO M. SILVESTRE.
Director, Tomás Galarza.

REPÚBLICA DE COLOMBIA.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AÑO VIII } Bogotá, 15 de Septiembre de 1893. { NÚM. 414.

CONTENIDO.

Págs.

PENA CAPITAL.

Condénase á Alejandro Omén é Isidro Beltrán á sufrir esta pena, por el delito de asesinato cometido en la persona de Zenón Quinayas. (Magistrado ponente, doctor Pombo)..... 401

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Niégase á Marcelino Torrente el reconocimiento de un crédito de suministros. (Magistrado ponente, doctor Corrales)..... 403
Concédese á Quiteria Campo una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Fernández de Soto)..... 404
Concédese á Dolores Astudillo una recompensa. (Magistrado ponente, doctor Galindo)..... 404
Niégase á José María Cano el reconocimiento de un crédito. (Magistrado ponente, doctor Galindo)..... 405

NEGOCIOS CRIMINALES.

Confírmase la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en un sumario instruído contra Indalecio Betancourt, Fiscal del Circuito de Frontino. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas)..... 405

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Revócase el auto ejecutivo dictado por el Administrador municipal de Hacienda nacional de Buriticá, para hacer efectiva á Marco A. Arenas una multa, que se le impuso como pena. (Magistrado ponente, doctor Trujillo)..... 405
Declárase la Corte incompetente para conocer de un auto dictado por el Juez del Circuito de Toro, por el que se impuso una multa como pena correccional, á Ramón Hoyos y Nicolás y Ulpiano Quintero V. (Magistrado ponente, doctor Villafrádez)..... 406
Declárase inadmisible el recurso de hecho interpuesto por Alejandro Lince P. contra una resolución de la Oficina general de Cuentas. (Magistrado ponente, doctor Fernández de Soto)..... 406
Declárase inadmisible el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Cundinamarca dictada en la tercería excluyente propuesta en el juicio ejecutivo que el Gerente del Banco Popular sigue contra Fernando y Rómulo Sánchez. (Magistrado ponente, doctor Galindo)..... 406
Declárase inadmisible el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Cundinamarca dictada en el juicio seguido por Froilán Vega O. contra Eugenio González Benito y Francisco Noguera, sobre nulidad de un remate. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas)..... 407
Confírmase el auto dictado por el Tribunal del Pacífico en la competencia suscitada entre éste y el Tribunal de Popayán, en el juicio seguido por Joaquín Rengifo Salazar contra el Departamento del Cauca, por la venta de una boleta de registro. (Magistrado ponente, doctor Galindo)..... 407

NEGOCIOS CRIMINALES.

Revócase el auto de sobreseimiento dictado por el Tribunal del Norte de Santander en el sumario instruído contra José del Carmen Hernández Blanco, Fiscal del Circuito de Chinácota. (Magistrado ponente, doctor Fernández de Soto)..... 408

GACETA JUDICIAL.

PENA CAPITAL.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez y ocho de Agosto de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Al *amanecer del día* quince de Noviembre de mil ochocientos noventa y uno, se dió muerte violenta á Cenón Quinayas, hecho que tuvo lugar en el patio de la casa de Isidro Beltrán, situada en el caserío de "Caquiona," Municipio de Almaguer, Circuito de Caldas, del Distrito Judicial de Popayán, y que dió lugar á la instrucción del sumario que inició el Inspector de Policía de dicho caserío y continuaron el Alcalde de Almaguer y el Juez del Circuito hasta remitirlo perfeccionado al Juez Superior de dicho Distrito Judicial, con algunos de los sindicados que habían sido capturados.

La historia de los hechos que precedieron á la muerte de Quinayas y que ha extractado fielmente del sumario el señor Procurador, es la siguiente:

"En el caserío mencionado, y como á las doce del día 14 de Noviembre de 1891, hubo una riña entre Cenón Quinayas é Isidro Beltrán, en la que tomaron parte Angel María Beltrán, en defensa de su padre, Isidro y Jerónimo Paz, en favor de Quinayas. El Inspector de Policía, Manuel Omén hizo llevar á la cárcel á los contendores principales, Cenón Quinayas é Isidro Beltrán, á quienes puso en libertad en la tarde del mismo día de la riña. Poco después, y en las primeras horas de la noche del propio día 14 de Noviembre, volvió á reñir Quinayas con Antonio Castillo, atacando también al primero Isidro Beltrán y su hijo Angel María Beltrán, de cuya riña resultó que Castillo mordió á Quinayas en la boca, arrancándole un pedazo del labio inferior, é Isidro Beltrán dió unos golpes al referido Quinayas, entrándose Beltrán á su casa, en busca de un palo para continuar el ataque. Al salir Isidro Beltrán se encontró con Alejandro Omén, á quien propuso que mataran entre todos á Quinayas. Este salió corriendo, y en su alcance corrieron también Alejandro Omén, Isidro Beltrán y su hijo Angel María Beltrán, Antonio Castillo y otros. Alejandro Omén alcanzó á Cenón Quinayas, le dió un golpe y lo echó á tierra; ya en el suelo siguió dándole puñadas é Isidro Beltrán daba á la víctima de patadas, mandando á su hijo Angel María á traer un rejo para amarrarlo; traído el rejo por Angel María Beltrán, Antonio Castillo é Isidro Beltrán ataron los pies á Quinayas, y Castillo dijo en esos momentos á Alejandro Omén que le pagaría si mataba á Quinayas, contestando Omén que si le pagaba le daría muerte inmediatamente. Los mismos Isidro Beltrán y su hijo Angel María y Antonio Castillo, cogiendo el rejo que ataba los pies á Quinayas, arrastraron á éste hasta el patio de la casa de Isidro, quien lo amarró á un palo, dejándole los pies en alto y la cabeza en el suelo, diciendo á Quinayas cuando lo amarraba al palo que le iba á dejar la cabeza colgando para meterle el cuchillo así como él lo hacía con las ovejas. Después de esto Alejandro Omén y los que habían arrastrado á Quinayas se entraron á la casa de Isidro Beltrán, donde discutían el modo de dar muerte á Quinayas. Avanzada la noche, á la madrugada del 15 de Noviembre de 1891, Alejandro Omén, salió de la casa de Isidro Beltrán, armado de un cuchillo, en dirección al lugar en que estaba amarrado Cenón Quinayas, y poniendo á éste el cuchillo en la garganta le decía que iba á matarlo así como él mataba las ovejas. Quinayas apartó el cuchillo con las manos y le decía á Omén que no lo matara, que él seguiría en su servicio; á lo cual contestó Omén que él no quería seguir con *ovejeros*. Alejandro Omén se entró de nuevo á la casa de Isidro Beltrán, de donde volvió á salir acompañado de éste, trayendo un cabestro de rejo, con el que Omén hizo un lazo que puso al cuello de Cenón Quinayas, y apoyando un pie en el pecho de la víctima, mientras Isidro Beltrán le sujetaba las manos, tiró fuertemente del rejo, ahorcando así á Quinayas."

El mencionado Juez Superior, dictó con fecha veintiuno

de Marzo de mil ochocientos noventa y dos, el auto por el cual declaró que había lugar á seguimiento de causa por el delito de homicidio, perpetrado en la persona de Cenón Quinayas contra Alejandro Omén, Isidro Beltrán, Marciano Omén, Antonio Castillo, Angel María Beltrán, Fermina Males, Hilario Papamija, Florentina Beltrán y Clara Beltrán. Se mandó reducir á prisión á los enjuiciados y que se les notificase el auto para que nombrasen defensor. Como sólo los tres primeros se hallaban en la cárcel de Popayán, éstos nombraron para su defensor al doctor Antonino Olano, quien tomó posesión de su encargo. Posteriormente fueron notificados los procesados Antonio Castillo é Hilario Papamija, que se presentaron voluntariamente, y Angel María, Florentina y Clara Beltrán, que fueron remitidos por el Alcalde de Almaguer; todos estos nombraron para su defensor al doctor Gonzalo G. Casas, que también aceptó y juró su encargo.

Abrióse la causa á prueba y continuó su curso, menos respecto de Fermina Males, que no pudo ser notificada del auto de enjuiciamiento.

Espirado el término señalado para pruebas, y recibidas las que se adujeron en favor de los procesados, el Juez señaló día para el sorteo de los Jurados, diligencia que se practicó el siete de Julio del año citado; pero como tanto el señor Procurador como el defensor de los reos ante la Corte, han hecho observaciones respeto de irregularidades cometidas en esa diligencia, se hará el examen de ellas á su debido tiempo.

Fijado, después, el veintiséis de Octubre siguiente para la celebración del juicio, y reunido el Jurado, el Juez de la causa presentó por separado las cuestiones correspondientes á cada uno de los encausados respecto de su responsabilidad en el homicidio de Quinayas, y el Jurado declaró que Alejandro Omén é Isidro Beltrán, son autores principales del delito de homicidio cometido en la persona de Cenón Quinayas, delito definido en el artículo 586 del Código Penal, con la concurrencia de algunas de las circunstancias de asesinato determinadas en el mismo artículo, las que reputa como más graves el artículo 597 de dicho Código, y es aplicable, por consiguiente, la pena señalada en el artículo 598 del mismo. Declaró también responsables del expresado delito, á Antonio Castillo, como cómplice, y á Marciano Omén y Angel María Beltrán como auxiliadores, y sin responsabilidad alguna, á Hilario Papamija, Florentina y Clara Beltrán.

Conforme á este veredicto, el Juez Superior dictó la sentencia de veintinueve de Octubre, que en su parte final dice así:

"Por todo lo expuesto, y en vista de los artículos 42, 87 y 598 del Código Penal, el Juzgado Superior del Distrito Judicial de Popayán, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara:

"1.° Condénase á Alejandro Omén y á Isidro Beltrán, á sufrir la pena de muerte en el lugar y de la manera indicados en los artículos 48 á 53 del Código Penal;

"2.° Condénase á Antonio Castillo, hecha la computación y rebaja correspondientes, á sufrir, como cómplice, la pena de trece años un mes un día y doce horas de presidio;

"3.° Se califica en tercer grado la delincuencia de Angel María Beltrán y Marciano Omén, y hecha la rebaja del caso, se les condena, al primero, á nueve años ocho meses y veintiocho días de presidio; y al segundo, á sufrir nueve años seis meses doce días y doce horas de presidio;

"4.° Los condenados á presidio padecerán su pena en el Establecimiento radicado en este Departamento;

"5.° Además, se les condena á la privación de todo destino, cargo ó empleo público y de toda pensión, como también á la privación perpetua de los derechos políticos; á pagar de *mancomún y solidariamente* la suma de mil pesos ($ 1,000) á los herederos ó representantes de Cenón Quinayas, y las costas procesales al Tesoro nacional, y

"6.° Se declara terminado el procedimiento con relación á los enjuiciados Hilario Papamija, Florentina Beltrán y Clara Beltrán. Y por cuanto este proceso debe elevarse en consulta á la Corte Suprema de Justicia, sáquese copia de las piezas necesarias para continuar el juicio contra Fermina Males, por cuanto ésta no ha sido remitida para ser juzgada.

"Notifíquese esta sentencia, y si, dentro del término legal no fuere apelada, póngase el proceso al despacho para proveer lo conveniente."

Notificada esta sentencia, se interpuso apelación por los reos condenados y sus defensores, y concedido el recurso se remitió el proceso al Tribunal Superior de Popayán, quien con fecha veinticuatro de Abril del presente año, resolvió lo siguiente:

"Por los fundamentos anteriormente expuestos, el Tribunal Superior del Distrito Judicial, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, reforma la sentencia apelada, en las partes que á continuación se expresan:

"Condénase á Alejandro Omén y á Isidro Beltrán á sufrir:

"1.° La pena de muerte, que se ejecutará en la villa de Almaguer, con las demás formalidades detalladas en los artículos 49 á 52 del Código Penal; 2.° al pago mancomunado de la cantidad de $ 1,000 á los herederos ó representantes legales del finado Cenón Quinayas, y á las costas procesales al Tesoro nacional, y 3.° privación de todo destino, cargo ó empleo público y de toda pensión pagadera por el Tesoro y privación perpetua de los derechos políticos, si fuere conmutada á los reos la pena capital.

"Condénase á Antonio Castillo á 13 años 4 meses de presidio, que sufrirá en el Establecimiento radicado en este Departamento, debiéndose hacer la computación del tiempo que ha estado detenido ó preso, en los términos que establece el artículo 75 de la Ley 100 de 1892.

"Se condena á Marciano Omén y Angel María Beltrán á la pena de presidio, por el término de 11 años 8 meses, que cumplirán en el mismo Establecimiento y con la computación á que se refiere el punto anterior.

"Confírmase en todo lo demás el fallado apelado.

"Notifíquese y cópiese esta sentencia; y si no fuere apelada, consúltese con la Corte Suprema, á donde se remitirán los autos por el próximo correo."

Todos los reos interpusieron recurso de apelación para ante la Corte, á tiempo de ser notificados, y aunque uno de los defensores interpuso el de casación por escrito presentado el veintiocho de Abril, el Tribunal declaró que habiéndose presentado el memorial dos días después de hecha la notificación de la sentencia, se estuviese á lo resuelto en esa misma fecha en el proceso, á saber: que no habiéndose interpuesto expresamente el recurso de casación, en el acto de la notificación, como lo previene el artículo 388 de la Ley 105 de 1890, se llevase á efecto la consulta ordenada.

Traídos los autos á esta Superioridad y provistos de defensor, los reos Alejandro Omén é Isidro Beltrán, respecto de los cuales únicamente puede surtirse el recurso de casación, por ser los condenados á muerte, conforme al artículo 368 de la citada Ley 105, se ha seguido la tramitación que previene la ley, y la Corte procede, en consecuencia, á examinar si en la sentencia de que se trata concurre alguna de las causales que conforme al artículo 370 de la mencionada ley dan derecho para interponer el recurso de casación.

Como lo ha hecho notar el señor Procurador, la Corte no puede ocuparse en el examen de la segunda de dichas causales, que consistía en la estimación de injusticia notoria que podía hacer la Corte respecto del veredicto del Jurado, porque como lo ha decidido yá, derogada esta causal, como lo fué por el artículo 87 de la Ley 100 de 1892, que empezó á regir en la República el primero de Marzo del presente año, el derecho de interponer recurso de casación fundado en dicha causal, no podía extenderse á las sentencias que se pronunciasen después de la vigencia de la citada ley; y como la del Tribunal de Popayán, contra la cual se hace valer el recurso, es de fecha veinticuatro de Abril último, es claro que ni existe derecho para alegar la causal aludida, ni la Corte tiene facultad para fundar en ella su decisión. Empero, como el mismo señor Procurador y el defensor de los reos han alegado irregularidades que creen comprendidas en la primera de las causales señaladas en el artículo 370 de la mencionada Ley 105, es decir, que constituyen violación de ley sustantiva ó de doctrina legal, la Corte pasa á examinar esas irregularidades.

La primera que hace notar el señor Procurador consiste

en no haberse notificado al defensor Olano el auto en que se señaló día para el sorteo de los Jurados; que no está firmada por él la diligencia del sorteo, y que, según aparece de la misma diligencia, dicho defensor sólo recusó, á nombre de sus defendidos, á dos de los designados de la lista de los sorteados, y siendo aquéllos tres, uno de éstos dejó de hacer uso del derecho de recusar que le da la Ley 57 de 1887, en su artículo 276.

Verdad es que el artículo 265 de la ley que acaba de citarse establece como causales de nulidad, en los negocios en que interviene el Jurado, entre otras, las siguientes:

"1.ª No haberse notificado á las partes el auto en que se señala día y hora para el sorteo, siempre que la diligencia se practique sin la asistencia de la parte no notificada, y que sea ésta quien alegue la nulidad;

"2.ª Haberse reemplazado indebidamente en el acto del sorteo á alguno de los designados, ó no haberlos reemplazado, si era el caso de hacerlo; pero en ambos casos es necesario que la parte que alega la nulidad haya reclamado de la resolución del Juez, sobre el asunto, en el acto del sorteo;

"4.ª Haberse incurrido en el acto del sorteo en alguna equivocación tal, que no pueda saberse cuáles eran los designados que realmente debían formar el Jurado; ó haberse omitido en la misma, cualquiera formalidad de las que la ley señala, siempre que en este último caso se haya hecho la correspondiente reclamación por alguna de las partes, al tiempo de verificarse el acto y que sea ella quien alega la nulidad."

Respecto de la primera de estas causas de nulidad, se nota desde luégo que, aunque el defensor Olano no fué notificado del auto en que se señaló día para el sorteo, sí resulta de la misma diligencia que ella se practicó con su asistencia, de lo cual dan fe el Juez y el Secretario; y no puede alegarse lo contrario, porque esa diligencia no aparezca firmada por Olano, supuesto que para las partes que concurran á ella, no es obligatorio el firmarlas, como lo dice el artículo 279 de la Ley 57 arriba citada. Conforme á esta disposición la diligencia del sorteo debe firmarse por el Juez y el Secretario y por las partes que quieran hacerlo; de manera que bien puede aparecer firmada solamente por los dos funcionarios para que ella preste completa fe. Tampoco se alegó esa causa de nulidad por el mismo Olano, única persona que tenía derecho de alegarla.

La segunda causa de nulidad tampoco ocurrió en el sorteo, porque en él no se reemplazó indebidamente á ninguno de los designados, ni hubo necesidad de reemplazar á ninguno de ellos; y sobre todo, para que esa causa existiera habría sido necesario que la parte que alegara la nulidad, hubiese reclamado de la resolución del Juez sobre el asunto, en el acto del sorteo.

Menos existe la cuarta causa de nulidad que señala la ley, por el derecho de que el defensor Olano recusase sólo dos de los designados, porque eso no dió lugar á equivocación tal que no pudiera saberse cuáles eran los designados que debían formar el Jurado; de la diligencia del sorteo, aparece que se sortearon diez y nueve bolas, igual al número de designados que podían recusar los acusados y el Fiscal; éste recusó ocho, igual número recusaron los dos defensores de los reos, y los tres que quedaron compusieron el Jurado. Pero, sobre todo, aparece de la diligencia, que ninguna de las partes hizo reclamación alguna en el acto del sorteo, y esta circunstancia es indispensable para que exista esa causa de nulidad.

Suponiendo, sin embargo, que realmente existieran las causas de nulidad que se dejan apuntadas, ¿son éstas las determinadas en el numeral 3.° del artículo 370 de la Ley 105 de 1890 para el efecto de que constituyan causal de casación? Este artículo dice: "En materia criminal las causales que dan derecho á interponer el recurso de casación son éstas: 3.ª Haberse incurrido en las causas de nulidad designadas con los ordinales 1.°, 3.°, 4.°, 5.°, 6.° y 7.° del artículo 264 de la Ley 57 de 1887." Mas como las causas de nulidad alegadas por el señor Procurador y por el defensor, son las designadas en el artículo 265 de la Ley 57, es claro que aunque ellas existieran no podrían alegarse ante la Corte como causales de casación. Las causas de nulidad de que habla el último de los artículos dichos pueden dar lugar á la reposición del proceso, conforme á los artículos 267 y 268 de dicha ley, bien ordenándola de oficio el Juez de la causa, ó el respectivo Tribunal, en caso de apelación.

Hacen notar también el señor Procurador y el defensor que las resoluciones del Jurado no aparecen firmadas por el Juez y el Secretario, como lo exigía la parte final del artículo 308 de la Ley 57 de 1887, vigente en la fecha del veredicto, es decir, que las referidas firmas, aunque aparecen al pie del veredicto no están después de las de los miembros del Jurado. Tal irregularidad no tiene la gravedad que quiere atribuírsele, porque si las firmas del Juez y el Secretario son las que dán autenticidad al veredicto, basta que aparezcan al pie de éste para que no pudiera dudarse de su autenticidad, aunque no estén colocadas las últimas. Otra cosa sería si al pie del veredicto no apareciesen las firmas de los Jurados, porque aun vigente la disposición del expresado artículo 308, no se encuentra ni en la misma Ley 57, que la omisión de las firmas que él ordenaba poner al pie del veredicto fuese causa de nulidad que diera lugar á la reposición del proceso; al contrario, el artículo 266 dice: "Fuera de los casos previstos en los dos artículos anteriores (264 y 265 que señalan las causas de nulidad), no puede ordenarse la reposición del proceso, cualesquiera que sean las omisiones ó irregularidades que en él se noten." Para cuando ocurre esa omisión, el artículo 310 dispone que el Juez ó Tribunal, en su caso, convoquen de nuevo al Jurado para que llene la formalidad de suscribir el veredicto, y solamente cuando eso no puede verificarse por impedimento, excusa ó ausencia de alguno de los Jurados que debieran firmarlo, se anula la causa respecto de los cargos y se sortea nuevo Jurado, conforme al artículo 311. Esto prueba que no es el orden de colocación de las firmas lo que puede dar lugar á la nulidad del veredicto, sino el hecho de que él no aparezca suscrito por los Jurados; y para la Corte es indudable que si tal irregularidad hubiera existido, ni el Juez ni el Tribunal la habrían dejado pasar inadvertida. Por consiguiente, no encuentra esta Superioridad, que la irregularidad apuntada constituya violación de ley sustantiva que dé lugar á la casación.

En cuanto á la tercera causal de casación, que consiste en haberse incurrido, en las causas de nulidad designadas en los ordinales 1.°, 3.°, 4.°, 5.°, 6.° y 7.° del artículo 264 de la Ley 57 de 1887, ni se ha alegado por las partes, ni del examen hecho por la Corte aparece la omisión de alguna de las formalidades que tales ordinales prescriben.

En mérito de lo expuesto, y no encontrando la Corte justificada ninguna causal de casación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que no es el caso de infirmar el fallo materia del recurso.

Pásese el expediente al señor Ministro de Justicia, para los efectos del artículo 119 de la Constitución.

Notifíquese, cópiese y publíquese en la *Gaceta Judicial*.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO.
Gabriel Rosas, Secretario.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintiuno de Agosto de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: En la reclamación instaurada por Marcelino Torrente, ante la Comisión creada por la Ley 44 de 1886, sobre suministros, empréstitos y expropiaciones, la referida Comisión dictó en siete de Noviembre del año próximo pasado, la resolución señalada con el número 4,542, por la cual absolvió al Tesoro nacional del pago de la cantidad de ciento cincuenta pesos ($ 150), como valor de una caja de instrumentos de carpintería de propiedad del reclamante, que asegura le fué expropiada por los revolucionarios que asediaron la plaza de Cartagena en el año de 1885. Como dicha resolución fué apro-

bada por la del Ministerio del Tesoro, dictada en veintiuno de Abril último, el apoderado de Torrente interpuso apelación, que le fué concedida para ante esta Superioridad.

Sustanciado debidamente el recurso, la Corte pasa á resolverlo, y para ello considera:

Que los testigos Ángel María Cáceres, Pedro A. Díaz y Pedro Rodríguez, que declararon el año de 1886 ante el Juez 1.° de la Provincia de Cartagena, con asistencia del respectivo Agente del Ministerio Público, aunque afirmaron que les constaba que Torrente tenía en su casa de habitación—situada en el Distrito municipal del Pie de la Popa, inmediatamente antes de aproximarse las tropas revolucionarias comandadas por Ricardo Gaitán O. á la ciudad de Cartagena; casa que dicho Torrente tuvo que abandonar al instante, dejando en ella la caja que contenía las herramientas—dichos testigos no pudieron asegurar de ciencia cierta, que hubieran presenciado la expropiación de tales objetos, sino que presumían que en aquellas circunstancias sólo pudo desaparecer la caja, por haberse apoderado de ella las fuerzas sitiadoras;

Que suponiendo que la caja que contenía las herramientas de carpintería cuyo valor se reclama, hubiera sido tomada sin formalidad alguna por los soldados de Gaitán, no habiéndose acreditado que Marcelino Torrente hubiera sido en el curso de la guerra de 1884 y 1885, partidario ó sostenedor del Gobierno nacional, sino que apenas ha comprobado haber observado durante esa época una conducta pacífica, no está en el caso de ser indemnizado de tal exacción, al tenor de lo dispuesto en la Ley 44 de 1886; pues yá la Corte tiene adoptada y ha aplicado en casos análogos, la doctrina de que sólo á los partidarios y sostenedores del Gobierno se indemnice el valor de las expropiaciones que contra ellos se hayan verificado, y la misma doctrina debe aplicarse en la presente reclamación.

De acuerdo con el dictamen del Fiscal especial, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la resolución apelada y absuelve á la Nación del cargo que se le dedujo en la demanda.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO. — ANÍBAL GALINDO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, Agosto veintiuno de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Con poder especial de Quiteria Campo, vecina de Julumito, en la Provincia de Popayán, se presentó Manuel Paz V. al despacho de la Corte, por memorial de 21 de Enero del año en curso, y solicitó para su podataria la recompensa militar de setecientos sesenta y ocho pesos ($ 768), como viuda de Andrés Mosquera, por haber muerto éste en defensa del Gobierno legítimo en el combate que se libró en "La Cuchilla del Tambo," el 19 de Noviembre de 1876.

Para justificar esta pretensión se han exhibido, de acuerdo con lo que sobre la materia previene la Ley 84 de 1890, los siguientes comprobantes:

1.° Una información de testigos para acreditar el matrimonio de la Campo con Mosquera, á falta de la partida respectiva que el Cura-párroco de la Catedral de Popayán certifica no haberse encontrado en los libros de la extinguida parroquia de Julumito. Con esta información, se establece de una manera plena el estado civil de que se trata, pues los testigos afirman que los dos individuos nombrados fueron casados legítimamente conforme á los ritos de la Iglesia Católica;

2.° *La muerte de Mosquera, acaecida en el combate* expresado, y de la cual dan testimonio varios de sus compañeros de armas, quienes también afirman que desempeñaba el empleo militar de Cabo 1.° de una Compañía;

3.° La correspondiente información de testigos para comprobar la viudez y buena conducta de la solicitante y que es pobre;

4.° La renuncia que de sus derechos hacen en favor de la Campo, los dos únicos hijos sobrevivientes habidos en el matrimonio de Mosquera;

5.° Certificación del señor Ministro del Tesoro de que Quiteria Campo y los citados deudos del Cabo Mosquera, no figuran en la lista de pensionados de la República, y de que no hay constancia de que hayan recibido recompensa del Tesoro nacional por razón de la muerte de su causante en la guerra civil de 1876.

Siendo, pues, estos hechos los que exige el artículo 47 de ley al principio citada, para optar la recompensa que se pretende, y estando ellos debidamente comprobados, la Corte, de acuerdo con el dictamen favorable del señor Procurador general y con lo dispuesto en la causal segunda del artículo 5.° de la ley citada, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que Quiteria Campo tiene derecho á percibir del Tesoro público la recompensa unitaria definitiva de setecientos sesenta y ocho pesos ($ 768), suma igual al monto ó alcance del sueldo íntegro de su esposo en cuatro años.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y dése cuenta al Ministerio del Tesoro.

LUCIO A. POMBO. — LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Agosto veintidós de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Emigdio Hidalgo, que revestía el empleo de Sargento Mayor en las fuerzas que combatían en la Cuchilla del Tambo el veintinueve de Noviembre de mil ochocientos setenta y seis, en defensa de los principios que sirven de base á las actuales instituciones, fué allí gravemente herido, y en la noche de ese mismo día ó al amanecer del siguiente, asesinado por los que lo tomaron prisionero á inmediaciones del mismo campo de batalla.

Este hecho está plenamente comprobado en autos, con las declaraciones de más de diez testigos contestes é idóneos que lo afirman, unos, los compañeros de armas de Hidalgo, como testigos presenciales, y otros, de pública notoriedad.

A falta de toda prueba oficial sobre el empleo y grado militar que Hidalgo revestía en aquella fuerza y de que no pudo quedar constancia en ningún archivo público por su carácter de beligerante rebelde contra el Gobierno establecido en la República, el cual, además, salió vencedor en la contienda, se ha presentado el certificado del Secretario de Gobierno del Cauca, corriente al folio 2 vuelto, que atestigua la carencia de dicha constancia y las mismas declaraciones de los testigos que aseveran la muerte, y que afirman que Hidalgo combatió en la Cuchilla del Tambo en el empleo de Sargento Mayor.

Con estos fundamentos demanda Dolores Astudillo, en su carácter de legítima viuda de Hidalgo, la recompensa unitaria definitiva á que se cree con derecho conforme á la ley de la materia. Su personería la acredita con la copia de la correspondiente partida de matrimonio con Hidalgo, celebrado conforme al rito católico en el sitio de Seguengue, parroquia del Tambo, el diez de Abril de mil ochocientos sesenta y cinco, inserta en el certificado del Cura de dicha parroquia, que obraba al folio 3 y hoy al folio 41, por haber sido desglosada de aquel lugar para su autenticación ó legalización, por auto de la Corte de treinta y uno de Mayo próximo pasado, folio 4.

Con prueba testimonial suficiente se ha acreditado también, que de aquel matrimonio sólo nacieron dos hijas, llamadas María Josefa y María Ignacia, las cuales existen casadas, como lo comprueban las partidas de sus respectivos matrimonios, corrientes al folio 19.

La buena conducta de la peticionaria, su estado de viudez y su falta de medios de subsistencia, están igual y plenamente comprobados en autos.

Finalmente, corre al folio 41 el certificado del Ministerio del Tesoro, aseverando que la peticionaria ni figura en la lista de pensionados de la República, ni ha recibido recompensa alguna por la causal materia del presente juicio, por lo

cual el señor Procurador general en sus dos razonadas vistas, de folios 31 y 39, coadyuba su solicitud.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que Dolores Astudillo, en su carácter de legítima viuda del Sargento Mayor Emigdio Hidalgo, muerto en defensa de los principios políticos que sirven de base á las actuales instituciones, tiene derecho á recibir del Tesoro nacional la suma de tres mil ochocientos cuarenta pesos ($ 3,840), equivalente al sueldo de un Sargento Mayor en cuatro años, como recompensa unitaria definitiva, de acuerdo con el derecho que le otorgan los artículos 1.°, 5.° (ordinal 2,°), 9.° y 11 de la Ley 84 de 1890.

Notifíquese, cópiese, publíquese y comuníquese al Ministerio del Tesoro para su cumplimiento.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, veintidós de Agosto de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Rufino Gutiérrez, en su carácter de apoderado sustituto de José María Cano, se presentó á la Comisión de suministros, por memorial de diez de Octubre de mil ochocientos ochenta y siete, apoyado en la respectiva información de nudo hecho, pues otra prueba no podía exhibir, pidiendo, son sus propias palabras, "que os sirváis reconocer á cargo del Tesoro nacional y á favor de mi poderdante, la cantidad de doscientos cincuenta pesos ($ 250), valor *de las legumbres y pastos* que tenía en el solar de su propiedad llamado "Portobelo," situado en la calle de este nombre en la ciudad de Cartagena, y que fueron destruídos por las caballerías de la División al mando del General Mateus al llegar á la ciudad expresada, las cuales fueron depositadas en el solar de mi poderdante."

Basta la anterior literal trascripción del fundamento de la demanda, para comprender la razón con que ella fué desechada por la Comisión y por el Ministerio del Tesoro, de acuerdo con el dictamen del Fiscal, la primera en su resolución número 4,569 de veintiuno de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos, y el segundo en la suya número 3,469 de veintiuno de Abril último, que ha venido en apelación á esta Superioridad.

Ha sido punto resuelto por la Comisión y por la Corte, que ninguna de las leyes de la materia, de acuerdo con los principios del derecho público universal, han autorizado el reconocimiento de daños y perjuicios causados por las operaciones de la guerra, ó los movimientos de los ejércitos beligerantes, los cuales están, como tantas veces se ha dicho, equiparados á los males físicos de un incendio, un terremoto, una inundación etc. etc. Para pagarlos sería preciso hacer después de cada guerra una nueva distribución de la fortuna pública por medio del impuesto.

Por tanto, y de acuerdo en todo con la juiciosa vista del señor Fiscal de la Comisión de diez de Julio próximo pasado, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la resolución apelada.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, veintidós de Agosto de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1892 del Código Judicial, se ha remitido á la Corte, en consulta, la sentencia que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia pronunció el día dos de Mayo último, por medio de la cual condenó á Indalecio Betancourt, Fiscal del Circuito de Frontino, por infracción del artículo 268 del Código Penal, á pagar, en calidad de multa, al Tesoro de la República, la suma de quince pesos treinta y cinco centavos ($ 15-35) y á satisfacer las costas procesales.

La consulta se ha sustanciado como lo previene la ley, y siendo yá la ocasión de fallarla, para ello se considera lo siguiente:

En una audiencia pública que tuvo lugar en el Juzgado del Circuito de Frontino, en causa seguida contra Juan Bautista Álvarez, el Fiscal Betancourt, al replicar al defensor del procesado, Elías Peláez Calderón, hizo uso de palabras ofensivas contra este último, incurriendo así en el delito que define uno de los artículos del capítulo primero, libro segundo, título cuarto del Código Penal, razón por la cual el Tribunal le llamó á juicio extraordinario, por auto de fecha cuatro de Febrero último, y después, observadas todas las formalidades propias del juicio, le condenó, como se ha dicho, á pagar una multa de quince pesos treinta y cinco centavos ($ 15-35), calificando para ello el delito en segundo grado, por haber ocurrido en él algunas circunstancias agravantes y otras atenuantes, y deduciendo del término medio entre el *mínimum* de tres y el *máximum* de cuarenta pesos señalados como pena de multa por el artículo 268 del Código Penal, la sexta parte de la diferencia, todo de conformidad con los artículos 117, 118, 123 y 124 ibidem, y además al pago de las costas procesales, como lo previene el artículo 86.

Ahora bien, el hecho que sirvió de fundamento á la sentencia consultada, está plenamente probado, no sólo por los certificados del Juez y el Secretario del Circuito de Frontino y las copias agregadas al expediente, sino también por la confesión de Betancourt. Igualmente acreditado está el carácter público del mismo Betancourt. Y no habiendo observaciones que se puedan hacer contra los razonamientos del Tribunal en el fallo que se examina, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el parecer del señor Procurador, confirma la sentencia consultada.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES, ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintidós de Febrero de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: El Administrador municipal de Hacienda nacional de Buriticá (Departamento de Antioquia), ha remitido en apelación un auto ejecutivo, de fecha veintiocho de Septiembre de mil ochocientos noventa y uno, dictado contra Marco A. Arenas, para que pague un peso de multa que le impuso el Prefecto de la Provincia de Occidente del mismo Departamento de Antioquia, por haber extendido en papel común un certificado que dió en compañía de otros con el carácter de Concejero municipal.

Oído el concepto del señor Procurador y fijado en lista el negocio se procede á fallarlo.

Para hacer efectivas las multas impuestas por los funcionarios públicos y que tienen carácter correccional, no se hace uso del juicio ejecutivo, atendido lo que dicen los artículos 218 del Código de Organización Judicial y 82 del Código Penal, porque de lo contrario perderían dichas multas su eficacia y el carácter de pena que revisten. La Corte, consecuente con esas ideas, ha resuelto en repetidas ocasiones que los Recaudadores deben limitarse, en casos como el presente, á recibir el valor de la multa si se entrega voluntariamente, y si no se consigna, á dar aviso al empleado que la impuso para que haga la respectiva conversión en arresto.

En mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el concepto del señor Procurador, se revoca el auto ape-

lado y se ordena al Administrador de Hacienda nacional de Buriticá que observe la línea de conducta antes indicada.

Notifíquese, cópiese, y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Febrero veinticuatro de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: El Administrador municipal de Hacienda nacional de Riosucio ha remitido este expediente á la Corte, por haber concedido para ante ella á Ramón Hoyos, Nicolás y Ulpiano Quintero V., recurso de apelación contra las resoluciones del Juez del crimen del Circuito de Toro, por las cuales se declaró incurso en la multa de ocho pesos á cada uno de los apelantes, por no haber concurrido, el primero como Prefecto, y el segundo como Secretario de la Prefectura, á la visita de cárcel que dicho Juez practicó el dos de Julio del año próximo pasado, y por igual falta de asistencia del tercero como Fiscal del Circuito, á la visita del diez y ocho de Junio del mismo año.

La Corte juzga que en el caso de imposición de multas por vía de apremio ó de pena correccional como las de que aquí se trata, no queda á los multados otro remedio que el de reclamar contra ella ante el Juez que la decretó, conforme á la disposición del Código Judicial que cita en su anterior vista el Procurador general, la cual debe observarse por analogía, á falta de reglas especialmente aplicables, según el artículo 2021 de dicho Código, en cuanto lo permita el asunto, por lo que de acuerdo en un todo con el parecer fiscal, esta Superioridad se declara incompetente para conocer de la apelación indebidamente concedida por el empleado recaudador supracitado, y dispone que se devuelvan á éste las presentes diligencias.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—LUCAS VILLAFRÁDEZ. *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, ocho de Agosto de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Por memorial de veintiuno de Julio último, se dirigió Alejandro Lince P. á esta Suprema Corte, manifestando que interponía los recursos de queja y de hecho contra una decisión de la Oficina general Cuentas, en la que, según el postulante, se declaró que no tenía personería para representar como apoderado á Pedro Pablo González V., en un juicio de cuentas que se sigue contra éste en aquella Oficina. Al terminar dicho memorial, expresó que se limitaba al recurso de hecho y desistía del de queja, por lo cual la Corte dispuso señalar el día treinta y uno del mes citado, á los dos p. m., para que las partes pudieran alegar por escrito ú oralmente, de acuerdo con el artículo 904 del Código Judicial.

Llegado el día señalado para la audiencia, el recurrente no se presentó á usar de su derecho á la hora designada, como lo informa el Secretario; y aunque solicita que se haga nuevo señalamiento, por haber ocurrido antes que trascurriese el tiempo hábil para practicar esta diligencia, la Corte no lo estima necesario para dar vado al asunto; y, en consecuencia, procede á verificarlo en fuerza de las siguientes razones legales;

Conforme al artículo 905 del Código Judicial, para admitir un recurso de hecho debe examinarse: 1.° si la providencia *sobre que versa es apelable*; 2.° si fué apelada en tiempo; 3.° si en tiempo también se ha introducido el recurso, y 4.° si el negocio es de carácter nacional por el interés de la Nación en él. Por la falta de cualquiera de las circunstancias enumeradas en este artículo, el recurso será negado.

Ahora, como el recurrente no ha acompañado la copia debidamente autorizada de la resolución apelada, de la diligencia de su notificación, del escrito por medio del cual se interpuso la apelación, y del auto en que se negó, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 809 del mismo Código, no hay materia sobre la cual pueda recaer una decisión judicial que admita ó niegue el recurso de que se trata. Ni es el caso de pedir de oficio los antecedentes del asunto, para formar juicio acerca de él, porque esta facultad sólo la concede la ley cuando la copia es deficiente y faltan algunos de esos antecedentes y no todos (artículo 906, Código Judicial).

En mérito de estas consideraciones, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara inadmisible el recurso de hecho intentado por Alejandro Lince P. contra una decisión de la Oficina general de Cuentas, y dispone que se archive el expediente.

Notifíquese, cópiese é insértese en la *Gaceta Judicial*.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, ocho de Agosto de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Seguida ejecución ante el Juez 2.° del Circuito de Bogotá por el Gerente de la Compañía denominada "Banco Popular," contra Fernando y Rómulo Sánchez, por la suma de veintitrés mil doscientos setenta y seis pesos quince centavos ($ 23,276-15), acumulóse al juicio, con el carácter de tercería coadyuvante, otra demanda de la misma clase que por separado llevaba Elías Gómez Cáceres contra Abraham y Fernando Sánchez, por la suma de mil pesos ($ 1,000). Antes se había admitido yá la tercería excluyente que el mismo Abraham Sánchez introdujo, reclamando, con acción de dominio, varios de los inmuebles hipotecados á favor del Banco Popular y de Gómez Cáceres. Establecido así el debate, el Juez de la causa, después de surtidas todas las solemnidades del juicio ejecutivo, pronunció su sentencia definitiva de diez y ocho de Abril de mil ochocientos noventa y uno, por la cual resolvió: 1.° que no estaba probada la tercería excluyente de Abraham Sánchez; 2.° que sí lo estaba la coadyuvante de Elías Gómez Cáceres, y 3.° que se adelantara el remate de los bienes embargados para que, con su producto, se pagaran los créditos, materia del juicio, en el orden que allí se establece.

Apelada esta sentencia por el tercerista excluyente Abraham Sánchez, y surtida la instancia por todos sus trámites ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, éste pronunció su fallo definitivo, de veinticuatro de Septiembre de mil ochocientos noventa y dos, confirmando en todas sus partes la sentencia apelada, con sólo la advertencia, agrega, de que lo dicho en ella respecto del crédito que cobraba el tercerista coadyuvante Elías Gómez Cáceres, debe entenderse hoy dicho del Banco Popular, quien se subrogó en los derechos de aquél.

El tercerista excluyente desechado, Abraham Sánchez, interpuso en tiempo hábil recurso de casación contra dicha sentencia por escrito de veintitrés de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos, folio 24, el cual le fué concedido por auto del Tribunal, de la misma fecha. Pero ni en aquel escrito, ni durante el traslado que se le confirió en esta Corte, por auto de veinticinco de Febrero último, designó la parte recurrente la causal ó causales en que fundaba el recurso, como lo exigía el artículo 377 de la Ley 105 de 1890; y aun que la parte contraria, la del Banco Popular, promovió articulación, para que por esta falta se declarara desierto el recurso, la Corte, por auto de diez de Abril último, no accedió á la solicitud, fundándose en que dicho artículo 377 había sido nominalmente derogado por el artículo 87 de la Ley 100 de 1892; pero expresando en dicho auto, que la Corte, antes de pronunciar sentencia, decidiría el punto en cuestión, ó sea el de saber si hay materia sobre la cual recaiga el fallo de una casación, de acuerdo con los artículos 381 de la Ley 105 de 1890, y 59 de la Ley 100 de 1892, entra, pues, á decidirlo.

El artículo 377 de la Ley 105 tantas veces citado, fijaba el término fatal de seis días para que la parte recurrente designara por escrito la causal ó causales en que fundaba el recurso de casación, so pena de que la Corte, á petición de parte, lo declarara desierto. Aunque este artículo fué comprendido

entre los derogados por el 87 de la Ley 100 de 1892, además de que él fué reemplazado por el 55 de dicha ley, en el cual se amplió á diez días el término para designar las causales, el 59 de la misma ley, al ordenar que la Corte en la decisión que pronuncia, examine con la debida separación, cada una de las causales en que se funda el recurso, demuestra la necesidad legal de designarlas; sin esta designación no habría materia jurídica que sirviera de base á un fallo de casación. Con efecto, dicho artículo 59 dice así:

"Art. 59. La Corte, en la decisión que pronuncie, examinará con la debida separación, cada una de las causales en que se funda el recurso, y cada uno de los motivos en que se apoye cada causal. Si encontrare justificada una causal de casación, no será necesario que éntre en consideraciones acerca de las otras causales alegadas, con sólo el fin de reforzar la invalidación del fallo, la que habrá de proceder de la causal justificada. Si no encontrare justificada ninguna causal, declarará que no es el caso de infirmar el fallo materia del recurso, y devolverá el expediente al Tribunal de su origen."

Por tanto, no habiendo causal ninguna que examinar, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que no ha lugar á admitir el recurso de casación interpuesto por la parte de Abraham Sánchez contra la sentencia definitiva pronunciada por el Tribunal Superior de Cundinamarca, con fecha veinticuatro de Septiembre de mil ochocientos noventa y dos, confirmatoria, en todas sus partes, de la de primera instancia de diez y ocho de Abril de mil ochocientos noventa y uno, de que prolijamente se ha hecho referencia.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Baltasar Botero Uribe.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales. Abraham Fernández de Soto.—Aníbal Galindo.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez y siete de Agosto de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, envió á la Corte el juicio ordinario seguido por Froilán Vega O. contra Eugenio González Benito y Francisco Noguera, sobre nulidad del remate de un terreno y otros puntos, en el cual dicho Tribunal pronunció, en veinticuatro de Noviembre último, su sentencia definitiva, contra la que interpuso la parte de Vega O. recurso de casación, que se le concedió mediante auto de veinticuatro de Mayo del presente año.

La Corte ha sustanciado el recurso en la forma prevenida en las leyes de la materia; pero antes de pronunciar sentencia, debe por precepto terminante del artículo 381 de la Ley 105 de 1890, examinar, entre otras cosas, si se interpuso oportunamente, porque si se hubiese interpuesto fuera del término legal, es deber suyo limitarse á negar la admisión de él.

De tal examen resulta lo siguiente:

Según la nota certificada que aparece al folio 42 vuelto del cuaderno 4.°, la sentencia que es objeto de la casación intentada, quedó notificada el día quince de Febrero del presente año, á las ocho de la mañana, y el expediente se devolvió al Juzgado de primera instancia, el día veintidós de Marzo siguiente, como lo comprueban la nota remisoria y la constancia que figuran en el folio 43. Del quince de Febrero al veintidós de Marzo siguiente pasaron los treinta días durante los cuales podían las partes interponer el recurso, según los artículos 372 y 373 de allí; pero el apoderado de Vega O., doctor Fernando Cortés Monroy, alegó ante el Tribunal que ese término no espiraba sino á las doce de la noche de la segunda de las dos fechas mencionadas, y solicitó que se pidiese el expediente al Juzgado para que se completara en el Tribunal el término por el cual debía permanecer allí para que las partes pudieran hacer uso de sus derechos.

El Tribunal pidió en efecto el proceso al Juzgado, y al folio 50 hay constancia de que en diez y nueve de Mayo se recibió nuevamente en el Tribunal.

Ahora bien, si lo que faltaba según la afirmación del interesado para que se completara el término de los treinta días de que habla el artículo 372 de la mencionada Ley 105, era una día, claro es que el término espiró el día veinte de Mayo; y como también hay constancia en el expediente (véase el folio 54 vuelto), de que el recurso no se interpuso sino hasta el día veintidós del propio mes, visto es que la interposición fué extemporánea.

Por lo demás, la Corte, no solamente tiene la facultad sino también el deber de negar la admisión de un recurso que se interpone inoportunamente, según lo previene el mencionado artículo 381.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, niega la admisión del presente recurso.

Notifíquese, cópiese, publíquese, insértese en la *Gaceta* y devuélvase el expediente al lugar de su procedencia.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Baltasar Botero Uribe.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Abraham Fernández de Soto.—Aníbal Galindo. *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez y nueve de Agosto de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Por escritura pública número 520, de fecha 19 de Noviembre de mil ochocientos ochenta y nueve, otorgada ante el Notario 1.° del Circuito de Notaría de Cali, vendió Manuel José Cobo, vecino del mismo Municipio, á Joaquín Rengifo Salazar, una finca rural llamada "La-Palestina," ubicada en el Distrito de Candelaria, Departamento del Cauca. La escritura se otorgó, contando con que el respectivo Administrador principal de Hacienda de la Provincia expediría la correspondiente boleta que acreditara el pago del derecho de registro; pero el mencionado empleado se negó á expedirla con el objeto de estorbar ó detener la consumación del contrato, porque al propio tiempo iba á librar auto de embargo del mismo inmueble en una ejecución seguida contra Cobo, como deudor á las rentas públicas. Aunque el Notario expidió la copia de la escritura, como en ella se hacía constar que no se había presentado la boleta correspondiente al pago del derecho de registro, dicha escritura no pudo ser registrada, y como hubieran sido infructuosas todas las reclamaciones que los otorgantes dirigieron á las autoridades políticas para que se obligara al Administrador de Hacienda á expedir y entregar la boleta, el comprador Rengifo Salazar ocurrió á la vía judicial demandando, en vía ordinaria, ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Pacífico, al Gobierno del Departamento del Cauca, para que se le declare obligado á hacerle expedir por el Administrador de Hacienda que de aquel Gobierno depende, la boleta de registro correspondiente á la escritura en referencia, y para que, en consecuencia, se desembargue dicha finca, por no pertenecer yá al deudor Cobo sino al demandante, y fijó la cuantía ó valor del pleito en la suma de nueve mil pesos ($ 9,000).

Pero el Tribunal, fundándose en la regla segunda del artículo 78 del Código de Organización Judicial (Ley 147 de 1888), por auto de 29 de Mayo próximo pasado, se declaró incompetente para conocer del juicio, declarando que éste correspondía al Tribunal del Distrito Judicial de Popayán, capital del Departamento. El actor solicitó revocación de dicho auto, que le fué negada, y concedido el recurso de apelación que en el mismo escrito interpuso para ante esta Superioridad, previa la tramitación del caso, se procede á decidirla.

El mencionado artículo 78 del Código de Organización Judicial es del tenor siguiente:

"Art. 78. Cuando ocurra un negocio cuyo conocimiento esté atribuído á un Tribunal Superior de Distrito Judicial, y hubiere duda acerca del Tribunal que debe conocer, se observarán estas reglas:

"1.°.....

"2.ª Si se trata de negocio civil que afecte á un Departamento, será competente el Tribunal que resida en la capital del mismo. Este Tribunal es también el competente para conocer de la solicitud sobre suspensión de una Ordenanza departamental."

El sentido jurídico de esta disposición, por lo que respecta á negocios civiles, quedó fijado por la Corte en el auto interlocutorio de 15 de Abril de 1890, inserto en la *Gaceta Judicial* número 205, por medio del cual se dirimió la competencia suscitada entre los Tribunales de Popayán y Pasto, con motivo de una demanda por suma de pesos, entablada por Ramón Moncayo contra el Departamento del Cauca. Allí se dijo: "Es claro, pues, que después de la vigencia del Código de Organización Judicial, el Tribunal residente en la capital de un Departamento conoce con inhibición de los otros Tribunales, de las demandas entre el Departamento y los particulares."

Por estas consideraciones, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo en todo con el concepto del señor Procurador general, confirma en todas sus partes el auto apelado de que queda hecha referencia, materia del presente recurso.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ÍSAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Agosto diez y seis de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Por memorial dirigido al Fiscal del Tribunal del Distrito Judicial del Norte, en el Departamento de Santander, con fecha veintiocho de Julio de mil ochocientos noventa, denunció Cándido Cote al Fiscal del Circuito de Chinácota, José del Carmen Hernández Blanco, por el delito de prevaricato que define y castiga el artículo 357 del Código Penal en vigor; y en comprobación de su relato, acompañó la información sumaria de los testigos Josefa Vega de Parada y Juan María Parada, recibida ante el Juez municipal del Distrito del mismo nombre, en la cual afirman éstos que Hernández Blanco se obligó á hacer pagar á la primera del segundo, la suma de cuatrocientos pesos ($ 400), para que no siguiera un denuncio contra Parada por amancebamiento, y que al efecto éste dió los cuatrocientos pesos en moneda de plata, y de ellos tomó Hernández para sí cien pesos, por el arreglo en que había intervenido. Adelantada la investigación y perfeccionada con la práctica de algunas diligencias que se creyeron pertinentes al descubrimiento del hecho incriminado, entre ellas la relativa al carácter oficial del sindicado, se dictó por el Tribunal de aquel Distrito Judicial el auto de trece de Junio del año en curso, visible de folios 64 á 67 del cuaderno principal, en el que se sobresee en el procedimiento y se declara, en consecuencia, que no hay lugar á proceder contra el referido Fiscal por el cargo que ha sido materia del sumario.

Consultada esta providencia con la Corte Suprema y dada al asunto la tramitación legal correspondiente, previo el dictamen del señor Procurador general en que solicita la confirmación de tal providencia, se procede á resolver lo que sea *arreglado á derecho.*

Fúndase el Tribunal en que no existe la demostración ó prueba completa del delito denunciado ni de la culpabilidad de Hernández Blanco, pues que los dos únicos testigos de que se ha hablado están en desacuerdo en lo principal de sus afirmaciones. El señor Procurador general acoge también este concepto en apoyo de la resolución consultada, y asevera, además, que hay en los autos motivos para juzgar que el denuncio fué dado por un sentimiento de venganza, á causa de haber sido depuesto Cote del destino de Fiscal del Circuito de Chinácota y reemplazado en él por Hernández, según lo afirma éste en su declaración indagatoria.

Sin anticipar la Corte juicio alguno sobre estos puntos, por no creer llegado el caso de hacerlo, estima que no habiéndose practicado aún todas las diligencias para comprobar el cuerpo del delito y la responsabilidad del culpable, ó en otros términos, que no estando aún agotada la investigación, debe completarse ésta para darle estricto cumplimiento al artículo 1628 del Código Judicial. En efecto, de la información sumaria aparece que el Fiscal acusado sí intervino en una transacción que celebraron los esposos Paradas; y aunque él asegura que lo hizo antes de ejercer las funciones de su empleo, es lo cierto que eso tuvo lugar en el mes de Julio de 1890, y de la diligencia de posesión resulta que se encargó del destino desde el treinta de Mayo de dicho año, y que lo ejerció precisamente en el mes de Julio en que se verificó el arreglo, ó transacción relacionada, y en la cual intervino, recibiendo por ello una cuota parte de la cantidad estipulada para celebrarla.

Ahora, siendo terminante la prohibición que tienen los empleados públicos para gestionar ó patrocinar directa ni indirectamente reclamaciones particulares, máxime cuando tienen alguna intervención en ellas, como la tenía el Fiscal en el sumario por amancebamiento íntimamente conexionado con el juicio sobre simple separación de bienes, promovido por la esposa de Parada, por consejo del Fiscal Hernández; y no sabiéndose, por otra parte, el resultado que tuviera este sumario, ni la vista fiscal que diera en él el sindicado, es indispensable averiguarlo para poder apreciar su conducta pública en el asunto, ya que de la única que se ha agregado en copia, á los folios 29, 30, 31 y 32, se descubre cierto interés en demostrar la inculpabilidad de los sindicados.

Debe, pues, agregarse copia de la resolución que recayera sobre el amancebamiento imputado á Juan María Parada y María Juana Cruz y de las exposiciones fiscales que emitiera Hernández Blanco en pro ó en en contra de éstos; y además, se hace preciso que los testigos Josefa Vega de Parada y Juan María Parada amplíen sus respectivas declaraciones en el sentido de determinar la fecha precisa en que aquélla celebró el convenio á que alude; si él tuvo por base la terminación del sumario que se instruía contra su esposo por amancebamiento y las gestiones que el Fiscal Hernández hiciera para conseguirlo.

Este debe también ampliar su indagatoria, para que explique la contradicción en que ha incurrido al afirmar que su intervención en el arreglo de que se ha hecho mérito tuvo lugar en Marzo ó Mayo de 1890, cuando él no era Fiscal, siendo así que de la copia de la demanda y de la acta relativa á la conciliación en el juicio sobre separación de bienes, aparece que se verificó en Julio de aquel año.

Por lo demás, conviene practicar todas las otras diligencias que el desarrollo de la investigación haga indispensables para dejar perfectamente esclarecidos los hechos y la conducta del empleado de quien se trata, ya sea respecto al delito de prevaricato que se le imputa, ó á la falta de cumplimiento á sus deberes.

Por lo tanto, la Corte, en desacuerdo con el señor Procurador general y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca el auto consultado que ha sido materia del presente examen, y dispone que se perfeccione el sumario con las diligencias que se han omitido y que se dejan puntualizadas.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente al Tribunal consultante.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO. — ANÍBAL GALINDO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

IMPRENTA DE ANTONIO M. SILVESTRE.
Director, Tomás Galarza.

REPÚBLICA DE COLOMBIA.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AÑO VIII | Bogotá, 20 de Septiembre de 1893. | NÚM. 415.

CONTENIDO.

Págs.

ACUERDOS.

Acuerdo número 774, que honra la memoria del señor doctor José Ignacio de Márquez..... 409

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Reconócese á favor de Manuel J. Alvarez, como cesionario de Eduardo Jaramillo A., Juan Olano y otros un crédito procedente de empréstitos. (Magistrado ponente, doctor Trujillo)..... 409
Reconócese, en parte, á favor de Lucio Londoño, un crédito procedente de expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas)..... 410
Reconócese, en parte, á favor de Adolfo Guerrero, un crédito procedente de expropiaciones. (Magistrado ponente, doctor Galindo) 410

NEGOCIOS CRIMINALES.

Condénase á Ramón Romero Rojas á pagar una multa, por abandono de su empleo de Administrador de las Salinas de Cumaral y Upín. (Magistrado ponente, doctor Corrales)..... 411

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Declárase la Corte incompetente para conocer del juicio seguido por Sinforoso Mancera, sobre amparo de pobreza. (Magistrado ponente, doctor Botero Uribe)..... 412
Declárase ejecutoriado un auto dictado por el Tribunal Superior del Norte de Santander en la ejecución seguida contra el Tesorero municipal de Arboledas, José Antonio Ortiz. (Magistrado ponente, doctor Galindo)..... 413
Confírmase el auto ejecutivo dictado por el Administrador de la Aduana de Barranquilla, contra López Olier & Compañía. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas)..... 413
Declárase que la Corte carece de jurisdicción para conocer de un juicio seguido por el Contador general del Departamento de Panamá contra Juan N. Aicardy. (Magistrado ponente, doctor Isaza)..... 413
Declárase probada una excepción propuesta por Juan E. Chamorro, en la ejecución que le sigue el Administrador de Hacienda de Obando. (Magistrado ponente, doctor Corrales)..... 413

NEGOCIOS VARIOS.

Ordénase la remisión de la solicitud del reo Hipólito Sánchez, sobre rebaja de pena, al Excelentísimo Señor Vicepresidente de la República. (Magistrado ponente, doctor Botero Uribe)..... 414
Ordénase la remisión de la solicitud del reo Timoteo Peñalosa, sobre rebaja de pena, al Excelentísimo Señor Vicepresidente de la República. (Magistrado ponente, doctor Casas Rojas)..... 414
Acta de la diligencia de visita practicada el 31 de Agosto en la Secretaría de la Corte.)..... 415

GACETA JUDICIAL.

ACUERDO NUMERO 774.

En Bogotá, á dos Septiembre de mil ochocientos noventa y tres, reunida la Corte Suprema de Justicia, con asistencia de todos los Magistrados y del infrascrito Secretario, con el objeto de honrar la memoria del esclarecido ciudadano doctor José Ignacio de Márquez, aprobó, por unanimidad de votos, el siguiente Acuerdo:

La Corte Suprema de Justicia de la República,

CONSIDERANDO:

1.° Que el doctor José Ignacio de Márquez, nacido en 1793, é incorporado en el foro granadino con el título de abogado en 1817, puso al servicio de la Independencia nacional, desde 1819, el fuego de su palabra y el poder de su vasta inteligencia;

2.° Que desde 1821, en que se le encuentra ya presidiendo el Congreso constituyente del Rosario de Cúcuta; que sobre la victoria de Carabobo constituyó la gran Colombia; recorrió después todas las cimas de la Magistratura civiles hasta llegar á la Presidencia de la República, dejando en todas ellas la huella luminosa de su talento y de su ilustración;

3.° Que con el mismo valor civil supo hacer frente á las usurpaciones del poder público, en 1830 y 1854;

4.° Que aún sirven de base á estas ramas de la legislación nacional los primeros Códigos de organización política y municipal y de enjuiciamiento civil y criminal de que él fué colaborador ó autor, y

5.° Que fué dos veces Magistrado de este Supremo Tribunal, en cuyos anales abundan las muestras de su sabiduría y de su ciencia,

ACUERDA:

Registrar hoy, fecha del primer centenario de su nacimiento, en los fastos del más alto Tribunal de Justicia de la República, el nombre del doctor José Ignacio de Márquez, como el del primer jurisconsulto del país, y el de uno de sus más esclarecidos Magistrados.

El Presidente, LUCIO A. POMBO.—El Vicepresidente, LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, Marzo dos de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Manuel J. Álvarez, cesionario de Eduardo Jaramillo A., Juan Olano, Santiago Echeverri, José Claudio Giraldo y de otros varios, ocurrió á la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, por medio de apoderado, para que se reconociera á su favor y á cargo del Tesoro nacional, la suma de seis mil seiscientos treinta y ocho pesos cuarenta centavos ($ 6,638-40), procedentes de empréstitos forzosos pagados por sus cedentes al Gobierno nacional en el Departamento de Antioquia, en mil ochocientos ochenta y cinco. La Comisión apenas reconoció la cantidad de dos mil setecientos noventa y tres pesos ($ 2,793), que estaba comprobada con recibos expedidos por el Agente Fiscal, Julio Betancourt, y negó el resto, por no estar autenticados los recibos exhibidos para acreditarlo. El Ministerio del Tesoro aprobó esa decisión el día ocho de Noviembre último, en resolución número tres mil trescientos veintiséis, que ha venido en apelación á esta Superioridad.

Corrido el correspondiente traslado al Fiscal de la Comisión, y fijado en lista el negocio, es llegado el caso de proferir el fallo respectivo.

La razón que tuvieron en cuenta tanto la Comisión como el Ministerio del Tesoro, para no reconocer sino parte de lo reclamado, es perfectamente jurídica, ya se consideren los empleados que recaudaron los empréstitos como subalternos

del Gobernador del Departamento de Antioquia, ó bien como funcionarios independientes de él; porque si es lo primero, entonces debieron cambiarse los recibos, de acuerdo con el artículo 4.° de la Ley 152 de 1887, por certificaciones expedidas por el Gobernador, y si lo segundo, establecerse plenamente la autenticidad de esos documentos, acreditando no solamente que quienes los expidieron eran funcionarios públicos que tenían facultad para ello, sino también que las firmas fueron puestas por los empleados que éstas mismas expresan. Y como ninguna de esas dos condiciones se llenó, es obvio que la Comisión y el Ministerio obraron con acierto.

Lo único que hay que rectificar en la providencia que es materia de examen, es que habiéndose querido reconocer todo lo que consta de los recibos firmados por el Agente Fiscal, Julio Betancourt, que están perfectamente autenticados, se dijo que eran solamente veinte, y que su importe apenas alcanzaba á dos mil setecientos noventa y tres pesos ($ 2,793), cuando son veintiún recibos y su valor asciende á dos mil novecientos cincuenta y tres pesos ($ 2,953), suma que es la que ha debido reconocerse.

La sentencia de esta Superioridad, que se encuentra publicada en el número 329 de la *Gaceta Judicial*, y que el apoderado de la parte apelante aduce en su favor, no se puede tener en cuenta en el presente caso, porque ella se refiere á exacciones que tuvieron lugar en 1876, que para ser probadas se atiende á disposiciones legales distintas de las que rigen en materia de suministros, empréstitos y expropiaciones de mil ochocientos ochenta y cinco.

En mérito de lo expuesto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, reconoce á cargo del Tesoro nacional y á favor de Manuel J. Álvarez, vecino del Distrito municipal de Medellín, la cantidad de dos mil novecientos cincuenta y tres pesos ($ 2,953), y absuelve á la Nación del pago de la mayor suma que reclama.

Queda en estos términos reformada la providencia apelada.

Notifíquese, cópiese, y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ANÍBAL GALINDO. — JUAN EVANGELISTA TRUJILLO. *Gabriel Rosas*, Secretario

---

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Marzo cuatro de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: La Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, conociendo de una demanda intentada en Julio de mil ochocientos ochenta y tres, por el doctor Jesús María Arteaga, como apoderado de Lucio Londoño ante el Juzgado 3.° del Circuito de Bogotá, por el pago de trescientos treinta pesos ($ 330), valor de los empréstitos consignados por dicho Londoño en manos del Colector de Hacienda de Neiva, el año de mil ochocientos setenta y siete, pronunció en dos de Mayo último, su resolución marcada con el número 3,659, por medio de la cual reconoció á favor del demandante y á cargo del Tesoro público nacional, la suma de ciento sesenta y seis pesos setenta centavos ($ 166-70), y absolvió á la Nación del resto de la suma demandada.

El Ministerio del Tesoro aprobó lo así fallado por la Comisión, y de esta aprobación, dictada en cinco de Julio último, con el número 3,027, apeló el demandante para ante esta Superioridad, en donde oído el dictamen fiscal, fijado el asunto en lista por cuatro días, y practicadas las pruebas pedidas por el actor, es llegado el caso de decidir en definitiva, para lo cual se considera:

La Comisión fundó su expresado fallo en que el inciso 2.° *del artículo 13 de Ley 44 de 1886*, sólo permite reconocer créditos provenientes de empréstitos hechos á la Nación en 1876 y 1877, y de cuya recaudación é inversión se haya presentado cuenta comprobada á la Oficina general de cuentas, siempre que del cotejo de los correspondientes recibos con los documentos de la respectiva cuenta, resulte que dichos recibos son auténticos; y en que estando la presente demanda en el caso así definido por la ley, y habiendo el Secretario de la misma Comisión informado (como se ve al folio 46 vuelto del expediente) que en la cuenta especial del Colector de Hacienda de Neiva, sólo había constancia de que Lucio Londoño pagara por empréstito en la guerra de 1877 la suma de ciento sesenta y seis pesos setenta centavos ($ 166-70), sólo se podía reconocer esta suma.

Para sustentar su apelación, el demandante pidió á la Corte que se librara despacho primero á la Oficina general de Cuentas y luégo al Administrador de Hacienda de Neiva, á fin de obtener un dato cierto sobre las sumas que en la respectiva cuenta aparecieran como consignadas en calidad de empréstito por Londoño, y habiéndose librado uno y otro despacho, resultó que en ninguna de aquellas dos Oficinas hubo constancia de que dicho Londoño hubiese pagado la suma reclamada. Por tanto, apenas subsiste como comprobante del requisito legal que se ha indicado, el informe dado por el Secretario de la Comisión, sobre el pago de los ciento sesenta y seis pesos setenta centavos ($ 166-70), que fueron reconocidos por la Comisión y acerca de los cuales no versa la apelación.

En virtud de tales razones, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y apartándose del parecer del señor Fiscal, confirma la resolución apelada.

Notifíquese, cópiese é insértese esta resolución en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintitrés de Mayo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Con fecha veinticinco de Febrero de mil ochocientos ochenta y ocho, dos días antes de que espirara el término señalado por la Ley 36 de 1888, Adolfo Guerrero, vecino de la ciudad de Pasto, se presentó ante la Comisión de suministros, diez y seis años después de cumplidos los hechos, reclamando el reconocimiento y pago de la suma de diez mil setecientos sesenta y cuatro pesos ($ 10,764), procedente del valor de las expropiaciones que los agentes del Gobierno le hicieron en su hacienda de "Siquitán," durante la guerra de 1876 á 1877. Dichas exacciones conforme á la relación jurada, presentada por el interesado con fecha 28 de Agosto de 1887, folio 20, consistieron:

En el valor de quinientas reses de toda clase, chico y grande, estimadas una con otra, á diez pesos ($ 10).	5,000
Cincuenta ovejas, á dos pesos ($ 2).....	100
Diez y seis marranos, á cuatro pesos ($ 4).....	64
Dos años de arrendamiento de la finca que dice fué secuestrada por agentes del Gobierno y entregada al rematador de ella, Sergio Pérez, á razón de mil pesos ($ 1,000) por año.....	2,000
Doscientas fanegas de maíz, á ocho pesos ($ 8)...	1,600
Trescientas fanegas de papas, á cuatro pesos ($ 4)	1,200
Y doscientas fanegas de maiz, á cuatro pesos ($ 4).....	800
Total.....	$ 10,764

Las pruebas presentadas por el reclamante se componen exclusivamente de informaciones de nudo hecho, con las cuales se comprueba, que la finca de "Siquitán," fué objeto de un secuestro en masa, en virtud del remate que de ella se afirma, mandó hacer el Gobierno del extinguido Estado Soberano del Cauca, obrando como agente del Gobierno de la Unión, para el sostenimiento de la guerra Y es extraño, como lo observó en el salvamento de su voto, el miembro de la Comisión de suministros, señor Lázaro M. Herrán, que un acto judicial ó administrativo, como el remate de la hacienda en Sergio Pérez, no se haya comprobado con los respectivos documentos oficiales, sino con informaciones de nudo hecho, folio 23 vuelto.

La verdad es que la presente reclamación no cabe propiamente dentro de las prescripciones y las reglas establecidas por las diversas leyes expedidas sobre reconocimiento de los

empréstitos y suministros de guerra desde la Ley 44 de 1886, las 56, 61 y 152 de 1887, hasta la 36 de 1888, todas las cuales suponen la comprobación de exacciones, empréstitos y suministros más ó menos regulares, pero asignables en tiempo, y por especies, por número, peso y medida, con el correspondiente valor dado ó asignado á cada especie.

Pero aquí lo que se comprueba, sin duda plenamente con las informaciones de testigos presentadas, es que la hacienda de "Siquitán," fué embargada y secuestrada por la autoridad pública como acto de beligerancia, y rematada ó entregada de hecho á Sergio Pérez, en cuyo poder permaneció dos años, durante los cuales se verificaron las exacciones materia de esta reclamación.

Pero al tratar de concretarlos y precisarlos, ninguno de los testigos ha podido hacerlo, como es natural, después del trascurso de tántos años. Tanto es esto así, que aun respecto del número de animales expropiados, que es lo que más ha podido precisarse, de los cinco testigos que sobre esto declaran, tres de ellos lo fijan en quinientos (500), uno en seiscientos (600), y otro, en doscientos veinte (220). Ni ha podido obtenerse mejor resultado con las ampliaciones mandadas practicar por auto para mejor proveer de la Corte, de veintinueve de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos, pues el testigo Manuel Noguera, repreguntado, folio 10 vuelto, dice: "que precisamente por el mucho tiempo trascurrido, el exponente no recuerda á qué número ascendió el ganado que en 1887 (sic) el Gobierno expropió al señor Adolfo Guerrero, pero que su número no bajaría de quinientos," "que tampoco recuerda con precisión el número de haces de trigo que en el referido año de 1877, había entregado en la hacienda de "Siquitán;" pero que ese número no podía ser menor de diez mil (10,000)." Fuera de que el declarante no da la razón de su dicho de por qué no podían ser las reses menos de quinientas (500), y los haces de trigo menos de diez mil (10,000), hay que entrar en apreciaciones ó cálculos para reducir los haces á cargas, lo cual es absolutamente inaceptable. De este tenor son todas las ampliaciones.

Si efectivamente Guerrero hizo la pérdida de todos esos valores, debe culparse á sí mismo, si hoy no puede obtener su reconocimiento, por la culpa lata en que ha incurrido, dejando pasar diez y seis años sin entablar su reclamación. Por todo lo cual, la Comisión de suministros, persuadida de la justicia que en el fondo asiste á Guerrero para pedir la indemnización, haciendo uso de la amplia facultad que confiere el artículo 6.° de la Ley 44 de 1886, para decidir de estas reclamaciones en conciencia, verdad sabida y buena fe guardada, reconoció al reclamante por medio de la resolución número 3,534, de 4 de Abril de 1892, cuatro mil doscientos pesos ($ 4,200), provenientes del valor de doscientas veinte reses (220), á diez pesos ($ 10) cada una, y de dos años de arrendamiento de la finca, á mil pesos ($ 1,000) por año; la cual fué aprobada por la del Ministerio del Tesoro número 2,783, de 6 de Mayo de 1892, que se ha traído en apelación á esta Superioridad.

Pero como de lo expuesto queda demostrado que la Corte no encuentra motivo para variarla, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la resolución apelada en lo que ha sido materia del presente recurso, ó sea en cuanto se absolvió á la Nación del exceso reclamado por Guerrero, sobre la suma de cuatro mil doscientos pesos, única reconocida á favor del reclamante.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO. — ANÍBAL GALINDO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, Julio veintidós de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: En virtud de denuncio de Belisario París (no jurado por no saberse el lugar de su residencia), se instruyeron por este Superior Tribunal, las diligencias sumarias que se creyeron conducentes para comprobar los hechos que aparejaban responsabilidad á Ramón Romero Rojas, en su calidad de Administrador de las Salinas de Cumaral y Upín, según el mismo denuncio; y aunque dilatada la instrucción correspondiente, por la circunstancia de no haber comunicación frecuente entre esta capital y varias poblaciones de la Provincia de Oriente, se dictó, en veinticuatro de Marzo del corriente año, el auto en el cual se sobreseyó en la averiguación de cuatro de los cinco cargos que formuló el denunciante, por no resultar de lo actuado mérito para abrir causa de responsabilidad contra el Administrador mencionado, pues el examen de los referidos cargos se llevó hasta dejar bien establecida la falta de culpabilidad del empleado, y sólo se llamó á juicio de responsabilidad, por los trámites extraordinarios, por el delito de abandono del empleo de Administrador de las Salinas que desempeñaba, consistente en haberse separado de la Oficina de su cargo varias veces para venir á esta capital, y otras, para seguir á los Municipios de Villavicencio y Fómeque, sin licencia.

Comisionado el Juéz 1.° municipal de Fómeque, donde reside el procesado, para que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1905 del Código Judicial, notificase el auto de enjuiciamiento y entregase el expediente al acusado para que rindiese el informe; éste devolvió el proceso, junto con un escrito en que pide á la Corte que reciba declaración á los doctores Felipe F. Paúl, ex-Ministro de Hacienda y Adolfo Sicard y Pérez, Subsecretario del ramo, relativamente á los motivos que le indujeron á hacer viajes, en distintas ocasiones, á esta capital, y de consiguiente, á separarse del destino.

Recibido en la Corte el proceso, y citadas las partes presentes para sentencia, es llegada la oportunidad de pronunciarla conforme al mérito jurídico de la actuación, y para ello se considera:

Al dictarse el auto de enjuiciamiento se tuvieron en cuenta, entre otras pruebas, las declaraciones juradas rendidas ante el Juez municipal de Fómeque en los días diez y once de Julio de mil ochocientos noventa, por Manuel A. Cubides y Joaquín Cubides, que figuran en las fojas 32 vuelta á la 34, los cuales testigos, respectivamente, expusieron:

El primero: "Que es cierto y verdad que cuando el Administrador de las Salinas de Cumaral y Upín, señor Ramón Romero Rojas, y viviendo el exponente con él, en su carácter de amigo y como particular, se ausentaba dicho señor Romero Rojas del punto de las Salinas para Villavicencio ó para Fómeque, y aun para Bogotá, y el exponente, por indicación del Administrador, señor Romero Rojas, se quedó varias ocasiones sin recordar cuántas, reemplazándolo, con el objeto de vigilar los trabajos de las Salinas, recibir del pesador el dinero valor de las ventas de sal, llevar las cuentas de ellas; presentarlas al Administrador á su llegada, juntamente con el dinero recibido, producto de las ventas y comparar la cuenta del exponente con la del pesador; que no le consta que el Administrador de las Salinas menciona las (las de Cumaral y Upín), Ramón Romero Rojas, fuera del exponente, dejara en otras ocasiones en reemplazo de él, á ningun otro particular; que en las ocasiones que el exponente, como particular, se quedó en las Salinas, reemplazando al señor Romero Rojas, las operaciones y trabajos que ejecutaba, no las hacía sustrayéndose al conocimiento de los verdaderos empleados que allí había, que fueron: el Pesador, José Rincón Cortés, vecino de Villavicencio, y los Guardas, Joaquín Cubides, vecino de Fómeque; Dionisio León Pardo, que se ignora su vecindad; Juan de Dios Calvo, vecino de Choachí, y el Contador, Belisario París, que por casualidad se presentó una ó más ocasiones."

El segundo: "Que siendo el exponente empleado público de las Salinas de Cumaral y Upín, cuyo cargo era el de Guarda, presenció que, cuando el Administrador de dichas Salinas, señor Ramón Romero Rojas, se ausentaba del punto de ellas, ó para Villavicencio ó para otros lugares, dejó por varias veces á Manuel A. Cubides, para que lo reemplazara, recibiendo del Pesador el dinero, producto de las ventas de sal, llevara la cuenta arreglada y la feneciera á su regreso, previa confrontación con la del pesador; que le consta que Manuel A. Cubides no era empleado público en las Salinas, sino que, como particular y amigo del señor Ramón Romero Rojas,

residía allí con él y que si sustraía á los empleados de las Salinas las operaciones que Manuel A. Cubides practicaba allí como particular, juzga el exponente que sería porque tenía más confianza en éste que en aquéllos."

En la indagatoria que Romero Rojas rindió, por comisión de la Corte, el día quince de Marzo de mil ochocientos noventa ante el Juez municipal de Villavicencio, expuso, con relación al cargo de abandono del destino (foja 13), lo siguiente:

"Que en su calidad de Administrador de las Salinas de Cumaral y Upín, estuvo distintamente en la cabecera de este lugar, en el punto donde existían las Salinas, y algunas veces en la capital de Bogotá, siempre en el cumplimiento de su deber, como tal empleado, según así lo exigían las circunstancias; que cuando iba á Bogotá, era exclusivamente á entenderse con el señor Ministro de Hacienda de la República, á hacerle indicaciones urgentes para el cumplimiento y buena marcha de la administración de su cargo, pero que no es cierta la duración del tiempo que asevera el denunciante."

Explicando el mismo Romero Rojas el objeto principal de sus viajes á esta capital, cerca del Ministerio de Hacienda, dice en su informe:

"Cuando me trasladé de las referidas Salinas (las de Cumaral y Upín), á la capital de la República, lo hice con el exclusivo objeto de atender al buen servicio público, ó sea en asunto del servicio de mi Oficina.

"Uno de los empleados subalternos que no llenaba sus deberes, y que era de mala conducta reconocida, lo fué el que ha asumido el odioso papel de acusador ó denunciante, por lo cual hube de recurrir personalmente al Gobierno, con el fin de que dicho empleado fuera reemplazado con otro apto y honrado, lo que así sucedió en fuerza de mi instancia. Pido el testimonio de los señores Felipe F. Paúl, ex-Ministro de Hacienda y doctor Adolfo Sicard y Pérez, cuyas pruebas hablarán del motivo de mis salidas, *sin licencia*, para lo cual en pliego separado presento el interrogatorio á que deben responder. También solicito que exijáis del Director de la Contabilidad y de la Corte de Cuentas informe si en aquella época hubo de resolverse que todas las cuentas que había confeccionado Belisario París, como Contador-Tenedor de libros de las prenombradas Salinas, se rehicieran, pues no se podían examinar á causa de los innumerables errores y la forma ilegal en que estaban concebidas; esto hablará respecto á la completa ineptitud de este empleado."

La Corte considera que no se han desvanecido los cargos deducidos al ex-Administrador Ramón Romero Rojas, en el auto de enjuiciamiento, porque aunque á la foja 48 del expediente, aparece la constancia oficial de haber solicitado el Administrador Romero Rojas cuatro licencias para separarse temporalmente del destino que desempeñaba en las Salinas de Cumaral y Upín, en el curso del año de mil ochocientos noventa, también aparece en la misma foja la nota que estampó el Administrador que lo reemplazó, José A. Villegas, en la cual advierte que en el legajo de comunicaciones recibidas en aquella Oficina, no hay constancia de que se le hubiera concedido ninguna licencia de las que había solicitado; y que respecto de ese particular sólo habla la nota del Ministerio de Hacienda, número 1,029, de veintiocho de Febrero de mil ochocientos noventa, en la que comunica lo que sigue:

"Aprovecho esta oportunidad para manifestarle á usted que siempre que tenga necesidad de retirarse de esa Administración, debe hacerlo en virtud de licencia, y que de ésta no podrá hacer uso mientras no se haya encargado del destino quien deba reemplazarlo."

De modo que, según lo expuesto, el Ministerio de Hacienda desde el principio del año citado, advirtió al Administrador Romero Rojas, que no debía separarse del empleo sino con licencia, dejando en su reemplazo la persona que el mismo Ministerio designara en cada caso para que le subrogara; pero como las licencias no le fueron otorgadas, tampoco se dijo quién debía reemplazarlo.

Al procesado incumbía acreditar una y otra cosa, solicitando copia de las respectivas comunicaciones, en el término que el artículo 1913 del Código Judicial le concedía para producir su informe; y como de esta prueba prescindió el procesado, es de suponerse que estaría en imposibilidad de hacerla producir en el juicio.

Los testimonios del ex-Ministro de Hacienda, doctor Felipe F. Paúl y del Subsecretario, doctor Adolfo Sicard y Pérez, debió solicitarlos dentro del término yá indicado, pues no era dado á la Corte exigirlos después de haberse devuelto el expediente por el Juez comisionado.

Además de la advertencia ó prevención que por el Ministerio de Hacienda se hizo al Administrador Romero Rojas de que no se separa del ejercicio de sus funciones sin obtener licencia previa, prevención á que el referido empleado faltó más de una vez, es práctica observada uniformemente por los Jefes de las oficinas públicas, la de no abandonar sus respectivos puestos, cualesquiera que sean los motivos ó causas que les asistan, sin dejar personas que los reemplacen, autorizadas directamente por la ley ó por el Gobierno.

La conducta contraria introduciría el desorden ó la anarquía en la marcha regular de las mismas Oficinas. Así es que los motivos alegados por el procesado para justificar sus ausencias no son legales, pues la comunicación epistolar y la telegráfica, en los casos muy urgentes son los medios adecuados para entenderse los empleados inferiores con los superiores, y al contrario.

No halla, por tanto, la Corte, desvanecidos los cargos hechos en el auto de proceder al ex-Administrador de las Salinas de Cumaral y Upín, Ramón Romero Rojas, y antes bien los considera en toda fuerza; por lo cual, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, previa calificación del delito en tercer grado, condena al expresado Ramón Romero Rojas, ex-Administrador de las Salinas de Cumaral y Upín, al pago de la multa de diez pesos ($ 10), á favor del Tesoro nacional, multa que señala como *mínimum* el artículo 526 del Código Penal hoy vigente; así por tratarse en el presente caso de un destino remunerado, como es el de Administrador de las referidas Salinas, como porque dicha multa es menor que la de cincuenta pesos que determina también como *mínimum* el artículo 389 del Código Penal sancionado en el Estado de Cundinamarca, en diez y seis de Octubre de mil ochocientos cincuenta y ocho y adoptado por la Ley 57 de 1887, vigente cuando se cometió la infracción.

Para que se haga efectiva la exacción de la multa se pasará copia autorizada de este fallo al Tesorero general de la República, luégo que quede ejecutoriado.

Líbrese despacho con remisión del proceso al Juez 1.° municipal de Fómeque, donde reside el procesado, para que ordene que la Secretaría le haga la notificación personal de esta sentencia y lo devuelva cumplido á la mayor brevedad.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y archívese el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Jesús Casas Rojas.—Manuel E. Corrales.—Abraham Fernández de Soto.—Joaquín Martínez E.—Jesús María Quintero P.
Gabriel Rosas, Secretario.

AUTOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia. — Bogotá, diez y nueve de Mayo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Apeló Sinforoso Mancera de la sentencia de diez de Octubre de mil ochocientos noventa y dos, proferida por el Juez 2.° del Circuito del Norte, Distrito Judicial de Tundama, en que se le negó el amparo de pobreza pedido por él, para litigar en juicio ordinario contra la mortuoria de Juan Nepomuceno Arenas, sobre nulidad de unos contratos.

Ese juicio se ventila entre particulares sin que la Nación tenga en él interés alguno, y yá la Corte ha resuelto, por más de una vez, que no es competente para conocer en asuntos de esta especie. Bastará citar el auto de fecha catorce de Diciembre de mil ochocientos noventa y uno, publicado en el número 317 de la *Gaceta Judicial*, en el cual se declara la interpretación que se ha dado á las disposiciones del artículo 12 de la Ley 72 de 1890.

Por tanto, de acuerdo con el concepto del señor Procurador, declárase que la Corte Suprema no es competente para conocer en segunda instancia de los juicios sobre amparo de pobreza, en que no tenga interés la Nación. Devuélvase el expediente al Juzgado de su origen.

Notifíquese y cópiese.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veinticuatro de Mayo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Contra José Antonio Ortiz, Tesorero municipal de Arboledas, Departamento de Santander, se dedujo alcance á su cargo, en su cuenta de mil ochocientos ochenta y ocho, por la suma de mil ciento sesenta y cuatro pesos ($ 1,164), procedente del impuesto directo que recaudaba por cuenta del Departamento. Seguida ejecución contra dicho Ortiz, éste, dentro del término legal, opuso la excepción de pago, que fué admitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Norte del mismo Departamento, que era el competente para conocer de la excepción propuesta. La excepción la hace consistir el ejecutado en la exhibición de dos recibos expedidos á su favor por el Colector de Hacienda de Cúcuta, los cuales, separados de la cuenta general del ejecutado, ningún valor tienen para probar la excepción, pues no podía saberse si dichos recibos habían sido yá computados en aquella cuenta. En consecuencia, el Tribunal, por auto de diez y seis de Octubre de ochocientos noventa y dos, declaró que dicha excepción no estaba probada, y que por tanto debía adelantarse la ejecución.

Esta providencia fué apelada por Ortiz, á quien se le concedió el recurso para ante esta Superioridad, en virtud de lo dispuesto en el inciso 4.°, artículo 43 del Código de Organización Judicial. Mas como el interesado haya dejado pasar más de sesenta días sin hacer las gestiones necesarias para la continuación del juicio, y sin suministrar el papel necesario para dar curso al negocio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley 105 de 1890, y de conformidad con lo pedido por el señor Procurador general, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara ejecutoriado el auto apelado.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veinticuatro de Mayo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: El Administrador de la Aduana de Barranquilla, en uso de la jurisdicción coactiva que le compete, teniendo á la vista el reconocimiento liquidado á favor del Tesoro público, y á cargo de López Olier & Compañía, por derechos de Aduana, correspondientes á mercancías importadas en Junio y Julio del año de mil ochocientos noventa y dos, y que con el recargo del veinticinco por ciento (25 por 100) perteneciente á los Departamentos, ascendieron á la suma de dos mil novecientos cuarenta y nueve pesos noventa y cinco centavos ($ 2,949-95); y en virtud de lo dispuesto por el inciso 2.° del artículo 1096 del Código Judicial, libró, en dos de Septiembre último, mandamiento ejecutivo á favor de la Nación y contra López Olier & Compañía, por la expresada suma y los intereses de demora, á razón del uno por ciento mensual, hasta el día del pago, y de conformidad con el artículo 168 del Código Fiscal, en relación con el artículo 5.° de la Ley 36 de 1886.

Notificado personalmente Arturo López Olier, como socio de la Casa expresada, apeló del auto, recurso que se le concedió para ante esta Superioridad, competente para despacharlo, según el inciso 6.° del artículo 43 del Código de Organización Judicial.

Sustanciado legalmente el recurso, para decidirlo se observa que las citas legales hechas por el Administrador de la Aduana de Barranquilla, para fundar su providencia son pertinentes y correctas, ora acerca del mérito que para la ejecución presta el reconocimiento aludido, ora respecto del recargo adicional correspondiente á los Departamentos, y yá también respecto del interés de la demora.

Por tanto, la Corte, de acuerdo con el parecer del señor Procurador, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la providencia apelada.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta* y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO. *Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Junio tres de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: El Contador general del Departamento de Panamá remitió á esta Suprema Corte, copia de varios autos de fenecimiento y glosas de la cuenta de la Administración general de Hacienda del Departamento en el año de 1888, en cuyo examen se dedujo un alcance de trescientos sesenta y seis pesos veinticinco centavos ($ 366-25), á cargo del Gobernador del Departamento, General Juan N. Aycardy, por haber ordenado el pago de esa suma al Coronel Nicanor Uscátegui y al Teniente Leonidas Chaves, que habían ido en comisión á Panamá, y se encontraban allí sin recursos para regresar, á pesar de habérseles pagado lo correspondiente al tiempo que debían emplear en la comisión.

El citado Contador se abstuvo de resolver la reclamación elevada por el responsable, después de consignar el valor del alcance en la Administración general de Hacienda, porque juzga que de conformidad con el artículo 2048 del Código Fiscal, toca á la Corte Suprema resolver el punto.

Este artículo dice, que recibidas las contestaciones del Ordenador, si éstas no fuesen satisfactorias á juicio de la Oficina de Cuentas, en acuerdo, el Contador las pasará á la Corte Suprema federal con su informe sobre el mérito de ellas.

La Corte Suprema no tiene hoy, en materia de examen y fenecimiento de cuentas, ó sea en juicio de cuentas, otra atribución que la de conocer de las apelaciones que se interpongan contra las resoluciones de la Sala de apelaciones de la Oficina general, en el caso del artículo 66 de la mencionada Ley 146 de 1888.

La Corte carece, pues, de jurisdicción para proveer cosa alguna en el incidente que se le ha remitido por el Contador del Departamento de Panamá, y en consecuencia, ordena que se le devuelvan estas diligencias.

Notifíquese y cópiese.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.—ANÍBAL GALINDO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, catorce de Junio de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: En la ejecución librada por el Administrador municipal de Hacienda de Obando (extinguido Estado del Cauca), con fecha cuatro de Septiembre de mil ochocientos ochenta, para cobrar de Juan E. Chamorro, como rematador de la renta de aguardientes, la cantidad de mil pesos ciento setenta milésimos ($ 1,000-170), el ejecutado, en oportunidad, propuso la excepción de pago, la cual fué admitida, sustanciada y decidida por el Juez del Circuito de Ipiales en diez de Abril de mil ochocientos ochenta y seis, en estos términos:

"Por tales fundamentos, el Juzgado, administrando justicia en nombre del Estado Soberano del Cauca y por autoridad de la ley, declara probada la excepción de pago propuesta por el ejecutado Juan E. Chamorro, hasta la cantidad de novecien-

tos treinta y nueve pesos trescientos setenta y cinco milésimos ($ 939-375), y que esta cantidad debe deducirse de los mil pesos ciento setenta milésimos ($ 1,000-170), cantidad líquida por la cual se dictó el auto ejecutivo de cuatro de Septiembre de mil ochocientos ochenta."

Esta sentencia se fundó en los comprobantes que en el término probatorio correspondiente presentó el ejecutado Chamorro, consistentes en varios recibos y libranzas expedidos y librados por los empleados que desempeñaron la Administración municipal del ramo, cuyas firmas fueron reconocidas con previa citación del Ministerio Público.

Notificado á las partes dicho fallo, interpusieron recurso de apelación, que les fué concedido por el Juez del conocimiento en auto de quince de Abril de mil ochocientos ochenta y seis, para ante el Tribunal Superior del Departamento, con quien igualmente resolvió el Juez consultar el fallo mencionado.

Este asunto ha sufrido largas demoras, por causas que constan en el expediente, y debido á éstas se suscitó una competencia negativa entre los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de Pasto y de Popayán, fundada en la inteligencia que cada uno de dichos Tribunales daba á las leyes recientemente expedidas sobre Organización Judicial. La competencia se decidió por este Supremo Tribunal en el sentido de que á éste correspondía conocer en segunda instancia de la excepción de pago que propuso el deudor, por pasar de la suma de mil pesos ($ 1,000) la ejecución.

Para que las partes, y especialmente la excepcionante, estuvieran á derecho ante la Corte, se dispuso que se les hiciese saber la resolución que puso término á la competencia, señalándoseles un término prudencial, atendida la distancia, para que ocurriesen á sostener sus pretensiones.

Pero como el ejecutado, Juan E. Chamorro, falleció antes de que se le hubiera podido notificar la última determinación de la Corte, comprobado como fué dicho fallecimiento, se dispuso que fuesen notificados los herederos de Chamorro, á quienes igualmente se les señaló un plazo para que se presentaran ante la Corte á sostener la apelación interpuesta por su causante.

Trascurrido el término señalado, sin que persona alguna ocurriera á estar á derecho en representación de la parte ejecutada, la Corte dispuso que se sustanciase el recurso con audiencia del Ministerio Público, que también fué apelante de la sentencia, relativa á la excepción de pago, y efectivamente, el señor Procurador general de la Nación, ha dado su dictamen en el sentido de que sea confirmada la referida sentencia. Luégo se fijó el asunto en lista por cuatro días, pasados los cuales, la Corte procede á proferir el fallo de su incumbencia.

Como la excepción de pago propuesta por la parte ejecutada, contra el mandamiento ejecutivo, resulta probada parcialmente con los recibos y demás documentos expedidos por los empleados encargados de la recaudación de la renta de aguardientes, reconocidos y aceptados por éstos en el término probatorio del indicente, es claro que la ejecución no puede seguirse por la suma que sirvió de base al auto ejecutivo, sino por el resto que ha quedado adeudando Chamorro ó sus herederos.

Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara probada la excepción de pago propuesta por Juan E. Chamorro, hasta la cantidad de novecientos treinta y nueve pesos trescientos setenta y cinco milésimos ($ 939-375) y que la ejecución debe proseguirse por la de sesenta pesos ochocientos milésimos ($ 60-800) y los intereses que haya lugar á exigir del deudor, conforme á la ley de la materia y al contrato de arrendamiento del impuesto de aguardientes. En estos términos queda reformada la sentencia apelada.

Notifíquese, cópiese, insértese en la *Gaceta Judicial* y remítase el expediente al Tribunal Superior de Popayán, para lo de su cargo.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO. — ANÍBAL GALINDO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

NEGOCIOS VARIOS.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez y ocho de Abril de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: El reo rematado Hipólito Sánchez, pide á la Corte que apoye la solicitud de rebaja de pena que hace al Excelentísimo Señor Vicepresidente de la República; y conforme al artículo 8.° de la Ley 56 de 1886, el Tribunal que sentenció en última instancia, en la causa del peticionario, debe hacer tal solicitud, para lo cual debe fundarse en el informe del Director del respectivo establecimiento de castigo, informe que debe versar sobre si durante las dos terceras partes del tiempo de la condena, no ha tratado de fugarse el reo, y ha observado, además, conducta ejemplar.

Al expediente se ha acompañado el expresado informe, el cual es completamente satisfactorio; y consta, además, que el reo, como trabajador, ha prestado sus servicios con buena voluntad é interés.

La Corte, en atención á que tal certificado llena los requisitos del artículo 8.° citado, no tiene inconveniente en dar curso á la solicitud, para que el Excelentísimo Señor Vicepresidente de la República resuelva lo que estime justo y legal.

Elévese el expediente por el conducto regular.

Notifíquese y déjese constancia.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES. ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, tres de Mayo de mil ochocientos noventa y tres.

Vistos: Timoteo Peñalosa, que, como Sargento 1.° del *Batallón Valencey* número 12, fué condenado por sentencia pronunciada por la Corte, el día ocho de Abril de mil ochocientos noventa y dos, á sufrir la pena de reclusión penitenciaria, por el término de dos años, en el Panóptico de esta ciudad, y á las penas accesorias prevenidas por la ley, y en virtud de haber cometido el delito de deserción, ha elevado á esta Superioridad, una solicitud en que pide que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8.° de la Ley 56 de 1886, apoye la que dirige al Gobierno, para que se le disminuya la tercera parte que le falta para cumplir el tiempo de su condena.

A la solicitud se han acompañado los siguientes documentos:

1.° Una certificación expedida por el Director del Panóptico de Bogotá, á diez y nueve de Abril último, con la cual se comprueba que el solicitante Peñalosa ha permanecido preso desde el día diez y ocho de Diciembre de mil ochocientos noventa y uno, de lo cual se deduce que hasta el día diez y ocho de Abril último, han trascurrido diez y ocho meses, ó sean dos terceras partes de los veinticuatro de reclusión á que fué condenado. Compruébase igualmente con esta certificación que Peñalosa no ha tratado de fugarse de su prisión, y que durante el tiempo que ha estado en ella, ha observado una conducta ejemplar;

2.° Copia debidamente autorizada por el Subsecretario del Ministerio de Guerra, del auto de proceder y de las sentencias de primera y de segunda instancia, dictadas contra dicho Peñalosa, con la cual se establece que en realidad la pena principal á que fué condenado por la Corte, consiste en la reclusión penitenciaria, por dos años, en que debía computarse el tiempo durante el cual hubiera estado preso antes de la condenación definitiva;

3.° Una certificación del Subsecretario del Ministerio de Guerra, con la cual se acredita que Peñalosa empezó á sufrir la pena de detención desde el día veintiocho de Diciembre de mil ochocientos noventa y uno, y que no hay constancia ninguna en el proceso de que dicho Peñalosa haya reincidido en el delito por el cual se le juzgó.

Estos comprobantes son los que la ley requiere para que la Corte pueda acoger favorablemente y encaminar solicitudes de la especie de la presente; por lo cual resuelve despacharla afirmativamente, disponiendo que por el conducto de Su Señoría el Ministro del ramo, se eleve al conocimiento del

Excelentísimo Señor Vicepresidente de la República, á fin de que si este alto funcionario lo estimare conveniente acceda á la mencionada solicitud.

LUCIO A. POMBO.—LUIS M. ISAZA.—BALTASAR BOTERO URIBE.—JESÚS CASAS ROJAS.—MANUEL E. CORRALES.—ANÍBAL GALINDO.—JUAN EVANGELISTA TRUJILLO.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

ACTA DE LA DILIGENCIA DE VISITA PRACTICADA EN LA SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, POR SU SEÑORÍA EL PRESIDENTE DE LA MISMA, EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 1893.

En Bogotá, á treinta y uno de Agosto de mil ochocientos noventa y tres, Su Señoría el Presidente de la Corte practicó en la Secretaría de la misma la visita mensual, y de ella resultó:

1.° Que todos los libros de la Oficina se llevan ordenadamente y sin atraso;

2.° Que los expedientes siguen su curso ordinario en el orden indicado en las anteriores visitas;

3.° Que por disposición de Su Señoría el Ministro de Fomento, ha sido colocado un teléfono que pone en comunicación los salones de la Secretaría con el de estudio de los señores Magistrados, y un estante grande y bien construído para la *Gaceta Judicial*;

4.° Que el movimiento de negocios durante el mes ha sido el que se indica en los cuadros siguientes:

CUADRO QUE REPRESENTA EL MOVIMIENTO DE NEGOCIOS EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DURANTE EL MES DE AGOSTO de 1893.

	SENTENCIAS.					AUTOS.							NEGOCIOS DE UNA SOLA INSTANCIA.				
	CASACIÓN.		CIVILES DE 2.ª INSTANCIA.														
	Civiles.	Pena capital.	Negocios varios.	Suministros etc.	Criminales de 2.ª instancia.	Civiles.	Criminales.	Procesos militares.	Competencias.	Recursos de hecho.	Recursos de revisión.	Negocios varios.	Civiles.	Criminales.	Suspensión de Ordenanzas.	Recompensas.	TOTALES.
Pendientes en 30 de Julio	22	3	6	164	2	9	5	...	...	4	2	3	4	14	3	538	779
Repartidos en Agosto	6	1	1	3	...	3	8	1	...	1	...	...	...	2	2	11	39
Totales	28	4	7	167	2	12	13	1	...	5	2	3	4	16	5	549	818
Despachados en el mes	4	2	1	7	1	2	4	...	...	1	...	2	1	...	...	16	41
Pendientes en 31 de Agosto	24	2	6	160	1	10	9	1	...	4	2	1	3	16	5	533	777

CUADRO QUE REPRESENTA EL NÚMERO DE PROYECTOS PRESENTADOS POR CADA UNO DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SOBRE LOS NEGOCIOS CUYO DESPACHO SE RELACIONA EN EL CUADRO ANTERIOR (AGOSTO).

	SENTENCIAS.					AUTOS.							NEGOCIOS DE UNA SOLA INSTANCIA.				
	CASACIÓN.		CIVILES DE 2.ª INSTANCIA.														
	Civiles.	Pena capital.	Negocios varios.	Suministros etc.	Criminales de 2.ª instancia.	Civiles.	Criminales.	Procesos militares.	Competencias.	Recursos de hecho.	Recursos de revisión.	Negocios varios.	Civiles.	Criminales.	Suspensión de Ordenanzas.	Recompensas.	TOTALES.
Doctor Pombo	...	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3	4
Doctor Isaza	1	...	...	1	...	...	...	...	...	...	...	1	...	...	...	1	4
Doctor Botero Uribe	...	...	...	2	...	1	1	...	...	...	...	...	...	...	...	3	7
Doctor Casas Rojas	2	...	1	...	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2	6
Doctor Corrales	...	...	...	1	...	...	1	...	...	...	...	...	...	...	...	1	3
Doctor F. de Soto	...	1	...	1	...	...	1	...	...	1	...	...	...	...	...	2	6
Doctor Galindo	1	...	...	2	...	1	1	...	...	...	...	1	1	...	...	4	11
Totales	4	2	1	7	1	2	4	...	...	1	...	2	1	...	...	16	41

RELACIÓN DE LOS NEGOCIOS DESPACHADOS POR LA CORTE EN EL MES DE AGOSTO DE 1893.

Señor Magistrado doctor Pombo.

1.—Agosto 8.—Recompensa.—Demanda de José Jesús Ramírez y otros.

2.—Agosto 18.—Pena capital.—Proceso contra Alejandro Omén é Isidro Beltrán.

3.—Agosto 29.—Recompensa.—Solicitud de Julio Escobar.

4.—Agosto 31.—Recompensa.—Solicitud de Rosalía Dicué.

Señor Magistrado doctor Isaza.

1.—Agosto 2.—Negocio vario.—Petición de Aristides Liévano, sobre rebaja de pena.

2.—Agosto 8.—Suministros.—Demanda de J. Ruiz Vergara.

3.—Agosto 17.—Casación civil.—Juicio seguido por José Alejandro Pulido contra Natalia Esguerra, sobre nulidad de un contrato.

4.—Agosto 28.—Recompensa.—Solicitud de María Manuela López.

Señor Magistrado doctor Botero Uribe.

1.—Agosto 2.—Recompensa.—Demanda de Rafaela de Cayzedo.

2.—Agosto 23.—Auto civil.—Ejecución contra Segismundo Villate y otros.

3.—Agosto 24.—Auto criminal.—Sumario contra José del P. Rosa, Fiscal del Circuito de Ocaña, por violación del artículo 362 del Código Penal.

4.—Agosto 25.—Recompensa.—Solicitud de Milagros Ruiz Manzano.

5.—Agosto 25.—Suministros.—Reclamación de José Herrera.

6.—Agosto 28.—Recompensa.—Demanda de Rafaela Collazos.

7.—Agosto 29.—Suministros.—Reclamación de Federico González.

Señor Magistrado doctor Casas Rojas.

1.—Agosto 14.—Recompensa.—Solicitud de Francisco Uní.

2.—Agosto 14.—Sentencia civil varia.—Juicio promovido por el Fiscal del Tribunal de Cundinamarca contra Bernardina Santamaría de Restrepo, sobre expropiación de un terreno.

3.—Agosto 17.—Casación civil.—Juicio promovido por Julián Vega O. contra Eugenio González Benito, sobre nulidad de un remate.

4.—Agosto 22.—Sentencia criminal de segunda instancia. Proceso contra Indalecio Betancourt, Fiscal del Circuito de Frontino, por irrespetos á un Superior.

5.—Agosto 26.—Recompensa.—Solicitud de Martín Mera.

6.—Agosto 31.—Casación civil.—Juicio sobre nulidad del testamento de Vicente Rueda.

Señor Magistrado doctor Corrales.

1.—Agosto 21.—Suministros.—Reclamación de Marcelino Torrente.

2.—Agosto 23.—Auto criminal.—Proceso contra Matías A. Múnera, Juez del Circuito de Frontino, por violación de correspondencia *y otros delitos.*

3.—Agosto 30.—Recompensa.—Demanda de Josefa Ramírez.

Señor Magistrado doctor Fernández de Soto.

1.—Agosto 8.—Recurso de hecho.—Solicitud de Alejandro Lince, como apoderado de Pedro Pablo González B.

2.—Agosto 14.—Auto criminal.—Sumario contra José del Carmen Hernández, Fiscal del Circuito de Chinácota, por prevaricato.

3.—Agosto 21.—Recompensa.—Solicitud de Quiteria Campo.

4.—Agosto 22.—Pena capital.—Proceso contra Horacio y Arturo Sáenz.

5.—Agosto 25.—Suministros.—Reclamación de Evaristo Obregón.

6.—Agosto 26.—Recompensa.—Demanda de Tomasa Astaiza.

Señor Magistrado doctor Galindo.

1.—Agosto 8.—Recompensa.—Demanda de Antonia Pazos.

2.—Agosto 8.—Recompensa.—Demanda de Bárbara y Vicenta L. Quintero.

3.—Agosto 8.—Casación civil.—Juicio seguido por el Banco Popular contra Fernando y Rómulo Sánchez, por pesos.

4.—Agosto 17.—Negocio vario.—Solicitud de Luis Santamaría, sobre rebaja de pena.

5.—Agosto 19.—Auto civil.—Juicio seguido por Joaquín Rengifo S. contra el Fiscal del Tribunal del Pacífico, sobre expedición de una copia.

6.—Agosto 22.—Suministros.—Reclamación de José María Cano.

7.—Agosto 22.—Recompensa.—Solicitud de Dolores Astudillo.

8.—Agosto 23.—Auto criminal.—Sumario contra Lisandro A. Moreno, Juez del Circuito de Pital, por abuso de autoridad.

9.—Agosto 25.—Civil de una instancia.—Reclamación del Departamento de Antioquia, sobre pago de unos suministros.

10.—Agosto 28.—Recompensa.—Solicitud de Carmen Montenegro.

11.—Agosto 28.—Suministros.—Reclamación de Sergio Arboleda.

5.° Que actualmente se están haciendo en el Salón de Audiencias importantes reparaciones y mejoras;

6.° Que en el personal de la Secretaría han ocurrido los siguientes cambios:

a) El Escribiente, D. Jenaro Orjuela, volvió á ocupar su puesto el 23, y durante su ausencia, fué sustituído por D. Manuel M. Pardo;

b) Por licencia concedida al Portero de la Corte, D. Rafael Ramírez, desempeñó tal destino D. Julio Meléndez, durante todo el mes;

c) El Relator de la Corte, doctor Antonio Pachón, se separó de su puesto por el término de tres meses, que principiaron á correr desde el 22 del presente mes, y fué nombrado para reemplazarlo D. Rafael Pombo Martínez;

d) En reemplazo del señor Pombo Martínez ocupa, desde la misma fecha, D. Plácido Malo el puesto que en la Secretaría ha desempeñado aquél;

7.° Que no ha sido posible conseguir, á pesar de repetidas notas oficiales, que el Ministerio de Gobierno dé á la Corte noticia alguna sobre la administración anterior de la *Gaceta Judicial*, por lo cual no ha podido formarse la lista de las Oficinas de la República á donde se ha de remitir el periódico, y ha sido necesario dirigir telegramas á algunas de ellas para averiguar si se les remitía y en qué número de ejemplares.

Su Señoría el Presidente de la Corte dispuso se publicase esta acta en la *Gaceta Judicial*.

El Presidente de la Corte, LUCIO A. POMBO.—El Secretario, *Gabriel Rosas*.

IMPRENTA DE ANTONIO M. SILVESTRE.
Director, Tomás Galarza.

GACETA JUDICIAL

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ÍNDICE ALFABÉTICO

TOMO VIII

A

Páginas.

ACEBEDO ABRAHAM. Pensión..... 19
ACEBEDO JOSÉ. Pena capital..... 49
ACOSTA OSPINA VICENTE. Recompensa..... 268
ACUERDOS DE LA CORTE. Véanse los siguientes:
1.° El número 743. Adóptase una terna para el Tribunal Superior de Panamá..... 193
2.° El número 744. Adóptanse unas ternas para los Tribunales del Sur del Departamento del Tolima y Cundinamarca..... 193
3.° El número 749. Adóptase una terna para el Tribunal del Sur del Departamento del Tolima..... 193
4.° El número 751. Adóptase una terna para el Tribunal de Popayán..... 193
5.° El número 752. Nómbranse los Conjueces de Corte para el año de 1893..... 194
6.° El número 753. Adóptanse dos ternas para el Tribunal Superior del Cauca..... 194
7.° El número 754. Adóptanse dos ternas para los Tribunales de Panamá y Norte del Departamento de Santander..... 194
8.° El número 755. Adóptase una terna para el Tribunal de Cundinamarca..... 194
9.° El número 756. Adóptase una terna para el Tribunal Superior del Pacífico..... 195
10. El número 756. Nómbranse los Escribientes de la Corte..... 195
11. El número 759. Adóptase una terna para el Tribunal de Panamá..... 233
12. El número 760. Adóptase una terna para el Tribunal de Tunja..... 265
13. El número 761. Adóptase una terna para el Tribunal de Tundama..... 265
14. El número 763. Adóptase una terna para el Tribunal Superior del Sur del Departamento del Tolima..... 265
15. El número 767. Decláranse incursas en una multa ciertas autoridades, por falta de cumplimiento á la disposición del artículo 71 de la Ley 100 de 1892..... 329
16. El número 774. Hónrase la memoria del señor doctor José Ignacio de Márquez..... 409
ACUERDO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE TUNJA. Hónrase la memoria del señor Magistrado doctor Manuel Jaime..... 288
ADMINISTRADORES DE ADUANAS. Véanse los autos siguientes, dictados en ejecuciones seguidas por estos funcionarios:
1.° *El de la de Buenaventura* contra Ricardo Escobar A..... 79
2.° El de la de Barranquilla contra la Sociedad comercial López Olier & Compañía, 152, 287, 311, 413
3.° El de la de Tumaco contra Elías D. Morcillo. 215

Páginas.

ADMINISTRADORES DE HACIENDA. Véanse los autos siguientes, en ejecuciones promovidas por estos funcionarios:
1.° El de Guaduas contra Tomasa Montealegre.... 23
2.° El departamental de Antioquia contra Eugenio Ramírez..... 80
3.° El de Anorí contra Francisco Barón..... 94
4.° El de Riosucio contra Rafael Jenaro Bueno... 167
5.° El de Antioquia contra Joaquín Mariano Escobar..... 175
6.° El de Buriticá contra Teodoro David..... 200
7.° El de Nóvita contra Víctor Manuel Calderón. 287
8.° El de Soledad contra Alejandro Laserna..... 326
9.° El de San-Juan contra Alejandro Mosquera.. 399
10. El de Buriticá contra Marco A. Arepas..... 405
11. El de Riosucio contra Ramón Hoyos y Nicolás y Ulpiano Quintero V..... 406
12. El de Obando contra Juan E. Chamorro..... 414
AGUDELO GREGORIO Y OTROS. Suministros etc..... 198
AIZPURU RAFAEL. Juicio ejecutivo contra el Departamento de Panamá..... 167
AIZPURU RAFAEL. Juicio que siguió contra José Gabriel Duque por varios cargos..... 249
ALDANA JUAN AMBROSIO. Recompensa..... 91
ALFARO MARÍA CRUZ É HIJOS. Recompensa..... 89
ALFARO LUIS R. Proceso criminal (varios cargos)... 112
ALVARADO MODESTO. Pena capital..... 105
ÁLVAREZ MANUEL JOSÉ. Cesionario de Julián Echeverri y otros. Suministros etc..... 51
ÁLVAREZ MANUEL JOSÉ. Cesionario de varios individuos. Suministros etc..... 93
ÁLVAREZ MANUEL JOSÉ. Cesionario de Vicente B. Villa & Hijos. Expropiaciones..... 244
ÁLVAREZ MANUEL JOSÉ. Cesionario de varios individuos. Expropiaciones..... 257
ÁLVAREZ MANUEL JOSÉ. Cesionario de Heliodoro Mejía y otros. Suministros etc..... 305
ÁLVAREZ SANTOS. Proceso militar. (Fuga de un preso)..... 399
ÁLVAREZ MANUEL J. Cesionario de Eduardo Jaramillo A., Juan Olano y otros. Expropiaciones..... 409
ALVIAR JOSÉ DE JESÚS. Proceso criminal. (Violación de leyes expresas)..... 203
AMADOR DE NÚÑEZ CARMEN. Recompensa..... 315
AMPAROS DE POBREZA. Véanse las resoluciones recaídas en los juicios seguidos sobre esto por los individuos siguientes:
1.° Indalecio y Candelario Tobar..... 142
2.° Sinforoso Mancera..... 411
ANGARITA RAMÓN. Cesionario de Juan C. Silva y Gregorio Uribe. Suministros etc..... 332
ANGEL BENICIO. Expropiaciones..... 11
ANGEL AQUILINO. Apoderado de Julio Castro y Benicio Ángel. Expropiaciones..... 11

Páginas.

ÁNGEL ISIDORA. Recompensa..... 20
ANGULO LÁZARO. Recompensa..... 131
ARAMBURO JUAN CRISÓSTOMO. Expropiaciones..... 11
ARANGO P. GABRIEL. Expropiaciones..... 108
ARBOLEDA JACINTO. Casación civil (reivindicación de un inmueble)..... 14
ARBOLEDA JUAN ANTONIO. Recompensa..... 134
ARCOS CARMEN. Recompensa..... 154
ARENAS MARCO A. Ejecución contra él..... 405
ARIAS MARÍA DE JESÚS. Recompensa..... 165
ARIAS NEPOMUCENO Y OTRO. Ejecución contra ellos. 167
ARJONA DE ARJONA ELOÍSA. Recompensa..... 54
ARRAUT JOSÉ MARÍA. Empréstitos..... 81
ARROYO GONZALO. Ejecución contra el Departamento de Cundinamarca..... 286
ASTUDILLO DOLORES. Recompensa..... 404
AUTOS EN NEGOCIOS CIVILES. Véanse los dictados en los juicios seguidos por los individuos siguientes:
—Francisco Rueda Sarmiento. (Nulidad de unos títulos)..... 31
—Compañía del Ferrocarril de Panamá. (Alumbrado eléctrico)..... 47, 151
—Eusebia Hernández. (Recompensa)..... 63
—Departamento de Boyacá contra Nepomuceno Arias y otro..... 167
—Rafael Aizpuru contra el Departamento de Panamá, por pesos..... 167
—Agente Fiscal de Panamá contra Francisco Machuca..... 174
—Oficina general de Cuentas contra Remigio Martínez..... 175
—Fiscal del Circuito de Pasto contra Ángel María Ordóñez, sobre reposición de un puente... 207
—Rafael Toledo contra la Nación, por pesos..... 207
—Honorato Espinosa, sobre denuncia de obra nueva 228
—Josefina y Angélica Girón, sobre deslinde de unos terrenos..... 229, 277
—Gonzalo Arroyo contra el Departamento de Cundinamarca, por pesos..... 286
—Agente Fiscal de Panamá contra Antonio Papi Aizpuru..... 304
—Compañía del Canal Interoceánico, sobre nulidad de un interdicto posesorio..... 304
—Fiscal del Tribunal de Panamá contra Domingo de Icaza, sobre reivindicación de unos terrenos 317
—Tesorero municipal de La-Vega contra Eusebio Bejarano..... 352
—Jesús Avella, sobre desahucio de una casa..... 352
—Edelina Nieto, sobre patronato de una capellanía..... 367
—Joaquín Rengifo Salazar, sobre la venta de una boleta de registro..... 407
—José Antonio Ortiz. Juicio contra él..... 412
—Contador general de Panamá contra Juan N. Aicardy..... 413
—Hipólito Sánchez. Rebaja de pena..... 414
—Timoteo Peñalosa. Rebaja de pena..... 415
Véase *Administradores de Hacienda, Administradores de Aduanas, Amparos de pobreza, Recursos de hecho, Recursos de revisión, Ordenanzas (suspensión de), Concursos de acreedores, Casación* (autos en negocios de).
AUTOS EN NEGOCIOS CRIMINALES. Véanse los dictados en los procesos seguidos contra los individuos siguientes:
—Lino Cárdenas (abandono de su destino)..... 32
—Félix Zúñiga. (Insubordinación)..... 32
—Jesús María Zorrilla. (Falta á sus deberes)..... 40
—Adán Vargas. (Violación de correspondencia privada)..... 63
—Buenaventura Caicedo. (Homicidio voluntario). 63, 64
—Miguel Piedrahita Casas. (Mala conducta)..... 64
—Juan J. Newball. (Abuso de autoridad)..... 72

Páginas.

—Ildefonso Díaz del Castillo. (Varios hechos)..... 88
—Lorenzo A. Berrío. (Falsedad de un documento público)..... 95
—Anónimo. (Habérseles cortado el cabello á unas mujeres)..... 96
—Agustín Mier. (Abuso de autoridad)..... 103
—Adolfo León Gómez. (Denegación de justicia).. 104
—Telésforo Cevallos. (Varios cargos)..... 104
—Máximo Hernández Pinto. (Varios cargos)..... 110
—Ramón Valdés López. (Violación del artículo 378 del Código Penal)..... 111
—José Félix Montenegro. (Varios cargos)..... 111
—Luis R. Alfaro, Agustín Jované y Manuel José Pérez. (Varios cargos)..... 112
—Gregorio Quiñones. (Falsedad)..... 120
—Sinforoso Quiroga. (Varios cargos)..... 126
—Juan N. Méndez, Acisclo Molano y Enrique Ramírez. (Atentado contra los derechos individuales)..... 126
—Miguel Piedrahita Casas. (Mala conducta)..... 152
—Joaquín Navia Arzayús. (Varios cargos)..... 168
—Jesús Guerrero García. (Prevaricato)..... 168
—Junio Solano. (Abuso de autoridad)..... 176
—Matías A. Múnera. (Abuso de autoridad)..... 231
—Rafael Castañeda. (Varios cargos)..... 231
—Jesús María Quintero P., Antonio María Rueda G. y Nicolás Enciso. (Infracción de leyes expresas)..... 256
—Gonzalo Mejía. (Violación de leyes)..... 256
—Valentín Pérez. (Contrabando)..... 256
—Luis Carlos Piñeres. (Varios cargos)..... 264
—Miguel Piedrahita Casas. (Mala conducta)..... 264
—Magistrados del Tribunal de Cundinamarca. (Infracción de leyes)..... 271
—José Inocencio Calero. (Abusos de autoridad)... 280
—Manuel García Gordon. (Prevaricato)..... 287
—Manuel F. Pineda. (Abuso de autoridad)..... 288
—Arcadio Charri, Gabriel Vargas C. y Elisio Medina. (Falsedad en documento público)..... 295
—Lisandro Caicedo. (Falsedad de un documento). 296
—Ramón Clavijo. (Suplantación de unos nombres) 296
—Pedro A. Pallares. (Falsificación de un documento público)..... 304
—Joaquín Buitrago. (Varios cargos)..... 318
—Crisanto Valenzuela. (Abuso de autoridad)..... 318
—Capitán del vapor *Rafael Núñez*. (Desobediencia)..... 343
—José Inocencio Calero. (Varios cargos)..... 381
—Carlos Sampedro. (Pérdida de varios procesos criminales)..... 382
—Carlos S. Nieto. (Abuso de autoridad)..... 392
—José del Carmen Hernández Blanco. (Prevaricato)..... 408
Véase *Competencias, Recursos de revisión.*
AVELLA JESÚS. (Desahucio de una casa)..... 352
AVENDAÑO EVANGELISTA. (Recompensa)..... 154
AYALA DANIEL. (Proceso militar)..... 135
AYCARDI HERMANOS. (Expropiaciones)..... 107
AYCARDI JUAN N. (Juicio contra él)..... 413

B

BANCO NACIONAL. Ejecución contra Leonidas Posada Gaviria..... 5
BANCO POPULAR. Ejecución contra Fernando y Rómulo Sánchez..... 406
BARÓN FRANCISCO. Ejecución contra él..... 94
BARRERA LIBORIA. Pena capital..... 361
BARRIGA MATILDE. Recompensa..... 387
BEDOYA PIOQUINTO. Recompensa..... 21
BEDOYA BEATRIZ. Recompensa..... 198
BEJARANO EUSEBIO. Ejecución contra él..... 352
BELTRÁN DE GARCÍA CORNELIA É HIJA. Recompensa..... 325

Páginas.

BELTRÁN ISIDRO. Pena capital....401, 403
BELLO PEDRO P. Expropiaciones.... 20
BERMÚDEZ PABLO. Juicio contra el Tesoro nacional. 354
BERNAL DEOGRACIAS Y CIRCUNCISIÓN. Dominio de unos terrenos.... 208
BERRÍO LORENZO A. Sumario contra él.... 95
BETANCOURT INDALECIO. Auto en sumario contra él. 405
BLAIR BENIGNA. Recompensa.... 84
BOLÍVAR R. HILARIO. Causa por abandono de destino.... 103
BORRERO TRÁNSITO. Recompensa.... 71
BOTERO URIBE BALTASAR. Toma posesión del puesto de Magistrado principal de la Corte.... 1, 384
BRAVO DAVID. Recompensa.... 19
BUENO RAFAEL JENARO. Ejecución contra él.... 167
BUITRAGO MANUEL S. Y OTRO. Expropiaciones.... 83
BUITRAGO JOAQUÍN. Sumario contra él, por varios cargos.... 318
BUITRÓN CECILIO. Recompensa.... 297

C

CABAL FORTUNATO. Expropiaciones.... 91
CAICEDO BUENAVENTURA. Proceso militar.... 63, 227
CAICEDO MARÍA FIDELA. Recompensa.... 240
CAICEDO LISANDRO. Proceso contra él.... 296
CAICEDO MANUEL MARÍA. Recompensa.... 324
CAICEDO D. EUSTAQUIO. Casación civil. (Partición y dominio de los terrenos de "Monterralo.")... 327
CAIPA ANTONIO. Expropiaciones.... 51
CALDERÓN JOSÉ MARÍA. Cesionario de Lorenzo Garzón. Suministros etc.... 124
CALDERÓN VÍCTOR MANUEL. Ejecución contra él.... 287
CALERO JOSÉ INOCENCIO. Sumarios contra él, por abuso de autoridad y por varios cargos....280, 381
CALVO FÉLIX. Recompensa.... 85
CALVO MENDÍVIL AGUSTÍN. Juicio contra Lastenia Calvo, por perjuicios.... 58 á 62
CAMACHO L. RAFAEL. Suministros etc.... 210
CAMARGO ENRIQUE. Cesionario de Fernando Ricaurte y José Santos. Expropiaciones.... 393
CAMPO DE HERNÁNDEZ PETRONA. Recompensa.... 326
CAMPO QUITERIA. Recompensa.... 404
CAMPUZANO JULIÁN. Juicio contra Antonio M. de la Cuadra y Ramón B. Jimeno.... 233
CANO JOSÉ HILARIO. Recurso de hecho.... 56
CANO JOSÉ MARÍA. Expropiaciones.... 405
CANTILLO LIBORIO D. Cesionario de Vicente Gutiérrez. Suministros etc.... 131
CANTILLO PRUDENCIO. Expropiaciones.... 226
CANTINI PEDRO. Véase *Olaya Ricaurte Rafael.*
CAÑADAS JUAN. Recompensa.... 140
CAÑAR MARCELINA. Recompensa.... 284
CAPITÁN DEL VAPOR *Rafael Núñez.* Sumario contra él. (Desobediencia).... 343
CARAZO NICANOR. Expropiaciones.... 209
CÁRDENAS LINO. Proceso contra él. (Abandono de su empleo).... 32
CÁRDENAS DE DELGADO TORIBIA. Expropiaciones... 226
CARRASQUILLA MERCEDES Y MARÍA JOSEFA. Recompensa.... 239
CARRIZOSA DE MOGOLLÓN HERMENCIA. Recompensa. 41
CASACIÓN. (Sentencias de). ASUNTOS CIVILES. Véanse las dictadas en juicios seguidos por los individuos siguientes:
1.° Presbítero José Joaquín Hoyos. (Resolución de un contrato).... 2, 50
2.° Rafael Olaya Ricaurte y otros. (Posesión de una mina).... 25
3.° Agustín Calvo Mendívil. (Perjuicios).... 58 á 62
4.° Estanislao y Daniel Merino. (Deslinde de unas minas).... 66 á 70
5.° María del Carmen Echeverri. (Deslinde de unos terrenos).... 74 á 76

Páginas.

6.° Compañía del Ferrocarril de Panamá. (Pago de una suma y nulidad de unos contratos).... 76 á 79
7.° Matías Delgado. (Declaración de herederos). 113
8.° A. James & Compañía. (Por pesos).... 155 á 159
9.° Compañía minera de Colombia. (Oposición á la adjudicación de una mina).... 177
10. Francisco de P. Mateus. (Nulidad de un testamento).... 182
11. Alejandro Rodríguez F. (Por pesos).... 190
12. Medardo Ribas. (Por pesos).... 195
13. Rafael Roca. (Rendición de cuentas).... 210
14. Julián Campuzano. (Para que no le quiten el agua que mueve un molino de su propiedad).... 233
15. Rafael Aizpuru. (Nulidad de un contrato y otros cargos).... 249
16. Manuela Gonzalías. (Nulidad de un testamento).... 259
17. José Inocencio Rosero y otro. (Nulidad de un contrato).... 298
18. Primitivo Freire. (Por pesos).... 333
19. Tomás Currea. (Resolución de un contrato é indemnización de perjuicios).... 346
20. Eduardo Uribe U. & Compañía. (Por pesos)... 384
21. Hilario Quintero. (Dominio de unos terrenos) 388
Véase *Concursos de acreedores.*

CASACIÓN. *Sentencias en negocios criminales.* Véanse las dictadas en los procesos seguidos, por asesinato, contra los individuos siguientes:
1.° Tobías Morillo.... 33
2.° José Acebedo.... 49
3.° Resurrección Castillo.... 65
4.° Dimas Gómez.... 73
5.° Quiterio y Santos Pérez.... 97
6.° Modesto Alvarado.... 105
7.° Manuel Dolores Larrahondo.... 137
8.° Santiago Jiménez.... 163
9.° Mariana Sánchez.... 188
10. Salomón Hernández ó Ladino.... 217
11. Apolinar Restrepo.... 266
12. Froilán Márquez.... 321
13. Liboria Barrera.... 361
14. Eleuterio Ospina.... 362
15. Horacio Sáenz.... 369
16. Alejandro Omén é Isidro Beltrán....401, 403

CASACIÓN. Autos en juicios seguidos por los individuos siguientes:
—Compañía minera de Colombia. (Oposición á la adjudicación de una mina).... 12
—Leonardo González. (Nulidad de un testamento). 12
—Jacinto Arboleda. (Reivindicación de un inmueble).... 14
—José Emeterio Moreno. (Nulidad de una partición).... 22
—Ignacio Sáenz de San Pelayo. (Ejecución).... 22
—Manuel María Zaldúa. (Varios cargos).... 23
—Josefa Pérez. (Dominio de unos terrenos).... 45
—Dionisia Daniel contra Víctor Carvajal).... 87
—Cándido Jara contra los herederos de Cipriana Parada....119, 166
—Francisco Plata contra Julián Orejarena.... 142
—Cayetana Rodríguez y otros contra Evarista Rodríguez y otros.... 143
—Guillermo Ponce contra Vicente Berrío....160, 200
—Antonio Pómez y otros contra Dámaso Eugenio Gaviria....176, 293
—Deogracias y Circuncisión Bernal contra Teresa Urrea y otros.... 208
—Rafael Roca contra Pantaleón Gaitán.... 216
—Pedro Goitia contra Fernando Robles.... 278
—Tomás Paredes contra Henry Ehrman....309, 312
—Manuel Camacho. (Dominio y partición de los terrenos de "Monterralo").... 327
—Gabriel Rubio contra Luis María Rubio.... 335

Páginas

—Francisco de P. Manotas. (Declaración de herederos)..... 367
—Banco Popular contra Fernando y Rómulo Sánchez..... 406
—Froilán Vega O. (Sobre nulidad de un remate). 407
CASANOVA JACINTO. Proceso militar..... 308
CASANOVA MARÍA JOSEFA. Recompensa..... 365
CASTAÑEDA RICARDO. Expropiaciones..... 118
CASTAÑEDA RAFAEL. Causa criminal, por varios cargos..... 231
CASTAÑEDA IGNACIO. Ejecución contra él..... 306
CASTAÑO ADOLFO. Competencia suscitada en el sumario instruído contra él..... 95
CASTILLO JAIME. Causa criminal contra él..... 136
CASTILLO RESURRECCIÓN. Pena capital..... 65
CASTRO JULIO. Expropiaciones..... 11
CASTRO DIEGO DE J. Causa criminal contra él..... 38
CAYCEDO RAFAELA. Recompensa..... 395
CEVALLOS TELÉSFORO. Sumario contra él..... 104
CLAVIJO RAMÓN. Sumario contra él..... 296
COBO MANUEL JOSÉ. Pensión vitalicia..... 119
COBO JOSÉ. Recompensa..... 292
COCK BAYER JULIÁN. Causa criminal contra él..... 203
COGOLLOS EUSTAQUIO. Expropiaciones..... 184
COMPAÑÍA DEL FERROCARRIL DE PANAMÁ. Alumbrado eléctrico..... 47, 151
COMPAÑÍA DEL FERROCARRIL DE PANAMÁ contra S. L. Isaacs & Asch, sobre pago de una suma y rescisión de unos contratos..... 76 á 79
COMPAÑÍA MINERA DE COLOMBIA contra la Compañía minera de Santander, sobre oposición á la adjudicación de una mina..... 177
COMPAÑÍA DEL CANAL INTEROCEÁNICO contra José Hilario Cano, sobre nulidad de un interdicto posesorio..... 304
COMPETENCIAS. Véanse los autos dictados en los asuntos siguientes;
1.° Sumario instruído contra Adolfo Castaño..... 95
2.° Sumario instruído contra Milcíades Heredia V. 343
CONCURSOS DE ACREEDORES. Véanse los formados á los bienes de los individuos siguientes:
—José María Salgado (auto)..... 160
—Jesús María Ramírez (auto)..... 360
—Jacinto Velásquez (sentencia de casación)..... 171
—Jesús María Ramírez (sentencia de casación).... 219
—Joaquín Piñeros (sentencia de casación)..... 337
CONJUECES DE LA CORTE EN EL AÑO DE 1893. Acuerdo que los nombra..... 194
CONTRERAS IGNACIO. Proceso militar..... 277
CORONADO JOSÉ GNECCO. Causa contra él, por abandono del empleo de Juez Superior del Magdalena..... 103
CORTECERO FEDERICO. Expropiaciones..... 302
CORRALES ALEJANDRO. Recompensa..... 110
CORRALES MANUEL EZEQUIEL. Sepárase de la Magistratura en uso de licencia..... 146, 163
COSTAS. Auto que imprueba el dictamen pericial sobre tasación en el concurso formado á los bienes de Jesús María Ramírez..... 360
COTE GABINO. Expropiaciones..... 353
CUADROS *que representan el movimiento de negocios en la Corte:*
Mes de Noviembre de 1892..... 1, 2
Mes de Diciembre..... 129, 130
En Enero de 1893..... 145, 146
En Febrero..... 161, 162
En Marzo..... 169, 170
En Abril..... 186
En Mayo..... 247
En Junio..... 319, 320
En Julio..... 383
En Agosto..... 415
CUÉLLAR CORNELIO. Recompensa..... 108
CURREA LAURENTINO. Véase *Olaya Ricaurte Rafael.*

Páginas

CURREA TOMÁS. Casación civil. Juicio contra Leopoldo Montejo, sobre resolución de un contrato é indemnización de perjuicios..... 346

CH

CHACÓN PETRONA. Expropiaciones..... 283
CHAMORRO TREJO BALTASARA. Recompensa..... 57
CHAMORRO JUAN E. Ejecución que le sigue el Administrador de Hacienda de Obando..... 414
CHARRI ARCADIO. Denuncio dado contra él por Lisandro A. Moreno..... 295
CHITO BLAS. Recompensa..... 388

D

DANIEL DIONISIA. Casación civil. Juicio contra Víctor Carvajal, sobre nulidad de una escritura y un contrato..... 87
DAVID TEODORO. Ejecución contra él..... 200
DELGADO CAYETANO. Causa criminal, como Fiscal del Tribunal del Cauca..... 55
DELGADO SIXTO. Recompensa..... 57
DELGADO MATÍAS. Casación civil. Juicio contra José María y Juana B. Delgado, sobre declaración de herederos..... 113 á 118
DELGADO JUANA MARÍA. Recompensa..... 313
DELGADO DELFINA. Recompensa..... 345
DÍAZ PINILLA RICARDO. Véase *Rueda Sarmiento Francisco.*
DÍAZ DEL CASTILLO ILDEFONSO. Proceso criminal. (Varios cargos)..... 88
DÍAZ MARÍA IGNACIA Y OTRO. Recompensa..... 148
DÍAZ ROSA. Recompensa..... 211
DOMÍNGUEZ CAMILO. Expropiaciones..... 366
DUARTE ANTONIO. Proceso militar (deserción)..... 86
DUPUY JULIO J. Véase *Zaldúa Manuel María.*
DUQUE ANASTASIO. Cesionario de varios individuos. Empréstitos..... 36
DURÁN JEREMÍAS Y OTROS. Empréstitos..... 202
DURÁN LORENZO. Recompensa..... 302

E

ECHEVERRI MARÍA DEL CARMEN. Casación civil. Juicio contra Agustín Arango, sobre deslinde de unos terrenos..... 74
ENCISO NICOLÁS. Denuncio dado contra él por Lorenzo Gaona..... 271
ESCOBAR A. RICARDO. Ejecución contra él..... 79
ESCOBAR JOAQUÍN MARIANO. Ejecución contra él... 175
ESCOBAR FABRICIANO. Sumario contra él. (Violación de leyes expresas..... 203
ESPINOSA HONORATO. Juicio contra la Nación, sobre denuncia de obra nueva..... 228
EXPROPIACIONES. Véase *Suministros etc.*

F

FERNÁNDEZ FRANCISCO. Recompensa..... 11
FERNÁNDEZ CATALINA. Recompensa..... 291
FERNÁNDEZ M. JULIO. (Cesionario de Enrique Moreno y otros). Expropiaciones..... 378
FERNÁNDEZ DE SOTO ABRAHAM. Posesiónase del empleo de Magistrado principal de la Corte..... 241
FIGUEROA DE ESPINOSA EVARISTA. Daños sufridos en la última guerra..... 323
FLÓREZ URREGO ROSA. Recompensa..... 108
FORERO DE ESTRADA MICAELINA. Recompensa..... 107
FORTICH IGNACIO E. Expropiaciones..... 303
FRANCO LUCIO. Expropiaciones..... 17
FREIRE PRIMITIVO. Casación civil. Juicio contra Heliodoro Monroy, por pesos..... 333

G

Páginas.

GAITÁN JESÚS Y ESPOSA. Recompensa..... 93
GALINDO ANÍBAL. Posesiónase del empleo de Magistrado principal de la Corte.....170, 384
GAMERO DOLORES. Recompensa..... 357
GAONA LORENZO. Denuncio dado por él contra los Magistrados del Tribunal de Cundinamarca..... 256
GARCÍA ALEJANDRO. Recompensa..... 4
GARCÍA LUCIO. Recompensa..... 7
GARCÍA GONZALO. Expropiaciones..... 25
GARCÍA HERSILIA. Expropiaciones..... 42
GARCÍA JOSÉ MARÍA. Pensión vitalicia..... 93
GARCÍA RUPERTO. Expropiaciones..... 149
GARCÍA GORDON MANUEL. Sumario contra él. (Prevaricato)..... 287
GIL FRANCISCA ANTONIA. Recompensa..... 36
GOITIA PEDRO. Casación civil. Juicio que le siguió Fernando Robles, sobre dominio de un terreno..... 278
GÓMEZ DIMAS. Pena capital..... 73
GÓMEZ MARGARITA. Recompensa..... 293
GÓMEZ MARTA. Recompensa..... 324
GÓMEZ DIMAS. Recompensa..... 345
GONZÁLEZ LEONARDO. Recurso de casación por él interpuesto..... 12
GONZÁLEZ V. MANUEL. Empréstitos..... 102
GONZÁLEZ BELARMINA. Recompensa..... 201
GONZÁLEZ JUANA. Recompensa..... 271
GONZÁLEZ OSPINA PANTALEÓN. Suministros..... 379
GONZÁLEZ BENITO EUGENIO Y OTRO. Véase *Vega O. Froilán.*
GONZALÍAS MANUELA. Casación civil. Juicio sobre nulidad de un testamento..... 259
GROOT FRANCISCO. (Cesionario de Domingo Forero). Expropiaciones..... 354
GUERRERO GARCÍA JESÚS. Sumario que se le instruyó como Juez 2.° suplente del Circuito de Oriente (Cundinamarca) por prevaricato..... 168
GUERRERO ADOLFO. Expropiaciones..... 410
GUTIÉRREZ RICARDO. Expropiaciones..... 149
GUTIÉRREZ MANUEL VIDAL. Recompensa..... 314

H

HEREDIA VACA MILCÍADES. Competencia suscitada en el sumario instruído contra él..... 343
HERNÁNDEZ EUSEBIA. Recompensa..... 63
HERNÁNDEZ PINTO MÁXIMO. Proceso criminal contra él. (Varios hechos)..... 110
HERNÁNDEZ (Ó LADINO) SALOMÓN. Pena capital..... 217
HERNÁNDEZ CHICAÍZA CLARA. Recompensa..... 393
HERNÁNDEZ BLANCO JOSÉ DEL CARMEN. Sumario que se le instruyó como Fiscal del Circuito de Chinácota, por prevaricato..... 408
HERRERA SIMÓN DE JESÚS. Véase *Hoyos José Joaquín.*
HERRERA LINO CLEMENTE. Causa criminal contra él. (Varios cargos)..... 43
HOYOS JOSÉ JOAQUÍN (Presbítero). Recurso de casación. Juicio contra Simón de Jesús Herrera (Presbítero), sobre resolución de un contrato..... 2, 50
HOYOS RAMÓN. Proceso contra él, como Prefecto de la Provincia de Toro, por no haber concurrido á una visita de cárcel..... 406
HURTADO LUCIO. Recompensa..... 140
HURTADO DEMETRIO. Expropiaciones..... 227
HURTADO SANTOS. Expropiaciones..... 240

I

IBARRA JOSÉ ANTONIO. Expropiaciones..... 148
ICAZA DOMINGO. Juicio que contra él sigue el Fiscal del Tribunal de Panamá, sobre reivindicación de unos terrenos..... 317
ISAZA ANICETO Y OTROS. Suministros etc..... 109

J

Páginas.

JAMES A. & COMPAÑÍA. Juicio que siguieron contra William E. Stern, por pesos .....155 á 159
JARA CÁNDIDO. Casación civil. Juicio que siguió contra los herederos de Cipriana Parada.....119, 166
JIMÉNEZ SANTIAGO. Pena capital..... 163
JIBÓN ANGÉLICA Y JOSEFINA. Juicio que siguen contra la Sociedad explotadora de los bosques de alto "Chilibre," sobre deslinde de unos terrenos..229, 277
JOVANÉ AGUSTÍN. Diligencias sumarias contra él. (Varios cargos)..... 112

L

LARA ANDRÉS. (Cesionario de Norberto Tabarís). Expropiaciones y empréstitos..... 85
LARA ANDRÉS. (Cesionario de los herederos de José Antonio Rojas y Ana María Gironza). Suministros etc..... 100
LARRAHONDO MANUEL DOLORES. Pena capital..... 137
LA ROTTA H. SALVADOR. Pensión vitalicia..... 153
LASERNA ALEJANDRO. Ejecución contra él..... 326
LEDESMA MANUELA. Recompensa..... 11
LEDESMA MARTÍNEZ INÉS. Recompensa..... 21
LENIS ANDRÉS. Suministros etc..... 31
LEÓN GÓMEZ ADOLFO. Proceso criminal que se le siguió por denegación de justicia..... 104
LESMES RICARDO. Expropiaciones..... 90
LIÉVANO ARISTIDES. Proceso militar. (Ataque y heridas á un superior)..... 245
LINCE P. ALEJANDRO. Recurso de hecho..... 406
LINDO LETICIA. Recompensa..... 258
LONDOÑO DE BOTERO MATILDE. Recompensa..... 70
LONDOÑO LUCIO. Expropiaciones..... 410
LÓPEZ ASUNCIÓN. Recompensa..... 132
LÓPEZ OLIER & COMPAÑÍA. Ejecución que les siguió el Administrador de la Aduana de Barranquilla..... 152, 287, 311 413
LÓPEZ ELEAZAR Y JOSÉ ANTONIO. Recompensa..... 225
LÓPEZ CRISTINA. Recompensa..... 301
LÓPEZ MARÍA. Recompensa..... 355
LOZANO F. CARMEN. Recompensa..... 58
LUNA BONIFACIO. Empréstitos y expropiaciones..... 85
LUNA JUAN. Proceso militar. (Fuga de un preso)... 199

LL

LLANTÉN EVANGELISTA. Expropiaciones..... 192

M

MACHUCA FRANCISCO. Juicio que le sigue el Agente Fiscal del Distrito capital de Panamá..... 174
MAGAÑA FRANCISCO A. Suministros etc..... 275
MALAVER JUAN. Recompensa..... 165
MALO PLÁCIDO. Ocupa el puesto de Escribiente interino de la Corte..... 384
MANCERA SINFOROSO. Amparo de pobreza..... 411
MANOTAS FRANCISCO DE P. Recurso de casación. Juicio sobre declaración de herederos..... 367
MANRIQUE LEONARDO. Expropiaciones..... 147
MARÍN JUANA. Recompensa..... 132
MÁRQUEZ FROILÁN. Pena capital..... 321
MARTÍNEZ DE GUZMÁN PELAGIA. Ejecuciones acumuladas seguidas contra ella..... 123
MARTÍNEZ BENJAMÍN Y ABRAHAM Y OTRO. Recurso de revisión..... 126
MARTÍNEZ R. BENJAMÍN. Sumario que se le instruyó, por omisión en el cumplimiento de sus deberes. 141
MARTÍNEZ REMIGIO. Juicio que le sigue la Oficina general de Cuentas..... 175
MARTÍNEZ NAVARRETE ADOLFO. Expropiaciones.... 222
MARTÍNEZ E. JOAQUÍN. Ocupa el puesto de Magistrado interino de la Corte..... 384

Páginas.

MATEO DE VILLALOBOS PETRONA. Recompensa..... 192
MATEUS FRANCISCO DE P. Recurso de casación. Juicio que siguió sobre nulidad de un testamento 182
MEDINA ISABEL. Recompensa..... 150
MEDINA ELISIO. Denuncio dado contra él, por Lisandro A. Moreno..... 295
MEDINA MARIANO DE JESÚS. Separóse del puesto de Magistrado suplente de la Corte, en virtud de renuncia que hizo..... 1
MEJÍA GONZALO. Denuncio que contra él dió Apolinar Mutis..... 256
MÉNDEZ JUAN N. Sumario contra él. (Atentados contra los derechos individuales)..... 126
MERCADO JARAMILLO JOSÉ CLEMENTE. Recompensa. 90
MERA BEATRIZ. Recompensa..... 102
MERINO ESTANISLAO Y DANIEL. Recurso de casación. Juicio que siguieron sobre deslinde de unas minas. 66 á 70
MICOLTA VICENTE. Proceso que se le instruyó por denegación de un auxilio de él solicitado, en su calidad de Prefecto de Barbacoas..... 7
MIER AGUSTÍN. Se ordena la cesación de todo procedimiento criminal contra él..... 103
MODAFFARI LEONARDO. Véase *Arboleda Jacinto.*
MOLANO ACISCLO. Proceso criminal contra él. (Atentado contra los derechos individuales)..... 126
MONTEALEGRE TOMASA. Ejecución contra ella..... 23
MONTENEGRO JOSÉ F. Proceso criminal contra él. (Varios cargos)..... 111
MONTERO MARÍA JOSEFA. Recompensa..... 122
MONTES BRAULIO. Recompensa..... 4
MORALES DIMAS. Empréstitos etc..... 101
MORALES ANDRÉS. Expropiaciones 314
MORCILLO ELÍAS D. Ejecuciones acumuladas seguidas contra él..... 215
MORENO JOSÉ EMETERIO. Recurso de casación. Nulidad de una partición)..... 22
MORENO JOSÉ TRINIDAD. Suministros etc..... 225
MORENO FRANCISCO. Recompensa..... 315
MORILLO TOBÍAS. Pena capital..... 33
MOSQUERA MANUEL MARÍA. Recompensa..... 7
MOSQUERA ALEJANDRO. Ejecución que le sigue el Administrador de Hacienda de San-Juan..... 399
MÚNERA MATÍAS A. Proceso criminal. (Abuso de autoridad)..... 231
MUÑOZ JESÚS MARÍA. Proceso militar. (Insubordinación y ataque á un superior) 39
MUÑOZ MANUEL. Recompensa..... 155
MUÑOZ DOMINGA. Recompensa..... 259
MUÑOZ JUAN DE DIOS. Recompensa..... 394
MUTIS APOLINAR. Causas de responsabilidad acumuladas, seguidas contra él. (Varios cargos)..... 159

N

NARVÁEZ SANTIAGO. Recompensa..... 54
NARVÁEZ ANASTASIA. Recompensa..... 131
NAVARRO TOMÁS. Proceso que se le siguió, como Prefecto de la Provincia de Cartagena, por detención arbitraria..... 285
NAVIA ARZAYÚS JOAQUÍN. Proceso criminal. (Por varios cargos)..... 168
NAVIA RAFAEL. Expropiaciones..... 223
NAVIA MARÍA JOSEFA. Recompensa..... 324
NEWBALL JUAN J. Proceso criminal, por abuso de autoridad..... 72
NICHOLLS BRAULIO Y OTROS. Suministros etc..... 388
NIETO EDELINA. Juicio que siguió sobre patronato de una capellanía..... 367
NIETO CARLOS S. (Proceso criminal. Abuso de autoridad)..... 392
NOGUERA MARÍA LUISA É HIJOS. Recompensa..... 153
NOMBRAMIENTOS DE ESCRIBIENTES DE LA CORTE. Acuerdo sobre esto..... 195
NORIEGA JUAN. Proceso criminal. (Omisión en el cumplimiento de sus deberes)..... 141
NOVOA ZERDA BENJAMÍN. (Cesionario de Ramón F. de León y Rafael Mesa Guarín). Sumistros etc.... 165
NULIDAD. Se declara la de un proceso seguido contra el soldado Félix Zúñiga, por insubordinación.. 32
—La del proceso militar seguido á Buenaventura Caicedo, por homicidio voluntario..... 64
—La de la causa seguida contra Calazans y Resurrección Castillo, por homicidio..... 65
—La del juicio seguido por el Fiscal del Circuito de Pasto contra Ángel María Ordóñez, sobre reposición de un puente..... 207
—La de la ejecución seguida por el Administrador de la Aduana de Barranquilla contra López Olier & Compañía..... 152

O

OLAYA RICAURTE RAFAEL. Recurso de casación. Juicio sobre posesión de una mina..... 25
OLIER DE LÓPEZ MERCEDES. Recurso de hecho..... 94, 120
OMEN ALEJANDRO. Pena capital..... 401, 403
ORDENANZAS. (Suspensión de). Véanse las resoluciones dictadas en las solicitudes sobre suspensión de las siguientes:
La número 25 de 1890 de Cundinamarca..... 88
La número 13 de 1892, expedida por la Asamblea de Cundinamarca..... 254
La número 56, expedida por la Asamblea de Cundinamarca..... 286
Artículo 16 de la número 21, expedida por la Asamblea de Boyacá en 1888..... 303
Las números 27 de 1890 y 5.ª de 1892, expedidas por la Asamblea de Panamá..... 379
ORDÓÑEZ CLAUDIO. Recompensa..... 84
ORDÓÑEZ ÁNGEL MARÍA. Juicio contra él, sobre reposición de un puente..... 207
ORDÓÑEZ ESTEFANÍA. Expropiaciones..... 274
ORJUELA B. JENARO. Sepárase del puesto de Escribiente de la Secretaría de la Corte, en uso de licencia..... 384, 415
ORTEGA MERCEDES Y OTROS. Recompensa..... 51
ORTEGA PEDRO. Recompensa..... 53
ORTEGA AGUSTINA. Recompensa..... 316
ORTIZ CORNELIA. Recompensa..... 166
ORTIZ JOSÉ MARÍA. Recompensa..... 214
ORTIZ LUCINDA. Recompensa..... 244
ORTIZ JOSÉ ANTONIO. Ejecución que se le sigue, como Tesorero municipal de Arboledas..... 412
ORTIZ Y. CIFUENTES JUAN B. Sumario contra él, como Juez 2.° del Circuito del Norte de Boyacá, por falta de asistencia al despacho..... 359
OSPINA RUDESINDO. Juicio que se le siguió sobre reposición de un puente..... 274
OSPINA ELEUTERIO. Pena capital..... 362
OTÁLVORA TERESA. Suministros etc..... 281

P

PACHÓN ANTONIO. Sepárase del puesto de Relator de la Corte, en uso de licencia..... 384
PALACIO BENJAMÍN. (Cesionario de Alejandro Gutiérrez y otros). Suministros etc..... 258
PALLARES PEDRO A. Sumario contra él. (Falsificación de un documento público)..... 304
PAPI AIZPURU ANTONIO. Ejecución contra él 304
PARDO PEDRO. Expropiaciones..... 222
PARDO MANUEL MARÍA. Ocupa el puesto de Escribiente interino de la Corte..... 384
PAREDES TOMÁS. Recurso de revisión..... 80
PAREDES DE BÁEZ CARMEN. Recompensa..... 164
PAREDES TOMÁS. Recurso de casación. Juicio contra Henry Ehrman, por pesos..... 309, 312

Páginas.

PARRA NEPOMUCENO. Expropiaciones..... 174
PATIÑO FEDERICO. Ocupa puesto en la Corte como Magistrado suplente.....146, 163
PAZOS ANTONIA. Recompensa..... 396
PAZ RUFINO. Recompensa..... 89
PAZ MARÍA FRANCISCA. Recompensa..... 203
PELÁEZ APARICIO. Expropiaciones..... 224
PENA CAPITAL. Véase *Casación. B.*
PENSIONES. Véanse las decretadas en las demandas de
—Abraham Acebedo..... 19
—José María García..... 93
—Salvador La Rotta H..... 153
PEÑALOSA TIMOTEO. Rebaja de pena..... 415
PEREIRA JUAN PABLO. Expropiaciones..... 329
PÉREZ JOSEFA. Recurso de casación. Juicio contra José Joaquín Vila, sobre dominio de unos terrenos. 45
PÉREZ QUITERIO Y SANTOS. Pena capital..... 97
PÉREZ MANUEL JOSÉ. Causa criminal contra él. (Varios cargos)..... 112
PÉREZ EDUVIGIS. Pensión..... 118
PÉREZ VALENTÍN. Sumario que se le sigue, por contrabando..... 256
PÉREZ JUANA MARÍA. Recompensa..... 322
PÉREZ PEDRO Y OTRO. Recompensa..... 395
PERLAZA DE AYALA DIGNA. Recompensa..... 270
PERLAZA MARÍA CONCEPCIÓN. Recompensa..... 345
PERSONAL DE LA CORTE..... 1, 146, 163, 170, 241, 384
PERSONAL DE LA SECRETARÍA.....384, 416
PIAMBA IGNACIO. Recompensa..... 35
PIEDRAHITA CASAS MIGUEL. Sumarios contra él, por mala conducta.....64, 152, 264
PINEDA MANUEL F. Sumario contra él, por abuso de autoridad..... 288
PIÑERES LUIS CARLOS. Proceso criminal contra él. (Varios cargos)..... 264
PIÑERES GERMÁN. Suministros etc..... 394
PIÑEROS JOAQUÍN. Recurso de casación. Concurso de acreedores..... 337
PLATA FRANCISCO. Recurso de casación. Juicio contra Julián Orejarena, sobre rescisión de una partición. 142
PLAZA NORBERTO. Recompensa..... 134
POLANCO ROSAURA. Recompensa..... 134
POMBO MARTÍNEZ RAFAEL. Ocupa el puesto de Relator de la Corte..... 384
PÓMEZ ANTONIO. Recurso de casación. Juicio contra Dámaso Gaviria, sobre nulidad de un remate y otros cargos.....176, 293
PONCE GUILLERMO. Recurso de casación. Juicio contra Vicente Berrío.....160, 200
POSADA GAVIRIA LEONIDAS. Véase *Banco Nacional.*
POSSE VALENTINA. Recompensa..... 323
POTES EUGENIO. Recompensa..... 219
PRESCRIPCIÓN. Se decreta á favor de Lino Cárdenas. 32
—De José F. Montenegro..... 111
—De Joaquín Navia Arzayús..... 168
—De Luis Carlos Piñeres..... 264
PROCESOS MILITARES. Véanse los fallos dictados en los seguidos contra los individuos siguientes:
Félix Zúñiga..... 32
Jesús María Muñoz..... 39
Adriano Rodríguez..... 43
Adán Vargas..... 63
Buenaventura Caicedo..... 63
Antonio Duarte y Policarpo Santamaría..... 86
Daniel Ayala..... 135
Juan Luna..... 199
Buenaventura Caicedo..... 227
Aristides Liévano..... 245
Ignacio Contreras..... 277
Jacinto Casanova..... 308
Santos Álvarez..... 399
PURÍ PEDRO. Recompensa..... 130

Q

Páginas.

QUIJANO CÓRDOBA DOLORES. Recompensa..... 19
QUIJANO LUIS ANTONIO. Juicio que le siguió el Fiscal del Tribunal de Cundinamarca, sobre rescisión de un contrato..... 141
QUINTANA ANA MARÍA. Recompensa..... 165
QUINTERO MARÍA FELIPA. Recompensa..... 52
QUINTERO P. JESÚS MARÍA. Denuncio dado contra él, por Lorenzo Gaona..... 271
QUINTERO P. JESÚS MARÍA. Ocupa el puesto de Magistrado interino de la Corte..... 384
QUINTERO HILARIO. Recurso de casación. Juicio contra Adelaida Rodríguez de Forero, sobre dominio de un terreno.....388, 392
QUINTERO DOLORES. Expropiaciones..... 395
QUINTERO BÁRBARA Y VICENTA. Recompensa..... 397
QUINTERO V. NICOLÁS Y ULPIANO. Sumario que se les sigue por no haber concurrido á una visita de cárcel..... 406
QUIÑONES GREGORIO. Causa que se le siguió, por falsedad..... 120
QUIROGA SINFOROSO. Sumario que se le instruyó, por varios cargos..... 126

R

RAMÍREZ ELEUTERIO. Causa que se le siguió por falta á sus deberes de Fiscal del Circuito de Jericó. 62
RAMÍREZ EUGENIO. Ejecución que le sigue el Administrador de Hacienda nacional de Antioquia... 80
RAMÍREZ G. ENRIQUE. Diligencias sumarias contra él, por atentado contra los derechos individuales... 126
RAMÍREZ DE RAMÍREZ PETRONA. Pensión..... 174
RAMÍREZ JESÚS MARÍA. Casación civil. Concurso de acreedores.....219, 360
RAMÍREZ ZOLUAGA MIGUEL. Causa que se le siguió, por mala conducta..... 276
RAMÍREZ JOSÉ. Expropiaciones..... 285
RAMÍREZ TERESA. Recompensa..... 293
RAMÍREZ JOSÉ JESÚS. Recompensa..... 397
RAMOS MARCELINO. Recompensa..... 131
RECOMPENSAS MILITARES Y PENSIONES. *(Sentencias sobre esta materia)* en las siguientes demandas:
1.° Alejandro García (concédesele)..... 4
2.° Braulio Montes (concédesele)..... 4
3.° Bernardo Ruiz (niégasele)..... 4
4.° Manuel María Mosquera (niégasele)..... 7
5.° Lucio García (concédesele)..... 7
6.° Tránsito Vidal (concédesele)..... 10
7.° Francisco Fernández (concédesele)..... 11
8.° Manuela Ledesma (concédesele)..... 11
9.° Lisandro Sánchez (concédesele)..... 18
10. David Bravo (concédesele)..... 19
11. Dolores Quijano Córdoba (niégasele)..... 19
12. Abraham Acebedo (pensionado)..... 19
13. Isidora Ángel (concédesele)..... 20
14. Pioquinto Bedoya (concédesele)..... 21
15. Inés Martínez Ledesma (concédesele)..... 21
16. Ignacio Piamba (concédesele)..... 35
17. Manuel Solarte Chaux (concédesele)..... 36
18. Francisca Antonia Gil (concédesele)..... 36
19. Ildefonsa Urrea (concédesele)..... 37
20. José Eugenio Robles (concédesele)..... 37
21. Hermencia Carrizosa de Mogollón (concédesele)..... 41
22. Mercedes Ortega y hermanos (concédeseles). 51
23. María Felipa Quintero (concédesele)..... 52
24. Pedro Ortega (concédesele)..... 52
25. Santiago Narváez (concédesele)..... 54
26. Eloísa Arjona de Arjona (concédesele)..... 54
27. Baltasara Chamorro Trejo (concédesele)..... 57
28. Sixto Delgado (concédesele)..... 57
29. Carmen Lozano F. (concédesele)..... 58
30. Matilde Londoño de Botero (concédesele)... 70

Páginas

31. Tránsito Borrero (concédesele)..... 71
32. Paula Trejo (niégasele)..... 71
33. María Manuela Rojas (concédesele)..... 83
34. Claudio Ordóñez (concédesele)..... 84
35. Benigna Blair (concédesele)..... 84
36. Félix Calvo (niégasele)..... 85
37. María Cruz Alfaro é hijos (concédeseles).... 89
38. Rufino Paz (concédesele)..... 89
39. José Clemente Mercado Jaramillo (concédesele)..... 90
40. Juan Ambrosio Aldana (niégasele)..... 91
41. José María García (pensionado)..... 93
42. Jesús Gaitán y Purificación Páramo (niégaseles)..... 93
43. Sofía Silva (concédesele)..... 94
44. María Vicenta Vaca (concédesele)..... 101
45. Beatriz Mera (niégasele)..... 102
46. Micaelina Forero de Estrada é hijo (concédeseles)..... 107
47. Cornelio Cuéllar (niégasele)..... 108
48. Rosa Flórez Urrego (concédesele)..... 108
49. Alejandro Corrales (concédesele)..... 110
50. Eduvigis Pérez (niégasele)..... 118
51. Manuel José Cobo (niégasele)..... 119
52. Rosa Rico Caballero (concédesele)..... 121
53. María Josefa Montero (concédesele)..... 122
54. Susana y María del Patrocinio Torres (concédeseles)..... 125
55. Pedro Purí (concédesele)..... 130
56. Ricardo Solarte (concédesele)..... 130
57. Marcelino Ramos (concédesele)..... 131
58. Lázaro Angulo (concédesele)..... 131
59. Anastasia Narváez (niégasele)..... 131
60. Asunción López (niégasele)..... 132
61. Juana Marín (concédesele)..... 132
62. Antonio Romero (concédesele)..... 132
63. Isidora Susatama (concédesele)..... 133
64. Rosaura Polanco (concédesele)..... 134
65. Juan Antonio Arboleda (concédesele)..... 134
66. Norberto Plaza (concédesele)..... 134
67. Gricelda y Rosalía Sánchez (concédeseles). 139
68. Juan Cañadas (concédesele)..... 140
69. Lucio Hurtado (concédesele)..... 140
70. Victoria Velasco y Pola Verdugo (concédeseles)..... 146
71. Deudos de Nicolás G. Rentería (concédeseles)..... 148
72. María Ignacia Díaz y Pedro Hoyos (concédeseles)..... 148
73. Isabel Medina (concédesele)..... 150
74. Clotilde Vargas (concédesele)..... 150
75. Salvador La Rotta H. (pensionado)..... 153
76. María Luisa Noguera é hijos (concédeseles). 153
77. Carmen Arcos y otro (concédeseles)..... 154
78. Evangelista Avendaño (concédesele)..... 154
79. Manuel Muñoz (concédesele)..... 155
80. Carmen Paredes de Báez (concédesele)..... 165
81. Ana María Quintana (concédesele)..... 165
82. Juan Malaver (niégasele)..... 165
83. María de Jesús Arias (concédesele)..... 165
84. Cornelia Ortiz (concédesele)..... 166
85. Petrona Ramírez de Ramírez (niégasele)..... 174
86. Petrona Mateo de Villalobos (concédesele). 192
87. Beatriz Bedoya (concédesele)..... 198
88. *Belarmina* González (concédesele)..... 201
89. María Francisca Paz (concédesele)..... 203
90. Diego Reyes (concédesele)..... 210
91. José María Ortiz (concédesele)..... 214
92. Eugenio Potes (concédesele)..... 219
93. Eleázar y José Antonio López (niégaseles). 225
94. Ramón Ruiz (concédesele)..... 226
95. Mercedes y María Josefa Carrasquilla (concédeseles)..... 239
96. María Fidela Caicedo (niégasele)..... 240

Páginas.

97. Juan Domingo Soscué (concédesele)..... 243
98. Lucinda Ortiz (concédesele)..... 244
99. Leticia Lindo (concédesele)..... 258
100. Aureliano Rojas (concédesele)..... 258
101. Dominga Muñoz (concédesele)..... 259
102. Félix Torrijos (niégasele)..... 268
103. Vicente Acosta Ospina (concédesele)..... 268
104. María Juliana Rivera (concédesele)..... 269
105. Digna Perlaza de Ayala (concédesele)..... 270
106. Juana González é hijas (concédeseles)..... 271
107. Nacianceno Sánchez (niégasele)..... 273
108. Petrona Villota (niégasele)..... 281
109. Marcelina Cañar (concédesele)..... 284
110. María del Rosario Sánchez (concédesele)..... 284
111. Catalina Fernández (concédesele)..... 291
112. Rosa Díaz (concédesele)..... 291
113. José Cobo (concédesele)..... 292
114. Margarita Gómez y Teresa Ramírez (concédeseles)..... 293
115. Dolores Ruiz de Monroy (niégasele)..... 297
116. Cecilio Buitrón (concédesele)..... 297
117. Cristina López (concédesele)..... 301
118. Lorenzo Durán (concédesele)..... 302
119. Juana María Delgado (concédesele)..... 313
120. Tomás Trujillo (concédesele)..... 313
121. Manuel Vidal Gutiérrez (concédesele)..... 314
122. Carmen Amador de Núñez (niégasele)..... 315
123. Francisco Moreno (concédesele)..... 315
124. Agustina Ortega (concédesele)..... 316
125. Jaime Zúñiga (concédesele)..... 316
126. Juana María Pérez (concédesele)..... 322
127. Valentina Posse (concédesele)..... 323
128. Marta Gómez (concédesele)..... 324
129. Manuel María Caicedo y María Josefa Navia (concédeseles)..... 324
130. Cornelia Beltrán de García é hija (concédeseles)..... 325
131. Petrona Campo de Hernández é hijas (concédeseles)..... 326
132. Nepomuceno Escobar (concédesele)..... 330
133. Dimas Gómez y Delfina Delgado (concédeseles)..... 345
134. María Concepción Perlaza (concédesele)..... 345
135. Manuel Ruiz (concédesele)..... 350
136. María López (concédesele)..... 356
137. Dolores Gamero (niégasele)..... 357
138. Francisco de P. Santander (niégasele)..... 357
139. María Josefa Casanova (niégasele)..... 365
140. Matilde Rivera de Pérez (niégasele)..... 379
141. Domitila Soto (concédesele)..... 385
142. Matilde Barriga (concédesele)..... 387
143. Blas Chito (concédesele)..... 388
144. Clara Hernández Chicaíza (concédesele)..... 393
145. Anselmo Torres (concédesele)..... 394
146. Juan de D. Muñoz (concédesele)..... 394
147. Pedro Pérez y Pascuala Meneses (concédeseles)..... 395
148. Rafaela de Caicedo (niégasele)..... 395
149. Antonia Pazos (concédesele)..... 396
150. José Jesús Ramírez y María Antonia Duque (concédeseles)..... 397
151. Bárbara y Vicenta Quintero (concédeseles). 397
152. Francisco Uní (niégasele)..... 398
153. Quiteria Campo (concédesele)..... 404
154. Dolores Astudillo (concédesele)..... 404

RECURSOS DE HECHO. Véanse los autos dictados en los interpuestos por los individuos siguientes:

1.° José Hilario Cano..... 56
2.° Mercedes Olier de López..... 94
3.° Mercedes Olier de López..... 120
4.° Domingo C. Suárez..... 400
5.° Alejandro Lince P..... 406

RECURSOS DE REVISIÓN. Véanse los autos dictados en los interpuestos por los individuos siguientes:

Páginas.

1.° Tomás Paredes..... 80
2.° Benjamín y Abraham Martínez y José A. Restrepo..... 126

RELACIONES *de negocios despachados por la Corte:*

La del mes de Enero de 1893..... 146
La de Febrero..... 162
La de Marzo..... 170
La de Abril..... 187
La de Mayo..... 247
La de Junio..... 320
La de Julio..... 384
La de Agosto..... 416

RENGIFO WENCESLAO. (Cesionario de Manuel M. Pazos). Expropiaciones..... 9
RENGIFO TELÉSFORO. Suministros etc..... 82
RENGIFO SALAZAR JOAQUÍN. Juicio contra el Departamento del Cauca, sobre la venta de una boleta de registro..... 407
RENTERÍA NICOLÁS G. Recompensa..... 148
RESTREPO & ARTEAGA. (Cesionarios de varios vecinos de Pácora). Suministros etc..... 42
RESTREPO APOLINAR. Confírmase el fallo que lo condenó á muerte..... 266
RETALLACK SIMÓN. Expropiaciones..... 86
REYES DIEGO. Recompensa..... 210
RICO CABALLERO ROSA. Recompensa..... 121
RINCÓN FÉLIX Y OTROS. Expropiaciones..... 140
RINCÓN MOTTA JUAN N. Expropiaciones..... 269
RÍOS PEDRO Y OTRO. Juicio que les siguió el Fiscal del Tribunal del Cauca, sobre nulidad de la posesión de una mina..... 241
RIVAS MEDARDO. Casación civil. Juicio que siguió contra Enrique y Ángel María Zalamea, por pesos. 195
RIVERA MARÍA JULIANA. Recompensa..... 269
RIVERA DE PÉREZ MATILDE. Recompensa..... 379
RIZO RAFAEL MARÍA. Empréstitos..... 17
ROBAYO ANTONIO W. Proceso criminal. (No haber practicado varias diligencias para perfeccionar un sumario)..... 136
ROBLES JOSÉ EUGENIO. Recompensa..... 37
ROCA RAFAEL. Casación civil. Juicio contra Pantaleón Gaitán, sobre rendición de cuentas.....210, 216
RODRÍGUEZ ADRIANO. Proceso militar. (Deserción).. 43
RODRÍGUEZ CAYETANA Y OTROS. Recurso de casación. Juicio contra Evarista Rodríguez y otros, sobre exclusión de unos terrenos de unos inventarios..... 143
RODRÍGUEZ F. ALEJANDRO. Recurso de casación. Juicio contra Leonidas Posada Gaviria, por pesos.. 190
RODRÍGUEZ DIONISIO. Suministros etc..... 289
RODRÍGUEZ DE FORERO ADELAIDA. Véase *Quintero Hilario.*
ROJAS MARÍA MANUELA. Recompensa..... 83
ROJAS AURELIANO. Recompensa..... 258
ROMERO ANTONIO. Recompensa..... 132
ROMERO ESTEBAN. Expropiaciones..... 332
ROMERO ROJAS RAMÓN. Sumario contra él. (Abandono de su empleo de Administrador de las Salinas de Cumaral y Upín)..... 411
ROSAS ROGERIO Y OTROS. Expropiaciones..... 283
ROSERO JOSÉ INOCENCIO Y OTRO. Casación civil. Juicio contra los herederos de Juan E. Santacruz, sobre nulidad de un contrato..... 298
RUBIO GABRIEL. Recurso de casación. Juicio contra Luis María Rubio, por pesos..... 335
RUEDA SARMIENTO FRANCISCO. Pleito con Ricardo Díaz Pinilla, sobre nulidad de unos títulos..... 31
RUEDA G. ANTONIO MARÍA. Denuncio dado contra él por Lorenzo Gaona..... 271
RUIZ BERNARDO. Recompensa..... 4
RUIZ RAMÓN. Recompensa..... 226
RUIZ DE MONROY DOLORES. Recompensa..... 297
RUIZ MANUEL. Recompensa..... 350
RUIZ VERGARA JOAQUÍN. Suministros..... 396

S

Páginas.

SÁENZ DE SAN PELAYO IGNACIO. Recurso de casación. Juicio contra Antonio Sáenz M., por pesos... 22
SÁENZ M. ANTONIO. Véase el anterior.
SÁENZ HORACIO. Pena capital..... 369
SALGADO JOSÉ MARÍA. Concurso de acreedores formado á sus bienes..... 160
SALGADO URBANO. Expropiaciones..... 358
SALVAMENTOS DE VOTO. Véanse los siguientes:
1.° En causa contra Vicente Micolta..... 8
2.° En causa contra Tobías Morillo..... 34
3.° En causa contra Diego de J. Castro..... 38, 39
4.° En el juicio seguido por el Presbítero José Joaquín Hoyos contra el Presbítero Simón de J. Herrera..... 50
5.° En el juicio seguido por Manuela Gonzalías contra los ejecutores testamentarios de Bautista Vaca G..... 263
6.° En el concurso de acreedores formado á los bienes de Joaquín Piñeros..... 343
7.° En la causa contra Horacio y Arturo Sáenz. 372
8.° En esta misma causa..... 377
9.° En la solicitud sobre suspensión de las Ordenanzas números 27 de 1890 y 5.ª de 1892, de Panamá..... 381
SAMPEDRO CARLOS. Causa que se le siguió, por pérdida de varios procesos criminales..... 382
SÁNCHEZ LISANDRO. Recompensa..... 18
SÁNCHEZ GRICELDA Y ROSALÍA. Recompensa..... 139
SÁNCHEZ MARIANA. Pena capital..... 188
SÁNCHEZ FRANCISCO C. Suministros..... 214
SÁNCHEZ NACIANCENO. Recompensa..... 273
SÁNCHEZ MARÍA DEL ROSARIO. Recompensa..... 284
SÁNCHEZ HIPÓLITO. Rebaja de pena..... 414
SÁNCHEZ N. CÉSAR. (Cesionario de Luis Escobar C.) Suministros etc..... 351
SÁNCHEZ FERNANDO Y RÓMULO. Véase *Banco Popular.*
SANDOVAL JOSÉ MARÍA. Expropiaciones..... 133
SANTAMARÍA POLICARPO. Proceso militar. (Varios cargos)..... 86
SANTAMARÍA DE RESTREPO BERNARDINA. Juicio que le siguió el Fiscal del Tribunal de Cundinamarca, sobre expropiación de una zona de tierra..... 398
SANTANDER CÉSAR. Suministros etc..... 174
SANTANDER FRANCISCO DE P. Recompensa..... 357
SENTENCIAS DE CASACIÓN. Véase *Casación.*
SENTENCIAS SOBRE RECOMPENSAS. Véase *Recompensas.*
SENTENCIAS DE 2.ª INSTANCIA EN ASUNTOS CIVILES. Véanse las dictadas en los juicios siguientes:
—El Banco Nacional contra Leonidas Posada G... 5
—Valerio Upegui contra la Nación..... 102
—Eduardo Ramírez y otros contra Pelagia Martínez de Guzmán..... 123
—Adolfo P. Simonds contra la Nación..... 135
—Fiscal del Tribunal de Cundinamarca contra Luis Antonio Quijano..... 141
—Fiscal del Tribunal del Cauca contra Pedro Ríos y José J. Bayer..... 241
—Fiscal del Tribunal del Cauca contra Rudesindo Ospina, sobre reposición de un puente..... 274
—El Departamento de Boyacá contra Ignacio Castañeda..... 306
—Eusebio Torres, sobre deslinde de un terreno... 330
—Pablo Bermúdez contra la Nación..... 354
—Fiscal del Tribunal de Cundinamarca contra Bernardina Santamaría de Restrepo..... 398
SENTENCIAS DE 2.ª INSTANCIA EN ASUNTOS CRIMINALES. Véanse las dictadas en juicios seguidos contra los individuos siguientes:
1.° Vicente Micolta..... 7
2.° Diego de J. Castro..... 38
3.° Jesús María Muñoz..... 39
4.° Adriano Rodríguez..... 43

Páginas.

5.° Lino Clemente Herrera..... 43
6.° Juan Eurípides Valencia..... 54, 55
7.° Eleuterio Ramírez..... 62
8.° Antonio Duarte y Policarpo Santamaría..... 86, 87
9.° Hilario Bolívar R..... 103
10. José Gnecco Coronado..... 103
11. Daniel Ayala..... 135
12. Antonio W. Robayo..... 136
13. Jaime Castillo..... 136
14. Juan Noriega y Benjamín Martínez B..... 141
15. Jesús María Zorrilla..... 151
16. Apolinar Mutis..... 159
17. Juan Luna..... 199
18. Buenaventura Caicedo..... 227
19. Aristides Liévano..... 245
20. Miguel Ramírez Zoluaga..... 276
21. Ignacio Contreras..... 277
22. Tomás Navarro..... 285
23. Jacinto Casanova..... 308
24. Juan B. Ortiz y Cifuentes..... 359
25. Santos Álvarez..... 399
26. Indalecio Betancourt..... 405

SENTENCIAS EN NEGOCIOS CRIMINALES DE QUE CONOCE LA CORTE EN UNA SOLA INSTANCIA. Las dictadas en las causas contra los individuos siguientes:

1.° Cayetano Delgado..... 55
2.° Magistrados del Tribunal de Antioquia, doctores José de Jesús Alviar, Julián Cock Bayer y Fabriciano Escobar..... 203
3.° Ramón Romero Rojas..... 411

SIERRA JOSÉ MARÍA. Solicitud sobre suspensión de las Ordenanzas números 13 y 21 de 1892, expedidas por la Asamblea de Cundinamarca..... 254
SILVA SOFÍA. Recompensa..... 94
SIMONDS ADOLFO P. Exacciones..... 135
SOBRESEIMIENTO. Véase *autos en negocios criminales*.
SOLANO JUNIO. Proceso criminal, por abuso de autoridad..... 176
SOLANO RICARDO. Suministros etc..... 202
SOLANO EMIGDIO P. (Cesionario de varios individuos). Expropiaciones..... 269
SOLARTE CHAUX MANUEL. Recompensa..... 36
SOLARTE RICARDO. Recompensa..... 130
SOLÍS LORENZO. Suministros etc..... 315
SOLUAGA SALVADOR. Suministros etc..... 121
SOSCUÉ JUAN DOMINGO. Recompensa..... 243
SOTO DOMITILA. Recompensa..... 385
SOTO R. RAMÓN. Suministros etc..... 385
SUÁREZ DOMINGO C. Recurso de hecho..... 400

SUMINISTROS Y EXPROPIACIONES. Véanse las sentencias dictadas en las reclamaciones de los individuos siguientes:

1.° Wenceslao Rengifo, como cesionario de Manuel M. Pasos, (reconócesele)..... 9
2.° Juan Isidro Trujillo (reconócesele)..... 10
3.° Juan Crisóstomo Aramburo (reconócesele).. 11
4.° Julio Castro (reconócesele)..... 11
5.° Benicio Ángel (reconócesele)..... 11
6.° Lucio Franco (reconócesele)..... 17
7.° Rafael M. Rizo (reconócesele)..... 17
8.° Guillermo Vila (reconócesele)..... 18
9.° Pedro P. Bello (reconócesele)..... 20
10. Gonzalo García (reconócesele)..... 25
11. Andrés Lenis (reconócesele)..... 31
12. Anastasio Duque (reconócesele)..... 36
13. Hersilia García (niégasele)..... 42
14. Restrepo & Arteaga, como cesionarios de Antonio M. Mejía y otros, (reconóceseles). 42
15. Manuel José Álvarez, como cesionario de varios individuos, (niégasele)..... 51
16. Antonio Caipa (reconócesele)..... 51
17. Juan Valencia (reconócesele)..... 53
18. José María Arraut (reconócesele)..... 81
19. Telésforo Rengifo (reconócesele)..... 82

Páginas.

20. Manuel S. Buitrago y Jesús Ojeda (niégaseles)..... 83
21. Andrés Lara, como cesionario de Norberto Tabarís, (niégasele)..... 85
22. Bonifacio Luna (reconócesele)..... 85
23. Simón Retallack (niégasele)..... 86
24. Ricardo Lesmes (niégasele)..... 90
25. Fortunato Cabal (reconócesele)..... 91, 93
26. Manuel José Álvarez (niégasele)..... 93
27. Guillermo Uribe, como apoderado de Abraham Moreno y otros (recenócesele)..... 100
28. Andrés Lara, cesionario de los herederos de José Antonio Rojas y Ana María Gironza, (niégasele)..... 100
29. Dimas Morales (reconócesele)..... 101
30. Manuel González V. (niégasele)..... 102
31. Aycardi Hermanos (niégaseles)..... 107
32. Gabriel Arango P. (reconócesele)..... 108
33. Salvador Valencia Fernández, cesionario de Manuel S. Díaz (reconócesele)..... 109
34. Aniceto Isaza y otros (niégaseles)..... 109
35. Ricardo Castañeda (niégasele)..... 118
36. Salvador Soluaga (niégasele)..... 121
37. Gabriel y Paulino Vargas y otro (reconóceseles)..... 122
38. José María Calderón, como cesionario de Lorenzo Garzón (reconócesele)..... 124
39. Baltasar Uribe N. (reconócesele)..... 125
40. Liborio D. Cantillo, cesionario de Vicente Gutiérrez (niégasele)..... 131
41. José María Sandoval (niégasele)..... 133
42. Félix Rincón y otros (reconóceseles)..... 140
43. Leonardo Maurique (reconócesele)..... 147
44. José Antonio Ibarra (reconócesele)..... 148
45. Ruperto García (reconócesele)..... 149
46. Ricardo Gutiérrez (niégasele)..... 149
47. Benjamín Novoa Zerda, endosatario de Ramón F. de León y Rafael Mesa G. (niégasele)..... 165
48. Salvador Valencia Fernández, cesionario de los herederos de Manuel Paz (reconócesele) 173
49. César Santander (niégasele)..... 174
50. Nepomuceno Parra (niégasele)..... 174
51. Eustaquio Cogollos (niégasele)..... 184
52. Evangelista Llantén (niégasele)..... 192
53. Gregorio Agudelo y otros (reconóceseles).. 198
54. Jeremías Durán y otros (reconóceseles)..... 202
55. Ricardo Solano (niégasele)..... 202
56. Susana Velasco de Peña (niégasele)..... 209
57. Nicanor Carazo (niégasele)..... 209
58. Rafael Camacho L. (reconócesele)..... 210
59. Francisco C. Sánchez (niégasele)..... 214
60. Toribia Cárdenas de Delgado (niégasele).... 215
61. Pedro Pardo (reconócesele)..... 222
62. Adolfo Martínez Navarrete (reconócesele).. 222
63. Rafael Navia (reconócesele)..... 223
64. Aparicio Peláez (niégasele)..... 224
65. José Trinidad Moreno (reconócesele)..... 225
66. Prudencio Cantillo (niégasele)..... 226
67. Demetrio Hurtado (niégasele)..... 227
68. Santos Hurtado (niégasele)..... 240
69. Manuel José Álvarez, cesionario de Vicente B. Villa é Hijos y otros (reconócesele).... 244
70. Manuel José Álvarez, como cesionario de varios individuos del Departamento de Antioquia (reconócesele)..... 257
71. Benjamín Palacio, cesionario de Alejandro Gutiérrez y otros (reconócesele)..... 258
72. Juan N. Rincón Motta (niégasele)..... 269
73. Emigdio P. Solano, cesionario de varios (reconócesele)..... 269
74. Estafanía Ordóñez (niégasele)..... 273
75. Francisco A. Magaña y otros (niégaseles)... 275
76. Teresa Otálvora (niégasele)..... 281

Páginas.

77. Domingo Antonio y Calasancio Téllez (reconóceseles) 282
78. Rogerio Rosas y otros (niégaseles)..... 283
79. Petrona Chacón (niégasele)..... 283
80. José Ramírez (reconócesele)..... 285
81. Dionisio Rodríguez (reconócesele)..... 289
82. Clemente Vera (reconócesele)..... 290
83. Federico Cortecero (niégasele)..... 302
84. Ignacio E. Fortich (niégasele)..... 303
85. Manuel José Álvarez C., cesionario de Heliodoro Mejía y otros (reconócesele)..... 305
86. Andrés Morales (niégasele)..... 314
87. Lorenzo Solís (niégasele)..... 315
88. Evarista Figueroa de Espinosa (niégasele). 323
89. Juan Pablo Pereira (reconócesele)..... 329
90. Esteban Romero (niégasele)..... 332
91. Ramón Angarita, cesionario de Juan C. Silva y Gregorio Uribe (reconócesele)..... 332
92. César Sánchez N., cesionario de Luis Escobar C. (reconócesele)..... 351
93. Gabino Cote (reconócesele)..... 353
94. Francisco Groot, cesionario de Domingo Forero (reconócesele)..... 354
95. Manuel A. Valencia, cesionario de varios individuos (niégasele)..... 355
96. Urbano Salgado (reconócesele)..... 358
97. Camilo Domínguez (reconócesele)..... 366
98. Julio Fernández M., cesionario de Enrique Moreno y otros (reconócesele)..... 378
99. Pantaleón González Ospina (niégasele)..... 379
100. Ramón Soto R. (reconócesele)..... 385
101. Braulio Nicholls y otros (niégaseles)..... 388
102. Enrique Camargo, cesionario de Fernando Ricaurte y José Santos (reconócesele)..... 393
103. Germán Piñeres (niégasele)..... 394
104. Dolores Quintero (niégasele)..... 395
105. Joaquín Ruiz Vergara (niégasele)..... 396
106. Marcelino Torrente (niégasele)..... 403
107. José María Cano (niégasele)..... 405
108. Manuel J. Álvarez, cesionario de Eduardo Jaramillo A., Juan Olano y otros (reconócesele)..... 409
109. Lucio Londoño (reconócesele)..... 410
110. Adolfo Guerrero (reconócesele)..... 410

SUSATAMA ISIDORA. Recompensa..... 133

T

TÉLLEZ DOMINGO Y CALASANCIO. Suministros etc. 282
TERNAS:
1.ª Para el Tribunal de Panamá..... 193
2.ª Para los Tribunales del Sur del Tolima y Cundinamarca..... 193
3.ª Para el Tribunal del Sur del Tolima..... 193
4.ª Para el Tribunal de Popayán..... 193
5.ª Para el Tribunal del Cauca..... 194
6.ª Para los Tribunales del Norte de Santander y Panamá..... 194
7.ª Para el Tribunal de Cundinamarca..... 194
8.ª Para el Tribunal del Pacífico..... 195
9.ª Para el Tribunal de Panamá..... 233
10. Para el Tribunal de Panamá..... 265
11. Para el Tribunal de Tunja..... 265
12. Para el Tribunal de Tundama..... 265
13. Para el Tribunal del Sur del Tolima..... 265
TOBAR INDALECIO Y CANDELARIO. Juicio sobre amparo de pobreza..... 142
TOLEDO RAFAEL A. Juicio contra la Nación, por pesos. 207
TORRENTE MARCELINO. Suministros..... 403
TORRES SUSANA Y MARÍA DEL PATROCINIO. Recompensa..... 125
TORRES EUSEBIO. Juicio con la Nación, sobre deslinde de un terreno..... 330
TORRES ANSELMO. Recompensa..... 394

Páginas.

TORRIJOS FÉLIX. Recompensa..... 268
TREJO PAULA. Recompensa..... 71
TRUJILLO JUAN ISIDRO. Expropiaciones..... 10
TRUJILLO TOMÁS. Recompensa..... 313
TRUJILLO JUAN EVANGELISTA. Sepárase del puesto de Magistrado suplente de la Corte..... 241

U

UNÍ FRANCISCO. Recompensa..... 398
UPEGUI VALERIO. Juicio contra la Nación, por pesos. 102
URIBE GUILLERMO. (Apoderado de varios individuos). Expropiaciones..... 100
URIBE N. BALTASAR. Expropiaciones..... 125
URIBE U. EDUARDO & COMPAÑÍA. Juicio contra Inés Restrepo de Piedrahita, por pesos..... 348
URREA ILDEFONSA. Recompensa..... 37

V

VACA MARÍA VICENTA. Recompensa..... 101
VALDÉS LÓPEZ RAMÓN. Causa criminal por varios cargos..... 111
VALENCIA JUAN. Expropiaciones..... 53
VALENCIA JUAN EURÍPIDES. Causa criminal, por mala conducta..... 54, 55
VALENCIA FERNÁNDEZ SALVADOR. (Cesionario de Manuel Salvador Díaz). Expropiaciones..... 109
VALENCIA FERNÁNDEZ SALVADOR. (Cesionario de los herederos de Manuel Paz). Empréstitos etc.... 173
VALENCIA MANUEL A. (Cesionario de varios individuos). Suministros etc..... 355
VALENZUELA CRISANTO. Sumario que se le instruyó, por abuso de autoridad..... 318
VARGAS ADÁN. Proceso militar que se le siguió por violación de correspondencia..... 63
VARGAS GABRIEL Y PAULINO Y OTRO. Empréstitos etc..... 122
VARGAS CLOTILDE. Recompensa..... 150
VARGAS C. GABRIEL. Denuncio dado contra él por Lisandro A. Moreno. (Falsedad en documento público)..... 295
VEGA O. FROILÁN. Recurso de casación. Juicio contra Eugenio González Benito y Francisco Noguera, sobre nulidad de un remate..... 407
VELASCO VICTORIA Y OTRA. Recompensa..... 146
VELASCO DE PEÑA SUSANA. Suministros etc..... 209
VELÁSQUEZ JACINTO. Recurso de casación. Concurso de acreedores formado á sus bienes..... 171
VERA CLEMENTE. Expropiaciones..... 290
VIDAL TRÁNSITO. Recompensa..... 10
VILA GUILLERMO. Expropiaciones..... 18
VILA JOSÉ JOAQUÍN. Véase *Pérez Josefa.*
VILLAFRÁDEZ LUCAS. Sepárase del puesto de Magistrado suplente de la Corte..... 170
VILLOTA PETRONA. Recompensa..... 281
VISITAS. (Actas de). Véanse las siguientes:
1.ª La correspondiente al mes de Abril de 1893. 185
2.ª La correspondiente á Mayo..... 247
3.ª La correspondiente á Junio..... 319
4.ª La correspondiente á Julio..... 383
5.ª La correspondiente á Agosto..... 416

Z

ZALDÚA MANUEL MARÍA. Recurso de casación. Juicio contra Julio J. Dupuy, por varios cargos..... 23
ZORRILLA JESÚS MARÍA. Sumario instruído contra él, por falta en el cumplimiento de sus deberes... 40
ZORRILLA JESÚS MARÍA. Causa que se le siguió, por infracción de ley..... 151
ZÚÑIGA FÉLIX. Proceso militar que se le siguió, por insubordinación..... 32
ZÚÑIGA JAIME. Recompensa..... 316

IMPRENTA DE ANTONIO MARÍA SILVESTRE.